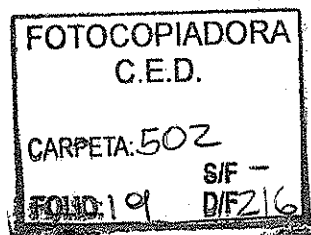
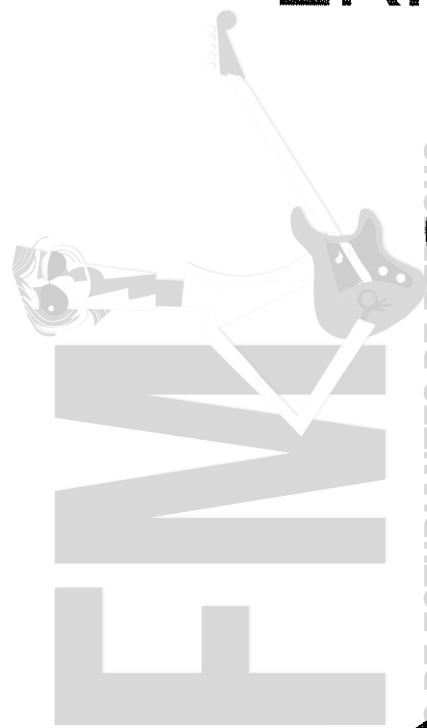


ERNESTO PALACIO



50200019

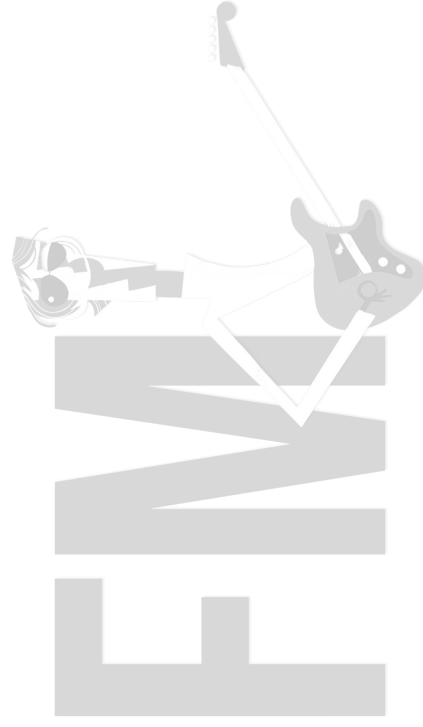


CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO

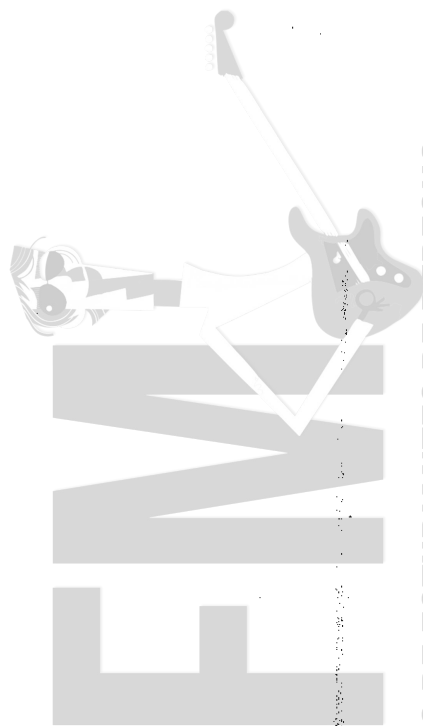
Historia de la Argentina

1515-1983

DECIMOCUARTA EDICION



CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO



PRÓLOGO

Hace quince años, en una serie de artículos que tuvieron cierta repercusión¹, sostuve la necesidad de que se escribiera nuevamente la historia argentina, cuya versión "oficial" adolecía, en mi entender, de convencionalismo y falsedad. No sospechaba entonces que habría de ser yo mismo quien emprendiera la tarea. La vocación me señalaba otros rumbos.

Seguí estudiando, no obstante, y manteniéndome al corriente de las investigaciones y publicaciones de los últimos tiempos, singularmente prolijas algunas y esclarecedoras. Pero mi curiosidad no era profesional, sino patriótica. No leía para escribir después, sino para conocer mi tierra y a sus hombres. Si se agrega a esto una dura experiencia vital —rica en vicisitudes— y el contacto permanente con las realidades de la política, muy variables en ese lapso, no es de extrañar que adquiriera con todo ello el hábito de referir el pasado al presente y viceversa, que es lo que define al historiador. Así se fue elaborando en mi mente este libro, sin que yo mismo lo advirtiese. Un día descubrí que estaba maduro y que no tenía más remedio que escribirlo.

Si afirmo que lo vi de pronto como una iluminación y como la expresión misma de la verdad, no exagero. Lo vi en su total arquitectura, antes de planear su desarrollo, sintiéndolo intensamente como drama de mi gente y mi raza, el drama de un destino frustrado. Pero al mismo tiempo, el nudo de angustia que acumulaba en mi garganta el dolor de las generaciones se disolvía en una exclamación jubilosa, porque la frustración que se confiesa es el comienzo de la redención.

El lector tiene en sus manos el resultado y a su juicio me

¹ Recopilados más tarde en "La Historia Falsificada". (1939).

atengo. ¡Ojalá logre comunicarle la misma fe en el futuro de la patria que a mí me ayuda a escribir y a vivir!

* * *

No es mi propósito incurrir en polémica. Este libro ha sido escrito con el único afán de contar la verdad, tal como surge de las fuentes más dignas de confianza y de acuerdo con la investigación al día. No es culpa mía si difiere de las versiones corrientes, inspiradas todas en el esquema fraguado por los vencedores de Caseros, que sólo intentaban justificarse. En su lugar hallará el lector la historia de esa "historia".

Rindo mi homenaje de gratitud a la legión laboriosa de estudiosos que, en estos años, ha enriquecido con su aporte el caudal de conocimientos generales sobre el pasado argentino, mediante el hurgoneo de archivos y la publicación de los documentos más importantes. Gracias a ellos no puede alegarse impedimento de ignorancia sobre los hechos. Es verdad que ninguno ha emprendido la revisión integral de la historia —paralizados por el prestigio de los precursores— y que siguen hundidos en los archivos, acaso en busca del documento que les ilumine, por fin, el ignorado panorama. Como sé que quienes así piensan no lo hallarán nunca (porque los documentos, como los planetas, carecen de luz propia y sólo brillan a la luz que se les proyecta), me he adelantado a consignar mis conclusiones sobre la investigación realizada por ellos hasta hoy, que es abundante, valiosa y suficientemente reveladora.

Nuestra historia (tan corta) no adolece tanto de lagunas de información, cuanto de fallas de interpretación. No se halla viciada por el desconocimiento de lo ocurrido, sino por su deliberada falsificación. Basta aplicar a los hechos que se conocen con certidumbre un criterio razonable, fundado en buenos principios políticos y una ajustada psicología, para que nos revelen sus relaciones causales y se agrupen en un orden armónico que, por satisfacer a la inteligencia, tiene que coincidir necesariamente con la expresión de la realidad. Negarlo, sería negar la posibilidad misma de la Historia.

* * *

Debe inferirse de lo dicho que no pretendo ningún valor de originalidad, incompatible con la dignidad de esta disciplina, sobre todo cuando se trata de la historia propia. No me propongo

sorprender con hallazgos de documentos ni hazañas de revisador de archivos. No persigo un éxito de escándalo. Mi repertorio de hechos está tomado de la bibliografía corriente. Mi tarea ha consistido simplemente en relatarlos de manera ordenada, sin mutilaciones ni escamoteos, de manera tal que unos a otros se expliquen y se aclaren. Creo haber logrado con ello un resultado coherente y satisfactorio, que si puede sorprender, será solamente por contraste con el galimatías habitual, originado en la sobra de respeto humano de los profesionales del género, duchos en aderezar las verdades para encuadrarlas en un esquema preestablecido del que no osan evadirse.

La única originalidad que reclamo para mí es la de haber preferido la verdad a la conveniencia y a cualquier especie de cálculo. Me sentía obligado a ello por lealtad a mis compatriotas y a mi propia sangre.

He preferido no cargar este libro con aparato erudito, que habría aumentado inútilmente su volumen. Su índole no lo reclamaba. Los profesionales saben, por lo demás, la escasa importancia real de esa labor, que suele realizarse por secretarios y amanuenses. Me limitaré a expresar que no hay una sola afirmación en este libro que no se funde en fuente autorizada y que lo escribí agotando los medios de información. Aparte de las obras clásicas de Mitre, López, Pelliza, Domínguez, Saldías, los Quesada, Bilbao, Zinny, Ramos Mejía, Sarmiento y Alberdi, y de los meritorios trabajos de investigación de Groussac, Levene, Ravignani, Torre Revello, Levillier, Cárcano, Ibarguren, Ruiz Guiñazú, Pueyrredón, Piccirilli y Palcos —sin olvidar las monografías de la monumental y desigual Historia de la Academia—, he utilizado el valioso aporte "revisionista" —Irazusta, Font Ezcurra, Del Mazo, Rosa, Caballero, Gálvez— y el "marxista" en sus diversas tendencias —Sommi, Puiggrós, Real, Yunque, Ramos—. No debo olvidar los estudios de historia económica de Scalabrini Ortiz, ni las recopilaciones documentales del Instituto de Investigaciones Históricas, ni las biografías, ni las innumerables "memorias" y crónicas de los actores de los sucesos, ni las colecciones de diarios y revistas, desde la "Revista del Plata" hasta la "Revista de Derecho, Historia y Letras" que dirigió Zeballos.

Ante el copioso material informativo que tuve a mi disposición y del que he mencionado una mínima parte, la tarea más engorrosa consistía en resumir, limitándome a la expresión de lo esencial, para no excederme del plan que me había trazado. Toda historia es una síntesis, y la labor de quien la emprende se asemeja a la del minero empeñado en extraer de un material turbio el precioso filón, siguiendo la dirección de la veta. Cuando no existen para ello instrumentos de precisión, fuerza es que algún oro

se pierda y que el que obtiene venga mezclado; y nada menos preciso que nuestra facultad crítica. No he escapado, por cierto a esta dificultad. En el afán de no perder la ilación de los acontecimientos políticos, he debido limitarme a enunciar los de orden militar (los más importantes —como la gesta del Libertador— ocurridos fuera de nuestras fronteras) y reducir a meras alusiones los de orden cultural y económico, salvo cuando incidan directamente en lo político. He omitido también todas las digresiones que me fue posible evitar. Creo con todo, que el resultado se ajusta, al menos parcialmente, a mi propósito. Halle gracia ante el lector, con lo que aquí encuentre, por lo que falte.

La otra dificultad —y ésta de orden personal— consistió para mí en el estilo. Mi instrumento de ensayista se adecuaba difícilmente al relato. La resolví con una decisión de absoluta simplicidad y rechazo de toda "literatura". Si a menudo no alcanzo el ideal de nitidez y animación que me propuse y caigo en lo pedestre, téngase en cuenta que el mismo Homero dormita a veces por lo cual ya es mucho que alguna vez se me halle a mí despierto.

Esta es la historia de un pequeño país, no obstante su extensión territorial, situado en los suburbios de la civilización, en el hemisferio meridional, cercado de océanos. Para las potencias que dominan el mundo, una isla remota, sujeta a sus combinaciones imperiales. Todas nuestras desdichas han provenido de esa debilidad.

Pero no es dable encarar nuestro pasado —ni nuestro futuro— sin esa doble conciencia de nuestra pequeñez relativa y nuestra grandeza potencial.

Este libro ha sido escrito con la preocupación obsesiva por nuestro destino. ¿Para qué, si no, serviría la historia? Cuando no se buscan en ella los signos de una vocación, queda reducida a simple pasatiempo erudito, o a pretexto de canonjías burocráticas. La función del conocimiento histórico consiste en iluminar los caminos del porvenir. No me atrevo a afirmar que lo he logrado en este libro. Diré solamente que, así como la idílica versión de la historia que nos legó la generación "constituyente" y que nos hablaba de un destino cumplido y glorioso, nos dejaba desazonados e insatisfechos (puesto que nos obligaba al conformismo con una situación de factoría "próspera"), la enumeración leal de nuestras desgracias nacionales nos lleva a una conclusión optimista, puesto que nos marca una tarea y una misión. La mentira mata, la verdad vivifica. Sufrir derrotas no es deshonra,

mientras quede la esperanza del desquite. Todos los grandes imperios han tenido contrastes en su historia. Lo que no admite redención es el error intelectual: el considerar derrotas como victorias y glorificar a sus autores, que es lo que ha ocurrido en la Argentina.

De mí sé decir que el estudio de nuestros orígenes y nuestra formación ha corroborado mi confianza en el futuro nacional. Dios quiera que pueda comunicársela al compatriota que me lea.

Aunque he tratado de mantener en este libro la más estricta objetividad, no negaré que muchas veces he sentido bullir mi sangre ante la injusticia, el error o la traición, lo cual puede haber tenido accidentalmente de pasión mi lenguaje. Es natural, puesto que las consecuencias recaían sobre los míos, sobre mí. No creo que la pasión haya empero logrado perturbar mi juicio.

Tampoco negaré que me animara a veces, cierto espíritu de desquite. Pertenezco, en efecto, a una raza calumniada. Cuando hace más de cuatrocientos años vivía en el territorio que es hoy nuestra patria apenas un puñado de blancos españoles —menos de un centenar—, ya había entre ellos gente de mi sangre. Fundaron ciudades, gobernaron provincias y villas, poseyeron encomiendas y fundos, guerrearon con indios, en cuyas manos varios perecieron. Sus descendientes lucharon por la independencia y la libertad, asistieron a congresos y asambleas, participaron activamente en las vicisitudes nacionales. Soy por consiguiente un viejo argentino; es decir, una víctima de la oligarquía que proclamó la superioridad del extranjero sobre el criollo y del hijo del inmigrante sobre los descendientes de los conquistadores. No es de extrañar mi escasa simpatía por Sarmiento y Alberdi, con quienes tengo esa cuenta pendiente de carácter personal. Debido a su prédica, quienes nos hallamos en aquella situación debemos reclamar, ya que no privilegios, por lo menos un estatuto de igualdad, así sea para la tarea inofensiva de escribir la historia.

Esta es la historia completa de la Argentina, hasta donde es dable honradamente escribirla hoy.

La elección del año 1938 como fecha final se justifica por razones de perspectiva, e incluso diré filosóficas. Se trata del último año anterior a la guerra europea, que acaso los historiadores del

futuro considerarán como el comienzo de una nueva era en la historia del mundo: la era atómica. Desde el estallido de esa guerra, todas las circunstancias cambian, incluso entre nosotros por la interferencia pronunciada, en nuestros asuntos internos, de los problemas internacionales. La revolución militar de 1943 significó aquí la liquidación del régimen liberal-burgués, impuesto por la generación organizadora. Describir la profunda transformación que ha producido en el país sería crónica contemporánea, no historia; y no podría emprenderla el autor sin desembarazarse de su condición de militante activo de los sucesos, para convertirse en espectador imparcial.

De todos modos, la continuación de la historia hasta 1938 empalma con los recuerdos personales de los compatriotas más jóvenes y hace de ella la introducción —y acaso proporcione la explicación— de la compleja y rica realidad presente.

¿Qué más? Sólo me queda agradecer a quienes me ayudaron a realizar este trabajo hasta darle fin.

En primer lugar a mi esposa, que me proporcionó la atmósfera necesaria de paz y silencio, de atención vigilante.

A mis hijas Susana y Gloria, secretarias eventuales. A mis hijos Ernesto, María Inés y Juan Manuel, por su espectación entusiasta.

A mi tío Domingo Palacio, que se prestó a leer y corregir mis originales, en su doble carácter de profesor de historia y castellano.

A mi admirado amigo Julio Irazusta, que también accedió a leerlos y comunicarme su opinión, sus observaciones y su consejo.

A mis amigos, que me proporcionaron datos, me prestaron libros o en cualquier otra forma contribuyeron a la edición: R.P. Leonardo Castellani, Carlos Colautti, Alejandro Cárdenas, Carlos Brian, Ricardo Curutchet Oromí, Carlos M. Dardán, Angel-Delgado, Gabriel Del Mazo, Enrique Martínez de Olmo, Juan Pablo Oliver, Carlos Pacheco, Adolfo Silenzi de Stagni, Luis María Roo, Carlos Rodríguez Baigorria, Raúl Scalabrini Ortiz.

A mis editores Sergio y Alfredo Alonso y Arturo Peña Lillo, que acogieron con entusiasmo la idea de editar un libro de éxito inseguro —verdadera aventura— y lo que es más raro entre editores argentinos, me pagaron por anticipado una parte de los dudosos derechos de autor que habrán de corresponderme.

A todos los demás que me acompañaron con su estímulo y con su esperanza.

Buenos Aires, mayo de 1954.

I. DESCUBRIMIENTO DE LA TIERRA AUSTRAL

La España que descubrió América era una nación desangrada y triunfante, hambrienta y segura de su destino. Liquidada su lucha de siete siglos con el invasor, reconocía en el desenlace el dedo de la Providencia que la consagraba como paladín de la Cristiandad y se hallaba dispuesta a cualquier empresa osada. La urgía el hábito adquirido del riesgo y la gloria. Que estaba, por cierto, en los aires del tiempo; pero en ninguna parte como en aquellas tierras ásperas donde multitud de campeadores sin fortuna sentían palpar en sus flancos el llamado del hierro vacante.

Si se considera que el Renacimiento cambió la faz del mundo occidental, es evidente que ninguna otra nación contribuyó como España a ese resultado. Ni la influencia de los humanistas, ni la acción de los papas y los príncipes italianos, ni siquiera la obra de los grandes creadores tienen una importancia comparable a la del descubrimiento y conquista de un nuevo continente; ni la renovación moral e intelectual que se siguió habría sido tan completa, de no mediar un hecho que liquidaba las concepciones vigentes sobre el universo y daba un nuevo impulso a la esperanza humana. Este hecho capital del Renacimiento es la hazaña española. A partir de ella sube un grado la tónica europea y se afirma esa fe en la especie, esa exaltación gozosa de la personalidad que caracterizan a la época. El hombre blanco ha trascendido el horizonte de Ulises, ha triunfado del océano tenebroso, ha desvanecido en leyendas las aguas bullentes, las islas encantadas, los peligros de los monstruos marinos. ¿A qué no podría atreverse en adelante?

Bajo este signo se descubre nuestra tierra. Ello ocurre a los veintitrés años del hallazgo de Colón y a sólo tres del que inmortalizara a Balboa. Ya hay conciencia general de que donde se creyó hallar las Indias, ha brotado un nuevo continente. Isabel la Católica ha muerto, ignorándolo, en 1504; sobrevive Fernando, que morirá en seguida. En el cuarto de siglo transcurrido se han realizado empresas inauditas. Son ya españolas la América Central y el Caribe, el Labrador, Venezuela y el Yucatán. Con Vasco da Gama y Albuquerque, los portugueses han alcanzado la India y la China. Y en 1500, Alvarez Cabral ha tocado las costas del Brasil.

Tal es la situación en los años en que por primera vez nuestra tierra ve la luz de la historia. Por ese tiempo ya habían hecho su obra capital Leonardo y Miguel Angel; se hallaban en plena creación Rafael y Erasmo, y estaban a punto de aparecer, o habían aparecido ya, *El Príncipe*, de Maquiavelo, y la *Utopía*, de Tomás Moro.

* * *

Nada se sabe de cierto sobre los primeros navegantes que tuvieron noticias del territorio que es hoy nuestra patria. No obstante la bula de Alejandro VI y el pacto posterior de Tordesillas, España y Portugal se hallaban empeñadas en sacarse ventajas recíprocas con la ocupación de tierras nuevas, a favor de la indeterminación práctica del rígido límite teóricamente fijado. A esta puja respondió el viaje de Alvarez Cabral y la ocupación posterior de la costa por los portugueses; y es seguro que hubo viajes clandestinos hacia el sur de navegantes de esa nación, pues corrió entre la gente del oficio el rumor sobre la existencia de un paso —sin duda, la boca de nuestro estuario— que se suponía fuese una comunicación con el mar de Balboa. A Juan Díaz de Solís le tocaría empero la gloria (y la desventura) del descubrimiento efectivo.

Pocos datos se conservan sobre este marino predestinado, cuya misma nacionalidad es problemática. Se conoce solamente su actuación en anteriores viajes, que le habían valido el título de Piloto Mayor del reino. En tal carácter se le encomendó, por capitulación firmada el 24 de noviembre de 1514, la misión de encontrar el paso que se suponía existente con el Mar del Sur descubierto un año antes por Balboa y de llegar por él "a las espaldas de Castilla del Oro" sin tocar las costas del Brasil.

El viaje de Solís fue breve y trágico. Partió de San Lúcar de Barrameda el 8 de octubre de 1515 con sesenta hombres en tres naves. Entre fines de enero y principios de febrero del año siguiente llegó a la desembocadura de lo que supuso un mar interior de aguas dulces y rojizas, en el cual penetró siguiendo la costa septentrional, baja y arenosa, bordeada de pajonales y con un horizonte de colinas y espaciados arbustos. Llegó a una isla donde se detuvo para enterrar a un tripulante muerto, Martín García, con cuyo nombre hubo de bautizarla (y que no habría soñado nunca con su inmortalidad en la toponimia) y entró en un ancho río (el Uruguay), a cuya boca ancló, desembarcando en un batel con el contador Alarcón, el factor Barquina y seis marineros para explorar la tierra. Entre los cañaverales de las orillas

había indios emboscados que los recibieron a flechazos. salvó un grumete —Francisco del Puerto—, que quedó pri de los salvajes.

La sangre de Solís y sus compañeros refrendó el primer contacto de la civilización europea con la tierra rioplatense. Horro- rizados y privados de su jefe, los tripulantes de las tres naves re- solvieron la vuelta a España. Una de ellas naufragó frente a la isla de Santa Catalina, salvándose once de sus ocupantes que pudieron nadar hasta la costa.

* * *

Durante el viaje de Solís se había producido la vacancia del trono por la muerte de don Fernando *el Católico* y su asunción por parte de su nieto don Carlos, hijo de doña Juana y don Felipe *el Hermoso*, lo que le confería títulos para aspirar a la herencia de su otro abuelo Maximiliano. Es de imaginar que los trastornos y las preocupaciones inherentes a la instauración del nuevo monarca habían de relegar a muy segundo plano la consideración del fracaso de la expedición de Solís y el cuidado de designarle un sucesor.

Hernando de Magallanes, hidalgo portugués disgustado con su soberano y pasado al servicio de España, debió peregrinar largos meses tras los consejeros del joven Carlos para que le aceptaran la propuesta de repetir el intento. Logrólo al cabo de muchas fatigas y salió con cinco carabelas, del mismo puerto de San Lúcar, el 24 de agosto de 1519.

De su viaje inmortal sólo nos interesa ahora lo que atañe a nuestra tierra. Se sabe que tocó las costas del Brasil y que exploró la boca del río de Solís, sin penetrar en él, pues se convenció de que no podía ser el paso buscado. Siguió hasta las islas que llamó de los Pingüinos y de los Leones, en el puerto que llamó Deseado. A fin de marzo de 1520 recaló en otro, al que bautizó con el nombre de San Julián. La tierra era árida y desolada, con las costas altas y escasos refugios para las naves. Halló aborígenes que los recibieron en paz. Eran tribus miserables y nómades, que vivían de caza y pesca y cuyos individuos, de alta estatura y fuerte complexión, se cubrían de pieles. Aquí estalló en parte de la tripulación un motín contra el almirante, que fue reprimido violentamente. Dos de sus jefes fueron ejecutados y otros dos —entre los cuales un clérigo— abandonados en la costa.

La última recalada en tierra argentina fue en la desembocadura del río Santa Cruz, donde se detuvieron dos meses. Allí los meridionales que componían el grueso de la tripulación —hechos

a otros rigores que el del clima—, conocieron el viento huracanado, el frío y la nieve del riguroso invierno patagónico. Zarparon nuevamente al comienzo de la primavera, y el 21 de octubre descubrieron un cabo que llamaron de las Vírgenes, donde se abre el estrecho que comunica con el Mar del Sur, después de haber dibujado por primera vez, en una navegación larga y penosa, el contorno de nuestra costa austral.

* * *

Lo que se sabía hasta entonces de las tierras del Río de la Plata no era, por cierto, como para tentar la codicia de los aventureros. Sólo evocaban ideas de sangre e infinitas penurias. ¡Tierras inhospitalarias, duras, desoladas! Hacia otros rumbos volaba la esperanza: Castilla del Oro, Nueva España —recientemente conquistada por Cortés—; y más allá, siguiendo la ruta de Magallanes, Cipango y las comarcas de la Especiería... Esta última empresa es la que tienta a Carlos V, ya elegido Emperador. En una carta escrita en 1522 y dirigida a Margarita de Austria, regenta de los Países Bajos, le da cuenta de la llegada de Sebastián de Elcano, "que ha rodeado el mundo entero" y le anuncia su intención de organizar una nueva armada para repetir la hazaña "por la... comodidad que me pueda de esto venir, y a toda la cristiandad".

Carlos V reunía ya en esa fecha bajo su cetro un imperio más extenso que el de Carlomagno: la monarquía española, los Países Bajos, Nápoles, Sicilia y las tierras del Nuevo Mundo. Además, los dominios austríacos, cuyo gobierno había confiado a su hermano Fernando. Acababa de desembarazarse de sus consejeros flamencos y de aplastar la insurrección comunera, ahogada en sangre en Villalar. El fundamento de su autoridad europea no era tanto, sin embargo, la posesión de territorios, cuanto el goce de la herencia imperial de su abuelo Maximiliano, que lo constituía en "rey de los romanos" y cabeza temporal del mundo, vocado al arduo deber de realizar la unión de los reinos cristianos "contra los infieles enemigos de nuestra santa fe católica". Este pensamiento —inspirado por su consejero español, el doctor Mota— fue el que animó sus empresas guerreras en Europa, contra los poderes coligados de Francia, Inglaterra, el gran Turco, la naciente herejía luterana y en alguna ocasión el propio Pontífice, sometido al influjo de sus intereses eventuales de príncipe italiano.

En estos años de sus comienzos, el Imperio no era todavía sino una enorme fuerza naciente. Pero es de imaginar el brío que debía comunicar a sus empresas un poder teóricamente ilimitado en manos de un joven de veinte años y en una época en que todo

favorecía el ímpetu creador y la aventura. La idea imperial encendió la imaginación española. Ella fue la vencedora en Villalar, como la expresión más cabal del espíritu renacentista, con todo lo que éste significa de energía creadora. La "política como obra de arte" (a que alude Burckhardt en su estudio sobre el Renacimiento italiano), o sea una política sometida a impulsos de fantasía y normas de armonía, tuvo su más alto representante en el nieto de Isabel la Católica, que se proponía realizar contra los demás poderes coligados, los sueños de los teólogos y de los humanistas y que ponía en la empresa el espíritu osado que animaba al siglo de Miguel Ángel, Erasmo y Maquiavelo.

Era natural que el cumplimiento de los objetivos urgentes del Emperador lo obligara a una tregua en las expediciones ultraoceánicas. La tarea primordial consistía para él en el aplastamiento de la coalición europea y de la insurrección campesina estimulada por la herejía naciente que se propagaba a favor de la discordia política. Lejos de destinar recursos para el Nuevo Mundo, debió contar con los tesoros que de México le llegaban a partir de 1522, para aplicarlos a la terminación de su empresa continental. El triunfo de Pavía y las negociaciones que fueron su consecuencia le daban por fin la oportunidad de retomar su postergado propósito de llegar a las comarcas de Oriente por la ruta de Magallanes y Sebastián de Elcano. Nadie se acordaba, por cierto, de esta desolada tierra austral de Solís, tan remota y dejada de la mano de Dios.

* * *

Según las capitulaciones firmadas con la Corona, Sebastián Caboto debía llegar a las Molucas por el estrecho, siguiendo la ruta de los precursores. Era un navegante veneciano, cuyo padre, Juan, había estado al servicio de Inglaterra y realizado importantes viajes en 1497 y 1498, en los que había tocado el Labrador y Terranova, que con abundantes recursos —cuatro navíos y seiscientos hombres— zarpó de España a principios de 1526, poniendo proa hacia las costas brasileñas.

A poco de llegar a éstas, en las proximidades de la isla de Santa Catalina, después de una navegación feliz, habría de empezar a enterarse de una serie de circunstancias nuevas y sorprendentes que lo inducirían a cambiar de rumbo.

Supo, ante todo, que los portugueses llamaban Río de la Plata al descuberto por Solís. Corriéndose hacia el sur desembarcó en la isla nombrada, donde encontró una población de indios llamados los tupí-nambá, de raza guaraní, que lo recibieron como

amigo. Estos aborígenes se pintaban el cuerpo de colores abigarrados, se decoraban con plumas la cabeza y llevaban placas y collares de un metal que resultó, justamente, plata. Parecían bien dispuestos para la civilización. No se sorprendieron con la llegada de los españoles, pues ya tenían tratos con los portugueses del norte y poco tiempo antes habían recibido a los náufragos de la expedición de Solís. Dos de éstos, que vivían en las inmediaciones, acudieron a la noticia de la llegada de sus compatriotas y les relataron la extraordinaria aventura de Alejo García.

Este portugués con alma de caudillo había encabezado pocos años antes una expedición desde la costa de Santa Catalina hacia el más remoto interior del país, en busca del precioso metal, acompañado de cuatro o cinco de los náufragos de Solís y más de dos mil indios. Al cabo de innumerables y penosas jornadas y después de atravesar las sierras brasileñas y los bosques paraguayos y chaqueños, habían llegado hasta las altas montañas. De allí habían emprendido la vuelta, cargados con gran riqueza de vasos, vasijas y adornos de plata. En el camino de regreso, García y muchos compañeros habían muerto en una emboscada; pero los sobrevivientes conservaban muestras de sus tesoros, que Caboto tuvo ocasión de ver y que forzaron su decisión. ¿A qué perseguir en remotas regiones lo que estaba allí al alcance de la mano?

Antes de zarpar embarcó en su nave algunos indios para que le sirviesen de intérpretes y con intención de llevarlos luego a España. Y como el cambio de ruta provocara en la tripulación un principio de motín, hubo de reprimirlo con mano dura, abandonando a dos de los cabecillas en una isla del trayecto.

Al entrar en el Río de la Plata una terrible *sudestada* lo obligó a anclar junto a la isla de San Gabriel. No tardó en tomar contacto con otros sobrevivientes de la expedición de Solís, que le fueron muy útiles y que le confirmaron las versiones corrientes entre los aborígenes sobre la existencia de grandes riquezas en una región indeterminada situada en el nacimiento de las aguas.

Después de explorar la entrada del río Uruguay, Caboto decidió remontar el Paraná, cuya orientación interior parecía más apta para alcanzar el corazón de la tierra. Un escenario nuevo y sorprendente se abría ante sus ojos. Innumerables islas, con pajonales y abundante vegetación de sauces y árboles espinosos, le dieron la primera noción de nuestro monte litoral. Era el dorado otoño de la zona y los relatos de los navegantes han dejado de aquella entrada una impresión de maravilla. La navegación se deslizaba entre orillas bajas y arboladas, de las que surgían de pronto gárrulas bandadas de loros. Rápidas canoas de indios escapaban a

la proximidad de las proas españolas para guarecerse en los pajonales de la costa, donde dormitaban al sol los impasibles yacarés.

* * *

Al llegar a la confluencia del Paraná y el Carcarañá decidió Caboto fundar un fortín al que denominó *Sancti Spiritu* y que fue el primer establecimiento de España en el Río de la Plata. Junto al fortín, una pequeña población en que se instalaron los expedicionarios a guisa de punto de partida y cuartel general para la exploración del territorio. Gracias a los buenos oficios de los intérpretes, establecieron muy pronto relaciones con los indios vecinos, los timbúes, quienes ayudaron en la construcción de las chozas y en la preparación de las huertas. No tardaría la alianza en consolidarse mediante uniones con las doncellas indias.

No se conocen con precisión las navegaciones que efectuó Caboto desde ese punto hacia el norte. Se sabe que remontó el Paraguay, donde el paisaje cambia: vio sin duda la tierra roja, las palmeras, la selva chaqueña. Hubo de abrirse paso combatiendo contra la belicosa tribu de los agaces, que le hicieron frente con una flotilla de trescientas canoas; los venció y llegó a la zona de Monte Lambaré, donde los guaraníes lo acogieron cordialmente, como a un triunfador sobre sus mortales enemigos y aliado natural. Allí recogió más noticias sobre Alejo García y la región de la plata y vio nuevas muestras del precioso metal. Esto fue sin duda lo que lo decidió a enviar, cuando regresó al fuerte, un pequeño destacamento al mando del capitán Francisco César para que explorara la tierra hacia el rumbo indicado por los indígenas.

Un buen día se enteró Caboto por mensajeros indios de que una nueva flota de blancos había penetrado al estuario. Con un fuerte contingente de sus hombres navegó río abajo para salirle al encuentro. Era la expedición de Diego García de Moguer. Caboto le opuso su derecho de primer descubridor, que el otro acabó para evitar una lucha. Juntos realizaron una exploración aguas arriba y García decidió regresar a España, llevando muestras de metales y mensajes para el Emperador con cuenta detallada de los descubrimientos.

Pero las relaciones con los indígenas, buenas al comienzo, se habían tornado hostiles hasta convertirse en sublevación general contra el blanco. La guarnición que custodiaba el fuerte, al mando de Gregorio Caro, fue un día asaltada por una coalición de tribus guerreras, a la que el reducido puñado de españoles no pudo resistir, salvándose solamente los que alcanzaron a refugiarse en los bergantines. Las instalaciones fueron incendiadas. Caboto,

que contemplaba el desastre desde la nave capitana, decidió el regreso a España. Es probable que haya influido en la decisión el propósito de precaverse contra las posibles intrigas de García de Moguer, que le llevaba la delantera como informante ante la Corte.

El Emperador lo recibió no obstante con grandes honores y le concedió el título de Capitán General del Río de la Plata, con diversos privilegios. Pero le duraría poco el favor. Los oficiales a quienes Caboto había desembarcado en la isla por sediciosos, devueltos a España por García de Moguer, reclamaron justicia, movieron influencias en la Corte y obtuvieron al cabo la anulación del nombramiento. Caboto no volvería al teatro de sus hazañas.

II. DON PEDRO DE MENDOZA

Casi una década transcurriría antes de que se reanudasen las expediciones a la tierra de Solís y Caboto. El viaje de este último no había sido, por cierto un éxito desde el punto de vista material, pues sólo obtuvo como botín unas cuantas muestras de objetos de plata. Esto dio no obstante pábulo a la leyenda que estimularía las tentativas ulteriores.

Poco tiempo antes de la destrucción de *Sancti Spiritu* había regresado de su expedición tierra adentro el capitán Francisco César con su puñado de acompañantes. Traían la certidumbre de que en un lugar no determinado de la cordillera occidental existía un gran imperio, lleno de fabulosos tesoros. Los indios del interior les habían dado sobre ese imperio detalles sorprendentes, cuyo comentario alimentó sin duda las largas pláticas del regreso, en las veladas de los bergantines, y que al correr de boca en boca, habrían de transformarse en una enloquecedora mitología.

Tal fue el origen de la esperanza que encandiló a nuestros futuros conquistadores. La ciudad de César derivó en la ciudad de "los Césares" por el equívoco inherente al sentido imperial del apellido del descubridor; y desde entonces la leyenda se asoció indisolublemente en la imaginación popular a las tierras del Río de la Plata. La circunstancia de haberse descubierto y conquistado el imperio incaico pocos años después no la destruyó, sino que la reforzó con nuevos argumentos. Hoy sabemos que los informantes de César se referían al Cuzco peruano; no había motivos para asegurarlo entonces. El mito de los Césares fue un mito platense y hasta tal extremo seductor, que ocurría el caso paradójico de que los mismos conquistadores provenientes del reino de Pizarro diesen en perseguir aquí, por todos los valles de la cordillera, los espejismos de la ciudad soñada. Cada vez más al sur, en tiempos de Hernandarias, se la buscaba por la Patagonia. . .

Mientras tanto, la conquista española avanzaba magníficamente en el resto de América.

El Emperador sabe ya a qué atenerse sobre la importancia del Nuevo Mundo, cuyos tesoros sostienen sus empresas continentales: lo considera como una merced indiscutible de la Providencia a su agente temporal, no tierra de usufructo, sino de misión. La creación del Consejo de Indias en 1524 da la medida

de su preocupación por los nuevos súbditos. Un lustro más tarde ha alcanzado el cenit de su poder. La "paz de las Damas" significa el reconocimiento de su supremacía europea. En 1530 recibe de manos del Papa la corona imperial, convoca a la Dieta de Augsburgo para resolver la cuestión religiosa y se prepara a la guerra contra la Media Luna.

La afluencia a España de los metales preciosos, el ejemplo de Cortés y las versiones circulantes sobre la riqueza de las nuevas tierras estimulaban naturalmente la codicia y la sed de aventuras, y eran muchos los gentiles hombres de toda laya que aspiraban a emular las hazañas de los precursores y se veían en la imaginación señores de imperios fabulosos, más ricos y poderosos que cualquier rey de Europa. Como la corona carecía de dinero para fletar expediciones por su cuenta, decidió sacar provecho de esas ambiciones difusas, concediendo permisos mediante capitulaciones a quienes se ofreciesen a costear sus empresas. El aliciente de los hombres y el provecho posible hacía tanta fuerza que pulularon los candidatos. El Río de la Plata estaba abierto a la conquista, y para ella se propuso el granadino don Pedro de Mendoza, miembro de una ilustre familia y caballero de Santiago, quien gozaba de los favores del Emperador por su actuación reciente en las guerras de Italia. Es fama que había intervenido en la toma y saqueo de Roma y que sus riquezas provenían en gran escala de su participación en este episodio.

Nacido a comienzos del siglo, Mendoza tendría por esa fecha la edad de Carlos V. Había sido paje en la Corte, junto con otros caballeros principales, y no hay duda de que recibió una educación cuidadosa y que estaba impregnado del espíritu de refinada cultura que reinaba entonces en los altos círculos, obedientes a la influencia humanística que venía de Italia y Holanda. No sabemos si fue amigo de Garcilaso o de los Valdés; pero sí que entre los libros de su cabecera figuraban Erasmo y Virgilio. De su juventud disipada le quedó como estigma el *morbo gálico* que a la sazón lo aquejaba y habría de llevarlo pronto a la tumba. Esta circunstancia desgraciada determinó tal vez su soltería. En la aventura de la conquista hallaría seguramente una compensación a su malogro en lo demás y la esperanza de iluminar tanta desdicha con un postrer destello de gloria.

Un hecho auspicioso contribuyó en esos momentos a fortalecer el optimismo general: la llegada de los primeros tesoros provenientes del Perú, conducidos por Hernando Pizarro. Medio millón de pesos en oro correspondientes al quinto real, amén de innumerables objetos de arte indígena de la más exquisita orfebrería. Se explica que con ello se apresuraran los preparativos, porque subió en seguida la oferta de capitales y de lanzas. La

capitulación preparada por el Consejo de Indias se firmó en Toledo el 21 de marzo de 1534, junto con las de Almagro y Alcazaba para Chile. ¡Del estado a la sazón de los conocimientos geográficos puede dar una idea la obligación que Mendoza contrae de remontar el Paraná hasta el Pacífico!... Se le otorgaba el título de Adelantado y Capitán General, con otros privilegios, a cambio del compromiso de poblar y organizar estas tierras para su Cesárea Majestad e incorporarlas a la unidad católica.

La empresa urgía, pues se tenían noticias de intenciones similares por parte de Portugal, siempre tentado de olvidar la obediencia a los tratados y las bulas. Al fin, el 24 de agosto de 1535 estuvo todo presto y zarpó de San Lúcar la armada, constituida por once embarcaciones y alrededor de mil quinientos hombres entre marineros y gente de guerra. Rodeaba al Adelantado un brillante estado mayor en el que figuraban nombres de la más rancia nobleza peninsular: Ponce de León, Fernández de Córdoba, Manrique, Salazar, Luxán y un Pérez de Ahumada, hermano de Santa Teresa.

Después de una breve escala en las Canarias (donde hubo pintorescos episodios que no hacen a nuestra narración), la flota siguió viaje rumbo a las costas brasileñas que se avistaron en los últimos días de noviembre. Aquí hizo crisis el conflicto que bullía entre la oficialidad a raíz de la reclusión del Adelantado, que venía enfermo en su cámara. Por orden de éste y bajo la acusación de amotinador fue apuñalado el joven y brillante capitán Juan de Osorio, que parece haber sucumbido víctima de oscuras intrigas y de su jactancia andaluza. Esta tragedia consumada en el magnífico escenario natural de la bahía, ante el estupear de unos cuantos indios tamayos que vivían en chozas de cañas y el silencio horrorizado de los tripulantes, preludiaba el sino desgraciado de la expedición. Quien la ordenó y quienes la ejecutaron no verían más su tierra natal y morirían todos de mala muerte.

En los primeros días de 1536 entró Mendoza en el río de Solís. El 22 de enero se lo juró como gobernador "en el puerto y plaza de San Gabriel, que es en el Río de la Plata", actuando como escribano Martín de Haro.

Junto a un brazo de agua que ofrecía seguro abrigo para las naves (el futuro Riachuelo) se eligió el emplazamiento de la ciudad. En la barranca que dominaba la costa se dibujó un cuadrilátero de ciento cincuenta varas por frente, al que se rodeó de empalizadas. En el interior se construyeron unas cuantas chozas y una vivienda más cómoda para el Adelantado, quien bautizó al flamante establecimiento con el nombre de Santa María del Buen Aire.

Al fondo, la pampa. Esta no era la vasta llanura de gramíneas en que la transformó después la civilización, sino un interminable yermo, cubierto a trechos de pastos duros y altos. Algunos montes ralos de espinillos y talas cortaban el horizonte o, muy espaciados, alguno que otro añoso y retorcido algarrobo, algún ombú. Junto a los arroyos que desembocaban en el estuario de aguas rojizas, tupidos pajonales, totoras y cortaderas. Todo ello habitado por una fauna inédita: flamencos rosados en las lagunas, chajás, ñandúes y teros, armadillos y vizcachas.

Apenas instalados, empezó a preocupar al millar y medio de hombres que se repartían entre la población y las naves el problema de la alimentación. Las provisiones embarcadas en España se habían calculado para seis meses. Con simpática imprevisión andaluza e hidalga, se habían cargado suficientes caballos de guerra; pero ni una vaca, ni una oveja, ni una gallina, ni una bolsa de trigo para sembrar. No era cosa de sostener a tanta gente con el solo recurso de una fauna desconocida y escurridiza. En procura de sustento, se buscaron relaciones pacíficas con las tribus de querandíes que habitaban la comarca.

Según Ulrico Schmidel, cronista candoroso de la expedición, estos aborígenes eran nómades "como gitanos", vivían de caza y pesca y formaban una población como de dos mil almas. Habitaban en chozas o tolderías y recorrían el río en canoas. Parece que en los primeros tiempos se sometieron a llevar diariamente al fortín de Mendoza un insuficiente tributo de carne y pescado. Pero las relaciones pacíficas no duraron mucho; pronto se tornaron hostiles. No ha de haber sido ajeno a este cambio el comportamiento de la soldadesca inclinada a abusar del poder y su apetito inmoderado por las doncellas indígenas, que a esta altura de la navegación encandilarían como princesas. Los rudos lansquenets alemanes y los contra maestres y pilotines de Vizcaya no habían aprendido por cierto, como Mendoza y sus amigos, los buenos modales de la corte. El hecho es que un buen día los aliados de la víspera se negaron a prestar su tributo. La salida de un destacamento efectuada para escarmentarlos resultó un desastre, muriendo en ella entre otros, Diego de Mendoza, sobrino del Adelantado. Habían acudido nuevas tribus, que usaban como arma temible bolas arrojadas atadas con tientos.

Comenzó un sitio prolongado y para los sitiados los tormentos del hambre. Schmidel cuenta que debieron comer ratas y ratones e incluso los correajes y los cueros de los zapatos. Los sitiadores arrojaban flechas incendiarias a los barcos y a las instalaciones del fortín, cuyos techos de paja ardían en seguida, y sólo se amedrentaban y huían ante los cañonazos de la nave capitana.

El capitán Juan de Ayolas, que había sido enviado hacia el norte con dos bergantines para seguir la ruta de Caboto, volvió al poco tiempo con buenas noticias. Algo más allá de las ruinas de Sancti Spiritu habían establecido relaciones con tribus de timbúes o chanás, quienes los habían provisto con abundante maíz y pescado. En ese lugar, al que llamó Nuestra Señora de la Buena Esperanza, quedaba una guarnición de unos cien hombres al mando del tesorero Gonzalo de Alvarado.

Parece que el Adelantado, cuya enfermedad se agravaba por momentos, tuvo ante esas nuevas la intención de llevar más al norte la población, abandonando la costa inhospitalaria y enemiga. Las privaciones habíanle producido un estado de extrema extenuación corporal. El norte era, por lo demás, el camino hacia las regiones del oro y la plata, de lo cual no había vestigios en la costa inclemente.

A este fin mandó nuevamente a Ayolas aguas arriba, con una carabela y dos bergantines, y algo después, en su seguimiento, tres bergantines más, a las órdenes de Juan Salazar y Gonzalo de Mendoza. No esperó el regreso. Sintiendo sin ánimos para proseguir y próximo a la muerte, decidió volver a España y así lo hizo el 22 de abril de 1537, con la carabela Magdalena y el galeón Santantón. Antes de partir, dejó prolijas instrucciones designando a Juan de Ayolas como su lugarteniente. Falleció en alta mar, próximo a la línea del Ecuador, antes de cumplir los cuarenta años.

De los doscientos cincuenta hombres que quedaban en la población se embarcaron con Mendoza ciento cincuenta; y entre éstos, desde luego, toda la "juventud dorada" de su corte, que sacudía de sus pies para siempre el polvo de estas playas malditas. El grueso de la tripulación marchaba aguas arriba, con Ayolas. Sólo permaneció en el fortín casi en ruinas, entre los escombros de los incendios, un centenar de hombres al mando del capitán Ruiz Galán.

III. ASUNCIÓN DEL PARAGUAY

Con la vuelta de Mendoza y sus compañeros a España varió totalmente la composición del comando expedicionario.

Habíase eliminado el grupo brillante de los que venían atraídos por las perspectivas de un paseo triunfal, al cabo de gloriosas batallas, de una epopeya como la de Cortés, con galardón de ciudades llenas de tesoros y princesas morenas rendidas y suplicantes. La realidad que encontraron era demasiado distinta. No desertaban, por cierto, aquellos bravos por temor a los riesgos de la conquista. Estaban acostumbrados a enfrentar al enemigo en el campo de batalla y amaban el peligro. Pero la posibilidad de morir ingloriosamente, como Diego de Mendoza o el desdichado Luxán, víctimas de la flecha alevosa de un indio emboscado, no era ciertamente halagadora para quienes, por su nacimiento y su situación podían aspirar a una muerte más decente. A buscarla, pues, de manos de sus pares, en contiendas regidas por normas de honor, se volvieron todos aquellos que tenían mucho que perder. Quedaron con Ayolas los que habían jugado su porvenir a esta última carta, porque allá no contaban con posibilidades de lucro y mando: los hidalgos oscuros, los desheredados y los desesperados.

A la primera de estas categorías pertenecía el joven vascongado a quien dejó el Adelantado como lugarteniente. Formaba parte de su servidumbre, gozaba de su total confianza y el cargo de alguacil con que aquél lo honró de entrada, con preferencia sobre otros muy superiores en nacimiento y méritos, parece haber sido la causa de la oscura intriga que terminó con la ejecución de Osorio. Este había sido un triunfo de Ayolas y la prueba de que, para subir y mantener las posiciones alcanzadas, no despreciaba ningún medio.

Es indudable que si la muerte no hubiera cortado su carrera tan pronto, habría subido muy alto, tal el empuje que llevaba y la decisión que mostró desde el comienzo.

En su incursión por el Paraná hacia el norte, había llegado, cerca de la confluencia de este río con el Paraguay, a un puerto natural que llamó de la Candelaria, donde construyó un fortín como base de las operaciones futuras. Allí dejó, con el cargo de teniente gobernador mientras durase su ausencia, a Domingo

Martínez de Irala y se lanzó con poco más de cien hombres, a través de la selva chaqueña, en busca de la sierra de la plata, siguiendo informes de los naturales. No había de volver nunca. Según se supo luego, había llegado a los contrafuertes andinos, donde los indios chanás le exhibieron muestras de oro provenientes del Alto Perú y había caído, ya de vuelta, en una emboscada de los payagáes, que le dieron muerte con toda su gente.

Irala se había encontrado mientras tanto con las naves de Salazar, treinta leguas al norte de la Candelaria. Juntas las dos flotas, hicieron una excursión en busca de Ayolas y se enteraron por informes indios de su suerte trágica. Irala regresó entonces a la Candelaria. Salazar remontó el Paraguay y estableció un fuerte junto a la población guaraní de los carios, con quienes había trabado amistad. Era el 15 de agosto y le puso por ello el nombre de Asunción.

Los tiempos que siguieron fueron de exploraciones infructuosas, con grandes privaciones y pérdidas de vidas, así como de una larga y agria disputa entre Ruiz Galán e Irala por la gobernación. El primero pretendía tener su derecho del propio Adelantado, que lo había dejado a cargo de la guarnición de Buenos Aires. El segundo, de Ayolas, sucesor legítimo de Mendoza. A la verdad, ambos títulos estaban viciados, pues sus poseedores habían recibido delegaciones parciales de poder. La disputa fue zanjada por el *veedor* Alonso Cabrera, que llegó procedente de Santa Catalina y que falló en favor de Irala. Fue sin duda un primer triunfo de la aptitud política que éste seguiría en lo sucesivo. Juan de Salazar le entregó la posesión del fuerte de Asunción, donde se estableció la sede del gobierno.

De los míseros y diezmados fortines esparcidos a lo largo de la costa, era el que ofrecía mejores condiciones para durar. El clima era benigno; la tierra fértil, el río formaba allí una bahía espaciosa que proporcionaba seguro refugio para las naves. Y sobre todo, la población de la comarca acogía con entusiasmo la instalación de los españoles. Esos indios carios eran labradores y pastores, dueños de extensos sembrados que despertaban la codicia de sus vecinos y los obligaban a una permanente defensa. La alianza con los temibles blancos que poseían caballos y arcabuces significaba para ellos un buen negocio. Esta alianza habría de reforzarse con la mezcla de sangre que inmediatamente se produjo y que sería el comienzo de una abundante población mestiza.

De la numerosa y brillante expedición de don Pedro de Mendoza no quedaban más que trescientos cincuenta hombres distribuidos entre Buenos Aires, Candelaria y Asunción. Irala

comprendió la conveniencia de concentrarlos en el lugar que ofrecía mejores condiciones para la vida y mayor proximidad a las fuentes de metales preciosos. Decidió por ello ordenar la depoblación de Buenos Aires, con lo cual daba además el golpe de gracia a su adversario Ruiz Galán, que continuaba reticente y hostil y que, a la llegada del gobernador, abandonó su puesto con rumbo a la costa brasileña.

A fines de junio de 1541, Irala mandó quemar las instalaciones de la infortunada población de Mendoza e hizo embarcar lo que quedaba de su guarnición. Junto a un mástil bien visible dejó una calabaza conteniendo instrucciones para los navegantes que llegasen a ese puerto, a fin de que pudiesen arribar a la nueva ciudad. Ya conocía a la sazón, por mensajes de indios amigos, que a Santa Catalina habían llegado naves españolas con destino a Buenos Aires.

De vuelta a Asunción, el 26 de setiembre de 1541, decidió organizar la población "en forma de república" según reza el acta respectiva. Con el dictamen de los oficiales reales, instituyó el primer ayuntamiento o cabildo, con cinco regidores cuyas facultades fueron expresamente consignadas en dicho documento, que empieza hablando del puerto de Nuestra Señora de la Asunción y termina designándola por primera vez con el título de "ciudad". A continuación construyó un almacén de bastimentos y un arsenal para las armas y municiones.

Asunción fue en rigor la primera ciudad del Río de la Plata y conservaría su preeminencia por casi un siglo.

Dueño ya de un establecimiento seguro, con la población aumentada, las provisiones aseguradas y la amistad de varios millares de indios a quienes había asociado a su empresa (amistad fortalecida por parentescos flamantes), Irala se dispuso a emprender la conquista del Occidente.

* * *

Quienes regresaron a España de la expedición de Mendoza no llevaban por cierto una grata impresión del Río de la Plata y estaban decididos a no repetir la aventura. Sus noticias no debían ser tampoco estimulantes para los demás. Era natural que, en esos momentos, la atención se concentrase en los alucinantes relatos sobre las cosas de México y Perú y desdeñase ocuparse de las pobres regiones australes, que eran la Cenicienta de la conquista y cuya ocupación sólo cobraba sentido como un camino hacia la fabulosa ciudad de los Césares no ubicada en los mapas. Preferir lo cierto a lo azaroso es una tendencia natural

del espíritu humano, aun en la tierra de don Quijote. A esto se debió sin duda la demora en designarle un sucesor al infortunado Mendoza.

No habrá sido ajena a esta demora la preocupación absorbente del Emperador por los asuntos continentales. Triunfante en Túnez y el Milanésado, en paz con Francia a raíz del tratado de Niza, tenía que hacer frente a la rebelión de sus propias tropas amotinadas por falta de pago, en tanto que las cortes de Toledo protestaban por los excesivos gastos ocasionados por las guerras y la ciudad de Gante se sublevaba y había que ahogar la rebelión en sangre. Todo ello complicado con la extensión de la herejía, que se propagaba como yerba mala, y la amenaza permanente del Turco.

El reemplazo de Mendoza habríase demorado acaso más todavía si no se hubiese presentado a solicitar la vacante un hidalgo ya maduro que había pasado su juventud en tierras de América, en medio de increíbles aventuras. Enrolado en la expedición a la Florida, bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez, y después de vicisitudes que sería prolijo enumerar, habíase salvado de un naufragio con un puñado de sus compañeros, hambrientos y casi desnudos, y permanecido durante diez años en cautividad entre los salvajes, sobre quienes adquirió un misterioso ascendiente por sus condiciones de mago y curandero: decíase que había logrado resucitar a un indio muerto. Quien apenas llegado de esas andanzas pedía volver a la región peor afamada del Nuevo Mundo daba muestras por cierto de poseer una envergadura nada vulgar.

Alvar Núñez Cabeza de Vaca era efectivamente hombre de gran elevación de ánimo y excelentes prendas de carácter, unidas a una pronunciada seducción personal. El maestro Juan de Ocampo, su compañero de aventuras, lo describe de este modo: "Animoso, noble, arrogante, los cabellos rubios, los ojos azules y vivos, barba larga y crespa, agudo de ingenio, era Alvar un caballero y un capitán a todo lucir; las mozas del Duero enamorábanse de él y los hombres temían su espada". Era andaluz de Jerez de la Frontera y de alto linaje, nieto del Adelantado Pedro de Vera, conquistador de las Canarias bajo Fernando e Isabel.

Nombrado Adelantado a su vez, con las mismas prerrogativas que Mendoza, mostró Alvar Núñez desde el comienzo su extraordinaria decisión. Se puso en viaje con dos naves y una carabela a principios de 1541. Llevaba algo más de cuatrocientos hombres y cuarenta y seis caballos de guerra, de los que perdió en el viaje casi la mitad. Llegado a Santa Catalina, se enteró por unos franciscanos y nueve soldados escapados de Buenos

Aires antes de su arrasamiento, de la fundación de Asunción y del repliegue a ese punto de los pobladores. Resolvió entonces dirigirse allí por tierra, mientras una parte de la tropa seguía hacia el estuario con las naves.

El mismo Adelantado nos ha dejado en sus "Comentarios" el relato de esta hazaña. La marcha duró desde el 29 de noviembre de 1541 hasta el 11 de marzo del año siguiente. Encontró al principio "tierras muy alegres, grandes campiñas, arboledas y muchas aguas de ríos y fuentes. . . tierra muy aparejada para labrar y criar". Debó cruzar luego una región de interminables pantanos, con el agua a la rodilla. Y después "grandes sierras y montañas muy ásperas y cerradas de arboledas de cañas muy gruesas", en las que debieron abrirse picadas durante días y días. Al fin toparon con tribus de aborígenes que los recibieron amistosamente, obsequiándolos con provisiones. Al acercarse al término de la jornada hallaron indios que hablaban algo de español y les dieron noticias sobre la población asunceña, mostrándose "grandes familiares y conversables, como si fueran naturales amigos, nacidos y criados en España".

Irala entregó sin objeción ninguna el mando al nuevo titular, quien lo designó su lugarteniente. Tenía lista la expedición que debía dirigirse hacia la sierra de la plata. Después de enviar una flota de auxilio a las naves que remontaban el río, cuya tripulación llegaba diezmada por las privaciones y los ataques indígenas, partió a mediados de octubre rumbo al norte.

* * *

Desde el principio surgieron desaveniencias entre los pobladores y el flamante Adelantado. Ganados por la blandura del clima, el relajamiento de la disciplina inherente al riesgo compartido, la vida azarosa y las promesas de provechosa holganza que —al cabo de un lustro de privaciones y combates— veían en el goce de los repartimientos y la abundante servidumbre indígena, aquéllos no podían aceptar de buen grado la autoridad nueva que pretendía imponerse con molestas restricciones. Las vicisitudes sufridas en común habíanles infundido un sentimiento igualitario extremadamente quisquilloso e incompatible con un comando exigente. La alianza y cruzamiento con los carios determinaba un estado social en que la poligamia era la regla y que resultaba escandaloso al nuevo gobernante. Este había adquirido por su parte, en la capitulación con la corona, serios compromisos que se empeñaba en cumplir y que se referían principalmente a la abolición de la servidumbre indígena y a la captación

de los naturales por la evangelización y el ejemplo. Los choques sucesivos debieron ir agriando poco a poco los ánimos hasta provocar la crisis.

Irala volvió al cabo de cuatro meses, después de una expedición Paraguay arriba, de resultados poco halagadores. Las diversas partidas mandadas a reconocer la tierra debían sostener frecuentes choques con tribus hostiles. Los más encarnizados enemigos eran los guaycurúes, por lo cual se decidió hacer con ellos un escarmiento. El propio Adelantado se puso al frente de las tropas y los venció completamente.

Después de esta victoria decidió intentar también personalmente la empresa en que había fracasado Irala. Schmidel nos ha dejado el relato circunstanciado de esta larga y desgraciada expedición que sería el comienzo del fin de Alvar Núñez. Nada faltó en ella: guerra continua contra los salvajes, amotinamiento de la soldadesca, epidemia, gran mortandad de españoles. Se avistaron por primera vez, con maravilla, las cataratas del Iguazú. A la vuelta, el prestigio del Adelantado se había desvanecido y estaba madura la rebelión.

El 25 de abril de 1544, ausente Irala, una turba encabezada por los oficiales reales se apoderó del Adelantado y lo encerró en una prisión, donde quedaría ocho meses al cabo de los cuales fue enviado a España.

Los amotinados repusieron en el mando, no obstante su resistencia *pro forma*, al propio Irala, de acuerdo con la cédula real de 1537, que confería al voto de los pobladores la provisión de los gobiernos vacantes.

La deposición de Alvar Núñez Cabeza de Vaca configura el primer caso en el Río de la Plata de un tipo de conflicto que sería clásico en América: el conflicto entre el hombre de preceptos y el de realidades, entre el legalista y el práctico. Fuerte en sus principios, el Adelantado no llegó evidentemente a captar la particularísima situación concreta que se presentaba en Asunción. Irala, que la había vivido y había contribuido a crearla, dominábala en todos sus aspectos y comprendía oscuramente que hasta la misma poligamia —siembra intensiva de sangre española— tenía su aspecto benéfico que atenuaba el pecado. Ello lo erigía en caudillo indiscutido del grupo de pobladores, con quienes usaba una política de tolerancia comprensiva con lo que juzgaba inevitable, de obediencia a sus anhelos legítimos, de rigor eventual frente a las transgresiones.

No fue extraño por cierto a la rebelión cierto fermento "comunero". Muchos españoles de Asunción habían luchado con Padilla en la guerra de las comunidades, trágicamente epilogada en Villalar, y en la que el Adelantado militaba en las filas

imperiales. La nave en que se lo devolvió a España había sido bautizada desafiantemente "Comuneros".

* * *

De nuevo en el gobierno, Irala decidió tentar la suerte de una nueva expedición hacia la región de los metales, cuyo incentivo había servido hasta entonces para mantener la cohesión de la población asunceña. Una corriente conservadora había surgido entretanto en cierto sector escarmentado de la población, en el sentido de no realizar nuevas tentativas. El lema era "poblar y no conquistar", o sea mantener lo obtenido hasta que la llegada de nuevos refuerzos de España permitiera acometer la empresa con menos riesgos.

Esta opinión prudente no detuvo a Irala. Movíalo en primer término el propósito de encauzar hacia una empresa externa la ebullición de guerra civil que había dejado en la ciudad la deposición del Adelantado y que se manifestaba en continuas pendencias; y en segundo término, lo que había oído Nufrio de Chaves en una reciente expedición al Pilcomayo. Este joven capitán, que mostraba ya el extraordinario empuje que haría de él una de las figuras más gallardas de la conquista, traía noticias concretas de la existencia de "un cerro que manaba plata", según le aseguraban los indios de la región, refiriéndose sin duda a las minas de Potosí, descubiertas pocos meses antes.

Con ese rumbo se puso Irala nuevamente en camino a fines de noviembre de 1547. Seguido de doscientos cincuenta españoles, veintisiete de a caballo y dos mil indios amigos, llegó hasta las primeras serranías del Perú. Allí se encontró con la desconcertante novedad de que otros compatriotas se habían apoderado hacía ya dos años de las riquezas tanto tiempo perseguidas.

Envío a Nufrio de Chaves como emisario ante el presidente La Gasca, ofreciéndole su concurso. No pudo esperar la vuelta de aquél, porque su tropa, encabezada por los oficiales reales, se empeñó en regresar a Asunción. Irala renunció por ello al mando. La autoridad se le confió a Gonzalo de Mendoza y emprendieron todos el regreso.

En Asunción había ocurrido un motín durante su ausencia, en el que el gobernador delegado de Irala, Francisco de Mendoza, había sido muerto por los amigos de Alvar Núñez, encabezados por Diego de Abreu. Para dominar a los sublevados fue necesario el restablecimiento de Irala en el mando. El hábil caudillo logró imponer su autoridad por todos los medios de la energía y de la persuasión, sin omitir el clásico procedimiento dinás-

tico: casó a Alonso Riquelme de Guzmán y a Francisco Ortiz de Vergara, que eran sus principales adversarios, con dos de sus hijas mestizas.

Por ese tiempo llegaron a Asunción los restos de la expedición del Adelantado Juan de Sanabria, nombrado en reemplazo de Alvar Núñez y fallecido en el viaje. Venía en las naves un plantel de mujeres españolas enviadas expresamente para casarse con los pobladores y remediar así o atenuar en parte los inconvenientes del concubinato indígena.

* * *

No se había apagado en Irala la fiebre de los descubrimientos. Realizó varias expediciones más, por sí o por sus lugartenientes. Nufrio de Chaves, que se casó con una hija de Francisco de Mendoza, fue el más infatigable en su afán de extender la conquista en el rumbo del Perú. Su lema era "desencantar la tierra", libertarla de asechanzas y endriagos. Debió no obstante el gobernador hacer concesiones a la tendencia conservadora, en el sentido de poblar lo conquistado repartiendo en encomiendas a los indios. En estas circunstancias le llegó la confirmación de su nombramiento por el monarca, junto con la prohibición de proseguir los descubrimientos. La tendencia a "poblar y no conquistar" se había impuesto en el Consejo de Indias. La quimera de los metales preciosos era, no obstante, tan persistente, que los esfuerzos del gobernador se orientaron a poblar de preferencia las regiones más próximas a la meta soñada.

En esta tarea lo sorprendió la muerte en 1556, a los cuarenta y cinco años de edad y casi veinte de gobierno.

IV. EL TUCUMÁN

Durante la última década del gobierno de Irala, había empezado a poblarse, por conquistadores venidos del Perú, el vasto noroeste argentino conocido genéricamente con el nombre de Tucumán.

El primero en llegar allí había sido Diego de Almagro, en camino a Chile. Entró por Humahuaca, recorrió los valles calchaquíes y cruzó la cordillera. Los indios de la comarca vieron así los primeros ejemplares de hombres blancos y barbados cubiertos de hierro, que habían llegado por el norte en grandes naves y que, después de someter el imperio del Inca, se despedaban entre sí con mayor saña que la que usaban contra el aborigen.

El segundo fue Diego de Rojas, por mandato del virrey Vaca de Castro. Con doscientos hombres entre oficiales y soldados salió de Cuzco entre mayo y junio de 1543. Después de atravesar la zona de cultivos de los indígenas tributarios del Inca, cruzó la puna y entró en los valles poblados por diaguitas y calchaquíes. En el horizonte de montañas rojizas creyó ver más de una vez la aparición de enormes palacios, visión fantasmagórica de una ciudad. Llegó así al Tucumán, selva verde y húmeda de vegetación tropical con cactus gigantes, aguayabes y ceibos florecidos. Todo ello en guardia permanente contra las emboscadas indígenas erizadas de flechas.

Desembocó en una llanura salitrosa donde, agotadas las provisiones, debieron nutrirse de venados silvestres y pescados de los esteros. Aquí, en una escaramuza con los juríes, fue muerto Diego de Rojas por una flecha envenenada. La expedición quedó al mando de Francisco de Mendoza, homónimo del asunceño.

Lejos de volverse, decidieron en consejo de guerra seguir adelante, en busca de contacto con los pobladores de Asunción, de cuya presencia tenían ya noticias. Cruzando las tierras de los comechingones, "indios barbados como nosotros" según los cronistas, alcanzaron las márgenes del Paraná, en un punto cercano a la primera fundación de Caboto. En una vasija enterrada encontraron una carta de Irala con instrucciones para quienes eventualmente llegaran al lugar. Como Mendoza intentara conti-

nuar aguas arribas, se le amotinaron los soldados y le dieron muerte; y tras largas jornadas de privaciones y combates casi diarios, regresaron al Perú, que se encontraba en plena y cruenta guerra civil.

Esta expedición se conoce como "la gran entrada". Aunque de resultados nulos, recogió inestimables noticias sobre la calidad de las tierras y la condición de los naturales del noroeste argentino, frente a cuya guerra de emboscadas desde poblaciones fortificadas desaparecía la superioridad guerrera de los españoles, fundada en la posesión del caballo y el arcabuz. De los doscientos hombres que la integraban al comienzo no regresaron más de ochenta. Entre ellos un joven vizcaíno que desempeñaría más tarde un gran papel en el Río de la Plata y se llamaba Juan de Garay.

El tercero fue el capitán Juan Núñez del Prado, enviado en 1549 por el gobernador presidente de la Audiencia, licenciado La Gasca, que acababa de ahogar en sangre la rebelión almagrista, dando término a la guerra civil. Tenía el encargo de fundar un pueblo en la región del Tucumán, con el objeto de proteger el camino a Chile, facilitar el descubrimiento de la región platense y propagar la religión católica entre los indígenas.

Núñez del Prado partió de Potosí al mando de unos setenta soldados por el camino de Diego de Rojas. En 1550 fundó una ciudad que llamó del Barco, lo cual provocó un conflicto de jurisdicción con el gobernador de Chile, Valdivia, quien consideraba ese lugar como perteneciente a su jurisdicción. Para evitar una lucha armada, Núñez se retiró hacia el norte y estableció nuevamente el emplazamiento de la población dentro de los límites actuales de Salta. De aquí debió salir también, hostigado por los diaguitas, para realizar una tercera fundación en un lugar situado media legua al sur de la actual Santiago del Estero.

Estas tentativas no tienen otro mérito que el muy grande de haber sido las primeras fundaciones del Tucumán: por lo demás, muy efímeras. Un nuevo jefe entraría en escena con el nombramiento de Francisco de Aguirre, enviado en 1552 por el mismo gobernador de Chile con el encargo de "poblar hasta el mar del norte", es decir, desde los Andes hasta el Atlántico. Se extralimitaba con ello Valdivia de la concesión que le había otorgado La Gasca y que alcanzaría a lo sumo (como se estableció más tarde) hasta las sierras cordobesas; pero nadie reparaba entonces en esas minucias. Aguirre atravesó la cordillera con setenta hom-

bres, expulsó sin más trámites a Núñez del Prado de su flamante fundación y trasladó ésta, en junio de 1553, a orillas del río Dulce, rebautizándola con el nombre de Santiago del Estero. Esta ciudad habría de convertirse en el centro de la colonización española del Norte.

Aguirre mostró grandes cualidades de político y organizador, perjudicadas por su carácter irascible y altivo que le enajenaba la voluntad de sus lugartenientes. Parece que poseyó no obstante el secreto de hacerse amar y temer a la vez por los indios. El hecho es que pacificó la región, distribuyó encomiendas, propulsó la agricultura y recorrió las tierras de Córdoba y Santa Fe hasta el Paraná, así como las costas del Bermejo.

Al año siguiente debió acudir a Chile para hacer frente, bajo las órdenes de Valdivia, a la sangrienta sublevación de los araucanos. No volvería a Santiago hasta diez años más tarde.

* * *

Los tiempos que siguen están absorbidos por el problema de poblar la tierra y asegurar las comunicaciones entre las diversas ciudades con las dificultades inherentes a las largas distancias, la resistencia indígena encarnizada (estimulada por las noticias de la rebelión araucana, que mantenía la inquietud en las tribus) y los conflictos permanentes de jurisdicción por la indeterminación de los límites en las concesiones de conquista.

Asunción y Santiago eran islas en medio de tierras rebeldes que había que conquistar sin descanso. Los españoles se mostraban invencibles en la llanura; pero no tanto en los desfiladeros que jalonaban la ruta al Perú, sembrados de trampas mortíferas. Para mantener en jaque a los diaguitas y el camino expedito, era menester crear en las diversas etapas establecimientos fortificados y permanentes. A este fin obedeció la fundación de Londres, Córdoba del Calchaquí y Cañete, efectuada entre 1558 y 1560 por Juan Pérez de Zurita, reemplazante de Aguirre en la gobernación de Santiago: tres reductos a cargo de mínimas guardias de veinte o treinta hombres.

El nombre de Londres celebraba un acontecimiento que en esos momentos halagaba el orgullo español: el casamiento de Felipe II con la reina María Tudor de Inglaterra. Carlos V había muerto en 1556, el mismo año de la muerte de Irala. Su hijo mantenía íntegra la herencia territorial, si bien no la corona imperial, ahora en la testa de Fernando de Hungría. Seguía siendo Felipe, no obstante, el soberano más poderoso de Europa, en

grandecido todavía por su matrimonio reciente, y se hallaba a la sazón preparando la definitiva guerra santa contra la Media Luna.

Los gobernadores de Chile insistían en extender su jurisdicción hacia el Atlántico. Las tentativas se reanudarían a favor de la tregua guerrera que siguió a la muerte de Caupolicán. El virrey Cañete nombró en reemplazo de Valdivia al hijo de éste, García de Mendoza, quien trató de hacer de su corte un reflejo del fausto peruano y se instaló rodeado de un brillante séquito, en el que venía Alonso de Ercilla, futuro autor de "La Araucana". Como su antecesor, mandó fundar en los valles orientales de la cordillera. El capitán Pedro del Castillo estableció en 1561 un reducto al que bautizó con el nombre del gobernador, Mendoza. Reemplazado Cañete en el Perú por el conde de la Nieva, éste nombró gobernador de Chile a Francisco de Villagra. Castillo fue sustituido por Juan Jufré, quien fundó San Juan al año siguiente, en el territorio de los huarpes.

Mientras tanto, Gregorio Castañeda, que había sucedido a Zurita en el gobierno de Santiago, fundaba Nieva en 1562.

La guerra con los calchaquíes seguía encendida, desastrosa para los españoles. Londres, Córdoba y Cañete habían sido destruidas y el camino del norte debía abrirse a costa de continuos combates. El conde de la Nieva recurrió al hombre que en esos momentos parecía indispensable para resolver la situación: Francisco de Aguirre, que estaba retirado en su hacienda de Coquimbo, cargado de años y méritos.

Pero antes debió resolver la cuestión pendiente de las jurisdicciones.

Esta se planteaba también en Asunción. Bajo el gobierno de Francisco Ortiz de Vergara, sucesor de Irala, se había realizado la expansión hacia el noroeste y el norte, impulsadas respectivamente por Nufrio de Chaves y Ruy Díaz Melgarejo, que exploraron los Xaraves y el Guayra. Chaves fundó en 1561 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que fue en adelante una etapa obligada en el camino al Perú y constituyó desde el principio, por su situación y el prestigio de su jefe, un poderoso centro de atracción para los asunceños. Al plantearse el inevitable conflicto de jurisdicción, el virrey Cañete lo zanjó creando la provincia de Moxos y nombrando gobernador a otro hijo suyo y al fundador como teniente. Uno de los primeros pobladores de esta ciudad sería Juan de Garay.

La gestión del conde de la Nieva motivó la Real Cédula de 1564 que establecía definitivamente las jurisdicciones. Por ella se creaba la gobernación de Tucumán, separándola de Chile. "Tucumán, juríes y diaguitas", así como la provincia de Nufrio de Chaves, Moxos, dependerían inmediatamente del Virrey y de la

Audiencia de Charcas. La Jurisdicción de Chile se limitaría a Cuyo, con las ciudades de San Juan y Mendoza, quedándole vedada la extensión hacia el este.

El presunto inspirador de esta providencia, Francisco de Aguirre, se hizo cargo del gobierno de Tucumán a mediados de abril de 1565, al cabo de más de un año de luchas contra la coalición indígena de los valles, que mantenía un cerco alrededor de Santiago. Como primera medida y con el objeto de establecer el prestigio de las armas españolas, resolvió reconstruir las poblaciones destruidas por los indios y restablecer así las comunicaciones con el norte. A tal fin mandó a su sobrino Diego de Villarroel, quien el 1° de mayo fundó San Miguel de Tucumán, en el mismo sitio en que había estado el Barco de Núñez del Prado y la Cañete de Pérez de Zurita. El, por su parte, después de pacificar la región, decidió realizar su viejo proyecto de fundar una población al sur, en la tierra de los comechingones, como nueva etapa de una salida hacia el mar. No pudo lograrlo. Parte de sus tropas se amotinaron, lo prendieron y lo enviaron a Charcas, acusado de actos de arbitrariedad y de actitudes impías, enjuiciables por la Inquisición. Cuatro años tardaría en defenderse, rehabilitarse y volver a su puesto. Durante su ausencia gobernó Diego Pacheco, quien fundó la población de Talavera en 1567.

Asunción del Paraguay seguía convulsionada por las facciones. La atracción de Santa Cruz de la Sierra y de las riquezas peruanas obraba poderosamente sobre la imaginación de sus habitantes, viejos o nuevos, sobre los fundadores sobrevivientes y sobre sus hijos. En 1564 una gran parte de la población, encabezada por el gobernador Francisco Ortiz de Vergara y el obispo Latorre, había seguido a Nufrío de Chaves hasta Charcas, hartos de pobreza y deseosos de participar aunque sólo fuese de las migajas del festín potosino. Es lo que se llama el "éxodo asunceño" que terminó en un fracaso. Los peruanos se alarmaron a justo título ante esa avalancha de parientes pobres y exigentes y la Audiencia de Charcas les intimó el regreso.

Para dar fin a la anarquía asunceña, el presidente Lope de Castro —a cargo interinamente del gobierno del Perú— designó gobernador a Juan Ortiz de Zárate, con la condición de viajar a España y recabar la confirmación del soberano.

Zárate nombró su teniente, mientras durase su ausencia, a Felipe de Cáceres, quien a su vez encomendó a Juan de Garay el retorno a Asunción de los sobrevivientes del éxodo. La des-

graciada aventura habría de cerrarse también trágicamente. Nufrío de Chaves, que acompañó a los viajeros en la primera etapa del camino, fue muerto poco después de separarse de la columna en una emboscada de los indios itatines.

Los disturbios internos prosiguieron en Asunción durante los años del interinato de Cáceres, a causa de la hostilidad entre el gobernador y el obispo Latorre, que terminó con la deposición y prisión de Cáceres y su reemplazo por Martín Suárez de Toledo: es decir, con el triunfo episcopal. Esta pendencia —no la primera ni la última entre la autoridad espiritual y la temporal— corresponde asimismo a un tipo de conflicto clásico en la colonización española, al que no era ajena sin duda la influencia perdurable que habían dejado en los espíritus los choques recientes de Papa y Emperador. Los veremos reproducirse, con monótona repetición de episodios, en todas partes.

A esta altura de los tiempos había empezado a intervenir un elemento nuevo en la política de Asunción. La primera generación de los "mancebos de la tierra" había alcanzado su mayoría de edad y lo hacía sentir ruidosamente. Esta juventud era, con pocas excepciones, producto mestizo de la alianza entre los primeros conquistadores y las mujeres guaraníes. Por disposición real, se los consideraba como españoles, con los mismos derechos que sus padres y estaban llenos de bríos y orgullo. Formaban la soldadesca de los bandos en lucha y soñaban con ir a tierras nuevas para tener su tajada en el reparto. Los envejecidos compañeros de Irala y Alvar Núñez —quedaban pocos ya— veían con alarma el desarrollo de esta semilla turbulenta.

La necesidad de emplear esas energías nuevas, así como la de acercar las fundaciones al estuario para facilitar la ruta marítima —o como él decía, para "abrir las puertas a la tierra"— determinaron a Juan de Garay intentar una expedición. Con una tropa formada en su mayoría por jóvenes nativos y repartida en dos columnas que iban respectivamente embarcadas y por tierra, marchó aguas abajo hasta encontrar un lugar que le pareció adecuado para establecer una nueva ciudad. Fundó Santa Fe el 15 de noviembre de 1573.

La población hacia el sur, ganando etapas al Atlántico —al que se seguía llamando "mar del Norte"— era la solución obvia del problema de las comunicaciones asunceñas e incluso peruanas. El territorio tenía una salida natural, el Río de la Plata. Era necesario ocupar sus costas y fundar allí un puerto. Era además

urgente, porque subsistía el peligro de su ocupación por una potencia enemiga. Ya Alvar Núñez Cabeza de Vaca había señalado como un error la despoblación de Buenos Aires, si bien debió rendirse ante el argumento de la imposibilidad de subsistir con fuerzas tan escasas. Ahora las circunstancias habían cambiado, y muchos lo advertían. Los gobernantes del Perú —como el oidor Matienzo de la Audiencia de Charcas y luego el virrey Francisco de Toledo— remachaban, en su correspondencia con el monarca, sobre la necesidad de repoblar la costa del estuario. Este pensamiento inspiraba también la acción de Francisco de Aguirre. Ambas corrientes colonizadoras tendían a confluir al mismo punto. Esto era inevitable, como lo era también el conflicto de jurisdicción. Juan de Garay —crecido en Lima cerca de los altos círculos— había recibido esas influencias y las ponía en obra con el tesón típicamente vascongado que parece haber sido su condición dominante.

Aguirre no pudo realizar su propósito. Repuesto en sus funciones después del proceso sufrido, no habría de durar mucho tiempo, pues el virrey Toledo, a causa de nuevas intrigas, lo depuso al año nombrando en su lugar a don Jerónimo Luis de Cabrera, de ilustre prosapia. Viejo ya y cansado, aquél no había cejado empero en la tarea de ampliar la conquista hacia el sur. A su sucesor le tocaría utilizar sus exploraciones de las serranías cordobesas y fundar la ciudad que él había proyectado.

Cabrera fundó Córdoba (de "la Nueva Andalucía", según reza el acta) el 24 de junio de 1573. En su nota al rey comunicándole la nueva, deja constancia del buen natural de los indios de la región, comechingones y sanavironas, labriegos y dados al canto y a la danza, dueños de "molinos y otras industrias". Después de establecer allí un fuerte, se dirigió hacia el este, en busca del río. Llegado a las margenes del Paraná, a la altura de las ruinas del fuerte de Caboto, levantó un establecimiento al que llamó San Luis y señaló esa costa occidental como límite de su gobernación.

Aquí debía chocar con los derechos de Juan de Garay, que acababa de fundar sobre la misma costa la ciudad de Santa Fe. Se dice que hubieron de encontrarse en circunstancias dramáticas, en que Cabrera llegó a tiempo para salvar a aquél y a sus compañeros de una emboscada de los timbúes. Esta hermandad de armas evitó, sin duda, las consecuencias enojosas del conflicto, que quedó pendiente. Cabrera volvió a Córdoba para iniciar los repartimientos y adjudicar las encomiendas de la nueva población mediterránea.

Si frente a don Jerónimo Luis de Cabrera, portador de un mandato del virrey del Perú, pudo dudar Garay de la legitimidad

de su título, la cosa cambió radicalmente con el regreso de Juan Ortiz de Zárate, confirmado por el rey en el cargo de Adelantado y Capitán General con poderes para poblar todo el litoral. Zárate aprobó la actuación de su teniente y lo nombró gobernador de la ciudad por él fundada.

Duraría poco tiempo. Apenas el suficiente para bautizar a su extenso feudo con el apodo de "Nueva Viscaya" e iniciar algunos repartimientos. Murió en 1576, legando el gobierno, según la facultad que le confería la capitulación, a una hija suya residente en Lima fruto de su unión con una princesa incaica llamada Leonor Yupanqui y legitimada por cédula real. Para desempeñarlo interinamente hasta la llegada de su titular, designó a su sobrino Diego de Mendieta.

Fue Juan de Garay, en virtud de sus vinculaciones peruanas, el encargado de ir en busca de la heredera, cuyo título estaba condicionado a la realización de un razonable matrimonio. Partió rumbo a Charcas, por vía Santiago del Estero. En esta ciudad se enteró de la ejecución del noble Cabrera, ordenada por su reemplazante Gonzalo de Abreu, designado por el monarca.

No obstante los obstáculos de todo orden que le opuso el nuevo gobernador para la prosecución de su viaje, Garay logró vencerlos y llegar a Charcas, donde fue más testigo que actor en las intrigas que se desarrollaban alrededor de la codiciada herencia platense, a la cual aspiraban muchos pretendientes, entre ellos el primo Mendieta. El licenciado Juan Torres de Vera y Aragón resultó el afortunado ganador de la mano de la princesa morena que, amén de sus encantos personales, traía como dote pingües encomiendas y el título de Adelantado para su consorte.

En los círculos gobernantes de la ciudad nortea, Garay hubo de debatir nuevamente, sin duda, los planes referentes a las tierras nuevas y en especial el viejo y siempre reiterado proyecto de establecer un puerto en el Río de la Plata para entrada y salida del comercio. Las circunstancias le darían la oportunidad de ser él mismo el realizador. Como el nuevo Adelantado se viera obligado a viajar a España para gestionar del monarca la confirmación de su investidura (tarea que le insumiría siete años) y destruir las maquinaciones de sus rivales despechados y de quienes los apadrinaban —entre ellos, el propio virrey del Perú— designó al partir a Garay como su lugarteniente, en calidad de gobernador interino de toda la provincia asunceña.

V. BUENOS AIRES

A poco de iniciarse en su gobierno asunceño, Juan de Garay empezó los preparativos para la fundación de la nueva ciudad.

Para hacer la jornada se alistaron sesenta y seis personas, con sus armas, caballos y ganados, de los cuales diez solamente eran españoles y los demás nacidos en la tierra, salvo un portugués que había sido acompañante de Mendoza. Con ellos, una sola mujer, Ana Díaz. No pudo obtenerse un sacerdote, como lo exigía la Ordenanza de Poblaciones. Los cinco o seis que había en Asunción y el Guayra, aparte de resultar escasos para la atención de sus parroquias, estaban muy viejos para correr la aventura. Afortunadamente se unieron a la tropa dos franciscanos en viaje de regreso a España (uno de ellos, el P. Rivadeneyra, custodio de Tucumán y el Río de la Plata), cuya presencia llenaría el requisito legal en el acto de la fundación.

En Santa Fe se les agregaron algunos hombres más, casi todos criollos, encabezados por Alonso de Vera, "cara de perro", sobrino del Adelantado.

Al llegar a la llanura bonaerense los sorprendió la existencia en gran cantidad de tropillas de potros chúcaros, descendientes de los caballos y yeguas abandonados cuando la despoblación del anterior establecimiento.

La fundación se realizó el 11 de junio de 1580, de acuerdo con las solemnidades tradicionales, como si se tratara de una nueva ciudad. Lo era, en rigor, pues no había tenido tal carácter el mísero fortín de Mendoza. Se erigió el rollo de la justicia, se tiraron los consabidos mandobles a los cuatro puntos cardinales y se labró un acta en la cual, después de especificarse los títulos en que se fundaba el derecho, se daba cuenta del hecho. "Estando en este puerto de Santa María de Buenos Aires, que es en la provincia del Río de la Plata, intitulada la Nueva Vizcaya... fundo en el dicho asiento y puerto una ciudad, la cual pueblo con los soldados y gente que he traído para ello... y la dicha ciudad mando se intitule la ciudad de la Trinidad". Así reza el documento originario pasado ante el escribano Pedro de Jerez. En él se instituían también los alcaldes y regidores.

Garay permaneció cuatro meses para efectuar la delineación de la ciudad, repartir los solares y dirigir la construcción de las

habitaciones. El 30 de octubre, el Cabildo presidido por él, designó por sorteo a San Martín de Tours como santo Patrono y aprobó el escudo de armas que él había ideado.

Terminadas estas formalidades se volvió el fundador a Santa Fe, donde se enteró del motín estallado poco tiempo antes y promovido por siete "mancebos" asunceños, el cual había sido sangrientamente sofocado mediante la traición de su propio cabecilla. Este episodio —que algunos candorosos apologistas consideran como un antecedente de la gesta emancipadora— se explica sobradamente por el estado de anarquía endémica de la población paraguaya, acostumbrada de tiempo atrás a esos excesos, por el fermento comunero siempre vivo y, sobre todo, por la probada complicidad en su estallido del gobernador de Tucumán, Gonzalo de Abreu, que lo alentó para resolver así en su favor el conflicto de jurisdicción pendiente con Garay, lo que configura una operación típicamente "oficialista". El movimiento invocaba además un pretexto suficiente en el título dudoso de este último, proveniente de un Adelantado consorte que parecía de contrabando, no confirmado aún por la corona y objetado por el Virrey del Perú, la autoridad más alta en estas tierras.

* * *

Al llegar a España el P. Rivadeneyra le había dicho al rey, dándole cuenta de la fundación de Buenos Aires: "Quedan todos limando sus armas para hacer aquella gran noticia y entrada que llaman de los Césares...". El mito seguía vigente, como se ve, si bien trasladado al sur. No hay duda de que su incentivo había contribuido a determinar en gran parte la decisión de los flamantes fundadores.

La entrada se realizó, en efecto. La encabezó el propio Garay, que había vuelto a Buenos Aires en la Pascua de 1581, trayendo algunos nuevos pobladores y un clérigo. A la cabeza de treinta hombres se dirigió hacia el sur, siguiendo algunas veces la línea de la costa y otras internándose cinco o seis leguas tierra adentro. Sólo encontraron la misma llanura interminable, cubierta a veces de altos pastos que dificultaban la marcha de las cabalgaduras, otras abierta en médanos o cangrejales. De vez en cuando, un río o un arroyo que había que vadear entre el escándalo de los patos silvestres. Volvieron naturalmente defraudados, después de llegar aproximadamente a Cabo Corrientes.

Garay regresó a Santa Fe. Poco tiempo después moriría trágicamente en una emboscada de los indios itatines, a poca distancia del fuerte de Caboto.

Juan Torres de Navarrete fue el segundo teniente gobernador del Adelantado consorte, nombrado sucesor de Garay. Gobernó en Asunción tres años. El acto más importante de su gobierno fue el envío de una expedición al mando de Alonso de Vera, con el objeto de fundar una población que sirviera de lazo de unión más directo con el Perú, según vieja aspiración de la población asunceña.

Esta empresa logró reclutar un número mucho mayor de gente que la que se movilizó para Santa Fe o Buenos Aires. Si se tiene en cuenta que no había ningún género de compulsión, que el reclutamiento era libre y que los gastos corrían a cargo de los pobladores, quienes concurrían con sus armas y ganados, no hay duda de que aún se mantenía viva —no obstante el fracaso— la ilusión que motivara el éxodo de 1564. Como siempre, iban en mayoría los hijos de la tierra. Con ellos un vástago de ilustre familia y de pura sangre española llamado Hernando Arias de Saavedra, nacido en Asunción y destinado a ser pronto el primer gobernador “criollo”. Vera exploró hasta muy cerca del valle de Tarija y finalmente fundó sobre el río Bermejo, el 15 de abril de 1585, la ciudad de la Concepción del Bermejo.

Al año siguiente, Torres de Navarrete se propone realizar una expedición a la ciudad de los Césares. ¡Nadie acudió a su llamado! Un nuevo espíritu habíase impuesto y los pobladores estaban demasiado ocupados en cuidar y cultivar sus tierras.

En 1587 pudo al fin hacerse cargo de su gobierno el Adelantado Juan Torres de Vera y Aragón, después de haber obtenido trabajosamente la confirmación real.

El nombre de este funcionario ha quedado ligado sobre todo a la historia de la ganadería argentina, por haber sido uno de los principales introductores de ganado, si no el primero. Ya hablamos de los caballos de Mendoza, que a la segunda fundación de Buenos Aires se habrían multiplicado por millares. Según se desprende de una carta de Irala, habríanse traído también entonces algunos cerdos, aunque parece increíble que hayan hecho cría y no hayan sido comidos durante la gran penuria. Alvar Núñez importó caballos y asnos. Entre 1542 y 1550 entraron, con los conquistadores del norte, caballos, ovejas, cabras, cerdos y vacas. Se conoce también la introducción de vacunos por los hermanos Goes en 1555. A Vera y Aragón se le atribuye la entrada de 400 vacunos, 4.000 ovejas, 500 cabras y 5.000

yeguarizos, que serían el plantel más importante y la base de la futura riqueza pastoril y comercial del Río de la Plata.

Hizo también el Adelantado una tentativa de poblar hacia la costa del Brasil que, si bien mostraba un lúcido pensamiento político, le resultó infructuosa por la resistencia de los naturales y el escaso entusiasmo de los asunceños. La aspiración de éstos era entonces la obtención de nuevas tierras para poblar y sembrar; pero tierras fértiles, junto a los ríos y con mano de obra indígena, próxima y dócil. Ello motivó, en abril de 1588, la fundación de Vera de las Siete Corrientes.

El principal poblador de esta nueva ciudad y que le aportó gran cantidad de hombres y ganados fue nuevamente Hernando Arias de Saavedra, establecido en el Bermejo, según vimos, y cuyo prestigio entre sus compatriotas era ya muy grande.

Dicho prestigio le daría el gobierno cuatro años más tarde. El Adelantado debió viajar a España para defenderse de nuevas intrigas ante la corte y dejó en su lugar a su sobrino Alonso, “cara de perro”. Este fue depuesto por los vecinos de Asunción, en virtud de una provisión de la Audiencia de Charcas que prohibía instalar parientes en el gobierno de las ciudades. El Cabildo que lo depuso eligió en su lugar a Hernando Arias de Saavedra, o Hernandarias.

Durante estos años, la gobernación del Tucumán pasaba por graves vicisitudes.

Gonzalo de Abreu se mostró tiránico y mediocre, incapaz de dominar la rebelión permanente de los diaguitas. De entrada mandó ejecutar a su ilustre antecesor don Jerónimo Luis de Cabrera, acusándolo entre otras cosas de no haber cumplido la estipulación que le ordenaba fundar una ciudad en los valles calchaquies para asegurar las comunicaciones con el norte. Tampoco él pudo hacerlo y ello le costaría también la vida. Las tres fundaciones que intentó con el nombre de San Clemente fueron efímeras: los indios las destruyeron casi en seguida, dando muerte a sus pobladores. Como saldo positivo de su gobierno, sólo cabe mencionar el hallazgo, durante una frustrada expedición a los Césares, de un camino directo entre Córdoba y Mendoza, tramo que faltaba para unir los dos océanos sin desviarse hasta Santiago.

Lo reemplazó el licenciado Hernando de Lerma, nombrado también por Real Cédula. Este dio a Abreu el mismo trato que Abreu diera a Cabrera y por el mismo motivo: no llegó a ejecutarlo empero porque los sufrimientos a que se lo sometió le apre-

suraron la muerte en la prisión, lo que no resulta demasiado lamentable si pensamos en la índole del sujeto. La opinión general de la época lo consideró bien merecido.

Lerma fue peor si cabe que su antecesor y víctima. Cometió abusos y atropellos desconocidos hasta entonces en la provincia, con lo cual se enajenó la voluntad de los pobladores. Dada esta impopularidad, le resultó difícil reclutar el contingente de noventa y cinco hombres con quienes se puso en marcha hacia el valle de Salta a principios de 1582. A la ciudad que allí fundó en abril de ese año —cumplimiento tardío del pensamiento estratégico de Francisco de Aguirre y el virrey Toledo— le impuso el nombre de Lerma.

Esta designación sería tan efímera como el gobernante mismo que, destituido, fue a dar con sus huesos en la cárcel. Desde 1588, por decisión del nuevo gobierno y el Cabildo, la nueva ciudad se llamó San Felipe de Salta.

La permanente zozobra en que vivió el Tucumán durante los gobiernos de Abreu y de Lerma habría de remediarse con el nombramiento de un gran gobernador, Juan Ramírez de Velasco, de ilustre prosapia, quien gobernaría siete años a partir de 1586.

Velasco fue quien aseguró la supervivencia política y social de Salta, que de otro modo habría corrido la suerte de sus antecesores en la región. Siguiendo la política de Aguirre, pacificó las tribus, introdujo nuevos pobladores y ganados, formó estancias y fundó poblaciones que fueron otros tantos puntos de apoyo para las ya existentes: La Rioja, Madrid y Jujuy, desde 1591 a 1593. Con esto y una acción persuasiva y enérgica a la vez que impuso respeto a los naturales, la posesión pacífica de la provincia (no obstante eventuales rebeliones) y el camino expedito al Perú, quedaron ganados definitivamente.

A ello contribuía en gran escala la predicación espiritual. Al frente de un puñado de religiosos de su orden, bajó por ese tiempo del Perú san Francisco Solano, quien estableció las primeras misiones en los pueblos indígenas y dejaría una influencia perdurable por sus palabras y sus milagros. Poco tiempo después llegaron a Santiago del Estero —que congregaba ya alrededor de quinientas familias— unos cuantos padres de la Compañía de Jesús para establecerse con carácter definitivo. La evangelización de los aborígenes, hasta entonces descuidada por la escasez de sacerdotes, tomaría desde ese momento un gran impulso.

Los dos grandes núcleos fundadores del Paraguay y el Tucumán, con sus poblaciones en plena evolución y comunicaciones relativamente fáciles, tendían a constituir una unidad económica con salida al mar por el puerto de Buenos Aires. Era el esbozo de la futura unidad política. No se le escapó esta circunstancia a

Juan Ramírez de Velasco. En sus comunicaciones al Rey, en efecto, aludiendo a ella, sugirió antes que nadie la conveniencia de establecer un gobierno único para todo el territorio, independiente del Virreinato del Perú, lo cual lo erige en precursor de nuestro Virreinato y en profeta de la Argentina actual.

De la calidad de este varón da testimonio una carta de la Audiencia de Charcas del 10 de febrero de 1595, certificando los resultados de su juicio de residencia, en la que se afirma que “por el buen proceder que tuvo está con pobreza notoria” y se lo recomienda a la consideración de S.M. En recompensa a sus servicios en Tucumán, el Rey lo nombró gobernador del Río de la Plata. No pudo desgraciadamente ejercer mucho tiempo esta función, pues lo sorprendió la muerte en 1597. Poco antes había designado como su lugarteniente a Hernandarias de Saavedra, en un acto con mucho de simbólico. El agente del Rey conocía los méritos del caudillo del pueblo. Con la conjunción de estos dos hombres eminentes termina un período de la historia de estas tierras.

A partir de este momento, acaba la cruda conquista y comienza la colonización.

No quiere esto decir, por supuesto, que se haya pacificado el territorio, ni que se dé fin a los descubrimientos de manera total; ni tampoco que la tarea colonizadora, en el sentido de poblar y producir, se inicie en este instante preciso. Ambas cosas han sido y son, por su índole, simultáneas. Pero el énfasis se traslada de una actividad a la otra. La esperanza de igualar las empresas de Cortés y Pizarro, la búsqueda anhelante de la ciudad de los Césares, la alucinación de los metales preciosos que ofuscaban la mente de los primeros pobladores habíanse atenuado, sustituidas por nuevos estados de espíritu más adecuados a la realidad.

No habían desaparecido del todo. Como Garay y como Abreu, el propio Hernandarias rendiría tributo a la vieja quimera, ¡tan persistente es la vigencia de los mitos! Pero ya se había dado el caso de que un Torres de Navarrete levantara pendón de alistamiento para la clásica aventura, sin encontrar a nadie que le respondiese. Siendo libre el reclutamiento, no había posibilidad de empresa que no fuese popular. Cada vez eran más los incrédulos. Cada vez se extendía más la convicción de que la tierra era pobre en metales y que sólo rendiría frutos por el trabajo. Ni siquiera los eventuales descubrimientos de filones hechos por Ruiz Melgarejo en el Guayra y por Ramírez de Velasco en el Famatina

lograron contrarrestar el nuevo espíritu que se iba generalizando lenta pero imperiosamente.

"Estas son tierras pobres" es la expresión que se lee cada vez con mayor frecuencia en la correspondencia de los pobladores y funcionarios. No había metales, sin duda. Pero eran tierras fértiles, en las que se daba con holgura la mies y se multiplicaban los ganados. Sobraba además para todos; y pululaba la población indígena para las duras faenas de la labranza. El frustrado aspirante a propietario de minas se convierte, por imperio de las circunstancias, en titular de encomiendas y en ganadero y agricultor por mano ajena. Así se forma la clase gobernante, con el arma apercebida para hacer frente a la siempre latente rebelión.

Esta evolución corresponde a un cambio de las circunstancias sociales. Los compañeros de Mendoza e Irala —o sea la primera generación conquistadora— habían muerto ya y muy poco se había acrecentado la población blanca con los nuevos aportes, ya que la mala fama del Río de la Plata estimulaba poco la ambición y la codicia. En las diversas ciudades de ambas provincias, el núcleo español era ínfimo: muchas veces menos de un centenar, viviendo en rancherías rodeadas de empalizadas. ¡Qué diferencia con las ciudades ricas, como la villa imperial de Potosí, cuyas minas, descubiertas en 1545, habían atraído en pocos años a una población numerosa y brillante, que se contaba por millares y la hacía competir con cualquier ciudad peninsular! En las poblaciones fundadas bajo la influencia de Asunción predominaban los "mancebos de la tierra". Hidalgos también y encomenderos, con los mismos privilegios de sus padres pero con otro sentido de la vida, darían su tono a todo el siglo siguiente.

Los problemas que urgían eran la evangelización de los aborígenes, apenas iniciada; la organización política, religiosa y económica del territorio; la consolidación de la conquista contra las amenazas de las tribus indóciles, periódicamente alzadas, y contra los enemigos externos.

El siglo XVI se cierra con estas perspectivas. Y también con una catástrofe para España. Felipe II, continuador de la política de su padre en el sentido de defender la unidad católica de la doble amenaza del turco infiel y la herejía protestante, ha proseguido sus guerras continentales con éxito desigual e ingentes gastos que le insumen la mayor parte de los tributos americanos. Asegurada la unidad interna por la acción de la Inquisición y la Compañía de Jesús, debe enfrentar la coalición europea y muere

en 1598, después de firmar con Enrique IV la paz de Vervins, y en guerra con Inglaterra. Felipe III lo sucede en el trono, rey holgazán, librado a favoritos sin escrúpulos. Y dos años después, ingleses y holandeses aliados derrotan a los españoles en Nieuport. Frente al crecimiento del poderío de sus enemigos, España pierde el dominio de los mares. Los barcos herejes recorren triunfalmente los océanos y no sólo amenazan la seguridad de las flotas que van y vienen de las Indias, sino que comienzan a hostilizar también las costas y los puertos. Durante muchos años, la débil población primitiva de Buenos Aires estaría al acecho de la aparición en el horizonte de velas corsarias.

VI. HERNANDARIAS DE SAAVEDRA

Los años del descubrimiento y conquista del territorio argentino abarcan el período total del apogeo de la grandeza española, bajo los reinados de Carlos V y Felipe II. El ciclo de las grandes fundaciones se cierra con el advenimiento al trono de Felipe III, que inicia la decadencia.

El cambio repercutirá en el Nuevo Mundo con la disminución del espíritu de empresa y de expansión territorial, debido en parte a la ruina económica de la metrópoli, pero acaso obligado también por las circunstancias internas: la necesidad de hacer un alto para organizar era a la sazón la voz de orden, según surge de la correspondencia oficial y de disposiciones precisas del monarca. Comienza una época de relativa quietud en que el fragor de las armas se sofoca bajo el papeleo administrativo. Toneladas de ordenanzas y providencias reales y de comunicaciones de virreyes y funcionarios, con dudosas consecuencias sobre una realidad demasiado cruda, atraviesan los mares en las naves de Su Majestad y se acumulan en los rincones de los despachos para fruición de lauchas y polillas.

En los tres cuartos de siglo que corren desde la llegada de Caboto hasta el gobierno de Hernandarias, la colonización española se ha extendido a través del territorio dentro de una faja que cruza desde la altiplanicie boliviana hasta el litoral bonaerense y a lo largo de los grandes ríos. Esta configuración ha de durar con pocas variantes, hasta mucho después de la Independencia. Al sur una frontera móvil, que hubo de ser más tarde asegurada con el establecimiento de fortines —germen de futuras poblaciones— era el límite con la indiada. Del Carcarañá hacia el norte la selva chaqueña, también inexplorada y hostil. Si bien temporariamente sometidas, las tribus indígenas del noroeste —diaguitas y calchaquies, a quienes se sumarían luego los mocovíes chaqueños y sus aliados— solían sublevarse contra el régimen de los repartimientos forzosos y el trabajo obligatorio, provocando sangrientas guerras. En cada una de las nuevas poblaciones, sólo un puñado de blancos se mantenía en constante acción para imponerles el acatamiento a la civilización.

Mientras tanto, se iban perfilando en ese embrión los rasgos del futuro. Fruto directo del espíritu y la sangre españoles,

la población de este rincón del mundo iría tomando una fisonomía peculiar por influjo del medio ambiente selvático y virgen.

* * *

El espíritu vigente en la Asunción —donde había llegado a predominar el elemento mestizo— se comunicó naturalmente a las poblaciones de las que ella era metrópoli. Los españoles habían traído su cultura —religión, idioma, caballo y arcabuz— en las diversas modalidades de sus procedencias locales, con predominio aquí castellano y cantábrico; pero su rigorismo originario habíase como atenuado o endulzado en su unión con mujeres guaraníes, bajo los trópicos. Los hijos eran ya distintos de sus padres, en sus reacciones y hasta en su expresión. Ello habría de manifestarse, según vimos, en los conflictos asunceños. El hecho es que se fue iniciando en consecuencia una nueva cultura hispano-guaraní que se extendía en el sentido de las fundaciones: cultura bilingüe (como hasta hoy), que en un principio fue común a Asunción, Santa Fe y Buenos Aires, aunque en estas últimas hubo de ser sofocada después por el aluvión inmigratorio. Sobre este fondo habría de imprimirse luego la influencia civilizadora y organizadora de las misiones jesuíticas.

Si en el litoral prevaleció al comienzo el acento guaraní y su espíritu soñador e indolente, aunque bravo hasta la temeridad frente a la agresión, las poblaciones del Tucumán tuvieron otro carácter. Fundadas por conquistadores venidos del Perú, fogueados en la conquista violenta y en la guerra civil endémica y obligados a someter, luchando con las dificultades del terreno, a tribus aguerridas y feroces, adquirieron un tono más duro. Las ejecuciones de don Jerónimo Luis de Cabrera y de Gonzalo de Abreu, así como los actos arbitrarios y tiránicos de éste y su sucesor, tienen el estilo sangriento de las discordias peruanas. Los comienzos de Santiago del Estero fueron particularmente penosos y la irradiación de su influencia padeció de la precariedad y las dificultades del origen.

La ineludible mestización con las mujeres indígenas careció asimismo de las características que había asumido en el litoral: tuvo un tono de violencia y rapiña, no fruto de alianza amistosa, sino de la dominación por la fuerza. De aquí que los problemas inherentes a las relaciones entre conquistadores y conquistados fueran más graves que en el Paraguay y hubieran de exigir una mayor preocupación por parte de los gobernantes. Ya el virrey Toledo pensaba en la conveniencia de no permitir a los mestizos el uso de armas, temiendo que "la mitad de su naturaleza" obe-

diente a la madre prevaleciera en ellos, no obstante las disposiciones que les conferían el mismo estado y privilegios que sus padres españoles; y de hecho hubieron de necesitar un permiso especial. Ello no quita que a menudo —como suele ocurrir por el prurito de diferenciación— los mestizos fuesen más duros con los indios que los propios blancos. Son numerosas, a partir de las ordenanzas de Alfaro y Hernandarias, las disposiciones tendientes a proteger al aborigen contra la opresión de los encomenderos y a regularizar las uniones de éstos con las mujeres de la tierra, suprimiendo la generalizada poligamia.

Con todo, poco a poco, merced a la prédica de los misioneros y a la atinada política real, fueron ordenándose las costumbres sociales. La cultura del noroeste, cuyo límite austral era Córdoba, empezó a tomar el carácter que habría de prevalecer. Lo integraría un fondo de autonomismo montañés, contagiado del calchaquí y atenuado por la inflexión castellano-andaluza de los dominadores. El centro de irradiación se desplazaría pronto de Santiago del Estero a la ciudad serrana, por la atracción irresistible del puerto. Pero Córdoba, peruana y aristocrática, fuerte en el orgullo de albergar al núcleo más brillante por su origen y la antigüedad de sus linajes sin mezcla, mantendría siempre una actitud reticente, no obstante esa atracción, frente al Buenos Aires plebeyo y comercial, configurándose así los dos polos sobre cuyo eje gira gran parte de nuestra historia.

Esa cultura, con raíces en el norte originario y que tendría muy pronto laboratorio adecuado en la Universidad cordobesa —la primera del territorio, fundada en 1613— era la que se expresaba en el lenguaje del Romancero y de fray Alonso de Guevara y la que nutrida del más fino espíritu del Renacimiento, había resplandecido en los escritos de Juan y Alfonso de Valdés, mentores de Carlos V. No parece dudoso que estas influencias en las que se inspiró el Emperador durante sus luchas continentales por la unidad religiosa, que lo obligaron a enfrentar más de una vez a la misma Sede romana (y hoy parece indudable que la *gesta Dei* la encarnaba el Emperador más que el Pontífice, demasiado aferrado a sus intereses temporales); haya determinado las actitudes de los gobernantes locales frente a los obispos. Anticlericalismo erasmiano, no incompatible con la ortodoxia sino inherente a ella y cuya justificación por la aceptación de sus premisas está implicada en la Contrarreforma.

Flor de esa cultura, los cantos y los mitos. Los conquistadores traían con ellos su tesoro de romances viejos y villancicos de Navidad, que cantarían sin duda por las noches junto al fogón de los campamentos, recordando sus montes cantábricos o sus campiñas andaluzas y gallegas o su meseta castellana, entre la rueda

de azorados indígenas. Cuentos aprendidos de la abuela llenarían de pavor o maravilla a aquellas almas candorosas, agazapadas tras los duros músculos y las barbas hirsutas. Todo esto dejaría semilla y resurgiría al cabo transformado en una nueva sabiduría elemental, en que los ejemplos del infante don Juan Manuel se reencarnarían bajo la sombra misteriosa de Pachamama. El *cante jondo* resucitaría en vidala, los romances se cantarían al compás del tamboril indígena, el moro Abenámbar renacería en forma de caudillo calchaquí, la guitarra importada resultaría el instrumento de los payadores. Un siglo más y la fusión será ya completa. En tres generaciones el tipo criollo se fijará definitivamente.

* * *

El escaso centenar de vecinos con que contaba Buenos Aires al terminar el siglo apenas si pudo subsistir merced al comercio con las colonias portuguesas de las costas del Brasil. Portugal estaba entonces incorporado a la corona de España. Esta circunstancia, que habrá de durar sesenta años, convirtió en colaboración amistosa la vieja rivalidad y ayudó mucho a atenuar la penuria de la iniciación, especialmente en materia de bastimentos.

Con la subsistencia, la otra preocupación de los pobladores fue la defensa. Sobre el mezquino y desamparado caserío pendía la doble amenaza de los ataques de los indios y las incursiones de los piratas. Ya los primeros, envalentonados, habían intentado una excursión de saqueo poco después de matar a Garay. Las tribus que no querían aceptar el régimen de encomiendas se habían retirado al desierto o se habían refugiado en los montes del Delta, desde donde acechaban una ocasión propicia para atacar la ciudad. Era necesario permanecer en estado de alerta y realizar eventuales y sorpresivas salidas para alejarlas y escarmentarlas.

En cuanto a los piratas, sus incursiones fueron escasas. En 1581 llegó al estuario el corsario inglés Fenton. Una de sus naves, al mando de John Drake, sobrino del famoso Francis, apresó el barco en que volvía a España el P. Rivadeneyra. Pudo ser tomado y llevado a la cárcel de Santa Fe; pero el hecho produjo gran alarma. Se advirtió la necesidad de constituir un fuerte que defendiese a la ciudad contra cualquier riesgo de ese orden.

Sobrevino un período de calma y la construcción se postergó. En 1590 se organizó una milicia que hacía instrucción militar los domingos y días de fiesta, dividida en dos compañías —jinetes e infantes— con armamento completo: celada, adarga, peto, espaldar, espada y arcabuz. En cuanto al fuerte, su construcción sólo comenzó en 1594, al recibirse del gobierno Hernando de Zá-

rate y a raíz de haber llegado noticias de que cuatro navíos ingleses, tripulados con quinientos hombres, venían con intención de apoderarse de la ciudad. La construcción se levantó en forma que dominase la boca del Riachuelo. Los navíos no se presentaron. Felizmente, ya que la defensa debía ser bastante ilusoria. Cinco años más tarde, el gobernador Valdés y de la Banda se la describía al Rey como un cuadrado "de tierra, con los terraplenes hundidos", armado de tres cañones viejos que carecían de pólvora y munición. La guarnición consistía en cincuenta hombres "a caballo" (sic), pertrechados "con escopetas de tres palmos que sólo sirven para indios".

Era evidente que la tripulación de cualquier barco pirata sobrepasaría entonces, en número y armamento, a la defensa de la ciudad. La verdadera protección de Buenos Aires se hallaba, más que en su Fuerte, en los bancos de arena del río, que hacían peligrosa la navegación. O en casos de real amenaza, en la retirada de la población tierra adentro, según ya había ocurrido en 1587, ante el amago del corsario Thomas Cavendish.

El estado estacionario de la población continuó por muchos años, sin más incidentes que los que aparecen consignados en las actas del Cabildo, minúsculos episodios de una sociedad incipiente: el primer médico, el primer maestro de escuela, el primer barbero... La parálisis en el crecimiento originábase en la Real Cédula de 1594, que prohibía la entrada de mercaderías y de personas por el Río de la Plata. A partir de 1602 aumentó algo la población, bajo el gobierno de Hernandarias, pudiendo organizarse dos años después hasta cien hombres armados. Fue también Hernandarias quien reedificó totalmente el Fuerte.

* * *

El caso del primer gobernador "criollo" Hernando Arias de Saavedra demuestra palmariamente que la circunstancia del nacimiento en el Nuevo Mundo no significaba entonces (ni significó después) impedimento alguno para el desempeño de los más altos cargos gubernativos.

Hijo de Martín Suárez de Toledo y de doña María de Sanabria, nació en 1564. Antes de cumplir los treinta años había participado con todo su haber en las empresas colectivas que se ofrecían al vecindario, siendo de los primeros pobladores de Concepción del Bermejo y de Corrientes, donde afirmó su prestigio y acrecentó su fortuna. Llegó naturalmente al mando por su condición social —era el primer ciudadano de Asunción— y por sus condiciones indiscutibles para ejercerlo.

Entre los años 1592 y 1618 gobernó cuatro veces. Lo cual significa que, con breves interrupciones, su influencia se extiende a lo largo de un cuarto de siglo.

Durante sus primeros gobiernos, en los que actuó por delegación de Hernando de Zárate y de Juan Ramírez de Velasco, dedicóse a la defensa de Buenos Aires, al castigo de los indios de sus inmediaciones y a la reconstrucción del Fuerte. Se ocupó asimismo de reedificar los templos de Asunción, restaurando en ellos la dignidad del culto, y de moralizar la ciudad, a la que limpió de "vagabundos y gente viciosa".

Cuando falleció Ramírez de Velasco en 1597, el marqués de Cañete, virrey del Perú, nombró gobernador a Hernandarias, quien ya había sido proclamado para el cargo por el Cabildo asunceño. Este nombramiento sería luego confirmado por el monarca. El vecindario de su ciudad natal festejó con alborozo la designación y lo recibió con gran pompa al año siguiente, junto con su hermano Hernando de Trejo y Sanabria —hijo de un matrimonio anterior de doña María— que acababa de ser nombrado obispo de Tucumán.

Salvo un interregno de cinco años —de 1609 a 1614— en que gobernaron Diego María Negrón y don Francisco Beaumont y Navarra, Hernandarias conservaría el mando hasta 1618.

Una de las primeras preocupaciones fue la solución de las cuestiones pendientes entre los prelados y los gobernadores, perpetuamente enzarzados en conflictos de jurisdicción por la espionosa discriminación de lo espiritual y lo temporal en un régimen de patronato. A tal efecto convocó un sínodo que se realizó en 1603 y al que concurrieron procuradores de las ciudades y representantes de los obispos. Por cierto que no se resolvió la cuestión de fondo, que no habría de resolverse nunca; pero se dictaron diversas disposiciones que se cumplieron en lo posible y tuvieron saludables consecuencias. Una de ellas fue la que ordenaba enseñar el catecismo y la doctrina a los indios en lengua guaraní e imponía a los curas de indios la obligación de saber dicha lengua a fin de administrar los santos sacramentos. Otra, la recopilación de una serie de ordenanzas, inspiradas en las que dictara Velasco durante su gobernación tucumana y tendientes a proteger a los naturales, procurando el bienestar de sus personas y la salvación de sus almas. Disponían, entre otras cosas, que se respetara la dignidad de los caciques, no sometiendo al trabajo servil, y establecían diversas medidas con el objeto de promover los matrimonios legítimos e impedir la corrupción de las doncellas indígenas. Estas ordenanzas se pregonaron el 29 de noviembre de ese año en la plaza pública de Asunción y en los dos idiomas de la ciudad.

Con el mismo propósito de protección y dignificación de los aborígenes, ayudó Hernandarias al establecimiento de los jesuitas en la provincia. Se dice que, con tres de sus hijas y para dar el ejemplo, acarreó personalmente la tierra para construir la iglesia de la Compañía en Santa Fe. Procuró la instalación de misiones de esta orden en el Guayra y en las márgenes del Uruguay y el Paraguay. Se sabe asimismo que hizo levantar a su costa las principales iglesias de Asunción y Buenos Aires y otras tantas en Corrientes, Santa Fe y Concepción del Bermejo.

Se preocupó de conocer la tierra: fue uno de los más intrépidos viajeros de un extremo a otro de la región que hoy forman el Paraguay y la Argentina. Es de mencionar a este respecto la expedición que realizó a "los Césares". El alucinante prestigio de esta expresión no había desaparecido del todo; pero ya en tiempos de Hernandarias era el nombre con que se conocía a toda la región austral, a ese indiscriminado sur que los indígenas llamaban Trapalanda. Consiguió reunir para la empresa ciento treinta españoles y setecientos indios amigos. Con seiscientos caballos y seis carretas de bueyes iniciaron la marcha en noviembre de 1604. Se ignora hasta dónde llegó, pero lo cierto es que halló poblaciones de indios "grandes de cuerpo, pobres, cubiertos con pellejo", que serían probablemente patagones. El hecho de haber regresado a los tres meses, indica que no alcanzaría mucho más allá del Neuquén. De esta expedición volvió el gobernador con una aureola legendaria: se contaba, entre otras cosas, un combate singular que habría tenido con un gran cacique, a quien venció a la manera caballeresca, logrando de este modo la inmunidad para los suyos.

Dos años más tarde realizó una nueva excursión, que duró seis meses, a la banda oriental del río, donde debía combatir a menudo y encarnizadamente con los charrúas.

* * *

Hernandarias fue el primer gobernador del Río de la Plata que advirtió la importancia que tendría Buenos Aires, de la que hizo residencia preferida. Cuando reconstruyó el Fuerte, ordenó preparar habitaciones para alojarse en él. Aunque estricto cumplidor de las cédulas reales referentes al comercio, comprendió la necesidad de atenuar sus consecuencias y solicitó y obtuvo "permisiones" para intercambiar determinados artículos con el Brasil, lo que trajo cierta prosperidad y un aumento de actividades y población. Pero reprimió enérgicamente el contrabando.

Las medidas restrictivas dictadas por la Corona y motivadas en una política previsora eran contrarias a los intereses comerciales de nuestro puerto: desdichada incompatibilidad, que tendría influencia decisiva en nuestro desarrollo. El interés de la población de Buenos Aires, consistente en el intercambio ilimitado, se oponía a la política proteccionista de España, que no podía permitir ni el desalojo de sus propias exportaciones por las de sus colonias en el mercado mundial, ni la suplantación de sus mercaderías por las extranjeras en las colonias, con mengua de sus industrias domésticas. A favor de la distancia y violando las disposiciones reales, Buenos Aires —puerto codiciado ya por sus corambres y grasas— encontró una solución en el contrabando.

Ya veremos las consecuencias de esta corruptela consentida, que cubre largos años de nuestra historia y cómo —cuando llegaba un gobernador deshonesto y aficionado a los negocios— prosperaban el comercio del puerto y el gobernador. Tal fue el caso del interregno de Diego Martínez Negrón, entre los años 1610 y 1614. El restablecimiento de Hernandarias en el mando suprimió el abuso, pero también mitigó la prosperidad, que resurgiría nuevamente con la llegada de don Diego de Góngora, su sucesor en esta ciudad y provincia y contrabandista él mismo.

Hernandarias fue el último gobernador de la provincia paraguaya, que comprendía el territorio conjunto del Paraguay y el Río de la Plata, con su capital en Asunción. Bajo su gobierno y por gestiones suyas se dictaría la Cédula Real que dividió al extenso territorio en dos gobernaciones: la del Río de la Plata, con las ciudades y distritos de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo (y cuyo primer gobernador fue el citado Góngora) y la del Guayra, con Asunción, el Guayra y Villa Rica del Espíritu Santo. En 1620 se dividirían también los obispados, coincidiendo sus límites con las gobernaciones.

VII. ENCOMIENDAS Y MISIONES

A Ramírez de Velasco lo sucedió en el gobierno de Tucumán Hernando de Zárate, hasta la llegada del nuevo gobernador Pedro de Mercado y Peñaloza, quien gobernaría un período completo.

La provincia comprendía, al terminar el siglo XVI, un vastísimo territorio (700.000 km², aproximadamente), dentro del cual la distribución de las ciudades había sido determinada por dos factores principales: la necesidad de asegurar las comunicaciones con el Perú y sus autoridades —el Virrey y la Audiencia— y la existencia de poblaciones indígenas sometidas para el trabajo de las encomiendas.

Esas ciudades eran a la sazón: Santiago del Estero, Madrid de las Juntas, Talavera o Esteco, Jujuy, La Rioja, San Miguel de Tucumán y Córdoba, cada una con su correspondiente jurisdicción de campaña. Repartidos entre estas ciudades y sus jurisdicciones, apenas setecientos hombres españoles, la mitad de los cuales solamente eran vecinos encomenderos o feudatarios. Esta desproporción entre la extensión del territorio y la población blanca —que con mujeres y niños alcanzaría a dos millares— indica que las llamadas enfáticamente *ciudades* (todas con sus cabildos, sus regidores y sus prerrogativas municipales) eran míseros villorrios de unas cuantas docenas de chozas, en las que apenas si empezaba a levantarse una edificación decente, ya que casi todas sus iglesias se terminaron avanzado el siglo XVII y eran lo primero que se construía. Alrededor, las poblaciones de los indios encomendados, las parcelas cultivadas y las tierras de pastoreo.

En contraste con el número exiguo de los españoles, los indios sometidos y repartidos en encomiendas llegaban en ese momento al número de 24.000. Si se tiene en cuenta el carácter belicoso de aquellas tribus, la simple mención de las cifras magníficas la hazaña conquistadora.

El considerable contingente de indios encomendados en el Tucumán desentona con la escasez que en la misma época se observa en las ciudades del Río de la Plata. Según el censo realizado pocos años después por el gobernador Góngora, la población de origen peninsular alcanzaba a 2.730 habitantes, entre los vecinos (la cuarta parte de esa cifra) y sus familias. Los indios sometidos

y repartidos entre las reducciones y el servicio de las ciudades no pasaban de 4.899.

Esa diferencia determina las diversas circunstancias sociales.

El Río de la Plata se hace ganadero y comercial. Los españoles y sus descendientes deben ocuparse por sí mismos de la subsistencia y se convierten en labradores y mercachifles. El problema del indio no los inquieta demasiado al comenzar el siglo XVII pues las tribus no sometidas, escasas en número, se mantienen alejadas de las ciudades y sus correrías son cada vez menos frecuentes por la dureza de las represiones. La escasez de mano de obra indígena se suple, sobre todo después de las ordenanzas de Hernandarias, con la introducción de negros esclavos, en el número escaso que lo consiente la pobreza general de la población. La industria, limitada al artesanado, se adecua penosamente a las necesidades locales.

La única riqueza exportable de la región la constituyen los cueros y grasas del abundante ganado alzado que recorre los campos vecinos. En su mayor parte no tienen dueño. Es ganado "realengo", o sea perteneciente a la corona y cuya explotación requiere un permiso municipal, el de "vaquería". Los titulares de estos permisos contratan partidas para perseguir el ganado salvaje y apoderarse de sus cueros (que se exportarán de contrabando), después de juntar las reses en enormes rodeos. Trabajo que era indispensable realizar a caballo y para el cual se halló utilísimo desde el comienzo el empleo de la boleadora pampa, del lazo y, naturalmente, del cuchillo. En este trabajo se va definiendo el tipo del *gaucho*.

El oficio de vaquero atrajo desde el comienzo a los hijos de la tierra por el doble encanto de ser arriesgado y eventual, con lo cual satisfacía la atracción por la vida azarosa y la vida ociosa heredada de los padres conquistadores. Terminada cada campaña, debía pasar un tiempo hasta que surgiese un nuevo contrato. Y mientras tanto, ¿qué hacer sino gastar alegremente los dobletes ganados, conversar de cosas propias o ajenas, tomar mate, apoderarse de una guitarra para intentar un rasgueo y cantar alguna copla aprendida u otra que venía sola a la zaga? Críticos pesimistas han atribuido a esa pereza gaucha el origen de muchos males argentinos que no vienen de allí. Pero sin ella no se habría conservado un tesoro de sabiduría sentenciosa, expresada en coplas y refranes, que nutre toda una literatura y que sólo ocurre en pueblos que *conversan*; ni la tradición de libertad y señorío que es galardón del ocio. No lo comprendía así el rígido Hernandarias, quien según parece quiso obligar a esos mozos sin oficio a labrar las chacras. Su propósito era combatir la ociosidad. Para evitar que hombres y mujeres se pasasen el día tomando mate, hizo

quemar públicamente, en 1617, una partida de yerba, sosteniendo que su consumo hacía de aquéllos seres "viciosos, haraganes y abominables".

En el Tucumán la sociedad toma un aspecto feudal e industrial. No falta, por cierto, el ganado. Pero la principal riqueza es el trabajo de los indios repartidos en encomiendas bajo la dirección de sus señores, cuya principal tarea consiste en mantenerse en pie de guerra para prevenir la rebelión latente. Los indios labran las tierras, siembran y cosechan maíz y trigo en todas partes y algodón en las proximidades de San Miguel. De ellos aprendieron los blancos el uso de las hierbas tintóreas que se aprovecharían para los tejidos. Su trabajo provee, además, a otras muchas industrias, mayores y menores, que alimentarían el comercio del noroeste. Los bosques de la zona proporcionan madera dura y abundante, que se empleará en la construcción de edificios, muebles y sobre todo carretas: en carretas tucumanas se realizó todo el tráfico entre las ciudades en la época colonial. Junto con las tropas de vacas y mulas que se llevan a vender a Chile y al Perú, van grandes cantidades de lienzo y también artículos diversos como alpargatas, calcetas, cubrecamas, pabito para velas, sombreros, cordobanes, badanas, etc. Con el producto de estas exportaciones se adquieren las mercancías provenientes de ultramar que necesitan los hogares españoles, principalmente vestidos, armas y objetos de labranza y ornato.

La servidumbre de los indios tendía naturalmente a degenerar en opresión. No obstante las exhortaciones de los capataces y la prédica de los misioneros, el indio hacía una resistencia pasiva al trabajo obligatorio y su rendimiento por cabeza era ínfimo. El problema no aparecía tan grave cuando había muchos. Pero el ineludible progreso fue cambiando los términos de la proporción de tal modo que, a la vez que aumentaba el número y las necesidades de los españoles, disminuía la cantidad de indios encomendados, parte por inadaptación al régimen y la consiguiente mortandad, parte por desertión y vuelta de muchos a la vida salvaje. La necesidad de aumentar el rendimiento hizo que las condiciones del trabajo indígena se volviesen cada vez más duras. Además de los tributos señalados por ley, se les exigió servicios personales no autorizados. Las disposiciones reales en defensa de la población indígena no se cumplían, o se cumplían de manera muy deficiente.

Tal fue la situación que encontró en 1611 el visitador Alfaro, enviado por la Audiencia de Charcas. Este funcionario "se espantó" —según expresan sus informes— de esa situación, y dictó las famosas ordenanzas que llevan su nombre y que fueron inmediatamente aprobadas. En ellas suprime el "servicio personal" obligatorio y gratuito de los aborígenes e incluye otras disposiciones destinadas a defenderlos en el orden espiritual y material. Como suele ocurrir, la intención de acabar con un abuso tuvo el resultado imprevisto de hacer imposible el uso. Los indios liberados, ya por desidia natural, ya por vengarse de los encomenderos, no quisieron servirlos al fin ni por salario, y alzaron el vuelo. Con lo cual la aplicación de las ordenanzas resultaba ruinosa y por consiguiente imposible.

Puestos los encomenderos en la alternativa de violarla o morir de hambre por la pérdida de sus sementeras, optaron por lo primero, como era natural y legítimo. A los diez años de su promulgación, la servidumbre indígena —según los relatos de los cronistas y el testimonio de los documentos oficiales— era mucho más dura que antes. En 1618 sólo quedaban en el Tucumán unos 7.000 indios tributarios: la tercera parte de los que existían al comenzar el siglo. La situación económica de la provincia había decaído por lo tanto notablemente. La atmósfera cargada de amenazas anunciaba la terrible rebelión de los calchaquies y diaguitas, que estallaría dos años más tarde.

La "leyenda negra" de origen protestante sobre la rapacidad y crueldad presuntas de la conquista española y la moda consiguiente de llorar por los indios han sido desplazadas en los últimos tiempos por una actitud contraria. Así como aquella se fundaba en los hechos naturalmente duros y cruentos de la conquista, ésta se apoya en el testimonio de la legislación española, legislación paternal si las hubo e inmejorable en el plano de la teoría. De aquí ha surgido una leyenda nueva, rosa o mejor, celeste: la de la conquista "misional", según la cual los rudos soldados que penetraron a sangre y fuego por tierras de América no tenían otro propósito que el establecimiento de la verdadera fe, ni los encomenderos otra ambición frente a los indios que salvarles el alma.

Por innegable que haya sido el fervor apostólico que ardió en Carlos V y Felipe II y su voluntad de integrar el Nuevo Mundo en la unidad católica de que fueron campeones, como lo prueba su Legislación de Indias, la verdad es que ésta sólo se cumplía en

parte, y en lo que menos se cumplía era, precisamente, en lo relativo a los aborígenes. Y ello no tanto por incapacidad o perversidad de los agentes, cuanto por el hecho de ser inaplicable, al postular condiciones que no existían en la realidad. Era una legislación ideológica, fabricada por teólogos o licenciados de corte para salvajes ideales predispuestos a la sumisión, o inspirada por funcionarios del Consejo de Indias que habían fracasado en el Nuevo Mundo y que, vueltos a la oscuridad burocrática y el sueldo escaso, sólo pensaban en poner obstáculos a quienes allá seguían, quizás, enriqueciéndose y triunfando.

¡Y ojalá que no hubiera sido más que inocua! Pero fue mucho peor, fue perjudicial como todas las lucubraciones de tipo humanitario e idealista y provocó más sangre y lágrimas que las que ahorró. La conquista tiene su dura ley y hubo que acatarla. Estaba bien convertir a Cristo a los infieles, pero antes había que someterlos. Era previsible la resistencia armada de los indígenas desalojados de sus tierras, y a esa resistencia había que aplastarla. Esta era la tarea diaria del puñado de españoles que avanzaba entre continuos combates y fundaba pueblos y levantaba templos en el desierto. Y cuando había triunfado y se disponía a labrar la tierra y estabilizarse, para lograr algo de provecho personal que era provecho también de la Corona, venía el visitador a enmendarle la plana, en nombre de la ley tal, inciso cual... ¡Un tinterillo de la audiencia, o un licenciado apenas desembarcado de ultramar, o un clérigo carcomido de envidia porque su estado le vedaba el goce de una encomienda!

Naturalmente, se acataba a regañadientes, y luego no se cumplía, o se dejaba de cumplir. Pero ya el indio astuto había visto desautorizado a su señor y se sentía apoyado y protegido por esa fuerza superior ante quien aquél debía agachar la cabeza y se envalentonaba, maduro para el alzamiento. Tal era el resultado de la ideología y la burocracia: trabar la acción del paladín, que estaba en la brecha y conocía su oficio, y alentar al enemigo. En las ordenanzas de Alfaro y otras análogas, más que en la dureza de los encomenderos, ha de buscarse la causa de las rebeliones indígenas que ensangrentarían poco después la provincia tucumana y luego todo el territorio.

* * *

La predicación del Evangelio entre los aborígenes —que constituía la justificación de la conquista, según las bulas papales— se hallaba en retardo con relación al esfuerzo guerrero.

Es verdad que habían venido clérigos acompañando todas las expediciones, los cuales habían realizado alguna labor de predicación y numerosos bautismos. Pero si exceptuamos la región asunceña y alguna que otra ciudad del Tucumán, su tarea había sido obstaculizada por la resistencia indígena y la necesidad de la previa dominación militar. Además, el clero era escaso en número (ya vimos la dificultad con que se escollaba al fundar Buenos Aires), apenas suficiente para las necesidades espirituales del grupo conquistador; y ese poco —salvo excepciones— malo, si hemos de creer en los *Comentarios* de Alvar Núñez y en el testimonio de las cartas del virrey Toledo sobre la materia. No habían tenido tiempo de llegar hasta aquí los beneficios del Concilio de Trento, que introdujo una tan profunda y saludable renovación en las costumbres y en la disciplina eclesiásticas.

Se habían nombrado obispos en ambas diócesis. Pero éstos, en general, parecían más dispuestos a entrar en conflicto con las autoridades civiles que a ejercer su apostolado entre los infieles. Se chocaba además con el obstáculo del idioma. Los primeros predicadores debieron actuar por medio de intérpretes y sólo en 1603 el sínodo convocado por Hernandarias estableció, por primera vez, la obligación para los clérigos de aprender el guaraní.

En este panorama un tanto opaco un solo trazo de luz: el breve paso de san Francisco Solano, que cruzó el Tucumán y el Paraguay como una visión seráfica, dejando la estela de sus predicaciones y el eco de su violín persuasivo.

Todo habría de cambiar con la instalación de los padres de la Compañía de Jesús. Los primeros sacerdotes de la orden habían llegado en 1585 y se habían establecido en Santiago del Estero, bajo Ramírez de Velasco. En 1605, con la venida de un grupo más numeroso y el caluroso auspicio de Hernandarias, se fundó la provincia jesuítica del Paraguay y se emprendieron las tres primeras misiones: la de los guaycurúes al noroeste de Asunción, la de los guaraníes al sur y la de los tapes al nordeste, en la región del Guayra. Así se inició en gran escala la experiencia de un sistema que había sido aplicado en el Extremo Oriente y que resultaría en América una fórmula nueva y exitosa.

El compromiso que habían contraído los jesuitas con la corona se fundaba en el acatamiento sin restricciones a su autoridad, en la no compulsión de los indios y en la abolición para éstos de todo tributo hasta diez años después de la conversión. El régimen que se estableció consistía en una especie de socialismo agrario adecuado a la índole del guaraní, bajo una dirección paternalista. Las fundaciones se fueron paulatinamente extendiendo. En 1605 se fundó la Villa Encarnación. A fines de 1609 se instaló la reducción de San Ignacio Guazú, a doce leguas del Pa-

raná hacia el norte. Pocos años más tarde las de Concepción, San Nicolás, San Javier y Yapeyú.

Ya veremos el desarrollo posterior de estas misiones. Diremos desde ahora que no sólo implantaron definitivamente el cristianismo entre los indígenas, sino que los organizaron social y políticamente y constituyeron con ellos la frontera avanzada de la colonización española en la zona de fricción contra el avance portugués.

Desde los comienzos de su instalación, en efecto, tuvieron que hacer frente a las frecuentes invasiones de los *mamelucos* paulistas, que atacaban a esos pueblos con el objeto de apresar indios para venderlos como esclavos en las plantaciones de la costa. Esto obligó a los padres a constituir una milicia, que pronto hubo de convertirse en aguerrido ejército. Instructores españoles iniciaron a los mancebos en la táctica militar y formaron cuadros de oficiales y clases. Por una cédula real se les permitió el uso de arcabuces y mosquetes, con los que lograron hacer frente victoriosamente a las invasiones. Fueron la fuerza militar mejor organizada y la más aguerrida de todo el Río de la Plata, a la que debió recurrirse, como veremos, en todos los casos de peligro.

Con la Compañía de Jesús —fundada hacía medio siglo apenas y animada aún del ímpetu ignaciano— entraba triunfante a estas zonas australes el espíritu de la Contrarreforma, de la que era la más resuelta milicia. El sistema que implantó es uno de los milagros de la historia. Bástenos destacar el hecho de que un puñado de sacerdotes realizaría la hazaña —arrostrando toda suerte de penurias y el frecuente martirio— de reunir y conservar sin coacción ninguna, durante un siglo y medio, a un centenar de miles de naturales, no obstante los ataques de un enemigo próximo y aguerrido, las pestes periódicas y, como si esto no bastase, los conflictos permanentes con los funcionarios de la Asunción y sus obispos.

Verdad es que tuvieron a su favor el carácter de los aborígenes de esa zona, más maleable que el de otras regiones del Nuevo Mundo y ya habituados al trato de los españoles y que contaron también con la ventaja de un territorio fértil, abundante en recursos naturales. Pero esto no habría sido suficiente de no mediar el espíritu de sacrificio de los misioneros y su capacidad de adaptación, por un gran impulso de caridad, a las condiciones morales y mentales de sus catecúmenos.

VIII. CONTRABANDO

Transcurrido el primer tercio del siglo XVII, han ocurrido grandes acontecimientos en Europa. Ocupa el trono de España el mediocre Felipe IV, quien abandona la conducción del gobierno a un ministro obcecado y sin talento, el conde-duque de Olivares. Es la época de mayor esplendor intelectual de la península; la de Cervantes, Lope y Quevedo, Velázquez y Zurbarán. Pero, a la vez, la de los reiterados desastres que empujan su decadencia.

En una serie de empresas desdichadas Olivares insume fabulosas cantidades de dinero, provocando una rebelión general. Cataluña se subleva y amenaza con recurrir a la protección de Francia; se producen movimientos de protesta en Aragón y Andalucía, y finalmente Portugal se independiza de la corona, llamando a su trono a un príncipe de la casa de Braganza. Con todo ello España pierde la situación preponderante que tenía en Europa, de la que surge Francia engrandecida por la acción de Richelieu, y la supremacía marítima, que pasa a Inglaterra y Holanda. Esta última nación, en pleno apogeo militar y comercial (el Banco de Amsterdam se funda en 1609, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en 1621), es la que da el golpe de gracia a la flota española, derrotándola por dos veces consecutivas, en las Dunas y en Itamarca.

Era natural que, a raíz de estas desventuras, las colonias españolas sufriesen una detención en su crecimiento y se viesen condenadas a una vida vegetativa y lánguida. Ello debía ocurrir especialmente en el Río de la Plata —la menos interesante, por lejos, de las posesiones ultramarinas—, con quien las comunicaciones eran difíciles y espaciadas. En estos años, las débiles poblaciones de Buenos Aires, Tucumán y el Guayra se hallaban a la defensiva en todas sus fronteras: en la frontera móvil con la indiana, que las cercaba por todas partes, y en la frontera oriental, donde acechaba el permanente invasor portugués cuyas incursiones, tímidas mientras duró la unión de ambas coronas y limitadas a los vandálicos ataques paulistas contra los pueblos jesuíticos y las ciudades del Guayra, se hicieron más frecuentes y audaces después de la independencia de Portugal.

No comprenderá nada de nuestra historia quien no advierta la importancia decisiva de estos años críticos.

En la relativa incomunicación y el abandono en que dejaba a las colonias americanas la decadencia de su metrópoli estaba ya latente la futura emancipación. Lo único que sorprende es que ésta haya tardado dos siglos. Ello demuestra, por una parte, el prestigio perdurable del nombre español, no obstante los reveses; y por otra, el acierto de la política restrictiva con que la corona suplió su inferioridad de fuerzas. Esta política conspiraba, por cierto, contra la prosperidad de las colonias, pero constituía para la metrópoli una cuestión de vida o muerte; se trataba de conservar sus posiciones o de perderlas. Las colonias, por lo demás —si bien inclinadas a medrar ocasionalmente con el contrabando— mantenían una inquebrantable fidelidad y preferían la pobreza con España a la prosperidad bajo el yugo del inglés pirata y hereje.

Hubo de sentirse sin duda una sensación de desamparo en todo el ámbito del Nuevo Mundo al recibirse las noticias de los desastres y al ver sus puertos desguarnecidos y acosados por extrañas banderas: semejante a la del heredero despreocupado y feliz que sabe de pronto la ruina de su casa. La convicción de que hay que hacer frente solos a la vida suele comunicar cierta fortaleza; pero también cierta desaprensión y un como echar por la borda los principios morales inhibitorios que se heredan junto con la posibilidad de aplicarlos. No cabe duda de que muchos vicios de nuestra formación tienen su origen en ese "trauma" de crecimiento.

* * *

Los corsarios ingleses y holandeses adueñados del mar estaban al acecho de las flotas españolas y de sus tesoros indios. Esto obligó a formar convoyes fuertemente protegidos y a restringir el número de los viajes, que al fin se redujeron a dos por año, de ida y vuelta, entre Cádiz y el Portobelo (la ruta más corta), llevando y trayendo cada vez toda la carga necesaria.

En Portobelo se descargaban las mercaderías que habrían de repartirse por toda América y se cargaban los metales preciosos del Perú, Quito, México y Chile. Las mercaderías para el Río de la Plata venían por vía del Perú, lo cual recargaba considerablemente su precio, y de allí se repartían por todo el territorio de Tucumán hacia el sur. Los habitantes de Buenos Aires debían pagarlas con el producto de sus arreos de ganado, pues no había mercado en el norte para los corambres y grasas, por lo cual para mitigar la miseria de este puerto, la Casa de Contratación permitía la salida de uno que otro "navío de registro" (uno o dos por

año) que viajaba eludiendo los ataques corsarios, o concedía "permisiones" para comerciar con los puertos de la costa brasileña.

Como las mercaderías de los barcos de registro hacían, por su menor costo, una competencia ruinosa a las provenientes del Perú, hubo de instalarse muy pronto, para evitar su introducción libre al interior, una Aduana en Córdoba, que las recargaba con una tasa del 50 por ciento sobre su precio. Con todo esto, la vida de Buenos Aires habría sido agónica, de no mediar el contrabando.

* * *

Si algo se justificaba desde el punto de vista del gobierno español, era el cierre del puerto de Buenos Aires. Su apartamiento de las habituales rutas marítimas, su situación a trasmano de la metrópoli y sobre todo su proximidad a las colonias portuguesas del Brasil hacían de él una especie de boca de infección, peligrosa como una herida abierta. Codiciada además por sus cueros y grasas, los barcos de comercio lícito e ilícito acudían como moscas. Ello implicaba el doble riesgo del inficionamiento de herejía y judaísmo, por una parte, y de la succión, por otra, de energías útiles, en forma de doblones peruanos o mercancías a espaldas del control fiscal. La única política inteligente era la que se adoptó, sacrificando la eventual prosperidad a la conservación de la unidad política y espiritual con la metrópoli. Entre dos males, era sin duda el menor.

Pero si la declinación del poder de España le impedía proveer por sí misma al intercambio necesario, le hizo imposible también mantener una rigurosa vigilancia sobre los funcionarios administrativos, siempre tentados de lucrar con el contrabando, pese a las responsabilidades en que incurrían y a las penas de que se hacían pasibles en los juicios de residencia. No obstante los ocasionales permisos de comercio, el mal subsistió como una dolencia endémica durante toda la época colonial.

* * *

Y no se trataba de funcionarios de lance, sino de gente cuyos antecedentes debían ponerlos a cubierto de toda sospecha. Tal el caso de don Diego de Góngora, sucesor de Hernandarias, que había tenido una gallarda actuación en las guerras de Flandes y era caballero de la orden de Santiago Apóstol. Fue el primero

en organizar las milicias entre los vecinos y reconstruyó el Fuerte; introdujo plantas y semillas de cañamo, cebada, pimienta, clavo y nuez. Pero su actuación más destacada consistió en su complicidad con una banda de contrabandistas lusitanos establecidos en la ciudad, que importaron toda clase de géneros extranjeros y gran número de esclavos africanos. Su muerte, ocurrida en 1623, lo salvó de la prisión; pero en el juicio de residencia se le probaron todos los cargos acumulados y su patrimonio apenas si alcanzó a cubrir las cuantiosas multas y las costas.

Sigue una historia doméstica turbulenta y monótona por la sistemática repetición de episodios que giran todos alrededor de lo mismo. El sucesor de Góngora, don Francisco de Céspedes, ordena la prisión de Juan de Vergara, regidor de la ciudad y, por añadidura, tesorero de la Santa Cruzada, notario del Santo Oficio y activo e importante contrabandista. El obispo Carranza salta en su defensa y, como cada cual lucha con las armas que tiene, excomulga al gobernador, amenaza con la excomunión a los soldados que lo apoyan y al frente de una turba de frailes, clérigos y vecinos armados, ataca el Cabildo y pone en libertad a Vergara. Obtenido el piadoso propósito, acusa al gobernador ante la Audiencia de Charcas de tiranía y, naturalmente, también de contrabando. Se abre una investigación al cabo de la cual, no obstante haber quedado en duda la verdad de los cargos, Céspedes es repuesto en el gobierno.

Lo reemplaza don Pedro de Dávila, maestre de campo y caballero de Santiago, con treinta años de campañas militares, a quien se designa para este puesto —inferior a sus méritos— a causa de las amenazas de los holandeses, que merodean por las costas brasileñas. Antes de que asuma el mando ya se lo acusa de contrabandista y él logra demostrar su inocencia y parar el golpe. Realiza un buen gobierno y esto le acarrea una tremenda impopularidad. Los contrabandistas del núcleo dirigente, que no habían logrado impedir su venida, le achacan ahora defraudaciones al fisco y vida escandalosa de amancebamiento con varias mujeres. Debe irse de Buenos Aires en 1638 para defenderse de estos cargos.

Llega don Mendo de la Cueva y Benavídez, también maestre de campo y caballero de Santiago. El obispo, que esta vez es Fray Cristóbal de Aresti, representando al vecindario (?) agraviado le exige la prisión y procesamiento de Dávila. Don Mendo no accede por no hallar motivos, ¿y qué hace el obispo? Lo excomulga, desde luego; y se realiza la consabida reclamación a Charcas y don Mendo debe irse, etcétera, y hay breves interinatos hasta que se nombra a don Jerónimo Luis de Cabrera, nieto del fundador de Córdoba, en 1641.

Durante el gobierno de Cabrera, que dura cinco años, no hay historias ni acusaciones de contrabando. Pero no es que hayan cambiado las modalidades del puerto, sino las circunstancias. Se trata de un interregno guerrero. Portugal independizado se halla en guerra con España y los cómplices del día anterior son ahora enemigos. El gobernador ordena el empadronamiento y desarme de todos los portugueses establecidos en la provincia y entrados en contravención a la legislación vigente. Resulta que son cerca de cuatrocientos, en una población que no alcanza a mil quinientos habitantes: es decir, casi un tercio. No se sabe cuántos de ellos pertenecían al núcleo activo de contrabandistas, aunque es de presumir que la mayor parte.

Con don Jacinto de Laris, también maestre de campo y caballero de Santiago para no variar, las cosas vuelven, diremos, a la normalidad. El obispo ha cambiado también y es ahora fray Cristóbal de la Mancha y Velasco. El cuadro clásico no se modifica sino en lo que respecta a la cantidad; no es una, sino que son ahora tres las excomuniones, fulminadas y levantadas en forma igualmente sospechosa. O más sospechosa, si cabe, durante los períodos de reconciliación por el hecho de haber sido Laris el peor gobernador de la serie. Probóse su participación como empresario en el contrabando con el Brasil, aparte de otros delitos; se le confiscaron los bienes y se lo castigó con fuertes multas, destierro y privación perpetua de oficio.

Don Pedro Baigorri lo sucede en el mando. Diremos que era asimismo maestre de campo y caballero de Santiago. Si su antecesor había provocado conflictos permanentes, la administración de éste se desarrolla en medio de una calma idílica, sólo turbada en 1658 por el ataque de tres navíos franceses al mando de M. de Lafontaine, que fue victoriosamente rechazado con ayuda de las milicias guaraníes, cayendo en nuestro poder la nave capitana. Don Pedro se granjea la simpatía de todo el vecindario, porque ha encontrado sin duda la fórmula ignorada por sus predecesores: vive y deja vivir. En el juicio de residencia se le comprobó que había dejado entrar veintisiete barcos con mercadería y pasajes de contrabando, los cuales habían regresado también con carga clandestina. Dio con sus huesos en la cárcel.

¿A qué continuar? La reiteración de los mismos fenómenos suele indicar que son hasta cierto punto inevitables e inherentes a la naturaleza de las cosas. Buenos Aires se encontraba en una situación singular, que tenía que producir efectos también singulares. Debía optar entre la agonía económica y el contrabando fácil. Era natural que se decidiera por la prosperidad que se le ofrecía al alcance de la mano.

No todos los gobernadores, sin embargo, cedían a la tentación. Los sucesores de Baigorri, don Alonso Mercado y don José Martínez de Salazar (presidente de la efímera Audiencia creada precisamente para reprimir el comercio ilícito) quedaron exentos de cargos. El principal empeño de ambos consistió en obtener permisos legales para comerciar con el Brasil, cuyo éxito relativo contribuyó un tanto a disminuir las apreturas y las tentaciones.

Pero aunque cambiaran los gobiernos, el contrabando continuaba, por la imposibilidad de vigilar la extensa costa y la complicitad benévola de todo el mundo. Cuando no era el propio gobernador, contrabandeaban los alcaldes, los regidores, los obispos, las órdenes religiosas (el gobernador Robles, flor de contrabandista él mismo, acusó de ello, con pruebas, a los dominicos) y los militares. Si tanta gente de calidad, con antecedentes honorables y hasta religiosos, incurrió en semejante corruptela, atreviéndose incluso a desafiar las rigurosas sanciones con que la castigaban las leyes vigentes, que se aplicaban sin misericordia, es que se había convertido en costumbre. Es decir, que había desaparecido toda sanción social contra un delito cuya comisión se consideraba justificada por la necesidad. La teología moral dominica encontraría, sin duda, razones concluyentes para demostrar la licitud de la transgresión de una ley injusta; sobre todo cuando eran tan visibles los resultados benéficos de la violación y cuando la calificación de la injusticia corría por cuenta del prior o del prelado. . .

En cuanto a los pobres gobernadores, maestros de campo, caballeros de Santiago, que habían peleado en Flandes y en Italia, llenos de años y de méritos y de ilustres cicatrices; los viejos servidores del Rey, que habían ganado el gobierno como premio a sus servicios y que venían a seguir actuando con honor, pero aspiraban también a un poco de paz y a un poco de descanso ¡tan merecidos! ¿qué podían hacer? Apenas desembarcado el de turno de la consabida carreta de bueyes, en medio de las salvas del cañoncito asmático del Fuerte cargado con la pólvora escasa de las grandes solemnidades; terminadas las zalemas del Obispo y los regidores del Cabildo y antes de echar la primera mirada sobre la polvorienta plaza mayor, debían enfrentarse con los ojitos brillantes de codicia y los modales insinuantes de los españoles y portugueses de "este comercio", que habían concurrido en masa a rendirle homenaje (y que ya se habían informado al dedillo de sus antecedentes y estudiado el modo de "tocarlo"). Al cabo de dos días ya sabría el hombre a qué atenerse. Debía optar entre la popularidad o la impopularidad; entre la prosperidad —común y personal— o la penuria; entre una vida fácil y agradable, rodeado de caras amigas, o la hostilidad de los vecinos y de sus propios

funcionarios y del clero secular y regular, con las inevitables consecuencias de esa hostilidad portuguesa, aldeana, mercantil y clerical: la calumnia, refinada en la invención hasta lo inverosímil, y la ineludible excomunión. Había que tener un temple heroico para resistir, y aquellos bravos estaban habituados a otra clase de guerra y a otro tipo de heroísmo.

* * *

España tenía razón y su política era sabia. No sólo los intereses del Imperio, sino los propios intereses locales de las provincias interiores reclamaban la restricción del comercio extranjero. Ya veremos cómo la apertura del puerto será la ruina de la industria autóctona. La corona tenía razón. Pero también tenía razón Buenos Aires desde su punto de vista, y esta razón era contradictoria de aquélla, porque los intereses ganaderos y portuarios se oponían al interés general. Se trataba de una situación de hecho, cuya solución inteligente consistía en la subordinación —que no pudo lograr una metrópoli debilitada— del interés de la parte al interés del conjunto.

Sea como fuere y aun reconociendo a este desarrollo de Buenos Aires por el contrabando cierto aspecto de fatalidad, no podrá negarse que fue una fatalidad desgraciada. El hecho de explicarse un fenómeno no exime del juicio sobre sus consecuencias. Buenos Aires prospera con la violación sistemática de la ley, y esta actitud no es indiferente en su proyección hacia el porvenir porque crea modalidades permanentes y deforma la mente y los sentimientos. El espíritu mercantil se sobrepone al acatamiento a ciertos valores tradicionales que siguen vivos en el resto del territorio. La ciudad comercial, inficionada de portugueses, contrabandistas —cartagineses, en suma— empieza a despertar a la codicia y a la aventura y vuelve sus ojos hacia Europa, de espaldas a la tierra que la nutre.

Se inicia el divorcio con el interior del país, español y tradicional. Los hijos de los conquistadores y encomenderos empiezan a escandalizarse del advenedizo mercachifle del puerto. Surge la desconfianza y la malquerencia hacia Buenos Aires, que explican casi todas las perturbaciones de la época revolucionaria.

IX. SUBLEVACIONES Y GUERRAS DE INDIOS

Mientras Buenos Aires se desenvuelve trabajosamente con sus historias de contrabando y conflictos de autoridades, las poblaciones del interior (no exentas, por cierto, del mismo mal endémico y castizo de la oposición, aunque por otros motivos, del poder civil y el eclesiástico) deben hacer frente a más graves problemas.

La escasa población blanca, repartida en mezquinos villorrios sobre una enorme extensión territorial, vive en estado de permanente alarma por la amenaza de la sublevación indígena. Esta al fin estalla de modo incontenible.

En las tribus bravías, antes señoras de los valles y ahora dominadas y sometidas a un régimen de trabajo obligatorio, alentaba sin duda un sentimiento indestructible de desquite. Pero la rebelión no habría adquirido los caracteres que adquirió de no mediar factores que la alentaron y la favorecieron: en primer término, el espectáculo de la debilidad y de las divisiones de los conquistadores, hasta en la cuestión del régimen aplicable a los propios indios; en segundo término, las incitaciones externas, provenientes de los enemigos internacionales de la metrópoli.

Sea como fuere, hay un momento en que todo se conjura en un esfuerzo supremo para acabar con la conquista. La civilización triunfa al cabo por el comportamiento heroico de los pobladores, que acallan por un momento, ante el enemigo común, la sorda guerra civil que acompaña de manera inevitable a todas las empresas españolas, y acuden unos en auxilio de otros cada vez que se produce un ataque, mediante un sistema rápido de comunicaciones y una hábil acción estratégica.

La primera rebelión importante de los calchaquíes, en 1630, se originó, según sus cronistas, en una humillación impuesta a algunos caciques por el gobernador de Tucumán don Felipe de Albornoz. Hay que precaverse, no obstante, contra la actitud corriente ya desde esa época —y motivada en la oposición de los legalistas a los encomenderos— que se traduce en achacar siempre

la culpa de lo que ocurre a la crueldad del hombre de armas, del conquistador. Lo probable es que dichos caciques necesitaran un escarmiento por estar tramando ya la sublevación. Esta se produjo en seguida y se fue contagiando a la mayor parte de los pueblos de la zona.

Todos los rincones de la montaña se erizan de indios flecheros en son de guerra, que atacan las poblaciones y arrasan los fortines, matando a las débiles guarniciones (diez o veinte soldados) que los defienden, incendian estancias, roban los ganados y ponen en serio peligro la subsistencia de Salta, Tucumán, La Rioja y Londres. Los habitantes de esta última deben abandonarla y refugiarse en La Rioja. El alzamiento se extiende en una longitud de trescientas leguas de cordillera, hasta llegar a las jurisdicciones de San Juan y Mendoza. No pudiendo hacerle frente con sus escasas fuerzas, el gobernador debe pedir auxilio a la Audiencia de Charcas, a Buenos Aires y a Chile. La lucha dura, con diversas alternativas, durante cinco años, al cabo de los cuales y con ayuda de los refuerzos obtenidos se aplastan los últimos restos de la rebelión.

Sometidos al gobernador Albornoz, los calchaquíes parecieron completamente pacificados. Los sucesores de Albornoz —Figueroa, Acosta, Gil de Negrete— se ocuparon de la correcta aplicación de las ordenanzas reales sobre indios y permitieron a algunas tribus la libre disposición de sus tierras en el valle, donde practicaban la agricultura y comerciaban con el arreo de vacas y mulas a Chile y Perú. Se sublevarían nuevamente, no obstante, algunos años más tarde.

Las misiones jesuíticas eran mientras tanto continuamente hostilizadas por los mamelucos paulistas, llamados “bandeirantes”, cuya industria consistía en la compra o cacería de indios para venderlos como esclavos. Después de independizado Portugal en 1640, esta actitud ilícita empezó a cohonestarse con el apoyo oficial portugués, tomando caracteres de penetración militar y política. Las milicias guaraníes debieron vivir con el arma al brazo para rechazarlos y actuaron casi siempre con éxito.

Como si esto no fuera suficiente, los padres de la provincia jesuítica hubieron de soportar asimismo pleitos permanentes con las autoridades civiles y eclesiásticas de Asunción, celosas de su fuerza y su prestigio. Un gobernador llamado Luis de Céspedes Jaray llegó, en 1628, al extremo de alentar contra ellos las invasiones paulistas, permitiendo la entrada de una de éstas al Guayra

donde destruyó once misiones. Las quejas de los indios llegaron hasta la Audiencia de Charcas y el gobernador fue removido y procesado; pero se calcula que entre esa fecha y la remoción del gobernador —tres años después— hubo alrededor de 60.000 indios cautivos.

El cuadro clásico de los conflictos asunceños, cuya enumeración sería monótona, no tiene dos términos sino tres: el gobernador, el obispo y los jesuitas, sobre un fondo de turbulencia comunera. Cuando el gobernador protege a los padres, el obispo los persigue, y viceversa; salvo cuando ambos se unen para atacarlos, halagando así las aspiraciones de los encomenderos asunceños, que anhelan extenderse a las tierras labradas y fértiles de las misiones. El más importante de estos conflictos primitivos ocurría en 1650. El obispo fray Bernardino Cárdenas, que después de un pleito borrascoso con el gobernador logró derrocarlo y desempeñó durante siete meses el gobierno civil, desterró como primera providencia a los jesuitas de su establecimiento de la Asunción. Lo cual se convertiría en un episodio corriente en los conflictos posteriores.

Dos años después las milicias misioneras debieron enfrentar una nueva invasión de mamelucos, aliados esta vez con los tupíes, enemigos inveterados del pueblo guaraní. El disciplinado y aguerrido ejército jesuítico logró rechazarlos, al cabo de sangrientos combates.

Para colmo de desdichas sobrevino la peste de 1654, que asoló la región durante un año, ocasionando millares de víctimas en Paraguay y las misiones.

* * *

Promediando el siglo y cuando gobernaba en Tucumán don Alonso Mercado y Villacorta, apareció en la provincia, proveniente de Chile, el andaluz Pedro Bohórquez, quien encabezaría la segunda gran rebelión de los calchaquíes. Sólo la posesión de todas las mañas de los gitanos puestas al servicio de una firme voluntad de dominio puede explicar la breve pero intensa aventura de este impostor famoso.

Decíase heredero de los Incas peruanos. No sorprende que haya conseguido embaucar con ello a los indios. Pero lo curioso del caso es que hizo caer también en sus redes al candoroso gobernador, mediante la promesa de poner su prestigio al servicio incondicional de la corona de España y de compartir con ella los tesoros de Atahualpa, cuyo depósito oculto en las montañas él solo conocía. Don Alonso Mercado, alucinado por la áurea qui-

mera, entró resueltamente en el juego del impostor y reconoció públicamente su jerarquía, recorriendo con él los pueblos indígenas en medio de grandes festejos. Se hizo de este modo el principal propagandista del Inca falso entre los propios indios, con lo cual, si éste pudo encontrar antes alguna resistencia, la consiguió disipar completamente.

Afirmado en su posición, Bohórquez empezó a mostrar sus intenciones y el pobre gobernador a sospechar el engaño. Los tesoros no aparecían y los indios, ocultamente soliviantados con promesas de libertad, empezaban a conmoverse. Un día desapareció el andaluz y estalló la rebelión en toda la montaña.

La guerra duró largos años, con diversas alternativas y las mismas características de la anterior. Las tribus hubieron de ser sometidas paulatinamente, pero hasta 1665 continuaban los últimos rebeldes combatiendo en las anfractuosidades de los cerros. El impostor no esperó el resultado final para entregarse. Cuando las cosas se pusieron difíciles para él, abandonó el campo y a los súbditos de su efímero reinado a cambio de un salvoconducto para su vida que le extendió la Audiencia de Charcas, a cuyo calabozo fue a parar, con sus fracasados embustes.

En el año citado, Mercado y Villacorta, que trataba de hacerse perdonar a fuerza de heroísmo su traspie, entró al valle calchaquí al frente de 540 soldados y redujo a todos los pueblos que lo ocupaban. Para acabar con el peligro de la insurrección latente, decidió desterrar de allí a las tribus, repartiéndolas entre las diversas ciudades del territorio. Mandó ciento cuarenta familias a Esteco, trescientas cincuenta a La Rioja y Catamarca "para el servicio de las viñas y algodones" y doscientas cincuenta a Córdoba y Buenos Aires "para el servicio de fortificaciones". Los destinados a Buenos Aires pertenecían a la tribu de los quilmes y fueron reducidos en lugar situado al sur de la ciudad y que tomó este nombre.

* * *

Con el aplastamiento de la rebelión calchaquí no se han acabado las vicisitudes del Tucumán. Apenas dominados los últimos rebeldes de los valles, empiezan a caer sobre las ciudades del noroeste las invasiones guerreras de los indios mocovíes del Chaco. El gobernador Peredo, sucesor de Mercado y Villacorta, hace una expedición para escarmentarlos. No lo consigue porque los salvajes se le escurren entre la selva, y las invasiones se repetirán periódicamente, poniendo en peligro las poblaciones, principalmente la de Esteco, que casi es destruida en 1686. Cuatro años

después los mismos indios llegan hasta San Miguel de Tucumán degollando y cautivando a unas cuantas decenas de habitantes. El peligro de los salvajes (y un temblor de tierra que destruyó la mayor parte de las casas) serían las causas de la despoblación de Esteco en 1692.

La gobernación del Paraguay sufriría también durante este período por los ataques indígenas, además de las consabidas y reiteradas invasiones lusitanas a las poblaciones misioneras. En 1671, bajo el gobierno de don Felipe Rege Corbalán, se produce una agresión de los guaycurúes y albañales aliados contra la población de Asunción. Una entrada general que realiza el gobernador contra ellos tiene un resultado desastroso: los indios lo vencen por su mejor conocimiento del terreno y su enorme superioridad numérica y lo obligan a retroceder. Asunción queda a la defensiva y sólo poco a poco logrará reconquistar el respeto de las tribus alzadas. Cuatro años más tarde ocurre una nueva y sangrienta invasión de los mamelucos, rechazada como de costumbre por las milicias guaraníes pero con enormes pérdidas.

Buenos Aires empieza a sentir también la amenaza indígena, hasta entonces alejada. En esto influye un fenómeno de orden económico que inquieta a la población del puerto poco después de mediar el siglo: la merma alarmante del ganado vacuno que poblaba los campos desde los tiempos de la fundación y que parecía inagotable.

Esta merma se debe a varias causas. En primer término, la explotación imprevisora y en gran escala mediante los permisos de vaquería, que se traducían en un verdadero exterminio. En segundo término, los arreos continuos de hacienda chúcará o "realenga" que realizaban los indios pampas con destino a Chile. En tercer término, la verdadera plaga constituida por los perros "cimarrones", descendientes de los que habían tomado campo, corridos por el hambre, cuando la primera fundación y que, multiplicados, producían una gran mortandad de terneros, comiéndose uno de cada tres, según los cálculos.

La disminución del ganado provocaría un alza en su precio y su consiguiente apropiación por los particulares. Ya no habrá hacienda realenga, sino marcada y perteneciente a los dueños de las estancias, quienes la explotarán para la obtención de cueros y grasas y organizarán por su cuenta los arreos a Chile. Desprovistos de su fuente anterior de recursos, los indios —ahora consumados jinetes— empezaron a atacar los establecimientos rurales y los arreos. Se inicia así la época de los "malones", que obligaría a una permanente guerra defensiva y ofensiva hasta muy avanzado el siglo XIX. Mercado y Villacorta, nombrado en Bue-

nos Aires después de su gobernación tucumana, y su sucesor Salazar realizaron diversas expediciones para escarmentarlos.

* * *

Era natural que las guerras promovidas por los indígenas y la ineludible represión tuvieran consecuencias desastrosas para las poblaciones. Efectivamente, las ciudades del noroeste se estancan en su desarrollo y algunas, según vimos, llegan a desaparecer. La población indígena merma en forma notable. De los 14.000 indios encomendados que había a principios de siglo, queda al finalizar éste la décima parte. La española no aumenta porque el aporte de la península es ínfimo y los nacimientos se compensan con las bajas sufridas en la guerra, aparte de la mortandad natural.

Con todo, se establecieron industrias, que prosperaban magníficamente en los momentos de tregua. En todo el Tucumán se desarrolló en gran escala la producción algodonera, que constituyó el fundamento de la economía de la zona. Se hilaba y se tejía allí mismo el algodón, así como también la lana. En La Rioja y Catamarca había viñedos y olivares.

La evangelización de los indios progresó también por obra de los franciscanos, los dominicos y los jesuitas, quienes tenían casas en Santiago, Asunción y Córdoba, aparte de sus establecimientos misioneros. Sobre la uniformidad de los poblados construidos de adobe y cañas empezaban a surgir los campanarios de las primeras iglesias, en cuya construcción los propios sacerdotes actuaban como alarifes y obreros, ayudados por el vecindario. Se levantaban también los edificios públicos y, al finalizar el siglo, alguna que otra casa señorial, de techo de tejas y balcón volado.

Por lo que se refiere a la cultura, Córdoba tenía desde principios de siglo (1613) su Universidad, debida a la gestión del hermano de Hernandarias, el obispo Trejo, donde podían alcanzar las órdenes no sólo los vástagos de casa hidalga, sino también los mestizos y los hijos de cacique. A su sombra ya había vivido y cantado el primer poeta argentino, don Luis de Tejeda y Guzmán, que fue también encomendero, soldado y Alcalde ordinario de la ciudad y, entrando en religión, murió como fraile dominico en 1660.

En las misiones jesuíticas que se extendían sobre la zona oriental y occidental del río Uruguay y comprendían cuarenta y ocho poblaciones, repartidas entre el actual territorio misionero y una fracción de tierra hoy brasileña, situada entre el citado río

y el Cuareim, se levantaban ya templos de piedras, cuyas ruinas subsisten todavía. También se practicaban todas las artes y oficios y empezaba a producirse una imagerie religiosa de estilo propio, en la cual prevalecían las cualidades del genio indígena.

X. LA COLONIA DEL SACRAMENTO Y LA FRONTERA ORIENTAL

La segunda mitad del siglo XVII es desastrosa para España. Debilitada por la mala política interior de Felipe IV, sigue su suerte adversa en las empresas continentales.

Cromwell y Mazarino, aliados contra ella, obligan al Emperador a la neutralidad, con lo cual queda aislada en el continente y pierde, por el tratado de los Pirineos, diversos territorios en Flandes y Luxemburgo, además de los condados de Conflans y el Rosellón. El 23 de junio de 1662 Inglaterra firma un tratado con Portugal por el que le asegura su apoyo en la guerra por su independencia. La derrota española en la batalla de Villaviciosa obliga a Felipe IV a reconocer el hecho consumado. Desde este momento, Portugal actuará como agente de la política inglesa en el continente y también, según veremos, en las empresas coloniales.

Las cosas no habrían de variar con el advenimiento al trono de Carlos II, menor de edad, entregado a una Regencia sobre la que actúan influencias opuestas y desacertadas. El panorama de Europa ha cambiado con la reposición de los Estuardos en el trono de Inglaterra y la iniciación del reinado personal de Luis XIV, pero no en lo referente a la península, si no es para empeorar. Don Juan de Austria, hijo natural de Felipe IV, arrastra a la Regencia a una empresa desgraciada contra Francia, que ha declarado la guerra a los holandeses. La única perdedora en esta aventura será España. El tratado de Nimega la obligaría a desprenderse del Franco Condado y Sicilia y de algunas ciudadelas en Flandes. Pierde además parte de su flota en aguas de Sicilia, en una acción contra la francesa mandada por el almirante Duquesne.

La distribución de las alianzas sigue como antes. Luis XIV, acompañado de ministros como Colbert y Louvois, continúa con respecto a Inglaterra la política de Mazarino, mientras Carlos II Estuardo, rey afrancesado, obedece en Inglaterra a la influencia de la corte de Versalles. España permanece debilitada y aislada virtualmente, ya que la ayuda del Imperio austríaco —demasiado ocupado por el peligro de su frontera del este y sus problemas internos— se ha hecho poco menos que ilusoria. La muerte de don Juan de Austria, por fin, suprime la última influencia ordenadora que en el orden doméstico le quedaba, la última voluntad firme,

si bien no muy esclarecida. Desde ese instante, la que fue rectora del mundo continuará librada, bajo el cetro de un rey incapaz, a la indecisión y a la anarquía, hasta casi caer a la situación de satélite del extranjero.

Es necesario tener bien presentes estas circunstancias internacionales para explicarse nuestra cuestión de la frontera oriental, latente desde el descubrimiento por la falta de demarcación y agudizada a partir de 1680, dos años después de los tratados de Nimega entre Francia, España y Holanda.

Si es verdad que las naciones adquieren su fisonomía en la lucha por su independencia y su integridad, la nuestra no constituye una excepción. Es como todas, hija de la guerra. Los conquistadores se impusieron por las armas y debieron defender permanentemente sus funciones contra la indiada rebelde, cuya resistencia era menester aplastar, y contra las reiteradas tentativas de penetración del vecino portugués. En la guerra sobre esas dos fronteras —la móvil del indio y la oriental— se hizo la patria.

No comprenderá nada de nuestra historia quien no tenga presentes estas nociones, harto descuidadas. Somos la continuación de España en América y la patria empieza con la conquista. A esa empresa de tres siglos debemos el ser. La guerra posterior por la independencia —larga, cruenta y gloriosa— fue un episodio incidental: guerra civil, si las hubo, lo cual no implica desmerecerla, sino clasificarla técnicamente, y que debía terminar con una reconciliación definitiva, porque con España no hay frontera. Pero la política internacional, en forma de penetración, amenaza guerrera, guerra abierta o influencia nociva y disgregadora, nos tocó permanentemente por el flanco oriental, mientras debíamos combatir a la vez con el salvaje, a menudo alentado y armado contra nosotros por el vecino.

Detrás de éste, siempre, Inglaterra.

* * *

Sabido es que la demarcación teórica de la línea divisoria entre las posesiones españolas y portuguesas del Nuevo Mundo se establecía en el tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1504. Su cumplimiento no se efectuó porque hubo de entorpecerlo el desacuerdo sobre el lugar desde donde debían contarse las trescientas setenta leguas al oeste de las islas del cabo Verde y sobre la cantidad de leguas marinas que habrían de computarse en cada grado.

El sometimiento de Portugal a España durante los años 1580 a 1640 hizo olvidar el pleito, pues se consideraba esta situa-

ción como definitiva. No se realizaron por los españoles actos de posesión en la costa oriental del estuario, salvo la expedición de Hernandarias contra los charrúas en 1608. Sí se explotaban en cambio sus "vaquerías", cuya defensa justamente motivó dicha expedición. En una de sus cartas al rey, el gobernador le comunicaba haber llegado a un río y a un puerto natural al que llaman *Monte vidio*...

La emancipación de Portugal debía naturalmente renovar el litigio, con ventaja ahora para esta nación, a causa de la postración en que había caído España. Empezó de consiguiente a preparar sus elementos guerreros y diplomáticos a fin de actuar y hallarse luego respaldada por argumentos válidos para la negociación.

Como primera providencia, logró que el papa Inocencio XI, al designar al primer obispo de Río de Janeiro, le señalara el Río de la Plata como límite austral de su diócesis. Esta decisión tenía gran importancia, si no legal al menos procesal, por la circunstancia de haber deferido ambas potencias al Sumo Pontífice la decisión de sus conflictos territoriales. Respaldando un hecho consumado, podía servir para argumentar en el sentido de que ella importaba una modificación en la bula de Alejandro VI, dada la no aplicación del tratado de Tordesillas; aunque desde luego no hubiera tal intención por parte del Pontífice, quien no se proponía decidir sobre el fondo del asunto y había sido sorprendido en la fijación de ese límite por el embajador interesado.

Dos rumbos llevaba a la sazón la expansión portuguesa en el Plata cuyo centro de irradiación era San Pablo. Uno hacia el Perú y las regiones ricas, donde se estrellaba con la resistencia misionera. Otro hacia las llanuras fértiles y templadas del Uruguay, donde se habían multiplicado los ganados hasta el punto de merecer el nombre de *Vacaria* y constituir para Buenos Aires fuente habitual de provisión de corambres y grasas. La política de Portugal tendía a satisfacer las ambiciones de los pobladores paulistas en el sentido de adueñarse de las riquezas sureñas.

Con este objeto, el rey Pedro II designó en 1678 al maestre de campo Manuel Lobo en el carácter de gobernador y capitán general de Río de Janeiro y con instrucciones reservadas de que fundara un fuerte en la margen oriental del estuario.

* * *

Lobo fue diligente en el cumplimiento de su cometido. Tomó posesión de su cargo y empezó a preparar con gran sigilo su expedición. Zarpó de Santos a fines de 1679, en una flota

compuesta por tres navíos de alto bordo y otras embarcaciones menores y, en enero del año siguiente, levantó frente a la isla de San Gabriel un fortín al que bautizó con el nombre de Colonia del Sacramento.

Gobernaba en Buenos Aires a la sazón el maestre de campo don José de Garro. Al enterarse de la usurpación, mandó un oficio al jefe portugués intimándole el desalojo inmediato de su instalación. Lobo trató de dar largas al asunto, pretendiendo plantearlo en el terreno legal, lo cual no fue admitido por su contrincante, quien lo intimó de nuevo bajo prevención de recurrir a las armas. La negativa de Lobo a acceder dejó planteado el "casus belli".

El gobernador Garro organizó con premura un ejército del que formaban parte tres mil indios de las misiones guaraníes y lo puso al mando del maestre de campo don Antonio de Vera y Mujica. La Colonia fue tomada por asalto el 7 de agosto, después de un violento combate.

La actuación de las milicias guaraníes en esta primera acción, en la que no se trataba ya de hacer frente a indígenas, "mamelucos" o piratas, sino a las fuerzas organizadas de una nación extranjera, muestra la importancia que habían adquirido en el régimen defensivo del Plata. No eran sólo las fuerzas mejor adiestradas, sino las más aguerridas del territorio. Habitadas, por lo demás, a la guerra casi endémica con los "bandeirantes", se hallaban animadas de un odio violento contra el portugués, en quien veían la encarnación de la usurpación y la rapiña.

La victoria se celebró jubilosamente en Buenos Aires, Paraguay y el Tucumán. No se contaba con la debilidad de España, que habría de sufrir una dolorosa humillación, por la cual lo ganado aquí se perdería en la metrópoli.

Portugal concentró, en efecto, en son de amenaza sus fuerzas militares sobre la frontera española y protestó contra la acción del gobernador Garro. Impotente para afrontar en esos momentos una contienda en la que su adversario contaría con el apoyo de Inglaterra y Francia, España optó por desautorizar a su gobernador y acceder a la firma de un tratado por el cual se devolvía a Portugal la Colonia del Sacramento y ambas potencias convenían en llevar su litigio al arbitraje del Papa.

La Colonia se entregó nuevamente a los portugueses el 11 de febrero de 1683, que debió ser un día de duelo para Buenos Aires. Portugal no concurrió al arbitraje a que se había comprometido: su interés consistía en dilatar toda solución que pudiera serle adversa, mientras se hallaba en posesión del objeto del litigio. Dio por no realizada la conferencia de Badajoz en la que aquello se había resuelto y se dedicó a fortificar las defensas de la Colonia contra cualquier eventualidad.

Este primer episodio de la toma y devolución de la Colonia del Sacramento presenta una figura a la que se ajustarán las subsiguientes y que, insinúa una de las *constantes* de nuestra historia. La penetración portuguesa es rechazada reiteradamente por las armas; triunfa al cabo y se hace efectiva por medios diplomáticos, aprovechando primero la debilidad internacional de España y más tarde la de la joven República que se debate en la guerra civil. Tres veces se toma y se devuelve la Colonia. También por medios diplomáticos se destruirá el baluarte misionero. Todas las discordias internas se aprovechan por la sutil penetración, que se realizará en diversas etapas críticas, desde 1680 hasta 1853.

Salvo un interregno de diez años (1705-1715) y otro breve de dos (1762-1764), la Colonia permanecerá en manos de los portugueses hasta 1776. Durante casi un siglo, por consiguiente, una factoría extranjera con estatuto de puerto libre se mantiene frente al puerto de Buenos Aires, que sigue sometido a las legítimas restricciones impuestas por la corona de España a su comercio. ¿Cuál era el propósito de aquella fundación? Naturalmente, el contrabando. El comercio ilícito, que hasta entonces tenía asiento en las ciudades de la costa marítima brasileña, con las dificultades inherentes a la distancia y a la difícil navegación del estuario, cuenta ahora con una base de operaciones inmejorable: a pocas horas en cualquier clase de barcos, del puerto de Buenos Aires y de su costa desierta.

La entrada ilegal de mercaderías aumenta de manera increíble, como era de prever, y con ella hacen su agosto muchos vecinos de esta ciudad. Los nuevos dueños de los mares y de la industria encuentran una excelente plaza para su exportación. Las ciudades del Tucumán empiezan a paralizar sus telares por falta de compradores y los viajeros que nos visitan a principios del siglo XVII se sorprenden de ver que los gauchos de la campaña usan chiripás y ponchos de tejido inglés y enfrenan sus pingos con frenos ingleses.

XI. LA FRONTERA ORIENTAL (Segunda parte) MONTEVIDEO

El reinado de Carlos II, "el hechizado", marca el punto más bajo de la depresión de España. La disminución de su armada de guerra provoca la indefensión de sus costas del Nuevo Mundo, expuestas a frecuentes ataques de corsarios y piratas. Estos asolan el istmo de Darién y las costas del Perú y en 1697 entran a saco en Cartagena de Indias.

La merma de navíos no afecta solamente a la flota de guerra sino también a la mercante. Para su propio e imprescindible comercio debe España solicitar, en los momentos de tregua guerrera, la ayuda inglesa u holandesa.

Buenos Aires no sufre los ataques a que están expuestos los puertos oceánicos: los esporádicos amagos de invasión no se traducen en ataque efectivo. La protegen la distancia y la barrera segura que oponen a la navegación los bancos de arena del estuario. La protege, sobre todo, una circunstancia política: la impunidad del contrabando. El activo comercio ilegal que se realiza desde la Colonia le asegura el amparo de la potencia más interesada en el mantenimiento de ese comercio, que es Inglaterra.

* * *

Durante el siglo XVII se experimentó en Europa un gran cambio en las ideas y las costumbres. Es el siglo de la gravitación universal y la descomposición de la luz, de Newton y la física; del racionalismo y del empirismo: de Descartes, Locke, Leibniz y Pascal, del refinamiento de la vida cortesana que irradia desde Versalles.

No es fácil determinar la medida en que los influjos intelectuales actúan sobre los hechos políticos y éstos sobre aquéllos, o sea las relaciones recíprocas entre el prestigio y el poder. Pero la verdad es que existe una interdependencia estricta pocas veces tan visible como en estos años. Disipado el pasajero entusiasmo con que el mundo protestante había acogido la revolución inglesa, la Francia de Luis XV conquista el cetro de la hegemonía intelectual a favor de su predominio político en el continente. De

allí se difundirán las nuevas influencias, inspiradoras de ideas de libre examen y progreso, que llegarán a toda Europa.

¿Cómo actúan estas influencias? Desde luego, de una manera sutil. Francia permanece fiel a la ortodoxia (la revocación del edicto de Nantes se produce en 1685) y sus filósofos racionalistas se cuidan bien de no chocar con la religión oficial. El pensamiento renovador, en el que no puede dejar de verse un eco intelectual de la Reforma, se manifiesta principalmente en la forma de fervor exagerado del jansenismo. La prédica jansenista contra la corrupción cortesana y la moral laxa de los consejeros reales —principalmente jesuitas— hace mella en la alta burguesía, los comerciantes y los jurisconsultos, o sea la "nobleza togada".

España se aferra al espíritu de la Contrarreforma, que ha sido en gran parte obra española, por la intervención de sus grandes teólogos en el Concilio de Trento y por la acción de la Compañía de Jesús. En sus Universidades sigue viva la gran tradición escolástica, renovada por Suárez a principio del siglo. La revolución cartesiana no logra imponerse; la mente nacional la rechaza; los jesuitas prohíben desde 1640 la enseñanza del cartesianismo en sus colegios. No se ha extinguido, por lo demás, la capacidad creadora de la raza, que se expresa en la obra de los grandes místicos y de Quevedo, Gracián y Góngora, Lope y Calderón. Lejos de recibir influencias, España las irradia al extranjero; el teatro francés es su tributario. Pero ha perdido la fuerza. Está en la declinación de su poder y las potencias nuevas habrán de engrandecerse contra ella y a sus expensas. Todo lo cual explica muchos fenómenos políticos de ese fin de siglo, en el que se advierte una conspiración general contra los principios y las instituciones en que se fundaba la hegemonía española.

Pocas veces se habrá visto en la historia un caso tan patente de desprestigio ocasionado en la debilidad política y material como el de la España de estos años. La postergación en que ha caído por errores y circunstancias adversas desacredita los principios que ella representa en Europa y fortalece los de sus adversarios. Ello ocurre en la propia España, que empieza a renegar de su tradición y a buscar en el ejemplo extranjero el secreto para recuperar la grandeza perdida.

A este proceso contribuiría decisivamente el cambio de dinastía ocurrido al terminar el siglo.

El último y degenerado retoño de la dinastía austríaca —Carlos II, "el hechizado"— murió sin sucesión, dejando la corona por testamento a Felipe de Anjou, quien asumió el trono con el nombre de Felipe V. Ese testamento era un triunfo de la diplo-

macia francesa, que había jugado todas sus cartas en favor del nieto de Luis XIV, y provocó una sangrienta guerra en que Francia y España debieron luchar contra todas las demás potencias coaligadas. La instalación del rey borbónico y sus consejeros franceses abrirá las puertas de España a las influencias de Versalles. Con ellas entrará el jansenismo y el galicanismo bajo el nombre castizo de "regalismo", que derivará pronto en "despotismo ilustrado", ayudando a destruir en los espíritus la unidad católica a que tendía la Contrarreforma.

Las posesiones españolas del Nuevo Mundo se mantuvieron ajenas a la lucha dinástica que, no obstante, provocó hondas divisiones en la península. Pero ella repercutió en la cuestión de la Colonia del Sacramento.

En 1701, al asumir el trono y para asegurarse la neutralidad de Portugal en la guerra, Felipe V le había cedido por un tratado la posesión definitiva de ese puerto. La cesión quedó sin efecto por el ingreso de dicha nación en la alianza antiespañola, a los dos años de iniciadas las hostilidades. Obedeciendo órdenes de la corona, el gobernador de Buenos Aires don Alonso de Valdés e Inclán tomó nuevamente el fuerte de Colonia, después de violentas acciones por mar y tierra, el 15 de marzo de 1705.

La guerra habría de durar en Europa, con diversas alternativas, siete años más. España pierde la llave del Mediterráneo: Gibraltar. Al cabo se abrieron las negociaciones, que terminarían con el tratado de Utrecht. Todos los esfuerzos de la diplomacia británica se orientaron en esta ocasión a separar los intereses franceses de los españoles en materia de comercio. Luis XIV, por su parte, los ojos puestos en el Continente, se desentendió de los asuntos coloniales, dejando a su nieto que se las arreglara con las potencias marítimas. Para salvar el resto de sus dominios en Indias, Italia y Flandes, Felipe V debió consentir en devolver por segunda vez la Colonia a Portugal.

No fue ésta la única ventaja que obtuvo Inglaterra, ni siquiera la principal. Por el tratado de Asiento, firmado en 1713, se le otorgó a una compañía inglesa, la *South Sea Company*, el privilegio de introducir esclavos negros a las Indias Occidentales por los puertos de su elección durante el término de treinta años, a razón de 4.800 anuales, lo cual daba una cifra de 144.000, enorme con relación a la población blanca. Por cada negro se pagaría un tanto por ciento en concepto de gravamen. La compañía adelantaba en compensación a la Corona, siempre en apuros financieros, la suma de 200.000 escudos.

Apenas firmado el compromiso, pidieron los ingleses que se les señalara en Buenos Aires un lugar donde instalarse. Por real cédula de 1716 se les asignó un terreno próximo a la actual esta-

ción de Retiro, con sitio suficiente para galpones y depósitos y que será en lo sucesivo un centro permanente de contrabando bajo apariencia legal.

* * *

Con la muerte de Luis XIV, ocurrida en 1715, Felipe V —bajo la influencia del cardenal Alberoni— se siente desligado de la subordinación a la política francesa e inicia una política tendiente a restablecer el prestigio español.

Con el objeto de recuperar los reinos de Nápoles y de Sicilia e improvisando con tesón e ingenio flotas y ejércitos, arriesga una guerra contra Francia, Inglaterra y Holanda, teniendo como aliadas a Rusia y Suecia. La guerra se prolonga con alternativas diversas y al final desfavorable por el mayor poder de la coalición enemiga. El monarca logra, no obstante, en las negociaciones finales y a cambio de concesiones oportunas, el reconocimiento de la herencia de su segunda esposa Isabel Farnesio para su hijo Carlos, quien recibe los ducados de Parma y Toscana y resultaría más tarde heredero de las disputadas coronas, antes de asumir la de España con el nombre de Carlos III.

Esta guerra no hubo de sentirse mucho tampoco en las costas del Río de la Plata, salvo la visita, en dos ocasiones, de navíos franceses que efectuaron desembarcos en la costa oriental en tren de corso. El gobernador de Buenos Aires don Bruno Mauricio de Zabala los atacó una y otra vez, obligándolos a abandonar su campamento, su artillería de desembarco y los millares de cueros que habían acumulado para exportar, robados o comprados a vil precio a los indios de la zona.

Por lo que hace a los tratados finales, la única consecuencia referente al Río de la Plata fue una nueva ventaja obtenida por Inglaterra para su comercio negrero. Se autorizó a la compañía concesionaria a introducir esclavos al interior del territorio, lo cual sería aprovechado ingeniosamente para el contrabando de lienzos y toda clase de mercaderías que se hacían figurar como vestidos y objetos de uso personal de los negros en subasta. Cada uno de éstos, aparentemente, venía provisto de un ajuar de príncipe.

* * *

Pero la Colonia del Sacramento seguía siendo la cuestión candente en estas latitudes.

España se había reconciliado con Francia en 1721 y había firmado el mismo año sendos pactos de alianza con Inglaterra y Portugal. No obstante la paz vigente, persistía aquí el estado de tensión por el doble motivo de la continuidad del comercio ilícito y el avance portugués sobre nuestras tierras.

La aceptación del tratado de Utrecht hacía inobjetable, naturalmente, la posesión de ese establecimiento por Portugal. Pero la disidencia se planteaba con respecto a la jurisdicción. España sostenía que ésta se limitaba a un tiro de cañón por cada banda, disparado desde los muros del Fuerte. Los portugueses preferían mantener los límites indeterminados, como pretexto para extenderse en todas direcciones.

El gobernador Zabala vigilaba atentamente la acción de los desaprensivos vecinos. En 1719 se habían establecido dos fortines con el objeto de impedir las incursiones para robar cueros y ganados, que constituían una floreciente industria paulista. Un día recibió el gobernador la noticia de que había llegado a la ensenada de *Monte video* un barco de guerra portugués de cincuenta cañones y otros tres menores, de los que habían desembarcado trescientos hombres de guerra. Protestó ante el gobernador de la Colonia y éste le replicó que el maestre de campo Fonseca, jefe de la expedición, se había establecido allí "porque esas tierras pertenecían a Portugal".

Con 800 hombres y una flotilla de barcos rápidamente requisados cruzó Zabala el río. No tuvo necesidad de combatir porque los portugueses se retiraron a la noticia de su llegada, no sin dejar sentada una protesta sobre su mejor derecho.

La corona de España aprobó la actitud del gobernador por real cédula expedida en 1725, ordenando poblar ese sitio. Zabala hizo un llamamiento a los habitantes de la ciudad y campaña de Buenos Aires para que acudieran a aumentar el núcleo inicial, constituido por un grupo de familias gallegas y canarias a las que se otorgaron los privilegios de las Leyes de Indias para los vecinos fundadores. El 20 de diciembre se abrió el libro padrón de la ciudad y cuatro días después se señaló su jurisdicción. Con ello quedaba fundada la ciudad de Montevideo.

Esta fundación, si bien constituía por parte de España un acto decisivo de dominio sobre la margen oriental del estuario, no resolvía el problema principal. Lo expresaba bien el gobernador Zabala, al informar al Rey sobre la situación de estos puertos. "En ellos —decía— miran las naciones marítimas enemigas o rivales de España un gran canal predispuesto por la naturaleza para el comercio de contrabando y para recorrer todo el interior hasta el Perú. Halagados por las pingües ganancias que pueden hacerse, los mismos comerciantes españoles son conniventes, partí-

cipes y ocultadores de ese tráfico". Era sin duda poner el dedo en la llaga. Zabala sugería dos soluciones. O bien cortar de raíz ese comercio ilícito, para lo cual era indispensable apoderarse de la Colonia. O bien permitirlo, dándole una forma legal, mediante la creación de un gobierno en el Plata independiente del Perú.

Los portugueses, azuzados por Inglaterra, no se conformaron con la situación creada y hostilizaron por todos los medios la instalación española de Montevideo. Desde la Colonia, reforzada por los pobladores portugueses expulsados de la nueva ciudad, provocaron contra los vecinos de ésta una rebelión de los indios guenoas, que habitaban el centro y las costas marítimas del territorio, ayudándolos con provisiones y armas. Al mismo tiempo intensificaban una nueva corriente de contrabando por caravanas a Entre Ríos, que se repartía por todo el interior y fomentaban las invasiones de mocovíes y abipones, que en ese tiempo recrudecieron sobre Santa Fe, Corrientes y otras ciudades.

Los principales usufructuarios de esta situación eran, según lo hemos visto, los ingleses. Y en segundo término, sus cómplices e intermediarios del mercado local. Las mercaderías que aquéllos introducían clandestinamente al amparo de su privilegio legal llegaban hasta los mercados del Alto Perú, los más codiciados por su mayor densidad de población y riqueza. Lo que traía como contrapartida un drenaje correlativo y también clandestino de moneda metálica, que no pudo restañarse con las medidas tomadas para evitarlo. Las quejas por este abuso y los perjuicios que causa a la industria local y al fisco resuenan constantemente en la correspondencia de los virreyes del Perú, dirigida a los gobernadores del "puerto fatal" de Buenos Aires y a los ministros del Rey.

Al cabo, el gobierno de España se vio forzado a intervenir. Ordenó a sus barcos de guerra que dondequiera encontrasen navíos ingleses navegando en las costas de la América meridional los visitasen a fin de ver si llevaban mercadería de contrabando, en cuyo caso debían obligarlos a retroceder, avisando a los puertos de su destino para que no les diesen entrada. Las autoridades de los puertos recibieron la misma orden "de visita", con el agregado de que se decomisase la mercadería no autorizada y se impusiesen multas sobre los bienes de la Compañía.

El gobernador Zabala realizó en cumplimiento de estas órdenes importantes capturas, decomisando varios miles de cueros y otras mercaderías que dieron al erario una ganancia de más de

trescientos mil duros. En dos ocasiones, empero, los capitanes resistieron la visita y emprendieron el regreso sin desembarcar la carga.

La noticia de estos hechos provocó una gran indignación en Inglaterra, donde se afirmó que constituían una violación del tratado de Utrecht. Como España se mantuviese firme, se siguió la declaración de guerra. Portugal se abstuvo de intervenir. La causa confesada era el matrimonio reciente del príncipe español don Fernando con la infanta doña Bárbara de Braganza, que había dulcificado las relaciones entre los dos países y atenuado la tensión en el Plata. La causa no confesada, aunque más poderosa, era el interés de Inglaterra, a quien le convenía más la conservación del puerto franco de la Colonia que el apoyo militar portugués. Insistió, pues, en la neutralidad de su aliada, no atacó nuestro río y llevó sus hostilidades hacia el norte, mientras proseguía por vía lusitana su pacífico y abundante contrabando en el sur.

La guerra por la sucesión de la corona austríaca (1740-1748), que complicaría toda la política europea, hizo que las colonias permanecieran un tiempo incomunicadas. Buenos Aires se benefició con esta situación. El estado de guerra obligó a España a suspender el régimen de las flotas, por el peligro de que fuesen tomadas en el mar con sus inmensas riquezas. Como no era posible abandonar todo intercambio con las colonias, se hizo de práctica permitir el comercio sin restricciones a la marina particular, bajo la forma de barcos "de registro" provistos con despachos del consulado de Cádiz. La mayor parte de estos barcos preferían como destino el puerto de Buenos Aires, no sólo por ser acceso a un extenso y rico territorio, sino también por hallarse más apartado del teatro en que se desarrollaba la guerra marítima.

XII. LA FRONTERA ORIENTAL (*Tercera parte*) COMUNEROS Y GUERRA GUARANÍTICA

Mientras ocurrían los episodios del pleito contra la penetración portuguesa, seguía asimismo en todo el interior la guerra contra los indios rebeldes, quienes se conmovían y atacaban las poblaciones cada vez que éstas se desguarnecían al acudir con sus fuerzas útiles a rechazar la agresión del vecino oriental.

En tales ocasiones, era visible la colusión entre ambos enemigos. Los portugueses solían ayudar a los indios con provisiones y armas, como en el caso de los guenoas contra Montevideo y el de los abipones y mocovíes contra Corrientes y Santa Fe, y los indios, sumar sus fuerzas a la agresión lusitana, como los tupíes con los mamelucos paulistas en sus campañas contra las misiones. Ello hacía que las débiles ciudades próximas a la frontera —casi todas— debieran mantenerse perpetuamente en guardia contra sus atacantes posibles y realizar además eventuales salidas armadas con el objeto de escarmentarlos.

El problema del indio era un problema permanente y serio. Y no porque se hubiera descuidado la obra de conquista espiritual por la prédica del Evangelio, ni todos los medios de la persuasión pacífica. Al contrario. Las órdenes religiosas —en especial los jesuitas— realizaban una intensa labor apostólica. Numerosas tribus fueron pacificadas y reducidas por esos beneméritos religiosos, que penetraban entre los salvajes con riesgo de sus vidas y los decidían a la sumisión. Muchos de ellos hallaron el martirio. Además de sus misiones en el norte, los padres de la Compañía fundaron una para los pampas, junto al Salado del Sur, en 1740; y años después, otra para los mocovíes y otra para los tobatiñes, cerca de Santa Fe. Con todo, el estado de guerra era la regla, tanto por el natural belicoso de las tribus, cuanto por una circunstancia de hecho e inevitable: no encontraban en la civilización el aliciente que las compensase de haber perdido la tierra y la libertad.

Son numerosas las guerras de indios a comienzos del siglo XVIII. En el Paraguay, bajo los gobernadores Robles, Reyes y Bazán, se lucha, con éxito desigual, contra los payaguáes, enemigo fuerte y enconado. El gobernador Urizar, en el Tucumán, debe combatir contra los mocovíes y albaláes, y luego contra los ojotas y los lules, que al cabo se someten. Santa Fe —que ha encontrado

una fuente de riqueza en la cría de mulas para el mercado altope-ruano— es la que más sufre en este período; se ve constantemente acosada y en riesgo de desaparecer; deben acudir en su auxilio las fuerzas de Buenos Aires al mando de Bruno Mauricio de Zabala. A veces hay que usar, además de la fuerza, de una diplomacia refinada para ajustar la paz con los desconfiados caciques. Los sometimientos suelen ser efímeros y seguidos de nuevas rebeliones.

En el sur la situación es peor, si cabe. A partir de 1737 han recrudescido los malones de indios pampas y araucanos, cuyo dominio del caballo los hace ahora temibles por su movilidad: asaltan y saquean los establecimientos rurales hasta llegar, en ocasiones, a las puertas de Buenos Aires. Las débiles fuerzas que la población puede enviar para perseguirlos resultan impotentes, pues aquéllos se disuelven rápidamente en la pampa. Se recurre entonces en 1745 a la fundación de los primeros "fortines", con destacamentos junto a las zonas más pobladas, y se mantienen patrullas de milicianos para vigilar la frontera. Lo cual resulta insuficiente también porque los milicianos voluntarios no pueden sujetarse a una función que debe ser permanente. El Cabildo de Buenos Aires decide al fin, en 1752, la formación de un cuerpo de caballería ligera destinado a la lucha con la indiana y dividido en tres secciones, para defender la frontera de Luján, Salto y Magdalena. Son los "blandengues", primera milicia especializada y permanente de la ciudad.

La situación se complica con las rivalidades internas y los conflictos entre los españoles.

Junto a la guerra civil, unas veces expresa, otras latente, entre las autoridades religiosas y civiles, las fricciones entre recién llegados y pobladores viejos —peninsulares y criollos— por los asientos de los cabildos y los pleitos locales de España trasplantados al Nuevo Mundo, que se agudizan y asumen nuevos tonos bajo el sol tropical, surgirá otro motivo de discordia en la hostilidad de muchos gobernantes y pobladores de la Asunción contra los jesuitas de las misiones, cuyas poblaciones armadas constituyen el más fuerte baluarte opuesto a la expansión portuguesa.

Esta hostilidad obedece a varias causas: unas confesables, como la razón de Estado, que aconseja poner trabas a un poder excesivo contra el cual la autoridad civil es impotente; y otras inconfesables, aunque mucho más visibles y activas, como la ambición de tierras fértiles y mano de obra indígena gratuita por parte de los pobladores de Asunción, que añoran los tiempos pri-

mitivos en que todo era suyo, comparan su pobreza actual con la riqueza misionera basada en la labor del indio; miran a los jesuitas como intrusos y usurpadores y aspiran a un desquite. Sobre este fondo trabajan factores ideológicos y las hábiles intrigas de la corte portuguesa, empeñada en destruir el principal obstáculo para sus planes. No hay que olvidar tampoco la clásica enemistad de "los de oficio". Otras órdenes religiosas aspiran a suplantarse a los jesuitas en las misiones. El obispo Cárdenas ha dejado escuela.

La más grave perturbación de orden interno, a comienzos del siglo XVIII, fue la revuelta de los "comuneros" del Paraguay, que mantuvo convulsionada la provincia, con breves intervalos de paz, casi tres lustros.

Sabido es que el fermento comunero actuaba de antiguo en Asunción, fundada en gran parte por combatientes de Villalar que habían mostrado por primera vez su espíritu rebelde en la deposición de Alvar Núñez. Una cédula real de 1537, vigente todavía dos siglos después, permitía el nombramiento de gobernador por el vecindario en caso de vacancia. Asunción había usado y abusado de este privilegio, que era la raíz de sus disturbios interiores, y se había convertido en la ciudad más turbulenta del Río de la Plata, si no de todo el continente.

Uno de los conflictos corrientes entre el gobernador de turno y una parte del vecindario provocó a fines de 1722 el envío, por la Audiencia de Charcas, de un visitador autorizado para resolverlo. El pliego de su nombramiento lo autorizaba a deponer al gobernador en caso de encontrarlo culpable y a hacerse cargo interinamente del mando.

El licenciado José de Antequera, en quien había recaído la designación, llegó a la ciudad convulsionada y vio sin duda en ella la oportunidad de hacer un gran papel y de satisfacer su ambición insatisfecha en la tarea subordinada de curial y protector de indios. Decidió rápidamente el asunto que lo llevaba en el sentido de quedarse con el gobierno y sin mayor preocupación por las normas legales y procesales; después de lo cual se ocupó de formar, atizando hábilmente los descontentos, un gran partido que lo apoyase en sus propósitos. No carecía de elocuencia y dotes de simpatía, que fueron la razón de su éxito.

Como la Audiencia de Charcas, que al principio lo apoyaba, viese clara su intención de usurpar la autoridad gubernativa de manera indefinida, violando los fines de su comisión, decidió desautorizarlo, a instancias del Virrey. Antequera la desató, invo-

cando la decisión del "común", o sea del pueblo; si bien pretextaba al mismo tiempo su fidelidad en principio a las autoridades supremas, a cuya decisión última anunciaba que se sometería. Los jesuitas, como era natural, se resistieron a entrar en el juego del usurpador, que ya había empezado a atizar contra ellos la hostilidad del vecindario turbulento. A lo que replicó Antequera con la tentativa de repartir entre sus partidarios las tierras y los indios de las reducciones jesuíticas más próximas a la ciudad, las cuales debieron poner sus milicias en pie de guerra para defenderse. Hubo con tal motivo diversas acciones que ahondaron la división entre los asunceños y la Compañía, cuyos miembros fueron una vez más obligados a abandonar su establecimiento en la ciudad hostil.

Tras muchas vicisitudes que sería prolijo enumerar, la rebelión fue aplastada por las milicias de Buenos Aires y Santa Fe al mando del gobernador Bruno Mauricio de Zabala, con el apoyo de las milicias guaraníes. Antequera sería ejecutado en Lima pocos años después.

No se pacificó Asunción del todo con ello. El estado de agitación continuó durante el gobierno de don Martín de Barúa, quien mantuvo el fermento dejado por Antequera y alimentó la hostilidad ya inveterada contra los jesuitas mediante la promesa consabida del reparto de las misiones en forma de encomiendas, que constituía la ambición permanente y tradicional del vecindario.

El surgimiento de otro caudillo, llamado Fernando Mompo, provocaría un nuevo estallido al terminar el período gubernativo de Barúa, no ya disimulado como el anterior con protestas de acatamiento a la corona, sino francamente sedicioso. Sus promotores se proclaman comuneros y forman una junta que asume el mando; obtienen además la adhesión de Corrientes, que constituye otro "común". Se expulsa nuevamente a los jesuitas de Asunción y los insurrectos cometen el hecho irreparable de ajusticiar a don Manuel Agustín de Ruiloba, gobernador nombrado por la Corona, alzando en su lugar al obispo de Buenos Aires, fray Gabriel de Arregui, que está allí de paso para obtener su consagración episcopal de manos del titular asunceño. El pobre hombre acepta a la fuerza, aunque su función se limita a refrendar las resoluciones de la junta.

Esta rebelión fue igualmente aplastada por las fuerzas de Buenos Aires reforzadas por milicias de las misiones y al mando del mismo Zabala, que acababa de hacer entrega del gobierno a su sucesor legal don Miguel de Salcedo. Cinco de los cabecillas fueron ejecutados y quince desterrados. Fray Gabriel de Arregui había sido llamado por la Audiencia de Charcas para rendir

cuentas de su actitud, resultando absuelto. Esto ocurría en 1735.

* * *

El gobernador Salcedo llegaba provisto de órdenes rigurosas del Rey en el sentido de reprimir el contrabando y determinar de una vez por todas la jurisdicción de la Colonia, poniendo fin al avance portugués.

En 1733 se había firmado el llamado Pacto de Familia, por el que se restablecía la política borbónica trastornada un momento por Alberoni. Una de sus primeras consecuencias fue la ruptura con Portugal, iniciándose las hostilidades con el apresamiento de un barco de bandera lusitana el 29 de julio de 1735.

En octubre de ese año Salcedo puso sitio a la Colonia, con un ejército de mil hombres, en su mayor parte correntinos, y cuatro mil indios de las misiones. Poco después cerraría el cerco una flotilla llegada de España.

Antes de que la plaza —que había logrado reforzar su guarnición y abastecerse— pudiera ser tomada por asalto, se produjo el armisticio de París, por una de cuyas cláusulas, dictada por Inglaterra (que había intervenido con las demás potencias en la negociación), se establecía que la Colonia permanecería en poder de Portugal. ¡La eterna historia!

Pocos episodios importantes ocurren en los años que siguen, durante los gobiernos de Salcedo y de su sucesor don Domingo Ortiz de Rozas. Sólo merece mención, bajo el primero, la tentativa de expulsión de extranjeros residentes en la ciudad, especialmente portugueses, que no se ejecutó por ser la mayoría casados y avecindados (y poderosos) y porque sobrevino la paz; y bajo el segundo, en 1744, el censo de habitantes de la ciudad y campaña de Buenos Aires, que dio la cantidad de 16.091, entre blancos, indios, negros y demás "castas", de los cuales 10.056 vivían en la ciudad y el resto en la campaña.

Las cosas tomarían un cariz más dramático con la llegada de don José de Andonaegui, vizcaíno y brigadier de los reales ejércitos, grado al que había ascendido desde simple soldado por sus eminentes servicios en Argel y Sicilia. Se hizo cargo de sus funciones en 1745, pocos años antes de la muerte de Felipe V y la asunción del trono por Fernando VI, el esposo de Bárbara de Braganza.

Bajo su gobierno se organizó el cuerpo de blandengues, se estableció el primer correo regular a Chile y se fundó el gobierno político y militar de Montevideo, encomendado a don Joaquín

de Viana, con el objeto de vigilar más de cerca el avance portugués. Pero lo que lo hace especialmente memorable es la circunstancia desgraciada de haber tenido que afrontar la aplicación del Tratado de Permuta, con la larga y sangrienta guerra que sería su consecuencia.

Este tratado había constituido una hábil maniobra de los negociadores portugueses, amparados en el apoyo de la reina y la debilidad del rey, con el objeto de resolver ventajosamente para Portugal la situación que ya resultaba insostenible de la Colonia del Sacramento, enquistada en territorio ajeno y condenada a caer tarde o temprano en manos de España.

Sus estipulaciones quedaron resueltas en 1750. Por ellas se devolvía la Colonia definitivamente a España. Pero ésta debía entregar en compensación a Portugal todo el territorio comprendido entre los ríos Uruguay e Ibicuy (Río Grande del Sur), en el que se hallaban situados siete pueblos fundados y gobernados por los jesuitas y habitados por cerca de 30.000 almas. Los pobladores debían retirarse a la margen occidental del Uruguay, dejando en manos de sus odiados enemigos portugueses todas sus casas, iglesias, tierras y sementeras, por lo cual se les daría en compensación la suma de cuatro mil pesos por pueblo; ¡menos de un peso por cabeza!...

Los jesuitas reclamaron en todos los tonos y ante todas las instancias; protestaron ante el Virrey, la Audiencia, el Consejo de Indias, el confesor del monarca y el monarca mismo, apoyados en su argumentación por la opinión más esclarecida de la provincia. Pero fue en vano. Fue inútil que denunciaran la clara intención portuguesa de penetrar en el camino hacia el Perú para acercarse a las regiones ricas; fue infructuoso el repetido anuncio de que los guaraníes se hallaban resueltos a no aceptar el cumplimiento del inicuo convenio y que resistirían por las armas. El rey Fernando VI, el imbécil Fernando, se obstinó en que se actuara su real mandato y envió una comisión integrada por el marqués de Valdelirios y el P. Lope Luis Altamirano para hacerlo cumplir.

Andonaegui advirtió en seguida el error cometido y trató de dilatar la ejecución, con la esperanza de que la Corona, mejor informada, volviera sobre sus pasos. Sabía que tendría que luchar contra las abnegadas milicias guaraníes, cuya fidelidad a la monarquía española e innumerables servicios prestados hacíanlas acreedoras a un trato más honorable. Sus alegaciones tampoco tuvieron éxito. Debíó salir a campaña y apechugar con la desdichada faena de combatir al súbdito fiel y secular hermano de armas en provecho y con la ayuda del tradicional enemigo.

La lucha fue dura y sangrienta. Hubieron de prevalecer naturalmente las superiores dotes militares de Andonaegui, que le

dieron la victoria en un postrer combate librado el 10 de febrero de 1756, en el que murieron 1.500 indios.

* * *

Se estaban cumpliendo las disposiciones del tratado cuando llegó a Buenos Aires el sucesor de Andonaegui, don Pedro de Cevallos, ilustre general que se había hecho famoso en las guerras de Italia y que habría de demostrar sus altas dotes militares en la nueva empresa que iniciaba.

A poco de desembarcar se trasladó a las misiones y estableció su cuartel general en San Borja.

Pronto se hizo cargo de la situación y advirtió el error cometido y la doblez de la política lusitana, sobre todo lo cual empezó a informar minuciosamente a su gobierno. El jefe portugués, maestre de campo Gómez Freire, no sólo dilataba la ocupación del territorio que le correspondía, sino que avanzaba lentamente hacia el sur, tomando posiciones fuera de los límites establecidos en el tratado y lejos de devolver la Colonia, reforzaba subrepticamente sus defensas, fomentando desde allí un intenso contrabando. Ante esa evidencia, Cevallos pidió insistentemente a España el envío de tropas y armamentos, a la vez que se preparaba para la lucha reforzando la guarnición de Maldonado.

La circunstancia feliz de la muerte de Fernando VI, en agosto de 1759, hizo que se lo escuchara. El nuevo rey Carlos III se apresuró a anular el Tratado de Permuta. Por lo demás, el cambio de política con que se inauguró este reinado y la firma del nuevo "pacto de familia" hacían inevitable la guerra con Inglaterra y Portugal.

Las hostilidades se iniciaron en 1762. El 1° de octubre Cevallos puso sitio a la Colonia. El 1° de noviembre sus defensores capitularon y nuestras tropas entraron en la ciudad. El 6 de enero la guarnición de ese puerto rechazó victoriosamente el ataque de una flota angloportuguesa al mando del almirante Mac Namara, la que debió retirarse después de cuatro horas de intenso fuego, con la pérdida de la nave almirante. Mientras tanto Cevallos, en una brillante campaña, rendía las fortalezas de Santa Teresa, San Miguel y Río Grande, limpiaba de portugueses las misiones y dominaba toda la costa hacia el sur.

La guerra se había ganado. Pero estaba escrito que se perdería nuevamente la paz.

En las conferencias de París, en efecto, mantenidas en febrero de 1763 para liquidar la guerra de siete años (y en rigor, todo el intrincado período bélico iniciado en 1740 con la sucesión aus-

tríaca), la influencia de Inglaterra, verdadera y única ganadora en esa lucha, decidiría nuevamente la situación de la Colonia. Se le dejaba a Portugal. Por tercera vez, la población tres veces conquistada por las armas debía devolverse en virtud de un tratado.

La entrega se efectuó el 24 de diciembre de ese año. Lleno de amargura, Cevallos pidió su relevo del mando, que sólo obtendría tres años más tarde.



LIBRO II

LA CRISIS DEL IMPERIO

I. EL DESPOTISMO ILUSTRADO Y LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

La nueva dinastía había introducido un cambio muy importante en la política general de la Corona española hacia las posesiones del Nuevo Mundo.

Puede decirse, en un sentido general, que para los Austrias estos países eran provincias del vasto imperio, poblados por vasallos fieles e iguales en sus derechos a los de la península: idea que impregna toda su legislación de Indias. Para los Borbones no es así. Carentes del sentido imperial de sus antecesores, empiezan a mirar dichos territorios como colonias proveedoras de recursos y objeto de combinaciones diplomáticas, en que se las sacrifica corrientemente a los intereses continentales que defiende el "pacto de familia". Lo cual debía producir un cambio también en la actitud en los súbditos y el resquebrajamiento paulatino de la fidelidad.

A ello contribuiría el cambio completo de mentalidad ocurrido en el correr del siglo.

Ya nos referimos a la revolución iniciada con el racionalismo y el sensismo inglés y a las sutiles influencias que se difundieron a favor de la hegemonía de Versalles. El siglo XVII había sido un siglo de renovación intelectual, social y técnica. Dejaba como herencia el barómetro, el microscopio, el telescopio, el reloj de bolsillo y el de pared, la ópera italiana, el champaña y los helados, a lo cual hay que agregar los productos coloniales: la quina, el té, el café y el tabaco. Todo ello hacía la vida más fácil y dulce e impregnaba la atmósfera en que se inició el setecientos de una fe en las posibilidades del espíritu humano y de un optimismo que constituye su principal característica y que anima la obra de sus escritores representativos. Voltaire, Hume, Montesquieu, Quesnay, y luego Rousseau, Adam Smith, el abate Galiani y Beccaría, tan diversos en sus talentos y sus vocaciones se unifican en la misma creencia en la capacidad de la mente humana para transformar benéficamente la sociedad y las costumbres y en la esperanza de que la sociedad, para felicidad común, ha de ser reformada por los filósofos.

Es de advertir que la palabra filosofía adquiere en estos años un sentido muy especial. Ser filósofo no significa especular sobre

los primeros principios de la metafísica, sino negar la metafísica como cosa atrasada y preocupación inferior. El racionalismo y el sensismo derivan en culto de la "razón natural" y de la experiencia, así como la ciencia empírica conduce a desechar la especulación y a procurar la utilidad, en forma de bienes materiales asequibles y goces de la vida. El "filósofo" es principalmente político y economista; da recetas sobre el modo de gobernar las naciones y el arte de enriquecerlas. Se trata de transformar el mundo y de procurar la felicidad de los hombres por la aplicación de normas racionales. Para ello es necesario antes que nada acabar con la rémora del oscurantismo y la superstición: es decir, con la Iglesia y su influencia sobre los espíritus.

Más o menos explícita, tal es la tendencia general del pensamiento del siglo XVIII, siglo del ateísmo y la peluca, del "hombre natural" y la economía política. En ello deriva la corriente anticatólica vigente en Francia, hija a su vez del protestantismo en su doble aspecto de jansenismo y regalismo y fortificada por la admiración del modelo inglés. La Iglesia Católica aparece como el obstáculo para todo adelanto, como la enemiga natural de "las luces". Se ataca pues a la Iglesia en nombre del progreso: "filosofía" se opone a tradición. Se atacan también, atribuyéndolas a ignorancia supersticiosa, las normas morales no fundadas en la "razón natural": "filósofo" es sinónimo de "libertino".

Esa conciencia de poseer el secreto de lograr la felicidad humana por la aplicación de los recursos de la filosofía era sin duda un gran estímulo para la acción. La convicción de que había que cambiarlo todo hizo de este siglo un siglo de reformas. Y cuando los pueblos se resistían a aceptar innovaciones contrarias a sus arraigadas costumbres o a sus sentimientos profundos, se les imponían por la fuerza. La resistencia se atribuía a ignorancia del populacho supersticioso sobre la fórmula de su propia felicidad, y no podía admitirse de ningún modo que esa ignorancia "oscurantista" tuviera derechos contra la razón natural y las luces del siglo. Esto fue lo que se llamó "despotismo ilustrado". Aunque la lógica de los principios y el mismo modelo inglés —admirado por Montesquieu y Voltaire— llevaron a la aceptación teórica del republicanismo como régimen ideal, o a la monarquía templada por el parlamento, la filosofía del siglo XVIII transigió corrientemente con los monarcas absolutos siempre que pusieran su poder al servicio de las luces. Voltaire fue el mentor de todos los tiranos de Europa y el amigo íntimo y apologista del conde de Aranda.

Tal era la ideología que había de imponerse en los altos círculos de España bajo el reinado de Carlos III.

En la aceptación lisa y llana de esa influencia extranjera estaba implícita la renuncia al imperio y el triunfo correlativo de las potencias rivales, desde que la propaganda oficial empezó a admitir la duda sobre la legitimidad de la Conquista. La "leyenda negra" circuló libremente en España y se rehabilitó la memoria de Antequera como la de un héroe de la libertad. Todo lo cual habría de reflejarse en las circunstancias internacionales. La paz de París de 1763 (la paz de William Pitt) cambiaría la faz de la historia, iniciando la dominación mundial de Inglaterra.

* * *

Las consecuencias ulteriores de esa política no se advertían en los primeros años del gobierno de Carlos III, que dieron la impresión de un resurgimiento vigoroso.

Ello se debía especialmente a la larga paz que había gozado la nación bajo Fernando VI, que se tradujo en un notable aumento de la población (de seis a diez millones) y en la riqueza del erario. La holgura económica permitiría la realización de las reformas benéficas que prestigiaron el reinado de su sucesor: impulso a la agricultura, la minería y la industria, construcción de caminos, creación de academias, bibliotecas y museos y fundación de escuelas de primeras letras.

Este era, sin duda, el lado bueno del progresismo. El Rey, acompañado de ministros extranjeros como Grimaldi y Esquilache, aprovechaba la prosperidad pública para introducir adelantos indispensables, sobre el patrón de las cortes borbónicas y de acuerdo con los principios de los filósofos en boga. Las guerras y las penurias habían mantenido a España postergada en muchos aspectos de progreso material y técnico con respecto a los otros países de Europa.

Pero los beneficios de orden material (resultado de la aplicación de los principios del mercantilismo colbertiano a unas finanzas saneadas por una política prudente) no eran más que la justificación externa de los propósitos últimos de la tendencia dominante, que consistían en la eliminación de la superstición en nombre de las luces.

La operación requería cautela. En un país de ortodoxia tan recelosa, la lucha contra la Iglesia no podía efectuarse en forma abierta, sino en forma solapada, mediante un lento avance sobre sus tradicionales prerrogativas. Esta fue la función del "regalismo", traducción española del galicanismo, o sea la defensa de las tradiciones de la Iglesia nacional contra el Papado, que en España se manifestó como la tentativa de extender los fueros del pa-

tronato real hasta los extremos de una verdadera usurpación de los derechos de la Iglesia por el poder civil. En virtud de una de esas paradojas frecuentes en la historia, la tendencia jansenista (reacción contra la moral laxa atribuida a los jesuitas) se había volcado al regalismo después de su condenación por la bula *Unigenitus* y coincidiría ocasionalmente en la lucha con los "libertinos", despreciadores de toda moral.

* * *

La expulsión de los jesuitas de los principales países de Europa y de las colonias americanas en la segunda mitad del siglo XVIII, seguida de la supresión de la orden por el papa Clemente XIV, es un episodio histórico complejo, en el cual una batalla de tipo ideológico se utilizó hábilmente para la obtención de fines concretos de orden temporal.

Es posible que la Compañía haya cometido errores, empezando por la acumulación de un excesivo poder, y que ellos le suscitaran poderosas enemistades dentro y fuera de la Iglesia; como también que haya abusado de la situación preponderante de que gozaba en las cortes y el consejo de los monarcas. No se explicaría la persecución de que fue objeto si no hubiera sido, a la vez, el más firme baluarte de la catolicidad mundial y el principal obstáculo que se oponía al filosofismo en su tentativa de ganar las conciencias y dominar el mundo.

No hay que olvidar que a comienzos del siglo aparece en Europa la Masonería, sin cuya acción oculta y tesonera muchos acontecimientos históricos resultarían inexplicables. Bajo la apariencia de una agrupación filantrópica inspirada en principios "racionales", unió desde el principio en su seno a todas las fuerzas hostiles a la Iglesia. Hay quienes exageran su influencia y quienes la menosprecian: el propio secreto en que se envuelve impide la información minuciosa y explica la divergencia de opiniones sobre su índole y finalidad. Dos cosas son, sin embargo, evidentes. En primer término, su filiación anticatólica, notoria desde el comienzo y que provocó sus condenaciones por Clemente XII en 1738 y Benedicto XIV en 1751. En segundo término, la influencia que adquirió en España y América durante este siglo y el posterior y que iremos viendo en el curso de esta historia. La primera logia de Madrid se había abierto en 1726.

Es sintomático que para remover a la Compañía de Jesús se coaligaran libertinos y masones con los jansenistas ansiosos de venganza; y que contaran para ello con la tolerancia de algunas órdenes rivales desplazadas, con el patrocinio de los canonistas

defensores del privilegio monárquico y eventualmente, con la bendición de algunos prelados regalistas, que debían sus mitras al derecho de patronato y que acaso ni sospechaban (en la confusión del momento) la causa verdadera que servían. Esto no habría sido posible sin la confabulación de poderosos intereses temporales que actuaban por medio de las logias. Entre ellos parece evidente el de Portugal (y por consiguiente, de Inglaterra) en el sentido de proseguir su penetración en la América meridional, para la cual chocaba con la resistencia de las misiones jesuíticas, que habían hecho fracasar la aplicación del tratado de Permuta.

De Portugal partió sospechosamente el primer golpe. Era ministro del rey Juan Manuel 1° el marqués de Pombal, prototipo del "ilustrado" enemigo de la Iglesia, amigo de Voltaire con quien se cartaba y gobernante despótico, que se había propuesto poner a su país a la altura del siglo. La guerra guaranítica, que se atribuía a instigación de los Padres, lo enfureció contra la orden jesuítica y no halló mejor recurso para atacarla y obtener la aquiescencia del monarca, que acusarla de complicidad en un atentado contra éste.

Ello ocurría en 1759, a poco de conocerse la anulación del tratado de Permuta por Carlos III, que acababa de asumir el trono. Los jesuitas fueron violentamente arrancados de sus casas e iglesias y expulsados del país y sus colonias y algunos encarcelados. El ministro desencadenaría a renglón seguido una violenta campaña contra la Iglesia.

En Francia, Choiseul, ministro de Luis XV e instrumento de los filósofos de la Corte, con el apoyo del Parlamento de París, nido de jansenistas, acusó a los jesuitas de peculados y de aspirar a la monarquía universal. Consiguieron vencer al cabo la resistencia del Rey, quien suprimió la orden en Francia en 1762.

España no tardaría en seguir el ejemplo. El pretexto que se invocó fue de los más peregrinos. El 26 de marzo de 1766 la plebe de Madrid se había amotinado contra la tentativa de reforma indumentaria de uno de los ministros italianos de Carlos III, el marqués de Esquilache, quien había ordenado que se recortasen las capas y se sujetase el ala de los sombreros madrileños en forma de tricornio, lo que era según parece una exigencia del progreso, pues así se usaban en Francia. Con esa distracción pretendía de paso el ministro disimular sus peculados en materia de abasto. El motín no tuvo consecuencias. Pero cayó Esquilache y fue reemplazado por D. Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda y Gran Maestre de la masonería española. Este aprovechó la ocasión para acusar como instigadores del alboroto a los jesuitas, contra quienes, después de un simulacro de procedimiento, se expidió un decreto de expulsión, por "razones que se reservaba el real ánimo" del monarca.

En un solo día, a la misma hora, todos los establecimientos de la orden fueron ocupados por tropas y los Padres llevados a los puertos más próximos y embarcados para Roma.

La orden de expulsión incluía desde luego a las colonias, lo que no debe extrañarnos si se tiene en cuenta que el interés de la operación consistía en gran parte en remover el obstáculo que las misiones representaban para las fuerzas que movían los tite-res. El encargado de ejecutarla en el Río de la Plata fue don Francisco de Paula Bucarelli y Ursúa, teniente general de los reales ejércitos y caballero comendador de Almendralejo en la orden de Santiago.

Por la índole de las funciones de confianza que se le encomendaban, no hay duda de que se había elegido bien al personaje, que era naturalmente un digno secuaz del conde de Aranda, "progresista" e iniciado en los misterios de las logias. Según el decreto de su designación, debía realizar los procedimientos contra los jesuitas el 21 de julio. Impaciente, adelantó la fecha y allanó el 2 la residencia de Buenos Aires, ordenando que inmediatamente se hiciera lo mismo en las de Montevideo, Córdoba y Santa Fe.

En mayo del año siguiente se dirigió a las misiones del Paraguay, acompañado de fuertes contingentes militares. "Voy a emprender la conquista de los pueblos de misiones —le escribía al conde de Aranda— y a sacar a los indios de la esclavitud y la ignorancia en que viven". En tres meses liquidó su comisión, cometiendo en el curso de ella tales abusos que el Consejo Extraordinario de España debió desautorizarlo. Los padres fueron extrañados y las misiones puestas en manos de administradores particulares y frailes sin vocación ni experiencia misional, que en poco tiempo provocarían el desbande de los indios y la indefensión de la frontera.

Sobre los procedimientos de Bucarelli queda el testimonio de don Pedro de Cevallos, que lo acusó de ladrón ante la Corte. "Sus robos, sus maldades —afirmó— carecen de ejemplo. Aseguran que, por vía de la Colonia, remitió a España ochocientos mil pesos". Y refiriéndose a su desempeño en el norte, agregaba que había ido allí "a robar" y que había despojado "de sus alhajas de oro y plata a los templos". Por lo que se refiere a su actuación en Buenos Aires, se sabe que fue muy impopular por la arbitrariedad de su gobierno, acarreándose la odiosidad del vecindario.

¿Cuáles serían las consecuencias de la expulsión de los jesuitas? Las que eran de esperar. Los portugueses penetrarían a todo lo largo de la frontera, no obstante la paz y colaboración vigente entonces entre las dos coronas, de acuerdo con su táctica inveterada de adquirir posesiones para negociarlas después. No sólo avanzarían en Río Grande (cuya guarnición española se sublevaba por falta de pago), sino también por el norte, en las provincias de Moxos y Chiquitos, cubriendo así nuevas etapas en su camino hacia el Perú.

De esta secuela de desastres da testimonio años más tarde el editor de "Noticias secretas de América", cuyas informaciones sobre la conducta de funcionarios y clérigos de Indias hacen una honorable excepción con los padres de la Compañía: "Otra consecuencia de la expulsión de los jesuitas ha sido el engrandecimiento de los portugueses en el Brasil. Mientras aquéllos ocuparon las Misiones, éstos no usurparon nada, y cuantas veces lo intentaron por el Marañón, Paraná y Uruguay, otras veces salieron escarmentados. Pero apenas fueron removidos los jesuitas, los portugueses avanzaron por el Marañón, abriéndose camino para invadir a Quito cuando quieran. Poco después con la fundación de Matogrosso, se han establecido casi dentro de Moxos y Chiquitos. Aún no habían pasado treinta años de la expulsión cuando se hicieron dueños de casi todos los pueblos de las misiones guaraníes. La ocupación de estas usurpaciones ha facilitado últimamente a los brasilienses (sic) la ocupación de la Banda Oriental, la parte más apreciable de toda la América. Todo lo referido puede justificar la proposición de que, expeliendo Carlos III a los jesuitas de la América, dejó expuesta la seguridad e integridad de sus dominios de ultramar".

Por lo que se refiere a los pobladores, los testimonios de la época revelan que la expulsión provocó un sentimiento de estupor y una sensación de desamparo ante el poder injusto. Ni siquiera quedaron satisfechos los enemigos de la orden, que aspiraban a gozar de sus campos y sementeras. Las propiedades jesuíticas se vieron libradas a la rapiña, sin que la corona pudiera obtener los beneficios que se prometía, enredadas entre las uñas de los administradores ocasionales —el gobernador y sus paniaguados— y expuestas a la penetración enemiga que no habría de tardar. En pocos años, la selva recuperaría su dominio sobre los campos labrados y de los poblados y templos sólo se alzarían ruinas.

¿Qué fue de los indios? Muchos cayeron en la degradación, debido sobre todo a la introducción en sus pueblos del alcohol antes prohibido y retrogradaron a la vida selvática. Muchos en cambio se incorporaron a la vida civilizada. Queda un testimonio de Azara que revela el resultado civilizador de la obra de los je-

suitas. Afirma que los indios desertaron de los pueblos "y andan libres, mezclados con los españoles, viviendo de su trabajo". "A esta deserción —agrega— se debe el haber poblado las campañas de Montevideo y la mayor parte de los adelantamientos que se admiran en la agricultura, navegación, comercio y número de ganados mansos".

II. LAS MALVINAS. EL VIRREINATO. DON PEDRO DE CEVALLOS

La política inglesa de dominación de las rutas marítimas debía llevarla a tomar posiciones en el océano austral.

Ya nos referiremos a las primeras incursiones de piratas por nuestras costas patagónicas durante el siglo XVII. Francis Drake, Cavendish, John Davis merodearon a lo largo de ellas y las hallaron inhospitalarias y poco apetecibles. No se hizo cuestión entonces de las Malvinas, descubiertas por Sebald de Wart en 1600; Inglaterra tenía empresas más urgentes que afrontar en su propio hemisferio. Hay que llegar hasta 1746 para encontrar la primera mención de las islas en la literatura marítima inglesa. Lord Anson, en su *Viaje alrededor del mundo* les atribuye una "prodigiosa importancia" como puesto estratégico, al mismo tiempo que, con visión profética, señala la importancia de la Patagonia para una intensa explotación ganadera.

No escapaba a las autoridades españolas la posibilidad de esa codicia enemiga. Para prevenirla, ya Sarmiento de Gamboa había fundado en el estrecho los establecimientos de Nombre de Jesús y Real Felipe, que fue imposible sostener. Constantemente se repite, en la correspondencia de virreyes, gobernadores y misioneros, la idea de tomar posiciones en los desiertos australes, que no puede realizarse por falta de medios. Es, por lo demás, la región misteriosa que alberga a la ciudad de los Césares, llamada indistintamente Trapalanda, Elelín, Yungulo. Después de Garay y Hernandarias, la exploran los jesuitas: el padre Cardiel en 1745, y el padre Falkner más tarde.

En 1764 —ya resueltos victoriosamente por la paz del año anterior sus asuntos del hemisferio boreal— resolvió Inglaterra poner en práctica las ideas de Lord Anson. Una expedición al mando del capitán John Byron (abuelo del poeta) tomó posesión de las islas Malvinas en nombre de su rey. Casi simultáneamente se había establecido en otro lugar del archipiélago otra expedición francesa al mando del capitán Bougainville. En conocimiento de estos hechos y tras de entablar las correspondientes reclamaciones diplomáticas, la Corona de España ordenó al gobernador Bucarelli el desalojo de los intrusos.

Con los franceses no hubo problemas. Ligados a España por el "pacto de Familia" no opusieron reparos al derecho español. Los ingleses, en cambio, obligados a capitular después de un simulacro de resistencia, protestaron por el acto de fuerza y amenazaron con la guerra si no obtenían satisfacción. Carlos III tanteó el terreno diplomático, encontrando una gran frialdad por parte de Francia para seguirla en la aventura: Choiseul se inclinaba a una política prudente. Hubo de llegarse a un arreglo que dejaba a salvo el prestigio británico. Los ingleses se instalarían nuevamente en el lugar de donde habían sido desalojados, sin menoscabo de los derechos de España, que ésta se "proponía discutir". Aquéllos se comprometían, por su parte, a abandonar oportunamente el establecimiento en las islas *as of little value*, es decir, porque no les interesaba. . .

Así lo harían, en efecto, cuatro años más tarde, cuando envueltos en la guerra con sus colonias, creyeron asegurar de este modo la neutralidad de España.

* * *

A los cuatro años de su gobierno, Bucarelli pidió el relevo y fue reemplazado por don Juan José de Vértiz y Salcedo, brigadier de los ejércitos reales y caballero de Calatrava, que había nacido en México y prestaba servicios distinguidos en las campañas de Italia y Portugal. Se hizo cargo del mando el 4 de setiembre de 1770. El problema urgente que le correspondía afrontar era la insistente penetración portuguesa que se realizaba a favor de la indefensión de la frontera y no obstante la paz vigente entre ambas metrópolis.

Vértiz era un progresista de la escuela de Floridablanca y Campomanes, regalista a machamartillo y amigo de las luces. No es de extrañar, por consiguiente, que comenzara su gobierno con un gran ímpetu administrativo, fundando un teatro público (lo que le ocasionaría el primer conflicto con el clero) y una escuela de gramática y otra de primeras letras, y que estableciera comisarios de barrio y hospitales antes de iniciar las hostilidades contra el invasor portugués.

En la tarea urgente y dramática que debió encarar desde el comienzo, su actuación fue débil y poco lucida. Todos los gobernadores anteriores a la expulsión de los jesuitas, con los solos recursos del territorio, habían sabido hacerse respetar y temer por el vecino. Vértiz se puso en campaña desde Montevideo a fines de 1773, y después de más de un año de acciones indecisas, empezó a perder posiciones y a plegarse ante las tropas lusitanas. Estas

se apoderaron de San Pedro de Río Grande, Pelotas, Santa Tecla, Santa Teresa y Castillos, llegaron hasta Uruguayana y San Borja y fortificaron sus posiciones en cada región conquistada. En Buenos Aires se murmuraba de la desdichada actuación del gobernador, de quien se decía "que no servía ni para la paz, ni para la guerra".

Podrá alegarse en excusa de Vértiz que no recibió la ayuda que reclamaba del Virrey del Perú, ni tampoco de España, porque las circunstancias internacionales se oponían a ello, mientras que sus adversarios eran constantemente reforzados por tropas de Lisboa. Pero no hay que olvidar que Portugal estaba entonces dominado por el marqués de Pombal, que era uno de los más conspicuos santones del progresismo europeo; por lo cual resulta difícil decidir si la pasividad del gobernador se debió a debilidad real o a una natural condescendencia con la política del "hermano" que obraría acaso en cumplimiento de los planes ecuménicos de la secta.

* * *

Las cosas habrían de cambiar con la ruptura de las hostilidades en Europa. Francia y España apoyarán la insurrección de las colonias inglesas de América del Norte. Carlos III resuelve liquidar la cuestión del Río de la Plata y nombra para ello nuevamente al conquistador de la Colonia, mariscal de campo don Pedro de Cevallos.

La agravación del peligro portugués decide a la Corona a poner en práctica un proyecto que desde muchos años atrás venía incubándose en los consejos reales y que reaparecía como un anhelo en la correspondencia de los funcionarios del Plata a partir de Ramírez de Velasco: la creación de un gobierno autónomo en la región austral, con igual categoría que los de México y Perú. En virtud de este pensamiento estratégico (más que económico o político) Cevallos será designado —con gran sigilo, pues no interviene los cuerpos asesores, y con carácter interino— Virrey y Capitán General de todo el territorio. Vértiz ha de quedar como su subordinado en las funciones de gobernador de Buenos Aires.

Con la erección del Virreinato se inicia una nueva época para el Río de la Plata. Ya no seremos una dependencia lejana de Lima, sino una entidad política distinta, embrión de una nación futura.

* * *

Don Pedro de Cevallos haría honor a sus ilustres anteceden-
tes. Con todo empeño gestionó los elementos necesarios para el
éxito de su empresa en una campaña fulminante: se proponía dar
el golpe de gracia a la dominación portuguesa en el Plata, y aliado
con el Perú, reducir a los usurpadores a los límites de Tordesillas.

La campaña fue rápida y decisiva. El 13 de noviembre zarpó
de Cádiz en una escuadra de 117 navíos con casi 9.000 hombres
de pelea. En febrero llegó a la isla de Santa Catalina, que ocupó
sin combatir y de donde ordenó a Vértiz que se aproximara a Río
Grande, al que pensaba atacar por el norte. Los vientos contra-
rios le impidieron el desembarco y debió cambiar de plan. Siguió
por mar hasta Montevideo, de la que hizo su centro de operacio-
nes; de aquí se dirigió a la Colonia y la sitió. La plaza se rindió a
discreción a los tres días, con sus buques y material de guerra.
Era la cuarta vez que caía en nuestras manos desde su fundación,
y el Virrey estaba decidido a que fuese la última. Escarmentado
por los antecedentes y a fin de precaverse contra los azares de la
diplomacia, decidió (de acuerdo con un plan previamente apro-
bado por la Corona) arrasarla hasta sus cimientos, demoliendo las
fortificaciones y la mayor parte de los edificios. Sólo quedaron
en pie las iglesias y alguna que otra casa para uso de la guarnición.
Después de lo cual se puso en camino hacia Río Grande.

Cuando estaba al llegar e iniciadas las primeras escaramu-
zas, lo sorprendió el anuncio de que se había firmado la paz con
Portugal.

El 1° de febrero de 1777, en efecto, había muerto el rey
don José 1°, y con él habían caído Pombal y su partido. El poder
quedaba en manos de la reina viuda; o mejor dicho (ya que se tra-
taba de una incapaz) en manos de la reina madre, hermana muy
querida de Carlos III. Este vio en ello la ocasión de sustraer a Por-
tugal de la influencia inglesa, aprovechando la situación difícil en
que se hallaba Inglaterra por la rebelión de sus colonias. Convocó
a una conferencia en San Ildefonso, donde se estipuló la paz,
completada más tarde por el tratado del Pardo, que incluía una
alianza política y mercantil.

De acuerdo con los antecedentes de la política borbónica
y esta vez con la esperanza concreta de recuperar Gibraltar y,
eventualmente, unir de nuevo las dos coronas— Carlos III sacrifi-
caba en San Ildefonso inmensos territorios en América a trueque
de ventajas en el continente. Contra aquellas esperanzas y la Co-
lonia del Sacramento, reconocía a Portugal las tierras del Río
Grande entre los límites naturales del Yaguarón y del Yacuí.
¡Era, en suma, la reproducción casi sin variantes del tratado de
Permuta que había anulado al iniciar su gobierno y que acep-
taba ahora, cuando sus armas victoriosas podían imponer las
condiciones de la paz!

La guerra fue poco feliz para la metrópoli y las esperanzas
no se cumplieron. El almirante inglés Rodney se apoderó de los
convoyes que transportaban los tesoros americanos, rechazó el
ataque al peñón y derrotó a la escuadra española frente a Cádiz,
no obstante haberse alcanzado en ese momento cierta paridad
naval, pues Francia tenía ochenta navíos de guerra y España se-
senta, contra ciento cincuenta de Inglaterra. La lucha seguiría
con diversas alternativas hasta el tratado de Versalles de 1783,
por el cual se reconocía la independencia de Estados Unidos y
quedaba frustrada para España la esperanza de recuperar Gibral-
tar, que la había llevado a entrar en la alianza (si bien ganaba la
Florida y Menorca), a la vez que se restablecía en Portugal la
influencia británica.

La única consecuencia importante en el Plata fue la recu-
peración definitiva de la Colonia. Pero la extirpación del contra-
bando, que debió haber sido su consecuencia —según los cálcu-
los de la Corona— tampoco se produjo. El comercio ilícito hallaría
otras vías. Introducidas por puertos brasileños, las mercaderías
serían transportadas por tierra brasileña, sin obstáculos, hasta las
márgenes del Uruguay, desde donde se repartirían por todo
nuestro territorio.

Después de la paz, o más bien tregua, de San Ildefonso, era
natural que se prescindiera de los servicios de don Pedro de Ce-
vallos, cuya permanencia aquí sólo tenía sentido en función de
la guerra con el portugués. Se lo sacrificó en aras de la amistad
fraterna. Liquidado el problema ¿y en qué forma! estaba de más
el heroísmo y empezaba la administración. Para la tarea de em-
pedrar las calles y propagar las "luces" —simbolizadas adecuada-
mente por el alumbrado público a candil— bastaba don Juan José
de Vértiz y Salcedo, grato a los portugueses por sus oportunas
retiradas. Fue nombrado, en efecto, y entró a gobernar como
Virrey el 12 de junio de 1778.

El triunfo había dado a Cevallos una enorme popularidad,
que se manifestó en el entusiasta recibimiento de que lo hizo
objeto el pueblo de Buenos Aires, con festejos y convites que du-
raron cinco días. Pasado el primer entusiasmo, se vio que no ha-
bía unanimidad y que el vecindario se hallaba escindido en dos
bandos, uno de los cuales, afecto al gobernador Vértiz (que se
hallaba en Montevideo a la espera de los acontecimientos) lo acu-
saba al Virrey de adhesión al "partido jesuítico" desde los hechos
de Misiones. Aparte de esta motivación "progresista" se le acha-

caban deslices de orden privado ¡porque el pobre héroe, más que sesentón, se había enamorado de una porteña! Los ideólogos "libertinos" solían ser muy puritanos en materia amorosa y consideraban el hecho imperdonable.

No se sabe en qué medida influyó la razón de Estado y en qué medida la intriga aldeana para la sustitución de Cevallos, quien fue llamado a España en 1778, antes de alcanzar los siete meses de permanencia en la ciudad. La verdad es que no le cuadraba la tarea de polizonte y edil que reclamaban los tiempos nuevos y que tan concienzudamente desempeñaría su sucesor.

Se cita a menudo como el saldo más auspicioso del gobierno de Cevallos su intervención en la confección de la futura Ordenanza de Intendencias, que habría obedecido a sus sugerencias y el decreto que permitió la libre internación de las mercaderías provenientes de barcos españoles por el puerto de Buenos Aires. Simple disposición administrativa la primera, al alcance de cualquier amanuense, y medida de emergencia para hacer frente al estado de guerra la segunda, no añaden nada a su gloria.

Esta se funda sobre todo en su comprensión política del problema de la frontera portuguesa y en su decisión para resolverlo una y otra vez, como gobernador y como virrey; en la energía con que se opuso a los sucesivos errores de la corona, por vía de persuasión y consejo, defendiendo siempre la buena causa, como en ocasión del tratado de Permuta y más tarde, cuando la expulsión de los jesuitas; en la honradez con que sostuvo sus opiniones y desafió la impopularidad y la desgracia en la corte, en sus eximias dotes de militar, victorioso en todas las batallas. Todo esto le da cierto carácter anacrónico y admirable, en una época en que se pierde el sentido de la grandeza y las consideraciones de orden material empiezan a sobreponerse a las de honor.

Su reemplazo por Vértiz —símbolo de la paz idílica con Portugal, después de haberse mostrado como imagen de la derrota— es la mejor definición americana de la España de Carlos III.

III. LA ÉPOCA DEL VIRREINATO. VÉRTIZ

La época del Virreinato del Río de la Plata coincide con el auge del iluminismo impuesto por la corte de Carlos III y la acción de sus ministros Aranda, Floridablanca y Campomanes. Goza por consiguiente del privilegio de una literatura apologética y algunos de sus personajes han adquirido categoría de mitos. Vértiz, por ejemplo, encarna el Progreso: don Vicente Fidel López lo considera un precursor de Martín Rodríguez, ¡máximo elogio bajo su pluma!

La verdad es que el bienestar y la prosperidad eran anteriores a la instauración del Virreinato y del comercio libre, y que se originaban en la política de restricciones al comercio (o sea en la supuesta "tiranía" del monopolio) y en el trabajo y la industria de los pobladores. Así como los adelantos impuestos por el liberalismo en España (alumbrado público, escuelas, museos), sólo habían sido posibles por la situación floreciente del erario a causa de la paz fernandina, la "obra" de Vértiz, tan alabada, obedecería a la concurrencia de circunstancias igualmente felices, que lo harían heredero de un estado próspero y le proporcionarían los recursos necesarios para realizar sus planes.

En los últimos treinta años, Buenos Aires había duplicado su población. Contaba en 1778 con 24.000 habitantes blancos y alrededor de 7.000 entre negros, indios y mezclas. Su exportación de cueros alcanzaba a 150.000 por año. Se habían establecido ya curtidurías y se empezaban a salar las carnes para la exportación; había asimismo tejedurías y fábricas de gelatinas. La gobernación de Tucumán llegaba a 150.000 habitantes, de los cuales 34.000 blancos, otros tantos indios y el resto negros, zambos y mulatos. Cuyo tenía 22.000 almas, 8.000 sólo en Mendoza. En todas partes se habían instalado industrias, que estaban en pleno y próspero desarrollo. En Catamarca no paraban los telares y las mujeres elaboraban paños finos, manteles y servilletas, además de ropas para el culto y los clásicos ponchos. En Corrientes se hacían tejidos de lana para frazadas y mantas, así como muchas variedades de bayetones. En Tucumán y Mendoza se fabricaban las carretas y otros rodados necesarios para el transporte interprovincial de mercaderías y pasajeros. En el Paraguay y Corrientes, desde la época de la Conquista había astilleros que

construían toda clase de embarcaciones con las maderas de la zona. Y no obstante las prohibiciones reales, se cultivaba la vid en Catamarca, La Rioja y Mendoza, cuyos vinos y aguardientes circulaban por todo el territorio, siendo preferidos por su calidad a los extranjeros. A todo esto se agregaban las numerosas artesanías, desde los plateros, herreros y ebanistas hasta los "santeros" indígenas, que proveyeron a la vida de las ciudades coloniales los innumerables objetos de uso común suficientes para sus limitadas necesidades.

Tal era la situación económica de este territorio cuando asumió el poder el virrey Vértiz. El primer problema que debió afrontar fue el del indio.

Este se encontraba en los términos de siempre, salvo en el Tucumán, donde la cordillera no era ya peligro por la casi eliminación de los indios de guerra y el avance de la población blanca. Hubo en los comienzos del Virreinato algunos amagos de los indios chaqueños y recrudecieron sobre el Paraguay los robos de hacienda de los bandidos portugueses, ahora sin temor a las milicias guaraníes. La frontera brava seguía siendo, no obstante, la del sur, por las incursiones de pampas y araucanos respaldados por el inmenso desierto. Las seiscientas plazas del cuerpo de "blandengues" resultaban insuficientes para impedir la repetición periódica de los malones, que amenazaban sobre todo los arcos del camino a Mendoza y Chile.

Don Pedro de Cevallos se había impuesto del problema, poco después de la toma de la Colonia. Con el genio estratégico que lo caracterizaba, advirtió que la única solución era una política enérgica, que escarmentara para siempre a las tribus, relegándolas a las remotas regiones australes. Proyectó, por consiguiente, con aquiescencia del monarca, una campaña fulminante, con todos los recursos militares de que se disponía, atacando simultáneamente en tres columnas, desde Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, en una guerra sin cuartel. Su sucesor, después de muchos cabildeos, desecharía el plan por considerarlo irrealizable. Se limitó a reforzar y adelantar algo la línea de fronteras, que en 1781 quedó trazada por los fortines de Chascomús, Monte, Lobos, Navarro, Luján, Areco, Salto, Rojas, Mercedes y Melincué.

* * *

La aplicación del Reglamento del Comercio libre —que autorizaba la libre entrada a nuestro puerto de barcos españoles— hacía necesaria la instalación de una Aduana, que se inauguró en 1781. Los ingleses encontraron muy pronto la forma de burlar la

disposición fundamental de esa ley, relativa a la nacionalidad de los navíos, mediante el traspaso simulado de los propios a testafierros españoles establecidos en la costa del Brasil y el consiguiente cambio de bandera. Una vez descargados y vueltos a cargar, recuperaban su nacionalidad donde la habían dejado, en el viaje de regreso.

Ya hemos visto el estado general de la economía del Virreinato. ¿Qué ocurre con el comercio libre?

La exportación de cueros aumenta a 800.000 unidades, para alcanzar a 1.800.000 después de la paz de Versalles. La ganadería recibe un gran impulso y Buenos Aires y su comercio prosperan. Pero ello significa, correlativamente, un golpe de muerte para la industria del interior, a causa de la mercadería importada que compite ruinosamente con la producción local. Los aguardientes sanjuaninos son desalojados por los extranjeros. Los tejidos de Cochabamba, Cuzco, Catamarca y Corrientes son reemplazados por tejidos ingleses. Y, así, en todos los ramos, incluso en los toscos productos de la artesanía local. La unidad económica entre la capital y el interior, que había resistido al contrabando, se rompe al fin con el comercio libre, acentuándose el antagonismo entre Buenos Aires y el interior que tanto influiría en el desarrollo de nuestra historia. Se insinúa ya la fisonomía de la futura nación, con su cabeza hipertrofiada a expensas de un cuerpo raquítico.

La política borbónica de la "ilustración" no advierte el problema. Este no adquirió por entonces gravedad mayor gracias a la ruptura con Inglaterra, que ocasionó eventuales restricciones al comercio, acompañadas de resurgimientos de la industria autóctona. Los virreyes han de dedicar su atención preferente, de acuerdo con las nacientes ideas fisiocráticas, al fomento de la agricultura, especialmente a la producción de cáñamo y lino, con el objeto de proporcionar materia prima a las industrias de la metrópoli: todo ello con gran despliegue de poesía bucólica, según se verá en los primeros periódicos. Esa política nos marca el destino de colonia, que es el que España nos adjudica; es decir, de dependencia de una economía ajena, sin posibilidad de desarrollo autónomo.

* * *

La división del extenso territorio para su mejor administración se dispuso por la "Ordenanza de Intendentes de Ejército y Provincia" expedida en 1792. El Río de la Plata fue el primer virreinato en que se estableció este régimen, que se extendería

luego a los demás. Ocho fueron los primeros gobernadores intendentes, nombrados para las siguientes provincias: Buenos Aires, Salta, Córdoba, Paraguay, La Plata, Cochabamba, La Paz y Potosí. Más tarde se crearía una nueva provincia —Puno— que años después se traspasaría al Perú. Junto con las Intendencias, se nombran gobiernos militares en los lugares de frontera, para proveer a las necesidades defensivas, como los de Montevideo, Moxos y Chiquitos.

Los intendentes tenían funciones políticas, militares y fiscales. Además de ejercer el mando político y militar, con sujeción al Virrey, en sus respectivas jurisdicciones, desempeñaban tareas relativamente autónomas de fiscalización en materias de Real Hacienda.

Esta organización, en la que se ha pretendido ver la génesis de nuestro federalismo, significó al contrario la implantación de un centralismo implacable, en que los cabildos locales eran absorbidos por la junta provincial y el Intendente, y éstos a su vez por el Virrey, quien gobernaba para los intereses del puerto único, del que extraía la renta más cuantiosa. La descentralización sólo funcionaba en materias de policía o de exacción fiscal. Gorriti llamaría más tarde a este sistema “la invención más funesta de nuestra metrópoli”. Todos los movimientos en que se originará luego la tendencia federal tienen su origen en la resistencia que provocó desde el comienzo la “Ordenanza de Intendentes” y se manifestarán como reacción de los pueblos interiores contra el gobernante arbitrario y despótico que mandaba desde la capital.

Buenos Aires progresa, sin duda, bajo el gobierno de Vértiz, tanto por el indudable tesón con que éste prosigue sus reformas, cuanto por el enriquecimiento de su puerto y de su clase mercantil. La aldehuela se va transformando en pueblo grande y asimilando todos los elementos de la civilización. Se arreglan sus calles y se alumbran de noche con candiles de sebo. Se adorna con un teatro, el de la Comedia, con un paseo público, junto al río, el de la Alameda, y con una plaza de toros. Tendrá una casa-cuna, una casa de corrección y un hospital de mendigos. Tendrá un nuevo colegio, el Real Convictorio Carolino, en el que los hijos de los comerciantes acomodados (la generación de la Independencia) alcanzarán algunos destellos de las luces del siglo.

Su sociedad estará marcada por las características de su vida económica. El núcleo principal lo constituye el grupo de vecinos enriquecidos por el comercio en todas sus formas, que son a la

vez propietarios de campos (que no valen nada) y de ganados. Es una clase satisfecha, cuyos intereses se mantienen más ligados a la metrópoli que al resto del país. Mira hacia Europa, de la cual se provee para sus necesidades; tiene servidumbre de esclavos negros, a la que hace practicar en provecho doméstico, multitud de industrias menores. Como clase satisfecha carece, en general, de espíritu de aventura, vive en el tráfico rutinario, y su único contacto con la dura realidad lo constituye el peligro a que sus estancias suelen verse expuestas por los malones de indios pampas y ranqueles. La tarea rural es la única escuela de energía y de heroísmo en que los hijos de los mercaderes del puerto mantenían vivas las virtudes de la raza. La vida es fácil en Buenos Aires, y esta facilidad le imprime un ritmo lento, modulado en siestas y tertulias.

Don Vicente Fidel López —muy digno de crédito, a fuer de viejo porteño, en la historia reciente de la ciudad, que conocía por tradición de familia (pues su padre actuaba desde el Virreinato)— se refiere al grupo dirigente de Buenos Aires en los tiempos del virrey Vértiz como a una clase de “enriquecidos”: es decir, de advenedizos en el orden del linaje y de la cultura. Si se recuerda la formación del pueblo, en el momento de auge del contrabando, se verá que el núcleo primitivo, en su mayor parte “mancebos de la tierra”, fué aumentando con un gran aporte de inmigración clandestina, preferentemente portuguesa (y judía), a la que se sumó más tarde población española de modesto origen y extranjeros de toda laya, empezando por los negreros del “asiento”, muchos de los cuales se radicaron aquí. Deben agregarse los negros, indios y sus mezclas: la clase servil. Todo ello formaba un conjunto bastante heterogéneo y sobre todo carente de refinamiento y distinción. Un funcionario de la Corona, el Intendente Manuel Ignacio Fernández, en una comunicación al Rey, fechada precisamente en 1778, dice refiriéndose a los individuos del Cabildo (¡la flor y nata!) que son “unos infelices mercaderes con tienda pública”. . . La aristocracia horteril continuaría hasta la época de la “gran aldea”.

Con todo, se inicia en ese medio un esbozo de vida intelectual. La juventud siente el contagio de las ideas vigentes en Europa y discute sobre las ventajas de la agricultura y los beneficios de la Ilustración. Hay entre ellos economistas y poetas, que leen a Jovellanos, a Moratín, al padre Feijóo. El poeta Manuel de Labardén, cantor del Paraná, escribe la tragedia “Siripo” y la estrena en el teatro de la Ranchería. El canónigo don Juan Baltazar Maziol posee una biblioteca en la que figuran libros de Locke, Mably, el barón d'Holbach, Rousseau y Voltaire, además de toda la literatura jansenista y regalista de Francia y España. Es conci-

liario de San Carlos y tiene como subordinado al cura Fernández de Agüero, quien desempeñaría más tarde la cátedra enseñando el sensualismo de Condillac y afirmando, entre otras cosas, que Jesucristo había sido un gran filósofo digno de figurar en la historia a la par de Sócrates, Buda y Mahoma.

Se inicia asimismo un esbozo de vida social refinada. Los honrados tenderos (y algunos que no lo son tanto) de "este comercio" se hacen traer pelucas de Francia y empiezan a ensayar grotescas reverencias en la corte del Virrey. Ya aprenderán, y si no ellos, sus hijos. Con todo, la frecuentación del mundo oficial y la conciencia de ser los mejores de la aldea les proporcionará una alta idea de sí mismos y el empaque que sólo ostentan las aristocracias de aluvión. A ellos se referiría pocos años después Cabello y Mesa en "El Telégrafo Mercantil", al renegar

*del que a nadie quita
cortés el sombrero
y que hace diez años
era aquí pulpero.*

Pero diez años no son nada. ¿Quién se acordaría de aquello al cabo de dos generaciones?

El interior, mientras tanto, permanece estacionario o decae, en algunas partes, por la destrucción de sus industrias locales. El Paraguay, según vimos, es el teatro de la ruina y desolación de las antiguas misiones jesuíticas, por mitad dispersas y sometidas a administradores entre cuyas manos se dilapida la riqueza acumulada. Muchos indios vuelven a la servidumbre de las encomiendas, no obstante las prohibiciones reales. La conquista espiritual se detiene. Los jesuitas eran los únicos poseedores de la fórmula para civilizar a los indios; sus sucesores la yerran y muchos de ellos, por su conducta, son más causa de escándalo que de edificación.

La población de las ciudades del Tucumán había aumentado también considerablemente en la primera mitad del siglo XVIII, modificándose de modo sensible en la proporción del elemento blanco, enriquecido por aportes de inmigración española, muy frecuentes en dicho período. Esta inmigración es sobre todo de gente modesta, que se adapta muy pronto a las modalidades de la tierra y se arraiga en ella.

La mano de obra indígena ha sido paulatinamente desalojada, sobre todo en las plantaciones, por la de negros esclavos, cuya

proporción (y la de sus mezclas) se halla especialmente acentuada en San Miguel de Tucumán, dada la índole de sus cultivos, para la que esta raza se muestra especialmente apta. Las encomiendas han disminuido considerablemente; sólo se mantienen con la antigua fisonomía más al norte, en Jujuy. Los indios no encomendados de la zona viven en reducciones (las de los jesuitas, que han pasado a los franciscanos, se hallan en pleno desbande) o bien en villorrios propios, en rincones apartados de la montaña, donde crían sus cabras y mulas y poseen sus pequeños sembrados y telares, con cuyos productos realizan un reducido comercio. El virrey Vértiz fundaría nuevas reducciones en las fronteras de Charcas y Tarija y en el Chaco.

Las modalidades sociales de los núcleos del centro y noroeste difieren bastante de las de Buenos Aires, con diversos matices locales. La clase dirigente está principalmente constituida por los propietarios rurales acomodados, nobles encomenderos o hijos de encomenderos, la mayor parte descendientes de los hombres de la Conquista. Dueños de plantaciones, minas o ganados, suelen caracterizarse por un recatado, pero arraigado orgullo de su linaje y por un tono natural de señorío, originado en la costumbre del mando y que aun en la pobreza conservan. Además de su habitáculo rural, tienen su casa en la ciudad, de cuya vida participan como alcaldes o regidores. Son el vecindario "decente" y acatado. No desdennan por lo general las adquisiciones de la cultura; sus hijos van a estudiar a Córdoba o Chuquisaca, cuando no a España, y ellos aspiran a que a alguno lo llame Dios y llegue a clérigo. Sus casonas sin lujo, pero dignas, suelen carecer de cortinas y vidrios; pero tienen, traída a gran costo, un arpa, o acaso un piano. Siempre, una o dos guitarras; y abundante platería. Libros, los pocos de cualquier casa hidalga de la península, predominando los de romance y devoción.

Las ciudades del interior también han progresado, algunas tanto como Buenos Aires, si bien con menos ímpetu. Todas poseen sus tres o cuatro iglesias, algunas de gran belleza de líneas y poseedoras de tesoros del arte español o del jesuítico-misionero, como la catedral cordobesa o las de San Francisco en Salta y Santa Fe. En las líneas externas de nuestra arquitectura colonial, de ladrillo o adobe, la contención clásica predomina sobre la exuberancia decorativa que ostentan los templos del Perú, reservándose el barroquismo para los interiores. También a comienzos de este siglo se generalizan los edificios de piso alto y balcón volado para las casonas señoriales. Recorren las calles las primeras berlinas de lujo tiradas por dos o cuatro mulas. Se diversifica el comercio y se multiplican los artesanados. Muchos comerciantes y pequeños industriales hacen fortuna y logran, mediante alianza

matrimonial (después de vencer la consabida oposición, con llantos de la niña, intervención del obispo y protestas de buen origen —real o mentido— por parte del galán) entrar en la categoría del vecindario decente. En el siglo XVIII no abundan los candidatos y no todas las doncellas tienen vocación por el velo monjil.

En las clases bajas la población se multiplica un poco a la buena de Dios. En las *castas* o gente de color la unión libre es la ley, salvo en los lugares donde viven bajo la sujeción de familias tradicionales, que les imparten instrucción religiosa y les imponen matrimonios legítimos. Pero ésta es la excepción y un fenómeno urbano. En la campaña domina la ilegitimidad. Conspira a ello en primer término, la falta de instrucción religiosa, debido a la escasez de sacerdotes y, a menudo, a la falta de celo de esos pocos. En segundo término, las distancias. Ellas obligan al hombre sin arraigo, y aun al hijo del arraigado que debe ganarse la vida afuera, porque lo propio ya no alcanza, a tareas trashumantes, poco propicias a la constitución de hogares: arreos de ganado que duran meses y meses, cuando no al servicio de los fortines en la frontera con la indiada, la escuela del gaucho. El hombre suelto engendra al azar de los caminos; deja un hijo sembrado en el rancho de la etapa, al que tal vez no habrá de volver y donde acaso no lo identifiquen si vuelve. Esta fatalidad del medio generaliza en muchas regiones del país, una peculiaridad social que continuaría mucho tiempo a favor de las guerras civiles y la anarquía: el matriarcado o sea la familia cuyo único elemento estable es la mujer, con su cría de hijos de padres eventuales, su economía autónoma, su estatuto consuetudinario e incluso una indiscutida respetabilidad. ¿Hemos de incurrir en la vulgaridad de oponer reparos morales a lo que fue una consecuencia ineludible de las circunstancias? Sólo nos cabe el juicio histórico. Diremos que esa institución fue un bien, como ocurre siempre que el genio de la especie, personificado en la mujer, desempeña la función selectiva. El matriarcado rural mejoró considerablemente la raza. Los niños del rancho solían salir rubios y con ojos celestes; todos eran hijos de hombres de empresa y aventura; muchos, hijos de señores.

* * *

La guerra con Inglaterra puso una nota de inquietud en los últimos tiempos del gobierno de Vértiz. A la necesidad de poblar la costa por temor al desembarco enemigo, se debió la instalación de núcleos españoles en los puertos patagónicos de San Julián, Deseado, San José y Río Negro, que fueron diezmados por

las epidemias y de los que sólo subsistieron los dos últimos. Y a la preocupación por la vulnerabilidad de la frontera respondió el traslado del Virrey a Montevideo, donde permaneció hasta tener noticias de la paz firmada.

Nada ocurrió por aquí, sin embargo, comparable a los episodios que conmovieron a otras regiones del Nuevo Mundo y en los que no era difícil advertir la influencia de agentes británicos; así la sublevación de Túpac Amaru en el norte, de 1780 a 1783, y la de los "comuneros" de Nueva Granada, encabezada por José Antonio Galán.

Las alarmas no pasaron de tales en el Río de la Plata y la tranquilidad se restableció por algunos años, después del tratado de Versalles. El oleaje provocado por las convulsiones del mundo llegaba todavía muy atenuado a estas playas remotas.

CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA

IV. DE LORETO A SOBREMONTÉ

La época del Virreinato fue en el Río de la Plata una época de progreso material e intelectual, de administración generalmente honrada y de paz interna, salvo los consabidos conflictos con el clero, que no eran por cierto una novedad, pero que el regalismo vigente imponía a los funcionarios como una inevitable demostración de celo monárquico. La generación de la Independencia guardó de los virreyes un recuerdo amable, no exento de nostalgia y sin el cual no se explicarían muchos sucesos posteriores. La verdad es que la instalación en Buenos Aires de la corte virreinal halagaba el orgullo porteño, por la igualación con Lima y México; así como el boato de que ella se rodeaba, por el prestigio de la autoridad, mostraba a los habitantes de esta aldea remota una imagen (aunque pálida, suficiente para ellos) de los esplendores del mundo. Esa situación colmaba la ambición de muchos y parecía definitiva.

No podía entonces preverse la marcha rápida de los acontecimientos sociales y políticos que precipitaría la disolución del Imperio. Ciertamente es que se habían emancipado las colonias inglesas del norte, con ayuda francesa y española. Franklin se había paseado por los salones de Versalles, provocando la admiración de los "filósofos" por su espartana sobriedad y su atuendo sombrío de cuáquero, que desentonaba con las pelucas y las sedas: ¡la "virtud" frente a la corrupción! Pero ¿qué eran entonces los Estados Unidos sino un conjunto de villorrios de 5 a 15.000 habitantes? No tenían una ciudad como Cuzco, Lima o México, ni siquiera como Buenos Aires. Simple pieza de la política europea, nadie podía adivinar allí la potencia futura.

Otra revolución se operaba entre tanto, más decisiva si cabe, por sus consecuencias, Key había inventado la lanzadera en 1773, y en 1785 se establecía en Nottingham la primera tejeduría a vapor. Inglaterra encontraba en ello el secreto de producir en grandes cantidades y a precios fuera de competencia con la industria manual, e intensificaría su puja por los mercados.

A favor de la reglamentación de comercio libre de 1778 se va organizando aquí el mecanismo de comercio orientado hacia el puerto único. Los "pulperos" de la campaña actúan como acopiadores de cueros y los venden al comerciante de la capital, due-

ño de *barracas*, quien a la vez recibe los artículos importados y los reparte por la misma vía. Tropas de carretas del oeste, norte y noroeste hacen viajes periódicos para el transporte de los productos regionales que pueden ser objeto de consumo y vuelven cargadas con la mercadería que traen los barcos de registro. Ya hemos visto cómo hacían los ingleses para burlar la cláusula de la nacionalidad. A partir de 1791 una real cédula autorizaría la libre entrada por seis años de buques negreros, con lo cual —y el contrabando— las interdicciones se harían poco menos que ilusorias. Las mercaderías inglesas —especialmente tejidos— desalojarían a las de otros países y a las locales aun antes de que la revolución suprimiera las últimas restricciones a su entrada.

Cuatro años después de la aplicación del vapor a la industria textil, estalla la revolución francesa.

* * *

¿Hablares de don Cristóbal del Campo, marqués de Loreto; de don Nicolás de Arredondo, teniente general de los reales ejércitos; de don Pedro Melo de Portugal y Villena, caballero de Santiago y primer caballerizo de la Reina nuestra señora, todos ellos virreyes del Río de la Plata que sucedieron a Vértiz desde 1784 a 1797? No creemos que la historia deba ocuparse de la materia que comporta (debidamente inflada) la gloria efímera de las memorias administrativas. Diremos que todos ellos hicieron policía eficaz y manejaron discretamente los recursos fiscales, con fomento de la agricultura y todo lo demás, y su buena dosis de "despotismo ilustrado", patente sobre todo en el prurito regalista de decidir sobre cuestiones morales con prescindencia de la jerarquía eclesiástica y aun contra ésta y poniendo toda la fuerza del Estado al servicio de los principios, como cuando Loreto lo desterró arbitrariamente a don Juan Baltazar Maziel, canónigo de la catedral.

El acontecimiento más importante durante el gobierno de Loreto fue la instalación de la Real Audiencia de Buenos Aires, el 9 de agosto de 1785.

Durante el gobierno de Arredondo se estableció el tribunal del Consulado (dispuesto por el artículo 13 del reglamento del comercio libre) en 1794. Era un cuerpo encargado de decidir sobre todas las cuestiones referentes al comercio y cuyas decisiones tenían apelación ante un tribunal de alzada compuesto de tres oidores. Su primer secretario fue un joven abogado que acababa de llegar de Europa, muy impresionado por la revolución de Francia, con la que secretamente simpatizaba, según más

tarde lo confesaría: llamábase Manuel Belgrano y sería pronto famoso. Pertenecía a la burguesía comercial acomodada, por ser hijo de don Domingo Belgrano y Peri, autorizado poco antes, junto con el conde de Liniers, a introducir negros esclavos con sujeción a la real cédula de 1791.

Merece destacarse también en la actuación de este virrey el impulso que dio a la economía del Virreinato, fomentando la salazón y exportación de carnes a La Habana y el curtido de los cueros.

Durante el gobierno de Melo y Portugal, que fue muy breve, estalló la guerra con Inglaterra por lo que debió dirigirse a Montevideo para ponerlo en estado de defensa, muriendo allí.

* * *

La más importante novedad de estos años había sido empero la repercusión de los acontecimientos europeos consiguientes a la revolución francesa. Las memorias de la época nos dan una idea aproximada de la impresión que produjeron las noticias de los sucesos que llegaban, espaciadas y contradictorias, por la lentitud de los viajes y el diverso origen de las comunicaciones.

Sabido es que la literatura enciclopédica había tenido libre curso en la América española, tanto como en España, y que los libros de los reformadores figuraban en las bibliotecas de todos los estudiosos de estas latitudes, principalmente clérigos más o menos regalistas, como el Deán Funes y los canónigos Maziel y Terrada. Ahora bien: el estallido parecía justificar en los hechos la propaganda de los filósofos y los enciclopedistas. Muchos sin duda se entusiasmaron, mientras que los más tímidos, como suele ocurrir, no obstante aceptar paladinamente los principios, se echaron atrás ante sus consecuencias. El testimonio de Belgrano es a este respecto muy valioso, y no hay duda de que su prédica de observador próximo de los acontecimientos —si bien obligada a la discreción burocrática que le imponía su condición de funcionario de la Corona— debió ser decisiva sobre los espíritus favorablemente predispuestos.

Lo que se sabe de cierto es que el virrey Arredondo se sintió alarmado. Igualmente su sucesor Melo y Portugal y con mayores motivos. A partir de 1795 (después de la paz de Basilea), por influencia de los barcos franceses que tocaban nuestro puerto y traían numerosos negros en su tripulación, empezó a sentirse una marcada inquietud entre los esclavos de Buenos Aires, que hizo temer un levantamiento en masa. Era el fermento de las noticias sobre la revolución negra triunfante en Santo Domingo, con sus

promesas de liberación racial. Se agitaban al mismo tiempo las primeras logias masónicas, de las que formaban parte algunos vecinos franceses que fueron sometidos a vigilancia.

¿Que ocurría entre tanto en Europa? Carlos III había muerto en 1790 y había sido reemplazado por su hijo Carlos IV, muy inferior en capacidad y energía. Los acontecimientos de Francia, que conmovían a todas las cortes de Europa, hubieron de repercutir fuertemente en España, en razón del parentesco próximo y las obligaciones del “pacto de familia”. La ejecución de Luis XVI hizo inevitable la guerra. Esta fue desfavorable para España: los franceses invadieron Cataluña y tomaron Fuenterrabía y San Sebastián, España debió capitular y firmar en 1795 la paz de Basilea, por la que cedía a Francia su posesión de Santo Domingo. La paz se transformaría en alianza por el tratado de San Ildefonso, firmado al año siguiente y que equivaldría a un “pacto de familia” con los regicidas del Directorio.

La política de España en esta ocasión se justifica por el predominio del interés sobre los sentimientos dinásticos. Pero, al mismo tiempo, estaba ganada por el nuevo espíritu en sus clases dirigentes y negociaba con la revolución bajo un complejo de inferioridad, sin obtener las necesarias compensaciones. En el grupo que rodeaba a Carlos IV había “afrancesamiento mental”. ¡Tal era el resultado de un cuarto de siglo de “ilustración”! El mismo conde de Aranda simpatizaba con la revolución francesa por su persecución a la Iglesia y sus matanzas de curas. Muy otra era la situación de Inglaterra que, firme en su tradición, había encontrado en la elocuencia de Edmund Burke (cuyas *Reflections on French Revolution* son de 1790) el necesario antídoto contra las ilusiones revolucionarias.

El autor de esa política era el primer ministro omnipotente y ambicioso de Carlos IV: Manuel Godoy, príncipe de la Paz, cuya influencia se atribuía a su situación de amante de la Reina. Con la llegada al poder de Napoleón en 1799, que ponía fin a la sangrienta anarquía y el terror, la política de la alianza se convertiría en sometimiento incondicional de España a las exigencias del Primer Cónsul.

A partir del tratado de San Ildefonso, España se encontraba en guerra con Inglaterra. Ello obligó al sucesor de Melo, don Antonio Olaguer Feliú, designado interinamente en 1797, a mantener el estado de alarma y a fortalecer las obras de defensa iniciadas por su antecesor. El bloqueo del río por barcos ingleses, que dificultaba el comercio regular con España, le hizo gestionar y obtener de la Corona la libre franquicia de tráfico para impedir la paralización del puerto. Fuera de ello, la única circunstancia memorable de su breve gobierno fue la llegada de la real cédula

autorizando la creación de la Universidad de Buenos Aires, propuesta por Vértiz.

Don Gabriel de Avilés y Fierro, nombrado virrey en propiedad, se recibió del mando en 1799. Dada la situación de guerra, su primera preocupación fue la frontera oriental, donde se hallaba trabajando la comisión demarcadora de límites presidida por don Félix de Azara (pues la paz con Portugal seguía vigente, al menos en teoría). Con todo, reforzó las guarniciones y se ocupó de restringir el comercio ilícito en el estuario, al que llamara en su informe "río de las congojas y los desabrimientos". No hubo hostilidades en su breve gobierno de dos años, lo cual le permitió ocuparse de cuestiones administrativas, como la importación de tabacos, la organización de la renta y especialmente el reparto de tierra a los indios. En esta materia, parece inspirarse en cierto espíritu sentimental de la época proveniente de Rousseau: cree en la capacidad de los indios para la vida civil, los equipara a los blancos y les da tierras en propiedad, que al poco tiempo venderían a cambio de aguardiente. La otra circunstancia memorable de su gobierno es la autorización que concede para publicar, en la imprenta que había sido de los jesuitas, el primer periódico de estas latitudes: "El Telégrafo Mercantil", dirigido por don Francisco Antonio Cabello y Mesa.

Mientras tanto, Europa resuena con el prestigio de las armas napoleónicas. Napoleón es ya el vencedor de Marengo y Hohenlinden, el dueño virtual del continente. Todos los poderes se inclinan ante su voluntad. Por el tratado de Aranjuez, en 1801, España le cede, a cambio de la Toscana, la Luisiana, con lo que se hace dueño de un imperio ultramarino. España se ve obligada también a declarar la guerra a Portugal, pieza indispensable de la estrategia inglesa.

La declaración de guerra a Portugal repercutiría inmediatamente en el Río de la Plata. El nuevo virrey, mariscal de campo don Joaquín del Pino, encargó al inspector de armas, marqués de Sobremonte, la formación de un destacamento de fuerzas móviles montadas en las inmediaciones de Montevideo para prevenir posibles desembarcos. Empezaron a congregarse allí las milicias de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires. Los portugueses, mientras tanto, emprendían operaciones sobre los pueblos del río Uruguay, y los débilmente guarnecidos de Río Grande, a los que tomaron fácilmente.

A fines de ese año, Sobremonte, que avanzaba sobre Río Grande y había sostenido victoriosas escaramuzas contra los portugueses, fue notificado de que el 6 de junio se había firmado la paz en Europa, por la cual Portugal cedía a España varias plazas y se obligaba a resarcir los daños de guerra. La paz en el Plata

debía ser la inmediata consecuencia, con la devolución de lo usurpado; pero los portugueses no hicieron entrega de los pueblos de las misiones, alegando que consultarían a su gobierno, lo que nunca se realizó. Perdedores en la metrópoli, resultaron ganadores en América, gracias a la indiferencia de la corte de Carlos IV, y se quedarían para siempre con los territorios ocasionalmente ocupados.

* * *

La subordinación de Carlos IV a la política francesa debía producir efectos disgregadores en España y sus colonias.

En la transformación que se estaba operando en el mundo, España aparecía (juzgada por los patrones mentales del "progresismo") como la encarnación de un pasado irremediamente preterido, la imagen misma del fracaso. Enfrente se erguía la Francia victoriosa, con su caudillo, espada invencible al servicio del porvenir, soldado austero vocado a la misión de imponer la ley de la filosofía y la "razón natural" contra los errores del pasado ignorante y supersticioso.

Toda la literatura de la época nos da testimonio de este entusiasmo ingenuo, del que arranca una de las corrientes del romanticismo político del siglo XIX. Contagia preferentemente a los jóvenes que hacen entonces en los cuarteles sus primeras armas, a las ambiciones en agraz que verán en el héroe de Italia su paradigma. Su influencia en España es evidente, desde los primeros "afrancesados" hasta la serie de militares jaques y motineros, los "espadones" que jalonan el Ochocientos. En América será irresistible. Soñará con emularlo un joven aristócrata venezolano que por entonces perfecciona su educación en Madrid. Y también otro joven criollo de Misiones que sirve en los ejércitos reales y hará pronto demostración de sus méritos en la batalla de Bailén.

No dejó España, sin embargo, de esforzarse por sacudir el yugo. Cuando la ruptura de la paz de Amiens, en 1803, se negó a reanudar la guerra contra Inglaterra. Sólo accedió, en octubre de ese año, a pagar a su aliada un subsidio mensual de seis millones de libras. Pero pronto se vio impedida de efectuar sus remesas, y Napoleón empezó a sospechar que las riquezas americanas no le servirían de ayuda eficaz mientras siguiesen administradas por los Borbones.

Esta impresión pesimista del Emperador se acentuó a medida que fue conociendo la corrupción de la corte española y las intrigas del favorito. Este le propuso en 1804, a cambio de su

ayuda, la creación para él de un reino independiente en Portugal, proyecto que exigía la entrada de las tropas francesas en España. Napoleón impuso, como condición para aceptar, que España declarara nuevamente la guerra a Inglaterra, cuya escuadra acababa de atacar a cuatro fragatas españolas que se dirigían de Montevideo a Cádiz. Para sus planes necesitaba una eficaz colaboración marítima.

Godoy se puso inmediatamente a la obra. En marzo de 1805 disponía ya de una flota de 18 navíos de guerra enteramente equipados. Desgraciadamente, sus tripulaciones eran improvisadas, y a esta inexperiencia y la de sus aliados se debió el desastre de Trafalgar, el 21 de octubre de ese año, en que la flota española fue totalmente destruida por la inglesa.

Ante este fracaso y sabedor de la formación de una nueva coalición contra Napoleón, Godoy trató de cambiar de frente e inició negociaciones muy reservadas con Inglaterra, que se había posesionado de Buenos Aires el 27 de junio de 1806. Pero entre tanto, el Emperador daba el golpe de gracia a los prusianos en la batalla de Jena. Godoy se inclinó de nuevo inmediatamente al campo francés y entró en el bloqueo continental contra Inglaterra, que se iniciaría pocos meses más tarde.

V. LOS INGLESES EN BUENOS AIRES

Fuera de las escaramuzas guerreras con que se inició su período, el gobierno de don Joaquín del Pino (que duró tres años, hasta su muerte en 1804) gozó de prosperidad y de paz, sólo turbada levemente por la inquietud que produjo el descubrimiento de panfletos clandestinos enviados por agitadores americanos residentes en Londres. Pudo realizar de consiguiente una discreta labor según las ideas de la época, fomentando moderadamente las "luces", haciendo empedrar las calles y controlando los consumos. Se le adjudica también el mérito de la construcción de la Recova y la eliminación de los funcionarios deshonestos de la administración pública.

Pero lo que hace memorable especialmente su virreinato es su coincidencia con la aparición de la prensa periódica. "El Telégrafo Mercantil", cuya publicación se inició un mes antes de asumir él su cargo, duró un año y medio. Colaboraron en sus páginas Manuel Belgrano, Domingo de Azcuénaga y Gregorio Funes, entre otros. Suprimido al cabo de ese tiempo, su tarea sería continuada por el "Semanario de Agricultura, Industria y Comercio", bajo la dirección de Hipólito Vieytes.

Si no fuera por la circunstancia emocionante de ser los primeros y por la ulterior significación de sus colaboradores, poco merecerían recordarse estos tímidos ensayos de prensa, en que las "nociones útiles" y la transcripción de los partes oficiales, mezclados con una que otra "letrilla" sosa del meritorio Cabello y Mesa, prevalecen sobre todo conato de opinión. No hay el menor atisbo de pensamiento revolucionario, salvo la afirmación de Belgrano de que "la agricultura es el verdadero destino del hombre" —proposición harto discutible— o que las "criaturas (de los ranchos) llegan a la pubertad sin haber ejercido (sic) otra cosa que la ociosidad". Por lo demás, el más constante, el más implacable oficialismo. Los tímidos alardes de librecambismo no son sino el abecé de la ideología del tiempo. Más jacobinos resultan los propios virreyes.

La política de Inglaterra, dueña de los mares, no había permanecido inactiva en las posesiones españolas del Nuevo Mundo. Desde años atrás, sus estadistas alentaban el propósito de aprovechar la decadencia y la depresión de España para sucederla en la posesión de sus colonias. Sería la coronación de un viejo anhelo, del desquite de antiguos resquemores y el triunfo definitivo sobre el espíritu "papista" y todo lo que él significaba como obstáculo para la dominación mundial del imperio naciente.

Con paciencia y prolijidad de araña, la diplomacia inglesa había dispuesto los hilos para capturar la presa codiciada: primero, la paulatina penetración comercial; luego, a favor de las doctrinas del siglo, la penetración ideológica, mediante la difusión de aquellos principios que, aunque repudiados en la propia Inglaterra, pudieran servir como corrosivos de la inteligencia y la moral hispánicas. El mito de las libertades inglesas —propagado en Francia con fines polémicos, contra el absolutismo, por Montesquieu y Voltaire— constituía la fórmula para exaltar las conciencias, deprimidas por el triste estado de la península. Según la vieja y consabida táctica de los imperios en vías de expansión, Inglaterra disfrazaba sus miras codiciosas con la máscara de una cruzada por la libertad de los pueblos oprimidos. Tenía como instrumento de proselitismo a una de las ramas más importantes de la masonería —el gran Oriente—, que a principios de siglo contaba con filiales en todo el mundo, y desde luego, en España y sus colonias.

La perspectiva debía ser grata a muchos de los mejores espíritus del Nuevo Mundo, asqueados por el deshonor y la ruina a que los arrastraba la política de Carlos IV. España se había convertido en satélite de Francia y no ofrecía otra perspectiva a sus posesiones que la continuidad de una opresión agravada día tras día. El ejemplo de los Estados Unidos, emancipados con el apoyo español y francés, debía resultar alentador en el sentido de aprovechar las circunstancias políticas para lograr la independencia con apoyo de Inglaterra. Que el hecho era ajeno a toda ideología se advierte en la coincidencia en los mismos fines —que poco a poco se mostraría— de las fuerzas más heterogéneas, desde los jesuitas expulsados hasta los francmasones. Por las razones más contradictorias, todos tenderán a lo mismo. Ya veremos cómo, en definitiva, los únicos adversarios de la independencia se encontrarán entre los funcionarios de la corona del partido de la "ilustración".

* * *

El más activo de los precursores de este propósito de independencia era el venezolano don Francisco de Miranda, inquieto personaje que había actuado en los dramáticos episodios de la revolución francesa, y en Rusia luego, como consejero de la gran Catalina, lo que prueba sus altas cualidades de persuasión y la extensión de sus vinculaciones. Más tarde se había acercado al ministro Pitt para someterle sus proyectos. En ello lo habría precedido el neogranadino Antonio Mariño, quien se había dirigido con planes análogos al ministro francés Tallien y al mismo Pitt.

Miranda proponía desde 1797 una alianza entre Inglaterra y los Estados Unidos para ayudar a la emancipación de las colonias españolas. Incluso intentó forzarla, con un desembarco que preparó en 1805. El fracaso no lo desalentó, porque estaba seguro de que la marcha de los sucesos políticos habría de serle favorable.

Existe una relación directa e indudable entre la propaganda del agitador venezolano y las invasiones inglesas al Río de la Plata iniciadas en 1806. Home Popham aparece en los documentos conocidos como el realizador de las ideas de Miranda, de quien era amigo y a quien le comunica desde el comienzo la realización de la conquista. Lo que no se ha probado es la actuación directa del gobierno inglés, cuya versión oficial atribuye la iniciativa a un exceso de celo de su subordinado. Versión increíble, que nuestros historiadores aceptan con una docilidad emocionante y que no tiene aparentemente otro objeto que salvar el prestigio de las armas británicas, harto comprometido en la aventura.

* * *

El virrey marqués de Sobremonte —que había sucedido a del Pino en 1804— recibió la primera noticia de la guerra con Inglaterra el 1° de enero de 1806. Pocos días después se le anunciaba que, por la situación de la península, no podrían enviársele socorros y se le ordenaba que tomase medidas para proteger la navegación de los barcos mercantes y para impedir la eventualidad de un desembarco inglés en estas costas.

En diciembre hubo la primera alarma por la aproximación de una escuadra inglesa, lo que provocó el traslado del Virrey a Montevideo como sitio más amenazado. La alarma resultó infundada, pues la escuadra no se acercó.

Los elementos de que se disponía para resistir eran en esos momentos muy reducidos. La guarnición fija de todo el Virreinato estaba constituida por 1.400 veteranos de infantería y dragones, la mitad de los cuales se hallaba en puestos alejados: pro-

vincias interiores, costa patagónica y frontera con el Brasil. Entre los fuertes de Montevideo, Maldonado, Colonia, Ensenada y Buenos Aires se repartía un centenar de artilleros, con pocas piezas en mal estado y escasa munición. Los dos cuerpos de blandengues, también veteranos, de Montevideo y Buenos Aires apenas si daban abasto a la atención de la frontera con los indios y no podían ser distraídos. En cuanto a la milicia —elemento indispensable de la defensa teórica—, estaba bien organizada en el papel, pero carecía de armas, municiones, equipos, instrucción y disciplina. Las fuerzas navales consistían en una corbeta, un bergantín y algunas lanchas cañoneras.

En una junta de guerra que se realizó el 2 de abril se dispusieron algunas medidas urgentes de defensa: formación de dos cuerpos volantes (caballería ligera) de 1.100 hombres cada uno en Buenos Aires y Montevideo, reclutamiento de milicianos en el interior y fabricación de municiones.

* * *

El 9 de junio el vigía de Maldonado advirtió la presencia de una escuadra próxima a la costa y compuesta de ocho buques. Era la que en abril había partido del cabo de Buena Esperanza a las órdenes de Sir Home Popham con el propósito de conquistar a la indefensa Buenos Aires. Traía 1.200 hombres de desembarco, comandados por el mayor general Guillermo Carr Beresford.

El gobernador de Montevideo, don Pascual Ruiz Huidobro, dio aviso al Virrey. Este supuso que los barcos, por su tamaño, no podrían entrar al puerto de Buenos Aires, por lo cual se apresuró a mandar a Montevideo las pocas fuerzas veteranas que quedaban en la capital y ordenó el acuartelamiento de las milicias.

El 25 recibió con el consiguiente estupor la noticia de que los ingleses habían desembarcado en Quilmes y se dirigían sobre la ciudad. Rápidamente envió para detenerlos cuatrocientos milicianos y cien blandengues mal armados, que fueron dispersos por el fuego excelente de las baterías inglesas y de su disciplinada infantería. Despejado el camino, el jefe inglés Beresford intimó la rendición de la ciudad. El jefe militar de mayor graduación, brigadier Hilarión de la Quintana, a cargo de la defensa, vio la inutilidad de resistir y entregó la ciudad y el Fuerte.

El virrey Sobremonte se había retirado entre tanto a la ciudad de Córdoba con los caudales del tesoro, a fin de organizar desde allí el rescate.

VI. EXPULSIÓN DE LOS INGLESES. LINIERS Y ÁLZAGA

Con la posesión de la ciudad de Buenos Aires, conquistada con tanta facilidad, creyeron los ingleses que habían ganado el Virreinato para su imperio.

El general Beresford tomó posesión del gobierno en nombre de Jorge III y obligó a las reparticiones administrativas a prestarle juramento de fidelidad. Dio una proclama a la población, prometiendo respeto a la religión católica y a la propiedad privada y autorizando el comercio libre con las colonias inglesas. Al mismo tiempo pedía a Inglaterra refuerzos militares y envío de pobladores y mercaderías para iniciar un intercambio en gran escala.

Los habitantes de Buenos Aires se sintieron consternados y humillados por la derrota, según lo revelan las memorias de la época y aun las de los mismos ingleses ocupantes, quienes advertían el rencor latente bajo las relaciones convencionales. No faltó por cierto, la facción que trató de congraciarse con el invasor y se ligó a su suerte. Ya habían llegado hasta aquí las ideas de Francisco de Miranda. Los ingleses, por su parte, no descuidaban las tareas de proselitismo; se pusieron en contacto con los elementos masónicos existentes en la ciudad y fundaron tres logias nuevas: la más importante fue "La Estrella del Sud", donde actuaban don Saturnino Rodríguez Peña y don Miguel Aniceto Padilla. La mayor parte de la población se mantuvo empero apartada de estas maniobras y hostil a los invasores y a sus agentes.

Pasados los primeros días de estupor, empezó a conspirarse activamente contra los ocupantes. Las circunstancias apremiaban porque convenía actuar antes de que llegaran los refuerzos pedidos por Beresford. Sobremonte reunía milicias en Córdoba para acudir a libertar la ciudad y lo mismo hacía Ruiz Huidobro en Montevideo, al mismo tiempo que don Juan Martín de Pueyrredón y otros más reclutaban gente en la campaña. Se necesitaba sólo el jefe que coordinara estos esfuerzos dispersos y los organizara para la acción.

A ello se ofreció un oficial francés al servicio del rey de España en calidad de jefe de una escuadrilla de chalupas cañoneras que defendían las costas del río: el capitán de navío don Santiago de Liniers y Brémond.

En representación del núcleo que se organizaba en Buenos Aires, Liniers pasó a Montevideo y obtuvo del gobernador de la plaza un contingente de seiscientos hombres, la tercera parte soldados regulares y el resto milicianos, con los que se embarcó el 3 de agosto en la Colonia, venciendo a favor de una neblina propicia la dificultad de cruzar el río vigilado por los ingleses. Sus fuerzas se habían aumentado con los trescientos marineros de la flotilla y con setenta y tres franceses de un corsario surto allí. Desembarcó en las Conchas al siguiente día. En las proximidades de San Isidro se le unieron los dispersos del contingente de Pueyrredón, que pocos días antes había sufrido un revés en la chacra de Perdriel.

El 10 de agosto acampó en los Corrales de Miserere y desde allí le intimó a Beresford la rendición, dándole quince minutos para responder. Disponía de poco más de 1.000 hombres, la mayor parte reclutas, para oponer a otros tantos veteranos que mandaba el jefe inglés. La negativa de Beresford dio la señal de la marcha. Liniers se dirigió con su tropa al Retiro, en cuya plaza de toros se había fortificado el enemigo. Se combatió todo el día 11, desde las cinco de la mañana, con gran ardor por ambas partes. Al anochecer, los ingleses —con su jefe, que había dirigido la acción, a la cabeza— se replegaron hacia la plaza Mayor y el Fuerte.

Toda la noche fue empleada por el enemigo en la preparación de la resistencia, fortificando las entradas de la plaza con emplazamiento de cañones en las bocacalles y tiradores en las azoteas. Mientras tanto, Liniers compensaba con creces las pérdidas sufridas, por la incorporación entusiasta de voluntarios, hasta casi duplicar sus fuerzas iniciales.

Al día siguiente ordenó el ataque, acometiendo la plaza por cuatro puntos. En pocas horas la defensa inglesa cedió. Beresford dispuso el repliegue hacia el interior de la fortaleza, contra la cual hizo abrir Liniers intenso fuego con los mismos cañones abandonados por el enemigo. Al atardecer, se levantó bandera de parlamento. Liniers exigió una rendición incondicional.

Los enemigos sobrevivientes depusieron las armas y desfilaron ante nuestras milicias bisoñas y triunfantes. El botín de guerra consistió en treinta y cinco cañones de muralla, veintinueve de campaña, mil seiscientos fusiles y las banderas del regimiento 71.

El júbilo de Buenos Aires fue inmenso, así como su entusiasmo por el jefe que había decidido la victoria. Liniers aparecía a los ojos de todos como el caudillo natural, como el conductor providencial y necesario. A ello contribuía, sin duda, la subsistencia del peligro. La escuadra inglesa continuaba dueña del río, esperando evidentemente refuerzos para intentar el desquite.

En ausencia del Virrey, el gobierno había recaído en la Real Audiencia. Pero el 14 de agosto, un Cabildo abierto bajo presión popular se pronunció contra el Virrey y designó jefe militar a Liniers. Impuesto Sobremonte, que se hallaba en Córdoba, del estado del espíritu público, confirmó a regañadientes esa decisión, aunque delegando el mando político en el presidente de la Audiencia, y se dirigió a la Banda Oriental para hacerse cargo de la defensa de Montevideo.

Liniers desplegó una extraordinaria actividad, dando muestras de sus grandes dotes de organizador. El aristócrata ligero y un poco escéptico, dado al ocio y a los placeres, se engrandecía ante la responsabilidad, como es corriente en los ejemplares de raza. En once meses convirtió a una población de comerciantes en una república militar. Formó distintos cuerpos, agrupándolos por sus orígenes locales o raciales: andaluces, gallegos, catalanes, patricios, arribeños, cazadores correntinos, negros, mulatos, pardos, etc. Organizó además seis escuadrones de caballería y un cuerpo de artilleros. Se ocupó de la instrucción, a menudo personalmente. Los cuerpos debieron elegirse por votación sus propios oficiales, y éste es el origen de los grados de casi toda la oficialidad de la Independencia.

La mayor dificultad era el armamento. No había más que dos mil fusiles en el arsenal, contando con los mil seiscientos quitados a los ingleses. Hubo que requisar todas las armas viejas en estado de servir y realizar verdaderos prodigios para abastecerse de pólvora y balas.

El enemigo fondeado en la boca del estuario había seguido recibiendo refuerzos de Inglaterra. A principios de 1807 contaba ya con un ejército de doce mil hombres al mando del general Whitelocke. Este decidió ocupar en primer término la Banda Oriental y establecer allí la base para su ulterior operación sobre la capital del Virreinato.

Una brigada al mando del general Auchmuty desembarcó en Maldonado y se dirigió hacia Montevideo. El virrey Sobremonte trató de oponérsele con fuerzas muy inferiores, sin éxito, por lo

que debió retirarse al interior. Ruiz Huidobro en cambio cayó prisionero. Liniers iba a embarcarse con 1.500 hombres para defender aquella ciudad cuando se enteró de que había sido tomada por asalto el 3 de febrero. Al conocerse en Buenos Aires la actuación de Sobremonte, la Junta de Guerra lo destituyó, por moción de Alzaga en el Cabildo. Pocos días después sería ocupada también por el enemigo la Colonia, con lo cual quedaba en su poder toda la costa oriental. Una tentativa de recuperar este punto con un destacamento de 500 hombres al mando de Xavier de Viana terminaría en fracaso.

Buenos Aires debía hacer frente a una flota compuesta de veinte barcos de guerra y noventa transportes y a un ejército de desembarco de doce mil hombres aguerridos, a quienes no faltaba caballería ni artillería. Para oponérsele, sólo contaba Liniers con ocho mil seiscientos combatientes, de los que sólo la décima parte eran veteranos.

Hubo tres meses de preparativos, durante cuyo transcurso agotaron los invasores todos los medios de la persuasión pacífica, a fin de volcar en su favor el espíritu de estos pueblos. Los puertos de la Banda Oriental se vieron abarrotados de barcos ingleses, que venían repletos de toda clase de mercaderías a precios ínfimos, mientras que el periódico que editaban, "La Estrella del Sud" (cuya sección española estaba a cargo de Miguel Aniceto Padilla), insistía sobre las libertades de que gozarían los habitantes "bajo el cetro de S.M.B.". Esta propaganda ilusionó a muchos, entre la población aluvional y advenediza y las "castas".

El general Whitelocke ordenó finalmente la invasión. El 28 de junio de 1807 desembarcaron los ingleses en la ensenada de Barragán y el 2 de julio su vanguardia llegaba a la orilla derecha del Riachuelo. Las fuerzas que llevó Liniers para contenerlos sufrieron un contraste inicial en los corrales de Miserere, que motivó su dispersión. La llegada a la ciudad de los primeros dispersos y la ausencia del jefe (quien cortado de sus tropas, había hecho noche en la campaña para concentrarlas al amanecer) consternaron a la población que se juzgó perdida.

Salvó la situación el Cabildo, por la decisión de su alcalde don Martín de Alzaga. Con la colaboración de todos los habitantes útiles, se puso rápidamente la ciudad en estado de defensa, cavándose trincheras en las calles, con baterías estratégicamente colocadas, y convirtiendo las casas en fortalezas. Se ordenó una iluminación general durante la noche, como en las grandes fiestas. En la mañana del 3, estaba lista para resistir. Pero el enemigo no atacó ese día. Al atardecer llegó Liniers, que había logrado reunir a la mayor parte de los dispersos de la víspera, y retomó el mando en medio del júbilo popular. Completó con nuevas disposicio-

nes los preparativos iniciados por el Cabildo y distribuyó la tropa en los puestos de combate.

El 5 atacó Whitelocke, con ocho mil quinientos hombres divididos en tres columnas que debían avanzar por calles paralelas hacia la plaza Mayor. Obtuvieron al principio algunos éxitos parciales, con la toma de la plaza de toros, el parque de artillería y el convento de las Catalinas, situados en el suburbio. Pero al penetrar en las calles los abandonó la fortuna. Los recibió una lluvia de proyectiles desde todas las casas. Dos columnas fueron envueltas y obligadas a rendirse. La tercera, que avanzaba hacia el Fuerte, debió refugiarse en el convento de Santo Domingo. Hasta ese momento, el enemigo había perdido entre muertos, heridos y prisioneros la mitad de su fuerza.

Liniers propuso negociaciones, a las que, después de diversas alternativas, el jefe británico debió ceder.

El 7 de julio se firmó el convenio de paz. Por él los ingleses se comprometían a evacuar Montevideo y todos los puntos que ocupaban en el Río de la Plata. Debían reembarcarse en el término de diez días y devolver aquella ciudad a los dos meses, con toda su artillería y en el estado en que se encontraba en el momento de su rendición.

El prestigio de Liniers creció más todavía después de esta acción de guerra, según lo atestigua la carta que envió el Cabildo de Buenos Aires a Carlos IV dándole cuenta de los sucesos. El Rey lo nombró jefe de escuadra y Virrey interino del Río de la Plata.

VII. LINIERS Y LA CRISIS POLÍTICA

El bloqueo continental dispuesto por Napoleón contra Inglaterra no podía hacerse efectivo sin la colaboración de Portugal, aliado de esa potencia. Por el tratado de Fontainebleau, Francia y España decidieron declararle la guerra, ocuparla y repartirla en tres fracciones, una de las cuales sería la ambicionada monarquía de Godoy.

El ejército francés, al mando del general Junot, entró en España para marchar sobre Lisboa. Ante la proximidad de las tropas aliadas, la corte portuguesa se embarcó en la escuadra inglesa al mando del almirante Sidney Smith y huyó a sus posesiones del Brasil, dejando expedita la entrada a su capital, que fue inmediatamente ocupada.

La política de sometimiento de Godoy a las exigencias francesas, así como la corrupción general de la Corte, provocaban en muchos sectores de España una sorda pero enconada oposición, que se agrupaba en torno al príncipe heredero don Fernando. Este inició una intriga ante Napoleón para desalojar al favorito, mediante la oferta de casarse con una princesa de la familia imperial, intriga que fue descubierta y frustrada. Mientras tanto, con el pretexto de la invasión a Portugal, seguían entrando en la península tropas francesas. Los vejámenes que éstas infligían a las poblaciones y el incumplimiento de las obligaciones del tratado colmaron la indignación popular, que al fin se descargó sobre el omnipotente primer ministro, el 18 de marzo de 1808, en el motín de Aranjuez, apoyado por los partidarios de Fernando. Godoy fue encarcelado y Carlos IV abdicó la corona a favor de su hijo.

La popularidad circunstancial de Fernando, fundada en el triunfo de una tendencia visiblemente antifrancesa, no podía ser grata al Emperador. Como Carlos IV le manifestara que su abdicación le había sido arrancada por la fuerza, decidió intervenir y convocó a padre e hijo a una entrevista en la ciudad de Bayona, donde hizo que le delegaran la decisión del pleito. Convertido así en árbitro, obró a la manera napoleónica. Dispuso para ambos monarcas sendas residencias en Francia y nombró a su hermano José Bonaparte rey de España y de las Indias, mediante una constitución que hizo pergeñar rápidamente por una junta

de notables españoles convocada al efecto. Creyó que por este medio se haría dueño de España, cuando en realidad preparaba su propia ruina.

El 2 de mayo había estallado la insurrección en Madrid. Pronto se extendería a toda la nación. La larga y sangrienta guerra de la independencia —epopeya de coraje y sacrificios como pocas veces se ha visto en la historia— dirigida por jefes improvisados salidos del montón, acabaría con el mito napoleónico causándole una herida mortal.

No toda España, sin embargo, se erguiría contra el usurpador. Una fracción de la inteligencia española, imbuida de principios revolucionarios, consideró el cambio como una exigencia de los tiempos y se plegó al nuevo régimen. Fueron los "afrancesados", casi todos ellos pertenecientes a logias masónicas distribuidas desde tiempo atrás por la península para propagar ideas favorables al sistema francés.

El nombramiento de Santiago de Liniers como virrey interino del Río de la Plata fue uno de los últimos decretos firmados por Carlos IV, aliado de Francia y de su Emperador. Cuando el 13 de mayo asumió el mando el héroe de la Reconquista no sabía que estaba representando a un rey cautivo y que la patria de su nacimiento se hallaba en guerra a muerte con su patria adoptiva.

La primera complicación grave a la que debió hacer frente su gobierno fue la instalación en Río de Janeiro de la corte portuguesa, lo cual suscitaba —dada la situación de guerra vigente— la necesidad de una defensa inmediata de la frontera. Las noticias del cambio ocurrido después de los episodios de Bayona descartaron ese peligro, si bien convertiría a dicha corte en un foco de intrigas que mantuvieron a la población de Buenos Aires en permanente inquietud.

Era natural que la situación de España —de suyo confusa por la división interna que degeneraría en sangrienta lucha civil— comunicara esa confusión a sus colonias, creando un estado de zozobra jalonado de dudas, sospechas, alarmas y conflictos de todo orden. La dificultad de las comunicaciones agravaba la situación. La índole catastrófica de las novedades inclinaba al pesi-

mismo sobre el porvenir de la metrópoli, por lo cual cobraban actualidad las ideas de independencia, latentes de tiempo atrás, según se ha visto. Habíamos tenido que defendernos solos contra los ingleses: todo indicaba que tendríamos que hacer frente por nuestros propios medios al porvenir. Esta convicción se iba extendiendo, aunque no todos aceptaran sus consecuencias extremas. El pensamiento del siglo había penetrado en los círculos selectos del Nuevo Mundo, para cuyos individuos eran familiares las obras de Raynal, Condillac, Voltaire, Rousseau, Jovellanos y los fisiócratas, además de los canonistas castizos del regalismo borbónico; pero este pensamiento admitía numerosas soluciones, cuya aplicación debía condicionarse al desarrollo de acontecimientos imposibles de prever. ¿Qué ocurriría en Europa? ¿Quién triunfaría en definitiva? Toda tentativa de acción eficaz debía plantearse previamente estos interrogantes.

La verdad es que en ese momento de precipitación de los sucesos, aquí se estaba a oscuras, dependiendo de las gacetas y comunicaciones que llegaban con dos meses de atraso, cuando había cambiado ya todo. En este rincón remoto del mundo —tan remoto como no pueden ni siquiera imaginarlo los contemporáneos del telégrafo y el avión— se especulaba sobre realidades muertas y se vivía de cavilaciones y conjeturas sobre datos insuficientes: situación propicia a la fabricación de fantasmas. Todo ello, reflejado en un ambiente aldeano, explica las reacciones excesivas, las desconfianzas, los temores, la singular zozobra que caracterizó a estos años.

La primera noticia que llegó a Buenos Aires de los sucesos de España fue la referente a la abdicación de Carlos IV y la asunción del trono por su hijo Fernando VII. Se estaban terminando los preparativos para la jura del nuevo monarca, en la forma solemne indicada por el ceremonial, cuando apareció en Montevideo un visitante inesperado.

Era el marqués de Sassenay, enviado por el emperador Napoleón ante el Virrey de Buenos Aires. Traía credenciales que lo acreditaban en su función diplomática y comunicaciones dando cuenta de los acontecimientos de Bayona y exigiendo el reconocimiento de José Bonaparte —José 1.º— como rey de España y de las Indias. El gobernador de Montevideo, don Javier de Elío, lo mandó a la capital bajo custodia, para que no pudiese comunicarse con nadie.

A fin de no dar lugar a sospechas, Liniers sólo consintió en

recibirlo en audiencia pública y acompañado de los miembros del Cabildo y los oidores. La lectura de los pliegos produjo indignación. Después de una discusión acalorada se resolvió por gran mayoría el rechazo de la propuesta y la expulsión inmediata del enviado, tomando precauciones para impedirle contactos con los habitantes de la ciudad.

Las condiciones del tiempo impidieron embarcarlo el mismo día. Según la correspondencia del marqués, que se hizo pública más tarde, Liniers tuvo ocasión de hablar largamente a solas con él durante la noche que permaneció en el Fuerte, haciéndolo partícipe de sus sentimientos contrarios a los de los oidores y cabildantes. La verdad es que ya había establecido desde tiempo antes contactos epistolares con el Emperador (aliado de su Rey) dándole cuenta de sus triunfos sobre los ingleses y subrayando la circunstancia feliz de que fuera él —un francés— el caudillo indiscutido de estas comarcas prósperas, donde tan señalados servicios podría prestar a la causa común.

La oposición contra el Virrey se agravaría a raíz de la proclama que lanzó el 15 de agosto, dando cuenta de los acontecimientos ocurridos en la península.

El documento se hallaba escrito en tono mesurado y lleno de contemplaciones para el usurpador. Aconsejaba a la población que se mantuviera tranquila a la espera del desarrollo de los sucesos, como lo había hecho en 1700. El recuerdo de la guerra de sucesión española era ciertamente una imprudencia, porque significaba aceptar de antemano la posibilidad de un cambio de dinastía a favor de Bonaparte. La reacción no se hizo esperar. Contra las disposiciones de Liniers, Elío allanó en Montevideo los fueros del enviado, tratándolo como a un delincuente común. Lo sometió a un interrogatorio minucioso, sin ahorrarle preguntas sobre los tratos con el Virrey, y lo encerró luego en una celda, desde donde lo envió a Cádiz como prisionero. Allí lograría fugarse y llegar a Francia a dar cuenta del resultado desastroso de su embajada.

Desde entonces hasta su reemplazo, Liniers no tendría un instante de tranquilidad, no obstante sus esfuerzos por recuperar la confianza perdida. Su primera medida fue apresurar la ceremonia de la jura de Fernando VII, que se realizó el 21 de agosto: juramento de un rey sin corona, que le escribía esquelas adulatorias al amo de Europa mientras su pueblo se desangraba en la lucha por la libertad.

Conviene reflexionar brevemente sobre este episodio porque hay en él una clave oculta.

Es evidente que Napoleón creyó en el éxito de la misión Sassenay y que tenía motivos para ello. España —la España oficial de los “afrancesados”— seguía siendo aliada del Imperio y el Río de la Plata estaba gobernado por un francés que era al mismo tiempo un héroe popular. Los americanos de la generación actuante se hallaban además habituados a ver en el francés un amigo y un enemigo en el inglés. ¿Cómo suponer la posibilidad de un fracaso?

Si se tiene en cuenta la aquiescencia general de las colonias del Nuevo Mundo —simples satélites de un sistema— a los hechos consumados en la península, resultaría también inexplicable la resistencia de Buenos Aires a un hecho probado con testimonios fidedignos, sin la intervención de factores muy poderosos. Es evidente que estos factores existieron y actuaron. Y no pueden ser otros que la infiltración —con anterioridad o simultáneamente a la misión Sassenay— de noticias sobre la insurrección española contra el invasor, traídas en barcos ingleses por vía de Río de Janeiro y Montevideo. La actitud de don Javier de Elío es a este respecto altamente significativa.

El interés de Inglaterra por estos mercados se había agudizado a raíz del bloqueo decretado por Napoleón y que impedía a sus barcos el acceso a los puertos de Europa. Es natural que haya extremado sus esfuerzos por precipitar un vuelco de opinión favorable a dicho interés, mediante la diligencia en la difusión de noticias hábilmente aderezadas y que incidían sobre el sentimiento de fidelidad a la corona, todavía vigente. Incidían además sobre otro sentimiento muy vivo: la nostalgia montevideana de las baratijas inglesas de la época de la ocupación. Su rechazo del francés les permitiría a los comerciantes de ese puerto conciliar dos cosas difícilmente conciliables: el honor y el provecho.

Sólo de este modo se explica la actitud de los oidores y cabildantes —que no eran por cierto corporaciones heroicas— frente al enviado del Emperador. Napoleón no tenía barcos ni ofrecía la menor oportunidad para el desarrollo económico de estos pueblos. La causa del comercio coincidía con la de la heroica insurrección de España y sus representantes nos prometían gloria y prosperidad.

* * *

La lucha popular de España contra el invasor colocaría al Virrey en una situación harto delicada, ya que era legítimo supo-

nerle —no obstante sus laureles frescos y su hasta entonces reconocida lealtad— íntimos sentimientos favorables al enemigo.

No dejaron de hacerlo, por cierto, los españoles y criollos encendidos de ardor patriótico, muchos de los cuales tenían con él pleitos pendientes y a quienes causaban escándalo asimismo ciertas particularidades privadas que le atribuían, en materias veniales de comercio y faldas. Lo cierto es que el entusiasmo suscitado por el triunfador en la lucha contra los ingleses —de que dan testimonio los versos ingenuos de “El triunfo Argentino”— se enfrió rápidamente a raíz de las novedades de Europa. El “heroico jefe de la patria amada... nuestro caudillo, el ilustre Liniers” empezó a eclipsarse ante la imagen (falsa pero convincente) del francés disoluto y sospechoso de traición, que supeditaba los intereses del Virreinato a sus miras particulares y a los caprichos de Madame O’Gorman.

VIII. LA QUIEBRA DEL PODER ESPAÑOL. CISNEROS

A fines de 1808 España parecía perdida. La rebelión española iniciada en Asturias se había propagado a toda la península, dirigida por la Junta de Sevilla, "Suprema de España e Indias", con lujo de sangre en su reacción contra los "afrancesados" o sospechosos de serlo y la consigna de resistir hasta la muerte: la "guerra a cuchillo" proclamada por el heroico Palafox. Pero la suerte de las armas fue al principio favorable a los franceses y el rey José pudo entrar en Madrid el 20 de julio. Mientras tanto, el propio partido de la resistencia se dividía en dos facciones irreconciliables que convivían dentro de la junta: la de Florida-Blanca y la de Jovellanos, inclinada una al absolutismo y la otra a las reformas, en el sentido de las antiguas instituciones de Castilla.

La capitulación de Bailén, en que el general Dupont hubo de rendirse ante las fuerzas españolas del general Castaños con veinte mil hombres y toda su artillería, al mismo tiempo que los franceses debían retroceder en Portugal y levantar el sitio de Zaragoza y Gerona, pareció iniciar un vuelco de la suerte. José Bonaparte abandonó la capital seguido de su corte. Pero esto duró poco. El Emperador en persona decidió dirigir la segunda campaña e invadió la península con ocho cuerpos de ejército. La embestida fue al principio arrolladora por parte de los franceses, quienes vencieron la resistencia desesperada de las tropas españolas y entraron en Barcelona y Madrid. La guerra de guerrillas hacía no obstante entre ellos una gran mortandad, así como la defensa heroica de algunas ciudades: frente a los muros de Zaragoza solamente y en la pelea casa por casa, perdieron ocho mil hombres. El 9 de enero de 1809 se consolidó la alianza de la Junta con Inglaterra, que fue útil sobre todo para la obtención de ayuda financiera con qué hacer frente a los gastos militares.

La lucha continuó encarnizada en toda la península: guerra total, en la que no había indiferentes ni neutrales, pues en ella participaba toda la población. Las guerrillas —conducidas por jefes de arrojo legendario, como el Empecinado, Merino y Echevarri— se rehacían milagrosamente después de cada revés. Las tentativas de los franceses para obtener un acomodamiento con las

Juntas fueron frustradas por la energía de Jovellanos: no habría cuartel. Las batallas campales y los sitios de ciudades (como el de Gerona, que resistió siete meses al fuego y al hambre), aunque victorias aparentes, resultaban para los invasores tan costosas como si fueran derrotas.

Las memorias de los actores en los episodios de estos años, muestran la confusión y la vacilación que reinaba en los espíritus del Río de la Plata ante las noticias llegadas de Europa. Todos veían acercarse la hora de las grandes decisiones, pero no se ponían de acuerdo sobre lo que debía hacerse.

El Rey legítimo, a quien el Virrey representaba, se hallaba prisionero e impedido, mientras que un usurpador ocupaba el trono. La autoridad de Liniers se había convertido con ello en una autoridad fantasmal, por la anulación del principio de que provenía y sólo podía mantenerse en la medida en que prevaleciera el espíritu de conservación de los habitantes o su confianza en la persona que la encarnaba. Esta confianza se hallaba decididamente en baja por las causas que ya se han expuesto. Sea como fuere, aun para sus más íntimos amigos, la situación del Virrey aparecía como eminentemente provisoria e insegura, como la de simple tenedor de un mando que las circunstancias lo obligarían a abandonar.

Era natural que en esta situación maniobraran los representantes de los poderosos intereses en litigio, como lo habían hecho a raíz de la visita de Sassenay. Y que se manifestaran en el sentido de definir la situación en el Río de la Plata de acuerdo con el vuelco de los acontecimientos europeos.

La situación era propicia para toda clase de intrigas y aventuras. No podía dejar de aprovecharla la corte próxima de Río de Janeiro. De allí saldría la candidatura, para coronarse en el Plata, de la princesa Carlota —esposa del príncipe regente de Portugal y hermana de Fernando VII— a quien la abolición de la ley sálica le daba eventuales derechos a la corona de España. La auspiciaba calurosamente el almirante Sidney Smith, jefe de la escuadra inglesa del Atlántico austral, que aparecía en todos sus actos como consejero y agente entusiasta.

Ningún ejemplo más patente de la confusión de la hora que el auge momentáneo del "carlotismo". Muchos hombres, entre los mejores de la clase pensante, vieron en la coronación de una princesa borbónica el expediente para salir del paso y suplir la falta de la autoridad legítima. Su principal agente desde Río de Janeiro fue don Saturnino Rodríguez Peña, fugado allí a raíz de su connivencia con los ingleses y a quien el cambio de las circunstancias había devuelto el crédito perdido. Sus partidarios en Buenos Aires eran el abogado y oficial de patricios don Manuel

Belgrano, el abogado don Juan José Castelli, el comerciante don Cornelio Saavedra, coronel de dicho regimiento, y muchos otros.

La princesa Carlota —por falta de continuidad en sus propósitos y de fidelidad a sus compromisos— habría de desengañar pronto a sus patrocinantes de buena fe. Pero la intriga adquirió proporciones y hubo de considerarse como un serio peligro. El descubrimiento de los papeles de la correspondencia de Rodríguez Peña, realizado por Elío en Montevideo, fue una de las razones que contribuyeron a enconar más las relaciones entre este gobernador y el Virrey de Buenos Aires.

* * *

La actitud indecisa de Liniers (que parecía calculada sobre la esperanza del triunfo en España de la causa francesa) suscitaba la oposición contra él. Pronto la opinión hubo de dividirse en dos partidos que se definieron por la adhesión o la resistencia a su persona, si bien uno y otro coqueteaban eventualmente con el "carlotismo".

Es interesante analizar la composición de estos partidos para desmentir ciertas simplificaciones corrientes y falsas. No es exacto que se tratara de una división entre criollos y españoles nativos, pues había criollos entre los enemigos de Liniers y españoles entre sus partidarios. Esa división, que originaba pleitos locales por los asientos de los cabildos, no tenía categoría suficiente para convertirse en bandera, en momentos en que la idea de nacionalidad se hallaba en germen todavía. No es exacto tampoco que estuviera en juego la mayor o menor fidelidad al rey legítimo, pues este sentimiento lo compartían, en diversas graduaciones personales, los dos bandos. Ni era mucho menos cuestión de puja ideológica entre liberales y absolutistas, como también se ha dicho. El pensamiento dominante en ambos sectores (entre los que pensaban) era el progresismo reformista dentro del programa de la "ilustración", con diversos matices de acentuación regalista o masónica, que se compadecía bien con el absolutismo siempre que estuviera unido a las luces. La influencia sobre unos pocos del pensamiento revolucionario apenas si pesaba entre el conjunto. Mucho menos todavía influía la cuestión del gobierno propio. Ni uno ni otro bando, como tales, pujaban por la emancipación con respecto a España, en la que pensaban eventualmente los dos.

La divergencia entre los partidos se fundaba en razones circunstanciales, de personas, de temperamentos y de intereses. Había cuestiones que resolver y Liniers no las resolvía. Había que obrar y Liniers esperaba. Había guerra contra Francia y Liniers

era francés. Pero Liniers estaba en el gobierno; era el Virrey. Era además el héroe a quien el pueblo había aclamado y reclamado. Y después de todo —aquí en este extremo del mundo lejos de toda información— ¿quién sabía lo que estaría ocurriendo en Europa?

Estas proposiciones explican todo el pleito. El Virrey contaba con los restos de su prestigio militar y el que le daba la posesión efectiva del mando: con las fuerzas de inercia. A éstas pertenecían los jefes de cuerpo, principalmente criollos y gente de posición, cuyas tímidas opiniones políticas y sentimientos conservadores hacíanlos reacios a todo cambio mientras no apareciera como inevitable. Las "memorias" del general Belgrano son especialmente significativas en la mención de esta timidez, cuya consecuencia era la resistencia pasiva ante la agitación de los inquietos. Junto con los conservadores, los oportunistas que especulaban con la expectativa y alguno que otro "afrancesado" por razón de la simpatía o la sangre, que los había aquí como en la península.

Frente a ese partido, la oposición se abroquelaba en el Cabildo, encabezado por don Martín de Alzaga, única personalidad con volumen suficiente en la ocasión para enfrentarse con Liniers, contra quien mantenía además un pleito personal por el reparto de los laureles de la Defensa. Querían la deposición del Virrey y la formación de una Junta, como en España. Esa aspiración se había concretado ya en Montevideo, cuyo gobernador Elío, a raíz de la llegada del enviado de la Junta Central, don José Manuel Goyeneche, había proclamado la Junta, poniéndose en rebelión abierta contra la autoridad del Virrey.

Alzaga y sus partidarios hacían una solapada campaña en el mismo sentido y se dirigían a las autoridades españolas pidiendo el reemplazo del discutido gobernante, con cargos que incluían desde las sospechas sobre su lealtad hasta la evidencia de sus liviandades en materias privadas y financieras.

* * *

La tensión política debía estallar al fin el 1° de enero de 1809, a raíz de la elección de capitulares.

Liniers estaba decidido a modificar la composición del Cabildo con la designación de candidatos favorables a su persona. Los partidarios del Alcalde, a su vez, movilizaban sus elementos para impedir la maniobra e intentar la deposición del Virrey, según el precedente estimulante del 14 de agosto de 1806.

Al tañido de las campanas tocadas a rebato se congregó por la mañana en la plaza Mayor una pueblada a los gritos "¡Muera el francés Liniers! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Juntas como en España!". El Virrey estuvo a punto de ceder a la intimación, sobre todo al mediar el obispo, favorable a la causa de los revoltosos. Pero lo disuadió la opinión conservadora de los jefes de cuerpo, encabezados por don Cornelio Saavedra, quienes enterados de lo que ocurría, habían alineado sus fuerzas municionadas sobre la plaza con lo cual lograron sofocar el motín y consolidar la tambaleante autoridad.

Este oscuro episodio de la historia argentina suele interpretarse (desde la creación del mito por López) como un triunfo de los "criollos" sobre los "peninsulares", con todos los laureles para aquéllos. La verdad es que fue el triunfo del conformismo y el espíritu conservador sobre la decisión revolucionaria, a lo cual contribuyó, sin duda, la resistencia que causaba la fuerte personalidad del alcalde de primer voto.

Por lo que hace a la nacionalidad, si había mayoría de criollos entre las fuerzas que sostenían a Liniers, también estaba el cuerpo de "andaluces". Si entre los partidarios de Alzaga la mayor parte eran españoles, había asimismo muchos criollos, como el doctor Mariano Moreno —que sería el numen de la futura revolución— y acaso también Paso y Castelli. Si el movimiento del 1° de enero puede considerarse precursor de este acontecimiento decisivo, el impulso renovador no se encontraba en el partido de Liniers, sino en el de Alzaga. Liniers y sus sostenedores representaban la timidez y la reacción.

Los comprometidos en el movimiento fueron desterrados a Patagones, de cuyo destierro los salvó Elío, mandando un barco a rescatarlos. Contra Alzaga y dos jefes militares se abrió un proceso por "tentativa de independencia", fundado en expresiones proferidas durante los días de la Reconquista. El Alcalde había dicho, según consta en las actas, que: "España sabía bien que América no necesitaba de ella para nada". Este proceso sería sustanciado en junio de 1810 por la Primera Junta de gobierno, con la absolución de los acusados.

La situación de Liniers siguió siendo difícil, no obstante su fácil triunfo. La oposición no cesaba y el porvenir se le presentaba sombrío por el lado de España. Solía desahogar su inquietud en el círculo de sus íntimos: su suegro don Martín de Sarra-tea, fuerte comerciante; el socio eventual de éste, don Domingo

Belgrano; el coronel Saavedra, tendero e importador, y un joven con veleidades mercantiles y curialescas llamado Bernardino González Rivadavia, a quien hubo de proponer sin éxito como alférez real y que lo había conquistado por sus modales obsequiosos y su afición a los autores franceses.

Para agravar sus cavilaciones, la princesa Carlota le denunciaba desde Río de Janeiro una conspiración tramada alrededor del propio Virrey, acusando a los amigos de éste (¡con quienes ella misma se carteaba!) de ocultar segundas intenciones republicanas y revolucionarias y ofreciéndole su intercesión para arreglar el pleito con Elío en beneficio de la legitimidad. No se equivocaba en ello la princesa: la nueva generación que surgía a la vida política y que se hallaba imbuida de la ideología del siglo, no podía dejar de pensar en el ejemplo de los Estados Unidos y en la oportunidad que deparaban los acontecimientos de Europa. No eran ajenos a este pensamiento los propios españoles, para evitar la caída bajo el yugo francés. Liniers, que había disuelto los regimientos comprometidos en el motín de enero, empezó con todo a lamentar el haberse entregado a un solo partido y esperó su salvación de los refuerzos que pudieran venirle de la península. Queda en la duda si los esperaba de la Junta de Sevilla o de su compatriota el rey José.

Para colmo de males, se manifestó vacilante y moroso en un asunto que era el más aparente para agravar el encono y agudizar las sospechas. El comercio del puerto estaba paralizado por la guerra y la suspensión de los barcos de registro, y las barracas se hallaban abarrotadas de cueros. El secretario del Consulado, don Manuel Belgrano, había propuesto abrir el puerto al comercio inglés, operación momentáneamente beneficiosa y justificada con creces por el hecho de que Inglaterra era aliada de España. Liniers dilató la ejecución del proyecto, que sería aprobado y puesto en práctica por su sucesor.

En julio de 1809, en efecto, le llegó la noticia de que la Junta de Sevilla, trasladada a Cádiz, le había designado reemplazante en la persona del teniente general de marina don Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien se hallaba en Montevideo para hacerse cargo del mando.

La llegada del nuevo Virrey hizo que se mostrara de nuevo la indecisión y la anarquía que reinaba entre los jefes de las milicias. Hubo conatos de resistir, según los testimonios de la época. La oportunidad parecía inmejorable, puesto que la autoridad del funcionario procedía de un origen eminentemente discutible, hasta en la misma península: ya había otro virrey nombrado por la Junta de Galicia, otro por la de Granada ¡y así hasta cinco!... Pero el hombre de mayor peso en los consejos decidió que "las

brevas no estaban maduras". Los jefes de las fuerzas, acompañados del Virrey saliente, debieron pasar a la otra orilla a rendir homenaje al nuevo. Este juró y asumió el mando en la Colonia.

* * *

Las "brevas" habían madurado entre tanto para nuestros hermanos del Alto Perú y del norte. En mayo de ese año y como consecuencia de los sucesos de España, estallaron sendos movimientos revolucionarios en Chuquisaca y La Paz, con establecimiento de juntas, como en España. Pocos meses antes, Bolívar se había hecho dueño del poder en Caracas.

En Chuquisaca, el estallido había sido provocado por un conflicto entre el presidente Pizarro y el obispo con la Audiencia. Este había negado su reconocimiento al comisionado de la Junta de Sevilla, don José Manuel Goyeneche, quien llevaba pliegos procedentes del Brasil en los que se proponía el protectorado del príncipe regente y de la princesa Carlota. Se difundió entre el pueblo la versión de que el presidente y el obispo pretendían entregar el territorio a los odiados portugueses, invasores de Moxos y Chiquitos. La indignación pública provocó la renuncia de Pizarro y la Audiencia asumió el gobierno, nombrando comandante de las fuerzas al teniente coronel don Juan Antonio Alvarez de Arenales. Los funcionarios depuestos escribieron al Virrey de Buenos Aires acusando a los oidores de estar animados de propósitos de independencia.

En La Paz había un movimiento preparado para estallar en ocasión del que realizaría Alzaga en Buenos Aires. El fracaso de éste había motivado su postergación; pero los sucesos de Chuquisaca le ofrecieron una nueva oportunidad. El 16 de julio el Cabildo, acaudillado por don Domingo Murillo y don Juan Pedro Indaburu, después de provocar la renuncia del gobernador y del obispo, asumió el gobierno y formó una Junta Tuitiva. Esta lanzó una proclama en que se refería a la "bastarda política de Madrid" y declaraba que ya era tiempo "de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias".

El movimiento de La Paz fue aplastado por fuerzas militares enviadas por el virrey Abascal del Perú, a las órdenes de Goyeneche. La represión fue sangrienta, condenándose a muerte a los principales comprometidos. Para sofocar el movimiento de Chuquisaca, el virrey Cisneros mandó fuerzas de Buenos Aires, a las órdenes del mariscal Nieto, su inspector de armas. Es de advertir que entre estas fuerzas figuraba un contingente "criollo", de los "patricios" del coronel Saavedra. Nieto iba con el mando polí-

tico y militar. Al tomar posesión del gobierno, prendió a todos los que se habían señalado en el motín o habían aceptado cargos públicos, mandándolos a los calabozos de Lima o deportándolos a las fronteras.

* * *

Parece extraño que, mientras ocurrían estos episodios, los hombres más conspicuos del vecindario porteño colaborasen mansamente con el virrey Cisneros, principal responsable de la represión.

El rigor aplicado en el norte contrastaba, en efecto, con la política amable que se desarrollaba en la capital, y acaso esta falta de solidaridad aparente (agravada por la referida participación de los "patricios" en la acción coercitiva) haya contribuido en mucho a nuestras dificultades futuras con el Alto Perú. Lo cierto es que el único perseguido, entre los hombres de ulterior significación revolucionaria, fue don Juan Martín de Pueyrredón, detenido por sus excesos de lenguaje en la correspondencia que desde España había enviado al Cabildo. Se lo encerró en el cuartel de Patricios, de donde fugó a Brasil: se lo sospechaba de afrancesado. Por lo demás, fueron amnistiados los comprometidos en el motín de enero; los contertulios de Liniers pasaron a rodear al nuevo Virrey, y el doctor don Manuel Belgrano se decidió a fundar, bajo sus auspicios, un nuevo periódico, el "Correo de Comercio".

Es de advertir que el 15 de octubre el virrey Cisneros, después de un copioso expediente en que se consultaron todas las opiniones —y cuya pieza central la constituyó la famosa "Representación de los Hacendados"— había decretado la libertad de comercio con Inglaterra y los países americanos, postergada por su antecesor. Aquí estaba, sin duda, el *quid* de la cuestión, el secreto de la colaboración y de la paz. Para el puerto comercial de Buenos Aires las restricciones al comercio eran la inquietud y la guerra civil; la libertad de comercio, en cambio, la unanimidad de la opinión.

Nos hemos referido a las razones del monopolio del comercio español. Ellas no regían ya en este año de 1809, en que España, con su actividad económica paralizada, se desangraba bajo la invasión; por lo cual la doctrina que pretende ver en el proceso revolucionario una lucha entre "monopolistas" españoles y "librecambistas" criollos, es radicalmente falsa. Ni todos los criollos eran librecambistas (no lo eran, por cierto, los del interior), ni todos los españoles monopolistas; y además, el problema

estaba resuelto por Cisneros, quien en ese caso habría sido el verdadero "numen" de la revolución. El acto del 15 de octubre —si bien sustanciado con gran copia de doctrina de última data y citas de Adam Smith y Filangieri— no fue más que un expediente de circunstancias aconsejado por la necesidad. Necesidad que todos reconocían y a la que casi nadie habría de oponerse.

Porque la verdad es que el Cabildo y el Consulado, por medio de sus organismos legales y no obstante constituir los baluartes del "monopolio" se adhirieron a la propuesta de los comerciantes ingleses en el sentido del comercio libre; se adhirieron con reservas, pero se adhirieron. La "Representación" de Moreno no hacía más que interpretar una necesidad momentánea, originada en el estado concreto de Europa e independiente de toda teoría. Ese comercio era de vital importancia para Buenos Aires, desconectada de España; era de vital importancia también para Inglaterra, a quien el bloqueo decretado por Napoleón le cerraba los puertos del continente. Por el tratado de alianza, Inglaterra debía proporcionar a España los fondos necesarios para la guerra de la independencia en que estaba empeñada. El comercio con Inglaterra representaba circunstancialmente una ayuda a España.

LIBRO III

SEGREGACIÓN Y GUERRAS EXTERNAS E INTERNAS POR LA INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD

I. LA REVOLUCIÓN DE MAYO. MARIANO MORENO

Desde los primeros meses de 1810 empezaron a llegar a Buenos Aires las noticias sobre los desastres de España. En marzo se supo la rendición de Gerona y Almadén y el doctor don Tomás de Anchorena dio la voz de alarma en el Cabildo. El 1.º de mayo una fragata inglesa procedente de Gibraltar trajo la evidencia de la invasión, la toma de Sevilla y Málaga, la caída de la Junta Suprema y la formación en Cádiz del Consejo de Regencia.

España parece perdida. La alarma cunde, los ánimos se exaltan, hay reuniones y conciliábulos. ¿Cuál será nuestra suerte? La autoridad de quien dependía el Virrey ha cesado y el poder legítimo está vacante. En vano tratará Cisneros de dilatar las soluciones prometiendo el 18, en un manifiesto, la convocatoria por los virreyes de un congreso de América para la formación de una Regencia soberana. Los vecinos apoyados por los jefes militares piden Cabildo abierto.

El 21 hay reunión de gente en la plaza Mayor, exigiendo Cabildo abierto y deposición del Virrey. El Cabildo cede y despacha las invitaciones para el día siguiente.

* * *

Parece que el virrey Cisneros se decidió a autorizar la celebración del Cabildo abierto con la esperanza de obtener en él un triunfo holgado y consolidar así su poder. Ello se desprende de las palabras con que lo inauguró el síndico procurador doctor don Joaquín Leiva. Después de afirmar que el objeto de la convocatoria consistía en "conservar" estos dominios para S.M. Fernando VII, puso en guardia a los concurrentes contra la adopción de novedades peligrosas, aconsejándoles que siguieran un "camino medio" que conciliase "con nuestra actual seguridad y la de nuestra futura suerte el espíritu de la ley y el respeto a los magistrados".

El debate que se siguió fue largo y por momentos confuso. No ha quedado de él una versión fidedigna, de modo que se lo ha reconstruido sobre los recuerdos de los asistentes. La opinión conservadora fue sostenida por el obispo Lue y el fiscal Villota;

la renovadora por Paso y Castelli. Al fin se centró la discusión sobre el asunto concreto de "si había caducado" el poder del Virrey y cómo habría de reemplazárselo: fórmula que definía la situación y que se le atribuye al doctor Mariano Moreno. Después de una prolongada y laboriosa votación quedó resuelto que el Virrey debía cesar en el mando y que el Cabildo designaría una Junta para sustituirlo, de acuerdo con los deseos del vecindario.

La resolución era lisa y llanamente revolucionaria, en el hecho y en las proyecciones, aunque ajustada a derecho. El no reconocimiento del Consejo de Regencia establecido en Cádiz se fundaba en la incompetencia de una ciudad española para arrogarse la representación del soberano ausente. No habiendo delegación expresa de poder, cualquier otro lugar del imperio tenía la misma facultad de recuperar su fracción de soberanía.

Resulta sintomático que la "caducidad" del Virrey fuera planteada por el joven letrado de "los hacendados", que había acompañado a Alzaga el 1° de enero de 1809. Esto demuestra una continuidad revolucionaria, que entronca con los sucesos de ese año en Chuquisaca y La Paz. Vimos la correlación que existió entre estos episodios, sincronizados con la insurrección del resto de América, respecto a la cual Buenos Aires se hallaba en retraso. Moreno había estudiado en Chuquisaca, tenía allí sus amigos y no olvidaba la sangrienta represión de la que Cisneros era el principal responsable.

* * *

La anarquía de opiniones y las vacilaciones del grupo que aparecía como renovador y díscolo envalentonaron al Virrey y al Cabildo, quienes creyeron que podrían intentar impunemente una maniobra que les asegurase la conservación del poder. El Virrey había cesado, desde luego, y el Cabildo debía constituir, con plenas facultades, la Junta que habría de reemplazarlo. ¿Qué le impedía nombrar presidente de dicha Junta al mismo Cisneros?

Al día siguiente reapareció el ex Virrey como presidente de la flamante Junta gubernativa, acompañado de cuatro ciudadanos más, entre los cuales (en calidad de criollos) don Cornelio Saavedra y don Juan José Castelli, quienes muy campantes aceptaron la designación y prestaron juramento.

Hubo primero estupor y después indignación. Se convocó una reunión en casa de don Nicolás Rodríguez Peña, en la que el grupo que ya empezaba a llamarse "patriota" definió posiciones; y al fin se provocó la crisis con la renuncia de los nombrados y

la exigencia de una nueva junta, cuya lista se confeccionó allí mismo y se llevó ya hecha para evitar sorpresas. El Cabildo se vio obligado a ceder ante la agitación del vecindario y la presión de los jefes militares.

Al fin el 25, después de episodios movidos y de acuerdo con el clamor del "pueblo" expresado en un memorial con 476 firmas, se proclamó la Junta presidida por don Cornelio Saavedra, con Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu, Juan Larrea y Manuel Alberti como vocales, y Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios.

En esta ilustre primera Junta Provisoria Gubernativa se mezclaban, según la mejor tradición de los cuerpos colegiados coloniales, los españoles nativos con los europeos, si bien la presidencia había recaído en el maduro y ponderado coronel del regimiento de Patricios, criollo de Potosí cuyo prestigio no había sufrido demasiado con las vacilaciones del día anterior. Desde el comienzo se advirtió en ella una influencia preponderante: la del doctor Mariano Moreno, hijo de Buenos Aires y graduado en Charcas, que era el foco del pensamiento renovador en esta parte del Nuevo Mundo.

* * *

Surgido de una decisión puramente municipal, el gobierno de la Junta debía legitimarse (según el acta de su creación) mediante el consentimiento del resto del Virreinato, a cuyas autoridades comunales se invitaba asimismo a elegir diputados al congreso que habría de constituirse para resolver, en definitiva, sobre la suerte común. Para proteger la libre determinación de "los pueblos" se había decidido enviar al interior una expedición de 500 hombres, la cual estuvo lista en poco tiempo y salió de Luján el 13 de junio, al mando del brigadier don Francisco Ortiz de Ocampo y llevando como segundo al de igual grado don Antonio González Balcarce. En calidad de delegado de la Junta iba don Hipólito Vieytes.

La caída del aparato administrativo virreinal no podía efectuarse por cierto sin perturbaciones y conatos de resistencia. El Virrey depuesto —que permanecía en Buenos Aires—, los oidores y muchos individuos del Cabildo, así como los sectores vinculados a ellos por el interés, se mantenían a la expectativa de un fácil desquite, no obstante su aparente aquiescencia al hecho consumado. Lo esperaban todo de los gobiernos del interior, a los que se habían mandado emisarios secretos.

Los resultados se harían sentir pronto. Con fecha 14 de junio, el gobernador intendente de Córdoba, brigadier don Juan

Gutiérrez de la Concha, comunicó su desconocimiento de la autoridad de la Junta, al mismo tiempo que llegaban noticias de que organizaba la resistencia armada. Al día siguiente, el Cabildo de Montevideo (ante quien se había enviado como emisario al doctor Paso) adoptaba la misma actitud.

Estas novedades provocaron naturalmente una gran emoción en Buenos Aires, sobre todo al saberse que se hallaba al frente de la resistencia cordobesa el héroe de la Reconquista don Santiago de Liniers, que había recobrado prestigio, como suele ocurrir, después de su cesantía. Cisneros y sus amigos empezaron a levantar cabeza y a anunciar públicamente como cuestión de horas la caída del gobierno. Las circunstancias obligaban a obrar con energía y ésta no le faltaba a Moreno. El 22 fueron apresados el ex Virrey y los oidores Anzoátegui, Velazco, Reyes, Caspe y Villota y llevados a bordo de un cúter inglés, que zarpó en seguida rumbo a las Canarias. A la vez se mandaron órdenes terminantes al jefe de la expedición auxiliadora, en el sentido de aplastar la resistencia cordobesa y ejecutar a sus cabecillas.

Concha y Liniers planeaban ponerse en contacto con las fuerzas de Montevideo y las del Alto Perú al mando de Goyeneche para avanzar sobre la capital. No podrían hacerlo; sus mensajes fueron interceptados, sus planes descubiertos y el tiempo les faltó. La "Expedición Auxiliadora" estaba sobre Córdoba a marchas forzadas antes de que hubieran podido organizarse. Con los principales complicados, fueron detenidos cuando huían.

Un pedido general de clemencia del vecindario cordobés hizo que el general Ortiz de Ocampo aplazase el cumplimiento de las órdenes de la Junta y pidiese nuevas instrucciones. Pero Moreno (que sabía la utilidad de definir posiciones, las ventajas del rigor oportuno y los inconvenientes de la debilidad) obtuvo la ratificación de lo ya resuelto y el cambio de comando. Balcarce reemplazó a Ocampo, y a Vieytes, Castelli, quien partió de inmediato a ejecutar la sentencia. Liniers, Concha y el resto de los complicados, con excepción del obispo, fueron fusilados en "Cabeza de Tigre", el 23 de agosto.

Entre tanto, los demás cabildos del interior, con diversas alternativas locales y alguno que otro conflicto con los gobernadores intendentes (a cuyo reemplazo se procedió en seguida) iban reconociendo la autoridad de la Junta y designando sus diputados. Una nueva excepción fue el Paraguay, que había establecido contacto con Montevideo y que con fecha 27 de julio notificó, por intermedio del gobernador Velazco, su desconocimiento del gobierno de Buenos Aires y su acatamiento al Consejo de Regencia de España. Esto motivó el cierre de las comunicaciones entre nuestro puerto y la Asunción, la resolución de

separar del Paraguay el territorio de Misiones y la formación de un nuevo ejército para marchar sobre esa provincia, cuyo mando se dio a otro vocal del gobierno: el coronel de Patricios doctor Manuel Belgrano. La expedición salió de Buenos Aires el 2, de septiembre.

La Junta desarrollaba una extraordinaria actividad para el restablecimiento del orden interno y de la economía, perturbada por la necesidad de la guerra. No descuidaba tampoco el futuro del país. Para orientarlo había empezado a publicarse desde el 7 de junio la "Gaceta de Buenos Aires" como órgano oficial, en cuyas páginas brillaba el pensamiento claro y elevado de Moreno, expresado en estilo nervioso y eficaz.

En el orden administrativo se nombraron funcionarios para reemplazar a los cesantes del régimen virreinal y se dispuso el arresto de quienes viniesen de España, nombrados por el Consejo de Regencia, cuya autoridad habíase desconocido expresamente desde el 8 de junio. Para subvenir a las necesidades de la guerra, se creó un impuesto especial a la importación y exportación. Se empezó a preparar la primera escuadra para hacer frente a la de Montevideo, declarada contra la Junta y dueña de las vías fluviales. Se establecieron fábricas de armas y de pólvora.

La principal preocupación en el orden externo consistía en mantener la continuación del comercio inglés y la neutralidad de su gobierno, aliado al de España en la guerra contra Napoleón. La conveniencia era recíproca. A tal efecto la Junta comisionó a Londres, con fecha 29 de mayo, a don Matías Irigoyen, quien logró entrevistarse con Lord Wellington y aun hacer algunas adquisiciones de armas. Al mismo tiempo establecía Moreno una activa correspondencia personal con Lord Strangford, ministro inglés ante la corte de Río de Janeiro, con el doble objeto de paralizar las tentativas de bloqueo de la flota montevideana y de entretener con vagas promesas futuras las ambiciones de la princesa Carlota, reavivadas ante el espectáculo de nuestra división interior. Ambos propósitos momentáneamente se lograron. Aunque Montevideo continuaba dueña del río (pero ineficaz contra los barcos ingleses), se veía jaqueada a su vez por su campaña, cuyas poblaciones, como Maldonado, la Colonia y Soriano, habían acatado la autoridad de la Junta.

Antes de referirnos a la primera crisis de gobierno, ocurrida a menos de siete meses de constituida la Junta, conviene aclarar algunas ideas. ¿Qué sentido tenía la resistencia de Montevideo,

Paraguay y la que veremos en el Alto Perú? Suele simplificarse la cuestión hablando de "patriotas" contra "realistas", de criollos y españoles, de conservadores y liberales. Esto más confunde que aclara y además no es verdad.

No es posible comprender nuestra historia sin tener en cuenta las tensiones que juegan desde los albores de la época colonial y que se agravan en tiempos de crisis.

Ni Montevideo, ni Paraguay, ni el Alto Perú son más "realistas" que Buenos Aires, cuya Junta gobierna "en nombre del rey Fernando VII", a quien se aclama en todos los actos hasta la época de la Asamblea del año 13, según testigos de la época. No estaba en cuestión todavía la fidelidad. La resistencia —encabezada desde luego por los funcionarios provenientes de la península, que se resisten a perder sus situaciones— halla pábulo no en la adhesión a la corona, sino en el vivo sentimiento de animadversión a Buenos Aires reinante en todo el interior, cuyo origen conocemos y que se había intensificado en el curso del régimen virreinal, a raíz de la "Ordenanza de Intendentes", del comercio libre y de la subordinación de los intereses generales a los del puerto único.

En la Asunción actuaba el viejo orgullo de ciudad fundadora sometida a un injusto enclaustramiento, que coartaba su desarrollo y la comercialización de sus riquezas, cuyos precios se fijaban en la capital. "El agua del Paraná —escribe un historiador paraguayo— sabía a lágrimas, con su puerto precioso y sus aranceles". Muchos paraguayos preferían, no obstante los viejos rencores, entregarse al Brasil antes que a Buenos Aires, cuyas armas además por dos veces habían ahogado en sangre sus rebeliones comuneras.

Montevideo se sentía también subordinada, por ser Buenos Aires el punto final de la navegación de "registro" y la vía obligada para alcanzar los grandes mercados consumidores del noroeste. El comercio libre de la breve dominación inglesa le había dejado una nostalgia imborrable. No hallando otro alivio que el contrabando, que Buenos Aires obstaculizaba, no podía eludir el rencor tradicional del contrabandista contra el agente del fisco, agravado en los últimos años por rencillas de honor militar. Montevideo se atribuía la gloria de la reconquista de Buenos Aires, que aquí se le escatimaba, por lo que iban y venían letrillas y motes.

Por lo que hace al Alto Perú y a todo el noroeste, el régimen virreinal había significado opresión y estancamiento, cuando no ruina de sus industrias; y sobre todo anulación de las antiguas prerrogativas comunales absorbidas por los intendentes. A lo cual habría de agregarse el rencor reciente por la actuación de las milicias porteñas en la represión de Charcas. Todo lo cual inci-

día sobre un sedimento compuesto de reflejos encomenderos y aristocráticos y proveniente de la conciencia de un mejor origen que el de la población adventicia del puerto remoto y opresor. Estos sentimientos eran comunes en el interior hasta Córdoba inclusive, donde hubieran triunfado sin duda los conspiradores, de no haber mediado la marcha rápida de la "Expedición Auxiliadora".

Tales y no otras fueron las causas de la resistencia. A lo que ha de agregarse que las regiones donde se manifestó ganaban más inmediatamente con ella que con el acatamiento a la capital, pues hallaban la oportunidad de abrir vías nuevas para sus productos por Brasil y Perú. La oposición a Buenos Aires, en cuya Junta se veía (no sin razón) un órgano de alcance meramente municipal y una autoridad improvisada y adventicia, encontró un pretexto en el acatamiento al Consejo de Regencia, como podría haberse recurrido a cualquier otro.

* * *

Los diputados electos por los cabildos del interior según lo dispuesto en el acta de mayo habían empezado a llegar a Buenos Aires a fines de junio. Venían entre ellos algunos hombres de primera calidad, la mayor parte clérigos, como el deán de la Catedral de Córdoba, doctor Gregorio Funes y el jujeño doctor Juan Ignacio de Gorriti, que habrían de ilustrar la revolución con la palabra y la pluma. En los dos meses siguientes fueron llegando en mayor número, hasta sumar alrededor de una docena.

Ya estaba planteada para esa fecha una disidencia ideológica en el seno de la Junta. En sus escritos de la "Gaceta", destinados a preparar los espíritus para la celebración del congreso, Moreno exponía un plan político de gran envergadura. Según sus palabras, dicha asamblea, representación de todo el virreinato, debía asumir facultades constituyentes, ya que la "independencia de las colonias" era la consecuencia necesaria de "la inevitable pérdida de España". Es de advertir que esta convicción estaba muy extendida y que el propio enviado de la Junta a Inglaterra, don Matías Irigoyen, escribía con fecha 10 de octubre sobre "la imposibilidad de que esta desgraciada nación (España) recupere su libertad". Era también, por lo demás la opinión de Alzaga. A fuer de verdadero estadista, Moreno no se resignaba a esperar el resultado, sino que lo preveía, y quería precipitar las decisiones para negociar luego, si era preciso, sobre los hechos consumados.

La fracción timorata de la Junta —sobre la cual planeaba el espíritu del "comercio" del puerto— se escandalizaba por la auda-

cia de esas expresiones y prefería esperar y contemporizar. Se escandalizaba además por la política de rigor con que el secretario se proponía suprimir los obstáculos a la realización revolucionaria. Esa fracción, encabezada por Saavedra, que soportaba de mala gana la influencia decisiva de Moreno, contaba con la adhesión de las fuerzas armadas, de que éste carecía, con la sola excepción de un regimiento: el "Estrella", al mando de Domingo French.

Las noticias llegadas del interior eran, al terminar el año, muy auspiciosas. La expedición del norte, ahora al mando de Balcarce, que se había iniciado con un doble contraste en Cotagaita, logró el 7 de noviembre una decisiva victoria en Suipacha sobre el ejército del Alto Perú al mando del general Nieto, la cual provocó el estallido de una nueva revolución en Potosí y la captura y el fusilamiento del general nombrado y del gobernador Paula Sanz. Las banderas tomadas a los vencidos llegaron a esta capital el 12 de diciembre.

El acontecimiento se festejó al día siguiente con un banquete en el cuartel de Patricios, donde un oficial excitado por el entusiasmo y los vinos pronunció un brindis imprudente en homenaje a Saavedra. Este episodio dio motivo a Moreno para hacer dictar a la Junta el famoso decreto de supresión de honores al presidente, verdadero código moral republicano que, aceptado a regañadientes por el afectado (según se desprende de su correspondencia), ha de verse como la causa determinante de la crisis que sobrevendría. Otro pretexto que se invocó fue el decreto de pocos días antes (el 6) por el que se vedaba a los españoles nativos el acceso a los puestos públicos.

* * *

La leyenda que hace de Moreno un exaltado jacobino es inexacta. Es innegable que era un imaginativo y un nervioso, tipo de hombre que siempre asusta a los mediocres; pero estaba dotado de un exquisito equilibrio intelectual. Los principios del "Contrato Social" lo habían impresionado, como a toda la juventud de su tiempo, preparada para adoptarlos por la escolástica suarista. Lo revela la edición de esa obra que mandó difundir; y la doctrina general de sus escritos, fundados en la "reversión" al pueblo de los poderes del rey cautivo, con el subentendido de que los debía al consentimiento popular. De ser un "ideólogo" revolucionario (a la manera de Castelli) lo preservaban su ortodoxia católica y su entusiasmo por el sistema inglés, fundado en el equilibrio de poderes y al que citaba constantemente como

modelo. Su ideal era una república moderada, a lo cual lo inclinaba su conocimiento y su aprecio de la tradición castiza, rica en libertades forales, aproximándose así su pensamiento al de Burke y al de Jovellanos. Era, por lo demás, un hombre de gobierno nato: capaz, por consiguiente, de someter sus ideas a la prueba de la realidad y hacer las necesarias rectificaciones, como hubo de verse en los correctivos que aplicó al comercio libre. Por lo que hace a su terrorismo, no es español el asco a la sangre, y no necesitaba Moreno por cierto recurrir a la Convención francesa para aprender las medidas de rigor aplicables al enemigo por la ley de la guerra. Estaba fresco el recuerdo de las represiones de Nieto y Goyeneche en el norte, que necesitaban respuesta adecuada.

La fracción "saavedrista" de la Junta encontró en los diputados del interior el instrumento para terminar con la influencia del impetuoso y temible secretario.

En la circular del 27 de mayo convocando a elección de diputados, se había deslizado un error, al agregar que los electos se irían incorporando al gobierno en calidad de vocales. A esta cláusula se aferró la parte adversa al morenismo para lograr una mayoría que anulara su acción. El proponente parece haber sido el deán Funes: hábil para la intriga aunque blando, resultaba un complemento ideal para Saavedra, enérgico y sin luces. La incorporación de los diputados al Ejecutivo tenía para la actitud conservadora la ventaja inapreciable de impedir el congreso, con lo cual se aplazaría toda decisión hasta conocer el desenlace de los acontecimientos de España. No habiendo congreso, no habría tampoco constitución, ni independencia: todo ello prematuro, según el Deán.

Moreno defendió enérgicamente la tesis de la instalación del congreso, pero fue vencido por la mayoría, la cual alegaba además un estado de opinión pública contrario a la actuación del secretario, originado en el decreto del 6 de diciembre sobre los españoles: callaba el resquemor saavedrista por el decreto de honores, aunque estaba implícito en todo. La incorporación, decidida el 18, motivó la renuncia de Moreno, quien veía en ella el fracaso de su plan y una secuela de desdichas para el país.

La renuncia de Moreno no fue aceptada. Se le designó para una misión diplomática en Londres. Se embarcó el 24 de enero de 1811 y murió el 4 de marzo en alta mar, a los 32 años de edad.

II. DE LA JUNTA GRANDE A LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE. SAN MARTÍN

Aunque los poderes de los diputados del interior se resienten de vaguedad en los términos y de confusión con respecto a los fines (salvo expresiones concretas de aspiraciones regionales, como la recomendación al deán Funes de hacer gestiones por la rehabilitación de los jesuitas) no hay duda de que sus titulares venían animados del espíritu provinciano de desconfianza hacia Buenos Aires y resueltos a trabajar por la destrucción de su absorbente centralismo. Era natural, por consiguiente, que juzgaran la entrada al gobierno como la forma más rápida de imponerse y neutralizar la influencia de la capital. No carecían esos hombres de ímpetu renovador, más efectivo en muchos casos que el de los tímidos saavedristas porteños. Pero como la voluntad revolucionaria auténtica de Moreno se confundía con el centralismo, la reacción provinciana habría de acomodarse—ayudada por la timidez natural de los cuerpos colegiados— a la actitud conservadora de sus aliados accidentales que respondían al presidente de la Junta.

El cambio de régimen se traduciría desde el comienzo en un cambio también de lenguaje político. En la circular en que se lo comunicó a los cabildos volvió a hablarse de “nuestra amada metrópoli” y de “la fidelidad y vasallaje a nuestro desgraciado Fernando”. Y en el artículo de la “Gaceta” que se publicó el día 26 se hacía referencia a “las justas quejas de los españoles europeos” por el decreto que les vedaba el acceso a los empleos públicos; sin tener en cuenta que el principio de otorgar los cargos a los nativos no ponía en cuestión la fidelidad a la corona y había sido defendido en América desde la época de la Conquista.

El nuevo gobierno carecía de plan y de finalidad concreta en su acción. La debilidad de su lenguaje y su política dubitativa disgustaban a la opinión renovadora de la capital, sobre todo al sector juvenil que había vibrado con la prédica de Moreno, y daban pábulo a que se lo acusase de comprometer los intereses comunes, e incluso de traición y negociaciones subterráneas con “la Carlota”. La situación se agravó con la llegada a Montevideo de

don Francisco Javier de Elío, nombrado por la Regencia virrey del Río de la Plata.

* * *

Con el objeto de dar satisfacción al interior, se dictó el reglamento del 10 de febrero de 1811, por el que se disponía la creación en las ciudades y villas, de *juntas* de cuatro y dos vocales elegidos por el pueblo y presididas por el gobernador o el comandante de armas. La presidencia del funcionario mandado desde la capital hacía ilusorio el beneficio, pues mantenía la centralización efectiva bajo la autonomía aparente. Este reglamento dio motivo a que se manifestasen en las provincias las primeras tendencias separatistas: Mendoza quiso emanciparse de Córdoba y Jujuy de Salta. Provocó además multitud de conflictos de jurisdicción entre los nuevos cuerpos colegiados y los viejos cabildos.

La expedición de Belgrano al Paraguay no había tenido el éxito que se esperaba. Después de algunas acciones favorables de vanguardia en Campichuelo y Tebicuarí, nuestras fuerzas habían sufrido un contraste en Paraguarí luchando contra las comandadas por el gobernador Velasco. El 9 de marzo, en Tacuarí, después de una acción indecisa, se había firmado un armisticio con el general Cabañas por el que Belgrano se comprometía a abandonar el territorio y aceptaba una serie de concesiones relativas al comercio de productos paraguayos. De esta negociación diplomática derivaría pocos meses más tarde la revolución del Paraguay, la deposición de Velasco y la formación de una Junta bajo la presidencia de don Florencio Yegros, con lo cual se iniciaría la independencia efectiva de esa provincia, aunque guardando su actitud reticente y a veces hostil con respecto a la capital.

Mientras tanto, Elío había declarado la guerra a Buenos Aires el 2 de febrero, tildando a la Junta y sus partidarios de insurgentes y traidores. Las primeras acciones de guerra le fueron favorables. El 2 de marzo, su escuadra mandada por el capitán de fragata Romarate derrotó en San Nicolás a la primera improvisada flotilla de Buenos Aires, al mando del marino maltés Juan Bautista Azopardo. Pero la campaña oriental no le obedecía y se había levantado en guerrillas por adhesión a la Junta.

Belgrano —que volvía del Paraguay con su ejército— recibió orden de pasar a reforzar la resistencia oriental contra el Virrey, como lo hizo. Hubo acciones victoriosas en Paso del Rey, San José y Las Piedras, donde el brigadier don José Gervasio Artigas derrotó a un destacamento al mando del capitán de fragata Posa-

das. Una semana más tarde se tomó la Colonia, y al fin las fuerzas argentinas y orientales unidas sitiaron Montevideo. Pero el enemigo continuaba dueño de las vías fluviales y en situación de cortar nuestras comunicaciones y bombardear Buenos Aires, como en tres ocasiones lo haría.

* * *

El bloqueo declarado a nuestro puerto por Elío (que el ministro inglés en Río de Janeiro no aceptó para barcos de su nación) y los rumores alarmantes de todo origen, mantenían en Buenos Aires un estado de agitación que se acentuó con la noticia de la derrota de San Nicolás. Esta, aparentemente, nos dejaba a merced de los enemigos. La oposición al gobierno se concentraba en el club de Marco y en la logia de Julián Alvarez, donde se agrupaba la juventud morenista.

La Junta reaccionó con un palo de ciego: decretando la expulsión de la ciudad de todos los españoles solteros. Fue tal la conmoción provocada por esta medida que el Cabildo se vio obligado a solicitar su revocación. El grupo morenista salió también en defensa de los expulsados, a cuyo efecto presentó una solicitud con la firma de sus principales miembros. Lo cual revela el carácter artificial y demagógico de la cuestión referente a los europeos, a quienes ambos partidos alternativamente defienden o erigen en cabeza de turco. La Junta debió acceder.

Pero la situación se había hecho pocos menos que insostenible para el gobierno, corroído además por la división interna. La mayoría saavedrista resolvió realizar una "purga".

En la noche del 5 al 6 de abril se provocó una "pueblada" en la plaza Mayor, encabezada por el alcalde de barrio Grigera y el doctor Joaquín Campana. Pedían la restitución del decreto sobre españoles; la separación de los miembros inseguros de la Junta —Vieytes, Rodríguez Peña, Azcuénaga y Larrea— y su reemplazo; la devolución a Saavedra del poder militar y el enjuiciamiento de Belgrano por su actuación en el Paraguay. La mayoría de la Junta "se resignó" a acceder a las exigencias que ella misma había inspirado, y el doctor Campana ascendió a ocupar el puesto vacante de Moreno.

Hubo prisioneros y destierros; se lo reemplazó a Belgrano por Rondeau en la Banda Oriental (aunque se lo declararía luego limpio de culpa y cargo) y se creó un Tribunal de seguridad pública que empezó a perseguir a todos los enemigos del gobierno. Se cambiaron los alcaldes de barrio por elementos adictos a Grigera. En el manifiesto que publicó la "Gaceta" para explicar el movi-

miento y que fue redactado por el deán Funes afirmábase que había sido dirigido contra un grupo de "hombres fanáticos" que quería establecer "una furiosa democracia" y subvertir las bases de la religión y el orden social.

Lejos de aplacarse, la excitación se agravó. El principal argumento de la oposición consistía en la calidad de provincianos de casi todos los miembros del gobierno: el orgullo de la capital se sublevaba ante la dominación de los "cuicos" forasteros. A ello se agregaba la acusación de "carlotismo".

El 20 de julio llegó la noticia de que nuestras tropas del ejército auxiliar habían sido derrotadas en Huaqui y que los soldados dispersos, completamente desmoralizados, cometían excesos en las poblaciones. Saavedra se dirigió al norte, a fin de contrarrestar con su presencia el desaliento y el pánico.

Pero el pánico se había apoderado también de la Junta, que no pensó sino en la paz a cualquier precio. Decidió enviar una delegación para tratar con Elío (sitiado por nuestras tropas y que no deseaba otra cosa), integrada por Paso, Pérez y el deán Funes. Reunidos éstos con los representantes del Virrey, firmaron el 1° de septiembre un tratado preliminar por el cual el gobierno de Buenos Aires reconocía que las provincias de su mando formaban parte integrante de la nación española y se comprometía a enviar diputados a las Cortes y socorros a la madre patria.

Mientras tanto, el general portugués Souza atravesaba con sus fuerzas el Yaguarón y ocupaba Villa Belén y Cerro Largo. Como siempre, el enemigo histórico se aprestaba a sacar tajada de nuestra debilidad y nuestra anarquía.

* * *

Si a las calamidades de orden interno provocadas por la acción de la Junta se agregaba ahora la derrota militar y la entrega de la revolución era natural que su impopularidad se agravase. Pronto la resistencia contra ella se hizo unánime y clamorosa, con repetidos conatos de rebelión militar. Estallaría al fin, a raíz de la elección de diputados por la capital que debía realizarse para integrarla.

El procedimiento para la votación motivó una divergencia de pareceres que derivó en conflicto entre la Junta y el Cabildo, el cual de adicto se volvió adversario y decidió hacerse intérprete de la opinión pública, echando mano a las atribuciones que se le habían conferido en mayo de 1810. Hubo, según los precedentes, pueblada, gritos y petitorio firmado. El golpe de Estado capital del 16 de septiembre exigió y obtuvo la separación del doc-

tor Campana y su destierro al pueblo de Areco, así como la convocatoria de un Cabildo abierto para tres días después, en el que se efectuaría la elección.

Resultaron con el mayor número de votos don Feliciano Chiclana, don Manuel de Sarratea y el doctor Juan José Paso, que quedaba a flote en todos los tumultos. Con ellos se decidió fundar, en vista de la urgencia del momento, un poder ejecutivo provisorio. El resto de los votados (lo más conspicuo del vecindario) quedaría agregado al Cabildo como cuerpo consultivo para vigilar el cumplimiento de la decisión popular. La Junta subsistiría como cuerpo legislativo y representación de la soberanía nacional, aunque sin funciones bien determinadas y con el nombre de Junta Conservadora.

* * *

El Gobierno Ejecutivo (que tal fue su nombre), conocido como "primer triunvirato", suele considerarse como una reacción "liberal" contra la política conservadora de la Junta grande. No hubo tal cosa. Su significado fue más localista que ideológico: reacción de la capital contra el predominio provinciano de la Junta, por lo cual fue acogido auspiciosamente en Buenos Aires y con desconfianza en el interior.

Por lo que se refiere a la acción, continuó la línea de timidez y vacilaciones de su antecesora, además de padecer del mismo vicio inherente a los cuerpos colegiados, por reducidos que sean en su número: la disidencia interna que los paraliza. Sarratea era un señorón de sociedad, ambicioso y voluble, aunque astuto. Chiclana, un saavedrista. Paso, un camaleón, siempre dispuesto a saltar el cerco, aunque juicioso y sagaz. La frecuente disparidad de opiniones hizo que la decisión derivara por lo común al secretario del organismo, que era don Bernardino Rivadavia.

La versión idealizada sobre el triunvirato proviene de la presencia de este personaje, cuyos antecedentes como privado de Liniers ya hemos visto y que debió ser introducido por el cuñado de éste, Sarratea. Conviene que nos detengamos en él, porque es objeto de diversas leyendas, una de las cuales consiste en erigirlo en continuador de la obra de Moreno, cuando es su permanente contradicción.

Don Vicente Fidel López lo ha definido a Rivadavia con acertado trazo como una especie de funcionario español "progresista" de la época de Carlos III; un Floridablanca o un Campomanes. Nunca fue otra cosa, según veremos, en su larga e infeliz actuación y sorprendería verlo erigido en santón revolucionario

si no estuviesen claros los motivos a que esa exaltación obedece. Su mente no alcanzó a superar los principios de la "ilustración" adoptados en la juventud y su política adoleció permanentemente de una oculta nostalgia del Virreinato, que trasuda en todas sus disposiciones, en sus palabras y hasta en sus gestos. Cuando se estudia su vida pública desde esta primera etapa, no hay que olvidar que se había casado con una hija del virrey del Pino, y que era un "snob" que se sentiría yerno de virrey hasta la muerte.

En seguida mostró el Gobierno Ejecutivo su verdadero cariz. El 14 de octubre hizo celebrar una misa con motivo del natalicio de Fernando VII. El 20 del mismo mes se concertó el tratado de paz con el "Excmo. señor Virrey don Francisco Xavier de Elío", en el que no sólo se le reconocía el título otorgado por el Consejo de Regencia (lo cual implicaba un reconocimiento indirecto de la autoridad de este organismo), sino que se ratificaban las declaraciones de fidelidad y las promesas de ayuda a España y de acatamiento a Fernando VII que había hecho la Junta grande en el convenio preliminar. Por estas causas y otras que se les sumarían luego, el nuevo gobierno, una vez pasada la euforia inherente a todos los cambios, vería levantarse pronto en contra suya la misma oposición que había suscitado su antecesor.

En el Cabildo abierto del 19 de septiembre se habían elegido, con los componentes del triunvirato, dieciséis vecinos más, a quienes se les confió el carácter de junta "consultiva" con facultades no bien determinadas, salvo la de procurar que no se desvirtuasen las resoluciones de dicha asamblea.

Acoplada a las nuevas creaciones institucionales, seguía subsistiendo la Junta grande, o "conservadora", reducida a una función teóricamente legislativa y cargada con el lastre de su total desprestigio (que ella misma aceptaba). Disminuida y todo, representaba la soberanía del territorio frente a los resultados de una elección meramente municipal; por cuya razón —y dada la indeterminación de atribuciones en las diversas magistraturas— debía corresponderle de derecho la facultad reglamentaria. En nombre de la continuidad y del derecho público se dispuso, pues, a delimitar las facultades del Ejecutivo de emergencia, y así lo hizo en un discreto "reglamento orgánico", redactado por el deán Funes, que aprobó y dio a conocer el 22 de octubre.

Pero olvidaba que el desprestigio es un poderoso disolvente de los derechos teóricos en tiempos revolucionarios; que el ejercicio de los poderes se funda en el hecho del poder, y que sus atribuciones debían limitarse a sancionar mansamente las disposiciones de la nueva autoridad. El triunvirato no encontró el instrumento de su agrado, pues lo limitaba en el ejercicio del gobier-

no. En consecuencia, lo pasó a consulta del novel cuerpo consultivo y del Cabildo, con cuyo dictamen resolvió rechazarlo y dictar en su reemplazo un "estatuto provisional" que implicaba la cesación de la Junta, cuyos miembros debían volverse a sus respectivas provincias, ya que su permanencia en la capital carecía de objeto.

Este golpe de Estado del Gobierno Provisorio, efectuado el 7 de noviembre y que significaba la disolución lisa y llana de la representación nacional, tendría consecuencias en la sublevación del regimiento de Patricios un mes más tarde. Puestos bajo el mando de Belgrano, los Patricios permanecían fieles al saavedrismo y fueron incitados por el grupo desplazado. El motín —que tomó como pretexto la orden de cortarse los soldados las coletas que aún usaban— fue sofocado sangrientamente, con fusilamiento de once de sus cabecillas, y provocó la orden de expulsión de los miembros de la extinta Junta que aún quedaban en la capital.

Mientras tanto, los grupos disueltos y perseguidos a raíz del golpe de Estado saavedrista del 5 y 6 de abril y afiliados al morenismo (o sea el partido "de los políticos", como se decía entonces, acaso por oposición al de los tenderos) habían vuelto a reconstituirse en actitud expectante con respecto al nuevo gobierno que al menos les permitía actuar. El 13 de enero de 1812 —en el rigor de la canícula— inauguró sus sesiones la "Sociedad Patriótica y Literaria" bajo la presidencia del doctor Bernardo Monteagudo y con asistencia de Rivadavia en representación del gobierno. Había gran optimismo por el establecimiento de la libertad de imprenta (que sería flor de un día), mediante la cual los jóvenes de la agrupación proponíanse influir decisivamente en los acontecimientos, triunfando sobre la tibieza gubernativa.

En prenda de entendimiento, Monteagudo sería encargado de la redacción de la "Gaceta" oficial, a la que comunicó su estilo jacobino que desentonaba con la actuación del gobierno y donde tampoco duraría mucho.

En los últimos días de ese verano, el 9 de marzo, ocurrió un hecho cuyas consecuencias no pudieron entonces ni imaginarse: la llegada de la fragata inglesa "George Canning" (una de las tantas que venían periódicamente) trayendo a su bordo al coronel don José de San Martín, al alférez don Carlos de Alvear y a los oficiales don José Matías Zapiola, don Martiniano Chilavert, don Francisco Vera y el barón de Holmberg, que se habían iniciado en los secretos de las logias mirandistas de ultramar y tenían comprometido el juramento de triunfar o morir por la independencia de América.

* * *

En todo el norte cundía a la sazón la desmoralización provocada por la derrota de Huaqui. Los restos dispersos del ejército despertaban la alarma de las poblaciones, a lo que contribuían las versiones de los diputados cesantes y expulsados sobre la "anarquía" en la capital. Es de advertir que las tropas porteñas se habían enajenado en el Alto Perú muchas voluntades, debido a los excesos impíos y a las imprudencias de Castelli; por lo cual chocaban con grandes dificultades los esfuerzos que realizaba don Juan Martín de Pueyrredón —que había tenido una actuación brillante en la retirada de Potosí— para hacer pie y reorganizarlas.

En cumplimiento del armisticio con Elío, se había levantado el sitio de Montevideo, embarcándose Rondeau para Buenos Aires con todo su ejército. Dicho armisticio —en el que había influido Lord Strangford en nombre del gobierno inglés— se había hecho sobre la base del "statu quo" entre Paraguay, la Banda Oriental y Buenos Aires. Significaba, pues, por parte del triunvirato, el abandono a Elío de toda la Banda Oriental, dejando librados a su suerte a los aliados de Buenos Aires en la campaña, cuyo jefe era don José Gervasio de Artigas.

Las tropas portuguesas seguían, mientras tanto, su avance sobre el territorio oriental, cometiendo todo género de depredaciones. La población de la campaña se fue replegando sobre el campamento de Artigas para no caer bajo el odiado invasor. El triunvirato oficializó en cierto modo este "éxodo oriental", fijándoles a los refugiados como destino el departamento de Yapeyú en Corrientes, del que Artigas era teniente gobernador, y auxiliándolos con el regimiento de blandengues y ocho piezas de artillería.

El general Gaspar Vigodet, que había reemplazado a Elío en la función virreinal a fines de 1811, tenía un convenio secreto con los portugueses auspiciado por la princesa Carlota para darle un golpe de muerte a la revolución. A la vez que el general Souza hostigaba a Artigas, aquél reclamaba al gobierno de Buenos Aires el cumplimiento del tratado en lo referente al restablecimiento del comercio y la "pacificación" de la campaña abandonada por sus pobladores. El triunvirato replicó exigiendo la retirada previa de las fuerzas portuguesas, que habían llegado, mientras se realizaban estas negociaciones, a 80 kilómetros de Montevideo.

Artigas se hallaba a la sazón ocupado en hacer pasar el río a las familias del éxodo y en tratar de obtener auxilios del Paraguay, los que fueron negados (salvo algunos envíos de tabaco y yerba) por estar esa provincia amenazada también en la frontera por el mismo invasor. Las fuerzas enemigas lo iban siguiendo de cerca hasta las inmediaciones del Salto, donde se encontraba. De allí envió el caudillo un destacamento de blandengues y las derrotó en Villa Belén el 11 de diciembre de 1811.

Con esta acción recomenzaron las hostilidades. El gobierno de Buenos Aires intimó a Vigodet para que actuara contra los invasores a lo que se negó. Ante la amenaza de un envío de fuerzas para auxiliar a Artigas, replicó aceptando la guerra. El 4 de marzo la escuadrilla al mando del capitán de fragata Primo de Rivera, bombardeaba por tercera vez la capital.

La indefensión de las costas ante las incursiones de la escuadrilla de Montevideo, dueña de los ríos, motivó la construcción de baterías costaneras en las barrancas del Paraná. Se bautizaron con los nombres de "Libertad" e "Independencia" y se pusieron bajo el mando del general Belgrano. Fue allí donde éste levantó por primera vez, el 27 de febrero de 1812, los colores argentinos, actitud que fue severamente desaprobada por el triunvirato, que la juzgó imprudente. No obstante, lo designó para hacerse cargo del ejército del norte. Pueyrredón le transmitió el mando en Yastasto el 26 de marzo.

El estatuto Provisional, que era la carta del régimen, disponía la renovación periódica del gobierno por el reemplazo cada seis meses de uno de sus miembros. El cuerpo elector era una asamblea constituida por una gran mayoría de representantes de Buenos Aires y un pequeño número del interior.

La que debía reunirse en abril resultaba muy oportuna, ya que existían serias divergencias en el seno del triunvirato entre Chiclana y Paso, que era quien cesaba. Sesión el 4 y designó, para reemplazar a este último, a Juan Martín de Pueyrredón. Hecho lo cual y por moción de sus miembros morenistas, decidió entrar a la consideración de las cuestiones políticas urgentes. La autoridad ejecutiva consideró que eso excedía a sus atribuciones y procedió a clausurarla sin más trámites.

La oposición al gobierno se había hecho ya general. La suerte de la revolución parecía perdida, sobre todo por la falta de autoridad y energía para llevar adelante la guerra y las vacilaciones y dilataciones en la cuestión oriental. No obstante la ruptura de las hostilidades a comienzo de año, poco se había realizado en el orden militar. El gobierno del triunvirato lo esperaba todo de la mediación de Lord Strangford, a quien le proponía negociar el retiro de las fuerzas portuguesas a cambio de una actitud benévola de estas provincias hacia los derechos eventuales de la princesa Carlota. Se ve aquí claramente la proyección del espíritu de Rivadavia, más inclinado a simpatizar con la corte "progresista" de Río de Janeiro, que con los gauchos orientales o el grupo de "hombres fanáticos" que se proponían establecer "una furiosa democracia".

La falta de plan y finalidad del gobierno y su anarquía interna —porque ahora la puja era entre Chiclana y Pueyrredón— con-

trastaban con las noticias que llegaban de otras partes de América. La declaración de la independencia venezolana se había convertido en la cartilla de los jóvenes de la Sociedad Patriótica, reforzada ya por los oficiales recién llegados de Europa, que traían las últimas noticias y las palabras de orden. San Martín, Alvear y sus compañeros, militares de profesión, habían obtenido destinos en el ejército. Mientras los desempeñaban, se habían relacionado con el grupo político que les era más afín, dentro del cual empezaron a efectuar una organización semejante a las de los grupos revolucionarios europeos de donde traían la iniciación.

Esa inquietud se reflejaba en la prensa periódica, constituida por la "Gaceta" de Monteagudo y "El Censor" de Fazos Canqui. El gobierno no encontró otro expediente que frenarla, dando origen a la aparición de "Mártir o libre", del primero, cuyo solo nombre expresa la tónica del momento.

* * *

En esas circunstancias llegó a Buenos Aires el ministro portugués Rademaker, encargado de la firma de un armisticio para la cesación de hostilidades en la Banda Oriental. El mismo día de su llegada se firmó el convenio, en el que se establecía que las fuerzas de cada parte contratante debían retirarse a sus respectivos territorios y no se resolvía nada con respecto a Montevideo.

Es de advertir que poco antes se habían mandado algunos regimientos a la Banda Oriental y Entre Ríos y que se había designado generalísimo de las fuerzas, por su investidura política, al vocal del gobierno Sarreatea, quien regresaba de una misión en Río de Janeiro. Aparte de carecer de toda experiencia militar, este personaje mostró en su actuación una singular torpeza, puesto que se inició desconociendo la autoridad incontrastable que Artigas ejercía sobre sus comprovincianos, exigiéndole un irrisitante e incondicional acatamiento.

En medio de la inquietud y la alarma permanente en que transcurría la vida de Buenos Aires, estalló de pronto como una bomba la noticia del descubrimiento de una conspiración. Se la atribuía a los españoles europeos en connivencia con Montevideo y se sindicaba como jefe a don Martín de Alzaga, el hombre fuerte de la Defensa y caudillo del 1° de enero, el procesado por "tentativa de independencia". Si se tiene en cuenta los antecedentes y la impopularidad del gobierno —que caería derrocado a los tres meses— hay motivos para poner en duda la versión que por entonces se oficializó. No es dable suponer en Alzaga una mayor adhesión a la causa del Rey que la que manifestaba el mismo

triunvirato, sino al contrario. Acaso su intención no fuese otra que poner coto a la anarquía creciente y recuperar los fines extrañados. Sea como fuere, su prisión y su ejecución inmediata, junto con la de sus cómplices —tres días de fusilamientos y horcas con sus siniestros colgajos en la plaza Mayor— reanimó un tanto al gobierno que aprovechó la distracción de los ánimos y pudo asumir aires de salvador de la patria. La famosa proclama con que se sobreseyó al resto de los conspiradores y que empieza con “¡Ciudadanos, basta de sangre!” parece ocultar bajo su máscara de clemencia el temor de encontrarse con que estaba complicada media ciudad.

La especie de “unión sagrada” que se formó a raíz de este episodio con los miembros de la Sociedad Patriótica —muchos de los cuales actuaron como jueces— no duraría mucho tiempo. El gobierno estaba ya condenado y sólo las circunstancias difíciles porque atravesaba la revolución servíanle de sostén. Mientras tanto, Rivadavia, imperturbable, ordenaba la confección del plano de la provincia, creaba escuelas de artes y oficios en el papel y abría los puertos a inmigrantes que no vendrían.

La situación que más preocupaba era la del norte, por el avance del general Tristán, al que no podrían aparentemente resistir las débiles fuerzas del general Belgrano. Contra la opinión de la Junta de guerra, éste había recibido instrucciones rigurosas del triunvirato en el sentido de no presentar batalla y retroceder, aparte de una nueva y enérgica reconvención por su insistencia en enarbolar la nueva bandera. Felizmente, tampoco obedeció en esta ocasión y el resultado fue la victoria de Tucumán, el 24 de septiembre. Se conjuraba el peligro de la frontera del norte y estaba muerto el Gobierno Provisorio.

La asamblea reunida en septiembre para elegir dos miembros ofrecía la coyuntura esperada. Hubo maniobras para impedir la elección de diputados adictos a la Sociedad Patriótica y a la Logia Lautaro de cuyas resultas salió derrotado Monteagudo y electo el doctor Pedro Medrano. Como respuesta, el 8 de octubre aparecieron formadas en la plaza las fuerzas de la guarnición al mando de San Martín y Alvear. Pedían un nuevo gobierno y la convocación de un congreso de las provincias.

III. LA ASAMBLEA DEL AÑO 13

El movimiento del 8 de octubre, dirigido por la Sociedad Patriótica y la Logia “Lautaro”, tuvo por objeto enderezar el rumbo de la revolución, perdido desde el instante en que se frustró el plan morenista.

La caída y reemplazo del gobierno se produjo en la forma ya clásica de la convocatoria del Cabildo abierto a favor del tumulto, con ruido de armas y gritos en la plaza y la voluntad del “pueblo” expresada en petitorio firmado. Salieron electos el doctor don Juan José Paso (cuya oposición a Chiclana y Rivadavia le había dado gran popularidad), con Nicolás Rodríguez Peña, notorio morenista, y don Antonio Álvarez de Jonte. Se les encomendó como primera tarea la de promover la reunión de un congreso soberano de todo el territorio, a fin de declarar la independencia y organizar el país.

A esta altura del año 12 la situación general autorizaba todas las esperanzas en la causa americana. Napoleón parecía el dueño incontestable de Europa; había iniciado la campaña de Rusia y se vaticinaba que triunfaría en la empresa, como en las anteriores. De España, dominada y sin posibilidad aparente de reacción próxima, sólo Cádiz subsistía bajo la protección de los cañones ingleses, y allí las Cortes acababan de sancionar una constitución liberal, de buenos auspicios, aun en el caso de una eventual restauración borbónica, en la que pocos creían. Era evidente que se iniciaban los tiempos de la libertad. Esta idea romántica ha ganado las mentes y caldea los corazones; flota sobre todos los acontecimientos políticos como una nube rosada, coloreándolos de inocente fervor, y explica la actuación de nuestros hombres del año 13. Mientras los legisladores tratan de convertir en realidad los artículos del nuevo credo, los jóvenes soldados sueñan con emular la gloria del Corso, autor indirecto de tantos bienes.

El gobierno del segundo triunvirato se inició bajo los mejores auspicios en el orden político militar. Se realizaron en seguida elecciones en todas las provincias, con el voto de los ciudadanos “libres y patriotas”, según reza el decreto de convocatoria. No se habla de “criollos” ni de “americanos”, ni se excluye a los europeos, lo cual demuestra que la adhesión a la causa privaba sobre

resentimiento social de Monteagudo. Así, se suprime la institución del mayorazgo; se declaran abolidos los títulos nobiliarios, porque "un pueblo libre no puede ver delante de la virtud brillar el vicio" (el vicio es la nobleza, fundada en el despojo, y la plebe la virtud), y se obliga a quienes ostentan escudos en las fachadas de sus casas, a demolerlos. Raynal aparece también junto a Rousseau en la preocupación por los indios, a quienes se idealiza por su proximidad a la naturaleza y cuya servidumbre se declara suprimida.

Todo este lenguaje parece hoy un poco infantil, como expresión de ilusiones que la realidad ulterior ha disipado; pero no hay duda de que respondía a sentimientos en general nobles, a un gran amor por la libertad, a una gran fe en las recetas del siglo para mejorar la suerte del género humano.

Pero esta luna de miel con el poder no habría de durar mucho tiempo porque la Asamblea padecía de una falla fundamental: no era representativa. El país no se reconocía en ella. Era apenas la imagen de un partido, selecto por la calidad de sus componentes, pero minoría insignificante y cuya misma cohesión indicaba el vicio de origen.

Deliberadamente se había establecido que no era forzoso que los diputados fuesen oriundos de la provincia que representaban, puesto que eran diputados de la nación. Así el tucumano Monteagudo venía electo por San Luis, Larrea por Córdoba, etc.; todo lo cual indicaba la artificialidad del resultado y la "digitación" por la Logia. La burguesía comercial de la capital, de tanta influencia política, estaba ausente, así como numerosos grupos tradicionales del interior. También lo estaba la opinión localista de los territorios litorales. En rigor, las representaciones de la Asamblea se habían repartido entre los jóvenes de la Sociedad Patriótica, bajo la dirección de un teniente coronel de veintiséis años y cuna aristocrática, que poseía sin duda grandes dotes de inteligencia y carácter, si bien perjudicadas por la obsesión napoleónica común a su generación y la índole caprichosa de los favoritos de la fortuna.

Era evidente que la revolución necesitaba una dirección enérgica y ésta era la única justificación del plan de la logia. Pero la falta de representación (que entrañaba un vicio insanable de legitimidad) debía suplirse con un manejo exquisito de la opinión pública y redimirse por el éxito. Los gobiernos que adolecen de esa imperfección han de cuidarse de no herir sin necesidad los sentimientos públicos y además no tienen derecho a equivocarse. La Asamblea, dirigida por ideólogos demasiado fogosos, desconoció estas máximas de sana política.

En lugar de limitarse a las finalidades expuestas el 8 de octu-

bre, se empeñó en legislar sobre materias religiosas, lo cual provocaría irritación y escándalo, sobre todo en el interior, neutralizando la impresión causada por otras medidas, que no podían menos de satisfacer a los patriotas. Impuestas aquellas por la acción de los gobernadores intendentes con el *trop de zèle* característico de los segúndones, darán nuevos argumentos a la resistencia que allí se acentuaba contra el centralismo tiránico de la capital.

La oposición, que se manifestó desde el comienzo por los procedimientos electorales que motivaron un conato de conspiración de Paso (quien por dicha causa no fue reelecto), iría paulatinamente enconándose. Por lo cual la Asamblea hubo de recurrir a las medidas de rigor que aumentaban la impopularidad: supresión de garantías individuales, persecución y amenaza a los opositores. Todo ello provocaría el enfriamiento y luego el alejamiento de San Martín, quien se había vinculado —por matrimonio con la hija del comerciante y cabildante Escalada— al grupo conservador y contemporizador del vecindario porteño; y con él, de muchos de sus amigos.

Agravaría las cosas el garrafal error político que se cometió con el rechazo de los diputados de la Banda Oriental. Y por fin, el vuelco de la suerte en el orden interno y externo: la derrota de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, y el cambio de la situación europea con la vuelta al trono de Fernando VII.

En la insurrección de la campaña oriental y en la guerra contra la invasión portuguesa se había engrandecido la figura de don José Gervasio de Artigas, quien de capitán de blandengues había ascendido a jefe de la milicia, convirtiéndose en el caudillo indiscutido de las poblaciones. Su prestigio se fundaba en la exaltación del espíritu localista y en un huraño sentimiento de libertad, no sólo con respecto al europeo y al portugués, sino también contra las tentativas absorbentes de los gobiernos de la capital, reticentes en aceptar su autoridad desde el comienzo de la guerra. Dicho prestigio no se limitaba a la provincia oriental, sino que se había extendido a todas las regiones litorales —Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe— y pronto alcanzaría hasta Córdoba.

Desde el comienzo de las hostilidades contra Montevideo, había manifestado su aspiración a ejercer el comando en jefe de las fuerzas de la provincia, debiendo actuar las de la capital como auxiliares. Dicha aspiración —que no excluía el sometimiento al gobierno nacional— era legítima, y la doctrina que implicaba se

impondría en la época de la Confederación. La negativa del gobierno de Buenos Aires a aceptarla inició el enfriamiento de relaciones.

El armisticio con Elío —para el que no fue consultado— y la política vacilante y dilatoria del triunvirato con respecto a los portugueses le produjeron una viva irritación, que habría de traducirse en una desconfianza creciente en los hombres de la capital, a quienes acusaba de traicionar a la provincia oriental, librándola al enemigo como mercadería negociable. Las divergencias se agravaron a raíz del nombramiento del “generalísimo” Sarratea, después de roto el armisticio. Colaboró, no obstante, en el sitio que el ejército de Buenos Aires al mando de Rondeau puso a Montevideo desde mediados de octubre.

El retardo de esta operación se debió a las dudas que paralizaron al triunvirato sobre el destino de las fuerzas de que disponía, hasta que la victoria de Belgrano en Tucumán despejó la situación. El gobierno surgido de la revolución del 8 de octubre se apresuró a mandar a la otra orilla cinco regimientos.

La pérdida de su investidura política le quitó a Sarratea toda autoridad, por lo cual los jefes exigieron su relevo. Alvear había hecho entre tanto una rápida incursión a la Banda Oriental con el objeto de reconocer la situación, y había vuelto con una impresión adversa al caudillo, que le parecía un obstáculo para sus planes. Necesitaba urgentemente gloria guerrera para coronar su carrera política (la “campana de Italia”), y su oportunidad estaba allí, en los bastiones de Montevideo. El gobierno de Buenos Aires cedió, no obstante, a la imposición militar, lo que significaba un triunfo de Artigas.

Los obstáculos para el entendimiento parecían haber sido removidos, y así lo entendió el caudillo al dirigirse a la Asamblea, expresándole “la honra de felicitar a la patria al frente de mis compaisanos, vuelto al período de la constitución”.

Requerido para que reconociese el nuevo régimen, convocó en su campamento a una reunión de diputados de los pueblos de la provincia, a la que asistieron incluso delegados de Montevideo sitiada, huidos de la plaza. En esta reunión, que asumió la soberanía provincial, se discutieron las proposiciones de Artigas para la concurrencia a la Asamblea.

Se establecieron ocho puntos, entre ellos la continuación del sitio de Montevideo con la cooperación del ejército “auxiliar”; la autonomía de la provincia, en un sistema de confederación, “teniendo por base la libertad”; el número de diputados; los límites provinciales y la aspiración a que la capital de las Provincias Unidas no se estableciera en Buenos Aires. Se agregaba que “el despotismo militar” debía impedirse mediante normas constitu-

cionales, que asegurasen “invariablemente la soberanía de los pueblos”. A continuación se eligieron seis diputados.

Autorizado por el gobierno, el general Rondeau firmó con Artigas un convenio reconociendo la confederación, a raíz del cual se estableció un gobierno provincial presidido por el caudillo en carácter de gobernador militar y presidente del cuerpo municipal.

Pero la Asamblea rechazó los poderes de los electos, pretextando falta de legalidad en la elección. En el debate hablaron Vidal, Gómez, Valle y Monteagudo, pertenecientes al grupo alvearista. La expresión de “diplomas absolutamente nulos por incontestables principios” con que se los designa en la crónica de “El Relator”, no es suficientemente explícita y oculta sin duda, como se ha supuesto, una maniobra parlamentaria para no comprometer, con la incorporación de un grupo de diputados inseguros, la mayoría con que se contaba para las votaciones.

A pesar de todo, el inflexible pero paciente Artigas intentó un arreglo con Buenos Aires. A tal efecto envió a Larrañaga, quien no sólo fracasó en su comisión, por la intransigencia porteña, sino que volvió con la noticia de que Rondeau tenía instrucciones para formar un nuevo gobierno local, que respondiera plenamente al nacional. El jefe de las fuerzas auxiliares convocó en efecto a un congreso en Maciel, donde se eligieron diputados que obedecerían a las directivas de la Logia. Ante esta situación, el caudillo se retiró con sus tropas del sitio de Montevideo, el 20 de enero de 1814.

La toma de Montevideo hacía necesaria la formación de una escuadra.

En Buenos Aires existía ya una fábrica de armas y había en el puerto barcos mercantes que se podían comprar y armar en guerra: el único problema era la financiación. La Asamblea ordenó para ello la contratación de un empréstito a corto plazo de \$ 500.000, garantido por pagarés del Estado y que éste se obligaba a recibir en pago de obligaciones.

La situación había experimentado un vuelco con respecto al año anterior. A las dificultades suscitadas por el retiro de Artigas de las fuerzas sitiadoras, que las disminuía en la mitad de sus efectivos, se agregaba la consternación producida por los descalabros del norte. En octubre y noviembre habían ocurrido los desastres de Vilcapugio y Ayohuma. En ellos perdía Belgrano, ante la arremetida de Pezuela, todas las ventajas obtenidas en sus

anteriores victorias. Replegado a Tucumán había hecho entrega allí del mando de su ejército al general San Martín, nombrado para sustituirlo.

La Asamblea decidió declararse en receso y nombrar una comisión permanente para asesorar al gobierno durante la suspensión de las sesiones.

Su labor del año había sido intensa. Había dictado el Estatuto para el funcionamiento del Ejecutivo y numerosos actos inherentes a la plena soberanía, como la acuñación de monedas sin la efigie real, la independencia con respecto a la jurisdicción eclesiástica española y la adopción de la "marcha patriótica" de don Vicente López y Planes como canción nacional. Había realizado una reforma completa en el orden militar y en la administración de justicia. Y cediendo al regalismo de moda, había dispuesto de las temporalidades eclesiásticas e intervenido en el régimen interno de los conventos, modificando por ley las disposiciones de los concilios y llegando a extremos tan sutiles como el de cambiar las oraciones litúrgicas y determinar los grados de calor que debía alcanzar el agua bautismal. Esta euforia reformista habría de aplacarse ante el vuelco de la situación militar y la noticia de un hecho casi simultáneo y más grave en sus proyecciones: la vuelta de Fernando VII al trono de España.

Los acontecimientos de Europa, que anunciaban la caída inminente de Napoleón, y la peligrosa situación interna, agravada por la amenaza de las expediciones punitivas que no tardaría en mandar el monarca restaurado, determinaron la realización de un viejo proyecto del grupo alvearista: la concentración del poder en una sola mano. Ya en el mes de junio, Alvear había renunciado a su diputación y la Asamblea le había aceptado la renuncia, "permitiéndole —dice el acta— volver a empuñar la espada que había jurado teñir en la sangre de los agresores del pueblo". Caudillo indiscutido, no podía ser candidato antes de cumplir su promesa, que respondía también sin duda a una noble ambición de gloria. Se eligió por consiguiente a un hombre de su absoluta confianza y un poco pariente, aunque de escasa significación: don Gervasio Antonio Posadas.

Según la modificación del Estatuto, que se votó a ese efecto, el nuevo mandatario sería asesorado por un consejo de Estado compuesto de nueve miembros, tres de los cuales actuarían de ministros. El presidente del nuevo organismo fue don Nicolás Rodríguez Peña. Los ministros, el doctor Nicolás de Herrera, el coronel don Francisco Xavier de Viana y don Juan Larrea.

Posadas prestó juramento solemne ante la Asamblea el 1° de febrero. Uno de sus primeros actos de gobierno fue poner fuera de la ley como traidor al caudillo oriental, por su abandono del

ejército sitiador. Casi simultáneamente, Artigas recibía el título de "protector" de Entre Ríos, y dos meses más tarde el Cabildo de Corrientes, siguiendo sus inspiraciones, decidía "declarar la independencia de la provincia para regirse por el sistema federativo".

La situación se complicaba gravemente para Buenos Aires con la lucha en dos frentes en la Banda Oriental, donde las fuerzas sitiadoras se veían hostigadas por las guerrillas de Artigas, que estimulaban en sus filas la desertión. Para peor, una columna enviada a Entre Ríos bajo las órdenes del barón de Holmberg (artillero europeo de carrera, acostumbrado a otro tipo de combates) con el propósito de someter ese territorio, fue destrozada en Espinillo por las fuerzas artiguistas al mando de José Eusebio Herreñú, el 21 de febrero, y hecho prisionero su jefe.

Ante esta noticia, el Directorio —que había creado con fecha 7 de marzo la Provincia Oriental— decidió parlamentar nuevamente, encargando de las negociaciones a don Francisco Antonio Candiotti, fuerte hacendado de Santa Fe, y a fray Mariano Amaro, ambos amigos del caudillo. Este exigió la rehabilitación de su nombre, el reconocimiento de la autonomía de la provincia y el retiro de las fuerzas porteñas dejando el sitio en manos de los orientales, con aquéllas como auxiliares. Mientras tanto, siguiendo la lógica maléfica de la discordia civil, ambas partes negociaban secretamente con el enemigo común para obtener su apoyo contra el aliado de la víspera, mientras cada una acusaba a la otra de entreguismo y traición.

Con esto, el prestigio del Directorio se gastaba rápidamente, y lo que era peor, su desprestigio se traducía en prestigio del adversario, que se extendía por todo el país. Ya no eran sólo las masas de la campaña, sino las clases cultas de las ciudades, a las que escandalizaba la política audaz y de tinte extranjero y masónico de la Asamblea, quienes volvían los ojos con interés hacia el jefe castizo, que con tanto denuedo defendía sus derechos vulnerados por el centralismo porteño. El deán Funes se comunicaba con él, y hasta en el núcleo más encopetado de Buenos Aires, entre los saladeristas y cabildantes, había "artiguismo".

La necesidad que sentía el gobierno de conciliarse la opinión pública cada vez más reacia motivó la amnistía de febrero para los complicados en el movimiento subversivo del 5 y 6 de abril, cuyas causas continuaban pendientes. Todos los saavedristas bajo proceso quedaron exentos de culpa, con excepción de don Cornelio Saavedra y el doctor Campana, que deberían ser —dice la sentencia— "extrañados fuera de las Provincias Unidas".

Un triunfo importante vendría a reanimar los espíritus decaídos por tantas circunstancias adversas.

Lista ya la escuadrilla de Buenos Aires —que había sido puesta al mando del marino irlandés don Guillermo Brown— salió a encontrarse con la enemiga, comandada por Romarate. El 7, 11 y 15 de marzo efectuó ataques de exploración contra la isla de Martín García, donde se hallaba fondeada aquélla, siendo rechazada en las tres ocasiones. El 17, llevó el asalto decisivo. Después de un intenso fuego, obligó a la flota enemiga a retirarse en derrota y refugiarse en la rada de Montevideo. El 20 de abril, reparadas las averías puso sitio por mar a la plaza, al mismo tiempo que el ejército de Rondeau, con los refuerzos que acababan de llegarle de Buenos Aires, estrechaba el cerco por tierra. Y el 14 de mayo atacó a la escuadra guarecida bajo los fuegos de la plaza, conquistando con ello definitivamente el dominio de las aguas. Tres días más tarde, tomada al abordaje, lo que quedaba de esa escuadra enemiga pasaba a reforzar la nuestra.

Al mes de esta victoria, el general Alvear cruzó el estuario con 1.500 hombres, en veinte barcos de la flota. Vigodet —que poco antes había ofrecido la paz sobre la base del juramento de la constitución de Cádiz— inició los trámites para una capitulación. Alvear le propuso la deposición de las armas y la formación de un congreso con previa renuncia de la sumisión al Rey. Mientras se estaba negociando, se apoderó de las fortalezas con un rápido golpe de mano, pretextando la no ratificación de los artículos propuestos.

La toma de Montevideo produjo un enorme júbilo en la capital y tonificó al gobierno. Era por lo demás extraordinariamente oportuna. Fernando VII perdía con ella la base de operaciones necesaria para desembarcar una expedición contra el Río de la Plata.

IV. ARTIGAS Y LA CRISIS DE 1815

La situación había cambiado radicalmente en Europa durante los primeros meses de 1814. Con la vuelta de Fernando VII al trono de España y la abdicación de Napoleón se desvanecían los sueños fundados en la renovación de las instituciones políticas por obra del imperio liberal, que habían alentado a los “afrancesados”, y desaparecía asimismo la causa confesada de la revolución americana, mixta de lealtad a la corona y de resistencia a seguir la suerte de la península.

Si el levantamiento se había hecho en nombre del rey, ¿qué otra cosa quedaba sino felicitarnos de la terminación de su cautiverio y depónen las armas? Tal fue el consejo de Lord Strangford, el “buen amigo” de Río de Janeiro, al ministro Sarratea, cuando éste pasó por esa ciudad con rumbo a Europa y negociaba un armisticio con Vigodet. El, por su parte, ofrecía los buenos oficios de su nación para lograr las mejores condiciones de reconciliación entre el monarca restaurado y sus fieles súbditos.

La cosa no era sin embargo tan fácil, ni aquí ni en España. La revolución se había realizado, ciertamente, en nombre de Fernando VII; pero con la convicción generalizada de que estaba perdido. La adhesión a un rey cautivo tenía cierto aire de nobleza caballeresca que halagaba el quijotismo español: era un homenaje a la debilidad, a la víctima de la traición y del despojo. No se trataba de una “máscara” como se ha dicho, sino de un gesto; y se habían tomado todas las medidas para suplir su ausencia. Pero he aquí que su vuelta al trono desbarataba las previsiones y trastornaba las piezas del juego cuando la partida estaba demasiado avanzada para retroceder. Ni es de extrañar que la aparición del rey cautivo transformado en rey triunfante resultara para los americanos (y para muchos españoles) una especie de trampa del destino, casi una mala acción que los desligaba de la fidelidad. Sobre todo cuando los primeros actos del monarca de carne y hueso lo mostraron desprovisto de todas las cualidades ideales con que la imaginación de los fieles a la dinastía (y de los que lo eran menos) se complugó en adornar al mítico huésped de Valencay, al “bienamado Fernando”, durante los tres años de su cautiverio.

Una política de inteligente comprensión por parte de la corona habría podido acaso reanudar los vínculos rotos, prolongando por un tiempo toda la subsistencia del imperio. Pero los Borbones no habían aprendido nada en el ostracismo, como es notorio, y se proponían acabar con los últimos restos de libertad en sus estados. Uno de los primeros actos de Fernando VII fue abolir la constitución dictada en Cádiz en 1812, restableciendo la monarquía absoluta. Con ello hacía imposible todo arreglo que no fuese la sumisión incondicional (que no podían aceptar los americanos), al mismo tiempo que desataba en la propia España una sangrienta guerra civil.

* * *

Conviene tener presentes las circunstancias internacionales para juzgar los episodios que rodean la crisis del régimen de la Asamblea Constituyente y el primer Directorio. Todos los movimientos espasmódicos que provocarán su caída toman origen en el vuelco de la situación europea, que trastorna el plan del grupo dirigente y lo lleva a la improvisación y a los gestos audaces y desesperados.

La justicia histórica obliga a discriminar, en el juicio sobre los actos políticos, la parte que ha de atribuirse a la previsión humana y la que depende de factores imprevisibles, de un azar favorable o maléfico. La acción de la brillante juventud que había asumido la dirección del país se fundaba en un cálculo razonable sobre el triunfo mundial de las ideas liberales que se habían impuesto en la constitución de Cádiz; y no es aventurado suponer que, de haber acertado en el pronóstico, el impulso iniciado por la Asamblea habría llegado a prevalecer sobre las contradicciones internas, concretándose en la proclamación de la independencia y la república federal. Esa esperanza era razonable y legítima y su cumplimiento habría ahorrado dolor y sangre. El que no haya podido realizarse no es imputable a los actores sino a la mala fortuna.

La toma de Montevideo tuvo una consecuencia inmediata en el orden militar al provocar la detención y luego el retiro de las fuerzas de Pezuela, cuyo avance desde el norte, después del desastre de Ayohuma, tenía como finalidad unirse a Vigodet para acabar juntos con la revolución en el Plata. Jaqueado por los guerrilleros que había empezado a levantar don Martín Güemes y por las vanguardias al mando de Arenales, debió replegarse desde Salta, dejando despejada esa frontera. Derrotado por Güemes el 13 de agosto, abandonó la ciudad. La circunstancia fue aprovechada

por el general San Martín para pedir su relevo, alegando motivos de salud. Se le nombró a su pedido teniente gobernador de Mendoza, donde prepararía su expedición a Chile. En el mando del ejército lo reemplazó Rondeau.

Quedaba empero el problema político pendiente en la Banda Oriental. Alvear había triunfado sin Artigas, y hasta había sostenido un combate con su lugarteniente Otorgués, infligiéndole una derrota en Las Piedras a los pocos días de la toma de la plaza. El caudillo inició gestiones de reconciliación. El 9 de julio se firmó un convenio por el cual quedaba restablecido "en su honor y reputación" ofendidos por el decreto de Posadas, reconociéndose además el cargo de comandante general de la campaña y fronteras. Se establecía igualmente la convocación a nuevas elecciones de diputados con intervención del caudillo, quien por su parte se comprometía a no extender su influencia a las otras regiones del litoral. El 18 de este mes Artigas ratificó lo convenido por sus delegados. El general Alvear regresó el 1° de agosto a Buenos Aires, donde fue recibido triunfalmente y se lo colmó de honores. El doctor Nicolás Rodríguez Peña quedaba a cargo del gobierno en Montevideo.

No obstante estas buenas disposiciones, la tranquilidad no se restableció a causa de las dilaciones del gobierno de Buenos Aires para ratificar a su vez lo resuelto. En lugar de hacerlo, le envió a Artigas los despachos de coronel y el nombramiento de comandante de la campaña. Artigas devolvió ambas distinciones y exigió el cumplimiento de lo convenido: su rehabilitación pública. Inmediatamente cortó las comunicaciones entre el campo y la ciudad.

Las dilaciones del gobierno de Buenos Aires respondían a una impresión equivocada del joven Alvear sobre el carácter y la fuerza del artiguismo, cuya eliminación le parecía indispensable para consolidar la unión nacional. De Cádiz llegaban noticias alarmantes sobre la preparación de un ejército de veinte mil hombres al mando del general Morillo y destinado a aplastar la revolución del Río de la Plata. No obstante la opinión contraria de muchos jefes militares, como el ministro de guerra, general Viana, que proponía una política conciliatoria, Alvear consideraba que, para hacer frente a la invasión anunciada, convenía resolver previamente la cuestión oriental, suprimiendo el foco de disidencia.

Su opinión prevaleció naturalmente sobre la de sus contradictores. Preparó, por consiguiente, una expedición que debía operar en tres columnas sobre la Banda Oriental y Entre Ríos, donde la influencia artiguista iba en aumento. El en persona asumió la dirección de la campaña: desembarcó con sus fuerzas en

Colonia y obtuvo algunos éxitos parciales. Las partidas artiguistas, que hacían una guerra de recursos, fueron derrotadas en diversos combates por las del ejército nacional al mando de jefes experimentados. Pero se reconstituían enseguida y volvían al ataque. Rodríguez Peña fue reemplazado en el gobierno de Montevideo por el general don Miguel Estanislao Soler, en calidad de puño fuerte. Alvear debió volver a Buenos Aires sin lograr su objeto y dejando la guerra encendida.

* * *

A las amenazas de Europa y la convulsión oriental, se agregaban las noticias de otros lugares de América para agravar la desazón pública. Las fuerzas del general Osorio asestaron en octubre un golpe de muerte a la revolución chilena en Rancagua, con lo cual surgía una nueva causa de inquietud en otra frontera. El gobernador de Mendoza, San Martín, hubo de hacerse cargo de los refugiados y los dispersos de la última derrota.

En estas circunstancias críticas, el gobierno directorial daba la impresión de no dominar ya las situaciones, pues fluctuaba de la energía extrema a la suma debilidad. La influencia de Artigas en el litoral seguía en aumento, llegaba a Córdoba, se afirmaba en la propia Buenos Aires. Y el virus de la indisciplina política se introducía en las filas del ejército: el regimiento 2 de infantería (¡el del propio Alvear!) se había sublevado cuando marchaba hacia el norte para reforzar las tropas del general Rondeau; y las fuerzas que operaban en la Banda Oriental y en Entre Ríos, a las órdenes de Viamonte, Dorrego y Soler, se veían diezgadas por las desertiones.

Mientras trataba de organizar sus recursos militares para una campaña decisiva, el Directorio resolvió tratar con la corte de España utilizando para ello los buenos oficios del gabinete inglés. Se proponía ante todo ganar tiempo y evitar la salida de la expedición de Cádiz. Autorizado por la Asamblea, designó para esa misión al general Belgrano y a don Bernardino Rivadavia, quienes debían unirse a Sarratea, que se encontraba en Londres. La elección de las personas revela que el cambio de las circunstancias políticas mundiales había revitalizado a los "tímidos" y a los "hábiles" del carlotismo y el triunvirato: eran los indicados para negociar.

Los plenipotenciarios llevaban instrucciones amplísimas. Estaban autorizados a tratar según se presentaran las circunstancias y procurando las mayores ventajas posibles, dentro de una gama de hipótesis que se extendía desde el reconocimiento

liso y llano de nuestra independencia, hasta la sujeción a la corona bajo ciertas condiciones de autonomía y gobierno propio.

La difusión de estos honestos propósitos (tan distintos, no obstante, de la tónica revolucionaria del año anterior en la oratoria de Montevideo) disgustó hasta a la opinión más conservadora. A ello se sumó la indignación provocada por otras medidas de tipo reaccionario, que pretendieron justificarse con argumentos de prudencia y habilidad (las aconsejó sin duda Rivadavia, para facilitar su comisión), como la restitución de las banderas españolas a los regimientos que habían triunfado del enemigo bajo la bandera de Belgrano. Al recurrir al oportunismo, el régimen que había fundado su existencia en la exaltación de la ideología renegaba de su principio (es decir, se suicidaba) con lo cual rechazaba a los suyos sin conquistar a los contrarios. El jacobino que actuaba como conservador da la razón a su adversario y está maduro para ser reemplazado por el conservador auténtico.

Ante este panorama, que desazonaba a los prudentes del régimen, no se desanimaba la joven energía de Alvear, aferrado a sus sueños de gloria. Tenía fe en su estrella, que había empezado a brillar en el cielo de Montevideo y ahora le señalaba el camino del norte.

Se había propuesto asumir el mando en jefe de las fuerzas destacadas en esa frontera, aumentadas con las que traía de la Banda Oriental y los regimientos de Buenos Aires, para emprender con ellas una marcha triunfal hasta Lima, consagrándose así como el libertador de América. Una oscura conjuración lo impidió. A su paso por Córdoba, en medio de los homenajes y los aplausos que iban jalonando su marcha triunfal, recibió la noticia de que los comandos del ejército se habían sublevado, tomando prisionero al coronel Vázquez, su hombre de confianza, y anunciando que no aceptarían su jefatura. El virus de la indisciplina política había llegado hasta allí y cundía favorecido por la presencia de un general sin energía ni luces.

La sublevación del ejército del norte, la fuerza militar más importante de la defensa, preludiaba la caída del régimen, era ya su quiebra. El director Posadas presentó su renuncia, deseoso de volver a la vida privada y pensar en "la nada del hombre". Con un ejército sublevado, con la opinión pública de la capital enconada y recelosa, sólo contenida por las restricciones a la expresión y las facultades extraordinarias; con el artiguismo extendiéndose por todas las provincias y la Banda Oriental reducida cada vez más a la situación de una ciudad bloqueada por la campaña insurrecta, no podían las débiles energías del primer magistrado, elevado al poder supremo desde las plácidas funciones de notario de la curia. La situación exigía un puño enérgico y una acción decidida y vivaz.

No había más que un candidato, el general Alvear, quien contaba con sus tropas del campamento de Olivos y estaba dispuesto a asumir la dictadura de salvación pública según los mejores modelos revolucionarios. La Asamblea lo designó por gran mayoría y el 9 de enero de 1815 se hizo cargo del gobierno.

Al día siguiente, en Rincón de las Gallinas de la Banda Oriental, las tropas al mando de Dorrego eran derrotadas por el jefe artiguista Fructuoso Rivera, con lo cual se cerraba el sitio de Montevideo, cuya guarnición sólo podría aprovisionarse y comunicarse por agua con la capital.

Los tres meses y seis días que duró el gobierno de Alvear fueron dramáticos: la lucha de una energía juvenil —y por tal simpática— tratando de dominar por todos los medios un destino adverso que le devuelve repetidos fracasos.

Ensayó la diplomacia y manda a un joven abogado —el consejero de Estado doctor Manuel J. García— a Río de Janeiro, con una nota para Lord Strangford (que no se entregaría) en que ofrece el país al protectorado inglés. Publica un manifiesto al pueblo donde, luego de analizar la situación, se proclama optimista por el avance militar del norte y el estallido de la guerra civil española, que aleja los peligros de invasión. Pide el reconocimiento del interior, pero el ejército que manda Rondeau no lo acepta como Director Supremo. Divide el ejército en tres cuerpos y pone bajo sus órdenes personales al general San Martín, cediendo al influjo del general chileno Carrera para desplazar a su enemigo O'Higgins. San Martín renuncia: pero cuando se le manda al coronel Perdriel como reemplazante, el pueblo de Mendoza se amotina y no permite el cambio. Córdoba nombra un gobernador artiguista y Ambrosio Funes, hermano del Deán, llama a Artigas y Rondeau "heroicos padres de la patria". Las tropas nacionales a las órdenes de Viamonte capitulan en Santa Fe ante las montoneras. Montevideo debe ser evacuado por las tropas de Buenos Aires al mando de Soler. Buenos Aires se agita y parece que todo el país va estrechando el cerco alrededor del campamento de Olivos.

Alvear no cede, sin embargo. Manda sucesivas misiones ante Artigas para intentar una reconciliación: Herrera, Galván, el almirante Brown. Pero es demasiado tarde; ya se ve su debilidad y no se pacta con los débiles.

Al fin, sólo le queda el recurso desesperado de la violencia. El 27 de marzo —domingo de Pascua— apareció colgado de una horca frente a la catedral el cadáver del capitán Ubeda, "por hablar mal del gobierno", ¡cuando todo el mundo no hace otra cosa! Y al día siguiente se publica un decreto por el que se amenaza con fusilamiento a todo el que ataque al gobierno, invente

noticias falsas o no delate las conspiraciones que conozca, ¡cuando todo el mundo conspira! Como el artiguismo no pacta, decide exterminarlo. Divide sus tropas en dos columnas: una, al mando del brigadier doctor Ignacio Alvarez Thomas, opera en Santa Fe, contra los montoneros de esa provincia; la otra, bajo sus órdenes, operará contra Artigas.

Pero la opinión pública es más fuerte que las armas, porque actúa sobre quienes las empuñan. Apenas llegado a Fontezuelas, en la ruta a Santa Fe, Alvarez Thomas se subleva al frente de sus fuerzas el 3 de abril, y de allí le intimó a Alvear, en una violenta proclama, el abandono del mando, al mismo tiempo que fraterniza con al artiguismo.

Es la señal de la caída definitiva. En vano obtiene el Director con amenazas que el Cabildo de Buenos Aires lance una proclama contra Artigas; en vano se debate para la resistencia. Los miembros de su propio Consejo de Estado se hallan acordes en que debe irse y así se lo comunican. El 15 Buenos Aires está convulsionado, con el pueblo en las calles y el Cabildo reunido, como en los días de las grandes decisiones. Los propios amigos de Alvear encabezan ahora la protesta y el general Soler, al frente de una pueblada, exige la dimisión inmediata. Sólo cuando se convence de que está perdido, y a cambio de un salvoconducto que se le ofrece para su vida, renuncia el joven dictador a su sueño de gloria y mando, acaso exacerbado por lo que ocurre en esos días en Europa. Napoleón ha vuelto de la isla de Elba, está reinando nuevamente en Francia y conmoviendo al mundo. La asombrosa noticia debió llegar a Buenos Aires a comienzos de abril: tal vez en el mismo barco inglés en que busca refugio el 15 el general Alvear para iniciar su largo destierro.

No llegó a gobernar ni los cien días de la efímera restauración del Emperador: apenas noventa y siete.

V. EL CONGRESO DE TUCUMÁN Y LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA. SAN MARTÍN EN CHILE

La crisis de 1815 es la primera crisis de fondo del régimen revolucionario que ha vivido desde su iniciación en crisis permanente. Antes de cumplirse los cinco años de su accidentada vida, ha visto sucederse seis gobiernos y ha experimentado cuatro golpes de Estado y revoluciones, sin contar los motines militares y las conspiraciones frustradas, al mismo tiempo que ha debido hacer frente con suerte varia a la guerra del norte y la litoral.

¿Cuáles son las causas de esa inestabilidad? Aparte de las cuestiones circunstanciales de personas e ideologías, las tensiones regionales originadas en nuestra formación y agravadas durante el Virreinato y los gobiernos revolucionarios. Es un hecho que las esperanzas de liberación y mejoramiento que sintió el interior ante el movimiento de mayo, han sido hasta ese momento defraudadas. El virreinato subsiste en su organización esencial, con sus gobernantes intendentados arbitrarios y sus consecuencias económicas. Buenos Aires se ha enriquecido con su comercio próspero, casi todo él en manos inglesas a partir de 1810. El interior, en cambio, se ha empobrecido. A las causas que conocemos, se agrega la guerra, que cierra los mercados del norte y de Chile, aparte de lo que cuesta como destrucción y sacrificio de sangre.

En el interior se clama contra la capital. Se la acusa de ineficacia en la defensa y de desentenderse de las necesidades del país, al que pretende imponerle tiránicamente, como los virreyes, reformas que chocan con sus ideas y sus hábitos; y se busca el remedio en la recuperación del gobierno propio y la conquista del gobierno general. En el litoral, se acusa a los porteños de apatía ante el avance portugués. Buenos Aires fluctúa entre los pujos autoritarios y una tendencia creciente a replegarse sobre sí misma, abandonando a las provincias a su propia suerte.

Mientras que en todo el interior resuena el grito de "¡muestran los porteños!", el periódico "El Censor", órgano de la burguesía acomodada de la capital, o sea el partido del Cabildo, declara "que es necesario aceptar la pretensión de los pueblos a emanciparse de la tiranía de Buenos Aires; de esa manera ésta podría aprovechar sola de las ventajas de su posición y sus recursos".

* * *

La caída de Alvear provocó una oleada de júbilo en todo el país. Por un momento se creyó en la pacificación definitiva en el orden interno, no obstante los graves motivos de inquietud provenientes de la amenaza exterior. Las tropas de Artigas fraternizaban con las de Buenos Aires en Santa Fe, a tal punto que se pusieron a discreción de aquél los jefes prisioneros por su adhesión al régimen caído. El caudillo los mandó de vuelta, manifestando su repugnancia a erigirse en verdugo.

El Cabildo se hizo cargo del gobierno de la capital y convocó a elecciones para una Junta de Observación, compuesta de cinco miembros. Como reacción contra el régimen depuesto —representante del idealismo revolucionario, frustrado por las circunstancias externas— resurgió el grupo moderado y contemporizador del vecindario, que había apoyado al saavedrismo: el partido de los intereses, desplazado de la dirección durante el régimen de la Asamblea. A él pertenecían los electos de la Junta, quienes se apresuraron a reemplazar al cesante Ejecutivo, designando a los héroes del momento, Rondeau y Alvarez Thomas, como Directores titular e interino.

A guisa de satisfacción a la opinión pública se inició el procesamiento de los miembros del gobierno derrocado por el "crimen de facción". Fueron detenidos y reducidos a prisión Rodríguez Peña, Larrea, Posadas, Viana, Herrera, Monteagudo, Vieytes y Valentín Gómez, como los militares que habían seguido a Alvear hasta el fin y condenados a diversas penas, la mayor parte a destierro. El teniente coronel Paillardel, presidente del consejo de guerra que había dispuesto la ejecución de Ubeda, fue condenado a muerte. En su flamante calidad de fiscal de gobierno, dictaminó a favor del cumplimiento de las sentencias el doctor Paso, otra vez resurrecto.

Según el bando lanzado el 18 de abril, debía reunirse un nuevo congreso en Tucumán. El cambio de residencia de la autoridad suprema era una concesión necesaria al espíritu antiporteño que la actuación de la Asamblea había enconado en las provincias, a la vez que expresión del nuevo espíritu defensivo que se había impuesto en la capital. La Junta de Observación dictó un estatuto por el que reglamentaba la forma en que debían elegirse los diputados y lo envió a los gobiernos interiores para su aprobación. Las disposiciones de ese instrumento improvisado disgustaron a los pueblos por las excesivas prerrogativas que se arrogaban sus autores, simples miembros de una autoridad local: sólo lo aceptaron con reservas Salta, Jujuy, Tucumán, Chuquisaca y Potosí. La Junta de Guerra presidida por San Martín en Mendoza lo rechazó, "por no considerarlo oportuno al actual régimen de las provincias".

Como reacción contra el régimen depuesto, el movimiento general no era hacia la uniformidad, sino hacia la pluralidad, teniendo cada pueblo a gobernarse por sus propios ayuntamientos y gobernadores. Córdoba tenía un gobernador artiguista. En Salta se aclamaba a Güemes como caudillo popular. No obstante ello, el optimismo resultante del cambio efectuado prevaleció sobre los recelos, pues se supuso que el congreso resolvería en definitiva los conflictos pendientes. Entre julio y diciembre, se eligieron diputados en Buenos Aires, Tucumán, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, Catamarca, Charcas, Córdoba y Mizque.

No ocurrió lo propio con el litoral. Era de esperar que la caída de Alvear fuese acogida por Artigas como un triunfo personal, puesto que en cierto modo lo era. Así lo había reconocido el mismo Cabildo de Buenos Aires que lo proclamaba "jefe benemérito". Era natural que el caudillo pretendiese influir sobre las soluciones futuras, imponiendo la constitución del país de acuerdo con sus principios; y acaso lo habría logrado, con el aporte de la Banda Oriental, la Mesopotamia, Córdoba y Santa Fe. Si algún sentido tenía la revolución efectuada, era el de reemplazar la sujeción a la autoridad central por la libre determinación de los pueblos. Pero esto era justamente lo que Buenos Aires no se resignaba a aceptar. Al mismo tiempo que sus autoridades halagaban a Artigas y realizaban gestiones para que eligiera diputados, retenían por la fuerza militar la provincia de Santa Fe, cuya opinión respondía a aquél, bajo pretexto de que era tenencia de la capital.

Artigas convocó a una reunión de diputados en Arroyo de la China (la actual Concepción del Uruguay) para definir las bases sobre las que se podría concertar un arreglo, a la que concurrieron representantes de la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Hubo propuestas y contrapropuestas, en las que el punto de discordia resultaba siempre el mismo. El caudillo, paciente y tenaz, se mantenía aferrado a la cuestión de principios. Al fin, mandó cuatro diputados para negociar con el Director interino. Aparte de recibir vejaciones (como la de ser alojados en una fragata surta en el puerto), dichos delegados volvieron a chocar con la misma decisión irrevocable de fijar arbitrariamente el límite de la influencia artiguista en el río Paraná.

Como remate de todo el proceso, Alvarez Thomas le impartió a Viamonte la orden de ocupar Santa Fe, cuya ciudad tomó en el mes de agosto, instituyendo un gobierno títere y haciendo designar diputado al congreso al cura Crespo, de Baradero. La guerra civil quedaba de ese modo encendida en el litoral. Al mismo tiempo y concordantemente, el Director interino confirmaba en calidad de enviado en el Janeiro al doctor don Manuel

J. García, miembro conspicuo del alvearismo y doctrinario de la entrega al Brasil de la provincia oriental a cambio de la eliminación de la influencia artiguista.

Tanto las negociaciones con Artigas como su cese parecen haber estado determinados por la amenaza de la expedición de Morillo, destinada a Montevideo en sus comienzos y encaminada luego a Nueva Granada. Este era por cierto el único aspecto tranquilizador de una situación que se presentaba preñada de malos augurios. La revolución americana, en vísperas de la reunión del Congreso, parecía derrotada en todas partes. En Chile, la reacción realista dominaba desde un año atrás, a raíz de la derrota de Rancagua. En México había caído a fines de 1815 el cura Morelos, caudillo patriota, bajo las balas de los enemigos. La tropa expedicionaria de Morillo prevalecía en Nueva Granada sobre la heroica defensa de los revolucionarios, y Bolívar se veía obligado a refugiarse en Jamaica. Y esto parecía sólo el comienzo del desastre general, porque la eliminación definitiva de Napoleón después de los "cien días", que preludiaba la formación de la Santa Alianza, dejaba a Fernando VII las manos libres para ocuparse de sus colonias rebeldes, con la probable colaboración de las potencias aliadas, unidas todas en un interés común.

Como si esto no fuese bastante, en noviembre de ese año nefasto de 1815, el ejército del norte, desmoralizado y debilitado por la deficiente dirección de Rondeau, habría de sufrir un tremendo descalabro en Sipe Sipe, derrotado por las fuerzas al mando de Pezuela. Con ello quedaba desguarnecida esa frontera, y el ejército enemigo en condiciones de avanzar hasta el corazón del país. Felizmente, frenarían la invasión las milicias gauchas de Güemes.

No era más auspicioso el panorama en el orden interno, según vimos. Las provincias no obedecían al gobierno directorial. El litoral se hallaba en plena insurrección y la liga de provincias federales se enfrentaba a Buenos Aires. La situación económica era en algunas partes deplorable: en Cuyo por el cierre del comercio con Chile; en el norte y el litoral por los estragos de la guerra, agravados aquí por ataques depredatorios de los indios a favor de la indefensión y la anarquía. La capital mantenía entre tanto una situación desahogada por la continuación de su comercio exterior, realizado casi totalmente, según dijimos, por barcos ingleses. Las cuantiosas utilidades de las firmas importadoras las habilitaban para servir al gobierno en calidad de prestamistas y banqueros y sobre ellas recayó, en forma de empréstitos o contribuciones voluntarias o forzosas, gran parte de la financiación de los gastos que ocasionaba la guerra.

El 24 de mayo de 1816 se reunió por fin el congreso en la ciudad de Tucumán, con asistencia de diputados de nueve provincias. Había entre ellos algunos hombres que figuraban desde los primeros tiempos de la revolución, como Paso, Pueyrredón, Anchorena, Medrano, y otros más oscuros representantes del término medio de la opinión prudente del interior, y animados casi todos de una desconfianza invencible hacia Buenos Aires. Muchos eran clérigos y frailes y el resto abogados, hacendados o comerciantes. Las disensiones internas retardaban la llegada de los demás diputados. Para colmo, la ciudad estaba plagada de los dispersos del ejército del norte, que habíanse desbandado después de Sipe Sipe.

Se designó para presidir las sesiones preparatorias al diputado Medrano. Las primeras reuniones se dedicaron a asuntos de reglamento y autorizaciones financieras. Pronto hubieron de abocarse los representantes a los problemas urgentes que planteaba la política interior.

En La Rioja, un jefe de cuerpo había derrocado al gobierno establecido. En Santa Fe, una insurrección artiguista encabezada por Cosme Maciel, Mariano Vera y el capitán de milicias Estanislao López había obligado a capitular a las fuerzas nacionales al mando del general Viamonte.

En auxilio de éste marchaba una columna a las órdenes del general Belgrano, que acababa de volver de su comisión a Europa. Al llegar a Carcarañá se enteró de lo que había ocurrido y de que el artiguismo dominaba en Santa Fe, por lo cual destacó en función de negociador al general Eustaquio Díaz Vélez.

¿Qué iba a hacer Díaz Vélez sino repetir con Alvarez Thomas la operación que éste le había hecho a Alvear y que parecía, en momentos de confusión, el camino para alcanzar el mando supremo? Llegado a Santa Fe y enterado de la magnitud del movimiento y de su popularidad, decidió pactar sobre la base de la renuncia del Directorio y la prisión del general Belgrano, como garantía de la paz que habría de firmarse. El tratado debía ser ratificado por el gobierno de Buenos Aires, por el general Artigas "protector de los pueblos libres" y por el gobierno de Santa Fe.

No era ajena sin duda a esa maniobra la alarma que había provocado en Buenos Aires la prédica monarquista del benemérito y cándido creador de la bandera que traía de su reciente aventura diplomática una panacea adobada al calor del reciente fervor dinástico. Nunca había sido un lince en materia política (como lo probó su carlotismo y su fe ingenua en la quimérica ciencia económica), y soñaba a la sazón con una pareja reinante formada de un príncipe Inca y una princesa lusitana, síntesis de la tierra y la cultura, de la tradición milenaria y la civiliza-

ción, fórmula perfecta e imposible. Poco le había costado convencer al Director, que era su sobrino y con cuyo poder contaba para imponerla.

Todo ello había contribuido al desprestigio del pobre Alvarez Thomas, en conflicto permanente con la Junta de Observación, donde se acentuaba el espíritu localista y la desconfianza por las aventuras. Díaz Vélez sabía que obraba sobre seguro. Después de unos momentos de arresto, Belgrano siguió viaje a Tucumán (donde estaba destinado), soñando con persuadir de su hallazgo al Congreso. El Cabildo y la Junta de Observación avalaron el pronunciamiento militar. Huérfano de todo apoyo, el Director presentó su renuncia, siendo nombrado en su reemplazo el general don Antonio González Balcarce.

El nuevo gobernante nombró una comisión para tratar con los santafesinos, y el Congreso, por su parte, envió al doctor Manuel del Corro. El 28 de mayo se firmó un convenio por el que se reconocía la autonomía de Santa Fe (la vieja aspiración artiguista), supeditada a la constitución que habría de dictarse.

* * *

Todos estos episodios convencieron al Congreso de la necesidad de crear una autoridad indiscutible por su origen, que pusiera fin al régimen de los interinatos: un Director titular del Estado con respaldo nacional, no meramente municipal. La desconfianza general por Buenos Aires agitó en el comienzo la candidatura del coronel Moldes, notorio por su fobia a los porteños y a quien se suponía apoyado por Güemes. No era por cierto una solución. Una gestión conciliatoria efectuada por Castro Barros ante el caudillo salteño obtuvo la concentración del mayor número de sufragios en la persona del coronel mayor don Juan Martín de Pueyrredón, actuante desde la Reconquista, quien obtuvo 23 votos sobre 25.

La primera preocupación del nuevo mandatario fue la situación militar. Se trasladó por ello a la frontera del norte, a fin de examinar las fortificaciones y tomar nota de las necesidades más urgentes. Luego celebró en Córdoba una entrevista con el general San Martín, donde se enteró al detalle de sus planes sobre Chile y le prometió todo su apoyo. San Martín lo instó en esa ocasión a que se apresurara la declaración de la independencia y trasladara la sede del gobierno a Buenos Aires.

Mientras tanto, en esta ciudad la descomposición política se precipitaba, debido a la conducta del general Balcarce. No obstante el compromiso contraído, se había negado a ratificar la

convención de Santa Fe, remitiéndola a la consideración del Congreso por haberse nombrado Director titular. La verdad es que se hallaba en comunicación permanente con el enviado García, quien había logrado ganarlo a sus miras de acabar con el caudillismo litoral mediante un entendimiento con el Brasil, de cuyos propósitos "liberales" se constituía en fiador. Entendía además que la mediación de esa corte, en trance de emparentar más estrechamente con Fernando VII, era garantía de la obtención de un arreglo razonable con España. El 24 de junio comunicó que el 12 de ese mes había zarpado de Río la escuadra brasileña con 4.000 hombres de desembarco y con destino a las costas de Maldonado y Montevideo; agregando que "nada había que recelar con respecto a las provincias occidentales, sujetas al gobierno de Buenos Aires", ¡como si la provincia oriental no nos perteneciese y fuera tierra de nadie!

La noticia de la invasión portuguesa, unida a la ruptura del pacto con Artigas provocó en Buenos Aires una gran indignación, pues se lo acusaba a Balcarce de connivencia con los invasores, o por lo menos de "sospechosa apatía". El ambiente general se inclinaba a la declaración de guerra, sobre todo en las clases populares. Aparece por primera vez de manera explícita en el Cabildo y la Junta de Observación el localismo porteño, en la intención de renunciar a los privilegios y obligaciones de capital del territorio y asumir la soberanía al igual de las provincias litorales. Como Balcarce no accede a la intimación de que renuncie hecha por esos órganos representativos, se lo declara cesante en el cargo y se designa una Comisión gubernativa provisional, formada por don Francisco de Escalada (presidente de la Junta y suegro de San Martín) y don Matías de Irigoyen. En medio de estas agitaciones llega a Buenos Aires la noticia de la declaración de la Independencia, efectuada en Tucumán el 9 de julio.

* * *

El Congreso había en efecto declarado la independencia de las Provincias Unidas en Sud América con respecto a "la dominación de los reyes de España". Daba con ello estado legal a una situación de hecho ya existente, que respondía al anhelo general de los pueblos. El acto muestra el cambio de espíritu provocado por la restauración española en el énfasis con que se habla de América y lo americano, por oposición a lo europeo. El tema ya insinuado en Moreno y Monteagudo, pero hasta entonces minoritario, se hace general. La guerra empezada como simple discordia civil se convierte en continental americana contra las armas

opresoras del Rey, iniciándose así la hispanofobia que alcanzaría su cenit con la generación romántica, cuyos prohombres (Echeverría nacido en 1805, Alberdi en 1810, Sarmiento en 1811) en esos momentos deletrean el alfabeto y respiran ese ambiente en sus casas. Se maldice con encono al "godo" y al "chapetón". Lo cual deriva en idealización del elemento indígena, cuya tradición se invoca (tesis de guerra, falsa pero estimulante) y tendrá manifestaciones tan curiosas como el proyecto de monarquía incásica.

Si bien mera expresión de voluntad, sin efectos materiales, la declaración asumía una enorme importancia moral, decisiva para tonificar los ánimos y prepararlos para el esfuerzo supremo. San Martín la juzgaba indispensable para el éxito de la expedición a Chile; quería cruzar los Andes y vencer como soldado de una nación libre. Las noticias de la invasión portuguesa movieron al diputado Medrano a proponer, en la sesión del 19, que se modificara el acta, agregando "y de toda otra dominación extranjera". El 25 se adoptó como bandera la insignia creada por Belgrano.

Cuando pocos días después llegó Pueyrredón a la capital convulsionada, siendo recibido con grandes agasajos, debió ocuparse inmediatamente de la situación del litoral. La opinión pública pedía una acción enérgica contra el portugués, lo que hacía necesaria la paz con Artigas. El Director inició gestiones de pacificación y ordenó a Díaz Vélez que se retirara de la provincia litoral. Pero Díaz Vélez desobedeció la orden y se apoderó de la ciudad de Santa Fe. Pocos días duró su triunfo: el 25 de agosto ocupó la plaza y el 30 debió abandonarla corrido a tiros por los vecinos al mando de Estanislao López. Igual suerte le cupo a la escuadrilla comandada por don Matías Irigoyen. Los saqueos y vejámenes de que fue víctima la población dejaron un recuerdo tan indignado que dos misiones consecutivas de conciliación que Pueyrredón encomendó a don Alejo Castex y al deán Funes escollaron en la desconfianza invencible de las autoridades de la provincia.

El 9 de agosto el general Belgrano se había hecho cargo del ejército del norte replegado a Tucumán. La agitación contra el régimen del Congreso, por los rumores de monarquía y la apatía ante la invasión portuguesa, se acentuaba en todo el territorio, con estallidos esporádicos. Se alzaba Bulnes en Córdoba; se alzaba Borges en Santiago del Estero. El ilustre creador de la bandera, glorioso vencedor en Tucumán y Salta, se veía sometido al papel poco airoso (y al que sin duda se resignaba en aras de sus sueños institucionales) de gendarme volante, encargado de repri-

mir las intentonas subversivas. Borges fue fusilado por su orden el 1° de enero de 1817.

* * *

Para comprender la actuación del Directorio y el Congreso frente a la invasión portuguesa en la Banda Oriental es preciso reflexionar sobre la composición en esos años del grupo gobernante.

Con pocas excepciones, el Congreso se componía de miembros reclutados en la fracción bien pensante y moderada de la burguesía culta de las provincias interiores (reacción contra los "exaltados" de la Asamblea caduca), en gran parte clérigos. Eran por consiguiente, naturalmente inclinados a la prudencia y de propensión conservadora y monarquista. Como prevalecían los hombres del noroeste —sin la experiencia directa, ni la tradición viva en el litoral de la rapiña lusitana—, se explica que carecieran del reflejo inmediato de indignación que experimentaban los hijos de las provincias fronterizas ante el ataque y que pudiesen considerar la cuestión planteada a la manera de una cuestión académica, sujeta al cálculo de posibilidades. El patriotismo local tenía en esos años más vigencia que el nacional, pues apenas si había nación: la patria era América. . . o la aldea de las fronteras próximas a sus provincias: el norte y Chile. La guerra que les interesaba, era aquella en que todos estaban comprometidos. Por lo que hace a las simpatías ideológicas, no es de extrañar que muchos sintieran mayor afinidad con la corte ordenada y moderadamente liberal de Río de Janeiro que con los caudillos del litoral: contrabandistas, jefes de montoneras semibárbaras en quienes sólo verían un factor permanente de anarquía y disolución. Aquella podría servir de puente para llegar a un arreglo razonable con España y la Europa civilizada, a cambio de concesiones que bien podrían consistir en el sacrificio de una o dos provincias turbulentas, precio mezquino para una corona importada; mientras que con los otros, ¿qué perspectiva sino la necesidad de liquidarlos en nombre de la civilización y del orden? Estas eran sin duda las ideas dominantes en la ilustre asamblea y ellas explican toda su política.

Pero además del Congreso y por sobre él estaba la Logia, la Logia reconstituida después del derrumbe del alvearismo, aunque siempre firme en sus propósitos y preponderante en sus decisiones. La correspondencia entre San Martín y Pueyrredón nos da claros indicios de ese poder oculto. Nos hemos referido antes a su carácter, que no había variado, aunque sí su composición y su

orientación. Adaptada a los tiempos nuevos, era a la sazón monárquica y la integraban, entre otros, Irigoyen, Balcarce, Rondeau, Martín Rodríguez, Lezica, Braulio Costa, Castro, Rolón y Cornelio Saavedra, rehabilitado en sus títulos y honores, además de las grandes figuras fundadoras, San Martín y Pueyrredón. Como se ve, los miembros excluidos habían sido reemplazados por grandes bonetes conservadores del saavedrismo, acordes con la nueva tendencia. Pero la Logia era la misma en sus finalidades iniciales, y así se explica la reaparición en la escena pública de personalidades excluidas y condenadas por el "crimen de facción" y que actúan de nuevo en primer plano, en estrecha comunidad de propósitos con sus enemigos del día anterior. El logista Manuel J. García, enviado a Río por Alvear, sigue confirmado en su puesto sirviendo a Pueyrredón; y el otro logista desterrado, Nicolás Herrera, que llegará a Montevideo acompañando a las tropas portuguesas, ha convivido con el enviado argentino, representante inmovible de dos regímenes sucesivos y contradictorios.

Si se tiene en cuenta el permanente propósito inglés de impedir que el Río de la Plata perteneciera a un solo Estado; si se tiene en cuenta asimismo que la corte del Brasil estaba en esos años manejada por la masonería británica y que la mayor parte de los jefes y oficiales del ejército pertenecían a las logias, no es aventurado suponer que existieran contactos secretos entre los dirigentes de allá y de aquí para fines comunes, que bien pueden haber consistido en el establecimiento de monarquías constitucionales e "ilustradas" en esta región del mundo, independientes de las metrópolis europeas. La historia visible no explica suficientemente los acontecimientos de este período tan accidentado y confuso. Hay que imaginar la historia invisible.

* * *

No entraremos en el detalle de las diversas gestiones que el director Pueyrredón realiza ante Artigas cediendo a la presión de la opinión pública, manifestada sobre todo en la clase popular artesana y "miliciana", cuya actuación comienza y que se manifiesta indignada por la apatía del gobierno frente a la invasión portuguesa. Es verdad que más de una vez ayudó con armas y municiones al caudillo, que se debate como puede contra fuerzas superiores; es verdad que se opone a la tentativa del Congreso en el sentido de negociar con el invasor, aceptando el hecho consumado. Permanece pasivo, no obstante, y pretende cohonestar esa actitud con el pretexto de la rebeldía del jefe oriental, harto es-

camado para ceder a las imposiciones del gobierno directorial a cambio de su ayuda.

Artigas y sus lugartenientes luchan mientras tanto con suerte varia en muchos y sangrientos combates en defensa del territorio invadido, hasta que deben replegarse a la campaña derrotados por fuerzas superiores. El Directorio los abandona a su suerte. Manda emisarios al campamento del jefe invasor, y obtiene la promesa de que éste no pasará las márgenes del río Uruguay y de que *quizás* reconocerá la independencia argentina.

La oposición contra esta política se hace cada vez más ardiente y clamorosa y el gobierno debe recurrir a las medidas de rigor. Destierra a los directores de "El Censor" y "La Crónica Argentina", que se erigen en intérpretes del honor nacional humillado: Feliciano Chiclana, Manuel Moreno, Vicente Pagola, Domingo French, Vicente Pazos Silva. . . El 20 de enero de 1817 las fuerzas portuguesas al mando del general Lecor entran a la plaza de Montevideo ante un Director y un Congreso impasibles.

Pero la patria ganará laureles compensatorios en otra frontera y una gloria que habría de recaer también sobre el general Pueyrredón y el Congreso, por su ayuda para la consumación de la hazaña. El general San Martín estaba terminando en Mendoza sus laboriosos preparativos para la reconquista de Chile. A principios de febrero traspuso los Andes, y el 12 obtuvo sobre el enemigo la victoria de Chacabuco.

VI. ¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?

Desde fines de 1814 andaban por las cortes de Europa los comisionados argentinos mandados por Posadas en los estertores de su gobierno para gestionar reconocimiento o apoyo. Primero había partido Sarratea, según vimos; luego, Belgrano y Rivadavia.

Las instrucciones que llevaban eran amplísimas. Debían tratar de llegar a un entendimiento con el Rey, aceptando el sometimiento a la corona a cambio de una completa autonomía, con "la administración en todos sus ramos en manos de los americanos"; o bien proponiendo la designación de un príncipe de la familia reinante para que gobernase "bajo las formas constitucionales que estableciesen las provincias". En caso de encontrarse con una decidida intransigencia debían dirigirse a otras cortes extranjeras a fin de negociar tratados ventajosos, pues era cada vez más urgente "conseguir una protección respetable de alguna potencia de primer orden contra las tentativas opresoras de España".

La llegada de Rivadavia y Belgrano a destino ocurrió bajo los peores auspicios. Napoleón había vuelto de la isla de Elba y se enfrentaba a Europa. Sarratea, con quien se encontraron en Londres, se hallaba empeñado en una intriga tendiente a obtener la coronación en el Río de la Plata de un hermano de Fernando VII. Servíales de intermediario con el rey destronado Carlos IV, que residía en Italia, un aventurero francés de actuación importante en el reinado anterior: el conde de Cabarrús. La negociación habría de fracasar en el derrumbe de Waterloo, el desencadenamiento del "terror blanco" y la negativa general de las cortes a tratar con rebeldes.

Entre tanto, se había producido aquí también el cambio de régimen y se llamaba a los miembros de la delegación.

Belgrano decidió volverse. Había husmeado los aires del Viejo Mundo y concebido ya, sin duda, el peregrino proyecto de monarquía luso-incaica (resabio del carlotismo inicial, completado con un toque de indigenismo ruseliano), en el que embarcaría con el éxito que vimos a su pariente Alvarez Thomas. Pero Rivadavia no podía resignarse al fracaso de una empresa en la que presentía la ocasión de su vida. Estaba ansioso por ensayar en una

corte auténtica las genuflexiones aprendidas en la corte aldeana de los virreyes. Decidió quedarse.

No obstante la opinión en contrario de Sarratea —con quien ya había tenido rozamientos a raíz de las cuentas de Cabarrús— y fundado en vagas sugerencias de un director de la Compañía de Filipinas que aquél le había presentado, creyó don Bernardino que lo que le cuadraba era dirigirse en seguida a España a entenderse con el Rey, y así lo hizo.

En el informe en que Sarratea daba cuenta de esta incidencia lo juzgaba con palabras duras, pero que resultarían proféticas: "Este hombre (Rivadavia) ha descubierto un apetito desordenado de meterse en lo que no le importa. Estoy preparado para si le tiente el Diabolo de llevar adelante un proyecto ridículo... que se lo combatí y desaprobé en todas partes" (se refiere al viaje a España). Le pronostica a continuación un fracaso total "por el maldito prurito de hacer el fantasmón y meterse en camisa de once varas".

Ocurrió tal cual. Rivadavia llegó a Madrid lleno de ilusiones y celebró su primera entrevista con el mismo ministro don Pedro de Cevallos. A pedido de éste presentó una nota sobre el objeto de su comisión, que era un modelo de obsecuencia servil, difícilmente conciliable con el lenguaje de la diplomacia. En ella exageraba las protestas de vasallaje a la corona, explicando que la finalidad de su viaje consistía en "suplicar humildemente al Rey" que se dignara "como padre de sus pueblos, darles a entender la forma en que habían de arreglar su gobierno y administración". No había, por consiguiente, más que escuchar y callarse.

No se sabe adónde habría llegado por este camino, de no haberse recibido en esos momentos la noticia de que dos corsarios argentinos al mando de Buchardo habían hecho presas en las cercanías de Cádiz y de que otras velas argentinas bloqueaban el puerto del Callao. Las negociaciones quedaron rotas.

En balde redobló Rivadavia sus expresiones de lealtad monárquica, pidiendo que Fernando VII enviase a Buenos Aires delegados "de su confianza" para informarse de la verdadera situación de los pueblos. Como quien se sacude un moscardón, el gobierno lo intimó a salir de España en un plazo de horas. Se dirigió entonces a conquistar París.

El éxito de la expedición a Chile y la caída en este país del poder español daban amplitud americana a la revolución argentina y desembarazaban de enemigos la parte austral del continente. Aliviaban además la situación de las provincias cuyanas por el restablecimiento del tráfico trasandino y constituían la etapa necesaria para la consumación del plan sanmartiniano en el sentido de asestar el golpe decisivo al baluarte de la resistencia española en el Perú.

El Libertador no quiso aceptar el mando supremo de la nación rescatada. Designó para el cargo de Director a su compañero de lucha, el general O'Higgins, reservándose para la jefatura militar de la próxima campaña. Esta conducta prudente no atenuó sino en parte la honda discordia civil que dividía el pueblo chileno entre los partidarios del nuevo gobernante y los de los hermanos Carrera, cuya facción acusaba a aquél de sometimiento incondicional a San Martín y a la logia de Buenos Aires, con mengua del orgullo local.

Un episodio cruel y desgraciado, al que fue ajeno el Libertador, agravaría esa discordia hasta hacer imposible todo arreglo futuro.

Mientras don José Manuel Carrera se hallaba en Montevideo, donde iniciaba una violenta campaña periodística, sus dos hermanos se habían dirigido clandestinamente a Mendoza, con el objeto de preparar una revolución en Chile: fueron descubiertos y presos. En esas circunstancias ocurrió en Chile el desastre de Cancha Rayada, lo cual hizo que se exagerase la noción del peligro que ambos podrían significar. El doctor Bernardo Monteagudo maniobró hábilmente ante el gobernador Luzuriaga y logró que se los condenara a muerte. Fueron fusilados en vísperas de la batalla de Maipú.

Esa sangre habría de influir gravemente en nuestra historia inmediata, pues explica el odio desesperado de león herido que animó en la campaña de 1820 al heroico y desventurado José Miguel, hasta terminar igualmente frente al piquete de ejecución.

Con el triunfo de Maipú el 5 de abril de 1818 y el embarque del resto de las tropas enemigas al mando del general Osorio quedaría Chile libre de enemigos. Las victorias de San Martín habían repercutido en la frontera del norte, provocando la evacuación de Salta por La Serna. En todo el Alto Perú las tropas enemigas continuaban hostigadas por las milicias de Güemes y los caudillos locales de las "republiquetas". Aliviada esa frontera y asegurado

Chile, quedaba la amenaza pendiente de la invasión española por el litoral. Se anunciaban los preparativos de una nueva expedición en Cádiz.

El Congreso se había trasladado de Tucumán a Buenos Aires en mayo de 1817 para estar más en contacto con la autoridad ejecutiva. Desde el comienzo de su actuación había dedicado largas sesiones a la discusión del régimen de gobierno, en cuya decisión veía la garantía del éxito en las gestiones diplomáticas con las potencias de Europa. Contaba con buen número de sufragios la fórmula mestiza del general Belgrano. No se llegó a ninguna decisión por oposición de los diputados de Buenos Aires, cuyo vocero fue el doctor Tomás de Anchorena, y del sanjuanino fray Justo Santa María de Oro, quien sostuvo que una cuestión tan importante no podía resolverse sin previa consulta a los pueblos. Se decidió, en cambio, nombrar una comisión para que preparase un proyecto constitucional.

Por lo que hace a la cuestión de la frontera oriental, ya sabemos cómo se hallaba planteada. El Directorio y el Congreso se habían limitado a obtener por parte del invasor la garantía de que no traspasaría la línea del Uruguay. No era ajena a esta parálisis la actitud del grupo "ilustrado" de la población de Montevideo, que había recibido con alborozo a las tropas del general Lecor y mantenía relaciones de intereses con el Brasil y alentaba en toda forma la política antiartiguista del gobierno de Buenos Aires.

Pero el "artiguismo" no se limitaba a la línea del Uruguay; dominaba en la Mesopotamia y Santa Fe, amenazaba extenderse a todo el territorio. El director Pueyrredón, alentado por los triunfos de Chile y del norte, decidió darle el golpe de gracia.

Mientras las fuerzas de Artigas, con sus lugartenientes Fructuoso Rivera y "Andresito" mantenían en jaque a los invasores portugueses, extenuándolos en una permanente guerra de guerrillas, el gobierno de Buenos Aires entabló negociaciones con caudillos entrerrianos disidentes, como Hereñú, Carriego y Correa, y mandó en su auxilio una escuadrilla al mando del coronel Luciano Montes de Oca. Pero Entre Ríos había encontrado un gran jefe en la persona del general don Francisco Ramírez, quien derrotó completamente, en Arroyo de Cevallos, el 25 de diciembre de 1817, a las magras montoneras de los caudillos traidores reforzadas por tropas de la capital. Entre Ríos se levantaba en masa contra la invasión; su jefe galvanizaba todo el rencor suscitado por las tentativas opresoras de los porteños. En vano mandó el Directorio nuevos refuerzos a las órdenes del general don Marcos Balcarce. Este sería reiteradamente derrotado por las fuerzas irregulares del caudillo, hasta que después de la acción del Sauce-

cito, el 25 de marzo de 1818, se vio obligado a huir y refugiarse en la escuadrilla.

Todos estos años se caracterizan por una intensa acción diplomática.

Se establecen las primeras relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Monroe simpatiza con los nuevos países del sur, pero se ve obligado a una política cautelosa para no romper con España, con la que negocia el territorio de la Florida.

Prosiguen las gestiones en Europa. Rivadavia, que ha sido confirmado en su embajada por Pueyrredón, se siente a sus anchas en París, donde ha hecho amistad con el abate De Pradt y otros personajes del partido liberal y se entrevista con los ministros, para interesarlos en la cuestión del Plata. Es evidente el interés de las potencias por obtener ventajas; pero chocan con obstáculos serios. En primer lugar, la estrecha vinculación de la monarquía francesa con la española, apoyada a su vez por Rusia; en segundo lugar, la oposición del gabinete inglés a cualquier solución ajena a su influjo.

España pretende la ayuda militar de las potencias para la reconquista incondicional de las provincias rebeldes, según los principios de la Santa Alianza, y cuenta con el apoyo de Rusia y eventualmente el de Francia, que temen la propagación de las ideas revolucionarias. Inglaterra —que no quiere perder la preponderancia comercial que ha conquistado— se inclina a la política de mediación. En el congreso de Aix-la-Chapelle, celebrado en setiembre de 1818 y donde por primera vez se admite a Francia en el comercio europeo después de la aventura napoleónica, se discute la situación de las colonias americanas, e Inglaterra consigue imponer su tesis de no intervención. De no intervención pública, se entiende; lo que no excluye su propio intervencionismo permanente y solapado. Los agentes ingleses pululan por toda América, de un extremo a otro; agazapados junto a los gobiernos o en los ejércitos revolucionarios, bajo el disfraz de ingenuos mercaderes o de aventureros románticos enamorados de la libertad.

El eje de la diplomacia del Directorio durante todo este período se halla situado en la misión de Río de Janeiro, desde la cual el enviado don Manuel J. García, juega a la perfección su papel de abogado del Diablo, con influencia decisiva sobre la camarilla dirigente logista y directorial. Su fórmula es siempre la misma: obtener el apoyo portugués a cambio de la cesión de la

Banda Oriental. Sus argumentos son perfectos. Dicho plan ofrece la ventaja de enfrentar los intereses de Portugal y los de España, que considera esa provincia como parte de sus posesiones; de resolver el problema de la preponderancia según él anárquica de Artigas; de crear intereses comunes con Brasil sobre una base de convivencia americana, y sobre todo, de comprometer la simpatía inglesa, al mismo tiempo que permite concentrar todos los esfuerzos para hacer frente a la amenaza de invasión española.

Pero esos razonamientos de ideólogo chocan con una repulsión cada vez mayor del país, que se siente herido en su honor por el zarpazo lusitano y respira odio y venganza. El Directorio y el Congreso se ven cada vez más aislados frente a una tremenda oposición, no sólo constituida por las provincias litorales y los emigrados políticos, sino dispersa por toda la nación, en el pueblo de la capital, entre la oficialidad de los ejércitos. Y ello no escapa a los observadores extranjeros. El cónsul norteamericano Halsey es expulsado de Buenos Aires porque se le descubren vinculaciones "artiguistas". Y los informes de los delegados de esa nación que nos visitan a fines de 1819 revelan en sus reticencias que han advertido con absoluta claridad la política errada del gobierno de Buenos Aires.

La guerra recrudecía en el litoral y los caudillos de esa zona debían hacer frente por sus propios medios a los avances de los portugueses. Las poblaciones de Santa Fe y el comandante de Coronda daban cuenta de que "los porteños", movilizaban a los indios para hostilizar a las poblaciones. El general Ramírez se veía obligado a una lucha permanente con las escuadrillas lusitanas que atacaban sus costas de la margen occidental del Uruguay, sin que ello provocara la protesta de Buenos Aires, no obstante la flagrante violación de los convenios.

Era el momento en que la Logia aceptaba una propuesta transmitida por Rivadavia desde Francia, según la cual España concedería la independencia a cambio de una compensación monetaria y el reconocimiento de un príncipe español como rey. El 25 de agosto de 1818 los diputados aprobaron las instrucciones a que debía sujetarse el comisionado. Y como consecuencia del nuevo giro de los negocios se le ordenó a San Martín que suspendiera toda hostilidad contra el Perú. El libertador presentó su renuncia. Por cierto que Rivadavia se había apresurado a convertir en realidad sus propios deseos; pero este episodio, unido al espectáculo de la anarquía litoral, iniciaría el divorcio, que pronto se hará patente, entre el héroe de los Andes y la oligarquía porteña.

Con todo eso, la reacción del litoral se acentuaba. El 18 de julio el gobernador Vera, de Santa Fe, siempre vacilante entre

Artigas y el Directorio, había sido depuesto por el comandante don Estanislao López, decidido en su oposición al Directorio y al portugués. Se reanudaron las hostilidades. El Directorio contaba con 4.000 hombres del ejército de San Nicolás al mando de Balcarce y con 3.000 hombres en Córdoba, destacados de las fuerzas de Belgrano (ejército del norte) y a las órdenes del coronel Bastos. Hubo diversas acciones en que las tropas regulares, minadas por la desertión y sin ánimos para la guerra civil, fueron sucesivamente aisladas o desbaratadas por la peculiar estrategia de las montoneras. Al fin, López sitió al ejército porteño en la villa de Rosario y lo obligó a capitular.

El 12 de abril de 1819 se firmó el armisticio de San Lorenzo en el que se establecía que las fuerzas de Buenos Aires se retirarían a San Nicolás y las santafesinas al norte del Salado; que se nombrarían diputados para negociar un tratado en el término de un mes, y que Santa Fe permitiría el paso de los convoyes para el interior, siempre que no fueran custodiados por más de 25 soldados.

La reunión pactada no se realizó. Artigas no quiso ratificar el convenio por desconfianza en el gobierno directorial, que ya se veía por lo demás en los estertores de la agonía.

Al fin Rivadavia lograría concretar una combinación en Europa. El gabinete de Francia, presidido por el duque de Richelieu, se había prestado a obtener una solución sobre la base de la coronación de un príncipe francés: se le insinuó al gabinete británico el nombre del duque de Luca y se mandó un enviado confidencial a Buenos Aires, unido a Pueyrredón por lazos de amistad, el coronel Lemoine.

Lemoine encontró en Pueyrredón una acogida muy favorable, con alusión emocionada al origen común. Las cuestiones de principios no ofrecieron dificultades. Un punto importante de la negociación consistía en el compromiso que adquiría Luis XVIII de intervenir para la suspensión de las hostilidades con España, impidiendo la partida de la expedición que se preparaba en Cádiz.

La Logia tenía en todos estos tratos una actuación decisiva. Resuelta ya la cuestión en sus líneas generales, se designó al canónigo don Valentín Gómez en carácter de enviado extraordinario con el objeto de protocolizarla.

El proyecto chocaría con la oposición de Fernando VII. El rey francés no contó, como esperaba, con el apoyo del zar de Rusia para vencer la resistencia del monarca español. No obstante ello las negociaciones prosiguieron y se llegó a convenir el casamiento del candidato con una princesa lusitana a fin de resolver en forma favorable el pleito de la Banda Oriental. Se había resuelto prescindir de la oposición de España. La propuesta fue aprobada por el Congreso el 12 de junio de 1819.

Un mes antes, previo despacho de la comisión designada al efecto, se había dictado la constitución que debía regir al nuevo Estado. Era una constitución de tipo unitario y aristocrático, que en sus líneas generales restablecía la organización política y administrativa de la Ordenanza de Intendentes. Ahora se trataba de modificarla para adaptarla al nuevo régimen que habría de instaurarla. Requerida la opinión de los pueblos sobre ella, éstos respondieron levantándose en armas contra el Directorio y el Congreso.

Pueyrredón llamó a San Martín para que viniera con sus fuerzas a apoyar al gobierno. Pero el Libertador desató la orden, por lo cual aquél hubo de renunciar el 19 de julio, siendo reemplazado por el general Rondeau.

Mientras el gobierno de la capital se debatía para establecer la vigencia de la nueva constitución, todo el país se alzaba contra el proyecto de monarquía extranjera. En octubre rompieron las hostilidades las fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe, auxiliadas por las de Corrientes y Misiones. Los generales Alvear y Carrera con otros emigrados y un brillante séquito de oficiales de las tropas de línea, se habían plegado al campamento de Ramírez.

El Director Supremo Rondeau se puso en campaña el 1° de noviembre y ordenó al ejército del norte que viniera en su auxilio. Pero al llegar a la posta de Arequito el 8 de enero de 1820, el grueso de la tropa se sublevó también bajo la dirección de los coroneles Bustos y Heredia y el comandante Paz, al grito de "¡Federación!".

Privado de ese auxilio, Rondeau sólo pudo oponer a las fuerzas combinadas de López y Ramírez, los contingentes de San Nicolás y algunos regimientos de milicianos. Los dos ejércitos se encontraron en la cañada de Cepeda el 1° de febrero, quedando derrotado el directorial y abierto para el vencedor el camino de Buenos Aires.

VII. LA DISOLUCIÓN NACIONAL DEL AÑO 20

La crisis del año 20 no es un estallido provocado por causas accidentales, sino la coronación de un proceso que se inicia con la revolución y se va agravando a raíz de la caída del directorio de Alvear en un sentido de resistencia cada vez mayor al centralismo porteño. Ya conocemos las razones de esta resistencia, bajo las que latía el repudio general al régimen de la Ordenanza de Intendentes, o sea a las tentativas de mantener o restablecer bajo otro nombre el Virreinato. Tan extendido estaba este sentimiento que el gobierno de Pueyrredón y del Congreso no fue obedecido sino en la medida en que estaba respaldado por fuerzas militares y en las regiones donde éstas predominaban. Cuando le faltó ese apoyo por la desobediencia de San Martín y la sublevación de Arequito, cayó en seguida, provocando la explosión múltiple de las energías contenidas artificialmente hasta entonces.

Los pueblos del interior y del litoral habían saludado en la revolución una oportunidad de mejorar su suerte, en el trabajo y en la libertad. Lejos de ello, veían sus males agravados, hasta el punto de sentirse tentados de añorar los tiempos del Rey. Aparte de la ruina de sus industrias por el comercio inglés que enriquecía a la capital, sentían la tierra misma ocupada o amenazada por el invasor con la complicidad del gobierno porteño. Buenos Aires sólo les deparaba opresión e ideología, para desembocar al final en una constitución tiránica y un rey extranjero.

El apoyo de las armas a ese régimen no podía ser incondicional y perpetuo. Se explica, por consiguiente, el que San Martín le prestó mientras significó un instrumento para la guerra contra los españoles y la liberación del territorio y que lo abandonara cuando se convirtió en un obstáculo para sus planes y en un aparato anarquizante y opresor. Se sabe que el Libertador mantuvo cordiales relaciones epistolares con Artigas y López, como las mantendría más tarde con Bustos; que comprendió y aun compartió sus aspiraciones, y que le ofreció a Pueyrredón la mediación chilena para llegar a una conciliación con los caudillos. "Lejos de necesitar padrinos —le respondió el Director— estamos en condiciones de imponer la ley a los anarquistas". . . .

Si se agrega a esto que el régimen había degenerado en el negociado ilícito y en el peculado, a lo que no era ajeno el propio

Director —según lo asegura el informe confidencial del comodoro inglés Bowles—, no es de extrañar la oposición con que contaba aun en Buenos Aires y dentro del mismo partido que lo sostenía en sus comienzos.

La sublevación del ejército del norte se produjo al grito de “¡Federación!”. Con ello mostraba su adhesión a los caudillos litorales, cuya causa abrazaba. Estanislao López había hecho dictar un año antes la constitución de Santa Fe. Casi simultáneamente estallaron movimientos análogos en San Juan y Mendoza. Bustos se hizo designar gobernador de Córdoba. El comandante Juan Felipe Ibarra, jefe de la frontera de Santiago, fue nombrado por el Cabildo gobernador de la provincia, que se declaraba con este acto independiente de Tucumán, cuyo gobernador Aráoz se había declarado a su vez independiente de Buenos Aires. Se siguió a ello una guerra entre ambas provincias que habría de terminar por mediación de Bustos, con el tratado de Vinaró. Todos los vínculos políticos se desintegraban, asumiendo los cabildos la dirección del movimiento y buscando amparo en la fuerza militar, dentro de la cual —erigida en árbitro— jugaba a la vez activamente como ocurre siempre en estos casos, la puja de ambiciones personales por la conquista del poder.

* * *

Junto con la tendencia a romper los vínculos del antiguo Virreinato y recuperar el propio gobierno por parte de los pueblos, obraban otros factores. En primer término, la política internacional.

Hay que tener en cuenta la situación de Europa después de la caída de Napoleón. Las monarquías europeas agrupadas en la Santa Alianza se habían propuesto barrer hasta con los últimos vestigios del espíritu liberal en el mundo. Justamente a fines de 1820 se votaría, en el congreso de Troppau —a raíz de la revolución de Riego en España y no obstante las protestas de Inglaterra—, el “derecho de intervención” en las naciones contaminadas, rectificando lo resuelto en Aix-la-Chapelle.

El principal motivo de la oposición inglesa consistía en su interés por mantener las posiciones conquistadas en el comercio del Nuevo Mundo, gracias a su predominio marítimo. Pero este predominio, logrado a merced de la guerra continental, estaba lejos de considerarse como un hecho definitivo e irrevocable. España se empeñaba en recuperar sus colonias. Francia se agitaba igualmente, a fin de sacar ventajas de su ayuda posible o de encontrar una fórmula que la convirtiese en heredera de su aliada.

La misión Lemoine y las sucesivas negociaciones para la coronación de un príncipe de Borbón en el Plata entrañaban ese propósito. Sin duda se pensaba vencer, con el apoyo ruso, la oposición de Fernando VII, necesitado a su vez de la alianza francesa, que habría de afianzarlo en el trono después del congreso de Verona.

El proyecto de monarquía, en la forma aceptada por el Congreso, no tenía nada que chocara con las ideas del momento y es absurdo empeñarse en considerarlo como una simple añagaza, o como una traición. Aparte de dar término a los estragos de la guerra externa y de organizarnos al tenor del mundo, ofrecía la extraordinaria ventaja de agrupar bajo la misma corona los territorios argentino y chileno, lo cual nos habría proporcionado, desde entonces, la economía autónoma y la salida a ambos océanos en que se fundara la grandeza norteamericana. El terreno estaba preparado para ello por la expedición libertadora de San Martín y la aquiescencia de los logistas chilenos; la unión se especificaba en las negociaciones reservadas, si bien no figura, por razones de prudencia, en la ratificación del Congreso. Pudo haber sido el comienzo de una gran nación. No fue dable realizarlo por los elementos de disgregación que ya conocemos y por la acción de la potencia más directamente interesada en impedir la creación en América de países fuertes y sometidos a otras influencias que la suya.

Si se medita en la importancia del Nuevo Mundo para el comercio de la City de Londres —de ascendiente decisivo en la política de Castlereagh— es evidente que Inglaterra, entonces en plena revolución industrial y ansiosa de mercados, se empeñó en evitar la consumación del plan francés. Lo revela el sospechoso sincronismo entre la sublevación de Riego en España y la rebelión general contra el Directorio. Lo revela el tratado de comercio que firmó con Artigas desde 1817, con el que le permitió sostenerse, impidiendo a la vez el bloqueo porteño y lusitano. Lo revela la manga de agentes de comercio, turistas y “observadores confidenciales” —algunos tan conspicuos como el comodoro Bowles— que se abatió a la sazón en ambos campos. Lo revela por último la filiación de los personajes que se agruparon primero en Montevideo y luego en el campamento de Ramírez para encabezar el alzamiento contra el régimen y la de quienes en Buenos Aires lo apoyaban. Don Manuel de Sarratea venía de Londres y estaba al cabo de los propósitos de las cancillerías de Europa. El general Alvear había sido el gestor del protectorado inglés de 1815.

Debe recordarse, además, que la imprenta desde la que don José Miguel Carrera efectuaba su propaganda periodística contra Pueyrredón y su partido, acusándolos de pasividad traidora ante la agresión portuguesa, se hallaba en Montevideo, ocupado a la

sazón por los portugueses, circunstancia que habría sido inexplicable sin una especial protección. Aparte del interés natural del Brasil por evitar la formación a su flanco de una poderosa monarquía, dueña de un territorio mucho más rico que el propio en recursos naturales y material humano, es sabido que obedecía a las directivas de la diplomacia británica. Fue necesaria la intervención diplomática de García en Río de Janeiro y la del enviado chileno Zañartú en Buenos Aires para que el gobierno militar de Montevideo le extendiera a Carrera los pasaportes obligándolo a asilarse en el Campamento de Ramírez.

Desgraciadamente, el argumento invocado por la oposición al régimen era decisivo y propio para exaltar a los pueblos. Cualquiera haya sido su acierto en la intención, el Directorio había cometido la falta que más difícilmente se absuelve: la colusión con el enemigo tradicional a costa de la mutilación del territorio, la tolerancia con el extranjero que oprime al compatriota. La población del litoral veía la agresión portuguesa como una injuria mortal; envolvía en la misma odiosidad al enemigo y a sus cómplices aparentes y extendía a todas las cortes, reales o posibles, la animosidad que le inspiraba la de Río de Janeiro, afirmándose en el sentimiento republicano.

Todo esto ayudó al éxito de la empresa federal, que si bien satisfizo a dichos sentimientos vivos y legítimos, cortó de raíz una de nuestras posibilidades de grandeza futura.

* * *

En esta crisis del año 20 —la más grave que sufre la revolución desde sus comienzos— se encuentra la clave de nuestra historia y se definen sus líneas esenciales. Es menester, para entenderla, fijar algunos conceptos, aun a riesgo de repetir cosas ya dichas, pues se trata de un momento especialmente desfigurado por la pasión partidaria y cuyo estudio suscita imágenes que no se compaginan con la realidad. Hay que librarse ante todo de la vigencia de antagonismos falsos, como el de civilización y barbarie ("vulgaridad nacida de ignorancia", según Alberdi) o el de caudillismo "de masas" contra el gobierno culto y legalista de las ciudades, porque más confunden que iluminan.

La reacción litoral contra Buenos Aires y su gobierno estaba lejos de ser una reacción espontánea e "inorgánica" contra el gobierno "culto" de la capital, según lo afirma don Vicente Fidel López. Los caudillos, si bien populares entre las masas gauchescas, en su calidad de propietarios de haciendas y jefes de milicias, no representaban solamente a la clase popular, sino también a la

opinión culta y urbana de sus provincias y contaban con asesores prestigiosos, abogados o clérigos, tan al corriente de las tendencias políticas universales como los prohombres de la capital. Ellos mismos no surgían del populacho, sino de la burguesía "decente" y afincada, como Artigas y López, cuando no entroncaban, como Ramírez, con la más rancia nobleza colonial. En las manifestaciones políticas del "Proyecto" se ve el influjo directo del constitucionalismo norteamericano. Bajo la égida de López se dictó la constitución de Sante Fe en 1819, la primera de las provinciales en el orden cronológico; la segunda sería la de Córdoba, dos años posterior. Los caudillos representaban el anhelo común de los pueblos de su mando en todas sus clases (salvo exiguas minorías ganadas a los intereses del gobierno central) y su acción se seguía con entusiasmo por parte de la opinión de la misma Buenos Aires y por sus grupos dispersos en todo el territorio. La acusación de barbarie es la nota polémica esgrimida por sus adversarios y fundada en el aspecto desarrapado de las montoneras que acaudillaban, carentes de medios para armarse y equiparse; y equivale al dictorio de traición esgrimido por los caudillos contra los hombres del Directorio.

En la crisis del año 20 ha de verse ante todo el estallido de tensiones subsistentes desde los orígenes y agravadas por diez años de guerra y de perturbaciones políticas. Entre las poblaciones del antiguo Tucumán y las del litoral existían diferencias de formación social e intelectual y de configuración económica, de las que ya tenemos noticias. Buenos Aires, por su parte, debido a la peculiaridad de su situación y a su condición de puerto único, alentaba un sentido de la vida que suscitaba las resistencias del interior y sus vecinas litorales. El aislamiento recíproco y los intereses en pugna, actuando sobre un fondo de localismo y separatismo hereditarios, al que no era ajena una pizca de tradición comunera y un cierto fermento de antagonismo racial (agregados a la incompatibilidad tradicional entre el hombre de levita y el de chaqueta y chiripá, el de pluma y el de espada o lanza, el curial y el guerrero) eran materia dispuesta para entrar en ebullición y provocar explosiones apenas las tocara un adecuado agente externo, que en este caso fue la ocupación portuguesa. Todos los elementos heterogéneos empezaron a moverse en el sentido de la desintegración, de tal modo que, visto el fracaso de las negociaciones por la confusión de lenguas, sólo quedaba para restablecer la unidad necesaria el supremo argumento fraternal de la guerra civil.

* * *

La agravación de las tensiones después de la revolución se debía a diversas causas. Buenos Aires, como cabeza del Virreinato, había tomado la iniciativa; pero después de haber sido contrarrevolucionarios un año antes, cuando se alzaron Chuquisaca y La Paz. Las expediciones al interior, si bien actuaron como agentes emancipadores, provocaron al mismo tiempo resistencias y fricciones y Castelli, particularmente, se había hecho culpable de verdaderas tropelías. Todo ello producía una mezcla de sentimientos cuya resultante no era, en general, favorable a los porteños y que la expulsión de los diputados de la Junta Grande no había contribuido a mejorar.

La subsistencia del tráfico de exportación e importación durante los peores momentos de la guerra mantuvo floreciente el comercio del puerto, mientras que en el norte y el litoral se arruinaban las industrias y, por los estragos de la lucha, se devastaban los campos y se destruían las propiedades. En estas circunstancias, debía recaer sobre Buenos Aires todo el peso de la financiación de los ejércitos y las flotas para la guerra emancipadora. Con su consecuencia inevitable: quienes afrontan los gastos se consideran con derecho a imponer su política, como se advierte en la acción del Triunvirato y la Asamblea. Y la reacción no menos legítima: quienes, aparte del tributo de sangre, sufren la guerra en sus tierras y sus bienes, acusan al puerto de causante de su ruina y dirigen todos sus esfuerzos a defenderse de la prepotencia porteña, en la que ven una continuación abusiva del centralismo virreinal.

Nace en el interior y se va acentuando con las vicisitudes políticas una atracción teñida de resentimiento por la capital rica y despótica, orgullosa y venal: una especie de urgencia de poseerla para doblegarla. Es el comienzo de un nacionalismo ya visible en el Congreso y que tiende a hacer de ella no un patrimonio de sus vecinos afincados, sino de todo el país, continuando la política de la Junta Grande, con cierto énfasis de desquite. Quiere decir que el predominio de Buenos Aires sólo habrá de aceptarse con la condición de que en ella el gobierno se comparta con los provincianos. Late aquí el conflicto por la cuestión de la capital, que originará tantas luchas y sólo se resolverá sesenta años después. Esta tendencia, que hemos llamado nacionalista, tendría su contraparte en el localismo de los porteños, que aspiran a ser los únicos dueños de su ciudad natal.

Sobre todos estos factores actuaba el enérgico disolvente de la ocupación portuguesa, planteando el problema, vital en nuestra historia, de la frontera oriental. Ya conocemos las diversas reacciones frente a dicha cuestión, pero no está de más insistir en ellas. Las provincias limítrofes con el Brasil, las antiguas depen-

dencias de Buenos Aires y la misma capital mantenían viva la reacción contra el portugués, al que consideraban como el enemigo permanente desde los tiempos coloniales. Los fastos guerreros de Buenos Aires estaban constituidos por la guerra reiterada contra la usurpación de la Colonia del Sacramento y los constantes avances de la rapacería lusitana a todo lo largo de la frontera: quedaban todavía para contarlos muchos veteranos sobrevivientes de las campañas de Vértiz y Cevallos. La Banda Oriental había sido el permanente campo de batalla, rescatado con sangre palmo a palmo, y se consideraba por lo tanto parte preciosa del territorio, aparte de las vinculaciones familiares y la comunidad de intereses agrícolas y mercantiles. Todo esto explica el auge del artiguismo en el litoral y las simpatías que encontraba en la misma capital por su defensa del territorio agredido, como también el encono oriental contra la actitud de los gobernantes porteños. Para los habitantes del antiguo Tucumán, en cambio, el problema oriental se presentaba como secundario y subordinado al de las fronteras norte y oeste, lo cual explica la actitud del Congreso —con mayoría "arribeña"— ante el hecho de la invasión.

El choque entre ambas actitudes debía originar la crisis que se complicaría con el planteamiento de la cuestión institucional en términos que significaban, para unos, la necesaria defensa del orden contra la anarquía, y para otros, la resistencia a la tiranía en nombre de la libertad. El patriciado del interior, predominante en el Congreso e imbuido de tradiciones aristocráticas, veía con simpatía la instauración en estas provincias de un régimen monárquico y coincidía en ello con el liberalismo moderado de los miembros de la Logia, que llegaban a la misma conclusión (compartida también por San Martín y Belgrano, columnas militares del régimen) por adaptación oportunista a las condiciones vigentes en Europa. El proyecto debía repugnar al espíritu republicano que se había impuesto en el litoral, por odio a la corte fluminense, por sus modalidades sociales, por un arrastre de influencia jacobina proveniente del morenismo y la Asamblea y por el ejemplo norteamericano invocado por el clérigo Monterroso, mentor de Artigas.

De estos elementos desencadenados y su choque, nace el estallido del año 20. Contra la política del Directorio y del Congreso, monarquista a la europea, comprometida con el gabinete francés desde la sesión secreta del 11 de noviembre y reticente o pasiva frente a la invasión de la Banda Oriental, según la fórmula del doctor Manuel J. García (y viciada además por la venalidad y el peculado), se alza la reacción republicana, federal y patriótica, a cuyos caudillos se pliegan los desterrados por el régimen: Alvear, Manuel Moreno, el chileno Carrera. Este partido —cuya

acción coincide, no hay que olvidarlo, con el interés de Inglaterra— debía aliarse con el localismo porteño en una acción común contra el Directorio. El localismo porteño (representado por el Cabildo, la clase “decente” y los tercios cívicos, en los que luchan tendencias contradictorias) se resuelve en esta forma contra el monarquismo y las opiniones aristocráticas del interior, así como contra el predominio provinciano en el Congreso. Pero una vez derrocado el régimen y ante la amenaza de la dominación de la capital por los caudillos, se repliega sobre sí mismo y —aliado a los restos del partido directorial— se vuelve contra ellos, aprovecha sus disensiones feudales y conquista su autonomía con el apoyo de energías nuevas que acaban de hacer su aparición en la vida política. Este es el sentido del proceso que relataremos en las páginas que siguen.

VIII. LUCHA POR EL PODER EN BUENOS AIRES

La derrota de las tropas directoriales en la Cañada de Cepeda dejaba expedito el camino de Buenos Aires a los jefes federales aliados. Sólo se habían salvado del desastre la infantería y la artillería al mando de Balcarce, quien logró retirarse hasta San Nicolás. El plan de los vencedores consistía en poner en el gobierno al general Alvear, a quien acompañaba una legión de oficiales que seguían su suerte y a quien se le suponía, por su condición de ex-director, un gran partido en la capital. Alvear, por su parte, había adquirido con Carrera el compromiso de auxiliarlo en su empresa sobre Chile.

El Cabildo nombró jefe de la defensa de Buenos Aires al general don Miguel Estanislao Soler. Junto con los primeros dispersos de la batalla de Cepeda, llegó una intimación de López y Ramírez en la que se hacían terribles cargos al régimen derrotado y se insinuaba que, si no caía, no detendrían aquéllos su marcha sobre la capital.

El Cabildo se apresuró a mandar una comisión para que echase las bases de una transacción conducente a la paz. Pero entre tanto, Soler se había adelantado a ponerse de acuerdo con los jefes vencedores e intimaba al Cabildo para que declarase caducas las autoridades. El Congreso se declaró disuelto; el Director había renunciado ya. El Cabildo asumió el gobierno y convocó a elecciones de una Junta que se encargaría de designar gobernador.

Don Manuel de Sarratea acababa de llegar a la capital con el objeto de imponer la candidatura de Alvear; pero halló dificultades por la resistencia que ese nombre inspiraba (sobre todo al presentarse como una imposición del enemigo) y por las aspiraciones de Soler al cargo. Resultó electo él mismo como gobernador interino y renovó el Cabildo con adictos a Soler para congraciárselo con la esperanza de sucederlo como titular.

El gobernador nombrado pertenecía al mejor círculo social porteño y tenía dotes de negociador, aunque carecía de autoridad. Es probable que su designación se haya debido tanto a la confianza en sus cualidades cuanto al conocimiento de sus fallas que lo condenaban a la inocuidad. Sea como fuere, se hizo cargo del mando y el 22 de febrero partió lleno de optimismo al campamento federal, después de lanzar un manifiesto al pueblo en el

que afirmaba que López y Ramírez no traían otra intención "que prestarnos una mano benéfica para ayudarnos a sacudir el yugo que pesaba sobre la cerviz de la nación entera".

Al día siguiente firmó con los caudillos el tratado de la Capilla del Pilar —de tanta importancia en nuestra historia institucional— por el que se aceptaba la federación y se sometía la resolución definitiva de la organización nacional a un congreso que se designaría al efecto.

En una cláusula se hacía mención de la ratificación necesaria por el general Artigas (de quien Ramírez era lugarteniente); pero se omitía darle el título de Protector, lo cual significaba, por parte del entrerriano, un alarde de independencia en que estaba en germen la inminente ruptura. Al tratado iba anexa una convención reservada por la que Buenos Aires se comprometía a entregar a los vencedores una cantidad de dinero y armamento completo para un millar de soldados y sus oficiales.

* * *

El orgullo de la ciudad que pocos años antes había vencido a los ingleses y expulsado a los españoles de Montevideo y donde ya se había dicho aquello de

*Calle Esparta su virtud,
su grandeza calle Roma,*

se sintió profundamente humillado ante la necesidad de pactar con los caudillos. La reacción del localismo porteño fue intolerable cuando se divulgaron las cláusulas secretas y la encabezó un grupo de jóvenes que se iniciaba entonces en la vida pública y que formaría el grupo dirigente del futuro partido unitario.

Balcarce, que acababa de llegar a la ciudad con las columnas salvadas en Cepeda, se haría intérprete de ese estado de espíritu. El 6 de marzo se sublevó con sus tropas y fue designado gobernador por un Cabildo abierto de sus parciales, rápidamente convocado.

El general Alvear, que había entrado subrepticamente a la ciudad, creyó en la posibilidad de un avenimiento entre este movimiento y los caudillos, con la garantía de su persona, y trató de que se le diera la fuerza militar, a lo que Balcarce parecía inclinado. Pero la combinación carecía de apoyo en la opinión pública, dominada por los tercios cívicos, o sea las milicias armadas, cuyo caudillo era Soler. Este sacó de la ciudad a la tropa que

le era adicta. Sarratea —que había buscado refugio en el campamento del Pilar— se puso en marcha hacia el Fuerte, acompañado de los caudillos federales y sus montoneras. Balcarce, abandonado, huyó: era el 12 de marzo. Alvear trató de aprovechar entonces la acefalía en que quedaba el gobierno y convocó otro Cabildo abierto, que se reunió con gran tumulto. Pero cuando se presentó en la plaza, la tropa y parte del pueblo se amotinaron y aquél, que estaba acompañado por Carrera, debió ocultarse para salvar su vida. El Cabildo mandó una diputación a Sarratea para que se reintegrara cuanto antes al gobierno.

La situación del gobernador era difícil. Carecía de fuerza propia, puesto que la opinión dominante en la capital apenas si lo aceptaba como un mal menor, para evitar la opción entre Alvear y Soler. Debía apoyarse en las fuerzas de este último, que lo había obligado a poner bajo sus órdenes, como comandante general de armas, todos los recursos militares que había en la ciudad, con lo cual pensaba asegurarse la futura gobernación. Como Alvear tampoco cejaba en el mismo empeño, Sarratea creyó tener la carta del triunfo oponiendo una ambición a la otra: le hizo entender a Alvear que estaba dispuesto a cumplir sus compromisos con él, nombrándolo jefe del ejército, siempre que encontrara el medio de liberarlo de la influencia preponderante del otro. El joven ex-dictador no se lo hizo repetir dos veces. Desembarcó del lanchón en que estaba detenido en la rada y se apoderó del cuartel de "Aguerridos", en el que contaba con oficiales adictos, acompañado de Carrera y sus chilenos. De allí mandó una comisión que tomó preso a Soler en el mismo despacho del gobernador, quien se mostró escandalizado y fingió ceder ante la fuerza. Los amotinados elevaron una representación pidiendo que Alvear fuese reconocido en el cargo de comandante general de armas.

Pero la ciudad había entrado en conmoción. Los cívicos adictos a Soler acudían con sus armas a la plaza. El Cabildo de la misma filiación conminó a Sarratea para que expulsase a Alvear del territorio de la provincia. Este último, mientras tanto, con su regimiento y algunas compañías que se le plegaron, se hacía proclamar gobernador en el Retiro. Ante esta situación, Sarratea no tuvo más remedio que poner en libertad a Soler, excusándose como pudo del atropello que había consentido horas antes. La posición de Alvear se hizo a poco insostenible y debió retirarse hacia el norte por el camino de la costa, tiroteado de cerca por las partidas de cívicos.

En todos estos episodios Ramírez, no obstante su simpatía por Alvear, permanecía neutral, con un cuidado extremo de no aparecer interviniendo en lo más mínimo en las disputas internas

de Buenos Aires. En previsión de los sucesos —según cuenta Mansilla— había hecho volver al campamento a todos los oficiales entrerrianos que se hallaban en la ciudad. Esta actitud prudente contrastaba con la de Carrera, que actuaba como en país conquistado, requisando los chilenos —y hasta los cuyanos— que servían en los regimientos porteños para incorporarlos a su legión, lo que provocaba la indignación del periódico "El Año 20", aparecido en esos días.

* * *

Restablecida la tranquilidad y ante la urgencia de congraciarse la opinión pública, decidió Sarratea llevar adelante sus compromisos políticos abriendo la causa de residencia al régimen depuesto. Los miembros cesantes del Directorio y del Congreso fueron procesados por "alta traición", cargo que se fundaba en las tramitaciones para la coronación de un príncipe extranjero y en la pasividad ante la ocupación de la Banda Oriental por los portugueses.

Entre tanto, la Junta de representantes había establecido las normas para la elección de los poderes provinciales definitivos. Debían designarse doce representantes por la capital y otros tantos por la campaña, según un sistema de elección en el que cada votante sufragaría por tres candidatos. La Junta resultante debería elegir al gobernador titular, designar al diputado que representase a la provincia en el congreso por el tratado reciente, arreglar la deuda y ratificar los pactos federales.

Las elecciones se celebraron el 20 de abril y su resultado fue desastroso para el gobernador. El localismo porteño había reaccionado violentamente, eligiendo como representantes, por abrumadora mayoría, miembros del partido directorial derrocado, entre los cuales varios procesados por alta traición. Fueron inútiles los esfuerzos de Sarratea por invalidarlos. Carecía de fuerzas, puesto que Soler se hallaba en su campamento de Luján, manteniendo en jaque a Alvear y Carrera. El Cabildo y la Junta, sostenidos por la opinión predominante en la capital, se mostraron incommovibles. Ante el argumento de que algunos electos se hallaban procesados, opuesto por el gobernador, se le replicó que él mismo merecía estarlo por haber sido el iniciador de los proyectos monárquicos en ocasión de sus intrigas con el conde de Cabarrús. No tuvo más remedio que renunciar.

La reacción se había adueñado de la capital. La Junta designó gobernador interino a don Ildefonso Ramos Mejía y despachó una comisión ante el general Soler con el encargo de comunicarle

que no se lo había elegido a él por ser indispensable su presencia a la cabeza de las fuerzas. El ejército federal, en efecto, se apresuraba a atacar la ciudad como respuesta a la resurrección del partido derrotado, en lo que veía una burla inicua del tratado del Pilar. Lo conducía el general don Estanislao López, pues Ramírez había debido regresar precipitadamente a Entre Ríos para resolver su pleito con Artigas, y venían con él Alvear y Carrera.

* * *

Soler vio inmediatamente el peligro que representaba el resurgimiento del partido directorial, así como la necesidad de defender la autonomía de la provincia. Antes que nada, urgía desconocer y reemplazar al nuevo gobierno. Hizo convocar para ello al Cabildo de Luján (única villa con prerrogativas municipales), que lo proclamó gobernador y comandante de armas; luego notificó al de la capital para que lo reconociese en tal carácter e intimó a la Junta de representantes que le prestase obediencia. Esta no tuvo más remedio que someterse. Ramos Mejía depositó su bastón de mando en el Cabildo, quien le comunicó a Soler que podía pasar a recogerlo, puesto que se lo aceptaba sin resistencia.

Esto ocurría el 20 de junio, llamado "el día de los tres gobernadores". El 23 Soler prestó juramento, y al día siguiente nombró comandante de la ciudad al coronel don Manuel Dorrego —recién llegado del destierro a que lo condenara Pueyrredón— y se trasladó nuevamente a Luján, ordenando que se incorporaran todos los oficiales sin destino. De allí se movilizó con su ejército contra el de López. El encuentro se produjo el 28 en Cañada de la Cruz, donde fueron completamente derrotadas y dispersas las tropas de Soler, con excepción de una columna de infantería al mando del coronel Pagola, que se retiró en orden hacia Buenos Aires. El general derrotado comunicó al Cabildo la noticia del desastre y, considerándose perdido, se embarcó para la Colonia.

La ocasión parecía nuevamente propicia para el general Alvear, que venía con el ejército triunfador. Con el camino despejado por la victoria, se trasladó a Luján, hizo convocar representantes de la campaña y éstos lo eligieron gobernador de la provincia el 1° de julio.

Pero entre tanto Dorrego tomaba medidas enérgicas para defender la ciudad amenazada y salía con algunas fuerzas para defender y recoger a los dispersos del ejército vencido. El caudillo de Santa Fe, por su parte, jefe de las fuerzas victoriosas, se había hecho cargo de la situación y, con su proverbial prudencia, entraba en negociaciones con el Cabildo porteño sobre la base de nue-

vas elecciones. El panorama había cambiado. Aunque López conservara contra Dorrego el resquemor de las antiguas luchas, sabía que no podía acusárselo de adhesión al partido directorial: y se le hacía, por lo demás, cuesta arriba entrar en colisión con el legítimo localismo porteño imponiendo a Alvear por la fuerza. Era evidente que tampoco podía simpatizar con éste, perteneciente a otra familia espiritual, demasiado distinta. Sólo pretendía en la ocasión sacar provecho de su victoria. Con los comerciantes del Cabildo hablaba el mismo idioma y podían entenderse.

La situación de la capital era, no obstante, sobremanera confusa. El pánico se había apoderado de algunos círculos, que urdían planes descabellados. Las cosas habrían de complicarse todavía con el pronunciamiento del coronel Pagola. Este lugarteniente de Soler era un soldado estrafulario —espadón sin cabeza, puro coraje y gritos— y había salvado, según vimos, algunas fuerzas del desastre de la Cañada de la Cruz. Al frente de ellas pretendió apoderarse de la ciudad, pretextando la traición del Cabildo que quería “entregarla a López” y proclamando el exterminio de los directoriales, hasta el punto de que muchos de éstos pensaron echarse en brazos de Alvear para liberarse de tamaño azote. El coronel Dorrego, que lo conocía bien, maniobró hábilmente y consiguió reducirlo en el Fuerte, después de haberlo despojado de sus tropas: principalmente los tercios cívicos, entre los que empezaba a extenderse su popularidad. En pocos días logró restablecer, mediante una política de conciliación y de captación inteligente la tranquilidad y la confianza perdidas. Buenos Aires empezaba a sentir un caudillo. Unos veían en él al amigo del pueblo, al republicano, al buen federal. Otros, al “porteño” celoso de la libertad de su provincia.

Repuesto el Cabildo, cuyos miembros habían debido ocultarse para escapar de las iras de Pagola, pudo cumplir lo estipulado por López sobre la base de la suspensión de hostilidades. Convocó a los doce representantes que el pueblo había elegido el 2 de julio y éstos designaron a Dorrego gobernador provisorio hasta tanto se reuniese la representación de toda la provincia.

* * *

La situación no estaba liquidada, sin embargo. Quedaba Alvear, gobernador “in partibus” investido por la junta lujanense, con sus tropas acampadas en las inmediaciones de Morón, entre ellas los chilenos de Carrera, con su caballería al mando del legendario coronel Benavente, y un famoso batallón de infantería negra que había logrado copar, con el brillante grupo de oficiales

—Vázquez, Iriarte, French— que seguía su suerte. El caudillo de Santa Fe, entre tanto, con sus fuerzas victoriosas a cuatro leguas de la ciudad, no mostraba indicios de retirarse. Quería sacar todas las ventajas posibles de su posición, pues necesitaba, para sus miras ulteriores, de un gobierno adicto en Buenos Aires. No escapaba a su perspicacia que se hallaba en juego la hegemonía sobre toda la nación y esperaba que se resolviera la cuestión política de la capital, para lo cual se reservaba el derecho de poner eventualmente su lanza en el platillo.

Pero Dorrego, por su parte, no podía entrar en pactos con el invasor de su provincia mientras éste permaneciera en ella como conquistador y después de haber desaparecido las razones aparentes de la guerra. Lo conminó pues a que se retirase del territorio en un oficio enviado el 6 de julio, en el que se quejaba además de las depredaciones cometidas por los santafesinos. Dispuesto a rechazar por la fuerza al invasor con todos los recursos de que la provincia podía disponer, nombró al general don Martín Rodríguez jefe de las milicias del sur, al general Rondeau de las del norte y él mismo se puso al frente de las tropas de la capital. El general Rodríguez, pidió la colaboración del joven hacendado don Juan Manuel de Rosas, de antigua y noble estirpe, quien desde el año anterior desatendía sus intereses particulares por el servicio público y había realizado, con las milicias de Monte, Lobos e inmediaciones, armadas y equipadas a su costa, algunas salidas contra los indios que amenazaban esos pagos. Rosas reunió dos mil hombres y recibió el grado de comandante de milicias.

Las operaciones se iniciaron enseguida. Se despacharon fuerzas sobre Morón, repartidas en tres columnas al mando de Rodríguez, Lamadrid y el propio Dorrego. En un ataque por sorpresa, éste logró derrotar a Alvear y Carrera, apoderándose del regimiento de infantería que era el núcleo de su fuerza y que se le plegó con entusiasmo. Alvear y Carrera emprendieron la retirada sobre Luján, mientras López empezaba a recostarse hacia el norte, en dirección al Arroyo del Medio.

Ya en situación ventajosa, Dorrego mandó al caudillo santafesino proposiciones de paz, sobre la base de la evacuación de la provincia, la devolución de las armas tomadas en Cañada de la Cruz y el abandono a su suerte de Alvear y Carrera. Rosas, por su parte, lo instaba a abandonar el territorio de la provincia, ofreciéndole su garantía personal de que, cumplida esa condición, todo se arreglaría. Como López dilataba las respuestas o las eludía, Dorrego se convenció de que no quedaba otro recurso que la guerra. Concentró sus fuerzas en Luján y, después de lanzar un manifiesto explicativo de su actitud, marchó sobre el ejército de Santa Fe.

López se vio obligado a continuar su retirada, ante el aumento de las tropas de Dorrego, engrosadas por sucesivos aportes de milicias: la lucha contra el invasor se había hecho popular. Alvear y Carrera se resistían a esa táctica, que los alejaba de sus objetivos de manera irremediable. Al fin, decidieron detenerse y atrincherarse en San Nicolás, a la espera de ayuda por parte de Entre Ríos. En un movimiento rápido, Dorrego atacó la plaza y tomándola por asalto les infligió una terrible derrota, después de un combate en el que hubo prodigios de valor por ambas partes. Los defensores debieron rendirse a discreción. Alvear y Carrera lograron huir. López internó a Carrera en la provincia de Santa Fe, intimó a Alvear la salida inmediata del territorio de su mando y abrió negociaciones de paz con Dorrego. Este las aceptó sobre la base de un armisticio de tres días, durante los cuales deliberarían los comisionados, que fueron don Cosme Maciel por Santa Fe y el general Rodríguez y el comandante Rosas por Buenos Aires.

Parece que en esta ocasión Rosas habló largamente con el gobernador López, ofreciéndole su influencia para la elección de un gobernador titular que asegurara la concordia. Sobre esta materia no hay más que conjeturas, aunque no es difícil que López haya objetado la personalidad de Dorrego para ese propósito, por sus cuentas pendientes con Santa Fe. Las negociaciones se retardaron y Dorrego advirtió que el caudillo aprovechaba la tregua para aumentar sus fuerzas con milicias de su provincia. Apenas lo supo, ordenó a sus comisionados que escucharan las últimas proposiciones de aquél y se volvieran con o sin ellas. La respuesta de López consistió en un recrudecimiento de sus exigencias: quería que se pagaran los gastos de la guerra y se le devolviera la división tomada a Carrera en San Nicolás. Era evidente la táctica dilatoria para lograr ventajas. Dorrego denunció el armisticio y movió sus fuerzas sobre las de López. Se encontraron en la margen norte del arroyo Pavón y el ejército de Buenos Aires logró triunfar sobre el santafesino. López emprendió la retirada en desorden.

El impetuoso Dorrego resolvió perseguirlo, internándose en el territorio de Santa Fe. Tanto Rodríguez como Rosas se opusieron al proyecto; pero aquél se hallaba empeñado en dar un golpe decisivo. Ante esa obstinación, ambos pidieron venia para retirarse del ejército, la que les fue concedida. Dorrego siguió tras de López y empezó a luchar con las dificultades del terreno, cuyos pastos malignos le diezmaron la caballada. Cuando se halló en inferioridad de condiciones, su astuto adversario lo atacó y lo derrotó en el Gamonal, el 2 de setiembre. El jefe porteño debió replegarse a San Nicolás y luego a Areco, para hacer frente a la inminente invasión del ejército santafesino.

Pero entre tanto, Rodríguez y Rosas se habían apoderado del control de la política en la ciudad y la derrota del gobernador les facilitaba la tarea. Se habían realizado las elecciones de la ciudad y la campaña y su resultado permitía asegurarle a López —como lo haría Rosas confidencialmente— que se designaría un gobernador “de paz”. Por el mismo conducto, el caudillo santafesino respondía que esperaba “con confianza” los resultados. Es decir, que no habría nuevas hostilidades; lo que devolvió el alma al cuerpo a los directoriales otra vez resurrectos y cuyo candidato, apoyado por Rosas, era el general Martín Rodríguez. El 18 de setiembre se instaló solemnemente la Junta de representantes con asistencia del gobernador sustituto, general Marcos Balcarce, y el 26 designó al nuevo gobernador. Previendo la protesta, que no podría menos que estallar, expidió un bando en el que declaraba que haría caer todo el peso de la ley sobre los perturbadores del orden público. El pensamiento de Dorrego en campaña no dejaba dormir tranquilos, sobre sus fáciles laureles, a los vencedores.

IX. EL FRACASO DEL SUPREMO ENTRERRIANO

Era natural la desconfianza que sentía el núcleo adinerado y mercantil de la Junta de Representantes por las consecuencias de su decisión. Con el nombramiento del general don Martín Rodríguez se imponía nuevamente el partido más desprestigiado entre los que actuaban en Buenos Aires y el más carente de amplitud nacional.

Cualesquiera que hubieran sido sus méritos y sus intenciones patrióticas anteriores —frustradas por el funesto error de la pasividad ante la agresión lusitana— volvía al cabo transformado, lleno de rencor contra sus vencedores de la víspera, a quienes tildaba de anarquistas y bárbaros, y animado de un vivo espíritu de desquite. Era la peor de las soluciones. Hubiera sido preferible el triunfo de Alvear, concordante en las mismas aspiraciones con el caudillo de Entre Ríos; y sobre todo el de Dorrego, buen federal doctrinario, celoso de la autonomía y dignidad locales, pero inspirado por grandes designios nacionales. Las circunstancias le fueron adversas y esa desgracia recaería sobre todo el país. Los directoriales, encaramados otra vez a favor del anhelo general de paz y de la inexperiencia política de un estanciero de 27 años —que habría de arrepentirse pronto— gobernarían con el más estrecho localismo, harían fracasar todos los planes de organización y provocarían con ello nuevamente el estallido de la guerra civil.

Si el partido derrocado se había atrevido a hacer frente a la situación, era por el apoyo de las milicias de Rosas. Su actitud constituía una provocación a la opinión de la capital, en su ciudadanía más numerosa y aguerrida, cuya reacción parecía inevitable. En previsión de los acontecimientos, el gobernador había hecho acampar en Santa Catalina, a tres leguas de la ciudad, las tropas del joven comandante de campaña; y él, por su parte, se acuarteló en el Fuerte, con los batallones de “aguerridos” y “cazadores”.

La revolución estalló el 1° de octubre, encabezada desgraciadamente por el mismo coronel Pagola a quien ya hemos visto actuar y que era una garantía de coraje, desacierto y fracaso. En el día se apoderó de la ciudad, aterrorizó al vecindario e hizo convocar para el día siguiente un Cabildo abierto que declaró la elección de Rodríguez nula e ilegal, “por pertenecer notoriamente

éste. . . a la facción destruida del Congreso y el Directorio, enemiga de la libertad de los pueblos y de los patriotas”.

El gobernador Rodríguez había logrado huir a una chacra de Barracas, donde se le unieron Rosas y un millar de sus “colorados”. Entre tanto, se vivían en la capital horas confusas, con tumultos callejeros, asambleas agitadas, un Cabildo indeciso apelando a Dorrego en campaña y la Junta de Representantes en sesión permanente, escondida en el Convento de las Capuchinas y ratificando su confianza al gobernador. Entre el 4 y el 5 se movieron sobre la ciudad las tropas del “orden”, y después de encarnizadas refriegas con los cantones del trayecto, lograron dominar el motín.

No cesaron con ello las alarmas. Dos días más tarde el gobierno volvía a conmoverse ante la noticia de que llegaba Dorrego a las afueras de la ciudad. Venía, en efecto, por llamado del Cabildo; pero durante la marcha había recibido una comunicación de la Junta anunciándole la ratificación de la autoridad del gobernador y lo había hecho reconocer y jurar por sus tropas. Rehusó no obstante servir al nuevo régimen, y a poco fue desterrado por el gobierno, bajo pretexto de que conspiraba.

* * *

Quedaba pendiente la negociación de paz con Santa Fe, para la que existía por parte de López buena disposición, acompañada por duras exigencias. Actuó al fin como mediador el gobernador de Córdoba, general Bustos, y se nombraron comisiones para tratarla.

El 4 de noviembre se firmó el tratado de Benegas, en el que se establecía, después de las declaraciones corrientes de paz y amistad, que los gobernadores de ambas provincias “promoverían la reunión del Congreso general en el plazo de dos meses, remitiendo diputados a la ciudad de Córdoba”.

Como López exigiera la entrega de cierta cantidad de ganado en compensación por los gastos de guerra y los estragos causados en su provincia, Rodríguez aceptó, aunque bajo condición de que ello no figurase en el tratado, por considerarlo desdorado y ofreció como garantía de su cumplimiento la de la provincia de Córdoba. El gobernador de Santa Fe replicó que le bastaría, con preferencia a cualquier otra, la garantía del coronel don Juan Manuel de Rosas, con lo cual la personalidad juvenil del hacendado del sur resultaba no sólo el brazo armado del orden provincial, sino también el fiador de su crédito. Rosas debió poner a contribución a todos los estancieros de su amistad para re un'r

la cuota de 25.000 cabezas a que se había comprometido y cuya entrega cumplió con exceso dentro del plazo estipulado.

El general Bustos usó de toda su influencia en el interior, sobre los hombres del norte y de Cuyo, para apresurar el envío de diputados. No era ajeno, sin duda, a este esfuerzo un propósito legítimo de preponderancia personal; pero respondía sobre todo al pensamiento político dominante entonces en todo el centro y noroeste argentinos y que tendía a la unidad bajo el régimen federativo, con el objeto de concentrar todos los esfuerzos en la lucha contra los españoles del Perú, dejando a salvo la libertad de los pueblos. Bustos se hallaba en comunicación permanente con San Martín y Güemes. El caudillo salteño compartía esas miras; y había propiciado la erección en provincias federales de los territorios de Santiago y Catamarca, antes dependientes de Tucumán. Al mismo tiempo, la antigua provincia de Cuyo se descomponía en las de San Luis, San Juan y Mendoza; La Rioja se separaba de Córdoba, y todas se aprestaban a concurrir al Congreso que debía reunirse en la ciudad mediterránea.

* * *

Pero quedaba Ramírez. Ya vimos que había debido retirarse del sitio de Buenos Aires a raíz de su ruptura con Artigas. Instalado en Entre Ríos, éste le había reprochado violentamente la firma, sin su consentimiento, del Tratado del Pilar, que no tenía otro objeto —afirmaba— que “confabularse con los portugueses para destruir la obra de los pueblos y traicionar al jefe supremo que éstos se habían dado”.

Ramírez le replicó negándole autoridad y marchó sobre Entre Ríos. Después de algunos combates en que la suerte le fue desfavorable, el entrerriano infligió a su antiguo jefe una seria derrota que lo obligó a replegarse en desorden. Desde ese momento no le dio tregua para reponer sus fuerzas, y en una violenta y rápida persecución lo llevó hasta los confines de Corrientes. El Protector de los Pueblos Libres se vio forzado a cruzar el río y a pedir asilo al Paraguay, cuyo dictador don Gaspar Francia lo confinó en la villa de Caraguataí. Allí debía permanecer hasta su muerte, ocurrida a los 85 años, el campeón a quien le corresponde sin disputa el título de fundador de nuestro federalismo republicano y que fue un valiente guerrero y un gran patriota. Pero su ciclo había terminado, por mera acción del tiempo.

Ramírez, en cambio, no menos patriota ni valiente, era joven, lleno de bríos y se hallaba exento de la huraña obsesión localista que achicaba la visión y había vuelto rutinaria y estéril la

acción del Protector. Enriquecido por la experiencia de su campaña reciente contra Buenos Aires, en la que había humillado el orgullo porteño, entrando con sus montoneras hasta el Fuerte, oteaba un horizonte más amplio.

Sin esfuerzo, asumió la sucesión del caudillo oriental. Tenía bajo su mando toda la región mesopotámica y ramificaciones en la otra banda, entre las guerrillas artiguistas. El 30 de noviembre, en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la localidad del Tala, proclamó la República de Entre Ríos. Además de los recursos militares de la zona, disponía de la escuadrilla que le había cedido Buenos Aires a raíz del Tratado del Pilar, a la que unió las embarcaciones quitadas al Protector. Se propuso entonces llevar a cabo el gran propósito que había inspirado la acción contra el directorio y que los acontecimientos posteriores amenazaban frustrar: la guerra decisiva contra el invasor portugués. El Tratado de Benegas nada decía sobre este punto.

Al tal efecto, dirigió una nota al gobierno de Buenos Aires, en la que condenaba la política dilatoria de esta provincia frente a la ocupación de una fracción del territorio nacional por el tradicional enemigo; se manifestaba dispuesto a llevar adelante la guerra hasta desalojarlo, y expresaba su confianza en que se le prestaría para este objeto toda la ayuda necesaria, en tropas, armas y dinero.

El general don Marcos Balcarce, que actuaba en ese momento como gobernador delegado, le contestó en una nota de tono mesurado en la que le expresaba un completo acuerdo en principio sobre la finalidad propuesta; pero le advertía que todas las fuerzas militares de la provincia estaban comprometidas en la campaña que el gobernador titular, general Rodríguez, había emprendido contra los indios, quienes capitaneados por don José Miguel Carrera asaltaban las poblaciones del sur; y que por lo demás consideraba que correspondía al próximo congreso decidir sobre esa guerra, cuyo término feliz haría necesario el concurso de todas las fuerzas de la nación.

El general Carrera, en efecto, obligado por López a salir de Santa Fe con sus chilenos, acudía a los medios desesperados a que lo llevaban las circunstancias, con el fin de abrirse paso con fuerzas y recursos suficientes hasta la cordillera y ganar su tierra natal. Se había corrido hasta el desierto y aliado a tribus pampas y ranqueles, asaltado el pueblo de Salto, donde los indios mataron y saquearon, llevándose cautivas y hasta los vasos sagrados de las iglesias. Evidentemente, el caudillo chileno, urgido por proveerse de recursos, no lograba disciplinar los elementos incontralables a quienes lo unía la fatalidad, ni evitar sus tropelías. Rodrí-

guez había salido a campaña para perseguirlo, con el auxilio de las milicias de Rosas.

* * *

El general don Francisco Ramírez, jefe de Entre Ríos —o Supremo Entrerriano, como se le llamaba— había concebido un vasto proyecto de unificación nacional bajo su influencia, sobre la base de la empresa común contra el enemigo histórico.

Pensó en el primer momento en llevar una campaña contra el Paraguay, para obtener los recursos de esa provincia, principalmente en hombres de guerra; luego, en un ataque inmediato a las misiones, ocupadas por los portugueses desde la derrota de "Andresito". Pero ambas acciones significaban dejar a las espaldas enemigos, o amigos dudosos. Se decidió por intentar primero la realización de la unidad interna bajo su hegemonía. Las circunstancias se presentaban favorables gracias a la impopularidad notoria del sistema de Buenos Aires. A ello lo impulsaban los refugiados en su provincia a raíz del motín de Pagola, como el doctor Agrelo; y los emigrados a la Banda Oriental, como Alvear y Dorrego, antes enemigos y a la sazón reconciliados contra el adversario común y que esperaban las noticias del primer éxito para precipitarse a la capital, según lo cuenta Iriarte, que vivió esos días de esperanzas, zozobras y decepciones.

La campaña bonaerense contra los indios había fracasado, y éstos acababan de lanzar sobre las poblaciones uno de los malos más grandes de que había memoria; en sus depredaciones llegaron a 20 leguas de la ciudad, arreando enormes cantidades de ganado. Rosas logró derrotarlos en un combate, arrebatándoles más de cien mil cabezas del botín. Pero el gobernador, internado en el desierto, debió iniciar a mediados de enero una retirada desastrosa, con sus tropas diezmadas y hambrientas y sin haber encontrado al enemigo. El joven coronel Rosas —que se había opuesto a la forma de realizar la campaña y había previsto el resultado— elevó en consecuencia su renuncia al comando de las milicias del sur. Empezaba con ello su distanciamiento del partido que ayudara a levantar.

Pero quedaba para Ramírez una incógnita que previamente debía resolver: el caudillo de Santa Fe. Este había ganado todos sus galones en la lucha contra los ataques de los porteños y se hallaba unido al entrerriano por viejos pactos que seguían vigentes. Sus antecedentes lo obligaban a secundar la empresa, cuyas posibilidades de éxito habrían sido entonces inconstatables, y su intervención debía, si no arrastrar a Bustos, por lo menos

neutralizarlo. Ramírez lo invitó a que se le uniera para derribar al gobierno de Buenos Aires (que por sí mismo constituía una violación irritante del Tratado del Pilar), provocar su reemplazo y llevar adelante la campaña contra los portugueses por la recuperación de la Banda Oriental. López le replicó invocando los pactos que acababa de firmar con Buenos Aires y Córdoba (y cuya violación ya estaba preparando la otra parte). Los mediocres intereses localistas se superpusieron, en el ánimo del mediocre personaje, a los grandes objetivos nacionales: sacrificaba a su aliado en los principios por las pingües achuras de las vacas de Rosas.

El gobernador Rodríguez, por su parte, se aprestó para resistir. El 3 de marzo de 1821 publicó un bando por el que se obligaba a todos los habitantes de la ciudad, incluso españoles y extranjeros, a tomar las armas. Como Ramírez dominaba los ríos con su escuadrilla, debió formar otra, que puso a las órdenes del coronel Zapiola, cerró las comunicaciones con Entre Ríos y formó un ejército de vanguardia al mando de Lamadrid, mientras él mismo se situaba en Luján con el resto de las fuerzas. Envío también dinero y armas al gobernador López, que reorganizaba su ejército en Santa Fe.

El general Carrera había atravesado entre tanto la pampa con 400 hombres, la mayor parte indios, internándose en la provincia de Córdoba para pedir la ayuda de Bustos contra Buenos Aires. El cálculo era sobremanera errado puesto que el cordobés, con la perspectiva del Congreso, no tenía el menor interés en producir cambios: se consideraba dueño de la carta del triunfo. Rechazó la propuesta, como era de prever, y se dispuso a resistir. A pesar de la superioridad de sus fuerzas, fue derrotado el 8 de marzo en el Chajá por el destacamento del chileno, quien combatía con el coraje de los desesperados y derrotaría igualmente, tres días más tarde, a las tropas de San Luis, al mando de su gobernador, que acudía a socorrer a Bustos, después de lo cual tomó la capital de esta provincia, donde remontó su ejército hasta 800 hombres. Allí recibió una comunicación de Ramírez, invitándolo a que se le uniese para invadir Buenos Aires. Resolvió aceptar. Al pasar Carrera por Córdoba, Bustos se replegó sobre la ciudad eludiendo el combate. Carrera saqueó la campaña y se dirigió al encuentro del entrerriano.

El campamento de Ramírez estaba en Punta Gorda. De allí mandó un destacamento de vanguardia que cruzara el Paraná, tomara el pueblo de Coronda y se proveyera de caballadas; y a la escuadrilla del coronel Mansilla, con tropas de desembarco, a ocupar la ciudad de Santa Fe. Luego invadió él mismo la provincia, al frente de una fuerte columna de caballería: operación

arriesgada, pues tenía un enemigo a cada flanco, que avanzaban para encerrarlo. Lamadrid lo atacó el 8 de mayo, pero fue rechazado. Pocos días después, los coroneles García y Mansilla llegaban a Santa Fe, desembarcando la artillería y la infantería y tomando las baterías que había instalado López en la costa. De allí la escuadrilla volvió río abajo a enfrentar a la de Buenos Aires que iba a su encuentro al mando del coronel Rosales: fue derrotada y apresada en su casi totalidad.

El general Ramírez había llegado ya a Rosario cuando tuvo noticias del desastre. Enfrentó a una división de caballería santafesina que le salía al encuentro, dispersándola, y se dirigió a Coronda, donde esperaba que se le uniría Carrera. El coronel Lamadrid, con sus tropas reforzadas, había avanzado ínterin por la costa del Paraná para sorprenderlo por la retaguardia; pero fue nuevamente derrotado el 24 de marzo, perdiendo muchos prisioneros, pertrechos de guerra y una fuerte suma de dinero que llevaba para López. Este éxito de Ramírez sería efímero. La carrera victoriosa del Supremo Entrerriano había llegado a su fin. Dos días después entraría en batalla con el grueso de las fuerzas de López, en posición desfavorable y terreno desventajoso, y sería derrotado con grandes pérdidas al cabo de un encarnizado combate. Con poco más de 400 hombres se replegó hacia Córdoba. El 7 de junio se encontró con el destacamento errante de Carrera en Río Segundo, a diez leguas de la capital de la provincia.

Desde ese momento la suerte les fue adversa. Ambos compañeros parecían signados por la fatalidad. Decidieron atacar a Bustos, para copar sus tropas y llevar una nueva campaña contra Santa Fe. Pero Bustos se había fortificado en Cruz Alta, donde lo atacaron el 16 y fueron rechazados con grandes bajas, debiendo retirarse. En Fraile Muerto se separarían, por no ponerse de acuerdo sobre el rumbo que habrían de seguir: a cada uno le tiraba su tierra. Carrera marchó en dirección a Cuyo, y Ramírez hacia el norte, buscando el rumbo de Entre Ríos por el Chaco.

Sus enemigos despacharon dos columnas en su persecución. Con este objeto había salido de Córdoba una división de caballería al mando del gobernador delegado coronel Bedoya. Después de una marcha tenaz, alcanzó el 10 de julio al resto de las tropas del caudillo entrerriano en Río Seco, donde las destruyó completamente. Ramírez lograba escapar, gracias a la superioridad de su montado, seguido de unos pocos soldados y de su compañera "la Delfina", que vestida de oficial lo acompañaba en todas sus campañas. Un tiro de boleadoras hizo rodar el caballo de ésta, que cayó en manos de sus perseguidores. Ramírez volvió grupas y atropelló a lanzazos al tropel enemigo, en un intento desesperado por salvarla, en cuya circunstancia fue muerto de un pistoletazo en el pecho.

*El varón cabal perece
dichoso en la adversidad,
si le abren sus puertas de oro
patria, amor y libertad.*

Leopoldo Lugones ha cantado el episodio y comenta así esa muerte envidiable.

El general Carrera tendría peor suerte en su camino a Cuyo. A las tropas que lo acosaban se unieron las de Mendoza y San Juan al mando del coronel Morón. Después de algunos encuentros de guerrilla en que salió victorioso, fue alcanzado por la división mendocina de Albín Gutiérrez, quien lo derrotó el 2 de agosto en Punta de Médano. Con un grupo de adictos se dirigía hacia el sur, a fin de hallar refugio entre los indios; pero algunos de los suyos, hartos de correrías y esperando lograr el indulto, se complotaron vilmente para entregarlo a las autoridades de Mendoza, como lo hicieron. Se le formó un consejo de guerra y se lo fusiló el 4 de setiembre de 1821.

* * *

La guerra civil ardía también en el norte, entre el gobernador de Tucumán don Bernabé Aráoz y el caudillo de Salta general Güemes, a quien aquél no sólo le negaba ayuda en la guerra contra los realistas, sino que intrigaba con ellos para derrocarlo.

El Libertador San Martín había nombrado a Güemes jefe del ejército de observación que debía penetrar por el Alto Perú para colaborar con la expedición a Lima. Ante la actitud hostil de Aráoz, el salteño (que tenía en su provincia la oposición del núcleo oligárquico vinculado comercialmente con los españoles del Perú) se alió con el gobernador de Santiago del Estero, coronel don Felipe Ibarra, y con el coronel don Alejandro Heredia, para destruir a aquél y frustrar sus ambiciones de predominio en las provincias del norte.

El general realista Olañeta aprovechó de esas disensiones intestinas para invadir Salta. Se apoderó primero de Jujuy con un millar de soldados y adelantó su vanguardia al mando del coronel Marquiegui. Pero éste fue derrotado y hecho prisionero por el gobernador delegado de Güemes, coronel Gorriti, en la quebrada de Humahuaca. Simultáneamente, Güemes era derrotado a su vez por Aráoz, lo que aprovecharon sus adversarios locales para deponearlo con una revolución. Duraría poco. Bastó la vuelta del caudillo a Salta para que el pueblo lo aclamara y lo repusiera en el mando.

Pero Olañeta seguía avanzando. Una partida de 900 hombres al mando de su segundo, el coronel Valdés, consiguió entrar una noche sin ser sentida hasta la misma plaza de Salta. Güemes se hallaba en la ciudad. Al oír descargas de fusilería, salió a inquirir lo que pasaba y fue tiroteado por los ocupantes de la plaza, recibiendo una herida grave de la que moriría pocos días después, oculto en su campamento del Chamical.

Olañeta ocupó Salta con 2.000 veteranos. Pero los gauchos de Güemes, al mando ahora del coronel don Jorge Enrique Vidt, sitiaron la ciudad y lo obligaron a retirarse al cabo de tres meses. Sería la última invasión. Los españoles deberían en lo sucesivo reconcentrar sus esfuerzos en el Perú, donde había desembarcado ya la expedición libertadora de San Martín.

X. EL REFORMADOR RIVADAVIA

La pacificación del territorio, obtenida en forma tan precaria después de las luchas del año 20, coincide con la ocurrencia de acontecimientos decisivos para el destino de América y el mundo occidental.

La revolución de Riego en Cádiz se extiende a toda España y provoca la formación de un gobierno liberal y el restablecimiento de la constitución de 1812; repercute en Portugal e Italia y se comunica al Nuevo Mundo. Brasil se declara independiente bajo el emperador don Pedro I; el virrey Pezuela es reemplazado en su cargo por La Serna, del partido triunfante.

Bolívar prosigue en el norte su campaña victoriosa. Después de vencer a los enemigos en Boyacá, libertar el territorio de Nueva Granada y fundar la república de Colombia en 1819, consumaría dos años más tarde, con la victoria de Carabobo, la liberación definitiva de Venezuela. Mientras tanto, San Martín lleva adelante su empresa del Perú. En una operación magistral, al frente del ejército aliado argentino-chileno, desembarca en las costas peruanas, sitia la ciudad de Lima, que el Virrey abandona con sus tropas, la ocupa y proclama la independencia del territorio en la sede secular del poder español, recibiendo el título de Protector de la nueva república.

Ambos libertadores se cambian mensajes entusiastas, previendo el momento en que habrán de darse la mano para la victoria final sobre el enemigo, fuerte todavía. Mientras preparan las campañas decisivas y organizan sus respectivos frentes internos a fin de allegar recursos para la guerra, se mantienen a la expectativa de la situación política general y atienden todas las propuestas razonables para una paz honrosa, sobre la base del reconocimiento de la independencia y la evacuación por las tropas españolas del territorio americano.

El nuevo régimen español parece dispuesto a negociar. Manda comisionados a los insurgentes e inicia conversaciones. San Martín y La Serna firman un armisticio y se entrevistan en Punchaucá. Pero la Santa Alianza no habrá de permitir la propagación de esos brotes peligrosos de libertad. El gobierno liberal caerá pronto en España, víctima de sus propios errores y de la expedición punitiva francesa al mando del duque de Angulema.

Tal como estaba planteada la situación política y militar en esos años cruciales, una cosa parecía evidente: la necesidad de extenuar los esfuerzos para la guerra. Hubiera de terminar ésta por la victoria sobre el enemigo o su capitulación por medios diplomáticos, era indispensable allegar todos los recursos del Estado al mantenimiento y, si era posible, al aumento del poder militar, única garantía de éxito en cualquier negociación. Estaban en juego nuestras provincias del Alto Perú, fracción preciosa del territorio, y las fuerzas de que San Martín disponía resultaban irrisorias en comparación con las que habría podido proporcionarse, dados los abundantes recursos de Buenos Aires, principalmente, con sus 150.000 habitantes y su floreciente comercio.

Nunca como entonces fue tan necesaria la unión nacional, tal como podría haber surgido del Congreso de Córdoba, al que el gobierno de Buenos Aires se había obligado a concurrir por el tratado de Benegas. Y sin duda el Libertador alentó la esperanza de que viniera de allí el apoyo de la división auxiliar que debía marchar por el camino de la Quebrada para acabar con Olañeta y juntarse en Lima. Ello no se produjo porque el gobierno de Buenos Aires estaba inspirado por Rivadavia.

* * *

El general don Martín Rodríguez, en efecto, había formado un ministerio directorial y "logista", con don Bernardino Rivadavia en la cartera de Gobierno, don Manuel J. García en la de Hacienda y el general Cruz en la de Guerra y Marina.

Rivadavia acababa de llegar de Europa envuelto en un prestigio irresistible para el Buenos Aires aldeano de esa época. Había estado en las cortes del Viejo Mundo, en los centros de la civilización. Se había hecho amigo de Bentham y del abate De Pradt. Era natural que Rodríguez y su círculo vieran en él al hombre indicado para resolver todos los problemas, aplicando los conocimientos que no habría podido dejar de atesorar y los resultados de su experiencia reciente.

El también lo creía. Venía posesionado de su "sistema", al que le atribuía virtudes de panacea, y que consistía en una mezcla de liberalismo borbónico con utilitarismo benthamiano, o sea la fórmula intelectualmente más pobre del pensamiento político inglés, como que consiste en procurar la felicidad de los hombres por medio de la buena administración. Cuando llegó, se apagaron los últimos focos de la guerra civil. Quedaban pendientes las grandes empresas nacionales: la terminación de la guerra de la independencia y la reconquista de la Banda Oriental, aparte de la de-

fensa permanente contra los salvajes, la extensión de la conquista hacia el sur. Eludiendo estos objetivos, mejor dicho, ignorándolos, Rivadavia se plegó a los intereses del grupo que, en Buenos Aires, quería paz y negocios.

No era eso lo que quería el país. La guerra seguía con diversas alternativas en el norte, y la empresa de San Martín se acompañaba con entusiasmo y júbilo por sus victorias. En el litoral, la ocupación de Montevideo por el invasor dolía como un cuchillo clavado en el flanco. El partido de la guerra estaba activo en la emigración y en el pueblo de Buenos Aires, ciudad y campaña. Había un anhelo general de unión y se esperaba con ansiedad la reunión del congreso de Córdoba, para el cual habían elegido ya diputados la mayor parte de las provincias. Las circunstancias parecían doblemente propicias, por la revolución española y la declaración de la independencia brasileña, con la división producida en las filas enemigas entre los partidarios del viejo y el nuevo régimen. Ya fuese para luchar, ya para negociar, eran indispensables la fuerza y la unión.

Las comunicaciones del general Bustos en este sentido encuentran auspicio general. Tanto él como Ibarra, oficiales del ejército regular que han hecho la guerra del norte, sienten la urgencia de ayudar a San Martín, cubriendo la brecha que ha dejado en esa frontera la muerte del general Güemes. La misma Junta de representantes de Buenos Aires parece participar de ese anhelo unánime y nombra sucesivos diputados, recayendo las designaciones en los miembros más notorios del partido directorial, algunos sometidos todavía a proceso y que, por esta u otra causa, sucesivamente renuncian.

Por fin se nombra a cuatro, entre ellos don Matías Patrón y el joven empleado del gobierno don Juan Cruz Varela. Llevan instrucciones reservadas de hacer fracasar la reunión del Congreso, sugiriendo que los tiempos no están maduros y que resultará más ventajoso el sistema de pactos interprovinciales. Y lo consiguen.

¿Por qué hace fracasar Rivadavia el Congreso? Porque teme que prevalezcan los objetivos nacionales (símbolos para él de barbarie y atraso) sobre las "luces" que él encarna. El Congreso convocado ofrecía el peligro de ser patriota y federal; podía ocurrírsele decidir el sometimiento de Buenos Aires —y sus recursos— a la finalidad de liquidar la guerra contra godos y portugueses. El no quiere tal cosa, sino manos libres para llevar adelante su política de paz, prosperidad y "felicidad". La guerra es "atraso"; el comercio, luces y bienestar. La guerra traería el predominio brutal de soldadotes, como ese San Martín o ese Bolívar. La paz a toda costa atraerá gringos y dinero.

Su política es por eso de conciliación con todos los estados liberales, al precio de cualquier concesión: se siente lleno de ternura no sólo hacia España regenerada, sino hacia el nuevo imperio también liberal del Brasil, a pesar de que sigue las líneas de la política lusitana y acaba de declarar incorporada la Banda Oriental a su territorio con el nombre de provincia Cisplatina. ¿Cómo reacciona Rivadavia? Lleno de fe en la virtud de los principios, manda al canónigo don José Valentín Gómez a la corte de Río de Janeiro, para que negocie la devolución de la provincia usurpada a cambio del reconocimiento del Emperador. Se le contesta que los portugueses no han ido a la Banda Oriental como enemigos, sino como aliados, en virtud de pactos hechos con el Directorio por medio del doctor García, colega de Rivadavia en el ministerio. Gómez debe volverse con cajas destempladas, dejando planteada una estéril protesta en nombre del derecho de gentes.

Si se piensa en las dificultades con que hubo de escollar el Libertador San Martín en el Perú y que provocaron su irrevocable retiro después de la entrevista de Guayaquil, es imposible no relacionar esta desgracia (porque lo fue y grande para el destino de la patria) con la política mezquina y puerilmente fantástica, lugareña malgrado sus pujos de universalidad, henchida de resentimiento plebeyo, no obstante sus conatos de aristocratismo y adocenada a pesar de sus pretensiones intelectuales, de don Bernardino Rivadavia. Entre la acción de éste y el ostracismo del Libertador existe una relación de causa a efecto, que resulta evidente aunque nuestros historiadores se empeñan en ocultarla.

Sabido es que el objeto de la entrevista famosa fue un requebrimiento de refuerzos militares por parte de San Martín para acabar con éxito la guerra del Perú, pues sus efectivos no le alcanzaban para hacer frente a las tropas de La Serna—18.000 hombres aguerridos— que lo doblaban en número. La negativa de Bolívar, interesado en consumir personalmente la hazaña, provocó la renuncia, con la cual perdimos definitivamente las provincias del Alto Perú, que caerían dentro de la órbita del Libertador del norte.

Es indudable que si el general San Martín hubiera recibido el apoyo de Buenos Aires, no habría necesitado de Bolívar, por hallarse en condiciones de terminar la campaña por su cuenta, con lo cual hubiese sido muy otra la suerte de las provincias altoperuanas y nuestro destino ulterior. Rivadavia y su partido se lo negaron, alegando la necesidad de que ese asunto lo tratase el Congreso (cuya realización al mismo tiempo impedían) y el peligro de la guerra con el Brasil (que tampoco hacían con el mismo pretexto). No es difícil que supiesen ya, por el conducto secreto de las logias, que la política inglesa había resuelto allí

una nueva segregación, en forma de otra nación pequeña, rica e inerte ante su codicia. Mientras que de esa suerte disponían los hombres de la camarilla del destino de nuestras provincias noroesteñas, preparaban así mismo la pérdida del Paraguay y la Banda Oriental. ¿Qué le importaba a Rivadavia el territorio, qué la nación y su honor cuando estaban en juego los principios?

En aquellos momentos, el alférez real frustrado de 1809, el secretario del triunvirato que en 1812 restablecía las genuflexiones al monarca, el obsecuente corresponsal del ministro Cevallos en 1817 no vibraba ni se conmovía por otra causa que la suerte del liberalismo en la península. Con los comisionados regios don Antonio Luis Pereira y teniente coronel Luis de la Robla firmaba en 1822 una convención preliminar de paz, que incluía un armisticio por 18 meses y una ayuda a España de ¡20.000.000 de pesos!, para defenderla contra la Santa Alianza, suma que habría bastado con creces para barrer de América los últimos restos del poder español. Esta convención habría de fracasar por la negativa de los jefes militares a aprobarla. Continuaban no obstante las negociaciones, cuando la invasión francesa dio por tierra con el régimen liberal de España.

Bolívar seguiría hacia el sur su carrera triunfal, coronado por los laureles de Junín y Pichincha, hasta dar el supremo golpe al poder español en Ayacucho, plantar su bandera en Lima e imponer su ley sobre las provincias altoperuanas y sobre Tarija, supliendo de ese modo nuestra incapacidad y nuestro abandono. No hay duda de que en el reparto de la historia nos correspondía consumir la empresa de la liberación peruana con San Martín, y que ello no ocurrió por el desamparo en que una política criminal dejó al héroe de los Andes: política de mezquinos ideólogos mercantilistas, ajena a la causa de América y aferrada a intereses de campanario vinculados con el comercio europeo, que sería el comienzo de nuestro desprestigio continental.

* * *

En tanto se perdía irremisiblemente el Alto Perú, con su plata y su estaño, su Chuquisaca y su Potosí, y el invasor se eternizaba en la costa de enfrente, el hombre seguía muy campante en la aplicación de su plan. Ya había obtenido, con el tratado Cuadrilátero, el fracaso del congreso de Córdoba. El gobernador López de Santa Fe y el porteño Mansilla, alzado con la herencia de Ramírez, se han plegado a sus miras, rumiando sus respectivos intereses de campanario. Se da juego de mediocres. Ya convocará nuevamente a los pueblos Rivadavia, cuando la ocasión se presen-

te propicia para extender su "sistema" a toda la nación. Su sistema, que no es sino el Virreinato con otro nombre.

Los doctores rivadavianos suelen enumerar por materias sus famosas "reformas". Lo haríamos también si las creyéramos objeto digno de la historia; pero preferimos referirnos a ellas en síntesis, como producto de una política. La acción de Rivadavia estaba inspirada en dos ideas simples, pero aferradas a su cabeza como clavos: en materia internacional, provocar una Santa Alianza al revés, de las naciones liberales contra los absolutismos; en materia local, la paz a cualquier precio, la prosperidad y la civilización, entendidas a la manera de los "ilustrados" españoles, como un descastamiento a todo trapo. Había que cambiarlo todo, empezando por los habitantes. De aquí el diluvio de decretos que empieza a inflar el Registro oficial, con copiosos considerandos de su exclusiva inspiración. A las clasificaciones corrientes, oponemos otra, más científica por más realista. Sus reformas pueden dividirse entre las que eran necesarias (y obvias); las que eran innecesarias y aun decididamente perjudiciales, y las quimericas, que quedarían en el papel.

Es evidente —y así lo juzgaron todos sus contemporáneos sin excepción— que don Bernardino carecía en alto grado del sentido de la realidad, que es lo peor que le puede ocurrir a un político. Su fe en la Santa Alianza liberal se exaltaba en momentos en que esa posibilidad se eclipsaba por largo tiempo en Europa. Con el mismo acierto, creía poder aplicar al Buenos Aires pastoril instituciones sólo adecuadas a Noruega y Suiza. Sus apologistas zanján la cuestión calificándolo de visionario y afirmando que se adelantaba a su tiempo. Si lo primero consistió en prever que la aldea de entonces progresaría, compartía la cualidad con todos sus contemporáneos. En cuanto a lo segundo, la verdad es que más bien atrasaba. Se mantenía aferrado al regalismo borbónico de Floridablanca y el conde de Aranda, al progresismo ingenuo de medio siglo atrás, cuando la receta hacía tiempo que había pasado de moda en Europa, en plena reacción ultramontana después de Chateaubriand, Bonald y Maistre. Y con tan poco acierto y oportunidad y tanto apego a la letra, que se exponía a perder el gobierno por copiar disposiciones que tuvieron alguna justificación en España, con clero regular excesivo en número y poderoso en influencia, pero que aquí no la tenían de ningún modo. Los clérigos regulares afectados por la reforma que emprendió, ¡no pasaban de ciento ochenta!... Cantidad ínfima para una población de 150.000 habitantes, que adoleció siempre de escasez de clero. Pero naturalmente, era una exigencia de las "luces". Había que hacer una reforma eclesiástica, aunque fuera inútil, porque ello correspondía a la modernidad un tanto anacrónica de ese visionario del pasado que fue Rivadavia.

Es incuestionable que fomentó el progreso y las industrias y que movilizó la riqueza, para lo cual era necesario reorganizar la administración y las finanzas. Tuvo para ello un excelente colaborador en el doctor Manuel J. García, a cuya acción se debe la creación de la primera institución de crédito y los primeros presupuestos ordenados. Pero fue también García el ministro que contrató, para remediar la escasez de metálico y sin ninguna necesidad urgente, el empréstito de Baring, de un millón de libras esterlinas valor nominal, de las que sólo se recibieron 560.000 en letras y que se terminaría de pagar en 1904, "después de haberse abonado —dice un autor— ocho veces el importe recibido". El cumplimiento se garantizó con hipoteca de todas las tierras del Estado: tal es el origen de la famosa *enfiteusis*, reforma económico-social que enmascara un simple expediente para movilizar el valor de bienes públicos inenajenables.

¿Y qué decir de la concesión a la Casa Hullet Bross & Co. de la explotación del mineral de Famatina sin tener jurisdicción sobre las minas de La Rioja? ¿Y de la constitución posterior en Londres de la River Plate Mining Association, de la que participaría más tarde Rivadavia como accionista y director, a pesar de que los bienes de referencia estaban ya concedidos, por el gobierno de la provincia en que se hallaban situados, a una compañía criolla? Eso era para él la civilización: hacer negocios con europeos y mejor si eran ingleses. Endeudarse con ellos y traer gringos a trabajar aquí, con privilegios que nunca se concederían al compatriota desheredado, a quien se imponía —otro decreto— la papeleta de conchavo, sin cuya obtención podía ser apresado por vago y mandado a un contingente de la frontera.

* * *

Nadie ha caracterizado mejor este período que don Vicente López, el ilustre autor del Himno, en carta a un corresponsal no menos ilustre, el general San Martín, quien la respondería manifestando su conformidad con el juicio. Según López, Rivadavia representaba la contrarrevolución, por subordinar los dictados del patriotismo a los del interés, por erigir en principios supremos "la habilidad y la riqueza".

Era la contrarrevolución, en efecto, en el sentido de que venía a restablecer el colonialismo con otras palabras y una nueva metrópoli. Para ello tenía que destruir todos los restos del viejo espíritu revolucionario, empezando por el Cabildo, siguiendo con las provincias y terminando con el ejército para el que dictó una "reforma" que era un verdadero desarme y una "ley de premios"

que significaba un verdadero soborno. Véase lo que decía el rivadaviano Ignacio Núñez, en un informe escrito para el cónsul Woodbine Parish, refiriéndose a dichos premios: que se trataba "de dedicar a la industria esos brazos con regulares 'capitales' ". Por lo cual —agregaba no sin un dejo de satisfacción— "el espíritu militar ha decaído". ¡Eso era lo que se buscaba, en momentos en que la guerra del norte seguía en pie, la Banda Oriental se hallaba ocupada por el enemigo y la indiada salvaje llegaba con sus malos hasta la puerta misma de las ciudades!...

¿Maldad diabólica? No, por cierto. Nada más que mediocridad. El hombre de las "luces" carecía de ellas y el "visionario" no veía más allá de sus narices. No era más que un hombre común, ambicioso por resentimiento y sin grandes resortes morales, aferrado a una cartilla que aplicaba sin tino; un buen hombre, en suma, horro de imaginación y de grandeza. Esa mediocridad se muestra en su fe ingenua en las virtudes de la legislación, que pertenece al orden de las supersticiones vulgares; y en la persecución de la prosperidad a costa de la independencia, sin advertir que se hace entonces ilusoria y efímera. ¿Ateo, masón, hereje? Tampoco. No era más que un regalista a la española, es decir, un beato que quiere ser más papista que el Papa y se enoja con el cura porque no cumple como él cree que debe cumplir. Esta clase de hombres, cuando tiene poder, se empeña —con un exceso de celo que hace disculpar la falta de doctrina— en que el cura ande derecho. Esta beatería era el regalismo de don Bernardino Rivadavia, quien por lo demás conservaba todas las creencias y aun las supersticiones del labriego de Galicia y no podía prescindir de andar rodeado de sotanas, que le aseguraban en cada caso concreto el consejo y la absolución. Ni de figurar —por supuesto que en sitial reservado— en las ceremonias prescriptas por la Iglesia y aun las de mera devoción, como sermones y procesiones, por la necesidad de dar el buen ejemplo.

Su pensamiento no era más que la caricatura del espíritu vigente en la burguesía europea surgida de la revolución y del desarrollo industrial, y debía encontrar un eco simpático en los sectores mercantiles de Buenos Aires después de los pavores de la guerra civil. Lo malo es que nosotros no estábamos todavía —como lo estaba Europa— en la etapa del lucro tranquilo, sino en una lucha trágica por la existencia y la libertad, y que todo lo que fuera distraernos de la tarea urgente y grave equivalía a una traición. Y no pudo hacerse sin que dejáramos jirones de la patria en el camino. Esta es la tremenda responsabilidad histórica de Rivadavia. Su predominio en una hora crucial significó una verdadera desventura. Era hora de guerra, y nos dio paz sin honor. Era hora de luchar por la integridad y la grandeza, y nos dio pros-

peridad ficticia con endeudamiento a prestamistas extranjeros. Era la hora de la patria, y nos hizo la doctrina de la civilización intemporal. Nos prometió con ello inmensos bienes, y nos lanzó a un mar de sangre, agitado por la más furiosa discordia.

* * *

El propósito de Rivadavia al frustrar la realización del Congreso de Córdoba había sido claro. Consistía en continuar con la propagación de su sistema a favor de los grandes recursos de que disponía Buenos Aires y convocar oportunamente en esta ciudad otro congreso que le fuera adicto. No aspiraba a nada menos que a transformar todo el país. Su prensa periódica —sobre todo el "Argos", en el que dragoneaban los Varela— mostraba claramente esa intención, sobre todo en sus desplantes habituales contra los caudillos, tildados de anarquistas, ignorantes y bárbaros. Según ese grupo, la eliminación de tal pseudo-federalismo, constituido por titulados defensores del pueblo que en realidad lo oprimían, era una condición del progreso, a fin de que pudiera hacerse efectiva bajo mejores auspicios la organización del Estado nacional.

La propaganda no dejaba de ser seductora, pues la verdad es que Buenos Aires se enriquecía y progresaba. La paz y el aumento del comercio habían traído una evidente prosperidad. Esta dejaba naturalmente márgenes para emplear en lujo y actividades placenteras, con el consiguiente aumento de las manifestaciones culturales. Se importaban y se compraban más que nunca libros y adornos; las tertulias y saraos eran más animados y frecuentes; se respiraba en todas partes cierta atmósfera de seguridad y de confianza en el futuro.

La prosperidad se fundaba, por cierto, en la riqueza natural de los campos porteños, el trabajo de los hacendados y labradores y las circunstancias favorables del intercambio por la paz europea, sin deberle al gobierno otra cosa que un cierto orden en la administración. Pero Rivadavia —que expedía decreto tras decreto, en un afán reformista incontenible— la atribuía a las virtudes taumatúrgicas de su sistema, y a muchos convencía.

Convencía sobre todo a la nueva generación porteña, que salía entonces de las aulas del Colegio, sugestionada con la civilización ultramarina, y que veía en él al hombre que había estado allá, en el centro de las ideas luminosas y nuevas y de todos los esplendores. Buenos Aires se sentía rica, feliz y predestinada, y su poeta más representativo entonaba el himno del patriotismo local:

*Buenos Aires es patria de libres
y tal gloria le dieron los hechos;
de los hombres que tienen derechos
Buenos Aires es patria común. . .*

Vuelto de espaldas al vasto interior, empobrecido y rencoroso, el joven Juan Cruz Varela tendía luego su mano al mundo:

*Entre tanto a las otras naciones
el honor de la nuestra arrebató,
y a los hijos del Río de la Plata
ya se brindan en dulce amistad
y sus naves surcando las ondas
del abismo salado y profundo
abandonan las playas de un mundo
por buscar en el otro igualdad.*

La consigna de Rivadavia era la paz a toda costa. Por eso intervenía con su consejo ante el gobernador de Entre Ríos para que conviniera con el barón de la Laguna un pacto de no agresión; y luego entre Mansilla y López cuando —ante las repetidas solicitudes del Cabildo de Montevideo— el caudillo santafesino se salía de la vaina por iniciar las hostilidades. La situación era propicia por la división del enemigo entre portugueses y brasileños, dispuestos a irse a las manos. A Rivadavia no se le ocurrió nada mejor que mandar al general Soler ¡como mediador para reconciliarlos! . . . Sea como fuere, la situación de la Banda Oriental era para las provincias litorales una herida siempre abierta, origen permanente de convulsiones; pero si López solía mostrarse discoloso, el “porteño” Mansilla había sido ganado por su ilustre comprovinciano que mandaba en la capital.

* * *

No obstante la prosperidad económica y las medidas conciliatorias con que el gobierno del general Martín Rodríguez había tratado de ganarse a la oposición interna, la situación política distaba mucho de la calma idílica. Bajo la tranquilidad aparente se incubaban catástrofes, que el visionario Rivadavia ni sospechaba. Se había dictado la Ley del Olvido, a cuyo amparo regresaron al país casi todos los desterrados hasta ese momento por razones políticas, entre ellos Alvear y Dorrego. Para ganarse al primero —y de paso alejarlo— el gobierno lo había nombrado embajador

en los Estados Unidos. Pero la cuestión oriental, la errada política con España y sobre todo las medidas de persecución religiosa —desde la secularización de cementerios hasta la reforma del clero regular— provocaban resistencias que se traducían en un estado permanente de conspiración. La atizaba el periodismo adverso al gobierno, sobre todo las hojas que lanzaba en profusión el esforzado y pintoresco fray Francisco de Paula Castañeda, prototipo de periodista caudaloso y temperamental, más rico de pasión que de ingenio y buen gusto, pero eficaz en el dictionario y en la sal gruesa adecuada al paladar común y que al cabo hubo de ser desterrado de la capital.

El 19 de marzo de 1823 estalló la revolución que se llamó de los Apostólicos y cuyo jefe era nada menos que el doctor Gregorio Tagle, ex ministro de Pueyrredón. Prevenido el gobierno por una delación, logró sofocarla al cabo de un corto combate en plena plaza. Rivadavia tuvo una nueva ocasión de mostrar su mano dura. Los principales cabecillas, Benito Peralta y José María Urien, fueron fusilados. Tagle, también condenado a muerte, pudo escapar ayudado por Dorrego, a quien Rivadavia, con el propósito de comprometerlo, había designado jefe de la represión.

La actividad diplomática de este período no se limitó al envío de Alvear a Estados Unidos, visita de mero cumplimiento, sin otro objeto que estrechar vínculos. Esta nación había resuelto reconocer la independencia de los países segregados de España. Ello constituía una respuesta a la política de la Santa Alianza, que acababa de decretar la intervención en España, y a las aspiraciones concordantes de Rusia y Francia sobre el Nuevo Mundo, que darán origen a la declaración de Monroe. La misma política provocaría poco después análoga decisión por parte de Inglaterra. A fines de 1823 llegó el primer plenipotenciario norteamericano, que fue don César Rodney, quien ya nos había visitado en 1818 y fue recibido con grandes agasajos. Al mes, pisándole los talones, aparecía don Woodbine Parish, cónsul general de S.M.B.

XI. LAS HERAS Y EL CONGRESO DE 1825. LA BANDA ORIENTAL

Rivadavia aspiraba a suceder al general don Martín Rodríguez en el gobierno, a la expiración de su período. Pero los resquemores ocasionados por la política religiosa y la conjuración de Tagle, así como sus negociaciones con España, le enajenaron la opinión de la Junta de representantes de la provincia. Fue designado el general don Juan Gregorio de Las Heras, compañero de San Martín y Bolívar, héroe de Talcahuano y Cancha Rayada.

Las Heras se hizo cargo del gobierno el 9 de marzo de 1824 y confirmó el gabinete de su antecesor. Pero Rivadavia no aceptó continuar en el mismo cargo, con un gobernador a todas luces menos dócil y animado por otro espíritu; renunció y pidió ser nombrado para una comisión en Europa (¡naturalmente!), obtenida la cual se embarcó con destino a Londres, en calidad de encargado de negocios.

El doctor Manuel J. García acumularía las carteras de Gobierno y Relaciones Exteriores a la de Hacienda que ya desempeñaba.

No obstante los síntomas de continuidad, la acción del nuevo gobernante se hizo sentir en seguida favorablemente en materia militar y de defensa de la frontera, con diversas providencias que modificaban la incuria rivadaviana. Ante los triunfos de Bolívar en el norte, corrigióse también la política de aislamiento continental del gobierno anterior y se nombró ministro plenipotenciario en Colombia al general Alvear, ya de vuelta de su misión en Estados Unidos; y en el Perú, al general Alvarez Thomas.

* * *

Durante los primeros meses del gobierno de Las Heras empezaron a llegar a Buenos Aires los diputados al Congreso Constituyente convocado por su predecesor y en cuya formación había colaborado Rivadavia, mediante sucesivas misiones a cargo del deán Zabaleta y el mismo Las Heras. Venían entre ellos muchos personajes que habían actuado en los congresos anteriores y en los primeros gobiernos patrios, por lo que sumaban un gran cau-

dal de experiencia. Así el viejo doctor don Juan José Paso, crítico agudo de todos los regímenes, bajo los que mantenía una actitud disidente que lo habilitaba para integrar el sucesor; el deán Funes, también maduro, que encarnaba el espíritu del claustro cordobés y la actitud recelosa de la cultura provinciana frente a los avances porteños, y el doctor Juan Ignacio de Gorriti, docto en cánones y teología. Figuraban asimismo los clérigos rivadavianos doctor Julián Segundo de Agüero y don Valentín Gómez (quienes "desde su juventud —según afirma Vicente Fidel López— habían abandonado la ropa talar y el servicio de los altares": lo que no era óbice para que desempeñaran las funciones burocráticas de cura de San Nicolás y canónigo de la Catedral, respectivamente), Laprida, Frías, Castro, Heredia, Castellanos, Cruz y el joven Vélez Sársfield.

El Congreso inició sus sesiones a principios del año 1825. Desde los primeros momentos se manifestaron en su seno las tendencias que luego se enfrentarían. La tarea a que debió abocarse de entrada fue la de definir sus finalidades y reglamentar las relaciones interprovinciales y las de las provincias con la autoridad nacional naciente. Tal fue el objeto de la Ley Fundamental sancionada el 22 de enero, en la que se establecía la intención de constituir el país, para el que se adoptaba la designación de Provincias Unidas del Río de la Plata; se asumía la función legislativa nacional como atributo de la soberanía, si bien las provincias debían continuar rigiéndose por sus propias instituciones; se declaraba que la Constitución que habría de dictarse se sometería a la aprobación de aquéllas, y se delegaban en el gobierno de Buenos Aires las funciones del Ejecutivo nacional.

Durante el curso del debate de esta ley, la desconfianza hacia la absorción porteña se expresó por boca de Gorriti y Mena, mientras que en las palabras de Agüero asomaban los propósitos unitarios en frases como las siguientes: "Los pueblos no saben a veces lo que les conviene"... "La provincia de Buenos Aires se ha ilustrado más de lo que era de esperar en los *verdaderos principios* de la ciencia social". Con ellas anticipaba el ideólogo rivadaviano, el hombre de los principios y de las luces, la intención iluminista de poner a los que no sabían bajo el yugo de los que sabían y que se expresaría pronto en la fórmula lapidaria de "hacer la unidad a palos".

Las circunstancias del país no permitirían la legislación tranquila y académica, porque la cuestión de la Banda Oriental haría crisis a poco de reunirse el Congreso.

Iban a cumplirse pronto diez años de la ocupación de la Provincia Oriental por el enemigo y no había decaído el espíritu de desquite, no obstante la política entregadora de los sucesivos go-

biernos de Buenos Aires, que había llegado a su colmo bajo Rivadavia y que tenía su símbolo en el ministro García. Rivadavia había frustrado la oportunidad histórica ofrecida dos años atrás, refrenando a López cuando, a raíz de la independencia brasileña, el Cabildo de Montevideo y el mismo general portugués de Costa clamaban por su intervención y el reintegro a la unidad. El Imperio había respondido a la incuria porteña con el acto provocativo de hacer jurar en todo el territorio de la Banda Oriental su nueva Constitución y de convocar a elecciones de diputados. El abandono en que se los dejaba produjo en los orientales un gran desaliento y la aceptación resignada de la dominación portuguesa por parte de muchos patriotas, incluso caudillos artiguistas como Fructuoso Rivera.

Pero el partido patriótico no cejaba en la capital. Acallado mucho tiempo con argumentos de oportunidad, se alzó nuevamente ante la injuria que la actitud brasileña implicaba y consideró que la situación era ya intolerable. La exaltación se agudizó con la noticia del triunfo de Ayacucho, ocurrido en diciembre del año anterior y que llegó a Buenos Aires a mediados de febrero. El enemigo español había sido definitivamente abatido. En medio del regocijo y los festejos que provocó esa felicísima nueva, se irguió la voluntad de rescate que no había dejado nunca de existir en el pueblo, no obstante el auge del pacifismo vergonzoso de los gobiernos. Había desaparecido por lo demás el socorrido pretexto para la inacción, que era la imposibilidad de llevar adelante la guerra en dos frentes: el cual, si pudo ser legítimo bajo Pueyrredón, que daba todo su apoyo a la campaña de los Andes, bajo Rivadavia sólo había servido para no pelear ni en uno ni en otro.

El coronel Dorrego, en "El Argentino", se había hecho el intérprete de esa voluntad. "Los vencedores de Ayacucho —escribía— están ya sobre el Desaguadero. ¡Que no vengan para arrojar también a los portugueses! Hagan las provincias del Río de la Plata lo que deben. Apresúrense a libertar su territorio de todo poder extranjero. Lo han jurado. . . No aguardemos más; ármense nuestras fuerzas contra los brasileños y su Imperio; marchen a arrancarles la presa; y que el 25 de mayo de 1826 se cante el himno patrio sobre las murallas de Montevideo".

El gobierno del general Las Heras no cedía a estas solicitudes. Estaba paralizado por los consejos de García, que no quería complicar los problemas de la organización con la incorporación de una provincia de gauchos díscolos que sólo iría a ocasionar trastornos. Muy oportunamente, en medio de la agitación y mientras se daba largas al asunto de la guerra, el Congreso Constituyente se abocaba al estudio del primer Tratado de Paz, Comer-

cio y Amistad, firmado en el mes de febrero entre sir Woodbine Parish, plenipotenciario de Gran Bretaña, y el ministro García, que implicaba el reconocimiento de nuestra independencia. En él se convenía la libertad de comercio entre ambos países y diversas concesiones recíprocas, como el libre acceso de barcos, el establecimiento de depósitos y almacenes y la libertad de cultos. El tratado habría sido perfecto si a nuestra vez hubiéramos poseído barcos y la posibilidad de establecernos en Inglaterra, para edificar nuestros templos y proveernos de materias primas para nuestras industrias: de hecho, implicaba concesiones sin compensación. La cláusula sobre libertad de cultos provocaría violentas reacciones en el interior, donde sería objetada por el doctor Castro Barros, a cuya opinión se plegaría un caudillo que empezaba a surgir de Los Llanos de La Rioja y se llamaba don Juan Facundo Quiroga. El tratado se aprobó, no obstante, por gran mayoría.

Si se tiene en cuenta la permanente actitud inglesa con respecto a la Banda Oriental, no es aventurado atribuir la parálisis del gobierno de Las Heras en esos momentos frente al clamor popular —así como la misma permanencia de García a la cabeza de los negocios en todos los regímenes— a la acción de la potencia que con el tratado empezaba a intervenir ostensiblemente en nuestra política interna y externa.

* * *

Los sucesos habrían de precipitarse, escapando al control del gobierno.

El general don Juan Antonio Lavalleja, patriota emigrado, resolvió intentar la reconquista de la Banda Oriental sin otra ayuda que la del partido afín de Buenos Aires, representado por el núcleo federal, vinculado a López, de don Juan Manuel de Rosas y los Anchorena. Rosas había tenido ocasión de intervenir en las gestiones anteriores del Cabildo de Montevideo ante el caudillo santafesino que Rivadavia había hecho fracasar. En esta ocasión se dirigió nuevamente al litoral con el pretexto de comprar campos para poblar; visitó Santa Fe y Entre Ríos y de allí pasó a la Banda Oriental, aprovechando las circunstancias para hablar con los núcleos amigos y con personalidades de la provincia usurpada, entre ellos Fructuoso Rivera, y obtener su promesa de ayuda, así como para reconocer el terreno y ver el estado y número de las fuerzas enemigas. Gracias a esta acción preparatoria y con fondos recaudados por el mismo núcleo de hacendados patriotas, pudo realizarse la hazaña heroica de los treinta y tres orientales.

A mediados de abril, el general Lavalleja con treinta y dos

compañeros se embarcaron en San Isidro y llegaron a la costa oriental, donde empezaron a engrosar sus fuerzas desde el principio con el aporte entusiasta de la campaña. A poco se les agregaría Rivera. A partir de los primeros encuentros batieron a los destacamentos imperiales. El imperio se dispuso a repeler la agresión, que supuso fomentada por el gobierno de Buenos Aires.

La noticia cayó en la capital argentina como una bomba, provocando el entusiasmo popular y el estupor del gobierno, que veía comprometida excesivamente su causa política. Lavalleja comunicó al Congreso Constituyente la organización de su gobierno provisorio en la campaña. El agente diplomático del Imperio reclamó ante nuestra cancillería, cuya responsabilidad se apresuró a salvar el ministro García, deseando a toda costa mantener la paz. El Imperio mandó entonces tropas de refuerzo a la Banda Oriental y aprestó sus naves para ocupar el Río de la Plata, al mismo tiempo que invadía la provincia de Chiquitos en el Alto Perú, que había sido invitada a enviar sus diputados al Congreso. Ante esos preparativos militares, Las Heras mandó un ejército que llamó "de Observación" a la provincia de Entre Ríos, en previsión de un golpe de mano brasileño sobre esta provincia.

A la reclamación diplomática se seguiría la aparición del grueso de la escuadra imperial frente a Buenos Aires, al mando del almirante Ferreyra Lobo y en tren de reclamación intimidatoria. Ante la negativa a reconocerle personería diplomática, el jefe mencionado expresó que obedecía a órdenes directas del Emperador. García insistió sobre la no responsabilidad del gobierno argentino en una empresa "de particulares" como era la de Lavalleja y ofreció el envío de una misión a Río de Janeiro. Esta conducta del ministro, al negociar con un jefe de fuerzas armadas en actitud beligerante, llevó al colmo la indignación pública, al mismo tiempo que el entusiasmo patriótico se exaltaba con la noticia del triunfo que los orientales, ayudados por contingentes entrerrianos, habían obtenido en Rincón de las Gallinas. En esos momentos llegaba a Buenos Aires el agente especial con que el Imperio reemplazaba al almirante Ferreyra Lobo para proseguir sus reclamaciones. Una pueblada asaltó su casa, arrancó el escudo imperial que adornaba el frente de éste y lo pisoteó, en medio de las peores vociferaciones. El tumulto siguió en la plaza Mayor, con gritos contra el gobierno y su debilidad, calificada de traición.

Había llegado a ese grado la excitación pública cuando el Congreso de la Florida declaró, el 25 de agosto, que "el voto decidido y constante de la provincia oriental era por la unidad con las demás provincias argentinas a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce".

¿Qué recurso le quedaba al partido de la desintegración y la paz a toda costa? El principal argumento esgrimido por los principistas como García era, desde los tiempos del Protector, el supuesto separatismo de los orientales, que ahora resultaba desmentido por la declaración de La Florida. La dignidad más elemental no permitía ya otra cosa que sostener su causa. El 12 de octubre el general Lavalleja, al frente de dos mil hombres, derrotaba completamente en Sarandí, a 30 leguas de Montevideo, al ejército brasileño al mando del general Bentos Manuel. Pocos días después, el 24, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata dictó una ley estableciendo que "de conformidad con el voto uniforme de las provincias del Estado y con el que deliberadamente ha producido la Provincia Oriental por el órgano legítimo de sus representantes en la ley del 25 de agosto último, el Congreso General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, la reconoce incorporada de hecho a la República de las Provincias Unidas, a que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer".

El ministro García no tuvo más remedio que comunicar esta resolución al Emperador, con una nota en la que hacía presente la "moderación" del gobierno de Buenos Aires, ¡y a fe que no mentía! Agregaba que las fuerzas argentinas sólo atacarían para defenderse, "reduciendo sus pretensiones a conservar la integridad del territorio de las Provincias Unidas y a garantizar solemnemente para el futuro la inviolabilidad de sus límites contra la fuerza o la seducción". El Emperador respondió con la declaración de guerra.

XII. LA GUERRA CON BRASIL Y EL MANOTÓN UNITARIO

Bolívar dictaba su ley en el norte. Las tropas del mariscal de Ayacucho dominaban las provincias del Alto Perú. Era evidente que nuestro país, abocado a la necesidad de guerrear con el Brasil, debía contemporizar con la poderosa influencia del caudillo militar victorioso, poseído en esos momentos de su sueño grandioso de unión americana mediante el Congreso de Panamá. Así lo pensaban eminentes personalidades argentinas, como el deán Funes, Dorrego, Bustos y la mayor parte de los caudillos del interior; y acaso la adhesión sin reservas a dicha política nos hubiera dado la última oportunidad de salvar las provincias alto-peruanas en un régimen de confederación, aparte de una alianza poderosa en la guerra que teníamos pendiente.

Era el momento para un gran juego diplomático, confiados en nuestra posición y nuestros recursos. Y a fe que Bolívar entrevió esa posibilidad, al insinuarle al plenipotenciario Alvear el proyecto de una campaña fulminante contra el Brasil a través del territorio paraguayo. Pero nuestra diplomacia estaba en manos del ministro García, legista burócrata injertado en mercachifle porteño, que englobaba a Bolívar en la misma desconfianza que sentía por San Martín y por los caudillos del Interior —los hombres de tradición y de espada o lanza— y que en su fuero íntimo prefería mil veces la amistad con la corte “civilizada” de Río de Janeiro, contra la cual guerreaba por presión de las circunstancias y que era el puente con las cortes de Europa. Su opinión habría de prevalecer en la concertación del tratado con Colombia y en la actitud del Congreso con respecto a las provincias del Alto Perú, que serían abandonadas a su suerte.

El Congreso “invitó”, en efecto, a dichas provincias a concurrir con diputados a su seno, pero dejándolas en libertad, sin ninguna clase de reservas, para decidir sobre su destino, no obstante hallarse bajo un régimen de ocupación militar, lo cual significaba autorizar lisa y llanamente su segregación. Ya hemos insinuado la posibilidad de una maniobra inglesa en el sentido de obtenerla y ejecutada por medio de sus agentes secretos, a la cual habrían sido dóciles los mismos hombres que facilitaban la segregación oriental. Lo cierto es que en la correspondencia de esa

época del Libertador Bolívar se advierte el estupor que le ha producido la actitud excesivamente condescendiente de Buenos Aires. La consecuencia no se haría esperar con la proclamación de la república de Bolivia. Una hábil gestión de nuestro enviado, el general Alvear —a quien se había unido Alvarez Thomas como plenipotenciario en el Perú— lograría salvar momentáneamente para nuestro territorio la provincia de Tarija.

El mismo espíritu de frío desapego con respecto a la causa general de América —sensible sobre todo en los discursos de García y Agüero— se exhibiría en la discusión sobre el envío de plenipotenciarios al Congreso de Panamá, que se efectuaría poco después. Evidentemente, ninguno ve las posibilidades que ese organismo puede ofrecer para la solución de los problemas americanos, incluso como una instancia para nuestras reclamaciones territoriales: la iniciativa bolivariana se acepta con una mera cortesía llena de reservas. Los doctores de Buenos Aires —clérigos, abogados y tenderos— sólo piensan en Europa y sólo creen en lo que puede venir de Europa. Sobre el recinto planea el espíritu de Rivadavia, que ha regresado de su misión y prepara el zarpazo.

El Congreso dictó, para hacer frente a la guerra, una ley de creación del ejército nacional sobre la base proporcional de los contingentes provinciales. Debíamos improvisar rápidamente ejército y escuadra. La incuria rivadaviana nos había dejado desarmados, por lo cual hubimos de reducir las primeras operaciones a la mera defensa.

Se reforzó el Ejército de observación situado en las márgenes del río Uruguay, que se puso a las órdenes del general don Martín Rodríguez, y se improvisó rápidamente una escuadrilla, cuyo mando se confió al almirante Brown. La entrada del Paraná se protegió con baterías, y la defensa del sur se encomendó al coronel don Juan Manuel de Rosas, pues se tenían noticias de que los brasileños preparaban desembarcos en esas costas para sublevar a los indios. Con hábiles parlamentos, Rosas consiguió la adhesión o la neutralidad de las principales tribus y se ocupó de fortificar las costas, reforzando con sus milicianos y baterías los puntos posibles de arribada.

Los imperiales se habían apresurado a iniciar sus operaciones militares. Un ejército al mando del brigadier Bentos Manuel invadió las Misiones. La escuadra brasileña inició el 21 de diciembre el bloqueo de Buenos Aires, dispuesta a no dejar entrar “ni un pájaro” a nuestro puerto, según palabras de su almirante Ferreyra Lobo. El Ejército de observación no pasaba todavía el río a la espera de los contingentes provinciales. La situación no urgía, puesto que los patriotas orientales mantenían en jaque al

enemigo: el 31 de diciembre tomaban la fortaleza de Santa Teresa y el 9 de febrero de 1826, al mando del coronel don Manuel Oribe, triunfarían una vez más en Pantanoso. El mismo día, la escuadra del almirante Brown tuvo su primer encuentro con las naves bloqueadoras frente a la ciudad, de la cual rompería el cerco para bombardear la plaza de la Colonia. Pocos días después, con arrojo temerario, atacaría al abordaje los barcos enemigos de ese puerto, siendo rechazado con escasas pérdidas.

Mientras tanto, los imperiales habían intentado el proyecto desembarco en el sur, en un punto de la costa situado entre Bahía Blanca y Patagones, con un destacamento de 700 hombres. Resultó un completo fracaso. Se les opuso el vecindario armado, en número mucho menor, al mando del comandante Molina, antiguo soldado de los Andes, y del coronel Sosa, quienes los rechazaron con una estrategia peculiar, incendiando los campos y arrojándolos sobre los cangrejales. Los que se escaparon de la muerte fueron hechos prisioneros. La corbeta que los conducía fue asimismo capturada por un bergantín que patrullaba la costa, al mando del capitán don Juan B. Thorne.

Las provincias del interior habían concurrido esperanzadas al Congreso, habían aceptado la Ley Fundamental y esperaban el resultado de las deliberaciones. La guerra —guerra popular si las hubo— debía imponer una tregua a las actividades políticas: era necesaria la unión nacional y la paz interior. Así lo comprendió la oposición federal de la capital y de las provincias, que se congregó en torno al general Las Heras, encargado del Ejecutivo nacional, y prestó todo su apoyo a la preparación de los contingentes para el ejército en campaña.

En medio de la exaltación patriótica del pueblo, sólo un grupo de hombres permanecía frío y cauteloso: el grupo para quien aquella no era su guerra, pues habían sido arrastrados a hacerla por las circunstancias y la opinión pública y no esperaban nada bueno de sus resultados. Mientras la nación se aprestaba a triunfar del enemigo y relegaba las cuestiones internas a un segundo plano, ellos concebían el propósito de aprovechar la ocasión para establecer definitivamente su predominio partidario. Ya habían realizado una primera maniobra para obtener una mayoría decisiva en el Congreso, duplicando el número de los representantes. Con ello se acentuaba la desproporción de fuerzas a favor del grupo unitario, que tenía su baluarte en la capital.

El pretexto de que las operaciones militares exigían un tesoro nacional y un mando unificado, sirvió para que se iniciara por dicho grupo una propaganda persistente a favor de la creación de un Ejecutivo nacional permanente. Ella impresionó al propio general Las Heras (por favorecer su deseo de asumir el mando en jefe del ejército de operaciones), decidiéndolo a presentar su renuncia, al mismo tiempo que se daba entrada en el Congreso a un proyecto concordante del diputado Bedoya. Después de algunos días de preparativos, que sirvieron al grupo unitario para asegurar su predominio, se votó el 1° de febrero de 1826 la Ley de Presidencia como concreción de aquel propósito y no obstante las atinadas objeciones de Funes y Gorriti, quienes alegaron que no podía crearse una nueva autoridad sin darle al mismo tiempo el instrumento jurídico que limitara sus atribuciones.

Acto continuo se designó para el cargo a don Bernardino Rivadavia.

Este tomó posesión el 8, con un discurso ampuloso en el que destilaba el zumo de su pensamiento en proposiciones como ésta: "El objeto de todos los estados de América es organizar los elementos sociales que ellos tienen, de manera que produzcan cada vez en menos tiempo el resultado mayor y mejor. Esto es lo que hay de verdad cuando se dice que se cría (¿crea?)". "Tenéis medios de constituir el país que representáis y... para ello bastan dos bases: la una que introduzca y sostenga la subordinación recíproca de las personas, y la otra que concilie todos los intereses y organice y active el movimiento de las cosas". Así hablaba Perogrullo, aunque con mejor estilo. Anunciaba además que los pueblos necesitaban "una cabeza" y que era preciso que la capital fuese "nacional".

De acuerdo con estas ideas, remitió al día siguiente un proyecto por el cual se declaraba a la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios capital de la República y se mandaba crear una provincia en el territorio restante. Este proyecto constituía una violación flagrante de la Ley Fundamental, que garantizaba la autonomía y la integridad de las provincias, por lo cual la protesta de Buenos Aires, encabezada por Las Heras, fue general y airada. No sólo la opinión federal, en la Junta de representantes y en la prensa, sino muchos elementos del antiguo partido directorial, manifestaron su violento desacuerdo, a lo que contestó el presidente decretando el cese de las funciones del gobierno de la provincia y la disolución de su legislatura.

Rivadavia había nombrado ministro de Gobierno al clérigo doctor Julián Segundo de Agüero; de Hacienda, al doctor Salvador María del Carril, y de Guerra y Marina al general don Carlos María de Alvear. La cartera de Relaciones Exteriores le fue ofrecida al doctor don Manuel J. García, quien la rechazó, parte por solidaridad con Las Heras y parte también, seguramente, por no sentirse de ningún modo apropiado para la guerra con el Brasil, sino para la paz. Se nombró al general Cruz. Alvear vaciló, según cuenta Iriarte, antes de aceptar, porque desconfiaba de Rivadavia y su partido; pero prevaleció su noble ambición y el ser más hombre de riesgo que de cálculo. Se puso en seguida a la obra de organizar los recursos militares.

La guerra sigue entre tanto exitosa en las aguas territoriales por la acción de la escuadra de Brown. Ahora es él quien bloquea la Colonia. Con una escuadrilla muy inferior en número, ataca y hostiga continuamente al enemigo, manteniendo expeditas las vías de comunicación entre Buenos Aires y el teatro de la guerra. A fines de mayo ataca la plaza de Montevideo, jaqueando a la escuadra de Ferreyra Lobo. Luego se repliega sobre Buenos Aires, ante un avance en masa de los barcos brasileños sobre la ciudad. En las balizas exteriores les hace frente y los obliga a retirarse después de un intenso cañoneo. Toma la ofensiva en varios días de violentos combates, en los Pozos, obligando al enemigo a retroceder con grandes pérdidas. En una de esas acciones se hunde la nave capitana. Pero el 30 de junio ha limpiado de enemigos el río. Simultáneamente, las tropas orientales derrotan a los brasileños en Belén y Cuareim, donde el general Fructuoso Rivera le impone un duro castigo al brigadier Bentos Manuel, dispersando sus fuerzas.

Mientras las armas de la patria se cubrían de gloria en el campo de batalla, el plan del grupo unitario se iba mostrando con toda claridad. A favor de la guerra, extendía sus tentáculos por todo el territorio. La ley de creación del Banco Nacional, sobre la base del fondo de la Caja de Descuentos, escondía en su articulado, mediante el privilegio de acuñar moneda, el manotón a las minas de La Rioja, concedidas por Rivadavia a la casa Hullet en perjuicio de sus concesionarios argentinos. Se imponía, además, el curso forzoso de sus billetes en todo el país. La ley de enfiteusis, que la seguiría, hipotecaba la tierra pública de todo el territorio a un empréstito extranjero, sustrayendo a las provincias una de sus principales riquezas.

El plan se había iniciado también en el orden militar. El general don Gregorio Aráoz de Lamadrid —otro espadón incontralado del tipo de Pagola y que, según Paz, nunca pasó del estado infantil—, enviado a remontar tropas en Tucumán para la guerra, se había alzado con el gobierno de la provincia mediante un motín y desde allí maniobraba a favor de los grupos unitarios del interior. El Congreso lo había desautorizado, pero eso no engañaba a nadie, y menos que a nadie a los gobernadores. Bustos le escribía a López: "Es preciso, compañero, que usted no se descuide, porque el presidente está echando hombres comprados por todas partes para que nos hagan revolución o para que nos quiten del medio... Esta provincia tal vez se separe del Congreso, y creo que sería mejor para organizarnos de otro modo más seguro, o que el Congreso salga de Buenos Aires". Ibarra, por su parte, afirmaba: "Esta provincia no reconoce al presidente, ni admite el Banco, ni las leyes que a este respecto ha dictado el Congreso: de esto está instruida la provincia de Entre Ríos y la de Córdoba, cuyo digno jefe está en perfecta consonancia". La política rivadaviana incubaba una guerra civil.

"Cuán fatal es la ilusión en que cae un legislador —había dicho el presidente Rivadavia en su discurso inaugural—, cuando pretende que sus talentos y voluntad pueden mudar la naturaleza de las cosas o suplir a ellas sancionando o decretando creaciones". No obstante esta inesperada confesión de realismo político, su presidencia parece, más todavía que su ministerio, la gesticulación de un sonámbulo. En guerra con un fuerte enemigo y con el interior que empieza a convulsionarse, él se ocupa ante todo de materias cuyo tratamiento habría exigido paz y amplitud de medios: crea cátedras de latín y un departamento de topografía, instituye premios a la virtud y decreta el establecimiento de escuelas que quedarán como mera aspiración, pues no existen para ellas maestros, ni siquiera alumnos. Con fe supersticiosa en la bondad de los principios y una total imprevisión de lo que habrá de ocurrir, apura al Congreso para que dicte la Constitución. Necesita extender a todo el país los beneficios de su sistema, según lo ha convenido con sus consejeros comerciales de Londres.

En las consultas previamente realizadas, se habían pronunciado seis provincias (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza) por el régimen de federación y cuatro (Tucumán, Salta, Jujuy y La Rioja) por el de unidad. Las restantes (Corrientes, Misiones, Montevideo, Catamarca, San Luis

y Tarija) declararon que se inclinarían por el voto que diera el Congreso. La Junta de representantes de Buenos Aires había cesado antes de manifestar opinión. Es probable que hubiera predominado la federal, con el aporte de los directoriales disidentes. Todos los representantes de la provincia votarían no obstante por el unitarismo.

El Congreso había recibido el aporte de los nuevos diputados, entre los que se hallaban el doctor Manuel Moreno, por San Luis, y el coronel Dorrego, por Santiago del Estero, quienes junto con don Pedro Feliciano de Cavia, serían los campeones del federalismo. La opinión de la mayoría estaría principalmente a cargo de Agüero y Valentín Gómez.

Los debates se desarrollaron con elevación y altura, teñida a veces de pasión por ambas partes. Se agotó en ellos el tema institucional. La argumentación unitaria se centró sobre el supuesto de incapacidad de las provincias para regirse por sí mismas por la falta de ciudadanos capacitados para constituir los poderes (según lo demostró, en una interrupción cáustica, el diputado general Mansilla), y en el intento de disimular o reducir a minucia la diferencia entre ambos regímenes. La de los federales hizo hincapié en los sentimientos públicos de las provincias, que identificaban el federalismo con la libertad. El proyecto de la comisión redactora, que al final resultó aprobado, no era más que la reproducción modificada de la Constitución de 1819, en la que habían colaborado muchos de los congresistas. Tiene importancia la discusión que se trabó en lo referente a la extensión del sufragio, que el proyecto unitario limitaba a la clase propietaria, excluyendo a los "asalariados y jornaleros" que constituían la mayoría de la población y cuyos derechos defendió Dorrego. Triunfó la tesis oligárquica de los unitarios.

La Constitución se sancionó a fines de diciembre y se resolvió comunicarla a las provincias para su aprobación, según lo dispuesto por la Ley Fundamental.

Pero el interior estaba ya en plena rebelión. En la sesión del 9 de noviembre, Rivadavia había mandado a sus ministros a informar al Congreso de la situación y "de la incertidumbre en que se figuran las cosas por el espíritu de facción y maledicencia". El ministro Agüero toma la palabra y da cuenta de lo que sabe; señala como focos de perturbación a Córdoba y a La Rioja, cuyo gobernador ha invadido Catamarca y Tucumán y amenaza a Salta. El general don Juan Facundo Quiroga, en efecto, reaccionando contra la provocación unitaria de Lamadrid, lo ha derrotado en el Tala el 27 de octubre y domina todo el noroeste hasta Cuyo, después de haber tomado Tucumán el 27 de noviembre con la ayuda de Ibarra.

En opinión del ministro —que es la oficial de su partido— sólo ha de verse en dichos episodios la acción anárquica de caudillos que oprimen a muchedumbres bárbaras, todo lo cual habrá de resolverse con la adopción del régimen constitucional. Los federales alegan que se trata de la reacción legítima de "los pueblos" en defensa de sus derechos. Se discute durante varias sesiones, proponiéndose diversas medidas, desde el envío de una comisión pacificadora hasta la represión violenta. Por fin se resuelve fiarlo todo a la virtud del nuevo instrumento institucional. A los efectos de la consulta a las provincias, se designan comisionados: irán Gorriti a Córdoba, Zabaleta a Entre Ríos, Castellanos a La Rioja, Castro a Mendoza, Tezanos Pinto a Santiago del Estero, Vélez Sársfield a San Juan y Andrade a Santa Fe.

Resulta un fracaso completo. Todas las provincias rechazan la Constitución, con excepción de la Banda Oriental, teatro de la guerra. En algunos casos, como en Santiago del Estero, se le devuelve al comisionado la nota y el texto con la simple intimación de que abandone el territorio provincial. A principios de 1827 la autoridad del presidente es una autoridad fantasma en un país que le es totalmente adverso: sólo se la obedece dentro del perímetro de la ciudad. La provincia de Buenos Aires se halla asimismo en plena rebelión, pues a su decapitación política se ha agregado el proyecto de dividirla en dos, con los nombres de Paraná y Salado y sus capitales en San Nicolás y Chascomús. Sendos petitorios con centenares de firmas de ambas zonas afectadas se presentan a las autoridades solicitando el retiro del mensaje. Encabezan el movimiento don Nicolás de Anchorena y don Juan Manuel de Rosas.

* * *

Mientras tanto, se había producido la victoria de nuestras armas en la guerra del Brasil.

Durante la primera parte de la guerra —es decir, durante todo el año 26— la actuación en tierra había corrido por cuenta de las milicias orientales al mando de Lavalleja, quien no obstante sus victorias parciales, había eludido la acción decisiva contra el grueso del ejército imperial, fuerte de 11.000 hombres. Nuestro aporte había consistido principalmente en la acción de la escuadrilla de Brown. El general Alvear había debido ocuparse de formar un ejército sobre la base del de observación, que no alcanzaba a un millar de soldados. En pocos meses de trabajo intenso pudo reunir 5.500, la mayor parte reclutas de los contingentes provincianos y porteños que fue menester instruir y equipar. Es

de advertir que las provincias interiores se mostraron remisas en mandar aportes después de la calaverada de Lamadrid, por temor a que las armas de que se desprendían se volvieran contra ellas; lo cual contribuía a agravar los enconos y a que las acusaran de falta de patriotismo los propios agentes de la discordia.

El general Alvear abrió su campaña el 26 de diciembre de 1826 y situó su campamento en Arroyo Grande. Dividió su ejército en tres cuerpos, al mando respectivamente de los generales Lavalleja, Soler y él mismo, teniendo como segundo a Mansilla. Empezó a operar en seguida sobre las tropas enemigas que ocupaban gran parte de la provincia oriental al mando del marqués de Barbacena. Con hábiles maniobras fue estrechándolas. Los primeros encuentros parciales nos fueron favorables. Lavalleja derrotó a una división enemiga en Bagué el 17 de enero; y el 13 y 16 de febrero, el coronel don Juan Lavalle y el general don Lucio Mansilla derrotarían sucesivamente a las tropas imperiales en Bacacay y Ombú. Cuatro días después, el 20 de febrero, Alvear consideró llegado el momento de llevar a cabo una acción decisiva. Llevó al enemigo a una situación desfavorable que compensaría la desproporción de fuerzas; lo acosó con cargas oportunas en que nuestras tropas hicieron prodigios de valor y logró infligirles una derrota completa en Ituzaingó, apoderándose de todo su parque, varias banderas y gran cantidad de prisioneros.

Pocos días antes, el 9 de febrero, el almirante Brown había derrotado a la escuadra imperial en el Juncal.

El ejército imperial estaba deshecho, desmoralizado y en plena dispersión. Sólo había quedado en condiciones de combatir una división al mando de Bentos Manuel. Alvear mandó a su encuentro la columna del coronel don Angel Pacheco, quien lo derrotó y lo persiguió durante siete leguas. El general en jefe se movió luego con su ejército en dirección a Río Grande con la intención de ocupar la provincia. Pero para ello necesitaba refuerzos y caballadas y se apresuró a solicitarlos.

* * *

Esa página de gloria sería manchada por la mayor vergüenza que haya sufrido la nación. Los refuerzos no llegarían, Alvear no cosecharía los frutos de su victoria, la patria habría dado su esfuerzo y su sangre en vano, porque el gobierno de don Bernardino Rivadavia, en momentos en que nuestras armas triunfantes tenían el camino abierto hasta la capital del enemigo ¡pedía desesperadamente la paz! Y la pedía por la más miserable de las razones: para sofocar lo que él llamaba anarquía interna y dispo-

ner de las fuerzas del ejército nacional para lanzarlas contra sus compatriotas.

Las armas de la República estaban triunfantes por tierra y por agua después de Ituzaingó y Juncal. El interior se hallaba a la vez en pleno alzamiento contra la tentativa unitaria, sin excluir las provincias litorales, que habían dado todo su esfuerzo para la guerra. La única solución patriótica habría sido la renuncia del presidente, la disolución del Congreso y la formación de un gobierno que restableciera la unión nacional. Rivadavia y sus amigos prefirieron sacrificar los intereses nacionales a los intereses de su partido y entregarse al extranjero para volver las armas contra los compatriotas rebeldes. Desoyendo los reclamos del general en jefe y la opinión de patriotas como Pueyrredón, que juzgaba indecoroso iniciar gestiones de paz cuando se estaba en situación de imponer condiciones duras, el presidente decidió enviar a Río de Janeiro al doctor Manuel J. García, con instrucciones rigurosas de obtener, a cualquier precio, la terminación de la guerra.

Ya conocemos las opiniones del doctor García. No tuvo pues reparos en proponer de entrada, como fórmula conciliatoria, la independencia de la Banda Oriental, según sugerencias recibidas del ministro inglés Lord Ponsonby —elegido como mediador— quien perseguía la permanente intención de su nación de obtener un puerto franco en el Plata.

No obstante la situación apurada de su ejército el Emperador no accedió. Estaba bien enterado de lo que ocurría en Buenos Aires y acababa de declarar, por lo demás, solemnemente, que no dejaría las armas hasta obtener la reincorporación de la provincia Cisplatina. ¿Qué iba a hacer García ante esta actitud irreductible, sobre todo cuando de Buenos Aires se lo apuraba y cuando la solución coincidía con sus propias convicciones? Se le había dicho que hiciera la paz "a cualquier precio". Firmó, por consiguiente, una convención preliminar por la cual nuestro país reconocía los derechos del Emperador a la Banda Oriental y aceptaba la reincorporación al Imperio de la Provincia Cisplatina. Vencedores en la guerra, admitíamos una paz de derrota.

Felizmente, la reacción del espíritu público fue violenta y unánime. Apenas conocidos los términos del convenio, el pueblo se lanzó a la calle en tumulto. La oposición periodística fue general y airada. El gobierno no podía ya resistir, estaba muerto. Rivadavia declaró que su enviado se había excedido en el cumplimiento de su misión; pero sus diputados provocaron sospechosamente un tumulto en el Congreso para evitar la discusión del asunto y que salieran a luz las instrucciones reservadas.

El presidente mandó al Congreso su renuncia, que le fue inmediatamente aceptada. En dicho documento se atribuía todo el honor de la victoria obtenida por las armas ("he dado días de gloria a la patria") e instituía en "chivo emisario" de las iras populares al ministro García. Esto no engañó a sus contemporáneos, ni siquiera a los de su propio partido, que le hicieron un vacío inmediato.

La caída de Rivadavia dejaba el campo abierto a sus opositores. Se había hecho conciencia general de la necesidad de la reconciliación nacional para dar fin a la guerra; para lo cual había que retrotraer la situación a las instituciones que existían antes del manotón unitario. El Congreso eligió un presidente provisional en la persona de don Vicente López, que era uno de los pocos hombres de su partido que se había resistido a acompañar la aventura rivadaviana. López designó a Rosas comandante general de la campaña. En el plazo de un mes convocó a elección de representantes a la Legislatura de Buenos Aires, resultando una gran mayoría federal. Fue electo gobernador el coronel don Manuel Dorrego.

XIII. DORREGO Y LAVALLE

Con el nombramiento de Dorrego como gobernador, se restablecía el régimen de autonomías provinciales teóricamente destruido por la Ley de Presidencia y demás conatos centralizadores del disuelto Congreso. Por lo cual resurgía la confianza en el interior y se volvía a afirmar la unión nacional que el zarpazo unitario había puesto en peligro.

Todas las provincias se aprestan para la continuación de la guerra. Las de Cuyo —unidas por el tratado de Huanacache— establecen relaciones con los otros estados federales. Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, a su vez, pactan entre sí y con la capital. Bustos mantiene una relación cordial con el noroeste, dominado por Quiroga e Ibarra, quienes acaban de derrotar definitivamente a Lamadrid en el Rincón (julio de 1827), obligándolo a huir a Bolivia; y con el gobernador de Buenos Aires, en quien todos delegan la conducción de las relaciones exteriores y de la guerra.

El pensamiento común que inspira los pactos es la necesidad de la unión y de la victoria. Para ello se considera indispensable apurar la organización del país, mediante la instalación de un nuevo Congreso que habrá de reunirse en Santa Fe. Se apresura la elección de diputados. Las justas aspiraciones a la hegemonía que alienta en esos momentos Bustos (por su condición de cabeza indiscutida del federalismo en el interior) ceden ante las exigencias de la causa nacional, que impone la solución previa de la lucha pendiente.

El coronel Dorrego se encontraba ante una situación llena de peligros y dificultades en la capital, no obstante ese auspicioso panorama interno. Por lo pronto, con las arcas exhaustas. La administración rivadaviana había sido ruinosa y había agotado los recursos del Estado en gastos de mero boato y de financiación de empresas quiméricas, o para combatir a sus enemigos políticos. Así lo comprobó el doctor don Tomás de Anchorena, ministro de don Vicente López, en su renuncia; y fue esa circunstancia la que determinó al presidente interino a apurar los trámites para delegar el poder. El ejército de la Banda Oriental se hallaba impago y empezaba a sentirse en su seno la anarquía provocada por la repercusión de los sucesos políticos y por la rivalidad en esa provincia de las facciones internas, encabezadas

por Lavalleja y Rivera. En la política internacional se hacía sentir la acción del plenipotenciario inglés, empeñado en liquidar la situación bélica desfavorable para los intereses de su comercio, por lo cual intrigaba en Río, en Buenos Aires y en la convulsinada provincia oriental. Su empeño tendía a proseguir las gestiones para las que había aceptado mediar, desde el punto en que las había dejado el ministro García.

Dorrego no se oponía a la paz, pero consideraba que debía pactarse sobre la base de la restitución del Estado oriental. Se negaba a cualquier solución transaccional en momentos en que nuestras armas estaban victoriosas en todos los frentes. No obstante la situación del ejército y del tesoro, se dispuso a continuar la guerra, hasta dar al enemigo un golpe decisivo que lo obligara a someterse.

El general Alvear había regresado a Buenos Aires, delegando el mando de las fuerzas. Dorrego nombró en su reemplazo a Lavalleja, que era el indicado por su situación política, si no por sus dotes militares. Las acciones parciales seguían favorables a nuestras armas. Entre fines de 1827 y comienzos de 1828, el enemigo fue derrotado en Las Piedras, Yaguarón, Cerro de María, Pintos (donde el general argentino Martínez hizo prisionero al brigadier brasileño Yucas Teodoro), San Miguel, Potreros y Laguna Merim. La escuadra de Brown triunfaba por su parte en San Blas, Colonia, Las Cañas, Bocas del Salado y Ensenada.

El interior se movilizaba entre tanto. Bustos mandaba un regimiento de 650 plazas y 300 reclutas. En Cuyo se ponían en marcha 1.100 voluntarios. Quiroga anunciaba una división de 700 hombres, a cuyo frente vendría él mismo. El gobernador López, de Santa Fe, obedeciendo órdenes de Buenos Aires, se aprestaba a invadir el Brasil por el norte para atacar Puerto Alegre.

El partido unitario había sido derrotado en todo el territorio, y el federalismo se hallaba triunfante en las provincias, que ajustaban sus vínculos en la voluntad común y de unión y se disponían a colaborar en la empresa nacional contra el enemigo histórico. El nuevo congreso se preparaba con gran optimismo, no obstante el estado de guerra y las dificultades del erario público.

Este optimismo y la confianza de Dorrego en sus fuerzas, por el apoyo de la opinión pública, explican la moderación con que se desarrolló su gobierno. Por primera vez en la historia de nuestras discordias civiles, no se inician persecuciones, no se aprisiona ni se destierra a los adversarios, ni se suprime la libertad de prensa. La facción derrotada, no obstante sus terribles culpas, queda libre para desahogar su despecho y su encono en la prensa y en las calles, y por cierto que usa y abusa de su libertad. Nadie la amenaza ni la persigue. El gobernador, que ha sufrido prisiones

y destierros en su carrera de opositor y conspirador, tiene a gala no incurrir en las faltas de quienes a él lo persiguieron, y se resiste a convertirse en opresor de sus compatriotas reproduciendo los procesos de "facción" o "alta traición" de las reacciones de 1815 y 1820.

Influye en su ánimo no sólo la conciencia de su poder, sino también su leberalismo principista y su innata y proverbial generosidad. Es un valiente; su carrera militar lo ha llenado de gloria; su arrojo y su golpe de vista de guerrero nato decidieron las victorias de Tucumán y Salta. Como tal, es noble, impermeable al odio, fácil para el perdón y se halla siempre dispuesto a tenderle la mano al compatriota en desgracia, así sea el peccador de sus enemigos. Pocos años antes lo ha salvado de la muerte a Tagle, ex ministro de Pueyrredón que había firmado su sentencia de destierro; y antes de subir al gobierno, jefe aclamado de la oposición, cuando la turba desatada por los unitarios amenazaba con asaltar la casa del doctor García, "chivo emisario" de las culpas del régimen, ha acudido a ampararlo con su presencia prestigiosa. Tal es el coronel Dorrego, compendio de las más nobles cualidades de la raza; y esa modalidad le gana afectos entrañables, apenas contrarrestados por los rasguños que a veces causa su gracejo verbal en reputaciones dudosas, mantenidas a fuerza de almidón y ceño y que desafían su innata propensión porteña al "titeo". Habría sido el hombre para no tener enemigos, si esa misma calidad moral no provocara siempre, naturalmente, por la sola virtud de su evidencia, oscuros resentimientos que sólo esperan la oportunidad para estallar, lo que suele ocurrir de modo casual e imprevisible.

Y no es que le faltaran solicitudes para proceder con dureza. El gobernador Bustos le había oficiado para que iniciara procesos a los hombres del régimen caído, previniéndole que se cuidara especialmente de don Valentín Gómez y del general Alvear (y por cierto que el hallazgo de estas notas después de la tragedia de Navarro se invocaría como una justificación); y su mismo ministro don Manuel Moreno —cuyo agrio carácter, combinado con su afición a la química le habían valido de los opositores el apodo de "Don Oxide"— era partidario de una acción más enérgica.

La presión de sus partidarios y de la opinión pública sólo obtuvo del gobernador el envío a la Junta de Representantes, de la documentación probatoria de los negocios ingleses de don Bernardino Rivadavia. A esto se redujo todo el rigor. Por lo demás, el general Alvear permaneció en la Capital sin ser molestado, a pesar de que su genio inquieto (exaltado por la gloria de Ituzaingó y el despecho de que no se le reconociera pública-

mente en virtud de las circunstancias políticas), lo predisponía a cualquier aventura; así como Rivadavia, recluido en su quinta del sur, y don Julián Segundo de Agüero, fecundo en intrigas y en planes e instigador de las malévolas gacetas unitarias de los Varela y congéneres.

Dorrego se mantenía aferrado a la política de conciliación que iniciara bajo la presidencia de López. Confiaba en el apoyo de la Legislatura, integrada por el grupo fuerte de los hacendados y los ricos hombres porteños —antiguos directoriales los más, plegados al partido federal por sentimientos autonómicos y espíritu tradicionalista reacto a las fantasías ideológicas del unitarismo— y de la clase artesana y asalariada de la población. Despreciaba por ello la propaganda de los pasquines, contrarrestada por la Gaceta Oficial, y los desórdenes callejeros de la juventud rivadaviana, que terminaban en episodios policiales y un par de horas de arresto. Por lo que hace al ejército, cuya sublevación se rumoreaba, confiaba en su propio prestigio ante sus compañeros de gloria y en el de su ministro de Guerra —antiguo directorial también— el bravo general don Juan Ramón Balcarce.

* * *

En estas vísperas de la guerra a muerte entre las facciones, no está de más insistir sobre su índole, para entender la razón de la total discordia. Más que ideas políticas, son formas de vida las que se enfrentan y se contienden.

Lo que empieza a llamarse por estos años partido federal en todo el territorio —de acuerdo con su origen artiguista— no era en sustancia otra cosa que la forma tradicional de gobernarse en todos los pueblos del vasto interior, desde la época de las fundaciones. El primer núcleo social había sido la ciudad: la ciudad con su cabildo y su iglesia, su vecindario armado contra el indio sometido o rebelde, su jefe militar y sus industrias urbanas o rurales, sus libertades y sus derechos. La ciudad estaba gobernada por los vecinos, quienes con sus hijos y servidores constituían la milicia, cuya conducción en la guerra exigía el comandante de arma o el caudillo: todos en el goce de los derechos muy amplios que otorgaban las leyes españolas, sumados a los que consagraba el uso, a favor de la autoridad lejana y la escasa fiscalización. El mismo fenómeno —repetido tantas veces como ciudades había— se observaba en toda la extensión del territorio. No obstante el sometimiento teórico —y en este plano indiscutido— al monarca y al virrey o sus delegados, el sentimiento comunal y el consiguiente orgullo, fortalecido por la conciencia de los ser-

vicios prestados a la corona y que exigían contraprestación de consideración y honores, fue siempre tan vivo que a menudo se exaltó en rebelión, obligando a monarcas y funcionarios a pactar con él. Las relaciones entre las diversas ciudades se fundaron, más que en el sometimiento a una autoridad común, en la comunidad de intereses para la defensa contra el salvaje y en la mayor o menor facilidad de las comunicaciones.

Pero así como había intereses afines, los había contradictorios, entre una ciudad y otra y entre los diferentes grupos dentro de cada núcleo urbano, que originaban tensiones, rivalidades y, en suma, una intensa vida política. Son clásicos los conflictos entre cabildos y gobernadores, entre gobernadores y obispos, entre cabildos y obispos: es decir, entre representantes de los poderes civil, militar y espiritual, con toda la gama de combinaciones posibles entre los términos. De tal modo que, en el correr de los tiempos y según el albur de las circunstancias —exactamente como en todas las formaciones urbanas de la historia—, se dieron en la nuestra tipos de oligarquía, cesarismo y teocracia alternativamente, sin que desapareciera por ello, sino por el contrario acentuándose, el carácter comunal de la cultura, con la constante histórica (y también universal) del surgimiento del caudillismo militar en tiempos de peligro.

Esas ciudades, imbuidas del orgullo de su libertad, tenían su enemigo natural en el gobernante que venía de afuera, que se aceptaba a regañadientes (cuando se aceptaba) y que generalmente debía pactar, para sostenerse en el poder, con alguno de los partidos locales y usar todos los expedientes de la más refinada política. No es el caso de dar ejemplos, que abundan, desde Alvar Núñez en adelante. Ello ocurrió con los gobernadores (de quienes se apelaba ante el Virrey y la Audiencia, cuando no ante el propio monarca) y con los tenientes de gobernador (de quienes se apelaba ante el titular). Son increíbles las toneladas de papel en que se tramitaron estos pleitos durante la época de la colonia.

A las tensiones locales y regionales se añadía —otra constante— el clásico resquemor contra la capital del Virreinato, a la que se acusaba de ignorar o despreciar las modalidades o derechos comunales, cuando no de sacrificar las ciudades subordinadas a sus propios intereses: es decir, la tiranía. Ya conocemos esa hostilidad contra Buenos Aires, y sus motivos. La situación continuaba en los mismos términos tres lustros después. La política de la Asamblea y de los dos congresos, en lo que tenía de avasalladora y absorbente, representaba para las poblaciones del interior —que habían acogido la revolución como libertadora— una continuación abusiva del centralismo virreinal. Rivadavia se les aparecía como lo que era en realidad: el continuador de Vértiz.

Ahora bien, todas esas modalidades transmitidas de generación en generación, ¿qué eran sino una cultura? Mucho han adelantado en los últimos tiempos los estudios históricos para que pueda sostenerse todavía de buena fe el mito de la "incultura" y el "atraso" de los tiempos coloniales. Hoy se sabe que los núcleos dirigentes de las ciudades del Nuevo Mundo (y mucho más aquellas que, como las de nuestro centro y noroeste, se hallaban dentro de la órbita de las universidades de Córdoba y Charcas) poco tenían que envidiar a los de la península, que tampoco estaban a la zaga del resto de Europa. Esas modalidades políticas tradicionales, manifestaciones de una cultura tres veces secular en nuestro suelo, constituyeron el alma de nuestro federalismo. Su sentido no era barbarie, sino tradición, repetimos. Tradición de libertades comunales y de inspiración hispánica y católica a que los pueblos obedecían. No fue tampoco un fenómeno de masas, como se ha pretendido, sino de minorías dirigentes; y si se encarnó en caudillos militares fue porque las circunstancias eran de guerra. Estos caudillos militares provenían, por lo demás, salvo alguna excepción, de la mejor prosapia española; muchos descendientes de conquistadores y encomenderos; algunos, de auténtica estirpe real. Si las masas los seguían es porque eran los jefes.

¿Qué representaba, en cambio, el partido unitario? Ya hemos visto su origen y su evolución posterior hacia el ideologismo rivadaviano. El partido unitario era, por lo tanto, porteño, y no comprendería nada de su espíritu quien desconociera esta nota fundamental. Representaba en los hechos la pretensión de la capital del antiguo Virreinato a dominar sobre todo el territorio de la vieja jurisdicción. Por ser la sede del gobierno y poseer la mayor parte de los recursos, era natural que obtuviera el apoyo de los núcleos provincianos disidentes que —según el juego de tensiones a que nos hemos referido antes— aspiraban a obtener o recuperar, con su ayuda oportuna, el poder local, sin que entrara para nada en ello la adhesión a determinados principios.

Añádase a esto que el grupo que encarnaba ese espíritu constituía una burguesía comercial muy próspera, que había llegado a esa situación a favor de la política desarrollada bajo el reinado de Carlos III y había sido profundamente conmovida por la filosofía de la "ilustración". Tenía como mentores a un grupo de abogados y clérigos regalistas (cuando no apóstatas) conquistados por las doctrinas de los "filósofos" en boga que, por lo demás, se adecuaban perfectamente a los intereses que ellos encarnaban, doctrinas que se traducían corrientemente en forma de "despotismo ilustrado", o sea el propósito de civilizar a los pueblos aunque fuese a palos, ya que los pueblos (según expresión de Agüero en el Congreso) "no saben lo que les conviene".

Tal era el pensamiento de Rivadavia y sus amigos que se habían educado en el Colegio de San Carlos oyendo las lecciones del clérigo Fernández de Agüero, y más tarde, del joven Lafinur. Se creían propietarios de una panacea y depositarios exclusivos de la civilización, lo que les comunicaba un ardor de fanáticos. No obstante su conciencia de ser una minoría, se consideraban la minoría naturalmente triunfante por la sola virtud de "las luces". Esa fe absoluta en una especie de paraíso mahometano en la tierra a base de comercio libre, prosperidad y "filosofía" explica toda su acción. Explica, sobre todo, que hayan motejado de bárbaros a sus adversarios del interior y que lo hayan hecho de buena fe, puesto que para ellos la propia España, madre de civilizaciones, era bárbara en todo lo que tenía de tradicional y auténtico. La Iglesia católica era asimismo "superstición" y "atraso"; como era una rémora cualquier modalidad espiritual o sistema político que pusiera trabas a la aplicación de las recetas aconsejadas por los filósofos y los economistas.

Lo curioso del caso es que dichas ideas andaban ya de capa caída en Europa, cuya nueva generación romántica suspiraba por un renacimiento espiritual y volvía nuevamente los ojos a la Edad Media en busca de las verdades perdidas, lo cual debió haber quebrantado un poco —en caso de saberlo— la confianza de nuestros reformadores. Pero el hecho es que no dudaron. Decretaron que sus adversarios eran bárbaros, englobando en el mismo anatema a las montoneras litorales y a los viejos núcleos patricios del interior, hijos de la conquista y herederos de todos los refinamientos de una cultura secular. Y se dispusieron a acabar con ellos cuanto antes, a fin de poner al país a la altura de las luces del siglo. La fe en la posesión absoluta de la verdad no autorizaba otra conducta, que habría sido un compromiso con el error, o sea con el mal. Al pensar de ese modo, eran lógicos consigo mismos, y muchos de ellos, en definitiva, honestos y patriotas.

El unitarismo no era, en suma, otra cosa que liberalismo: el régimen político no significaba más que un medio para imponerlo, con la supremacía de la capital. El grupo dirigente de ésta —aristocracia nueva y de origen dudoso, según vimos— se consideró el único capacitado para dirigir la nación, con desmedro de los viejos e ilustres núcleos patricios del interior, lo cual favorecía al mismo tiempo las ambiciones de una clase advenediza de abogados y negociantes, que veían la coyuntura de compensar la falta de abolengo con la sobra de ilustración. Por ello y por venir de Europa, Rivadavia se convirtió en el ídolo de los tenderitos intelectuales que acababan de salir del Colegio, leían a Quintana y Filangieri, aspiraban a brillar y miraban pasar con cierto rencor admirativo al joven estanciero don Juan Manuel de Rosas, cuando

venía, soberbiamente montado, de sus estancias a visitar a sus padres, y que ya tenía poder político y dinero, además de apostura y rango. Rosas no los conocía a ellos ¡y era amigo del "bárbaro" López! Muchas definiciones políticas se alimentan de esos imponderables. Dichos jóvenes, a quienes Rivadavia dio empleos y estímulos, eran enemigos de los "anarquistas" del litoral y del interior y serían los plumíferos del partido unitario.

Una fracción de la burguesía porteña se plegó, sin embargo, al tradicionalismo federalista, que contaba también con la adhesión de los asalariados y artesanos de los suburbios por oposición a los señorones del centro urbano. La defección no desalentó a los unitarios puesto que tenían con ellos ¡la verdad! Como los fanatismos no transigen, la lucha debía convertirse en guerra a muerte y sin cuartel; puesto que tampoco podían ceder los otros en la defensa de su libertad, de su ser mismo. Contra las previsiones de Dorrego, la conciliación era imposible y la situación debía agravarse día tras día hasta desembocar en la guerra civil.

Desgraciadamente, la situación de guerra externa y los episodios de la negociación de la paz, con su resultado afligente y forzado, fueron el *climax* para la tragedia, pues dieron motivo para que ambos partidos se enrostraran el crimen que no se perdona y se lanzaran la afrenta que sólo puede lavarse con sangre: la traición a la patria. Veremos que no hubo tal, sino errores fatales, anarquía interna, intriga externa y, en suma, desventura de la cual no puede hacerse a nadie particularmente responsable, sino a los astros.

* * *

Las dificultades internas no habrían podido conmover el régimen establecido en Buenos Aires y aceptado por todo el país, si hubiera logrado obtener un triunfo decisivo en la guerra oriental, provocando la capitulación del enemigo. Tal era el plan del coronel Dorrego. Por lo cual no había querido ni escuchar la propuesta que le hizo Lord Ponsonby en el sentido de llegar a una trasacción sobre la base de la independencia de la provincia disputada. La negativa terminante del gobernador indujo al inglés a buscar otras vías y se lanzó resueltamente a intrigar entre los caudillos orientales, divididos por profundas discordias.

El general don Fructuoso Rivera, político inescrupuloso y tornadizo que había estado al servicio del Brasil y se había pasado a los patriotas, aunque dispuesto a hacer en cualquier momento oportuno la evolución contraria, se hallaba en abierta pugna con Lavalleja por el predominio provincial. Separado del grueso

del ejército, guerreaba con éxito contra los brasileños. Había ocupado las misiones orientales y se disponía a marchar sobre Río Grande.

El general de las fuerzas republicanas, mientras tanto, no había realizado hasta mayo ninguna acción de importancia. Lo que lo mantenía paralizado no era tanto la disidencia interna cuanto las negociaciones que por su cuenta mantenía con el ministro inglés por medio de su agente don Pablo Trápani sobre la base de la independencia. Lavalleja había sido ganado a estas miras con la promesa de la presidencia de la nueva nación. Era natural entonces que su interés consistiese en "ganar tiempo", como le aconsejaba su agente y mentor, puesto que la indecisión de la guerra era una condición necesaria para que el gobierno de Buenos Aires moderase sus exigencias. El plan de Dorrego de imponer sus condiciones con las armas en la mano se frustraba, por consiguiente, debido a la actitud del general en jefe nombrado para lograr la victoria y que sacrificaba a sus intereses localistas los intereses de la patria grande.

La guerra marítima continuaba fructífera, no obstante, con la campaña de corso en las costas del Brasil, que tenía en jaque a su comercio (principalmente negrero), haciendo con ello más difícil la situación del enemigo, cuyas finanzas se hallaban en tanta penuria como las nuestras.

Para hacer frente a los gastos de la guerra y de la administración, Dorrego debió recurrir al crédito interno y a las emisiones. Estas medidas y la paralización de las acciones militares daban pábulo a la propaganda de los pasquines opositores, que tocaban los límites extremos de la malediciencia y de la calumnia. La Legislatura había debido dictar en marzo una ley de prensa que, no obstante la lenidad de sus disposiciones, contribuyó a agriar más los ánimos por lo que se le achacaba de atentado a la libertad. Sus resultados fueron nulos; resultaba muy fácil burlarla reemplazando en los ataques los nombres propios por mote o seudónimos transparentes para todo el mundo en el círculo reducido de la gran aldea.

La inquietud fomentada por la prensa se agravó más todavía a raíz de las elecciones de renovación de la Junta de Representantes en el mes de mayo, que se desarrollaron con gran violencia. Hubo trifulcas con muertos y heridos, vuelco de mesas y robos de urnas. Como es natural, ambos partidos se enrostraron mutuamente la responsabilidad de los fraudes; pero sabido es que en estos casos siempre sufre el gobierno la derrota moral. Empeoró el cariz de los sucesos la participación en ellos de militares en servicio activo y de tanto prestigio como Alvear y Lavalle, que se habían jugado por la oposición encabezando puebladas en

los atrios. Sea como fuere, el unitarismo había encontrado, con el pretexto de la falta de garantías para la emisión del sufragio, la fórmula ideal para justificar la conspiración y la revuelta armada.

Mientras tanto, la diplomacia inglesa no cejaba en su propósito de llegar al tratado de paz de acuerdo con su fórmula transaccional, para la cual ya había logrado la adhesión de los caudillos orientales. Obraba en virtud de la facultad de mediación que le había sido otorgada por ambos gobiernos a raíz de la gestión de García y que su sucesor no había revocado, y consideraba como base inalterable para las futuras negociaciones el reconocimiento de la independencia de la Banda Oriental, propuesto por el gobierno de Rivadavia y rechazado por el Emperador.

Vista la actitud irreductible de Dorrego, Ponsonby tomó otro camino y forzó la voluntad de la corte de Río de Janeiro, envuelta en gravísimas dificultades de orden político y económico, hasta obtener el consentimiento del Emperador a la base propuesta. Con ello quedaba a su juicio perfeccionada la operación. El ofrecimiento de García —que constaba en los protocolos— era palabra empeñada por el gobierno argentino con la garantía de la potencia mediadora y que no podía revocar sin mengua de la seriedad diplomática. Sólo quedaba suscribir la paz sobre el acuerdo hecho.

Tales fueron los argumentos que se esgrimieron contra la negativa del coronel Dorrego. Su indudable eficacia y los resultados de la consulta que llevó a cabo el gobernador entre los hombres más notables de la situación lo decidieron a aceptar. Por lo demás, el Banco Nacional —hechura rivadaviana— le negaba recursos para proseguir la guerra, y él carecía de medios legales para forzarlo. El separatismo cundía en la Banda Oriental, fomentado por la propaganda de Lord Ponsonby y sir Woodbine Parish. Y en Buenos Aires no había caído en vano la persistente prédica del doctor García, que había inspirado la política del Directorio y de cuyas ideas participaban la mayor parte de los antiguos directoriales —como López y Guido— que ahora formaban el consejo íntimo del gobernador.

Se nombró embajadores para tratar la paz en Río de Janeiro (condición impuesta por el Emperador para salvar su prestigio) a los generales don Juan Ramón Balcarce y don Tomás Guido. Balcarce desempeñaba en esos momentos la cartera de Guerra y Relaciones Exteriores. El tratado que reconocía la independencia de la Banda Oriental bajo la garantía de las dos potencias signatarias se firmó el 27 de agosto de 1828. Por un cúmulo de cir-

cunstancias adversas, la patria sufría una nueva y dolorosa mutilación de su territorio.

* * *

Considerada la pérdida de la Banda Oriental en su perspectiva histórica, no constituye más que un nuevo episodio de la política intervencionista inglesa en el Río de la Plata vigente desde los primeros tiempos de la Colonia del Sacramento y las luchas por su posesión, con su secuela de guerras ganadas y paces perdidas. En el momento en que se produjo tenía todo el carácter de un resultado fatal. El orgullo argentino trató de satisfacerse con el pensamiento de haber humillado al Emperador, obligándolo a desprenderse de la provincia Cisplatina, que había jurado defender hasta la última gota de su sangre. ¡Valiente consuelo! La mutilación, de todos modos, dolía, y la dura responsabilidad de consentirla habría de incidir muy pronto sobre el destino de Dorrego.

El mismo espíritu de aceptación resignada presidió los actos de ratificación del tratado, no obstante los esfuerzos de algunos entusiastas por otorgarles un aire de victoria. Desde julio había comenzado a funcionar en Santa Fe la Convención Nacional Constituyente convocada a raíz de la renuncia de Rivadavia. A su seno, como suprema autoridad nacional, se envió el convenio suscripto en Río de Janeiro y fue aprobado sin protestas.

Se sabe que el oráculo de la logia unitaria, don Julián Segundo de Agüero, se restregó las manos al saber las noticias de la paz y afirmó en tono sentencioso: "Nuestro hombre está perdido; él mismo se ha labrado su ruina". La operación que emprenderían era fácil: explotarían contra Dorrego el patriotismo herido, haciéndolo responsable único y directo de la pérdida de la Banda Oriental. Si se tiene en cuenta la actitud permanente de ese partido ante el problema, resalta lo que había en esta campaña de farisaico y alevoso. Pero el cálculo era justo. Los pueblos necesitan encontrar culpables de sus angustias y de sus derrotas. Nada más hacedero que cargar al ejecutor visible con la responsabilidad de todas las culpas invisibles.

* * *

Al firmar la paz, Dorrego reorganizó su ministerio, eligiendo a personajes de primer plano y de carácter ecuaníme con preferencia a los exaltados de su propio partido. Nombró para la car-

tera de Guerra y Relaciones Exteriores al general don Tomás Guido —amigo íntimo y consejero de San Martín— y para la de Hacienda al doctor Vicente López, el ilustre autor del Himno. Quedó en la de Guerra y Marina el general Balcarce. Con ello creyó conjurar el gobernador la revolución unitaria cuyo estallido se rumoreaba.

La inquietud del gobierno —y la esperanza de los unitarios— se fundaba en el regreso a Buenos Aires de las fuerzas destacadas en la Banda Oriental. Se decía que venían anarquizadas por la guerra y minadas por la propaganda opositora, que había estado activísima en el envío de emisarios y correspondencia. Dorrego no lo creía, porque tenía una concepción romántica de la camaradería militar y consideraba absurdo que se alzarán contra él sus compañeros de armas y de gloria, entre quienes contaba innumerables amigos. Cuando se le anunció que el jefe de la revolución sería el general don Juan Lavalle, tampoco lo creyó, atribuyendo a simple bravata su lenguaje exaltado. Sin duda, no lo tomaba en serio.

Lavalle, que había ganado merecidos laureles en Chile, Perú y la campaña reciente, tenía en efecto fama de ser tan valiente como de poco juicio. Se había hecho notorio por sus desplantes, con los que había enfrentado al propio Bolívar, poco tolerante en materia de disciplina. Se le perdonaban por sus excelentes prendas de soldado y además por su simpatía. Era en todo un típico porteño, capaz circunstancialmente de esfuerzos y de hazañas, pero de fondo frívolo y voluble, más pagado del gesto que de la acción, de la apariencia que de la esencia: condenado, en suma, a convertirse en instrumento de quienes supiesen halagar sus flaquezas. En Buenos Aires había caído en medio del círculo unitario, que lo tenía como alelado y a cuyos miembros escuchaba como oráculos por el destino seductor que le vaticinaban. Ellos le habían hecho creer que Dorrego era el jefe de los “anarquistas” causante de todos los males de la nación, un tirano que oprimía al pueblo apoyado en la más baja plebe y un traidor a la patria. ¿Cómo no habría de seducirlo la empresa que le ofrecían de poner su espada al servicio del orden, la civilización y la virtud?

El 20 de noviembre llegó a Buenos Aires la primera división del ejército de la Banda Oriental, al mando del general don Enrique Martínez. El 1° de diciembre dicha tropa, íntegramente sublevada, penetraba en la plaza de la Victoria al mando de Lavalle y Olavarría, ambos de la flor y nata del “centro” porteño, rodeada por grupos de unitarios que la aclamaban, entre quienes se destacaba la sombría figura del doctor Agüero, que actuaba como director de la función. Sin fuerzas para resistir a los regi-

mientos de línea, Dorrego abandonó el Fuerte por la puerta trasera y se dirigió al campamento de las milicias de Rosas en San Vicente.

La misma tarde del 1° un centenar de personas convocadas en la capilla de San Roque eligió gobernador interino “por aclamación”, alzando los sombreros al aire, al jefe revolucionario.

* * *

El general Lavalle, con un regimiento de caballería, salió en persecución del gobernador Dorrego, delegando el mando en el almirante Brown. Contra la opinión de Rosas, Dorrego decidió esperarlo y hacerle frente. El 9 de diciembre se encontraron en las proximidades de Navarro, donde las milicias fueron derrotadas y dispersas por las tropas de línea, viéndose envuelto el gobernador en la desbandada. Rosas se dirigió hacia el norte a pedir auxilio al gobernador de Santa Fe, mientras Dorrego buscó incorporarse al regimiento número 3, que se hallaba en las proximidades de Areco, al mando del coronel don Angel Pacheco, su amigo. Pacheco le dio asilo y se puso a sus órdenes; pero los comandantes Acha y Escribano amotinaron la tropa, se apoderaron de Dorrego y se dirigieron con él hacia la capital. En el camino recibieron orden de cambiar de rumbo y conducir al prisionero al campamento de Navarro, donde se encontraba Lavalle.

Dorrego pidió al gobernador delegado garantías para su persona y un salvoconducto para marchar al extranjero. Pero la logia unitaria había decidido que debía morir. Así se lo recordaban a Lavalle sus principales miembros en cartas premiosas, escritas al conocer la captura y que tendían a contrarrestar los pedidos de clemencia o un desfallecimiento posible de la voluntad. “Nada de medias tintas”, decía Varela. “Hay que cortar la primera cabeza de la hidra”, afirmaba Agüero. Carril, más categórico, se refería claramente al compromiso imperativo: “Hablo de la fusilación de Dorrego. Hemos estado de acuerdo antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla”.

Estas opiniones prevalecerían sobre las solicitudes del gobierno delegado y del cuerpo diplomático en pleno en el sentido de la lenidad. El 13 llegó Dorrego al campamento y se le comunicó que sería ejecutado en el término de una hora. Lavalle no quiso verlo; no habría podido soportarlo, sin duda. Al sonar la descarga, escribió al gobierno anunciando que el gobernador había sido fusilado “por su orden” y fiándose al juicio de la historia.

No es el caso de hacer sobre el episodio consideraciones sentimentales. Sólo cabe decir que sus verdaderos autores, ofus-

cados por la pasión, se equivocaron en el cálculo de los efectos. En lugar de aterrorizar al país, provocaron su reacción inmediata y violenta. El error político que cometieron fue mucho más grave que el crimen.

XIV. LA LUCHA POR LA LIBERTAD

Lavalle retiró los diputados porteños al Congreso de Santa Fe y envió una circular a los gobernadores, dándoles cuenta de lo ocurrido y invitándolos a concurrir a un nuevo Congreso en Buenos Aires! La negativa de todos fue indignada y violenta. Estanislao López le anunciaba la guerra "en la cual hemos de vencer —agrega— porque seguimos el torrente de la opinión general, contra la cual nada valen el poder de las bayonetas ni las medidas atroces". El general Bustos hace una recapitulación histórica para concluir afirmando que los amotinados "son los autores de todas las desgracias, los que únicamente a costa de sangre se han sostenido en el gobierno que expresamente han rechazado los pueblos". El general Quiroga expresa su indignación en estos términos: "El que firma no puede tolerar el ultraje que V.E., ha hecho a los pueblos sin hacerse indigno del título de argentino". Y le promete "venganza".

La Convención nacional reunida en Santa Fe protestó también airadamente, declarando "anárquica, sediciosa y atentatoria contra la libertad, honor y tranquilidad de la nación, la sublevación militar de las tropas de la República el 1° de diciembre", y calificando de "asesinato" y de "crimen de alta traición contra el Estado" el fusilamiento del primer magistrado. Se decidió llevar la guerra contra la usurpación y encargar de su dirección al general don Estanislao López, gobernador de Santa Fe.

En el manifiesto publicado con ese motivo, se habla de lo ocurrido como de una gran desdicha, reflejo de la mala estrella que persigue a esta nación "tan heroica como desgraciada". "Dése un gran ejemplo —continúa— y no exista la República, o viva con orden, con leyes, con dignidad". Y la situación se define de esta suerte: "¡Pueblos de la Unión! Esta es vuestra causa. La causa de la gran mayoría de la república contra una minoría rebelde; la causa de la razón, de las leyes, de los derechos populares, contra la fuerza militar".

Estas expresiones ilustran suficientemente sobre la reacción provocada en las provincias interiores a consecuencia del motín de diciembre y que compartía mucha opinión de la misma capital. Durante el año transcurrido se habían afianzado la paz interior y el orden legal. El país se estaba curando lentamente de sus

heridas y reponiendo su economía desquiciada por cuatro años de lucha; se extendía por todo el territorio una atmósfera de confianza; las provincias habían licenciado sus milicias; había fe en el porvenir. Las instituciones provinciales se hallaban a cubierto de cualquier nueva tentativa de agresión por parte del gobierno central. Se esperaba sin prisa la elaboración del estatuto definitivo. Allanado así el camino, sólo quedaba la puja natural de las legítimas ambiciones a la presidencia futura, para la cual se perfilaban las candidaturas contrapuestas de Bustos en el interior y Dorrego en la Capital. Pero había conciencia general en el sentido de que, cualquiera fuese la solución, debía llegarse a ella por medios legales, consultando la voluntad de los pueblos.

El motín unitario de Buenos Aires venía a trastornar de nuevo un orden obtenido a costa de tantos afanes, y ello explica el tono de la reacción que provocó. Los pueblos que empezaban difícilmente a encauzarse en las vías del trabajo y la industria, dentro del orden y el acatamiento de las leyes —precarios ambos todavía pero reales y que se sentían como distensión física y moral después de tanta zozobra— debían armarse nuevamente en defensa de su libertad, identificada con sus modos tradicionales de vida y su resistencia a la tiranía porteña.

* * *

El cálculo del grupo unitario había resultado errado. Sugestionado por la débil mayoría que aparentemente lo sostenía en el orden urbano, no había contado con los sentimientos y la consiguiente reacción del resto del país, al que, por lo demás, ignoraba rivadavianamente, o menospreciaba en lo que conocía. Sabemos el espíritu que animaba a ese grupo y su convicción de poseer un derecho infuso a gobernar, que lo predisponía a cualquier aventura. En esa ocasión actuaba además bajo la presión de los fuertes intereses materiales creados bajo el "sistema" de Rivadavia y vinculados a los negociados de minas y al usufructo de los créditos del Banco Nacional vueltos a prestar con tasa usuraria. Al amparo del cándido Lavalle, vencían los "quebrados y agiotistas que componen esta aristocracia mercantil", según lo advertía el ojo sagaz de don Juan Manuel de Rosas, quienes acababan de vengar en Dorrego el crimen para ellos capital: la denuncia pública de los peculados.

Posesionados de la ciudad de Buenos Aires, empezaron a perseguir a sus adversarios políticos, disolviendo la Junta de representantes y suplantando por adictos a los miembros de la administración y los tribunales de justicia. Los más notorios per-

sonajes del partido federal fueron desterrados o presos en un pontón en el río. Se suprimió igualmente la libertad de prensa para los opositores. Fuera de ello, se advirtió en los primeros tiempos una gran parálisis de la acción gubernativa, bajo el gobierno delegado de Brown y el ministerio general a cargo del doctor Díaz Vélez.

Mientras tanto, se sentía la sublevación general de la campaña de Buenos Aires, obediente a la acción de agentes de Rosas. Lavalle permanecía en su campamento, a la expectativa de las novedades del interior. Para reforzar sus efectivos había hecho volver de la Banda Oriental la segunda división del ejército al mando del general don José María Paz, suprimiendo así el control argentino del cumplimiento del tratado y abandonándolo a la buena voluntad brasileña.

Las primeras acciones de guerra fueron de escasa importancia. El coronel Suárez —héroe de Ayacucho— obtuvo en febrero de 1829 un triunfo sobre las milicias de Rosas en Las Palmitas. El jefe federal prisionero, sargento mayor Mesa, fue fusilado en la plaza de la Victoria. Un mes más tarde los milicianos derrotaron a las fuerzas veteranas al mando del general Rauch, a quien tomaron y ejecutaron también como represalia.

Declarada la guerra por la convención, Lavalle se movió sobre Santa Fe, mientras que su escuadrilla al mando de Rosales atacaba las costas de dicha provincia. El general López nombró a Rosas segundo jefe del ejército de la Unión y marchó hacia Buenos Aires.

Para prevenir el ataque de los contingentes de las provincias interiores, Lavalle envió al general Paz al frente de su división con destino a Córdoba, a fin de hacer de esa ciudad la base de las operaciones contra Bustos, Quiroga e Ibarra. El se dirigió con 1.500 veteranos al encuentro de las fuerzas federales. La batalla se trabó el 26 de abril en Puente de Márquez. Se peleó con encarnizamiento y el triunfo se inclinó a las fuerzas federales, aunque Lavalle emprendió la retirada con su infantería casi intacta. Se dirigió hacia Morón, mientras López y Rosas establecían campamento en las márgenes del río Las Conchas.

No obstante la superioridad de su situación, López dirigió a Lavalle una propuesta de paz; pero éste le respondió que no trataría mientras no se retirase de la provincia. Lo alentaban, sin duda, las noticias que acababa de recibir de Córdoba. El general Paz, en efecto, cuatro días antes de Puente de Márquez, había derrotado al general Bustos en San Roque, obteniendo el control de la situación cordobesa.

No se le escapó a López la importancia de este triunfo para la causa adversaria, en un punto estratégico que dominaba todas

las rutas del interior; ni lo que significaba para su propia provincia la proximidad de tal enemigo. Temiendo ser atacado por la espalda, se volvió precipitadamente a Santa Fe. El grueso de las fuerzas nacionales quedó al mando de Rosas.

La noticia de la operación de Paz sobre Córdoba provocó un debate en la Convención de Santa Fe que muestra la incertidumbre del momento. Los antecedentes de ese jefe lo mostraban, desde Arequito, como más bien favorable a la causa federal; y se sabía su amistad con el general Ibarra, quien lo había tenido en cierto momento bajo su protección. Por todo ello, el cuerpo nacional se inclinó a desvincular su causa de la de Lavalle, restringiéndola al orden local de la política cordobesa.

Paz, por su parte, se iniciaba con suma moderación, ajeno a los desplantes del porteño, que obedecía a los dictados del grupo "ultra" de la capital. Había oficiado incluso a la Convención, expresándole sus deseos de buena paz y armonía, por lo cual este cuerpo decidió enviar al interior una misión conciliadora compuesta de tres diputados.

* * *

La situación de Buenos Aires después de Puente de Márquez, con toda la campaña sublevada y hostil, se parecía cada vez más a la de una plaza sitiada por un enemigo pasivo y fluido, pero omnipresente e inexorable, que confiaba en el tiempo. El comandante de armas general Martín Rodríguez había nombrado una Junta de guerra integrada por los jefes militares más importantes —Pueyrredón, Alvear, Soler y Cruz— para organizar la defensa. A fin de reforzarla, se formaron los batallones de "Amigos del Orden", constituidos por extranjeros, que originarían la cuestión con el jefe de la escuadra francesa.

Esta situación, que llevaba miras de durar mucho tiempo agravándose gradualmente, empezó a descorazonar a Lavalle, que había tenido oportunidad de ir conociendo a sus mentores y de sospechar los intereses que servían. En realidad, había visto las dificultades desde el comienzo. Ya en vísperas de Puente de Márquez había tratado de lograr la ayuda del general San Martín para una conciliación con los gobernadores del interior, ofreciéndole el gobierno de la provincia y el mando del ejército. El Libertador, que había llegado a Montevideo y se disponía a volver a Europa por hallar a su patria convulsionada, no aceptó la pro-

puesta¹. Después de la batalla, Lavalle fluctuaba, de acuerdo con la índole de su temperamento, entre los raptos de euforia, en que se manifestaba dispuesto a meter "con quinientos coraceros" todas las provincias en un zapato (lo que le hizo suponer a Rivadavia que había enloquecido) y las bruscas depresiones, en que ofrecía su renuncia o trataba de delegar el mando en cualquiera que pudiese obtener la paz.

Sus colaboradores, a quienes estas fluctuaciones del general mantenían sobre ascuas, lo contenían. Opinaban que era necesario "un gobierno vigoroso que a todos imponga respeto", según la fórmula del doctor Agüero. El órgano oficial del gobierno sintetizaba la tendencia del partido en los siguientes términos: "Al argumento de que si son pocos los federales es falta de generosidad perseguirlos y si son muchos es peligroso irritarlos, nosotros decimos que, sean pocos o muchos, no es tiempo de emplear la dulzura, sino el palo. . . sangre y fuego en el campo de batalla, energía y firmeza en los papeles públicos. . . Palo, porque sólo el palo reduce a los que hacen causa común con los salvajes. Palo, y de no, los principios se quedan escritos y la República sin constitución".

Para fortalecer al gobierno se reemplazó, en el cargo de gobernador delegado, a Brown por el general Rodríguez, quien nombró ministro de Guerra a Alvear, de Gobierno y Relaciones Exteriores a Carril y de Hacienda a Díaz Vélez. Debía acompañarlos un Consejo de Gobierno que supliría a la Legislatura cesante, integrado por los generales del consejo de Defensa y un grupo de personajes respetables. Los federales, como Guido y Alzaga, se negaron a participar en este organismo.

Durante esos días se produjo el incidente con la escuadra francesa.

El cónsul de esa nación había protestado contra el decreto por el que se obligaba a los extranjeros al servicio militar. Ante el

¹ Las tergiversaciones corrientes no han podido confundir acerca de la verdadera opinión del Libertador sobre los sucesos y los hombres de la Argentina. Se verá en el texto su actitud frente a Rosas. Lo que pensaba de los unitarios se halla repartido en toda su correspondencia, que los solícitos burócratas de nuestra historia han eludido reunir en una edición completa, conformándose con el retaceado "Epistolario" de Carranza. Es notorio que no ocultaba su desprecio por Rivadavia y sus epígonos, de cuya "infernial conducta" se queja amargamente; que condenó las alianzas con el extranjero, y que atribuyó la anarquía del 29-30 a "cuatro demagogos que con sus locas teorías lo han precipitado (a nuestro país) en los males que lo afligen".

Mientras no aparezca la recopilación completa de sus cartas, conviene leer las que se publicaron en el "Tomás Guido" de Felipe Barreda Laos (Buenos Aires, 1942).

rechazo de la reclamación, pidió sus pasaportes, a raíz de lo cual la escuadra francesa se apoderó de barcos argentinos en la rada. Se llegó a una transacción, por la cual se convertía dicho servicio en voluntario, a cambio de la devolución de los barcos, al mismo tiempo que se hacía constar la protesta contra la agresión. Los desplantes verbales no disimulaban el hecho lamentable de que se cedía en una cuestión de principios que a la República le interesaba mantener a toda costa.

En el curso de los sucesos los marinos franceses liberaron a los prisioneros políticos que se encontraban en uno de los pontones de la rada. Rosas agradeció al comandante francés y le previno que no entregara las naves capturadas sino al gobierno legítimo de la nación haciéndole notar que el gobierno de Buenos Aires no era tal y que la única autoridad legítima en la provincia, *con atribuciones nacionales*, era él mismo —Rosas— pues poseía el título emanado de la Convención de Santa Fe como delegado de López y otro otorgado por Dorrego, encargado del Ejecutivo nacional, como jefe de las fuerzas de la provincia.

La consecuencia era obvia. Los actos del gobierno usurpador de Buenos Aires no comprometían la voluntad, ni por consiguiente el honor de la República. No podían tampoco crear precedentes. Lo cual resultaba importantísimo para no cargar con la herencia de una claudicación.²

* * *

² Se llegó a una transacción, a cambio de la devolución de los barcos, al mismo tiempo que se hacía constar la protesta contra la agresión. El ministro del Carril sostuvo firmemente el principio de la no intervención armada y arrastró el incidente con bastante dignidad. Pero en el curso de los sucesos, los marinos franceses libertaron a los prisioneros políticos que se encontraban en uno de los pontones de la rada. Rosas agradeció al comandante francés, y le previno que el de Buenos Aires no era el gobierno legítimo de la nación.

La posición de Rosas era jurídicamente inobjetable, y es raro que un eminente jurista como el doctor Levene no lo haya advertido. La Convención nacional de Santa Fe seguía actuando como representación de todas las provincias y constituía la *única autoridad nacional* después de la muerte de Dorrego. Este había ejercido la función nacional ejecutiva, en materia de relaciones exteriores, por expresa delegación de las provincias, según el derecho público vigente. Muerto Dorrego, la función se restituía al poder de origen. El gobierno usurpador de diciembre pretendía, no obstante, instituirse en heredero de dicha función, como si ella fuera patrimonio del que ejercía la autoridad en el Fuerte, a pesar de haber sido expresamente desautorizado por la Convención nacional, que lo consideraba faccioso y culpable de alta traición. Por subsistir las autoridades legítimas con la plenitud de sus poderes (provincias y Convención), los actos del gobierno revolucionario de Buenos Aires en el orden nacional constituían una mera usurpación

Al cabo de seis meses transcurridos desde el motín, la situación de Buenos Aires se había hecho insostenible por la sublevación de la campaña, que obligaba a mantener un pie de guerra permanente con descuido de las actividades productivas y sin término a la vista. Estaban movilizados los regimientos de línea, los cívicos, los extranjeros y los esclavos aptos para la infantería y a cuyos dueños era preciso indemnizar; y todo ello para la defensiva contra un enemigo que no atacaba, y al que era imposible salir a buscar en el vasto desierto porque su táctica consistía en no presentar combate y acechar las ocasiones.

En junio, Lavalle se decidió a capitular. Mantuvo un riguroso secreto sobre su proyecto para no verse obstaculizado por la oposición, que descontaba, de los hombres de la "camarilla". El 16 de ese mes montó a caballo en su campamento de Los Tapias y se dirigió acompañado de un solo oficial ayudante, a la estancia El Pino, donde se encontraba el comandante en jefe de las fuerzas nacionales.

Rosas lo recibió cordialmente. Las conversaciones duraron unos cuantos días y al final tomaron parte en ellas personajes de los dos partidos, elegidos entre los sectores más moderados y que tenían como vínculo común de unión el sentimiento localista. Es de advertir que, no obstante el carácter nacional de su

y eran por consiguiente nulos e inválidos: no comprometían —repetimos— la voluntad ni el honor de la República.

Se ha pretendido encontrar una contradicción entre este episodio y el reconocimiento posterior por Rosas de la calidad de gobernador de Buenos Aires en Lavalle (!Levene dixit!). Y no hay tal. Así como Rosas desconoció en Lavalle lo que *no era*, reconoció lo que era. Ni el gobierno de Lavalle ni sus delegados podían invocar ni ejercer poderes en materia de relaciones exteriores, porque esos poderes pertenecían de derecho y de hecho a las provincias, representadas en la Convención, que no sólo no se lo habían delegado, sino que expresamente se los había quitado. Lavalle no representaba pues a la nación; en cambio sí la representaba Rosas. Pero en el orden provincial era otro cantar. La autoridad legítima de la provincia había caducado a raíz del motín de diciembre. El general Lavalle ejercía *de hecho* la autoridad. Es sabido que estados *de facto*, cuando no hay una situación de derecho que se les oponga, implican un principio de juridicidad asimilable a la gestión de negocios. No había pues inconveniente en reconocer el hecho, como lo hizo Rosas con exquisito sentido de la situación. En el orden nacional, como representante de la República ante el extranjero, Lavalle era un usurpador. Como gobernador de Buenos Aires era un hecho lamentable, pero era un hecho.

Achacar en este episodio a Rosas falta de espíritu nacional es una equivocación grave, además de una injusticia. Sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando le tocó legítimamente defender el honor de la República en un episodio análogo, lo hizo con mucha mayor gallardía y entereza que los hombres de diciembre, que en esa circunstancia se encontrarían en estrecha alianza con el extranjero.

investidura, Rosas no dio participación a su jefe inmediato el general López, ni a la Convención. Se trataba de un arreglo entre porteños de una situación local, cuya solución debía llevarse *a posteriori* a las autoridades nacionales, de acuerdo con el más puro espíritu federalista.

El resultado fue el convenio de Cañuelas, del 24 de junio, que firmaron el gobernador interino, general don Juan Lavalle, y el "comandante del pueblo armado de la campaña", coronel don Juan Manuel de Rosas. En él se establecía la cesación de las hostilidades, el restablecimiento de las relaciones y el olvido del pasado. Debía convocarse a elecciones de representantes de la provincia, quienes designarían al nuevo gobernador. Rosas y Lavalle le entregarían el mando de sus fuerzas respectivas, reconociéndose las obligaciones contraídas por el primero durante la campaña y los grados de sus jefes y oficiales. Al convenio público se agregaba una cláusula secreta que lo condicionaba, por la que ambos signatarios se comprometían a auspiciar una lista mixta de diputados y determinados nombres para los cargos principales.

Desgraciadamente las cosas no ocurrieron como se había dispuesto. El grupo "ultra" del unitarismo, la camarilla logista que había recibido con disgusto la noticia del pacto, se hallaba tonificada y envalentonada por el triunfo que acababa de obtener en Córdoba el general Paz sobre las fuerzas del general Quiroga, primera lanza del interior, en La Tablada (22 de junio). Decidió por consiguiente arrasarlo con todo, agrupándose alrededor de la figura prócer de Alvear. Las elecciones se desarrollaron con gran violencia, obligando a los federales a retirarse de los comicios. No obstante ello, el general Lavalle —león en el campo de batalla, pero tímida oveja frente a los argumentos de los doctores— las dio por aprobadas. Esto significaba la ruptura del pacto y la reanudación de las hostilidades. Con clara conciencia de la situación, Rosas la comentaba así, en carta al general Pacheco: "¡Cómo me duele, mi querido compatriota, ver al general Lavalle en ese miserable Fuerte, en ese teatro de perfidia!... Mañana los mismos que hoy lo cercan y alaban... serán capaces de mandarlo degollar". Para no denunciar la existencia de la cláusula secreta alegó el fraude y la violencia cometidos al exigir la anulación de las elecciones.

Lavalle, por su parte, se sinceró ante Rosas con una carta en la que se destaca esta confesión, enternecedora en boca del árbitro aparente de una situación política: "Yo tengo la desventaja de no conocer las personas". Decidieron parlamentar nuevamente. Los mismos "logistas" renunciaron y se dispusieron a emigrar. Lavalle nombró en su reemplazo a Guido (¡ex minis-

tro de Dorrego!), García y el coronel Escalada. Luego celebró con Rosas un nuevo convenio en Barracas el 24 de agosto, que se consideró como adicional del anterior y por el cual resolvían nombrar gobernador provisorio al general don Juan José Viamonte, acompañado de un Senado consultivo formado por las principales personalidades de la ciudad y con cargo de pacificar los espíritus y constituir los nuevos poderes.

* * *

La elección de Viamonte —personalidad sin mayor relieve ni aptitudes políticas, pero general de la Independencia y hombre honorable universalmente respetado— no provocó el aquietamiento de los espíritus, a pesar de sus esfuerzos en tal sentido, incluso la prohibición de ostentar divisas partidarias cuyo uso se había hecho general. Contribuían en primer término a mantener la inquietud las noticias de la guerra del interior, con su crónica de atentados reales o ficticios que alimentaban la polémica periódica; y en segundo término, el encono del grupo que se veía derrotado por la opinión, que mantenía empero su esperanza en la acción del general cordobés y que, disminuido por la deserción oportunista, pretendía suplir con la violencia del acento la exigüidad de sus efectivos. El propio Lavalle no pudo aceptar su derrota con serenidad y buscó pretextos fútiles para renunciar en términos destemplados a la Comandancia de caballería y pedir sus pasaportes para Montevideo. Los federales, por su parte, centraban su agitación en el tema sangrante aún de la ejecución de Dorrego, prodigándose en homenajes y funerales a su memoria, que el régimen anterior había prohibido. Todo ello formaba un clima poco propicio para una vida política normal, pues cualquier agitación con fines electorales habría provocado hechos sangrientos y disturbios, dada la excitación de los ánimos.

La dificultad expresada movió al gobernador a derogar el decreto que convocaba a elecciones. Una nueva tesis había surgido, originada en el grupo de amigos de Rosas y que había hecho camino en la opinión. ¿A qué convocar una nueva legislatura, cuando la disuelta a raíz del motín de septiembre no había terminado su mandato legal? Elegida con intervención de todos los partidos, no se habían objetado sus resultados; y el golpe de mano que suspendió su funcionamiento, no podía tener el alcance de quebrantar la legalidad. Se hizo sobre esa fórmula una consulta a la ciudad y la campaña y obtuvo aceptación casi unánime. Ante este pronunciamiento, el general Viamonte expidió un decreto, por el cual se convocaba nuevamente a sesiones a la legislatura disuelta.

XV. LA LUCHA POR LA LIBERTAD (Segunda Parte)

La legislatura restaurada reanudó sus sesiones el 1° de diciembre de 1829, al año justo del motín que la había disuelto. Su presidente don Felipe Arana pronunció un discurso en el que historió las causas del forzado receso; después de lo cual el gobernador interino Viamonte leyó su mensaje. Aludía en él a los desastres del año transcurrido "en que las pasiones más furiosas amenazaban hundir para siempre la libertad, el honor y la fortuna de la patria", y se felicitaba "de ver restablecida pacíficamente la legislatura de la Provincia".

Era imperioso elegir gobernador titular. La opinión general indicaba un solo candidato: el que había dado mayores pruebas de visión política, de cordura y de patriotismo en medio de la perturbación de los espíritus, el comandante general y caudillo indiscutido de la campaña. Antes de proceder a su elección debió la corporación especificar la extensión de sus atribuciones. Tal fue el objeto de la ley del 6 de diciembre, en la cual, después de enumerarse las facultades corrientes del Ejecutivo, en materia de administración, defensa y policía, se investía al gobernador que resultara nombrado con las "facultades extraordinarias" que juzgase indispensables para su desempeño, con cargo de dar cuenta del uso que hiciera de esa "especial autorización" a la próxima legislatura.

Las facultades extraordinarias no eran una novedad en nuestro derecho público. Equivalentes a la dictadura de salud pública de la legislación romana, habían gozado de ellas los primeros gobiernos revolucionarios y los del año 20. Se trataba de una facultad de excepción para hacer frente a circunstancias también excepcionales. Nadie podía negar que tal fuese la que se estaba viendo, sobre el rescoldo ardiente todavía de la guerra civil provincial y frente a un interior en plena convulsión, por lo cual ese artículo no sorprendió ni menos escandalizó. Había conciencia hecha sobre la urgencia de reforzar la autoridad, y además inspiraba confianza la moderación notoria del candidato.

Inmediatamente de votada la ley se eligió gobernador y capitán general de la provincia al coronel Juan Manuel de Rosas. El día 8 se recibió del mando. Una gran multitud lo acompañó al Fuerte, donde lo esperaban para saludarlo todos los personajes

principales de la ciudad, desde los tres sobrevivientes de la Primera Junta —Paso, Matheu y Azcuénaga— hasta los generales que pocos días antes se contaban entre sus adversarios, como Soler y Alvear. En su breve discurso, atribuyó su elección al imperio de las circunstancias, contra las que no podía resistir. Siguiendo la costumbre establecida de dirigirse al pueblo, expidió tres proclamas: una a la ciudadanía en general, otra al ejército y marina y la tercera a las milicias de la provincia, sostén principal de su poder. En esta última expresaba su intención de desempeñar "una autoridad paternal que, erigida por la ley, gobierne de acuerdo con la voluntad del pueblo".

Nombró ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores al general Guido, de Guerra al general Balcarce y de Hacienda al doctor García, los tres de origen directorial, pero plegados al federalismo a raíz de la presidencia de Rivadavia.

El orden estaba restaurado en Buenos Aires. Pero el interior seguía convulsionado por la abusiva intervención militar. Las gestiones iniciadas por la Convención de Santa Fe en el sentido de la paz habían resultado infructuosas, porque si bien ambos bandos contendientes aceptaron la mediación en principio, sus comisiones no llegaron a ningún acuerdo. La guerra continuaba. El general Paz había provocado un movimiento en Mendoza y puesto en el gobierno al general Alvarado, al mismo tiempo que llevaba una violenta y exitosa campaña contra las milicias federales en las sierras cordobesas y en las fronteras de La Rioja y San Luis. Pero Quiroga, repuesto ya de La Tablada, había enviado a Mendoza una división al mando del general Villafañe, la cual restableció, al cabo de encarnizados combates, el gobierno legal del coronel don Félix Aldao. Tal era la situación del centro y noroeste cuando Rosas se hizo cargo del gobierno.

En el litoral el panorama era distinto. Tanto López como Viamonte habían firmado con el cordobés tratados de paz y amistad, y Córdoba había delegado en el gobernador de Buenos Aires la dirección de las Relaciones Exteriores. Teóricamente, la guerra civil estaba relegada al interior, aunque ninguna de las partes se engañaba sobre las derivaciones futuras y ambas veían en los pactos un mero expediente para ganar tiempo hasta lograr la consolidación de las respectivas situaciones internas.

Que Rosas especialmente no se equivocaba sobre la realidad del momento lo prueba su correspondencia con su amigo el gobernador de Santa Fe. Pocos días antes de asumir el gobierno

le afirmaba que la única posibilidad de lograr una conciliación con Córdoba consistía en la eliminación del general Paz, "porque de ningún modo conviene que tal hombre quede entre nosotros". Y agregaba: "A nuestro amigo y compañero Quiroga es necesario sacarlo airoso de esta empresa, porque es un argentino a quien debe mucho nuestra patria".

De las esperanzas cifradas en la acción del nuevo mandatario dieron fe las manifestaciones de que lo hizo objeto la Sala de Representantes, reflejo del regocijo público por la pacificación. Se lo proclamó "Restaurador de las Leyes e Instituciones de la Provincia", se le confirió el grado de brigadier y una espada de honor. Con todo, había matices en el acatamiento. La opinión de los federales "netos", que sostenían la necesidad de revestir a la autoridad del máximo de poder y prestigio y cuyo vocero fue don Tomás de Anchorena, prevaleció sobre el grupo liberal, que mostraba desconfianza por el otorgamiento de excesivas facultades al Ejecutivo.

La tarea que Rosas debía enfrentar era doble y compleja. En primer término, afianzar su autoridad en la Provincia, restableciendo el orden moral quebrado por la lucha de facciones y restaurando las finanzas exhaustas; y en segundo término, reconstruir los poderes nacionales, darle una cabeza al país. Si la tarea en el orden local era relativamente fácil por el prestigio ganado en la solución de la crisis y el ejercicio de las facultades extraordinarias, el panorama nacional se presentaba lleno de dificultades y peligros.

La Convención de Santa Fe acababa de declararse en receso por la nueva situación, que la privaba de recursos. El general Paz tendía a ampliar su dominación por todo el interior, con el objeto de asegurarse el predominio en el Congreso futuro, a cuya convocación se había comprometido por los pactos con Buenos Aires y Santa Fe. Era evidente el espíritu de revancha unitaria que lo animaba y la intención de reproducir, fundada en el poder de las armas, la situación de 1826. Sólo se le oponía con fuerzas aparentes para contrarrestarlo, no obstante su reciente derrota, el caudillo de los Llanos, que dominaba en Cuyo y el noroeste.

Aparte de esa supervivencia del brote faccioso, era un motivo de inquietud la anarquía de ideas y el choque de intereses entre los propios jefes federales. Los últimos sucesos habían acentuado la vieja hostilidad hacia Buenos Aires, y las negociaciones con las provincias litorales escollaron en las exigencias de franquicias comerciales planteadas sobre todo por Corrientes. Paz especulaba especialmente con esta circunstancia, a favor de la cual podía apelar a una solidaridad provinciana más fuerte que los principios, e intrigaba con los gobernadores para apresurar la con-

vocatoria. Había una fiebre por el Congreso, en el que todos veían una panacea, y cada uno un medio para afirmar su predominio en el orden nacional y en detrimento de la influencia del puerto. Rosas, en cambio, estaba convencido de que cualquier convocatoria sería inoportuna, pues desataría nuevamente la anarquía. Consideraba que el país no podía deliberar mientras se hallaba anarquizado de hecho, y que era indispensable antes que nada restablecer el orden social y político y las relaciones interprovinciales por un sólido sistema de pactos. De esta manera se salvaría una condición que él juzgaba, sin decirlo, indispensable para la existencia del cuerpo nacional y que era su dependencia de la cabeza histórica.

En los primeros meses de su gobierno, la solución se veía lejos todavía; la confusión reinaba en los espíritus, hartos de discordia. El anhelo de paz y de vida ordenada se manifiesta en medio de la lucha sin cuartel. Tal, por ejemplo, en la carta de Quiroga a Paz, mientras se mueve contra él desde Mendoza, y en la cual —después de expresar los cargos corrientes contra la tentativa de oprimir las provincias y afirmar que la lucha se ha trabado "entre los que intentan dominar y los que pelean para no ser esclavos"—, lo invita a cooperar por el establecimiento de la Constitución federal.

Rosas se apresura a ligarse con pactos a las provincias del litoral, a las que la vecindad de Córdoba las hace amainar sus prevenciones tradicionales. Mientras se empeña en prolongar la paz, se prepara para la guerra. Intenta una mediación, que no prospera, entre Paz y Quiroga. Los ejércitos de éstos chocan en Oncativo el 25 de febrero y es nuevamente derrotado el caudillo de los Llanos, quien seguido de los restos de su ejército busca refugio en Buenos Aires. Rosas le brinda una recepción de triunfador. La victoria le ha abierto al cordobés el camino de la hegemonía mediterránea. Rosas, López y Ferré le hacen nuevas ofertas de paz, a las que contesta en tono diverso, tratando de romper la solidaridad del grupo e introducir la desconfianza entre sus miembros.

En larga y laboriosa correspondencia, Rosas logra ir imponiendo poco a poco a sus aliados su criterio de que es indispensable la eliminación de Paz. Este, mientras tanto, no pierde el tiempo. Por medio de expediciones militares, depone a los gobernadores federales del interior y los reemplaza por jefes adictos. El 30 de agosto estas provincias ocupadas se unen por un pacto, en el que erigen un Supremo Poder militar que se encomienda al general Paz, como jefe de las fuerzas de todas las signatarias.

Con la formación de esa Liga del interior, el país quedaba dividido en dos campos inconciliables. Frente a Buenos Aires y el litoral federales se levantaba aquel bloque sobre cuya orientación no cabía ya ninguna duda, pues reproducía las actitudes y el lenguaje unitarios en la nueva intentona de sujetar los núcleos provinciales a un solo poder, sofocando sus anhelos de libertad. La facción derrotada en la capital se movía ya alrededor del general Paz, ansiosa de desquite: los hombres de "las luces y los principios" —los Agüero, Carril, Varela y Alsina— confiaban en recuperar por las armas el ascendiente que les negaba la opinión y se aprestaban a secundar la empresa desde Buenos Aires y la emigración, moviendo a los elementos descontentos de las provincias limítrofes.

El atropello de Paz a las autonomías provinciales abrió los ojos a los gobernadores que creyeron poder pactar con él mientras se mantenía en los límites de su provincia, dándole la razón a Rosas. Este se cartea con López, con Solá, con Ferré y prepara el tratado que ha de unir a las cuatro provincias litorales en un propósito común, al mismo tiempo que purga de elementos adversos su administración. Mientras se dispone para la guerra, no descuida una sutil diplomacia con el cordobés, para mantener el mayor tiempo posible el *statu quo*. Paz, con su posición consolidada, ha invitado a Buenos Aires y Santa Fe a concurrir a un Congreso Constituyente que ha de celebrarse en Córdoba. Se le contesta que no inspira confianza una convocatoria emanada de quien tiene a las provincias sujetas al poder militar y amaga a las litorales; que, no obstante, se aspira a conservar relaciones amistosas con él, "a fin de que cuanto antes llegue el momento deseado de la organización de la República bajo el sistema federal".

Duraban estas negociaciones cuando estalló en Entre Ríos la revolución del 1° de noviembre, movida por los unitarios emigrados en Montevideo y realizada por el coronel Ricardo López Jordán y los jóvenes Cipriano y Justo José de Urquiza. El gobernador fue depuesto. Pero la revolución degeneró pronto en lucha de dos bandos rivales, con lo que se frustró el propósito unitario de constituir una cabeza de puente en el litoral. La lucha duró con alternativas cuatro meses. Después de diversos combates y jaqueados por el gobernador de Santa Fe, los revolucionarios fueron derrotados en Nogoyá el 31 de marzo de 1831, y abandonaron el campo. Entre Ríos pacificado se incorporó al Pacto Federal, que se había firmado el 4 de enero de ese año entre las provincias litorales.

Este Pacto Federal tiene una importancia extraordinaria porque será la base del derecho público de la futura Confederación. Por él adoptan las provincias signatarias la forma republi-

cana, representativa y federal y estipulan una alianza contra cualquier agresión; declaran derechos y garantías recíprocas para sus habitantes, y crean una "comisión representativa" como órgano común, formada de un diputado por cada una y residente en Santa Fe. La comisión se halla autorizada para celebrar tratados, declarar la guerra consultando a las provincias, nombrar al general de los ejércitos, determinar los contingentes de tropas, reglamentar el comercio interno y externo e invitar oportunamente a los demás estados nacionales, cuando se hallaren "en plena libertad y tranquilidad", a llevar adelante la organización definitiva de la República.

La Comisión Representativa se reunió en Santa Fe el 15 de febrero y su primer acto fue expedir un manifiesto explicando los motivos de la campaña que se iniciaría contra el general Paz y designando jefe de las fuerzas aliadas al general don Estanislao López. En ese documento, después de recapitular las tropelías cometidas por los invasores de las provincias del interior, se declara que el objetivo de la lucha consiste en "salvar el honor de las provincias litorales, descargar a los pueblos del interior de la tiranía que los abrumba y dejarlos en plena libertad".

La guerra ya se había iniciado en el norte, con la sublevación popular de Salta y la de Santiago del Estero, contra la tiranía del coronel Deheza. Las provincias reaccionaban por sus propios medios contra la opresión militar, cuyos agentes sólo eran por lo común dueños del suelo que pisaban.

El ejército porteño se puso a las órdenes del general Balcarce. Quiroga, con fuerzas reclutadas en Buenos Aires, debía operar sobre Cuyo, y López sobre Córdoba. Las operaciones se iniciaron con éxito fulminante. Los comandantes Francisco y Guillermo Reynafé, con fuerzas santafesinas, ocuparon varios departamentos de la campaña cordobesa, después de encuentros parciales en que resultaron victoriosos. El general Pacheco, de la vanguardia porteña, batía a la vez al general unitario Pedernera en Fraile Muerto. Mientras tanto, el Tigre de los Llanos lleva adelante una campaña admirable de empuje, rapidez y coraje, la mejor de su vida. El 5 de marzo, en marcha hacia Mendoza, cae sobre Río Cuarto y se apodera del lugar, después de tres días de combates. La columna unitaria, al mando de Pringles y Echeverría, sale en dirección de San Luis, y Quiroga la persigue, reforzada su tropa por la gente del lugar, la alcanza en Río Quinto y vuelve a derrotarla. Entra sin resistencia en San Luis, se posesiona de la ciudad, refuerza nuevamente su ejército con el aporte entusiasta de la población y se dirige a Mendoza. Allí lo espera el coronel Videla con 2.000 hombres de línea. Se encuentran en Potrero Chacón y Quiroga, en furiosas cargas, le inflige una completa derrota. Entra

sin resistencia a la ciudad. Aquí se enteró de que su lugarteniente el general Villafañe ha sido asesinado al regresar de Chile para unírsele. En represalia, manda fusilar a los prisioneros.

La situación de Paz en Córdoba se hacía sumamente crítica, con sus enemigos victoriosos en todos los flancos y amenazando cercarlo y la aproximación del ejército de Balcarce por el sur. Decidió dirigirse sobre el enemigo más próximo, que era López. Este, al principio, eludió el combate. En una de las operaciones de aproximación para provocar el encuentro, una confusión hizo que el jefe unitario se topara por sorpresa con un destacamento del ejército enemigo. Cuando volvió grupos para disparar, ya era tarde; le bolearon el caballo y cayó prisionero. Fue conducido al campamento de López, que lo trató con toda consideración, y de allí marchó preso a Santa Fe.

La prisión de Paz descabezaba al ejército unitario y lo privaba de su mayor —si no única— capacidad militar. Así lo entendió el prisionero, quien le escribió de inmediato al general Lamadrid, que lo había reemplazado en el mando, aconsejándole aceptar las proposiciones que le haría López, sobre la base del federalismo. Pero Lamadrid se creyó capaz de resistir. Dejó que el gobernador delegado Fraguero pactara con López las condiciones de rendición de la ciudad de Córdoba y se dirigió a Tucumán con los 1.500 hombres que le quedaban, después de exigir una fuerte contribución de guerra a los vecinos. Tucumán era su provincia natal y gozaba en ella de alguna popularidad, aunque no tanta como él suponía.

Con la pérdida de Córdoba y Cuyo estaba liquidada ya la causa unitaria y sólo faltaba una operación de limpieza. Es de advertir que la llegada de las tropas federales (según lo reconoce el mismo Paz en sus "Memorias") provocaba el júbilo de las poblaciones, que las recibían como libertadoras. El 11 de junio entraron en Córdoba los generales López y Balcarce, en medio del regocijo popular. Ya la provincia se había declarado adherida al Pacto Federal y elegido como gobernador al coronel don José Vicente Reynafé. El ejército de Balcarce regresó a Buenos Aires, trayendo como prisioneros al coronel Videla y un grupo de oficiales, que fueron fusilados en San Nicolás por orden de Rosas, en represalia de las ejecuciones ordenadas anteriormente por Paz, Lamadrid y Deheza.

Entre tanto, Quiroga había barrido de enemigos el resto de las provincias andinas y el general Ibarra había sido restituido a Santiago del Estero con el auxilio del general don Pablo Latore. Ya estaba la provincia adherida al Pacto Federal por obra del gobernador interino don Santiago de Palacio, surgido de la insurrección popular por el voto "del pueblo y la milicia". Sólo

quedaban en poder de los unitarios Tucumán y Salta. En la primera dominaba Lamadrid, con las fuerzas restantes de Paz y la división tucumana al mando del general Javier López; y en la segunda el general Alvarado con algunas milicias. Quiroga se dirigió contra los primeros, y el 4 de noviembre, después de dos horas de encarnizado combate, con fuerzas iguales en número, se impusieron su táctica y su coraje en la batalla de Ciudadela, contra las tropas de línea al mando de un grupo de jefes prestigiosos. A Salta no le quedaba más que capitular, como lo hizo al poco tiempo.

Con diversas alternativas, la guerra civil suscitada por el motín de Lavalle había durado tres años. Para las poblaciones invadidas por la fuerza militar sublevada y lanzada a la acción por el impulso porteño, no había tenido otro significado que el de la vieja opresión, que sólo cambiaba de formas y circunstancialmente —con el reemplazo de Lavalle por Paz— de centro provisorio de irradiación. Habían luchado por su libertad y habían vencido; pero la guerra había sido dura.

*¡Qué vida tan desgraciada,
Vida tan sin esperanza!
Con tantas revoluciones
Sólo el que muere descansa.*

Así expresaba el cantar anónimo los sentimientos de la época. Es de imaginar el alborozo con que se recibiría la paz, en un sentido que alegraba a todos.

XVI. LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER. ROSAS

Dos tareas primordiales ha debido acometer Rosas en el orden provincial: restablecer la confianza y restaurar la hacienda pública. A ellas obedece la elección de su ministerio, formado de hombres espectables. Guido y Balcarce han sido ministros de Dorrego: significan una continuidad. Por lo que se refiere a García, si bien sus antecedentes políticos no parecían recomendarlo, cabe advertir que se ve en él no tanto al diplomático infortunado, cuanto al experto ministro de Rodríguez y Las Heras, al técnico de las finanzas que ha dado pruebas de su competencia en momentos difíciles. Su presencia en el ministerio tiene el objeto aparente de apaciguar y provocar la adhesión al nuevo régimen de un sector importante de la burguesía urbana y del comercio inglés. Significa una garantía de que en las materias de su incumbencia no se harían, por el momento, cambios peligrosos.

No obstante la adhesión popular al nuevo gobierno, la conspiración unitaria continuó en los primeros tiempos, estimulada por los éxitos de Paz en el interior. La represión se limitó empero a lo estrictamente indispensable, como las medidas referentes a la tenencia y venta de armas, quedando en la ciudad sin ser molestados los hombres no especialmente comprometidos del decembrismo, salvo su nueva eliminación de los cargos públicos que desempeñaban.

Rosas recorrió personalmente los departamentos del norte de la provincia para enterarse de sus necesidades y se ocupó de la reorganización de la justicia de paz de la ciudad y campaña, a la que daba especial importancia por su relación inmediata con la población de escasos recursos. Reorganizó asimismo la policía, dividiéndola en nuevas secciones la urbana y la rural, y dictó diversas disposiciones que mostraban la intención de atender a muchos problemas rurales descuidados hasta entonces por los gobernantes urbanos del tipo de Rivadavia, como las referentes al uso de los animales "reyunos" (cuya designación se cambió por "patrios"), el tránsito sin pasaporte y los derechos de pontazgo.

Por las exigencias de la guerra y la vigilancia de las fronteras del sur, debió efectuar varias delegaciones del mando en sus ministros, con quienes se mantenía en constante comunicación epistolar. De acuerdo con la concepción paternalista que se ha hecho del gobierno, piensa en todo y se interesa por los ramos más dispares: desde la provisión de los cargos judiciales (nombra en la Cámara de Apelaciones a los miembros más prominentes del foro como Castro, Tagle, Anchorena, López y Arana), hasta la reparación de iglesias a cargo de su peculio personal. En esta materia, se muestra dispuesto a reaccionar contra la tradición liberal y masónica que tantos males ha causado. Sabe que el país atraviesa por una crisis moral, que exige remedios del mismo orden, los que sólo pueden venir de la Iglesia. Por eso procura la reanudación de los vínculos con la Santa Sede, levanta templos en la campaña y no pierde oportunidad de mostrar su acatamiento a la fe heredada. Sus soldados han de ir a misa en formación, para mostrar a Dios "la veneración que marca la ordenanza". Se escandaliza del descuido anterior en esta materia. "¡Cómo se ha minado por nuestros gobiernos, padrino, la religión santa de Jesucristo, la religión de nuestra tierra!" —le escribe al cura Terrero—. "Ahora será distinto —afirma—, todo ha de ir bien porque el ejemplo puede mucho".

Como afirmación del espíritu nacional y su voluntad de independencia declaró fiesta solemne al 9 de julio, y decidió que no se admitiesen cónsules de ninguna nación que no hubiese expresamente reconocido dicha independencia.

Al mismo tiempo se ocupaba, con la hábil ayuda de García, en la restauración de las finanzas. En 1829 sólo se habían recaudado ocho millones de pesos y los gastos ascendían a veintitrés. La práctica de las emisiones sin respaldo había desvalorizado pronunciadamente la moneda. Esto no se debía a la mala administración, sino a la gran sequía que asolaba a la provincia desde 1827 y cuyas consecuencias contribuían al malestar político. Unos cuantos meses de administración ordenada y las primeras lluvias bastaron para devolver la confianza a los capitalistas y restablecer el crédito. Se reanudó el comercio internacional y las rentas de la Aduana subieron, si bien el mercado se inundó de mercadería extranjera.

Esta última circunstancia habría de provocar un nuevo brote de resentimiento contra Buenos Aires, que dificultaría la tarea inmediata de Rosas, ya que esa política comercial no era más que la continuación de la de Rivadavia, favorable al puerto único a expensas del interior. El gobernador de Corrientes, Ferré, protestó contra "el comercio de extranjería". Rosas lo mantuvo, sin embargo, porque ello significaba la financiación de la guerra in-

minente y porque no podía, por lo demás, renunciar al privilegio de que gozaba su provincia por razones de situación, sin una compensación equivalente.

* * *

Con la terminación de la guerra civil se habían abierto las vías para la unión; pero ésta no se había consumado en los hechos. Quedaba un país profundamente dividido y receloso, cubierto de heridas todavía sangrantes. El Pacto Federal era un simple instrumento legal, lleno de sabias previsiones, entre ellas la relativa a la formación de la autoridad nacional que faltaba; pero su aplicación constituía un camino bordeado de peligros, a causa de las pasiones encendidas y los intereses contrapuestos. La delegación de las relaciones exteriores en el gobierno de Buenos Aires representaba un comienzo de unidad. Pero, ¿concederían las provincias esa delegación sin condiciones? El gesto hosco de Ferré anunciaba que no. En todas partes empezaba a alzarse el clamor por la reunión del Congreso, que los unitarios infiltrados coreaban, tratando de introducir cizaña en las filas poco coherentes del federalismo triunfante y entre las personas de sus tres jefes de primer plano —Rosas, Quiroga y López— o de sus lugartenientes Ferré, Ibarra y Reynafé.

* * *

Antes de proseguir, conviene volver los ojos por un instante sobre la personalidad singularísima del hombre que pondrá su sello a un cuarto de siglo de nuestra historia.

Lo hemos visto actuar desde sus comienzos de joven estanciero a cargo de las milicias de campaña antes del gobierno de Martín Rodríguez, y en su evolución posterior hacia el federalismo, por un sentido muy estricto de obediencia al orden legal. La defensa de la ciudad contra la anarquía (personificada, para él, primero en los caudillos invasores y luego en el motín militar) fue su escuela política, que le mostró con toda claridad dónde estaban los verdaderos principios de la libertad y del orden. Desde entonces se puso a su servicio. Arrastrado a la política por las circunstancias, encontró en ella su vocación y se consagró a ella con todo el impulso de su inteligencia y de su voluntad, enriquecidas por la experiencia adquirida en las empresas agrícolas e industriales que, desde su primera juventud, habían absorbido su energía.

Como todos los políticos natos, Rosas era antes que nada un hombre de acción, una energía desbordante que debía traducirse en creaciones. Si comparamos su carrera con la de los grandes tipos de políticos que nos muestra la historia, desde un César a un Mirabeau, observaremos sorprendentes analogías, sobre todo en ese aspecto de la actividad infatigable orientada hacia lo concreto. Este tipo humano representa el polo opuesto al contemplativo de gabinete, al intelectual que se paga de teorías, en quien suele suscitar una antipatía natural que retribuye con desdén, puesto que triunfa donde aquél fracasa: lo cual no significa que sea menos inteligente —puede serlo más—, sino que su inteligencia no se satisface en el juego especulativo, porque debe servir a su necesidad de hacer. La de Rosas era eximia, y sin duda cultivada por toda clase de lecturas en los forzados ocios campesinos, como se advierte en la precisión y la frecuente elegancia de su estilo epistolar y burocrático. Pero necesitaba aplicarla a empresas creadoras, y así fue como, independizado desde muy joven de su severo hogar patricio, fue a trabajar al campo, fundó estancias, estableció industrias, administró bienes propios y luego —por la confianza que inspiraba— ajenos, e hizo una sólida fortuna.

La vida en el campo lo puso en contacto con los problemas rurales, cuyas soluciones meditó largamente, refiriéndolos a sus causas; lo cual debía llevarlo insensiblemente a la política, puesto que todo se relaciona. Y la necesidad de la defensa contra el peligro permanente, que era el malón, lo llevó a la milicia, y a emplear el sistema mixto de diplomacia y rigor que era en sí mismo una política consumada y en el que obtuvo un éxito total. Para combatir al indio se empeñó en conocerlo; aprendió su idioma y sus mañas para conquistarlo, y así se hizo amigo de algunas tribus dividiendo, según la táctica más aconsejada, al enemigo para vencerlo. Todo esto lo erigía en jefe natural, porque era el mejor, el más inteligente, el más diestro, el más valiente; y alternativamente, según los casos, el más duro y el más generoso. Antes de los treinta años era el caudillo de la campaña del sur y sabía que para resolver los problemas del campo era urgente la pacificación política, poniendo fin a la zozobra en que se vivía desde comienzos de la época revolucionaria.

Los diez años transcurridos desde 1820 —experiencia rica en vicisitudes— habíanlo madurado, dándole una idea clara de la situación general del país y la intuición de las soluciones. Sabía ya que la causa primera de las perturbaciones sufridas consistía en la acción de los ideólogos y demagogos, que pretendían sujetar a los pueblos a principios que éstos rechazaban —que es la definición misma de la tiranía— apartándolos de la forma tradicio-

nal de gobernarse que identificaban con la libertad; y que esa operación se hallaba ligada a intereses comerciales espurios, a los intereses de "los quebrados y agiotistas que componen esta aristocracia mercantil", según dijo una vez, con fórmula en que se traduce el desdén del auténtico aristócrata por el advenedizo inescrupuloso. Sabía, en suma, que la solución estaba en la causa de los pueblos, identificada con el federalismo. Pero el peligro próximo del federalismo era la desintegración. Tal era el argumento de los directoriales y los unitarios, que habían pretendido conjurarla mediante la intervención militar y la constitución centralista, sin otro resultado que exacerbar el patriotismo local y el odio a Buenos Aires. Esa política nos había ocasionado la pérdida de las provincias altoperuanas, del Paraguay, y de la banda Oriental; y no era probable que el movimiento se detuviese allí, pues ya intrigaban los emigrados en la Mesopotamia por el Este, en Cuyo por el Oeste y en Jujuy y Salta por el Norte. A la tarea de conciliar dos términos aparentemente contradictorios —la autonomía con la unidad— se aplicó Rosas con todas las fuerzas de su alma y todos los recursos de su indudable genio político y triunfó en ella, venciendo obstáculos que a cualquier otro habríanle resultado insalvables: celos e intrigas internas, calumnia sistemática, resistencia armada, intervención extranjera.

Hasta ese momento no habíamos sido muy felices en el ejercicio del gobierno libre. La revolución no había dado ningún estadista, ningún político de gran envergadura, salvo Moreno, astro fugaz, que señaló un rumbo y se hundió. El general Alvear había mostrado ciertas dotes; pero las circunstancias internacionales y su extrema juventud lo hicieron fracasar, según vimos, y cuando volvió en el año 20, con clara visión de la realidad nacional y sus remedios, arrastraba el lastre de su fracaso demasiado reciente, unido al que le sumó su alianza con los caudillos invasores, que exasperó contra él la resistencia localista porteña. Dorrego, más soldado que político, había fracasado —no obstante su claro talento— por su liberalismo doctrinario y su falta de ductilidad para adecuarse a las circunstancias. Pueyrredón no había sido más que una brillante mediocridad, siempre por debajo de su situación, y Rivadavia —¡el famoso Rivadavia!— todo lo contrario de un político, o mejor dicho, su caricatura. No habíamos carecido, por cierto, de hombres de consejo más o menos acertado, como el viejo Paso, como el general Guido, como el doctor Tomás de Anchorena, como Gorriti y Castro Barros, como el deán Funes, como Arana. Pero más frecuentes que éstos —y a menudo más escuchados— habían sido los ideólogos y fantasadores del tipo del noble general Belgrano, infalible en el desacierto, o los clérigos regalistas y fantasmones del equipo rivada-

viano. Por lo que hace a Artigas, Quiroga, López, dueños de valores diversos, no pasaron del ámbito del caudillismo local, ni siquiera en el alcance de su ambición y fueron más temperamentos que inteligencias. Acaso pudo ser una esperanza Ramírez, víctima asimismo de su estrella. Ninguno había logrado crear un orden nacional, dominar la anarquía, poner un dique a la fatal tendencia a la desintegración. Esta sería la obra de don Juan Manuel de Rosas.

Era natural que, para lograr su objetivo, se erigiera en único juez de sus medios, por ser el único que dominaba la totalidad de las circunstancias, tanto por su situación como por su comprensión excepcional de la realidad concreta. ¿Cómo reprocharle que haya sido a veces duro, si él consideraba esta dureza necesaria? En esas ocasiones es casi seguro que tenía razón y que las ejecuciones capitales que ordenó para salvar la patria asumieron un carácter de sacrificio de sangre ineludible y casi diríamos sacramental. Sea esto dicho para encarar de frente el cargo más constante contra el Restaurador, sin aceptar por ello que haya sido especialmente sanguinario. La crítica histórica ha demostrado que las "tablas de sangre" de sus adversarios se hallan tan cargadas como las que a él se le atribuyen, sin justificarse por los resultados, desde Dorrego hasta Chilavert y el Chacho.

Si es así, ¿cómo se explica su leyenda? En el fondo, no tiene otro origen que la antipatía, tradicional en la América hispana, del especulativo (fraile o leguleyo) contra el activo (encomendero o militar), del hombre de toga o levita contra el de espada o lanza. Basta leer las expresiones con que se refieren a él en su correspondencia los unitarios desterrados desde los comienzos de su gobierno, es decir, mucho antes de que hubiera realizado ningún acto de rigor. Es el bárbaro, el salvaje, el "gaucho bruto". ¡Ah, los escrúpulos de los tenderitos graduados en el colegio y que se sienten muy superiores a sus compatriotas porque abominan de España y de la religión, ante el magnífico campesino que acaba de frustrar sus esperanzas de imponer al país el reinado de sus "luces"! Es evidente que la leyenda se fragua al calor de esos dos grandes estimulantes que son la soberbia y la envidia. Se completará luego con los ingredientes del novelón romántico. Rosas tenía para ellos, por lo demás, el grave pecado de ser un heredero, y esta circunstancia, unida a la de su formación ajena a los claustros, bastaba para que su dominio se les presentase teñido de ilegitimidad.

Con la terminación de la guerra civil, quedaban en pie dos grandes influencias, además de la del gobernador de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores: la de Quiroga en el interior y la de López en el litoral. Era natural que surgiese inmediatamente la rivalidad por el predominio nacional, que se centró al principio en la situación de Córdoba, donde López había triunfado sobre Quiroga con la imposición de Reynafé.

Se ha visto cuál era la posición del Tigre de los Llanos en materia de organización nacional: lo esperaba todo del futuro Congreso. Tal era también la opinión de López, cuyo eco era Ibarra, y la de Ferré, especialmente empeñado en resolver la cuestión del comercio libre. No obstante su opinión adversa, Rosas se resignó a la reunión de la Comisión representativa de Santa Fe, prevista por el Pacto Federal, a la cual mandó su diputado.

No cejó, sin embargo, en su propósito de impedir una convocatoria que juzgaba inoportuna. Recurrió para ello al razonamiento exhaustivo, en una copiosa correspondencia y en conversaciones privadas, oponiendo hábilmente las ambiciones rivales de sus dos poderosos aliados, hasta que obtuvo el apoyo de Quiroga a su sistema de consolidación del poder por medio de pactos. El descubrimiento de una intriga para precipitar la convocatoria, iniciada por los diputados de Córdoba y Corrientes, agitando la vieja hostilidad del interior contra Buenos Aires, dió el motivo que necesitaba: la denunció como una maniobra del enemigo unitario contra la unión establecida en el Pacto Federal. López debió rendirse ante sus argumentos, la Comisión hubo de disolverse y el peligro de anarquía quedó conjurado.

Mientras tanto, Rosas había modificado su ministerio dividiendo las carteras de Gobierno y Relaciones Exteriores e incorporando al doctor don Tomás de Anchorena y a don José María Roxas y Patrón en reemplazo de Guido y García. En la campaña, descuidada hasta entonces, se realizaban numerosas reformas útiles, sobre todo en materias de educación e higiene. Se fundaban nuevas poblaciones, se iniciaban las obras del canal de San Fernando, se alzaban escuelas y templos. Aprovechando el entusiasmo suscitado por la terminación feliz de la guerra civil, celebrada con fiestas y *Te Deum*, se estableció el uso del cintillo rojo con la inscripción "Federación" como obligatorio para todos los funcionarios administrativos, civiles y militares; con lo cual Rosas no hacía más que sancionar una costumbre que ya se había impuesto como tal y que respondía a la necesidad que siente el pueblo de expresar en símbolos su fe.

Se iniciaba así la mística del régimen, con sus consabidos actos, objetos y palabras sacramentales. Así como el rojo era el color federal, habría muy pronto una manera federal de vestirse y

de llevar el bigote y la patilla, un ceremonial complicado, un estilo, que se caracterizaría por cierto énfasis tradicionalista y criollo, y aun por cierto "gauchismo" provocativo, que no era más que una reacción legítima contra el irritante extranjerismo que afectaban los rivadavianos. El "gringo" —es decir, el inglés o el francés— dejaría de ser un objeto de culto para convertirse en un objeto de mofa y de natural recelo. Y el "hijo del país" —despreciado hasta entonces por la minoría urbana— recuperaría el sentido de su dignidad y el tranquilo orgullo de saberse dueño de casa.

Con motivo de un ataque norteamericano a las Malvinas, el gobierno efectuó una protesta y obtuvo reparación. Y a raíz de la continuación de los malones indígenas, se firmó un convenio con el gobierno de Chile para efectuar una expedición conjunta. A la expiración de su mandato, Rosas fue reelecto. Pero rehusó aceptar, no obstante la insistencia por tres veces de la unanimidad de la legislatura. Había surgido en el seno de su partido una disidencia sobre las facultades extraordinarias, que la fracción liberal se oponía a otorgar nuevamente.

Se designó entonces al general Balcarce, a quien Rosas transmitió el mando el 17 de diciembre de 1832.

XVII. LA CONQUISTA DEL DESIERTO Y LA REVOLUCIÓN DE LOS RESTAURADORES

El problema del indio había sido descuidado veinte años por los gobiernos revolucionarios. No era ajena a esa pasividad la influencia de la revolución ideológica operada a raíz de la guerra contra España y que se tradujo en una exaltación sentimental del aborigen, víctima de la "usurpación". Ese indigenismo ruseliano, que se exhibe en documentos de tanta trascendencia como el "manifiesto" que dio el Congreso de Tucumán al declararnos independientes, era una confesión de culpa por parte de los hijos de los conquistadores y anunciaba un cambio fundamental de política: el fin de la conquista por las armas. El indio no sería ya el enemigo, sino el hermano desgraciado a quien había que amparar, y el progenitor a quien había que honrar. Tan hondo había calado la influencia de Rousseau que se prefería (aun por quienes no tenían en sus venas ni una gota de sangre aborigen) apelar a la tradición de aquella gente "natural", inocente y desdichada, que a la de sus "corrompidos" y "sanguinarios" sojuzgadores. Esta ideología que dominó en la Asamblea, el Congreso de Tucumán y los Directorios, se manifestaba con mayor virulencia en los representantes del norte, donde el aborigen ya no representaba peligro y era más general la mezcla de razas, y entre los "ilustrados" de las ciudades, que sólo habían visto a los indios de lejos.

- La consecuencia de este indigenismo literario era la indefensión de los poblados y la insolencia cada vez mayor de las tribus, que se acrecentaba a favor de las disidencias civiles. Los doctores del gobierno solían despertar a la realidad después de cada malón imprevisto, con matanzas, incendios y robos de mujeres y ganado, y acudían a reforzar precipitadamente las líneas de frontera o enviaban expediciones punitivas que siempre concluían desastrosamente en carreras agotadoras por el vasto desierto, cuyos secretos sólo el indio conocía y dominaba.

Rosas se había criado y hecho hombre en la frontera y tenía en la sangre la tradición viva de la guerra contra el infiel. La estancia del Rincón de López —donde su abuelo materno, don Clemente López de Osornio había muerto víctima de un malón— era una verdadera "marca". No participaba, por consiguiente, de aquellas ilusiones (que, por lo demás, ya se habían disipado bas-

tante) y consideraba que el problema del indio sólo se resolvería por su total sometimiento o el exterminio de los recalcitrantes; es decir, la continuación del sistema de la conquista. Durante su actuación como comandante de la campaña había propuesto el avance paulatino de las líneas fronterizas y el sistema mixto de negociación y rigor, que aplicó con éxito, ganando la confianza de los caciques por el cumplimiento riguroso de los compromisos y el castigo de las transgresiones; y se había opuesto a las expediciones punitivas condenadas al fracaso.

Al cabo hubo de convencerse de la insuficiencia de ese método. Los malones se habían convertido en una verdadera industria, apoyada por intereses poderosos que contaban incluso con la complicidad de funcionarios de la campaña: el producto de los robos se negociaba por lo común en Chile y producía a los intermediarios pingüe provecho. Era necesario destruir en su origen el mal.

Combinó entonces con el presidente de Chile la realización de una campaña conjunta por medio de tres columnas convergentes. La de la derecha, al mando del general Bulnes, tendría por misión atajar a las tribus que pasasen la Cordillera. En nuestro territorio operaría una columna central al mando del general Quiroga (quien desempeñaría el comando en jefe de la campaña) y otra izquierda al mando de Rosas, las que se encontrarían junto a las nacientes del Río Negro, después de haber limpiado de aborígenes su recorrido. El general Aldao, por su parte, avanzaría hacia el Sur desde Mendoza. En sustancia, el plan previsto medio siglo atrás por el primer virrey don Pedro de Cevallos.

Rosas asumió la dirección de la campaña como jefe de la división de Buenos Aires y estableció su cuartel general en Monte. Allí empezó a organizar su ejército, poniendo a contribución —para suplir la reticente ayuda oficial— su propio peculio y el de sus amigos. Contaba con la colaboración de algunas tribus aliadas, inestimable como fuente de información y tropas auxiliares. Para que la empresa diera todos sus frutos, agregó a ella un grupo de técnicos e ingenieros, con el objeto de que estudiasen las características geológicas y naturales de las regiones que se conquistasen, así como de efectuar cateos y mensuras.

El 3 de abril de 1833 se puso en marcha la columna en dirección al sur. El 11 de mayo había alcanzado las márgenes del río Colorado, donde se estableció campamento, después de explorar el territorio al Este y al Oeste con columnas parciales y sosteniendo escaramuzas con las tribus de la zona. El naturalista Darwin, en su viaje alrededor del mundo, llegó a ese punto a la sazón y visitó el campamento, dejándonos testimonios en su diario de la fuerte impresión que le produjo el jefe y de la popu-

laridad de la guerra contra el salvaje en toda la campaña, para cuyos habitantes no era el idílico "hermano" de logistas e ideólogos, sino el enemigo alevoso, cruel y rapaz.

La columna del centro, entre tanto, cuyo comando había delegado Quiroga, por hallarse enfermo, en el general Ruiz Huidobro, había batido a las hordas guerreras del feroz cacique ranquel Yanquetruz, persiguiéndolo hasta las márgenes del Salado. Sin medios para proseguir, por falta de las caballadas que el gobierno de Córdoba, violando sus compromisos, no le proveyó, debió volverse. Como represalia, participaría en la revolución que estalló a poco contra Reynafé, para poner en el gobierno a don Claudio Arredondo. Aunque Quiroga lo desautorizó públicamente, hubo de atribuírsele la instigación de la frustrada intentona, dada su rivalidad con López —patrono de Reynafé— y la importancia de la situación del centro en el pleito por la hegemonía nacional. Este episodio (al que no eran ajenos los manejos de los unitarios emigrados, que obraban sobre el gobernador de Santa Fe por intermedio de su ministro Cullen) debe destacarse, porque en él se encuentra el origen inmediato de la tragedia de Barranca Yaco.

El general Aldao había seguido el rastro de Yanquetruz. Lo alcanzó en su toldería, donde destruyó los restos de su fuerza. De allí debió emprender la vuelta, también por agotamiento de sus medios de movilidad.

Por lo que hace al general Bulnes, no pudo terminar su misión por el estallido de una revolución en Santiago. Después de haber colaborado breve tiempo, impidiendo el paso de la Cordillera a las tribus acosadas de este lado, se vio obligado a firmar una paz con los ranqueles de los valles del sur, dejando allí un foco de infección y un vivero de malones futuros.

* * *

Rosas seguía su marcha hacia el Río Negro, divididas sus fuerzas en columnas parciales. El 26 de mayo obtuvo el primer triunfo importante. La columna al mando del general Pacheco destruyó completamente, cerca de Choele-Choel, a la tribu del cacique araucano Pallayrén, que le ofreció combate, matando al cacique y a casi todos los indios de pelea.

Se mandaron de allí destacamentos hacia la cordillera, con el objeto de completar las operaciones que habían dejado inconclusas Bulnes, Aldao y Ruiz Huidobro.

En estas circunstancias tendría Rosas la primera noticia de los extremos a que llegaba contra su persona la hostilidad del go-

bierno de Balcarce, con quien se habían enfriado sus relaciones por muestras repetidas de reacción contra su política, instigadas por la fracción liberal. Por infidencias de unos indios aliados, supo que desde la capital se los incitaba a la sublevación. Intimidados por el general en jefe, los caciques Catriel y Cachul le ratificaron su adhesión y mandaron lancear a los caudillos promotores de rebeldía. En conocimiento de que muchos oficiales, también por intrigas de la capital, se manifestaban descontentos, Rosas los envió de vuelta. No quería, según dijo en esa ocasión, "tener en el ejército hombres que no cooperasen de corazón a la obra grande que se proponía llevar a término, costase lo que costase, de dejar aseguradas las fronteras de la provincia".

Las operaciones prosiguieron con gran energía. El general Pacheco remontó ambas márgenes del Río Negro y destruyó las tolderías del fuerte cacique Chacorí. Otra columna liquidó la indiana brava del cacique Pitrioloncoy. La misma división atacaría a nado la isla Choele-Choel, acuchillando a los salvajes que se habían refugiado en ella y aprisionando multitud de familias. En los cerros próximos se dio cuenta del resto de los fugitivos.

Las fuerzas destacadas hacia el norte, en el territorio de los ranqueles, cumplían entre tanto la operación de limpieza que debía haber realizado la columna del centro, destruyendo al sur de San Luis las indianas de guerra del cacique Yanquimán, al que se habían plegado los restos de la tribu de Yanquetruz. Por la parte sur del Río Negro, la columna al mando del mayor Ibáñez anulaba a los últimos guerreros que quedaban en las inmediaciones bajo el cacique Cayupán, a quien alcanzó y mató antes de que pudiera refugiarse en Chile. En la campaña total se habían liquidado más de diez mil indios de guerra y rescatado cuatro mil cautivos.

A continuación Rosas regresó con su división a Napostá, dejando guarniciones en Choele-Choel, en el cuartel general del río Colorado, en las márgenes del Negro y en los puntos donde antes se establecían fortines. De allí intimó a los indios borogas (que habían celebrado un pacto con él y no lo habían cumplido, continuando en sus depredaciones) a que devolvieran los cautivos y haciendas que tenían en su poder. Como se negaran, atacando a la partida que llevaba el mensaje, mandó sobre ellos algunos escuadrones veteranos que los exterminaron, matando más de mil indios guerreros y rescatando todo lo robado. Era la última indiana rebelde que quedaba. Los tehuelches y los pampas de Catriel y Cachul estaban sometidos. El peligro del indio no existía ya, y no se volvería a hablar de él sino incidentalmente durante los veinte años del gobierno del Restaurador.

En la sobria proclama que dirigió a su ejército antes de licenciarse, en las márgenes del arroyo Napostá, el 25 de mayo de 1834, afirmaba: "Las bellas regiones que se extienden hasta la cordillera de los Andes y las costas que se desenvuelven hasta el afamado Magallanes quedan abiertas para nuestros hijos. Habéis excedido las esperanzas de la patria". . . Se refería luego a la política, anunciando que acababa de evitarse "una lucha fratricida" y que la mano protectora de la Providencia había sacado "del seno mismo de la discordia, un gobierno fraternal". Graves acontecimientos habían ocurrido en Buenos Aires, en efecto, durante los últimos tiempos de la campaña.

El gobernador Balcarce, instigado por un grupo que tenía el influjo decisivo y absorbente de Rosas, se hallaba embarcado re-sueltamente en la política de darle fin. Ese grupo lo formaban los directoriales plegados al régimen; algunos "espadones" del ejército de línea, más heroicos que juiciosos y que juzgaban desdorado el sometimiento a un general de milicias que no había hecho las campañas de la Independencia; doctores secretamente simpatizantes del ideario rivadaviano; hombres de negocios que habían vivido la Jauja del progresismo y querían revivirla, y la gente de aventura que siempre merodea alrededor del poder, todos los cuales habían encontrado su caudillo en el ministro de Guerra, general don Enrique Martínez. El plan constaba de dos partes: primero provocar el fracaso de la expedición al desierto para aniquilar el prestigio del Restaurador; y luego producir, a favor de este desprestigio y con toda la ayuda oficial, una división del partido gobernante, que triunfaría en las elecciones con el apoyo de los elementos unitarios, todavía fuerte en el centro urbano.

Para ello se le habían negado los auxilios más indispensables y se había tratado de sublevar su ejército, al mismo tiempo que se aprovechaba su ausencia para eliminar a sus amigos de la administración y se desataba contra él —mediante el alarde liberal de la supresión de restricciones a la prensa— una violenta campaña de pasquines. El blanco principal de los ataques eran Rosas y su partido, en lenguaje licencioso y soez que no se detenía ni ante los umbrales de la vida privada.

Todo ello producía una atmósfera de inquietud semejante a la que había precedido al motín de diciembre y que se agravó con motivo de las elecciones, a las que el partido gobernante concurre dividido, con dos listas encabezadas ambas por el nombre de Rosas del que por cierto no podía prescindirse. La auspiciada por el equipo ministerial reunía los nombres de los personajes del partido que propiciaba su conversión inmediata hacia un orden liberal y constitucional. Por el color del papel en que se

imprimió se la llamó de los "lomos negros", nombre que se extendió a sus partidarios. La otra era la de los federales "netos". Aunque el gobierno pretendió hacer triunfar su lista a sangre y fuego, posesionándose desde temprano de los comicios y poniendo a su servicio todo el apoyo oficial, lo que dio lugar a sangrientas refriegas, el partido rosista llevaba la delantera cuando se ordenó suspender los actos electorales, alegando como pretexto los disturbios que ella misma había provocado.

Esta circunstancia exacerbó más aún las pasiones, poniendo en la picota al propio gobernador, cuyo nombre había sido hasta ese momento respetado en obsequio a su gloria militar. Rosas se hallaba en comunicación constante con sus partidarios. Su cuartel general se había constituido en su casa de la ciudad bajo la activa dirección y vigilancia de su esposa doña Encarnación Ezcurra, que demostró en las circunstancias gran energía y notables condiciones políticas para recibir y transmitir informaciones y directivas. Por consideración a Balcarce, se realizó una gestión tendiente a provocar un cambio ministerial, eliminando a Martínez y sus partidarios para reemplazarlos por hombres que inspiraran confianza a ambas facciones. El fracaso de esta gestión demostró la imposibilidad de la concordia.

Como recrudesciera la propaganda opositora, el gobierno decidió acusar a los diarios que abusaran de la libertad de imprenta, según la ley en vigor.

El 11 de octubre la ciudad apareció empapelada de carteles anunciando que a las diez de la mañana se enjuiciaría a "El Restaurador de las Leyes", que era el periódico dirigido por don Nicolás Mariño. Ante el equívoco que entrañaba la leyenda, que podía interpretarse como referida a la persona misma de Rosas, se aglomeró en el tribunal una gran muchedumbre de federales, lo que suscitó alarma en el gobierno y le hizo concentrar en el Fuerte las fuerzas de que disponía. El juicio hubo de suspenderse; pero se produjeron choques entre las tropas y la multitud. Rápidamente circuló entre ésta una voz de orden: concentrarse en Barracas. En pocas horas se habían reunido allí varios millares de ciudadanos, que se preparaban militarmente para la revolución.

El mismo día se produjo el primer choque en las márgenes del Riachuelo, y las fuerzas mandadas por el gobierno debieron replegarse sobre la ciudad. Al día siguiente, la revolución se fortalecía con el aporte de multitud de ciudadanos armados, entre ellos el general Rolón y numerosos jefes y oficiales. Todas las milicias de la campaña a las órdenes de don Prudencio Rosas, se habían pronunciado ya a favor del levantamiento, que aclamó como jefe militar al general don Agustín Pinedo.

Una comisión de la Legislatura se constituyó en mediadora y obtuvo una suspensión de las hostilidades. No obstante ello, el ministro de Guerra intentó un ataque por sorpresa, que no tuvo éxito; fueron rechazadas las tropas que destacó, al mando del general Olazábal. Como respuesta, los revolucionarios estrecharon el 20 el cerco de la ciudad. Hubo nuevas conversaciones, en las que se escolló contra la intransigencia de Martínez. El 1° de noviembre los revolucionarios iniciaron el ataque, entrando en la ciudad por el norte, sur y oeste simultáneamente y ocupando algunas plazas y alturas importantes, en medio de gran entusiasmo público. En la madrugada del 3 el gobernador mandó un mensaje a la Legislatura, poniendo en sus manos la solución del pleito; entre tanto, había oficiado a Rosas para que con sus tropas viniera a restablecer el orden. El mismo día 3 la Sala daba por terminado el mandato de Balcarce y nombraba en su reemplazo a Viamonte. La crisis había durado veinte días.

Esta revolución "de los restauradores" desbarató la intriga urdida de concierto con los unitarios de Montevideo y fortaleció al partido federal, debilitando su oposición interna. Rosas —que por la distancia a que se encontraba no pudo tener en ella participación directa— la aprobó por nota llegada tres días después, en la que contestaba al requerimiento de Balcarce. Afirmaba en ella que, a su juicio, "tenían los ciudadanos sobrada razón". Y añadía que no veía el motivo de mantener en el gobierno a personas que no gozaban de la confianza pública, que "armaban a los amotinados de diciembre", que se oponían a integrar la Legislatura y que daban pábulo "al desenfreno de la prensa y a todo género de inmoralidad".

El general San Martín, por su parte, le escribió al general Guido desde París, justificando el movimiento por lo que sabía de los hombres que acompañaban a Balcarce, a quienes califica con dureza. "Yo creo —agrega— que los últimos acontecimientos van a poner fin a los males que nos han afligido desde el año 10 y que a nuestra patria se le abre una nueva era de felicidad si la nueva administración marcha con paso firme y no olvidando los 24 años de ensayos en busca de una libertad que nunca ha existido".

* * *

Durante el gobierno del general Balcarce se produjo la usurpación de las islas Malvinas por Inglaterra. El 3 de enero de 1830, la fragata inglesa "Clío", al mando del capitán Onslow, se apoderó de esas islas desalojando al gobernador argentino Vernet y

creando una situación de hecho que dura todavía. García, por orden de Rosas, hubo de condenar enérgicamente la incursión británica y la posterior acción similar de la fragata norteamericana "Lexington". En el conflicto con los Estados Unidos se llegó a la ruptura de relaciones el 3 de septiembre de 1832.

XVIII. BARRANCA YACO

La distensión política provocada por el cambio de gobierno no fue de larga duración. Viamonte nombró ministros al general Guido y al doctor Manuel J. García, ambos amigos de Rosas, pero de opiniones liberales y a cuyo amparo empezaron a manobrar nuevamente los elementos de igual filiación subsistentes en la Legislatura. Su acción se manifestaría pronto en un proyecto de Constitución provincial con destinatario visible, puesto que establecía para el gobernador un período de tres años e irrelegibilidad. Como si no fuese bastante precaución, restringía el sufragio a la manera de la Constitución unitaria de 1826, privando de él a los trabajadores a jornal, asimilados de este modo a los vagos y malhechores.

El Restaurador no se mostró satisfecho con la solución de la crisis. En carta a don Tomás de Anchorena le expresa su disgusto porque no se ha llamado a elecciones para integrar la Sala de Representantes, incompleta a raíz de la anulación de los comicios de junio, condición, a su juicio, ineludible para elegir válidamente un gobernador en propiedad. Doña Encarnación opina lo mismo en su copiosa correspondencia. "Viamonte no es ni podrá ser jamás nuestro amigo", le escribe a su marido en campaña. Y se prepara para luchar. Bajo su inspiración y con la colaboración de sus parientes y partidarios se funda la Sociedad Popular Restauradora, que agrupa a los federales netos, a quienes se llamará los "apostólicos", en oposición a los disidentes, o sea los "cismáticos". Se elige presidente al coronel don Pedro Burgos y vice a don Julián G. Salomón.

Las manifestaciones rosistas recorren las calles y realizan demostraciones hostiles contra los comprometidos en el régimen que acababa de caer, quienes se preparan a emigrar. Balcarce, Martínez y Olazábal pasan a la Banda Oriental, seguidos de un grupo de oficiales, algunos de los cuales se apoderan de la goleta de guerra "Sarandí" y tres buques más, llevándolos con todo su armamento.

Este atentado y las noticias cada vez más precisas sobre la vinculación de los federales disidentes con la conspiración unitaria llevan al colmo la indignación pública. El general Guido ha revelado a la Legislatura una comunicación enviada de Londres

por el ministro plenipotenciario don Manuel Moreno, por la que se denuncia un plan de las monarquías europeas para dividir los países de América entre diversos príncipes de las casas reinantes y en cuya realización estarían comprometidos varios personajes americanos, entre ellos Rivadavia y los unitarios de Montevideo. Al dar traslado de la noticia a las cancillerías interesadas Guido recibe una respuesta hiriente del gobierno de la Banda Oriental cuyo ministro Obes figura entre los sindicatos como cómplices del proyecto.

En esas circunstancias llega Rivadavia a Buenos Aires. El gobierno le ordena que permanezca en su casa mientras decide la Legislatura sobre su destino. Pero no es necesario más para desatar las pasiones. Se organizan manifestaciones de entusiasmo federal, con gritos y balazos ante las casas de los opositores y el ministro García firma la orden de expulsión del ex presidente, a fin de calmar la excitación pública. El general Quiroga, llegado a Buenos Aires, se ofrece como su fiador: quijotada de hombre fuerte, que quiere mostrarse superior a las reacciones de la turba con un gesto generoso hacia su mortal enemigo de ayer, sin que ello implique un juicio sobre los motivos de la sanción.

Rosas entre tanto había dado fin a su campaña. El gobierno de Viamonte decidió honrar a los participantes en la empresa, otorgándoles una medalla de honor. La del jefe de la expedición sería de oro y acompañada de una banda; se le concedía, además, la isla de Choele-Choele, que llevaría su nombre. Rosas rechazó la isla y la Legislatura le otorgó sesenta leguas de campo en las tierras rescatadas.

Como la inquietud pública continuara —debido principalmente a la actitud reticente de Rosas con respecto al gobierno, por considerarlo incapaz de hacer frente a la conspiración de sus adversarios internos y externos, que preparaban un nuevo motín decembrista— el general Viamonte presentó su renuncia el 5 de junio, en términos que expresaban una franca reprobación de los procedimientos empleados por sus opositores y que motivaron un pedido de explicaciones a sus ministros. La renuncia fue aceptada el 27 de ese mes; tres días después se eligió gobernador a Rosas.

Pero Rosas —que ha vuelto a hacerse cargo de la comandancia general de campaña a fin de resolver las últimas cuestiones pendientes en la frontera— no acepta la designación. Por tres veces insiste la Legislatura y otras tantas rehúsa. Los papeles

públicos adversos lo han acusado de ambición, y él se empeña en demostrar que se equivocan. No le interesa el gobierno por el gobierno mismo, si no puede realizar lo que el destino común imperiosamente exige, o sea el establecimiento de un orden nacional que afiance la unidad en peligro por las intrigas del extranjero y los emigrados.

Al considerarse la tercera renuncia, se leen unos apuntes de don Felipe Arana, que condensan el pensamiento del Restaurador. El país se encuentra en estado de disolución, a la que no es ajena la división entre los propios federales, y esa situación no se puede conjurar por los medios ordinarios. Al insistir en su actitud, Rosas ofrece su colaboración de ciudadano de orden al gobierno que se elija, y aun su propio retiro del país, si la Legislatura considera que su permanencia en él puede ser un peligro para su tranquilidad. Por moción de Anchorena, se accede entonces a la aceptación y se decide nombrar un gobernador provisional hasta tanto se dicte la Constitución de la provincia.

La Legislatura le comunica a Rosas su resolución en estos términos: "Si la Sala hace este paréntesis al nombramiento de V.E. es porque reposa en la esperanza de que, si por ahora no puede tener la satisfacción de que el ilustre Restaurador de las Leyes dirija los negocios públicos, vendrá un día en que pueda gozar de este bien". Al comentar esta nota, dice el diputado Arana: "La minuta de comunicación colma los deseos de los amigos del orden, porque deja expedita la entrada del señor Rosas al gobierno y marca el camino que debe tomarse en tan grave negocio. La Sala, bien apercibida de la debilidad de la acción del gobierno, se apresurará a darle todo el nervio que él necesita".

Se nombra a don Tomás de Anchorena. Este renuncia, por considerarse incapaz —según afirma— de gobernar en circunstancias tan difíciles. Don Nicolás de Anchorena, elegido a su vez, rechaza también el cargo. El general Viamonte, que sigue al frente del gobierno con la renuncia aceptada, esperando que se le designe sucesor, declara al fin, el 2 de septiembre, que su situación es por demás violenta y pide que la Legislatura indique a quién deberá entregar el mando. Ya la prensa opositora hace mofa de la desorientación y la anarquía que reinan en las filas federales. La Legislatura restablece el decreto que frenaba la prensa y, después de nuevas discusiones, resuelve que si el 1° de octubre no hay todavía gobernador provisional, se hará cargo del gobierno el presidente de la Sala. Se designa sucesivamente a don Juan Nepomuceno Terrero y al general don Angel Pacheco, ambos amigos de Rosas, como los Anchorena, quienes tampoco aceptan la brasa ardiente. De acuerdo con lo resuelto y en la fecha indicada, asume por fin interinamente la primera magis-

tratura de la provincia el presidente de la Legislatura, doctor don Manuel Vicente de Maza.

* * *

Cuando el doctor Maza se hizo cargo del gobierno, la conspiración unitaria se hallaba activa en todas las fronteras. Ya vimos la vinculación que dicha agitación tenía con las aspiraciones de las monarquías europeas denunciadas por el ministro Moreno y cuyas consecuencias se habrían de sentir pronto en el Plata. Lo más grave del caso era que la intriga actuaba sobre los propios caudillos de la Federación y que se infiltraba hasta en el círculo de los íntimos consejeros de éstos, fomentando verbigracia los celos de López contra Quiroga y viceversa y la desconfianza de ambos hacia Rosas, para no hablar de los jefes menores, tanto más expuestos cuanto más distantes del centro de los negocios.

Ejemplo de ello, lo que ocurría en el norte. Los generales Alejandro Heredia y Pablo Latorre, gobernadores de Tucumán y Salta, se acusan recíprocamente de apoyar con fines de hegemonía personal las conspiraciones de los unitarios en la provincia del vecino y estaban en vísperas de apelar a las armas. El gobierno de Buenos Aires decidió enviar un mediador. La designación (consultada sin duda con Rosas) recayó en el general Quiroga, que residía a la sazón en Buenos Aires. Lo indicaban la circunstancia de hallarse libre de cargas públicas y ser la personalidad más prestigiosa de todo el interior.

Quiroga aceptó de buen grado la comisión, seguro del éxito. Antes de partir, conferenció con Rosas. La entrevista se realizó en la quinta de Terrero, en presencia de éste y de Maza, y allí se convino en las instrucciones a que debía sujetarse el comisionado. En general, se reducían a recordar lo estipulado en el Pacto Federal sobre conflictos interprovinciales. Pero ofrecía especial interés el artículo 8°, cuya aceptación por Quiroga revelaba una perfecta identidad de miras con el Restaurador. Decía dicho artículo que "el señor Quiroga aprovechará la oportunidad para hacer entender... que al presente es vano clamar por el Congreso y la Constitución bajo el sistema federal mientras cada estado no se arregle interiormente y no dé, bajo un orden estable y permanente, pruebas prácticas y positivas de su aptitud para formar federación con los demás".

Rosas acompañó a Quiroga hasta la estancia de Figueroa, en San Antonio de Areco. Allí se despidieron, y de allí escribió aquél, según había convenido, la famosa carta en que desarrollaba sus puntos de vista sobre el tema constitucional y que debía al-

canzar a su amigo en el trayecto. El 3 de enero de 1835 llegó a Santiago del Estero el caudillo de los Llanos y convocó a una conferencia de los contendientes. Heredia llegó tres días después, pero el 8 se supo la noticia de haber sido muerto Latorre en un disturbio interno de su provincia, en circunstancias en que sus adictos se proponían libertarlo de la prisión en que se hallaba. No obstante esta circunstancia dolorosa, Quiroga logró un arreglo de la situación del norte mediante un tratado entre Tucumán, Salta y Santiago, que se firmó el 6 de febrero. Con ello dio por terminada su misión y emprendió el camino de regreso.

Quiroga tenía poderosos enemigos y había recibido noticias de que se atentaría contra su vida. Se lo había puesto en guardia principalmente contra López y los Reynafé, por las cuentas pendientes que sabemos. Despreció no obstante los avisos y hasta rechazó la escolta que le ofreció el general Ibarra para acompañarlo en la travesía. Tenía fe en su coraje y en su estrella. Estaba además en el cenit de su prestigio nacional, afianzado todavía por su éxito en el norte. La provincia de Mendoza acababa de invitar a las otras de Cuyo a constituirse en federación regional bajo su protección.

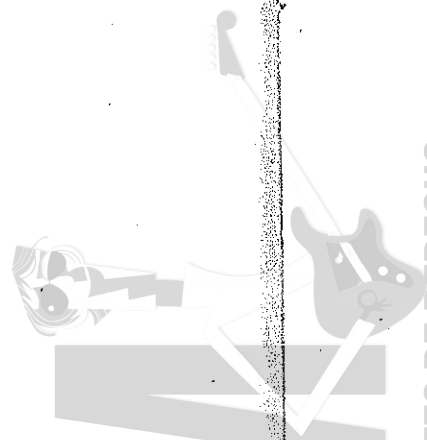
El 15 de febrero, al llegar a la posta de Ojo de Agua se le comunicaron detalles más concretos sobre el atentado que se preparaba; se le anunció que el capitán Santos Pérez se hallaba en Barranca Yaco al frente de una partida que lo esperaba para matarlo. Respondió que esa partida le serviría de escolta hasta Córdoba. Siguió su camino, y al ser detenido e inquirir sobre lo que ocurría, recibió un pistoletazo en un ojo. Con él fueron muertos todos sus acompañantes.

La muerte de Quiroga provocó una gran conmoción en todo el país. En el primer momento se la consideró como el comienzo de un plan unitario para eliminar a los hombres prominentes de la Federación. En Buenos Aires, Maza presentó su renuncia. Los federales doctrinarios, que hasta entonces se resistían a aceptar los puntos de vista de Rosas sobre la necesidad del gobierno fuerte, comprendían al cabo que no le faltaba razón.

La Legislatura se reunió en sesión permanente y el 7 de marzo sancionó dos proyectos. Por el primero se aceptaba la devolución del gobierno de manos del doctor Maza, debiendo éste retenerlo hasta que otro ciudadano lo reemplazara. Por el segundo se nombraba gobernador y capitán general de la provincia, por el término de cinco años, al brigadier general don Juan Manuel de Rosas, con la "suma del poder público" y sin más restricciones que la de conservar y proteger la religión católica y sostener la causa de la Federación apoyada por todos los pueblos de la República.

Rosas pidió algunos días para contestar. El 16 de marzo respondió con una larga nota en la que expresaba que, considerando la gravedad de las facultades acordadas, solicitaba que la Legislatura tuviera a bien "reconsiderar en Sala plena tan delicado negocio" y procurar lo necesario para que sobre él se pronunciaran "precisa y categóricamente" los ciudadanos, "quedando este (voto) consignado de modo que en todo tiempo y circunstancia se pueda hacer constar el libre pronunciamiento de la opinión general".

Sobre cuarenta diputados, treinta y seis votaron favorablemente. Uno de los oponentes fue don Tomás de Anchorena. El plebiscito en la ciudad resultó igualmente abrumador. El 13 de abril, en un marco de gran solemnidad y regocijo público, Rosas asumió el gobierno.



CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO

LIBRO IV

LA CONFEDERACIÓN. LUCHAS POR LA UNIDAD,
LA INDEPENDENCIA Y EL PODER

I. LA SUMA DEL PODER PÚBLICO Y LA RELIGIÓN FEDERAL

Las circunstancias en que Rosas inició su gobierno no eran solamente excepcionales en la República Argentina, sino en todo el mundo occidental.

Europa se hallaba convulsionada por la lucha de las dinastías históricas agrupadas en la Santa Alianza contra la revolución liberal y democrática, que resurgía fermentada por el romanticismo naciente en forma de nacionalismo y de socialismo utópicos. Era la época de la "joven" Alemania y la "joven" Italia, de las conspiraciones y las logias de "carbonari". Los principios y la literatura de la revolución del año 30 en Francia habían recorrido el mundo, contagiándolo de entusiasmo por la libertad. Pero la monarquía "burguesa" de Luis Felipe debió reaccionar muy pronto contra la exageración de dichos principios y reprimió —apoyándose en legitimistas y bonapartistas— a quienes habían contribuido a establecerla, lo que desataría una ola de atentados que agravarían la represalia.

Los pequeños reinos y principados despóticos de Italia y Alemania, sobre los que se desarrollaba el juego de influencias del Imperio austriaco y las potencias rivales, eran un vivero de conspiraciones, que se urdían en el subsuelo minado por el sigilo masónico. Allí la arbitrariedad y el rigor de las autoridades correspondía a la magnitud de los peligros que las amenazaban. Las circunstancias políticas y sociales imponían la necesidad del despotismo para prevenir la anarquía.

En casi toda la extensión de Europa la regla era un orden policial, bajo el cual se perseguía como criminales a quienes más tarde se aclamaría como libertadores. Las ejecuciones sangrientas eran la respuesta a cada conato de insurrección, y las mazmorras estaban llenas de prisioneros. En ese panorama general de revolución y guerra civil no había quedado incólume ni la insular Inglaterra —cuna de libertades—, que había debido aplastar pocos años antes a sangre y fuego la agitación provocada por la reforma electoral.

Por lo que hace a España, la guerra entre liberales y tradicionalistas había recrudecido a raíz de la segunda intentona del infante don Carlos, iniciada a mediados de 1834, con igual feroci-

dad por ambos bandos —matanzas de frailes y ejecución sistemática de los prisioneros—, como si cada partido buscara la garantía de su triunfo en el exterminio del contrario. Estas noticias llenaban las gacetas de Buenos Aires durante los meses en que se preparó el advenimiento de Rosas al poder.

* * *

Si la agitación existente en el Río de la Plata era en cierto sentido un reflejo de la situación contemporánea de Europa, no puede identificarse totalmente con ésta por la diversidad de circunstancias. La lucha ideológica se complicaría aquí con la que sostenían las grandes potencias marítimas en tren de expansión mundial y que nos consideraban como tierra de conquista, lo que nos obligaría a defender encarnizadamente nuestra independencia amenazada. Esta necesidad defensiva —que constituye la variante americana del cuadro— debía prevalecer, ya que estaba en cuestión la existencia misma de la patria, sobre el planteo de “progresismo” y “tradición” vigente en las naciones europeas. Aquí se trataba ante todo de subsistir o perecer.

Es necesario tener bien presente la precariedad a la sazón de nuestra independencia política para destruir las generalizaciones precipitadas en que han incurrido muchos historiadores. El hecho de que Rosas fuese y se proclamase tradicionalista, ha bastado para que se lo califique de “colonial” y para que se tratase de identificar su política con la europea de la Restauración o con el absolutismo peninsular. No hay tal cosa, sino todo lo contrario. El tradicionalismo del Restaurador es un tradicionalismo *sui generis*, que se funda en el reconocimiento de nuestra peculiar realidad. Nuestra tradición es para él España; pero también la revolución, por lo cual invoca como razón de su conducta la defensa de los ideales de mayo. Se declara reiteradamente republicano y demócrata, porque considera esos principios como sustanciales con la causa de América; apoya su poder en el sufragio universal y abomina de la monarquía y de las distinciones nobiliarias como adversas al espíritu americano. Su tradicionalismo se limita, en suma, a la defensa de los principios universales de la fe y la moral, que sus adversarios atacan y que los pueblos consideran como parte de su propio ser: posición perfectamente realista, más acorde con la renovación intelectual traída por el historicismo al movimiento romántico, que el individualismo de los “iluminados” ya anacrónico y que se traducía en descastamiento. En tal sentido su acción se identifica políticamente (y con prescindencia de las alusiones masónicas y anticler-

icales de la ideología) con la de los estadistas contemporáneos fundadores de nacionalidades, con la de un Cavour y un Bismarck.

Si tal era el tradicionalismo nacionalista y democrático del Restaurador, ¿en qué consistiría el progresismo de sus adversarios? En el desprecio por el sufragio popular (que habían logrado evitar en la Constitución de 1825, no obstante la oposición de Dorrego, y que se proponían restringir de nuevo en el proyecto de 1833), y en la convicción de la necesidad de un protectorado extranjero sobre la República para apoyarse en él contra sus compatriotas, considerados “bárbaros” e “incultos” por ser católicos y españoles y celosos de su libertad. Es evidente que dichos liberales e “ilustrados”, con su obsesión de buscar metrópoli a la que obedecer, eran los verdaderos “coloniales”, nostálgicos de Vértiz y el Virreinato, mientras que Rosas era el heredero auténtico de Moreno y de San Martín, como lo reconocería permanentemente y hasta su muerte el propio Libertador.

Estas nociones claras y aceptadas por todo el núcleo selecto de hombres de Estado que acompañó al Restaurador durante su gobierno (lo que explica la adhesión que prestaron a su política no obstante disidencias serias, los demás prohombres de la Independencia: Alvear, Guido, Vicente López, Manuel Moreno, Sarrautea, Soler) se oscurecieron después, hasta convertirse en el galimatías actual, por obra del equívoco introducido por la generación de la “Asociación de Mayo”, en cuya justificación se empeñaría toda la historiografía posterior. A su debido tiempo veremos el desarrollo de este desgraciado episodio, cuyas consecuencias afectarían la inteligencia argentina durante el curso de tres generaciones, viciando de raíz la acción de nuestros políticos y gobernantes.

* * *

El 13 de abril Rosas asumió el mando, en medio de un entusiasmo público del que no había precedentes en Buenos Aires, y dio una proclama en que manifestaba las razones de la delegación de poder que recibía y los propósitos de su gobierno. Después de aludir al “terrible sacrificio” de ejercerlo en esas “circunstancias aciagas” —caracterizadas por un “desborde de irreligión e inmoralidad”— y de atribuir ese mal a la acción de “una fracción de hombres corrompidos”, afirmaba —citando en su apoyo la experiencia universal— que el remedio “no podía sujetarse a normas” y que su aplicación debía ser “pronta y expedita y acomodada a las circunstancias del momento”. Proclamaba a continuación

guerra a muerte a los perturbadores que habían “puesto en confusión nuestra tierra”.

No se equivocaba el Restaurador, ni exageraba al aludir a la magnitud de la tarea que emprendía, ni a los males que amenazaban a la nación. Una de las columnas de la Federación acababa de ser abatida en la persona del general Quiroga, cuya sola presencia era una garantía de orden en el noroeste; y la amenaza de la disgregación se acentuaba en todas las fronteras. Los emigrados intrigaban desde Bolivia, Chile y la Banda Oriental, ofreciendo a los gobiernos que los hospedaban, como moneda de negociación, fracciones de territorio argentino de Jujuy y Salta, Cuyo y la Mesopotamia, en cuyos pueblos simultáneamente azuzaban la tradicional hostilidad a la hegemonía bonaerense.

Era necesario ante todo salvar la unidad nacional en peligro. Ahora bien: ello podía lograrse por la acción de una autoridad fuerte que alcanzara a todo el territorio, y la de Rosas, todo lo omnimoda que fuese, tenía apenas un carácter local y chocaba en el interior con la resistencia provinciana, endurecida por aquellas intrigas. La delegación de las relaciones exteriores, a la que Rosas daría una extrema ductilidad, no autorizaba a intervenir en los asuntos internos de las provincias confederadas. Contra tantas circunstancias adversas y con medios sobremanera frágiles —como el manejo de las consultas recíprocas a que autorizaba el Pacto Federal y las oportunas ayudas con armas y dinero— el Restaurador lograría poco a poco erigirse en autoridad nacional indiscutible e incontrastable. A falta de recursos materiales, apeló a los espirituales: erigió a la Federación en fe religiosa y se instituyó en su pontífice. Lo que no obtenía como gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la República, lo lograría como un sacerdote de la Santa Federación.]

Rosas adivinó la fuerza del mito y decidió usarlo en defensa de la unidad de la patria. A esta concepción supremamente inteligente responde su política desde los primeros pasos. En la circular que, al asumir el mando, dirige a los gobernadores, les afirma que “la causa de la Federación. . . es tan nacional como la de la Independencia; pero más expuesta a ser traicionada por la mayor facilidad con que pueden disfrazarse sus enemigos; y por lo mismo exige en sus secuaces y adherentes una conducta más pública y decidida y en sus defensores una austeridad que no dé lugar a la menor defección”. Ya estaban notificados: no sólo había que ser, sino también que parecer, lo cual agregaba al compromiso implícito la eficacia operativa del gesto ritual. El enemigo era un réprobo y la colusión con él un delito grave, precaución necesaria en un país de indulgencia y camaradería fáciles. Desde ese momento se sabía que aun el abrir una oreja distraída a la in-

triga del adversario, bajo cualquier disfraz que se presentase, significaba un principio de traición a la patria, que exponía a la fulminante excomunión. El mismo Restaurador empieza por dar el ejemplo, purgando de adversarios la administración pública y el escalafón militar, en copiosos decretos refrendados por un oficial mayor y en los que caen confundidos unitarios, lomo-negros y meros indiferentes. La ciudad se viste de rojo y empiezan a celebrarse en los atrios de las parroquias y en otros lugares, con la exposición del retrato del “Héroe del desierto”, las misas rojas de la Santa Federación, en las que participan desde los fichados señorones de la Sociedad Popular Restauradora hasta la negrada de los candombes.

* * *

El 30 de abril Rosas formó sus ministerios, con don Felipe Arana en Relaciones Exteriores y don José María Roxas y Patrón en Hacienda. Las carteras de Guerra y Gobierno continuarían a cargo de los oficiales mayores Garrigós y Pinedo, con lo cual el gobernador quería significar, sin duda, que en ambos ramos él sería su propio ministro.

De inmediato se dio comienzo a la reorganización financiera, mediante la reducción de los gastos públicos y la intensificación de las recaudaciones. Es de advertir que —por decisión expresa del Restaurador— la suma del poder no se extendió a la administración de los bienes del Estado, que se efectuó siempre con amplia publicidad y control legislativo y estricta sujeción a los textos legales. Esta fue, sin duda, la causa de la inalterable confianza que inspiró y que mantuvo firme el crédito en medio de las mayores vicisitudes de orden interno e internacional. Las medidas de orden contable y administrativo que se dictaron para obtener una buena recaudación y una razonable inversión de la renta se coronarían con la liquidación del Banco Nacional: la funesta creación rivadaviana que, según don Vicente López, significaba poner “la bolsa del país” en manos de aventureros extranjeros que se enriquecían a costa del patrimonio público. El Banco de la Provincia rescató las acciones de manos de esos teneedores desaprensivos y empezó a funcionar bajo la dirección de una Junta gubernativa presidida por don Bernabé de Escalada. Por el artículo 1° de sus estatutos se lo amalgamaba con la Casa de Moneda, lo cual constituía en la época una reforma original y audaz, sólo adoptada más tarde por el Banco de Inglaterra.

La política religiosa se volvió a encauzar en la línea de reacción contra el regalismo rivadaviano iniciada en el primer gobier-

no, dentro de la ortodoxia concordante con los sentimientos públicos. Se dio paso a la bula pontificia que designaba obispo de Aulón al doctor Mariano de Escalada y que había sido retenida por Viamonte, debido a un falso concepto del patronato; se repuso la orden dominicana suprimida por Rivadavia; se autorizó a los jesuitas para abrir establecimientos de enseñanza; se normalizó la ayuda al culto católico. En el decreto disponiendo recursos para continuar la obra de la catedral se hacía constar especialmente que ésta se hallaba suspendida desde hacía ocho años, como para marcar la diferencia entre dos épocas y dos espíritus. Naturalmente que esta ayuda no podía (ni debía) ser incondicional, sino supeditada a los intereses generales del Estado. Comportaba, por parte de la Iglesia, la obligación de fidelidad al gobierno legítimo. Por lo cual Rosas se sentía con derecho a pedir (como lo hizo en diversas ocasiones) la separación y el reemplazo de los clérigos que abusaban de su ministerio participando en la oposición política o fomentándola desde el púlpito o el confesionario.

Mientras tanto, no se descuidaba la elaboración del ritual partidario, o sea de los elementos conducentes a persuadir, por medio de los sentidos, de que la causa de la Federación era una misma con la de la patria. Parecería una obsesión monomaniaca si no respondiera— como dijimos— a un cálculo profundo y a una imperiosa necesidad.

Después de la purga en la administración pública y el ejército —y de provocar una medida análoga en el clero—, se ordena que los documentos oficiales se encabecen con el lema “¡Viva la Federación! año tal de la libertad, tantos de la Independencia y tantos de la Confederación Argentina”. Se restablece la disposición sobre el uso de la divisa —cuyo cumplimiento se había relajado en tiempos de Balcarce y Viamonte— extendiéndolo a los preceptores y los niños de las escuelas “por ser ésta una señal de fidelidad a la causa del orden y del bienestar de la patria, bajo el sistema político que constituye un vínculo de confraternidad entre todos los argentinos”. El rojo es el color de la causa, pues corresponde a la divisa que han adoptado, desde Artigas, los caudillos provinciales. Rosas se empeña en imponerlo en todo, desde el moño y las esclavinas que usarán las niñas de las escuelas de la Sociedad de Beneficencia, hasta las obleas con que han de cerrarse las cartas, al mismo tiempo que se proscriben correlativamente el celeste y el verde, usados por los unitarios. Y todo esto que parece pueril, no lo es de ningún modo, sino un medio de crear un estado de exaltación religioso-patriótica que compense la falta de poder real en que se debate para lograr la difícil unidad de la nación, amenazada por dentro y por fuera.

En su situación de caudillo provincial —de la provincia más fuerte, pero también la más resistida, aunque es y está predestinada a seguir siendo la cabeza histórica—, Rosas debe vencer las resistencias sin renunciar a los privilegios que le da su situación. Debe imponer a la vez su autoridad, sin lesionar las autonomías. Cada una de esas proposiciones entraña una contradicción que hay que resolver. Si los congresos han fracasado, no hay razón —sino al contrario— para que no vuelva a fracasar el que se convoque, con el mundo en convulsión y la intriga adversaria golpeando en todas las fronteras. Se reproduciría la coalición contra Buenos Aires, la guerra civil. En esas circunstancias, no hay otra solución que la que encuentra el Restaurador. Es decir, establecer la comunión en un plano que trascienda y absorba los conflictos de intereses, en una mística nacional que él logra inculcar con paciencia apasionada, creando una mente, un lenguaje, un ceremonial y un estilo.

No obstante la violencia verbal destinada a mantener la exaltación de sus huestes y a amedrentar a los enemigos, el Restaurador inició su gobierno con una gran moderación. Si bien la experiencia reciente lo había desengañado de la colaboración de los prohombres de su propio partido —los de “casaca y corbata almidonada”— mantuvo a muchos de ellos en sus consejos y en los altos cargos de la administración y de la justicia, aun después de sus dissentimientos públicos. Los acontecimientos recientes no habían ocurrido en vano; la opinión había dado un vuelco notable en la ciudad, de tal modo que quienes se oponían poco tiempo antes a Rosas por miedo a la dictadura, lo aceptaban al fin como la única garantía posible de orden y de paz social. Los “ricos homes” del comercio y la industria saladeril y ganadera formarían en adelante la estructura ornamental del régimen y el personal de la Sala de Representantes. Sin hacerse muchas ilusiones sobre el alcance real de la adhesión formal de la dudosa aristocracia porteña, sabía Rosas que contaría con ella mientras él fuese la encarnación del poder. Del poder que no se fundaba, por cierto, en la adhesión de ese grupo, sino en los artesanos y proletarios de la ciudad, en las diversas capas del pobrerío, en sus milicianos del sur, los gauchos de la campaña de Buenos Aires.

Si Buenos Aires se mantenía segura bajo su influjo, el peligro amenazaba, no obstante, desde diversos puntos del interior, sobre todo en las zonas de frontera.

Al iniciar Rosas su gobierno, los unitarios, derrotados en el

interior, siguen conspirando desde Bolivia, Chile y la Banda Oriental. Se infiltran por medio de agentes en los consejos de los gobernadores provincianos —gente sencilla, por lo común, y propensa a dejarse suggestionar por los doctores— y les predicán el catecismo de la disgregación, bajo la forma de la panacea constitucional para librarse de la opresión de Buenos Aires. El congreso es para ellos el río revuelto en que habrán de pescar a favor de la confusión del cardumen. El general Lavalle y los decembristas (apoyados por Rivera, que se dispone a alzarse contra el gobierno constitucional del general don Manuel Oribe) están fraguando una revolución en Entre Ríos. Se hallan en contacto con Ferré —siempre empacado contra la capital— y con don Domingo Cullen, ministro de López; y éste, a su vez, con los Reynafé, asesinos de Quiroga. En San Juan intriga don Domingo de Oro, al amparo del gobernador Yanzón. Y en el norte repercuten las convulsiones de Bolivia y el general Heredia sigue —contra la advertencia de Rosas— una política de “fusión de partidos” que sólo favorece a los unitarios. Se teje una red de intrigas interprovinciales y se proponen pactos regionales que serían el comienzo de la anarquía general.

En estas circunstancias, que el Restaurador sigue con atención vigilante, el gobernador Ibarra de Santiago del Estero obtuvo pruebas de la participación de los Reynafé en el asesinato de Quiroga. Rosas dio cuenta del hecho a Estanislao López, quien resultaba comprometido en virtud del patronato que ejercía sobre Córdoba y hubo de inclinarse ante la evidencia alegada, a fin de no caer él mismo bajo sospecha. Armado del consentimiento de López —que implicaba el de Ibarra y el de Ferré— Rosas decidió intervenir e intimó al gobierno de Córdoba la entrega de los culpables. Como no se le respondiera, declaró en interdicción la provincia, suprimiendo con ella toda clase de comunicaciones. La Legislatura cordobesa dio por terminado entonces el mandato de Reynafé y nombró gobernador a don Pedro Nolasco Rodríguez, quien inició un simulacro de juicio, del que resultaría la inocencia de los Reynafé y de Santos Pérez, ¡el propio ejecutor material!...

El caso de los Reynafé no podía ser evidentemente juzgado por un tribunal provincial dada una situación en que dominaban los culpables: era un caso nacional. No existiendo tribunales federales, ¿quién ejercería la jurisdicción competente, ya que la delegación de poder efectuada por las provincias al gobernador de Buenos Aires se limitaba a la función ejecutiva en materia de relaciones exteriores? Rosas halló la solución. Invocando el artículo del Pacto Federal que preveía la intervención colectiva en las provincias disidentes, obtuvo de López y los demás gobernadores

que delegaran en él la función coercitiva. Luego mantuvo la inco-municación de Córdoba hasta que el gobernador Nolasco Rodríguez fue depuesto y reemplazado por un candidato de su confianza: don Manuel López, llamado “Quebracho”. Los Reynafé, enviados como reos a Buenos Aires, serían juzgados y ejecutados un año después.

Mientras el Restaurador obtenía este triunfo —que afianzaría de manera decisiva su ascendiente moral sobre López— y ganaba por añadidura el control de la situación cordobesa con un gobernador de su hechura, estallaban en el interior las consecuencias que había previsto de las intrigas unitarias.

El general don Javier López invadía desde Bolivia las provincias del norte, siendo derrotado por Heredia, quien debía intervenir asimismo en Catamarca para sofocar una revolución encabezada por don Felipe Figueroa. El este también se convulsionaba. El coronel negro, Barcala, cabecilla de la rebelión, denunció en su proceso a don Domingo de Oro (que acababa de entregarlo) como jefe de la conspiración, a la vez que salían a la luz, entre otros documentos reveladores, cartas de don Jorge Calle ofreciendo al dictador chileno Portales las provincias de Cuyo. Todo denunciaba como perturbadora la situación de San Juan que hizo crisis con una intervención militar que se encomendó al general Brizuela.

El primer año del gobierno de Rosas, tan accidentado en el orden interno, terminaría con un rotundo triunfo político que afianzaría su prestigio en el interior, acallando la resistencia tradicional contra Buenos Aires, fundada en el “comercio de la extranjería”. La Ley de Aduana para 1836 reaccionaba contra el liberalismo económico que había sido el dogma porteño, o portuario, adoptando un criterio de protección a la producción local de alcance nacional, puesto que se prohibía la introducción de las mercaderías que podían competir con las industrias del interior, o se las gravaba con fuertes derechos. Esta ley daba por tierra con el argumento principal de los constitucionalistas apremiados, que sostenían la necesidad del congreso para resolver la cuestión aduanera, cuya solución sólo concebían como un triunfo de la voluntad general sobre una provincia despótica.

Los pronunciamientos de las legislaturas y gobiernos del interior dan fe de la oleada general de entusiasmo y gratitud que esa medida provocó hacia el gobernador de Buenos Aires, que con ella se mostraba como una autoridad tutelar sobre todo el país.

II. LA BANDA ORIENTAL, BOLIVIA Y LOS EMIGRADOS

El gobernante provincial que en abril de 1835 asumía el poder al frente de una nación convulsionada y recelosa había consolidado al cabo de un año su situación y era reconocido como jefe indiscutido de la Confederación Argentina.

Ello se debía a la aceptación por las provincias de su prerrogativa en materia de justicia nacional; a la aceptación de sus puntos de vista sobre intervenciones a los estados disidentes y perturbadores, y a la generalización de su política exclusivista, después de sucesivos fracasos de las tentativas de "conciliación" o "fusión de partidos", en el norte y en Cuyo. Contribuía en forma decisiva al afianzamiento de ese prestigio la Ley de Aduana, cuyas benéficas consecuencias empezaban a sentirse en todo el territorio.

Pero lo que sobre todo pesaba era el influjo de la fuerte personalidad del Restaurador, en su constante correspondencia con los gobernadores y con sus agentes esparcidos por toda la República. Este elemento de orden moral fue más poderoso que los alicientes materiales para el fortalecimiento de su autoridad, porque sus previsiones se cumplían ante los ojos de quienes se inclinaban a desdenarlas. En los manejos del ministro o funcionario a quien su dedo acusador había señalado en aviso confidencial, aparecía tarde o temprano la infidencia o la traición. No es de extrañar por ello que los caudillos provinciales (carentes por lo común de luces propias y amenazados por todo género de intrigas) se decidieran a obedecer, con mayor o menor diligencia, a quien parecía destinado a mandar. Poco a poco fueron adoptando sus ideas, su ritual federal, su estilo. Ello no habría de ocurrir sin perturbaciones, según hemos visto. Pero sea como fuere, y no obstante los Ferré y los Cullen (a quienes se vigilaba de cerca), la Confederación constituía ya en 1836 una unidad homogénea, fundada en la colaboración estrecha de López y Echagüe en el litoral, Ibarra y Heredia en el norte, Aldao en Cuyo y Manuel López en el centro estratégico de Córdoba, con el gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores, quien aparecía como cabeza indiscutida del partido en que se encarnaba la voluntad reiteradamente manifestada por "los pueblos".

Esta unidad interna seguía amenazada, no obstante, por la acción de los emigrados.

La principal preocupación provenía del Uruguay, convulsionado desde su independencia por las ambiciones rivales, primero de Lavalleja y Rivera, y luego, de éste y Oribe. Ya vimos cómo Rivera, durante su presidencia constitucional, había auspiciado la revolución de Lavalle y López Jordán contra el gobernador Solá, de Entre Ríos. El 24 de octubre de 1834 subió al gobierno el general don Manuel Oribe. Fructuoso Rivera fue designado comandante de la campaña, desde cuyo puesto empezó a recibir y acoger favorablemente las insinuaciones de los emigrados, en el sentido de realizar una nueva intentona de establecer firmemente su influencia sobre la región mesopotámica.

Es de advertir —para que se comprenda claramente la relación entre nuestras luchas y las de la provincia segregada— que en esa época subsistía muy vivo el arrastre artiguista, tendiente a considerar la Banda Oriental y las provincias de Entre Ríos y Corrientes como una sola unidad histórica litoral, en la que el río servía más de lazo que de límite, de tal modo que era natural en los caudillos de la zona la tendencia a extenderse hacia el oeste. La emigración unitaria estimulaba en Rivera la ambición de instituirse en heredero de Artigas; lo cual habría sido peligroso con un jefe de visión y garra, pero lo era menos con el candidato en cuestión, tipo mixto de guerrillero y bandido, cuyas empresas militares se reducían en última instancia a vastos arreos de ganado para poblar sus estancias o vender en la frontera.

El general Oribe era un hombre de otra calidad. Pertenecía a una familia de abolengo. Había actuado como segundo de Lavalleja en la hazaña de los 33 y combatido valientemente con Alvear en Ituzaingó. Estaba resuelto a gobernar honestamente de acuerdo con la leyes y los tratados y estableció desde el comienzo relaciones cordiales con el gobierno de Buenos Aires, quien nombró como su agente al coronel don Juan Correa Morales. La conducta de los unitarios emigrados y sus relaciones con el comandante general de la campaña oriental —que abiertamente los apoyaba— así como el lenguaje virulento de la prensa unitaria y riverista incitando a la revolución, motivaron una reclamación de Rosas. Oribe accedió a tomar medidas contra esa propaganda. Esta actitud y una serie de rozamientos de orden interno originados en la política del nuevo mandatario, que significaba una reacción contra la de su antecesor, provocaron el pronunciamiento de éste contra el gobierno constitucional, el 16 de julio de 1836.

Como era de prever, Lavalle y los demás jefes y oficiales argentinos emigrados apoyaron a Rivera. Su triunfo les prometía la adquisición de un gobierno amigo que los secundaría en sus planes. Rosas se abstuvo de participar en la contienda, por respeto a las disposiciones del tratado de 1828; se limitó a cerrar

las comunicaciones en todo el litoral, a fin de circunscribir la lucha al territorio uruguayo. La guerra fue breve. Después de algunos combates parciales, el general Oribe —con el auxilio de Lavalleja, que se puso de parte del gobierno legal— obtuvo una victoria decisiva sobre Rivera y sus aliados en Carpintería, el 19 de setiembre de 1836. En esta acción, las fuerzas de Oribe usaban una divisa blanca y las de Rivera una colorada, de donde se originaron los nombres de los partidos históricos de la Banda Oriental. Rivera huyó a Brasil. Lo que no había logrado con sus propias fuerzas, lo obtendría con ayuda extranjera.

* * *

Gobernaba en Bolivia el general Andrés Santa Cruz, mestizo de español e india que había servido primero en los ejércitos reales y luego con los patriotas y que había llegado al poder a favor de la inveterada anarquía altoperuana. Ambicionaba convertir en realidad el sueño de Bolívar mediante la creación de un gran estado que impusiera la ley a todo el continente. Era natural que tratase de debilitar a los países que podían ser obstáculo a su expansión, alentando sus disensiones internas, y ello lo acercó a los emigrados argentinos del norte, a quienes se dispuso a prestar toda la ayuda necesaria. Fruto de esta ayuda había sido la expedición del general unitario don Javier López, que invadió en 1836 la provincia de Salta con el escaso éxito que vimos.

La acción de Santa Cruz no obedecía a un plan aislado, sino a una vasta conspiración. Al ser derrotado en Carpintería, Frutos Rivera había perdido, junto con su equipaje, su correspondencia diplomática, incluso la que mantenía con el boliviano y con los unitarios de Montevideo, que se hizo pública. Nada más significativo que los términos en que da cuenta de ella a su gobierno un extranjero y por ende imparcial: Mr. Hood cónsul británico en dicha ciudad. De esa correspondencia —afirma el inglés— resultaba que el alzamiento uruguayo “era eslabón de una extensa conjuración concertada por los emigrados porteños unitarios para reconquistar el poder”. Trataba de convencer a Santa Cruz de que él —como sucesor de Bolívar— tenía los destinos de América en sus manos; de que el sistema federal porteño era odioso a una gran masa del pueblo, y de que convenía “el desmembramiento y reorganización de Chile y las repúblicas argentina y oriental, ofreciendo a Santa Cruz... algunas de las provincias vecinas de Buenos Aires (léase de la Confederación: Jujuy y Salta), y a Rivera, Entre Ríos y Corrientes... Un ataque simultáneo se preparaba sobre Chile”...

El ataque a Chile se había realizado, en efecto, al mismo tiempo que se pronunciaba Rivera, con la desdichada expedición del general Freyre, que fue derrotado y fusilado en junio de 1836.

Apenas se había dado a conocer esa documentación en el Uruguay, cuando llegó a Buenos Aires un emisario confidencial del gobierno chileno, para instruir a Rosas de las maniobras de Santa Cruz, a quien don Diego Portales se disponía a hacer la guerra. Los informes de que era portador coincidían en todo con lo que acababa de descubrirse. Coincidían igualmente con los que había mandado de Londres don Manuel Moreno, recogidos en las cancillerías europeas y que los vinculaba con las maniobras de las grandes potencias ultramarinas en su empeño de adquirir hegemonía sobre los países del Nuevo Mundo.

Santa Cruz llevaba adelante sus proyectos de expansión con la anexión a Bolivia de la república del Perú, mediante la complicidad del presidente de ésta, general Obregoso. Dividido el Perú en dos estados, del Norte y del Sur, formaría junto con Bolivia la confederación peruano-boliviana, a la que dio estatuto legal en mayo de 1837, el congreso de Tacna, elegido y convocado bajo la presión de los ejércitos triunfantes.

El auspicio de las potencias europeas —que obstaculizaron la obra de Bolívar y que se oponían a la erección en América de estados fuertes— a la acción del mestizo Santa Cruz, se explica por el hecho de que no era más que un empresario de intereses ajenos. Había firmado tratados con Inglaterra y Francia por los que les entregaba virtualmente el control de todas las fuentes de riqueza de los territorios de su mando, resignándose a una mera función de virrey o gerente. Su acción no significaba otra cosa que la “quinta columna” americana de la tentativa de conquista extranjera, que en esos momentos se haría presente en el Plata con la escuadra de Luis Felipe.

Rosas reclamó por las hostilidades bolivianas sobre nuestros territorios del norte. El gobierno de Santa Cruz no atendió la reclamación, alegando que no había en la República Argentina ninguna autoridad nacional. Ante esa actitud se ordenó, por decreto del 13 de febrero de 1837, el cese de toda comunicación con los países sojuzgados por el boliviano, so pena de traición a la patria. El 19 de marzo se seguiría la declaración de guerra, acompañada de un manifiesto sobre las causas que la motivaban. Chile había ya declarado la guerra el 24 de diciembre del año anterior.

En el manifiesto dirigido al pueblo se recapitulaban las ofensas recibidas y se denunciaba la “violación del sistema americano” inherente a la política de expansión fundada en la fuerza militar. “La paz con Santa Cruz —se afirmaba— no es ya compa-

tible con la seguridad de la República". Se mencionaba el apoyo a la facción unitaria, el entendimiento con los emigrados de Montevideo y la correspondencia con Lavalle, así como la tentativa de Rivera para concertar —misión Muñoz— los límites con el Imperio sin intervención argentina. Aunque se añadía expresamente que la insidia implícita en la negociación había sido "deshecha por el gobierno patriótico que sucedió a don Fructuoso Rivera", la revelación provocó un gran revuelo diplomático y amenazó con precipitar un acercamiento de Oribe con Rivera y el Brasil.

Pero, tal como Rosas lo preveía, ello no ocurrió; Rivera, secundado por Lavalle y el resto de la emigración y con refuerzos proporcionados por los revolucionarios de Río Grande se preparaba nuevamente a invadir tierra uruguaya para derrotar a Oribe. El 27 de marzo atravesó el Cuareim, a la cabeza de un millar de jinetes. Oribe pidió ayuda a Rosas, y éste le insinuó que se declarara contra Santa Cruz después de lo cual le mandaría inmediatamente auxilios.

Todas las provincias argentinas respondían con entusiasmo a la guerra declarada contra la tiranía del "Cholo" (como llamaba Rosas a Santa Cruz), preparándose a enviar sus contingentes en la medida en que se los solicitara. El Restaurador nombró comandante en jefe del ejército argentino al general don Alejandro Heredia, gobernador de Tucumán, y comandante de la reserva al general don Lucio Mansilla. A fines de junio, Heredia se movió sobre la frontera con sus fuerzas, que se engrosaron con las milicias departamentales de Salta y Jujuy y con algunos escuadrones de caballería de línea que mandaba el general don Felipe Heredia entre los que formaban todavía viejos soldados de Güemes. Las tropas enemigas, más numerosas, se hallaban a las órdenes del general Brün. Las operaciones fueron al comienzo de escasa importancia, pues Heredia se colocó a la defensiva. No obstante ello, el 12 y 13 de agosto, con motivo de un movimiento enemigo sobre Humahuaca, hubo reñidos encuentros de vanguardia en los que nuestras tropas resultaron victoriosas.

Se siguió una guerra de escaramuzas, determinadas por las características del terreno. El 2 de enero, el jefe de nuestra vanguardia, general don Gregorio Paz, sorprendió a un destacamento boliviano en Rincón de las Casillas, tomando numerosos prisioneros. Mientras tanto el general Brün, que había ocupado dos departamentos de la Puna, se retiraba a marchas forzadas ante la proximidad de una división que enviaba Heredia, al mando del general Alemán, con el objeto de cercarlo. La vanguardia de Paz, por su parte, fuerte de 1.000 hombres, se corría hacia la frontera de Tarija, en dirección del Pilcomayo, y amenazaba la de Chuquisaca. Gran parte de la población se plegaba con en-

tusiasmo a las tropas libertadoras. Paz puso las fuerzas de esa frontera a las órdenes del coronel Cuéllar y se dispuso a marchar sobre Tarija.

* * *

Mientras la República se hallaba empeñada en justa guerra con el usurpador que amenazaba su integridad por el norte, los emigrados a las órdenes del general Lavalle (que se carteaba y manifestaba identidad de miras con el enemigo de su patria) acompañaban al "pardejón" Rivera en su nueva tentativa de recuperar por la fuerza y con ayuda unitaria y brasileña el gobierno de la Banda Oriental.

En los primeros tiempos, don Frutos no hizo sino "guerra de recursos": táctica que en su idioma significaba eludir el combate, penetrar al territorio por los lugares donde no había tropas adversarias y alzarse con todo el ganado que hallara a su paso para venderlo al otro lado del Cuareim. Con esto y las contribuciones que imponía a las poblaciones indefensas, lograba fondos para sostener a su gente. Oribe salió en su busca, pero no logró obligarlo al combate. A fines de enero, y en circunstancias en que el presidente lo buscaba por la campaña, se presentó frente a Montevideo y trató de apoderarse de la ciudad. Como no lo consiguió, ofreció al cuerpo legislativo una base de arreglo, condicionada a la renuncia o destitución de Oribe. Pero éste se acercaba a marchas forzadas y el "pardejón" se retiró sin combatir.

En febrero se incorporó a las fuerzas de Rivera, con mando efectivo, el general Lavalle, quien estableció su campamento en Queguay. Rivera se había apoderado de Paysandú, esperando recibir refuerzos de Entre Ríos. Pero el gobierno de Buenos Aires había mandado una escuadrilla de observación al río Uruguay con el objeto de impedir la comunicación entre ambas orillas y el general Urquiza custodiaba con un ejército la costa entrerriana. El coronel argentino Chilavert había sido enviado por Rivera para gestionar también la ayuda de los revolucionarios riograndenses. El choque se produjo antes de que esta ayuda pudiera llegar. El 15 de agosto se encontraron ambos ejércitos en el Palmar, y después de una reñida batalla, en la que Lavalle desempeñó el mando en jefe de las fuerzas riveristas, las de Oribe fueron completamente derrotadas y dispersas, debiendo replegarse en desorden sobre Montevideo.

No obstante su posición difícil, Oribe no desesperó. La posesión de la ciudad le daba fuerzas para resistir hasta poder reaccionar de la derrota, o llegar a una paz negociada. No contaba

con el tercero en discordia. Acababa de plantearse el conflicto entre la Confederación y Francia, cuya escuadra bloqueaba el litoral argentino. Un gobierno "amigo" en el Uruguay le era a éste necesario como base de aprovisionamiento para sostener las operaciones; por lo cual se hizo extensiva aquella medida, sin atender a las protestas de Oribe, a la ciudad de Montevideo. El cónsul francés Baradère le expresó al ministro uruguayo que "una desgraciada necesidad" arrastraba al jefe francés a bloquear la ciudad, porque "desde que el gobierno oriental era naturalmente aliado del argentino, los ponía a ellos (los franceses) en situación de serlo de Rivera".

Imposibilitado de abastecerse, pues se lo amenazaba con apresar sus barcos, Oribe debió renunciar. Al hacerlo, elevó al cuerpo legislativo una protesta, en la que declaraba ceder a una facción armada alzada contra el voto popular y "cuyos esfuerzos habrían sido impotentes, si no hubiera encontrado su principal apoyo y la más decidida cooperación en la marina militar francesa", la cual no había desdenado "aliarse a la anarquía para destruir el orden legal de esta República". Agregaba su más enérgica condenación por el abuso de fuerza cometido "para derrocar el orden legal de un pueblo amigo e independiente".

La Banda Oriental quedaba en manos de Rivera, y con ello a disposición de sus aliados unitarios y franceses, que habrían de sumar sus esfuerzos para abatir el orgullo del gobierno de la Confederación. Lavalle le escribía por esos días a Chilavert, dando expansión a su gozo: "¡Cuántos sucesos desde que Ud. se separó, algunos de ellos inesperados! Yo creo que Rosas no podrá afrontar todos los obstáculos que se le oponen". Para resistir a las exigencias francesas y a las amenazas de invasión por el litoral, debía desguarnecer la frontera del norte, y además, ¿cómo iría a obtener recursos para sostener guerras en todos los frentes con las rentas de Aduana suspendidas por el bloqueo? La situación de Rosas parecía, en efecto, desesperada, y ella justificaba el optimismo de sus enemigos, que consideraban su caída inminente.

III. LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA. LA ASOCIACIÓN DE MAYO

El interés de Francia por el Río de la Plata se mantenía vivo desde el fracaso de la tentativa monárquica de 1820. Las intrigas de los rivadavianos, en el sentido de comprometer la ayuda del gobierno francés para acabar con la supuesta anarquía americana, habían continuado después de la caída del Directorio y del sistema unitario, según las denuncias del ministro Moreno. La revolución de 1830 y la instauración de la monarquía "burguesa" del rey Luis Felipe modificaron el plan primitivo, sin anular el propósito fundamental. Francia necesitaba expansión comercial, conquista de mercados, prestigio guerrero. Necesitaba colonias, en suma, y ningún territorio parecía más propicio para la aventura que el de los pequeños países segregados de España, envueltos en lucha civil y donde existían sectores pensantes que pedían el protectorado de una poderosa nación europea a guisa de liberación.

Pero la realización de tales propósitos exigía una política cautelosa, con el fin de disimular la intención de conquista en aquellos puntos donde el interés francés podía chocar con el de Inglaterra. Había que encontrar pretextos razonables para la intervención, y ninguno mejor que la defensa de los derechos de los ciudadanos franceses residentes en los nuevos países, esgrimiendo principios del derecho de gentes aderezados para cada caso particular.

La inmigración francesa al Río de la Plata había sido numerosa desde los primeros tiempos de la Independencia y Francia consideraba a dichos inmigrantes como instrumentos de penetración política y comercial, que habían de ser especialmente protegidos por su bandera. Esto equivalía prácticamente a la instauración de un protectorado solapado en cualquier punto en que se estableciera una colonia de individuos de esa nación, quienes por razón de su nacionalidad debían gozar de un estatuto propio, impuesto por su país de origen. Tal era la intención, que se justificaba en nombre de la civilización europea, frente a la supuesta barbarie de las naciones segregadas de España.

Ya vimos el primer conato de intervención, realizado a raíz del motín decembrista, y la solución de emergencia a que se lle-

gó. Durante el segundo gobierno de Rosas se repitió la cuestión por el marqués Vins de Paysac, cónsul general de aquel país, que fue rebatida en sus justos términos por el ministro don Tomás de Anchorena. Los reprodujo con fecha 30 de noviembre de 1837 y con ánimo provocativo, M. Aimé Roger, simple encargado del consulado por muerte del titular, a instancias del cónsul en Montevideo, M. Baradère, quien se hallaba, según lo hemos visto, en contacto estrecho con la emigración unitaria y el motín riverista.

El funcionario nombrado reclamó por la prisión de tres compatriotas (uno de los cuales era suizo), que se hallaban detenidos por infracciones comunes, y por el caso de otros tres que, de acuerdo con la ley de 1821, habían debido prestar servicios como guardias nacionales. Exigía que se pusiese en libertad a los primeros y que se les reconociese a los otros los mismos derechos y exenciones de que gozaban los súbditos ingleses en virtud del tratado de 1825.

La cancillería de Rosas le respondió en tono moderado, negándole derecho para reclamar por carecer de investidura diplomática y reproduciendo la doctrina expuesta anteriormente por el doctor Anchorena, según la cual los residentes en el país debían someterse a sus leyes, tanto en las ventajas como en las cargas. Se agregaba que no existía tratado con Francia que nos obligase a apartarnos de esa regla general y que, como nación soberana, teníamos derecho a prohibir la entrada de extranjeros a nuestro territorio y a dictar las condiciones para su admisión.

La reacción no se hizo esperar. El contralmirante Leblanc, estacionado con su escuadra en Montevideo, apoyó la reclamación del encargado del consulado, quien exigió una reparación amplísima (es decir, la humillación del gobierno argentino) o el envío inmediato de sus pasaportes. El ministro Arana se los remitió acompañados de una nota en la que le manifestaba que el gobierno no tendría inconveniente en negociar con quien presentase credenciales que lo autorizasen para ello.

Pero el estilo de la Francia de Luis Felipe no era el de la negociación con los países débiles y "atrasados", sino el de la imposición. Los países débiles debían obedecer a las escuadras francesas que iban a civilizarlos. Desaparecido el casi cónsul Roger, tomó la dirección del asunto el contralmirante Leblanc. El 24 de marzo de 1838 dirigió una nota al gobierno argentino exigiendo que se suspendieran, con respecto a los franceses, los efectos de la ley de 1821 y que se los considerase como miembros de la nación más favorecida; que se reconociera a Francia el derecho a cobrar indemnización por los perjuicios causados a sus súbditos, y que se procediese sin tardanza a juzgar en el proceso Lavié (uno de los presos), amenazando con represalias en caso de negativa.

El ministro Arana le respondió que, si no había tratado con un empleado consular, menos podía dar oídos a un jefe militar que pretendía arrancar resoluciones a un gobierno soberano bajo la amenaza de la fuerza. Leblanc reaccionó declarando en estado de riguroso bloqueo la ciudad de Buenos Aires y todo el litoral argentino.

Ante esa actitud, el gobierno elevó una protesta alegando la ilicitud del bloqueo sin declaración de guerra y fundado en reclamaciones que ni siquiera se habían presentado válidamente, en la forma prescripta por el derecho internacional. Como esta nota sólo obtuviese una contestación elusiva, se mandaron al cuerpo diplomático y al mismo Leblanc informes en que constaba la justicia de las prisiones recaídas sobre los franceses que se hallaban en el caso —un asesino y un ladrón confesos— como asimismo sobre los seis de esa nacionalidad que prestaban servicios en la milicia en calidad de voluntarios.

El bloqueo continuó, no obstante, como expresión de una política francesa generalizada, que en esos momentos se practicaba con éxito diverso en México, Ecuador y Chile.

Esta agresión —en circunstancias en que la nación se hallaba en guerra con el tirano de Bolivia— agravaba considerablemente la situación de Rosas. El precio de los artículos de primera necesidad subía a las nubes con la falta de producción e importaciones, al mismo tiempo que la desaparición de las rentas de Aduana llevaba al máximo las dificultades del erario. El comercio estaba virtualmente cerrado en todas las fronteras. La conspiración arreció naturalmente en la capital, alrededor de los personajes unitarios que no habían emigrado, como don Valentín Gómez. Rosas debió hacer frente a la situación con toda energía, suprimiendo los gastos públicos no estrictamente indispensables —como los de la enseñanza secundaria y superior— y propiciando que se costearan por suscripciones públicas, como se hizo. Tuvo que apelar asimismo al crédito interno, que le fue ampliamente otorgado, en la medida en que su política de defensa del honor nacional satisfacía a la opinión patriótica.

* * *

Antes de seguir adelante con los episodios de la lucha por la independencia nacional contra el agresor extranjero, es menester que nos refiramos a los motivos que llevaron a una fracción disidente de la minoría ilustrada del pueblo argentino a aliarse con aquél contra su patria, en una acción de incalculables consecuencias que duran hasta hoy.

Conocemos cuál era la actitud espiritual de los rivadavianos: la típica de los "hombres de toga" contra la realidad, para ellos desagradable y retrógrada, del caudillismo tradicionalista y militar, al que pretendían reemplazar por un gobierno civilizado, es decir, europeo —monarquía constitucional que asegurase los privilegios de la minoría culta— o república unitaria y censitaria. El denominador común de esta escuela era el desprecio a la tradición española que caracterizó a los "iluminados" de la época de Carlos III y que se extendía, por consiguiente, a la realidad de su propio país, al que deseaban cambiar radicalmente mediante la aplicación de las recetas liberales y la inmigración extranjera. Como entre la realidad y los principios se quedaban con los segundos, no es de extrañar que no tuviesen reparos en sacrificar partes de esa realidad —provincias enteras— con tal de que aquellos pudieran regir en lo que quedara: de ahí que asumieran la responsabilidad de la desintegración territorial y que siguieran propiciándola. Derrotados aquí se habían constituido en Montevideo en una especie de gobierno en el exilio, que tomó el nombre de Comisión Argentina.

Pero en los años en que Rosas iniciaba su segundo gobierno habrían de sentirse en el Río de la Plata nuevas influencias que incidirían sobre una generación intelectual llamada a tener actuación decisiva en los acontecimientos próximos. Esas influencias europeas, coincidentes con la revolución que se operaba en el Viejo Mundo, son las que, no obstante su gran complejidad, pueden caracterizarse bajo el nombre común de romanticismo.

El romanticismo significaba una reacción espiritual e ideológica, contra las tendencias del siglo XVIII. Al racionalismo de los "filósofos", con su tendencia a la irreligiosidad y al materialismo, opondría el culto del "sentimiento", el cual se traduciría, ya en vagas aspiraciones religiosas, ya en un retorno sentimental o estético a la fe heredada. La primacía del sentimiento traería como anexa la ruptura de los moldes clásicos, insuficientes para contener su desborde, y la libertad de las formas expresivas; y una nueva sumersión en la realidad —natural o histórica— para sacar a luz las verdades que el racionalismo con sus esquemas era incapaz de captar. En materia social y política nacerían así valores nuevos: la sociedad, los pueblos, las nacionalidades, otro sentido de la patria, fundado en la comunión con la tierra y el idioma. Al individualismo de los antecesores se opondrían diversas formas de un vago socialismo; a la ideología, la historia. Todo esto llegó hasta aquí —según el valioso testimonio de don Vicente Fidel López— con las noticias de la revolución de 1830 en Francia, que pareció el comienzo de una nueva época y después de la cual se experimentó en Buenos Aires una verdadera invasión de

libros españoles y franceses. El impacto de esas influencias sobre el espíritu de la nueva generación argentina —formada por jóvenes nacidos alrededor de 1810 y que tenían por consiguiente la edad de la patria— se concretó en la formación del Salón Literario, que se inauguró el 23 de julio de 1837, con discursos de Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y Marcos Sastre.

—El Salón Literario tuvo al comienzo el carácter de una tentativa de acercar la inteligencia naciente a la situación política que contaba con el indudable auspicio popular. Los jóvenes escritores se alzaban contra la imitación servil de lo extranjero y pretendían extraer de la observación de la realidad las normas para su acción. Este pensamiento se halla expresado con toda claridad en el "Fragmento preliminar al estudio del Derecho" de Alberdi, leído en la ocasión expresada. "Nuestra misión presente (es): el estudio y el desarrollo pacífico del espíritu americano bajo la forma más adecuada y propia. Nosotros hemos debido suponer en la persona grande y poderosa que preside nuestros destinos públicos una fuerte intuición de estas verdades, a la vista de su profundo instinto antipático contra las teorías exóticas". Y agregaba más adelante: "Lo que el gran magistrado ha ensayado de practicar en la política es llamada la juventud a ensayar en el arte, en la filosofía, en la industria, en la sociabilidad: es decir, es llamada la juventud a investigar la ley y la forma nacional del desarrollo de estos elementos. . . No más tutela doctrinaria que la inspección severa de nuestra historia próxima". En páginas posteriores y apoyándose en la autoridad de Lermínier, justificaba el poder de Rosas por "su carácter eminentemente representativo" puesto que "la popularidad es el signo más irrecusable de la legitimidad de los gobiernos".

Si algún sentido tenía esta producción era, sin duda, el de una reacción terminante contra el descastamiento de los rivadavianos y a todas luces traducía un sentimiento colectivo.

No todas las manifestaciones de esa juventud mostraban empero un carácter tan juicioso. El pensamiento de Esteban Echeverría, por ejemplo, adolecía —no obstante su intención de realismo— de toda la vaguedad y la ideología —impregnada de un confuso democratismo, un tenue deísmo y un socialismo indefinido— que caracterizan a las peores producciones de la época. Mayor en cuatro o cinco años (lo que a esa edad es mucho) que sus compañeros de promoción, el autor de "Palabras simbólicas" y definidor del "Dogma" de Mayo tenía ante aquéllos, independientemente de sus dotes literarias, el prestigio incontrastable que le daba el haber estado en París y traer el mensaje de su fuente viva. Pero no era una cabeza política, según lo demuestra su tentativa de solución ecléctica basada en una fusión imposible de las

tendencias en pugna, como si se tratase sólo de un conflicto entre formas de gobierno. Pretende reaccionar contra el iluminismo rivadaviano pero su filiación se denuncia en una común actitud con respecto a España y a la tradición española. Los elementos de novedad que contenían sus escritos eran si embargo conducentes a impresionar los ánimos de una juventud inquieta y deseosa de contribuir con su esfuerzo a la curación de lo que sentía como imperfecto o mezquino.

¿Cómo y por qué este movimiento, llamado a renovar el espíritu nacional dentro de las tendencias determinadas por su historia, cambió bruscamente de frente y se convirtió en aliado de la agresión extranjera? Por diversas circunstancias desventuradas, entre las cuales no fue la menor el hecho de que la potencia agresora encarnara para esos jóvenes el progreso intelectual y político, la civilización y la cultura. No obstante sus conatos historicistas y su aspiración teórica a la autenticidad, eran afrancesados por su formación mental y sus admiraciones, y ello les inspiró el cálculo erróneo de que por ley del progreso Rosas debía caer; y tal era —según vimos en la carta de Lavalle— la impresión general cuando se inició el bloqueo. Siendo así, ¿no convenía enrolarse cuanto antes en las filas de la oposición, para volver en seguida actuando como libertadores? Se equivocaron; debían esperar todavía quince años. Pero habían pasado el Rubicón y tendrían que apechugar con todas las consecuencias de su error.

Sabido es que Alberdi emigró a Montevideo inmediatamente después de la caída de Oribe en noviembre de 1838, e inició allí inmediatamente la campaña periodística por la alianza de la emigración con los franceses sitiadores. Esa campaña indignó a la mayoría de los viejos unitarios, en quienes no se había embotado el sentido patriótico elemental. Lavalle afirmó —en carta conocida a Chilavert— que los propugnadores de la alianza querían “tras-tornar las leyes eternas del patriotismo, del honor y del buen sentido”; agregando que “toda la emigración preferirá que la revista la llame estúpida a que su patria la maldiga mañana con el dictado de vil traidora”. Desgraciadamente, esa actitud no habría de durar. El pobre general —siempre sensible a los argumentos de los doctores de su partido— caería muy pronto bajo la su-gestión de don Florencio Varela, que fue quien sirvió de puente para que la vieja generación rivadaviana se inclinara a adoptar las ideas de la joven generación romántica.

* * *

El bloqueo francés creaba a la Confederación una situación de excepcional gravedad. Rosas estaba resuelto a hacerle frente por todos los medios de la política, siempre que no sufriera el honor nacional, aunque veía los obstáculos originados en las vacilaciones y la traición internas.

En carta a Berón de Astrada, que acababa de ser electo gobernador de Corrientes, le expresaba por esos días: “Debemos congratularnos porque nada podrán obtener, entre los buenos argentinos, los miserables que creen que la vida o los intereses pueden ser algo, aun cuando falten el honor y la libertad”.

Estas palabras tenían su razón de ser. El comercio de Buenos Aires, afectado por el bloqueo, se conmovía, y la oposición se hacía sentir en el seno mismo de la Legislatura adicta. El 25 de mayo habían aparecido en las paredes carteles contra el Restaurador, y en la discusión parlamentaria entablada a raíz del conflicto se habían producido disturbios en la barra. Rosas no ignoraba que la indecisión ganaba también a las provincias litorales, y que el mismo don Estanislao López, Patriarca de la Federación, se inclinaba —por influjo de don Domingo Cullen— a pactar con los agresores. Resuelto a agotar todos los medios para una solución pacífica y honorable, propuso la mediación inglesa.

Aceptada la propuesta en principio por el contralmirante francés, hubo de escollar con la oposición de Rivera y de los emigrados argentinos, quienes alegaron que la solución del conflicto dilataría la caída de Rosas, que consideraban inminente. En esas circunstancias, falleció López (15 de junio). La legislatura santafesina nombró en su reemplazo a Cullen. Pero don Juan Pablo López, hermano del caudillo muerto, se alzó contra el electo, ayudado por el general Echagüe, gobernador de Entre Ríos. Cullen huyó a Córdoba. El descubrimiento, entre sus papeles, de las pruebas de sus tratos con los franceses provocaría su ulterior prisión y ejecución por orden del Restaurador.

El primer choque con los franceses ocurrió en Martín García. La isla estaba ocupada por una guarnición argentina de 125 hombres al mando del teniente coronel don Jerónimo Costa, que tenía como segundo al mayor don Juan B. Thorne. El 11 de octubre fue atacada por ocho buques y veinte lanchones de fuerzas combinadas francesas y riveristas al mando del capitán de navío don Hipólito Duguenet. El jefe atacante comunicó a la guarnición su propósito de tomar la posición; invocando la superioridad de sus fuerzas, dio plazo de una hora para entregarla. Costa reunió a sus oficiales y les expresó que estaba dispuesto a sostener a todo trance el honor de la bandera, y en ese sentido ofició a los agresores, con el apoyo unánime de aquéllos. La pequeña tropa luchó hasta el agotamiento de las municiones, siendo

desalojada de sus reductos, después de una hora y media de combate encarnizado, por fuerzas de desembarco muy superiores en número. Los vencidos fueron remitidos a Buenos Aires con expresiones admirativas del jefe francés por su conducta.

La toma de Martín García pareció galvanizar por un momento el patriotismo de los unitarios de Montevideo. En la tantas veces citada carta a Chilavert, Lavalle declaraba con evidente satisfacción: "El honor del pabellón argentino ha quedado bien". Y Juan Cruz Varela cantaba, con sentimiento justo, pero errado como siempre en la profecía:

*"¡Ah si tu tirano supiese siquiera
Reprimir el vuelo de audacia extranjera
Y vengar agravios que no vengará!"*

Análogos sentimientos expresaban Carril, Alsina y el resto de los emigrados, mientras Lavalle, todavía dos meses después, pensaba en ofrecer sus servicios a Rosas, cuya causa —decía— "sea lo que fuese, es nacional". No había ofuscación moral, como se ve; los sentimientos funcionaban normalmente; la causa de la patria se sobreponía a la disidencia política. La noción del deber era clara, lo cual agrava la responsabilidad de haberlo violado.

Pero entre tanto Fructuoso Rivera había subido al poder con ayuda francesa, y Alberdi y sus amigos de la nueva generación comenzaban su propaganda insidiosa que poco a poco —por la pendiente que va de la indignación a la costumbre y de ésta a la adhesión— disiparía los escrúpulos de los hombres de la Comisión Argentina hasta hacerlos incurrir en los actos que ellos mismos, en su reacción espontánea del primer momento, habían calificado de vil traición. El general San Martín los ajusticiaría ante la posteridad con palabras de bronce en su carta del 10 de julio, dirigida al Restaurador: "Lo que no puedo concebir —decía— es que haya americanos que por su indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española: una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer".

* * *

Los últimos meses del año 1838 pusieron a dura prueba la fortaleza de Rosas. Pocos días antes de la toma de Martín García (20 de octubre) fallecía en Buenos Aires de larga dolencia, su

esposa doña Encarnación Ezcurra, cuya identidad con sus miras políticas y adhesión a la "Santa Causa", alentada con enérgica pasión, se había mostrado en la revolución contra Balcarce, que le valió la calificación popular de "Heroína". Los funerales que se le hicieron fueron grandiosos y sirvieron para dar testimonio de la unión del pueblo, en todas sus capas sociales, con el defensor de su dignidad e independencia. Se adoptó el "luto federal", cintillo rojo en el sombrero acompañado de un crespón: distintivo que siguió subsistiendo aún después de haberse pasado el tiempo indicado para el duelo.

Al mes siguiente (12 de noviembre) fue asesinado en Tucumán el general don Alejandro Heredia, jefe de las fuerzas de operaciones en la guerra contra Bolivia y gobernador de la provincia. La pérdida era seria para la Confederación, por tratarse de la más eminente figura del norte, con influjo sobre varias provincias, y confirmaría el acierto de las predicciones del Restaurador en su oposición a la política de "fusión de partidos" en que aquél se hallaba empeñado. Había permitido la vuelta a la provincia de los emigrados unitarios, que no cesaban de conspirar contra él. Su asesinato —que se atribuyó a una enemistad personal— fue inmediatamente aprovechado por los unitarios encabezados por don Marco Avellaneda, para nombrar un gobernador adicto.

A esa falta de previsión política de Heredia había que agregar la serie de errores que cometió en los últimos tiempos y que contribuyeron a desacreditar no sólo su persona, sino también la causa que encarnaba: principalmente en la conducción de la guerra, librada a la iniciativa de jefes subalternos, según lo denunciaba a Rosas el general don Tomás Brizuela, gobernador de La Rioja.

La guerra del norte tendría pronto una solución favorable con la derrota de Santa Cruz en Yungay, el 19 de enero de 1839, por obra de la expedición chilena al mando del general Bulnes, unida a las fuerzas del norte peruano a las órdenes del general Gamarra.

De la amenaza creada por la nueva situación tucumana da idea la siguiente carta de don Valentín Alsina a Chilavert: "Los resultados que... ha producido el asesinato de Heredia en Tucumán y Salta manifiestan que ha prendido una llama que puede ser voraz, y nada difícil es que prenda en Catamarca y Mendoza, y sobre todo en Córdoba, de donde se comunicará a Santa Fe, mucho más si Rivera se apodera de Entre Ríos". Los peligros reales se transparentan con toda claridad bajo las ilusiones del emigrado.

IV. LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA (Segunda parte)

Así como Francia especulaba con la acción de los opositores a Rosas y la del gobierno "títere" de Montevideo, instalado bajo su auspicio, la emigración unitaria creyó encontrar la carta de triunfo seguro en el apoyo de la escuadra bloqueadora. La comunidad de intereses hizo que se disiparan las últimas objeciones de los escrupulosos en materia de patriotismo y que aun los más rígidos se decidieran a aceptar la alianza, en aras de la civilización intemporal, como un mal trago inevitable que pronto pasaría. Ya que Rosas parecía condenado a caer ante una fuerza incontrastable, era lo más prudente no perder tiempo en enrolarse, desde luego sin más trámite, del lado de la victoria.

Este pensamiento utilitario —al que no era ajeno el aliciente de la ayuda financiera de los bloqueadores— fue sin duda el que más pesó para la formación de la alianza sobre todo en las situaciones federales disidentes del litoral.

Las negociaciones habían comenzado entre los franceses, Rivera y los emigrados de la Comisión Argentina, con don Domingo Cullen, ministro de Estanislao López y luego su efímero sucesor. Este había logrado la adhesión del gobernador de Corrientes, don Genaro Berón de Astrada, heredero de una vieja tradición local antiporteña. La eliminación de Cullen y su huída retardaron algo la realización del plan, que consistía en la invasión de Entre Ríos por Rivera, para juntarse allí con las fuerzas de Corrientes y marchar sobre Buenos Aires, donde estallaría al mismo tiempo una revolución apoyada por milicias de la campaña. Se especulaba con el malestar de la población, a consecuencia de las penurias inherentes al bloqueo. El comisionado del gobierno francés en Montevideo —M. de Martigny— se mostraba dispuesto a prestar toda la ayuda necesaria para acabar con la resistencia argentina.

Rivera se dispuso a sacar todo el provecho posible de esa buena voluntad y pidió y obtuvo cuantiosos subsidios para armar y abastecer su ejército. Pero al mismo tiempo sostenía (por intermedio de Lavalleja) negociaciones secretas con Rosas para llegar a un entendimiento, al que éste no accedió, tanto por su conocimiento del personaje cuanto por no consentir en la usurpación

de que era víctima Oribe. Mientras tanto, el oriental daba largas al cumplimiento de sus compromisos, planteando cuestiones dilatorias, como la exigencia de que se le entregara la isla de Martín García, ya en manos de los franceses.

Berón de Astrada se había sentido a la sazón obligado a pronunciarse antes de tiempo contra Rosas. Este le ordenó al general Echagüe que marchara contra Corrientes, lo que hizo, con un ejército de 5.000 hombres. Sin fuerzas organizadas y abandonado por sus aliados, Berón debió hacer frente en inferioridad de condiciones al aguerrido ejército entrerriano, siendo completamente derrotado en la batalla de Pago Largo el 31 de marzo de 1839 y muerto en la acción.

La persuasión de don Florencio Varela había logrado vencer la resistencia de Lavalle a colaborar con los franceses. El poderoso aliado urgía a la acción rápida y no era cosa de despreciar su ayuda en barcos y armas y sus subsidios monetarios. Pero no obstante la elocuencia del lenguaraz de la Comisión Argentina, Rivera se mantenía a la expectativa de sus gestiones ante el Restaurador. Después de Pago Largo y la trágica muerte de Berón de Astrada —a la que se seguiría el fusilamiento de Cullen en Arroyo del Medio el 22 de junio—, las cosas no se le mostraban muy claras ni prometedoras por el lado unitario. Dilató, pues, el cumplimiento de sus promesas de ayuda, pretextando recelos contra la jefatura de Lavalle (mientras en secreto ofrecía lisa y llanamente entregarlo desarmado a Rosas). Adivinando estas intenciones, Lavalle se apresuró a embarcarse en los barcos franceses que se pusieron a su disposición, acompañado de toda la oficialidad y unos pocos legionarios de la emigración argentina, y se dirigió el 2 de junio a la isla de Martín García, donde prepararía su expedición llamada Libertadora al amparo de la escuadra enemiga. Rivera entonces, desahuciado por Rosas (que le había impuesto como condición previa la devolución del mando a Oribe y su propia salida de territorio americano) se decidió por fin a colaborar.

Una activa emigración clandestina se producía entre tanto con rumbo a Montevideo, por todos los puntos de la desgarnecida costa y con ayuda de los bloqueadores. La "juventud dorada" del unitarismo y la Asociación de Mayo se apuraba a partir, así como una parte del comercio extranjero residente en Buenos Aires. Quien se incline a atribuir este éxodo a civismo liberal, debe tener en cuenta que la situación interna de la ciudad blo-

queada, con escasez de muchos artículos de primera necesidad y éstos a precios altísimos, no hacía la vida fácil ni agradable y que en cambio Montevideo, a la que afluí el comercio que hasta entonces tenía por meta nuestra capital, se había convertido en una verdadera jauja, donde los negocios estaban al alcance de la mano y corría el oro de los bloqueadores. Por lo demás, los hábiles de la política creían, según vimos, el negocio seguro.

La misma opinión cundía en ciertos círculos de Buenos Aires, en los que se fraguaba una conspiración secretamente vinculada a los planes de los emigrados.

Iniciada por un grupo de antiguos unitarios que vivían sin ser molestados en la ciudad —como Valentín Gómez, Zabaleta, Peña, Lozano—, había logrado la adhesión de algunos jóvenes vinculados a la Asociación de Mayo —Tejedor, Barros Pazos, Eguía— y hasta de un jefe de regimiento allegado a la familia de Rosas: el teniente coronel don Ramón Maza, hijo del amigo íntimo de aquél y presidente de la Legislatura y del Supremo Tribunal, don Manuel Vicente Maza, que también se hallaba comprometido. La noticia de esta conspiración, que empezó a trascender por indiscreciones y a la que se atribuía el propósito de asesinar al Restaurador, provocó la indignación popular, por su cariz de maquinación con el enemigo y de traición a la patria. Rosas la supo por una delación. El teniente coronel Maza fue encarcelado el 27 de junio. El mismo día, unos encapuchados asesinaron en su despacho de la Legislatura al doctor Maza, y a la mañana siguiente su hijo convicto era fusilado por orden de Rosas, en ejercicio de las facultades que le otorgaba la suma del poder.

Los unitarios atribuyeron a Rosas la instigación del asesinato de Maza. El Restaurador en el destierro acusó del hecho a los mismos unitarios, temerosos de quedar en descubierto al fracasar la conjuración. Sea como fuere, lo cierto es que el autor material fue individualizado y ejecutado y que Rosas hizo archivar el sumario, en el que aparecían complicados muchos personajes sobre los que no recayó ninguna sanción. "De otro modo —explicaba Rosas en la carta aludida— habría sido preciso ordenar la ejecución de no pocos federales y unitarios de importancia. Tal era el estado de terrible agitación en que se encontraba la mayoría federal victoriosa, muy principalmente por la liga del partido unitario y de algunos federales traidores con los extranjeros que tan injustamente hostilizaban al país".

El clamor popular en el conocimiento de la conjuración fue impresionante. La alianza visible de los unitarios con el extranjero provocó un recrudecimiento del entusiasmo público por el Restaurador y la unión más estrecha y decidida del pueblo con su jefe, que se manifestó en actos y homenajes de todo orden.

Se manifestó, sobre todo, en el fortalecimiento de la fibra guerrera. Cada vez que los franceses intentaron un ataque a la costa, salieron corridos y escarmentados. En febrero, el almirante Leblanc había pretendido tomar con veinte barcos el puerto de Zárate, siendo rechazado por las milicias locales a las órdenes del coronel Ramos. Poco después intentaron un desembarco en la Magdalena y fueron nuevamente repelidos. En junio pisaron tierra junto al arroyo del Sauce y los derrotó la fuerza al mando del comandante Valle, haciéndoles muchos muertos. Las milicias mal armadas mantenían en jaque a la valerosa y aguerrida marina francesa, fogueada en todos los mares del mundo.

La conjuración de Maza estaba en relaciones con un grupo de hacendados del sur de Buenos Aires, que debía apoyar el movimiento en la campaña. El descontento cundía allí por la penuria ocasionada por el bloqueo, añadida a las intimaciones del gobierno para que los enfiteutas se pusieran al día en sus cánones impagos.

Al fracasar el movimiento de la capital, dichos estancieros —Pedro Castelli, Martínez Castro, Ramos Mexía, Madero, Crámer, Lastra, Miguens— entraron en comunicación con el general Lavalle y le propusieron que desembarcara en el puerto del Tuyú, donde ellos lo apoyarían con sus elementos para marchar sobre Rosas. Contaban con levantar un ejército de tres o cuatro mil hombres. Con el pretexto de tareas camperas, habían reclutado en sus establecimientos numeroso personal que pensaban utilizar en el levantamiento armado.

Lavalle aceptó de buen grado el ofrecimiento y les advirtió que se mantuvieran alertas, a la espera de sus noticias. Estaba terminando de preparar en Martín García una fuerza de unos seiscientos hombres bien disciplinados (la tercera parte oficiales de carrera, para encuadrar a los elementos que se le plegasen), con la cooperación decidida —en forma de abastacimientos, armas y subsidios pecuniarios— de la escuadra francesa bloqueadora, comprometida asimismo a trasladarlo donde indicase y a prestarle incluso apoyo militar.

Una circunstancia imprevista lo hizo cambiar de plan. Echagüe cruzó el Uruguay, con su ejército triunfante de la rebelión correntina, para marchar sobre Rivera, dejando su provincia desguarnecida, en lo cual vio Lavalle una ocasión para hacerse fuerte en el litoral. Influyó, sin duda, en su decisión la desconfianza que sentía por la campaña del sur bonaerense, tradicionalmente adicta a Rosas (según se lo había enseñado la experiencia de 1829), y el deseo de no alejarse demasiado de los cañones de la escuadra amiga. Lanzarse a la campaña del sur era una aventura llena de riesgos: operar en el litoral —a un paso de la escuadra y de Rivera—, una operación prudente.

El 8 de setiembre, transportado por barcos franceses, desembarcó en las costas del departamento de Gualaguaychú y se puso en marcha hacia el norte. Esperaba que, haciéndose fuerte en Entre Ríos lograría, merced a sus alianzas, la adhesión de Corrientes, donde se fraguaba una nueva revolución, y acaso también la de don Juan Pablo López, de Santa Fe, donde quedaba el sedimento del foco de intrigas dejado por Cullen.

Sus primeros pasos fueron afortunados, aunque no tanto como esperaba. Se le incorporaron algunos oficiales y algunos estancieros con sus peonadas; pero lejos de mostrarse entusiastas, las poblaciones se mantenían reticentes, cuando no hostiles. Tuvo no obstante, un éxito militar, derrotando en Yeruá, el 22, a una milicia de 1.500 hombres reunidos precipitadamente por el gobernador delegado Zapata. Es de advertir que seguía la costa del Uruguay, a la vista de los barcos de sus aliados. Los manifestos que dirigió al pueblo y a la Legislatura, exigiendo la deposición de Echagüe, disgustaron por sus elogios a los franceses. Al llegar a Concordia y empezando a sentir ya en sus tropas los efectos de la desertión, supo que el gobernador de Santa Fe había llegado con 600 hombres a Paraná y esperaba refuerzos para atacarlo. No juzgando oportuno arriesgar el combate con su pequeño ejército, resolvió pasar a Corrientes, donde lo esperaba Chilavert y donde una nueva revolución triunfante había elevado al gobierno por segunda vez al general don Pedro Ferré.

Con el apoyo de un gobierno amigo en esa provincia y el aporte de los emigrados de la Banda Oriental y el Brasil, empezó a remontar su ejército para la gran insurrección del litoral contra Buenos Aires.

Pero entre tanto, la conjuración de los hacendados del sur había sido sentida, y Rosas había ordenado a sus jefes políticos que apresaran a los cabecillas y los remitieran a la capital. Avisados de lo que ocurría, éstos se vieron obligados a adelantar el pronunciamiento, sin esperar la llegada de Lavalle. El 29 de octubre, en la plaza de Dolores, se proclamó el movimiento, encabezado por don Pedro Castelli y don Ambrosio Crámer. Lograron levantar en pocos días alrededor de dos mil hombres. Pensaban obtener la colaboración de las fuerzas de línea acantonadas en Azul y Tapalqué, pero sus esperanzas no se cumplieron. Para mostrar la orfandad de opinión en que se debatían, basta mencionar que trataron de lograr la adhesión de la tribu de Catriel, haciéndole creer que se alzaban para vengar a Rosas, que había sido asesinado en una revolución de la ciudad. Las milicias de la campaña, a las órdenes del general don Prudencio Rosas, hermano del Restaurador, marcharon a su encuentro y los derrotaron completamente en Chascomús el 7 de noviembre. Se ejecutó

a los jefes y sus cabezas se colocaron en picas, para escarmiento. Los fugitivos de la acción se corrieron hasta Tuyú, donde fueron recogidos por los barcos franceses que patrullaban la costa.

“En instantes en que nos vemos hostilizados por el enemigo más tiránico y odioso que ha tenido la América del Sud, unos cuantos hijos desnaturalizados se le han unido para entregar nuestra patria a esos incendiarios agentes franceses”. Estas palabras del doctor don Lorenzo Torres en la Legislatura revelan la tónica del momento y explican la reacción de la dignidad nacional ante la agresión y sus aliados. En la sesión de referencia, los diputados acordaron poner a disposición del Restaurador sus personas, sus bienes y sus famas “para sostén de las leyes, de la independencia nacional y de la santa causa de la libertad del continente americano”.

Mantenida por el dinero francés y auxiliada por los barcos franceses que patrullaban el Uruguay, la guerra continuaba localizada en el litoral y la otra banda.

Mientras Lavalle preparaba sus fuerzas en Corrientes, el general don Juan Pablo López invadió la provincia con el ejército santafesino de 2.500 hombres; pero aquél levantó su campamento, obligando a su adversario a internarse en la provincia sin combatir, lo que le resultaría tan ruinoso como una derrota, pues hubo de volverse con grandes pérdidas de hombres y caballadas. Echagüe, por su parte, permanecía en la Banda Oriental, sin conseguir que Rivera le presentase batalla. Apremiado por Rosas para que decidiese la situación y volviese a Entre Ríos a esperar a Lavalle, provocó la batalla de Cagancha, el 29 de diciembre, y fue derrotado.

Su triunfo sobre Echagüe infatuó extraordinariamente a Rivera, reanimó sus pretensiones a extender su influjo a todo el litoral argentino; sirvióle para exigir nuevos subsidios franceses (que le fueron acordados), y lo llevó a disputar a Lavalle el comando supremo de las operaciones. Al mismo tiempo, y como para no perder la costumbre, insistía en gestiones secretas de entendimiento con Rosas y su “amigo” Oribe. Con ello, el campo unitario-riverista se había convertido en una verdadera bolsa de gatos, donde todos se celaban, principalmente en materia de preferencias para los subsidios, que significaban el medio del poder. A esto se agregaba la hurañez localista del oriental y el correntino. La piedra del escándalo entre Rivera y Lavalle era la jefatura suprema para el caso de invadir Entre Ríos. Al no obtener

lo que pretendía, don Frutos licenció su ejército, por lo cual los patrones le suprimieron la subvención, que iría a favorecer desde ese momento a la empresa regentada por el pobre héroe de Río-bamba. Toda esta sucia historia está detalladamente relatada por Vicente Fidel López (*Manual*, pág. 475-6) sin el menor escándalo y sin que ello conmueva la convicción que profesa sobre el desinterés de los franceses, que obraban según él por puro amor a la civilización, de acuerdo con "la política honrada del rey Luis Felipe" (id., pág. 462).

Erigido en campeón predilecto de la "política honrada", Lavalle había resuelto entenderse con los franceses sin intermediarios, sobreponiéndose a la rivalidad de Rivera y a los celos de Ferré, quien se consideraba con derecho a disponer como dueño del ejército reclutado en el territorio de su mando. Con la autoridad delegada por los proveedores de fondos (quienes también podían alegar títulos de propiedad), decidió alzarse con el ejército, no obstante la oposición del gobernador, y embarcarlo —en barcos franceses, desde luego— en el puerto entrerriano de Diamante para traerlo hasta las costas de Buenos Aires, dejando a Corrientes indefensa. Ello no podía lograrse sin la seducción de los oficiales y la tropa, es decir, sin grave desmedro de la disciplina. Con promesa de blandura y botín y con la ayuda de los amigos oficiosos y "desinteresados", el rapto se produjo, sin que Ferré —advertido a tiempo por Rivera de lo que se tramaba— pudiera impedirlo.

Se le dejaba como compensación la persona del general Paz "para que formara otro ejército", ¡como si la provincia fuese inagotable! Paz había llegado allí, en efecto, desde Montevideo, fugado de Buenos Aires, donde gozaba de la libertad que le había otorgado Rosas después de su larga prisión.

Lavalle marchó con sus tropas hacia Diamante. Tuvo dos encuentros indecisos con las fuerzas entrerrianas en Sauce Grande y en Don Cristóbal. Al fin se embarcó en la escuadrilla que le tenían preparada los franceses y después de una discusión violentísima en ese puerto con Ferré, que le exigía la devolución de sus soldados, y de un amago a la costa santafesina para engañar al enemigo, la expedición "libertadora" desembarcó en San Pedro para abrir la campaña sobre Buenos Aires.

V. EL AÑO 40 Y LA DERROTA DE LA COALICIÓN

La expedición "libertadora" de Lavalle se caracterizó por su desorganización y por la indisciplina generalizada en todos sus cuadros. Que ello ocurriera en un ejército mandado por un jefe de línea, formado en la escuela de Bolívar y San Martín, resultaría sorprendente, si no se explicase por las condiciones en que se habían reclutado las fuerzas y se había iniciado la campaña.

Puede afirmarse, de una manera general, que no existían en aquella tropa los aglutinantes de orden moral que hacen la cohesión de un ejército, reemplazados en el caso por la mera adhesión personal a un caudillo prestigioso. No faltaban, por cierto, en las legiones lavallistas, muchos idealistas equivocados, que creían participar en una cruzada por la libertad, como sin duda lo creía su jefe. Pero las huestes colectivas de las provincias, y en especial las correntinas —birladas a Ferré de la manera que vimos—, dejaban su tierra detrás de promesas de lucro y jolgorio, lo cual les comunicaba más el carácter de tropas mercenarias que de cruzada redentora; su adhesión al jefe estaba condicionada por un pacto tácito que implicaba un cierto margen de licencia, de lo que naturalmente abusaban, dedicándose al saqueo en todos los lugares del trayecto. Esto creaba conflictos permanentes con los jefes subalternos —cuya autoridad era impotente contra los excesos tolerados por el general— y abatía la moral de los mejores, harto afectada ya por la dura necesidad de apechugar con la alianza francesa, aceptada a regañadientes.

La expedición que desembarcó en las costas del norte de Buenos Aires se componía de poco más de tres mil hombres, en su mayor parte de caballería, y se inició con fortuna. El general Pacheco, jefe militar de la región, intentó oponérsele con milicias reclutadas precipitadamente y fue derrotado en el Tala, dejando expedito el camino a la capital. Lavalle avanzó hacia Navarro, sosteniendo encuentros parciales y exitosos. Despachó una columna al sur a buscar refuerzos, que derrotó a las milicias de don Vicente González en Monte. Lentamente fue adelantándose hasta Merlo, donde estableció campamento, siempre hostigado por partidas federales que rehuían presentarle combate.

Rosas delegó el gobierno en su ministro Arana y se dirigió al campamento de Santos Lugares, para preparar la resistencia

al mismo tiempo que ordenaba a las guarniciones del sur que mandaran sus contingentes. El gobernador López de Santa Fe acudía también al mando de sus milicias provinciales y algunos destacamentos del ejército entrerriano de Oribe.

Todo hacía suponer que Lavalle intentaría en breve plazo un ataque a la ciudad. Pero inesperadamente —en una de sus habituales variaciones de opinión— decidió no hacerlo y dirigirse hacia Santa Fe, abandonando su primer objetivo. Esta actitud, que fue violentamente reprochada por sus amigos de la Comisión Argentina y que todos los historiadores unitarios condenan, se debió seguramente a la seguridad de que fracasaría por la mayor fuerza del adversario. Contra la opinión optimista de los estrategas de Montevideo, la población se le mostraba hostil —se dice que sólo se le presentaron tres voluntarios—, a lo cual contribuían las depredaciones de su soldadesca. Por lo demás, la ayuda francesa no se hizo presente en la forma estipulada, o sea, mediante un desembarco de marinería para apoyar su ataque a la ciudad. Desde aquel pacto, las circunstancias habían cambiado. Ante la firmeza del Restaurador, la política de los agresores se inclinaba a la cautela; estaba pendiente la mediación inglesa para liquidar la cuestión y, si bien Francia continuaba su ayuda y acompañaba con su simpatía a sus agentes criollos, no podía ya realizar actos ostensibles de guerra.

Lavalle levantó, pues, el campo y se retiró hacia Santa Fe, limitándose a arrear todos los caballos que encontraba en el trayecto hasta el número de 20.000, precioso material de guerra cuya falta anuló el propósito de perseguirlo. Entró a la provincia sin encontrar resistencia de las fuerzas locales y se dirigió a la ciudad capital, donde había quedado una guarnición de 400 hombres al mando del general Garzón y que fue fácilmente tomada.

* * *

Lejos de disminuir por el bloqueo y las penurias de la guerra, el prestigio del Restaurador se había acrecentado con su actitud, provocando la adhesión de muchos que hasta entonces le habían sido contrarios o indiferentes. Se admiraba su resistencia y su serena energía. La opinión patriótica veía en él la encarnación de la independencia y el honor nacionales. El espíritu público se había encendido al rojo vivo de la exaltación, unánime en el odio a los agresores y a sus desnaturalizados aliados.

Esta opinión no era solamente local, sino internacional. El mundo político empezó a interesarse vivamente por el caso de

este pequeño país austral, que se mantenía firme y erguido frente a las exigencias de la segunda potencia marítima del mundo en plena expansión guerrera; y todas las simpatías se inclinaban a apoyar el derecho del débil. Lord Palmerston le manifestaba al ministro argentino Moreno su intención de “terminar con el estado de cosas del Plata”, que perjudicaba al comercio inglés, y en la Cámara de los Lores se condenaba la actitud de Francia, porque los ingleses son muy sensibles a los atropellos cometidos por otros. El general Alvear escribía, desde Estados Unidos, dando cuenta de la opinión unánime del mundo diplomático de Washington contra la agresión francesa y de la admiración correlativa por el Restaurador. Los gobiernos de América felicitaban al jefe de Estado que se hacía cabeza de una causa común. Y en el mismo Parlamento francés los diputados Lagrange, Remusat y Pellet de la Rozière declaraban que “los agentes franceses en el Río de la Plata habían sido arrastrados por los enemigos políticos del general Rosas a extremos perjudiciales y gravosos para los intereses comerciales de Francia”.

La firmeza de Rosas habría de hacer recapacitar al gobierno francés que, por cierto, no la había previsto. Sus hombres de estado se alarmaron ante la prolongación del estado de guerra, con las perturbaciones y los gastos consiguientes, convenciéndose del mal paso en que habían incurrido por sugerencias de M. Martigny y la Comisión Argentina. Por ello el mariscal Soult —jefe de gabinete de Luis Felipe— se opuso al envío de tropas de desembarco en número de 6.000 hombres que le pedía su agente en Montevideo, de acuerdo con lo convenido con Rivera y los unitarios. Era el refuerzo con que contaba Lavalle para su empresa, según le había escrito antes de iniciarla al comandante francés Bouchard: “La llegada del nuevo almirante creo que apresurará nuestras operaciones. . . No dudo que. . . vendrá dispuesto a apoyar a este ejército y que una de sus primeras medidas será ocupar el Paraná, destruyendo la batería del Rosario”. La negativa de Soult respondía al cambio de la opinión pública internacional ante el desarrollo de una cuestión que, de simple incidente diplomático, amenazaba convertirse en guerra de conquista, provocando la reacción de las demás potencias interesadas.

Hasta entonces, las tentativas de mediación habían fracasado. El almirante Dupotet —que entrevió la verdad y mantuvo, al comienzo de las hostilidades y por mediación de Mandeville una entrevista con Arana en la fragata “Actéon”—, había chocado con la resistencia de los agentes franceses influidos por la Comisión Argentina. Igual suerte había corrido otra propuesta del almirante norteamericano Nicholson. Finalmente, el gobierno francés decidió enviar —con carácter de plenipotenciario— al vicealmirante barón de Mackau.

El barón de Mackau desembarcó en Montevideo cuando se iniciaba la expedición de Lavalle. En los primeros momentos, sugestionado por sus compatriotas de esa plaza y los emigrados, siguió prestando ayuda a una empresa que juzgó vencedora. Pero la retirada de aquél (y sobre todo la investigación que realizó sobre la disposición de los subsidios) y la política tortuosa de Rivera, lo decidieron a negociar. Era lo que Rosas había propuesto desde el comienzo. La convención se realizó sobre las bases antes convenidas con Dupotet y se firmó el 19 de octubre de 1840. En ella se establecía que el gobierno de la Confederación reconocía las indemnizaciones debidas a los franceses que habían sufrido pérdidas en el país, las que se fijarían por árbitros, según lo había ofrecido Rosas desde dos años atrás; que se levantaría el bloqueo y se devolverían la isla Martín García y los barcos apresados a la República en el mismo estado en que se encontraban entonces; que se admitía la intercesión de Francia en favor de los proscriptos, concediéndoseles la repatriación sin molestárselos por sus opiniones anteriores, con excepción de los generales y comandantes de cuerpo; que el gobierno argentino reconocía la independencia del Uruguay, y que mientras no se firmase un tratado de comercio y navegación, ambos países se considerarían recíprocamente en las condiciones de la nación más favorecida.

Esta convención —que resguardaba los intereses bien entendidos de Francia y dejaba a salvo el honor nacional— fue universalmente considerada como un triunfo de Rosas. Una vez ratificada, el plenipotenciario francés hizo enarbolar al tope de la "Almène" la bandera argentina, saludándola con 21 cañonazos. El saludo fue retribuido en el campamento Santos Lugares y se celebró con grandes fiestas el restablecimiento de la paz.

* * *

Si se piensa que casi la totalidad de los recursos fiscales provenían de las rentas de Aduana, resulta en verdad asombroso que Rosas haya podido mantenerse en el poder a pesar del bloqueo y la poderosa coalición de sus enemigos. Debíase ello en parte a su inmenso prestigio, acrecentado por su actitud de dignidad e independencia, que conmovía las fibras más nobles de la nación. Todos los recursos de la riqueza privada se pusieron a su servicio, en forma de créditos y contribuciones voluntarias, y la población soportó con estoicismo las penurias, considerando que eran un mínimo precio para salvaguardia del honor.

Pero había otra circunstancia que facilitaba la resistencia, y era el resurgimiento económico que el país experimentaba desde hacía cuatro años por la aplicación de la Ley de Aduana y la protección a las industrias locales, unida a la disposición que prohibía las exportaciones de metálico. En todas partes se trabajaba y se producía. Ni los estragos de la guerra —circumscripita a ciertas regiones del litoral— ni el prolongado bloqueo con los consiguientes perjuicios fiscales, podían contrarrestar ese aumento paulatino de la riqueza por el desarrollo de la actividad productora, que abastecía casi en su totalidad las modestas necesidades del mercado interno. Dentro de esa prosperidad general, el cierre del comercio del puerto podía soportarse durante mucho tiempo sin catástrofe. Una política de orden y de rigurosa economía sirvió para compensar la penuria fiscal, ayudada eventualmente por emisiones moderadas sin respaldo metálico, que se absorbían naturalmente en el aumento creciente de la producción y la oferta.

En los momentos peores de la amenaza, la exaltación patriótica hubo de traducirse, como era natural, en odio contra el enemigo e indignación invencible contra los traidores, que se desató al hacerse pública la alianza que probaba el sometimiento de los emigrados a las directivas y al oro de los franceses. No es de extrañar, por consiguiente, que se aplicasen a los culpables las penas que la tradición común de la humanidad considera adecuadas a la magnitud de ese crimen. Tal el sentido del llamado "terror del año 40", que no fue más que la reacción pública contra el enemigo interno y que si costó bastantes víctimas, no puede ni remotamente compararse a otros sangrientos episodios de guerra civil, como la carlista contemporánea o la ulterior represión de la comuna parisiense. La verdad es que duró pocos días y que hubo de ser enérgicamente contenido por el mismo Rosas, apenas las circunstancias de la guerra le permitieron hacerse cargo nuevamente del gobierno.

La firma de la convención Mackau-Arana fue recibida por los unitarios y riveristas como una traición, a la que no se cuidaban de calificar de "infame". El general Iriarte, en sus "Memorias", la repudia como un atentado de lesa patria por parte de los franceses y se indigna en nombre del honor francés. ¿Abandonar así a un ejército que "ellos" habían formado y que "ellos" pagaban!... De acuerdo con el tratado, se le hicieron a Lavalle propuestas de paz, que no aceptó. Había estallado la rebelión en el norte; se alentaba la ilusión de conmovier desde allí a todo el país. Paz preparaba su ejército en Corrientes y esperaba posesionarse de todo el litoral, apoyado en los recursos de esa provincia y los de la Banda Oriental, dominada por Rivera.

Tal como lo preveía don Valentín Alsina, la muerte de Heredia había suscitado un foco de rebelión en el norte, que sólo esperaba la oportunidad para propagarse y creyó encontrarla en la situación aparentemente insostenible que creaba a Rosas la invasión de Lavalle.

Rosas había mandado a Tucumán al general don Gregorio Aráoz de Lamadrid —quien de vuelta de su voluntario destierro por su aventura decembrista vivía a su amparo, haciéndole protestas de ciega adhesión— con el objeto de recuperar material de guerra enviado allí a raíz del conflicto con Santa Cruz. Aprovechó la oportunidad para pronunciarse. El grupo unitario de esa provincia —cuyo caudillo era el doctor don Marco M. Avellaneda, vinculado a la Asociación de Mayo— obró hábilmente y obtuvo la colaboración de los gobernadores federales de La Rioja, Jujuy y Catamarca, antiguos quiroguistas y hombres sencillos, a quienes no fue difícil envolver en la insidia unitaria que le achacaba a Rosas la instigación de Barranca Yaco. Esto fue lo que se llamó “coalición del norte”, cuya jefatura se encomendó al general Brizuela.

La rebelión se extendió a Córdoba. El general Lamadrid invadió la provincia con fuerzas de Salta y Tucumán y, a su aproximación, los elementos unitarios de la ciudad hicieron una revolución y se apoderaron del gobierno.

Lavalle se encontraba en Santa Fe. Enterado de que las tropas de Oribe, reforzadas por un numeroso contingente de Buenos Aires, iban a su encuentro, decidió replegarse a Córdoba para unirse con Lamadrid. Como de costumbre, se retardó en la operación e inició una marcha trabajosa y desordenada, dificultada por las carretas de la impedimenta y los inconvenientes del terreno. Oribe, que lo seguía de cerca, lo alcanzó en Quebracho Herrado, donde le dio batalla el 28 de noviembre, derrotándolo completamente. Desde ese momento, su marcha sería una desordenada fuga y la expedición una secuela de desastres.

* * *

Lavalle y Lamadrid se encontraron en Córdoba y acamparon en distintos lugares fuera de la ciudad. Con la derrota, la desmoralización del ejército de Lavalle había llegado al extremo, de tal modo que Lamadrid —que no era tampoco, por cierto, un dechado de disciplina— se ocupó de que el contagio no llegara a sus huestes. Teóricamente, habrían podido reunir sus fuerzas para formar un ejército capaz de hacer frente al de Oribe. Pero los imponderables actuaban en contra. Sin la ayuda francesa, ya

no creían en el triunfo. Además, ninguno de ellos quería obedecer al otro. Como consecuencia de la desmoralización, empezó la deserción en masa. Incapaz de juntar sus fuerzas en una organización coherente, Lavalle decidió dispersarlas, con lo que las diversas columnas fueron batidas en detalle, cuando no se pasaron al ejército de la Confederación, como las partidas levantadas por Peñaloza en los Llanos y las divisiones de Villafañe y Videla. A las tropas de Oribe —que llevaba como segundo a Pacheco— se habían unido, operando en detalle, las de Mendoza y San Juan, con sus gobernadores Aldao y Benavídez.

Lamadrid se dirigió rápidamente a Tucumán, a fin de sostener esa situación, salvándola de los efectos de la derrota de Lavalle, mientras éste marchó a juntarse con Brizuela. Planeaban concentrarse en aquella ciudad y esperar allí al enemigo. Oribe había restablecido el gobierno legal de Córdoba y marchaba hacia los Llanos, aclamado en todas partes como un libertador y aumentando sus tropas con los pasados del enemigo.

En Sañogasta, la división Aldao atacó y derrotó a Brizuela, quien murió en la acción. En Catamarca se unieron Lavalle y Lamadrid. Resolvieron que éste marchara sobre Cuyo, mientras aquél continuaba hacia el norte. Oribe se replegó sobre Córdoba y destacó desde allí una columna al mando de Pacheco para combatir a Lamadrid. El coronel unitario don Mariano Acha obtuvo una brillante victoria en Angaco; pero fue derrotado luego por Benavídez y hecho prisionero. Lamadrid, por su parte, con el grueso de las fuerzas, fue alcanzado por Pacheco, quien lo derrotó completamente en Rodeo del Medio (setiembre de 1841). Pudo salvarse por la cordillera, con un grupo de adictos, y refugiarse en Chile. Acha fue fusilado: había sido uno de los entregadores de Dorrego.

Lavalle entre tanto llegaba a Tucumán, cuyo gobernador Avellaneda había levantado una división de milicias. Tanto esta provincia como Salta se hallaban en plena efervescencia política, dispuestas a restablecer el gobierno federal, de tal modo que los esfuerzos de Lavalle por hacer allí pie chocaban con las dificultades de la situación interna. Oribe fue a su encuentro, reforzado por la división santiagueña de Ibarra. El encuentro se produjo en Famaillá, el 19 de setiembre. Las fuerzas unitarias fueron nuevamente derrotadas, debiendo salvarse su jefe y unos pocos más a uña de caballo. Avellaneda fue tomado al huir y ejecutado, después de un consejo de guerra en el que se lo hizo responsable de la muerte del gobernador legal de la provincia.

La pacificación del interior había ocupado gran parte del año 1841.

Lavalle fue perseguido hasta Jujuy, donde encontró accidentalmente la muerte en un tiroteo a la puerta de la casa donde se había refugiado. Sus partidarios buscaron asilo en Bolivia, llevando sus restos.

* * *

Con la derrota de la "coalición del norte" quedaba definitivamente pacificado el interior, que ya no volvería a conmoverse, salvo episodios aislados, casi incidentes de frontera. La fuerza del federalismo era allí incontrastable. Esta había sido la causa eficiente del desastre unitario, más que los errores del general en jefe, sobre quien obró, desde el primer momento, el desaliento emergente de la visible hostilidad del medio en que actuaba. Al retirarse de Buenos Aires ya llevaba la derrota adentro, y no es difícil que lo corroyera asimismo la amargura moral por su situación, que él había juzgado anticipadamente y que sólo podía justificarse por una rápida y espectacular victoria, que probara el supuesto divorcio entre el "tirano" y su pueblo.

La prueba de lo contrario certificaba la traición. Por eso hubo de rechazar indignado la propuesta del mediador Halley, quien al pedirle (en cumplimiento del tratado) que depusiera las armas, le ofreció, en nombre de su gobierno, la situación y el sueldo de ¡general francés!... Lo que no era, por cierto, más que protocolizar una situación de hecho, pero cuya profunda e involuntaria ironía habría herido hasta el fondo al héroe de Ríobamba. La otra opción era la resistencia desesperada y la muerte. Pagó caro su error y esto lo hace acreedor a la indulgencia de la historia, en gracia a sus juveniles laureles.

VI. GUERRA EN EL LITORAL

Si el interior se hallaba unido en un fuerte haz bajo la dirección enérgica del gobernador de Buenos Aires, quedaba el foco de infección en la frontera con la situación de la Banda Oriental, dominada por Rivera, y la de Corrientes, donde el general Paz preparaba su ejército con el propósito de unificar las provincias litorales y marchar sobre Buenos Aires.

Corrientes era, por diversas circunstancias que conocemos, la provincia que mantenía más viva su actitud antiporteña, encarnada a la sazón en un personaje como Ferré, con reales condiciones de caudillo. Por eso habían puesto en él sus miras los unitarios de Montevideo y el jefe de los "colorados", siempre empeñado en el proyecto, que aquéllos fomentaban, de extender su influencia a la Mesopotamia, según el sueño artiguista.

Mientras Rivera adulaba a Ferré para ganarlo a sus planes y éste se dejaba querer, Paz perseguía otros fines. Estaba poseído de una gran ambición política y creía en su estrella. No obstante sus dotes militares, era un legalista seducido por la engañifa rivadaviana de la civilización y reaccionaba como un hombre de toga, como un artillero injertado en un doctor cordobés, despreciador de caudillos. Si no lo aceptaba a Rosas, mucho menos iría a ceder a las sugerencias de don Frutos. Su plan consistía en la creación de un gran poder militar para derrocar al Restaurador y realizar, sobre los escombros del federalismo, la unificación frustrada de 1829. Esto lo predisponía a chocar con sus aliados y a disentir con sus propios amigos de la Comisión Argentina, quienes debían pagar la protección que les prestaba Rivera con su adhesión incondicional.

Era natural que el oriental tratara de eliminar al cordobés con todo género de intrigas, que hallaban acogida en las trágicas aldeanas del gobernador de Corrientes. A las dificultades de su empresa se agregaban para Paz las que le oponía la desconfianza de Ferré, por lo cual más de una vez estuvo a punto de abandonarla. Con todo, pudo preparar y disciplinar un ejército de tres mil hombres de todas las armas en su campamento del Rincón de Villanueva.

* * *

Con el interior pacificado y la superioridad de sus fuerzas militares al servicio de su prestigio nacional, Rosas podía encarar la situación sin inquietudes. Se limitó a cerrar las comunicaciones con las zonas de infección y a remontar la escuadra de vigilancia de las costas que puso a las órdenes del glorioso vencedor de Los Pozos y El Juncal. Libre del bloqueo, el puerto de Buenos Aires comerciaba con todo el mundo y la prosperidad aumentaba a ojos vistas, principalmente en el ramo ganadero, por la habilitación de las tierras conquistadas al indio y repartidas en propiedad. Se iniciaba la mestización de las haciendas con toros importados, y se extendían las zonas de sembradío con semilla europea, como el trigo "barletta", adoptado por su mayor rendimiento. Las provincias también prosperaban por el desarrollo normal de sus industrias locales. Las relaciones internacionales de la Confederación se desenvolvían en un pie de dignidad y de respeto recíproco. A raíz de la reanudación de la amistad con Francia se había designado ministro en esa nación a don Manuel de Sarratea, según el criterio permanentemente seguido por el Restaurador de mandar al extranjero a los políticos más expertos. Se habían establecido también relaciones con Dinamarca.

Era necesario, sin embargo, suprimir la amenaza que representaba el ejército de Paz. Se le encomendó la misión al gobernador de Entre Ríos general Echagüe, que contaba para ello con fuerzas suficientes.

El derrotado por Rivera en Cagancha no era por cierto un rival para el ilustre cordobés. Entró por Curuzú-Cuatí a fines de setiembre con un ejército de 5.000 hombres. Paz empezó a retirarse a su aproximación, buscando buen terreno para combatir. Casi dos meses se amagaron ambos ejércitos, durante cuyo lapso pudo el unitario terminar sus preparativos e incluso recibir refuerzos de una columna dispersa del ejército de Lavalle. Por fin, el 28 de noviembre se dio la batalla de Caaguazú, en que por la sola virtud de la ciencia militar fue derrotado Echagüe, debiendo retirarse precipitadamente a su provincia.

Esta desgracia imprevista abriría un nuevo período de luchas y dificultades para la Confederación. Por lo pronto, le proporcionaba a Paz el dominio del litoral con la entrada franca a Entre Ríos. En segundo término, provocaba la confusión en las filas federales y el vuelco de los indecisos, de los oportunistas y los traidores potenciales, como el de Juan Pablo López de Santa Fe quien se apresuró a pronunciarse contra Rosas, rodeado de los elementos que había movilizado Cullen.

Pero el triunfo de Paz desataría al mismo tiempo la discordia en el campo unitario, por la posesión de Entre Ríos.

A instancias de Rivera, Ferré se oponía a que Paz saliese del límite de su provincia en persecución de Echagüe. Venciendo esa resistencia, el cordobés marchó sobre Paraná, donde hizo nombrar gobernador a don Pedro Seguí. De inmediato cruzó Rivera el Uruguay con dos mil hombres y empezó a saquear estancias, según su costumbre; y titulándose —por su condición de presidente— director supremo de la guerra, desconoció la autoridad de Paz y de su gobernador. Los adictos a Paz, con el fin de afianzarlo, destituyeron a Seguí y lo nombraron en lugar de éste. No se contaba con Ferré. Invocando la seguridad de su propia provincia y para evitar que Paz (según sus palabras) repitiera la "calaverada" de Lavalle, le quitó el mando del ejército —que él mismo le había conferido, al fin y al cabo, y era correntino— dejándolo apenas con cuatro o cinco oficiales que quisieron correr su suerte. Sin fuerza de ninguna clase, el "manco" debió salir precipitadamente de la provincia, ganando la costa oriental.

Con el retiro de Paz y el dominio de las provincias litorales por Rivera, cobraba nuevo aliento la ambición de éste. Ella consistía, según vimos, en la creación de un gran estado litoral, constituido por la Banda Oriental, Entre Ríos y Corrientes, al que se agregaría la provincia de Río Grande do Sul, rebelada contra el Imperio y cuyos dirigentes, después de haber gestionado en 1839 incorporarse a la Confederación, propiciaban la nueva aventura.

No eran ajenos a este proyecto los emigrados de la titulada Comisión Argentina de Montevideo, a quienes su desdichada posición subordinada obligaba a secundar los planes del usurpador oriental. La situación de Rivera, no obstante su triunfo aparente, era empero muy precaria. Carecía de fuerza militar para sostener sus pretensiones frente a las aguerridas legiones de Rosas, más si se tenía en cuenta que la provincia de Entre Ríos se hallaba en estado de general rebelión y dispuesta a sacudir el yugo en la primera oportunidad, según la experiencia recogida por Paz y confirmada todos los días. La única solución posible, para evitar el fracaso, era obtener el apoyo de las potencias europeas interesadas en el comercio con el Río de la Plata, pagándolo naturalmente al precio que ellas exigieran. Como se ve, la reproducción exacta de la política colonialista que había permitido los éxitos precarios del "Cholo" Santa Cruz y que los ideólogos románticos de Montevideo pretendían cohonestar con el pretexto de la civilización ultramarina.

Este plan fue, sin duda, el que determinó el recrudecimiento de la virulencia en los ataques contra el Restaurador en la prensa de Montevideo —principalmente en el “Nacional” de Rivera Indarte— con el objeto de desacreditarlo ante la opinión pública internacional. Es el momento en que nacen las más peregrinas leyendas de su refinamiento en la crueldad y se crea el mito del “feroz tirano”. Cabe recordar aquí que los opositores de Rosas se nutrían en la literatura romántica de la época y que el romanticismo, en su afán por las antítesis, fabricó en serie monstruos y dechados morales. El tipo *standard* del tirano romántico —frío, cruel y, naturalmente, cobarde— se hallaba extraordinariamente difundido a la sazón, por obra de la joven literatura que conspiraba en las logias y sufría prisiones eventuales por causas políticas. Respondía, por lo demás, al gusto literario del momento. No es de extrañar que lo hayan adoptado los epígonos platenses de la escuela para aplicarlo al Restaurador, y aun que creyeran en su realidad; y tal es la imagen que hasta hoy perdura en muchas mentes, transmitida con talento por el *Facundo* de Sarmiento y sin talento por la *Amalia* de Mármol. La personalidad real ha sido desplazada por su caricatura literaria.

Ya después del fracaso de la expedición de Lavalle y ante el naufragio de las esperanzas de rebelión militar, había empezado a cundir la doctrina del tiranicidio (“Es acción santa matar a Rosas”), que había tenido su primer amago de ejecución en el envío de una máquina infernal —que no estalló— a mediados de 1841. Estos hechos y aquellas expresiones —a las que Rosas daba amplia publicidad en su prensa—, lejos de amenguar la adhesión pública a su persona, la acrecentaban y la exaltaban. La evidencia de la alianza entre los unitarios desterrados y Rivera y de sus intrigas con el extranjero, motivaría las reacciones sangrientas de abril de 1842, reproducción de las ocurridas dos años antes en circunstancias análogas y que la prédica adversaria atribuyó a la Mazorca, nombre del mito creado alrededor de la Sociedad Popular Restauradora, que agrupaba a la mejor burguesía porteña.

La situación guerrera se presentaba, mientras tanto, excepcionalmente favorable para Rosas. El ejército de Oribe, pacificador del interior, había pasado a Santa Fe y derrotado reiteradamente, por acción de columnas parciales, al gobernador traidor Juan Pablo López, quien con 500 hombres había huido a refugiarse en Corrientes. La escuadra del glorioso almirante Brown había anulado en los ríos litorales a la que Rivera había puesto al mando del aventurero italiano José Garibaldi, quien realizaba

incursiones de piratería por nuestras costas. El camino de Entre Ríos estaba expedito para las tropas de la Confederación.

* * *

La causa de Rivera y sus aliados era en esos momentos una causa perdida. Carecían de medios para oponerse al fuerte ejército de la Confederación, que tenía asimismo el dominio de las aguas. La caída de Entre Ríos y Corrientes y la reposición de Oribe en la presidencia del Estado Oriental parecían aseguradas en poco tiempo. Ello significaba la situación del Río de la Plata bajo la influencia decisiva de un solo poder: libre, soberano y fuerte.

Esta circunstancia fue la que alarmó, sin duda, a los representantes de Inglaterra y Francia, quienes se dispusieron a intervenir, cediendo a las febriles instancias de Rivera y de la llamada Comisión Argentina de Montevideo.

El usurpador oriental argumentaba con la circunstancia de tener Montevideo en esos momentos las dos terceras partes de población extranjera. Gestionaba, por ello, el desembarco en la ciudad de fuerzas de marina de los barcos ingleses y franceses surtos en la rada, y que se permitiera el armamento de los extranjeros; lo que equivalía a solicitar un estatuto de colonia africana.

El 30 de agosto, ambos ministros presentaron una nota conjunta al gobierno argentino. Expresaban en ella que Montevideo quería la paz con Buenos Aires, que la exigencia opuesta por Rosas de la restauración de Oribe era inadmisibles, y que las potencias ofrecían las condiciones que un estado libre puede con honor aceptar de otro. Agregaban que el gobierno debía reflexionar maduramente antes de rechazar la mediación de naciones tan poderosas. Era un ultimátum disfrazado. Mr. Mandeville no se ponía ni siquiera en el caso de recibir un desaire. En carta escrita por esos días afirmaba: “La orden que Lord Aberdeen dice haber dado, se ha de cumplir”.

La cancellería de la Confederación contestó la nota el 18 de octubre. Afirmaba que quería paz, pero se veía obligada a hacer la guerra a un usurpador que trastornaba el orden interno del país; que quería la restauración de la autoridad legal en el Estado Oriental, como único medio conciliable con la paz y que, como una prueba de amistad a los gobiernos mediadores, sometería esa respuesta a la Legislatura. Esta la aprobó el 16 de noviembre, acompañada de un voto de gracias al jefe del Estado por el celo y patriotismo con que defendía los derechos de la Confederación. Transmitido el texto a los mediadores, éstos respondieron al cabo

de unos días que "un justo miramiento a los intereses comerciales de sus súbditos en el Río de la Plata" podía "imponer a los gobiernos británico y francés el deber de recurrir a otras medidas, con el fin de remover los obstáculos que interrumpen por ahora la pacífica navegación de los ríos".

Rosas no recogió la amenaza implícita en estas últimas palabras. Se limitó a contestar que esperaba que "las medidas enunciadas serán conformes a la política elevada que dichos gobiernos han acreditado en sus relaciones con la Confederación Argentina y que en ningún sentido podrán perjudicar a ésta ni comprometer su dignidad e independencia, de cuyo sostenimiento este gobierno es encargado". Difícil encontrar en la historia diplomática un lenguaje más sereno y más digno.

A la vez, se apuraban las operaciones militares. A fines de noviembre, el general Oribe pasaba con su ejército a la provincia de Entre Ríos. Casi simultáneamente hacía lo propio Rivera, a quien se incorporaron las tropas de Corrientes y las milicias santafesinas de Juan Pablo López. Los dos ejércitos marcharon uno contra el otro y se encontraron el 6 de diciembre en Arroyo Grande.

Al cabo de una encarnizada batalla, las tropas del usurpador oriental fueron completamente derrotadas y dispersas. El primero en abandonar el campo fue el general en jefe, que huyó arrojando las prendas del uniforme para no ser reconocido. No paró hasta el Salto. Con esta acción se resolvía igualmente la situación de Corrientes. Ferré, Madariaga y sus adictos pasaron el río y se refugiaron en el Paraguay.

VII. SITIO DE MONTEVIDEO Y MEDIACIÓN EXTRANJERA

La noticia de la derrota de Rivera que abrió a las fuerzas de la Confederación, al mando de Oribe, el camino de Montevideo, produjo la mayor consternación y espanto en esta ciudad. Se pensó en organizar rápidamente la defensa, con el fin de prolongarla hasta que surgiese un medio de salvación providencial, que no podía ser otro que la ayuda extranjera.

El militar más notable entre los refugiados era el general Paz, y a él volvieron todos los ojos. El gobierno delegado lo nombró comandante de las fuerzas y él se dedicó a organizarlas. Esto desagradó a Rivera, quien desaprobó el nombramiento. Al fin, ante las instancias de la Comisión Argentina —pero, sobre todo, aconsejado por la magnitud del peligro— consintió en mantenerlo como comandante de armas de la capital.

En preparativos de defensa se pasaron los dos meses que tardó Oribe en llegar a las afueras de Montevideo y acampar, primero en Canelones y luego en el Cerrito: había venido organizando los departamentos de la retaguardia, que lo recibían como libertador. Paz había convertido la plaza en una fortaleza. Rivera había salido con el resto de sus tropas a campaña para hacer la acostumbrada "guerra de recursos" y la ciudad quedó sitiada, después de un combate en que la vanguardia del presidente usurpador fue deshecha por la caballería de la Confederación.

Se iniciaba así el llamado "sitio grande", que duraría más de diez años.

Sobre las características de la ciudad tenemos un testimonio insospechable en el general Mitre, que actuaba entonces como artillero de Rivera. Según sus referencias, Montevideo contaba entonces con algo más de 31.000 habitantes, de los cuales 11.000 eran nativos, la mitad negros emancipados. El resto —contando a nuestra emigración— eran extranjeros, principalmente franceses.

He aquí cómo se organizaría la defensa: "Los proscriptos argentinos formaban una legión de 500 hombres. . . Los franceses se organizaron en batallones en número de más de 2.000 hombres. . . Los españoles. . . 700 hombres. . . Los italianos. . . 600 hombres. El núcleo del ejército de la defensa lo componían cinco

91

bataillones de infantería y un regimiento de artillería de *negros libertos*, mandados en su mayor parte por oficiales argentinos. El resto, hasta el completo de 7.000 hombres, lo formaban tres bataillones y algunos escuadrones de guardia nacional, que *en gran parte se pasaron a Oribe por pertenecer al partido blanco*". Hasta aquí el historiador don Bartolomé Mitre. El subrayado nos pertenece.

Más que una ciudad, como se ve, se trataba de una especie de factoría internacional, con población aventurera y adventicia, cuyos verdaderos ciudadanos soportaban la situación con disgusto y lo demostraban desertando en masa a las filas nacionales, que eran las de Oribe. En esa compañía heterogénea de agentes internacionales y masónicos, agiotistas, mercachifles, piratas y aventureros de toda laya, a las órdenes de una especie de capitán de bandidos —que tal era don Frutos Rivera— los emigrados de la Comisión Argentina pretendían llevar contra su patria la guerra de la "civilización".

Sitiada la ciudad por tierra, el gobierno argentino declaró bloqueado su puerto, ordenando al almirante Brown que a partir del 1° de abril impidiese con su escuadra el acceso a él de barcos con abastecimientos. Se comunicó la situación al cuerpo diplomático acreditado en Buenos Aires, el cual la aceptó sin reservas, salvo la franquicia que solicitaron los ministros de Inglaterra y Francia con respecto a los barcos de ultramar y que fue concedida, siempre que no introdujesen las mercaderías comprendidas en el bloqueo.

* * *

Una vez completado el sitio de la ciudad, era inevitable su rendición por hambre. El general Oribe lo veía como una consecuencia natural de la situación, por lo cual no intentó tomarla por asalto. Pero la toma de Montevideo significaba el definitivo triunfo de la Confederación y de Rosas. Esto era lo que no podían aceptar las potencias "mediadoras", por lo cual se arreglaron para convertir dicho bloqueo en ilusorio sin comprometerse en una actitud resueltamente intervencionista. Se valieron para ello del comodoro J.B. Purvis, comandante de las fuerzas navales de S.M.B. en las costas meridionales de América, quien fue llamado precipitadamente de Río de Janeiro a Montevideo.

Después de entenderse con Rivera y la Comisión llamada "argentina" (y autorizado secretamente, sin duda, por su ministro), Purvis se presentó ante la posición bloqueada, asumiendo la representación de su soberana para negarle tan importante dere-

cho a la Confederación, por no tener carácter de potencia marítima y porque su escuadra estaba formada por extranjeros. Se dirigió al almirante Brown llamándolo "súbdito británico" y afirmando que no toleraría acto alguno de hostilidad contra la ciudad de Montevideo, y que si él tal hiciera, lo consideraría incurso en el delito de piratería y procedería en consecuencia. A continuación, prohibió compulsivamente, bajo la amenaza de sus cañones, las operaciones de nuestra escuadra, buscando visiblemente el "casus belli" y alegando, en descargo de su conducta, una comunicación hecha por Oribe en la cual, de acuerdo con las leyes comunes, declaraba que no respetaría la condición de extranjeros ni en las personas ni en los bienes de aquéllos que se armaran para tomar parte en la guerra. Esta declaración respondía a una anterior del gobierno de Montevideo, según la cual serían fusilados los orientales tomados con las armas en la mano o con la divisa del ejército sitiador.

Al mismo tiempo que obstaculizaba las operaciones de la escuadra de Brown, el comodoro Purvis protegía o realizaba con sus mismos barcos la introducción a la plaza de todo género de provisiones y material de guerra, con lo cual contribuía a fortalecer la defensa y a sostener el ánimo de los habitantes.

El almirante Brown, que tenía consigna expresa y rigurosa de no resistir hasta nueva orden, se limitó a comunicar a su gobierno la grave situación creada. Rosas elevó una enérgica protesta, a la que Mr. Mandeville contestó que ya le había escrito al comodoro sobre los graves inconvenientes que produciría su conducta. Seguía al pie de la letra, como se ve, las reglas de la comedia que estaba representando. Rosas contrarreplicó en forma más enérgica todavía, dándole cuenta de las graves transgresiones de Purvis, no sólo en materia de bloqueo, sino arrogándose funciones de mediador, al exigirle a Oribe que escuchase proposiciones de los sitiados y retirase la circular sobre los extranjeros, cuando era al ministro a quien correspondía ocuparse de las personas y los bienes de los súbditos británicos. Terminaba declarando que no le quedaba sino defenderse de la injusta guerra a que lo obligaba la "escandalosa conducta" del comodoro, y que dada la indignación que ella había producido, no podía ofrecer garantía eficaz alguna a los ingleses residentes sin poner en peligro la existencia de la República. Para no llegar a ese caso, sólo había un medio "absolutamente necesario" y era que el ministro diera "claras explicaciones sobre la conducta atentatoria del comodoro Purvis y las condignas satisfacciones que V.E. no puede negar".

Al recibir esta nota, Mr. Mandeville comprendió que la cosa iba en serio. Hizo suscribir a los comerciantes ingleses de Buenos

Aires una humilde petición en la que rogaban que no se los hiciera responsables de la conducta del comodoro, y pretendió insistir, por su parte, en la tesis dilatoria de que, no obedeciendo aquél sus órdenes, el gobierno argentino debía dirigir su protesta al gobierno inglés. No se le admitió la coartada, poniéndoselo en el dilema de que contestase, por sí o por no, si el comodoro Purvis obedecía a órdenes expresas de S.M.B. Ante esta actitud, no tuvo más remedio que ceder. Contestó que había hecho lo posible por mantener al comodoro en la conducta de neutralidad; que ignoraba las instrucciones que aquél poseía de su gobierno; pero que acababa de comunicarle una orden recibida de Lord Aberdeen en la que se expresaba que el gobierno de S.M.B. no quería que los oficiales de la escuadra intervinieran en la lucha entre Buenos Aires y Montevideo, "a menos que fuese necesaria la fuerza para proteger las propiedades o las personas de los súbditos allí residentes".

Con esto se daba fin al episodio del comodoro Purvis.

* * *

Mientras la posición del Restaurador se fortalecía con tales actitudes, que entusiasmaban a la opinión patriótica, y con el aumento de prosperidad que había traído el cese del bloqueo, la pacificación del interior y la excelente administración de la renta pública, la de sus enemigos empeoraba a ojos vista. Ya no tenía otra esperanza que la intervención extranjera. La población de Montevideo se desmedraba con la desertión al ejército sitiador o con el éxodo de emigrados que volvían a Buenos Aires.

El general Oribe no forzaba la plaza, cuya rendición consideraba segura limitándose a escaramucear con las partidas riveristas que erraban por la campaña, en su habitual guerra de recursos, o sea de depredación. Influyó en su actitud el deseo de no provocar conflicto con la población extranjera de la defensa, para no dar pretexto a la intervención. Prefería esperar a que la guarnición de la plaza, forzada por el hambre, iniciara gestiones de paz, o tomarla por una artimaña o una rebelión interna, como lo intentó sin éxito.

En agosto de 1843 convino con el general don Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que abriera operaciones sobre Rivera, enemigo público de ambas orillas. El sucesor de Echagüe —de origen unitario y familia porteña, hacendado y jefe de milicias formado en las luchas locales— tenía muy otra calidad que éste y poseía las condiciones de un verdadero conductor. Penetró en el Uruguay con su ejército y en pocos meses fue de-

rotando en detalle a todas las divisiones riveristas que encontró, apoderándose de armas y caballadas. Los jefes vencidos —Estivao, Báez, Flores y Silva— debieron replegarse con los restos de sus fuerzas al campamento del general en jefe, que operaba como de costumbre cerca de la frontera para tener a mano la retirada.

Ante esa pésima situación militar, tanto el gobierno de Montevideo como la llamada Comisión Argentina decidieron agotar las gestiones diplomáticas conducentes a interesar a las potencias en los asuntos del Río de la Plata. Tal había sido el tema principal de las conversaciones entre el comodoro Purvis y el periodista argentino don Florencio Varela, que era el alma de dicha comisión y ejercía una fuerte influencia sobre la cancillería oriental.

Pero para interesar a las potencias, había que ofrecerles algo que valiera la pena. Parece que fue la inventiva de Varela la que dio con la solución, que conciliaría las aspiraciones de Rivera con el interés colonizador y otros concordantes. Se ofrecería la segregación de Entre Ríos y Corrientes, para crear con ellas un nuevo estado dócil al influjo de Europa, que tendría allí amplias garantías de explotación y comercio. Rivera conservaría la esperanza de añadirlas a su feudo (y era lo que se le susurraba al oído); los brasileños verían con agrado el empequeñecimiento de la gran Confederación, y los franceses, el medio de cobrarse los créditos adelantados en la guerra contra Rosas. En cuanto a éste, con la "civilización" instalada en la Mesopotamia, se iniciaría el ocaso, si no la quiebra fulminante de su "bárbaro" poder, fundado en la adhesión de las poblaciones supersticiosas y del gaucho inculto.

Con esta idea redactó Varela una "memoria" en la que —dice el general Paz— "ensalzaba el proyecto", y la sometió al agente francés, al comodoro Purvis y al señor Sinambú, ministro de Brasil en Montevideo. Todos ellos se entusiasmaron, pero como no tenían personería para resolver, convencieron al ministro Vázquez de la necesidad de mandar un comisionado a Londres y a París con el objeto de someter el proyecto a las respectivas cancillerías, indicando de paso que el candidato más aparente era el propio señor Varela.

Hemos de decir, en descargo del patriotismo argentino, que la idea tuvo opositores aun entre los mismos emigrados que llegaron a conocerla, como Echeverría, Pico, Alberdi, Chilavert, Olazábal y, sobre todo, el general Paz, quien se creyó obligado a comunicar al comodoro Purvis su opinión adversa a cualquier desintegración territorial. No obstante ello la gestión se realizó. El gobierno imperial del Brasil no podía desperdiciar la ocasión que se le ofrecía de dividir a su rival histórico y nombró para

colaborar en el proyecto y apoyarlo ante las cortes de Europa a Miguel Calmón del Pino y Almeida, vizconde de Abrantes.

* * *

La nueva actitud del Brasil se manifestaría pronto explícitamente. La Confederación había restablecido el bloqueo de la plaza de Montevideo, extendiéndolo a Maldonado. El ministro Sinambú lo desconoció, alegando que sólo perjudicaba al comercio brasileño, que era el que abastecía esa plaza. Como Rosas pidiera explicaciones al ministro acreditado en Buenos Aires —que no había opuesto reparos a aquella medida— éste condenó primero la conducta de su colega montevideano para terminar imitándola, por lo cual el gobierno argentino cortó con él toda relación y le remitió sus pasaportes.

La cosa no pasó a mayores porque el gobierno imperial dio seguridades a nuestro ministro en Río de Janeiro —el ilustre general Guido— de que reconocía el bloqueo sin restricciones, desautorizando así a sus agentes. Sus dificultades internas no le permitían el lujo de una ruptura y lo obligaban a una política de duplicidad. A la vez que mandaba a Abrantes para cooperar en la misión Varela, urdía un proyecto de alianza con la Confederación, por el que se comprometía a cooperar en la destrucción de Rivera, a cambio de la ayuda de Rosas para liquidar a los revolucionarios riograndenses. Veremos cuál sería el resultado de estas negociaciones, seguidas con gran entusiasmo por Guido y Arana.

Los unitarios de Montevideo y los riveristas no disimulaban sus esperanzas en el éxito de las gestiones europeas. Eran por lo demás, la única posibilidad de salvación. Día tras día empeoraban sus asuntos internos con el bloqueo y las deserciones, y la situación de la plaza se hacía angustiosa por el agotamiento de los recursos de todo orden, en armas, abastecimientos y dinero. Los comerciantes extranjeros escatimaban el crédito (cuya sustancia solía escurrirse entre las uñas de la administración riverista) y empezaban a sospechar que habían hecho una mala inversión. A todas estas desgracias se agregaría un nuevo desastre militar. Rivera —que distraía a las fuerzas sitiadoras y a las columnas de Urquiza con su guerra de recursos— se vio obligado a presentar batalla al caudillo entrerriano en Arroyo del Sauce, el 24 de enero de 1844, y fue derrotado, en una encarnizada lucha que terminó, como de costumbre, con una carrera desenfundada del jefe oriental y la dispersión de sus tropas, dejando el campo sembrado de cadáveres.

Reducida a sus solas fuerzas, la guarnición de Montevideo realizó un par de tentativas para romper el cerco, logrando introducir en la primera, mediante una riesgosa maniobra, algún ganado a la ciudad y sufriendo una derrota en la segunda.

Las noticias que se difundieron en Buenos Aires, sobre la misión Varela y la del vizconde de Abrantes (pues los unitarios no hacían misterio de sus esperanzas en el extranjero) indignaron en todo el territorio y reforzaron la adhesión a Rosas, quien seguía su política con serenidad imperturbable y heroica firmeza. Gobernaba y administraba con orden y escrupulosa economía. Las rentas de la provincia sumaban aproximadamente dos millones de pesos fuertes. “Con estos recursos —dice Saldías— el gobierno de Rosas hacía frente a la guerra por agua y por tierra; auxiliaba a las provincias con dinero y con armas; pagaba los gastos de las legaciones... en Londres, en París, en Washington, en Río de Janeiro, Chile y Bolivia, y con igual puntualidad a todos los empleados; satisfacía todas las erogaciones exigidas por el servicio público, mantenía y pagaba las numerosas tribus de indios amigos que, sujetos a la disciplina militar, ayudaban a guarnecer las fronteras; hacía frente al servicio y amortización de los fondos públicos con religiosidad tanta que esos fondos estaban a la par.” Y todavía le alcanzaban recursos para realizar obras públicas indispensables y aun obras suntuarias, como el arreglo de la Alameda. Sin perder el tino ante las intrigas internacionales de sus enemigos, esperaba el desarrollo de los acontecimientos, seguro de su poder y de la solidaridad del pueblo federal.

La misión de Varela resultó en sí misma un fracaso. Lord Aberdeen se declaró enterado de su proyecto y prometió que lo consideraría; y luego le contestó por nota que Inglaterra no tomaba parte en los asuntos del Plata. No quería evidentemente negociar con el gobierno de Montevideo. Igual suerte correría la misión de Abrantes. Es de advertir que, por entonces, ya Rosas se había negado a ratificar el tratado firmado por Guido y el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil —con aprobación del ministro Arana— para liquidar la cuestión oriental y riograndense mediante la colaboración de los dos gobiernos. Con mayor acierto que sus consejeros y agentes, se negaba a cualquier pacto que significara legalizar la intromisión del Imperio en los asuntos orientales.

Pero si Lord Aberdeen no trató con Varela ni Abrantes —que tenían poco que dar en concreto— no echaría en saco roto la sugestión, que formaría cabeza de expediente para una nueva empresa intervencionista. Sabía ahora cuáles eran las verdaderas circunstancias del Río de la Plata y que contaría con aliados seguros y dóciles para secundar sus miras.

VIII. LA INTERVENCIÓN FRANCO-INGLESA

Las misiones de Varela y Abrantes a Europa cuyo éxito —a juzgar por la actitud de los ministros de las potencias interesadas— se consideraba seguro, tonificaron la esperanza e hicieron redoblar la actividad de los emigrados en todos los países limítrofes.

Bajo el influjo de Madariaga (y aprovechando el paso de Urquiza con su ejército a la Banda Oriental), Corrientes volvió a pronunciarse. El general Paz se disponía a trasladarse allí, a fin de ponerse al frente de las fuerzas provinciales, y contaba con la promesa de ayuda del presidente paraguayo don Carlos Antonio López. El presidente Ballivián, de Bolivia, se aprestaba a ayudar a los emigrados del norte, y la misma intención manifestaba, por parte del gobierno de Chile, la Comisión Argentina instalada en ese país, bajo la presidencia del general Gregorio Las Heras.

La perspectiva del apoyo europeo bastaba para formar contra la Confederación una nueva coalición de los países limítrofes, que veían la oportunidad de sacar ventajas a costa de nuestro territorio con el consentimiento (o la tolerancia o la resignación) de sus aliados argentinos, de acuerdo con ambiciones ya declaradas. Chile cortaría en Cuyo y la Patagonia; para sus pretensiones sobre esta última había encontrado un fogoso abogado en el escritor sanjuanino don Domingo Faustino Sarmiento. Bolivia en Jujuy y Salta. Paraguay, en las Misiones —que eventualmente ocupaba—, aparte del reconocimiento definitivo de su independencia. Brasil miraba todo este movimiento con simpatía puesto que llevaba las de ganar en la desmembración argentina, que facilitaría su política de expansión sobre los débiles estados resultantes.

El general Paz —que invocaba todavía el título ilusorio de gobernador de Entre Ríos— se puso de acuerdo con don Juan Pablo López —gobernador igualmente ilusorio de Santa Fe— y acompañado de algunos jefes y oficiales se embarcó el 4 de junio de 1844 en un buque de guerra (brasileño por cierto) y se dirigió a Río Grande, de donde cruzó hasta Corrientes. Rivera no vio con buenos ojos esa decisión, que contrariaba sus planes sobre el litoral, y Paz insinuó en sus "Memorias" que incluso trató de promoverle un "Barranca Yaco" en el trayecto...

Al llegar a su destino se encontró el cordobés con una situación militar bastante desfavorable. El general don Joaquín Madariaga, gobernador de Corrientes, acababa de efectuar un ataque a Entre Ríos con un ejército de 5.000 hombres y había sido derrotado por las fuerzas de reserva de esta provincia, muy inferiores en número, al mando del general Garzón. Este fracaso lo inclinó a la modestia en materia de milicia, decidiéndolo a entregar a Paz la dirección de la guerra.

Una vez nombrado, Paz comisionó al doctor Santiago Derqui —joven abogado cordobés que le oficiaba de secretario— para celebrar una alianza con el Paraguay, cuya independencia acababa de ser reconocida por el Imperio. En este tratado se convino en cláusula secreta (v. Saldías, VI, 15), que Corrientes cedería al Paraguay, como precio de la ayuda, la parte de su territorio correspondiente a la actual Misiones. En los primeros meses, Paz se dedicó a reorganizar sus fuerzas manteniéndose a la defensiva, mientras López se disponía a invadir Santa Fe. Su conducta futura se hallaba supeditada al resultado de la contienda entre Urquiza y Rivera. Cualquiera que éste fuese, le acarrearía dificultades, aunque de diverso orden.

La proximidad de la intervención extranjera —que se discutía ya públicamente— había provocado entre tanto una revolución interna, secretamente fomentada por Rivera, en la plaza sitiada de Montevideo, que se concretó en el reemplazo del equipo político obediente a la Comisión Argentina por otro que encabezaba el general don Venancio Flores. En este cambio influía decisivamente, sin duda, el celo anticipado por el goce y administración de los subsidios.

El Restaurador se mantenía atento a la marcha de los acontecimientos, a los que daba la más amplia publicidad. Contaba con la virtud de ésta para tonificar el espíritu público en el sentido de la resistencia.

Moreno y Sarratea —ministros respectivamente en Londres y París y ambos sagaces y experimentados— lo informaban minuciosamente de lo que se ventilaba en las cancillerías y ya empezaba a tomar estado público en la prensa y en los parlamentos. Rosas publicaba esa información en la "Gaceta Mercantil" y el "Archivo Americano", acompañada de comentarios en que se mostraba claramente qué fuerzas actuaban y cómo esa política amenazaba la independencia misma del país para retrotraerlo a una situación peor que la existente antes de 1810.

93

La idea de intervención armada (política habitual, por lo demás, de las potencias marítimas en procura de mercados) fue lanzada en el parlamento británico por sir Robert Peel, fundándola en la necesidad de defender los intereses mercantiles en peligro. "El interés del mundo —afirmó— requiere que esas disputas se terminen, y nosotros insistimos en que se arreglen inmediatamente". La prensa británica apoyaba unánimemente esta doctrina, que acababa de aplicarse con éxito en Grecia.

El gobierno francés —presidido a la sazón por Guizot— no quiso quedar a la zaga, puesto que Francia tenía fuertes intereses que defender en Montevideo. Thiers se hizo el vocero parlamentario de la intervención, pidiendo el envío de tropas de desembarco y una política enérgica. La "monarquía burguesa" necesitaba prestigio ante una opinión pública que empezaba a añorar las glorias de Napoleón y pretendía obtenerlo a costa de los débiles países de la América española.

Los argumentos del ministro argentino y la oposición del almirante Mackau —ministro de marina en el gabinete de Guizot— lograron conjurar por algunos meses el peligro. Pero la opinión intervencionista era muy poderosa, y además la codicia europea se había despertado ante los ofrecimientos hechos por Varela de concesiones y franquicias en "esas fértiles comarcas bañadas por ríos inmensos", según las exaltaba su elocuencia de prospecto de rematador. Al fin, el gobierno británico hubo de declarar que el estado de guerra entre Buenos Aires y Montevideo era nocivo para el comercio británico y por lo tanto debía acabar.

Era la señal de que Lord Aberdeen y Guizot habían decidido la intervención conjunta.

* * *

Desde mucho antes, los jefes de las estaciones navales en el Río de la Plata actuaban decididamente en apoyo de los sitiados en Montevideo, haciendo ilusorio el bloqueo decretado por el gobierno argentino. Esta ayuda era en realidad lo único que sostenía a la plaza. Sin ella, es indudable que en poco tiempo habrían tenido que rendirse, decidiéndose así —con el triunfo y la reposición del general Oribe en el gobierno— la terminación de la guerra, cuya duración indefinida constituía justamente el pretexto invocado por los voceros de la intervención.

Pero ello habría significado el triunfo de la causa nacional, que era lo que no querían las potencias interesadas. Lejos pues de favorecer el resultado en la forma normal determinada por la opinión de los pueblos y la fuerza respectiva de los contendien-

tes, mantuvieron artificialmente la guerra apoyando a la causa perdida —que era la que convenía a los intereses colonialistas—, a fin de hacerla resistir hasta que, con el argumento de dar término a una situación intolerable, pudieran hacerla triunfar con la ayuda de sus cañones.

La verdad es que la resistencia se limitaba a la sola plaza de Montevideo, auxiliada por las fuerzas navales de Inglaterra, Francia y Brasil. Toda la campaña estaba plegada a Oribe y a la causa nacional, la que se fortalecía continuamente con los escapados de Montevideo, cuyos defensores habían bajado de 7.000 a 4.000 escasos desde comienzos del sitio.

Rivera —refugiado en Río Grande después de su derrota— decidió intentar una nueva invasión. Consiguió para ello la ayuda del marqués de Caxías, jefe de las fuerzas imperiales que operaban en esa provincia, quien le proporcionó armas, vestuarios y caballadas. Se puso en marcha a fines de enero de 1845. Su conocimiento minucioso del terreno no le valió de nada contra la pericia militar y el arrojo de Urquiza, quien lo volvió a derrotar el 27 de marzo en India Muerta, con fuerzas inferiores en número, haciéndole 400 muertos y más de 500 prisioneros. "Te noticié del suceso malhadado del 27 —le escribía poco después a su mujer el caudillo derrotado—; desgraciadamente volví a sufrir otro contraste que nos obligó a pasar el Yaguarón un poco apresurados. Yo perdí parte de la montura y desde ese día estamos bajo la protección de las autoridades imperiales". Este suceso acabó definitivamente con el prestigio militar de Rivera aun entre sus mismos partidarios, quienes —ya disipada la esperanza puesta en él— no tuvieron otro recurso que arrojarle incondicionalmente en brazos de los extranjeros.

Ya el ministro Magariños —reemplazante de Vázquez en Montevideo— había iniciado negociaciones con el gabinete imperial, a fin de obtener una alianza contra Buenos Aires que era una especie de protectorado encubierto. En sus comunicaciones a la cancillería imperial, le expresaba que, ante el peligro de sucumbir "bajo la cuchilla de Rosas", su gobierno se veía obligado a recurrir a un poder extranjero, y que "en aquel extremado apuro, la República se echaría de preferencia en brazos de un poder americano". El mismo Rivera se dirigió a promover personalmente las negociaciones, en medio del escándalo de una parte de la prensa que le recordó sus traiciones reiteradas. Esta esperanza de reconstruir la provincia Cisplatina —que contaba en Brasil con una gran masa de opinión nostálgica e influyente— habría de enfriarse pronto. Había llegado a Río de Janeiro, de paso para Buenos Aires, uno de los ministros interventores —el inglés Mr. Outseley— y había manifestado que Inglaterra se mantenía fiel a

su "garantía" del tratado de 1828 y que la base de cualquier arreglo sería, en todos los casos, la independencia del Estado Oriental.

El general Oribe, al frente del ejército de la Confederación, estaba triunfante en todo el territorio. Sólo le faltaba tomar Montevideo para terminar la guerra y restablecer el orden legal. Seguro de la superioridad de sus fuerzas, propuso a los sitiados una rendición honorable; y como obtuviera una respuesta negativa, se decidió a tomar la plaza por asalto, al mismo tiempo que expedía los decretos de mayo de 1845, convocando a la renovación de la Asamblea Legislativa y a la elección de presidente.

Pero la terminación de la guerra con el triunfo de la causa nacional habría sido —repetimos— la frustración de los verdaderos propósitos perseguidos por las potencias interventoras. Los almirantes Inglefield y Lainé —jefes de las escuadras inglesa y francesa— le comunicaron a Oribe que no permitirían la apertura de hostilidades contra la ciudad, al mismo tiempo que suministraban a la guarnición toda clase de ayuda en armas, pólvora y víveres. Se fundaban para ello en el poderoso y único argumento de veintiocho barcos de guerra con 5.000 hombres de desembarco y 562 cañones. La parcialidad era por sí misma sobradamente significativa. Con razón le escribía a Rivera su secretario don José Bustamante estas palabras de alivio: "Principiamos una nueva situación y el gobierno después de mucho tiempo a restablecer su moral, *apoyado por los poderes extranjeros que nos han levantado de la tumba*. . . no es posible ni político precipitar los sucesos". ¡Cómo no habrían de estar agradecidos a las armas salvadoras de la "civilización"!

Por esos días precisamente llegaban al Río de la Plata —"en misión de paz y amistad", según rezaban las credenciales— el caballero Ouseley y el barón Deffaudis, acreditados respectivamente por los gobiernos de Gran Bretaña y Francia ante la Confederación Argentina.

* * *

Los episodios de la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata constituyen, por la actuación del Restaurador y su pueblo, una de las páginas más gloriosas de la historia argentina. En esos años se decidió realmente nuestro destino y se afianzó de tal modo que las defecciones posteriores no lograron borrar todas sus consecuencias. En el dilema de ser una factoría extranjera o una nación libre optamos por lo segundo, que era el camino del sacrificio y del honor. Y ello por obra de un jefe con sentido de la grandeza de un pueblo que lo comprendió y lo sostuvo.

Las tergiversaciones con que se ha pretendido disimular el verdadero cariz de la intervención (para justificar a los emigrados que la apoyaron) resultan inútiles frente al texto claro de las instrucciones con que se presentaron los comisionados. Se trataba de una verdadera operación colonial para lograr objetivos y ventajas bien concretas, a costa del sometimiento del país y el avasallamiento de su dignidad.

No obstante la declaración previa de que no se intentaba "intervenir de modo alguno en la independencia de Buenos Aires ni de exigir concesiones territoriales" (declaración por lo menos extemporánea en una misión "de paz y amistad", a la que no se le podían atribuir tales intenciones) se exigía, en nombre de la independencia del Estado Oriental, el retiro de las fuerzas de la Confederación y el levantamiento del bloqueo. Si se tiene en cuenta que dicho Estado se había declarado visiblemente por la causa nacional, según lo mostraba el resultado de la guerra, esta exigencia implicaba la decisión de instalarse en Montevideo y legalizar su situación de factoría internacional. En segundo término, se exigía la libertad de los ríos interiores, para llevar "la paz" a los gobiernos de Corrientes y Entre Ríos y sus costas; donde se veía la intención disgregadora de tratar aisladamente con las provincias de la Confederación, prescindiendo de la autoridad nacional. Para lograr sus fines, los interventores estaban autorizados a tomar las medidas de fuerza que considerasen necesarias: apresar la escuadra argentina, con objeto de impedir el bloqueo; ocupar la isla de Martín García o cualquier otro punto estratégico; cortar las comunicaciones entre Buenos Aires y las fuerzas de Oribe; desembarcar tropas en Montevideo o en otros puntos, y forzar la entrada de los ríos a cañonazos.

Es decir, que se exigía el sometimiento incondicional; bajo la amenaza de los cañones de las dos potencias marítimas más fuertes del mundo.

El general Rosas acababa de ser reelecto por segunda vez gobernador de la provincia de acuerdo con la ley del 7 de marzo de 1835. Se hallaba en el cenit de su poder y de su prestigio nacional. Decidió hacer frente a la intervención, sin comprometer ni en lo más mínimo el honor ni la integridad del país, pero con la máxima prudencia en la utilización de las circunstancias y aprovechando sobre todo los resquicios que le mostraran, en el bloque de la intervención conjunta, los intereses contradictorios de ambas potencias asociadas. El general Guido, que había conversado con Ouseley en Río, anunciaba que la situación de Montevideo podía convertirse en la manzana de la discordia.

* * *

94

El ministro Ouseley inició las actuaciones con una nota en la que expresaba su exigencia sobre la terminación de la guerra, en nombre de la independencia oriental y de los perjuicios ocasionados a los intereses británicos. Afirmaba estar decidido a que ello se cumpliera y tener los medios para conseguirlo, aunque rogaba que no se interpretara esa comunicación como una amenaza (!) por no ser tal su intención.

Se siguió una serie de conferencias en las que el ministro Arana orilló hábilmente las cuestiones en litigio, aceptando el principio de la independencia oriental, el levantamiento del bloqueo bajo condiciones que habrían de fijarse, la oportuna salida de las fuerzas argentinas de aquel estado y garantías de seguridad para los refugiados; pero exigiendo como condición, y en la forma más rigurosa, el reconocimiento del bloqueo argentino a los puertos orientales. En nota del 24 de mayo nuestro gobierno precisó dichos puntos. Declaró que las tropas se retirarían y se levantaría el bloqueo cuando el presidente Oribe comunicase la pacificación del territorio oriental; y que todo arreglo sobre esta pacificación era de competencia de dicho general. En lo referente al bloqueo, se ofrecía la mediación del encargado de negocios de los Estados Unidos que en tal sentido se había insinuado oficialmente.

El ministro inglés aceptó en principio estos puntos. Pero las cosas cambiaron con la llegada del barón Deffaudis, a quien aquél debió plegarse. El francés exigió de entrada y como condición previa la suspensión de las hostilidades por parte de las tropas que sitiaban a Montevideo.

Arana —sin negarse a ello expresamente— insistió en su declaración anterior. El gobierno de la Confederación sólo admitiría la mediación si previamente— de acuerdo con los principios del derecho internacional y como una satisfacción que le era debida— las fuerzas navales de Inglaterra y Francia reconocían expresamente el bloqueo argentino a los puertos de Montevideo y Maldonado. Expresaba a continuación su disgusto por el rechazo de la gestión amistosa del diplomático norteamericano después de haber sido aceptada en principio por el agente de S.M.B.

Los interventores replicaron por nota que, “lejos de aceptar como medida previa el bloqueo argentino de los puertos orientales”, pedían por su parte como medida previa que el gobierno argentino levantase dicho bloqueo; y que en cuanto a aceptar la gestión de Estados Unidos, no se hallaban autorizados para ello.

Arana, por nota del 15 de julio, después de recapitular las circunstancias del pleito, fijó la situación en términos claros y definitivos. Declaró que no podía expedirse sobre la suspensión

de hostilidades, ni sobre ningún otro punto, mientras estuviese pendiente la reclamación interpuesta ante las potencias mediadoras por el desconocimiento del bloqueo, en los siguientes términos: “Que el gobierno argentino insiste en el reconocimiento de ese bloqueo, como una medida que la dignidad de la Confederación requiere, sin condición alguna y en la más rigurosa forma; no sólo como primer paso previo a cualquier negociación, sino fuera de ella; el cual no admite demora y cuyo resultado revelará sin equivocación la posición verdadera que V.F. se propone tomar en los asuntos del Plata”.

A esta serena y digna exigencia los interventores contestaron intimando la evacuación del Uruguay por las tropas argentinas y el levantamiento inmediato del bloqueo. Agregaban que se trataba de actos de intervención atentatorios contra la independencia de esa república; que las crueldades de tal guerra conmovían al mundo civilizado, y que a causa de ella y los consiguientes obstáculos a la navegación, sufrían los intereses del comercio en el Río de la Plata. Exigían, además, que se contestara sin demora a esta reclamación.

Como Arana alegara que el gobierno argentino no había recibido todavía respuesta a su reclamación sobre el derecho de bloqueo, aquéllos reaccionaron con una nota airada en la cual, después de aludir a “las exigencias inadmisibles del gobierno argentino”, expresaban que no podían dilatar por más tiempo la negociación y pedían sus pasaportes para el 31 de julio, si hasta entonces no se habían impartido órdenes para hacer efectiva la intimación anterior. Simultáneamente, ordenaban a las escuadras aliadas que apresaran los barcos argentinos hasta nueva orden.

Arana contestó sin perder la serenidad, recapitulando nuevamente las fases del asunto hasta ese momento decisivo. “Bajo tales circunstancias —agregaba— el infrascripto incluye a V.E. el pasaporte que ha pedido para dejar esta ciudad. Esta resolución de V.E. prepara un porvenir funesto... El infrascripto... protesta a V.E. muy seriamente por una medida que el gobierno ha deseado y desea sinceramente y vivamente evitar. Declara asimismo a nombre de su gobierno... que la responsabilidad de los sucesos que sobrevengan pesa sobre la conducta de V.E. en el cumplimiento de la misión de paz y amistad cuyo buen término ha deseado este gobierno”. Con la nota se les incluían los pasaportes firmados por don Juan Manuel de Rosás.

Era la guerra.

IX. LA VUELTA DE OBLIGADO

Los ministros Ouseley y Deffaudis se trasladaron a Montevideo dispuestos a lograr por la fuerza lo que no habían conseguido por la amenaza. Inmediatamente tomaron posesión de la ciudad, mediante el desembarco de la infantería de la escuadra anglo-francesa, erigiéndose en árbitros de la situación y relegando al pseudo gobierno local al papel de simple títere de la empresa intervencionista.

Esta circunstancia reanimó, como era de prever, a los emigrados argentinos, quienes se apresuraron a reanudar sus tentativas de conmovir el interior, tanto para mantener el mito de la resistencia "popular" contra el "tirano", cuanto porque la presencia de la escuadra interventora les ofrecía el apoyo necesario para suplir su falta de popularidad y fuerza efectivas.

Paz, que se encontraba al frente de las tropas de Corrientes, envió una columna al mando de Juan Pablo López a posesionarse de Santa Fe. Este consiguió momentáneamente su objeto, derrotando a Echagüe por sorpresa, mientras Paz presionaba al norte de Entre Ríos para entretener las milicias de esta provincia; pero su triunfo fue muy efímero. Echagüe reorganizó sus fuerzas en Rosario y, apoyado por la escuadrilla de Buenos Aires al mando de Thorne, se dirigió sobre Santa Fe, recuperándola y persiguió a López en su huida hacia el Chaco, alcanzándolo y derrotándolo en San Jerónimo, en circunstancias en que se aprestaba a volver a Corrientes en barcos fletados por Paz. Esta aventura mostró el escaso arraigo en la provincia de la facción lopizta y el sólido prestigio de la causa federal.

Mientras esto ocurría, la escuadra interventora realizaba su primer acto formal contra la Confederación, apoderándose sin combate de los barcos argentinos de la escuadra de Brown. Este tenía órdenes formales de no resistir. "Tal agravio —expresaba el Almirante en la nota que pasó al gobierno— demandaba imperiosamente el sacrificio de la vida con honor, y sólo la subordinación a las supremas órdenes de V.E. para evitar la aglomeración de incidentes que complicasen las circunstancias, pudo resolver al que firma a arriar un pabellón que durante 33 años de continuos triunfos ha sostenido con toda dignidad en las aguas del Plata". Las escuadras interventoras se repartieron los barcos y aprisionaron a sus tripulantes.

Este atropello retempló la resistencia nacional contra la agresión. La legislatura autorizó al general Rosas para que reclamara a los gobiernos francés e inglés la reparación del agravio. La indignación subió de punto cuando se supo que los ministros mediadores habían hecho enarbolar en los barcos apresados la bandera oriental y formando con ellos una escuadrilla que pusieron a las órdenes del aventurero italiano don José Garibaldi.

Constituido de este modo en poder marítimo el gobierno títere de Montevideo declaró el bloqueo a todos los demás puertos del país ocupados por fuerzas leales a la causa nacional y sobre los que Garibaldi inició excursiones depredatorias. Sus primeros actos de guerra fueron la toma de Colonia y de la isla de Martín García, que se hallaba indefensa y en la que se dejó una guarnición anglo-francesa. A continuación —y siempre reforzado por unidades de las escuadras asociadas— atacó y saqueó Gualaquaychú. De sus procedimientos hace fe una carta del secretario de Rivera, Bustamante, dándole a su patrón la nueva: "Garibaldi saqueó la Colonia y Gualaquaychú escandalosamente; no puede contener la gente que lleva. Esta marcha nos desacreditará mucho".

Al mismo tiempo, los interventores declaraban bloqueados los puertos argentinos. Se fundaban en la negativa de la Confederación a acceder a la paz y en una serie de acusaciones que reproducían exactamente las calumnias unitarias difundidas en la prensa de Montevideo sobre las atrocidades atribuidas a la "Mazorca".

El gobierno argentino replicó protestando contra el bloqueo y las depredaciones cometidas por la escuadra combinada en las costas del Plata. En lo tocante a las acusaciones, se limitó a acompañar un testimonio firmado por *todos* los representantes diplomáticos acreditados en ese momento ante la Confederación (de Estados Unidos, Portugal, Cerdeña, Francia y Bolivia), donde manifestaban no ser ciertos los hechos alegados. El encargado de negocios francés, M. de Mareuil, desmentía así al propio interventor de su nación. En cuanto al de Estados Unidos, Mr. Brent, agregaba a su nota este comentario: "Hay pocos hechos heroicos sobre los que la imaginación se acalora con más satisfacción que aquellos de un pueblo que, resuelto a ser libre, nada deja al enemigo invasor sino el punto que momentáneamente pisa y el lugar en que se encierra". Con estas palabras empezaba a mostrarse el vuelco de la opinión pública internacional a favor de la resistencia argentina.

Garibaldi proseguía sus saqueos. Fue rechazado de Concordia y el Salto y llegó a las islas de Queguay. El general Blanco Díaz destacó desde Paysandú tres lanchones, con los que se apo-

deró de la goleta enemiga "Pirámide", en que iba la correspondencia del gobierno oriental con los almirantes Lainé e Inglefield. En una segunda tentativa, Garibaldi saqueó el Salto.

En estas circunstancias, el encargado de negocios francés, M. de Mareuil, pidió confidencialmente a Arana bases para un arreglo que él sometería a los interventores. Se le remitieron en síntesis las mismas de la propuesta anterior, a las que se agregaba la exigencia de amplias satisfacciones por los actos de hostilidad realizados contra la Confederación y las responsabilidades y las reparaciones consiguientes.

Los interventores las rechazaron, considerándolas "exorbitantes", y se dispusieron a llevar adelante la guerra y forzar el paso del Paraná, a fin de dominar el gran río en toda su extensión hasta Corrientes.

¿Qué significaba la intención de someter al país por la fuerza sino la conquista armada? De nada valen las tergiversaciones ni los distinguos. La nación que se somete a una fuerza superior pierde su autodeterminación, que es la cualidad de su soberanía, y pertenece desde ese momento al vencedor, cualquiera sea la forma en que pretenda disimularse la conquista. De que esto lo vieron en esa circunstancia claramente los argentinos da fe la entusiasta unanimidad con que todo el país —salvo un puñado de emigrados— acompañó al general Rosas en su actitud enérgica y digna.

Todas las provincias, con sus gobernadores y legisladores, se pronunciaron contra la agresión y ofrecieron sus contingentes para resistir. El glorioso general San Martín escribía desde su retiro poniendo su espada y su persona al servicio de la nación y felicitaba al gobernador de Buenos Aires como defensor de la independencia americana. El autor del Himno Nacional desenfundaba su vieja lira para arrancarle los mismos sonos de treinta años atrás, y con entusiasmo juvenil cantaba:

*Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo.
¡Daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!*

La prensa liberal del mundo empezaba a interesarse por la lucha iniciada en el Río de la Plata y acompañaba con su auspi-

cio el derecho hollado del débil, en quien veía al defensor de los principios republicanos y de la causa general de América contra los poderes retrógrados de Europa.

En previsión del propósito de forzar el Paraná manifestado por los jefes de las escuadras agresoras, el gobierno argentino había montado en la Vuelta de Obligado, próximo a San Pedro, cuatro baterías con dieciocho cañones en total, servidas por 160 artilleros y 60 de reserva, acompañados por un millar de milicianos, todo ello a las órdenes del general don Lucio Mansilla. Las baterías se hallaban al mando de Alonso Alzogaray, Eduardo Brown —hijo del Almirante— Felipe Palacio y Juan Bautista Thorne. Se había cerrado el río con tres cadenas, cuyo extremo opuesto se hallaba amarrado al bergantín "Republicano", de seis cañones, al mando del capitán don Tomás Craig. Las cadenas se corrían por sobre una veintena de barcos desmantelados y fondeados en línea, con lo cual se quería mostrar que el paso no era libre y había que batirse para forzarlo.

El 19 de noviembre de 1845 se efectuó el ataque. Las fuerzas enemigas estaban constituidas por 11 buques de guerra con 99 cañones de gran calibre y mayor capacidad de fuego que los anticuados cañones argentinos. Se combatió encarnizadamente durante siete horas, con gran despliegue de coraje por ambas partes. Nuestras fuerzas lucharon hasta que se les acabaron las municiones y fueron desmantelados los baluartes y desmontadas las baterías por el intenso fuego enemigo. Finalmente, los aliados pudieron forzar el paso y apoderarse de la posición. El mismo general Mansilla recibió en el estómago una herida de metralla al encabezar una de las cargas.

En esta acción, que dejó a 650 de los nuestros fuera de combate contra 150 del enemigo, éste obtuvo un triunfo relativo, pues si forzó el paso, fracasó en su tentativa de ocupar las costas. Su importancia estratégica fue por ello escasa.

Su importancia política fue en cambio grande para la causa nacional, porque vigorizó el espíritu de resistencia y despertó a la realidad a muchos que, por ofuscación ideológica, se inclinaban a simpatizar con las armas "civilizadoras". Tal fue el caso del coronel unitario don Martiniano Chilavert, quien se consideró "desligado del partido al que servía", porque veía que invocaba "doctrinas a las que deben sacrificarse el honor y el porvenir del país" y que establecían como principio "la disolución de la nacionalidad". La prédica de la prensa emigrada,

que aplaudía a las escuadras aliadas triunfantes sobre la sangre de sus compatriotas, provocaba estas reacciones.

La personalidad del general Rosas crecía con todo ello ante la opinión pública de las naciones civilizadas, sin excluir a las mismas agresoras. En Francia lo exaltaba Emilio de Girardin. Los diarios de Estados Unidos recordaban la doctrina de Monroe y hacían del Restaurador un campeón de los derechos de América. "Verdaderamente él es un grande hombre —escribía 'The Journal of Commerce'—; y en sus manos ese país es la segunda república de América". Todos los periódicos de Chile lo elogiaban, excepto los de los emigrados argentinos, de quienes se hablaba con desprecio. Y así en todas las demás naciones del continente.

* * *

Al saber amenazada su provincia por el ejército de Paz y las escuadras aliadas, Urquiza cruzó el Uruguay con las tropas vencedoras de India Muerta. Unidas éstas al ejército auxiliar de Garzón, sumaban 5.000 hombres de las tres armas, con quienes se dispuso a atacar a Paz. Inició su marcha a comienzos de enero de 1846.

Paz comandaba 6.400 hombres, sin contar con una columna paraguaya de 4.400, que venía a unírsele en virtud del tratado. Resolvió dilatar el encuentro hasta juntar todas sus fuerzas. Urquiza logró darle alcance y hubo un combate parcial que le fue favorable el 16; pero su adversario siguió en retirada a pesar de habersele incorporado la división paraguaya en las márgenes del Vetel. Finalmente, el entrerriano sorprendió a la retaguardia enemiga a las órdenes del general don Juan Madariaga en Laguna Limpia, donde lo derrotó y tomó prisionero.

En las Barranqueras, Paz se decidió a presentar batalla. Pero Urquiza, astutamente, rehuyó el encuentro en posición desfavorable y emprendió la retirada, dando por terminada la campaña sobre Corrientes. Había concebido e iniciado un nuevo plan. Por medio de Madariaga prisionero, gestionaba una reconciliación con su hermano Joaquín, gobernador de Corrientes, sobre la base de la eliminación de Paz. De allí saldría el tratado de Alcaraz, firmado poco después, por el cual la provincia díscola se reincorporaba a la Confederación de acuerdo con los términos del pacto federal de 1831.

Enterado Paz de estas negociaciones, se propuso desbaratarlas. Con el ministro Márquez y la mayoría de la Legislatura correntina acordaron deponer a Madariaga. Pero éste volvió a Corrientes, apresó a Márquez, batió a la división que Paz había deja-

do para apoyar dicha maniobra política y lo hizo destituir a éste del comando del ejército por el gobernador delegado Acosta.

Apenas conocida la destitución, el ejército se dispersó esa misma noche, quedando con Paz solamente un escuadrón de entrerrianos y muchos jefes y oficiales, con quienes huyó al Paraguay y de allí al Brasil. Volvía a ocurrirle lo que ya le había pasado otra vez, sin escarmentarlo; porque tal era la índole de esos ejércitos adventicios, constituidos a base de levas forzosas, para fines ajenos, cuando no contrarios, a la causa que sentían los pueblos.

* * *

La eliminación de Paz dispuso en los emigrados la última esperanza de conquistar el poder por la espada de un general unitario. La impopularidad de los decembristas era tanta que los predisponía permanentemente al fracaso por la desertión endémica de sus contingentes. No les quedaba más remedio que especular con la división del partido federal por el alzamiento de alguno de sus caudillos, a quien se plegarían ofreciéndole el apoyo de sus "luces" (si no de una fuerza de que carecían).

El entendimiento de Urquiza con los Madariaga pareció ofrecerles esa oportunidad. Tanto la Comisión Argentina como el gobierno títere de Montevideo y los interventores se pusieron en comunicación con el gobernador de Entre Ríos sugiriéndole una alianza sobre la base de la independencia de esa provincia y Corrientes: lo que no era otra cosa que el famoso proyecto de Varela. Francia e Inglaterra aseguraban de antemano todo el dinero necesario para la operación, en caso de asentimiento.

Rosas se enteró de lo que se tramaba y se limitó a escribirle a Urquiza poniéndolo en guardia contra las intrigas del enemigo. No se sabe si Urquiza tuvo en algún momento la tentación de ceder a ellas. Posiblemente la desmembración de la patria hubo de parecerle un precio excesivo. Lo cierto es que le dio cuenta de todo lo tratado al Restaurador, a fin de que éste —según le expresaba— se instruyera "más y más de que los ministros de Francia e Inglaterra no omiten medio, por inicuo que sea, para introducir la anarquía en estos países".

La situación de Montevideo era, mientras tanto, de total desbarajuste interno, bajo el gobierno efectivo de los ministros interventores, cuyo favor se disputaban diversas facciones por motivos de mera utilidad personal.

Ante el pseudo-presidente don Joaquín Suárez tenía influencia decisiva el doctor Vázquez, íntimo amigo y protector de don

Florencio Varela. Para contrarrestarlo, los disidentes pensaron nuevamente en Rivera y le reclamaron que volviera a Montevideo a eliminar la "asociación de sanguijuelas" que presidía dicho ministro. Rivera accedió y sus partidarios promovieron una revolución que mantuvo la ciudad durante cinco días en un caos de tiros y saqueos y terminó con la renuncia del gobierno y su reemplazo por otro adicto al caudillo. La revolución se hizo al grito de "¡Abajo los porteños!". Una vez en el poder y nombrado jefe de las fuerzas, Rivera propuso a Oribe un arreglo "entre orientales", que éste rechazó, poniendo como condición previa el cese de la intervención extranjera. Ante lo cual Rivera se resignó a seguir siendo el general de los interventores y el usufructuario principal de sus subsidios.

* * *

Mientras tanto, las fuerzas destacadas por las dos escuadras más fuertes del mundo no conseguían hacer pie en ningún punto de la costa argentina sin recibir un fuerte escarmiento.

Así había ocurrido en Obligado, en Acevedo, en San Lorenzo, en Tonelero, en el Quebracho, en la Ensenada. Por los incendios y violencias que cometieron los agresores en este último punto, el gobierno argentino dictó un decreto de represalias, estableciendo que los comandantes, oficiales y tripulantes de los barcos aliados, apresados en circunstancias de devastación y saqueo, serían castigados como incendiarios según las leyes comunes.

En la batalla del Quebracho, por el fuego de las baterías de tierra, perdieron los enemigos una barca, tres goletas y un pailebot, cargados con mercaderías por valor de cien mil duros, parte de los cuales salvó Mansilla. La navegación por los ríos era para ellos un riesgo permanente, pues las costas disparaban metralla desde los puntos más inesperados. Transportados a lazos de un lugar a otro, los cañones se multiplicaban en improvisadas baterías; táctica de montonera aplicada a la guerra naval.

Los interventores empezaban a ver con toda claridad que las advertencias del ministro Arana habían sido exactas y que habían encendido una hoguera imposible de apagar. Tendrían que optar entre traer un número incalculable de hombres de desembarco para tomar a sangre y fuego el territorio inmenso, o retirarse en la forma más digna que pudieran. Al cabo de un año de intervención, bloqueos y combates sangrientos, sólo contaban con lo que tenían al comienzo: con Rivera y la plaza de Montevideo, dominada por un círculo de agiotistas y traidores.

Con el bloqueo de Buenos Aires, esa plaza se había convertido en un centro de comercio bastante activo, de cuyas utilidades participaban ampliamente los interventores de la "civilización". Buena parte de las ganancias provenían de las expediciones de piratería de Garibaldi y sus secuaces, reclutados en los bajos fondos del puerto. A estas ganancias se añadían las producidas por la nueva salida de Rivera a campaña. Burlando el sitio con la ayuda de la escuadra aliada, el caudillo se plantó en Colonia, de donde realizaría una incursión al Carmelo y las Vívoras que, no obstante sus éxitos parciales, resultó sobre todo una expedición de cuatrismo.

Tal era la situación cuando llegó, sin anunciarse, el comisionado británico M. Thomas S. Hood, enviado por su gobierno para poner fin a una situación que provocaba ya severas críticas en la prensa y en el Parlamento.

CENTRO DE ESTUDIANTES DE

X. LA MISIÓN HOOD, EL LITORAL Y EL BRASIL

La imposibilidad visible de alcanzar los objetivos de la intervención conjunta fue, sin duda, la causa determinante del envío de la misión Hood con el propósito de obtener una paz honorable para las potencias agresoras.

Se había pensado en una operación rápida y en un sometimiento fulminante. La heroica resistencia de la Confederación mostraba el error del cálculo cometido, que aparecía tanto más flagrante cuanto más se conocían las modalidades del país, objeto a la sazón de la curiosidad simpática de todo el mundo político. Donde se había supuesto una colonia, había una patria. En no escasa medida contribuían a ese cambio de actitud las declaraciones del general San Martín a Mr. Dickson, que habían tenido amplia difusión en la prensa europea. La perspectiva de una prolongación indefinida del estado de guerra inquietaba a los intereses vinculados con el comercio en el Plata, los cuales, vista la imposibilidad de obtener una paz de conquista, querían ya la paz a cualquier precio y ejercían presión sobre los gobiernos por medio de los parlamentos y la prensa.

El vocero de dichos intereses en la Cámara de los Lores fue Lord Palmerston, quien se refirió a la incongruencia de sostener una guerra efectiva sin declararla y recalcó los graves perjuicios emergentes de dicha situación. Esta interpelación —que fue apoyada por Lord Russell— obtuvo como respuesta, por parte de sir Robert Peel, la afirmación de que los actos de guerra habían sido imprevistos y la promesa de que se trataría de restablecer cuanto antes la paz. Voces parecidas se habían escuchado en el parlamento francés, donde Thiers seguía siendo el paladín de la política bélica.

El solo hecho de que la iniciativa de parlamentar partiera de las potencias agresoras constituía por sí mismo un triunfo para la Confederación Argentina.

Mr. Thomas Samuel Hood venía investido del carácter de enviado confidencial de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña y llegó a Buenos Aires el 13 de julio de 1846. La credencial firmada por Lord Aberdeen manifestaba que el comisionado transmitiría al gobierno argentino proposiciones fundadas en las que éste había presentado en octubre de 1845, congratulándose de

que “reconocería en este paso la más fuerte evidencia de la ansiedad de los gobiernos británico y francés por cultivar relaciones amistosas con el de la Confederación”.

Las bases de la negociación no podían ser más satisfactorias, ya que eran las mismas de Rosas, según lo expresaba la credencial. Se reconocía la igualdad de derechos entre las naciones signatarias; se aceptaba que el Paraná era un río interior y sujeto a la exclusiva jurisdicción argentina; se estipulaba la colaboración para dar fin a la guerra, con suspensión de hostilidades, así como también la devolución de la isla de Martín García y los barcos apresados, con saludo de homenaje a nuestro pabellón. Por lo que tocaba al Estado Oriental, se proponía nueva elección de presidente y una amnistía completa.

Como era natural, el acuerdo se estableció al cabo de unas pocas conversaciones; con la salvedad hecha por el gobierno argentino de que los puntos referentes al Uruguay debían someterse a la decisión del general Oribe. En consecuencia del acuerdo en principio, se comunicó al general Mansilla que suspendiese las hostilidades contra los barcos franceses e ingleses y que les ofreciese los víveres y provisiones que necesitasen.

La noticia del arreglo produjo en Montevideo un gran revuelo y una profunda consternación. El triunfo de Rosas significaba la propia derrota y el cese del apoyo extranjero que constituía la última esperanza. Los interventores Ouseley y Deffaudis mostraron el despecho que les causaba la desautorización de su política, que les procuraba además pingüe provecho; por lo cual obstaculizaron la acción del comisionado, oponiéndose a que negociara con Oribe, cuya autoridad como jefe de Estado se habían negado a reconocer. Pero Mr. Hood, prevalido de la amplitud de sus instrucciones, pasó al campamento de aquél y obtuvo la confirmación de lo pactado en la parte que correspondía al Estado Oriental.

El acuerdo de los gobiernos argentino y oriental a las bases propuestas decidía jurídicamente el conflicto. Según las instrucciones que traía Mr. Hood, los interventores debían efectuar la pacificación conforme a dichas bases; o retirarse, cesando toda intervención, si el gobierno de Montevideo no las aceptaba, después de obtener garantías plenas para los extranjeros que habitaban la plaza.

Lejos de proceder así —obrando resueltamente contra el espíritu de paz manifestado por sus gobiernos— Ouseley y Deffaudis, al mismo tiempo que obedecían a regañadientes y transmitían el acuerdo al gobierno de Montevideo, seguían esforzándose para decidir la contienda en su favor. Mientras el gobierno argentino suspendía las hostilidades en el Paraná, ellos multiplicaban su

ayuda a Rivera, concentraban barcos en el Uruguay y transportaban armas y tropas de un lugar a otro de la costa oriental, para obtener alguna victoria decisiva que cambiara la situación militar, a la vez que libraban a la discusión pública los artículos del tratado, con el objeto de desacreditarlo y hacer imposible su cumplimiento.

El gobierno de Montevideo opuso algunas objeciones de detalle. Oribe no tuvo inconveniente en aceptarlas. Todo parecía subsanado y la pacificación un hecho, cuando los interventores promovieron una dificultad que no pudo resolverse, con respecto a la oportunidad de levantar el bloqueo. Ello debía efectuarse, según lo convenido, una vez formalizado el acuerdo; y así se desprendía de un claro párrafo de las instrucciones. Según los interventores, debía ser previa la pacificación y el retiro de las tropas.

Esta objeción parecería infantil (ya que el bloqueo podía haber sido siempre restablecido en caso de incumplimiento), si no se conociera su verdadera causa. El bloqueo constituía un excelente negocio para Montevideo y para los propios interventores, vinculados a un círculo de agiotistas de esa ciudad que explotaban los derechos de aduana. Había que hacerlo durar, por consiguiente. Ouseley no quiso asumir la responsabilidad de su actitud. Pero Deffaudis manifestó que no tenía atribuciones para apartarse de las instrucciones que le había dado su gobierno, las que decían "subsiguientemente" con respecto al bloqueo; y que por lo tanto, debía consultarlo. Hasta que no llegase la respuesta, las cosas habrían de quedar como estaban.

Hubo a raíz de ello cambio de notas con el gobierno de la Confederación en que Arana ratificó el punto de vista argentino y protestó por la continuación de los actos de guerra o de provocación, como la presencia de la escuadra en el Paraná después del acuerdo en principio y la ayuda a Rivera. Hood reconoció la verdad de los cargos y dio traslado de ellos a los interventores. Le respondieron que consideraban terminada la misión que lo había traído y que esperaban la resolución definitiva de sus gobiernos. Después de lo cual le comunicaron que el barco que debía conducirle de vuelta a Europa se haría a la vela al día siguiente.

El fracaso de la misión Hood fue un triunfo de Rivera y de los emigrados. Significaba para ellos la continuación de la ayuda extranjera, sin la cual era imposible triunfar ni siquiera accidentalmente.

Se estableció el sitio de Montevideo y la guerra recrudeció, sobre todo en la campaña oriental. Con el auxilio de los barcos aliados y el dinero anglo-francés, don Frutos emprendió una encarnizada campaña, atacando y saqueando diversas poblaciones como Mercedes, Soriano y Paysandú. Todos los testimonios coinciden en reconocer el carácter expoliatorio que revistieron estas operaciones de guerra sobre territorio decididamente enemigo. En el fruto de las exacciones tajaban los interventores, para cobrar con creces los subsidios anticipados. Fue a causa de ello y de los embarques de ganado que hacían continuamente los franceses, que Oribe hubo de expedir el decreto del 23 de febrero de 1847, en el que se declaraba que se considerarían como piratas y recibirían el consiguiente castigo los capitanes, patrones o tripulantes de buques que fuesen aprehendidos en la operación de cargar cualquier clase de ganado o frutos sobre las costas sin la autorización legal.

Las fuerzas nacionales a las órdenes de Ignacio Oribe y Servando Gómez hubieron de terminar pronto con el riverismo, en una breve y enérgica campaña, no obstante su refuerzo eventual por tropas francesas. Derrotado reiteradamente, Rivera debió embarcarse con los elementos que le quedaban fieles y refugiarse en la Colonia, al amparo de las baterías de las escuadras bloqueadoras. A mediados de febrero sólo le quedaba esa plaza, junto con las de Montevideo y Maldonado, sitiadas todas por el ejército de la campaña, nuevamente liberada y adherida en masa al gobierno legítimo.

La cuestión de fondo seguía debatiéndose en el terreno diplomático. Mientras nuestros ministros Sarratea y Moreno insistían ante las cortes de París y Londres para que se resolviese de acuerdo con lo estipulado por la misión Hood, los agentes de Montevideo y los delegados interventores intrigaban por evitarlo, aprovechando la disidencia de intereses que se pronunciaban cada vez más entre los aliados. Inglaterra se inclinaba a la paz. Francia se mantenía aferrada a la política rigurosa, con el objeto de conservar su "colonia" de Montevideo, como decía M. Thiers. . .

No obstante el rigor del bloqueo y las consiguientes dificultades económicas, que estimulaban la acción de sus enemigos internos, Rosas seguía imperturbable su política de gran estilo, concordante con la más excelsa tradición diplomática universal: dúctil en el procedimiento, pero inflexible en los principios; cortés y valiente; sin jactancia, pero sin temor; conocedora de todas

las argucias y capaz de agotarlas, pero sin declinar en lo más mínimo sobre el honor o el derecho. ¿Qué significaba esa conducta sino una alta expresión de cultura política, como pocas veces se había dado en el Nuevo Mundo? Era evidente que quien así se conducía obraba como representante de una gran tradición, saturada de sabiduría histórica y moral. Tal se lo consideró en todo el mundo y éste fue el secreto de su éxito, no la fuerza material de que carecía.

No cabe atribuírselo todo, por cierto, a la sola persona del Restaurador. Este era la encarnación del país, y el representante más ilustre de una clase dirigente arraigada en la mejor tradición española y con visión exacta de los problemas concretos del momento y experiencia del mando. Sus ministros y consejeros —los Arana, Guido, Vicente López, Lahite, Alvear, Sarate, Anchorena, Moreno— constituían una verdadera élite que, aparte de poseer grandes valores morales e intelectuales, actuaban en la cosa pública desde los tiempos de la colonia.

Mientras con un trabajo agobiador Rosas debía hacer frente a su grave conflicto externo, no descuidaba la administración de la provincia, cuyas rentas habían disminuido de manera impresionante con el prolongado bloqueo. Hubo que suplirlas, para pagar los gastos, con emisiones de títulos y papel moneda. Si esta circunstancia, que normalmente produce la desvalorización galopante del signo monetario, no se produjo entonces, ello debe atribuirse a la confianza que su gestión inspiraba por el riguroso cumplimiento de las obligaciones. Los fondos públicos, en las peores épocas, no bajaron del 92 por ciento.

Y esto que las complicaciones parecían aumentar, en lugar de desaparecer. A las ya pendientes se agregaban las que provenían de la política de Brasil, con radio de influencia sobre las provincias litorales, Paraguay, Corrientes y eventualmente Entre Ríos.

* * *

La desconfianza suscitada en los círculos de emigrados por la misión Hood, que les anunciaba un cambio de la política europea, les había hecho volver los ojos nuevamente con mayor interés hacia el Brasil, persistente en su política de lograr la hegemonía continental por la expansión en el sur y el oeste.

La diplomacia del Imperio, sin romper ostensiblemente con la Confederación, tomaba hábilmente posiciones para el conflicto que juzgaba inevitable, aprovechando la coyuntura de nuestras dificultades internas y externas. La negativa de Rosas a reconocer

la independencia del Paraguay, proclamada en noviembre de 1842, le dio a Brasil una oportunidad para ganar prestigio ante el nuevo estado, aceptando la situación en 1845 e iniciando los trámites para una alianza. Todo ello se realizaba con suma cautela, mediante una política dilatoria en la tramitación de las notas de protesta que en cada ocasión elevaba el embajador argentino. Si se recuerda que Corrientes había firmado una alianza con el Paraguay, que se mantenía vigente a pesar del tratado de Alcaraz entre Madariaga y Urquiza, fácilmente se advierte la delicada situación que todo ello creaba. El litoral era la zona neurálgica de la política internacional argentina, tan problemática y difícil.

Todas las otras fronteras podían considerarse pacificadas a principios de 1847. El prestigio de Rosas había trascendido a las naciones limítrofes, no obstante la insidia persistente de los emigrados; se admiraba su actitud de defensa de la independencia americana y los gobiernos tenían interés en mantener buenas relaciones con él. Chile había abierto sus puertas al comercio con la Confederación por ley del Congreso de noviembre de 1846 y toda su prensa (excepto aquella en que escribía Sarmiento) elogió su política. Bolivia había prometido y mantenía una estricta neutralidad en nuestras cuestiones internas. La unión espiritual naciente hubo de estrecharse a raíz de la amenaza de la expedición de Flores, que se reclutaba en España para lanzarse contra el Ecuador. Todos los gobiernos de la América española se dirigieron al de la Confederación, solicitándolo para resistir la agresión proyectada. Perú propuso la realización de un congreso de plenipotenciarios de América. Rosas prometió asistir, al mismo tiempo que daba instrucciones a sus representantes diplomáticos para que presentaran ante los gobiernos de Europa la más enérgica protesta contra esa amenaza a la libertad americana que, por cierto, no llegaría a concretarse en hechos.

El Brasil había permanecido expectante ante la agresión anglofrancesa (que secretamente había gestionado con la misión Abrantes), sin arriesgar ruptura con la Confederación y calculando que el desarrollo de los sucesos le daría la oportunidad de llevar adelante sus viejas aspiraciones cisplatinas. Esa actitud era expresamente violatoria de sus obligaciones internacionales, y así se lo advirtió el ministro argentino general Guido, al reclamarle oportunamente el cumplimiento del artículo 3° del tratado de 1828, que lo obligaba a defender la integridad e independencia del Estado Oriental. La cancillería imperial declaró que no consideraba llegado el caso de intervenir. Guido respondió con una nota en la que se refería a los datos auténticos logrados sobre la misión Abrantes, a lo que agregaba una protesta por la ayuda prestada a Rivera en la campaña que terminó en India Muerta.

98

La negociación se dilataba por la demora deliberada de la cancillería brasileña en contestar las notas, al mismo tiempo que se acumulaban tropas y armamentos sobre la frontera de Río Grande.

Al fin decidió cambiar de táctica y pasar a la ofensiva diplomática, dirigiendo a Guido una exposición de agravios sobre la prolongación de la guerra con Montevideo, a la que el Imperio —afirmábase— no podía ser indiferente. Aunque anticipaba que “no se proponía recurrir a las hostilidades”, manifestaba la intención de proponer la paz sobre la base de la consolidación de la independencia oriental. Con estas expresiones se iba dibujando claramente el “casus belli”, ya que la cuestión de la independencia oriental, si bien clara en principio, no lo era en la interpretación que le daría cada una de las partes, enfeudadas a los intereses de uno y otro partido en lucha.

La prensa de los emigrados en Montevideo, principalmente “El Comercio del Plata” de Varela, atizaba la discordia, previniendo al Brasil contra las supuestas intenciones imperialistas de Rosas y sus propósitos de reconstrucción del virreinato. Ponía como ejemplo su actitud frente al Paraguay (por cuya independencia Varela abogaba) y su intromisión en los asuntos orientales y fomentaba las tendencias disgregadoras latentes en el litoral. Esa propaganda encontraba eco en la prensa belicista de Río de Janeiro. Guido respondió brillantemente a tales acusaciones, pero la cuestión siguió agitándose en el público debate del parlamento y los periódicos.

Sabemos que los emigrados de Montevideo, incapaces de triunfar sobre Rosas por sus propias fuerzas —los fracasos de Lavalle y de Paz habían sido de sobra ilustrativos— sólo confiaban en el auxilio extranjero y en una probable división del partido federal detrás de alguno de sus caudillos. Para lograr esto último utilizarían —conforme a su confesado maquiavelismo doctrinario— todos los medios, especialmente los factores permanentes de disgregación latentes en los antagonismos locales.

La circunstancia de ser Urquiza, después de sus triunfos de Arroyo Grande e India Muerta, la primera lanza de la Confederación —casi a la par de Oribe—, lo constituía en el candidato obligado para oponerse a Rosas, si se suscitaba en él la ambición de reemplazarlo, sobre todo después que el tratado de Alcaraz acababa de darle un ascendiente indiscutido sobre la situación correntina.

Madariaga representaba en Corrientes la herencia de Ferré. Los levantamientos constantes de esta provincia, favorecidos por su situación geográfica, más que contra Rosas lo habían sido contra el puerto único, contra el monopolio del comercio exterior por Buenos Aires, a la que acusaba de su ruina económica. Quería puerto franco propio, abierto a Europa, la libre navegación del Paraná, que era también la aspiración paraguaya.

Rosas no podía acceder a esas pretensiones. Los puertos francos interiores habrían sido las vías abiertas a la penetración extranjera y al sojuzgamiento del territorio, convirtiendo a las ciudades litorales en otras tantas factorías como Montevideo, propensas a la casi ineludible disgregación. El puerto único significaba, en cambio, un instrumento de poder y unidad, la sola garantía de edificación de una economía nacional y autónoma. Sus inconvenientes habían sido atenuados con la ley de Aduana de 1835, reacción contra el monopolio rivadaviano en su intención de protección efectiva de las industrias del interior y reparto equitativo de los beneficios del trabajo nacional, como lo reconocían las mismas provincias agradecidas. El aumento general de la riqueza y el interior pacificado y solidario certificaban el éxito de esa política. La exigencia correntina era explicable, pero antinacional, aunque Urquiza secretamente la compartiera por espíritu localista y el prurito de hacer de su provincia la rival de Buenos Aires.

Que la aspiración de Madariaga era antinacional se advertía en su lenguaje, en su insistencia en mantener el tratado con el Paraguay —contra lo estipulado por el pacto de 1831—, en su docilidad a la intriga brasileña y unitaria. Su posición lo hacía el instrumento más accesible a la sugestión de los emigrados. La prédica de la prensa montevidéana subió de tono en el diapasón de las esperanzas renacidas.

Rosas advirtió la necesidad de actuar con energía. Manifestó públicamente su desaprobación del tratado de Alcaraz y se negó a recibir al emisario de Urquiza que se lo comunicaba.

Ante esta actitud, el gobernador de Entre Ríos hizo enmienda honorable, declarando que la negativa del Restaurador “le había hecho caer la venda de los ojos” y pidiéndole sus puntos de vista sobre la cuestión. Rosas le contestó por medio de Arana, expresándole que el tratado era inaceptable porque le daba a Corrientes un carácter de independencia que podía sentar un precedente funesto; porque admitía su separación de la guerra contra la agresión extranjera; porque toleraba que se mantuviera en vigor el tratado hecho por Paz con el Paraguay. Le agregaba que, en reemplazo de dicho pacto, debía proponérsele a Madariaga la incorporación lisa y llana a la Confederación, de acuerdo con el

pacto fundamental de enero de 1831; la delegación de las relaciones exteriores en el gobernador de Buenos Aires; el libre regreso a la provincia de los emigrados federales, y la reparación de los daños ocasionados por acciones de guerra en el puerto de Corrientes.

Urquiza aceptó las indicaciones sin oponerles reparos y las transmitió a Madariaga por medio del coronel don José Miguel Galán, aconsejándole su aceptación.

Madariaga pretendió postergar su respuesta, mientras proseguía sus negociaciones con unitarios y brasileños. No rechazó de plano la propuesta para no romper con Urquiza; pero trató de convencer a éste de que las dificultades provenían de Rosas y de que él se avenía a cualquier arreglo sobre la base de los intereses comunes de Corrientes y Entre Ríos. Era evidente que quería ganar tiempo, a la espera de las ulterioridades de la cuestión anglofrancesa o de las actitudes futuras del Brasil, con cuyos enviados estaba en relación permanente.

Al fin Galán lo emplazó para que se decidiese. Madariaga contestó que conservaba todavía esperanzas de un avenimiento, planteándole la cuestión al propio Rosas.

Pero entre tanto, reanudaba las hostilidades contra el grupo numeroso y selecto —Virasoro, Cabral, Pampín, Vivar, etc.— que en Corrientes sostenía la causa nacional y que estaba a la espera de la solución prometida: "Con los Madariaga —le escribía a Lagos el coronel Silva— nada bueno, sólido ni honorífico podrán hacer los gobiernos de la Confederación"... En vista de ello, Galán dio por terminada su misión, volviéndose a Entre Ríos. El tratado de Alcaraz quedaba roto y se hacía inevitable la guerra.

XI. VENCES

Mientras el Brasil empezaba a definir sus objetivos en el Plata, la cuestión anglo-francesa entraba en una nueva fase con el envío por Francia e Inglaterra de sendos plenipotenciarios, encargados de reanudar y concluir las negociaciones sobre la base de lo resuelto a raíz de la misión Hood.

Ambos eran diplomáticos de categoría, lo que muestra la importancia que el conflicto con la Confederación asumía para las potencias agresoras. El inglés Lord Howden, miembro de una ilustre familia irlandesa, había desempeñado difíciles comisiones en Oriente, actuando con discreción y brillo: era lo que más tarde se llamaría un especialista en "asuntos coloniales". Su colega francés, el conde Colonna Waleski, había sido diplomático en Inglaterra. Era hijo del emperador Napoleón y de la condesa polaca Waleska, que fue tal vez la mujer que más profundamente conmovió el corazón del Corso.

Llegaron a Buenos Aires a principios de mayo de 1847. En nota dirigida al ministro Arana con fecha 11 de este mes, le manifestaron que con el objeto de obviar "la única" dificultad que impedía la "completa y entera" ejecución del acuerdo, habían resuelto acceder a la demanda hecha por los generales Rosas y Oribe en el sentido de que el levantamiento del bloqueo se ordenaría, en las dos orillas del Plata, simultáneamente con la celebración del armisticio y la cesación de las hostilidades. En consecuencia, solicitaban que se les indicase la ocasión más próxima "para la ejecución inmediata de los artículos y para firmar el arreglo definitivo".

Estas palabras anunciaban una solución inmediata del conflicto. Tanto más cuanto que, en la entrevista que sostuvieron con el ministro Arana, le habían asegurado los plenipotenciarios que las bases que le transmitirían para su consideración serían sustancialmente las mismas ya acordadas.

No ocurrió así, sin embargo. El memorándum que presentaron con fecha 14 de mayo difería de aquéllas en su forma y en su fondo. Su aceptación habría implicado la renuncia a la soberanía en ambas márgenes del Plata y sobre los ríos interiores, y el reconocimiento del derecho de intervención política de las potencias europeas en los asuntos americanos. El cambio se debía, sin duda,

a lo que habían pescado los plenipotenciarios acerca de las dificultades que se presentaban por el lado del Brasil y a lo que se rumoreaba entre los emigrados sobre la probable actitud de Urquiza después de Alcaraz, de cuyas circunstancias trataban naturalmente de sacar las ventajas posibles.

El ministro Arana contestó con una larga nota en la que fijaba nuevamente la posición argentina. Le siguió a esto una serie de conferencias en que no se llegó a ningún resultado, por la firmeza de nuestra cancillería. Es de advertir que, en el curso de estas conversaciones y no obstante su propósito de actuación solidaria, ambos plenipotenciarios mostraban una diferencia notable de actitud, reflejo de los intereses divergentes de los poderes que representaban. Mientras Francia se empeñaba en mantener su posición en el Plata por el control de su "colonia" de Montevideo, Inglaterra —sin renunciar a las ventajas accesorias que pudiera obtener— quería sobre todo la paz.

El conde Colonna Waleski era, por consiguiente, quien llevaba la palabra en el sentido de extremar las exigencias. Había sido aleccionado en Montevideo por don Florencio Varela, cuyos puntos de vista le fueron gratos por su condición de francés, y se sentía obligado a actuar como un instrumento de la civilización contra la barbarie indígena. Aquel mentor se mantenía en contacto epistolar con él y le menudeaba las sugerencias y los consejos. Lord Howden, en cambio —más realista, como buen británico—, no se pagaba de fórmulas y empezó a observar desde su llegada la contradicción que había entre la leyenda calumniosa y la realidad —que lo conquistó— de un pueblo nuevo, regido por una sociedad refinada y que luchaba denodadamente en defensa de su independencia y de su dignidad.

Los emigrados de Montevideo seguían con ávido interés la marcha de las negociaciones en Buenos Aires, cuyos detalles conocían por vía francesa, y no ocultaban su apoyo a la posición adoptada por Waleski. Este pretendía, en síntesis, o un triunfo completo sobre la Confederación que convalidara los principios en que la intervención se había fundado (es decir, la humillación argentina), o una ruptura ruidosa que provocara la intervención armada, con fuerzas suficientes para aplastar toda resistencia. A fin de comprometer en esta tendencia a Lord Howden, Varela y los suyos lanzaron en sus periódicos versiones sobre supuestas exigencias suplementarias de éste a las ya expresadas en los protocolos, que más de una vez el propio interesado se vio obligado a desmentir, como la que lo mostraba exigiendo la devolución de las banderas tomadas en las invasiones inglesas.

Las negociaciones se prolongaron sobre puntos accesorios, como el reconocimiento de Oribe en su calidad de presidente y

otros, en que se llegó a fórmulas conciliatorias; pero hizo crisis en lo referente a la exigencia sobre libertad de navegación de los ríos interiores. En esta materia no podía transigir la Confederación, no sólo por los principios implicados, sino por la importancia que tenía el dominio de los ríos como instrumento de unión nacional. A la insinuación de postergar la discusión del tema —lo que equivalía a poner en duda el derecho—, respondió Arana con la ruptura de las negociaciones, alegando que no podía aceptar ni siquiera la discusión sobre un punto que comprometía nuestra soberanía y sobre derechos expresamente reconocidos ya por Inglaterra y Francia en los tratados de 1825 y 1840.

* * *

La ruptura de las negociaciones no dejaba aparentemente otra alternativa que la continuación de la guerra y la intervención armada más enérgica aún, a fin de doblegar por la fuerza la resistencia del gobierno argentino.

Así lo pensaba el conde Colonna Waleski, considerando con razón que estaba seriamente comprometido el prestigio de Francia ante la opinión mundial. Era la primera vez, en efecto, que una pequeña nación se enfrentaba en forma tan firme y gallarda con la segunda potencia de Europa; justamente en momentos en que el pueblo francés aspiraba a borrar las humillaciones de la Restauración con una ráfaga de gloria militar y recordaba estremecido al gran Corso, cuyos restos acababan de repatriarse y reposaban ya en los Inválidos. ¡Y era el hijo del dominador de Europa quien debía estrellarse ante la obstinación de un jefe de gauchos!

No era ésta la opinión de Lord Howden. Su gobierno quería la paz; y él por su parte se había convencido de las dificultades y los riesgos de una empresa guerrera, condenada tal vez al fracaso después de ingentes gastos y sacrificios. Para no llegar a una ruptura con su compañero de misión, lo convenció de intentar una nueva gestión pacificadora. Esta vez ante Oribe.

Ambos plenipotenciarios se dirigieron de común acuerdo al campamento del jefe oriental y le propusieron, por nota del 7 de julio, un armisticio. Para obviar la cuestión del título que se le daría, se resolvió de común acuerdo formular el tratado omitiendo las categorías de los firmantes. Pudo llegarse así a una propuesta de armisticio entre "las partes contendientes dentro y fuera de la ciudad de Montevideo", sobre la base de que duraría seis meses; de que los beligerantes mantendrían sus posiciones; de que se proporcionaría a la plaza sitiada determinado número de cabe-

zas de ganado, y de que, mientras tanto, se levantaría el bloqueo en ambas orillas del Plata.

La facilidad con que había accedido Oribe a este arreglo motivó que recibiese una sugestión del plenipotenciario francés —por medio de su secretario el conde de Brossard— en el sentido de iniciar negociaciones para la pacificación del país, a las que contestó difiriéndolas para cuando empezara a regir el armisticio.

Acto seguido, los plenipotenciarios se dirigieron a comunicar la propuesta al gobierno de la plaza sitiada.

Contra lo que era de esperar, éste la rechazó, con argumentos que eran la confesión palmaria de su propia nulidad y de su sometimiento al extranjero. Esa propuesta —alegó— “abriría el mar para Oribe, pero no abre para el gobierno (de Montevideo) el interior del país”. El levantamiento del bloqueo —agregaba— “tendría por efecto reducir a nada nuestras rentas, hacer pasar el comercio al Buceo (el puerto de Oribe), crearle a Oribe nuevos recursos, quitándonos a nosotros todo lo que podíamos tener”.

La negativa y el tono de la respuesta convencieron definitivamente a Lord Howden de la artificialidad de la situación creada y de los intereses que encubría, que no tenía por qué continuar amparando con el pabellón británico. En consecuencia, dirigió una nota al jefe de las fuerzas navales británicas disponiendo la terminación del bloqueo. Fundaba su determinación en el hecho de que “los orientales de Montevideo” no eran en ese momento “agentes libres, sino enteramente dominados por una guarnición extranjera”; y en que ese bloqueo, “habiendo perdido completamente su carácter original de una medida coercitiva contra el general Rosas”, había llegado a ser “exclusivamente un medio de proveer con dinero, parte al gobierno de Montevideo y parte a ciertos individuos extranjeros, con detrimento continuo del extenso y valioso comercio de Inglaterra en estas aguas”.

A continuación comunicó su resolución al general Oribe, pidiéndole que le acordase una amnistía para los extranjeros en el caso de tomar la plaza por las armas, en los términos en que se le habían concedido a Mr. Hood, a lo que accedió el jefe oriental. Finalmente ordenó el embarque de los soldados de infantería inglesa que estaban en la línea de trincheras de Montevideo y de los cañones y material de guerra de propiedad británica puestos al servicio de la defensa de la ciudad.

El rechazo del armisticio por el gobierno de Montevideo le había dado a Lord Howden el motivo que necesitaba para pro-

ceder así. Era una salida decorosa, acorde con sus propias convicciones y con el interés británico.

El desaire implícito en aquella actitud hubiera debido provocar la misma reacción por parte del embajador francés. No ocurrió tal cosa, acaso por haber sido él mismo quien subrepticiamente la aconsejara. Sabemos que los intereses de ambas potencias eran distintos, de tal modo que resultaba imposible mantener la ficción de una política conjunta persiguiendo propósitos diferentes. Lejos, pues, de ordenar el levantamiento del bloqueo a los barcos de su nación, Colonna Waleski lo mantuvo, haciendo honor al protectorado que Francia había asumido sobre su factoría oriental y que tanto el gobierno de ésta como los emigrados propiciaban y aceptaban con entusiasmo.

La resolución del plenipotenciario británico cayó como una bomba en Montevideo, cuyo gobierno le dirigió una nota impregnada del más bajo servilismo solicitando su revocación. Lord Howden contestó brevemente que, de acuerdo con las instrucciones que poseía, debían atenerse a lo resuelto. Esta fue la señal para que se desatara allí una violenta campaña contra él en los órganos de prensa, acusándolo de haber violado sus deberes para entregarse a Rosas, cuyos puntos de vista adoptaba. El doctor Varela afirmaba que, con su conducta, el plenipotenciario había “roto los pactos” (¿qué pactos?) que tenía el gobierno inglés con el de Montevideo.

La diferencia de conducta entre ambos comisionados en lo referente al bloqueo no significaba una ruptura formal entre las potencias asociadas, sino la adecuación transitoria de cada una de ellas a su interés respectivo. El estado de guerra subsistía con las dos. Era, no obstante, la manifestación de un cambio de política en Inglaterra, que debía traducirse en el enfriamiento gradual de sus relaciones con Francia. El gabinete Peel había caído poco antes, siendo reemplazado por un ministerio liberal presidido por Lord Russell. Al reparto del mundo en zonas de influencia se sucedería una secuela de conflictos derivados de las intromisiones francesas en los mercados que Inglaterra se inclinaba a considerar como un monopolio exclusivo: consecuencia del movimiento de expansión industrial, bajo cuyo signo se desarrolla toda la política de la época.

La ruptura de las negociaciones Howden-Waleski conmovió favorablemente al país. Rosas dio a su conducta la más amplia publicidad en todas las fases de la discusión, sometiéndola a la

aprobación de la Legislatura y al conocimiento de los gobiernos provinciales. En el enjundioso debate que se produjo en la ocasión hablaron, entre otros, el doctor Baldomero García, el doctor Lorenzo Torres, don Vicente López y Planes, don Miguel de Riglos y el general Soler, y se resolvió que "la resistencia del ejecutivo de la Confederación a las pretensiones plenipotenciarias de Francia e Inglaterra era la expresión de la voluntad de los argentinos". Manifestaciones análogas se realizaron en todas las provincias, por medio de sus legítimos representantes.

Mientras todo el país manifestaba así su inflexible decisión de no ceder ante la fuerza; mientras la prensa continental exaltaba el nombre de Rosas como el del "único gobernante americano que ha luchado y lucha con éxito en defensa de los derechos de la patria y de América contra las dos potencias más fuertes de Europa", y lo aplaudían los viejos patriotas como el autor del Himno y los generales de la Independencia como San Martín, Soler y Necochea, la prensa unitaria de Montevideo, la prensa de los emigrados, multiplicaba sus diatribas y solicitaba el envío de fuerzas francesas para dominar la resistencia argentina.

La verdad es que la situación de la plaza era insostenible y no tenía otra salvación. Aparte de la desertión permanente de la tropa, estaba corroída por la anarquía interna de las facciones. Hubo un momento en que — ¡por falta de jefes orientales! — el gobierno hubo de nombrar a Garibaldi comandante de las fuerzas; pero éstas le negaron obediencia y se vio obligado a renunciar. Se llegó al extremo de tener que dominar con tropas francesas la sublevación de los regimientos nacionales. Al cabo, los mejor intencionados — hartos de soportar un régimen de agiotistas y de piratas — no veían otra salida que un entendimiento con Oribe. A ello se prestaba el propio general Rivera — que comandaba en Maldonado — con los hombres de su partido. Pero la conspiración fue descubierta y el cabecilla, con algunos jefes adictos, debió emprender su enésima fuga al Brasil, dando con ello fin a su accidentada carrera política. Desde ese momento los emigrados lo convertirían en el "chivo emisario" a quien cargar todas las tropelías cometidas por la serie de gobiernos en que ellos predominaron durante todo el curso de la guerra.

* * *

El año 1847 — por tantos conceptos glorioso — habría de terminar con un hecho de armas que fue la coronación de la obra pacificadora en el territorio de la República. Nos referimos a la solución de la cuestión correntina.

El fracaso de las tentativas de Rosas y Urquiza para obtener de los Madariaga la adhesión pura y simple del pacto federal, dando con ello fin a su conducta separatista, no dejaba otra solución que la guerra.

Urquiza se puso en campaña y entró en Corrientes a mediados de octubre de dicho año, con un ejército de 7.000 hombres. Apenas pasó los límites de la provincia empezó la adhesión de los jefes federales del ejército correntino, que desertaron de las filas de Madariaga para enrolarse en el ejército nacional; entre ellos los Virasoro, Cáceres, Berón, Alvarez y Silva.

Estas deserciones daban la pauta del estado de espíritu reinante en la provincia. No obstante la fuerza de los resabios localistas, predominaba en ella la adhesión a la causa nacional, representada por Rosas y su política de heroica resistencia al extranjero. La proclama de Urquiza había apelado a este sentimiento, exaltado en entusiasmo por los sucesos recientes. "La Federación sea vuestra divisa ¡y odio a los que trajeron la intervención extranjera para humillar la patria!". Con todo, Madariaga logró reunir alrededor de 5.000 hombres, contando emigrados y auxiliares paraguayos y santafesinos a las órdenes de Juan Pablo López.

El encuentro se produjo el 27 de noviembre en el campo atrincherado de Vences. Hubo dos horas de encarnizada batalla, que terminó con el triunfo completo de las fuerzas nacionales, las que se apoderaron del parque e hicieron más de 1.500 prisioneros.

Al día siguiente, se reunió la legislatura correntina y nombró gobernador provisional al coronel don Miguel Virasoro, quien declaró que la provincia se reintegraba a la unidad de la Confederación.

XII. APOGEO DEL PRESTIGIO Y DEL PODER

Con la victoria de Vences se desbarató la última tentativa disgregadora en el seno de la Confederación y ésta quedó unificada bajo el poder supremo de Rosas.

No fue una consecuencia de la fuerza de las armas, sino de un avance paulatino de la opinión en favor de la causa nacional. Los años de la resistencia a la agresión extranjera habían provocado un recrudecimiento sensible de los sentimientos patrióticos, notable sobre todo en las provincias, donde el localismo llegaba a degenerar en tendencias separatistas. Habíase consolidado la conciencia de la unidad, galvanizada por el orgullo del triunfo, y esta conciencia era la que se había impuesto sobre los Maderistas en Corrientes, disgregando su ejército y llevando a sus mejores elementos a las tropas de Urquiza.

Que este fenómeno era general lo prueba el hecho de la vuelta al país, en los primeros meses de 1848, de la mayor parte de la emigración; la devolución a quienes lo pidieron de sus bienes confiscados; el ambiente de paz y seguridad que ofrecía entonces Buenos Aires, por el fin de la discriminación política, ya innecesaria.

El aumento del prestigio de Rosas coincidía con el correlativo desprestigio de sus enemigos. Los agentes de la emigración y del gobierno títere de Montevideo se debatían ante las cortes de Europa, pidiendo todavía la intervención armada, que era su única esperanza.

La ciudad sitiada seguía siendo teatro de la lucha de facciones, sin seguridad para la vida ni los bienes de sus habitantes, según hemos visto. El 20 de marzo de este año fue asesinado por un tal Cabrera el doctor don Florencio Varela. Aunque todos los indicios señalaban ese crimen como ocasionado por causas privadas, la posición política de la víctima y las exigencias de la polémica hicieron que se le atribuyese la instigación a Oribe y naturalmente la orden a Rosas, para quien —en la situación en que se encontraba el infortunado periodista— no representaba ya ningún peligro.

* * *

El fracaso de la misión Howden-Waleski produjo pésima impresión en Inglaterra, que se tradujo en comentarios periodísticos y debates en el Parlamento. Ante las explicaciones de nuestros ministros sobre las verdaderas causas de la ruptura de la negociación, los gabinetes francés e inglés decidieron realizar una nueva gestión conjunta que se encomendó a Mr. Robert Gore y al barón Gros, quienes desembarcaron en Montevideo a mediados de marzo y comunicaron desde allí al gobierno argentino, a Oribe y al gobierno local su buena voluntad, en el sentido de “restablecer el orden y la paz sobre la costa oriental del Plata”.

Los comisionados, que se atribuían el carácter de “mediadores”, iniciaron negociaciones con Oribe y el gobierno de Montevideo, sobre bases que eran en sustancia las mismas que este último había rechazado cuando las propuso la misión anterior. Oribe se inclinaba a aceptarlas por las ventajas inmediatas que obtendría; pero no se decidió a dar una respuesta definitiva antes de consultar a Rosas, como lo hizo. Rosas le aconsejó el rechazo, anteponiendo la cuestión de principios a la indudable ganancia de hecho que implicaba la posesión inmediata de Montevideo y la terminación de la guerra.

El arreglo propuesto habría significado, en efecto, reconocer la legitimidad de la intromisión extranjera en las cuestiones internas de los países del Nuevo Mundo. Además, ¿cómo podían hablar de “mediación” las potencias que —lejos de mantenerse neutrales— habían actuado como beligerantes, se habían declarado tales en las bases Hood y bloqueaban los puertos, lo que es un acto de guerra? No, Inglaterra y Francia no podían ser mediadoras. Estábamos con ellas en estado de guerra y sólo cabía la previa negociación de paz con las consiguientes reparaciones materiales y morales.

Algunos historiadores, como Saldías, consideran que esta negativa fue un error de Rosas, y se fundan en que los convenios que firmara Oribe no comprometían a la Confederación, la que tendría tiempo de hacer las correspondientes salvedades cuando le llegara su turno de negociar. Olvidan que el Restaurador tenía un sentido americano de la política internacional y entendía que cualquier desmedro en el honor de un país del continente recaía sobre todos los demás.

La retractación de Oribe motivó una nota de los enviados a la cancillería argentina, en la que afirmaban que habían tratado de mediar para resolver la situación de guerra en que se encontraba la Banda Oriental y “asegurar la independencia” de dicho estado.

Se les repuso, en forma enérgica, que “Francia y Gran Bretaña eran los únicos beligerantes contra los dos gobiernos aliados

del Río de la Plata, como ellas mismas lo habían reconocido en las negociaciones Hood y en la Howden-Waleski"; que "ni Francia ni Gran Bretaña habían garantizado la independencia del Estado Oriental", sino que por el contrario, la habían atacado y seguían atacándola con una intervención armada y que era justamente el gobierno argentino el que perseveraba en la defensa de la integridad y la independencia de dicha nación y seguiría haciéndolo pese a todo, "por deber, por honor y por solidaridad americana". La nota afirmaba a continuación que la actitud de "agresión y conquista" de ambas potencias constituía una violación de los tratados de 1825 y 1840, celebrados respectivamente con Inglaterra y Francia.

Así terminó, en forma harto desairada para los plenipotenciarios, la misión Gore-Gros. Este fracaso motivó un recrudecimiento de la propaganda por la intervención armada extranjera en la prensa montevideana, donde don Valentín Alsina había sucedido a Varela en la dirección de *El Comercio del Plata*, y el envió a Europa de don Melchor Pacheco y Obes y don Gontrán Ellauri para gestionar en el mismo sentido.

La revolución de febrero había provocado un vuelco de la situación en Francia con la caída de Luis Felipe. Consecuencia de este acontecimiento fue la orden impartida al almirante Lepredour, jefe de la escuadra bloqueadora, y que éste le anunció al gobierno de la Confederación, de levantar el bloqueo de nuestras costas, manteniéndolo sólo en las orientales ocupadas por Oribe: diferencia que se debía, según sabemos, a la peculiar condición de Montevideo y a la defensa de los intereses franceses comprometidos en el arriendo de las rentas de Aduana.

La situación de esa plaza seguía desesperada en el orden militar y catastrófica en el orden financiero, por la apertura de nuestros puertos, que absorbían todo el tráfico internacional. A comienzos del año, el gobierno se había visto obligado a comprometer sus rentas de Aduana ¡para 1851! por la suma de 500.000 pesos. Continuaba la anarquía de facciones y el malestar por el irritante predominio de las bandas de aventureros internacionales, lo cual daba origen a movimientos convulsivos. Los pocos orientales patriotas que quedaban entre los muros de la "nueva Troya" sólo aspiraban a entenderse con Oribe para librarse de la opresión. Del 16 al 17 de julio se produjo una sublevación bajo la jefatura del general Martínez que fue sangrientamente sofocada por las legiones extranjeras.

Por esos días las tropas de Oribe atacaron la Colonia, defendida por franceses y vascos, y la tomaron tras un breve combate.

* * *

Rosas seguía imperturbable en su línea política, sin ceder ante la amenaza ni ante el halago. El gobierno de Gran Bretaña nombró cónsul en Buenos Aires a Martin Hood, como una aproximación amistosa. Se le negó el reconocimiento porque el gobierno de esa nación no había dado satisfacción ni reparación a nuestro gobierno por sus actos agresivos. Al encargado de negocios del rey de Cerdeña, barón Picolet d'Harmillon, se le entregaron los pasaportes y se le intimó la salida del país por haber prestado ayuda a los enemigos de la Confederación. Frente a la política equívoca del Brasil se mantenía una actitud vigilante y enérgica. Todo ello redundaba en prestigio del país, que se veía llamado a actuar como árbitro en los conflictos de las naciones hermanas y aparecía como el campeón de los derechos de América ante el mundo.

No obstante la ortodoxia católica que inspiraba su acción gubernativa, Rosas mantuvo la misma firmeza en sus relaciones con la Santa Sede. En materia de designaciones eclesiásticas, se atuvo a los derechos de patronato heredados de España. El conflicto se produjo a raíz del nombramiento de monseñor Escalada como vicario de la diócesis, sin haber mediado la necesaria propuesta. Se suplicó al Santo Padre, pero éste no cedió, ni Rosas tampoco. Cuando poco después se propuso al doctor García para reemplazar a Medrano, el Papa no confirmó la propuesta, por lo cual el gobierno de la diócesis quedó en manos del Senado del Clero. Otro motivo de agitación en el orden clerical fue la expulsión de los jesuitas, acusados de actitudes políticas opositoras, con cuyo motivo hubo un debate en la Legislatura, en el que católicos y liberales opinaron a favor de la oportunidad de la medida.

Al declinar el año 1848 ocurriría un acontecimiento de escasa importancia en sí mismo, pero cuya explotación por la literatura posterior y la baja sensiblería habría de constituir un capítulo de inestimable efecto en la leyenda roja del Restaurador. Nos referimos al fusilamiento de Camila O'Gorman y el cura Gutiérrez.

Se conoce la triste y sórdida historia. Una pobre muchacha fue seducida por un sacerdote indigno y huyó con él. El hecho produjo un enorme escándalo social, que trascendió a la polémica periodística en ambas orillas del Plata. Descubiertos y presos los culpables y evidente la culpa, Rosas ordenó la ejecución de ambos. Camila estaba encinta. Todos los elementos del novelón romántico concurrían en el caso —como se ve— para suscitar la piedad, estimular la imaginación y erigir a las víctimas en arquetipos de la pasión volcánica que se alza por sobre todas las leyes divinas y humanas, que triunfa en los obstáculos y que tiene ra-

zón contra todo: Iglesia, Estado, sociedad, familia, anacronismos sin sentido para los idólatras del sentimiento puro.

Pero he aquí que se había ofendido gravemente a estas instituciones y la vindicta pública exigía el castigo: según las leyes canónicas vigentes, la pena capital. Y quienes con más violencia lo exigían eran los emigrados unitarios, que describían el caso como un síntoma de la corrupción de costumbres imperante —según ellos— en la sociedad federal y que después elaboraría el mito romántico de la inocencia sacrificada. En uso de la suma del poder, Rosas dictó la sentencia que daría satisfacción a la vindicta pública, haciendo ejecutar la dura ley que no tenía derecho a torcer por consideraciones sentimentales.

Este año de 1848 es en Europa un año de convulsiones políticas y sociales. Las energías suscitadas por la Revolución, que la política de la Santa Alianza había mantenido sofocadas a fuerza de rigor policíaco y que se agitaban subterráneamente en las logias carbonarias y masónicas, estallan y se esparcen por todo el Viejo Mundo. Se trata, en sustancia, de un esfuerzo general por adaptar las instituciones anacrónicas a las nuevas modalidades de la vida social y económica del siglo.

El mundo había cambiado fundamentalmente en pocos años. El racionalismo del siglo XVIII, con sus derivaciones materialistas y escépticas, había puesto en duda todas las verdades tradicionales, facilitando la tremenda convulsión de 1789, que se tradujo socialmente en el advenimiento de la burguesía, o sea la declinación de la propiedad territorial o feudal como fundamento del poder y su reemplazo por el dinero. Las conquistas napoleónicas propagaron esa revolución por toda Europa, provocando la destrucción de las viejas clases dirigentes y del antiguo orden mediante una nueva legislación civil con mayor o menor expresión efectiva en el armazón político. La Restauración —con la Santa Alianza del Trono y el Altar— no fue tal sino en la estructura externa, pues debió aceptar el hecho consumado del cambio. Junto a la nobleza restaurada —cortesana y empobrecida— dominaron como dueños del poder efectivo los nuevos jerarcas —empresarios, banqueros y prestamistas—, que ganaron títulos nobiliarios (a cambio de servicios muy concretos), adoptaron los dogmas más rígidos y aprovecharon así un régimen que aparecía como un excelente guardián de sus intereses.

Pero esa brusca reacción de los poseyentes y los satisfechos no podía matar las esperanzas de renovación total que la revolución había suscitado en el mundo con el mágico lema de "Igualdad, Libertad, Fraternidad". Se había hecho la experiencia de que los tronos caen y las instituciones cambian por la voluntad de los hombres; de que la obra humana puede ser destruida y re-

hecha por el hombre mismo. La inteligencia joven se puso a imaginar sociedades ideales, se hizo utopista; y se revistió de historicismo, para cohonestar los cambios futuros con el ejemplo de los cambios pasados. Así se definió el romanticismo —anhelo de libertad, afirmación de la personalidad— en toda Europa, como expresión política.

Toda esa ideología de las "jóvenes" Italia, Alemania, Francia (a la verdad no muy sólida ni muy coherente y que adolecía de una fe excesiva en el querer humano, en la virtud taumaturgica de la voluntad) se hubiera desvanecido pronto en los limbos del sueño, si los cambios económicos y sociales no le hubiesen aportado un permanente estímulo.

Al margen de las especulaciones políticas, se estaba produciendo en el mundo una revolución mucho más profunda por medio de la técnica, que trastornaría en breve plazo las nociones tradicionales de espacio y tiempo. En los comienzos del siglo se generaliza el empleo de la máquina a vapor, se inventa el telégrafo, atraviesa el océano (1819) el primer barco a vapor, se construye en Francia (1837) el primer ferrocarril, comienzan las primeras exportaciones de guano a Europa. Los nuevos medios técnicos aplicados a la industria facilitan la producción en masa; plantean la necesidad de adquirir mercados para colocar dichos productos y consiguientemente la competencia para producir a menor precio. El alto costo de las nuevas inversiones —adquisición de maquinarias, construcción de vías férreas— exige la concentración de capitales y la creación de grandes empresas colectivas. Nace así el capitalismo contemporáneo. Y con él la fiebre de la riqueza. Un político francés representativo de la época formula el nuevo evangelio: "¡Enriquecéos!". Es Guizot, ministro del "rey burgués". Y es, efectivamente, la voz de los tiempos y la expresión de la tendencia política que se denomina como progresismo.

Pero esa persecución de la riqueza, esa conquista de mercados (a la que obedecen las empresas europeas contra nuestra patria), esa competencia que exige bajos precios tienen su contraparte en la explotación de los trabajadores. Para el liberalismo vigente, el trabajo es una mercancía. La desocupación inherente al maquinismo, entre otras causas, provoca el exceso de oferta, el descenso de los salarios a niveles inhumanos, la desesperación para la mayoría, la protesta. ¿Puede ser ése el estado ideal anunciado por los profetas de la felicidad humana? Nace así, mejor dicho, renace el socialismo, viejo como el hambre y la miseria. Y renace con el aire romántico de la época, pidiendo el sufragio como panacea, la república como solución.

De todo este fenómeno brotan las revoluciones del 48, en ese renacimiento romántico, tan impregnado de errores como rico en vivencias nobles (¿vivir no es acaso errar humanamente?)

y que no puede agotarse en un rápido esquema. Porque él nos trae también el descubrimiento del Pueblo y de su real Voluntad frente a la dominación tiránica de los poderes artificiales impuestos por las combinaciones de los poderosos. Así como nos revela, con Herder y Mazzini, el nacionalismo, la ley de la sangre y el idioma como signo de redención de las pequeñas patrias dominadas. Y frente al materialismo inhumano de los nuevos señores del mundo, despreciadores de la Tradición en nombre del lucro, nos propone con Chateaubriand (amigo de Blanqui) y con Disraeli la fórmula de la vieja alianza del Noble y el Pobre contra el Burgués explotador y sórdido.

Todos estos elementos se conjugan en la revolución del '48 en Francia. Republicanismo, socialismo y bonapartismo se rebelan contra una política opresora y subalterna, cuyas empresas coloniales obedecen a la inspiración de banqueros afortunados y que no le dan al país ni provecho ni honor. El movimiento se extenderá por toda Europa y repercutirá entre nosotros de la manera desdichada que veremos, en su solo aspecto de revolución burguesa contra el orden tradicional.

Por lo que hace a las consecuencias inmediatas, la revolución de Francia nos fue favorable.

El Ministerio de Relaciones Exteriores había recaído en el poeta Lamartine, quien ya había expresado en el parlamento su opinión sobre los intereses espurios que sostenía la política intervencionista. Según sus palabras, el partido federal representaba la *nacionalidad*, frente a un puñado de personas que representaban y servían intereses extranjeros. Los diarios que obedecían a su inspiración calificaban la conducta de los agentes de la intervención como "la más escandalosa violación del derecho de gentes".

En situación parecida se hallaba el gabinete de Londres. Los esfuerzos de los agentes de Montevideo por tergiversar los hechos y presentar a Rosas como un tirano sanguinario, al margen de la convivencia civilizada, no encontraban eco ante Lord Palmerston, bien enterado de la situación por los informes fidedignos de Lord Howden. A las alegaciones de un agente de la situación montevideana contestó en noviembre de 1848 en los siguientes términos: "... las personas que se titulan gobierno del Uruguay no tienen una sola pulgada de tierra bajo su mando. Es evidente. ... que los individuos que actúan en Montevideo son la causa de la continuación de los males de que os quejáis y de que la paz sería restablecida en el territorio del Uruguay si aquellos individuos entrasen en arreglos con el general Oribe".

XIII. TRIUNFO DE ROSAS Y DE LA CAUSA AMERICANA

Mientras toda Europa, con excepción de Inglaterra, Rusia y Suecia, se hallaba conmovida por la ola revolucionaria, la causa americana que Rosas representaba había conquistado a la opinión pública europea, que clamaba por una rápida solución del conflicto. Los informes de los comisionados de buena fe como Hood y Howden y la acción de Sarratea y Moreno habían prevalecido sobre las intrigas de los adversarios, principalmente Pacheco y Obes y Ellauri, mandados por el gobierno de Montevideo.

Es importante hacer notar que no obstante la propaganda orientada en el sentido de mostrar al dictador de Buenos Aires como un tirano retrógrado y oscurantista (según la versión de Garibaldi, que iniciaba sus campañas europeas, y la de Santa Cruz, refugiado en Francia) el pensamiento liberal del Viejo Mundo no cayó en el engaño y se inclinó a ver en Rosas a un representante auténtico de la revolución americana, continuador de los grandes libertadores. La simpatía por las naciones jóvenes que pugnaban por librarse de las tiranías seculares era una de las emociones del siglo y este sentimiento romántico le fue en todas partes favorable al Restaurador. Ya Lamartine había advertido que el partido federal representaba la "nacionalidad", ¡mágica palabra!... Cuando Sarratea concurre a visitarlo al "Hôtel de Ville" —sede del gobierno provisional después de las jornadas de febrero—, el gran poeta le anunció su intención de dar pronto un corte honorable a la cuestión planteada, y la guardia republicana, formada en su homenaje, lo saludó con un "¡Viva la República Argentina!".

En Inglaterra las cosas habían marchado más rápido, gracias a los informes de Lord Howden y de Mr. Mandeville, que se hallaba en Londres: la opinión concordante de ambos había contribuido a fijar la de Lord Palmerston, convencido al fin del error cometido. Para subsanarlo envió un nuevo ministro en la persona de Mr. Henry Southern, quien llegó a Buenos Aires en los últimos días de 1848.

Apenas desembarcado en Buenos Aires el nuevo diplomático, se dirigió al gobierno manifestando su deseo de que se lo recibiese en carácter de tal.

Contra lo que se esperaba, se le contestó con una negativa. El gobierno de la Confederación no lo recibiría oficialmente mientras el de S.M.B. no le diese la satisfacción y las reparaciones debidas por las graves ofensas que, en unión con Francia, le habían inferido durante la intervención; pero se lo admitiría a continuar las negociaciones iniciadas con las bases Hood.

A ello replicó el ministro que no tenía poderes para negociar sobre dichas bases; pero que adelantaba la firme intención del gobierno británico de llegar a un arreglo recíprocamente honorable. Haciendo fe a esta declaración amistosa del diplomático nuestra cancillería le dio traslado —con carácter confidencial y previo el asentimiento de Oribe— del texto de dichas bases, con las modificaciones admitidas, para que las sometiese a la consideración de su gobierno.

La prensa unitaria trató de explotar este incidente en el sentido de excitar la susceptibilidad británica, presentándolo como un grave desaire. ¡Haberse negado a recibir a un ministro de S.M.B.! ¡Qué escándalo inaudito! Para los habituados a la adulación servil del extranjero, que les daba incluso la pitanza, esa actitud resultaba ciertamente inconcebible. Rosas no se conformaba con eso, sino que, para colmo, pedía nuevas satisfacciones al gabinete de Londres por el desembarco de tropas en las Malvinas y por incursiones de barcos ingleses que extraían guano de las costas patagónicas. Refiriéndose a estos hechos, escribía Sarmiento en "La Crónica" de Chile: "Rosas, infatigable para persistir en su política, que es la tenacidad, ha arrojado al agente sardo, no quiere recibir al ministro inglés y pide a todos satisfacción por todo. ¿Es un animal? ¿Es un bárbaro? ¿Es un charlatán? Escoja usted". La perturbación de los emigrados había llegado a tal extremo que ya no comprendían el honor. Pero el gabinete inglés no hizo cuestión de amor propio ante una actitud a todas luces legítima y aceptó el criterio propuesto por el gobierno argentino.

Casi al mismo tiempo que se iniciaban estas negociaciones, el contralmirante Lépredour entabló ante el ministro Arana una gestión análoga en nombre de Francia.

La actuación de ambas naciones agresoras por cuerda separada significaba de hecho la ruptura de la coalición contra la Argentina y el fin de la intervención conjunta. Cada una había resuelto obrar de acuerdo con sus propios intereses, que eran contradictorios. La voluntad de paz a toda costa que mostraba Inglaterra ponía a Francia en el dilema de continuar la guerra por

sus propios medios, arriesgando una operación de conquista que —aparte de sus dificultades casi insalvables— la pondría en conflicto con su ex aliada, o de resignarse a su vez a negociar, tratando de sacar el mejor partido posible del fracaso.

El proyecto de convención que presentó Lépredour era casi igual en su texto al que había redactado anteriormente el conde Waleski. Se le contestó que el gobierno de la Confederación no lo aceptaba y que sólo estaba dispuesto a tratar sobre las bases Hood, ya convenidas. Autorizado por su gobierno, el contralmirante recibió de Arana el texto de referencia y lo elevó para su aprobación. Se convino igualmente una suspensión de hostilidades en la Banda Oriental, aunque sin restablecerse la comunicación entre las fuerzas sitiadas y las sitiadoras.

Ante estas disposiciones pacíficas, que anunciaban la solución del conflicto, el gobierno argentino derogó el decreto que prohibía toda comunicación con los buques de guerra anglo-franceses, y dio el *exequátur* a la patente del cónsul británico. Sin perjuicio de la reclamación entablada por la extracción del guano patagónico, ofreció a la casa Baring, titular del empréstito inglés, la concesión por quince años de la explotación de ese producto y otros similares, debiendo aplicarse el canon al pago de dicha obligación. Al mismo tiempo, hacía abonar por tesorería la suma de mil libras por cuotas adeudadas.

* * *

La discusión en el parlamento británico de las bases propuestas por nuestro gobierno fue una prueba decisiva del prestigio ganado por éste. Todos los oradores —entre quienes se destacó Lord Howden, por sus opiniones fundadas en un exacto conocimiento de los hechos— se pronunciaron por la aceptación lisa y llana de dichas bases.

Si se tiene en cuenta que los puntos que se aceptaban eran los mismos que había especificado Rosas desde el comienzo —sin ceder ni en lo más mínimo sobre lo que, a su juicio, afectaba a nuestra soberanía y nuestro honor—, su aceptación significaba a la vez que un triunfo rotundo de la Confederación, la confesión implícita por parte de Inglaterra del gravísimo error cometido, puesto que había gastado durante cuatro años dinero y sangre para nada, perjudicando a la vez seriamente los intereses de su comercio. Una pequeña nación del hemisferio austral había inferido una seria derrota diplomática a la potencia acostumbrada a imponer su ley sobre el mundo, después de haber humillado por segunda vez sus armas.

La noticia de que el gobierno de la reina Victoria había autorizado a su ministro a firmar el tratado de paz provocó en Francia comentarios periodísticos y debates parlamentarios. Quedaba allí todavía un fuerte sector favorable a la continuación de la política enérgica, apoyado por los intereses comerciales que habían medrado con el bloqueo y la Aduana y que pretendían hacer de la costa oriental una factoría permanente. Lo auspiciaba la prensa favorable a Thiers, partidario de una política de expansión colonialista en los nuevos países de América, a los que se negaba a reconocer, por su "barbarie" y su "atraso", la plenitud de soberanía de que gozaban las naciones de Europa.

La inminencia de la solución de las cuestiones internacionales pendientes significaba para los emigrados la liquidación de todas sus esperanzas.

La Confederación estaba completamente pacificada en el orden interno y el prestigio de su jefe —reforzado por la resonancia de sus triunfos frente al extranjero, que halagaba a los corazones patriotas— crecía día tras día. La situación económica había mejorado en todo el territorio, no obstante las dificultades del bloqueo. El interior trabajaba en paz; florecían sus incipientes industrias rurales y urbanas. Y esta situación la reconocían los propios adversarios. Alberdi escribía en 1847: "Si digo que la República Argentina está próspera en medio de sus conmociones, asiento un hecho que todos palpan". Dos años después (por los días que estamos tratando), Herrera y Obes afirmaba en carta a John Le Long: "Buenos Aires sigue en un pie de prosperidad admirable. Es hoy el centro de todo el comercio del Río de la Plata, favor que Rosas debe sólo a la intervención... Su país prospera, su poder se afirma cada día más". Esto no era más que la consecuencia de una sana política económica y fiscal de protección al trabajo autóctono, que estimulaba la producción y — pese a todas las dificultades — el progreso técnico. En 1846 se había instalado en el molino San Fernando la primera máquina a vapor que funcionó en el país. Se empezaban a alambrar los campos destinados a la agricultura.

La hacienda pública se hallaba en estado floreciente, pues sus recursos no sólo habían servido para pagar los gastos extraordinarios de la guerra, sino que alcanzaban para amortizar la deuda y equilibrar el presupuesto. Con todo ello se había atenuado, hasta casi desaparecer, la tensión política interna. La mayor parte de los emigrados de la primera hora —incluso los que habían peleado con Lavalle y con Paz— volvían al país favorecidos por generosas amnistías, se asombraban de los progresos alcanzados durante su ausencia, disfrutaban de sus bienes recuperados y vivían sin molestias provenientes de la autoridad.

La convicción de que el pueblo era federal y de que no había posibilidad de conmoerlo desde adentro, le hacía escribir en Río de Janeiro a don Andrés Lamas —ministro en aquella corte del seudo gobierno de Montevideo— estas sintomáticas palabras, reveladoras de un pensamiento que no se oculta, pues se sabe compartido por todos: "No nos queda término medio entre sacrificar todo lo que hemos defendido, o apoyarnos *decidida y exclusivamente* en los extranjeros, en las relaciones y combinaciones exteriores". ¿A qué precio, ya que esos tratos no son nunca gratuitos? No lo dice, pero lo veremos.

Si les fallaban Francia e Inglaterra, quedaba todavía la coalición de los limítrofes, quedaba el Brasil...

La pacificación del litoral mesopotámico, con la reintegración a la unidad de la permanente provincia disidente, había sido obra del general Urquiza, quien a raíz de su triunfo en Vences había crecido hasta convertirse en la segunda figura de la Confederación.

Nos hemos referido a alguna de sus actitudes anteriores, que parecieron conato de independencia con respecto a la línea política de Rosas. Su conducta posterior había rectificado esas veleidades. No se sabe si ya en 1848 el caudillo de Entre Ríos había concebido y planeado su actuación ulterior. Lo que es notorio es que había recibido solicitudes y sugerencias que sistemáticamente rechazaba, comunicando alguna de ellas a Rosas; que se hablaba de él como candidato posible en los círculos de emigrados, y que desconfiaban de su adhesión —y así se lo comunicaban al Restaurador— Echagüe en Santa Fe y Oribe en el Estado Oriental. También se ignora si Rosas creyó o no en la posibilidad de la traición de Urquiza. Lo cierto es que hizo caso omiso de las advertencias y no lo liquidó políticamente, como pudo hacerlo, sin duda, mientras se hallaba en el cenit de su prestigio y de su autoridad.

Tales eran las circunstancias internas y externas cuando —en ocasión del mensaje gubernativo de principios de 1849—, Rosas hizo ante la Legislatura renuncia formal del mando, fundándose en que éste constituía una responsabilidad que ya no podía soportar y en que su quebrantada salud le exigía retirarse a la vida privada.

Las renunciaciones de Rosas han sido consideradas por sus opositores como maniobras destinadas a forzar las adhesiones y sacar ventajas políticas; como fundamentalmente insinceras. Si ello

pudo ser cierto en las primeras, no lo fue en este caso. El cansancio era real. Por lo demás, su obra se hallaba cumplida. La Confederación Argentina reconocida y respetada por todos—que parecía un sueño en 1835— se había convertido en una realidad indestructible. El ejercicio del poder supremo contra las acechanzas externas e internas; la tensión del jefe que ha de proveer a todo; el trabajo incesante, con sacrificio del descanso y del sueño, habían agotado las enormes reservas de energía del Restaurador. No es difícil que contribuyera a ese estado de espíritu la perspectiva de tener que defender su posición contra las nuevas ambiciones que veía surgir, en estéril lucha por un poder que ya le pesaba. Cumplida su tarea, dejaba el paso a quien pudiera suplantarlo, con fuerzas nuevas para servir la causa común.

La unanimidad en el rechazo y las expresiones con que se manifestó equivalieron a un nuevo plebiscito. La Legislatura declaró que el general Rosas era insustituible en el gobierno y reiteró su decisión de no admitirle la renuncia. Los ciudadanos de Buenos Aires y los residentes extranjeros expresaron la misma opinión en sendos memoriales firmados.

Cuando Mr. Southern comunicó la aceptación de las cláusulas del tratado por parte de su gobierno, Rosas nombró al doctor Arana en carácter de plenipotenciario argentino para suscribirlo, lo que se realizó solemnemente el 24 de noviembre de 1849.

Se trataba, según vimos, de las bases Hood con ligeras modificaciones de detalle. Por los artículos 1° y 2°, Inglaterra se obligaba a devolver la isla Martín García y los barcos capturados, en el estado en que se encontraban cuando el apresamiento, y a saludar al pabellón argentino con 21 cañonazos de desagravio. Por el 3°, la Confederación se comprometía a retirar sus tropas de la Banda Oriental; pero después que lo hubieran hecho los franceses, para lo cual Gran Bretaña ofrecía sus buenos oficios. Por el 4°, se reconocía que la navegación del Paraná era interior de la República Argentina y sometida a sus leyes y reglamentos, y la del Uruguay en común con el Estado Oriental. Por el 5°, se le reconocían a la Confederación los derechos de beligerancia que en iguales condiciones pudieran gozar Francia e Inglaterra. Los demás eran de forma.

Este tratado tiene una gran importancia histórica, no sólo argentina, sino americana. Por primera vez una gran potencia admitía explícitamente la plenitud de la soberanía en una de las débiles repúblicas del Nuevo Mundo, que hasta entonces se habían

considerado tierras de conquista de acuerdo con el impulso colonizador del siglo. En tal sentido constituyó una novedad trascendental en el derecho público americano y puede afirmarse que, con él, se cerró un ciclo de aventuras coloniales en tierras de América.

La Convención Southern-Arana fue ratificada por la Legislatura el 24 de enero de 1850. El acto se celebró con grandes festejos oficiales y populares.

Si la discusión del tratado en el parlamento inglés se había desarrollado sin borrasca, no ocurría lo mismo en el francés. Los intereses comprometidos en la aventura montevideana eran cuantiosos y no se dejarían derrotar sin lucha.

El proyecto de tratado sometido al contralmirante Léproux se había publicado en la prensa francesa a mediados de 1848. Los diarios de M. Thiers, campeón intervencionista, provocaron en seguida un escándalo sobre los términos en que estaba concebido y que consideraban lesivos para el honor francés.

Por un pacto firmado el 12 de junio de 1848, Francia se había comprometido a pasar al gobierno de Montevideo —para que pudiera subsistir— un subsidio mensual de doscientos mil francos. Al someterse este crédito a la Asamblea para su aprobación, la fracción adicta a Thiers en la comisión de Hacienda pidió y obtuvo el envío de todas las piezas correspondientes a la negociación Léproux, dando así estado parlamentario a un asunto que, por no existir todavía acuerdo entre los gobiernos, no había traspuesto los límites de las cancillerías.

La discusión del subsidio dio ocasión, pues, a que en las sesiones de diciembre de 1848 se debatiera ampliamente todo el episodio intervencionista.

No entraremos en detalles de este debate, por lo demás muy difundido. Su interés principal radica en los informes que salieron a luz sobre la real situación del Plata. Quedó establecido que la defensa de Montevideo resultaba ya insostenible, pues la mayoría de los habitantes querían la paz y había peligro permanente de que abrieran las puertas de la plaza a las fuerzas sitiadoras; que los partidarios de la resistencia se reducían a un puñado de extranjeros que medraban personalmente con la situación, y a los emigrados argentinos, muchos de los cuales también medraban; que sólo el envío de fuertes contingentes militares, cuyo número era imposible de prever, podía alejar aquel riesgo.

Con respecto a la situación de Buenos Aires, los informes del contralmirante establecían que más de 10.000 franceses tra-

bajaban allí en paz, al amparo de las mayores garantías para sus vidas y haciendas, en todos los ramos del comercio; lo que era el más rotundo desmentido a las calumnias lanzadas por los opositores a Rosas. Se acompañaban petitorios firmados por centenares de comerciantes y armadores franceses pidiendo la aceptación del tratado, en nombre de intereses nacionales mucho más legítimos y respetables que los que podían invocar los traficantes dolosos de Montevideo.

Contra esta suma de evidencias, poco pudo la elocuencia fogosa del campeón intervencionista. Se limitó a hacer una vigorosa profesión de fe colonialista, fundada en el supuesto derecho de las grandes potencias a civilizar los países "atrasados"; reeditó las calumnias corrientes contra Rosas, aprendidas de su amigo Varela y terminó afirmando que sería una vergüenza para Francia tener que saludar el pabellón argentino y humillarse así después de haber fracasado ruidosamente, en lo que no dejaba de tener razón.

La reunión terminó con la aprobación del crédito para el subsidio y la autorización implícita al gobierno para que continuase las negociaciones iniciadas.

La débil mayoría que alcanzó el gabinete en la votación demostró que el partido de la guerra seguía siendo en Francia muy fuerte. La caída de Luis Felipe, en la que buena parte le había cabido al bonapartismo (que significaba la revancha espiritual francesa, después de las humillaciones de la Restauración), mantenía viva la sensibilidad nacional en cuestiones de prestigio y especialmente de prestigio guerrero; y sobre este sentimiento actuaba la política del historiador del Imperio. El gobierno debía mostrarse en esa materia muy cauteloso. Despachó por ello a M. Goury de Boslau, con instrucciones para el contralmirante Lépredour y con una carta del almirante Mackau al ministro Arana, en la que le pedía que, dadas las circunstancias señaladas, no extremara las exigencias para llegar a un arreglo.

Esta advertencia influyó muy poco en la actitud del gobierno de la Confederación, que se mantuvo firme y digna, no cediendo ni una coma en lo referente a las satisfacciones debidas a sus intereses y a su honor, así como a los de su aliado el general Oribe.

La firma del tratado se verificó el 31 de agosto de 1850. En la parte sustancial era idéntico al celebrado meses antes con Inglaterra. Francia retiraba sus fuerzas del Río de la Plata, reconocía la soberanía argentina sobre los ríos, devolvía lo injustamente usurpado y desagraciaba a la bandera nacional en la forma de práctica. La potencia agresora había tenido que aceptar las exigencias legítimas del jefe ilustre de la Confederación, quien obtenía con ello un nuevo triunfo, que se traducía en prestigio internacional y frescos laureles para la patria nueva.

XIV. EL BRASIL Y URQUIZA

Cuando el general Rosas había alcanzado el cenit de su poder y de su gloria —después de su triunfo contra la agresión europea y sus aliados—, empezó a prepararse la coalición que habría de derribarlo.

Antes de entrar al relato de este episodio tortuoso y oscuro, conviene clarificar el pensamiento, despojándolo de la engañosa mitología fraguada por la falsificación histórica. La leyenda corriente sobre la coalición lo erige en protagonista al general Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien la habría iniciado como una cruzada libertadora de la ciudadanía argentina: propósito sagrado y fundamental, cuya propia grandeza sería suficiente —se dice— para cohonestar la circunstancial apelación a la ayuda extranjera. La acción que culminó en Caseros constituiría de este modo (para usar una fórmula inventada e impuesta por don Vicente Fidel López) la última y decisiva "reacción contra la tiranía". El aporte del Brasil (que a veces ni se menciona y al que se supone desinteresado y gratuito) no arrojaría sombra alguna sobre un hecho glorioso, comparable a los episodios fundadores de la nacionalidad, porque nos daría ¡la Constitución!

Tal es, repetimos, la leyenda. La verdad histórica es muy diferente.

La coalición fue obra de la diplomacia brasileña, que usó como instrumento al gobernador de Entre Ríos: segundón inveterado y que seguiría siéndolo hasta el fin de su vida. Tuvo por objeto el permanente propósito que aquélla perseguía de impedir la formación, al flanco del Imperio, de un estado que pudiese equilibrar y aun sobrepasar su poder. Se produjo cuando se había desvanecido la esperanza de que la Confederación se disgregase al empuje de la agresión europea y estábamos en estado de guerra con el Brasil. Un cúmulo de circunstancias adversas hizo que el general Urquiza —solicitado sin éxito desde 1845— terminara por ceder. Los sofismas de los doctores unitarios prevalecieron sobre sus reacciones sentimentales; no pudo resistir al mágico influjo que la toga doctoral ejerce sobre los espíritus sencillos y a la gloria que se le proponía de hacer entrar a la República en las vías de la "civilización", al frente del partido que se le pintaba con los colores de la inteligencia y del progreso.

El precio de la operación consistía en la renuncia definitiva, por nuestra parte, a derechos inherentes a la soberanía, que Rosas había sostenido con un denuedo que se calificaba de obstinación bárbara: lo que significaba una renuncia a la grandeza y a la hegemonía e implicaba, por consiguiente, el triunfo de la causa brasileña, que se impondría en Caseros.

Las páginas que siguen mostrarán cómo la caída del general Rosas fue una derrota nacional y cómo sus vencedores levantaron su poder sobre una patria humillada y disminuida.

* * *

La popularidad de Rosas se había acrecentado no sólo en el seno de la Confederación, sino en toda América, a raíz de su resistencia a la agresión ultramarina.

Uno de los primeros síntomas, cuando aún estaban pendientes las negociaciones anglo-francesas, fue el acercamiento con el Paraguay, del que el Restaurador dio cuenta a la Legislatura en su mensaje para el año 1850. El presidente Carlos Antonio López buscaba un arreglo definitivo con la Confederación, invocando "el honor y beneficio del pueblo americano". Esto puso en conmoción a la diplomacia brasileña, que inició sus gestiones para el tratado de alianza ofensiva y defensiva firmado con ese país en diciembre de 1851 y que debía permanecer secreto.

Era evidente que con la terminación de la ayuda francesa y la suspensión del subsidio, el gobierno títere de Montevideo carecería de elementos para resistir al ejército sitiador de Oribe y que caería a breve plazo, con lo cual la pacificación del Uruguay —bajo un gobierno amigo y aliado de la Confederación— habría sido un hecho consumado. Logrado esto, la reincorporación del Paraguay constituiría una empresa fácil, por la diplomacia o las armas. Los aguerridos ejércitos de la Confederación, al mando de Urquiza y Oribe, habrían tenido solamente que apoyar al partido, entonces muy poderoso, que se inclinaba a la reintegración de la provincia disidente.

Esto habría planteado necesariamente el *casus belli* con el Brasil, que había reconocido desde cinco años atrás la independencia paraguaya y la vigilaba desde la alianza secreta. El resultado final de la contienda no era dudoso, ya que el mismo Imperio reconocía que no estaba preparado para afrontarla¹.

¹ "La intervención francesa terminó por la convención firmada por el almirante Lépreux en Buenos Aires a 31 de agosto de 1850 y con el general Oribe a 13 de septiembre del mismo año.

"La situación del Brasil era ésta: 'hallarse brevemente frente a frente

Tal era la situación en esos años 1849 y 1850, y ella no se presentaba ciertamente auspiciosa para Brasil, perturbado además por el problema del separatismo riograndense. El sentimiento que inspiró toda su diplomacia de entonces fue el temor al engrandecimiento argentino, hábilmente estimulado por las sugerencias y las intrigas de don Andrés Bello, ministro de gobierno de Montevideo en Río de Janeiro. La política de este enviado consistía en ofrecer la situación oriental a la influencia brasileña, halagando las viejas aspiraciones cisplatinas, al mismo tiempo que otros agentes montevideanos reclutaban, según vimos, en los bajos fondos de Europa, legiones mercenarias para la defensa de la plaza sitiada, que habrían de pagarse con subsidios del gobierno imperial.

El general Guido —ministro de la Confederación en Río— vigilaba de cerca estas actividades, mientras instaba al Brasil al cumplimiento del tratado de 1828, que garantizaba la independencia uruguaya, para lograr la pacificación del territorio. A la vez que dilataba las respuestas, la cancillería imperial cedía a las sugerencias de Bello, celebrando un tratado secreto por el cual se comprometía a auxiliar financieramente la defensa de Montevideo. Como proveedor de fondos aparecía el banquero brasileño don Irineo Evangelista de Souza.

La política del gabinete brasileño estaba definitivamente fijada. Ante la convicción de la guerra inevitable por la cuestión paraguaya, se apresuraba a tomar posiciones en Montevideo, a fin de que ésta no cayera en poder de Oribe, mediante una ayuda que coonestaba con el pretexto de "defender la independencia oriental", la cual sería ilusoria si dominaba un partido aliado al gobernador de Buenos Aires.

Paralelamente con esta operación, el Imperio aliviaba sus tensiones internas dando satisfacción a los revolucionarios riograndenses, aliados tradicionales de Rivera, que aspiraban a extenderse sobre las ricas llanuras orientales y querían la guerra de saqueo y cuatrismo.

A principios de 1850, una horda de saqueadores de esa provincia, reforzada por riveristas emigrados y a las órdenes del coronel Francisco de Abreu, barón de Jacuhy, invadió el norte del Estado Oriental y atacó las regiones del Salto y Tacuarembó, ha-

con dos generales (Rosas y Oribe) desembarazados de todas las dificultades que hasta entonces los habían rodeado, disponiendo de todos sus recursos y de un ejército aguerrido, sin estar resuelta ninguna de las muchas cuestiones que le habían suscitado. 'No estábamos preparados para ninguna eventualidad de guerra' decía el ministro (brasileño)", (V. G. Quesada, *La política del Brasil*, etc., pág. 199).

ciendo grandes arreos de ganado. Fueron arrollados y perseguidos luego por una división del ejército de Oribe a las órdenes del coronel don Diego Lamas. El ministro Guido protestó ante el gobierno imperial. Después de muchas dilaciones se le contestó "que serían dadas las órdenes para que no se repitiesen los últimos acontecimientos". A todo ello, Abreu y sus cómplices se paseaban por las calles de Río y la prensa de los emigrados los ensalzaba como a beneméritos de la patria. Meses después repetían la agresión con fuerzas mayores, siendo nuevamente batidos.

Como el general Guido, deseoso de no forzar los acontecimientos extremara la política prudente, Rosas le intimó que exigiera el inmediato castigo de los culpables o la entrega de sus pasaportes. Nuevas dilaciones de la cancillería imperial provocaron el retiro del embajador y la ruptura.

Entre tanto, el 17 de agosto de 1850, había muerto en su residencia de Boulogne-sur-Mer el Libertador general don José de San Martín, lejos de su patria, pero satisfecho de saberla triunfadora y fuerte. La actuación del general Rosas había sido el consuelo de su solitaria vejez. De ello dejaba testimonio en la cláusula 3ª de su testamento, que decía así: "El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la América del Sud le será entregado al general de la República Argentina don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República frente a las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla".

* * *

Es de advertir que a fines de 1850 —en la plenitud de su gloria, ratificada por el homenaje sacramental del Libertador— Rosas insistió en ser reemplazado. Vea claramente, sin duda —y así lo dijo— las dificultades que habrían de sobrevenir a raíz del cerco que se insinuaba. Estaba realmente cansado; su actuación posterior lo demostraría. Pero en su anhelo de delegar el mando no había tanto derrota interior, ni deseo de eludir las duras responsabilidades que le son inherentes —cosa inconcebible en su temple heroico—, cuanto el de evitar a su patria los males que pudiera acarrearle el odio a su persona. Su eliminación quitaba pretexto a todos los que tomaran las armas para dar fin a lo que llamaban su tiranía.

Nuevamente el país le impidió retirarse. Y no es exagerado hablar del país, puesto que el pronunciamiento tuvo caracteres de unanimidad. No sólo se pronunciaron la Legislatura y el pue-

blo de Buenos Aires, sino los gobiernos y la ciudadanía de todas las provincias, ofreciéndole vidas y haciendas para cooperar al empeño con que "gloriosamente sostenía el honor y la independencia de la Confederación".

He aquí cómo hablaban los gobernadores. "La opinión del ilustre general Rosas —decía uno de ellos— no puede nunca caer en los pueblos de la República, cuya independencia, honor y libertad ha defendido; y funestos serían los resultados si V.E. descendiera de la primera magistratura, porque es en la benemérita persona de V.E. en quien la República ha depositado su confianza, robustecida con más de veinte años de servicios a la causa de nuestra independencia". Firmaba el general Virasoro, gobernador de Corrientes.

"En los últimos veinte años —afirmaba otro— han tenido lugar en el Río de la Plata, acontecimientos de tal naturaleza, que se han producido complicadas cuestiones cuya solución va a asegurar de una vez por todas los destinos de la República. Es V.E. quien las ha conducido hasta ahora con elevado tino y bien acreditada sabiduría. V.E. debe tener la gloria de suscribir su término, sellando con un acto de inmortal recuerdo su grandiosa misión de salvar la patria". Se le pedía luego que postergara su resolución hasta cuando la República "libre y triunfante de sus enemigos", pudiera "admitir la renuncia de V.E."

Liquidada la cuestión con Francia e Inglaterra, era evidente que las "complicadas cuestiones" que ponían en peligro "los destinos" de la patria, a la que había que "salvar", no eran otras que las pendientes con el Imperio del Brasil.

¡El firmante de esta expresiva nota era el general don Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, con la misma mano, y acaso con la misma pluma y tinta con que suscribiría —pocos días después— la alianza brasileña!

* * *

La Confederación Argentina estaba en guerra con el Imperio. El artículo 18 del tratado de 1828 establecía la obligación en estos casos de comunicar la ruptura y establecía un plazo de seis meses antes de iniciar las hostilidades.

Rosas había mandado las comunicaciones de rigor, a raíz del rechazo cortés con que respondió a la propuesta de mediación inglesa. Ambas naciones preparaban sus efectivos para hacer frente a la contienda, cuyos resultados no habrían sido dudosos con una Argentina unida y fuerte. Era el momento de "asegurar de una vez por todas los destinos de la República" —según decía el ge-

neral Urquiza en la nota arriba transcripta— en la batalla decisiva contra el enemigo histórico. Se jugaba la hegemonía continental, nuestra grandeza futura. Y con la suerte de la Confederación, la de la independencia americana frente a la penetración europea, que cambiaba de métodos, pero no de intenciones.

Fue en esas circunstancias graves y solémnes cuando empezó a afirmarse públicamente que el general Urquiza había firmado un pacto con el Imperio y el gobierno de Montevideo para derrocar al Restaurador, y que el precio de ese pacto sería la independencia del Paraguay y la libre navegación de los ríos. A ello se agregaría el abandono de las Misiones Orientales, fracción del territorio argentino no comprendida en el tratado de 1828, pero que el gobierno de Montevideo negociaba como propia desde 1845, ofreciéndola en venta al Brasil para salvar las dificultades de sus finanzas.

La alianza con el extranjero contra la patria tiene un nombre que no admite atenuaciones. El crimen se agrava cuando ese extranjero es el enemigo tradicional y estamos con él en situación de guerra y se merma el patrimonio colectivo. En la coalición de 1851, el enemigo obtenía sus objetivos de desmembrar a la República Argentina y despojarla de la soberanía sobre sus ríos y grandes fracciones de territorio, a cambio de su apoyo militar a un partido interno, el cual aceptaba el pacto, que implicaba la obtención del poder, a costa de tamaño humillación nacional y contra la voluntad de la mayoría de sus compatriotas.

Es evidente que los argumentos de orden político esgrimidos para justificar tal pacto carecen de toda validez. Si Rosas era tirano, la resistencia interna a su régimen debió bastar para derrocarlo. Si todos los intentos en ese sentido habían fracasado, porque contaba con la adhesión del pueblo, no había tal tiranía, sino una evidente legitimidad, que añadía el consentimiento general al título perfecto. Pero ni aunque hubiera sido cierto —que no lo era— el monstruo sanguinario y perverso creado por la leyenda adversaria, pudo jamás justificarse la alianza enemiga a tal precio, porque es infinitamente preferible cualquier sufrimiento en el orden doméstico, cualquier dolor, cualquier injusticia, aun la más extremada, a la humillación de la patria por el extranjero.

Urquiza no lo ignoraba. Ya vimos cómo en 1845, si bien sintió la tentación del mal paso, reaccionó al cabo, sincerándose con el Restaurador. Los testimonios de quienes anduvieron en tratos con él para decidirlo a la tercera coalición coinciden en afirmar que costó trabajo obtener su final consentimiento; y que al fin lo dio —porque sin la ayuda militar y financiera del Imperio nada podría hacerse— aunque esforzándose todo lo posible por mantener las apariencias de jefe de una empresa “nacional”.

Su responsabilidad se atenúa algo, si se piensa en la confusión de conceptos que entonces reinaba y en su medianía espiritual. No era un hombre de pensamiento, ni de cultura, ni de sólidos principios morales; tenía sobre todas las cuestiones conceptos vagos y empíricos, aunque no carecía de agudeza y buen juicio en materias prácticas. Poseía condiciones para ser un eximio capitán de milicias, dotado de una especie de genio estratégico, que hizo de él la primera lanza del litoral; o un buen caudillo local; o un juez concienzudo en materias de campanario. Su éxito en un escenario reducido y su convicción de ser el mejor de la aldea le habían despertado, empero, una alta idea de sí mismo y la ambición de brillar en escenarios más amplios. Este conjunto de cualidades y defectos (acompañado de la conciencia de su propia limitación en “cosas de papeles”) lo predisponía a caer en las redes de los doctores del unitarismo, dueños de una dialéctica aguzada en veinte años de vivir de expedientes, maestros en la tergiversación y en la intriga. Es evidente que cualquiera de ellos era capaz de infundirle al sencillo paisano sus propias ideas en una conversación de media hora, y aun de sugerirle que las pensaba él mismo, haciendo aspavientos de admiración ante el eco como si se tratase de la voz providencial y esperada.

Si se tiene en cuenta que la razón de ser de los emigrados consistía en la alianza con el extranjero (sinónimo para ellos de civilizado) y que existía sobre el asunto, a través de las sucesivas coaliciones, una copiosa jurisprudencia, se comprenderá el arte que habían alcanzado en la elaboración de sofismas tendientes a demostrar que la traición a la patria era el supremo bien y el celo por la soberanía una manifestación de barbarie: “americanismo bruto”, según la expresión de Andrés Bello. ¿Qué argumento podía oponer el caudillo de Entre Ríos (que si era un simple, no era un rústico y aspiraba a ascender y brillar) a esos razonamientos vertiginosos? ¿Cómo iba a resistir a la tentación de suplantarlo a Rosas (a quien admiraba y envidiaba a la vez), pasando con ello a la historia como Libertador, Legislador y caudillo de los doctores?

Añádase a esto que la libre navegación de los ríos —que sus mentores le presentaban como una exigencia del Progreso— halagaba sus rasabios localistas, por lo que significaba como desquite contra la capital, y tendremos esbozada la figura de don Justo José de Urquiza, a quien el Brasil y los emigrados eligieron como instrumento de la campaña contra Rosas y la integridad y la potencia de la Confederación. Estaba muy por debajo, sin duda, del papel de primer plano que las circunstancias le reservaban; pero la verdad es que no lo habría asumido si hubiese sido un hombre de mayor calidad. Como visión política no levantaba sobre el

nivel de un López o un Ibarra y lo demostraría su ulterior fracaso. El tamaño con que se mantiene en la historia está condicionado a la magnitud de la catástrofe en que intervino. Grande e inerte como un ariete, Mitre lo juzgaría años después (1865) con frase lapidaria: "Hará lo que se le diga", afirmó con absoluta seguridad.

* * *

Envanecido por su victoria en Vences y con la piel todavía escocida por el tirón de oreja de Alcaraz, Urquiza había caído en efecto en las redes que le tendía el Imperio por medio del ministro Herrera y Obes, jefe de la fracción "ultra" del gobierno de Montevideo, cuyo representante en Río de Janeiro era don Andrés Lamas.

La situación era apurada para el Brasil. Debía forzar la decisión de Urquiza antes de que éste se viese obligado a sumar sus medios a los de Rosas —como el deber se lo imponía— en el choque inminente. En cumplimiento de su plan, y simultáneamente con los ataques a territorio oriental, había provocado otro por fuerzas paraguayas a la provincia de Corrientes, que fue fácilmente rechazado, dejando los invasores en el campo pertrechados de guerra de procedencia brasileña. Entre tanto, iban y venían los emisarios de Río a Montevideo y de allí a Concepción del Uruguay, concertando los últimos detalles de la coalición, cuyas primeras manifestaciones visibles consistieron en la lenta afluencia de emigrados a Entre Ríos y en el lenguaje de la prensa provincial, que empezó a ventilar de nuevo el tema vedado de la "organización" política.

Estas circunstancias no eran ignoradas por el Restaurador, como tampoco el insidioso trabajo de zapa que había comenzado entre las fuerzas sitiadoras de Montevideo y entre su propio ejército de Santos Lugares para quebrantar su fidelidad. Los jefes militares, empezando por Oribe, le advirtieron el peligro, y aun le propuso este último la realización de una campaña fulminante sobre Entre Ríos para reducir a Urquiza, levantando el sitio de Montevideo, con lo cual obtendría la ventaja suplementaria de movilizar su ejército, desmoralizado por la inactividad. Rosas no accedió. Confiaba, sin duda, en que su enorme prestigio en el país y la virtud aglutinante del peligro extranjero serían suficientes para matar de raíz las intrigas de que se hablaba. La guerra contra el Brasil era popular; respondía a un sentimiento hereditario y compartido por todo el pueblo de la República. El Restaurador suponía, con buen acuerdo, que la simple sospecha de colusión

con el enemigo tradicional bastaría para esterilizar los esfuerzos de sus opositores y condenarlos al fracaso.

La diplomacia brasileña procedió con toda la premura que el caso requería y dio las seguridades necesarias de ayuda para el éxito del levantamiento, sin olvidar los recaudos por las ventajas que esperaba. Ya don Andrés Lamas había firmado, en nombre del gobierno de Montevideo, el tratado de límites en que le abandonaba desaprensivamente al Brasil fracciones de territorio argentino que no eran de jurisdicción uruguaya, a cambio de ayuda en dinero para sus finanzas en quiebra.

A principios de 1851 ya estaban terminados los preparativos de la operación. En atención a los sentimientos del país, debía presentársela como una reacción puramente argentina contra el "despotismo", disimulándose en todo lo posible el interés y el apoyo extranjeros.

Asegurado el auxilio del Brasil y las necesarias complicidades en el ejército sitiador de Montevideo, así como la adhesión de su propio ejército —donde hubo de chocar con la oposición de quienes se mantuvieron fieles al Restaurador— Urquiza se decidió a actuar. El 5 de abril dirigió una circular a los gobernadores, anunciándoles que se ponía a la cabeza del movimiento de libertad, con el fin de "organizar la nación". Y el 1° de mayo dio un decreto por el cual —fundándose en las reiteradas renunciaciones de Rosas e invocando "las consideraciones debidas a su salud"— declaraba reasumir el ejercicio de las atribuciones delegadas en el gobernador de Buenos Aires, quedando en aptitud "de entenderse con los demás gobiernos del mundo hasta tanto que, reunido el congreso de las demás provincias, sea definitivamente constituida la República". Es lo que se llama su "pronunciamiento".

El primer "gobierno del mundo" con el que se entendería públicamente —ya que desde tiempo atrás lo hacía en privado— sería, por supuesto, el del Brasil.

El 29 de mayo se firmó entre el Imperio, el gobierno de Montevideo y el estado de Entre Ríos un tratado de alianza ofensiva y defensiva cuyo objeto confesado era propender a la "independencia y pacificación" del Estado Oriental; pero en el que se establecía que, si tal propósito era obstaculizado por el gobierno de Buenos Aires, se convertiría automáticamente en alianza contra éste.

Ninguno de los gobiernos provinciales —salvo el de Corrientes, feudatario de Urquiza— respondió al llamado. La actitud del gobernador de Entre Ríos provocó por el contrario en todo el territorio una ola de escándalo e indignación, cuya consecuencia fue estrechar los vínculos que unían a los hombres del interior con quien encarnaba la defensa de la independencia y el honor colectivos.

Todos los gobiernos y legislaturas ratificaron expresamente en la persona de Rosas la delegación del poder supremo; y con el fin de arrebatárle a Urquiza la bandera —simpática a los pueblos— de la convocatoria del congreso constituyente, decidieron, por iniciativa de las provincias del norte, conferir al gobernador de Buenos Aires el encargo de realizarlo cuando lo considerase oportuno. El paso dado por el caudillo de Entre Ríos se calificó lisa y llanamente de traición, en los discursos y en los documentos oficiales. Centenares de adhesiones llegaron al general Rosas de todos los lugares de la República, firmadas con los nombres más representativos de cada localidad, de tal modo que la condena del “pronunciamiento” adquirió las proporciones de un verdadero plebiscito nacional.

El país quería la guerra contra el Brasil y sus aliados. Tonificado por sus triunfos recientes, confiaba el Restaurador, seguro de que saldría en esta ocasión nuevamente victorioso.

Las crónicas de la época, aun las emanadas de los adversarios, nos reflejan la magnitud del fervor con que la República rodeó a su jefe en esas vísperas que se imaginaban gloriosas. El 9 de julio se celebró con un gran desfile militar, y el Restaurador apareció ante el pueblo al frente de la división Palermo, entrando a la ciudad por el paseo de Julio. Fue aclamado delirantemente por la desbordada multitud: verdadera apoteosis como nunca se había visto en la plaza de la Victoria.

El 18 de agosto —fracasada una tentativa de mediación inglesa— se declaró la guerra al Imperio. Ya las naves brasileñas remontaban el Paraná para tomar contacto con sus aliados y se cambiaban en esos días los primeros tiros con las baterías de la costa.

Con los frentes embanderados y adornados con tapices rojos, las manifestaciones que recorrían las calles viviendo al Restaurador, las bandas militares, las funciones teatrales y el entusiasmo que desbordaba, Buenos Aires tenía un aire de fiesta.

XV. CASEROS

Antes de proseguir con el relato de los acontecimientos que terminaron en Caseros, conviene reflexionar sobre las confusas circunstancias de ese momento crucial y el problema histórico que entrañan.

Es evidente que Rosas se hallaba en el apogeo de su poder efectivo y que contaba con la adhesión del pueblo, enfervorizado todavía por las inminencias de la guerra contra el enemigo tradicional. Las expresiones que le llegaban de todo el país así lo revelan, como también los testimonios concordantes de amigos y adversarios. Había triunfado con menos medios de enemigos mucho más fuertes; todo indicaba que volvería a vencer. ¿Cómo se explica entonces su caída, con la extraña pasividad y las indecisiones que la precedieron y el fácil derrumbe que a todos sorprendería?

La causa de la Santa Federación estaba efectivamente consolidada y se confundía con la idea misma de la patria. Pero el auge de don Juan Manuel de Rosas, con toda la gloria acumulada en una lucha incesante por la independencia y la unidad, duraba desde hacía un cuarto de siglo, tiempo excesivo para la frágil paciencia humana. Los regímenes envejecen como las personas y las cosas. El mero transcurso del tiempo es el camino de la muerte. Bajo la aparente solidez del edificio federal —y sin que nadie lo notara— actuaban los factores de corrupción, las resquebrajaduras invisibles que preparaban el desmoronamiento.

El general Rosas también había envejecido y se hallaba efectivamente cansado por la larga tensión, como lo expresaban sus cada vez más sinceras renunciaciones. Era natural que su energía desfalleciera y que su trabajo tendiese a degenerar en rutina. Era natural asimismo que, a ese desfallecimiento de su actividad personal, correspondiera una correlativa delegación de su poder en agentes subalternos, lo que haría resaltar los inconvenientes naturales del régimen. Sabido es que los gobiernos personales fallan sobre todo por la imposibilidad en que se encuentra generalmente el dictador de ocuparse él mismo de todos los asuntos del gobierno, por lo cual debe fiarse de otros; de tal modo que lo que hace las veces de su decisión real y efectiva no es, por lo común, otra cosa que una interpretación de su voluntad presunta, reali-

zada por burócratas amparados en la irresponsabilidad y con cuyos frecuentes errores o tropelías debe cargar el titular del mando. Ello equivale a afirmar, paradójicamente, que los gobiernos personales fracasan sobre todo por lo que tienen de terrorismo impersonal y difuso, inherente a la naturaleza del sistema, cuando el acceso al jefe es difícil para los afectados por los actos de gobierno y la minoría burocrática que lo rodea dispone de un monopolio del favor, que, como tal, se hace odioso a quienes no gozan de él.

Tal ocurría, sin duda, en los tiempos del Restaurador, y se había agravado en las postrimerías, cuando éste se inclinaba a dormitar sobre sus laureles. No es difícil que, con el correr de los años, la acumulación de injusticias y agravios particulares, que ocurren bajo cualquier gobierno (pero que se atribuyen a un solo responsable en las dictaduras), hayan ido sedimentándose en las conciencias hasta formar un fermento venenoso capaz de corroer la fidelidad de los más decididos federales y que muchos de éstos soñaran más de una vez en la necesidad de cambiar. A este fenómeno, natural e inevitable, debe agregarse el no menos inevitable cansancio por la repetición monótona de los mismos temas, el auge de las mismas personas, la práctica de los mismos ritos de exaltación (en que el entusiasmo auténtico de los primeros años se diluía cada vez más en adulación interesada) y en las altas capas sociales, especialmente entre los jóvenes, un bullir de ambiciones nuevas que buscaban satisfacción, no la encontraban y cifraban en un cambio toda su esperanza.

No obstante la conciencia general por los eminentes servicios prestados por Rosas, no obstante la satisfacción patriótica por sus triunfos que habían exaltado el nombre nacional, la adhesión unánime que el país mostraba por el régimen se parecía cada vez más a la resignación unánime. Como en la conocida anécdota del niño de la doctrina ante la descripción poco seductora de los goces celestiales, los habitantes del paraíso federal aspiraban a divertirse aunque fuese en el infierno.

Nada de esto sería suficiente sin embargo, para explicar la caída —ya que la virtud amalgamadora de la guerra nacional habría bastado para contrarrestar esos factores de desgaste—, si no se hubiese sumado a todo ello el cambio sobrevenido en el ambiente internacional con las revoluciones europeas.

Ya nos hemos referido, en páginas anteriores, a las características de esos movimientos, ligados a la revolución industrial y al advenimiento de la burguesía, de modo que no insistiremos. Nos interesa señalar solamente la correlación indudable que existió entre las revoluciones que desde 1848 conmueven a Europa y la ofensiva victoriosa contra la Confederación Argentina. Podría

afirmarse que ésta es un epifenómeno del mismo proceso mundial que tendía a actuar a la distancia contra los mismos principios que se afirmaban en los puntos de origen.

Los historiadores que no se levantan por sobre la simple causalidad material suelen descuidar ciertos factores imponderables, como la influencia sobre los espíritus de la vibración de los aires del tiempo, con sus consecuencias tonificantes o depresivas. Nada más contagioso que la fiebre revolucionaria, que se manifiesta en forma epidémica siempre y que obra sobre las colectividades a la manera de un virus filtrable, con estallidos inesperados de terapéutica insegura. La revolución del 48 en Francia se propagó como un vendaval por toda Europa y cruzó el océano en alas de las gacetas, provocando un cambio total en la atmósfera política. El virus debía prender en cada sujeto con gravedad proporcionada a la predisposición del organismo.

Si pudiera expresarse en una fórmula la sustancia de ese cambio no señalado por nuestros historiadores, diríamos que consistió en un *traspaso invisible de la legitimidad*. La del gobierno de Rosas —reiteradamente ungido por la voluntad nacional— había sido hasta entonces un dogma de fe en todo el territorio; y la aceptaban —aunque abominándola— sus propios adversarios desterrados. Los federales estaban seguros de defender la causa de la patria y la de la ley. El triunfo de las revoluciones del 48 aportó primero la sospecha y después la paulatina convicción de que los partidos opositores, por el solo hecho de serlo tenían razón contra los gobiernos establecidos y de que la *legitimidad residía en el cambio*, con las ineludibles consecuencias espirituales: recrudescimiento del ímpetu renovador y depresión de los conservadores. Por lo cual, de un día para otro, los unitarios de la emigración, despreciados y odiados hasta poco antes como traidores, empezaron a ser considerados por muchos federales como probables titulares de la verdad, patriotas de larga vista y constructores naturales del inmediato futuro, sobre todo por venir enarbolando como bandera el figurín constitucional de última moda. Urquiza creía de buena fe que eran los representantes auténticos de la civilización y el progreso.

Sin esa circunsancia —que hacía de Rosas un anacronismo por el solo hecho de ser un gobernante inspirado en principios tradicionales y otorgaba legitimidad a sus adversarios— no tendría explicación Caseros. Los vientos del tiempo arreciaban nuevamente contra la patria. Fue sin duda una desventura que ello ocurriera cuando estábamos a punto de decidir nuestro destino histórico en la guerra por la hegemonía continental y que el general Rosas sólo se hallara en condiciones de emprenderla cuan-

do su régimen se había desgastado en un cuarto de siglo de ruda fagina.

* * *

Rosas había aceptado el reto de la coalición mediante un mensaje a la Legislatura, en el que declaraba retirar su renuncia por el grave peligro que amenazaba a la patria. Pero inexplicablemente retardó el momento de obrar. En vez de ordenar una ofensiva rápida contra Entre Ríos, movilizó los ejércitos de Montevideo y Santos Lugares —como se lo aconsejaba Oribe—, se colocó a la defensiva y permitió que sus enemigos gozaran del tiempo necesario para terminar sus preparativos de invasión.

Se ha criticado corrientemente (Saldías) esta actitud del Restaurador, atribuyéndola a declinación de sus facultades. El, por su parte, nunca la explicó durante sus largos años de destierro, acaso por no remover recuerdos dolorosos; pero resulta más clara a la luz de lo que en el párrafo anterior se ha dicho.

El cambio de las circunstancias que había conmovido la fidelidad de muchos de sus allegados —aun de los próximos— no se le ocultaba, sin duda. Conocía el trabajo de zapa que realizaba Urquiza entre la oficialidad del ejército de Oribe y su éxito superior al previsto.

Sabía que los hilos de la conspiración llegaban hasta su propio campamento de Santos Lugares. Y en las reticencias (o la excesiva oficiosidad) de algunos de los doctores de la corte de Palermo, así como en las sospechosas ausencias de uno que otro de los unitarios tolerados, como Vélez Sársfield, habría visto incubarse la traición latente. Hay una carta muy significativa de don Vicente López, fechada el 15 de abril de 1851, en la que el ilustre autor del Himno, entre protestas de adhesión al Restaurador, le niega calurosamente (prueba de que había sido sospechado) su vinculación con Urquiza. . . quien lo nombraría pocos meses después gobernador de Buenos Aires. Parece indudable que Rosas desconfiaba de algunos sectores de su oficialidad y consideraba que el peligro de la defección crecía en la medida en que se alejaban físicamente de su persona. La concentración del ejército en Santos Lugares era sin duda una estrategia deficiente; pero era una política prudente. Su influjo personal poderoso sobre la tropa, bastaba para prevenir cualquier tentativa de amotinamiento o defección.

* * *

El general Urquiza inició el 8 de julio sus operaciones militares invadiendo la Banda Oriental, en cuyo territorio se había dado cita con sus aliados brasileños. La escuadra imperial apoyó el movimiento del llamado "ejército libertador" —fuerte de 8.000 hombres—, el cual se puso en marcha, al mando del general Garzón, contra las avanzadas del ejército de Oribe.

No relatamos pormenores de la campaña, que se tradujo en una paulatina retirada de estas tropas, diezmadas por la deserción, hasta el Cerrito. Allí quedaron encerradas entre el círculo de hierro que formaban los aliados por el norte y las fuerzas de la ciudad sitiada y la escuadra brasileña por el sur, viéndose obligadas a capitular. Urquiza declaró que "no había vencedores ni vencidos" y dio las bases de una conciliación de partidos para reorganizar los poderes del Estado Oriental, incorporando luego a sus fuerzas un contingente de siete mil veteranos del ejército confederado. Es de advertir que se negaron la mayor parte de los pocos argentinos que en él quedaban, muchos de los cuales lograron fugar y se incorporaron a las fuerzas de Rosas.

El fácil éxito de Urquiza en la Banda Oriental se explica si se tiene en cuenta que el ejército de Oribe no podía materialmente resistir a las fuerzas conjuntas brasileñas y entrerrianas, que lo triplicaban en número. Compuesto en su mayor parte de orientales, estaba además desmoralizado por la inacción del largo asedio y deseaba ardientemente la paz. El caudillo entrerriano se la prometía, al mismo tiempo que explotaba hábilmente, contra el dictador porteño, el sentimiento localista de los uruguayos, que se había manifestado en otras tentativas de conciliación, según hemos visto.

Mientras esto ocurría, el ejército brasileño, fuerte de 20.000 hombres, a las órdenes del marqués de Caxías, llegaba a las márgenes del Yí y su jefe se ponía el 14 de octubre en contacto con su aliado entrerriano. Una de sus divisiones —5.000 hombres— se plegaría al ejército "libertador" para la campaña contra Buenos Aires. Los 15.000 restantes se instalaron en la Colonia —frente mismo a nuestra costa— listos para intervenir. La escuadra imperial dominaba el estuario.

* * *

El 21 de noviembre se firmó en Montevideo el tratado de alianza entre el Imperio del Brasil, Entre Ríos (con Corrientes como agregada) y el Estado Oriental, para llevar la guerra contra la Confederación, bajo la máscara de una cruzada contra el dictador argentino.

Conviene recordar las cláusulas de este tratado, cuya mención suele omitirse por explicables escrúpulos.

Después de fundar su acuerdo en las declaraciones y los preparativos bélicos del gobernador de Buenos Aires, los firmantes declaraban solemnemente no llevar la guerra a la Confederación sino a su gobierno y convenían luego la forma de la colaboración. La iniciativa de la guerra se atribuía a los Estados de Entre Ríos y Corrientes, reservándose el Brasil y la Banda Oriental el papel de "meros auxiliares". Además del aporte militar, ya mencionado, el Brasil se comprometía a financiar la campaña, mediante la entrega de cien mil patacones mensuales, al seis por ciento de interés, durante el término de cuatro meses, más todo el material de guerra que le fuera solicitado y que se consideraría como empréstito adicional. Urquiza debía hacer reconocer esa deuda, en efectivo y armamentos, por el gobierno futuro de la Confederación; mientras tanto, ella quedaba a cargo de Entre Ríos y Corrientes, las cuales daban "desde ya" en hipoteca, como garantía de su pago, todas sus rentas y territorios de propiedad fiscal. Por el artículo VIII se establecía que el Ejército Imperial permanecería (sin fijar término) ocupando la Banda Oriental, para responder a cualquier requisición de Urquiza, pero se agregaba expresamente que podría trasladarse al teatro de la guerra por su propia decisión, aunque dicha requisición no se produjese: es decir, que se le dejaba la puerta abierta. Por el artículo IV se ratificaba el compromiso de conceder la libre navegación de los ríos y por el XX volvía a reconocerse la independencia del Paraguay. Se trataba, como se ve, de un convenio leonino, con todas las ventajas para el empresario. A cambio de la ayuda extranjera para su empresa interna, Urquiza renunciaba a derechos inherentes a nuestra soberanía y precipitaba la desintegración de la patria. Brasil ganaba el territorio paraguayo librado a su influjo, la ocupación *sine die* del Uruguay, el libre acceso por nuestras vías fluviales a su provincia de Matto Grosso y un derecho real de hipoteca como acreedor privilegiado sobre todos los recursos de dos provincias argentinas. Mucho más, por cierto, y con un riesgo mínimo, de lo que hubiese podido esperar de una guerra victoriosa.

Este tratado debía permanecer, por supuesto, secreto (art. XXI), para evitar la oleada de indignación que habría provocado su publicación anticipada, poniendo en peligro el éxito de los confabulados.

Urquiza inició en seguida sus operaciones. Después de concentrar sus fuerzas en Gualeguaychú, se movió hacia el Paraná y lo cruzó, sin encontrar la resistencia que esperaba por el lado de Santa Fe. El gobernador de esta provincia, general Echagüe, en efecto, al no recibir los refuerzos que había solicitado, resolvió

batirse en retirada para unirse al grueso del ejército de Rosas. Casi sin obstáculos, Urquiza pudo proseguir su marcha sobre Buenos Aires y llegar al Arroyo del Medio a mediados de enero. En San Lorenzo había desertado en masa, matando a su jefe, la división de Aquino, fuerte de 600 hombres, para pasarse al ejército de Rosas.

Salvo una escaramuza, en los campos de Alvarez, con un destacamento de las fuerzas del coronel Lagos, jefe del departamento del norte, el ejército aliado pudo proseguir sin inconvenientes su camino sobre la capital. Se había impuesto, en los consejos de guerra de Rosas, la táctica de concentrar todas las fuerzas en el campamento de Santos Lugares para resolver la contienda con una batalla decisiva.

Con todo ello, no se había presentado en el campamento de Urquiza ni un solo hombre de Buenos Aires, mientras que de aquél desertaban continuamente muchos para incorporarse al del Restaurador. Las "Memorias" del general César Díaz —jefe de la división oriental del ejército aliado— nos dan un precioso testimonio del estado de las poblaciones. Parece que el mismo Urquiza se impresionó por la frialdad con que lo recibieron en Pergamino y en Luján y manifestó dudas sobre la legitimidad y la oportunidad de la empresa a que se había lanzado, aunque tratando de cohonestarla con el pretexto de la "organización nacional". La popularidad de Rosas —afirma el autor— "era tan grande o tal vez mayor de lo que había sido diez años antes". Todavía en las vísperas de la batalla —el 1° de febrero— 400 hombres más abandonaron el ejército aliado para plegarse al de Santos Lugares.

* * *

Hay un problema de Caseros que sigue sin solución y es el referente a las relaciones de Rosas con el general Pacheco, que por su prestigio militar y su cargo en el comando de Santos Lugares, era el jefe indicado para organizar la batalla decisiva. No obstante ello, renunció en las vísperas, fundándose en el hecho de haber asumido Rosas personalmente la dirección de la campaña.

¿Desconfió Rosas de Pacheco? ¿Hubo motivos para tal desconfianza? Parece seguro que aquél desaprobó una maniobra de su subordinado, al abandonar la defensa del Puente de Márquez, en lugar de hacerse fuerte allí; y es posible que, en las circunstancias en que se encontraba, haya atribuido esa retirada a un súbito enfriamiento de la fe o a un debilitamiento de la voluntad. Se explica así su decisión de asumir personalmente el comando. Como también se explica la reacción de Pacheco, que fue la natu-

ral de un hombre de honor al sentirse sospechado: tanto más valiosa cuanto que arrostraba con ella el disgusto del Restaurador, en momentos en que nadie podía saber con precisión cuál sería el resultado final de la contienda. Su eliminación en esos momentos decisivos fue, con todo, una más en el cúmulo de circunstancias desgraciadas que decidieron la caída de Rosas y el fin de la Confederación.

¿Habría sido otro el resultado de la batalla, de haber comandado Pacheco las fuerzas argentinas? Sólo Dios lo sabe.

A fines de enero, las tropas aliadas se encontraban ya a la vista de Buenos Aires, defendida por su ejército veterano. Rosas convocó a una junta de guerra en la noche del 2 de febrero, a la que concurren el general Pinedo y los coroneles Chilavert, Díaz, Lagos, Costa, Sosa, Bustos, Hernández, Cortina y Maza. Se decidió dar la batalla al día siguiente.

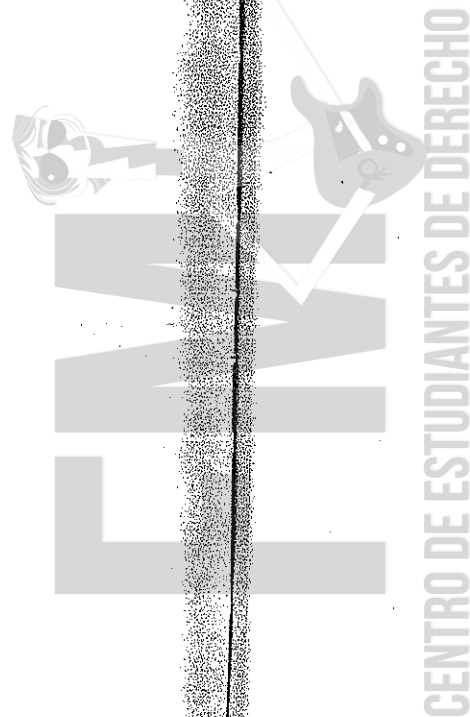
El ejército de Urquiza estaba constituido por los contingentes del litoral, al que se había sumado la flaca pero activa legión de los emigrados; por la división oriental, en la que pululaban los extranjeros, y por la brasileña, animada del odio atávico y ansiosa de lavar la humillación de Ituzaingó. En la función de bofetinero del ejército y vestido con un raro uniforme de coronel francés, venía el ya célebre polemista don Domingo Faustino Sarmiento. En la artillería, un joven coronel que hacía versos malos y se llamaba Bartolomé Mitre. Ambos futuros presidentes de la República habían llegado a Gualleguaychú en un barco de guerra brasileño y habían sido presentados y recomendados por el comandante brasileño al general Urquiza. Las fuerzas aliadas alcanzaban a 24.000 hombres.

El ejército de la Confederación, animado por una voluntad de defender una vez más el honor y la integridad de la patria contra la agresión extranjera y sus cómplices, alcanzaba a 22.000 hombres.

El choque se produjo el 3 en las inmediaciones del Palomar de Caseros. Se combatió encarnizadamente durante 2 horas y el ciego azar de la guerra nos fue esta vez adverso, dándole el triunfo al enemigo. Seguido de unos cuantos fieles, Rosas emprendió la retirada hacia la capital. No le quedaba más que acatar el fallo de las armas, por lo cual, en un alto del camino, redactó su renuncia para ser elevada a la Legislatura, que reiteradamente lo había elegido, en los siguientes términos: "Señores Representantes: Es llegado el caso de devolveros la investidura de gobernador de la Provincia y la suma del poder público con que os dignasteis honrarme. Creo haber llenado mi deber, como todos los señores Representantes, nuestros conciudadanos, los verdaderos federales y mis compañeros de armas. Si más no hemos hecho en el sostén

sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y de nuestro honor, es porque más no hemos podido. Permitidme, H.H.R.R., que al despedirme de vosotros os reitere el profundo agradecimiento con que os abrazo tiernamente. Herido en la mano derecha y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz esta nota y con una letra trabajosa. Dios guarde a V.H."

Acto seguido se dirigió a asilarse en casa del encargado de negocios de Gran Bretaña, Mr. Robert Gore, quien lo condujo esa misma noche, junto con su hija, a la fragata de guerra "Centaur", surta en la rada.



LIBRO V

DERROTA NACIONAL Y GOBIERNO
DE LOS EMIGRADOS

I. LAS CONSECUENCIAS DE LA DERROTA

Con la derrota de la Confederación en Caseros —tal vez la mayor calamidad de nuestra historia— se frustraba temporariamente el destino nacional y se abrían para el país treinta años más de guerras civiles.

Aun dando por ciertas las imperfecciones que a la dictadura del general Rosas le achacaban sus enemigos, no hay duda que el viejo e ilustre partido federal, del que era jefe, representaba la unidad nacional, la integridad territorial, la fidelidad a las esencias tradicionales de la patria, a la vez que un cabal concepto de la soberanía y el honor colectivos. En los tres lustros de su dominación habíamos pasado de la situación de colonias vacantes y anarquizadas —y expuestas por lo tanto al zarpazo de las potencias en tren de expansión— a la de un país respetado y digno. La reiterada agresión extranjera se había estrellado en nuestra heroica decisión de mantener la independencia recién conquistada. El partido federal era sobre todo eso: el partido de la independencia. Por lo cual aplaudía sus triunfos el Libertador expatriado y lo servían las más notables figuras sobrevivientes de la gesta de mayo, como Alvear, Guido, López y Planes, Brown, Sarrautea, Soler, Necochea y Manuel Moreno, hermano, biógrafo y heredero espiritual del secretario de la Primera Junta.

En esa lucha se había forjado la unidad de la Confederación que en 1851 era ya un hecho consumado. A ella había contribuido una política supremamente inteligente de defensa del espíritu y el trabajo autóctonos, que logró atenuar las viejas tensiones interprovinciales hasta hacerlas desaparecer. No sólo éramos un país unido, sino también laborioso y próspero, merced a la protección que las leyes vigentes otorgaban a la producción nacional y a la escrupulosidad con que se administraban las finanzas. La sabia política americana del Restaurador había afianzado, por lo demás, nuestro prestigio en todo el continente, donde se veía con simpatía y con esperanza la expansión de nuestra influencia.

Todo esto cambiaría radicalmente después de Caseros. A la zaga del ejército internacional triunfante, volverían a imponerse los rivadavianos, propiciadores de todas las entregas; los de la ilustración borbónica, el príncipe de Luca y la colusión con el

Imperio; los colonialistas que despreciaban a su patria por "bárbara" y "atrasada" y se proponían cambiarlo todo; los que proclamaban la superioridad del extranjero sobre el nativo; los ideólogos y "logistas", en suma, los que —en nombre de principios universales— obedecían en realidad a ocultas directivas de la masonería internacional para la infiltración de los intereses en ellas dominantes. Núcleo heterogéneo, por cierto, en el que junto a los viejos fantasmones rivadavianos como don Valentín Alsina y Carril (quien venía dispuesto, según afirmaba, a no pasar más pobreza y lo cumplió), se hallaban curas apóstatas, agiotistas impacientes y algunos espadones de la Independencia, no exentos de méritos y aun de glorias, pero que en el río revuelto de la anarquía se habían tirado su lance para manotear el poder; habían perdido y debieron recalar en la emigración, dispuestos a cualquier nueva aventura. El grupo más inquieto y eficiente lo constituían los "jóvenes" románticos, que ya mostraban calvicie y canas, a quienes veremos obrar luego. Agravaba la peligrosidad de este partido el hecho de estar constituido por emigrados activos: es decir, por gente que durante quince años había participado en toda clase de alianzas contra su propio país y cuya principal preocupación debía consistir en justificarse.

Ya hemos de ver las consecuencias intelectuales de esta justificación, que implicaría una lisa y llana tergiversación y que empezaría, naturalmente, por la glorificación de Caseros como un acontecimiento fausto para la patria, no obstante la pérdida de las Misiones orientales y la soberanía sobre nuestros ríos, el ocaso de nuestro prestigio en la cuenca del Plata, la ruptura de la unidad nacional y la vuelta a las condiciones del año 20, con el correlativo engrandecimiento de nuestro enemigo histórico. Si esto era un triunfo, ¿qué habría ocurrido con la derrota! Desde entonces, nuestra historia no sería más que una lucha tenaz contra las consecuencias de la entrega y un afán desesperado, que felizmente dura todavía, por recuperar nuestro espíritu y nuestros fines extraviados.

* * *

El más conocido de los sofismas con que se pretende justificar la coalición que triunfó en Caseros consiste en afirmar que la eliminación de la dictadura y la "organización" del país eran una condición ineludible del Progreso, atribuyéndoles a esos hechos nuestro indudable crecimiento ulterior, por el aporte inmigratorio y la construcción de ferrocarriles.

Hemos visto que la dictadura fue una imposición de las circunstancias, para frenar la anarquía y las tendencias disgregadoras. Quien conozca el abecé de la ciencia política y no se pague de palabras huecas, ha de saber que el rigor de los gobiernos es directamente proporcional a la intensidad de las tensiones que deben dominar. A esta ley no escapó el de Rosas, que se había atenuado en los últimos años hasta el punto de permitir la vuelta sin molestias de los emigrados, aun de los más comprometidos. Ni tampoco los de sus adversarios liberales, que supieron menudear, cuando les fue preciso, con estado de sitio o sin él, los fusilamientos, los destierros y las prisiones¹.

Lo que se sabe hoy a ciencia cierta es que ni la dictadura, ni la guerra civil, ni los bloqueos, impidieron que la Argentina progresara durante el gobierno del Restaurador, en la medida en que lo permitían las condiciones de la época y a un ritmo más rápido que el de las otras naciones del continente. La población subió de 600.000 habitantes hasta casi el millón, en cuyo aumento entró una gran parte de aporte inmigratorio, lento pero constante. La proporción de las áreas sembradas en todo el país y la producción de las diversas regiones habían crecido correlativamente. Las industrias manuales y aun mecánicas se multiplicaban y prosperaban. Se había iniciado la mestización de los ganados e introducido el alambrado de los campos y la máquina a vapor. La industria saladera poseía un flota propia para comerciar sus productos. Muchos extranjeros, principalmente ingleses, se habían establecido en el campo y poseían estancias, donde trabajaban al amparo de la ley y del orden. Venían a aportar su esfuerzo al país como huéspedes bien acogidos y no, como más tarde, en tren de amos y de gerentes.

Es verdad que ¡no tuvimos ferrocarriles! Pero el ferrocarril apenas se iniciaba en el mundo. El primero se había construido en Francia en 1837 y pasaron muchos años antes que los Estados Unidos construyeran el suyo. Era un invento que se hallaba todavía en la fase experimental. Nada indica que no lo hubiéramos tenido a su tiempo con Rosas, como lo tuvimos con sus sucesores; aunque es seguro que en condiciones más favorables para nuestra economía.

Tampoco se produjo bajo Rosas la gran afluencia de inmigrantes que caracterizó a la época constitucional. Pero ello no se debió a la supuesta xenofobia del régimen, ni al temor a la tiranía, sino a una circunstancia ajena al país. No había inmigración,

¹ Sin insistir sobre los procedimientos que aparecen relatados a lo largo del texto principal, merece recordarse, a propósito del "terror" rosista, lo que dice Julio Irazusta en el tomo I de su *Vida de Rosas*.

simplemente, porque no se emigraba. El fenómeno inmigratorio americano no obedeció tanto a la esperanza de América cuanto a la desesperación de Europa, y empezó a ocurrir en gran escala y a raíz de las crisis de desocupación y las bajas de los salarios provocados en el Viejo Mundo por la implantación del maquinismo, o sea alrededor de 1860. Nada indica que no hubiera ocurrido lo mismo bajo el Restaurador, cuando había garantías de orden y de trabajo cuya ausencia sentirían cruelmente más tarde los desesperados que se acogían a nuestro hogar.

* * *

La misma noche de Caseros, las avanzadas del "Ejército Libertador", con las que venían confundidos soldados dispersos del ejército derrotado, empezaron a saquear las pulperías de los suburbios, mientras Urquiza establecía su cuartel general en la residencia de Rosas en Palermo. La guarnición urbana al mando del general Mansilla se desbandó en parte al tener noticias de la derrota; por lo que éste se vio impotente para mantener el orden y pidió con urgencia a Urquiza el envío de fuerzas regulares. Permitió asimismo, a solicitud del cuerpo diplomático, el desembarco de marinería de los barcos surtos en la rada (franceses, ingleses y sardos) para la defensa de las respectivas legaciones, con lo cual la ciudad recibía la primera humillación del nuevo régimen.

La comisión formada por los encargados de negocios de Inglaterra, Estados Unidos y Portugal no pudo ponerse en contacto con el general vencedor hasta el día siguiente, cuando ya se había destacado otra encabezada por don Vicente López, presidente del Superior Tribunal. Urquiza decidió el envío de tres batallones de infantería, con la consigna de reprimir duramente a los saqueadores, a quienes se habían unido los forajidos de las cárceles, evadidos en la confusión. Los sorprendidos in fraganti debían ser fusilados sobre el terreno. Según Zinny, llegaron a 600 los ejecutados, "dentro de los cuales no dejaron de caer algunos inocentes".

López regresaría de esa entrevista investido por el general Urquiza con el cargo de Gobernador interino de la Provincia. De acuerdo con la política de fusión de partidos proclamada por el jefe vencedor, designó ministro de gobierno a don Valentín Alsina, cabeza visible del grupo unitario.

Mientras tanto, Urquiza no había perdido el tiempo. En Palermo de San Benito, no paraban las descargas de los fusilamientos, con un lujo de ferocidad que parecía calculado para amenazar a la ciudad reacia y desmentir las declaraciones de olvido

de lo pasado y fraternal colaboración. Esa misma mañana había caído el coronel Chilavert, héroe de la patria y jefe en Caseros de la artillería confederada, condenado sin forma de juicio, no obstante su calidad de prisionero de guerra. La división de Aquino había sido también condenada en masa. Cuando se ordenó la suspensión de la pena, se habían sacrificado ya casi doscientos hombres. No se recuerda que el "tirano" derrocado se haya permitido nunca semejante fiesta de sangre.

La entrada triunfal de las tropas aliadas a la ciudad había sido fijada para el 19. Como lloviera torrencialmente ese día, se postergó para el siguiente, en que se cumplían justamente 25 años de la victoria de Ituzaingó. Entraron por el "bajo" hasta el Retiro, y de allí por Florida hasta el Fuerte. Junto a Urquiza cabalgaba el general Guido, que le hacía los honores de su solar natal. Las tropas brasileñas (que fueron silbadas en algunos lugares del trayecto) cerraban la marcha, y sus jefes, recordando la fecha, no habrán dejado de experimentar un sentimiento de desquite, al humillar así al enemigo de siempre.

El pueblo se había volcado a lo largo del recorrido de las tropas, movido por sentimientos encontrados, pero sobre todo por una viva curiosidad, ya que era un espectáculo que se veía por vez primera y que no volvería a repetirse. Hubo aclamaciones, sin duda, especialmente nutridas en los lugares donde se había concentrado la parcialidad unitaria y extranjera y estimuladas por las que proferían en honor de sus jefes las tropas mismas; pero no, por cierto, el entusiasmo desbordante de que habla Sarmiento (cronista parcial, según propia confesión) en su *Campaña del Ejército Grande* y que todos los historiadores repiten, aunque se halle desmentido por el cariz general de los sucesos. Urquiza —agrega Sarmiento— venía "empacado". Muchas ventanillas cerradas y sin colgaduras, muchas caras hoscas le habrán hecho sentir durante el desfile que, por más que pisara en son de triunfo las calles de Buenos Aires, no llegaría nunca a conquistar su corazón.

* * *

Los sentimientos del pueblo de Buenos Aires eran ciertamente confusos y contradictorios. La gran mayoría se había mantenido —según testimonio de los propios adversarios— fiel al Restaurador. Después de los primeros momentos de estupor y consternación subsiguientes a la caída, debió resignarse al hecho consumado, y acaso (la personalidad humana es compleja) no sin un cierto sentimiento de alivio, como cuando los deja

una persona querida y gravosa o muere un deudo cuya agonía duraba demasiado. Ya dijimos que la dictadura se había desgastado en el largo trajín y que la gente se aburría. Guardando el breve luto convencional, la esperanza hubo de renacer por ley de la vida y por la necesidad de hallar ubicación en los tiempos nuevos. Había que ver lo que se traía entre manos el "traidor" Urquiza y los "salvajes" repatriados, que acaso no fuesen tan malos como se decía.

Las actitudes del general Urquiza y su declaración de que "no había vencedores ni vencidos" tendían a restablecer la confianza y pronto la casa de Palermo fue el centro de reunión de los hombres de todos los partidos que se prestaban a colaborar en la reorganización constitucional.

Pero la política "fusionista" no podía marchar, por la heterogeneidad de los componentes. Mientras Urquiza la concebía a la manera de una Confederación en que él suplantaría a Rosas, con el aditamento de una cartilla constitucional (de la que, en su fuero íntimo, se creía capaz de prescindir), reservándose a sus impopulares aliados unitarios —que se llamaban a la sazón liberales— el papel subordinado de minoría activa y letrada, destinada a ser absorbida y utilizada por el partido federal reconstituido bajo su jefatura; éstos, por su parte, la aceptaban como una solución de emergencia mientras no pudiesen librarse de Urquiza, personaje para ellos anacrónico, a quien sólo los ataba la dura necesidad. Empeñado en su propósito, el caudillo entrerriano halagaba a las eminencias del rosismo que se le habían plegado, como López y Guido, y se servía para sus manejos del grupo de amanuenses que constituían su círculo áulico: oscuros letrados de provincia, a quienes erigiría muy pronto en constituyentes de la República. Los liberales, imbuidos de la soberbia rivadaviana, sólo se conformaban con la totalidad del poder, para reconstruir al país de acuerdo con sus principios.

Más que de ideas, la incompatibilidad era de temperamento y actitud. Podía haber acuerdo en la finalidad de organizar la República y aun en los medios para alcanzarla y la letra misma de la ley. Pero Urquiza no toleraba la suficiencia del grupo unitario, ni su excesiva afición a gringos y "carcamanes", que suscitaba en él los viejos reflejos xenófobos. Los desplantes que profería sobre los "anarquistas" confirmaban cada vez más, en el espíritu de éstos, la convicción de que tenían que habérselas con un caudillo bárbaro, con quien no había posibilidad de acción común. Sarmiento fue el primero que pegó un portazo y se volvió a Chile.

Los primeros rozamientos se produjeron a raíz del cintillo federal. En consideración a los sentimientos públicos, Urquiza no

había querido innovar en esta materia y mantenía en su ejército y en la administración el uso de la divisa, que seguía siendo obligatorio en Buenos Aires. Por influencia de su ministro Alsina, López dio un decreto, el 15 de febrero, declarando ese uso facultativo. Urquiza respondió una semana más tarde con una proclama "Al público de Buenos Aires", que era una violenta diatriba contra los unitarios, a quienes acusaba de todos los males anteriores a Caseros y de quienes afirmaba que pretendían apoderarse de una revolución que no les pertenecía, haciéndose nuevamente "acreedores al nombre odioso de salvajes".

Los liberales no acusaron el golpe. Aunque sin ruptura aparente con el dueño de la fuerza, la lucha sorda siguió, empero, promovida por el ministro Alsina desde la Casa de Gobierno provincial y por sus amigos desde los conciliábulos políticos. Fueron removidos casi todos los funcionarios de la administración pública, no sólo en el orden civil, sino también en el eclesiástico y militar, reemplazándose por adictos al grupo.

En los primeros momentos del gobierno provisional, López había designado ministro de Relaciones Exteriores, por indicación de Urquiza, al doctor Luis J. de la Peña, clérigo apóstata que había recalado en la enseñanza. El cariz que presentaban los asuntos en Buenos Aires y ciertas dificultades diplomáticas que asomaban en la Banda Oriental, movieron a Urquiza a cambiar de plan y asumir personalmente el encargo de las Relaciones Exteriores, que se hizo conferir el 6 de abril por los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Inmediatamente se expidió un decreto por el cual aquel ministerio pasaba a depender del gobernador y capitán general de Entre Ríos. Dos días después, dicha secretaría de Estado —fundándose en el antecedente del pacto federal de enero de 1831— mandó una circular a los gobernadores de las provincias, citándolos a una reunión que debía efectuarse antes del 20 de mayo en San Nicolás de los Arroyos.

La caída de Rosas, si bien había conmovido profundamente al país, no había producido trastornos del orden establecido en el interior. Lejos de alzarse contra sus "tiranos", los pueblos se mantuvieron en paz bajo las autoridades constituidas y aun contribuyeron a sofocar los conatos de perturbación que se produjeron, invocando la solidaridad con la acción de Urquiza. Así había ocurrido en Tucumán con la invasión que encabezó, desde Chile, el coronel don Juan Crisóstomo Álvarez, quien fue derrotado en el Manantial por el gobernador de esa provincia, general Celedo-

nio Gutiérrez, y fusilado el 17 de febrero. Los citados a deliberar en San Nicolás para decidir el destino ulterior de la República eran, pues, los mismos gobernadores que habían actuado con Rosas, como agentes de su poder nacional, quienes hubieron de acatar, como era forzoso, el hecho consumado y efectuaron, en mayor o menor grado, según sus respectivas modalidades, la necesaria conversión al nuevo orden de cosas.

Pero si la minoría unitaria, por insignificante y desprestigiada, no podía perturbar en el interior, no ocurría lo mismo en Buenos Aires, dadas las peculiares condiciones de su política. Sabemos que el unitarismo era, por sobre todo, un fenómeno "porteño", puesto que se fundaba en los títulos que se arrogaban los hombres de la capital del Virreinato para gobernar todo el territorio: se hallaba fuertemente impregnado de orgullo local. La presencia de Urquiza con su ejército en Palermo, dando órdenes que debían acatarse, hería vivamente ese orgullo; evocaba las humillaciones del año 20 y suscitaba análogas reacciones. No les fue difícil a los hombres del grupo unitario trabajar sobre este sentimiento de resistencia. La abstención de los federales conspicuos, que no habían querido acercarse al campamento del vencedor, les allanaba el camino.

El gobierno provisional convocó a elecciones generales de la provincia para el 19 de abril. La lista "popular", formada en su mayor parte de unitarios, triunfó por gran mayoría. Los "rosistas" de Buenos Aires se volcaron en masa hacia la oposición contra el vencedor de Caseros.

Los liberales habían obtenido mayoría en la Legislatura y su candidato para la gobernación era, naturalmente, Alsina. Pero Urquiza se apresuró a impedir su elección. El 22 de abril invitó a un grupo de personajes espectables a visitar el campo de batalla, y en la comida que se siguió brindó por don Vicente López como futuro gobernador titular, invocando la simpatía del ejército por su persona. La Legislatura no se atrevió a desdeñar esa insinuación, que era una orden. Se constituyó el 1° de mayo, y el 13 ungió al candidato impuesto por el dueño de la fuerza.

Alsina se negó a seguir desempeñando el ministerio, y fue designado en su reemplazo el doctor Juan María Gutiérrez, que acababa de llegar de Chile. En lugar del coronel Escalada, que renunció también a la cartera de guerra, se designó al coronel Cáceres. Los restantes ministros eran el doctor Gorostiaga, de Hacienda, y el doctor don Vicente Fidel López —hijo del gobernador— de Instrucción Pública.

* * *

Cuando el 20 de mayo se embarcó el general Urquiza para San Nicolás de los Arroyos, en compañía del gobernador y el asesor del gobierno, sus relaciones con la mayoría de la Legislatura bonaerense estaban más tensas que nunca. Esta se había resignado a aceptar la imposición de López —¡al fin y al cabo, era un prócer de la patria y un viejo porteño!—, pero acababa de negarse a votar una propuesta ratificando la delegación de las relaciones exteriores, que le había conferido a Urquiza el gobierno provisional.

No era ajeno a esta atmósfera de oposición al caudillo entrerriano lo que había trascendido sobre el proyecto que alentaba de propiciar la capitalización de Buenos Aires, dividiendo su territorio; tal como lo había hecho Rivadavia, con las consecuencias que conocemos.

El acuerdo de San Nicolás se firmó el 31 de mayo. En él se establecía que había llegado el caso, previsto por el pacto federal de 1831, de convocar el Congreso Constituyente de la República así como la representación que tendrían las provincias y la forma en que contribuirían a los gastos comunes. Se lo designaba a Urquiza Director Provisorio de la Confederación Argentina y se le autorizaba para percibir y distribuir las rentas nacionales, para "reglamentar la navegación de los ríos" y para mandar en jefe todas las fuerzas militares de las provincias, que serían consideradas desde ese momento como fuerzas del ejército nacional.

La publicación de las cláusulas del acuerdo provocó gran revuelo en Buenos Aires, por la extensión de las facultades otorgadas al gobernador entrerriano. El 6 de junio se presentó en la Legislatura una minuta de pedido de informes al gobierno, en la cual se negaba toda validez a la firma de aquel instrumento por el gobernador de Buenos Aires, mientras no obtuviese la aprobación legislativa. El acuerdo fue elevado al cuerpo para su consideración. Después de un debate en que los argumentos de efecto prevalecieron sobre los de razón y en el que intervinieron principalmente el doctor Vélez Sársfield y el coronel Mitre por la oposición y el doctor López (hijo) por el gobierno, se rechazó por gran mayoría. La sesión transcurrió entre tumultos que se continuaron en la calle.

El 23 renunció el gobernador, fundando su dimisión en las vejaciones de que había sido víctima a raíz del episodio. La Legislatura aceptó su renuncia, nombrando provisoriamente en su reemplazo a su presidente, general Manuel G. Pinto.

Urquiza se decidió al fin a intervenir. "Considero este estado de cosas completamente anárquico —afirmaba la nota que dirigió a Pinto—, y en esta situación me hallo plenamente autorizado para llenar la primera de mis obligaciones, que es salvar a la patria

112

de la demagogia después de haberla libertado de la tiranía". Asumió en consecuencia el mando de la provincia, delegándolo en López, declaró disuelta la Legislatura y desterró a quienes habían encabezado la oposición al acuerdo. López convocó inmediatamente a elecciones para la designación de constituyentes y resignó el mando, que reasumió personalmente Urquiza, en ejercicio de las facultades que le habían sido conferidas como Director Provisorio.

Con la eliminación de los liberales, no le quedaba otro remedio que recurrir a los hombres que habían acompañado a Rosas durante su gobierno, para lograr de reflejo un cariz de legitimidad. Formó un Consejo de Estado en el que figuraban Carril, Pico, Llavallol y Escalada, pero cuya mayoría estaba constituida por personajes del régimen caído que no habían renegado de su lealtad y accedieron a apoyarlo, sin duda, por consideraciones de civismo y amor al orden. El precio de esta colaboración fue la derogación de la inicua confiscación de los bienes de Rosas —que fueron devueltos a su apoderado—; y el nombramiento del general Jerónimo Costa como jefe de la guardia nacional de infantería y del sargento mayor Antonino Reyes como oficial mayor de guerra y marina. Integraban dicho Consejo Anchorena, Alcorta, Moreno, Lahite, Arana, García (Baldomero), Guido y Bedoya. Su colaboración, carente de entusiasmo, se limitaba al aporte de sus nombres y a dictaminar sobre los asuntos que se sometían a su consideración.

Mientras tanto, se realizaban en todo el país las elecciones para el Congreso Constituyente que debía reunirse en Santa Fe.

* * *

Los brasileños no perdían el tiempo y se cobraban el precio del triunfo.

Las cosas no habían marchado al principio muy bien para ellos en la Banda Oriental. Contra sus previsiones y esperanzas, la primera elección que se efectuó allí, después de libertar al territorio de la "tiranía" de Oribe y bajo el amparo de las fuerzas de ocupación del Imperio, dio el triunfo a los "blancos" oribistas. Asume la presidencia don Juan Francisco Giró, hombre del Cerrito, que tiene como ministro al doctor Florentino Castellanos, de vieja cepa del norte argentino. Se niegan, como era natural, a reconocer la validez de los tratados firmados por don Andrés Bamba, en nombre del gobierno de Montevideo, carente de representación nacional, y bajo la extorsión del Imperio. Es de advertir que el de límites cedía al Brasil las Misiones orientales,

que por no haber formado parte nunca del Estado Oriental, según los límites del tratado de 1828, eran de exclusiva pertenencia argentina.

En la resistencia uruguaya se advierte la esperanza de la intervención favorable de nuestra parte. ¿Qué hace Urquiza? A la primera intimidación del Emperador, designa como plenipotenciario al general Guido, pero como Guido no logra el beneplácito de la cancillería imperial, lo reemplaza por el ministro de la Peña. Este se limitará a forzar la aceptación de los tratados por el gobierno oriental, a cambio de vagas promesas (que no se cumplirán) de modificación ulterior y sin la menor reserva sobre nuestros propios derechos. De esa iniquidad sale "garante" el gobierno argentino. Con la pistola al pecho, el oriental debe acceder. Perdemos con ello los territorios situados entre los límites del tratado de San Ildefonso y el río Uruguay y los gana nuestro enemigo histórico. El tratado se firma el 19 de mayo de 1852.

El 20 de agosto se reconocería la independencia del Paraguay. El Imperio no quiere que los compromisos se enfríen y no espera, para exigir su cumplimiento, la constitución de los poderes definitivos de la República.

CENTRO DE ESTUDIOS

II. SECESIÓN Y CONSTITUCIÓN

El 8 de setiembre se embarcó Urquiza rumbo a Santa Fe, con el objeto de inaugurar el Congreso Constituyente, después de delegar el mando en su ministro de Guerra, general José Miguel Galán y de dictar un decreto de amplia amnistía política, que abría nuevamente las puertas de Buenos Aires a los unitarios deserrados.

El 11 estalló en Buenos Aires la revolución, encabezada por el general Pirán en la parte militar y por don Valentín Alsina en la parte civil, con el aporte de las tropas porteñas y las correntinas al mando de Madariaga. El general Galán no opuso resistencia y se retiró con el contingente entrerriano en dirección a San Nicolás.

La bandera del movimiento era la devolución a Buenos Aires de sus autoridades constitucionales. Se restauró la Legislatura disuelta por Urquiza, cuyo presidente, el general Pinto, asumió nuevamente la gobernación, nombrando ministros a Alsina, a Francisco de las Carreras y al general José María Flores, y se puso a la ciudad en estado de defensa para la reacción que se esperaba.

El primer impulso de Urquiza —y así se lo comunicó a Galán— fue sofocar la rebelión con las armas; retrocedió hasta San Nicolás para ponerse al frente de sus fuerzas. Pero aquí hubo de enterarse de que muchos jefes con quienes contaba se habían plegado al gobierno provincial. Viendo en ello, con seguro instinto, que el localismo porteño era más fuerte que el apego a la divisa, no quiso repetir la experiencia de don Estanislao, arriesgando armar en su contra el brazo de posibles aliados futuros, y decidió retroceder y esperar la maduración de la reacción interna, que no tardaría en producirse. Si Buenos Aires lo rechazaba, se haría fuerte en el resto del país llevando adelante el plan constitucional, con lo cual mantendría la bandera simpática del principismo. Comunicó, pues, al gobierno de Buenos Aires que, “para evitar la efusión de sangre y la anarquía”, ordenaba el retiro de sus tropas, dejando a la provincia en pleno goce de sus derechos.

Desde el principio mostró la revolución de setiembre su verdadero cariz secesionista y antinacional. Sus promotores mantenían vivo el viejo ideal rivadaviano de la provincia autónoma y

progresista, en goce total de los recursos de su aduana e indiferente a la suerte del resto del territorio y sólo concebían la organización nacional como en 1826, bajo la hegemonía de Buenos Aires. No satisfechos, por consiguiente, con la recuperación de la autonomía, se propusieron acabar con Urquiza y dictar su ley al país. La Legislatura declaró que no reconocería acto alguno producido por la asamblea nacional recién instalada y ordenó el retiro de los diputados de la provincia. Por otro acto quitó a Urquiza el encargo de las relaciones exteriores, reasumiéndolo en la autoridad provincial. Y para que resaltara más la analogía con lo ocurrido cuando el motín de Lavalle, no faltó ni el envío del general Paz en misión al interior, con el fin de provocar el vuelco de los gobiernos a favor de un nuevo congreso que se reuniría en Buenos Aires ni la repartija del contenido de la arcas públicas en concepto de premios (que naturalmente fue un fracaso) a los “héroes” del pronunciamiento.

No hay que olvidar la importancia que en la actitud de Buenos Aires tenía el factor económico. Separado de la Confederación, ya no manejaría Urquiza, sino el gobierno provincial las rentas de su aduana, que ascendían a cuatro millones de pesos, de las que gozaría con exclusividad. Si se añadía el Banco de emisión y la disposición de las tierras públicas, fácil era prever para la provincia una situación de prosperidad, que contrastaría con la miseria del resto del territorio, obligado a hacer frente, sin la disposición de esas rentas, a la creación de los poderes públicos y la administración del Estado nacional.

* * *

El 10 de noviembre se instaló el Congreso Constituyente. Urquiza no pudo concurrir porque las circunstancias se lo impidieron. Los generales Hornos y Madariaga, con fuerzas correntinas y entrerrianas, embarcadas con el pretexto de devolverlas a sus provincias, había efectuado desembarcos sorpresivos en Concepción del Uruguay y en otro punto de la costa entrerriana, siendo rechazados después de varios combates. Esta frustrada intentona mostraba los propósitos del nuevo gobierno de Buenos Aires, a cargo de don Valentín Alsina, quien había formado su ministerio con el coronel Mitre, don Juan Bautista Peña y el general José María Flores: los moderados habían cedido el paso a los “ultra”. Se planteaba con ello una situación de guerra civil, que absorbía la atención del Director Provisorio, quien debió delegar en su ministro de Relaciones Exteriores su representación para inaugurar la asamblea.

La mitología histórica al uso se ha empeñado en pintar este Congreso de Santa Fe que nos dio la Constitución de 1853 como un cuerpo altamente representativo, compuesto de las lumbreras de la patria: una especie de senado romano, congregación de togas ilustres. Esta leyenda (a cuya difusión contribuyeron principalmente los deudos de los constituyentes) es falsa. Pocas veces ha visto el país una asamblea tan poco representativa y tan mediocre en su composición. Con excepción de don Juan María Gutiérrez, don Salvador María del Carril y el general Ferré—fino literato el primero y políticos expertos los otros—y de alguno que tal vez se nos escape, se trataba de gente nueva y oscura (y a veces no sólo en el sentido metafórico), paniaguados de Urquiza los más, que habían llegado a la dignidad constituyente como resultado de una desenfundada digitación. Tal el caso de los Elías, Leiva, Seguí, Huergo, Llerena, etc., muchos de los cuales ni siquiera representaban a su provincia de origen, sino que habían sido dictados en el último momento desde el campamento de Palermo, al gobernador ansioso de quedar bien con el Director Provisorio. No faltaba el clérigo apóstata como Seguí, que había ahorcado los hábitos—según dice Pelliza—obedeciendo a “su espíritu inquieto y su carne indómita”, y que confesaba a gritos—según dice Sarmiento—que quería “plata, mucha plata”. Pero sí faltaban los Anchorena, Arana, Guido, Moreno, Lahite, López, Escalada, Oro, Pinedo, Torres y tantos más, que constituían la categoría consular de la República, y aun los nuevos, como Sarmiento, Vélez Sársfield, Alberdi y Mitre, cuya presencia habría otorgado al cuerpo más peso y respetabilidad.

Los primeros debates del Congreso apenas instalado (después de los homenajes y besamanos al “héroe” de Caseros, que excedieron en obsecuencia a los peores momentos de la vilipendiada Legislatura rosista) fueron absorbidos por la candente actualidad política de Buenos Aires.

Lo que se preveía, estaba ocurriendo. Apenas desaparecida la unión ficticia contra el “invasor” entrerriano, que permitió el fácil triunfo de la revolución del 11 de setiembre, habíanse reconstituido los viejos partidos locales y estallado la rebelión federal. Los liberales triunfantes, en su orfandad de opinión, veíanse forzados a recurrir, sobre todo para la organización de las milicias de campaña, a los hombres de la dictadura rosista. El ministro de Guerra, general Flores, había peleado por Rosas en Caseros. El coronel Hilario Lagos, había sido nombrado comandante del departamento del centro, y del norte, el coronel Laprida.

Era natural que estos hombres, educados en el orden estricto y la política nacional de la Confederación, vieran con disgusto

las consecuencias anárquicas de la demagogia extranjerizante instalada en la ciudad, bajo la jefatura del más conspicuo de los “salvajes unitarios”; y que esperaran la ocasión para sublevarse.

Ello ocurrió a principios de diciembre. El coronel Lagos atrajo con un pretexto al ministro de Guerra a su campamento de Luján y le notificó que había sublevado la campaña en su nombre y lo designaba jefe del movimiento. Flores no se atrevió a oponerse. El motivo proclamado de la revolución era la presencia de Alsina en el gobierno. Como las milicias de la campaña, que habían acudido con entusiasmo al llamamiento, se pusieron en marcha hacia la ciudad, el gobernador presentó su renuncia, que le fue aceptada, reemplazándolo el general Pinto.

Flores abandonó el campamento y se expatrió al Uruguay.

La sublevación de Lagos recibió en seguida el auspicio de la mayor parte de los antiguos federales, que vieron en ella el medio de que la provincia de Buenos Aires—eliminado el núcleo perturbador que había tomado el gobierno a favor de la oposición a Urquiza y la discordia interprovincial—pudiera concurrir con la plenitud de su autonomía y con representantes auténticos de su voluntad, a la organización definitiva de la República.

Los rosistas de la ciudad—sobre todo los jefes y oficiales del viejo ejército de la Confederación y los funcionarios cesantes en sus empleos—se plegaron al campamento de Lagos, que con ser un “porteño”, y haberse opuesto a la sujeción de su provincia por el caudillo entrerriano, proclamaba a la sazón su aceptación del Acuerdo de San Nicolás y la necesidad de que aquélla se reintegrara a la unidad nacional y enviara sus diputados al Congreso Constituyente. En este sentido se ofició al Director Provisorio y a los gobernadores de las provincias, quienes en su mayor parte acogieron con viva simpatía el pronunciamiento.

Fracasadas las tentativas de conciliación iniciadas por el gobernador provisional y desobedeciendo el decreto que promulgó licenciando las milicias, la ciudad se puso en estado de defensa. Pinto nombró ministros al doctor don Lorenzo Torres, a don Francisco de las Carreras y al general don Angel Pacheco. El partido federal, el mismo partido “porteño” se dividía, en la confusión del momento, según la mayor o menor graduación de tinte localista. En Torres y Pacheco, como en muchos otros, el reflejo defensivo local prevalecería sobre la definición doctrinaria sospechosa de colusión con el “tirano traidor” de Entre Ríos. Este gobierno desterró al general Guido, por supuesta vinculación con

Lagos. Es curioso observar que todo ocurría entre federales: lo que revela un estado de casi unanimidad de origen y tendencias.

En pocos días fue estrechándose el cerco de la ciudad, la cual quedó sitiada y sin comunicación con la campaña, como en los tiempos de Lavalle. La Legislatura autorizó al gobierno provisional a hacer uso del tesoro público para el enganche de tropas y demás gastos de guerra, sin otra obligación que rendir cuentas. Por ley del 31 de diciembre se mandaron sellar veinte millones de pesos.

Las tropas sitiadoras, por su parte, debieron proveerse de medios de subsistencia con el empleo del sistema legítimo —y viejo como la guerra— de la contribución forzosa sobre las haciendas y bienes de sus enemigos políticos: los “salvajes unitarios” de la campaña.

Mientras la ciudad convocaba su guardia nacional, construía parapetos, cavaba zanjás y sostenía las primeras escaramuzas en los suburbios contra las embestidas de los sitiadores, el Congreso Constituyente —al que Urquiza había sometido la nota de Lagos— autorizaba a aquél para que, “empleando todas las medidas que su prudencia y acendrado patriotismo” le sugiriese, hiciera cesar “la guerra civil en la provincia de Buenos Aires”.

Urquiza nombró una comisión formada por el doctor Facundo Zuviría, presidente del congreso, su ministro de la Peña y el general Ferré. El gobierno de Buenos Aires designó para tratar con ellos a don Nicolás de Anchorena, don Lorenzo Torres, don Dalmacio Vélez Sársfield y al general Paz.

* * *

Cuando los emisarios se reunieron a deliberar, la situación de la ciudad sitiada, en el orden militar, no era auspiciosa. Las fuerzas que el coronel Rosas y Belgrano mandaba en la campaña del sur habían sido derrotadas en San Gregorio, el 22 de enero. Y si bien se habían rechazado los fuertes ataques que, a principios de febrero efectuaron las milicias sitiadoras, las perspectivas de modificar favorablemente las circunstancias en que se hallaban los sitiados disminuían en la medida en que aumentaban para sus adversarios, a quienes Urquiza empezaba a auxiliar con remesas de tropas y dinero. Venciendo además la débil resistencia de la flotilla de Buenos Aires, barcos nacionales se habían apoderado de Martín García y aparecían frente a la ciudad, para hacer efectivo el bloqueo de su puerto.

Las deliberaciones comenzaron a principios de marzo, previa concertación de un armisticio. El 9 se llegó a un acuerdo y se

firmó un convenio por el cual Buenos Aires se comprometía a concurrir al Congreso Constituyente, pero con un número de diputados proporcional a su población; y se establecía que una vez sancionada la Constitución, se sometería al examen y aprobación de las provincias.

Urquiza rechazó el convenio, provocando con ello la renuncia de su ministro negociador, de la Peña. Fundábase en que carecía de facultades para modificar lo resuelto en el Acuerdo de San Nicolás. El argumento era débil, estando reunido el Congreso Constituyente que sí tenía esas facultades y al que no se consultó para el rechazo. La verdadera razón era que no se resolvía con ese convenio el pleito interno de Buenos Aires, ni se satisfacían las aspiraciones de las milicias federales de la campaña, aparentemente dueñas de la fuerza.

En la nota oficial en que comunicó su resolución, Urquiza solicitaba la prórroga del armisticio, la que le fue concedida siempre que él mantuviera el *statu quo*. El 27 se instaló en el campamento de Lagos, aunque éste retuvo el mando de las fuerzas desde donde se siguieron nuevas negociaciones. Aquí se manifestaron francamente las exigencias políticas: cambio de ministerio, renovación de la Legislatura. Como no hubiere acuerdo, se reanudaron las hostilidades y el bloqueo, no obstante las protestas del comercio extranjero, que empezó a conmover la ciudad pidiendo su desconocimiento a los agentes diplomáticos y consulares y al jefe de la estación naval británica en el Río de la Plata.

* * *

Mientras tanto, el Congreso de Santa Fe había proseguido activamente sus trabajos para la confección de la ley fundamental del país. Ya nos referimos a las características de esa asamblea, convocada con el propósito de protocolizar en un instrumento permanente los principios triunfantes en Caseros. Debía constituir una república federal; y era natural que acudiera al único ejemplo de la adopción de ese régimen sancionado por el éxito, o sea el de Estados Unidos. No es el caso de discriminar aquí la mayor o menor influencia que tuvo, sobre la opinión de los convencionales, el proyecto de Juan Bautista Alberdi, publicado poco tiempo antes, y que estuvo en manos de todos, aunque se cita poco en los debates. Que fue grande, no cabe duda, por dos circunstancias muy poderosas: la presencia de Gutiérrez —íntimo amigo del autor del proyecto— en la comisión redactora y la escasa información de la mayoría de los diputados, que lo acogieron como un ancla de salvación. Según testimonios del mismo

Gutiérrez al historiador Pelliza, el único ejemplar de "El Federalista" de que disponía el Congreso y que había pertenecido a Rivera Indarte, desapareció al comenzar las sesiones, sin que hubiera forma de recuperarlo.

Después de pálidos debates (cuya única nota dramática la dio la propuesta —que fue rechazada— de don Facundo Zuviría al volver de su misión conciliadora en Buenos Aires, en el sentido de suspender las deliberaciones hasta que se resolviera el pleito pendiente) la Constitución "adoptada" —cuya originalidad más saliente consistía en la renuncia formal a la soberanía sobre nuestros ríos interiores— recibió sanción el 1° de mayo. En ella se designaba la ciudad de Buenos Aires como capital de la Nación. Por otras leyes se establecía el régimen municipal del territorio federalizado y la forma de administración de las aduanas nacionales.

El Congreso destacó una comisión formada por don Salvador María del Carril, don José B. Gorostiaga y don Martín Zapata, para comunicarle la sanción a Urquiza y obtener "la libre aprobación de la provincia de Buenos Aires". El 24 llegaron los delegados a San José de Flores. Al día siguiente, en homenaje a la fiesta patria, la Constitución fue promulgada por el Director Provisorio, con toda solemnidad. Ninguna gestión hizo la Comisión para ser recibida por el gobierno de la provincia; en cambio, comunicó oficialmente la Constitución y leyes anexas a Lagos, como Comandante en Jefe del Ejército Federal. Confiaba, sin duda, en el triunfo de éste y la rendición de la plaza; como había ocurrido en 1829, con Rosas.

* * *

Pero las circunstancias eran distintas. Ni Lagos era Rosas, ni el jefe de la situación en la ciudad era el candoroso Lavalle, sino el astuto don Lorenzo Torres, formado en la escuela del gran Dictador. La ciudad carecía de fuerza militar; pero tenía dinero, gracias a la Aduana y al Banco (desde el 11 de setiembre se habían emitido ¡89 millones!), y además los imponderables —consecuencia de los errores y torpezas de Urquiza— trabajaban a su favor, desde la instalación del caudillo entrerriano en San José de Flores.

El federalismo porteño —que había votado a los liberales contra Urquiza y, alejado éste, se había alzado con Lagos contra los liberales— volvió a erizarse ante el nuevo conato de imposición de afuera. Los rosistas porteños que habían acompañado al rosista Lagos en un pleito local contra los "salvajes" en el poder, se resistían a seguirlo en la alianza demasiado abierta con el

"traidor" que pretendía imponer su ley a la provincia de Buenos Aires y sujetarla quién sabe a qué oscuros compromisos. No fue ajena, por cierto, a esta reacción, la mutilación de la provincia en la Constitución que pretendía implantarse. Sobre estos sentimientos trabajó Torres, auxiliado por el general Flores, que no le perdonaba a Lagos la celada del 1° de diciembre y había vuelto de su voluntario exilio al primer llamado. Con lo cual la desmoralización empezó a cundir entre las filas de los sitiadores. Y con ella las deserciones en masa.

El dinero hizo lo demás. El almirante Coe —norteamericano, jefe de la escuadra de la Confederación— fue convencido mediante la entrega de 26.000 onzas de oro, recaudadas por don Juan B. Peña entre el alto comercio de Buenos Aires que sufría por el bloqueo. El 26 de junio, toda la escuadra se puso a disposición del gobierno provisional de la ciudad.

Cuando el 11 de julio, en el último combate, las milicias federales se desbandaron casi sin pelear, Urquiza y Lagos reconocieron que su causa estaba perdida y el primero pidió la intervención de las legaciones extranjeras para que le facilitasen su embarque para Entre Ríos, lo que efectuó al amparo de la noche y en un barco inglés.

Los ministros se habían cobrado con anticipación el precio de esta ayuda. El 10 de julio, en efecto, se había firmado con los de Gran Bretaña, Francia, Brasil y Estados Unidos los tratados de libre navegación de los ríos que constituía el compromiso fundamental del Director Provisorio. Habían actuado en nombre de éste Gorostiaga y Carril. Con ello, los intereses extranjeros que le habían dado el poder y se lo conservaban, quedaban a cubierto de cualquier eventualidad desagradable en el incierto futuro.

* * *

Los liberales estaban triunfantes en Buenos Aires. Celebraron con grandes festejos su fácil victoria, mientras Urquiza pasaba a ejercer en Paraná el mando supremo de una Confederación amputada de su provincia más próspera. Por su culpa, el pequeño grupo unitario había adquirido aquí poder y prestigio y podía pavonearse con el galardón de la defensa de la autonomía y la integridad locales, gratas a los "porteños". Vicente Fidel López, testigo melancólico de las torpezas del caudillo entrerriano, lo definía así en carta al general Alvear: "hombre liviano, ligero, insubstancial, gran hablador, vano, ignorante, lleno de vacilaciones y volubilidad". Su actuación política no desmintió, por cierto, la fidelidad de este retrato.

Con la victoria del gobierno de Buenos Aires y la retirada ingloriosa de Urquiza quedaba consumada la secesión. La Legislatura eligió gobernador interino a don Nicolás Anchorena, que renunció, y luego a don Pastor Obligado, quien continuó con Torres en el ministerio. En octubre se renovó la legislatura, la cual reeligió al mismo Obligado, esta vez en propiedad. Renovó su ministerio con liberales "netos": el doctor Ireneo Portela, don Juan Bautista Peña y el coronel Escalada. Ya Torres no era necesario. Por lo demás, el nuevo régimen trataba de imponerse por un saludable terror, para prevenir posibles alzamientos futuros. Se había iniciado el proceso contra los llamados "mazorqueros", que daba motivo para la difamación de la dictadura y que terminaría con el ajusticiamiento, en diciembre, de Ciriacco Cuitiño y Leandro Alem, en quienes se castigaba sobre todo su participación en el alzamiento reciente.

Pocos meses después se promulgaría la Constitución de la provincia, cuyo primer artículo rezaba así: "Buenos Aires es un estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue en un Gobierno Federal".

En el resto de la Confederación se efectuaron las elecciones para el primer gobierno constitucional. Concurrieron solamente diez provincias, pues estaban en guerra Tucumán y Santiago del Estero, cuyo gobernador, Taboada, había adoptado el partido de los hombres de Buenos Aires. Resultaron electos el general Urquiza y don Salvador María del Carril, para la presidencia y la vicepresidencia, quienes prestaron juramento el 5 de marzo de 1854 ante el Congreso Constituyente. Este clausuró sus sesiones, después de designar capital provisional de la República a la ciudad de Paraná.

III. BRASIL COBRA SU VICTORIA. FILOSOFÍA DE LA ENTREGA

Con lo que nos quedaba del país partido en dos fracciones irreconciliables y armadas una contra la otra, habíamos tocado el fondo de nuestra desgracia nacional. La gloriosa Confederación, fuerte y respetada, con su difícil unidad consolidada en la resistencia heroica al extranjero, era ya sólo un recuerdo melancólico. Había sido quebrada por la traición interna y quebrada a merced del vencedor, quien se cobraría el precio hasta el fin.

Nuestra soberanía sobre la cuenca del Plata —que debieron reconocer por las armas las primeras potencias de Europa— había caducado. Después de Caseros, no éramos nosotros, sino el Brasil, quien dominaba con su escuadra nuestros ríos y dictaba la ley en ambas orillas. Dominaba también al Estado Oriental, cuyo territorio invadía a su arbitrio con sus tropas, con el pretexto de sofocar la anarquía interna que él mismo suscitaba, a la vez que presionaba al Paraguay para obligarlo a aceptar como legales los límites de la rapiña.

Durante los seis años de la presidencia de Urquiza se protocolizan todas las entregas inherentes a la servidumbre y a la derrota y nuestra diplomacia no es más que un triste apéndice de la diplomacia imperial. Después de los tratados de libre navegación, a que ya nos hemos referido, y de la garantía a los tratados de Lamas, se firma en 1856 el de "amistad, comercio y navegación" con el Imperio, que es una nueva ratificación de aquéllos e incluye la "neutralización" de nuestra isla de Martín García; y el de 1857 —misión Paranhos—, con su cláusula de extradición de esclavos, que nos degrada a policía de la nación negra, contra las prescripciones de nuestra propia Constitución. Con el Paraguay se firma el tratado Derqui (que el Congreso rechazaría más tarde), reconociéndole el límite del Bermejo. Y como surgieron dificultades entre esta república y el Brasil, a propósito de los límites indecisos y de la libre navegación de los ríos— y con nosotros mismos por la no ratificación del tratado de límites— se manda la misión Guido, que nada resuelve en la materia litigiada, pero que obtendría franquicias en lo referente a la navegación del Paraguay, sólo favorables al Brasil, interesado vitalmente en el libre acceso por esa vía a su provincia de Matto

Grosso. En la negativa del gobierno nacional de la Asunción a aceptar el principio absurdo de la libre navegación de los ríos interiores, reclamando la total jurisdicción sobre el suyo y el otorgamiento de permisos para transitarlo por vía de concesiones recíprocas, se incubía el futuro *casus belli*.

En el Estado Oriental ha caído el gobierno "blanco" de Giró por su oposición al Imperio y sobreviene un período de anarquía y la dictadura del general Venancio Flores. Como éste, impopular, no puede gobernar, recurre a la protección imperial. Nuevamente (1854) invaden el territorio fuerzas brasileñas, las cuales, para cobrarse el precio de la expedición, ocupan asimismo las receptorías de rentas y las aduanas. Sobreviene una sangrienta confusión, en la que se suceden los gobiernos y las revoluciones. Al fin, blancos y colorados firman un pacto de unión y eligen un presidente transaccional. La intervención cesa, después de dos años; pero ésta sería apenas una tregua en las desgracias orientales.

El general Urquiza, primer presidente constitucional de la República, permanece impasible ante esa intervención abusiva e irritante, violatoria del tratado de 1828. Ha renunciado a las obligaciones inherentes a la soberanía nacional y se ha convertido en un mero agente del Emperador, que no sólo le ha dado el poder, sino que va a resolverle las finanzas. La Confederación carece de moneda y debe manejarse con patacones bolivianos y billetes del Banco de Buenos Aires, que no tienen curso en las provincias. Necesita dinero para sobrellevar los gastos de la administración y sobre todo, la guerra contra Buenos Aires. Trata de obtener un empréstito del Brasil, para lo cual expide a aquella corte, en categoría de plenipotenciario, a un aventurero extranjero, el señor Buschental, de Estrasburgo; pero fracasa. En las conversaciones referentes al tratado de 1857, se conviene por fin la instalación en Rosario de un banco brasileño —el banco Mauá— con capital de 2.400.000 patacones y el privilegio exclusivo, por quince años, de emitir billetes y acuñar moneda de oro y plata. La "bolsa" del país quedaría con ello también en manos brasileñas.

* * *

Es de advertir que esa subordinación visible de Urquiza a la política del Imperio acentuaba la animadversión de Buenos Aires, donde permanecía viva la reacción de la dignidad nacional ante el extranjero, herencia de las viejas luchas. Los mismos liberales se indignaron, si no por el fondo, por las formas, o la falta

de ellas. Hubo protestas contra la concertación de los tratados; y cuando la escuadra imperial entró al Paraná, rumbo a Asunción, sin pedir permiso a los ribereños, Alsina provocó un incidente diplomático al encargado de negocios del Brasil, lo que por cierto no hizo Urquiza.

Tales actitudes contribuían a consolidar la situación porteña, en la medida en que perdía prestigio en todo el territorio el gobierno de Paraná. Ésta fue, sin duda, la razón de que, no obstante ser el grupo gobernante una minoría insignificante dentro de una población federal, las tentativas de reacción contra él fracasaron, por suponérselas instigadas por el caudillo entrerriano. Así ocurrió con la invasión del coronel Lagos en octubre de 1854, que fue derrotado por el general Hornos en el Tala; y con la del general José M. Flores en diciembre del año siguiente, y un mes después, con la del coronel don Jerónimo Costa. La indiferencia con que recibió la campaña bonaerense a estos caudillos prestigiosos —buenos "porteños" por lo demás— no tuvo seguramente otra causa que el equívoco de su posición. Los conatos "restauradores" fracasaron por el temor de que favorecieran a Urquiza y nadie estaba dispuesto a hacerse matar por el agente de los "brasileros", como se decía entonces.

Estos episodios contribuían a mantener la tensión entre el gobierno nacional (a quien se le atribuían) y la provincia disidente. Como también los malones de indios, que entonces recrudecieron y cuya instigación achacaba cada uno de los afectados —con razón o sin ella— al adversario político. La agravación del problema del salvaje era una consecuencia directa de Caseros y de la suspensión de las subvenciones a los indios aliados, que constituían una especie de guardia suplementaria de fronteras. Convertidos a la sazón en enemigos y alentados por la guerra civil, eran —vecinos de las zonas pobladas— la punta de lanza, puesta al pecho de la civilización, de las tribus ranquelinas y araucanas, que se venían del fondo de las pampas y de la remota frontera chilena.

Los peligros a que se hallaba expuesto el gobierno con esos ataques explican la dureza de las represiones. El acuerdo firmado por el gobernador Obligado y sus ministros Alsina, de la Riestra y Mitre a raíz de la invasión del coronel Costa ordenó que este "cabecilla" (¡el héroe de Martín García!) y sus cómplices fuesen "pasados por las armas" donde se encontrasen, de capitán para arriba, "previos los auxilios espirituales", a fin de dar "un saludable ejemplo". Se encargó de cumplirlo el ministro de guerra y marina, coronel Mitre. De los ciento cuarenta apresados, sólo se salvaron quince. Es de advertir que se había acabado la "tiranía",

que estábamos ya en la "época constitucional", y que ni el gobernador ni sus ministros gozaban de la "suma del poder público".

No fue tan afortunado el coronel Mitre con los indios. Hizo una campaña para escarmentarlos, cayendo sobre los toldos de los caciques Catriel y Cachul, situados sobre el arroyo Tapalqué. "La expedición partió del Azul —escribe el coronel don Alvaro Barros— y volvió a los tres días, después de haber sufrido el más terrible contraste". Según D'Amico, fue la primera vez que un ejército armado y pertrechado a la moderna tuvo que ponerse en fuga ante los salvajes armados de chuzos. Naturalmente, se envalentonaron éstos y recrudecieron sus tropelías, hasta el punto de hacer desaparecer toda seguridad en las zonas vecinas a la frontera.

El coronel Mitre era, ciertamente, más demagogo que militar, si bien no carecía de arrojo en los combates, como lo mostró su actuación en el sitio de Montevideo y en el de Buenos Aires, donde recibió una herida en la frente que, hábilmente explotada, hizo la mitad de su fortuna. Artillero de profesión, manejaba mejor —según es fama— la arenga que los cañones. Discípulo del general Paz, no pudo igualarlo en el éxito militar, pues en las Tabladas y Caaguazú que intentó (salvo una vez que el adversario se dio vuelta y se retiró al paso) estuvo siempre del lado que perdía. Pero estas desgracias se compensaban con creces con los éxitos políticos. El joven ministro de guerra y marina del gobernador Obligado se había distinguido ya en el Parlamento por su oposición al acuerdo de San Nicolás, señalando el peligro de la tiranía urquicista, y se perfilaba como el jefe indiscutido de la fracción juvenil y "ultra" del partido liberal, en el que Alsina representaba la tradición rivadaviana y fantasmónica. Además, hacía versos (acababa de publicar su tomo de *Rimas*), cosa muy importante en esos tiempos románticos en que los poetas llegaban a ministros: versos malos, pero fabricados con esa aplicación y esa constancia que dedicó al resto de su obra y que —junto con la longevidad, don de los dioses— completaría la otra mitad de su fortuna singular. Romántico también en política e iniciado en la masonería entre los bastiones de la "Nueva Troya", creía en el Progreso, en la Civilización —en todas las abstracciones que daban motivo para construir frases magnéticas— y cifraba su ideal en la imitación de Garibaldi, el aventurero internacional de la libertad.

Acompañaban a Mitre en su oposición intransigente a la Confederación el doctor don Dalmacio Vélez Sársfield, cordobés cazurro y acomodaticio, insustituible para encontrar una justificación jurídica a cualquier decisión del poder, que había estado con Rosas y contra Rosas, con Urquiza y contra Urquiza y no se

desmentiría jamás; y el sanjuanino don Domingo Faustino Sarmiento, autor ya famoso de *Argirópolis* y *Facundo*, personalidad proteica, que unía a las dotes más eximias de pensamiento y estilo, un afán de acción, un ímpetu de lucha y una ambición a la medida de su talento. Peleado con Urquiza, según vimos, había vuelto a Chile (de donde le dirigiera a aquél una carta iracunda) para plegarse a la situación de Buenos Aires. Redactaba con Vélez "El Nacional". Su obsesión era la eliminación del caudillismo y de todos los resabios españoles, que atribuía a ignorancia y calificaba de "barbarie", y la regeneración por la inmigración europea y la difusión del alfabeto. Su aspecto —amplia calvicie, belfo saliente, sólida osatura, interjección fácil— irradiaba fuerza; y junto a los otros parecía (y sobre todo, así se sentía él mismo) un gigante entre pigmeos.

El otro órgano del liberalismo era "La Tribuna", fundada por los hijos de Florencio Varela y donde aparecía como redactor principal el doctor Juan Carlos Gómez. Gómez era oriental y "colorado", emigrado de su tierra a raíz de la división de su partido bajo la invasión brasileña. La evidencia de la servidumbre que esa situación implicaba le había infundido un odio violento a Urquiza, como autor de la entrega, y un ardiente anhelo de reintegro a la patria grande; aunque esperaba este resultado de la acción de Buenos Aires bajo el principismo liberal. El primer paso debía ser la "República del Plata", con la unión de ambas orillas contra el Brasil. Colaboraban también en la prensa del partido, siguiendo con diversas variantes sus ideas fundamentales, el poeta José Mármol, don Félix Frías, que venía de Europa y profesaba el catolicismo liberal de Montalambert, y varios otros.

Desde principios de 1856 empezó a perfilarse un partido de oposición que tenía por órgano a "La Reforma Pacífica", dirigida por don Nicolás Calvo. Este periódico sostenía —como lo indicaba su nombre— la necesidad de una conciliación con Paraná, mediante la revisión de la Constitución de Santa Fe. En el estado de exaltación de los espíritus —fomentada demagógicamente por la facción "ultra"— cualquier posición moderada y conciliatoria tomaba un carácter de traición, dados los agravios pendientes. Ello explica la virulencia que adquirió entonces la lucha política, agravada en el grupo de hombres nuevos que entraban en acción por el afán de ganar posiciones. Descollaba Sarmiento por su intemperancia verbal y sus genialidades, que le ganaron el calificativo de "loco". Como Calvo se refiriera al grupo gobernante diciendo que era un "círculo pequeño, faccioso e intolerante", una "pandilla", quedóles el mote de "pandilleros", que éstos retrucaron apodando a sus contrincantes "chupandinos",

116

alusión a una supuesta afición a andar de juerga, "chupando", en los cafés. Los principales personajes de este grupo eran don Lorenzo Torres, que había efectuado una nueva conversión, los generales Escalada e Iriarte, Miguel Cané y el chileno Francisco Bilbao.

* * *

La situación entre la Confederación y Buenos Aires se hacía más tensa a medida que transcurría el tiempo, por la acumulación de los agravios. Las conciliaciones y treguas pactadas en 1855 y 56 habían fracasado, denunciándose sus cláusulas, por una y otra parte, en virtud de transgresiones reales o supuestas. En realidad, Urquiza quería la guerra, porque los recursos de la aduana porteña eran de importancia vital para la Nación y buscaba hacerla con la ayuda de Paraguay y Brasil, repitiendo la manobra de Caseros. Sólo que esta vez Brasil no lo seguía, porque la división de su enemiga histórica colmaba sus aspiraciones hegemónicas¹. No le concedía aún personería internacional a Buenos Aires (Urquiza servía bien y no había que irritarlo); pero le había insinuado a Mitre, por boca del ministro Paranhos, la conveniencia de la secesión, después de la cual "se vería", en homenaje al hecho consumado. Sabido es que en Buenos Aires se consideró seriamente la idea (como lo demuestra el folleto de Mitre sobre "La República del Plata"), así como en Paraná se pensó también en serio en la República Mesopotámica unida al Paraguay: la ruptura de la unidad nacional en Caseros daba lugar a estas aberraciones.

El gobierno de Paraná se desenvolvía con dificultades, sobre todo económicas. El orden se mantenía en todo el territorio sometido a su jurisdicción, por medio de la acción de los gobernadores de Rosas, que aún subsistían después de Caseros, con excepción de López (de Córdoba) y Gutiérrez (de Tucumán), después por sendas revoluciones. Había, no obstante, unanimidad federal, salvo las tentativas de perturbarla de los hombres de Buenos Aires, que chocaban con la invencible desconfianza de los pueblos. Los poderes se habían constituido y funcionaban normalmente, aunque en forma precaria. Acompañaban a Urquiza algunos hombres espectables, como Juan María Gutiérrez, Gui-

¹ Toda la correspondencia política brasileña de la época en la que se inspira su literatura histórica, coincide en considerar los acontecimientos del Plata, como un triunfo de la política imperial. "Nossa política vitoriosa no Prata" (Paranhos). Véase la documentación extractada en *La Guerra del Paraguay*, de Cárcano.

do, Vicente F. López, del Carril, Derqui, Alvarado, Quesada, provincianos y porteños, viejos federales y viejos emigrados, y jóvenes de ambos partidos. El más notable de todos ellos era el doctor Alberdi. A raíz de la secesión, había roto con sus amigos para plegarse al gobierno de Paraná, con su fresco prestigio de autor de las "Bases", recibiendo un nombramiento diplomático en Europa. Podía considerárselo como el mentor intelectual del régimen, al que había impreso sus ideas, que no diferían mucho de las del grupo porteño, por ser el común denominador de la generación a la que pertenecía. Como Sarmiento y Mitre, creía que la finalidad del gobierno consistía en implantar la "civilización", para ellos sinónimo de influencia extranjera. Consideraba que debía borrarse la tradición española, mediante la apertura del país a las ideas y a los hombres de Europa (con preferencia a los anglosajones), que eran los únicos adaptables al Progreso, tal como él lo concebía. Su embajada tendía sobre todo a satisfacer estos propósitos mediante el fomento de una abundante inmigración de brazos y de capitales.

El general Urquiza había adherido a estas vistas con el fervor del neófito deseoso de quitarse el estigma de caudillo cerril con que lo motejaban sus enemigos porteños. Empezó a rodearse y asesorarse de gringos para todo. Las tratativas con Buschental y Wheelwright para la construcción del ferrocarril a Córdoba habían derivado, según vimos, en nombrar al primero agente financiero con cargo de ministro diplomático de la República! Planea colonias con el francés Brougues, encarga a Moussy el atlas de la Confederación, contrata a Amadée Jacques y Auguste Bravard para explorar el Chaco, al ingeniero Alan Campbell, al francés Larroque, etc. A este último le encomienda incluso una gestión diplomática en el Uruguay.

Para que se tenga una idea del espíritu dominante, transcribiremos un artículo del decreto que autorizaba a Buschental para contratar el proyectado ferrocarril transandino. Dice así: "Art. 7.— Si el gobierno inglés o francés quiere patrocinar la construcción de este camino, el gobierno está dispuesto a extender las cláusulas del tratado de libre navegación a toda la extensión del camino en el territorio argentino y considerarlo como una vía de comunicación internacional, cuya protección pertenecerá a las fuerzas de todas las partes contratantes". ¡Es decir, que, a trueque de la "civilización", se proponía un estatuto de colonia africana, con nuestras vías de comunicación internas dominadas por el ejército internacional!

* * *

Mientras con esos medios pretendía la Confederación entrar en "las vías" del progreso, Buenos Aires —vuelta al módulo y al espíritu rivadavianos— atravesaba momentos de gran prosperidad, no sólo por el goce exclusivo de su renta, sino por condiciones especialísimas del mercado mundial que habían valorizado sus productos. La guerra de Oriente, que cerraba los puertos de Rusia, provocaba una gran demanda de nuestros frutos del país. Aumenta el volumen de los negocios y la actividad de la aduana, con lo cual se enriquece el erario, permitiendo la iniciación de obras públicas de gran envergadura. Se demuele el Fuerte, para construir en su lugar la Casa de Gobierno, se alzan depósitos en el puerto; se crea el Departamento de Escuelas, y se emprende una reforma de la administración, empezando por el refuerzo de la policía en la levantisca campaña, donde se crean prefecturas a la francesa, desdoblando las funciones de los antiguos jueces de paz. Se construye además, con capitales argentinos, el primer ferrocarril, que se inauguraría en 1857.

Esta prosperidad se fundaba, como la rivadaviana, en el comercio libre e implicaba la miseria del resto del territorio, por la destrucción de las sabias disposiciones económicas de la ley de Aduana de la Confederación rosista. Vimos cómo el proteccionismo aduanero había sido una de las garantías de la unidad nacional. Los hombres de Caseros se habían propuesto reaccionar contra esa política, que consideraban prolongación viciosa del odiado "monopolio" peninsular. Uno de los primeros actos del gobernador López había sido declarar la "libre exportación del oro y la plata", con lo que la onza subió pronto a las nubes. La primera legislatura se apresuró a abrogar el proteccionismo aduanero, no obstante las tímidas reservas de Alsina y Estévez Sagui con el apoyo entusiasta de Vélez Sársfield y de Mitre, que identificaba el libre cambio con la libertad a secas. De nada valieron las advertencias del ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, que en su "Revista del Plata" señaló los peligros que amenazaban al país por esa política absurda.

Nada de eso importaba a los hombres de Buenos Aires, lanzados a la carrera febril de la riqueza y la especulación. El nuevo grupo gobernante se ocupaba de estabilizar su posición y veía la mejor fuente de ingresos en el "comercio de extranjería" y en la posesión de la tierra. Dos leyes se dictaron, que servirían de fundamento a la nueva oligarquía: la que dispuso la enajenación de la tierra pública a diez y seis mil pesos plata la legua, pagaderos a largos plazos, y la reforma del Banco de la Provincia. La primera produjo la valorización de la propiedad. La segunda contribuyó a concentrarla en pocas manos. Los créditos liberales que dicha institución concedía a los comerciantes con giro abierto

o a los paniguados del régimen, vueltos a prestar con usura en hipotecas particulares que no podían pagarse a su cumplimiento, provocaron la destrucción de la pequeña y mediana propiedad rural, que era corriente en tiempos de Rosas, con la inherente concentración en pocas manos de enormes latifundios.

* * *

El Congreso de Paraná dictó en junio de 1856 la ley llamada de "derechos diferenciales", a fin de evitar que los buques de ultramar pagasen derechos en la aduana de Buenos Aires y si lo hiciesen en el puerto de Rosario, donde embarcarían los frutos de retorno. Esta ley, que tendía a hacer del puerto de la Confederación un rival del puerto privilegiado de la provincia disidente y que favoreció el rápido crecimiento de la villa santafesina recién erigida en ciudad, si bien no causó perjuicios serios al comercio porteño, se consideró en Buenos Aires como un acto de guerra y determinó la elección en 1857 de don Valentín Alsina para suceder al gobernador Obligado.

Poco tiempo antes se habían realizado los comicios para la renovación de la Legislatura, donde habían triunfado los liberales del Club Libertad sobre los reformistas, con gran despliegue de fraude y violencia, según lo confesaba el mismo Sarmiento en carta a don Domingo de Oro: "Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado".

Durante el gobierno de Alsina, que tenía como ministros a Mitre, de la Riestra y Vélez Sársfield, prosiguieron las gestiones conciliatorias, que fracasaron por la intransigencia de ambas partes, ocupadas en hostilizarse mutuamente. Mientras Urquiza organizaba conspiraciones en Buenos Aires, los liberales mandaban emisarios para conmover las provincias contra el gobierno de Paraná.

Con la convicción de que la guerra era inevitable, Urquiza se preparaba alianzas en el extranjero. Nuevamente se convulsiona el Uruguay porque el presidente Pereiro, sin fuerzas para imponer a las Cámaras la aprobación de los inicuos tratados de Lamas, da un golpe de Estado contra la oposición, provocando la rebelión armada. El general Díaz —de los colorados "conservadores" de Gómez— desembarca de Buenos Aires para encabezarla. El presidente pide la intervención brasileña, que se produce nuevamente para defenderlo, y acusa al gobierno de Alsina de instigador del desorden. Autorizado por el Congreso, Urquiza se pone en marcha hacia el Uruguay con 4.000 hombres "a defen-

der su libertad e independencia, de acuerdo con los pactos vigentes": es decir, a ayudar al Brasil. Pero mientras tanto, la revuelta ha sido vencida y sus autores ejecutados en la siniestra matanza de Quinteros.

Poco tiempo después se produce el conflicto entre Estados Unidos y el Paraguay, a causa de un incidente con un súbdito norteamericano, contratista del gobierno. Llega una flotilla de Estados Unidos en son de guerra. Urquiza ofrece sus buenos oficios, viaja a Asunción y consigue un arreglo satisfactorio para ambas partes, lo que le gana la amistad de López y su promesa de ayuda.

Las relaciones entre Buenos Aires y la Confederación se hacían cada vez más hostiles, enconadas por el lenguaje de la propaganda verbal y escrita. Contribuyó a empeorarlas la designación de don Mariano Balcarce como enviado diplomático en Francia de la provincia disidente, que revelaba un franco espíritu separatista. Ocurre en eso un atentado contra Urquiza en Paraná. En los fundamentos de la sentencia, el juez de la causa acusa como instigadores al gobernador de Buenos Aires, don Valentín Alsina, y a sus ministros.

Entre tanto, se había producido en el interior, con ayuda abundante de Buenos Aires en hombres y dinero, el primer cambio de gobierno favorable a los liberales porteños. En San Juan, en elecciones libres, el candidato de ese partido había logrado obtener la situación dominada durante 18 años por el general don Nazario Benavídez, quien había aceptado el veredicto. Urquiza lo designó con el alto cargo militar de comandante de la división del oeste. Pero a poco andar, el nuevo gobierno provincial lo redujo a prisión, bajo pretexto de que conspiraba.

El gobierno de Paraná mandó una comisión formada por el ministro de la Corte doctor Baldomero García y el general Galán, con el objeto de recabar su libertad o hacer que se lo sometiera a la justicia federal. Cuando esta comisión, a la que se agregó más tarde el ministro doctor Derqui, llegó a su destino, ya el general Benavídez había sido asesinado en la cárcel, después de un simulacro de evasión frustrada. Es de advertir que la prensa de Buenos Aires —"El Nacional" de Sarmiento y "La Tribuna" de Gómez— había reclamado la eliminación en cualquier forma del prisionero, y que luego aplaudió el asesinato y felicitó a sus autores.

La comisión nacional —que llegó acompañada de fuerzas del ejército de línea— se hizo cargo del gobierno y redujo a prisión al gobernador Gómez y al ministro Laspiur, quienes fueron conducidos a Paraná para su juzgamiento. El asesinato de Benavídez produjo una intensa indignación en toda la República, donde la víctima gozaba de simpatías y prestigios. Se empezó a pedir con

insistencia la declaración de la guerra y la eliminación del grupo perturbador y anárquico de Buenos Aires. El Congreso dictó una ley autorizando al P.E. a resolver la cuestión de la integridad nacional respecto de la provincia disidente, "por medio de negociaciones pacíficas o de la guerra", si fuese necesario.

IV. DE CEPEDA A PAVÓN

Autorizado por la ley, Urquiza se puso a organizar las fuerzas nacionales para la campaña que parecía inevitable. En todo el país se quería la unión, con el sometimiento de la provincia discol. Todas las legislaturas y gobiernos provinciales se manifestaron en este sentido, así como numerosas y entusiastas reuniones de personas en los principales centros de población. Buenos Aires era impopular, tanto por el arrastre histórico, cuanto por su intromisión permanente en apoyo de las minorías opositoras de las provincias interiores. San Juan había sido un ejemplo reciente. En este movimiento general, la adhesión a Urquiza no tenía en cuenta a su persona (que inspiraba una marcada desconfianza), sino la causa de la unidad nacional y la reintegración de la provincia rebelde, a cuya secesión se atribuía el creciente malestar económico y la inseguridad social y política.

La impopularidad del régimen vigente en Buenos Aires cundía también dentro de la misma ciudad. Al amparo de la ceremoniosa levita de don Valentín Alsina —quien entendía la mitad de lo que pasaba— se había impuesto la “pandilla” de demagogos y especuladores integrantes del partido liberal, repartiéndose las prebendas y los negocios en un afán desordenado por resarcirse de los ayunos de la emigración y motejando de “mazorqueros” a los competidores presuntos. Después del fraude electoral que les había dado la mayoría espuria, dictaban la ley, persiguiendo a la oposición con la policía y con la diatriba periodística, proferida por boca del cuyano Sarmiento, el oriental Gómez y el cordobés Vélez Sársfield. Esta política había provocado la retracción de la mayor parte de los viejos porteños —muchos de los cuales habían participado en la revolución contra Urquiza y en la defensa contra Lagos—, quienes se hallaban dispuestos a aliarse, no digamos a Urquiza, sino al mismo demonio, con tal de librarse de la calamidad que los azotaba.

La mitología histórica, que ha tratado estos años con tintas idílicas, no explica la razón por la cual la mejor juventud de Buenos Aires —de origen federal y liberal— dejó en esos días la ciudad para enrolarse bajo la bandera del mismo caudillo al que había combatido cinco años atrás y que venía nuevamente en son

de guerra¹. Era porque el espectáculo de corrupción y desorden que daba el gobierno local se había hecho francamente intolerable. No conforme el grupo advenedizo que lo integraba con el goce exclusivo e incontrolado de las prebendas, hallaba solaz en la vejación sistemática de los sentimientos públicos y de las creencias tradicionales. La prensa oficial se mofaba de los católicos, injuriaba todo lo español y afectaba un irritante extranjerismo. Desde 1856 se habían abierto y funcionaban en la ciudad diez logias masónicas (el Gran Oriente Argentino se estableció el 22 de abril del año siguiente), a la que estaban afiliados y concurrían con ostentación los hombres del partido gobernante.

Al mismo tiempo que organizaba su ejército, Urquiza mandó emisarios a Paraguay, Brasil y Uruguay, con el objeto de solicitar apoyo. Si bien su situación militar era excelente, su escuadra había quedado desmembrada a raíz de la traición de Coe y Buenos Aires le llevaba en este aspecto una seria ventaja.

Las fuerzas de Buenos Aires habíanse puesto al mando del coronel Mitre, quien mantenía su crédito militar, no obstante sus derrotas, a fuerza de oratoria fulgurante. Aunque el ejército de la Confederación lo triplicaba en número, Urquiza no atacó en seguida, por las dificultades ocasionadas en su inferioridad naval y porque, de acuerdo con la decisión del Congreso, debía intentar antes gestiones conciliatorias.

El 6 de julio se produjo la mediación del ministro de Estados Unidos, don Benjamín Yancey. Las negociaciones se iniciaron en seguida y se dilataron por espacio de un mes. Mientras duraba el trámite ocurrió frente a Paraná la sublevación de los tripulantes del barco “General Pinto”, de la escuadra porteña, y su entrega al gobierno nacional, lo que cambiaba la situación naval. Las negociaciones fracasaron por la insistencia del gobernador Alsina en exigir, como cuestión previa, el retiro a la vida privada del general Urquiza.

* * *

¹ Entre ellos, “los Caívo, Guido, Marín, Iriarte, Navarro Viola, Pino, Yrigoyen, Pirán, Espinosa, Domínguez, Lagos, Laprida, Díaz Vélez, Espejo, Pueyrredón, Ramiro, Lamela, Chenaut, Nadal, Pita, Quesada, Olazábal Clavero, Olivencia, Plaza Montero, González del Solar, Cabassa, Laserre, Brown, Maeso, Soto, Monguillot, Barra, Gómez, López, Pico, Peralta, Garrigós, Fontes, Soler, Cordero, Corvalán, Victorica, Cárdenas, Hernández y muchos otros más, cuyos nombres llenarían páginas enteras, eran nacionalistas decididos, que protestaban contra el aislamiento de Buenos Aires”. (Urquiza y Mitre, de Julio Victorica, pág. 242).

La guerra era inevitable porque ambas partes la querían. Tanto el gobierno de la Confederación como el de Buenos Aires confiaban en el desprestigio y la impotencia consiguiente del contrario; y lo curioso es que ambos tenían razón.

Con todo, Urquiza no estaba demasiado seguro, dada su experiencia reciente, por lo cual insistió en sus pedidos de ayuda al Paraguay, Uruguay y Brasil. Su amigo el presidente López, comprometido en auxiliarlo con cuatro barcos, se limitó a mandarle buenas palabras y una promesa de mediación. El gobierno uruguayo no estaba en condiciones de distraer ni un peso, ni un soldado. En cuanto al Brasil, era absurdo pedirle que contribuyera a restablecer la unidad argentina, cuya destrucción había sido y continuaba siendo el principal objetivo de su política².

La guerra se inició con un combate naval. La escuadra de la Confederación, al mando del contralmirante Cordero, forzó el paso de Martín García defendido por baterías enemigas y llegó a la vista de la ciudad. El ejército de Urquiza, formado por contingentes de todo el país, se movió sobre Buenos Aires. La batalla se trabó en el campo de Cepeda, funesto para los porteños, siendo derrotadas completamente las fuerzas provinciales. Mitre logró salvar una columna de infantería, con la que se retiró en orden a San Nicolás, mientras que el grueso de las tropas confederadas seguía su marcha, ya sin obstáculos, sobre la ciudad rebelde.

Era evidente que ésta se hallaba a la merced del triunfador. Urquiza lanzó una proclama a los habitantes de la provincia anunciando que no llegaba como conquistador, sino para librarla del "puñado de aventureros" que la tiranizaba y devolverle su soberanía usurpada. Era lo lógico, lo natural, lo justo, y era lo que esperaba la mayor parte de la población de la ciudad y de la campaña, que empezó a conmoverse al saber el resultado de Cepeda y no, por cierto, para sostener las autoridades derrotadas. El triunfo de Urquiza suscitaba una esperanza. Por lo pronto, significaba el fin del régimen unitario, establecido por medio del fraude y la opresión.

Esa esperanza sería defraudada. Estaba pendiente la mediación paraguaya, a cargo del joven general Francisco Solano López, hijo del presidente de esa república, designado con el cargo de ministro plenipotenciario a tal efecto. Sus gestiones habían fracasado, antes de la batalla, por la displicencia de Alsina para considerar sus proposiciones. A la sazón se había hecho éste más accesible y apuraba los trámites. Urquiza se hallaba acampado

² Véase al respecto la primera parte del libro arriba citado de don Vicente G. Quesada, *La política del Brasil, etc.*

con su ejército (que con el aporte de la campaña bonaerense llegaba ya a 20.000 hombres) a las puertas mismas de la ciudad, a la que estrechaba en un círculo de hierro. Era la ocasión de imponer condiciones y de cumplir su compromiso solemne de librar a la provincia de la camarilla que la tiranizaba, como lo esperaba la falange porteña que se había alistado bajo sus banderas. El honor se lo exigía. Lejos de hacerlo, ¡aceptó iniciar negociaciones de paz con el propio gobierno cuya legitimidad había objetado, con lo cual lo salvó y lo fortaleció, cuando se hallaba reducido a mero simulacro! Sólo en la tercera conferencia reclamó la renuncia de Alsina, a quien se apresuraron a sacrificar sus partidarios, felices de seguir viviendo a tan poco precio.

El pacto de Unión —que protocolizaba el reintegro de Buenos Aires al seno de la Confederación— fue firmado, pues, por el presidente de la Legislatura a cargo del Ejecutivo, doctor Llavallol, y ratificado por esa misma asamblea "pandillera", intacta y tonificada por el aval del triunfador. Aparte de la expresión de voluntad referente a la unión, dicho documento establecía que la Constitución de Santa Fe sería revisada por una convención provincial convocada al efecto, la cual indicaría las reformas necesarias para su aceptación. Estas serían consideradas, a su vez, por una asamblea nacional, a la que concurriría Buenos Aires, con un número de diputados proporcional a su población. Hecho el acuerdo, la Constitución sería jurada por la provincia.

El resultado defraudó a la opinión federal de ésta, que había alentado esperanzas en la acción de Urquiza, y difundió una impresión general de desaliento en todas las esferas. Los más especialmente burlados eran los porteños que lo habían seguido con el fin de recuperar el gobierno local conforme a la opinión auténtica, y que no se satisfacían con las cláusulas que les aseguraban la impunidad y los reintegraban como indultados, cuando debieron regresar como triunfadores. Muchos de ellos tuvieron la tentación de usar las armas, que todavía empuñaban, para intentar la revolución salvadora. Urquiza lo impidió. El se consideraba satisfecho. Así lo expresó, al menos, en la proclama con que se despidió del pueblo de la provincia después de la paz y en la que se daba aires de redentor y libertador de la patria. ¡Basta de sangre! ¡Todos hermanos! Ya se vería.

* * *

A Urquiza se lo hizo objeto de grandes homenajes en Paraná. El vicepresidente del Carril, a cargo del gobierno, dictó un decreto por el que lo declaraba "Fundador de la Unión Nacional y de la República Argentina". ¡Nada menos!

En diciembre se realizaron las elecciones para la Convención de Buenos Aires, que revisaría la Constitución. Como era de prever, ganó por gran mayoría el partido gobernante, que fue en rigor el único que se presentó. La oposición había quedado desmoralizada y dispersa después de la entrega urquicista; no alentaba ninguna esperanza próxima y además carecía de recursos, frente a un grupo que usaba todos los del poder y se hallaba respaldado por el gobierno nacional.

La Convención inició su cometido en febrero de 1860. En mayo la Legislatura eligió gobernador, por gran mayoría, para suceder a Alsina, al general Bartolomé Mitre, quien designó como ministros a Sarmiento y al doctor Rufino Elizalde.

Entre tanto, se habían realizado elecciones nacionales para reemplazar a Urquiza, que terminaba su período. El escrutinio se hizo en febrero y dio el triunfo al doctor don Santiago Derqui. Como no hubiera mayoría para la vicepresidencia, el Congreso debió decidir entre los candidatos más votados, resultando electo el general Pedernera. En marzo se efectuó la transmisión del mando. A continuación, una ley declaró desfederalizada la provincia de Entre Ríos, en la que se realizó un simulacro de elección para elegir gobernador, que favoreció naturalmente a Urquiza. El gobierno nacional establecido en Paraná quedaba así, con respecto al caudillo, en una situación de huésped, que parecía más bien de pupilo.

La Convención de Buenos Aires inició sus trabajos en febrero y los terminó en mayo. Hubo debates agitados entre reformistas y antirreformistas, con predominio de los primeros, quienes lograron imponer la modificación de algunos artículos, principalmente el que disponía la capitalización de Buenos Aires, cuya decisión se difirió al Congreso, previa aceptación de la legislatura de la provincia afectada; el que cambiaba la designación de Confederación Argentina por Provincias Unidas del Río de la Plata, y otras modificaciones de detalle en materia administrativa y fiscal.

Las relaciones entre la Confederación y la provincia se desarrollaban en un plano amistoso, no obstante algunas genialidades de Sarmiento, empeñado en tratar en pie de igualdad al gobierno nacional y a sus ministros. Contra lo dispuesto en el Pacto de Unión, la provincia continuaba llamándose Estado. Para resolver las dificultades pendientes, se envió en comisión al doctor Vélez Sársfield, quien firmó el 6 de junio un nuevo pacto en el que se disponía el procedimiento para la reunión de la Convención nacional que examinaría las reformas de Buenos Aires y el modo de la jura ulterior por esta provincia. En las fiestas julias, el presidente Derqui, acompañado por el general Urquiza y sus

ministros, visitaron la ciudad de Buenos Aires, con un brillante séquito, a fin de participar en los festejos. En la recepción que se les ofreció en la Municipalidad, Mitre lo exaltó a Urquiza, "que venía desarmado, como si fuera un Washington, al seno del mismo pueblo que lo arrojó antes a balazos, inclinándose ante su soberanía y su libertad". ¡Ah, la oratoria de Mitre! Así empezaba a inculcar, en la mente dócil del caudillo entrerriano, la idea de que la garantía de su gloria consistía en desarmarse y dejarse dirigir por él.

* * *

Desde ese momento, Urquiza está ya definitivamente liquidado. Le han hecho creer que debe permanecer ajeno a la política militante, para ser el árbitro supremo de la República, lo cual lo paraliza, dejando a sus enemigos campo libre para agitar el interior con los recursos del Banco de Buenos Aires. El orden federal de las provincias empieza a ser perturbado sistemáticamente por los agentes porteños, sin que los gobernadores encuentren amparo en el grotesco triunfador de Caseros y Cepeda, que ha resuelto colocarse "por encima de los partidos", como el Washington de la versión mitrista.

Es interesante leer las cartas que se cambian entre Urquiza y Mitre en los meses que median entre Cepeda y Pavón para advertir las diferentes etapas del proceso. El primero se halla literalmente fascinado por el segundo y repite como un loro sus ideas, sin olvidar la alusión a Washington que, con aires de falsa modestia, se complace en glosar: "Sin pretender en manera alguna merecer las glorias del inmortal Washington, deseo mucho y procuro imitar sus ejemplos. Creo que Ud. me hará justicia en reconocerme sinceridad en tales deseos". ¡Vaya si le hacía justicia el general Mitre! Lo había calado hasta los huesos. Sabía ya que no tendría por ese lado ninguna dificultad seria.

En conmemoración de tan fausto acontecimiento y para celebrar igualmente el primer aniversario del Pacto de Unión, Urquiza invitó a Derqui y a Mitre a que lo visitasen en su palacio de San José, en Concepción del Uruguay, sede entonces del gobierno de Entre Ríos. Ambos llegaron alrededor del 10 de noviembre y fueron recibidos con grandes homenajes. El 11, aniversario del pacto, Mitre le regaló a Urquiza su bastón de jefe del *Estado* de Buenos Aires, con estas palabras: "Gracias a vuestro patriotismo y magnanimidad, la provincia de Buenos Aires es parte integrante de la República: su gobernador no poseerá más este bastón, que señala la época de segregación. Os toca conser-

var esta prenda de seguridad, como una conquista que habéis hecho”.

A todo ello, se había producido ya una inteligencia marcada entre Mitre y Derqui, estimulada por la aspiración de este último a sacudirse el yugo de Urquiza. “Ya comuniqué a usted en esa —le escribía el 7 de octubre Derqui a Mitre— mi resolución de gobernar con el partido liberal *donde están los inteligentes*, y por eso tengo que trabajar en el sentido de darle mayoría parlamentaria, sin lo que no podría hacerlo; y tengo la seguridad de dársela”. No ignoraba el ex secretario del general Paz que los liberales constituían en el país una ínfima minoría; pero confiaba en los resortes del poder y, sobre todo, en la pasividad del jefe presunto del partido federal, que lo entregaba inerte a las maniobras de la oligarquía naciente, desaprensiva y lúcida. Lo nombró ministro de hacienda a don Norberto de la Riestra, recomendado de Mitre; y en carta a éste le anunciaba que ofrecería carteras a don Valentín Alsina y al doctor Antonino Aberastain.

Al amparo de estas relaciones idílicas se reunió la Convención nacional que debía examinar las reformas de la convención bonaerense a la Constitución. Como era de prever, se aprobaron sin discusión ninguna entre aclamaciones a la unidad restaurada. Tal era la consigna, que había de cumplirse. La Constitución reformada se promulgó por el presidente Derqui el 11 de octubre y se juró el 21 en la provincia de Buenos Aires. Ese mismo día, Mitre fue ascendido por Derqui al grado de “brigadier general de los ejércitos de la República”.

El traspaso del poder total a los liberales no podría realizarse, sin embargo, tan fácilmente como la confabulación se lo proponía. La piedra del escándalo sería nuevamente la provincia de San Juan.

Gobernaba esta provincia el coronel don José Antonio Virasoro. Designado con carácter provisional, a raíz de la intervención a que dio lugar el asesinato de Benavídez, acababa de ser nombrado titular por la Legislatura para el siguiente período. La resistencia contra él, promovida por los liberales, se fundaba sobre todo en el hecho de no ser nativo de la provincia; y este conflicto había asumido amplitud nacional por la agitación que promovía la prensa porteña. Hubo de considerárselo en la reunión de San José, donde Urquiza, Derqui y Mitre redactaron una carta conjunta, aconsejándole al resistido gobernador el abandono del mando.

La carta no llegó a tiempo. En esos mismos días, el 16 de noviembre, un grupo de mercenarios había asaltado la casa de Virasoro, dándole muerte junto con todas las personas que estaban con él, en número de quince. Un corresponsal de Derqui

explicaba el hecho así: “La gente de frac de San Juan se cree garantida para todo desde que empezó Buenos Aires a tener influencia”. Los revolucionarios nombraron gobernador al doctor Aberastain (íntimo amigo del ministro Sarmiento), a quien Virasoro acababa de desterrar de la provincia y que aparecía como instigador del atentado.

La indignación que se levantó en todo el país ante ese episodio, aplaudido con entusiasmo por la prensa mitrista, obligó al presidente Derqui a intervenir, bien a su pesar. En carta a Mitre se quejaba de los desbordes de Sarmiento y le expresaba la exigencia general de la opinión, en términos de “si Ud. no actúa, actuaremos nosotros”. La intriga liberal se estaba sintiendo también, por lo demás, en la provincia de Corrientes. Se designó para intervenir en San Juan al coronel don Juan Sáa, gobernador de San Luis. El gobernador Aberastain formó un ejército para resistirlo. Fue derrotado, después de un combate de tres horas, en La Rinconada de Pocito, y ejecutado, junto con gran número de sus partidarios.

Esta bárbara ejecución de La Rinconada da la tónica de la época. Volvían las represalias. El federalismo del interior, desorganizado, traicionado y acosado, reaccionaba con violencia contra la acción de una minoría metropolitana sanguinaria y prepotente. Ya la prensa opositora de Buenos Aires denunciaba que el ministro de hacienda de la provincia, doctor Elizalde, había facilitado un millón y medio de pesos al de gobierno, Sarmiento, para derrocar a Virasoro, cuya muerte se anunció en “El Nacional” con seis días de anticipación.

Aunque el cambio de clima político destruía por la base el plan de Derqui —cuyo cumplimiento exigía una conciencia nacional adormecida— no cejó éste en su política favorable a las exigencias del grupo porteño, convocando a elecciones en las provincias cuyos representantes no reunían las condiciones de la Constitución reformada y favoreciendo en Corrientes a la oposición liberal. Lo cual acentuó su divorcio con el Washington de San José, que tardíamente se decidía a la resistencia. El general Mitre, por su parte, hizo renunciar a Riestra y se dirigió a los gobernadores en una proclama condenando el hecho y exigiendo un pronunciamiento colectivo. Como el hombre de Villamayor carecía de autoridad para indignarse por las represalias sangrientas, sólo recibió respuestas elusivas, en el sentido de que la consideración del hecho correspondía al gobierno nacional, quien sabría decidir su conducta.

* * *

Nuevamente la guerra parecía inevitable. Por un tácito acuerdo se resolvió, sin embargo, esperar la reunión del Congreso, en el que participarían por primera vez los diputados y senadores por Buenos Aires.

Los senadores fueron aceptados sin objeciones. Pero la comisión de poderes de la Cámara de Diputados aconsejó que fueran rechazados los electos por dicha provincia, porque la elección se había realizado por la ley provincial, dividiéndose la provincia en distritos, contra lo estipulado en el artículo 37 de la Constitución. Aprobado el dictamen, la representación bonaerense se retiró del Congreso.

Hubo a raíz de ello un violento cambio de notas, al mismo tiempo que ambas partes movilizaban sus fuerzas y se preparaban para la guerra. El gobierno de Buenos Aires concentró efectivos militares en el partido de Rojas, frontera de Santa Fe, al mismo tiempo que enviaba a Córdoba al coronel don Marcos Paz para provocar un alzamiento. El presidente Derqui se alarmó y se dirigió a Córdoba con el objeto de prevenirlo, asumiendo allí el mando. Paz fue tomado y conducido a Paraná, de donde se fugaría ayudado, se dice, por Urquiza. Las fuerzas de Córdoba fueron puestas por Derqui a las órdenes del general Francia. Unidas a las del general Sáa, formarían el ejército del centro, que marchó rumbo a Santa Fe, donde se encontraron igualmente las tropas correntinas y entrerrianas. El comando en jefe del ejército nacional se confió al general Urquiza.

Se produjo la consabida mediación de los ministros de Francia e Inglaterra para evitar las hostilidades, e incluso se celebró una entrevista entre Derqui, Urquiza y Mitre, en el buque de guerra inglés "Oberón", fondeado en el puerto de Las Piedras, provincia de Santa Fe. Se ignora lo que se habló; pero debió haber algún acuerdo en principio, puesto que se designaron comisionados para proseguir las negociaciones. Estas hubieron de quedar rotas en la segunda conferencia por la imposibilidad de aceptar las propuestas del delegado porteño, doctor de la Riestra, quien pretendía que Buenos Aires continuase separada de la República hasta el año 1865, después de lo cual se arreglaría el medio de su reincorporación y por supuesto, en pleno goce de las rentas de su aduana, de las que sólo entregaría anualmente, como compensación a la nación, la suma de setecientos cincuenta mil pesos papel. Evidentemente, Buenos Aires quería la guerra. Harto lo evidenciaba además el lenguaje de su prensa, que sólo respiraba odio y sangre y exterminio del "caudillismo" y la "mazorca". El Washington de pocos meses antes ya no era para ella más que el último superviviente de la ralea rosista, degolladora y cerril.

Poco tiempo después, el 17 de setiembre de 1861, chocarían

ambos ejércitos en Pavón, esa misteriosa acción en la que, después de un choque violento, se dispersó la caballería mitrista y fue destrozada la infantería urquicista, alejándose Urquiza del campo de batalla sin ser perseguido, rumbo a su provincia feudal. Mitre quedó dueño del terreno y de los destinos de la República. El general Urquiza coronaba su carrera de desaciertos y entregas dejándose derrotar.

Mucho se ha fantaseado sobre las circunstancias de este episodio, que presenta indudables puntos oscuros. ¿Qué se habló en el "Oberón"? ¿Qué papel desempeñó ese extranjero que apareció en un *tilbury* en el campamento de Urquiza y fue encargado por éste de un mensaje para Mitre? No ha faltado ni el episodio novelasco de la carta olvidada (Victorica), que al convencerlo a Urquiza de la traición de Derqui lo habría paralizado en la acción.

La explicación es mucho más simple. Urquiza no creía en la causa cuya representación encarnaba por el encadenamiento de los sucesos; estaba espiritualmente ganado, sugestionado por el enemigo. El ejército que mandaba no era más que la expresión guerrera del viejo partido federal que concentraba las mejores esencias de la nación, pero que actuaba anarquizado y sin cabeza, entregado, traicionado ¡desde Caseros! En esos momentos sólo representaba una voluntad negativa; se hallaba despedazado por las facciones internas, y además dudaba de su jefe. Sabido es que se conspiraba en su seno y que una fuerte fracción aspiraba derrocar a Urquiza, reemplazándolo por el general Sáa; y es sintomático que los primeros dispersos hayan saqueado su equipaje, en justa represalia. ¡Ah, si en vez de Pavón nos hubiera dado el destino una nueva Rinconada, con "lanza seca" y todo! Un ejército en esas condiciones estaba destinado a la derrota, que no era más que un símbolo de la derrota de la patria.

El triunfo de Mitre se ajustaba a la lógica del proceso. Después del Gran Entregador, del Constituyente bajo el signo negativo de la mediatización y la derrota, venía el Emigrado incubado en los fogones del extranjero, veterano en las luchas contra la libertad de su tierra natal, a la que despreciaba en la medida en que la ignoraba. Su misión consistiría en consumir la obra, imponiendo a sangre y fuego el derecho divino de la Civilización, con ese fervor místico que, mezclado a ingredientes menos nobles, lo había ayudado a sobrellevar las vigiliass del destierro.

"Sé muy bien —escribe don Vicente G. Quesada— que ha habido un partido que ha profesado la doctrina de que era preferible ser súbdito de una nación extraña antes que someterse a los enemigos domésticos: me consta que muchos que aparecen en la historia como eminentes patriotas, han lamentado en el seno de la confianza que los ingleses no nos hubieran conquistado de-

120

finitivamente en 1806 y 1807; algunos golpearon muchas puertas en busca de un rey para colocarlo en el trono del Río de la Plata, y otros después, en las tristezas de la inmigración, excitaron a Chile para que se apoderase del estrecho de Magallanes, ¡que al fin es hoy chileno! Solicitaron a la Francia y a la Gran Bretaña como aliadas en las cuestiones civiles y por último, hasta para vencer a Rosas recurrieron a una coalición extranjera. De esta mezcla con los intereses extraños, de estos antecedentes de un cosmopolitismo singular, ha resultado la tibieza del espíritu patrio, enfermo por último por el mercantilismo y la sed de riqueza: ahogado, como está, por una masa extranjera que sólo quiere ganar y enriquecerse y cuya patria no está aquí, sino en Europa". Este partido fue el que se impuso con el triunfo de Mitre en Pavón. Y no sólo triunfó en los hechos, sino que hizo de su doctrina la doctrina nacional.

V. "TODO DE UN COLOR"

El partido liberal porteño se hallaba resuelto a jugar las últimas cartas en la partida empeñada: o se alzaba con la ganancia o se iba dando un portazo; el triunfo o la secesión. Ya Sarmiento había hecho en la Legislatura la doctrina del derecho de Buenos Aires a gobernar al resto del territorio en nombre de la "civilización", cifrada para él en estos tres términos exclusivos: población, comercio y riqueza. Si esta operación fracasaba, quedaba la otra. Apenas consumada la ruptura, se habían enviado agentes confidenciales a Brasil (Mármol), al Paraguay (Torres) y a Montevideo (Pico), a fin de efectuar consultas sobre sus consecuencias posibles. "Las instrucciones (de esos agentes) fueron limitadas en lo concerniente al caso de independencia absoluta que creíamos inconveniente fuese por escrito", decía una carta de Pastor Obligado del 17 de julio de 1861. Y Sarmiento, pocos meses después (3 de diciembre de 1861), le escribía a Mitre: "Buenos Aires es indiferente a la nacionalidad". Se refería, naturalmente, a sus propios correligionarios políticos.

El triunfo aparente de Mitre en Pavón, donde quedaba dueño del terreno, no despejó del todo el horizonte. Las fuerzas militares de la Confederación permanecían casi intactas con la retirada del grueso del ejército entrerriano, y la reconstrucción del ejército del centro, en retirada hacia el interior. Derqui asumió la dirección de la guerra después de Pavón, trasladándose a Rosario y nombrando jefe de las fuerzas al general Sáa. En las manifestaciones del Senado y de la Cámara de Diputados de Paraná, al clausurar sus sesiones a fines de setiembre, así como en el mensaje del vicepresidente en ejercicio, general Pedernera, se daba como triunfantes a las armas nacionales. Hubiera sido posible, sin duda, una reacción victoriosa, de no haber mediado la defeción de Urquiza, que ya había negociado su indulto con Mitre, como consta en la nota del 25 de noviembre al gobernador delegado de Entre Ríos¹, a cambio de su prescindencia y que se hallaba resuelto a enclaustrarse en los límites de su provincia feudal.

¹ De la carta de Urquiza citada en el texto: "Puedo y debo expresar a V. E. que cuento con la garantía del Gobernador de Buenos Aires, general en jefe de sus ejércitos, para asegurar que colocada la provincia en las condi-

El conocimiento de esta actitud de Urquiza provocó el 5 de noviembre la renuncia de Derqui, quien se embarcó en Rosario a bordo de un buque inglés, al mismo tiempo que las fuerzas de Buenos Aires invadían Santa Fe. Estas circunstancias y el estallido de disidencias en los comandos de las fuerzas nacionales, libradas a la anarquía, precipitaron la disgregación, que motivó el 22 de noviembre, en Cañada de Gómez, la nueva y sangrienta derrota de las vanguardias de estas tropas al mando del general Virasoro por una columna del ejército de Buenos Aires mandada por el general oriental Venancio Flores.

La defección de Urquiza, esa derrota y la disolución del ejército del centro, cuyos contingentes se retiraban en mayor o menor desorden hacia sus provincias de origen, dejaron el campo libre al partido vencedor, dueño ya de Santa Fe. El 1° de diciembre Entre Ríos reasumía su *soberanía*. El 12, el presidente de la República, general Pedernera, sin fuerzas para resistir, declaraba disuelto el gobierno nacional, hasta que las provincias, reunidas en Congreso, decidieran la suerte futura del país. Ya se había producido el vuelco de las situaciones en Corrientes y en Córdoba. Sin gobierno central reconocido, la nación se hallaba a la merced de un partido en armas, ávido de usufructo y desquite.

La resistencia está en el interior, contra el cual se va a repetir con éxito, lo que había intentado sin él, en 1829, el general Paz. Se lanza contra Córdoba y las provincias del centro, un ejército de Buenos Aires al mando del general Wenceslao Paunero, secundado por jefes del litoral, la mayor parte orientales, imbuidos de la convicción de que hacen una guerra contra la barbarie, que no admite cuartel. Lo acompaña como auditor de guerra y mentor espiritual el ya coronel Domingo Faustino Sarmiento, dispuesto —según sus palabras— a no dejar “nada que a mazorca ni transacción se parezca”. Sobre las provincias del norte y noroeste operan los Taboada, caudillos vitalicios de Santiago, aunque no “bárbaros”, porque se han plegado a la “civilización” triunfante. He aquí cómo le escriben al general Mitre: “Yo salgo mañana con una división sobre la línea de Catamarca y Antonino lo hará pronto con otra sobre la frontera de Salta. Colocados allí veremos lo que más convenga hacer para dejar esto de un color”. Es Manuel el que firma. “El Norte va a quedar muy luego *uniformado en sentimientos e ideas*”, promete más tarde. Así es como conciben los agentes de Mitre la democracia y el liberalismo.

ciones de su autonomía política, ninguna hostilidad le sea inferida. . .”, etc. Así abandonaba a su suerte el general Urquiza a sus amigos del resto del país, para quienes no pactaba ninguna garantía.

La consigna de la invasión porteña a las provincias interiores consiste en dar vuelta las situaciones políticas, para asegurar la presidencia futura al vencedor de Pavón, disfrazando ese propósito con el pretexto de una guerra de policía contra los perturbadores del orden. La causa que se invoca para oprimir a las poblaciones es la de los *principios* y la *libertad* triunfantes en aquella batalla y que autoriza a tratar como bandidos a quienes se le oponen. Naturalmente, los pueblos se defienden, en una resistencia desorganizada y desesperada, al mando de cuatro o cinco caudillos prestigiosos, como Gutiérrez, Peñaloza y Navarro. Llevan las de perder, por cierto, dada la inferioridad del armamento y la carencia general de recursos frente a los cuantiosos de sus enemigos, y los prisioneros no encuentran cuartel. “Todos han sido pasados por las armas, según las órdenes de V.S.”, le escribe a Paunero el coronel Sandes en el parte de una batalla. Las situaciones provinciales caen una tras otra. Cuyo se somete y Sarmiento asume el gobierno de San Juan después de un simulacro de elección. Desde allí no cesa de pedir cañones y pólvora para continuar la guerra. El 21 de enero de 1862 le escribe a Mitre: “lo que es necesario de su parte hacer es lo siguiente: dejar aquí de guarnición el 8 de línea, *compuesto de enganchados extranjeros y otros*”. . . ¡Los criollos no son seguros! Poco tiempo después le comunica: “Me he apoderado del convento de la Merced para cuartel”.

* * *

Mientras tanto, ¿qué hacía el General Mitre?

En su condición de jefe indiscutido de la facción triunfante, que representaba la peor entre las opiniones que dividían a la República, justo es reconocer que observaba una conducta fría y serena que lo libraba de ceder a la presión de los exaltados de su círculo. El demagogo de las sesiones de junio y de la revolución de setiembre se había acendrado en la dura experiencia de la derrota, ganando perfiles de político consumado, que sólo era de lamentar no obedeciera a más altas inspiraciones. Había empezado por indultarlo a Urquiza (después de haberlo definitivamente marcado con elogios, hasta hacerle creer que era una estatua viviente), con lo cual se había asegurado por lo pronto la neutralidad, que luego sería apoyo, del litoral. Logrado así el desequilibrio de fuerzas a su favor, proseguía cautamente su plan de conquista del poder: Vélez Sársfield y Sarmiento le habían reprochado su blandura. El primero escribió a raíz de Pavón su famoso artículo “Batalla ganada, general perdido”, que lo heriría

en el alma; el segundo había pedido para Urquiza "Southampton o la horca". Igual conducta seguiría Mitre a raíz de la guerra que recrudecería en el norte, motivada por los atropellos de los Taboada a las provincias vecinas, que enconaba un hervidero de pleitos interprovinciales. En diciembre de 1861, habían invadido Tucumán, derrotando en Ceibal al general Gutiérrez y provocando un cambio en la situación local y pocos días después, habían vuelto a batirlo en el Manantial. La guerra seguía en pie con la intervención del fuerte caudillo de los Llanos, general Peñaloza, quien simplemente se defendía de las depredaciones que acompañaban a toda invasión de aquéllos. Contra la opinión de Sarmiento, que sólo respiraba guerra y exterminio, Mitre decidió intentar negociaciones de conciliación, a cuyo efecto envió en misión al norte al coronel doctor Marcos Paz. Trataba de neutralizar a Peñaloza como lo había hecho con Urquiza.

Desde diciembre de 1861 el país carecía de gobierno nacional. Era necesario reconstruir las autoridades en circunstancias en que todo el territorio se hallaba convulsionado por la guerra civil. El 19 de dicho mes y año, la provincia de Córdoba, ya bajo la ocupación militar del general Paunero, dictó una ley por la cual se le encargaba al gobernador de Buenos Aires el desempeño del Ejecutivo Nacional y la convocatoria de un Congreso. El 11 de marzo del año siguiente, la Legislatura provincial autorizó al gobernador a aceptar dicha designación. Se pudo lograr al fin la adhesión de diez provincias y la Legislatura hizo la proclamación del general Mitre en esa calidad.

Entre tanto, se habían realizado elecciones nacionales para el Congreso, que inauguró solemnemente sus sesiones el 25 de mayo. Las elecciones, realizadas en todas partes al amparo de las armas triunfantes del ejército porteño, junto a los campos humeantes de la sangre "montonera" vertida en las últimas ejecuciones, tenían que dar necesariamente el resultado "de un color", que reclamaba el general Manuel Taboada.

La reunión del Congreso en Buenos Aires planteaba nuevamente el viejo problema de la capital definitiva de la República, naturalmente postergado en la época de la secesión. Ya se había insinuado en la Legislatura de la provincia cuando se decidió la convocatoria. El general Mitre se inclinaba a la solución rivadaviana; que suscitaba los viejos resquemores porteños. Toda la oposición latente al régimen encontró nuevamente una bandera de lucha en la resistencia violenta a la solución que se anunciaba.

La cuestión se inició a raíz de expresiones del ministro de gobierno don Eduardo Costa en el sentido de que el P.E.N. no podría realizar sus propósitos ni asegurar su estabilidad si carecía

de los recursos de Buenos Aires. Este simple enunciado provocó inmediatamente una escisión en el partido liberal, entre quienes se inclinaban a la federalización, que se llamarían por ello "nacionalistas", y los defensores a todo trance de la integridad de la provincia y que se calificaron de "autonomistas". Se sometieron varios proyectos al Congreso, desde el que pretendía erigir la capital en San Fernando hasta el que federalizaba la zona de San Nicolás de los Arroyos y una faja del sur de Santa Fe. Después de largas discusiones en el Senado y en la Cámara, se votó la ley propiciada por el P.E.

Inmediatamente se produjo la escisión del partido, seguida de tumultos e incluso de luchas callejeras entre autonomistas, o "crudos", y mitristas, a quienes por oposición se llamó "cocidos". La ley nacional debía ser sometida a la Legislatura de la Provincia. La violenta resistencia de don Adolfo Alsina, que invocaba la tradición autonómica del dorreguismo, hizo que fuese rechazada.

Había, no obstante, que adoptar una norma de convivencia, porque al fin y al cabo la República necesitaba tener una localidad en que residiera su gobierno general. Se puso aquí nuevamente a prueba la aptitud conciliatoria de Mitre, quien inició conversaciones con los miembros de la oposición a fin de llegar a un acuerdo. El resultado fue la "ley de compromiso o residencia", por la cual el Congreso designó, el 1° de octubre, el municipio de la ciudad de Buenos Aires como "residencia de las autoridades nacionales", y que, aprobada por la Legislatura de la provincia, se promulgó una semana después como ley de la Nación.

A todo ello se había realizado por el Congreso el escrutinio de las elecciones para la primera magistratura de la Nación, resultando electo, "por unanimidad", el general Mitre. Esta unanimidad sospechosa en momentos en que subsistía la guerra civil en el interior, confirmaba la predicción de Taboada y el éxito de la "pacificación" mitrista, por lo menos en los procedimientos electorales.

Con el ascenso de Mitre a la presidencia, la guerra civil seguía, no obstante, en el norte y noroeste, en estado latente y con estallidos esporádicos. A su causa originaria se añadía el rencor suscitado por la bárbara acción represiva del ejército porteño y la agravación de viejos pleitos interprovinciales por obra de los Taboada, principalmente, que ejercían en gran escala la industria

de la invasión a las provincias limítrofes. Refiriéndose a una de estas invasiones, escribía uno de los corresponsales del presidente: "Lo que se puede asegurar es que, donde pisen los santiagueños, el campo ha de quedar arrasado y que Catamarca va a tener que pagar los costos y las costas".

Vale la pena que nos detengamos un poco en este fenómeno de la "montonera", reducido por nuestra mitología histórica a mera expresión de bandidaje de masas inadaptables a la vida civilizada. Era en esencia la misma defensa de la libertad local e individual que se produjo en tiempos de Quiroga, contra una nueva tentativa "unitaria" emprendida bajo la máscara del federalismo institucional. Se defendían los mismos principios autonómicos y luchaban los mismos hombres. Con más títulos todavía que antes, puesto que los derechos que invocaban estaban reconocidos por la Constitución que acababa de darse el país.

El interior era "federal", con todas las implicaciones tradicionales del término, y había vivido satisfecho y próspero en tiempos de Rosas. Salvo alguna que otra excepción, gozaba de gobiernos buenos, cuando no excelentes, impregnados de espíritu paternalista, inherente al sistema y que se adecuaba al temperamento nacional. Todos se habían plegado, según vimos, con diversos matices de resignación, al hecho consumado de Caseros, al que la mayoría sólo consideró como un fenómeno local de Buenos Aires, que les atañía accidentalmente. Su actitud frente a él se resumía en la frase del gobernador de San Luis, general Lucero, en el Acuerdo de San Nicolás: "Si vienen a pelear, pelearemos; si vienen a tratar, trataremos". El gran acierto de Urquiza consistió en optar por el segundo término del dilema.

Pero los liberales habían ido "a pelear".

En las manos de Mitre estuvo, sin duda, la posibilidad de restablecer inmediatamente la paz después de Pavón, con el mismo sistema de su antecesor, que implicaba reconocer la legitimidad de las situaciones interiores. Ello le habría significado probablemente, el sacrificio de su ambición presidencial a cambio del ahorro de sangre argentina. Pero el partido que lo seguía, ávido de usufructo, no lo habría permitido. Los emigrados querían el arrasamiento *manu militari* de las situaciones del interior y su reemplazo por otras adictas. El tremendo atropello que ello implicaba, en plena época "constitucional", se cohonestaría mediante la difamación del adversario, motejando de salteadores y bandidos a los ciudadanos que se armaban y resistían en defensa de su libertad. Estos serían, en el lenguaje oficial, los enemigos de la libertad; y los verdaderos liberticidas, "libertadores".

El asesinato de Benavídez en San Juan y luego, en la misma provincia, el de Virasoro, así como las permanentes intrigas inter-

nas alimentadas por los agentes de Buenos Aires, habían mostrado a los federales del interior el verdadero cariz de la operación que se iniciaba, preparándolos para la resistencia.

¿Quiénes eran estos federales del interior, estos "mazorqueros", estos bandidos? Vamos a recurrir deliberadamente a un testimonio mitrista: el de don Régulo Martínez, mandado al interior en misión oficial después de Pavón por el mismo general Mitre, a quien escribe. "Esta provincia, señor —le comunicaba desde La Rioja— tiene un solo hombre decente, que pertenece a la antigua nobleza de La Rioja, que fue gobernador en tiempos de Rosas y de Urquiza. Este hombre es don Vicente Bustos. Si llegara al gobierno de La Rioja apoyado por el gobierno nacional, yo le aseguro a S.E. que la provincia habría de cambiar, porque este hombre tiene dadas muchas pruebas de valor y es, por otra parte, quizá el único hombre de administración que La Rioja tiene". Oigamos lo que escribe desde Catamarca: "Esta provincia es esencialmente federal. El partido liberal, muy diminuto, está completamente dividido, mientras que el partido de Navarro se encuentra en pie y compacto. ... Este señor tiene verdaderamente títulos para merecer el prestigio que tiene, y es muy sensible que la guerra injusta que llevó contra Tucumán lo haya perdido para esta época, pues él creyó, como muchos otros, que después de la batalla de Pavón podía continuarse la guerra con buen éxito en el interior. Navarro es un hombre rico y amigo de su provincia como ningún otro. Ha hecho mejoras que se pueden ver y palpar y de esto están convencidos todos los catamarqueños, hasta sus propios enemigos". De Peñaloza, a quien trata con menosprecio, afirma no obstante, en otra carta, que es "un buen hombre".

El caudillo más fuerte de los Llanos, contra el cual se estrelaban las tentativas opresoras de las tropas porteñas y sus aliados era, en efecto, el general don Angel Peñaloza, llamado "El Chacho". De vieja familia fundadora de La Rioja, Peñaloza tenía una larga carrera de luchas y había ganado todos sus grados en el campo de batalla. Teniente coronel con Facundo Quiroga, lo había acompañado en todas sus campañas, sirviendo luego a las órdenes de Brizuela, con quien entró en la coalición del Norte. Sabemos que este cambio de frente del gobernador de La Rioja obedeció a la falsa versión unitaria que le achacaba a Rosas el asesinato de su viejo jefe. Después de Rodeo del Medio el Chacho debió emigrar; pero poco tiempo después efectuó una nueva entrada al territorio, en la que llegó hasta la ciudad de Tucumán, siendo vencido y emigrando nuevamente. Años más tarde por no poder vivir lejos de su patria, volvió a San Juan, acogido a la proverbial generosidad de su antiguo enemigo, el general Benavídez, quien lo recibió y retuvo a su lado con todos sus grados y hono-

res, que tal era el comportamiento caballeresco de los caudillos "bárbaros". En esta situación lo había encontrado el cambio que subsiguiera a Caseros. El Congreso de la Confederación le había confirmado el cargo de general en el orden nacional y encomendado el puesto de segundo jefe del ejército de Cuyo.

Tal era el hombre que encabezaba la resistencia a la opresión porteña y sus aliados y a quien Sarmiento y los jefes del ejército de Paunero calificaban de "bandido" en sus partes. El no quería la guerra, y lo proclamaba; no hacía más que defender su tierra y sus derechos. "Sólo queremos —le escribía a Mitre en enero de 1862 el gobernador de Catamarca don Samuel Molina— no ser invadidos por tropas irregulares (las de Santiago), autorizadas para todo exceso, donde ni el honor de nuestras familias está garantido. El general Peñaloza está animado de los mismos sentimientos...".

La predisposición conciliatoria de Mitre lo llevó a intentar un acercamiento, para el cual sirvió de intermediario, entre otros, el obispo de Paraná, monseñor Luis S. Gabriel, y se llegó a un convenio que se concretó en "Las Higueritas". Sabido es lo que allí ocurrió, pues lo han contado muchos sin ser desmentidos, principalmente Hernández en su *Vida del Chacho*. A raíz de la concertación de paz, Peñaloza propuso la devolución de prisioneros, e hizo traer a los que había tomado en el campo de batalla, sin que faltase uno solo. Los jefes porteños quedaron confundidos y avergonzados y se miraron, sin contestar palabra. No tenían prisioneros. ¡Los habían matado a todos!

Agréguese a esto lo que ocurría con los gobernantes unitarios, impuestos por la presión de las armas porteñas. Don Luis Molina había sido elegido por Sarmiento (carta a Mitre del 2 de enero de 1862) para la gobernación de Mendoza. Entró a sangre y fuego en los valles, donde habitaban familias agricultoras sospechosas de participación en las montoneras. "No trasladó la población —escribe el teniente coronel don Lino Almandos—, pero les quitó a las familias los hijos de ambos sexos, los que se hallaba repartidos en diferentes puntos; ... fusilaron cuatro, sin formación de causa, de los que se presentaron al llamado de los comandantes Páez y Flores. ... Arrearon hasta el otro lado de Las Lagunas, provincia de San Juan, y me han asegurado que parte de estos ganados engrosan los puestos del gobernador Molina; lo que me consta por haberse oído al propio gobernador Molina; a mi presencia le dio orden al mayor Flores que le apartase una pareja de caballos para su carruaje y seis chinitas para regalar. ..." ¡Sin duda, con la intención de civilizarlas! Estos procedimientos de tolerancia indígena no eran más que una manifestación exagerada de los sentimientos expresados en los escritos de Sar-

miento y Alberdi con respecto a la población autóctona y debían provocar las condignas reacciones.

*¡Y después dicen que es malo
el gaucho si los pelea!*

diría luego el autor del *Martín Fierro*, marcando a fuego la iniquidad mitrista.

La tregua no podía durar y ya veremos que se quebró al poco tiempo. No podía durar porque los gobernadores de provincia impuestos contra la voluntad de las poblaciones, empezando por Sarmiento en San Juan, vivían en zozobra permanente por la proximidad de las provincias federales. La vecindad del Chacho les quitaba el sueño, y la amenaza de la "montonera" vengadora. Las cartas de Sarmiento a Mitre son un clamor por el envío de armas y refuerzos. Por otra parte, los Taboada no podían vivir sin el ejercicio de su provechosa industria de invasiones y cuatrerismo y serían los primeros en quebrar la tregua. Por lo que respecta a estos caudillos, no está de más transcribir aquí la opinión que da sobre ellos el honrado mitrista don Régulo Martínez y que contrasta con la que emitía sobre los caudillos federales de La Rioja y Catamarca, "Tengo la prueba de la mala conducta de los Taboada —dice en carta del 17 de marzo de 1863— y quién sabe si esto no sea para el futuro un bien, pues que estos hombres, con más valor y talento, han podido ser dueños del Norte, mientras que, por su cobardía y malos manejos, han perdido el amor de este pueblo y la preponderancia del Norte. Hay veces que creo... que no se debe tener gran confianza en estos hombres".

La operación de Buenos Aires no se manifestaba solamente para las provincias en el aspecto político, sino también en forma de ruina económica.

Hemos visto la importancia que para las provincias del noroeste argentino —justamente, las de la "montonera"— tenía la industria del tejido. Esta industria entra en crisis y empieza vertiginosamente a decaer después de Caseros, a causa de la nueva política económica de los dueños del puerto de Buenos Aires, lanzados a un librecambismo desenfrenado. "La industria del tejido —escribía en 1859 Martín de Moussy— disminuye día a día a causa de la abundancia y baratura de los tejidos de origen extranjero que inundan el país y con los cuales la industria indígena, operando a mano y con útiles simples, no puede luchar de manera alguna". Igualmente desaparecían los algodonales y los arrozales del norte.

Con el empobrecimiento general, cundía la usura ("la usura que consume a estos pueblos", escribe Régulo Martínez), que significaba naturalmente el estrangulamiento y la desposesión de los pequeños propietarios criollos por obra del prestamista (quien sería por cierto, el comerciante vinculado al puerto, el importador de mercadería inglesa, jefe del partido liberal o de alguna de sus fracciones, mitrista, desde luego, y civilizador). Este proceso, lento y gradual como una infección, pero sin término y con víctimas a millares, cambiaría en pocos años la fisonomía social del norte haciendo de provincias ricas miserables desiertos y un proletariado famélico de lo que era la clase sana, digna y afincada de artesanos, agricultores y ganaderos, que se armaban y equipaban a su costa para defender, en la "montonera", su tierra y su libertad.

VI. MITRE - EL PRECIO DEL PROGRESO

Las circunstancias en que Mitre asumió el gobierno eran graves en el mundo occidental. Europa estaba conmovida por las luchas nacionales de Italia y Alemania en procura de su unidad. Garibaldi atacaba Roma y fracasaba en Aspromonte. Grecia se convulsionaba y los siervos obtenían en Rusia su estatuto de liberación. Los Estados Unidos de Norte América se hallaban divididos por sangrienta guerra civil y Napoleón III aprovechaba la coyuntura para adquirir posesiones en América. Con el pretexto de la deuda mexicana invadía México con ayuda de España y luego, por excusación de ésta, con sólo su ejército: triunfante, impondría dos años más tarde el efímero imperio azteca del archiduque Maximiliano de Austria.

Con poco más de cuarenta años, es decir, en pleno vigor de su edad, se abría en esos momentos para el general Mitre la posibilidad de hacer un gran gobierno. Recibía un país enfermo y extenuado, que se hallaba entregado a su merced. La oposición interna estaba vencida; su jefe presunto, enclaustrado en su feudo, no quería sino obedecer. Los testimonios de la época concuerdan en reconocer la expectativa simpática que rodeó el advenimiento al gobierno del caudillo liberal, que venía con tanto ímpetu y profería tantas promesas. Todo el mundo quería la paz y colaborar en ella, desde la oposición alsinista de Buenos Aires hasta Peñaloza y sus hombres de los valles riojanos.

Si Mitre hubiera sido realmente un gran hombre, la grave responsabilidad de que se encontraba investido lo habría hecho sobreponerse a las pasiones recientes del demagogo y del guerrero, para elevarse al plano del estadista, según ejemplos ilustres de la historia. Estaba en sus manos curar las heridas de la patria y presidir su recuperación. Bastábale retomar las grandes líneas internas y externas de la acción de Rosas, adaptándolas al nuevo orden institucional y a las exigencias del progreso técnico cuya hora había llegado en el mundo; o sea, mantener con firmeza la política de la independencia y la unidad, inspirada en la idea republicana, que era la mejor tradición de la patria, para recuperar la hegemonía en la cuenca del Plata perdida en Caseros. Lo cual no contradecía, sino que hubiera favorecido la aspiración proclamada de incorporar a la República las ventajas de la civili-

zación europea. Con ello habría restaurado su unidad espiritual y geográfica, devolviéndole la conciencia de su destino y poniéndola en condiciones de hacerse grande y fuerte; y habría logrado la gloria auténtica de los reconstructores y los fundadores.

No lo hizo el general Mitre. La experiencia lo había convertido en un político cauto y sagaz, hábil para la maniobra oportuna que constituía la clave del éxito; pero le había negado las grandes iluminaciones del estadista. Llegado a la presidencia de la Nación, seguía siendo el ideólogo de siempre; y lo que era peor, el emigrado, imbuido aún de las ideas que había escuchado de labios de don Florencio Varela, en lo más recio de la campaña contra la independencia argentina. Por lo cual, lejos de retomar la línea de la política salvadora, actuó como su permanente contradicción.

Mientras toda América se estremecía de indignación por el ataque francés a México, el ministro de Mitre en París, señor Balcarce, banqueteaba a los traidores mexicanos que allá negociaban la entrega al emperador impuesto. Dos años más tarde, la escuadra española bombardeaba Valparaíso, provocando la solidaridad de todas las repúblicas hermanas de Chile; el general Mitre declaró que este episodio no nos incumbía de ningún modo, porque estábamos más cerca de Europa que de América. Al mismo tiempo permitía la desenfadada intervención brasileña en el Uruguay y preparaba la alianza con el Brasil para sacrificar sin piedad a los hermanos paraguayos. Quería demostrar así que sabía servir mejor que Urquiza los intereses del poderoso vecino.

Con todo ello, pasado el primer momento de tregua y expectativa, la guerra civil volvería a desatarse en el interior, más enconada y feroz que nunca y no cesaría durante todo el tiempo de su presidencia.

* * *

A los pocos meses de asumir el mando el general Mitre, se produjo la revolución uruguaya, encabezada por el general don Venancio Flores, contra el excelente gobierno blanco del presidente Berro.

El general Flores, dado de alta en el ejército de Buenos Aires, había acompañado a Mitre en Pavón y dirigido luego la ocupación de Santa Fe, venciendo a Virasoro en Cañada de Gómez. Su expedición se había preparado en Buenos Aires, donde funcionaba incluso en forma pública una oficina de reclutamiento, y la auspiciaba con calor la prensa mitrista. El partido colorado era, como se recordará, el aliado tradicional de

los emigrados y del partido unitario, mientras que sus adversarios respondían a la tradición de Oribe. Las protestas del gobierno uruguayo ante el argentino fueron rechazadas por el ministro de relaciones exteriores, doctor Elizalde, quien negó que hubiera habido apoyo gubernativo a Flores y explicó los desbordes periodísticos por la libertad que, en esa materia, era aquí la ley.

La guerra civil en el Estado Oriental repercutió en esta orilla con la división de las simpatías públicas entre las respectivas banderías. La cuestión no podía ser ajena y suscitaba los viejos reflejos partidarios. La opinión federal se inclinó hacia el gobierno amenazado, al que el general Urquiza, desde su feudo de Entre Ríos, incluso ayudó con armas y hombres, aunque sin tomar actitudes públicas que pudieran enfrentarlo al gobierno nacional.

Se suceden laboriosas negociaciones, en las que intervienen el ministro Elizalde y el enviado brasileño, tendientes a obtener la paz por el sometimiento del gobierno uruguayo a las exigencias del jefe en armas, que implican la entrega de la situación. Flores no tiene, en realidad, fuerzas para triunfar por sí solo; su empresa, que ensangrienta el territorio, está jalonada de contrastes. Necesita el apoyo extranjero. Brasil, por su parte, no puede admitir la injerencia argentina en el Uruguay; busca el consabido pretexto de las injurias a sus connacionales de la frontera, y envía un ultimátum, cuyo rechazo le da motivo para la intervención armada. La tercera, después de Caseros.

El general Mitre, no obstante la militancia ostensible de su partido en el conflicto, mantenía una actitud de neutralidad teórica que no engañaba a nadie y en cuya virtud permaneció impasible ante el irritante atropello brasileño; que se limitó a "lamentar". Como antes Urquiza, se mantenía indiferente a la prescripción del tratado de 1828, que nos hacía garantes de la independencia uruguaya, dejando al gobierno brasileño el "beau rôle" de defensor de esa independencia, que se suponía amenazada por nosotros. Así lo afirmaban sus voceros en las Cámaras, al justificar su política intervencionista. El ejército del Brasil entró sin obstáculos en territorio uruguayo para apoyar a Flores, y la escuadra del almirante Tamandaré se posesionó de las aguas del Uruguay.

* * *

Entre tanto, había muerto el presidente del Paraguay don Carlos Antonio López y su hijo, el mariscal don Francisco Solano López, había sido elegido para sucederlo.

La situación interior del Paraguay, flanqueado por vecinos poderosos, con fronteras no determinadas todavía por tratados, habíale impuesto una política de fortalecimiento interno y de militarización rigurosa. Su ejército primitivo de 5.000 hombres, con 20.000 de reserva, había sido elevado en 1857, por el extinto presidente, a 18.000 y 48.000. El país poseía arsenales y fábricas de pólvora, y se acababa de construir un ferrocarril, iniciado en 1859, de Asunción hasta Paraguairí. Contaba, además, con una línea telegráfica sobre una distancia de trescientos kilómetros, y con sólidas fortificaciones, que podían cerrar el paso del río Paraguay y del alto Paraná.

«Era evidente que la república del Paraguay, con su independencia recién reconocida, representaba una fuerza considerable en esos momentos y con mayor preparación bélica que la Argentina empobrecida y anarquizada. Su desarrollo y su potencia, lograda con una política de regulación del comercio y del fomento de sus propios recursos, muy similar a la del Restaurador, significaba un desmentido rotundo al sofisma liberal que hacía del comercio libre la condición necesaria del progreso.

El mariscal López, que había tenido la actuación que conocemos a raíz de Cepeda, no podía quedar indiferente a los problemas del Plata, ni a la intervención de los vecinos en los asuntos uruguayos. Desconfiaba de las intenciones del Brasil y de la actitud del general Mitre, pues suponía que un entendimiento de éste con el Imperio sobre el territorio uruguayo podía significar para su país una futura amenaza. Su política se concentraba en la fórmula del "equilibrio" de poder, el cual peligraría en el caso de un crecimiento desmedido del Brasil o de la Argentina. Para mantenerlo inició, desde luego, una larga y laboriosa gestión diplomática ante el gobierno uruguayo, Río de Janeiro y Buenos Aires, exponiendo sus puntos de vista y exigiendo explicaciones, con la advertencia de que no aceptaría ninguna medida bélica contra el gobierno de Montevideo. No olvidaba conservar contacto con su amigo el general Urquiza, cuya simpatía por los "blancos" lo mostraba como un aliado posible.

Con Elizalde, Rawson, Vélez Sársfield y Costa en su gabinete, el general Mitre, acompañado de Cámaras adictas, había dado comienzo con gran impulso a su programa "civilizador", que se tradujo desde luego en numerosas reformas de carácter administrativo, en el aumento de algunos kilómetros de líneas ferroviarias (inglesas), y en otras mejoras en materia de inmigración

y colonización, que no era más que la exigencia ineludible de los tiempos nuevos. El país había aumentado en un tercio su población en la última década y era necesario acompañar ese ritmo con la tarea rutinaria del ajuste, que no constituye una gloria especial para ningún gobierno, sino su función normal de órgano de administración. La nación crecía y se desarrollaba por impulso propio; y realmente ese progreso —notable sobre todo en Buenos Aires y sus inmediaciones— tenía algo de sorprendente, que no era cosa de la Argentina, ni de su régimen, sino del siglo. Como Buenos Aires, crecían las ciudades europeas y caían en éxtasis ante los nuevos hallazgos de la técnica —ferrocarril, telégrafo, iluminación a gas—, sin que pensaran atribuirlo ni Francia a su Emperador, ni Roma a su Papa.

El sofisma nacional que atribuye al auge del liberalismo después de Caseros el progreso del país, es el conocido sofisma (*post hoc, ergo propter hoc*) que atribuye causalidad a la mera coincidencia: el del gallo de Rostand, que creía hacer salir el sol con su canto. La verdad es que ese tipo de desarrollo es indiferente a los regímenes y se da históricamente en todos, por lo cual tampoco implica mérito. Para juzgarlos, no debe, pues, tenerse en cuenta dicho factor, sino la orientación política general.

Y en este aspecto, no sólo no habíamos progresado, sino que habíamos retrogradado, de tal modo que los nuevos esplendores con que se encandilaban los panegiristas del régimen no eran más que una apariencia falaz, que encubría una realidad cada vez más pobre y más triste.

El país, en realidad, se empobrecía, crecía anémico, se "iba en vicio" como las naturalezas entecas. Estaba siendo despojado de su energía vital en favor de ese progreso de tan brillante fachada pero que encubría un sistema parasitario y destructor de la verdadera riqueza espiritual y material.

Ya vimos el progreso efectivo que se había sentido en la época de la Confederación, fundado en las medidas protectoras de la industria nacional que se aplicaron por medio de aranceles de Aduana. Según el censo de 1853, Buenos Aires (un "vasto taller industrial", al decir de Martín de Moussy) tenía 106 fábricas montadas, entre ellas dos fundiciones, una de molinos de viento y varias de velas, tafiletes, pianos, jabones, cerveza y carruajes; además, 743 talleres y 2.000 casas de comercio. La industria del tejido en el interior, así como la viñatera y algodonera, estaban en pleno florecimiento, y cada población del interior se bastaba a sí misma en infinidad de artículos. La industria era incipiente, pero sólidamente establecida y en pleno crecimiento. Sólo faltaba ir acrecentándola y perfeccionándola con los aportes del progreso técnico, a medida que las circunstancias lo exigieran.

Ahora bien, ¿qué ocurriría después de Mitre? "Jamás ha estado tan pobre nuestro comercio —escribía don Vicente Fidel López en 1871, tres años después de terminar aquél los seis de su presidencia—: *jamás han estado tan abatidas nuestras industrias de producción*; jamás la empleomanía ha sido un anhelo más vivo y más desesperante. . .". Ello probaba, a su juicio, "nuestra pobreza social y *nuestra ineptitud para levantar con nuestra industria las riquezas que Dios ha dado a nuestro suelo*". "Todas las demás industrias (exceptuando la ganadería) son tan rudimentarias y tan escasas en su producción que puede decirse que no se hallan ni se pueden hallar en el mercado: son curiosidades, objetos raros. . .". Y finalmente, indicaba la causa. "Este es el resultado de nuestras leyes administrativas; y precisamente lo es por las leyes y por la política que ha pasado hasta ahora entre nosotros como la más liberal y la más adelantada: *la absoluta libertad del comercio de cambio*".

Es de advertir que en 1862 el error intelectual era apenas posible. Veinte años antes había publicado Federico List su *Sistema de Economía Nacional*, discutido en todo el mundo civilizado y en el que probaba que el libre cambio sólo convenía a las potencias fuertemente industrializadas en sus relaciones con las agrícolas-ganaderas. El libre cambio a la manera de Adam Smith y Cobden, de cuya aplicación había hecho el general Mitre la razón de su vida, era a la sazón doctrina solamente exportada con éxito por los ingleses a los negros de sus colonias, junto con las cuentas de vidrio coloreado y otros instrumentos de proselitismo. Los Estados Unidos, en cambio, habían optado por la protección —de donde su rápido y triunfal desarrollo—, así como la naciente Alemania.

A la ruina de nuestras industrias — y el consiguiente desánimo de nuestros productores (que se convertían en aspirantes a puestos públicos, como dice López)— correspondería la correlativa inundación de nuestros mercados por mercadería extranjera, principalmente inglesa, para deleite de los elegantes "porteños".

* * *

Era natural que, pasado el primer momento de expectativa, la guerra civil volviera a encenderse en el interior, motivada en el cariz de la nueva política y en las provocaciones de los agentes del gobierno nacional.

En los primeros meses de 1863 se rompe la tregua y se conflagra el noroeste. Peñaloza se pone en pie de defensa, dispuesto a resistir y empieza la lucha de la "montonera" contra las fuer-

zas de línea del ejército nacional, destacadas para sostener a los gobernadores intrusos. Se combate en La Rioja, en Catamarca, en Mendoza, en San Luis, en multitud de acciones que alcanzan grandes extremos de ferocidad y donde las fuerzas regulares se desesperan ante un enemigo que combate con táctica peculiar, atacando por sorpresa y dispersándose luego, para reconstituirse y volver a atacar en la forma más inesperada. Los gauchos combatientes siguen a diversos caudillos, tenientes del Chacho o jefes autónomos, muchos de los cuales degeneran en meros salteadores, por afición o desesperación; pero que en su mayor parte pelean en defensa de su tierra y sus hogares por patriotismo, y obedecen a normas de honor. El general Peñaloza es el caudillo indiscutido de casi todos, y ya conocemos sus antecedentes y su conducta en la guerra. En esta ocasión, el Chacho pelea con encarnizamiento, dispuesto a vencer. En un rápido contraataque llega hasta Córdoba, apoderándose de la ciudad.

«Pelean ¿esperando qué? Esperando que Urquiza se pronuncie y se ponga al frente de la reacción argentina y federal. Saben que la lucha se ha encendido en el Uruguay, que Urquiza y Mitre están en campos opuestos, que López es amigo de Urquiza y que Mitre apoya a los "brasileros". Creen que ha llegado la ocasión para una reacción salvadora y efectivamente reciben de tiempo en tiempo, por diferentes conductos, la noticia de que al fin el caudillo de Entre Ríos se ha pronunciado y se moviliza. Pero el caudillo entrerriano permanece quieto en su palacio de San José. Está rico y gordo. ¿Para qué habría de pronunciarse?

Sarmiento se ha erigido en director de la guerra en San Juan y expide órdenes de aniquilamiento y exterminio.

La suerte se le da vuelta al Chacho que ha desesperado al fin de la ayuda de Urquiza. Paunero lo derrota en Las Playas el 26 de junio de 1863. Y en Caucete, el 30 de octubre, vuelve a ser vencido, con un puñado de partidarios, por el mayor Irrazábal, de la división comandada por el general Arredondo. Se refugia en Olta, donde es buscado y muerto, después de rendido.

"Los salvajes unitarios están de fiesta —escribía en esos días, en 'El Argentino', un joven periodista, testigo angustiado de las desdichas nacionales, que se llamaba José Hernández—. Celebran la muerte de uno de los caudillos más prestigiosos, más generosos y valientes que ha tenido la República. El partido federal tiene un nuevo mártir. El partido unitario tiene un crimen más que escribir en la página de sus horrendos crímenes. El general Peñaloza ha sido degollado. El hombre ennoblecido por su inagotable patriotismo, el Viriato argentino ante cuyo prestigio se estrellaban las huestes conquistadoras, acaba de ser cosido a puñaladas en

su propio lecho, degollado y su cabeza ha sido conducida, como prueba del buen desempeño del asesino, al bárbaro Sarmiento”.

* * *

* Los acontecimientos de la Banda Oriental habrían de precipitarse en los últimos meses de 1864 y comienzos del año siguiente.

Con el ultimátum del Brasil al gobierno uruguayo, el mariscal López había vislumbrado cuál sería el desarrollo natural del conflicto y empezó a prepararse para la guerra, que juzgaba inevitable. Inútilmente trató de obtener de Mitre la condenación de los procedimientos brasileños y el cumplimiento, por parte de la Argentina, de las obligaciones del tratado de 1828. Mitre era neutral; Mitre quería la paz. La verdad es que no estábamos preparados para la guerra y que todas las fuerzas de que se disponía resultaban apenas suficientes para mantener sujetas a las provincias y guarnecer la frontera con la indiana. La neutralidad de Mitre tenía un doble aspecto: dejar, por una parte, manos libres al Brasil, que acudía en ayuda de Flores, el amigo común, y mantener adormecido a Urquiza, a quien se le había vuelto a despertar tardíamente su antiguo reflejo antibrasileño de buen federal, ante el sacrificio de sus amigos “blancos”.

Aunque jurídica y oficialmente neutral, el general Mitre distaba mucho de serlo en sus predilecciones. Su estirpe unitaria lo predisponía a la atracción por el Brasil, teatro de algunas de sus expansiones de proscripto; era amigo del Emperador, quien lo había condecorado; consideraba que su régimen era una “democracia coronada”, salvo el pequeño detalle de la “institución peculiar” de la esclavitud negra, y profesaba que, de todos modos, la civilización y el “adelanto” estaban en esta parte del mundo, representados por el Imperio. Además, el Brasil ayudaba a su amigo uruguayo, que era el general Flores. En cambio, el Paraguay era una dictadura, para peor, ¡monopolista! Su estado de “barbarie” lo llevaba a congeniar con los blancos y con Urquiza. Era urgente encauzarlo cuanto antes, aunque fuese a la fuerza, por las vías del comercio libre, o sea de la civilización.

Estos sentimientos presidenciales, reflejados en su prensa adicta, en la que menudeaban las pullas sobre el Paraguay y su gobernante, habrían de influir en los acontecimientos que precipitarían nuestra entrada en la guerra inícuca: consecuencia de la previa alianza moral del gobierno de Mitre con la revolución colorada y con el Imperio.

VII. LA GUERRA INÍCUA

La entrada de las tropas brasileñas en el Uruguay y la ocupación primero de Melo y después de Paysandú (2 de enero de 1865), mientras Mitre se declaraba neutral en la “cuestión interna” que, según él dividía a los orientales, conmovió toda la región del Plata. La toma de esta última población, después de dos días de bombardeo por la escuadra brasileña a las órdenes de Tamandaré, indignó especialmente en la ejecución de su heroico defensor, el general Leandro Gómez, después de rendido. Muchos argentinos habían acudido al llamado del honor, para empuñar las armas contra el enemigo histórico, y la oposición enrostró airadamente a Mitre su manifiesta complicidad en las desgracias orientales y su tolerancia con el invasor.

Para entender cumplidamente las circunstancias de este período confuso de nuestra historia, hay que tener presentes los sentimientos de la época. No obstante la secesión uruguaya y paraguaya, la conciencia de la unidad se mantenía muy viva y aún existían, tanto en las provincias disidentes como en la Argentina, vastos sectores que consideraban esa situación como provisoria. Era demasiado reciente el recuerdo de las luchas comunes, y la solidaridad militante prevalecía sobre la separación política. El Uruguay no era *extranjero*. Mitre se sentía más afín con Flores que con Urquiza, y éste más solidario de los blancos que de Mitre. Tampoco era *extranjero* el Paraguay. Todo el interior —salvo los núcleos mitristas— vibraba de simpatía por el mariscal López en su apoyo al gobierno de Montevideo amenazado por el Brasil. “¿Aliarme con los *porteños*? Prefiero a Calfucurá”. Esta expresión del general don Ricardo López Jordán, segundo de Urquiza en Entre Ríos, caracterizaba la reacción federal. El “extranjero” era el Brasil. Como en las luchas de veinte años antes, se planteaba nuevamente el conflicto entre la opinión verdaderamente nacional, celosa de la integridad y la soberanía, y los unitarios aliados al extranjero.

No es de extrañar, pues, que la evidencia de la confabulación expresada provocara la consiguiente reacción argentina y que todas las miradas se volvieran hacia el general Urquiza como el candidato a encabezarla. Las reiteradas defecciones de éste debieron hacer pensar dos veces a los advertidos; pero los pueblos

son crédulos y no se cansan de esperar. No era inconcebible, por cierto, que el caudillo entrerriano, aleccionado por la experiencia y ante la posibilidad del éxito de la empresa, se decidiera a volver tardíamente por su honor. Además, era el único indicado para ello, por su posición y sus recursos.

En este sentido se habían iniciado, desde el estallido del conflicto, activas negociaciones. El plan consistía en provocar un levantamiento nacional encabezado por el caudillo de Entre Ríos, para aislar a Buenos Aires y apoyar, aliados a López, la resistencia del gobierno uruguayo contra el Imperio. A los primeros anuncios de este plan había respondido el levantamiento de Peñaloza y la invasión a Córdoba, trágicamente epilogada en Las Playas. Era evidente que Urquiza dejó hacer y que se mantuvo en permanente comunicación con el dictador del Paraguay. Los hombres de la antigua Confederación se conmovían ante las nuevas perspectivas y sólo esperaban para actuar la decisión del jefe.

Como era lógico, el gobierno del Uruguay no pudo soportar el empuje de la acción conjunta del general Flores y sus aliados brasileños. Después de una sangrienta resistencia, el presidente Aguirre debió renunciar, para ser reemplazado por Villalba al solo objeto de firmar la capitulación. Este acto se efectuó —por exigencia del almirante brasileño Tamandaré— el 20 de febrero de 1865 ¡aniversario de Ituzaingó! Por lo visto, el enemigo no se conformaba con el desfile triunfal de sus tropas por Buenos Aires en la misma fecha, después de Caseros, y quería infligirnos la humillación hasta el fin.

No lo sentía así el general Mitre. El mismo día le escribía a don José María Gutiérrez en los siguientes términos: "El general Flores ha coronado su obra empezada con tres hombres, terminada en Montevideo, probablemente hoy, aniversario de Ituzaingó. . . Ahora voy a dormir un poco más tranquilo. . .".

Las tropas de desembarco brasileñas guarneciendo los bastiones de su "Nueva Troya" velaban su sueño feliz.

* * *

El general Mitre seguía "neutral", por supuesto, aunque se apresuró a reconocer el resultado para él auspicioso de la cuestión uruguaya. El mariscal López, por su parte, que había declarado pocos días antes la guerra al Imperio, movilizó sus fuerzas contra Matto Grosso y Río Grande y capturó en las aguas del río Paraguay el barco "Marqués de Olinda", que conducía al gobernador del primer estado nombrado, cerrando la navegación para el país enemigo.

Los compromisos —que encubrían una alianza tácita— del presidente argentino con el Brasil eran demasiado visibles para que pudiese el dictador paraguayo llamarse a engaño. Fue por ello que se empeñó en obtener declaraciones categóricas sobre la conducta que asumiría en el futuro, con la intención de forzar al mismo tiempo el levantamiento argentino que esperaba. Invocando su estado de guerra con el Brasil, pidió permiso al gobierno argentino para trasladar sus tropas por una faja de nuestro territorio. Mitre se lo negó, alegando que ello constituiría violación de la neutralidad, y que el caso no podía parangonarse al tránsito "por agua" permitido al Brasil y, naturalmente, también al Paraguay. No era culpa suya que Paraguay careciera de escuadra y no pudiese disfrutar de la franquicia.

¿Qué era de Urquiza, mientras tanto? El caudillo presunto de la insurrección nacional, el hombre de quien se esperaba la voz de orden salvadora y en cuyo nombre se afilaban las lanzas del martirizado pueblo gaucha, mantenía una cordial y académica correspondencia con el general Mitre, quien lo colmaba de agasajos y le enviaba incluso subsidios. "Urquiza hará lo que se le diga" había asegurado el astuto porteño. Conocía bien a su personaje, y también el alcance de los pactos concluidos bajo el secreto masónico, en julio de 1861, en la logia "La Unión del Plata", del "valle" de Buenos Aires. En sus cartas, Mitre le exponía su política de "neutralidad". Por su parte, el hombre de Caseros lo prevenía contra la alianza brasileña, que tardíamente le parecía "odiosa". No advertía que la empresa que se preparaba pertenecía al mismo proceso "civilizador" iniciado por el Brasil en Caseros contra la Confederación y que se reproducía contra López, con los mismos medios e idénticos móviles. Dejando de lado estas filosofías, Mitre lo obligó al fin a aceptar que, independientemente de las preferencias personales, ambos debían actuar de consuno en defensa de la República, en el caso de que ésta fuese agredida por *cualquiera* de los beligerantes. El sofisma visible de Mitre consistía en equiparar la situación del Brasil con la del Paraguay, como si se tratase de *dos* países extranjeros. En equiparar la hermandad escindida, unida a nosotros por la sangre, el idioma y la historia comunes y cuyos actos no podrían ofendernos nunca, con el antiguo y permanente enemigo.

* * *

En esas circunstancias se produjo la declaración de guerra de López a la Argentina por su conducta inamistosa, la captura de barcos argentinos frente a Corrientes y la invasión de esta provin-

cia (14 de abril de 1865) por fuerzas paraguayas al mando del general Robles. El caso previsto por Mitre en su correspondencia con el caudillo de Entre Ríos.

Si ha de juzgarse esta acción por los resultados, fue evidentemente un error del mariscal López. Lo indujo a él, sin duda, su necesidad de forzar los acontecimientos y precipitar el levantamiento de la Mesopotamia que esperaba, creyendo en la firmeza de Urquiza. La invasión de Corrientes tendía a buscar contacto con sus presuntos aliados en la guerra contra Buenos Aires.

Lejos de obtener esos resultados, obtuvo precisamente los opuestos. Lo que tenía esa invasión de agresión gratuita provocó los naturales reflejos defensivos, aun entre los que simpatizaban con su causa, poniéndolo a Urquiza en el brete que le había preparado Mitre. La opinión federal se dividió en el estupor del momento y el caudillo de Entre Ríos debió viajar de inmediato a Buenos Aires (su Canosa) a hacer protestas de indignación y promesas de lealtad lo suficientemente intensas como para borrar sus manejos anteriores y notorios. Allí asistió como testigo entorchado y complaciente a la firma del tratado de la Triple Alianza, en el que desempeñaban la voz activa, junto con Mitre, el general Flores y el almirante Tamandaré, verdugos de Paysandú: Mitre lo apareaba por todas partes, como quien exhibe un tigre amaestrado. Debía soportar los desfiles patrióticos, los vivas al Brasil y aun las molestas indirectas contra los "traidores" en los discursos de la juventud porteña, que tenía una nueva guerra "civilizadora". Fue entonces cuando Mitre dijo, aludiendo a su sometimiento: "Recogemos los frutos de una gran política". Y también: "En tres días en los cuarteles, en tres semanas en el campo de batalla y en tres meses en la Asunción". ¡Ah, la oratoria de Mitre!

El tratado de la Triple Alianza certificaba la ruina del Paraguay. Brasil contaba 8.000.000 de habitantes y una renta de 20.000.000 de pesos fuertes. La Argentina 1.200.000 habitantes y una renta de 8.000.000. Uruguay, 350.000 habitantes y 2.988.000 pesos. El Paraguay contaba solamente con 600.000 habitantes y una renta de 1.200.000 pesos.

Con la mitad de Corrientes ocupada y una columna poseionada de Uruguayana, los paraguayos habían tomado la ofensiva, pero la falta de recursos los paralizó en esas posiciones extremas, donde esperaban todavía, sin duda, la ayuda prometida. El general Mitre, nombrado por el Tratado director de las operaciones de la guerra, instaló su cuartel general en Concordia. El Ejército de vanguardia que allí se formó a las órdenes del general Flores, vencería a los paraguayos en Yatay. Poco tiempo después, el general Mitre rendiría a las fuerzas invasoras en Uruguayana. Los

aliados avanzaron hasta el Paso de la Patria, donde los esperaba el grueso del ejército del mariscal López. Mientras tanto, la escuadra brasileña había entrado en acción en la batalla del Riachuelo, donde los paraguayos perdieron tres naves y 1.200 hombres.

Con la desocupación de Corrientes, en noviembre de ese año, por las fuerzas del general Resquín, terminó la primera etapa de la guerra, que se desarrollaría en adelante en territorio paraguayo.

* * *

La guerra seguía siendo impopular, no obstante, en todo el interior, a causa de la alianza brasileña. En la misma Buenos Aires se había levantado una violenta oposición, en la que llevaban la voz cantante don Miguel Navarro Viola, don Carlos Guido y Spano y don Juan Carlos Gómez, oriental y colorado. El gobierno los mandó a un pontón en la rada. El desprestigio de Mitre cundía vertiginosamente. De tal modo que cuando se trató de renovar la Legislatura triunfaron sus adversarios, dándole la gobernación de la provincia al doctor Adolfo Alsina, jefe del "autonomismo".

La guerra civil reapareció en el interior. Las provincias debían mandar sus contingentes para el ejército del Paraguay. La mayor parte de éstos, reclutados con el sistema de "levas" forzadas, no llegaron a su destino, sino que desertaron, plegándose en gran número a las "montoneras". Esto habría de ocurrirle al mismo Urquiza, antes omnipotente en su feudo. El ejército que reclutó para colaborar con Mitre, según los compromisos solemnes contraídos en Buenos Aires; el fiel, el sacrificado ejército entrerriano, siempre dispuesto a la pelea y a cargo de jefes y oficiales de lealtad proverbial, se sublevó y se dispersó en Basualdo y Toledo, no siendo los jefes y oficiales ajenos al episodio. Así manifestaba su protesta la masa anónima ante la torpeza de sus conductores. El esfuerzo de Urquiza por mantener su prestigio logró apenas el embarque a la fuerza de un batallón con destino al teatro de las operaciones.

No obstante la disparidad de fuerzas, la guerra se prolongaba de manera sangrienta, por la tenaz resistencia paraguaya. Los tres meses del general Mitre habían pasado con creces y aún los aliados no habían podido pisar el territorio del enemigo, defendido por la fortaleza de Itapirú. El abandono de esta posición por los paraguayos y el paso del río por las fuerzas aliadas se efectuó el 16 de abril de 1866. La guerra volvió a estancarse en las inmediaciones de Estero Bellaco con grandes privaciones para

126

los invasores, atrincherados en Tuyutí. Un ataque de los paraguayos a esta posición fue para ellos un sangriento revés en el que perdieron 13.000 hombres y 3.400 los aliados. Mientras tanto, la escuadra brasileña no avanzaba. Las baterías de Curupaítí habían echado a pique un acorazado de esa nación a mediados de junio. En los primeros días de setiembre cayó en manos de los aliados la posición de Curuzú.

Sintiéndose perdido, el mariscal López se inclinó a capitular y provocó la entrevista de Itaití Corá con el general Mitre. Ya que la guerra era contra su persona, ofrecía su retiro del mando a cambio de la salvación de su persona. Mitre no lo consintió, exigiendo el cumplimiento de los objetivos del tratado de alianza, que implicaba la sujeción y la desmembración del Paraguay, cosa que, desde luego, sólo favorecía al Brasil. Esta negativa condenaba a los paraguayos a la resistencia desesperada.

A los pocos días se produjo el sangriento ataque a la fortaleza de Curupaítí, ordenado por el general Mitre, en el que las fuerzas aliadas fueron rechazadas por las paraguayas perdiendo 9.000 hombres.

Con la noticia de este desastre, se hizo más violenta la oposición a la guerra en Buenos Aires. Salvo la prensa mitrista, todos los diarios pedían la iniciación de negociaciones de paz, a la vez que se interpelaba al gobierno en el parlamento. Contribuyó a acentuar esta inquietud la difusión de las cláusulas del tratado de alianza, que debía permanecer secreto, pero que fue publicado... en Londres, naturalmente. No había secretos para la diplomacia inglesa y ésta no tenía por qué respetar compromisos que sólo regían entre los combatientes. El tratado era la prueba del sometimiento de la política argentina a la del Imperio. Su publicación provocó una oleada de simpatía por el Paraguay en todo el mundo, como hacia una Polonia americana. Lo impugnó violentamente desde el extranjero el doctor Juan Bautista Alberdi, que iniciaba su cambio de frente ante la evidencia de los resultados de la política que había servido y que se encontraba en relaciones de respetuosa amistad con el Restaurador desterrado.

Al mismo tiempo se conflagraba nuevamente el interior. La montonera reaparece y los valles de la cordillera son un vivero de rebeldes. El general Sáa vuelve de su destierro en Chile y el coronel Felipe Varela, antiguo jefe de Urquiza, asume la sucesión del Chacho. Las provincias andinas se erizan de lanzas. Los criollos no quieren pelar contra sus hermanos paraguayos, sino contra el "déspota porteño", como lo llama a Mitre el joven poeta Olegario Andrade. Esa política no es "inorgánica" o meramente negativa, según la simplificación de sus enemigos, sino perfectamente positiva y lúcida y responde a las reacciones tradiciona-

les de las provincias. Cuenta con la simpatía de los núcleos cultos y el auspicio de la oposición porteña. Pero carece de medios materiales y a ellos se debe su fracaso.

Mitre debió volver a Buenos Aires después de Curupaítí, llamado por la situación interna. Traía con él dos divisiones quitadas al frente de la guerra "nacional" para lanzarlos contra sus enemigos del interior a fin de "pacificar" nuevamente las provincias.

Sería prolijo hacer la crónica de la guerra desesperada que tuvo a continuación como teatro las provincias andinas y del centro, con reñidos combates, desde la Rinconada y Portezuelo, hasta Pozo de Vargas y Chilecito. Se peleó todo el año 67 y los comienzos del siguiente. La insurrección del interior, cuyo caudillo principal era el coronel Varela, debía sucumbir por la inferioridad del armamento —lanzas y chuzos— frente a las fuerzas equipadas a la moderna y bien armadas de Paunero. Arredondo y los Taboada, quienes ejecutaron sin piedad a los prisioneros y arrasaron poblaciones enteras, dejaron un desierto por donde pasaban.

La presidencia de Mitre llegaba a su fin en medio de un cuadro de desastre total. La guerra del Paraguay seguía en pie, sin perspectivas de solución próxima, y el interior en estado de rebelión, con estallidos esporádicos, sólo aplacado por la presencia de los batallones porteños distribuidos estratégicamente. Para peor, la ciudad de Buenos Aires sufría una epidemia de cólera, que se atribuía a la infección de las aguas por los cadáveres arrojados a los ríos Paraguay y Paraná. El senador Oroño, haciendo el balance de la política interior de los seis años transcurridos, mostraba que en dicha presidencia se habían producido 117 revoluciones y 91 combates, en los que habían muerto 7.728 ciudadanos. A ello había que agregar, naturalmente, las víctimas de la guerra del Paraguay y las de la epidemia, consecuencia de la guerra. Como "frutos de una gran política", eran por cierto impresionantes.

Naturalmente que, ante ese balance y con la oposición que se le había levantado en las Cámaras por sus procedimientos discrecionales, Mitre debía fracasar en su empeño de imponer en la presidencia un sucesor. Su notoria preferencia por Elizalde, su ministro (casado, por cierto, con una brasileña) suscitó en contra una especie de unión nacional. El gobernador Alsina de Buenos Aires entró en tratos con Urquiza para combinar una fórmula. Si se recuerda que Alsina había figurado entre los más violentos enemigos del caudillo entrerriano y que la antipatía era recíproca, se advierte que cualquiera estaba dispuesto entonces a aliarse con el diablo mismo para impedir la prolongación del régimen

mitrista. Mitre acudió a la consabida táctica de encubrir la impotencia con el lenguaje de la prescindencia y la abnegación, en una carta en que ponía en guardia a los liberales contra la candidatura "reaccionaria" de Urquiza. Un movimiento surgido en las filas del ejército, por iniciativa del coronel Lucio V. Mansilla, levantó la candidatura del ministro en Washington don Domingo Faustino Sarmiento, que logró prevalecer. En el segundo término de la fórmula iría el hombre fuerte de Buenos Aires y jefe del "autonomismo", don Adolfo Alsina.

VIII. SARMIENTO O LA MEDIATIZACIÓN ESPIRITUAL

Después de su gobernación de San Juan (a la que renunció en 1866 alarmado por el resurgimiento de la "montonera"), Sarmiento había sido nombrado ministro plenipotenciario en Washington. Allí había de sorprenderlo la noticia de su candidatura. No es de extrañar esa sorpresa, pues su elección distaba mucho de ser probable a su partida, ya que carecía de fuerza propia y soplaban hacia otros hombres los vientos de la popularidad. Los jefes de partido eran Urquiza y Alsina. El candidato de Mitre era Elizalde. La candidatura del sanjuanino sólo podía surgir, evidentemente, como producto de una transacción entre tendencias encontradas y difícilmente conciliables. Así ocurrió, en efecto. El autonomismo de Alsina carecía de posibilidades de imponerse, por ser su jefe un "porteño". La presidencia de Mitre había enconado las resistencias provincianas contra Buenos Aires hasta el punto de hacer imposible una nueva presidencia porteña por el espacio de una generación; por cuya razón Alsina debió transigir y conformarse con el segundo término.

Aunque Sarmiento se jactó siempre de la legitimidad de su elección, por habersé producido contra la voluntad del presidente, la verdad es que el triunfo se debió a la acción de los gobernadores, presionados por las fuerzas de su partido militar. El general Arredondo debió volcar dos situaciones de provincias para obtener los votos necesarios. Los decisivos de Buenos Aires pertenecían por derecho propio al caudillo autonomista.

Sarmiento venía con la cabeza llena de proyectos e ilusiones y ansioso por iniciar su actuación, de la que esperaba efectos mágicos. No pretendía nada menos que transformar de arriba abajo el país. El espectáculo del rápido desarrollo y la creciente riqueza de la república del Norte habíalo literalmente encandilado y pretendía aplicar a la nuestra las recetas aprendidas allí, creyendo lograr los mismos resultados. El impulso civilizador era, por cierto un bien en sí mismo, cuyo móvil generoso no podía negarse. Pero la poderosa inteligencia del sanjuanino no se había libertado de los vicios adquiridos en su formación, lo cual lo llevó a equivocarse en el diagnóstico y, por consiguiente, en los remedios. Prevalecía en él también la índole del emigrado, con el hábito adquirido de pensar contra las modalidades del país que lo rechazaba y

a las que juzgaba urgente cambiar. Con el único recurso a mano: importar instituciones y hombres (que por ser importados, serían mejores), a fin de sofocar cuanto antes lo castizo bajo lo adventicio. No advertía que, al pretender transformarnos en un calco de los Estados Unidos, nos llevaba a hacer precisamente lo contrario de lo que hacían los yanquis, cuya fuerza se cifraba ante todo en la estricta fidelidad a su tradición propia. Es decir, en una política similar a la que tuvo la Confederación en la época rosista, asimilando los aportes del progreso en la medida que enriquecían el propio ser y rechazando todo lo que significaba disminuirlo o negarlo: único camino para lograr la grandeza verdadera.

No se ha penetrado todavía con la atención que merece la circunstancia desdichada que significó para nuestra patria el gobierno sucesivo de dos hombres de la emigración, o sea desvinculados de nuestra realidad y ajenos a sus reacciones profundas justamente en momentos en que el capitalismo europeo buscaba nuevas zonas de expansión. Contribuyó a ello, sin duda, el prestigio inherente al presunto heroísmo de la actitud (y a fe que, después de Caseros, se desarrolló una verdadera industria de explotación de los "calvarios" del exilio); pero también —y acaso en grado mucho mayor— la acción secreta de los compromisos adquiridos en las logias vinculadas a los Grandes Orientes internacionales y sobre cuyas decisiones obraban intereses muy poderosos. No hay documentos que nos revelen cómo ni en qué forma se protocolizaban esos compromisos. Lo que se sabe es que la elección de Sarmiento se celebró con un banquete en el templo masónico de la calle Cangallo, al que asistió también Mitre. "¿Qué es Sarmiento? —dijo Mitre en su discurso—. Un pobre hombre como yo, un instrumento como éste (señalando el compás)...". ¿Instrumento de qué y de quién? Digamos, en términos generales, que de la Civilización, con todas las implicaciones de sometimiento a Europa y sus directivas que, para ellos, dicho concepto resumía.

* * *

El viejo partido federal había quedado por entonces destruido en casi todo el interior, por la dura represión consiguiente a la guerra civil perdida. En los primeros meses de la presidencia de Sarmiento se sofocaron los últimos estallidos encabezados por Varela y Santos Guayama. Los restos dispersos se agruparían luego en diversos partidos provinciales de actuación local. Quedaba Urquiza en su feudo, al cual se acogieron algunos elementos

aislados de los que actuaron con la "montonera", quienes observaban con asombro y escándalo la conducta pasiva y contemporizadora del caudillo frente a los hombres de Buenos Aires.

El partido autonomista porteño, el de los "crudos", encabezado por el doctor Adolfo Alsina, era el que a la sazón agrupaba el aporte mayor y más entusiasta de opinión política. Su jefe —hijo del famoso don Valentín, aunque muy distinto en su carácter y en sus modalidades— había revelado como un gran caudillo popular a raíz de la resistencia contra la capitalización de Buenos Aires, que provocó la división del partido liberal en dos fracciones. La autonomista, o "cruda", por arrastre de su caudillo y por su oposición a Mitre, había logrado la adhesión de gran parte del antiguo partido federal rosista, en cuya actitud pesaba mucho el ingrediente del orgullo local. Más que en los principios —puesto que Alsina nunca renegó de sus antecedentes de hombre del 11 de setiembre— se caracterizaba el autonomismo por la resistencia a la política extranjerizante de la facción mitrista y por cierto énfasis criollo y tradicional, que le valió la adhesión del artesanado porteño, de los antiguos "manolos" del dorreguismo, a quienes se empezaba a llamar "compadres", y de todos los que reaccionaban contra la preponderancia, que ya causaba irritación, del inmigrante gringo que venía a desplazarlos. También la juventud intelectual de cepa federal era autonomista en buena parte, salvo el núcleo que se agrupó en el periódico "El Río de la Plata", redactado por Guido y Spano, Hernández, Navarro Viola, Vicente G. Quesada, Pelliza y Zeballos, quienes llevaron desde el comienzo una violenta campaña contra la nueva presidencia.

El mitrismo sólo contaba con partidarios en el centro urbano de Buenos Aires, entre algunos núcleos de gente adinerada de la aristocracia porteña y entre los inmigrantes italianos, para quienes el "quenral" tenía un especial magnetismo debido acaso a su traducción de Dante y a su amistad con Garibaldi. En Santiago del Estero seguían firmes los Taboada. Había también vestigios de mitrismo en Corrientes y San Juan.

Para la composición de su ministerio, Sarmiento debió tener en cuenta el aporte de las fuerzas que le habían dado el poder. Designó en el Interior al doctor Vélez Sársfield, antiguo mitrista, aunque distanciado de su jefe por un artículo de "El Nacional"; en Relaciones Exteriores a don Mariano Varela, propietario de "La Tribuna" y "crudo" notorio; en Instrucción Pública al joven doctor Nicolás Avellaneda, que acababa de ser ministro de Alsina en la provincia y de escribir un informe sobre educación; en Hacienda al doctor José Benjamín Gorostiaga, "hombre del Paraná", y en Guerra al opaco general Martín de Gainza. Con

ellos se dispuso a hacer frente a la difícil herencia dejada por su antecesor, con quien las relaciones se agriaron desde el primer día. Como Sarmiento no escatimaba las críticas sobre la situación en que había dejado el gobierno, Mitre lo retrucó en su diario, iniciando una oposición violenta por la prensa y desde su banca del Senado.

* * *

La situación era, en efecto, difícil. La guerra del Paraguay se hallaba sin liquidar todavía, porque su heroico pueblo seguía defendiéndose desesperadamente después de vencido. Los tres meses anunciados por el general Mitre se habían convertido en otros tantos años y amenazaba prolongarse en interminable y estéril carnicería; la guerra "contra un hombre" se había convertido en el exterminio de un pueblo.

El 19 de febrero de 1868 se había logrado forzar el Paso de Humaitá. El mariscal López atrincheró el de Angostura, que se forzó en octubre. La última gran batalla fue en las Lomas Valentinas, que duró seis días y que, iniciada por los paraguayos con 13.000 hombres, terminó con 1.200, que se rindieron en Angostura el 30 de diciembre. Una semana después las tropas aliadas, al mando del marqués de Caxías, entraron en la Asunción. Mitre ya no estaba al frente de las fuerzas, pues había debido volver a Buenos Aires.

Tomada la Asunción, la guerra de exterminio seguiría un año más todavía, hasta la derrota y muerte del mariscal López, alcanzado con un último resto de fugitivos en Cerro Corá, el 1° de marzo de 1870.

La guerra llevada a esos extremos nos había expuesto al ludibrio de América y a la condenación de todos los pueblos civilizados. Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia habían protestado contra el tratado de la Triple Alianza. Esta convicción de la iniquidad de la guerra y de la posición subordinada que en ella mostrábamos con respecto al Imperio, motivaba la oposición violenta que la mayor parte de la prensa argentina llevaba contra el gobierno, pidiendo la apertura de negociaciones y la paz. Esa reacción argentina era la que había contribuido en primer término a la derrota de la candidatura Elizalde, dándole a Sarmiento el triunfo. Como éste, defraudando las esperanzas puestas en él, siguiera con respecto al Paraguay la política de su antecesor, provocó el vuelco de la campaña en su contra, lo que lo movió a clausurar la hoja de Hernández, la más violenta de sus críticas.

¿Cuál era el resultado de la guerra? El Imperio se había instalado en el Paraguay y le dictaba la ley con su ejército de ocupación ante la pasividad obligada de las escasas fuerzas argentinas al mando del general Emilio Mitre, reducidas a función de meras auxiliares. Se había formado un gobierno provisorio con la única misión de acceder a las exigencias del invasor, que veía la oportunidad de resolver de una vez por todas sus aspiraciones territoriales. Fue entonces cuando el ministro don Mariano Varela lanzó la famosa fórmula "la victoria no da derechos", esgrimida en realidad contra el Brasil, pero que éste, sin adoptarla, por supuesto, interpretó como una renuncia argentina a los que pudieran corresponderle. Al mismo tiempo las tropas argentinas ocuparon Villa Occidental, en el Chaco. Varela presentó su renuncia y fue reemplazado por el doctor Carlos Tejedor.

Nuestra situación desairada en el Paraguay estaba determinada por nuestro desarme militar y la crítica situación de nuestras finanzas a raíz del prolongado esfuerzo y las continuas luchas. Aparte de las exigencias de la ocupación del Chaco y el mantenimiento de las fuerzas de línea, que velaban en las provincias por el orden interno, debíamos afrontar el cuidado permanente de la frontera con los indios, cuyos malones habían recrudecido en la medida de nuestras dificultades y divisiones banderizas. Dominaba las pampas el temible Calfucurá; sus depredaciones habían llegado hasta la misma ciudad del Rosario. En el primer año del gobierno de Sarmiento hubo doce invasiones de salvajes a una por mes, con los consiguientes saqueos, raptos e incendios.

La situación del interior habíase aquietado un tanto, si bien el carácter autoritario del presidente lo llevaba a intervenir en las provincias interiores que no se sometían a las directivas de su política, según la tradición de su partido. Urquiza se hallaba completamente entregado. Sarmiento lo visitó a principios de 1870 en su provincia a raíz de la inauguración del ferrocarril de Rosario a Córdoba y había vuelto convencido de su fidelidad. Sólo la acción de los Taboada en el norte lograba turbar la tranquilidad del sanjuanino; pero las incidencias se traducían en controversias epistolares.

Estaba escrito que esa relativa calma no podía durar. El federalismo no había muerto en el litoral, sino que se hallaba amordazado por la traición de su jefe presunto. El 11 de abril de 1870 estalló una revolución en Entre Ríos, de resultados de la cual fue muerto el general Urquiza en su palacio de San José, al resistirse a la partida que había ido a prenderlo. La Legislatura de la provincia se reunió el 14 y nombró legalmente gobernador al general don Ricardo López Jordán, jefe del movimiento. Este

128

asumió el mando y expresó en su discurso inaugural que, en nombre de la Constitución había “derrocado la tiranía, rodeado del pueblo”, y que deploraba “que los patriotas que se decidieron a salvar las instituciones” se hubieran visto obligados a inmolarse una “víctima ilustre”. Se comunicó lo acontecido al gobierno nacional, agregando que la provincia estaba en orden y con sus autoridades legales constituidas, como era la verdad.

López Jordán no era un hombre vulgar ni un político de aventura, sino un soldado de calidad y un patriota. Hijo del otro general del mismo nombre, hermano por parte de madre de don Francisco Ramírez, corría por sus venas la sangre ilustre del “Supremo”. Jefe de las caballerías entrerrianas, había quedado vencedor en Pavón; y en el para él inexplicable retiro de su jefe en esa ocasión debió iniciarse el enfriamiento de su fidelidad. Después, paso a paso, habíase ido colmando la medida de las inconsecuencias, hasta culminar en el escandaloso aval de la inicua guerra paraguaya y en las zalamerías con el victimario del Chacho, de venerada memoria. Era evidente que, al traicionar Urquiza su deber de caudillo, negándose a cumplir sus compromisos con su pueblo, quedaba reducido a mero tirano, usufructuario y corruptor. No servía ya sino como cifra de esclavitud y deshonor, por lo cual librarse de él era no sólo legítimo, sino necesario y patriótico.

“Urquiza era el tirano de Entre Ríos —le escribía a López Jordán el autor de *Martín Fierro*—, pero era más que todo el Jefe Traidor del gran Partido Federal, y su muerte mil veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido otras tantas veces sacrificado y vendido por él. La reacción del partido debía por tanto iniciarse con un acto de moral política, como con el justo castigo del Jefe Traidor”.

Entre Ríos se hallaba en perfecto orden después del episodio y con sus autoridades legales constituidas. La aceptación del hecho consumado —por lo menos mientras no se reuniesen las Cámaras que se hallaban en receso— hubiera ahorrado mucha sangre argentina. La opinión de los personajes principales a quienes consultó Sarmiento, antes de asumir la responsabilidad de la intervención, fue unánime en ese sentido. Pero sobre el presidente actuaba el hombre de partido; temió la propagación de la revolución federal por toda la República y se decidió por la intervención armada.

Mandó barcos a vigilar las costas del Uruguay y el Paraná y al general Emilio Mitre al frente de una división veterana de la guerra del Paraguay. Esta desembarcó en Gualaquaychú, de cuya población se posesionó, y dio una proclama. Entre Ríos le con-

testó con la guerra. En el ejército de López Jordán iba enrolado, como secretario del jefe, el futuro autor del *Martín Fierro*.

Mientras tanto, se proseguía en alguna medida la obra de desarrollo material en la que el presidente cifraba su ambición.

Ya hemos expresado en páginas anteriores el verdadero concepto sobre esa materia, por lo cual se nos librará de la descripción exhaustiva y monótona de las mejoras incorporadas al cuerpo nacional. Sin duda, el país crecía e iba creando los órganos necesarios para su actividad. Se instalaron líneas telegráficas, de acuerdo con la exigencia de los tiempos, y se prolongaron las vías férreas. Se fundaron escuelas y se compraron libros y útiles en el extranjero para equiparlas, se construyeron algunos caminos y diques, se fundó la escuela militar, etc. Todo lo cual habría sido inobjetable y magnífico, si no hubiera estado viciado por la pésima orientación política en que se inspiraba el régimen y su desprecio de la actividad nacional.

La manía extranjerizante de Sarmiento llegaba a extremos increíbles y fue ella principalmente la que le valió de sus contemporáneos el calificativo de “loco”. Como la guerra del Paraguay se prolongara demasiado, pensó en serio —y lo dijo— contratar un general norteamericano para darle fin. Proyectaba también hacer del Chaco un territorio poblado por inmigrantes de habla inglesa, con un estatuto especial, a la manera de un plantel de reproductores de la raza elegida para mejorar la nuestra. De ésta hablaba con un desprecio olímpico. Al saber el hundimiento de una isla del pacífico, escribió: “¿Por qué no hace Dios lo mismo con toda esta América? Me arrepiento de haber creado, diría, a los godos y a sus hijos”. Y al tener noticias del exterminio del pueblo paraguayo por los ejércitos de la Triple Alianza, estamparía en una carta a Mrs. Mann, su amiga norteamericana, estas palabras incalificables: “Es providencial que un tirano haya hecho morir todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrecencia humana”.

Era natural que el hombre que proclamaba estas ideas —mera exageración de la ideología de su grupo— diera preferencia en todas las circunstancias al extranjero sobre el criollo, como ocurrió en las concesiones ferrocarrileras. Mitre ya había expresado, en una de sus arengas, que el “capital inglés” era “el motor del progreso”. Su continuador, Sarmiento, se empeñaría en que recayeran en dicho capital todas las concesiones, no obstante que optaban a ellas también empresarios argentinos. Porque es de ad-

vertir que, así como se había construido con esfuerzo nacional el F.C.O., no faltaron terratenientes progresistas¹ que se propusieron agrupar sus esfuerzos para adelantar la nueva industria que valorizaba sus campos. Estos conatos fueron sistemáticamente sofocados por la oposición de un régimen que había resuelto reservar a Inglaterra ese renglón provechoso. No sólo se concedió a empresas británicas la construcción y explotación de los 1.331 Km. de líneas férreas que se construyeron bajo su presidencia, sino que se las ayudó incluso con dinero oficial, aparte de otras franquicias. Y como si esto no fuese suficiente, y con el objeto de suprimir el escándalo de una compañía de ferrocarriles de capital nacional, se persiguió al F.C.O. con toda clase de restricciones y se le impuso una competencia desleal, a fin de obligar a sus propietarios a desprenderse de una carga que se había hecho onerosa y que iría a caer a los pocos años en manos del consorcio extranjero, en las que inmediatamente volvió a dar utilidades. De este modo contribuiría el gobierno "progresista" de Sarmiento al enfeudamiento del país a la economía británica por medio de los transportes.

La represión sangrienta de la revolución jordanista en Entre Ríos respondería al mismo espíritu. El hombre que había aconsejado "no ahorrar sangre de gauchos" (sin duda para purgar la tierra de tal "excrecencia humana") no podía tolerar ese brote de libertad en la tierra que dominaba y se propuso extirparlo implacablemente. No le sería fácil, por cierto. Entre Ríos se unió detrás de su caudillo y se defendió en una lucha larga y encarnizada, invadido por el norte y el sur. Hubo numerosas batallas de resultados diversos, aunque habría de imponerse la superioridad de armamentos de las fuerzas nacionales sobre las lanzas de la caballería jordanista. Al fin la revolución fue derrotada en Naembé, Corrientes, el 26 de enero de 1871, por fuerzas al mando del gobernador de esta provincia don Santiago Baibiene y el comandante Julio A. Roca. Refugiado en Brasil, López Jordán realizaría más tarde dos nuevas tentativas infructuosas.

Con el nombramiento de Carlos Tejedor en el ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones paraguayas tomaron un nuevo cariz, en el sentido de reaccionar contra la debilidad del gobierno anterior. La situación era difícil. Y se complicaba con la actitud de Chile, que en alianza tácita con el Brasil, aprovechaba nuestras dificultades externas e internas para agitar sus rei-

¹ Como hubo capitales y empresarios nacionales para el primer ferrocarril, no faltaron propuestas para los otros. Merecen recordarse las efectuadas por don Saturnino Unzué y don Aarón Castellanos. Se prefirió a los contratistas extranjeros.

vindicaciones en Magallanes y la Patagonia, haciendo pie justamente en las opiniones manifestadas por Sarmiento durante su largo destierro en ese país. Como la oposición parlamentaria y periodística agitara este tema, el presidente hubo de replicar que las opiniones del periodista, emitidas en la prensa chilena, no comprometían al mandatario. A guisa de respuesta, creó la gobernación de Patagonia, hasta el río Santa Cruz, y la de Magallanes, que incluía Tierra del Fuego, y otorgó concesiones de tierra en esas regiones. Pero los chilenos se establecieron firmemente en Punta Arenas.

Los brasileños ocupaban con sus fuerzas el Paraguay y dictaban allí la ley, ocupando además las Tres Bocas y la isla argentina del Atajo de Cerrito, que les daba el dominio del curso superior de los ríos. Sólidamente instalados en su posición, habían firmado en enero de 1872 la paz por separado con el gobierno de Paraguay, hechura suya, violando lo pactado en el tratado de alianza; y a la sazón se hallaban empeñados en una política consistente en apoyar al Paraguay contra la Argentina —haciendo instrumento de sus planes a la nación vencida— y en obstaculizar el cumplimiento de los tratados en cuanto nos favorecían, o sea en la posesión del Chaco y de Misiones.

Una primera misión enviada por Tejedor y a cargo del doctor Manuel Quintana fracasó por la intransigencia brasileño-paraguaya. Dejando de lado las disidencias políticas ante una cuestión de prestigio nacional, se decidió enviar al autor de la alianza, al propio general Mitre, como plenipotenciario a Río de Janeiro y a la Asunción.

Las negociaciones habían llegado a un punto de tensión que hacía pensar en la inminencia de la guerra con el Brasil. Un incidente se había planteado, acerca de una nota en que Tejedor mencionaba la batalla de Ituzaingó. Tejedor alegaba que lo había hecho porque el ministro brasileño había aludido a Caseros (lo que demuestra que los sentimientos no se hallaban embotados todavía y que se sentía a Caseros como una derrota nacional). Mitre no fue bien recibido. Las negociaciones se prolongaron por el evidente propósito brasileño de ganar tiempo. En el ínterin, Sarmiento hacía lo que debía hacer, lo que se hallaba postergado por la confianza de su antecesor en la buena fe brasileña: armarse precipitadamente para lograr la paridad naval. Contrató rápidamente la construcción de barcos de guerra, que serían el primer plantel de la marina moderna argentina. Con ello se proponía demostrar a Brasil que estaba decidido a todos los extremos para hacer respetar nuestro derecho.

La misión de Mitre no llegó a ningún resultado positivo, si bien quedó en pie un planteo transaccional, por el cual se admi-

tió por ambas partes la línea del Pilcomayo como límite argentino en el Chaco, difiriéndose todo el resto, inclusive Villa Occidental, al arbitraje del presidente norteamericano. La cuestión sólo alcanzaría solución definitiva bajo la presidencia siguiente.

No obstante la prolongación de la guerra del Paraguay hasta 1870 y la inquietud causada por sus consecuencias políticas; no obstante la rebelión de López Jordán en Entre Ríos, con alguno que otro estallido esporádico en otros puntos del interior; no obstante la fiebre amarilla, que asoló en el verano de 1871 a Buenos Aires, provocando millares de muertes y el éxodo de la mitad de la población, el país se sintió crecer durante la presidencia de Sarmiento: por razones ajenas, en general, a la acción gubernativa, pero que ayudarían al prestigio del titular. La impresión general era de optimismo. Habían llegado durante esos seis años 280.000 inmigrantes. El aumento del comercio exterior (de 72 a 120 millones de pesos) provocó una sensación de bienestar general y el crecimiento de las fortunas de nuestra clase terrateniente por la valorización natural de las propiedades. La fundación de bancos argentinos y extranjeros (Nacional, Hipotecario, de la Provincia, de Londres, de Italia, Alemán, etc.) parecía el índice de una grandeza inminente. Contribuía a acentuar esa impresión el desbordante optimismo del presidente, pródigo en el discurso, inauguraciones y genialidades que, si bien provocaban la rechifla de los opositores, no dejaban de surtir efecto. Su megalomanía era contagiosa. Con los episodios a que todo ello daba lugar y la lucha periodística y parlamentaria, el país —Buenos Aires al menos— no se aburría. El "loco" Sarmiento por sí solo era un espectáculo permanente.

Muy pocos advertían el carácter vicioso de ese desarrollo y los males profundos que ocultaba para el inmediato futuro.

El progreso moderno se imponía en la Argentina bajo el signo maléfico del descastamiento y la derrota. Por un encadenamiento de circunstancias desdichadas, sobrevenía en momentos en que el partido de la independencia había sido derrotado por el partido europeísta y colonial; por los descendientes espirituales del directorismo monarquista, aliado al Brasil, y de los unitarios rivadavianos; por los emigrados enfeudados al extranjero. Estos impondrían como doctrina nacional el pensamiento fraguado por los Alberdi y Sarmiento en la emigración, durante la lucha contra la independencia de la patria, cuyo principio fundamental era la superioridad del extranjero sobre el criollo, justificativo de todas las entregas. Pequeños burgueses sin nombre y sin arraigo, apoyados en oscuras fuerzas internacionales ansiosas de dominación, vendrían ante todo a destruir lo que había de tradicional y auténtico en el país: desde sus viejas clases dirigen-

tes hasta las industrias del interior, desde la pequeña propiedad rural hasta el orgullo del linaje común. Por lo cual provocarían la resistencia general que vimos y sólo se impondrían mediante largas guerras y la eliminación en detalle de las fuerzas desorganizadas que les opusieron los herederos auténticos de los conquistadores, o sea las "montoneras" de lanza.

IX. CONFIGURACIÓN DE LA REPÚBLICA LIBERAL

Bajo las presidencias de Mitre y Sarmiento surge, de entre las ruinas de la vieja Confederación, la República Argentina actual, que adquiriría su fisonomía definitiva con la capitalización de Buenos Aires, en la presidencia siguiente.

Hablar de las ruinas de la Confederación, no es, según lo hemos visto, una mera metáfora. En los veinte años transcurridos desde Caseros hasta el final de la presidencia de Sarmiento, apenas si ha cesado la guerra civil en todo el territorio, a la que se ha agregado una guerra fronteriza —la del Paraguay— larga y sangrienta, aparte de la permanente del indio. La resistencia del interior ha sido literalmente aplastada por una represión implacable y el establecimiento de proconsulados militares en las provincias vecinas. El pensamiento del grupo dominante consiste en impedir de cualquier modo el renacimiento del viejo espíritu de libertad.

Esa política se inspiraba en convicciones muy firmes. "Los americanos se distinguen por su amor a la ociosidad y por su incapacidad industrial —escribía Sarmiento—; ... con ellos la civilización es del todo irrealizable, la barbarie es normal". Y recomendaba, en carta a Mitre de 1861, que "no se economizara sangre de gauchos", pues era "lo único que tenían de humano". Alberdi, por su parte, proclamaba en todos los tonos la superioridad de cualquier "francés o inglés" —indiscriminadamente— sobre cualquier hombre de nuestros campos. Sobre el criollo, cuyas condiciones de laboriosidad, inteligencia y honorabilidad sorprendían, justamente por esos años, a los franceses e ingleses que nos visitaban, según lo atestiguan los escritos de Allan Campbell, Woodbine Parish, Charles Darwin y Martín de Moussy.

El desprecio por lo nacional se fundaba en el repudio de la tradición que le había dado origen. La "leyenda negra" antiespañola, de origen protestante y masónico, difundida por los hombres de la Independencia con fines polémicos, seguía integrando el ideario histórico de la generación organizadora.

Para los vencedores de Caseros, la civilización consistía esencialmente en las formas constitucionales y el comercio libre. "Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña (del Paraguay) a recibir la merecida ovación que el pueblo les consagra —decía Mitre en un discurso de 1869—, podrá el co-

mercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres". Esto implicaba la confesión de que —por lo menos en su intención— uno de los objetos de la guerra, y acaso el principal, consistía en abrir los puertos de la nación hermana a los beneficios del comercio inglés.

Era natural que ese repudio de lo nuestro, de lo tradicional, de lo nacional, que caracterizó a la generación organizadora, se reflejara en su obra. Nos organizarían, sin duda; pero con la forma, las modalidades y la mentalidad de una colonia del extranjero.

Es curioso que Sarmiento creyese de buena fe que aplicaba a su gobierno los principios en que se fundaba la grandeza norteamericana, cuando hacía precisamente todo lo contrario.

"Conciudadanos míos, os suplico que me creáis —escribía Washington en su llamado testamento político—: la vigilancia de una nación libre debe estar siempre despierta contra las artes insidiosas del influjo extranjero, pues la historia y la experiencia prueban que éste es uno de los enemigos más mortales del gobierno republicano".

Pero cuando Rosas aplicaba, en defensa de la Confederación, la doctrina de Washington —que es simplemente la del patriotismo y el buen sentido—, los hombres de la generación organizadora le hacían la guerra, aliados a los invasores franceses que venían a abrir nuestros puertos a cañonazos. Cuando les tocó gobernar, se hallaban atados a los compromisos contraídos en esa camaradería de armas con Francia, Inglaterra y Brasil. No podían dejar de aplicar los principios por los que habían combatido contra su patria.

Así, mientras los Estados Unidos, terminada la guerra de secesión, se afirmaban orgullosamente en el culto nacional a los *Forefathers* y establecían, bajo el influjo de los republicanos triunfantes, una rigurosa protección aduanera para sus industrias nacientes, nuestra generación organizadora imponía aquí el desprecio por la tradición y el ser nacional, la sumisión inconsulta al extranjero y el librecomercio desenfrenado, con las consecuencias que conocemos para ambos destinos.

Es necesario que nos pongamos en guardia contra la tentación de sacar de estos hechos conclusiones morales aventuradas contra los hombres que, bien o mal, empeñaron su vida en la lucha por el progreso de la nación, tal como ellos lo concebían. No hubo en todo esto traición consciente. La ofuscación política e ideológica explica muchos errores. El romanticismo político había difundido por todo el mundo la pasión ardiente por la Libertad abstracta y era natural que, para sus cultores, la personalidad de Rosas en su aspecto de héroe nacional fuera eclipsada por la imagen del mítico Tirano retrógrado, al que era "acción santa" combatir hasta la muerte. Su derrota derrotaba sus principios y les daba validez eventual a los contrarios.

Por lo que hace a la actitud antitradicional, herencia de la generación anterior, no hay que olvidar que ella tenía su origen en la autodenigración de los "iluminados" de la época de Carlos III y que se explicaba por la evidente decadencia en que había caído España. No había en ésta nada de ejemplar y era natural que se buscara, en las culturas en ascenso, ejemplos y enseñanzas.

La instauración del comercio libre es explicable también. Mortal para el interior, era beneficioso para el puerto de Buenos Aires, o mejor dicho, a partir de la "libre navegación" de los ríos, para el litoral ganadero. Significaba la reproducción de la política rivadaviana, cuya acción "progresista" había sido la nostalgia de la emigración, y se adecuaba a la imagen que del progreso se hacían los intelectuales urbanos de la época, consistente en la multiplicidad en el mercado de objetos europeos a precios razonables. El resultado significaba el triunfo de Buenos Aires sobre el interior, en el dilema que la especial configuración del país planteaba y cuya solución justa sólo había impuesto Rosas; o sea —traducido al lenguaje de los triunfadores— de la "civilización" sobre la "barbarie".

Pero explicar la génesis de un error y la posibilidad moral de su adopción, no implica justificar ni menos glorificar la ceguera política ni exaltar sus resultados. El triunfo decisivo del partido de los emigrados en la época crítica del progreso mundial fue para la patria una verdadera desdicha, pues su influencia nos configuraría mental, social y económicamente en la forma menos adecuada para alcanzar la grandeza a que nos predestinaban nuestros fundadores.

* * *

Es necesario decir estas cosas —aunque signifique enconar viejas heridas— porque decir las es la condición de nuestra salud:

curación psicoanalítica para revelar el "trauma" oculto que nos tuerce el destino.

¿Cómo pudo ocurrir ese fenómeno de la conquista de todo el país por una minoría audaz e impopular, aun en el mismo Buenos Aires? En primer término, por la destrucción de la única fuerza que podía oponérsele, que era el partido federal.

El partido federal no había sido solamente derrotado, sino que había sido traicionado por Urquiza, cuya acción en Caseros tomó como bandera los principios de sus adversarios. Despojado de su significado nacional y reducido al mero usufructo de situaciones, después de la adhesión oportunista de las provincias interiores al triunfador, quedó virtualmente disuelto y obligado a una resistencia pasiva en la que llevaba todas las de perder; el "urquicismo" circunstancial le vedaba invocar la única tradición de que podía enorgullecerse y que era realmente su título de gloria: la resistencia al extranjero. Se hallaba librado al arbitrio de un jefe que no tenía bandera que proponerle ni ánimo de lucha y que, en su fuero interno, lo repudiaba.

Naturalmente, el espíritu nacional no se entregaría sin lucha. Una violenta oposición se levantó en todo el país, que señalaba los males del régimen y la entrega de la nación a intereses extraños.

La verdadera "élite" intelectual a la que tocaría, en esta época desgraciada, defender la inteligencia y el honor nacionales, estaba constituida por jóvenes de diversos orígenes políticos, aunque en su mayor parte de cepa federal, que advertían con zozobra y consternación los caminos por los que se conducía a la República.

Si bien plegados al liberalismo ideológico, que era el denominador común de la época y que les vedaba la apología del régimen anterior a Caseros, esos jóvenes de la segunda generación romántica —iniciados en *La Reforma Pacífica* de Calvo y en la colaboración con el gobierno de Paraná los más— reaccionarían violentamente contra el espíritu entregador del mitrismo y su política pro-brasileña, con lo que asumían la herencia nacional de la Restauración. Todos ellos se opusieron a la guerra del Paraguay y a la brutal intervención militar en las provincias interiores, y sus campañas periodísticas les acarrearían prisiones y destierros. Fueron, entre otros, Vicente G. Quesada, Carlos Guido y Spano, Miguel Navarro Viola, José Hernández y Olegario V. Andrade.

El rosismo no había desaparecido, por cierto, sino que se había convertido en una especie de culto secreto, ya que su mención, salvo para fulminarlo, estaba vedada por las dos banderías en que se hallaba dividida la opinión y que se acusaban mutua-

mente de "mazorqueras". Con la consecuencia inevitable y funesta de que fuesen también "tabú" sus enérgicas actitudes en defensa de la patria, calificadas de bárbara xenofobia, y loables las opuestas, de entrega. Solamente en la intimidad de los hogares se atrevían los federales fieles a recordar las glorias pasadas y a manifestar que ciertas cosas que estaban ocurriendo no habrían sido posibles "en tiempos de don Juan Manuel".

En segundo término, el triunfo hubo de consolidarse por la propaganda, alimentada por los cuantiosos recursos de Buenos Aires.

Nunca se ponderará suficientemente la circunstancia de que la generación organizadora estuviese constituida por hombres de letras: causa de su perdurable prestigio entre quienes confunden un florecimiento literario realmente auspicioso con análogo fenómeno en política. Los causantes de nuestra desgracia fueron escritores —algunos de real talento, como Sarmiento, Alberdi y López; otros de mediano talento compensado con una tremenda laboriosidad, como Mitre—: es decir, gente capaz de defender sus principios con elocuencia y de adornarlos con una mitología seductora. Esa circunstancia contribuye de manera especial a su gloria, ayudada por sus colegas, que son quienes la otorgan. La verdad es que los escritores, al actuar en política, suelen degenerar en ideólogos, apartados de la realidad, a la que pretenden aplicar la exageración de sus principios, lo cual resulta funesto cuando esos principios son radicalmente falsos. No se apartaron de esta regla Sarmiento y Mitre. Pero defendieron sus errores por la pluma con tanto calor y con tanta insistencia que impresionarían la mente nacional, logrando imponerlos como aciertos por el espacio de dos generaciones.

* * *

Tampoco faltó, entre los mayores, quien advirtiera las consecuencias funestas de la política librecambista. Ya hemos visto antes la opinión de López a este respecto. Agregaremos que se opuso a las concesiones ferrocarrileras a empresas foráneas. En 1873 concretaba la situación a que esa política nos reducía en los siguientes términos: "¿Qué somos ahora? No somos sino agentes serviles, y pagados a módico precio, de las plazas extranjeras".

La oposición se agruparía políticamente en las filas del partido autonomista, fundado por Adolfo Alsina. Aunque rama del viejo tronco liberal, este partido, con la adhesión de los opositores al mitrismo, se impregnó de "vivencias" federales que lo lleva-

rían a reaccionar, en cada caso, en forma contradictoria con aquél, verdadero sucesor del espíritu rivadaviano y unitario. El mitrismo era proclive a la simpatía por la monarquía "ilustrada", amigo del Brasil y de los extranjeros, favorable a las empresas coloniales como el imperio de Maximiliano, europeísta, antipopular, antiamericano y oligárquico. El liberalismo autonomista asumía tintes democráticos y jacobinos: simpatizaba con la insurrección popular y las barricadas, desconfiaba del extranjero y asumía la defensa de los criollos pobres. En su seno se caracterizaba un ala de cepa netamente federal y popular, que se proponía desde el comienzo reformas concretas, como la abolición del servicio de fronteras para los paisanos de la campaña y la necesidad de "promover las industrias, que... emanciparían (a la nación) del dominio económico del extranjero, arrancándola de la postración en que ha caído"; y propiciaba, como instrumento para obtenerlas, el sufragio popular. Esta ala, núcleo del futuro radicalismo, tenía como caudillo al joven Leandro N. Alem.

El carácter esencialmente "porteño" del partido de Alsina le impidió, no obstante, oponerse con eficacia al proceso que caracterizó a las presidencias de Mitre y Sarmiento y que consistió esencialmente en el sometimiento del interior a los intereses de Buenos Aires, en nombre de la civilización. Lo que sólo fue posible por la calumnia sistemática de la capacidad criolla para el trabajo y la industria y por el aplastamiento de la rebelión de las provincias, gracias a las armas de precisión de último modelo compradas a las fábricas europeas con el producto de los primeros empréstitos en Londres.

* * *

¿Cuáles serían las consecuencias del triunfo "porteño"? La transformación del país, y no sólo en su fisonomía política, social y económica, sino en su alma misma. No, por cierto, para su bien.

La derrota del interior trae aparejados su sometimiento y su ruina. Provincias ricas se convierten en provincias miserables; y las que conservan su riqueza industrial —azúcar, vino— deben pagarla con la sumisión política. Muere el espíritu federalista. Las clases dirigentes del interior, que constituyen un verdadero patriado (la "antigua nobleza" de que hablaba Régulo Martínez), pierden su influjo ante la aparición de un politiquerismo venal sostenido por los hombres de Buenos Aires que necesitan el control de las "situaciones" para sus mayorías parlamentarias. Heredero directo de los conquistadores y los fundadores, ese

patriciado que ha dado también de sí a los libertadores y los caudillos y cuya influencia moral ha conformado a las poblaciones en el culto de los valores fundamentales, desaparece como tal, vilipendiado en sus principios y arruinado en sus bienes. Y con él, un elemento de orden y de virtud. Con lo cual, los "pueblos", privados de sus jefes naturales, se ven reducidos a plebe indiscriminada y explotable. Los principios del día repudian la herencia de la conquista (nuestra única herencia cultural) y a sus representantes legítimos. Mientras los descendientes de los conquistadores tienen como último destino el de emigrar a Buenos Aires, a aumentar la masa de los aspirantes a empleos, asumen el mando vacante los politiqueros advenedizos sumisos al poder central, generalmente abogadillos a sueldo del comercio usurario, cuyo auge comienza.

Lo cierto es que las virtudes que esa población criolla podía invocar ya no están de moda. Más aún, son violentamente repudiadas. El apego a la tradición y a la tierra, la defensa celosa de la libertad se califican de "barbarie", y de "bandidos" a los héroes que arriesgan su vida por ella, para quienes no hay cuartel. Ya Alberdi ha escrito que no necesitamos héroes y que las virtudes militares son un anacronismo. El héroe del día es el "civilizador". A un general que llega del campo de batalla le dice Sarmiento: "Voy a reemplazarlo a Ud. por Wheelwright".

Sarmiento ha dicho que la civilización se cifra en estos términos: población, comercio, riqueza. (Los elementos espirituales no cuentan, al parecer). Es la fórmula de Buenos Aires y los tres términos dependen del extranjero. A favor del comercio de exportación se enriquece la clase terrateniente porteña, dependiente del mercado inglés, con campos que se valorizan rápidamente gracias al aumento de población, el alambrado y los ferrocarriles. La fisonomía económica del país adquiere sus perfiles precisos muy pronto, conformada en la alianza de esa clase dirigente con sus compradores habituales. Los estancieros de Buenos Aires, que han sido rivadavianos y rosistas, se hacen mitristas en su mayor parte y creen haber llegado a la fórmula de la perfección. Mientras los ingleses comen sus "churrascos", ellos se surten de levitas en Londres. Ser inglés es muy "chic". Surge por entonces y se difunde la curiosa idea de que ser inglés es ser "distinguido", por lo cual el último patán Smith de los suburbios comerciales de Liverpool, llegado acá como gerente de frigorífico, puede optar a la mano de la más orgullosa aristócrata porteña. Aunque ésta suela por lo común ser nieta de un pulpero enriquecido, ello no ocurre con ningún pretendiente español, ni italiano, aunque sea noble. ¡Prestigio del imperio!

La mentalidad del país ha de conformarse muy pronto a los

intereses de su clase dominante, constituida alrededor del conurbio de la Sociedad Rural con el comercio británico de importación y exportación, cuyo dominio se simboliza en las líneas del ferrocarril inglés que se extiende por todo el territorio como una garra, articulada en Buenos Aires pero manejada desde Londres.

* * *

Como la clase dominante es tributaria, impone al país una mentalidad colonial. Sobre la destrucción del viejo patriciado se alza una burguesía comercial carente de virtudes nobles, que comunicaría su estilo a la política, a la enseñanza y a las costumbres.

La definición política del régimen en el orden externo será el pacifismo elevado al rango de religión nacional. Se establece como dogma la carencia de problemas de fronteras en nuestro país y la decisión, en caso de existir, de resolverlos por arbitraje. Se borra de la enseñanza de la historia todo recuerdo de guerras externas, salvo la de la Independencia; y en cuanto a las invasiones inglesas, se deja bien sentado que Inglaterra nos ha hecho el servicio de enviarnos la libertad, así como había tratado de libertarnos por segunda vez combatiendo a Rosas. ¿Y el Brasil? Sólo merece nuestra gratitud por habernos ayudado desinteresadamente a derrocar al "tirano" de Caseros.

Sin problemas internacionales, nuestra única preocupación debía ser el fomento de nuestra riqueza. ¿Cómo? Criando vacas y sembrando trigo, a fin de merecer el honroso destino de "granja de Inglaterra" mientras no llegásemos al ideal de "granero del mundo". No teníamos, desde luego, ninguna aptitud industrial, ni había para qué. Carecíamos afortunadamente de combustibles y metales cuya posesión pudiera perturbarnos en el cumplimiento de nuestro destino seguro. En cambio, ¡poseíamos pasto en abundancia!

La inmigración nos traería los brazos necesarios para levantar las cosechas: mano de obra abundante y barata.

Con las vacas criollas y el comercio inglés, todos nuestros problemas estaban resueltos. Los miembros de la clase dirigente, que sobrasen en las tareas de la administración rural, tendrían un derivativo para su actividad en los puestos rentados de las empresas británicas que se reservaban para los criollos. La situación de abogado de esas empresas sería la más codiciada de todas y la que conferiría mayor prestigio social: llave segura para obtener matrimonios encumbrados y éxito político, noviciado indispensable para llegar incluso a la presidencia de la República.

Las profesiones tradicionales de la nobleza: la milicia y el clero, consideradas definitivamente anacrónicas, perderían todo su prestigio y su ejercicio acarrearía una visible disminución social. El ejército estaba bien para el pariente provinciano a quien se recibía a escondidas, o para el hijo del almacenero: la entrada a él excluía toda idea de gloria en un país pacifista. En cuanto al clero, la oligarquía liberal lo abandonaba a los críos de la inmigración puesto que la religión era cosa para las mujeres y para la plebe.

* * *

¿A qué seguir? Todos recordamos el espíritu vigente en nuestro país hasta hace muy poco y los principios de la doctrina nacional de la República liberal configurada en las presidencias decisivas de Mitre y de Sarmiento, doctrina que se impuso en la enseñanza y en la prensa de manera definitiva.

Reducido el ideal nacional a la civilización y la riqueza, se honraria como benefactores a los próceres de la factoría en ciernes. Rivadavia sería proclamado "el primer hombre civil" de la República. Pronto lo seguirían Sarmiento y Mitre en los altares propuestos a la veneración popular. Es decir, que el partido unitario, el de los emigrados, al que don Vicente López y Planes acusaba de contrarrevolucionario, se erigía en paradigma de la virtud cívica, excluyendo violentamente a los auténticos campeones de nuestra independencia y nuestro honor. Para lo cual fue necesario trastornar completamente los conceptos morales y declarar que el principal título de gloria para los gobernantes consistía en fundar escuelas. Y desde luego, en haber "combatido la tiranía". Mientras se callaban —o se vilipendiaban— los nombres de los héroes de Martín García y la Vuelta de Obligado, nuestras plazas se poblaban con la efigie de los militares de guerra civil que habían luchado contra la patria, aliados al francés invasor, expuestas así —junto con las de Canning y Garibaldi— a la admiración de las nuevas generaciones.

Este había sido —se decía— el precio del orden constitucional. Pero la verdad es que la población criolla no sentía los beneficios de ese orden, cuyo sistema de declaraciones, derechos y garantías sólo era válido para el extranjero, mientras que aquélla estaba librada a la arbitrariedad de los comisarios y jueces de campaña, nombrados para someterla y despojarla. No había garantías ni derechos contra las "levas" para el servicio de fronteras, ni consideración personal para el desposeído. "Reclamamos para nosotros los americanos, dueños y señores de estas tierras

—expresaba una memoria de habitantes de la campaña, elevada a la Legislatura de Buenos Aires en 1854—, una parte de los goces sociales que nuestras leyes conceden a los extranjeros que vienen a poblar en medio de nosotros". El *Martín Fierro* de Hernández, publicado en 1872, no es más que el eco de este clamor general que se levanta después de Caseros: su rápida difusión por la campaña demostró que respondía a causas reales y profundas.

El inmigrante extranjero empezaba a llegar, mientras tanto, en sucesivas oleadas, lento y tenaz: medio millón, aproximadamente, entre las presidencias de Sarmiento y Avellaneda. Salvo los que venían especialmente contratados para las colonias agrícolas, no irían al campo por lo general. Las tierras próximas a los centros poblados alcanzaban precios exorbitantes y estaban acaparadas por los grandes productores ganaderos, quienes no querían poblarlas de gente, sino de vacas. El camino corriente del inmigrante tesonero consistió en alquilar su trabajo como peón o dependiente hasta hacerse un pequeño capital para establecer comercio, en el que generalmente prosperaba. El comercio urbano y el de campaña cayó muy pronto en manos de activos gallegos o italianos, cuya facilidad de adaptación los llevó a comprender rápidamente las facilidades que el régimen les proporcionaba, en competencia ventajosa con el nativo, cuya incapacidad proclamaban los hombres de Buenos Aires como dogma oficial.

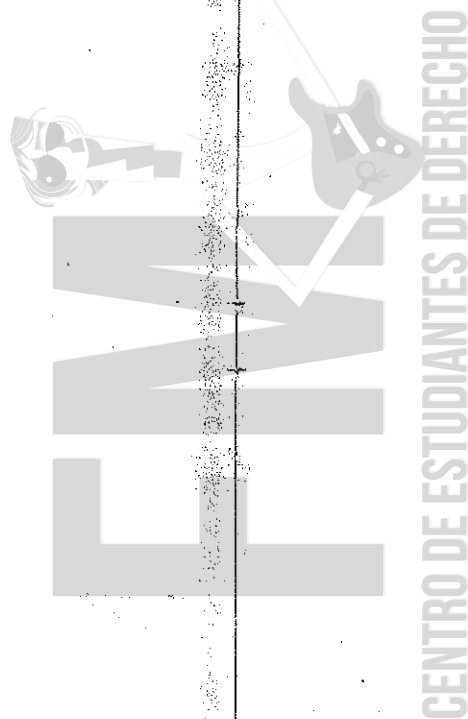
* * *

El proceso que hemos expuesto y que consiste en síntesis en la sojuzgación definitiva del interior por Buenos Aires ofrece una singular analogía con lo ocurrido en los Estados Unidos después de la guerra de Secesión. Allí también el triunfo de un partido significó la aniquilación del adversario. El Sur vencido fue despojado de su vieja "gentry" que le proporcionaba sus jefes naturales con lo cual desapareció definitivamente como influencia política y debió someterse a la ley del vencedor.

Pero con una diferencia fundamental, que es la siguiente: mientras en Estados Unidos el partido triunfador era el partido realmente nacional, el que mejor representaba la tradición y los intereses de la colectividad norteamericana, entre nosotros ocurría exactamente lo contrario y era el partido antinacional el que vencía. El aplastamiento del federalismo en sus últimos reducidos significaba aquí la derrota de la Independencia y de la grandeza, por los representantes del espíritu colonial y contrarrevolucionario.

Desde entonces, la lucha política se centra en Buenos Aires.

Y éste es el sentido del proceso que se produce bajo la presidencia de Avellaneda. Despojados los provincianos de su personalidad histórica disputarán el poder aglutinado en la capital, apoyados en uno de los dos partidos en que se divide la opinión porteña: por curiosa paradoja, el más celoso de la integridad provincial y el que había hecho de ella su bandera de lucha.



LIBRO VI

LA REPÚBLICA LIBERAL Y MERCANTIL

I. AVELLANEDA. LA CRISIS ECONÓMICA Y LA CAMPAÑA DEL DESIERTO

Los últimos años de la presidencia de Sarmiento fueron bastante agitados por el problema de la sucesión presidencial, por los comienzos de la crisis económica que alcanzaría su cima en la presidencia siguiente y por una nueva sublevación de López Jordán en Entre Ríos, que duró de mayo a diciembre de 1873. La sublevación terminó con la derrota del caudillo en la batalla de Don Gonzalo, debida a la inferioridad de su armamento. El mismo presidente asumió la dirección de la campaña y fue él quien condujo a la provincia rebelde las armas de precisión recién adquiridas, que ensayó personalmente, según cuenta Gálvez, sobre las paredes de la Escuela Normal de Paraná, en construcción entonces.

Dos candidaturas serias se perfilaban para la futura presidencia, en las personas de los jefes de los partidos actuantes, después de la destrucción del partido federal: la de Mitre y la de Alsina. Mitre contaba con su grupo porteño y con las situaciones de San Juan, Corrientes y Santiago, hechura suya. Alsina, con el gobierno autonomista de la provincia de Buenos Aires y con los de Catamarca y La Rioja, cuyos círculos oficiales lo habían proclamado. Ninguno de los dos alcanzaba, sin embargo, fuerzas suficientes para triunfar. La mayor parte de las provincias los resistían a ambos sobre todo por ser porteños, aparte de la persistencia, contra Mitre, de los viejos odios, y ninguno contaba con la simpatía del presidente. Este se inclinaba a favorecer las aspiraciones de su ministro de Instrucción Pública, doctor Nicolás Avellaneda. La candidatura de Avellaneda se proclamó primero en su provincia natal —Tucumán— y encontró rápido auspicio en gran parte de los gobiernos "rumbeadores" del interior, por lo cual aquél renunció a su cargo para dedicarse de lleno a los trabajos electorales. Logró obtener así el apoyo de diez provincias. Ante este resultado, Alsina retiró su candidatura y decidió apoyarlo, mediante un pacto que aseguraba el segundo término de la fórmula para el doctor Mariano Acosta. Una nueva candidatura había surgido y muerto entretanto: la del doctor Manuel Quintana, auspiciada por un núcleo disidente del mitrismo.

Muy joven para la alta responsabilidad a que se lo llamaba —pues apenas tenía 36 años— el doctor Avellaneda se hallaba favorecido por la aureola simpática que le prestaba la circunstancia de ser hijo de uno de los mártires del régimen triunfante. Llegado a Buenos Aires alrededor del 60, había actuado en el periodismo y ocupado una banca en la Legislatura provincial, incorporándose a la fracción autonomista. Alsina lo había hecho su ministro de Gobierno. Su actuación destacada llamó la atención de Sarmiento, presidente electo a la sazón, quien lo agregó a su elenco con la cartera de Instrucción Pública. La actuación en este cargo del joven tucumano —que desplegaba una actividad inteligente e infatigable— le había valido la estimación general. La fundación de colegios y escuelas y la organización de la enseñanza en toda la República, de acuerdo con las exigencias del aumento de la población, eran obra suya y lo instituían en jefe de una desarrollada burocracia, que contribuiría en gran parte a su triunfo.

No era esto lo principal, no obstante. Decidirían la elección otros factores imponderables que no habrán escapado, sin duda, a la aguda percepción política de Alsina y que determinaron su auspicio de la candidatura Avellaneda. Como reacción contra la "pacificación" mitrista y sus consecuencias, el país resistía la influencia "porteña", sensible aún bajo la presidencia del provinciano Sarmiento, y anhelaba cambiar. Y si es verdad que el país no "votaba" sino por medio de sus oficialismos, éstos preferían no contrariar ciertas corrientes difusas de la opinión, de las que ellos mismos participaban. La juventud de Córdoba —encabezada por Juan M. Garro, Angel Ferreyra Cortés, Francisco López, etc.— tomó la iniciativa, que halló eco entusiasta. Avellaneda era otra cosa que el mitrismo masónico y extranjerizante; representaba cierta persistencia de tradicionalismo provinciano y católico, si bien teñido de romanticismo chateaubriandescos. Además de los "maestros famélicos y canónigos repletos" —que constituían, según la prensa mitrista, el partido que lo apoyaba— pujaba por el joven candidato la esperanza nacional en una regeneración política.

* * *

La propaganda electoral se desarrolló en un clima de gran violencia recíproca, agravada por el pánico emergente de los primeros síntomas de la crisis económica, que conspiraban contra la candidatura oficial. Las elecciones para la renovación de la Legislatura se realizaron en Buenos Aires el 1° de febrero de 1874; ga-

naron por pequeño margen los autonomistas. Las elecciones presidenciales se realizaron en todo el país el 14 de abril. Mitre ganó en Buenos Aires, Santiago del Estero (los Taboada) y San Juan. Avellaneda, en los 11 distritos restantes, con lo cual la fórmula que encabezó logró, en el escrutinio, 145 votos contra 79 de sus adversarios.

La circunstancia inesperada de haber ganado en Buenos Aires (donde hubo acusaciones de violencia y fraude por ambas partes, iniciándose también —innovación mitrista— el sistema de la compra de votos), envalentonó a los perdedores, quienes tacharon la legalidad del acto, alegando la presión oficial en las provincias. El general Mitre, que había subido al gobierno por el voto de sus coroneles distribuidos en todo el interior, encontraba escandalosa e ilegal la intromisión electoral de los gobernadores. No se sabe hasta qué punto influiría en su actitud alguna decisión secreta de las logias, alarmadas ante un resultado grato a los obispos. Lo cierto es que decidió apelar a las armas. Devolvió al gobierno sus despachos de general y se embarcó para la Banda Oriental, desde donde lanzó una proclama a "los pueblos" incitándolos a la revuelta.

La revolución fue un fracaso. Los mitristas consiguieron suleva un barco de la escuadra —la cañonera Paraná—; la guarnición de San Luis —copada por el general Arredondo, después de matar de un tiro a su jefe, el general Ivanowsky—; las fuerzas del coronel Rivas en el sur de la provincia, y los indios del cacique Catriel, aparte de los consabidos Taboada. Mitre desembarcó en las cercanías del Tuyú, donde juntó unos 9.000 hombres. El 27 de noviembre, una columna gubernista de 900 hombres (diez veces menos) lo derrotó en La Verde, obligándolo a que se entregase prisionero, en Junín, cinco días más tarde. El general Arredondo, que había llegado a posesionarse de Córdoba, fue derrotado el 7 de diciembre por el coronel Roca en la batalla de Santa Rosa. Roca sería ascendido a general a raíz de este triunfo. El ejército de los Taboada se disolvió sin pelear. Un batallón de línea mandado poco tiempo después a Santiago del Estero, daría fin, por simple acción de presencia, al prestigio sonado de esos caudillejos.

Mientras tanto, Avellaneda se había hecho cargo del mando el 12 de octubre de 1874.

* * *

En el primer ministerio que formó descollaban las personalidades del doctor Alsina, titular de la cartera de Guerra y Marina,

y del doctor don Bernardo de Irigoyen, antiguo federal y encargado por Rosas de delicadas misiones en el interior, titular de Relaciones Exteriores. Aparte de la pacificación del país, convaliente de la rebelión mitrista —a cuyos autores se sometió a consejos de guerra—, quedaba por resolver el delicado problema del tratado con el Paraguay, detenido en los términos en que lo había dejado la fracasada negociación de Mitre, y había que hacer frente a la difícil situación económica cuyos primeros amagos se experimentaban.

Irigoyen afrontó personalmente las negociaciones con el Paraguay y llegó a un acuerdo por el cual ambas partes aceptaban el límite del Pilcomayo y se comprometían a someter la región litigiosa del Chaco —incluida Villa Occidental— al fallo del presidente norteamericano. Dado el estado de la opinión pública internacional con respecto a la guerra inícia —totalmente contrario, sobre todo en los Estados Unidos, a los agresores del Paraguay— era de prever que el fallo nos sería adverso, como efectivamente ocurrió.

La crisis económica que se pronunciaba a principios del 74, arreciaría en el año siguiente, en forma de disminución de exportaciones y déficit de la balanza de pagos, con sus consecuencias de desvalorización de tierras, pánico, contracción de depósitos y catástrofes particulares en serie. A veinte años de Caseros, se sentían por primera vez los resultados de la política vesánica instaurada entonces y que nos convertía en apéndices de la industria europea, sujetos a todas las fluctuaciones de los mercados compradores, de los que dependíamos de manera incondicional. El país había sufrido desde entonces una permanente sangría y una pronunciada descapitalización, por la monocultura y la desaparición de sus industrias propias. Reducidos a vender barato y comprar caro, nuestro trabajo se capitalizaba en Europa, en las arcas de nuestros amos. Bastaba que éstos simplemente no nos compraran o nos compraran menos, para librarnos al hambre y a la desesperación.

Se habían contraído empréstitos en Londres (alrededor de 15 millones de libras bajo la presidencia de Sarmiento), que se habían empleado, sobre todo, en adquisiciones improductivas: material de guerra para nuestro ejército del Paraguay y para aplastar la rebelión interna. Gran parte de nuestra riqueza era drenada anualmente al extranjero por amortización e intereses de esa deuda, a lo cual se sumaba el interés de las inversiones (reales o ficticias) de las empresas concesionarias de ferrocarriles y obras públicas. Todo esto hacía sumas tan altas, que generalmente había que recurrir nuevamente al crédito cuando los vencimientos se acumulaban, con lo que remachábamos cada vez más las cadenas de nuestra servidumbre.

Ante esta situación, dos soluciones políticas se presentaban. Una era la que contemplase ante todo el interés nacional y consistía en la moratoria, la suspensión de pagos, el cierre de las importaciones y la reconstitución interna por el fomento de la industria propia: es decir, la vuelta a la casi autarquía de la época de los bloqueos, que había protegido la fortuna y fomentado la capitalización interna. Fue otra la que se adoptó: el mantenimiento del "crédito", el pago de la deuda externa, "ahorrando (frase de Avellaneda) sobre el hambre y la sed de los argentinos" en beneficio de los capitalistas británicos. Se impusieron economías drásticas en la administración pública y el curso forzoso interno y se votaron nuevos impuestos, al mismo tiempo que se embarcaban para Europa nuestras reservas metálicas. De 15.413.200 pesos oro que poseíamos en 1872, bajamos a 158.807 pesos oro en 1877. Lo que equivalía, lisa y llanamente, a robar el dinero de los bolsillos nacionales para entregarlo a los prestamistas. Muchas modestas fortunas argentinas se desvanecieron así en esos años y sus titulares pasaron a engrosar las filas de la burocracia modesta o del proletariado famélico.

La crisis tendría algunas consecuencias inesperadas. La necesidad de restringir las compras en el exterior obró como una medida proteccionista, que dio al país oportunidad de mostrar sus posibilidades. No sólo se intensificaron los cultivos de trigo hasta el extremo de iniciarnos como país exportador, sino que se establecieron multitud de industrias, incluso una fábrica ¡de papel para diarios! Paños, calzados, muebles, vinos, azúcares, fideos, todo lo que significara la transformación de las materias primas agropecuarias, se intentó en la época de la gran crisis de 1873 a 1879. En 1876, el ingeniero francés Tellier, que había resuelto el problema del transporte de carne fresca en barco frigorífico, condujo a Europa el primer cargamento de nuestras carnes así acondicionadas.

La influencia intelectual de la generación organizadora había calado muy hondo. Avellaneda creía, sin duda de buena fe, que "el capital extranjero" (no el trabajo argentino) era "el propulsor de nuestro progreso". La experiencia no nos enseñaría nada y los conatos industriales se detendrían ante el primer amago de la vuelta de las vacas gordas.

La inquietud política persistía, agravada por las consecuencias de la crisis. El partido mitrista, o nacionalista, se mantenía en la abstención electoral y los rumores conspiratorios, sin que

hubiese bastado para desarmarlo la amnistía que, en 1875, decretó Avellaneda para los culpables del levantamiento de setiembre. A favor de esa inquietud, generalizada en el interior, se produjo a fines de 1876 el tercero y último intento revolucionario del general López Jordán en Entre Ríos. Derrotado en Alcaracito el 27 de diciembre, fue tomado prisionero y conducido a Rosario.

La situación se complicaba por las dificultades internacionales con Chile, que agitaba sus aspiraciones sobre la Patagonia y se había establecido en Punta Arenas, sobre el Estrecho.

Todo ello debía repercutir en las filas del partido autonomista, donde la coherencia distaba mucho de ser total entre los diferentes sectores. Desde tiempo atrás se había pronunciado en su seno una definida tendencia popular, cuyo disenso con el gobierno se acentuó a raíz de su política frente a la crisis. Esta fracción, cuyos jefes visibles eran el doctor don Aristóbulo del Valle y el doctor don Leandro N. Alem, propiciaba el establecimiento del régimen municipal en la campaña y un sistema de garantías para sus habitantes, sometidos a la arbitrariedad de funcionarios discrecionales, la abolición del servicio de frontera y la anulación de los aumentos de tarifas que imponía el capital ferroviario inglés en detrimento del interés de los pobladores. Aunque sin asumir una actitud de abierta oposición al gobierno nacional, la abstención del mitrismo les ofreció la oportunidad de actuar con independencia, proponiendo sus propios candidatos para las elecciones de la Legislatura provincial. Así ganarían, con el rótulo de partido "republicano", las de renovación de este cuerpo en marzo de 1877, conquistando la mayoría en su seno.

La abstención del partido nacionalista significaba un serio problema para el gobierno nacional y un peligro para las aspiraciones presidenciales del doctor Alsina, cuyo propio partido parecía dividirse en tendencias difíciles de soldar. Para copar la amenaza permanente de una nueva revuelta armada y lograr una solución pacífica del problema político, el caudillo autonomista ideó, de acuerdo con el presidente y el gobernador de la provincia, doctor Casares, una solución conciliatoria, sobre la base de la entrega al mitrismo de la situación provincial. En sucesivas conversaciones se definió el pacto, que implicaba la vuelta del partido abstinentista a la vida política, y se celebró con gran algazara de discursos, manifestaciones y banquetes. Alsina se aseguraba de este modo la presidencia futura.

La "conciliación" no fue aceptada por el ala popular del autonomismo, que acusó a Alsina de sacrificar a sus amigos y sus principios a sus intereses personales. Mientras tanto, la nueva política se concretaba en la entrada al gabinete nacional de dos

mitristas tan conspicuos como el doctor Rufino de Elizalde y el doctor José María Gutiérrez, y en la adopción por los partidos conciliados de la fórmula Carlos Tejedor - José María Moreno para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El "Comité Republicano" proclamó los nombres de Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem.

La elección se realizó el 2 de diciembre y en ella no pudieron los republicanos repetir su triunfo de marzo, pues tenían que luchar en la ocasión contra la otra fracción del autonomismo, aliada a los mitristas, y contra la presión conjunta de los gobiernos nacional y provincial. Ganó holgadamente la fórmula oficialista.

El doctor Alsina era el indiscutible hombre fuerte del gobierno de Avellaneda, y la circunstancia se había acentuado con la operación que le aseguraba la sucesión en el mando. Las caricaturas políticas de la época lo presentaban invariablemente al presidente como un chiquillo de largas barbas, llevado a la rastra de la mano por su Mentor, el ministro de la Guerra. En lo cual no dejaba de haber un desahogo de la vanidad porteña frente al esmirriado provinciano de tonada cantante, que la había derrotado y le imponía su ley.

Aparte de la pacificación política, la preocupación permanente de Alsina había sido el problema del indio. Este había dejado de ser nacional para convertirse en internacional por las aspiraciones chilenas a la Patagonia, que en gran parte se fundaban en nuestra falta de posesión efectiva de esos territorios: tierras desiertas, en realidad, salvo las tolderías de los indios errantes, tierra de nadie. La mera declaración de derechos y la división administrativa en el papel (como la fundación de gobernaciones hecha por Sarmiento) se contrarrestaba por la permanente intromisión chilena allí, por la inscripción de los habitantes patagónicos como miembros de esa nacionalidad y por las relaciones de comercio con las tribus, quienes negociaban en Chile el fruto de sus depredaciones en nuestras fronteras. Las sucesivas reclamaciones diplomáticas, por éstos y otros motivos, mantenían las relaciones entre ambos países en un clima de nerviosidad y tensión.

El plan de Alsina consistía en un adelantamiento progresivo de la frontera y en el establecimiento de un sistema defensivo constituido por zanjones profundos. Para la ejecución de ese plan se puso personalmente en campaña y dirigió la guerra represiva contra las tribus, que se prolongó durante los años 76 y 77.

No concluiría su obra. Una nefritis aguda lo atacó y dio cuenta de él en pocos días, cuando estaba en vías de alcanzar la cumbre de sus aspiraciones políticas. Murió el 19 de diciembre

de 1877, a las dos semanas del triunfo de la reconciliación en Buenos Aires y a los 49 años de edad.

* * *

La muerte de Alsina, que provocó un gran duelo público (aparte de los duelos particulares de tantas esperanzas segadas en flor) tendría consecuencias políticas importantes, porque trastornaba todos los cálculos sobre el inmediato futuro. La política de conciliación se fundaba sobre el acuerdo de ambos partidos en su candidatura a la presidencia. Su muerte mataba también la conciliación; implicaba la quiebra del pacto por falta de materia pactable y el libre curso para todas las aspiraciones postergadas.

Avellaneda nombró en seguida para sucederlo en el ministerio al general don Julio A. Roca, el hombre de Ñaembé y Santa Rosa, que había sido colaborador en la gestión de Alsina. Mucha gente (y desde luego el propio interesado, ambicioso y sagaz) vio en ello una definición del presidente en la lucha que se avecinaba. El general Roca se puso con empeño a su tarea, que le daba ocasión de ganar poder y prestigio.

La situación se había hecho sobremanera confusa. La muerte de Alsina le abría nuevamente al mitrismo la posibilidad de alcanzar el gobierno nacional y entró para ello en su táctica consabida de agitación y conspiración. El gobernador Tejedor manifestaba por su parte, la voluntad de sostener su propia candidatura; suscitaba el localismo de Buenos Aires para recoger la herencia de Alsina, al mismo tiempo que se apoyaba en Mitre para conmover las situaciones provinciales desafectas y cambiarlas por otras más adictas. En 1878 y febrero de 1880 provocó sendas revoluciones en Santa Fe y Córdoba, que fueron vencidas. Como la Legislatura de mayoría republicana le significara un estorbo, trató de obstruir en diversas formas su funcionamiento y falsear los resultados electorales. Todo lo cual creó un estado de tirantez entre el gobierno provincial y el nacional, al que Tejedor había calificado de "huésped" de la provincia de Buenos Aires.

* * *

Mientras tanto, el general Roca iniciaba la gran empresa que había ideado en su colaboración ministerial con Alsina, sin lograr el auspicio de éste. Consistía, esencialmente, en reproducir el plan de Rosas y arrebatarles a los salvajes, de una vez por todas,

los territorios del sur. A los tres meses de ocupar el ministerio salió a campaña con 6.000 soldados. En pocos meses dio fin a la obra, destruyendo todas las tolderías hasta el río Negro, lo que constituiría la primera parte del plan. Varias columnas operarían luego en los grandes afluentes del río para limpiar los valles cordilleranos. La supresión o el sometimiento del indio de la Patagonia quedó concluida en poco tiempo.

La solución de este problema que parecía insoluble y a cuya prolongación indefinida se hallaban resignados la mayor parte de los hombres públicos de entonces, significó para el joven general que la había concebido y ejecutado un título de gloria que lo equiparaba a las primeras figuras de la República. Se comparaba su actuación con la de los gobiernos anteriores, especialmente infortunados en su política con los indios, lo que había envalentonado a éstos, haciéndolos cada vez más insolentes y agresivos. En 1872 se había producido la gran invasión de Calfucurá, gran cacique de los Pampas, derrotado en San Carlos por el general Rivas; y poco después la de Namuncurá, en cuya represión se había distinguido el teniente coronel Levalle. El adelantamiento de la línea de fronteras bajo Alsina se había realizado a costa de permanentes combates contra la resistencia aborigen.

Se comprenderá la persistencia de este problema si se tienen en cuenta dos circunstancias que suelen olvidarse. El indio constituía, sin duda, un flagelo que había que eliminar. Pero su vecindad había dado origen a un activo comercio en el que se realizaban pingües ganancias. Con el producto de sus rapiñas negociadas en Chile, adquirían a buen precio en ese comercio fronterizo, aguardiente y armas. Era natural que los usufructuarios del negocio constituyeran una permanente oposición a toda acción enérgica y difundieran la opinión de la ineficacia de la represión y la conveniencia de una "hábil" política contemporizadora y dilatoria.

En segundo término, conspiraban contra la represión las implicaciones internacionales de que ya se había hablado. Los indios constituían una pieza importante del juego chileno, al que obedecían en gran parte sus movimientos. Chileno era el secretario de Namuncurá y muchos de los consejeros y lenguaraces de otros caciques. Cualquier campaña a fondo contra los indios entrañaba el riesgo permanente de un conflicto internacional, para el que había que estar previamente preparados; y la preparación militar de Chile era en ese tiempo superior a la nuestra. El general Roca tuvo el mérito de elegir el momento adecuado para obrar: cuando la nación trasandina tenía sus fuerzas comprometidas en la guerra contra el Perú. El éxito de la campaña del desierto entrañaba asimismo un triunfo estratégico sobre Chile.

II. "LA MUERTE DE BUENOS AIRES"

El problema de la renovación presidencial al término de la administración de Avellaneda se presentaba sobremanera confuso, por la anarquía de las fuerzas políticas y por la especial violencia que había caracterizado en los últimos años la lucha de las facciones. En la agitación afloraba, como cuando se remueven aguas dormidas, el sedimento de los viejos odios.

Dos candidaturas se perfilaron desde el comienzo para reemplazar a Alsina: la del gobernador de Buenos Aires, doctor Tejedor, y la del general Roca, ministro de Guerra. El primero se consideraba el heredero natural de la política de conciliación inaugurada por el jefe del autonomismo y a la que debía su magistratura provincial. Contaba con el apoyo de los mitristas y de los autonomistas "líricos", que habían seguido las directivas políticas del gobernador Casares. Roca se presentaba aureolado de sus frescos laureles de "conquistador del desierto" y, si bien carecía de partido propio, trabajaba en su favor la idea, que fue paulatinamente difundándose en los círculos políticos, de que gozaba del auspicio presidencial y de las situaciones gubernativas del interior, aparte de la adhesión firme de las jerarquías militares.

El partido autonomista estaba dividido, según vimos, a raíz de la abstención mitrista, y su ala popular, "republicana", que tuvo por un momento la mayoría en la Legislatura, había mantenido reticente con respecto al gobierno nacional y en franca oposición al provincial. Conocemos ya las características de este grupo en el que, pese al liberalismo de su definición, se prolongaban las reacciones y las actitudes del federalismo histórico, del que provenía la mayor parte de sus miembros. La muerte de Alsina y el peligro de una resurrección mitrista por vía de la política de "conciliación" los había hecho pensar, desde el año 1878, en la necesidad de unificar el autonomismo con proyecciones nacionales. Promovieron, por consiguiente, un movimiento en este sentido, que se concretó en la formación de un comité de todas las tendencias, encabezado por Sarmiento (cuyo diario "El Nacional" era el órgano de la campaña) e integrado, entre otros, por Luis y Roque Sáenz Peña, Navarro Viola, Alem, del Valle, Casares, Hipólito Yrigoyen y Adolfo Saldías. En el manifiesto

que se dio, auspiciando la idea de la formación del partido autonomista "nacional", aunque escrito con las vagas generalizaciones necesarias para conciliar tendencias dispares, se destacaba esta cláusula, que bastaba para diferenciarlo netamente del pensamiento de sus adversarios: "*La Nación necesita. . . promover sus industrias que la emanciparán del dominio económico del extranjero, arrancándola. . . de la postración en que ha caído*".

Esta primera tentativa de un partido nacional principista, en la que se manifestaba, además, la intención de superar los localismos y de resolver los problemas comunes por la libre deliberación de los ciudadanos, fracasaría pronto. Aparte del temor natural al surgimiento de una nueva candidatura de Sarmiento, disimulada tras de la operación, debían hacerla fracasar los intereses de la candidatura del general Roca, quien ya tenía montada su máquina electoral y no podía consentir en someterse a la discusión de un partido cuyo único caudal real era porteño y que preferiría naturalmente otros candidatos: ya fuese el mismo Sarmiento, o don Bernardo de Irigoyen, jefe de la fracción de los "puros" y aspirante tenaz. A los electores del interior los tenía asegurados por la simple decisión de los gobiernos. La convicción de que esto ocurriría hizo que, poco a poco, el autonomismo "unificado" empezara a desgranarse nuevamente, yéndose algunos de los firmantes del manifiesto a apoyar la candidatura de Roca y otros, los "porteñistas" recalcitrantes, la de la conciliación, con Tejedor y los mitristas.

* * *

¿Qué era la "liga de los gobernadores"? No era otra cosa que la consecuencia natural de la depresión provinciana, a raíz del aplastamiento del federalismo, después de Pavón. Privadas de sus jefes naturales y abatidas en su orgullo local, las provincias se habían convencido de que la única garantía de subsistencia de sus gobiernos consistía en el sometimiento incondicional a las indicaciones del presidente de la República, de quien los gobernadores eran cada vez más meros agentes. No es de extrañar que la candidatura del general Roca encontrase auspicio ante la simple sospecha de que era "oficial". No dejaba de contribuir en gran parte a este auspicio —aparte de los méritos del candidato— la circunstancia de tratarse de un provinciano, nacido en Tucumán, lo que satisfacía el permanente espíritu de desquite, latente en el interior.

La circunstancia de ser Roca un provinciano era asimismo la que estimulaba la resistencia de Buenos Aires contra su candi-

datura. El gobernador Tejedor —unitario de línea rivadaviana y temperamento terco y voluntarioso— había levantado la bandera del más empujado localismo: el que le había dado el triunfo a Adolfo Alsina y que se empeñaba en calcar. El “modus vivendi” establecido en la “ley de compromiso” hacía del gobierno nacional un simple residente en Buenos Aires. El sistema había funcionado bien mientras hubo entre ambos gobiernos —el nacional y el provincial— afinidad política y concordancia de miras. Cuando éstos se hicieron discordantes a raíz del pleito presidencial, empezaron los rozamientos recíprocos y los conflictos de jurisdicción y la convivencia se hizo imposible, planteándose nuevamente en forma urgente el problema de la capital definitiva. Es evidente que no podía resolverse sin sometimiento de una de las partes, y empezó a vislumbrarse que ello no sería posible sin lucha.

El llamado al orgullo porteño debía encontrar un eco entusiasta en Buenos Aires. Acentuado el desequilibrio entre ésta y el interior a raíz de la “pacificación” mitrista, se concentraban en ella todos los esplendores del progreso material por lo cual se había convertido en el punto terminal de una lenta inmigración proveniente de las provincias, ansiosa de trabajo y bienestar. Buenos Aires se había llenado de provincianos. Muchos de éstos, amigos o parientes del presidente o sus ministros, encontraban pronta ubicación en los puestos de la administración pública nacional, en victoriosa competencia con los aspirantes porteños, acostumbrados a sentirse dueños únicos de su ciudad natal. De esto a sentirse invadidos no había más que un paso. Se dio fácilmente, gracias a la propaganda tejedorista, que invocaba el recuerdo oportuno de las montoneras del año 20, de la revolución del 11 de setiembre y de Pavón. No obstante el régimen constitucional y la “ley de compromiso”, empezó a considerárselo a Avellaneda como a un intruso cuya presencia humillaba a la ciudad histórica y a removerse contra él los mismos sentimientos que habían inspirado la resistencia contra Urquiza. La voz de orden en los círculos tejedoristas y mitristas era la necesidad de un nuevo 11 de setiembre, ante la nueva tentativa de opresión que sufría Buenos Aires y que no debía de ningún modo consentir.

El argumento principal de los tejedoristas consistía en la oposición a los gobiernos electores. Desde abril de 1870, el diario del general Mitre empezó a denunciar a la “liga de gobernadores” que pretendía implantar la candidatura del general Roca. El 2 de junio se proclamó la de Tejedor a la presidencia, acompañado por el doctor Saturnino Laspiur, sanjuanino y uno de los ministros mitristas de Avellaneda. La aceptación del candidato expresaba su firme voluntad de oponerse a los gobiernos electores y de

luchar por la libertad de sufragio. Al mismo tiempo empeñábase en provocar un vuelco de las situaciones provinciales. Los mitristas hacían una revolución en Corrientes e intentaban conmovir a los elementos “jordanistas” de Entre Ríos. El enemigo de los “gobiernos electores” proponíase por estos medios constituir su propia “liga”. El mismo día que se proclamaba la fórmula Tejedor-Laspiur, un grupo de hombres espectables de Buenos Aires, pertenecientes al autonomismo, rendía un homenaje público al general Roca por su expedición al desierto y fundaba un comité para propiciar su candidatura. Ya ésta contaba con el pronunciamiento de las situaciones de Tucumán, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe.

No obstante la proclamación de dos candidaturas de guerra, en actitud francamente hostil, la política de conciliación aparentemente subsistía por la presencia en el gabinete de Roca y de Laspiur, y éste precisamente en el Interior, el ministerio de los mangoneos electorales. Avellaneda mantenía la ficción de la imparcialidad. El peligro de que cundiese el ejemplo de Corrientes y se formase una liga de gobernadores litorales opuesta a la oficialista, hizo que los partidarios de Roca provocaran la renuncia de Laspiur, que fue seguida por la de otros mitristas: Lastra y Montes de Oca. La conciliación quedaba así liquidada. Avellaneda nombró en el ministerio del Interior a Sarmiento.

* * *

El carácter irreductible de las dos candidaturas proclamadas, cuyo choque llevaba directamente a la guerra civil, hacía surgir en muchos espíritus la convicción de que era necesario buscar una fórmula que asegurase la sucesión pacífica del mando, mediante el consabido “sacrificio patriótico” de las ambiciones particulares. Esto alentaba naturalmente muchas vocaciones salvadoras, entre ellas la del mismo Sarmiento, apoyado por el sector autonomista, que se mantenía reticente con respecto a la candidatura oficial. Por hallarse igualmente distante de ambas facciones contrapuestas, su nombramiento significaba una garantía de imparcialidad; y así lo justificó el presidente en una declaración pública. De entrada manifestó el ministro su repudio por las candidaturas oficiales y su intención de llegar a una solución transaccional, de acuerdo con la prédica emprendida en su diario, para lo cual no encontró recurso mejor que iniciar el desmontaje de las situaciones provinciales dominadas por aquéllas para reemplazarlas —¡naturalmente!— por situaciones “transaccionales”, o sea sarmientistas.

No le dieron tiempo. Apenas si pudo mandar la primera intervención a Jujuy, a raíz de un movimiento armado contra el gobernador Torino. Un proyecto de ley que se remitió al Congreso, prohibiendo a las autoridades provinciales la movilización de sus fuerzas y los ejercicios doctrinales de la Guardia Nacional (en momentos en que tanto tejedoristas como roquistas se armaban precipitadamente) hizo que ambos partidos se unieran contra él y lo derrotaran en la Cámara de Diputados. Sin apoyo parlamentario y combatido por todos los sectores, hubo de renunciar al fin, después de un famoso discurso en el Senado, en el que denunció la "liga de los gobernadores electores"... ¿de otro que no era Sarmiento!

Mientras el gobierno de Buenos Aires se armaba y la "juventud dorada" del mitrismo formaba sus batallones en el "Tiro Nacional", surgía una nueva candidatura, además de la de Sarmiento: la del doctor don Bernardo de Irigoyen, proclamada por el "Club de la Paz", también autonomista y presidido por el doctor don Luis Sáenz Peña. Irigoyen había sido ministro de Avellaneda y representaba la fracción "pura" del partido, sin contaminación con otras tendencias. Entre ambas candidaturas se repartía el ala "principista" del viejo partido de Adolfo Alsina. Aunque sostenidas por personalidades espectables de la política y los intereses dominantes, carecían no obstante de posibilidades, por constituir fracciones netamente "porteñas", sin influjo sobre las situaciones del interior, controladas por el general Roca. Este había renunciado a su ministerio y se había instalado en Córdoba, desde donde dirigía hábilmente los hilos de su estrategia. Acababa de obtener su primera victoria con la elección de su pariente el doctor Juárez Celman para la gobernación de la provincia.

* * *

Las elecciones del 11 de abril de 1880 se realizaron en una atmósfera densa de presagios siniestros y en pleno clima de guerra civil. Mientras las tropas provinciales permanecían acuarteladas, el gobierno nacional hacía retroceder a Buenos Aires sus regimientos de línea. Como éstos habían sido reforzados, después de la expedición al desierto, con algunos centenares de indios pampas, se acusaba al presidente de traer sobre la indefensa ciudad a los salvajes de las tolдерías. Los incidentes entre provincianos y porteños se sucedían sin interrupción. El roquismo no acudió a los comicios en la capital, cuyo escrutinio dio 5.907 votos a la fórmula Tejedor-Laspiur y 598 al "Comité de la Paz".

Tejedor ganó también en Corrientes y Roca en el resto de la República, lo que le otorgaba una amplia mayoría.

Desde el principio se vio la decisión, por parte del gobernador de Buenos Aires, de no aceptar el resultado de los comicios, lo que hizo que se reprodujeran las gestiones conciliatorias para llegar a una transacción. El que se había manifestado antes como campeón de la intransigencia ofrecía ahora retirar su candidatura derrotada, siempre que el general Roca renunciara a la suya victoriosa. Menudearon las entrevistas entre los personajes políticos y aun entre los mismos candidatos, sin que se llegara a ningún resultado positivo. Las "fuerzas vivas" se movilizaban entre tanto a favor de la paz y realizaban una concentración que reunió a 30.000 personas, encabezada por Mitre, Sarmiento, Rawson, Vicente F. López, etc., entre quienes figuraban algunos que habían atizado la discordia y se ofrecían como portadores del ramo de olivo de una candidatura transaccional que recayera en ellos mismos.

Frustrada una última tentativa del tejedorismo para presionar al Congreso Nacional en el sentido de anular las elecciones de varias provincias en que había triunfado el roquismo así como la presión moral para forzar la renuncia del general Roca, la provincia se dispuso a combatir. El gobernador había sido autorizado para adquirir armamentos con destino a sus tropas de policía y bomberos. El 2 de junio, burlando la vigilancia de las fuerzas nacionales, desembarcó en el Riachuelo cinco mil rémingtons, que se exhibieron jactanciosamente por los batallones porteños en las calles de Buenos Aires. Se preparaba así ostensiblemente el 11 de setiembre tantas veces anunciado. Ante esta situación, Avellaneda decidió actuar. La noche siguiente a ese desafío se retiró sin escolta de la ciudad y se dirigió a la Chacarita, donde se hallaba el regimiento 10 de caballería a las órdenes del coronel Manuel Campos. De allí lanzó una proclama, en la que se declaraba dispuesto a mover las fuerzas de la nación sobre la provincia rebelde. Tejedor respondió con otra en la que afirmaba su decisión de defender la autonomía provincial.

* * *

La ciudad quedó pronto sitiada por las tropas nacionales. Se reproducía en esencia el mismo fenómeno que después del 1° de diciembre, del 11 de setiembre y de Cepeda. Pero las circunstancias no eran las mismas. El espíritu localista sólo subsistía como un anacronismo. El triunfo de Buenos Aires sobre el resto de la República había tenido como primera consecuencia desnaturalizarla, convirtiéndola en compendio de la nación. De aquí

el aparente cambio de frente de los contendores. Mitre, que había sido "nacionalista" cuando el nacionalismo era porteño, se convertía en localista cuando Buenos Aires empezaba a ser argentina. Les tocaría a los autonomistas, defensores celosos de la integridad provincial y del orgullo local, reconocer y sancionar la nueva situación histórica.

Avellaneda se estableció en el municipio de Belgrano, erigido en capital provisoria de la República, donde pronto se le reunió una parte del Congreso y la Suprema Corte. Allí se decidió intervenir la provincia, designándose en el cargo de interventor al general don José M. Bustillo.

La ciudad se declaró en estado de defensa y Tejedor decretó la movilización de la guardia nacional. Mientras se atrincheraban todas las entradas y se construían fortificaciones, el 11 de junio se cerraba el cerco de la plaza. El primer choque armado se produjo en Olivera, cerca de Mercedes, donde el coronel Inocencio Arias reclutaba fuerzas para el gobierno provincial. Fue atacado por el coronel Racedo, del ejército nacional, produciéndose un combate de resultado indeciso. Arias se retiró hacia la capital, donde pudo entrar el 19, con 6.000 hombres, por el camino del sur. El 20 y 21 se combatió intensamente en Barracas, Floresta y Los Corrales, a la vez que los barcos de la escuadra bombardeaban el Retiro.

La situación era insostenible para Buenos Aires, por la disparidad de fuerzas que hacía segura su derrota. Su opinión ciudadana se hallaba dividida, y en su mayor parte era contraria al gobierno local; sus fuerzas militares eran escasas y bisoñas. Salvo un puñado de exaltados, todo el mundo quería la paz a cualquier precio. Cuando los muertos pasaban de dos millares, se negoció un armisticio para darles sepultura. Tejedor llamó al general Mitre para encomendarle "la dirección de la guerra", pero en realidad para hacerlo árbitro de la situación. Mitre recorrió las líneas de fortificaciones, y se dirigió de allí a Belgrano a parlamentar con el presidente.

Las condiciones que impuso Avellaneda para la capitulación fueron sobremediana benignas. Consistían simplemente en la deposición de las armas y en la renuncia de Tejedor a favor del vicegobernador Moreno, que había asumido desde el comienzo una actitud conciliatoria. Pasó no obstante una semana antes de que el gobernador se decidiera a acceder. Lo hizo con un despliegue de falsa abnegación a la manera de Urquiza, expresando que prefería "las bendiciones de las madres a las vanaglorias del triunfo comprado a costa de tantos sacrificios". Los deudos de los muertos debieron pensar, con razón, que esos bellos sentimientos se mostraban con cierto retraso.

El partido triunfante con Roca aceptó, como era natural, esa solución intermedia, que dejaba al gobierno provincial en manos de la "conciliación", autora de tantos desastres, es decir, del mitrismo. ("Las instituciones de la Provincia se han salvado", escribía el diario tejedorista "La Tribuna"). Quería el mantenimiento de la intervención en Buenos Aires, la disolución de la Legislatura provincial y el llamamiento a nuevas elecciones. Quería además, aprovechar la circunstancia de la victoria para resolver definitivamente el problema de la capital.

No obstante la oposición de Avellaneda, quien para hacer honor a sus compromisos personales con el doctor Moreno, llegó a presentar su renuncia (que le fue rechazada) y a vetar la ley correspondiente, el Congreso con mayoría roquista insistió y llevó adelante esos propósitos. La Legislatura quedó disuelta y el vicegobernador renunció. El Congreso declaró cesantes de sus cargos a los veinticuatro diputados que habían apoyado a Tejedor e intervino la provincia de Corrientes.

La guerra civil provocada por Buenos Aires tuvo como consecuencia inmediata la unificación del autonomismo, que se inició cuando todavía no habían cesado los combates. Había un anhelo general de paz y de orden. Ello hizo que las fracciones que habían levantado las candidaturas de Roca, Sarmiento y don Bernardo depusieran en seguida sus diferencias sobre la base de la aceptación del triunfo del primero, la proclamación de una candidatura común para la gobernación de Buenos Aires y la solución de la cuestión de la capital. Se proclamó, para el puesto que había dejado vacante la renuncia de Moreno, al doctor don Dardo Rocha.

Avellaneda, que permanecía todavía en Belgrano, envió el 24 de agosto a las Cámaras el proyecto que declaraba al municipio de Buenos Aires capital definitiva de la República, de acuerdo con el precepto constitucional. Y el 1° de setiembre convocó a elecciones nacionales y provinciales.

La capitalización se trató el 10 de setiembre en la Cámara de Diputados y el 20 en el Senado, y fue resuelta por gran mayoría.

Quedaba todavía por llenar el requisito constitucional de la aprobación de la cesión del territorio federalizado por la Legislatura provincial, para lo cual fue necesario esperar el resultado de las elecciones. Estas dieron un amplio triunfo, como era lógico, a los autonomistas, con lo cual la operación estaba asegurada. La opinión en aquel sentido no fue, sin embargo, unánime. El doctor Leandro Alem, que integraba el Consejo Directivo del Partido Autonomista Nacional, había renunciado a este cargo y a su candidatura a una diputación nacional, para optar a una provincial, con el objeto de oponerse a una solución contraria

a la tradición alsinista y cuyas proyecciones consideraba funestas. En el debate, la opinión favorable al proyecto del Ejecutivo a la capitalización fue sostenida por José Hernández. Alem la impugnó en un discurso elocuente y con vislumbres proféticos, en el cual anunció, como consecuencia del acto que se proyectaba, la muerte del federalismo y el sometimiento de las provincias a la capital hipertrofiada y tiránica. La visión era justa, pero el razonamiento débil. Alem profetizaba un poco *a posteriori*, puesto que el federalismo había muerto ya, y por otras causas, según lo hemos visto.

La cesión se aprobó por gran mayoría, con sólo tres votos en contra.

III. ROCA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN

Instalado ya, después del ostracismo de Belgrano, en la capital definitiva de la República, Avellaneda transmitió el mando al general Roca el 12 de octubre de 1880.

Si bien obligado, por ley de herencia y afinidad de formación política, a seguir las huellas de sus inmediatos antecesores, el presidente que cesaba había señalado en ciertos aspectos una reacción, a la que no fue ajena, en el primer período de su gobierno, la influencia de Alsina. Había encarado, por lo pronto, y resuelto exitosamente dos problemas fundamentales del país, que aquéllos eludieron o afrontaron mal: el del indio y el de la capital. La necesidad de conjurar la crisis económica había obligado además, a un programa de rigurosa economía en la administración, a fin de mantener el crédito externo, lo que si no era, según vimos, la mejor solución, era la mejor de las malas y tuvo, de hecho, consecuencias favorables. La restricción de compras en el exterior obró como una medida proteccionista y ayudó al establecimiento de numerosas industrias locales. Aparte de ello, se impusieron tarifas protectoras para algunos productos de la agricultura, en lo que influyó la acción del Club Industrial, fundado en 1877, por iniciativa de Carlos Pellegrini, Vicente Fidel López, Roque Sáenz Peña, Estanislao E. Zeballos, Nicasio Oroño y José Hernández. De país importador de trigo de Chile y harina de Estados Unidos, pasamos con ello a ser exportadores. También se protegió la industria vitivinícola, el calzado y ropa hecha y algunos artículos alimenticios.

Con 20.000 leguas conquistadas al indio, había aumentado considerablemente el patrimonio nacional. La población llegaba, con el aporte de 260.000 nuevos inmigrantes, a poco más de 2.000.000 de almas. Había 51 colonias agrícolas distribuidas en las zonas de labranza. Y el crecimiento de los depósitos bancarios y el ritmo creciente de los negocios anunciaba una nueva ola de prosperidad en el país. Tales fueron los auspicios bajo los cuales inició su labor el joven general de 37 años que asumía la presidencia.

Hijo de un guerrero de la Independencia perteneciente a la buena sociedad tucumana, el general don Julio Argentino Roca había aparecido, desde los primeros pasos de su carrera, como la encarnación de la suerte. No carecía de méritos, sin duda; poseía una fina inteligencia y apreciables dotes de mando; pero nada fuera de lo común y que no compartiera con gran parte de los hombres de su generación. Lo que lo distinguía, por sobre todo, era ese elemento imponderable, la presencia de la invisible hada madrina que lo condujo paso a paso, de triunfo en triunfo, hasta sentarlo en la silla del poder; y siempre, desde Ñaembé hasta Santa Rosa, con triunfos espectaculares, de trascendencia política y que hacían resonar su nombre. La muerte de Alsina le entregó servidas la expedición al Desierto y la Presidencia de la República. Una vez allí, le sobrarían condiciones para mantenerse como un hábil manejador de hombres, si bien no para immortalizarse como un gran estadista.

Las circunstancias en que asumía el mando eran excepcionales, no sólo aquí, sino en el mundo. Los países europeos, encabezados por Inglaterra, Francia y Alemania, iniciaban la última etapa de su desarrollo industrial y manifestaban un especial interés en nuestro país como proveedor de materias primas alimenticias y campo de inversión de sus excedentes. Era la ocasión de aprovechar ese interés manifiesto para contratar capitales y utilizarlos en el sentido más favorable a nuestro desarrollo nacional, de independizarnos paulatinamente de la tutela extranjera. No se trataba con ello de adelantarse a la época. La necesidad de promover nuestras industrias era una cuestión de rigurosa actualidad entonces y expresada como un anhelo, según vimos, en el programa del Partido Autonomista, que era el partido oficial. Hubiera bastado con acentuar la tendencia iniciada por Avellaneda, en el sentido de favorecer el trabajo y el esfuerzo nacionales, lo cual exigía solamente un poco de fe en el país y en sus hombres.

No la tuvo el general Roca como no la tuvo el grupo de gozadores escépticos que integró su círculo de consejeros íntimos. Su misión histórica consistiría en perfeccionar hasta sus últimos detalles el estatuto de la factoría.

* * *

Roca formó un ministerio de hombres de segundo plano político, con excepción de don Bernardo de Irigoyen, que ocupaba el ministerio de Relaciones Exteriores (luego pasaría al Interior) y el general y doctor don Benjamín Victorica, el de Guerra y Marina. Dos problemas pendientes de la administración anterior

ocuparon desde los primeros tiempos la actividad de ambos secretarios de Estado. El primero fue la terminación de la conquista del desierto: de 1881 a 1883 prosiguió la guerra contra el indio, mediante las expediciones del general Conrado Villegas a Neuquén y Patagonia y la del teniente coronel Villar a la Pampa central. En esas circunstancias, Villegas llegó a los lagos andinos. Paralelamente el coronel Fontana, fundador de Formosa, combatía en el norte a tobas y mocovíes. El segundo era el conflicto con Chile, que periódicamente se agudizaba. En 1881 se firmó el tratado de límites, que sería la base del arreglo futuro.

Con la solución de esas dos cuestiones y el sometimiento a arbitraje del litigio misionero, cuya gobernación territorial hubo de crearse en la ocasión, quedaba asegurada la paz fronteriza y la paz interna y en condiciones de desarrollarse el programa de "paz y administración" proclamado por el nuevo gobernante.

El crecimiento del país imponía la necesidad de extender las líneas ferroviarias, construir puertos y diques, puentes y caminos, promover la colonización, poblar las tierras desiertas y crear las industrias indispensables. Hacían falta capitales y brazos. Los brazos eran provistos fácilmente por la inmigración europea y los capitales se ofrecían en el mercado internacional. Una política esclarecida habría sacado de esas circunstancias favorables el pingüe provecho que ellas prometían. No se hizo así, sino al contrario, de tal modo que lo que debió servir para engrandecernos se convertiría en una máquina de succionar nuestras energías útiles en provecho del extranjero.

Sarmiento y Alberdi no habían escrito en vano y habían transformado la mentalidad de nuestro grupo dirigente. El prestamista extranjero, el inversor de capitales que venía a hacer su negocio, no era, para los hombres del roquismo, el mero mercachifle de quien había que desconfiar para mantenerlo en sus justos límites, sino ante todo un benefactor y un "civilizador" que merecía agradecimiento y reverencia, según lo expresaba Alberdi en su biografía de Wheelwright. Este sentimiento era la justificación moral para todas las concesiones. Si el extranjero, además, llevaba su espíritu de sacrificio y abnegación hasta el extremo de hacer participar a algunos dirigentes del país de los beneficios de su negocio, éstos se sentían doblemente halagados, pues el enriquecimiento inherente se acompañaba de la satisfacción de servir a la patria aliados al civilizador. Esto explica el hecho de que tantos hombres, que se consideraban fervientes patriotas, se entregaran incondicionalmente a los empresarios extranjeros, y la circunstancia sorprendente de que ello no sólo no acarrearla descrédito, sino que fuese especialmente honroso y confiriera un sólido prestigio. El fenómeno se generalizó en tiempos de Roca.

A las circunstancias de orden interno se agregaba, para que ello ocurriera, el ejemplo europeo. Con la expansión del capitalismo financiero se iniciaba la época de los grandes negociados y se difundía el afán de la riqueza fácil. En 1880 se constituyó, precisamente en Francia, la Compañía del Canal de Panamá, que originaría uno de los mayores escándalos de la época. El mundo "marchaba" a pasos gigantescos. El Progreso anunciaba una época próxima de prosperidad, de felicidad y de goce. El positivismo que se imponía como credo de las nuevas generaciones relegaba como quimérica la idea de lo sobrenatural y con ella muchos viejos escrúpulos y sólo dejaba en pie los sólidos goces que conferían la riqueza y el poder. A esas influencias europeas, sobre todo francesa, respondía la élite juvenil que acompañó a Roca en su acción, constituida por abogados y hombres de letras que viajaban a París y volvían entusiasmados con la política "progresista" de Grévy, en su campaña contra las congregaciones y la enseñanza religiosa. Se distinguían entre ellos Miguel Cané, Lucio V. López y Eduardo Wilde, flor del "porteñismo".

En esta atmósfera moral se desarrolla la obra del roquismo, caracterizada por el vértigo de las concesiones al extranjero. Las líneas de ferrocarril aumentaban de 2.318 Km. a 5.964 Km.; sólo se otorgan a los ingleses con preferencia, a pesar de que el F.C. provincial (oeste) da utilidades que ascienden a 8 millones anuales. Se contratan empréstitos para obras públicas, que se construyen con empresas extranjeras. Se venden las tierras públicas en la bolsa de Londres: ¡400 leguas a 0.48 pesos oro la hectárea! Se dona tierra gratuitamente a la Compañía del Central Argentino, de tal modo que, con el producto de su venta, recupera el monto de sus inversiones.

Es una verdadera orgía, de la que participan todos los allegados al poder. En ella se va modelando la fisonomía de la oligarquía gobernante. La deforman en primer término los grandes estancieros, que han plegado a su gremio al propio general Roca, mediante la donación de 20 leguas de tierra hecha por ley del Congreso, y que se agrupan en la Sociedad Rural. En segundo término, los ingleses, que controlan el comercio de exportación y sus abogados, pertenecientes casi sin excepción a la clase agropecuaria. La primera comisión directiva del Jockey Club (fundado en 1881) es un compendio de ese estado social: su vicepresidente y casi la mitad de sus miembros son ingleses o hijos de ingleses —Casey, Lowe, Duggan, Shaw— y los demás, terratenientes y estancieros. Lo preside un gran abogado y político: el doctor Carlos Pellegrini.

* * *

Con la proliferación de las obras públicas, realizadas a base de empréstitos en el extranjero, el aumento de las vías de comunicación y el abundante aporte inmigratorio, el país progresaba a ojos vistas. La ciudad de Buenos Aires dejaba de ser la "gran aldea" para convertirse en una urbe internacional semejante a París, en la que no faltaba ni siquiera el encanto suplementario del refinamiento y la cultura. Empezaban a levantarse los palacios del barrio norte; junto a los que pertenecían a los magnates de la producción agropecuaria, el de alguno que otro ministro experto en conceder facilidades al capital civilizador.

De un día para otro surgían grandes fortunas, ya fuesen provenientes de la valorización rápida de la tierra, ya de la participación en los fáciles negocios que la índole del régimen proporcionaba. Esta circunstancia había hecho nacer en los círculos favorecidos —de donde se difundiría por la prensa y la propaganda verbal— la idea de nuestra riqueza inextinguible y de nuestro porvenir sin nubes. Bastaría tocar cualquier lugar del país con la varita mágica del Progreso para que brotara de allí el oro a raudales. Tales eran los "milagros de la Argentina". Constituíamos sin duda una "tierra de promisión" en la que bastaba extender la mano para encontrar el bienestar y la riqueza.

* * *

Era natural que la difusión de ese espíritu materialista se acompañara de una consiguiente depresión del civismo y que el país empezara a perder su orientación y el sentido de su destino.

La crisis habría de sentirse muy pronto en el seno del partido autonomista, que era el oficial y congregaba, según vimos, a los hombres que mantenían la conciencia más lúcida de los intereses nacionales. La tentativa de unificación sobre la base del sufragio popular realizada a raíz de la terminación de la guerra civil fracasaría, por la resistencia de Roca, a quien no le interesaba el contralor de un partido organizado y con jefes prestigiosos, sino la libre ejecución de su plan político. Para esto le bastaba con su "liga de gobernadores", manejada desde Córdoba y que le aseguraba (según lo demostrara el resultado de las elecciones que le habían dado el poder) una mayoría segura, con prescindencia del grupo porteño.

Los hombres que dentro de éste habían constituido el partido "republicano" y que representaban la continuación de las "vivencias" (sino de la tradición ostensible) del federalismo histórico, se irían apartado de las filas oficiales para pasar a las de la oposición al régimen. Uno de los primeros fue Aristóbulo del

Valle, quien desde las columnas de "El Nacional" empezó a combatir violentamente las concesiones escandalosas al capitalismo extranjero, que encubrían turbios negociados. Lo seguirían Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, quienes se retirarían a la vida privada al término de sus mandatos legislativos. Los que por oportunismo político se quedaron en el seno del partido debieron marchar al son que les marcaba el presidente y su "liga de gobernadores". El presidente dictaba la ley; su opinión era la única que contaba. Fue lo que se llamó más tarde el "unicato".

El unicato roquista significó la desnaturalización de la tradición y los propósitos del viejo autonomismo en lo que tenían de nacional y su entrega con armas y bagajes al adversario. El mitrismo había quedado destruido a raíz de los sucesos del 80; pero Roca tenía la confirmación mental de ese grupo y gobernaría de acuerdo con sus inspiraciones, lo que explica la extraña condescendencia que Mitre sintió siempre por él.

Pero no obstante esa calidad de heredero auténtico de los emigrados, el roquismo tenía otros ingredientes que lo diferenciaban radicalmente de la generación antecesora. En ésta persistía el culto romántico por ciertos valores éticos, que a la sazón habían desaparecido, pasados por el tamiz del positivismo ideológico y el escepticismo moral. El roquismo no creía más que en el éxito.

A la oposición ya mencionada se agregaría pronto la de los católicos. De acuerdo con la ley histórica que señala una curiosa coincidencia del peculado con el anticlericalismo, la presidencia de Roca, bajo la inspiración de su ministro el doctor don Eduardo Wilde, promovió el voto de varias leyes que significaban una disminución de la función de la Iglesia en la vida social. Los debates a que dieron lugar (recursos de fuerza en 1881, educación laica en 1884) se señalaron por la intervención de notables oradores católicos, entre los cuales figuraban don José Manuel Estrada y el doctor Pedro Goyena. La intervención militante de la Iglesia en la campaña motivó la expulsión del nuncio de Su Santidad, monseñor Mattera. Los católicos se organizaron como fuerza política autónoma, que tendría sensible influencia en los sucesos futuros. Fundaron, para defender sus principios, el diario "La Unión" que sostuvo violentas polémicas con la prensa liberal, encabezada por el diario "Sud-América", dirigido por el escritor francés Paul Groussac y redactado por Pellegrini, Sáenz Peña (Roque) y Lucio V. López.

* * *

Lo que había en la acción oficial de imprevisión con respecto al futuro y de profunda corrupción moral se disimulaba, se eclipsaba ante el hecho visible del progreso material, que era un vértigo y una alucinación. Todo cambiaba de un día para el otro y el espectáculo de las novedades no dejaba tiempo para reconcentrarse. Había que agregarse a la caravana o sucumbir. El mero movimiento engendraba optimismo. Contribuía a la distracción general el florecimiento intelectual que se operó en esos años, de tinte marcadamente discipular y europeísta, obediente principalmente a influencias francesas y que puso su sello en la legislación y en las costumbres.

Aparte de las leyes "laicas", de que ya hemos hecho mención, se caracterizaría la presidencia de Roca por una abundante actividad legislativa, tendiente a poner al país al tenor de los tiempos: organización de tribunales, regulación monetaria, territorios nacionales, registro civil, régimen municipal, etc. Todo lo cual correspondía al ideal de "administración" proclamado por el régimen. Por lo que se refiere al otro término de la fórmula, o sea la "paz", se interpretaba como parálisis de la actividad política, que quedaba reservada al presidente. Aprovechando, en efecto, el cansancio general por tantas estériles agitaciones, el roquismo triunfante había logrado imponer poco a poco la idea de que los tiempos no eran ya de política, sino de trabajo y prosperidad; que quienes pensaban en cambios políticos y no en la riqueza eran seres anacrónicos y risibles ("Las revueltas no se cotizan en la bolsa de Londres", decía el "Zorro" con sonrisa de conoedor); que había de dejar que el gobierno gobernara sin ponerle obstáculos. La oligarquía triunfante, que medraba con el "unicato", se resignaba con el corazón alegre a gestionar, en las antecelas presidenciales, la concesión de las senaturías, diputaciones y ministerios que eran la llave de la fortuna, mientras que se burlaba de los sombríos censores aferrados a un "torvo patriotismo" (expresión de Groussac) de pésimo gusto. Este sentimiento ya no estaba de moda.

"El general Roca ha suprimido a los indios en el desierto y a los ciudadanos en las ciudades", afirmó el ex presidente Avellaneda, sorprendido y desengañado. También Sarmiento y Mitre elevarían su protesta ante la forma desaprensiva con que se manejaba la opinión y la desaparición de la realidad republicana, sin advertir que el régimen, como un espejo, les devolvía deformada su propia imagen y que no podían renegar la paternidad que les incumbía.

La inmigración iba llegando, entre tanto, en sucesivas oleadas y el país alcanzaba su tercer millón de habitantes. Pero los inmigrantes no hallaban, por lo general, el paraíso prometido por

la propaganda. No había tierra para ellos, en un país casi desierto, porque las tierras estaban acaparadas por los criadores de ganado —el negocio nacional— y pedía vacas más que brazos. Muy pocos lograban ubicación en las colonias agrícolas. La colonización oficial estaba detenida porque el régimen, a partir de 1882, había decidido que convenía más fomentar la colonización particular, mediante concesiones de grandes extensiones de tierra a empresarios, naturalmente extranjeros. Se había impuesto el criterio de que el Estado era “mal administrador”. Los inmigrantes venían, en su mayor parte, a acrecentar el proletariado urbano y rural; y a suministrar servicio doméstico barato, empleándose en las tareas que se les daban, de las cuales algunos lograrían emerger a fuerza de sacrificios y ahorro.

* * *

Cuando llegó el momento de decidir la sucesión presidencial, tres candidaturas surgieron: la del doctor Dardo Rocha, sostenida por Buenos Aires, la del doctor don Bernardo de Irigoyen y la del doctor don Miguel Juárez Celman, ex gobernador de Córdoba y a la sazón senador, que había obtenido la banca gracias a la previa modificación, con ese objeto, de la Constitución de la provincia que gobernaba.

Un grupo de autonomistas no oficialistas, presidido por Alem, trató de efectuar un movimiento popular alrededor de la candidatura de don Bernardo, que acababa de ser “vetado” por Mitre a causa de su origen federal. El candidato no accedió a ello. Sabía quién sería el Supremo Elector y no quiso incurrir en su desgracia, por lo cual Alem le retiró su apoyo en carta pública.

Ocurrió lo que debía ocurrir, porque estaba en la lógica del régimen. No obstante la “tourné” de propaganda que realizó, por todas las provincias, el que hasta poco antes había sido ministro de Roca (y a pesar de las protestas de imparcialidad de éste), la “liga de gobernadores” votaría en masa por el concuñado, dándole un fácil triunfo. Doce provincias y la capital eligieron al candidato que justamente carecía de antecedentes y de volumen nacional para ocupar la primera magistratura. Don Bernardo obtendría solamente los sufragios de Tucumán. La “Liga” era un mecanismo infalible.

IV. EL “JUARIZMO” Y LA REVOLUCIÓN DEL 90

Prototipo de atildada mediocridad, el doctor Juárez Celman era, no obstante, lo suficientemente avisado como para advertir, desde el comienzo, que la simple posesión de la investidura presidencial le otorgaba un poder casi ilimitado, por el mero funcionamiento del mecanismo ideado por Roca. Y si no lo descubrió él mismo, no faltó quien se lo indicase al oído, entre los consejeros de que se rodeó. Su antecesor hubo de sentir muy pronto ese súbito despertar de la criatura que había engendrado, lo cual burlaba sus planes de seguir gobernando plácidamente por personero hasta el momento de recuperar, pasados seis años, el poder efectivo. Juárez le dejó entender, a los primeros amagos, que el único excluía la pluralidad y que el “único” no podía ser más que el presidente. No le resultó difícil unir en sus manos todos los hilos y constituir en poco tiempo un “juarismo” tan efusivo y tan incondicional como el “roquismo” del que provenía. Según el dicho de la época, el jefe del P.A.N. ... era el que se hallaba en condiciones de repartirlo.

No era mezquino en esto el nuevo presidente, con respecto a la camarilla de jóvenes políticos, deseosos de hacer carrera, que lo acompañaron desde el comienzo y a quienes no les exigía, en cambio, otra cosa que el acatamiento incondicional. Tomaba el gobierno en momentos de gran prosperidad aparente, si bien una corrida de bancos y la necesidad de declarar la inconvertibilidad de los billetes, en 1885, debió hacer reflexionar a los advertidos. No obstante, la renta había aumentado de 38 a 46 millones, y seguía en pie la idea de la inagotabilidad de nuestros recursos. El progreso era un hecho; el capital extranjero, en incesante oferta, estaba allí para ayudarnos; se podía impunemente girar sobre el futuro. No dejó de hacerlo el nuevo gobierno, que siguió en la provechosa huella de empréstitos y concesiones marcada por su antecesor.

La literatura de la época nos ha dejado una idea bastante exacta de lo que fue el estado social del país bajo Juárez, con el optimismo progresista llevado a extremos de locura y la fiebre aguda de la especulación, extendida a todas las clases sociales. *La gran aldea*, de López, *La Bolsa*, de Miró, y *Las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira*, de Payró, nos han descripto con detalles ese estado de enfermedad colectiva, que llevaba a autori-

dades y particulares a hipotecar sin retaceos el porvenir, con la curiosa idea de que el progreso daba para todo. Si lo que se compraba hoy por diez se vendía mañana por veinte, era lógico que valiera cuarenta pasado mañana; y así indefinidamente, hasta el más remoto futuro. Todo el mundo se había dado a comprar y vender, y la mitad de la población dejaba sus ocupaciones normales para acudir a las pizarras de la Bolsa a estudiar la cotización del día. Naturalmente, se operaba a crédito, y éste era fácil e ilimitado, apenas se tuviera alguna influencia política. El gobierno daba el ejemplo; y lo seguían los gobiernos provinciales y municipales. Se habían contratado empréstitos cuyo servicio anual ascendía ya, en 1886, a 50 millones, que debían pagarse a su vencimiento con empréstitos nuevos. A esto agregábanse las emisiones de papel moneda, los títulos y las cédulas hipotecarias.

La prosperidad aparente que todo ese movimiento implicaba, estimulaba la imaginación y precipitaba a los favorecidos en los gastos suntuarios más extravagantes. Buenos Aires se llenó de carruajes importados arrastrados por "troncos rusos" y empezó a ser lugar de atracción para las más costosas "cocottes" de Europa, que venían a arrojar en los brazos acogedores de los jóvenes (y menos jóvenes) ministros y diputados del régimen. Era la civilización. Y como la civilización no implicaba solamente negocios, sino ideas nuevas, hubo de completarse la obra progresista del "roquismo", implantando la ley de matrimonio civil, que presentaba la ventaja de distraer a la opinión con un debate de tejas arriba, apartando su mirada de lo que ocurría tejas abajo.

No se descuidaba entre tanto la política. El gobierno de Juárez había dejado un tendal de agradecidos. ¡No era para menos! Los Bancos oficiales estaban al servicio de los buenos amigos de la causa y en el despacho de los ministros se deslizaba el dato que proporcionaba la ganancia segura. Si esto se podía legitimar con la adhesión ideológica al autor de la política progresista, que tenía por agente al ministro Wilde (heredado de Roca, pero plegado con entusiasmo al sucesor), no es de extrañar que los actos de homenaje al presidente menudearan en esos años prósperos. Sus partidarios y paniaguados empezaron a proclamarse sin empacho "incondicionales" declarándose dispuestos a seguir cualquier indicación suya. La candidatura presidencial del general Roca (que iba quedándose solo, no obstante su condición de senador y vicepresidente del cuerpo) empezó a esfumarse en las nieblas de lo improbable, perfilándose en su lugar la del predilecto del presidente: el joven y discutido director de Correos, doctor Ramón J. Cárcano.

* * *

La prosperidad ficticia basada en emisiones, empréstitos y obras públicas siguió durante los dos primeros años de la administración de Juárez, sin que bastara a llamar la atención del frívolo elenco gobernante el saldo desfavorable de la balanza comercial, que fue de 28 millones en 1888 y de 74 millones en 1889. La ley de Bancos garantidos, con el pretexto de auxiliar a las economías provinciales, pero con la intención real de afirmar el "unicato", había tenido como consecuencia lanzar al interior en la misma carrera de despilfarros, aumentando enormemente el empapelamiento. Empezaba a respirarse en el aire la catástrofe que se aproximaba. No obstante ello, la Argentina concurrió a la Exposición Internacional de París con un pabellón suntuoso, que, afirmándose como jactancia de los progresos alcanzados, no constituía otra cosa que una ostentación internacional de imprevisión y ligereza.

En junio de 1888 se produjo un crac de Bolsa, con quiebras y el pánico consiguiente: fue el primer anuncio de lo que se avecinaba.

A todo ello, el gobierno nacional y el provincial de Buenos Aires habían necesitado ya apelar, desde tiempo atrás, para hacerse de dinero, a recursos extraordinarios, que comprometían nuestra dignidad y enajenaban nuestro patrimonio. El empréstito de 1886 (de 42 millones, que fueron en realidad 38) gravaba por primera vez nuestras rentas de aduana. El gobierno nacional, por su parte, vendía el ferrocarril andino, mientras que el provincial, bajo la administración de don Máximo Paz, remataba su ferrocarril, —el precursor, empresa próspera y orgullo de los porteños— entregándolo a los ingleses, previa una campaña de escándalo, para desacreditar a sus administradores y a la capacidad argentina de dirigirlo y hacerlo prosperar.

No obstante una tímida tentativa del gobierno, a comienzos de 1889, para detener las consecuencias del despilfarro, mediante algunos proyectos financieros que envió al Congreso, los acontecimientos siguieron precipitándose en el sentido de la bancarrota. Los préstamos del Banco Nacional pasaron de los 1.339 millones y alcanzó a 319 la emisión de bonos del Banco Hipotecario de la provincia y a 35 el aumento del papel moneda circulante. "El consumo había aumentado en proporción al derroche bancario —escribe Terry—. El lujo y los gastos improductivos se habían multiplicado. Todavía se descontaba el porvenir por millones de millones. Se había perdido la noción del valor del dinero".

La catástrofe comenzaría, como ocurre siempre, por la restricción de los créditos de los Bancos particulares alarmados, a los que seguirían los Bancos oficiales, con lo cual se detendría el movimiento de los negocios, escasearían los compradores y em-

pezarían los cracs particulares en cadena. El dinero tendería a ocultarse con la consiguiente suba de la tasa del interés. Se paralizaría la especulación en tierras y títulos y se derrumbarían los valores en la Bolsa.

La iniciación del año 90 encontró al país en estado de quiebra y de liquidación forzosa y con la revolución clamando en las calles.

Porque el espíritu cívico no había muerto, si bien se hallaba sofocado bajo el vértigo de la especulación y la novedad. Una oposición primero sorda y luego explícita y enconada comenzó a hacerse sentir en el parlamento y en la prensa; promovida en primer término por los autonomistas ex republicanos, que no se habían plegado al roquismo, y por los católicos. Se agregarían a ella los mitristas (alejados del poder desde el 80) y muchos hombres del autonomismo que, si bien habían acompañado a Roca —como don Bernardo de Irigoyen—, habían terminado por alejarse de él y que, sobre todo, repudiaban la desaprensión y el cinismo de que hacía gala el “unicato” para perpetuarse y la inmoralidad flagrante de su actuación. Decíase que el mismo general Roca, desplazado en sus posibilidades de reconquistar el poder, manifestaba en la intimidad un disgusto catoniano por los negociados turbios de que se acusaba al régimen. El principal vocero de esa oposición fue en el Senado el doctor Aristóbulo del Valle, quien a comienzos del 88 había denunciado públicamente las emisiones clandestinas.

El desarrollo de los acontecimientos, que demostraba el fracaso de la gestión gubernativa, señaló a esa oposición la oportunidad de actuar nuevamente, por lo que menudearon, durante el año 1889, las reuniones políticas de los dirigentes, en el sentido de aunar los grupos dispersos. En esta tarea desempeñaba un papel descollante el antiguo líder de la rama popular del autonomismo, doctor Leandro Alem.

La publicidad que la prensa opositora daba a tales trabajos motivó una contraofensiva del grupo juarista, el cual convocó, para el 20 de agosto, el banquete que se llamó de los “incondicionales” y en el que el doctor Osvaldo Magnasco fue el orador oficial. Ese mismo día se publicó en “La Nación” el artículo de Francisco Barroetaveña: *Tu quoque juventus*, que era una vibrante apelación a los valores morales olvidados y un llamado a la acción cívica contra el peculado y el fraude.

Desde ese momento los sucesos se precipitaron. El 1° de setiembre se invitó a una asamblea en el “Jardín Florida”, en la que hablaron Barroetaveña, Montes de Oca, del Valle, Alem, don Bernardo, Vicente Fidel López y otros. Se declaró fundada allí la “Unión Cívica de la Juventud”, cuyos propósitos consis-

tían en sostener las libertades públicas, principalmente el ejercicio del sufragio “sin fraude y sin intervención oficial en los trabajos electorales”, en eliminar el peculado y la corrupción y en combatir por el respeto a las autonomías provinciales y municipales, levantando para ello el espíritu ciudadano.

Mientras el gobierno se debatía con la crisis creciente, incurriendo, para salvar a los Bancos oficiales, en nuevas emisiones que no hacían más que agravarla, se organizaba rápidamente el movimiento regenerador. En poco tiempo se establecieron veinte “clubes” en la ciudad. Las elecciones que se realizaron el 9 de febrero de 1890 sólo contaron con el aporte del elemento oficialista.

El 8 de abril, la “Unión Cívica de la Juventud”, ya constituida en comités, lanzó un manifiesto al pueblo, enunciando sus propósitos e invitándolo a una asamblea que se realizaría el 13 en el “Frontón Buenos Aires”, de la calle Córdoba. Lo firmaban multitud de jóvenes y un impresionante estado mayor de “presidentes honorarios” de los diferentes centros: Mitre, Alem, don Bernardo, Gorostiaga, López (V.F.), Estrada, del Valle, Goyena, Navarro Viola, J.M. Varela, Esteves Seguí, Gelly y Obes, Luis Sáenz Peña y Carranza. Todos los “políticos en disponibilidad”, como diría más tarde el “incondicional” Groussac; pero entre los cuales se contaban los primeros valores morales e intelectuales de la República.

El 13 se reunió en el local de la convocatoria una enorme multitud como pocas veces las había visto Buenos Aires: veinte, treinta mil personas, desbordando en la calle. Tres días antes, había renunciado el ministerio de Juárez, lo que le haría afirmar a uno de los oradores —Navarro Viola— que “la crisis no era ministerial, sino presidencial”. El oro había subido a 310, según la cotización de las pizarras. Hablaron el general Mitre, Barroetaveña, Alem, del Valle, López, Estrada, Goyena y Mariano Varela, terminando el acto con un desfile hasta la pirámide de la plaza de Mayo, bajo una lluvia de flores de los balcones del trayecto. “¡Qué lástima ser gobierno y no poder andar en esas patriadas!” dicese que exclamó el vicepresidente Pellegrini —que acababa de llegar de Europa— al escuchar la crónica de labios del jefe de policía.

En esa ocasión quedó fundada la “Unión Cívica”, bajo la presidencia de Leandro Alem, el hijo del “mazorquero” fusilado en la plaza de la Concepción por los hombres del 11 de setiembre. Era el único caudillo en esa asamblea de consulares: el que contaba con la confianza y la adhesión del pueblo.

Mientras el gobierno da la impresión de un barco que se hunde y al que todos abandonan —a la renuncia de los ministros se sigue la de los candidatos presidenciales: Cárcano, Pellegrini y Roca—, se acentúa la oposición al régimen y se empieza a conspirar para derribarlo. Alem, del Valle y la mayor parte de los viejos autonomistas son partidarios de la revolución. Mitre se inclina a las soluciones pacíficas; y es evidente que no piensa en otra cosa que su propia candidatura a la presidencia, por acuerdo de todos los partidos. Acaba por irse a Europa, para sustraerse a los compromisos de la acción militante y con la esperanza de que los acontecimientos han de trabajar en su favor.

La "Unión Cívica" sufre, desde el comienzo, de la heterogeneidad de su composición, que la obliga a restringir sus propósitos a las amplias formulaciones de carácter moral e instrumental, eludiendo los problemas de fondo. El cáncer del régimen es la entrega al extranjero, por las concesiones y el comercio libre. Esta circunstancia, que no era ignorada, según vimos, por el autonomismo tradicional de raíz federal, se escamotea en la formulación revolucionaria, por la exigencia táctica de la alianza mitrista, si bien se halla implícita en los ataques a la corrupción oficial; y se escamotea, sin duda, por la confianza romántica en la instauración del sufragio libre para resolver todos los problemas nacionales.

La presencia de Mitre, en quien el régimen extranjerizante y liberal podía señalar una paternidad indiscutible, a la cabeza de la oposición a éste, se explica por la dialéctica partidaria y por el cambio de los tiempos. Apartado de las situaciones políticas militantes a partir del 80, había dado, entre tanto, cima a sus estudios históricos (*Historia de Belgrano* en 1886, *Historia de San Martín* en 1889), con lo cual su discutida figura empezó a impregnarse del prestigio inherente a sus temas y a adquirir perfiles de prócer de primera magnitud. Han pasado veintidós años desde la terminación de su gobierno, en los cuales ha surgido una generación nueva, que no tiene recuerdos personales de su actuación pasada y lee, en cambio, sus ataques cotidianos a la corrupción presente. Han llegado al país un millón de extranjeros, entre los cuales multitud de italianos, con el recuerdo fresco de la gesta garibaldina y que ven en el director de "La Nación" algo así como el representante local de su héroe y el abanderado de la masonería universal. Con el progresivo afianzamiento de la mitología histórica liberal en cuatro lustros de propaganda, el 11 de setiembre se considera una efemérides de la libertad; el vencedor de Pavón es el Organizador de la República, y la revolución del 74 aparece como una reacción de puro civismo contra el autonomismo corrompido, cuyos desaciertos ha ido capitalizando en su favor el derrotado de entonces.

Tales son las circunstancias que obligan a contemporizar con el mitrismo en el 900. Muchos lo consideraban a Mitre como la encarnación de la patria misma, o mejor, como una especie de viejo marido de la República liberal, hecha en gran parte por él y a la que se hallaba indisolublemente unido. Los acontecimientos que siguieron habrían de mostrarlo como un marido sobremodera complaciente.

La situación se agravó en el mes de mayo, con la agudización de la crisis y la discusión pública de los proyectos enviados a las Cámaras por el Ejecutivo para conjurarla, y sobre todo, para salvar de la quiebra a los Bancos oficiales: se reducían a nuevas emisiones. La indignación contra el gobierno recrudeció con los debates y sus comentarios periodísticos, en los que se hablaba desembozadamente de "coimas" y del unicato transformado en "uñicato", o sea régimen de la uña. La actuación de del Valle en el Senado fue especialmente violenta y feliz, al referirse a las "emisiones clandestinas" como una falsificación de moneda y un robo al pueblo. El Parlamento aprobó, no obstante, una nueva por 35 millones. El discurso del 28 de junio, que "La Nación" publicó *in extenso*, constituyó un verdadero llamado a la revolución. El ministro Uriburu presentó su renuncia y fue reemplazado por el doctor Juan Agustín García, presidente del Banco Hipotecario, quien propuso como panacea una nueva emisión de 100 millones en cédulas.

No habría tiempo. La revolución ya estaba lista. Una logia militar, que se reunía en la casa del subteniente José Félix Uriburu y cuyo animador era del Valle, había logrado la adhesión de jefes importantes, como los Campos, Espina, Viejobueno y Figueroa. Después de muchas deliberaciones y debates, se había formado un gobierno revolucionario, cuya presidencia la ejercía Alem, a quien acompañaban como vice el doctor Mariano Demaría y como ministros los doctores Miguel Goyena, Torent, Lasstra, J.J. Romero y el general Viejobueno. La jefatura de policía se le adjudicó a Hipólito Yrigoyen.

La revolución estalló el 26 de julio, posesionándose los revolucionarios del Parque de Artillería, situado en la actual plaza Lavalle. Contaba con las fuerzas del 1°, 5°, 9° y 10° y parte del 4° de infantería, el regimiento 1° de artillería, el batallón de ingenieros, la escuela de cabos y sargentos, los cadetes del Colegio Militar y casi toda la escuadra. El distintivo de la revolución fue la boina blanca para los civiles armados (que llegaron a ser unos 4.000) con una escarapela de cinta verde, blanco y rosa sobre el pecho.

El gobierno se preparó a la resistencia. Hizo de la estación del Retiro su cuartel general, de donde se embarcó Juárez esa

misma mañana en un expreso, acompañado entre otros por Roque Sáenz Peña, a quien se encargó la formación de un ejército de reserva en el Rosario. Pellegrini y el ministro de Guerra general Levalle asumieron la dirección de la guerra en la capital. Esperaron un ataque de los revolucionarios, que no se produjo, por lo cual se decidieron a atacar. Las fuerzas gubernistas se instalaron en la plaza Libertad y el general Roca en la Casa de Gobierno, desde donde se estableció contacto telegráfico con todo el interior.

Una revolución que se coloca a la defensiva es una revolución vencida. Repuesto el gobierno de la sorpresa, y bajo la conducción inteligente y enérgica de dos hombres como Pellegrini y Levalle, contraatacaba con todas las ventajas de su parte, porque le irían llegando refuerzos del interior, como ocurrió efectivamente. Se combatió violentamente el 26 y 27, sufriendo incluso en este día la ciudadanía, el bombardeo de la escuadra. El 28 a la mañana se iniciaron gestiones de capitulación, porque los revolucionarios estaban en trance de quedar sin municiones. El gobierno aceptó que no se seguirían procesos por los actos revolucionarios y que los cuerpos quedarían como antes del 26 de julio.

* * *

Mucho se ha escrito sobre las causas del fracaso de la revolución del 90. Es indudable que tuvo una deficiente conducción militar. Pero no ha de descartarse el influjo de la divergencia entre el comando militar y el civil, ya que el general Campos era un ferviente partidario de Mitre, solución apoyada también por Roca, según se verá más adelante. La decisión de Campos en el sentido de precipitar la capitulación, contra la opinión de otros jefes militares, puede haber obedecido a la perspectiva de un desenlace favorable a su preferencia política.

Pero si la revolución había sido vencida, el desprestigio del gobierno hacía imposible su continuación. El senador por Córdoba, don Manuel D. Pizarro, expresaría esa opinión en el Senado al día siguiente de los sucesos, con esta frase que interpretaba el sentir general: "La revolución ha sido vencida, pero el gobierno está muerto". La población seguía agitada y expectante, y la vuelta del presidente a la capital fue recibida con rechiflas que le hicieron ver la tremenda impopularidad en que había caído, a la que no era ajena (¿cuando no!) la resistencia localista contra el cordobés, empeñado en imponer a otro comprovinciano. Los hombres de la situación, encabezados por Roca, vieron con cla-

ridad que había que arrojar lastre sacrificando al presidente y haciéndolo "chivo emisario" de todas las culpas colectivas. Lo obligaron, pues, a renunciar, después de una laboriosa intriga de palacio, pues el hombre se resistía a darse por enterado de las insinuaciones. Ello ocurrió el 6 de agosto.

La renuncia de Juárez Celman fue recibida con gran júbilo popular. Hubo manifestaciones con banderas e iluminación de las fachadas. Al día siguiente tomó posesión del mando el vicepresidente doctor Pellegrini.

V. PELLEGRINI Y ALEM

El entusiasmo con que la población de Buenos Aires recibió la noticia de la asunción del mando por Pellegrini —como si ella anunciase la terminación de todos los males— habría de enfriarse muy pronto. La crisis económica se hallaba apenas en sus comienzos y sus consecuencias se sentirían en todo el curso de la nueva administración. Diez años de imprevisión y despilfarro no podían compensarse en un día.

Contribuyó a ese enfriamiento de la opinión pública la orientación política del nuevo mandatario. Había formado sus ministerios con el doctor don Vicente Fidel López, en la cartera de Hacienda, el doctor Eduardo Costa en Relaciones Exteriores y el doctor José M. Gutiérrez en Justicia e Instrucción Pública. Conservaba en Guerra y Marina al general Levalle, vencedor militar de la revolución reciente. Pero le había encomendado la cartera del Interior al general Roca, y esto bastaba para caracterizar al gabinete, no obstante la presencia en él de los dos conspicuos mitristas y uno de los próceres civiles de la Unión Cívica y padre de un miembro de la Junta Revolucionaria. El ministerio de Roca significaba el control de las situaciones del interior y el mantenimiento de la máquina eleccionaria, contra los propósitos de regeneración nacional sobre la base del sufragio libre que proclamaba la Unión Cívica.

No obstante la amplia amnistía que se votó para los revolucionarios, de acuerdo con el compromiso de la capitulación del 28 de julio y las promesas de renovación contenidas en las declaraciones presidenciales, las posibilidades de pacificación real se fueron disipando ante la evidencia de una política en que los hechos contradecían a los discursos, puesto que los principales culpables aprovechaban la coyuntura para consolidar sus situaciones disfrazados de regeneradores. Había caído el presidente; pero su "régimen" subsistía íntegro, previa una ligera conversión hacia la situación nueva. Esa subsistencia hacía ilusoria la posibilidad de que la Unión Cívica llegara al gobierno por los medios legales; por lo cual no es de extrañar que se mantuviese viva entre sus dirigentes la convicción de la necesidad de un nuevo movimiento revolucionario, a fin de eliminar las trabas que impedían la expresión genuina de la voluntad popular. El estado de conspiración

siguió latente, en la medida en que la camarilla gubernativa mostraba su decisión de perpetuarse en el poder por los medios que el poder proporciona.

Pellegrini tuvo en sus manos la posibilidad de realizar una evolución salvadora, conciliando las exigencias del gobierno con la aspiración de autenticidad y celo por la soberanía que animaba al movimiento popular. Sus antecedentes parecían predisponerlo a ello. Era hijo del ingeniero Carlos E. Pellegrini, que al día siguiente de Caseros había protestado, según vimos, contra el libre-cambismo desenfrenado impuesto por los vencedores; se había formado en el alsinismo y figuraba entre los fundadores del Club Industrial, el grupo más esclarecido en los problemas económicos y sociales. Pero entre esos antecedentes y el momento en que asumió la presidencia habían mediado el roquismo y el juarismo, en cuyo transcurso se había comprometido irremediablemente con los intereses del régimen, al actuar como negociador habitual de empréstitos durante sus frecuentes viajes a Europa. Al político idealista de la juventud se había sobrepuesto el oportunista que cuidaba su carrera, el abogado de éxito, el político práctico que buscaba la pendiente del menor esfuerzo. Se hallaba ganado asimismo por el escepticismo difundido en esa generación, cuyo ingrediente principal era el desprecio a las modalidades del país, herencia de los emigrados, a lo cual lo predisponía su reciente origen extranjero. Hijo de francés y de inglesa, era, para sus amigos, el "Gringo"; y es evidente que esta condición ayudó a su éxito, dentro de una camarilla política furiosamente europeizante. La consecuencia de esa actitud (de emigrados en su propia tierra), consistía en la creencia en una especie de derecho divino a gobernar, oponiéndolo al surgimiento de fuerzas nuevas que, por nacionales, no podían dejar de ser anárquicas y retrógradas; o para recurrir al vocabulario usual entre los hombres del grupo, "brotes de montonera".

Para la "élite" porteña o aporteñada que había asumido la dirección política del país debía tener ese carácter el movimiento tumultuario encabezado por el hijo del "mazorquero" ajusticiado en la plaza de la Concepción y que arrastraba a las clases bajas de la población y a los "compadres" de los suburbios. "¡Cómo me gustaría verlo a Leandro de regenerador!" había exclamado Pellegrini festivamente, en los albores del movimiento. La idea les parecía ridícula, en efecto. El suburbio tratando de imponer su ley al centro urbano, la "chusma" alzándose contra los selectos, era un fenómeno escandaloso y risible para los caballeros vestidos en Londres que cumplían la misión de poner a la Argentina en la línea de los intereses de la civilización. Alem debía resultarles "impresentable" en los cónclaves de banqueros internacionales

que decidían sobre nuestro destino. "Parecía un comisario de suburbio endomingado", diría de él más tarde el francés Groussac, uno de los mentores del grupo. Las apelaciones a la moral y al patriotismo, con lo que entrañaban de énfasis declamatorio, resultarían igualmente chocantes para el espíritu refinado de quienes, pasados por el crisol del escepticismo religioso y moral, erigían el "buen gusto" en criterio supremo de certeza. Así había evolucionado y se prolongaba en ellos la antigua soberbia rivadaviana, provocando en su contra la consiguiente reacción popular, prolongación a su vez del viejo y castizo federalismo.

* * *

La situación en que Pellegrini recibió el gobierno parecía desesperada: el tesoro exhausto, los Bancos oficiales en estado de quiebra, multitud de deudas impagas "y un pueblo —dice Terry— que creía que con el cambio de gobierno volverían los tiempos pasados de especulación y derroche".

La causa principal de la catástrofe económica y financiera era el abuso del crédito. La terapéutica razonable, la aconsejada por la tradición y el buen sentido (sin excluir el propio interés de los acreedores), habría sido la declaración de una suspensión de pagos hasta que, debidamente estudiada la situación, se encontrase la posibilidad de reanudarlos en la medida en que no estorbase la reposición del organismo nacional. La cuestión previa debía ser el restablecimiento de nuestra economía.

No se hizo así, sino todo lo contrario. Más que en el esfuerzo y la potencialidad propios para salvar la crisis, Pellegrini y su ministro López creían en la ayuda inglesa; y más que la preservación del patrimonio nacional les importó la conservación del crédito. En vez de declarar la moratoria que las circunstancias exigían, se propusieron capear la crisis agravando sus causas y proyectando nuevos empréstitos y emisiones. Los 50 millones de que dispusieron por ley para salvar la situación de los bancos Nacional e Hipotecario en estado de quiebra, los convirtieron en oro, para enviarlos a la casa Baring, que pasaba por una situación difícil, en pago del servicio de nuestra deuda externa. A eso lo llamaba Pellegrini "salvar el crédito y el honor nacional": ¿como si el honor dependiera de esas contingencias financieras y como si el crédito se conservara pagando, cuando es notorio que se otorga al que tiene y no al que cumple! Todo eso no pasaba de una emocionada adhesión a los principios morales de los acreedores. Que no sirvió, por cierto, para salvar el crédito en peligro, ya que hubo que recurrir al empréstito Morgan, por 75 millones de pe-

sos, con el exclusivo objeto de pagar los servicios de la deuda, el rótulo de "empréstito moratoria" y multitud de cláusulas depresivas para el país y que significaban —dice el honrado Terry— "toda una intervención de la casa Morgan y Cía. en el régimen interno de nuestro gobierno y de nuestra patria". Los ingleses, como se ve, nos prestaban dinero para cobrarse su deuda, con lo cual iban ganando el succulento bocado de los intereses acumulativos, descontados los honorarios de los negociadores.

El agente del gobierno argentino en Londres para ese arreglo fue el doctor Victorino de la Plaza, de cuya gestión habla así el propio doctor Pellegrini: "El doctor de la Plaza presentó los documentos y dijo que la República Argentina estaba dispuesta a hacer *todo lo que se le exigiera* para mantener su crédito, momentáneamente afectado por una situación extraordinaria...". ¡Todo lo que se le exigiera! Veremos el resultado de esa política increíble.

"El capital inglés —escribe Raúl Scalabrini Ortiz— consiguió aumentar la deuda pública del Estado, que era de 115 millones de pesos oro en 1885, a 427 millones en 1893. Los títulos radicaban casi exclusivamente en Inglaterra. Los de la deuda externa por aceptación directa; los de la deuda interna obtenidos en pago de cauciones. Consiguió, además, la posesión de 4.045 Km. de vías férreas que habían sido construidas por el gobierno nacional o las provincias en las zonas más fértiles y valiosas del país. Fueron: el F.C. de Córdoba a Tucumán, con sus ramales a Catamarca; el F.C. de Buenos Aires a Trenque Lauquen, llamado del Oeste, 1.150 Km.; la línea Villa Mercedes a Villa Dolores, 145 Km. y la línea de Villa Mercedes a Mendoza y San Juan, llamada el Andino, 660 Km.; el F.C. de la Provincia de Santa Fe, 800 Km. y el F.C. de la Provincia de Entre Ríos, 605 Km. Además consiguió el capital inglés la posesión de todas las cédulas hipotecarias a oro; la hipoteca de casi todas las tierras de pan llevar, cedidas en garantía de préstamo y extensiones inconmensurables de tierra, adquiridas muchas veces a veinte centavos la hectárea. El capital inglés ferroviario pasó de 93 millones oro en 1884 a 473 millones en 1893. En poder del Estado quedaron las vías que cruzaban eriales".

Es decir, el despojo y la servidumbre, el patrimonio nacional trasladado a manos de los prestamistas. Tal era la política de los "proteccionistas" Pellegrini y López, que resultaban protegiendo exclusivamente a los acreedores extranjeros. La creación de la Caja de Conversión y del Banco de la Nación —simples medios de regulación monetaria interna— aprovechaba sobre todo a quienes de ese modo se convertían en dueños del país. Al mismo tiempo se lo exprimía a éste en toda forma con economías heroi-

cas y con impuestos exorbitantes; entre otros, los impuestos "internos" que contribuyeron a empobrecer más aún el interior con la ruina de las industrias domésticas que quedaban. Vastos sectores de población acomodada se proletarizaron en esa hora trágica de la vida argentina, con las consiguientes repercusiones en la moral y las costumbres. Porque mientras los acreedores extranjeros recibían religiosamente el pago de sus cupones, la quiebra de los bancos oficiales dejaba en la calle a los depositantes y a los tenedores de cédulas, en su mayoría pequeños ahorristas y gente de trabajo, que aspiraban a asegurar su porvenir y el de sus hijos bajo la fe del Estado nacional. Con respecto a éstos no se sentía obligado, sin duda, el *honor* del doctor Pellegrini.

* * *

La evidencia de esa política antinacional, que amenazaba perpetuarse por medio del fraude instituido por la "liga de gobernadores" —al mismo tiempo que cerraban los Bancos y las actividades comerciales se paralizaban—, debía provocar una gran agitación, agravada por la defraudación de las esperanzas puestas en el cambio presidencial. La negativa de Pellegrini a intervenir las provincias para destruir la maquinaria electoralista, según la exigencia de Alem, había definido claramente las posiciones.

Era evidente que el régimen se preparaba a resistir, mediante el mantenimiento de los gobiernos del interior coonestado con el argumento farisaico del "respeto a las autonomías" que le aseguraba la mayoría en los comicios electorales. El general Roca aparecía, desde su ministerio, como el organizador y jefe visible de esas situaciones. El movimiento popular, vencido en la revolución de julio y al que acaudillaban Alem y del Valle, se proponía unir todas las voluntades honradas del país en el propósito de acabar con la camarilla política autora de tantos desastres; por las vías legales, si ello era posible, o por la revolución en caso contrario. La improbabilidad de lo primero hizo que persistiera el estado de conspiración militar; al mismo tiempo que se desarrollaban los preparativos electorales para la elección presidencial que se avecinaba.

El espíritu de renovación de las prácticas políticas argentinas que la Unión Cívica encarnaba, tuvo su primera manifestación en la convocatoria de la Convención de Rosario, el 15 de enero de 1891. Allí una asamblea de delegados de todo el país, en la que se manifestaron tendencias divergentes, llegó no obstante a la proclamación de la fórmula única para la futura presidencia, con los nombres del general don Bartolomé Mitre y el doctor

don Bernardo de Irigoyen. La elección del primero mostraba el ánimo conciliatorio del grupo revolucionario, en su afán de unir a toda la oposición contra el régimen. Malgrado sus antecedentes, el ex presidente y jefe del extinto partido liberal era el hombre de más volumen entre los que constituían su oposición visible.

Lo que debió haberse previsto, ocurrió. Dos meses más tarde, en marzo, volvió Mitre de su viaje, siendo recibido por un conjunto entusiasta de pueblo. El general Roca y Pellegrini le propusieron un acuerdo "patriótico" sobre la base de su candidatura, a lo que accedió Mitre sin consultar a sus electores. ¿Cómo iba a oponerse, si no tenía con el roquismo ninguna diferencia de fondo, si Roca era su directo heredero espiritual? Se resolvió reemplazar el segundo término por un nombre grato a la situación dominante, el del doctor José Evaristo Uriburu, y se comunicó con alborozo la solución a los gobernadores de provincia. "Hemos convenido con el general Mitre —decía Roca en su circular— la necesidad de suprimir la lucha electoral para la presidencia futura".

¿Qué era el "acuerdo"? Lisa y llanamente, la entrega al régimen del movimiento revolucionario, a cambio de la presidencia para Mitre, la viejísima operación de la cesión de la primogenitura por el plato de lentejas. Los propios que habían inspirado la creación de la Unión Cívica y la revolución de julio quedaban con ello burlados y el gobierno de fraude y corruptela consolidado. Era ciertamente un triunfo de Roca que, consciente de la heterogeneidad del movimiento opositor lograba así dividirlo, plegando a una de las facciones a sus miras. Porque la supresión de la lucha electoral no significaba otra cosa que la intangibilidad de las situaciones provinciales, base de su poder; la elección canónica de quien se había lanzado el 74 contra esos mismos procedimientos electorales, y el control del gobierno resultante por el jefe de la mayoría autonomista del interior, dominante en ambas cámaras.

La publicación del "acuerdo" produjo indignación en las filas de la Unión Cívica, entre las que se llegó a hablar de traición. Alem le escribió a Mitre reprochándole su condescendencia y declaró públicamente: "Yo no acepto el acuerdo: soy radical en contra del acuerdo: soy radical intransigente". Palabras que, a la par que definían una actitud, la bautizaban para el porvenir.

Como era natural, el partido hubo de dividirse en dos facciones: la de quienes aceptaron el pacto, o sea los mitristas, y la de quienes lo rechazaban. Los primeros se llamaron cívicos "nacionales" y proclamaron en su convención del 9 de julio la fórmula convenida, Mitre-Uriburu. Un mes más tarde, la convención

de la Unión Cívica "radical", reunida en el teatro Onrubia, proclamó a don Bernardo de Irigoyen y al doctor Juan M. Garro. En el manifiesto que se lanzó al país, se ratificaban los principios proclamados en el jardín Florida, afirmándose que la síntesis del programa del movimiento consistía "en reintegrar a los argentinos sus derechos cívicos, permanentemente violados".

* * *

El general Mitre se había engañado sobre el alcance de su popularidad. Al ver que ésta se disipaba en el descrédito del "acuerdo" y que, en vez de arrastrar al grueso de los "cívicos" sólo seguía su nombre un escaso, si bien brillante, estado mayor de incondicionales, mientras la masa popular aclamaba al jefe *radical*, sintió temblar el pedestal de prócer que con tanto esfuerzo se había fabricado y renunció en octubre a su candidatura. Dijo que lo hacía en vista de que su persona no parecía ser "prehda de unión" entre los argentinos.

La renuncia del candidato creaba un serio problema a la camarilla gobernante, cuya impopularidad iba en aumento y que se sentía amenazada permanentemente por la revolución anunciada. El presidente Pellegrini inició una serie de conciliábulos para llegar a una solución, en los cuales participaron los personajes políticos del momento, entre los que empezaba a destacarse el joven Hipólito Yrigoyen, flamante presidente del Comité de la Provincia del nuevo partido. No obstante la tendencia conciliadora de don Bernardo (que a toda costa quería ser presidente de la República y temía perder esta última oportunidad) y por momentos de del Valle, las tentativas fracasaron porque se impuso la nueva orientación, que habían impreso al radicalismo Alem e Yrigoyen (H.), consistente en negarse a todo pacto y en exigir como única solución posible, la garantía de la libertad y la pureza del comicio.

Entre tanto, Alem realizaba por el interior una gira triunfal, aclamado por las poblaciones. Rosario, Córdoba, Tucumán, Santiago, Salta, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y las estaciones intermedias del largo trayecto en el que pronunció centenares de discursos, vieron su magra figura iluminada por dos ojos ardientes, su galera requintada, su poncho de vicuña y sus largas y blancas barbas de apóstol, que se agitaban al soplo de su oratoria tempestuosa. No diría cosas nuevas ni brillantes, sino verdades viejas y olvidadas. Hablaba de los derechos hollados y de la patria envilecida y sus palabras sonaban en los oídos de los últimos sobrevivientes de la montonera, de los antiguos

soldados de Varela y del Chacho y de sus hijos, como si les vinieran del fondo del corazón. ¡Cómo no habrían de vibrar los pueblos oprimidos a la voz del caudillo que les prometía la redención y el desquite! El viaje fue una verdadera apoteosis y provocó un vuelco efectivo de la opinión; desde ese momento el radicalismo es un partido nacional. El mensaje de Alem prendía y se extendía como pólvora. Y ello debía ocurrir, porque lo que resonaba en su acento no era más que un eco del federalismo no extinguido todavía, latiendo al ritmo de la entraña popular. Esa filiación se advierte desde las primeras convenciones, en las que aparecen los nombres vilipendiados e ilustres de los Sáa, Lucero, López Jordán, Candiotti, Alvear, Molina, Maza, Figueroa y tantos otros detrás del hijo del mazorquero, ajusticiado en la plaza de la Concepción. A Mitre no lo engañaba su olfato de "salvaje unitario". Tenía mucha más afinidad, en efecto, con Roca y Pellegrini que con esa evidente resurrección de la "mazorca", que era a la vez una resurrección del espíritu nacional, de la patria misma.

De vuelta de su gira, Alem habló en el Senado, refiriéndose al fraude que preparaba el oficialismo e hizo la siguiente advertencia: "Si el presidente insiste en llevar adelante su plan de sofocar los derechos del pueblo... podrán sobrevenir graves perturbaciones, porque la República no consentirá que se holle impunemente su soberanía". El 20 de diciembre, ante una impresionante multitud, dio cuenta del éxito de su mensaje al interior y comparó la empresa radical con una Cruzada por el sufragio libre.

* * *

Los partidos del "acuerdo" no habían llegado a ninguna solución todavía, cuando el gobernador de Buenos Aires, don Julio Costa, levantó la candidatura presidencial del doctor Roque Sáenz Peña, ex juarista que se había distinguido por su actuación en la primera Conferencia Panamericana de 1889. Sáenz Peña encabezaba un grupo autonomista de oposición a Roca. Esta candidatura, llamada "modernista" y apoyada por la provincia más fuerte, significaba un serio peligro para los dueños de la situación. Se propusieron anularla, levantando a su frente la del padre del candidato: el miembro de la Corte Suprema de Justicia doctor Luis Sáenz Peña, lo que provocó la renuncia de aquél el 19 de febrero. La fórmula se completó con la designación del doctor don José Evaristo Uriburu para el segundo término.

VI. LAS REVOLUCIONES DEL 93 - SÁENZ PEÑA Y DEL VALLE - URIBURU

La inquietud política, agravada por los efectos de la crisis económica, se manifestó en los choques sangrientos y los disturbios que ocurrieron a raíz de las elecciones de diputados, el 7 de febrero. Los fraudes manifiestos que se cometieron, principalmente en la inscripción en los padrones, acentuaron la circulación de rumores revolucionarios, a la vez que el éxito de la propaganda radical en todo el país mostraba un peligro que ni el fraude podía conjurar. Pellegrini decidió tomar la ofensiva. Las elecciones presidenciales estaban convocadas para el 10 de abril y el radicalismo había preparado para el 3 de dicho mes la realización de asambleas simultáneas en toda la República. Un día antes de estos actos, el presidente reunió con premura a sus ministros y les dio cuenta del descubrimiento de una conspiración, con siniestros planes de matanzas e incendios, cuyo estallido inminente anunciaba y que atribuía a los radicales. En consecuencia, se decretó el estado de sitio y se apresó al estado mayor de los dirigentes del partido, que fueron deportados a Montevideo. A Alem se lo encerró en un buque de la armada, no obstante sus fueros de senador. En estas condiciones de avasallamiento de las garantías ciudadanas y con todo el despliegue imaginable de violencia y fraude oficial, se impuso la nueva fórmula gubernativa.

No es de extrañar, por consiguiente, que apenas restablecidas las garantías constitucionales, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y la Convención, que se reunió en noviembre, denunciaran la ilegalidad del resultado, por haberse violado "las leyes fundamentales de la República". Esto colocaba al partido en estado de oposición total, no tanto a la personalidad del nuevo mandatario, cuanto al régimen de supresión de las libertades públicas en que necesariamente debía apoyarse.

* * *

El doctor don Luis Sáenz Peña no era ciertamente un hombre del régimen imperante y no contaba con las simpatías de los dueños de la situación política. Ya vimos que su elección se debió a una imposición de las circunstancias: parte para eliminar la can-

didatura "modernista" del hijo, surgida de la oposición interna, y parte para cubrir, bajo un nombre irreprochable, la continuación de los viejos abusos. No sería ajeno a los cálculos de los autores el hecho de que recaía en un septuagenario alejado de la acción militante y al que se suponía fácilmente manejable por quienes retenían en sus manos los hilos de la farsa.

Pronto verían que se engañaban. El doctor Sáenz Peña no era hombre de obedecer a intereses políticos subalternos, sino a los dictados de su conciencia, porque era un hombre de ley y un patriota. De ello derivarían todas las vicisitudes que tuvo que afrontar durante los dos años que duró su gobierno.

De origen federal "neto", había entrado joven en las filas del partido autonomista, donde se distinguió defendiendo, en la Convención de 1870, reformadora de la Constitución bonaerense, el voto obligatorio, para unificar las costumbres electorales por la concurrencia universal al comicio. Esta innovación, que no prosperó entonces, habría de imponerla su hijo cuarenta años más tarde. Luego había sido diputado nacional, vicegobernador con Casares, miembro de la Suprema Corte provincial y después de la nacional. Si bien alejado de la política por su actuación en la magistratura, su ferviente catolicismo le impedía congeniar con la acción del roquismo y el juarismo, a los que repudiaba igualmente por razones morales. Había aceptado la presidencia con la intención de volver por los fueros de la ley, a fin de restablecer la confianza pública y la paz en los espíritus.

Pero carecía de partido personal y debía gobernar con los partidos del acuerdo, o sea con los hombres de Roca, Pellegrini y Mitre, quienes negociarían permanentemente este apoyo y sólo accederían a prestarlo a cambio de concesiones que aquél no estaba siempre dispuesto a otorgar, porque contrariaban sus planes o sus principios. A esto se debió la frecuencia de las crisis de gabinete que jalaron toda su presidencia y que se iniciaron con la renuncia de su ministro del Interior, doctor Manuel Quintana, a los dos meses de constituido el gobierno.

La amenaza de la revolución radical continuaba pendiente. La inquietud política, general en toda la República, se manifestó desde el comienzo por sendos movimientos en Santiago del Estero y Corrientes, a las que se intervino por ley del Congreso. Todo el fin del año 1892 y principios de 1893 fueron de intensa agitación, agravada por la persistencia del malestar económico inherente a la crisis, a la que el gobierno hacía frente por medio de economías drásticas en el presupuesto, sin recurrir, de acuerdo con su promesa inicial, ni a empréstitos nuevos, ni a nuevas emisiones. No obstante, se prosiguieron algunas obras públicas y se procedió a la adquisición de armamentos —entre ellos dos acora-

zados— para prevenir la difícil situación que amenazaba por el lado de nuestras relaciones con Chile.

Como la situación política empeorara a mediados de año por los ataques de la oposición y por las renunciaciones ministeriales, que señalaban el apoyo reticente de los partidos del “acuerdo” (se habían ido Escalante, Romero, Victorica, Alcorta y Viejobueno y se tambaleaba un nuevo gabinete, con el doctor Miguel Cané en el Interior), se decidió, por consejo de Pellegrini, nombrar un gobierno de “pacificación” y encargarlo al doctor del Valle.

* * *

Se trataba de una innovación en nuestro derecho político y de muy dudosa constitucionalidad, pues en sustancia se aplicaba a nuestra organización presidencial el procedimiento de los regímenes ministeriales, con la entrega lisa y llana del gobierno al líder de la oposición. La intención de Pellegrini era clara. Quería provocar así una división del radicalismo, plegando al régimen, con el aliciente del gobierno, a los elementos tibios y transaccionales, con lo que ensancharía la base del “acuerdo” gubernativo: o sea, rehacer la operación de Roca con Mitre. Suponía que, por lo pronto, el nombramiento de del Valle frenaría la temida revolución.

Pero del Valle no encontró en el radicalismo el apoyo que esperaba, a pesar de sus gestiones personales ante Alem e Hipólito Yrigoyen y las que por su encargo realizó don Bernardo. La Unión Cívica Radical ya había fijado sus ideas sobre la materia, de acuerdo con la experiencia pasada, y había establecido en su programa la negativa a participar bajo ningún concepto en los gobiernos emanados del fraude. Debió formar del Valle el ministerio con hombres que, como él mismo, no estaban afiliados al partido, si bien mantenían con éste una gran afinidad, por haber actuado en primer plano en la revolución del Parque. Fueron el doctor Lucio V. López en el Interior, el doctor Mariano Demaría en Hacienda, el doctor Enrique Quintana en Justicia e Instrucción Pública y el ingeniero Valentín Virasoro en Relaciones Exteriores. Se reservó para sí la cartera de Guerra y Marina, o sea el comando directo de las fuerzas militares.

Apenas instalado el nuevo ministerio, del Valle hizo dictar un decreto, desarmando a los cuerpos militares mantenidos en pie de guerra por la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de dejarle las fuerzas de policía necesarias para la seguridad pública, lo que se cumplió el 9 de julio. Es de advertir (como índice de la confusión del momento) que en esos días el gobernador don

Julio Costa —antiguo autonomista— invitaba a Alem, por conducto de los doctores Marcos Paz y Miguel Goyena, a derrocar a Sáenz Peña por medio de una revolución propuesta que no fue aceptada.

El cambio gubernativo fue recibido en Buenos Aires con gran alborozo, dada la popularidad de del Valle, quien debía salir continuamente a arengar a las manifestaciones que acudían a aclamarlo, lo que le haría decir más tarde a Groussac que gobernaba “desde el balcón”. Esa popularidad se reflejó sobre la venerable figura del presidente, quien vivió entonces los únicos días felices de su accidentada gestión. El país creía asistir a una renovación política definitiva. El 30 de julio —domingo— se realizó en la ciudad de Buenos Aires un gran desfile conmemorativo de la revolución del Parque.

* * *

En ese preciso momento, la revolución radical se hallaba triunfante en gran parte del territorio.

Contra la previsión de Pellegrini, la presencia de un gobierno simpático y dispuesto a escuchar los reclamos populares había alentado la revolución en lugar de frenarla. El 29 había vencido en San Luis, apresando al gobernador e instalando un gobierno provisional a cargo del doctor don Teófilo Sáa. El 30 había estallado en Rosario. Después de tres días de lucha, se había extendido a Santa Fe, donde se había hecho renunciar al gobernador ocupando el gobierno provisional el doctor don Mariano R. Candiotti. El mismo día 30 se alzaban simultáneamente 80 de los 82 partidos que había entonces en la provincia de Buenos Aires. Encabezaba la revolución el presidente del comité local doctor don Hipólito Yrigoyen.

Después de lanzar una proclama asumiendo la responsabilidad del movimiento, Yrigoyen estableció su cuartel general en Temperley, lugar de concentración (por su carácter de centro ferroviario) de las fuerzas revolucionarias. Los mitristas de la Unión Cívica Nacional aprovecharon la circunstancia para levantarse a su vez, concentrándose en número de 800 en Barracas e iniciando una propuesta de “acuerdo” que fue rechazada por el comando radical.

El 7 de agosto se reunió el Comité de la Provincia en la municipalidad de Lomas de Zamora para nombrar el gobierno provisorio. Ante la reiterada negativa de Yrigoyen de aceptar ninguna designación, se eligió gobernador al doctor don Juan Carlos Belgrano. El gobernador Costa, entre tanto, había hecho renuncia de

su cargo ante la Legislatura y se había embarcado para Montevideo. Belgrano se instaló en la Casa de Gobierno de La Plata, donde fue reconocido en su carácter de gobernador provisional por el doctor del Valle. Nombró ministros a los doctores Abel Pardo, José de Apellániz y Marcelo T. de Alvear.

La entrada del ejército revolucionario a la ciudad de La Plata, al mando del jefe civil y de su hermano el coronel don Martín Yrigoyen, fue recibida por la población con enorme entusiasmo.

* * *

El triunfo de las revoluciones en las provincias señalaba el rechazo que el país experimentaba con respecto al régimen, un verdadero despertar político. Así lo entendían el gobierno inspirado por del Valle y el propio presidente. Mandó por ello un proyecto al Senado, de intervención amplia en las provincias conmovidas, con el objeto de convocar a elecciones libres que seguramente ratificarían el cambio consumado. El Senado lo sancionó. Pero la Cámara de Diputados, con mayoría roquista, votó otro proyecto, ordenando la reposición de las autoridades depuestas. Para resolver el conflicto de prelación entre ambas disposiciones, la Cámara retiró el suyo y rechazó el del Senado, con lo cual constitucionalmente no podía volver a tratarse dentro del año parlamentario. El ministro López declaró que el rechazo de la intervención equivalía al reconocimiento de las situaciones revolucionarias triunfantes.

Pero el régimen no se dejaría derrotar sin lucha. Estaba ligado a intereses demasiado poderosos; contaba con una mayoría parlamentaria y con jefes de garra, como Pellegrini y Roca, muchos en toda clase de artimañas y con fuertes apoyos en las altas jerarquías militares. Roca empezó a maniobrar en el ejército, al mismo tiempo que Pellegrini volvía precipitadamente del interior para tomar el comando de la contraofensiva. Sobre el tambor, hicieron dictar a las Cámaras un proyecto de intervención a la provincia, pasando por sobre los escrúpulos constitucionales manifestados poco antes. Contaban, para triunfar, con el espíritu legalista del presidente y del propio ministro de Guerra.

Puesto en el brete de someterse a la autoridad parlamentaria o alzarse contra ella, realizando un verdadero golpe de Estado, el anciano presidente, envejecido en el culto por la ley, no podía dudar. Cedió, por consiguiente, a la presión de los jefes políticos que lo tenían a su merced, lo que produciría la renuncia de sus ministros. Alem le propuso a del Valle la resistencia a mano armada, con el apoyo de las fuerzas radicales. Del Valle se negó a

hacer una revolución al gobierno del que formaba parte, dando con ello un ejemplo de alta moralidad política, pero que retardaría por años la oportunidad revolucionaria.

Aceptada la renuncia del gabinete del Valle, se nombró otro, con Manuel Quintana nuevamente en el Interior y cuyo principal objetivo consistiría en el aplastamiento de la revolución radical. Se decretó la intervención de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis, acompañada cada una de ellas por una división de ejército. Los radicales de Buenos Aires decidieron deponer las armas para no ensangrentar nuevamente la República, conformándose con la exhibición de fuerzas que acababan de realizar, a la que llamaron "un plebiscito armado": intentaría nuevamente la vía del comicio.

No ocurrió lo propio en otros lugares del país. En Corrientes había estallado la revolución desde mediados de agosto, ayudada con armas por Alem, y había triunfado ampliamente, derrocando al gobernador Ruiz. En Tucumán, el 11 de infantería, al mando del comandante Bello, había provocado asimismo la renuncia del gobierno y levantado otro provisorio, encabezado por don Eugenio Méndez. En Santa Fe se había producido un nuevo estallido, dirigido en la capital por Candiotti y en Rosario por Alem, quien levantó allí por primera vez la bandera revolucionaria, roja y blanca. Se combatió por tierra y agua, sublevándose dos cañoneras en el Tigre y el monitor "Andes" en el Paraná. Casi todos los pueblos de la provincia se plegaron al movimiento instalándose nuevamente el gobierno provisorio de Candiotti.

Estos brotes de rebelión fueron sofocados por las fuerzas nacionales. Contra el litoral se movilizó un ejército de 6.500 hombres al mando de Roca. Contra Tucumán otra división al mando de Pellegrini y el general Bosch. Los principales caudillos fueron detenidos y muchos debieron expatriarse a Montevideo.

Con todo, el radicalismo no desertó de los comicios. Restablescidas a fines de ese año las garantías constitucionales, vuelto Yrigoyen del destierro y puesto Alem en libertad provisional, el partido concurrió a las elecciones de gobernador de la provincia de Buenos Aires, conquistando la mayoría. Los demás partidos propusieron a Yrigoyen la concertación de un "acuerdo" para compartir el gobierno. Ante su negativa, autonomistas, modernistas y "cívicos" se coaligaron e impusieron la candidatura de don Guillermo Udaondo.

Vencido por las armas, el radicalismo triunfaba en las urnas, a lo que no era ajena la actitud imparcial del presidente de la República. Alem, elevado a la dirección nacional del partido, había ganado la senaduría por la capital. Como el Senado opusiera dificultades para su incorporación, renunció ante el Colegio

Electoral, quien eligió en su reemplazo a don Bernardo de Irigoyen.

* * *

No obstante haberse obtenido la pacificación del país por obra de una represión militar, las tribulaciones del presidente no terminarían allí, ocasionadas más que en los ataques de los opositores, en la presión de sus propios partidarios del "acuerdo" que acabarían por negarle toda colaboración, precipitando su renuncia.

La imagen que de don Luis Sáenz Peña nos ha legado la mitología histórica, es la de un hombre débil y timorato, sometido a influencias contradictorias e incapaz de sobreponerse a las dificultades de la situación. La verdad es que vivió hostigado permanentemente por los partidos del "acuerdo", a causa de su empeño patriótico en defender el interés nacional y el imperio de la ley, contra el desenfreno de los apetitos individuales y las maquinaciones del compadrazgo político.

No entraremos en el detalle de los incidentes que se sucedieron durante el último año de su administración, en el que se repitieron las renunciaciones ministeriales, iniciadas con la de Quintana en noviembre, como consecuencia de una interpelación promovida por don Bernardo en el Senado. Al terminar el año, se produjo la crisis total. El motivo invocado fue la disidencia con sus colaboradores en cuanto al alcance de los términos de la ley de amnistía para los revolucionarios del año anterior, que aquellos querían amplia y el presidente restringida con respecto a algunos casos de indisciplina militar. Esta simple cuestión de principios provocó la renuncia de los ministros civiles. Descartada la colaboración radical, no halló Sáenz Peña con quien suplantarlos, lo que motivó que el Congreso suspendiera sus sesiones "hasta que el P.E. se pusiera en condiciones constitucionales".

Una crisis tan grave originada con motivo tan fútil parecería inexplicable, si no se conociera la razón profunda y verdadera de la oposición al presidente, que sólo buscaba un pretexto para eliminarlo. Esa razón era que el honrado don Luis, por primera vez en nuestra historia, había resuelto aclarar las cuentas de los ferrocarriles ingleses, que manifestaban pretensiones exorbitantes en lo referente al pago de la cláusula de garantía, y había nombrado una comisión investigadora presidida por el ingeniero don Miguel Tedín. De los trabajos de esta comisión iría a resultar que las empresas, lejos de ser acreedoras, eran deudoras del Estado argentino. Mientras ella no se expidiera definitivamente,

"la administración Sáenz Peña —escribe Terry (*Finanzas*, pág. 529)— había resuelto distribuir entre las compañías dos millones de pesos oro por año".

La imposibilidad de encontrar ministros hizo que el presidente se viera forzado a presentar su renuncia el 5 de enero de 1895. Inmediatamente el Congreso se la aceptó, y asumió el mando el vicepresidente, doctor don José Evaristo Uriburu.

¿Qué ocurrió con los ferrocarriles? Sigamos leyendo a Terry: "El nuevo gobierno hizo caso omiso de esa Comisión (la nombrada por Sáenz Peña) y de sus trabajos y procedió a efectuar arreglos directos por un valor de 60 millones, más o menos, en títulos al 4 por ciento de interés y 1/2 por ciento de amortización".

Era natural que, después de esa feliz iniciación, la gestión del doctor Uriburu prosiguiese como *sobre riele*s con el decidido auspicio de los partidos del acuerdo y de sus prohombres, Mitre, Pellegrini y Roca. La paz había vuelto a los espíritus con la eliminación de un personaje incómodo que, a su "torvo patriotismo" y su origen "mazorquero", unía la circunstancia agravante de ser terciario de la Orden de Santo Domingo con la inherente incapacidad para adaptarse al ritmo de los tiempos y a las consignas de la Masonería dominante.

* * *

Todo ello anunciaba la vuelta de Roca al poder. Aparte de su actuación en el aplastamiento de la rebelión radical del litoral, había desempeñado un papel principal en la crisis que motivó la renuncia de Sáenz Peña y había consolidado entre tanto, a favor de las intervenciones armadas, su situación como jefe de los autonomistas del interior. Su provincia acababa de conferirle una banca en el Senado, cuya presidencia ejercía. Contaba con el apoyo decidido de Pellegrini, también senador. Reducido el mitrismo a la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Udaondo, Roca era sin disputa la personalidad política más fuerte de la República y el representante más genuino del régimen imperante.

La situación internacional lo favorecía asimismo. Se había agravado el conflicto con Chile, a raíz de la prolongación del pleito de límites y de las disputas entre los peritos, lo que hacía pensar en la inminencia de una guerra. En 1896 se había resuelto someter las divergencias al arbitraje de la corona de Inglaterra; pero la inquietud persistía, motivada por agresiones verbales y escritas, lo que obligó a la intensificación del armamento y a la adquisición de barcos de guerra, no obstante el estado deplorable de

nuestras finanzas. La circunstancia de ser Roca un militar de carrera era el argumento preferido de sus partidarios para justificar su nueva elección en esos momentos de peligro externo.

Como corroboración de la "buena estrella" del candidato, que recibía generalmente su esplendor de las desgracias nacionales, el año 1896 vio desaparecer a las dos grandes figuras de la oposición, que hubieran podido ser un obstáculo para su surgimiento. A comienzos de ese año moría Aristóbulo del Valle; en julio ponía fin a su vida Leandro Alem, en una de las crisis depresivas frecuentes en este gran romántico, cuyas vicisitudes personales se identificaban permanentemente con las de la nación. Estos dos cadáveres ilustres —como el de Alsina en el 80— le servirían de escabel a Roca para trepar nuevamente a la primera magistratura del país.

Con la desaparición de Alem y del Valle, el movimiento popular quedaba privado de sus más eminentes cabezas. Sólo persistía en el Senado don Bernardo de Irigoyen, con su obsesión presidencial de eterno candidato frustrado, que lo predisponía a la conciliación y a las combinaciones. No dejó de intentarlas en esta ocasión. Se propuso una coalición de mitristas, "modernistas" y radicales sobre la base de la candidatura de don Bernardo para la presidencia y hasta se realizó un mitin conjunto, en el que hablaron, además del candidato, Mitre y Roque Sáenz Peña. Esa política se llamó de "las paralelas". No tuvo éxito porque el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, obediente al influjo de Hipólito Yrigoyen, se opuso a ella decididamente, con lo cual fallaban los cálculos, fundados en los electores de dicha provincia. Mitre decidió suprimir "patrióticamente" la lucha y plegarse a la candidatura de Roca, llevando listas de electores comunes bajo el rótulo de "partido nacional".

El radicalismo no presentaría candidatos a la presidencia. Concurriría, sí, con fórmula propia (B. de Irigoyen-Demarchi) a la elección para gobernador de Buenos Aires, donde triunfó, con el apoyo de los amigos de Pellegrini. Puesto en el dilema de renunciar o gobernar con una legislatura adversa, don Bernardo optó por lo segundo. El radicalismo se dividió con ello entre quienes se plegaron al gobernador electo, obligado a manejarse con "cívicos" y roquistas, y quienes siguieron la tendencia intransigente y antipactista del radicalismo reorganizado, bajo la jefatura de Hipólito Yrigoyen. Este empezaba ya a definirse como un gran caudillo nacional.

La elección de Roca —con el doctor Norberto Quirno Costa como vice— fue casi una elección canónica, sin contradictores. Hubo en el escrutinio unos cuantos votos *pro-forma* para Mitre, emanados de los electores de origen cívico que figuraban en las listas conjuntas del acuerdo mitrista-autonomista.

VII. LA SEGUNDA DE ROCA

Al asumir Roca por segunda vez la presidencia de la República, el 12 de octubre de 1898, se vio ante una situación muy distinta de la que había afrontado en su primer gobierno. El país progresaba vertiginosamente. En los últimos veinte años había duplicado su población (de dos a cuatro millones) debido en gran parte al constante flujo inmigratorio, y esto tenía naturalmente que incidir sobre las modalidades y costumbres sociales. Las actividades económicas y administrativas habían crecido en proporción. A ello respondió la reforma de la Constitución nacional realizada a fines de la presidencia de Uriburu y en la cual se aumentó el número de ministros nacionales, de cinco que eran a ocho, con el agregado de los de Agricultura, Obras Públicas y Marina.

El cambio no obedecía sólo a circunstancias locales, sino internacionales. Llegaba hasta nosotros, envolviéndonos, la atmósfera optimista del "fin de siglo", que coincidió en Europa con el auge de la civilización burguesa y la confianza inmoderada en las promesas del porvenir, iluminado por los resplandores del gas incandescente y mecido en los ritmos de Offenbach y Waldteuffel. No es el caso de intentar por centésima vez la descripción de ese "novecientos", que hoy se nos antoja una alucinante mitología. El Occidente estaba en paz, gracias al equilibrio de poderes y al reparto de los territorios colonizables, y distraído con la aventura del progreso material, que cada día le deparaba su sorpresa. Las capitales europeas eran centros de vida refinada y fastuosa, a las que todo el mundo concurría en interminable peregrinación. Mientras los ricos y los poderosos se solazaban con los goces de una vida fácil y frívola, los desheredados de la tierra no dejaban de participar en el festín, gracias a la esperanza en la inminente "aurora roja" anunciada por los profetas del socialismo y el anarquismo.

Había la conciencia general de que todo estaba por hacerse y de que la riqueza se hallaba al alcance de la mano de quien quisiera tomarla. El porvenir sería de los hombres de empresa que entraran en las vías del capitalismo triunfante. Esta idea debía prender con mayor fuerza en un país nuevo, en que las posibilidades de acción eran infinitas, y acentuarse a favor de la recuperación económica que sucedió a la larga crisis iniciada en el 87.

El hada tutelar que presidía el destino del general Roca había hecho, en efecto, que el comienzo de su segunda presidencia coincidiera con el fin de la depresión, de manera que pudiera capitalizar como obra suya la prosperidad renaciente, debida a una serie de cosechas felices y a una balanza comercial reiteradamente favorable en los últimos años. Con la consecuencia lógica (aunque inesperada) de una pacificación social y política como no la había experimentado el país desde hacía mucho tiempo y que no era solamente un fenómeno local, sino mundial. La participación en la obra del Progreso absorbía las mejores actividades humanas. El auge del capitalismo finisecular se tradujo, en todas partes, en un correlativo desmedro de la acción política, que tendió a abandonarse en manos de los profesionales de ella, mientras que la energía de las "élites" intelectuales y sociales se orientaba a la obtención de los fáciles triunfos en las esferas de la economía. La filosofía de la época enseñaba que el Poder consistía en la riqueza y no en el dominio de los engranajes de la administración del Estado, mero "gendarme" al servicio de los dueños del dinero.

Tal era también la creencia del general Roca, quien se propuso gobernar al tenor de los tiempos, sin oposición (salvo la protesta del indomeñable radicalismo) y ajustando los resortes de su régimen con el fin de evitar cualquier incómodo brote de civismo que pudiera perturbar el desarrollo de los intereses económicos dominantes, a los cuales se hallaba personalmente vinculado y que se identificaban, para él, con el bien general de la República.

* * *

A la par de la transformación social, se había operado en los últimos tiempos una gran transformación intelectual, con la aparición de nuevos valores en las letras y en las artes. Muertos los prohombres de la generación organizadora (con la sola excepción de Mitre, ya octogenario), ocupaban el primer plano los escritores surgidos alrededor del 80, cuyas características ya hemos señalado. El elegante escepticismo y la orientación europeizante que los definía como grupo, tuvo valiosas excepciones en la obra de Adolfo Saldías y Ernesto Quesada, que fueron los primeros en reaccionar de manera metódica contra la impostura histórica de la generación precedente. Esa actitud crítica —a la que debe agregarse la tímida de otros publicistas, como Estanislao S. Zeballos— no tuvo la repercusión que debía esperarse y se limitó al plano individual y con carácter de excepción. El régimen había

adoptado, como dogma nacional, la mitología creada por los vencedores de Caseros y la imponía por la propaganda y la enseñanza pública, confiando en que hallaría fácil crédito y vigencia definitiva entre las promociones de hijos de inmigrantes que no habían sufrido en carne propia, ni en la de sus progenitores, los males de la patria. ¡Ellos podrían ser mitristas sin reparo! Por lo que hace a la generación que recién afloraba a la vida intelectual, carecía —signo de los tiempos— de inquietud política, salvo honrosas excepciones; y si la tenía (tal el caso de Lugones, joven, que preparaba sus *Montañas de oro*), se manifestaba sobre todo como ideología de signo social y marca europea, socialismo o anarquismo importados, con lo que se continuaba la herencia fatídica del sarmientismo precursor.

Mientras tanto, la Universidad reorganizada por Avellaneda continuaba dando sus hornadas de profesionales, entre los que descollaban los abogados, mimados y favoritos del régimen, ya que entre ellos se reclutarían los ministros y parlamentarios indispensables para su correcto funcionamiento. Recibían la preparación adecuada a la función a que los destinaba, pues salían de las aulas convencidos de que el capital extranjero (y sobre todo inglés) era no sólo un factor de la producción, sino un benefactor que merecía especial reverencia; de que los servicios públicos debían estar a cargo de empresas privadas, porque el Estado (sobre todo el argentino) era "mal administrador"; de que la salud de nuestras finanzas dependía del crédito europeo, al que había que cuidar, ahorrando sobre "el hambre y la sed" de los criollos; de que constituíamos un "emporio" agrícola-ganadero, destinado a cambiar perpetuamente materias primas por manufacturas británicas, puesto que afortunadamente carecíamos de carbón y de acero: es decir, salían armados de los principios gratos a la clientela futura, que pagaba mejor que el Estado y a la que especialmente había que halagar. Esta "élite" así preparada desempeñaría de buen grado funciones políticas, por la especulabilidad y la influencia a ellas inherentes. Pero su verdadera meta consistía en la obtención de sindicaturas y directorios de empresas extranjeras, sobre todo británicas, más codiciadas a veces (pues conferían mucho mayor poder) que cualquier ministerio nacional.

La enseñanza media respondía a los mismos principios. Por lo pronto, se había impuesto de manera definitiva la versión de la historia patria legada por los unitarios (realizada "con aquella habilidad con que sabemos rehacer la historia", según palabras del propio Sarmiento), que implicaba el desprecio y el repudio de la tradición española y de todo lo nacional. Aparte del laicismo recientemente instaurado, la tendencia reformadora

había ganado una nueva victoria con la supresión del latín, por primera vez bajo el ministerio de Wilde, en la anterior presidencia de Roca, y luego (después de una efímera restauración, durante el ministerio de Carballido) definitivamente, bajo los ministerios de Magnasco y J.V. González, en la segunda. Sin historia, sin catecismo y sin enseñanza clásica, la ruptura con la tradición resultaba así completa, a fin de producir generaciones de descastados, dóciles al destino que se les deparaba de súbditos de una factoría que no podría ni siquiera aspirar a ser nación.

* * *

Paz y administración. Administración y paz. La segunda presidencia de Roca había de desarrollarse bajo los principios proclamados en la primera y en circunstancias igualmente favorables, puesto que se iniciaba un nuevo período de vacas gordas. Crecía la producción y la exportación, reiterándose los balances favorables de los años anteriores. Con ello se había restablecido la confianza en los negocios, se reanudaba el movimiento de inversiones, la crisis llegaba a su fin. El país progresaba al ritmo de los tiempos y se veían los signos de ese progreso en la prolongación de las líneas ferroviarias y en la instalación de los servicios de gas, así como en la aparición de nuevos diarios y en la construcción de edificios públicos. La ley de conversión de la moneda daría fin a la incertidumbre de nuestro signo monetario.

Una sola dificultad quedaba pendiente y era la relativa a nuestras relaciones con Chile. La cuestión parecía resuelta con el tratado que difería al arbitraje de la corona de Inglaterra las dificultades que pudieran suscitarse entre los peritos; pero se agudizaba periódicamente por los recelos recíprocos y la propaganda periodística, así como por incidentes casuales originados en esa tensión. El peligro permanente de la guerra a que parecía conducirnos "la Prusia de Sud América" (como se llamaba entonces al país vecino), obligaba a extremar los preparativos, y a ello obedecieron las adquisiciones de armamentos realizadas bajo el gobierno de Uriburu, en el cual, por la mala situación de las finanzas hubo de recurrirse a una suscripción nacional. Roca decidió disipar con un gesto de amistad los recelos, provocando un encuentro con el presidente de Chile, el que se produjo en el estrecho de Magallanes en agosto de 1899.

Con todo, la inquietud no desapareció y hubo de mantenerse el régimen de la paz armada, con la consiguiente carrera de adquisiciones y las inherentes dificultades financieras. Más que por el pleito pendiente, el recelo hacia Chile se originaba en la acti-

tud de este país en el arreglo final de la cuestión del Pacífico que amenazaba complicarse y producir una nueva guerra a la que el nuestro no habría podido permanecer ajeno. El gobierno debió recurrir nuevamente al crédito para la construcción de barcos de guerra, y la situación se complicó con un brote de peste bubónica y el consiguiente cierre de los puertos de Brasil y Europa para nuestros ganados, que agravó las angustias del erario.

En estas circunstancias se produjo el episodio de la "conversión de la deuda pública", planteada en Europa por el doctor Pellegrini, adoptada por el Ejecutivo y sometida al Congreso en las sesiones de 1901.

La operación consistía en unificar nuestra deuda consolidada, proveniente de treinta empréstitos de diversos intereses y amortizaciones, reemplazándola por una sola deuda de 435 millones oro, a 4 por ciento de interés y 1/2 por ciento de amortización. Inobjetable en principio, el convenio incluía, no obstante, una cláusula deprimente para el país, al restablecer la garantía especial del depósito en el Banco de la Nación, a la orden de los prestamistas, de una parte de nuestras entradas de aduana, lo que significaba la fiscalización de éstas por los mismos prestamistas, o sea una verdadera intervención en los asuntos del Estado argentino.

La publicación de esta cláusula provocó un estallido de indignación nacional, por lo que el gobierno debió retirar el proyecto, que ya había sido aprobado por el Senado. La Cámara de Diputados no alcanzó a tratarlo. Esa actitud de Roca, que Pellegrini atribuyó a debilidad y deslealtad, provocaría la ruptura definitiva de la sociedad política que ambos formaban. Al verse abandonado por el presidente y en situación tan desairada, Pellegrini advirtió de súbito que el régimen se fundaba en el peculado y en el fraude y que las cosas no podían seguir así. Pasó a la oposición, con su grupo político, que recuperó el viejo rótulo de "autonomista".

Al comenzar el año 1902 se habían gastado 80 millones en preparativos bélicos y la situación se hallaba más tensa que nunca. Habíase llegado incluso a la movilización de efectivos militares hacia la frontera. Echando mano a los últimos recursos del tesoro (el fondo de conversión), se habían contratado nuevos barcos de guerra, con fuertes primas para la celeridad en la entrega. La ruptura era inminente.

Un cambio de plenipotenciarios cambiaría también el cariz de las cosas. Enviado el doctor José M. Terry a Chile, halló la fórmula del arreglo en la firma de un convenio que suprimía de raíz la causa de los recelos, originados en la Argentina por la política expansionista de su vecino, y en Chile por la supuesta

injerencia argentina en los asuntos del Pacífico. Los "pactos de mayo", que se firmaron el 28 de ese mes en Santiago, establecían, en efecto, que nuestro país respetaba la soberanía de las demás naciones, sin mezclarse en sus asuntos internos *ni externos*, a la vez que Chile aseguraba su intención de no pretender expansiones territoriales, "salvo las que resultaren del cumplimiento de los tratados vigentes". Las otras cláusulas de la convención se referían a limitación de armamentos y al compromiso de someter a arbitraje todas las dificultades que se presentasen entre ambos países, designándose árbitro a S.M. británica.

En el fallo sobre nuestra cuestión de límites, que se dio a fin de ese año, obtuvimos 42.000 Kms. de los 90.000 en litigio, con los que se formó la gobernación de Los Andes.

Si bien los "pactos de mayo" tuvieron la virtud de impedir una guerra para la que no había a la sazón motivo suficiente, no hay duda de que la extensión de los compromisos que por ellos adquirimos significaron una disminución de nuestra personalidad internacional, de acuerdo con la más genuina tradición del régimen. A cambio de una promesa *condicionada* de no expansión territorial (salvo "el cumplimiento de los tratados vigentes" que la implicaban, en Tacna y Arica), nosotros asegurábamos la no injerencia en los asuntos "externos" de los vecinos, lo que nos colocaba al margen de la vida internacional, que supone en dicha materia una vigilancia recíproca permanente. Además, aceptábamos limitar nuestros armamentos con relación a Chile, situándonos por debajo de nuestras necesidades reales, ya que no existía igual compromiso por parte del Brasil, que se armaba sin limitaciones.

Era, según Zeballos, "la improvisación diplomática impuesta al general Roca por los banqueros de Londres, apoyados por la credulidad romántica del general Mitre".

Bajo Roca se consolida, en efecto, el consabido "pacifismo" del régimen. Su doctrinario más importante es Mitre. Después de haber llevado al Paraguay la guerra vencedora por el comercio inglés, después de abiertos los ríos y los puertos a los beneficios de la civilización, ya no hay para él problemas en América, cuyos ejércitos deberán limitarse a la tarea de reprimir las rebeliones interiores. Roca seguiría fielmente la línea de esta política, que nos había hecho perder el Chaco paraguayo, herencia a su vez de la que nos había amputado de la mitad más valiosa del patrimonio virreinal.

Como no se trata de ser fuertes, sino de ser "civilizados", el predominio militar queda excluido como finalidad de gobierno, así como toda preocupación por el destino de las "atrasadas" naciones del resto del Continente. Seremos un apéndice comer-

cial de Europa, un mercado de materias primas, consumidor del descarte de la industria inglesa. El corolario de esa actitud consistirá en la tierna y confiada amistad hacia el Brasil, con quien ya no tenemos pleitos pendientes pues se ha resuelto por arbitraje norteamericano (y naturalmente, en contra nuestra) el de Misiones; hacia el Brasil, que desde 1889 no es ya imperio, sino república masónica y "positivista" (y por consiguiente, fraternal), aunque sigue con persistencia su política de siempre. Sendas embajadas de confraternidad corroboran esa orientación internacional, que alcanza su apoteosis en el jubileo del general Mitre, al cumplir éste 80 años, y en la visita a Buenos Aires del presidente Campos Salles, en cuya ocasión la prensa oficial encabezada por "La Nación", se deshace en alabanzas al enemigo histórico, erigido en benefactor y amigo entrañable.

Al leer su mensaje de 1903, el general Roca habría de afirmar, después de dar cuenta de la prosperidad renaciente, que carecíamos de problemas en el orden externo. La renuncia a la política internacional significaba la confesión del destino colonial que el régimen vigente nos deparaba, atenuado por declaraciones líricas como la "doctrina Drago".

* * *

Esta política no podía dejar de provocar, como provocó, una vasta resistencia en todo el país, que se habría manifestado por medio de los comicios, si éstos hubieran estado abiertos a la expresión popular y no dominados por la maquinaria electoralista de los oficialismos. Una primera consecuencia fue la atonía política, la deserción espontánea del pueblo de las convocatorias electorales. Otra, las disidencias internas entre el personal de la situación dominante, invocando con mayor o menor autoridad, razones morales, como las que dieron nacimiento al "autonomismo" de Pellegrini y al nuevo "partido republicano", de filiación mitrista, que pretendían capitalizar, en provecho propio o de accidentales alianzas, el descrédito del gobierno.

Pero ninguna de esas empresas de aventuras, así proclamaran los más inmaculados propósitos de renovación, podían polarizar, por razón de su origen, las esperanzas populares, que se orientaban hacia un cambio completo, no sólo de procedimientos, sino de personal político. La prédica radical había difundido la conciencia de la necesidad de una modificación revolucionaria del régimen imperante, que se mantenía viva a pesar de los fracasos del 90 y el 93.

La Unión Cívica Radical había permanecido desorganizada y aparentemente inactiva a partir de la elección de Roca. No era ajeno a esa situación el problema suscitado al partido por el cisma "bernardista", al que se habían plegado elementos valiosos que, a la sazón, gobernaban en la provincia de Buenos Aires, rodeando al viejo jefe, que tenía como ministro de gobierno al doctor Adolfo Saldías. El compromiso cada vez mayor de este grupo con los intereses del régimen y con la política del general Roca, y su inherente olvido de los propósitos regeneradores que habían inspirado al movimiento del Parque, iría dando paulatinamente la razón a la tendencia "intransigente", que se negaba a colaborar con los promotores de la corrupción política y que tenía como caudillo indiscutido al sobrino y heredero de Alem, Hipólito Yrigoyen.

En momentos en que muchos claudicaban y otros desesperaban, Yrigoyen no había perdido la fe en las posibilidades del país. Rodeado de un pequeño grupo de fieles, persistió durante esos años en una prédica permanente de los principios en que hacía consistir la regeneración nacional, organizando a la vez pacientemente el movimiento colectivo, por medio de agentes confidenciales que iban y venían por todo el territorio. A mediados de 1903 ya estaba tejida la vasta trama de una organización coherente y compacta, cuya primera expresión pública fue el mitin del ese año en celebración de la revolución del Parque y al que concurrieron 50.000 ciudadanos.

La presidencia de Roca llegaba a su fin y las fuerzas políticas hacían sus preparativos para la contienda electoral. En febrero de 1904 se reunió el Comité Nacional del radicalismo reconstituido, con delegados de todo el país. Anunció la iniciación de esta segunda etapa de su lucha mediante un manifiesto al pueblo, en el que, después de hacer un análisis de la situación imperante, proclamaba la "abstención" radical en materia de concurrencia a los comicios viciados de fraude.

El manifiesto de 1904 tiene una gran importancia en nuestra historia. En él se definen las grandes líneas a que se ajustaría la acción del partido en que se encauzará la lucha contra el régimen imperante. Se presenta esencialmente como una reacción moral, según la tradición del Parque; pero mostrando claramente las consecuencias políticas y sociales de la corrupción, en el falseamiento de las instituciones y el desmedro general del país en su soberanía y en su patrimonio. Propone como remedio la libertad del comicio, la reintegración a los ciudadanos de sus derechos usurpados.

La abstención significa la voluntad de no legalizar con la concurrencia a las urnas un resultado que será, sin duda, fruto

del fraude y la presión oficial. Si se elude la vía de los comicios para llegar al cambio que el partido postula, es obvio que sólo queda la acción revolucionaria.

* * *

El radicalismo conspiraba, en efecto. Durante los largos años en que permaneció apartado de la acción pública, Yrigoyen había estado preparando una vasta organización en el ejército, que se extendía por todo el territorio y esperaba la oportunidad del golpe de fuerza. Núcleos entusiastas de viejos militantes y de gente joven que ponían en ese movimiento una esperanza de redención, lo apoyaban en los distintos pueblos y ciudades de la República.

El general Roca no lo ignoraba. Se abstuvo, sin embargo, de proceder en forma violenta contra sus promotores, conformándose con deshacer los núcleos militares en formación mediante traslados oportunos. La razón de esta conducta contemporizadora del "Zorro" era simple. Pretendía forzar, con el miedo al estallido revolucionario, la unión de los núcleos oficialistas anarquizados, e imponer en la presidencia un sucesor de su factura; o por lo menos, impedir el triunfo de un enemigo como Pellegrini. Poco antes había hecho reformar la ley electoral, reemplazando el antiguo régimen de mayorías por el de circunscripción uninominal, que le daba más amplitud de maniobra.

La anarquía oficialista hacía proliferar los candidatos. Nacionales acuerdistas, autonomistas, "partidos unidos" de Buenos Aires, republicanos, modernistas, pujaban por sus respectivos hombres y proyectaban las más imprevistas alianzas. Los republicanos proclamaron a J.E. Uriburu. Para conjurar la candidatura de Pellegrini, Roca (cuyo candidato era don Marco Avellaneda) apoyó la del doctor Manuel Quintana, proclamado por el gobernador Ugarte y contribuyó a que triunfara en una convención de "notables" convocada al efecto. Una vez aceptada, intrigó nuevamente para cambiarla. A todo esto, el radicalismo recibía toda clase de propuestas por parte de los núcleos antirroquistas, para establecer un "acuerdo" de éxito seguro, que Yrigoyen sistemáticamente rechazaba. Ugarte llegó, incluso, a ofrecer el concurso de las fuerzas armadas de Buenos Aires para derrocar a Roca. Aleccionado por la experiencia, Yrigoyen se mantuvo firme en su opinión de que no podía regenerarse al país con el concurso de los mismos corruptores y a cambio del indulto para éstos.

La elección se realizó en abril de 1904, resultando electos

Quintana y el doctor don José Figueroa Alcorta como vice. La revolución radical, preparada para setiembre, hubo de sufrir una postergación, por lo cual pudo realizarse la trasmisión del mando el 12 de octubre de dicho año.

VIII. LA REVOLUCIÓN DE 1905 - QUINTANA Y FIGUEROA ALCORTA - LA AGITACIÓN SOCIAL

El doctor Manuel Quintana, cuyos antecedentes parlamentarios y ministeriales ya conocemos, era una de las encarnaciones más típicas de la oligarquía imperante y a este carácter eminentemente representativo debió su fortuna política. De origen mitrista, se había plegado a Tejedor por lo cual fue uno de los diputados cesantes en el 80; más tarde, como ministro de Sáenz Peña, había sido el puño fuerte de su gobierno para ahogar la rebelión del radicalismo. Porteño "neto" y liberal convencido, obedecía a las modalidades hereditarias del medio a que pertenecía, por su desprecio del pueblo nativo (al que creía necesario reprimir, en nombre del orden, con todos los extremos del rigor policial) y por su puntilloso legalismo cuando estaban en juego los intereses que él juzgaba consustanciales con la civilización. Es decir que su animadversión hacia los movimientos de impaciencia popular, en los que veía un resurgimiento "montonero" que debía aplastarse con saña mitrista, contrastaba con la fervorosa simpatía y la inagotable devoción que le inspiraba el capital inglés, al que consideraba como la garantía principal de nuestro progreso. Añadiremos que Inglaterra lo proveía de las levitas que lo hicieron famoso y de la clientela que lo hizo rico.¹

Esas condiciones —comunes, por lo demás, a todo el grupo gobernante, aunque particularmente acentuadas en su persona—, así como su militancia en las delicadas responsabilidades de abogado de los ferrocarriles y consultor del Banco de Londres, definieron sin duda en su favor la voluntad de los "notables" convocados por el general Roca. No fue ajeno a todo ello *"le physi-*

¹ Bajo la presidencia de Avellaneda y siendo ministro de Relaciones Exteriores don Bernardo de Irigoyen, ocurrió la reclamación inglesa a propósito de la detención en Rosario de un gerente del Banco de Londres por no haber cumplido una decisión gubernativa. En el curso de la reclamación, el abogado que acompañaba al encargado de negocios reclamante anunció por vía intimidatoria, que una cañonera inglesa se dirigía hacia el puerto de Rosario, lo que motivó la digna reacción del ministro, quien se puso de pie y se negó a continuar la conversación hasta no recibir satisfacciones por el agravio. Dicho abogado del Banco de Londres y del diplomático inglés era el doctor Manuel Quintana. Este episodio fue relatado por el doctor Estanislao Zeballos en una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en junio de 1914.

que du rôle": Quintana impresionaba por su aspecto, según atestiguan sus contemporáneos. De la confrontación de esos testimonios (y descartada la exageración partidista y doméstica), resulta evidente que aspiraba a parecer un "lord" británico y que ponía un exceso de aplicación al servicio de este limitado ideal. Esta aspiración a sobreponerse a su origen español por medio de "mimesis" indumentaria y gesticular habría resultado cursi en cualquier país de Europa; pero tuvo la virtud de impresionar profundamente a una oligarquía pastoril recién desbastada, que aún confundía la elegancia con el atildamiento.

Atildado, Quintana lo era, sin duda, no limitando esta característica a su aspecto físico, sino extendiéndola a su conducta que se empeñaba en exhibir tan imaculada como sus pecheras y sus puños. Nunca mereció de sus clientes el menor reproche en el desempeño de sus funciones abogadiles; y la misma irreprochabilidad pretendió en las públicas, sin plantearse ningún problema de incompatibilidad entre intereses distintos que él, en conciencia, identificaba. Si el capital inglés era nuestro benefactor, servirlo, ¿no significaba, acaso, servir a la patria misma? De aquí su notoria animadversión contra los peculados del roquismo que para él implicaban el escándalo de recibir una paga por lo que había que hacer por deber. Se propuso moralizar la administración y las costumbres y por ello, desde el momento de asumir el mando, hubo de mostrar claramente lo que lo separaba de Roca. "Si tenemos el mismo espíritu conservador —afirmó—, no somos camaradas ni correligionarios y hemos nacido en dos ciudades argentinas más distantes entre sí que muchas capitales de Europa".

El discurso programa con que Quintana inauguró su presidencia no era, por cierto, como para ilusionar al país con esperanzas exageradas. Desde la afirmación notoriamente falsa de proceder de "elecciones libres", hasta la farisaica del "respeto de las autonomías" (cuyo verdadero sentido era la voluntad de no innovar en materia de prácticas políticas), nada lo diferenciaba de los pronunciados por sus antecesores en ocasión análoga, salvo el propósito de mantener la paz interna "con energía" alusiva a la anunciada revolución radical. Nunca fue una característica de su oratoria ¡tan alabada! la elevación de pensamiento, ni la riqueza y novedad de las ideas, tomadas todas del acervo común del constitucionalismo contemporáneo y de la mitología creada por la generación precedente.

Constituyó su ministerio en su mayor parte con hombres jóvenes y de cortos antecedentes administrativos, salvo dos ministros heredados del roquismo: Terry y J.V. González.

No habían transcurrido cuatro meses de la asunción del

mando por el nuevo titular, cuando estalló la revolución del 4 de febrero de 1905.

El movimiento tenía carácter militar y civil, siendo más acentuada en el interior la participación de los ciudadanos armados. En la madrugada de ese día se sublevaron varios regimientos en Campo de Mayo, Bahía Blanca, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, apoderándose en estas dos últimas provincias de las situaciones y derrocando a sus gobiernos. El general Roca, que estaba en su estancia de Córdoba, huyó a Santiago del Estero, pero los revolucionarios cordobeses se apoderaron en aquella ciudad del vicepresidente y lo retuvieron como rehén.

En la capital federal fueron tomadas varias comisarias, pero no cuajó la tentativa revolucionaria de adueñarse del Arsenal de Guerra, lo que motivó el fracaso del movimiento.

El gobierno tuvo en el primer momento la sensación de que la sublevación era general y de que estaba perdido. Pero al dominar la situación local, reaccionó enérgicamente y envió contra los focos rebeldes las fuerzas que le seguían siendo leales, con órdenes terminantes de fusilar a los oficiales sublevados que se encontraran con las armas en la mano, bajo la responsabilidad del Presidente de la República.

El comando revolucionario, cuya presidencia ejercía el doctor Yrigoyen, resolvió deponer las armas para evitar mayor derramamiento de sangre. Los revolucionarios de Córdoba aprovecharon la circunstancia de tener en rehén a Figueroa Alcorta para simular una conferencia telegráfica en que éste pedía garantías para la rendición, las que fueron negadas por Quintana. La supuesta intervención del vicepresidente en el episodio —que, por pundonor, no se empeñó luego en aclarar— motivó su distanciamiento definitivo con el jefe del Estado, que siguió creyéndolo culpable de debilidad, no obstante el testimonio en su favor de los propios jefes revolucionarios.

En la provincia de Buenos Aires, las fuerzas sublevadas de Bahía Blanca, que se dirigían a la capital, creyendo triunfante el movimiento, supieron el 6 su fracaso, al llegar a la estación Pirovano. El comando de la columna decidió desarmar a la tropa y comunicó la rendición a las fuerzas del gobierno, que se hallaban próximas. Pero la soldadesca se resistió e hizo fuego sobre la estación, donde se hallaba el comando revolucionario, matando a un grupo calificado de dirigentes.

Mucho se ha escrito sobre la causa del fracaso de la revolución del 5 de febrero, vasta esperanza nacional frustrada por un conjunto de circunstancias adversas. No fue menor el haberse efectuado en un momento de distensión y de expectativa. Si bien dirigida "contra un régimen y no contra personas", es evidente

que la opinión general, enemiga del roquismo, esperaba un cambio favorable por la acción del nuevo mandatario, que había manifestado su distanciamiento con respecto a la política de su antecesor. Los imponderables actuaban contra la empresa revolucionaria que, por lo demás, había sido delatada a las autoridades. Yrigoyen advirtió la víspera la posibilidad del fracaso. Pero ya no tenía tiempo de dar contraorden a sus agentes del interior y debió lanzarse a la lucha.

Después de la derrota del movimiento, permaneció tres meses oculto, para atender la situación de sus correligionarios comprometidos, al cabo de los cuales se presentó al juzgado federal, asumiendo la responsabilidad que le incumbía como jefe. En el manifiesto, que poco antes había dado a publicidad, justificaba la revolución, afirmando que ella estaba en "la ley moral de las sociedades" para acabar con abusos gubernativos inextirpables por otro medio.

Con la derrota del movimiento radical —seguida de una dura represión, con prisiones y deportaciones a Ushuaia— no se restableció la tranquilidad en el país. Una creciente inquietud obrera hizo que Quintana debiera gobernar casi constantemente con estado de sitio.

Desde 1880 empezaba a sentirse, en los medios obreros e intelectuales, la influencia de las nuevas ideas sociales provenientes de Europa. En 1882 un grupo de inmigrantes alemanes había fundado el club "Vorwaerts" y publicado una pequeña revista con el mismo título, en que predicaba el socialismo. En 1890 se fundó el Comité Internacional Obrero. Seis años más tarde se constituyó el Partido Socialista, que tendría como órgano el periódico "La Vanguardia", dirigido por el joven médico Juan B. Justo. Al mismo tiempo se desarrollaba el movimiento anarquista, que tomó incremento con la llegada al país, a fines de siglo, del notable agitador italiano Pedro Gori.

Las organizaciones socialistas y anarquistas estaban integradas en sus comienzos, por una mayoría de obreros extranjeros. No obstante ello, el influjo de la novedad y la atracción que ofrecía, por sí mismo, el pensamiento revolucionario, sedujo a un grupo importante de la intelectualidad joven, en el que destacaban los nombres de Roberto J. Payró, José Ingenieros y Leopoldo Lugones, señalado ya como una de las más altas voces líricas del habla española.

La agitación social no provenía solamente del contagio intelectual, sino de un estado real de miseria y de las condiciones en que se desarrollaba la vida obrera, por el exceso de desocupados y la baja consiguiente de los salarios. Ya en 1897, se había realizado la primera manifestación de los sin trabajo, cuya irrup-

ción en la calle Florida, a la hora del aristocrático desfile de los carruajes que venían del corso habitual de Palermo, produjo una oleada de pánico y la inmediata represión policial. A ello se habían seguido las huelgas. La del Mercado de Frutos y los obreros portuarios, en 1902, fue especialmente violenta y dio motivo a la promulgación de la Ley de Residencia (4144), el 2 de noviembre de ese año, que autorizaba a la policía para deportar sin formación de causa a los agitadores extranjeros, en cuya propaganda insidiosa se hacía consistir la razón única de los desórdenes.

En ese momento existían ya dos organizaciones obreras importantes: la Unión General de Trabajadores, de ideología socialista, y la Federación Obrera Regional Argentina, anarquista. El Partido Socialista había empezado a concurrir a las convocatorias electorales. En 1904, a favor del sistema de circunscripción uninominal impuesto por Roca, resultó electo por la circunscripción de la Boca —donde pululaban los inmigrantes italianos, maz-zinianos y masones— el primer diputado socialista de la América del Sur: el joven y gallardo abogado Alfredo L. Palacios.

El surgimiento del movimiento socialista no dejó de ser acogido con simpatía por algunos sectores de la oligarquía dominante, a fuer de progresistas. El mismo general Roca, a la vez que otorgaba funciones administrativas a los jóvenes Lugones e Ingenieros, hizo enviar por su ministro González a las Cámaras un proyecto de Código de Trabajo, que no fue tratado. La verdad es que sólo interesaba el gesto "progresista". Quintana, por su parte, había declarado en su discurso de asunción del mando, que consideraba "aceptable" el programa mínimo del socialismo.

Pero de estas bellas palabras a la realidad había gran trecho. El movimiento obrero fue tratado con extraordinario rigor y desnudaron para sus dirigentes las detenciones y las deportaciones. Durante el estado de sitio prolongado que siguió a la revolución radical se clausuraron los centros de las organizaciones trabajadoras, y la manifestación que se realizó el 7 de mayo, al restablecerse las garantías constitucionales, fue violentamente disuelta por la policía. En octubre se declararon otra vez en huelga los obreros del puerto, lo que motivó un nuevo estado de sitio, con las consiguientes prisiones y persecuciones y la aplicación en masa de la ley 4144 a los dirigentes.

Si una de las causas del fracaso de la revolución radical de 1905 fue la incógnita que significaba todavía la acción de Quintana, —ésta habría de despejarse al poco tiempo, justificando la revolución a posteriori y aumentando, con ello, el prestigio del

radicalismo y de su jefe, a quien el alzamiento frustrado había hecho conocer en todos los ámbitos del país. Mientras la figura del presidente se achicaba a ojos vista, al exhibirse en estrecha solidaridad con los peores elementos del "roquismo" que había prometido liquidar, se agrandaba la de su adversario, que volvía a tejer nuevamente en la sombra su cautelosa trampa. Desde ese momento Hipólito Yrigoyen deja de ser el caudillo para irse convirtiendo en el Apóstol de un nuevo verbo que él sólo sabe conjugar cumplidamente y que despliega el nombre místico de Reparación. Este nombre condensa todas las viejas reivindicaciones de la ciudadanía, que el pueblo siente, pero que no formula y que hallarán su expresión cuando sea un hecho la libertad electoral.

Lejos de rechazar la influencia de Roca, Quintana lo hace su consultor habitual y funda su poder en el mantenimiento de las situaciones provinciales heredadas de su antecesor y en la de la provincia de Buenos Aires, donde el antiguo antirroquista Marcelino Ugarte ha establecido un sistema de riguroso personalismo fundado en el fraude. Ugarte controla con sus diputados la mayoría parlamentaria y ello le da una decisiva influencia en el orden nacional. Para contrarrestar la acción de los núcleos disidentes del régimen, surge un partido oficialista, la Unión Electoral, cuyo propio nombre lo define, ya que se trata de ganar las elecciones a cualquier precio. El puritano, el impecable Quintana salva sus escrúpulos de conciencia cívica no interviniendo en la formación ni en la dirección del partido oficial, pues ello iría contra sus principios. Es su hijo quien lo forma y lo dirige: el hijo del presidente, ciudadano libre a quien el padre no le puede impedir que haga política, pues ello iría también contra sus principios.

Con todo esto, la oposición al gobierno arreció, aun entre sus aliados de la víspera. Ello se tradujo en prestigio del radicalismo y de su jefe y se concretó en un clamor creciente por la amnistía de los revolucionarios de febrero. Nada más significativo a este respecto que la opinión de Pellegrini, quien de vuelta de un viaje a Europa se había convertido en un ardiente campeón de la libertad electoral, por un imprevisto retorno de este gran culpable a los ideales de su juventud. "Es el voto —afirmaba— lo único que levanta y dignifica al ciudadano y que hace grande o respetable al pueblo... Un pueblo que vota tiene en sus manos los medios de conjurar todos los peligros y resolver todos los problemas". Para hacer frente al oficialismo en las elecciones de marzo se formó una coalición de todas las camarillas opositoras, autonomistas, republicanos, bernardistas y disidentes antirroquistas del Partido Nacional. Invitado el radicalismo declinó participar en ella, proclamando nuevamente la abstención.

A fines del año se enfermó Quintana y Figueroa Alcorta asu-

mió el mando. Al asumirlo, hizo declaraciones de libertad electoral y prometió acabar con los abusos. La Unión Electoral oficialista puso en juego, no obstante, todas las maniobras posibles para falsificar el resultado del sufragio, con el asesoramiento técnico de Ugarte, que dirigió las elecciones en la Capital, para suplir la inexperiencia del hijo del presidente. Con todo, no pudo impedir el triunfo de la coalición opositora, cuya lista de diputados se hallaba encabezada por Pellegrini y Roque Sáenz Peña.

La noche misma de las elecciones se agravó Quintana y murió al amanecer. Figueroa Alcorta quedaba al frente del país en medio del regocijo público, pues su presidencia anunciaba la muerte política de Roca.

El doctor José Figueroa Alcorta, cuya disidencia con Quintana era notoria, dio desde el principio la impresión de un cambio político, al constituir su gabinete con miembros de la coalición que acababa de triunfar contra el oficialismo. Uno de los primeros actos fue conceder el indulto a los revolucionarios de febrero, que su antecesor había sistemáticamente denegado.

En las primeras sesiones parlamentarias de ese año se debatió la ley de amnistía, y Pellegrini, jefe del grupo parlamentario que sostenía la política presidencial, pronunció uno de sus discursos más famosos y que constituye su testamento político. "¿Cuál es la autoridad que podríamos invocar —se preguntó— para dictar estas leyes del perdón? ¿Quién perdona a quién? ¿Es el victimario a la víctima o la víctima al victimario? ¿Es el que usurpa los derechos del pueblo o es el pueblo que se levanta en su defensa? ¿Quién nos perdonará a nosotros?". "Mañana —agregó— vendrá también aquí el señor Presidente de la República y desde esta alta tribuna proclamará ante la faz del país su programa de paz y de reacción institucional, el mismo que nosotros defendemos. Y si alguien se levanta en ese momento y pregunta: ¿Y de qué manera se ha de realizar ese programa? ¿Es acaso cobijando todas las oligarquías y aprobando todos los fraudes y todas las violencias, es acaso arrebatando al pueblo sus derechos y cerrando las puertas a toda reclamación?".

Este discurso sería el último del tribuno, pues moriría dos meses más tarde. En un discurso anterior había defendido el voto venal, sosteniendo que la venta del voto era un acto libre, que significaba un progreso con respecto a la violencia. Con él desaparecía la figura de mayor volumen del régimen después de la muerte de Mitre (en enero de ese año) y de Quintana, y el can-

didato seguro a la sucesión presidencial, puesto que don Bernardo (que también moriría en noviembre) estaba descartado por su avanzada edad y la extinción de su partido. Su actitud de los últimos años atenúa las culpas de Pellegrini ante la historia, compensando en parte sus tres lustros de utilitarismo y frivolidad. No cabe duda del influjo perdurable de sus palabras en el ánimo del íntimo amigo a quien le tocaría la fortuna de ser su ejecutor testamentario.

La vuelta en el mes de julio de los radicales confinados, desterrados y presos fue recibida con grandes manifestaciones públicas e Yrigoyen comenzó de inmediato la reorganización del partido en todo el país.

El presidente debió enfrentar durante el año 1907 grandes dificultades políticas, suscitadas por el Senado con predominio roquista y por la Cámara de Diputados, cuya fracción "ugartista" controlaba la mayoría y la negociaba a cambio de concesiones. Llegó incluso a fraguarse un plan de derrocamiento de aquél por juicio político, para hacer recaer el mando en el presidente del Senado. Figueroa Alcorta provocó dos entrevistas con Yrigoyen, a fin de llegar a un entendimiento, pero el caudillo radical se mantuvo firme en su línea de no realizar ningún pacto sino sobre la base de la más completa libertad electoral. En los primeros días de 1908 y con el pretexto del retardo en la votación del presupuesto, Figueroa Alcorta cerró el Congreso. Mediante el uso de los resortes del poder, intervenciones a algunas provincias y sometimiento de otras, logró constituir una nueva fuerza oficialista bajo el rótulo de Unión Nacional, con la cual ganó las elecciones de renovación parlamentaria de marzo de 1908 y con ello el control de la mayoría.

* * *

Esos años se caracterizaron por conflictos de orden internacional que lograron distraer un tanto a la opinión de las disidencias domésticas.

Vimos cuál había sido la actitud del general Roca con respecto a la política externa del país. Con ella había logrado la pérdida de nuestra jerarquía en América y nuestra indefensión con respecto a los vecinos. Luego de propender a la paz, esa política nos exponía a la agresión ajena y a la guerra en inferioridad de condiciones, que es la consecuencia obligada de todo "pacifismo".

En 1907 tuvimos el primer llamado de atención proveniente del Uruguay, que pretextando una reglamentación de pesca, se adjudicaba jurisdicción sobre la mitad del Río de la Plata. El

asunto no pasó a mayores y hubo de resolverse con el envío de Sáenz Peña en misión especial: se firmó un protocolo estableciendo el "talweg" como línea divisoria. Pero todas las circunstancias de la cuestión mostraban la intervención directa en ella de la cancillería brasileña, cuyo titular Rfo Branco agitaba a la opinión pública contra nuestro país, detrás del viejo anhelo de dominar el Plata por la posesión de Martín García.

Poco tiempo después estallaría otro nuevo conflicto con Bolivia, por la resistencia de esta nación a aceptar el fallo argentino en el arbitraje de su cuestión de límites con el Perú. Hubo manifestaciones antiargentinas en La Paz y se llegó a la ruptura de relaciones. En este asunto Chile —procediendo de acuerdo con Brasil y en manifiesta violación de los pactos de Mayo— apoyaba a Bolivia. Diplomáticamente nos hallábamos cercados.

Era ministro de Relaciones Exteriores el doctor Estanislao S. Zeballos, buen conocedor de la historia diplomática y de tradición política federal. Para consolidar la situación internacional de la Argentina preconizó la necesidad de armarnos, y al fin de hacer mostrar a Brasil sus cartas, le propuso un pacto de paridad naval, mediante la cesión a nuestra escuadra de algunos barcos que tenía contratados para reforzar la suya. Esto bastó para que la prensa roquista, encabezada por "La Nación", efectuara contra el ministro una violenta campaña, acusándolo de armamentista y perturbador de la paz continental, al mismo tiempo que el Parlamento retardaba el despacho de los proyectos de adquisiciones navales y militares. Zeballos debió renunciar y la renuncia le fue aceptada: ¡triunfo indudable del Brasil por mano de sus permanentes agentes locales! Pero inmediatamente realizó una gira por toda la República, denunciando el peligro, lo que ilustró al pueblo y provocó un vuelco en la opinión. Fue este clamor popular el que decidió a los poderes públicos a realizar las compras necesarias para reforzar nuestra marina, empezando por los acorazados "Moreno" y "Rivadavia", adquiridos entonces.

Zeballos denunciaba la causa de nuestra indefensión en los siguientes términos: "El general Roca admira la sabiduría y la lealtad del barón de Río Branco y se ha puesto al servicio de su política, cuya fórmula notoria es ésta: armar al Brasil extraordinariamente y mantener desarmada a la República Argentina, para descubrir sus planes cuando tenga asegurada la supremacía. El fracaso de nuestros proyectos de perfeccionamiento naval y militar en 1906 y 1907 y su demora en 1908 son efectos de la influencia del general Roca. Su confianza en la amistad del Brasil resulta así ilimitada; y el porvenir no lejano revelará que fue imprudente, como lo fue el general Mitre antes del desencanto que le causara Cotejipe".

La agitación obrera proseguía y alcanzó caracteres violentos a comienzos de 1909. Fue el año de los atentados anarquistas, incluso la colocación de una bomba (que no estalló) en la puerta de la casa presidencial. El 1° de mayo de ese año una manifestación obrera fue barrida a tiros por la policía con propósitos intimidatorios, cayendo numerosas víctimas. En el entierro de los muertos se produjeron nuevos disturbios, a raíz de lo cual se declaró una huelga general que paralizó casi todas las actividades. La represión policial fue implacable. Se estableció el estado de sitio, menudeando las detenciones, las clausuras de locales obreros y las deportaciones. La represalia no se hizo esperar: un joven anarquista arrojó una bomba al paso del coche en que iba el jefe de policía, coronel Falcón, matándolo junto con su secretario.

Mientras tanto, no se descuidaban los trabajos políticos para la renovación presidencial. El radicalismo reorganizado realizó su convención nacional en 1909 y resolvió en ella mantener la posición abstencionista, no obstante las protestas de algunos candidatos apresurados, como el joven doctor Leopoldo Melo, que protestó por una política que consideraba *suicida*. Yrigoyen siguió rechazando las propuestas de "acuerdos" que le llegaban, entre las que no faltó ni siquiera la del general Roca, ofreciéndole su alianza para derrocar a Figueroa Alcorta y la candidatura presidencial. Por esta época se produjo la renuncia del presidente del Comité Nacional doctor Pedro C. Molina, fundada en que el diario "La República", órgano radical, ¡atacaba el librecambio! y en que el partido carecía de programa. Ello le dio motivo a Yrigoyen para escribirle tres cartas, en que se halla lo esencial de su pensamiento sobre el Régimen y sobre la Causa Nacional de la Reparación, incompatible con aquél.

Al aproximarse la fecha de las elecciones, la Unión Nacional oficialista proclamó la candidatura del doctor Roque Sáenz Peña, mientras que los elementos dispersos del mitrismo y del partido republicano, junto con un heterogéneo aporte de "independientes", formaba la "Unión Cívica" que proclamó la candidatura del doctor Guillermo Udaondo. Como esta agrupación resultara derrotada en una elección previa de senadores, no se presentó a los comicios de abril de 1910, en los que Sáenz Peña, a la sazón ministro argentino en Roma, fue elegido sin oposición. Todo el país estaba pendiente de las próximas fiestas del Primer Centenario.

IX. LAS ILUSIONES DEL CENTENARIO

El optimismo progresista de que hicimos antes mención alcanzó su punto más alto en los festejos del Primer Centenario de la emancipación, en mayo de 1910, siendo presidente Figueroa Alcorta y electo ya su sucesor, Sáenz Peña, cuyo nombre suscitaba una esperanza. El país se sentía fuerte, rico y seguro del porvenir. Contaba con poco más de siete millones de habitantes, la tercera parte extranjeros, de las inmigraciones de las últimas décadas, preferentemente italianos (casi un millón) y españoles (ochocientos mil). El desarrollo económico correspondía al aumento de población y tenía sus manifestaciones visibles en la construcción de obras públicas, que se acentuó notablemente bajo esa presidencia a partir del palacio del Congreso, inaugurado en 1906.

Contribuía a elevar la tónica nacional el descubrimiento de nuevas riquezas, como el yacimiento petrolífero de Comodoro Rivadavia, y la llegada de los barcos de nuestra marina de guerra, cuya exhibición en la rada constituyó, para la población porteña, una emocionante novelaría.

A esta exaltación provocada por la fausta fecha no podían ser ajenos los poetas y los escritores. Una nueva generación intelectual había surgido en los últimos años, llena de talento e ímpetu creador, y por primera vez se cantaba a la patria y se hablaba de ella como de una cosa viva. A la cabeza de esta generación se hallaba Leopoldo Lugones, que dedicó cuatro libros en homenaje al Centenario. En las *Odas Seculares* fijaría, de manera perdurable, los mitos y las imágenes que suscitaban en el espíritu nacional, el "milagro" de nuestro advenimiento.

Los versos de Lugones y de Rubén Darío (*Canto a la Argentina*), que conmovieron a la generación entonces actuante, tenían como signo común la confianza en nuestra predestinación a la grandeza, y no hay duda de que esa fe careció a la sazón de herejes y cismáticos y animó sin excepción a todos los argentinos.

Pero el entusiasmo es como los alcoholes, estimulante en dosis razonables y depresivo en dosis exageradas. La exaltación del Centenario traería, a la larga, una extraña anestesia del espíritu nacional y la eliminación de las reacciones defensivas necesarias para sobrevivir. A favor del optimismo progresista que sus-

citó, se impondría, de manera definitiva, la falsificación histórica de la generación organizadora, cuyo "panteón" se declararía sacro e intocable: se perdería el sentido de la realidad de nuestra formación y de nuestros más urgentes problemas. La convicción dogmática de ser ya una gran nación (por obra —claro está— de Urquiza, Sarmiento y Mitre) nos privaba de las nociones y los instrumentos indispensables para llegar alguna vez a serlo de veras.

Si algo nos sorprende hoy, al recorrer la literatura del Centenario, es ese extraño reemplazo de la historia real por una mitología optimista, y el inherente olvido de los problemas concretos del país, tan vivos todavía, pocos años antes, en la corriente política de tradición federal, que había dado origen a la obra de Hernández, Quesada y Guido y que animó la acción tribunicia y parlamentaria de autonomistas y radicales, como del Valle y Alem. ¿Acaso habían dejado de existir esos problemas? Lejos de ello, se habían agravado. Nadie los mencionaba, sin embargo, bien por acostumbramiento a males que se consideraban inevitables, bien por esperar su curación del mero transcurso del tiempo. No escapaba a esta regla la misma Unión Cívica Radical, heredera directa del partido de la independencia, que limitaba a la sazón sus reivindicaciones a la conquista del sufragio libre.

La persistencia de la propaganda liberal había hecho presa poco a poco en los adversarios, a favor de la predisposición del espíritu humano a aceptar como verdadera la versión de los triunfadores. No es difícil señalar las diversas fases de la infiltración, en la coalición de distintas fracciones del autonomismo con Sarmiento en el 80 y con Mitre en el 90, en cuyo transcurso se va atenuando la resistencia al influjo extranjero, hasta que, poco a poco, se olvida. En 1890 todavía parecía escandalosa a muchos la entrega de los ferrocarriles a los ingleses; en 1910 ya resulta normal, y no escandaliza a nadie que se concedan también a empresas extranjeras los tranvías, la electricidad y los teléfonos, aun sacrificando a cooperativas criollas competidoras.

También se olvida la historia. Sólo queda en pie la versión unitaria. Rosas es un hombre fatídico, que hay que borrar de sus anales, porque en el mejor de los casos pertenece a la psicopatología. Mientras los médicos se dedican a investigar las taras físicas y morales del Restaurador, el *Martín Fierro* cae en manos de los folkloristas, como expresión de pintoresco gauchismo. Con todo ello, se va levantando sobre la Argentina real una Argentina convencional y aséptica, que pronuncia frases como "América para la Humanidad", que tiene "dos maestros por cada soldado" y que se ofrece, como un paraíso progresista y laico, a todos los hombres del mundo que quieran habitarla.

La generación intelectual del Centenario, sucesora de la del 80, acepta esa herencia sin beneficio de inventario, porque también es europeísta y civilizadora y trae propósitos de renovación social de signo ecuménico, que empalman con la ideología liberal de los precursores. Como 1901 vio la apoteosis de Mitre —"el hombre funesto", según Carlos D'Amico—, 1911 verá la de Sarmiento, al que Lugones le dedica una exaltada apología. Los años siguientes serán los de la reedición, en ediciones populares, de los "clásicos argentinos". "La Cultura Argentina", fundada por José Ingenieros y la "Biblioteca Argentina", fundada por Ricardo Rojas, difundirán exclusivamente las obras de los escritores de la tradición liberal, que aparecen así, ante los estudiantes y el pueblo, como único pensamiento de la República.

Porque la oligarquía dominante es implacable con los disidentes. Carlos Guido y Spano alcanza un relativo indulto por callarse a tiempo y permitir que se lo considere como un lírico intrascendente, al que no hay que tomar en serio. Sus escritos políticos desaparecen de las librerías y no vuelven a editarse. Saldías muere olvidado. Ernesto Quesada concita todos los odios y las calumnias y se le hace fama de pesado e ilegible: morirá en el extranjero. Zeballos, que ha denunciado la política de entrega del mitrismo y del roquismo y que ha exaltado la nacional de Rosas, verá sus últimos años amargados también por la calumnia, y caerá de su decanato universitario por una sublevación estudiantil de sospechoso origen.

* * *

En los treinta años transcurridos desde el 80 se había producido también otro fenómeno que contribuía en gran parte a la transformación del país. Ya actuaban en profusión y empezaban a intervenir en la vida pública las generaciones de hijos de los inmigrantes llegados en masa, en sucesivas oleadas, desde poco antes del 60. Con la extensión de los cultivos agrícolas y la adopción general del alambreado, habíanse modificado las modalidades del trabajo rural. El antiguo peón criollo, que trabajaba a campo abierto y lazo, iba siendo paulatinamente reemplazado por el inmigrante, más adaptado a las nuevas modalidades económicas. La mano de obra para las cosechas era casi exclusivamente extranjera. Se había generalizado para esa fecha la llamada "inmigración golondrina", que venía temporalmente con dicho objeto y retornaba luego a los países de origen. Sólo una parte, si bien apreciable, se incorporaba a la vida argentina, con ánimo de permanecer y fundar hogar.

En 1910 no sólo la mayoría de las chacras, sino la casi totalidad del pequeño comercio, estaban en manos de extranjeros, principalmente italianos y españoles; el gran comercio, así como la totalidad de las incipientes industrias, en manos de ingleses, franceses y alemanes.

Todo ello contribuía a formar una población excesivamente heterogénea, cuya amalgama ulterior constituía un problema de solución difícil. Si, de acuerdo con los principios del alberdismo, era de práctica la apología del "crisol de razas" que el país aspiraba a ser, no se sabía aún a ciencia cierta qué metal saldría en definitiva de ese crisol. La inquietud al respecto daría nacimiento pronto a un nuevo sentimiento defensivo de xenofobia larvada en los dueños de la situación, herederos de quienes habían hecho la doctrina de la entrega al extranjero: empezarían a sentir contra el inmigrante el mismo temor que los había llevado a proclamar el exterminio del criollo. Muchos de ellos, en esta fase de la evolución, justificaron la prolongación del sistema del fraude comicial y los gobiernos electores, fundándose en la preocupación (naturalmente "patriótica") que les causaba la perspectiva de que el gobierno cayera en manos de los inmigrantes y sus hijos.

Los hijos de la inmigración, educados en la escuela pública argentina, recibían la misma enseñanza que los hijos de los criollos y aceptaban, sin beneficio de inventario, la imagen convencional de la Argentina imbele y acogedora que impartía el régimen imperante para consumo general.

Pero tanto ellos como sus padres sentían, en el choque con la realidad, que ésta no era tan cordial como lo proclamara el optimismo dominante. Algunos triunfaban, sin duda; pero la mayor parte debía ir a engrosar la cohorte cada vez mayor de los vencidos, la masa del proletariado urbano y rural, con bajos salarios y frecuente desocupación. Tras de la fachada esplendorosa de la joven Argentina, en la que había teóricamente porvenir para todos, se ocultaba tanta opresión y miseria como en cualquier país del Viejo Mundo.

El campo les estaba vedado a los que llegaban, por el acaparamiento de la tierra en grandes latifundios ganaderos, donde sólo se los admitía en calidad de peones a precio de hambre. La colonización agrícola había sido, en general, un fracaso. Los colonos se arruinaban con frecuencia por el bajo precio de sus productos y debían vender la tierra, si la tenían. En 1910 sólo una tercera parte de los chacareños, repartidos por el país, eran propietarios; el resto, arrendatarios, a precios altísimos, que les insumían la mayor parte de las ganancias. Una red de fletes, intermediarios, intereses y amortizaciones aprisionaba al trabaja-

dor del campo, condenándolo a una vida precaria que no le permitía levantar cabeza. Los hijos que no cabían ya en la chacra debían salir a peonar.

No era mejor la situación del trabajador urbano, a la que estaba condenada la gran masa de la inmigración, por falta de demanda campesina.

El país de la abundancia, de que se hacían lenguas los dueños de la situación, donde sólo bastaba extender la mano para hallar sustento, conoció la vergüenza del trabajo de las mujeres y los niños menores, con salarios inferiores a un peso, cuando el pan costaba 0,30 el kilo: una ley presentada por Palacios en el Congreso le puso fin. Conoció el hacinamiento de los conventillos, instituciones típicamente porteñas y generalizadas, que era la vivienda corriente de la población obrera, con una pieza a lo sumo para cada familia, cuando no para dos. Conoció la plaga de la mendicidad por hambre, y los sin trabajo y sin hogar durmiendo en los umbrales y alimentándose de los residuos de los tachos de basura.

Dadas estas situaciones extremas —compensación del triunfo de unos pocos— y el bajo nivel general de los salarios, unido a la dureza de las condiciones en que el trabajo se desarrollaba, no es de extrañar la virulencia que adquieren las luchas sociales en la época del Centenario, cuyos festejos debieron celebrarse bajo la vigencia del estado de sitio.

* * *

Si tales eran las condiciones del trabajo en la capital de la República, ¿cuáles no serían las del interior!

En los ingenios de azúcar, en los obrajes y en los yerbales del norte se había establecido un régimen de verdadera esclavitud, en el que a los bajos salarios se agregaba, para mermarlos más todavía, la explotación del trabajador mediante el crédito en las "proveedurías", establecidas por los mismos empresarios y donde debía obligadamente comprar, a precios exorbitantes, los artículos de primera necesidad. Para asegurarse la clientela, no se le abonaban los salarios en moneda corriente, sino en bonos especiales, que sólo tenían curso en los referidos comercios. La llave del sistema consistía en mantener al obrero hambriento perpetuamente endeudado con la empresa, de modo que no pudiera abandonar su puesto sin hacerse culpable de estafa. Las policías locales, que recibían de los empresarios una asignación más suculenta que el sueldo oficial, tenían buen cuidado de que todo marchase

sin inconvenientes, y de que los caritativos patronos no fuesen burlados en su generosidad y buena fe.

* * *

Pero todo ello se ignoraba en la capital de la República, cuyo núcleo privilegiado mantenía viva su fe en la prosperidad milagrosa del país, donde "no podía" haber problemas sociales por la abundancia de recursos: creencia que algunos conferenciantes extranjeros, como el profesor Ferri, no tuvieron empacho en confirmar.

Ese núcleo privilegiado, esa oligarquía estaba constituida, según sabemos, por los intereses afines de los grandes ganaderos, agrupados en la Sociedad Rural, y del capital inglés: comercio de exportación e importación, ferrocarriles y frigoríficos, con sus conexiones políticas, profesionales y administrativas y su influencia todopoderosa sobre los órganos de la opinión pública. Tal era la Argentina actuante y visible, optimista y feliz.

Los ferrocarriles habían logrado desde 1907 su estatuto con la ley que lleva el nombre de su autor, el ingeniero Emilio Mitre, hijo del general —por cierto— y heredero de sus principios. Ella había dado fin a la incertidumbre de las concesiones, y había ratificado por 40 años la exención de impuestos, salvo un 3 por ciento que se aplicaría sobre utilidades cuya determinación quedaba de hecho librada a la buena fe de las empresas. El tono del debate mostró cuán lejos se estaba de la época (1891) en que el diputado Osvaldo S. Magnasco había dicho: "El ferrocarril inglés en la Argentina no es un negocio. . . es una extralimitación insolente", aludiendo después a "los grandes robos" de las empresas. Magnasco había recibido ya su castigo, al tener que renunciar a un ministerio efímero (1901) a raíz de una campaña en que *toda la prensa* lo acusó de imaginarios escándalos. Era natural que, a la sazón, nadie se atreviera a imitarlo.

Sobre la incidencia de los ferrocarriles en la economía del país, bástenos recordar que sus entradas llegaron a igualar y a veces sobrepasar las rentas del Estado nacional y que lo que extrañaron como dividiendo anual compensó con frecuencia el monto de las cosechas. Su política de fletes, calculada a medida del interés inglés, tendía a sofocar toda tentativa industrial que pudiera chocar con el de los importadores británicos.

Con los dividendos de las inversiones extranjeras, los intereses y amortizaciones de una deuda externa en permanente crecimiento y las compras en el extranjero para suplir nuestra deficiencia industrial, el país sufría un drenaje permanente de su

riqueza, que impedía todo conato de capitalización. Lo cual se pagaba a costa del "hambre y la sed" del pueblo argentino, cuyo nivel de alimentación, no sólo en el interior, sino en la misma capital, estaba debajo de las necesidades elementales. El país de la carne y el trigo llegó a tener los índices más altos de excepciones al servicio militar por desnutrición y anemia. Lo que no había logrado la "pacificación" mitrista (a saber, el exterminio *manu militari* de la población nativa) se estaba consiguiendo de modo más sutil y lento. ¡La República liberal era, realmente, la concreción de los sueños de sus fundadores!

* * *

El programa de Caseros se cumplía, en efecto. Todo lo nacional estaba a punto de desaparecer. Hasta la misma imagen de la Argentina real, suplantada por una grotesca mentira.

Y todo ello ocurría con el beneplácito, mejor dicho, con el auspicio entusiasta de la "inteligencia" argentina, que lo aceptaba en nombre del Progreso y que, aun cuando se aventuraba a afirmar que no vivíamos en el mejor de los mundos posibles, buscaba remedio en la aplicación de las recetas de última moda en Europa, eludiendo el estudio de las verdaderas causas de los males sociales y políticos. Pululaban los "constitucionalistas" y los "sociólogos". Pero el punto de coincidencia de todos ellos era la aceptación del ideario de la generación organizadora, cuyos dogmas fundamentales consistían en la afirmación de la incapacidad nativa para la industria y en la aceptación consiguiente de la necesidad de fomentar el capital y el comercio extranjeros, puntales de la "grandeza" argentina. Por lo demás, la "inteligencia" dependía de los diarios y la administración pública, los que dependían cada vez más de la buena voluntad de los gerentes.

Por lo que hace a los políticos de la situación, ya hacía tiempo que sabían dónde estaba el verdadero poder, al que —paradójicamente— había que obedecer para poder mandar.

* * *

El Centenario se celebró con grandes fiestas y con real emoción patriótica por el pueblo de la República. Concurrieron delegaciones de todas las naciones del mundo (con excepción del Brasil, donde subsistían los resquemores) y se coronó con un grandioso desfile militar en la Avenida de Mayo. Nuestra visitante más encumbrada fue la infanta Isabel, tía de Alfonso XIII.

No alcanzó a deslucir la magnitud de los actos la agitación

obrero, sofocada por el estado de sitio oportunamente declarado y por el cierre de los locales de los sindicatos. Ni siquiera los desmanes de la "juventud dorada" de Buenos Aires, cuya exaltación patriótica derivó en persecución a mano armada de los "gringos anarquistas", entre los que había no pocos criollos hambrientos. Los vástagos de la oligarquía porteña, que se educaban en la Facultad de Derecho para servir al capital inglés, desplegaron en la ocasión una xenofobia inesperada que, por cierto, no halló en su camino a ningún cliente posible y sólo se cebó en pobres inmigrantes indefensos, italianos y "gallegos". Con lo cual la oligarquía del puerto demostraba una vez más los resabios de la pulpería originaria, visible en la falta de ese señorío heredado de las aristocracias verdaderas, cuya principal virtud es el amor a los humildes.

LIBRO VII

LA CRISIS DEL RÉGIMEN

I. ROQUE SÁENZ PEÑA Y LA LEY ELECTORAL

No se habían apagado los ecos de las celebraciones del Centenario cuando regresó a Buenos Aires, en agosto, el presidente electo. Se temía un nuevo levantamiento radical y Figueroa Alcorta había tomado precauciones para evitarlo. Más que éstas, sin embargo, contribuyó a disipar los rumores y a aquietar los espíritus la gestión conciliatoria que realizó Sáenz Peña ante el jefe radical para llegar a soluciones comunes y que revelaba que no eran vanas palabras sus promesas de candidato.

Sáenz Peña celebró, a raíz de esa gestión, dos entrevistas con Hipólito Yrigoyen, en las cuales se definieron los principios y se trazó el plan de la reforma de los procedimientos electorales, en el sentido auspiciado por el movimiento popular.

La personalidad de Sáenz Peña justificaba la confianza que inspiró desde el comienzo. Hijo de don Luis y de estirpe federal, por consiguiente, había sido compañero de Yrigoyen en las filas del autonomismo, combatiendo en el 74 contra el alzamiento miltirista. Poco después, siendo teniente coronel de guardias nacionales, se opuso al primer "acuerdo" y pidió la baja. En un raptó romántico, se enroló más tarde en las filas del ejército peruano para resistir la agresión chilena, combatiendo heroicamente en el Morro de Arica, donde cayó herido y prisionero. Luego había acompañado a Pellegrini en la redacción de "Sud-América", había desempeñado tareas diplomáticas en conferencias panamericanas y un efímero ministerio con Juárez. Su actuación posterior lo mostró en oposición a Roca y Pellegrini, como jefe de la fracción llamada "modernista", que manifestaba propósitos de renovación de prácticas gubernativas en el sentido del autonomismo tradicional; y esta actuación lo había prestigiado hasta el punto de hacerlo candidato serio para la presidencia en el 92, lo que el "acuerdo" sólo pudo conjurar levantando la candidatura de su padre. Estos antecedentes, así como su nueva vinculación estrecha con Pellegrini cuando éste se convirtió en campeón de la libertad electoral, lo acercaban espiritualmente al radicalismo. Lo acercaban igualmente la dignidad moral de su conducta, no comprometida en los intereses espurios del régimen; su rechazo de la corrupción y el escepticismo roquista; su tradicionalismo españolista, que en 1898 lo llevó a fundar un comité Pro-España,

cuando la guerra de ésta con Estados Unidos, y cierto idealismo fundamental en suma, que reconocido por sus contemporáneos, hizo que alguien calificara de "quimera de un romántico" sus propósitos reformadores. El diálogo pudo establecerse sobre una base de entendimiento consistente en el uso de un idioma común a los dos ilustres interlocutores, que aseguraba la coincidencia patriótica en los fines.

No se limitó el presidente electo a garantizar el cumplimiento de sus promesas, sino que pidió al radicalismo su colaboración en el gobierno para ponerlas en práctica. El 5 de octubre, Yrigoyen llevó al seno del Comité Nacional del partido la palabra de Sáenz Peña. El Comité Nacional resolvió rechazar la participación en el gobierno (que, por lo demás, la "carta orgánica" vedaba), pero aceptó colaborar en la elaboración de la ley de elecciones, que abriría al pueblo la vía del comicio, sobre la base de los principios ya aceptados en las entrevistas de Yrigoyen con el presidente: padrón militar, intervención de la justicia federal, representación de las minorías, voto secreto y obligatorio.

* * *

El 12 de octubre asumió el mando Sáenz Peña. En el discurso que pronunció en la ocasión, declaró que se consideraba "asentado" por la mayoría de sus conciudadanos (que, por cierto, no lo habían votado), con lo que aludía a los pactos pendientes con la oposición radical; y después de hacer el elogio de su predecesor, reiteró su propósito reformista.

Apenas integrado el gobierno, se iniciaron los trabajos preparatorios de la legislación anunciada, por obra del ministerio del Interior a cargo del doctor Indalecio Gómez, político salteño de origen autonomista y católico, y con la prometida colaboración opositora. A mediados de 1911 se dictaron las primeras leyes: la de padrón militar y la de enrolamiento general, votadas respectivamente el 4 y 10 de julio.

A continuación se envió al Congreso la ley electoral, con las características de la lista incompleta, que daba participación en el gobierno a las oposiciones, y el voto secreto y obligatorio, que aseguraba la libertad del votante y su concurrencia a los comicios. El trámite de esta ley fue más largo y engorroso, por la resistencia de los núcleos políticos que veían en ella el fin de su poder usurpado. La presión de la opinión pública pudo, no obstante, más que las maniobras obstruccionistas y la ley fue aprobada el 12 de febrero de 1912.

Entre tanto, la lucha política se precipitaba. El 11 de abril

de 1911, se había intervenido la provincia de Santa Fe a raíz de un conflicto entre la Legislatura y el gobernador Crespo. El interventor, doctor don Anacleto Gil, anunció el propósito de convocar a elecciones: las primeras que habrían de realizarse bajo la nueva presidencia y la ocasión esperada del cumplimiento de las promesas presidenciales. La Unión Cívica se movilizó de inmediato. La Convención Nacional se reunió en Buenos Aires del 28 al 31 de mayo, celebrando prolongadas sesiones secretas en las que se resolvió, en definitiva, autorizar a los radicales de Santa Fe para concurrir a la convocatoria.

El radicalismo de Santa Fe respondía a una vieja tradición criolla y federal y se había caracterizado por su carácter combativo en 1893 y 1905. La autorización fue recibida con enorme entusiasmo, y no obstante los obstáculos puestos por el oficialismo local y la circunstancia de celebrarse las elecciones bajo el imperio de la ley provincial (con el solo recaudo del padrón militar), triunfó la fórmula del radicalismo Menchaca-Caballero, por gran mayoría. Sus contendientes se dividían en dos fracciones: la "coalición" oficialista y la llamada "Liga del Sur", partido fundado sobre los intereses comerciales e industriales de la ciudad de Rosario, cuyo jefe era un disidente de los primeros tiempos del radicalismo, el doctor Lisandro de la Torre.

* * *

El triunfo de Santa Fe provocó un gran entusiasmo en las filas radicales y la convicción (que en adelante sería una de las notas características del partido) de constituir la indudable mayoría del país. La cohesión interna se resistió un tanto con ello, al acentuarse en su seno la tendencia electoralista apresurada, con mengua del rígido principismo del jefe.

En abril se autorizó la concurrencia a las elecciones de diputados nacionales en la Capital y Santa Fe. En ambos comicios triunfó igualmente el radicalismo: por 36.000 votos contra 33.000 en el primer distrito y por 35.000 contra 17.000 en el segundo. En la capital entraron igualmente dos diputados socialistas.

Ante estos resultados auspiciosos, el Comité nacional del radicalismo efectuó una amplia reorganización en todo el país, abriendo sus filas a los nuevos ciudadanos. En el manifiesto en que dio cuenta de esta reorganización, aludía a la "jubilosa esperanza" que representaba la posibilidad de alcanzar la paz interior y el perfeccionamiento de las prácticas gubernativas, bajo los auspicios del "derecho electoral".

La realidad no respondería de inmediato a dicha esperanza, porque los usufructuarios vitalicios de los gobiernos locales pondrían en juego inmediatamente toda clase de recursos para violar la ley. En Córdoba, Salta y Tucumán hubo fraudes descarados, con apresamiento de fiscales en los comicios y cambio de los votos en urnas, previamente preparadas para la maniobra. El presidente Sáenz Peña careció de la energía necesaria para intervenir previamente las provincias en que debían realizarse convocatorias electorales, a fin de asegurar la legalidad de los resultados: sentíase trabado, sobre todo, por la consecuencia con quienes habían hecho triunfar su propia candidatura y cuyas mentirosas declaraciones de prescindencia estaba obligado a creer, hasta prueba de lo contrario. A causa de ello sufrió "muchas amarguras y desvelos" según lo declaró a Yrigoyen. Por lo demás, su salud se hallaba seriamente resentida desde mediados de 1913, por lo cual en octubre debió delegar el mando en el vicepresidente doctor de la Plaza.

Además de la promulgación de la ley electoral, que es su título de gloria, la presidencia de Sáenz Peña se caracterizó por su preocupación moralizadora, manifestada en las intervenciones que decretó en la Dirección de Tierras y en la Aduana. En junio de 1914 se realizó el tercer censo nacional, que dio la cifra de 7.885.237 habitantes (cuatro millones más que el anterior de 1895), de los cuales 1.575.000 en la Capital Federal. Se pronunciaba ya la tendencia al aumento en el desequilibrio de la población, a favor de la metropolitana, que iría acentuándose en el futuro.

Las esperanzas de mejoría del presidente que, a mediados de ese año, hicieron creer que reasumiría el mando, se desvanecieron ante una recaída que lo obligó a pedir la prolongación de su licencia. Se agravó a principios de agosto y murió el 9 de ese mes. Sus funerales dieron lugar a una gran manifestación de duelo público. La sesión de homenaje que realizó la Cámara de Diputados fue una verdadera apoteosis. "Los prestigios cívicos del presidente Sáenz Peña son de los que perduran, sobreviviendo victoriosos a la acción del tiempo", dijo el diputado radical Vicente C. Gallo. "El doctor Roque Sáenz Peña ha sido un constructor, un creador —dijo el diputado socialista Juan B. Justo—. Lo colocamos al mismo nivel de los hombres que, en el arte y en la ciencia, en la economía y en la técnica, impulsan el progreso humano".

No le escatimaron tampoco sus elogios los representantes de los viejos núcleos políticos, sobrevivientes de los "acuerdos" y desacuerdos tradicionales, que constituían aún la abrumadora mayoría parlamentaria. En el seno de estos grupos había surgido ya, sin embargo, ante la evidencia del auge de la oposición —que

había obtenido nuevos triunfos electorales en 1913 y 1914—, un torvo espíritu de resistencia contra la ley electoral, que amenazaba sus situaciones adquiridas. Muchos de los que la habían votado, por la presión del presidente y de la opinión pública, se manifestaban arrepentidos frente al surgimiento de los que llamaban "partidos extremos". De esa inquietud se había hecho eco el último mensaje de Sáenz Peña, en el que advirtió a los enemigos de la ley que no podían llamarse tales los partidos que aceptaban la legalidad y concurrían al comicio; agregando que, en todo caso, la ley misma proporcionaba el arma para contrarrestarlos. El primer mensaje de de la Plaza, en cambio, adoptó otro lenguaje, que alarmó justamente a la oposición. Manifestando solidaridad con los inquietos, dijo que "ni remotamente podría suponerse que, por salvar formas de imparcialidad electoral, pudiera serle (a él) indiferente la suerte del país o el desastre de las instituciones". Esta solapada incitación al fraude fue recibida con entusiasmo por los oficialismos locales, que multiplicaron las maniobras para impedir los resultados legítimos del sufragio, sobre todo en Buenos Aires y Córdoba.

El fraude "para salvar las instituciones" es el antecedente de lo que más tarde se llamará "fraude patriótico". Ante esa actitud oficialista, Yrigoyen se sintió nuevamente llevado a la posición revolucionaria, según lo demuestra la comunicación que, en 1915, dirigió al presidente del Comité provincial de Córdoba.

Pero los acontecimientos internacionales prevalecían en ese momento sobre los de la política interna. El país se hallaba conmovido en todas sus capas por el estallido de la guerra europea en julio de 1914. La invasión de Bélgica y Francia, los primeros combates, la polémica iniciada en Italia sobre la participación en la guerra, la neutralidad española, Verdún y la conflagración general luego, con la guerra submarina, que provocaría la entrada de Estados Unidos, tuvieron virtud suficiente para distraer a la opinión de los problemas locales, tanto por la importancia de los acontecimientos en sí mismos, cuanto por la actitud de la prensa, que se embanderó resueltamente por la causa de los aliados, mostrando así a qué intereses obedecía. Debe recordarse que, a favor de este movimiento, hicieron su aparición en Buenos Aires los primeros órganos de la llamada "prensa amarilla", a la yanqui, explotadora del escándalo, con grandes titulares (y subvenciones) y que tanta importancia adquiriría en los años siguientes. Esa prensa remachaba sobre los sentimientos progresistas del país, mostrando la contienda europea como una lucha de los imperios retrógrados contra las democracias progresistas de occidente, nuestras "favorecedoras y amigas", que forzosamente estaban llamadas a triunfar, por lo que debíamos apresurarnos a mostrarles nuestra solidaridad y apoyo.

El presidente de la Plaza se había apresurado a declarar la neutralidad argentina en el conflicto, como respuesta a las notas de las cancillerías que le comunicaban el estado de guerra. Era lo que correspondía, ya que no estaban en la contienda comprometidos nuestro interés ni nuestro honor. Esa actitud que no tuvo entonces contradictores, se vería puesta a prueba pronto por dos episodios que conmovieron a la opinión pública y obligaron a nuestro gobierno a actuar: el fusilamiento del cónsul argentino en Dinant por los alemanes y la captura por los ingleses del barco de bandera argentina "Presidente Mitre".

¿Qué hizo el gobierno del doctor de la Plaza? Sometió el primer caso a dictamen del Procurador de la Nación, quien opinó que no había ultraje a nuestra soberanía por carecer los cónsules de investidura diplomática y tratarse en la ocasión de un extranjero; ni a nuestra bandera (que había sido arrancada y arrastrada por las calles). El presidente aceptó este dictamen y no entabló ninguna reclamación. En el segundo caso —y con dictamen del mismo funcionario— se dirigió humildemente al agresor, atribuyendo la captura a "un error de interpretación del comando de la flota británica", que sería reparado por "el espíritu ecuaníme del gobierno inglés", y pidiendo la devolución del barco. El gobierno inglés lo devolvió con un gesto de condescendencia, a pesar —dijo— de los "incontestables derechos" que lo asistían; pero con la prevención de que el barco no alterara "su carrera habitual en la costa ¡so pena de captura!".

El gobierno argentino se declaró satisfecho. Así entendían los hombres de la oligarquía imperante la defensa de nuestra soberanía y de nuestra dignidad. El doctor de la Plaza, que había vivido tres lustros en Londres, con ocasionales visitas (de negocios) a su país, se sentía más inglés que argentino, posiblemente. La prensa se mantuvo impasible y no agitó la cuestión, sino para cantar loas a la magnanimidad británica. Por lo que hace al primer episodio, sirvió para enrostrar a los alemanes su "ferocidad" y promover el odio contra su causa; pero no se pidió la declaración de guerra, porque hasta ese momento la potencia imperial nos reservaba la función tranquila de proveedores de alimentos para sus combatientes.

* * *

Se acercaba la época de las elecciones de renovación presidencial. La tendencia electoralista en el radicalismo se había acentuado hasta hacerse irresistible, después de los triunfos recientes. A principios de 1916 se reunió la Convención Nacional para elegir candidatos. Fue designado, por aclamación y en medio

de un entusiasmo delirante, Hipólito Yrigoyen. Con gran sorpresa y emoción de los convencionales, el electo renunció a su candidatura, fundando su actitud en la conducta reiterada de rechazo de las funciones públicas que había observado hasta ese momento, por considerarlas incompatibles con el apostolado espiritual de la Reparación nacional: "Mi credo, ante todo —expresaba—, ha sido el de un desagravio al honor de la nación y el de la restauración de su vida moral y política, a cuyo fin me coloqué entonces, como siempre, en el plano superior de las abstracciones, asumiendo los riesgos y las responsabilidades consiguientes". Si se recuerda su negativa a colaborar con los gobiernos anteriores, no obstante los más tentadores ofrecimientos, esa posición de exaltado idealismo aparecía lógica y consecuente.

La insistencia reiterada y apremiante de los convencionales y el temor de que su negativa obcecada pudiera comportar el desánimo y la disgregación del movimiento, lo forzaron al fin a acceder. Es de advertir que, en la ocasión, hubo ya un grupo, pequeño pero calificado, el de los "azules", que pretendió aprovechar la coyuntura de la renuncia del jefe para imponer otras soluciones. En ese grupo estaba ya latente la escisión futura.

La fórmula de Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna obtuvo, en los comicios del 2 de abril de 1916, la cantidad de 372.810 sufragios, contra 250.000 aproximadamente de sus contrarios, divididos en tres fracciones: la conservadora, que votó por Rojas-Serú, la demócrata progresista, que votó por de la Torre-Carbó y la socialista, que votó por Justo-Repetto. El partido Demócrata Progresista era una prolongación de la "Liga del Sud" santafesina, que ya hemos visto actuar y que sólo tenía significación en el orden local de Santa Fe.

No obstante la gran diferencia de sufragios, los candidatos triunfantes sólo habían logrado reunir 152 electores, uno más que los indispensables para la mayoría. Su elección parecía en peligro, debido a la actitud de 19 electores de Santa Fe, provenientes de una escisión interna que se oponía a la candidatura de Yrigoyen. La presión incontenible de la opinión pública, desbordada en las calles y aclamando al triunfador, pudo más que las maniobras que, para frustrar su victoria, intentaron las fuerzas derrotadas. Estas querían mantener indeciso el resultado del colegio electoral, para dejar la decisión a las Cámaras, con mayoría conservadora. Pero los electores disidentes depusieron su actitud y votaron por la fórmula radical.

El 12 de octubre asumió Yrigoyen el mando, en medio de una apoteosis popular como no las había visto Buenos Aires desde los tiempos de don Juan Manuel. La multitud desató los caballos de su carroza en la plaza del Congreso y lo arrastró en triunfo hasta la Casa Rosada.

*granul
Dilecto
Yrigoyen y Hipolito*

II. YRIGOYEN Y EL RESURGIMIENTO NACIONAL FUERZA Y DEBILIDAD DEL RADICALISMO LA GUERRA EUROPEA

La jubilosa expectativa que suscitó el triunfo del radicalismo era explicable. El país se sentía liberado, dignificado y en vísperas de grandes realizaciones. Con la llegada al poder del caudillo que encarnaba la protesta nacional contra los gobiernos de opresión, corrupción y fraude, veíase convertida en realidad la esperanza latente, desde 1891, a raíz de la gira triunfal de Alem por las poblaciones del interior. Ello significaba una verdadera revolución, y así lo entendió todo el mundo, empezando por los derrotados en los comicios.

Yrigoyen llegaba libre de compromisos con los intereses y los hombres del Régimen y dispuesto a llevar adelante sus propósitos de "reparación nacional", con lo que entendía la eliminación de las corruptelas, la restauración de las instituciones políticas por medio del sufragio libre y un amplio programa de renovación de personas y de costumbres. Su tarea era ardua y difícil, porque si bien estaba a la cabeza de un gran partido, que constituía la mayoría de la nación, carecía de mayoría en las Cámaras y once de las catorce provincias se hallaban todavía en manos de las autoridades provenientes del fraude. Esto no era, por lo demás, sino la estructura política de la oligarquía imperante, que subsistía intacta en su organización económica y en la dirección de una parte influyente de la opinión pública, por medio de la prensa comercial; tributaria de esos intereses y rectora a la vez y árbitro de una fracción importante de la "inteligencia" nacional.

Es evidente que con la autoridad que le confería el plebiscito reciente y el aura de fervor popular que lo envolvía, pudo Yrigoyen arrasar con las situaciones provinciales viciadas, cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones nacionales en todos los distritos, a fin de renovar desde la base todos los poderes e instaurar un régimen homogéneo e inobjetable. Tal fue el plan de la revolución de 1893 y no era otra cosa lo que él mismo le había exigido a su antecesor. La ilegitimidad de esos poderes y aquellas situaciones constituía el fundamento de la propaganda radical. El mismo diario "La Prensa"—bajo la inspiración de

Adolfo Dávila—aconsejaba al electo que no jurara ante una asamblea de títulos viciados, sino en la Plaza de Mayo y ante el pueblo. El país quería una renovación a fondo y habría aclamado una política enérgica. La pedía, sobre todo, el grupo de viejos luchadores que, desde cuatro lustros atrás, venía gastándose en permanente conspiración y fogueándose en las barricadas y los cantones.

Con sorpresa y decepción de muchos, Yrigoyen eludió el golpe de Estado salvador que habría sido la garantía de su éxito. En lugar de proceder rápidamente contra los culpables, barriéndolos de las posiciones públicas y aplicándoles las sanciones correspondientes a sus delitos, los "indultó" en masa librando al funcionamiento del sistema legal su sanción ulterior. Ante esta imprevista legalización de sus situaciones espurias, los representantes del régimen derrotado (que en su fuero interno esperaban su eliminación, como manifestación madura de una justicia inmanente) levantaron cabeza y se abroquelaron en sus posiciones para obstaculizar la obra gubernativa. Desde ese momento el gobierno radical debería soportar la oposición más implacable de que haya memoria en los anales parlamentarios argentinos: oposición en que los "indultados" representaban el papel de catones y llenaban de denuestos al presidente de la República, quien eventualmente les respondía desde su Olimpo de la Casa Rosada. Se le había perdido todo respeto al Júpiter que tronaba sin fulminar.

Esta actitud de Yrigoyen en 1916 es uno de los errores más graves que se hayan cometido en la política argentina y en ella está el origen de males futuros.

* * *

Conocemos los antecedentes de Yrigoyen, en su actuación como heredero de Alem, al frente del gran movimiento nacional que alzaba como bandera la reivindicación de los derechos ciudadanos. A esta empresa había dedicado su vida entera, con tesón vascongado que, unido a una clara inteligencia natural y una gran integridad de conducta, le daría pronto la dirección indiscutida y acatada en toda la República. Poseía grandes dotes de persuasión personal, que en ocasiones llegaba a la fascinación: quienes se acercaban a él quedaban imantados y transmitían el fluido a los demás, por lo cual se dio el caso de que llegara a ser un gran caudillo de masas sin haber hablado nunca en actos públicos y por la prédica de intermediarios y apologistas. Apenas si se lo veía, y su nombre estaba con alabanza en todas las bocas. Sus

actividades de revolucionario y conspirador lo rodeaban, además, de un halo de leyenda, que lo convirtió en mito antes de ser historia. Desde el fracaso de la revolución de 1905, que inició su gran prestigio nacional, era más que un caudillo político, el "general" para sus íntimos, y para la multitud, el amigo del pueblo, el "apóstol" de un credo nuevo y salvador.

El secreto de la fascinación de Yrigoyen no residía tanto en sus condiciones morales y físicas, cuanto en el influjo contagioso de la misión que se arrogaba y en la intuición exacta de las soluciones que debían adoptarse. Sentía en su propia carne la patria escarnecida y el pueblo vilipendiado; se hallaba saturado de historia. "¿Cómo quiere usted que me haga mitrista? —contestó una vez—. Sería como hacerme *brasileiro*". El pertenecía a la otra tradición, la de la independencia y el honor, a la que aludía en lenguaje a veces enigmático y abstruso, cuando hacía el proceso de los males del régimen. Sabía que la reacción no era posible sin una previa reforma moral. Al cinismo epicúreo de los liberales oponía, por consiguiente, la austeridad de la conducta. Al escepticismo, la fe en el pueblo. A la politiquería utilitaria, el apostolado.

Este prurito moralizador, al que no era ajena su formación krausista, sería lo que, en definitiva, lo inhibiría en 1916, inhabilitándolo para una gran política. El, que hubiera deseado llegar al gobierno por una revolución (y con las manos libres para actuar), llegaba por el comicio. Se hallaba ligado por ello al respeto de la Constitución que había jurado —y que era, en rigor, el estatuto de los adversarios—. Esta circunstancia, que no habría significado obstáculo para un temperamento específicamente político, lo era —e infranqueable— para el moralista que había sobre todo en Hipólito Yrigoyen, agravado por el tremendo sentido de la responsabilidad de los introvertidos y cierta indecisión orgánica que también lo aquejaba y lo hacía postergar a menudo las soluciones. A todo ello habría de agregarse el afán legalista de los abogados de su partido, que consideraban haberlo resuelto todo con la obtención de bancas parlamentarias y que ya empezaban a hacer guiñadas a la vereda de enfrente para participar, como síndicos y consejeros, en la gestión de los intereses de las empresas, necesitadas de influencia política.

El radicalismo que con Yrigoyen llegaba al poder en 1916 no era ya el viejo partido de Alem, último avatar del federalismo histórico a través del autonomismo "republicano". Se había

transformado en la medida que se había transformado el país, por los sucesivos aportes inmigratorios.

Su carácter primitivo de partido reivindicativo de los derechos de la población criolla —tratada por los liberales en la forma que vimos—, ligado a una tradición muy precisa y reciente de raíz "montonera", se había ido diluyendo con la incorporación de las nuevas promociones de hijos de inmigrantes, en un vasto conglomerado humano, cuya definición más clara consistía en el repudio a los gobiernos de privilegio y el énfasis democrático de su actitud y en el que se unían los antiguos oprimidos con los recién incorporados que aspiraban a tener su puesto al sol. Los comerciantes minoristas españoles, vascos, italianos, y muchos colonos de la campaña habían mandado sus hijos al colegio y a la Universidad; y estos vástagos de la inmigración, llenos de ambiciones y méritos, veían la garantía de su porvenir en la acción de un movimiento democrático que los levantaría como clase, junto con el resto de la pequeña burguesía artesanal y comercial. El radicalismo les ofrecía su vasto cauce y a él se volcaron. Como el movimiento obedecía a la inspiración suprema de Yrigoyen y ésta se nutría en la más auténtica tradición nacional, justo es reconocer los beneficios que prestó en la asimilación rápida de la nueva ciudadanía de origen reciente, sustrayéndola a otros influjos ajenos a nuestra índole. El radicalismo sirvió de vínculo entre el pasado argentino y los productos del trasplante inmigratorio, que por su conducto recibieron la savia espiritual de la nueva patria.

Este beneficio tendría su contraparte en la atenuación o el desplazamiento de los objetivos nacionales a favor de los objetivos sociales. El carácter "democrático" del movimiento prevalecería sobre las finalidades concretas de la revolución nacional, postergando su realización. Se llegó a creer que lo esencial era la conquista de las posiciones políticas y que, por el mero ejercicio del sufragio libre, se llegaría automáticamente a la solución de todos los problemas, o sea en el voto como panacea. Y era natural que ello ocurriera después de 60 años de totalitarismo liberal en la enseñanza y con una generación educada en la mitología del régimen y la exaltación de sus falsos valores. La acción de Yrigoyen debía consistir permanentemente en un compromiso entre su pensamiento auténtico y la deformación que éste sufría en la mente de sus partidarios.

El carácter democrático del movimiento, amparado en la bandera equívoca de "la Constitución", que sólo expresaba un anhelo de vida legal y el goce de los derechos reconocidos en la letra y burlados en la práctica, constituía su fuerza —electoral— que se manifestó arrolladora desde el comienzo. El radicalismo

unía en un mismo propósito de recuperación moral y cívica a los sectores más diversos del pueblo argentino, que sólo coincidían en ese anhelo de mejoramiento difuso y en el repudio al régimen oligárquico. Pero esta misma diversidad —que lo instituía en representación auténtica de lo “popular” (que es, por definición, suma de contradicciones vitales)— entrañaba una debilidad orgánica, cuyas consecuencias no tardarían en manifestarse. Católicos y masones, progresistas y reaccionarios, burgueses y anarquistas, dentro de una gama social que abarcaba desde un grupo calificado de terratenientes hasta el proletario ínfimo, convivían mezclados en la empresa de la Reparación, que prometía una política de dignificación nacional y de satisfacción de todos los anhelos difusos de bienestar y de justicia que latían en el seno de una vasta colectividad en formación. Los unía, sobre todo, la confianza en el caudillo, quien sí sabía con precisión de dónde provenía y adónde iba y estaba dispuesto a hacer honor a esa confianza, aunque se vería trabado en su acción por las dificultades inherentes a la deficiencia del planteamiento y a su propia indecisión temperamental, que perjudicaba su eficacia en el orden operativo.

Yrigoyen constituyó su ministerio con hombres que por primera vez hacían su aparición en la vida pública nacional y pertenecientes en su mayor parte a la burguesía de provincias: viejos luchadores del partido, con méritos locales, pero desconocidos en Buenos Aires. Esto provocaría el primer escándalo entre quienes no podían concebir la existencia de un gobierno sin los figurones de la oligarquía.

Desde el comienzo se vería el nuevo gobierno abocado a los graves problemas que suscitaban el estado de guerra en Europa y sus ineludibles repercusiones en el país, por la campaña submarina que dificultaba la navegación y la reducción consiguiente de las rentas de aduana. A esto se añadían los obstáculos creados por la oposición parlamentaria y periodística. Empezó a desempeñarse con cautela extremada, efectuando una relativa limpieza en la administración y adoptando normas de economía y disciplina en las oficinas públicas. Pronto los acontecimientos externos mostrarían que efectivamente dominaba un nuevo espíritu en la dirección de la política internacional de la Argentina.

El 4 de abril de 1917, en efecto, el buque “Monte Protegido”, que navegaba con bandera argentina, fue hundido por un submarino alemán. Nuestro gobierno elevó una enérgica protesta, declarando que esa acción constituía una ofensa a la soberanía nacional y exigiendo la reparación del daño material y el desagravio al pabellón. El gobierno agresor dio las reparaciones debidas con la amplitud que se le exigía. Idéntica actitud e idéntica

respuesta se obtuvo en el incidente del vapor “Toro”. Alemania daría cumplimiento a lo prometido, reparando los daños y efectuando el solemne desagravio a nuestra bandera en setiembre de 1921. Compárese con lo ocurrido bajo el gobierno de de la Plaza, en que este requisito ni se exigió ni se otorgó. Yrigoyen restablecía el concepto exacto del honor nacional, borroso en la mente colonial de la oligarquía.

Esos acontecimientos desencadenaron una violenta campaña de prensa, con eco en el parlamento, en el sentido de forzar al gobierno al abandono de la política de neutralidad. ¡Había que acabar con la “barbarie” alemana! Los Estados Unidos habían entrado en la guerra en marzo de 1917. Se había desatado la campaña submarina. La política de las naciones aliadas consistía a la sazón, en forzar a los países satélites a plegarse a su zaga, con el pretexto de una cruzada por la democracia y la libertad. La propaganda se intensificó hasta hacerse casi incontrastable, a raíz de la publicación por la cancillería norteamericana de unos despachos del ministro alemán en Buenos Aires en los que, aparte de conceptos injuriosos para nuestro ministro de Relaciones Exteriores, aconsejaba hundir nuestros barcos “sin dejar rastros” (*spurlos*) a fin de evitar futuras reclamaciones.

La casi totalidad de la prensa, los partidos políticos, los escritores e intelectuales, gran parte de la juventud universitaria y los sectores de la población vinculados con las naciones aliadas (especialmente la numerosa colonia italiana) se movilizaron, pidiendo la inmediata ruptura de relaciones con Alemania. El Senado y la Cámara de Diputados la sancionaron, con el voto favorable de algunos diputados del radicalismo. Las turbas incendiaron el Club Alemán y saquearon pacíficas cervecerías, hubo gigantescos mitines, donde los mejores oradores de la República proclamaron en todos los tonos que de nuestra entrada en la guerra dependía nuestro porvenir y que en caso de negarnos a ello quedaríamos aislados y deshonorados. Las naciones limítrofes, una tras otra, iban cediendo a la presión de las potencias marítimas. Sólo Yrigoyen permaneció imperturbable en medio de la agitación general. Entregó sus pasaportes al ministro que nos agraviaba, imponiéndole su retiro del país en el plazo más corto posible, y exigió amplias explicaciones al gobierno alemán. La respuesta inmediata de éste, con el repudio categórico de la actitud de su embajador, resultó plenamente satisfactoria con lo cual desapareció todo motivo aparente para la ruptura de relaciones.

Ya Yrigoyen había tomado la iniciativa de un congreso de neutrales para la consideración de los problemas comunes a los países sudamericanos de origen hispano, que no tenían intereses

comprometidos en la guerra imperialista. Reaparecía con ello el sentido de una política común a nuestro hemisferio, de una política americana, que se había perdido desde la época de la Confederación y que Yrigoyen se proponía resucitar. La iniciativa fracasaría por haber caído la mayor parte de los países invitados en la posición de beligerantes y por la oposición de Estados Unidos, que veía en ella una amenaza a su predominio.

No sólo hubo de resistir nuestro gobierno presiones internas, sino externas, que encubrían amenazas solapadas. En ningún momento Yrigoyen dejó de obrar como cabeza de una nación digna y libre. Ante una comunicación del jefe de una escuadra norteamericana en el sentido de que entraría "incondicionalmente" a nuestro puerto, el presidente convocó al embajador y le exigió el retiro de la expresión, con insinuación de ruptura en caso de negarse: la entrada incondicional se transformaría en "visita de cortesía".

La neutralidad de Yrigoyen fue antes que nada una afirmación de soberanía. No obstante la fuerza de los intereses extranjeros en el país (con tanta influencia sobre el espíritu público que habían logrado hacer popular la beligerancia), el presidente logró imponer su decisión, que consultaba el verdadero interés nacional, librándonos de entrar en la "economía de guerra", que habría significado para nosotros descapitalización y enfeudamiento. Gracias a esa política pudimos salvar los años difíciles y aprovechar la disminución de las importaciones en un sentido favorable a la producción nacional. Se inició un proceso de industrialización cuyas consecuencias se sentirían pronto.

* * *

Esos años coincidirían con una intensa agitación obrera, motivada por la inseguridad económica, los bajos salarios y la influencia de las transformaciones sociales de la posguerra europea. También en esta materia mostraría el gobierno de Yrigoyen una actitud nueva: de comprensión y auspicio de las legítimas aspiraciones de los trabajadores.

No es el caso de historiar los innumerables conflictos obreros que se sucedieron desde 1916, en ascenso hasta comienzos de 1919, en que se inicia la curva descendente. Los más importantes fueron el de los portuarios, que tuvo diversas etapas, el de los obreros municipales, que derivó en huelga general, y el de los ferroviarios, que duró más de un mes, con paralización absoluta de los trenes. De 80 huelgas en el primer año de la presidencia de Yrigoyen, llegaron a contarse 300 en 1919; el número de obre-

ros huelguistas ascendió de 25.000 a 300.000. Por primera vez en la historia argentina, el gobierno adopta una actitud prescindente en lugar de asumir ciegamente el interés patronal y aparece como árbitro de los conflictos, tratando de alcanzar soluciones equitativas. Las delegaciones obreras concurren a la Casa de Gobierno y el presidente las recibe junto con las patronales. Lo cual provoca la actitud defensiva de éstas, que fundan organizaciones de rompehuelgas, como la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica, en que el antiobrerismo asume carácter de defensa contra la amenaza roja y se ampara en la bandera nacional. No es infundado el temor a que esa actitud obedece. El movimiento obrero adquiere en estos años una tónica revolucionaria y se halla manejado por agitadores que anuncian la revolución inminente. La revolución rusa de 1918 parece a muchos el preludio de una inmediata transformación del mundo. Es el sarampión "maximalista", que atacará también a gran parte de la intelectualidad joven sin excluir a los mismos católicos.

La agitación alcanzaría su *clímax* en la semana de enero de 1919, en que una huelga de metalúrgicos iniciada en los talleres de Vasena derivó, a raíz de un choque con la policía, en huelga general revolucionaria, que hubo de ser reprimida con intervención de las fuerzas militares. A la propagación del desorden, que duró una semana y ocasionó numerosos muertos contribuyó tanto la nerviosidad obrera, fomentada por agitadores internacionales que obedecían a un plan, cuanto la intervención de milicias particulares de origen patronal, que lo agravaron con sus desmanes en vez de atenuarlo.

Con todo, la política de Yrigoyen con relación a los obreros tuvo consecuencias auspiciosas. Su actitud prudente frente a los conflictos, animada de espíritu cristiano, y las leyes que se dictaron en materia de trabajo y previsión social, por su iniciativa o con su auspicio, contribuyeron a granjearle el apoyo y la adhesión de numerosos gremios, de los más numerosos y aguerridos, como el de los ferroviarios, sustrayéndolos en igual medida a la influencia roja, antes predominante. El movimiento obrero se nacionalizaba en gran parte con Yrigoyen. Por primera vez bajo su presidencia se verán manifestaciones proletarias que llevan a su frente la bandera argentina. Este hecho, particularmente importante en un país de proletariado urbano aluvional y de tantas derivaciones futuras, debe atribuirse a la acción de un gobierno que, antes que ninguno, puso al pabellón nacional por encima y no al servicio incondicional de los intereses capitalistas.

* * *

¡Años decisivos los de esta primera presidencia radical, bajo la cual nacen y se desarrollan tantas fuerzas nuevas e insospechadas! Al historiar estos años se advierte en ellos el esbozo de una Argentina futura que no habrían podido prever los hombres de un lustro atrás y que debe parecer escandalosa, sin duda, a los personajes del régimen derrotado que se sobreviven en el parlamento, en la Universidad y en las posiciones llaves de la vida social y económica: derrotados a medias que, por consiguiente, esperan el desquite.

La guerra europea y las conmociones que jalonan su liquidación, la política interna y la inquietud gremial, provocan una agitada vida cívica, favorecida por la amplísima libertad de prensa y la discusión apasionada de los problemas candentes. Hay debate y choque de ideas, asambleas populares, huelgas, tumultos callejeros, ambiente de ágora bulliciosa, que se traduce en desorden crónico. Esto escandaliza a los opositores al gobierno, que sacan de ello provecho, no obstante. Se echa de menos el orden anterior determinado por las oportunas declaraciones del estado de sitio para frenar a los disidentes. Yrigoyen no recurre ni un solo día a esa medida de excepción, que había sido normal para sus antecesores, aunque hubiera podido justificarse de sobra durante la agitación belicista o la semana de enero.

En esa atmósfera de libertad real, no ficticia, vuelven a debatirse los grandes temas nacionales, olvidados desde el 80. Mientras que la gran prensa comercial, encabezada por los diarios de Mitre y Paz (a la que se ha unido el periodismo vespertino, de escándalo y extorsión a lo yanqui), se pliega unánimemente a la causa identificada con los intereses dominantes —atacando, en nombre de la “democracia” abstracta, la política nacional del primer gobierno democrático que tiene el país— surge para defender a éste una prensa oficialista que, paradójicamente, es la única que puede llamarse libre. Yrigoyen sólo cuenta con un diario de la tarde: “La Epoca”. Y eventualmente, con el que sostiene la colectividad alemana: “La Unión”, donde escribe un gran orador, poeta y dramaturgo de éxito, Belisario Roldán. Aparece también y muere pronto otro diario dirigido por Manuel Ugarte, denunciador profético del imperialismo en América: “La Patria”. Es en esta pequeña prensa donde, por primera vez en forma coherente, se reanuda la vieja tradición nacional de los Quesada, Andrade y Guido. Contra el fariseísmo de la prensa comercial, que pretende cohonestar su propaganda con argumentos ideológicos y exalta a nuestras “benefactoras” Francia e Inglaterra como abanderadas de la “civilización” (¡la vieja historia!) esos diarios denuncian la guerra europea como una mera contienda imperialista en que no están implicados los principios, defienden la neutra-

lidad argentina y hablan sin ambages del sometimiento del país al capitalismo internacional. Ugarte propicia la industrialización para liberarnos. “No se trata de teorías de proteccionismo o libre-cambio —afirma—, se trata de una enormidad que no debe prolongarse. El proteccionismo existe entre nosotros para la industria extranjera y el prohibicionismo para la industria nacional”. Esta prédica gana prosélitos y sirve para ilustrar, sobre todo, el ideario del radicalismo, cuya juventud encuentra en ella sus temas capitales.

Con la terminación de la guerra y el estallido de la revolución rusa cunde el contagio “maximalista”, que hará presa en sectores de la juventud intelectual y estimulará la agitación obrera. José Ingenieros da una conferencia por la que se instituye en profeta de la revolución inminente. Aparece un diario, “Bandera Roja”, y multitud de revistas de la misma orientación.

Todo este fermento de ideas (al que habría que agregar la formación de los núcleos “antiimperialistas” surgidos ante la agudización del problema del petróleo y en los que se agrupan elementos de diverso origen) influirá en la agitación estudiantil, que se inició en Córdoba, siguió en Buenos Aires y La Plata y dio origen a la reforma universitaria, auspiciada por Yrigoyen, que adquirió pronto, por su propagación a otros países hermanos, proyección continental. Empezada como un movimiento de protesta contra un régimen de enseñanza anquilosado y defectuoso, trascendería su primitivo significado para convertirse en un movimiento juvenil tendiente a emanciparnos de viejas tutelas y elaborar una cultura auténtica, con manifestaciones propias en lo político, social y económico. Se trataba, en sustancia, de una reacción contra la mentalidad colonialista de los falsos maestros que monopolizaban la cátedra; reacción en procura de una expresión original (y por ende tradicional), no obstante los aspectos equívocos que le prestó a veces la confusión ideológica del momento.

La política interna se desarrollaba, entre tanto, dificultosamente por la obstrucción opositora, aunque con el avance del radicalismo en todo el país. Poco a poco Yrigoyen había ido interviniendo las provincias adversas y renovando sus poderes. La gravedad de los problemas que la guerra le planteó y su propia lentitud para decidirse le hicieron retardar este proceso: baste recordar que Buenos Aires, baluarte del fraude ugartista, sólo se intervino a los seis meses de asumir aquél la presidencia. Las situaciones intervenidas, con excepción de Córdoba, eligieron gobiernos radicales, algunos de los cuales debieron ser intervenidos nuevamente por conflictos surgidos entre el gobernador y la legislatura.

Pero la oposición conservadora, residuo de las viejas corruptelas electorales, se mantenía vigorosa en las Cámaras, fortalecida por el indulto y la situación privilegiada de la crítica a los inevitables errores y deficiencias de todo gobierno. Sus representantes habían recuperado en esta tarea una inesperada vitalidad y, erigiéndose en campeones de la virtud y las instituciones, minaban las bases del régimen, con acusaciones permanentes y escandalosas contra los funcionarios tachados de incapacidad y corrupción. Todas las iniciativas del gobierno eran sistemáticamente obstruidas. Las campañas opositoras hallaban eco en la prensa de escándalo, empeñada en desacreditar la política nacional del presidente.

A la oposición conservadora, se unía la socialista. El socialismo argentino, formado bajo la influencia del doctor Juan B. Justo, era un partido a la europea, que traducía a nuestro idioma la lucha de clases de los países industrializados, ignorando en absoluto la realidad nacional de la explotación de nuestra riqueza por el extranjero. Fuertemente inficionado por la masonería, aceptaba íntegramente como "progresista", la herencia del liberalismo hasta el general Roca y se especializaba en la prédica antimilitarista y anticlerical. No es de extrañar que suscitara la simpatía de los sectores oligárquicos (que veían su falta de peligrosidad real), los cuales, impotentes para obtener representantes en la Capital, lo ayudaron con sus votos contra el radicalismo. Esta coalición conservadora-socialista llegaría a menudo a ganar al radicalismo las elecciones en dicho distrito.

A todo ello se unía la disidencia interna en el partido gobernante, encabezada por el antiguo grupo "azul", o de los "galeristas", que incluía sobre todo a los abogados liberales vinculados a intereses capitalistas y que reprochaban a Yrigoyen su tendencia al gobierno personal y al desprecio de las formas. Esta tendencia había tenido ocasión de manifestarse, sobre todo, en la votación de la Cámara de Diputados a favor de la ruptura de relaciones con Alemania.

La política independiente de Yrigoyen en materia internacional tendría una última expresión, poco antes de terminar su mandato, en la actitud que asumió ante la Liga de las Naciones. Los países vencedores en la guerra habían convocado a esta asamblea con el pretexto de constituir un instrumento para asegurar la paz, aunque en realidad con el objeto de organizar un nuevo reparto de influencias mundiales. Yrigoyen no se prestó a que la Argentina participara como testigo complaciente en esa operación imperialista y decidió asumir la defensa de los países débiles, a cuya categoría pertenecían todos los de esta región de América.

Nuestra delegación a la asamblea de Ginebra llevó, pues, un proyecto de enmienda al pacto de la Liga que abarcaba los siguientes puntos: 1° Admisión en la Liga de todos los Estados soberanos (lo que incluía a los vencidos en la guerra); 2° Admisión de los delegados de todos los países pequeños no reconocidos, sin derecho a voto; 3° Elección del consejo por la asamblea, y 4° Jurisdicción compulsoria del tribunal de justicia internacional.

Esta "doctrina argentina" no obtuvo, como era de esperarse, la aprobación de los países que organizaban la asamblea, porque contrariaba sus miras de predominio mundial. Las enmiendas fueron, por consiguiente "archivadas", lo que significaba de hecho su rechazo. Ante esa actitud, Yrigoyen dispuso el retiro de nuestra delegación, lo que se produjo después de un brillante discurso de su presidente, el ministro de Relaciones Exteriores doctor Honorio Pueyrredón. Integraban la representación argentina los doctores Fernando Pérez y Marcelo T. de Alvear, ministros respectivamente en Viena y en París. Este último le manifestó a Yrigoyen públicamente su opinión adversa a la actitud asumida.

CENTRO DE ESTUDIOS

III. YRIGOYEN Y ALVEAR - EL "PLEBISCITO" DE 1928

Lejos de desgastarse en el gobierno, la popularidad de Yrigoyen se acentuó durante su desempeño, como lo mostraban los resultados electorales. En la última elección de renovación parlamentaria efectuada bajo su presidencia, logró afirmar su mayoría en la Cámara de Diputados. No le hacía mella, al parecer, la enconada oposición parlamentaria y periodística, que le enrostraba demagogia e incapacidad y se burlaba de la insignificancia de algunos de sus colaboradores y de su estilo abstruso de profeta. La contrarrestaba de sobra la actuación de sus representantes noveles en los debates del Congreso. El pueblo seguía votando en masa por el caudillo que le señalaba, con sus palabras y sus actos, una orientación salvadora.

La revolución que Yrigoyen iniciaba en el país no se limitaba al advenimiento de nuevas capas sociales a las posiciones gubernativas, a una comprensión más amplia de los problemas obreros y a un mayor celo por la defensa de la soberanía, sino que se extendía a todos los órdenes. Por lo pronto, a la conservación del patrimonio nacional. Había resuelto no permitir nuevas concesiones de tierras públicas a empresas de especulación, y había anulado muchas de las efectuadas por sus antecesores y que significaban un verdadero escándalo. Por lo que respecta al petróleo, adoptó medidas para preservar nuestras reservas, con miras a la nacionalización: Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenía en diciembre de 1916 un déficit de 317.000 pesos y en agosto de 1920 un superávit de 17 millones. Con los ferrocarriles, verdadero cáncer de nuestra economía, tomó por primera vez después de don Luis Sáenz Peña, providencias enérgicas, como la fijación de su cuenta capital y la anulación de tarifas abusivas; declaró, además, la caducidad de las concesiones vencidas y dio gran impulso a las líneas del Estado. Esta política tendía al fomento de nuestra producción y a la independización paulatina del extranjero. Se completaba con proyectos que estaban al comienzo de ejecución y habrían significado el surgimiento de nuestro olvidado interior, como la construcción de los ramales ferroviarios intercordilleranos de Huaytiquina y de Zapala.

Si a todo ello se agrega la comercialización de las cosechas

para obtener precios compensatorios en defensa del trabajo nacional, la creación de la marina mercante (7 barcos y dos petroleros) para librarnos de la sujeción de los fletes, y la lucha contra los monopolios, como el del azúcar, en favor del estándar de vida popular, no es de extrañar la adhesión jubilosa con que la mayor parte del pueblo acompañó su acción, no obstante la grita de los intereses ilegítimos perjudicados. Yrigoyen era el defensor del trabajo y de los salarios, el enemigo de los explotadores, el "padre de los pobres". Sus actitudes, por lo demás, halagaban el orgullo nacional. Por primera vez desde Rosas, el presidente hablaba como jefe de una nación libre y decidida a seguir siéndolo. En su invitación a Colombia para el congreso de neutrales había declarado que su propósito era "afirmar la emancipación de nuestros gobiernos en cuanto a su política exterior". Si ello no ocurría —agregaba—, "en el próximo Congreso de la Paz... se dispondrá de nosotros como de los mercados africanos". Mostraba así su sentido de la solidaridad de América, y más precisamente, de la América española, que hubo de manifestarse asimismo cuando declaró extinguida la deuda del Paraguay —último y vergonzoso vestigio de la guerra inicua— y proclamó Día de la Raza y fiesta nacional el 12 de octubre. Este reconocimiento oficial de nuestra tradición genuina significó un gesto revolucionario y escandalizó a la oligarquía anglómana o afrancesada que renegaba del origen común. Se lo comentó como desplante demagógico, destinado a obtener los votos de los "gallegos" de la Avenida de Mayo...

La política de Yrigoyen en el orden externo e interno era la evidente manifestación de un resurgimiento nacional dentro de las mejores tradiciones, y así lo entendió el pueblo, al acompañarlo con su auspicio, que era asimismo un homenaje a la austeridad del incorruptible, ajeno a los halagos del poder, sacrificado en el servicio de la causa pública. Desgraciadamente, terminaban los seis años de su accidentada presidencia y la obra se hallaba apenas en los comienzos. Los problemas suscitados por la guerra europea, junto con la enconada oposición parlamentaria de los "indultados" por el funesto error inicial, habían frustrado la mayor parte de los propósitos presidenciales, que esperaban su desarrollo de una política a largo plazo. Vedada la reelección por la Constitución vigente, quedaba la herencia para el sucesor que, naturalmente, debía provenir de las filas del radicalismo, cuya aplastante mayoría se descontaba.

El país se hallaba en excelentes condiciones para proseguir una política de reconstrucción interna y de emancipación, a favor de la borrascosa posguerra, que se manifestaba por medio de convulsiones en todo el Viejo Mundo. Se había iniciado una incipiente industria, como consecuencia de la reducción de importaciones por el bloqueo y por la conversión de nuestros tradicionales proveedores a la producción bélica. La extracción de petróleo había aumentado considerablemente. Se empezaba a tejer el algodón y se habían establecido fábricas de calzado, de confección de ropas y sombreros, de montaje de automóviles, de envases y mueblería, aparte de la ampliación de todas las dedicadas a artículos alimenticios. Esta producción de artículos de consumo —industria liviana— era el primer paso para una creciente emancipación, apenas se resolviese el problema de combustibles y materias primas minerales, en el sentido insinuado por los proyectos (Huaytiquina y Zapala) que tendían a abrir ampliamente nuestra comunicación con Chile.

Las circunstancias externas favorecían el desarrollo de la política iniciada por Yrigoyen, así como nuestra posición internacional, desvinculados de la Liga de las Naciones y de los compromisos a que habría podido, en su seno, obligarnos el reparto de influencias mundiales entre los triunfadores. Europa se hallaba trastornada como consecuencia de la guerra. La revolución comunista se extendía al Occidente, con estallidos esporádicos aun en los países aliados; los Estados Unidos se aislaban; surgían las disputas por el botín, y se alzaban los países coloniales, en la India y Arabia. A la proclamación de la U.R.S.S., a fines de 1922, respondería casi simultáneamente, en Italia, la toma del poder por Benito Mussolini, jefe del fascismo. Tal era el panorama mundial en momentos en que Yrigoyen debía abandonar el poder y delegarlo en su sucesor.

Para la Convención Nacional del radicalismo había sido un serio problema la elección del candidato. La verdad es que el movimiento carecía de personalidades de volumen suficiente para suceder a Yrigoyen, entre quienes podían considerarse herederos auténticos de su orientación, y que se veía obligado a elegir entre los personajes del grupo "azul", la mayor parte abogados, conformistas con los intereses del régimen y cuyo radicalismo se limitaba a la simple definición democrática y liberal. Las preferencias de la asamblea se decidieron por el doctor Marcelo T. de Alvear, a la sazón ministro en París.

Las elecciones revelaron el aumento del caudal electoral del radicalismo, que obtuvo 458.000 votos contra 200.000 de la Concentración Nacional (conservadora), cuya fórmula era Norberto Piñero-Rafael Núñez. Concurrieron además, el Partido De-

mócrata Progresista, el Socialista y una escisión del radicalismo con el nombre de "principista", los que obtuvieron corto número de sufragios en sus distritos de influencia.

El doctor Alvear había sido, según vimos, uno de los primeros militantes de la Unión Cívica Radical, de actuación descollante en la revolución del 93. Esta inquietud juvenil, que lo había llevado a la conspiración y las barricadas cuando todo lo invitaba a la molicie y el goce fácil, revelaba una evidente generosidad de espíritu y el temple patriótico de un buen ciudadano. Yrigoyen no se engañaba en la preferencia que siempre sintió por él. Nieto del ilustre general Alvear y heredero de cuantiosas fortunas que sabía dilapidar a conciencia, no era ajeno a su éxito político el prestigio perdurable de su apellido y su brillante posición social. El triunfo radical lo había hecho diputado y más tarde diplomático en Europa, función más afín a su temperamento y sus modalidades. Miembro del grupo juvenil que había rodeado al caudillo desde sus primeras andanzas de conspirador, mantenía con éste una afectuosa y firme amistad.

Alvear no podía engañarse sobre el sentido del voto popular que lo había llevado a la presidencia. Por eso, en su discurso de asunción del mando, el 12 de octubre de 1922, expresó que trataría de "completar la obra" iniciada por la "personalidad eminente y vigorosa" de su antecesor. El país quería, en efecto, la continuación de la revolución radical, dentro de las líneas trazadas por Yrigoyen. La garantía de la gloria del nuevo presidente habría consistido en acatar ese mandato suficientemente explícito.

No estaba en el ánimo de Alvear negarse a cumplir el compromiso que contraía con su partido y con su pueblo. Era, ciertamente, incapaz de una deslealtad deliberada. Pero si bien inteligente y culto, lo era en forma discipular, sin iluminación propia, y se hallaba encandilado por ejemplos europeos que se proponía concienzudamente imitar. Además, su soberbia característica de mimado de la fortuna (hábilmente fomentada por sus adláteres) le vedaba ser (y sobre todo parecer) mero ejecutor de la inspiración ajena. Se propuso gobernar por su cuenta mejorando naturalmente! ciertos aspectos externos de la obra de Yrigoyen, cuyo desorden y "grosería" le parecían incompatibles con su idea de un gobierno culto. En vez de un gobierno "personal" con pujos dictatoriales, sería una especie de congregación de capacidades, con ministros responsables y con plena autoridad a la francesa,

respetuosos de las leyes y de las manifestaciones de la opinión pública.

Formó, en efecto, un gabinete de "notables". El doctor José Nicolás Matienzo, eminente jurista, desempeñaría el ministerio del Interior; el doctor Angel Gallardo, eminente naturalista, el de Relaciones Exteriores; el doctor Rafael Herrera Vegas, el de Hacienda; el doctor Celestino Marcó, el de Instrucción Pública; el doctor Eufasio Loza, el de Obras Públicas; el doctor Tomás Le Bretón, el de Agricultura; el Almirante Manuel Domecq García, el de Marina. Para el ministerio de Guerra designó a un joven general a quien no conocía, pero que le había sido efusivamente recomendado como "técnico" inmejorable: don Agustín P. Justo. No se sabe de cierto cuál fue la influencia poderosa que decidió esta elección. Lo que sí se sabe es que la primera intención de Alvear había sido nombrar para dicho cargo al general don José F. Uriburu, pero que lo disuadió, en París, el general francés Joffre, por tratarse de un notorio germanófilo. Por lo que se refiere a Justo, acababa de ser un excelente director del Colegio Militar y se caracterizó por su devoción a la memoria del general Mitre. Como definición provisoria, basta.

El resultado de la orientación impuesta por Alvear al gobierno, con ese ministerio de supuestas "capacidades" de muy dudosa filiación radical, fue el que debió haberse previsto: suscitar en su contra la resistencia del propio partido que lo había elevado y que se sentía defraudado en sus principios y en sus aspiraciones. La unidad radical habría de quebrarse. Mientras la mayoría seguía fiel a Yrigoyen, los de la fracción adicta al presidente (o sea los antiguos "galeritas" del grupo azul) adoptaron el rótulo de "antipersonalistas" y formarían alianza accidental con los conservadores para sostener al gobierno. Es decir, un nuevo "acuerdo" sin el nombre de tal, o sea la consabida escisión como en el 80 y en el 92. La oposición conservadora, que desde la elección de Alvear lo adulaba y lo incitaba a la resistencia, se regocijó ante el resultado previsto y se convirtió en apoyo del oficialismo "alvearista" mientras que el auténtico radicalismo se volcaba a la oposición.

* * *

La verdad es que el régimen, en su estructura fundamental de alianza de la oligarquía ganadera con el comercio de exportación e importación y los consorcios que controlaban nuestra riqueza, había permanecido intocado, no obstante el permanente jaque yrigoyenista, con sus órganos políticos y de propaganda fortalecidos por la resistencia, y poco le costó recobrar su pre-

dominio. Por las exigencias de la alianza táctica y tácita con los conservadores, el gobierno de Alvear debió dejar de mano el cumplimiento del programa de liberación señalado por Yrigoyen, convirtiéndose en una especie de "roquismo" administrador y complaciente, aunque sin peculado y sin fraude electoral: lo cual le costó poco al presidente, que sólo en esa "moralina" cifraba su radicalismo. El capitalismo extranjero recuperó sus antiguas prerrogativas. Se abandonaron los planes de marina mercante y nacionalización del petróleo nacional, así como los proyectos ferrocarrileros y el del Banco Agrícola. Se exaltó nuestro destino pastoril. El ministro Le Bretón repartió entre los agricultores *Las Geórgicas* de Virgilio, como en los mejores tiempos de la Colonia. Pero en materia petrolera se nombró al general Mosconi en Y.P.F. permitiéndole realizar una magnífica administración. La terminación de la guerra, por lo demás, y la reanudación de las importaciones, motivaron un descenso industrial, porque los productos extranjeros entablaron una competencia ruinosa con los de la incipiente industria nativa, visible sobre todo en los ramos textil y metalúrgico.

Hubo, no obstante, una reactivación económica por la instalación en el país, a partir de 1925, de capitales extranjeros, principalmente norteamericanos. El Banco de Boston y el National City Bank establecieron aquí sus poderosas sucursales.

Las relaciones idílicas con el capitalismo inglés se pusieron de manifiesto ese mismo año, a raíz de la visita del príncipe de Gales, que vino en conmemoración del centenario del tratado con Gran Bretaña, y para retribuir la realizada en Londres por el presidente electo. Gran ocasión para reeditar las consabidas alabanzas a la "permanente amiga". Al año siguiente nos visitó el príncipe del Piamonte, que fue también muy agasajado, aunque un poco menos. Nuestras amistades en Europa eran inmejorables. Pero simultáneamente, y en ocasión en que el heroico Sandino luchaba contra un ejército yanqui por la libertad de Nicaragua, nuestro Ministro de Relaciones Exteriores declaraba que esa cuestión no nos incumbía de ninguna manera, pues era ajena a nuestros intereses. Volvía a imponerse la tradición de Mitre y Roca en la política exterior Argentina.

¿A qué seguir con los pálidos acontecimientos de la presidencia Alvear, como la famosa cuestión del Patronato, en que sufrimos una humillación diplomática por no haber tomado la precaución elemental de averiguar si el candidato que iba a proponerse para el arzobispado tendría o no la aprobación de la Santa Sede? Monseñor de Andrea fue rechazado y después de fútiles escaramuzas para sostener la dignidad aparente, tuvimos al cabo que proponer otro. ¿A qué referirnos a las maniobras habi-

lidosas para constituir un partido oficial con los residuos del radicalismo de las provincias, con todos los disidentes de Yrigoyen, que resultaban siempre minorías insignificantes? Nada de eso es digno de la historia.

Bástenos decir que dichas tentativas tuvieron su momento crítico bajo el efímero ministerio del doctor Vicente C. Gallo, sucesor de Matienzo en el Interior. La política de este ministro consistía en provocar el vuelco de las situaciones políticas por medio de intervenciones, como en los mejores tiempos del régimen. La operación debía coronarse con la intervención a la provincia de Buenos Aires, baluarte del yrigoyenismo. Este proyecto escolló en la negativa final de Alvear, quien no encontró motivos para hacerlo por decreto y no quiso deshonrarse con un acto arbitrario y para una tortuosa finalidad. El fracaso de la ley que se envió al Congreso determinó la renuncia de Gallo, quien fue reemplazado por el doctor José P. Tamborini.

El país progresaba, no obstante, bajo Alvear, como había progresado bajo Roca, por el trabajo de sus habitantes y las favorables condiciones del intercambio. Se respiraba una atmósfera de prosperidad y de optimismo y las clases burguesas se felicitaban de verse libres de la inquietud social y las zozobras de la presidencia pasada. Pero el pueblo seguía votando en contra. El pueblo que había esperado del radicalismo su redención, veía en el gobierno de Alvear, entregado al idilio con los ricos y los poderosos, la defraudación de una esperanza, que los más simples calificaban de traición a secas.

Desde abril de 1927 se había proclamado la fórmula para la presidencia futura, con los nombres de los doctores Leopoldo Melo y Vicente G. Gallo, ambos abogados de empresas extranjeras —Banco de Italia y Puerto de Rosario— y ambos radicales, sin duda, desde la juventud aunque “antipersonalistas”. No había por cierto, “contubernio”, ni “acuerdo” visible con los adversarios tradicionales, si bien los conservadores se abstendían públicamente de concurrir a ese comicio y aconsejaban votar por el binomio oficial. Los candidatos recorrieron todo el país e hicieron, durante un año entero, una costosa propaganda, presentando los programas más seductores y mostrando al pueblo con tintas sombrías el desastre que significaría un nuevo triunfo del “personalismo”. Contaban para su movilización con todos los recursos oficiales.

El radicalismo de Yrigoyen había permanecido inactivo entretanto, aparentemente desorientado. Sólo pocos días antes de la elección lanzó su fórmula: Yrigoyen-Beiró.

El día de la elección fue una avalancha: 800.000 votos contra 400.000.

El triunfo de Yrigoyen en forma tan aplastante provocó el estupor de sus adversarios y la eliminación de todo conato de resistencia. Hacía tiempo que se susurraba, en los círculos oficialistas, la decisión de apelar a las armas en el caso de que fallaran los votos; y el propio candidato del antipersonalismo, doctor Leopoldo Melo, se había referido, en un reportaje, a “la encrucijada alevosa y traidora del cuarto oscuro”, para explicar la derrota de sus amigos en Salta y Santa Fe. Ante la adversidad de los resultados, los demócratas teóricos se inclinaban a renegar de los principios, y ya tenían el candidato listo para el “pronunciamiento” militar, en la persona del ministro de Guerra, general Justo, en quien se había despertado una incontenible vocación política. La gran disparidad de fuerzas y la desautorización por parte del presidente Alvear, hicieron desistir a los inquietos. El general Justo debió publicar una carta en “La Nación”, desmintiendo los rumores que circulaban sobre su persona. Por lo demás, el conglomerado oficial se disgregaba rápidamente. Los magros “antipersonalistas” provincianos, incubados al calor de los presupuestos, se llamaban a engaño y sus dirigentes colmaban la antesala del caudillo nuevamente triunfante, para obtener el indulto de sus errores y volver al redil común.

El entusiasmo del radicalismo fue clamoroso. Obtenía —¡y en qué forma!— una ratificación terminante de la confianza pública, después de la escisión de una parte de sus elementos y de seis años de ostracismo y de persecución. Pareció que los caminos del porvenir quedaban allanados y que podía cumplirse ya sin obstáculos la obra de la Reparación nacional proclamada por Yrigoyen, realizándose todas las aspiraciones postergadas. Sus voceros más entusiastas proclamaron en las Cámaras la doctrina del “plebiscito”, según la cual el voto producido significaba una delegación expresa de la soberanía popular en la persona del ungido. El doctor José Nicolás Matienzo, por su parte, ex ministro de Alvear y jurista prestigioso, afirmó que dicha elección le daba a Yrigoyen una “carta blanca”: es decir, la facultad ilimitada de hacer lo que se le antojase.

Poco tiempo después de la elección falleció el vicepresidente que integraba la fórmula. Hubo largos debates sobre la forma y oportunidad de obviar ese inconveniente. Se resolvió efectuar una nueva convocatoria del Colegio Electoral, el que se pronunció a favor del doctor Enrique Martínez, médico cordobés a cuya acción se atribuía el triunfo del radicalismo en su provincia natal.

Yrigoyen asumió por segunda vez el mando el 12 de octubre de 1928. El acto se produjo en medio de un desbordante entusiasmo popular, mayor si cabe que el de la primera vez, no obstante los esfuerzos del caudillo por sustraerse a las efusiones de

la multitud. Nombró en seguida su ministerio, constituido, como el anterior, por personalidades de escaso relieve aunque de probada fidelidad, con la única excepción en la cartera de Guerra, del general Luis Dellepiane, militar prestigioso y restaurador del orden en la semana de enero, notorio por su enemistad con su antecesor en el cargo. En el ministerio del Interior designó a don Elpidio González, el vicepresidente cesante con Alvear, y en Relaciones Exteriores, al doctor Horacio Oyhanarte, ex parlamentario y orador romántico y caudaloso.

La expectativa por la actuación del nuevo gobierno era intensa y dramática, colmada de esperanzas por una parte y por la otra de sombríos augurios. ¿Qué haría Yrigoyen, con el poder casi ilimitado que le había conferido el pronunciamiento electoral? El pueblo que acababa de ratificarle su confianza esperaba oscuramente la revolución anunciada por sus voceros. Los sectores oligárquicos amenazados denunciaban la preparación de una dictadura.

No dejaba de ser una factor de inquietud, aun entre sus mismos partidarios, la edad avanzada del presidente, que se suponía pudiese haber debilitado sus facultades mentales o su capacidad de acción. Pronto hubo de verse que no se trataba de un temor infundado. La indecisión orgánica de Yrigoyen se había agravado con los años, así como su afán absorbente de resolverlo todo por sí mismo, lo que se traducía en parálisis administrativa y en postergación de los problemas pendientes, que eran múltiples y graves. Para peor, seguía con un Senado adverso, lo que le creaba la necesidad consiguiente de obviar ese mal dentro de las formas constitucionales, o sea de distraer en el ajetreo político los esfuerzos que la acción de gobierno le reclamaba con urgencia.

Así, mientras el país empezaba a sentir los primeros síntomas de la crisis mundial, con la desvalorización de sus productos en el exterior y la disminución de sus exportaciones, el gobierno aparecía ocupado en la tarea de desmontar situaciones provinciales con propósitos de mera dominación política. Las intervenciones a Mendoza y San Juan, en efecto, si bien votadas bajo Alvear, promulgadas por él y justificadas por los desaciertos de los gobernantes de ambas provincias, eran operaciones arduas y antipáticas, por gozar aquéllos de una evidente popularidad local y por mostrar al radicalismo en colusión con la oligarquía bodeguera contra grupos disidentes del propio partido. El rigor que debió emplearse habría de desgastar el prestigio de Yrigoyen, acusado por las víctimas y por el resto de la oposición de tiranía y arbitrariedad. A ello habrían de agregarse las cesantías en masa que se iniciaron a los cinco meses de inaugurada la nueva adminis-

tración, precisamente cuando empezaban a acentuarse las consecuencias de la crisis económica y cundía la desocupación obrera.

Con todo ello, la oposición, un momento calmada por la expectativa, empezó a despertarse. Los intereses amenazados del régimen vieron en la ineficacia gubernista de Yrigoyen y en sus dificultades políticas, el pretexto para impedir la obra de recuperación nacional que, de todos modos, pretendía llevar adelante en materia de ferrocarriles y petróleo.

Una violenta campaña de oposición se inició en el parlamento, donde menudeaban las interpelaciones, y en la prensa. Se fundaba en la inactividad del gobierno, en su preocupación exclusivamente electoralista, en el crecimiento de los gastos públicos y en cargos —reales o imaginarios— de corrupción e incapacidad. Los voceros del partido gobernante respondían en tono análogo, reeditando el proceso al Régimen y jactándose de representar la voluntad democrática del pueblo. Bajo toda esta faramalla retórica, una cosa aparecía como cierta e indudable y era la crisis económica y la falta de medidas para conjurarla o atenuarla; la disminución de entradas públicas y el aumento de los gastos, que en dos años excedieron a los recursos en la suma de 350 millones; el déficit creciente e irrefrenable. La discusión pública de estos extremos, en la que se agotaron las expresiones de violencia verbal, con olvido del respeto natural a las personas y a sus investiduras, enconaba los ánimos y producía una atmósfera de desorden, en que la falta de represión gubernativa daba la impresión de defección de la autoridad. Como era natural, los partidarios del gobierno debieron defenderse por sí mismos de los ataques de la oposición, lo que dio lugar a choques callejeros con algunas víctimas y a la consecuencia paradójica de que, en virtud de ello, se acusase enérgicamente de opresión y de tiranía a un gobierno jaqueado que no perseguía ni encarcelaba a nadie: a un gobierno ausente.

IV. LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE Y EL DRAMA DEL GENERAL URIBURU

Mientras que el gobierno de Yrigoyen —paralizado— dilataba la solución de los problemas graves que planteaba la crisis y su partido se desgastaba en la demagogia electoralista, prosperaba (al amparo de la amplia libertad de propaganda y de prensa y estimulada por el desorden y la incitación que aquella entrañaba) la propaganda roja, nunca más activa que en esos años. Los conflictos obreros se multiplicaron, y esta vez el gobierno pareció haber perdido el control de la acción sindical. Todo ello debía provocar, como provocó, la alarma de las clases conservadoras, que en gran mayoría habían votado por Yrigoyen como garantía de orden y estabilidad y que empezaron a retraerse, ante una situación cada vez más insegura y amenazadora de quien sabe qué catástrofe.

Durante todo el año 1929 se fue incubando y creciendo la resistencia contra el cariz que había tomado el gobierno, alimentada por la desilusión de los propios partidarios y hábilmente explotada por la oposición parlamentaria. Esta se hallaba constituida por los restos de los antiguos grupos conservadores; por el "antipersonalismo", fomentado bajo Alvear; por los demócratas, por los socialistas, y por el grupo de socialistas "independientes" recientemente escindido del tronco común y capitaneado por el doctor Antonio de Tomaso. Los discursos de esta oposición —difundidos por la prensa de escándalo, cuyo espécimen más notorio era el vespertino "Crítica", órgano de todas las tendencias disgregadoras y antisociales— agotaban la crítica al gobierno, incidiendo sobre los temas más propicios para conmover a la opinión, sobre todo cuando mostraban al radicalismo obrando contra sus propios principios, al pretender forzar, en las provincias intervenidas de Cuyo, resultados contrarios a la voluntad popular. La muerte en Mendoza del joven caudillo Carlos Washington Lencinas —cuya instigación se atribuía a la intervención federal— proporcionó la nota roja adecuada para encender dramáticamente el tono de los discursos. ¡Había sangre! Ello bastó para que empezara a hablarse de planes siniestros de exterminar a la oposición y para que resurgieran los viejos tópicos "antimazorqueros" sin que se advirtiera la ridiculez de aplicarlos al blando

Yrigoyen, que había sido el primero en lamentar el desdichado episodio. Se acusó al gobierno lisa y llanamente de dictadura y se proclamó, desde diversos ángulos y sin provocar el menor conato de represión, la necesidad y la urgencia de derrocarlo por medio de la rebelión armada.

Desde mediados de la presidencia de Alvear había empezado a sentirse en el país la presencia de una nueva actitud política, que era, en esencia, una reacción contra el desorden reinante en los espíritus (y reflejado en los hechos) y se presentaba como crítica de la incapacidad de las instituciones vigentes para cumplir adecuadamente los objetivos nacionales. Aunque fuertemente influida por el ejemplo del fascismo, entonces triunfante en Italia y en ascenso en Alemania, y por los doctrinarios de la "Acción francesa", dicha tendencia —que empezó a llamarse "nacionalismo"— invocaba la vuelta a la tradición nacional para encontrar los remedios que el país urgentemente reclamaba. Su persistente ataque a la democracia se dirigía, sobre todo, contra el prurito de convertirla en religión con olvido de su carácter instrumental: religión expresada en la creencia de que el simple funcionamiento del sistema constituía una panacea para todos los males. El gobierno de Yrigoyen era, justamente, la prueba experimental de lo contrario. Demostraba que el hecho de gozar del auspicio de la mayoría electoral no aseguraba la infalibilidad, ni siquiera la eficacia.

Esta actitud empezó a manifestarse en torno del periódico primero quincenal y luego semanal "La Nueva República", fundado a comienzos de 1928. Paralelamente había ido acentuando un vigoroso resurgimiento de la intelectualidad católica juvenil, que se definió en la revista "Criterio", y hubo desde el comienzo contactos y compenetración entre ambos grupos. La circunstancia de que uno de los redactores de "La Nueva República" entrase a formar parte del personal del diario "La Fronda" —cuyo propietario era el político conservador doctor Francisco Uriburu, de pluma ágil y mordaz—, hizo que esta hoja (que hasta entonces no se apartaba del ideario liberal común a toda la prensa de aquella época) fuese impregnándose de las nuevas ideas y el nuevo lenguaje, hasta convertirse en un órgano suplementario, cuyo cómodo local de la calle Florida constituyó, en adelante, el punto de reunión obligado de los jóvenes ciudadanos ganados por la doctrina y ansiosos de convertirla en acción.

La doctrina englobaba en el mismo repudio al elenco gobernante y a sus opositores "legales". Postulaba que la salvación del país no podía provenir de los "políticos profesionales" de los partidos opositores, carentes de opinión real e igualmente demagógicos y corrompidos (el cuartel general de éstos era el diario

"Crítica", órgano de todas las corruptelas), sino de un "movimiento nacional, no partidario", promovido por el ejército.

Leopoldo Lugones —en la madura evolución de su talento admirable— había iniciado desde tiempo atrás una prédica coincidente. El gran poeta y gran patriota, la más alta voz de la República a la sazón, veía la raíz de todos los males en la adopción de instituciones norteamericanas ajenas a nuestra índole, que nos habían desviado de nuestra vocación de potencia hacia una demagogia estéril, regida por el apetito de las masas aluvionales urbanas, y que nos llevaba al empobrecimiento y la servidumbre. Era llegado —afirmaba— el momento de reaccionar contra ese mal: "la hora de la espada". Con ese llamado a la intervención del ejército en la política, quería significar la necesidad de una restauración de los valores morales que la política utilitaria tenía de sobra olvidados y de los que esa institución aparecía como el tradicional custodio: el honor y el patriotismo.

Si se tienen en cuenta las grandes líneas de nuestra política expuestas hasta aquí, resulta evidente que este movimiento —no obstante el aparato doctrinario, influido por el movimiento histórico— coincidía estrictamente en sus finalidades con el radicalismo tradicional y obedecía a idénticos móviles. En sustancia, venía a suplir con su acción la defección del partido histórico, volcado —por la senilidad de su jefe y la mediocridad de sus segundos— hacia la demagogia de izquierda. Así lo comprendieron muchos hombres de ese origen que se le plegaron desde el comienzo. La desgracia fue la necesidad táctica de la alianza aparente con los partidos de la oposición que querían precisamente todo lo contrario y que triunfaron al fin, haciendo que la revolución, que debió ser nacional, se convirtiera en una revolución contra el radicalismo, y no contra lo que éste tenía accidentalmente de malo —que empeoró—, sino contra lo que tenía de mejor y auténticamente consustanciado con la patria misma.

El teniente general don José Félix Uriburu, que había recorrido con brillo todos los grados del escalafón y desempeñado hasta poco tiempo antes el alto cargo de inspector del Ejército (donde gozaba de gran prestigio), compartía con entusiasmo las opiniones del grupo juvenil de "La Nueva República". Lo había mostrado concurriendo espontáneamente al banquete con que sus redactores (a ninguno de los cuales conocía) festejaron en 1929 el aniversario de su publicación. Desde ese momento debe datarse el comienzo de la conspiración militar. Las primeras reuniones de oficiales con el jefe habrían de realizarse, precisamente, en casa de uno de los redactores de dicho periódico.

A todo ello se había creado ya el órgano de combate del nuevo movimiento. La "Liga Republicana", que agrupó en segui-

da a varios centenares de jóvenes, inició una intensa agitación callejera, que arrastró al resto de la oposición en una serie de mítines tumultuosos con insospechada adhesión popular. Los desfiles con que el oficialismo pretendió contrarrestar esta agitación, si bien igualmente numerosos, fracasaron por mostrar a las claras su cariz de imposición burocrática, carente de entusiasmo y espontaneidad.

La verdad es que la oposición se manifestaba sordamente aun en el seno del mismo partido gobernante, con algunos ruidosos estallidos de rebeldía, como el de Raúl Oyhanarte, hermano del canciller. Los hombres que veían con claridad el vuelco que estaba experimentando la situación no podían comunicarse con el presidente, quien aparecía como secuestrado por la camarilla palaciega que lo rodeaba e ignorante de todo, sin dejarse abordar durante días y días ni por sus propios ministros. Con todo ello, crecía el desquicio administrativo y el desorden general. Lo cual debía aprovechar naturalmente a los partidos opositores. Como la única válvula para expresar con claridad el descontento de los más era el comicio, en las elecciones de renovación parlamentaria, efectuadas en febrero de 1930, ganaron la mayoría de la Capital Federal los socialistas independientes, con el concurso visible de multitud de electores que antes votaban por el radicalismo. Los antipersonalistas, por su parte, ganaban Entre Ríos. Aunque los resultados generales de las provincias fueron favorables al partido gobernante, que aumentó su representación parlamentaria, el revés experimentado en el centro más poblado y culto del país significaría, para el prestigio del gobierno, una herida mortal de la que no podría reponerse.

La conspiración militar del general Uriburu seguía, entretanto, sin que el gobierno tomara ninguna medida para conjurarla. Más alarmados parecían los grupos opositores de las minorías parlamentarias (conservadores, antipersonalistas y socialistas independientes, encabezados respectivamente, por los doctores Rodolfo Moreno, Leopoldo Melo y Antonio de Tomaso), quienes vieron el peligro que para sus posiciones podía significar un golpe militar y emprendieron una intensa campaña de ¡defensa de la democracia!, la que sólo podía salvarse, al parecer, en el supuesto de que la revolución se hiciese para darles el gobierno a ellos, que eran la minoría. . . El general don Agustín P. Justo asumió la representación militar de esta actitud, con lo cual no hubo ya una, sino dos conspiraciones paralelas, con divergente finalidad. El partido Demócrata Progresista, que tenía por líder al doctor Lisandro de la Torre, con regulares contingentes en la provincia de Santa Fe, proclamaba ("votos sí; armas no") su fe absoluta en el sufragio como panacea (no obstante su tradición

de gran perdedor), confiaba en la educación progresiva del pueblo y se mantenía celosamente al margen de los conatos revolucionarios, como así también los socialistas.

Malograda su ineficacia suicida en la política general, el gobierno de Yrigoyen mantenía inalterable su posición nacional en el tratamiento de los problemas fundamentales del país, por ejemplo, el del petróleo.

Ya hemos visto cuál fue su política a este respecto en su primera presidencia. Alvear la continuó y fue precisamente bajo su administración y por acción del ministro Le Bretón que se produjo el nombramiento, para la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, del general don Enrique Mosconi, quien con singular inteligencia, honradez y energía, llevaría a la institución a un grado insospechado de desarrollo. Debe agregarse que, también bajo Alvear, se levantaron las reservas concedidas a particulares, que se traspasaron a Y.P.F., y se inauguró (1924) la primera destilería de nafta. Pero los antipersonalistas del Congreso y el ministro Mihura —sucesor de Le Bretón— se opusieron en los debates de 1927 y 1928 a la expropiación planteada por el sector radical.

Yrigoyen ratificó a Mosconi su confianza. Desde los comienzos de su presidencia se propuso llevar adelante el plan mencionado, consistente en llegar a la nacionalización de las fuentes de petróleo, así como a su explotación por el Estado, previa expropiación, y a la emancipación del monopolio yanqui en materia de importaciones.

La primera batalla ganada en favor de los consumidores se produjo con el decreto del 1° de agosto de 1929, por el cual el litro de nafta —que variaba entre 34 y 40 centavos en las distintas regiones del país— se rebajó a 12 en todo el territorio. Se iniciaron al mismo tiempo las negociaciones con la misión comercial rusa venida al efecto, sobre provisión de petróleo a cambio de productos agropecuarios. Rusia proveería 250.000 toneladas anuales durante tres años, a 6 centavos el litro, reservándose la Argentina el derecho de aumentar o reducir las cuotas. En setiembre de 1930 ya estaba el convenio listo para firmarse. El año anterior se había construido el primer oleoducto en Comodoro Rivadavia y se proyectaba el que iría hasta Bahía Blanca.

Por lo que respecta a la ley de petróleo, promovida por la mayoría radical de la Cámara de Diputados y resistida por los sectores conservadores, se hallaba desde el año anterior con media sanción. Su aprobación definitiva dependía de la conquista de la mayoría del Senado por el radicalismo, lo que iba a ocurrir seguramente con el aporte de los cuatro senadores que designarían las legislaturas de San Juan y Mendoza, en vías de constituirse. Se

había convocado a elecciones en ambas provincias para el 7 de setiembre. “Esa ley —escribe Gabriel del Mazo— hubiera importado de inmediato la propiedad y explotación de los yacimientos particulares, pues las expropiaciones no hubiesen excedido de 200 millones, suma de que disponía el Banco de la Nación, cuyos intereses y amortizaciones hubiesen podido quedar cubiertos con las ganancias de cinco años”.

La propaganda de esta ley se efectuaba con gran despliegue de invectivas contra el “imperialismo yanqui” (muy corrientes entre nosotros), como reacción contra la política del “big stick” en México y Nicaragua y a la que no era ajena la acción de los comunistas y comunizantes —que se agrupaban en “Ligas” instituidas al efecto— y buscando sobre todo llevar agua a su molino. Parece extraño que esos patriotas se mostraran, al mismo tiempo, tan insensibles con respecto al imperialismo inglés, mucho más efectivo y avasallador. El informe de la misión D'Abernon, que visitó la Argentina justamente en esos días, hacía un cuadro idílico de las inversiones británicas en el país, plenamente garantizadas y exentas de amenazas.

La decadencia senil del gran caudillo y la docilidad de su partido a los dogmas vigentes, provocaban esa incapacidad de abarcar en toda su magnitud los problemas nacionales. No había perdido aquél, empero, su hondo sentido de nuestro honor y nuestra soberanía, y así cuando la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Mr. Hoover, en su gira por las capitales de América antes de asumir el gobierno, fue el único de los jefes de Estado sudamericanos —según el mexicano Pereyra— que supo hablar y comportarse, frente al emisario imperial, como representante de una nación libre.

* * *

La conspiración seguía su curso, así como la abierta propaganda revolucionaria, sin que el presidente hiciera nada para conjurar el peligro, ni dejara hacer a los suyos, lo que provocó la renuncia airada de su ministro de guerra. En los primeros días de setiembre la revolución parecía inevitable. Las minorías opositoras del parlamento se prepararon para coparla, ya que no podían impedirla, y lanzaron un manifiesto que era una incitación a la revuelta armada. El 5, Yrigoyen, enfermo, delegó el mando en el vicepresidente Martínez, quien decretó en seguida el estado de sitio. El 6 al amanecer el general Uriburu se puso en marcha sobre Buenos Aires, al frente del Colegio Militar y algunas tropas de El Palomar. Sin resistencia alguna (salvo un tiroteo en la Plaza

162

del Congreso), en una especie de paseo triunfal, llegó a la Casa de Gobierno, donde exigió la renuncia del vicepresidente en ejercicio y asumió el mando del país.

El 8 juró Uriburu desde los balcones de la Plaza de Mayo ante un enorme concurso de pueblo que lo aclamaba. El radicalismo parecía liquidado. También en cierto modo los grupos opositores, si bien vociferaban desde las columnas de "Crítica" atribuyéndose la paternidad del movimiento.

Era evidente que, al asumir en sus manos la totalidad del poder, el jefe triunfante tenía ante sí la posibilidad de realizar un gran programa. Consistía en consumar la revolución que el país esperaba del radicalismo (y que éste había frustrado en demagogia electoralista), en el sentido de asegurar la independencia de la nación y el bienestar del pueblo. Era lo que reclamaban del antiguo subteniente del Parque los grupos jóvenes que lo habían llevado al gobierno —civiles y militares— y lo que, sin duda, quería él mismo: la realización de un programa nacional. Ello le habría asegurado el auspicio popular, que no le faltó en la expectativa de los primeros días y sin el cual no hay revolución posible.

* * *

Haría todo lo contrario. El pobre general desconfiaba de su capacidad política y creía en los hombres consagrados, por lo cual se rodeó desde el comienzo de todos los "notables" en disponibilidad que distraían sus forzados ocios en el Círculo de Armas: ex ministros de Figueroa Alcorta y Sáenz Peña, ex senadores y diputados de Ugarte, que habían sido desplazados por el sufragio popular; que no habían mejorado (por mal acondicionamiento) con el transcurso de los años, sino que se habían agriado; que representaban justamente lo que el pueblo no quería de ninguna manera, y cuya única ambición consistía en el restablecimiento de las condiciones existentes antes del advenimiento del radicalismo, al que consideraban un mal pasajero del que el país se restablecería con la mera eliminación de Yrigoyen. En vez del grupo joven y ágil que habría exigido la realización de un programa revolucionario, Uriburu exhumó un elenco de valetudinarios (salvo alguna que otra excepción), que parecían haber sido conservados en naftalina durante los tres lustros de auge radical, e hizo de ellos sus ministros y sus interventores en doce provincias (se salvaron Entre Ríos y San Luis, por tener gobiernos antirradicales). Era natural que los hombres de consejo de la camarilla se empeñaran, no en hacer la revolución, sino en impedirla, y que limitaran los objetivos revolucionarios a una operación electoral

que devolviera el gobierno, más o menos legalmente, a los grupos y partidos que lo habían usufructuado antes de la Ley Sáenz Peña. El ministro del interior, doctor Matías Sánchez Sorondo, mostró la oreja de la jugada, al hacer la apología de "su" partido conservador desde los balcones de la Casa de Gobierno. Aplastado el radicalismo, para lo cual sólo hacía falta un poco de rigor policial (ya que el pueblo arrepentido volvería a su viejo redil), ¿quién quedaba sino ellos?

La acordada por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció al gobierno *de facto* —imponiéndole la sujeción a la Constitución y las leyes vigentes— constituyó el brete que los intereses del régimen crearon al general Uriburu para tenerlo a su merced. Desde ese momento hubo siempre a su lado vigilantes exégetas para indicarle con la autoridad que confiere la toga abogadil, qué era lo que podía hacerse y qué lo que no se podía. Se podía —gracias al *estado de sitio* permanente— encarcelar a los ciudadanos, desterrarlos del país e incluso torturarlos; no se podía, en cambio, lesionar, ni siquiera rozar, ningún interés económico, sobre todo si era extranjero. Las atribuciones del gobierno se reducían a la mera policía. En uso de ellas, hubo de descubrir que la agencia rusa "Yuyamtorg" era un organismo de propaganda soviética; lo que bastó para decretar su allanamiento y anular la posibilidad del convenio negociado por Yrigoyen, que habría sido un golpe de muerte para el monopolio yanqui de importación. Esto le haría decir, más tarde, a Waldo Frank que la revolución de setiembre respondía a la instigación de los petroleros norteamericanos.

Cabe reconocer, no obstante, que si bien se detuvo la política nacionalizadora y se aceptó la renuncia de Mosconi, no hubo entrega del patrimonio existente. Y.P.F. siguió su floreciente desarrollo bajo la presidencia del general Allarín.

Mientras las consecuencias de la crisis económica azotaban el país, la política financiera del gobierno "de facto" consistió en mantener el signo monetario y en pagar los servicios de la deuda externa, a la par que se atrasaban los sueldos de la administración y se condenaba a la población a la penuria. Se decretaron cesantías en masa por motivos políticos y el viejo y venerable presidente depuesto fue confinado en Martín García, bajo la acusación de numerosos delitos imaginarios.

* * *

Ante la evidencia de un régimen mantenido a fuerza de rigor policial y que no ofrecía otra perspectiva que la restauración de

personas y modalidades políticas que el país había reiteradamente repudiado, empezó a levantarse un clamor en todas partes. Los grupos políticos desplazados, en el afán de disputarse los votos que suponían vacantes del radicalismo, se instituyeron en campeones de la democracia escarnecida y pidieron a voz en cuello la "vuelta a la normalidad" por la realización de elecciones. El radicalismo perseguido recurría a la conspiración. En diciembre de 1930 se reprimió en Córdoba un levantamiento de suboficiales y dos meses después, en la Capital Federal, se descubrió un nuevo conato bajo la jefatura del general don Severo Toranzo.

Por lo que se refiere a las elecciones, el ministro del Interior no se inquietaba. Había concebido un plan de restauración escalonada de la legalidad, que empezaría por convocatorias en Buenos Aires, Corrientes y Santa Fe. Aseguraba los resultados felices, porque contaba con la desorganización del radicalismo, cuyos dirigentes se hallaban presos y prófugos. Se fijó la fecha del comicio bonaerense para el 5 de abril. El radicalismo concurrió con una fórmula decidida a último momento, sin dirigentes, sin comités y sin propaganda. Los resultados fueron los siguientes: U.C.R. (Honorio Pueyrredón), 218.078 votos; Partido Conservador (Antonio Santamarina), 187.742 votos; Partido Socialista (Nicolás Repetto), 49.577 votos.

¡Habían ganado los réprobos! ¡Los que nunca más volverían, según la oratoria oficial! El gobierno provisional —ante ese resultado que, con excepción de sus miembros, casi todo el mundo había previsto— fue presa de estupor y pánico. Se afirmó en la opinión de que el pueblo era incorregible. Hubo tres días agitados en los que menudearon las consultas y se osciló entre el plan moderado de aceptar los resultados electorales y el violento de establecer lisa y llanamente una dictadura militar. El gabinete renunció en masa, ante el ruidoso fracaso de su política, y fue reemplazado, tras largos cabildos, por otros menos brillantes (ya que los "notables" se resistieron a colaborar) y cuyo único programa consistía en salir como se pudiese del atolladero.

Del resultado de las elecciones surgía, con toda evidencia, el repudio popular a las tendencias en que se inspiraba el gobierno "de facto" y la intención de resistirla. Lo mostraba asimismo la agitación que se iniciaba en las aulas universitarias y en las calles y la inquietud que se sentía en el seno mismo del ejército, que veía su responsabilidad comprometida en una política oligárquica y antinacional. No era ajena a esta inquietud la acción del general Justo, que si bien había participado en la revolución y desempeñado durante los primeros días la jefatura de las fuerzas, había renunciado enseguida, para convertirse en el brazo militar de los grupos políticos que constituían la oposición al radica-

lismo, con el compromiso implícito de su propia candidatura presidencial; Uriburu lo resistía. Su deseo más íntimo consistía en encontrar una combinación que le permitiese traspasar la presidencia a su viejo y admirado amigo Lisandro de la Torre, jefe de los demócratas progresistas; pero éste se mantenía hosco e intratable en el repudio al golpe militar y a sus consecuencias.

El gobierno anuló los resultados de las elecciones de Buenos Aires y suspendió las que debían realizarse en Corrientes y Santa Fe. Ante esta circunstancia —que significaba la prolongación *sine die* del provisorio— y ante los rumores circulantes sobre las reformas que estarían elaborando ciertos doctores del régimen, en el sentido de limitar la participación popular en las elecciones (que a eso se reducía su "fascismo"), se acentuó la inquietud militar hasta tomar caracteres de conspiración extendida a todas las guarniciones del territorio.

A los pocos días de estos acontecimientos, en mayo de 1931 llegó de Europa el doctor Alvear, respondiendo a solicitudes de los radicales de todo el país, para ponerse al frente de la reorganización de su partido. Entre quienes fueron a recibirlo al puerto se hallaba —entusiasta y afectuoso— su ex ministro de guerra el general Agustín P. Justo. También un edecán de su viejo amigo de la juventud, el presidente del Gobierno Provisional.

En la entrevista que Alvear y Uriburu mantuvieron horas después en la Casa de Gobierno se trató a fondo el tema político. Parece que el general le exigió a su visitante, como prenda de paz, el repudio público del gobierno depuesto. Alvear se negó, aduciendo que no podía asumir la representación de la moral política un movimiento que pretendía restaurar las corruptelas anteriores al régimen de la Ley Sáenz Peña y devolver el poder a sus hombres. Todo ello con referencias bien concretas a la actuación anterior y presente de muchos colaboradores conspicuos del interlocutor. No hubo entendimiento posible.

También fue desahuciado poco después el general Justo, en la maniobra que intentó de negociar con el radicalismo su carácter de "candidato militar" a la presidencia de la República. Su conspiración estaba, a la sazón, muy avanzada y se susurraba su estallido para el mes de junio. El gobierno logró conjurarla con la convocatoria a elecciones generales para el 8 de noviembre con lo que ganaba seis meses para maniobrar.

Los tiempos que siguieron fueron de intensa agitación política. Los partidos de la oposición al radicalismo prepararon sus magros contingentes para enfrentarlo, mediante una coalición, en la contienda que se avecinaba. El radicalismo, bajo la jefatura de Alvear, se reorganizaba a su vez, luchando con las dificultades del estado de sitio, que le impedía la propaganda, y una intensa

persecución policial. La candidatura del general Justo, ya era un hecho sabido. Del estado de los espíritus a la sazón pudo dar una idea el banquete de camaradería del ejército y la armada, que se celebró como es costumbre, en el mes de julio, en vísperas de la fiesta patria. El presidente fue acogido con relativa frialdad y el candidato con una ovación clamorosa. El coronel Manuel Rodríguez, que habló en representación del ejército, usó un tono que en ningún momento pareció el de un subalterno frente al superior jerárquico que era, a la vez, el jefe del Estado. Afirmó que las fuerzas armadas "no consentirían" sostener dictaduras, ni burlar las leyes, ni impedir en ninguna forma la expresión de la voluntad popular.

Pocos días después, el 20 de julio, estalló en Corrientes un levantamiento armado encabezado por el teniente coronel Gregorio Pomar, que no era sino un conato de provocar el levantamiento en toda la República, de acuerdo con el plan en que había participado Justo. No fue seguido: las guarniciones estaban plegadas a la solución "legal". Ante el avance de fuerzas superiores para combatirlos, los jefes revolucionarios, que habían logrado posesionarse de Corrientes y el Chaco, debieron refugiarse en territorio paraguayo.

Este episodio provocó un nuevo acceso de persecución contra el radicalismo, cuyos dirigentes fueron encarcelados o debieron emigrar. Se dio el 24 de julio un decreto inquisitorial, que condenaba al ostracismo político a todos los que se hubiesen solidarizado con el régimen depuesto o "participado en actos tendientes a desvirtuar los fines de la revolución", fines que, salvo en lo referente a la exclusión del radicalismo, nadie sabía ya en qué consistían. Con todo, prosiguió el esfuerzo por la organización combativa, y para setiembre pudo convocarse en la Capital Federal la primera convención nacional de la Unión Cívica Radical posterior a la asonada. La importancia histórica de esta asamblea consiste en haberse formulado en ella el primer programa escrito del movimiento, innecesario antes, según se expresó, por la presencia viva de Yrigoyen. El programa era la concreción de las tendencias puestas por éste en acción durante su primer gobierno e incluía la nacionalización de los servicios públicos y del petróleo.

* * *

El 8 de agosto el gobierno provisional amplió la convocatoria electoral, extendiéndola a la designación de presidente y vice. El radicalismo antipersonalista se apresuró a designar su

candidato en la persona del general Justo, acompañado del doctor José Nicolás Matienzo. Los núcleos conservadores de todo el país se agruparon en un nuevo partido al que se llamó "demócrata nacional": proclamaron al general Justo, acompañado por el doctor Julio A. Roca, hijo del general homónimo y ex gobernador de Córdoba. Los socialistas independientes siguieron la corriente y se plegaron también al general, decidiendo que votarían al vice que alcanzara mayor número de sufragios. A este conglomerado de partidos se le dio el nombre de "Concordancia".

El Partido Demócrata Progresista en Santa Fe y el Socialista de la Capital Federal, con mera importancia local en sus respectivos distritos, constituyeron la llamada "Alianza Civil", que levantó las candidaturas de Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto.

La mencionada convención nacional del radicalismo proclamó, después de diversas alternativas, los nombres de Marcelo T. de Alvear y Adolfo Güemes. Para quienes seguían la marcha de los acontecimientos políticos y conocían el estado de espíritu público, no podía caber duda de que esta fórmula alcanzaría el triunfo.

Pero el gobierno provisional, por acuerdo de ministros del 6 de octubre (y alegando antecedentes norteamericanos de la época de la guerra de Secesión) la "vetó", declarando que ambos ciudadanos se hallaban "inhabilitados" para figurar como candidatos en las elecciones convocadas. Se fundaba, en cuanto al primero, en no haber transcurrido el intervalo de un período intermedio que la Constitución, entonces vigente, exigía para la reelección; y en cuanto al segundo, en hallarse incluido en las sanciones que el decreto del 24 de julio establecía para quienes se hubieran solidarizado en cualquier forma con el régimen depuesto.

Era evidente que esta última circunstancia podía invocarse contra cualquier candidato que surgiese y que su intención no era otra que excluir al radicalismo del comicio. La Convención decretó la vuelta a la abstención electoral en toda la República.

Las elecciones se realizaron en la fecha indicada, en las mismas condiciones que antes de la Ley Sáenz Peña: con la ausencia de los comicios del partido que encarnaba la voluntad de la mayoría. Frente a la candidatura del oficialismo sólo actuó la de la llamada "alianza civil" que, no obstante los escasos contingentes de los partidos que la integraban, alcanzó un número cuantioso de sufragios, índice de la resistencia nacional contra la fórmula impuesta. Se habían aplicado no obstante, en gran escala, las diversas formas del fraude electoral. El resultado fue de

606.526 votos para Justo-Roca y 487.955 para de la Torre-Repetto.

Se renovaron también las dos ramas del Poder Legislativo y los gobiernos de provincias, que se repartieron entre demócratas y antipersonalistas, con la sola excepción de Santa Fe, ganada por la Alianza Civil.

V. JUSTO O LA RESTAURACIÓN DEL RÉGIMEN

La revolución de setiembre, que suscitó tantas esperanzas, venía a parar en una elección fraudulenta y en la instauración de un gobierno repudiado por la mayor parte de la opinión. Había sido, en definitiva, un fracaso. Los hombres que acompañaban al jefe en las horas de la conspiración se habían alejado de él definitivamente, ante el cariz de la operación a que lo conducían sus mentores de última hora. "En materia de revoluciones —escribía 'La Nueva República'— somos partidarios de las revoluciones verdaderas; pero si se trata de elecciones queremos elecciones limpias".

La reacción del radicalismo no se hizo esperar. Objetó, como era natural, la legitimidad del gobierno resultante del fraude. Y el 3 de enero de 1932, encabezado por los hermanos Kennedy en La Paz y por el teniente coronel Pomar, que atravesó el río frente a Concordia, procedente del Salto, se produjo un nuevo estallido revolucionario en Entre Ríos que, si fue sofocado, certificaba la indignación de la ciudadanía ante el despojo. La represión fue violenta, llegándose a incendiar por medio de aviones los montes en que se hallaban refugiados los dispersos de la asonada.

Justo asumió el mando el 20 de febrero de 1932. Hizo un llamado a la conciliación nacional, levantó el estado de sitio (permanentemente mantenido por su antecesor) y se empeñó en demostrar, por el abuso de la fraseología democrática y "civilista", su distanciamiento de quienes le habían dado el poder. La prensa de escándalo se desató en una violenta campaña contra el gobierno provisional y sus hombres, denunciando las torturas que se habían infligido a los presos políticos. Se señaló por su ensañamiento el diario "Crítica", que había sido cerrado por Uriburu y que se mostraba especialmente adicto a su sucesor.

No cabe duda de que el general Justo quería realizar un gran gobierno, para hacer olvidar la ilegitimidad de su título mediante la prueba de su eficacia. Lo abonaban sus antecedentes como mi-

nistro de guerra del presidente Alvear. Si bien su maquiavelismo innato lo llevaba a no parar en medios para alcanzar sus fines y satisfacer su ambición, puede asegurarse que esta ambición era noble. Pero la idea que había concebido de lo que debe ser un gran gobierno no se adecuaba ya a los tiempos que vivía, sino a los patrones mentales del mitrismo heredado en el que sus mentores habituales lo confirmaban día tras días. Era un liberal. Cifrabá por ello su anhelo en continuar la tradición de Mitre y Roca, a fin de integrar él mismo la trilogía de los generales civilizadores. Estaba impregnado hasta el tuétano de la ideología del régimen, cuyo primer dogma consistía en la veneración del capitalismo extranjero. Lo demostró en la elección de sus ministros, entre quienes no podían faltar ni los sobrevivientes de las presidencias anteriores a la Ley Sáenz Peña, como el doctor Manuel M. de Iriondo (ex ministro de Figueroa Alcorta) y el doctor Carlos Saavedra Lamas (ex ministro de Plaza), ni los señalados por la predilección de los grandes consorcios merced a su habilidad abogadil, como el doctor Leopoldo Melo. Su mentor de cabecera (y su escriba habitual) sería el doctor Mariano de Vedia y Mitre, más tarde Intendente de la Capital, quien alguna vez cometería la distracción de publicar con su firma los discursos que había escrito para el presidente y que éste había pronunciado con énfasis de autor. Como contraste de tales eminencias y a fin de darle al gabinete, con la inclusión de un "gringuito", un dejo popular, nombró ministro de Agricultura al doctor Antonio de Tomaso.

La elección de sus colaboradores sumada a la ilegalidad de su origen no contribuyó a darle al general Justo la popularidad que tanto anhelaba. Durante varios meses, el deporte preferido de la población consistió en silbarlo cada vez que aparecía en público. La entereza con que hizo alguna vez frente a los vejámenes, un esfuerzo de policía preventiva y al fin, el cansancio, hicieron que la resistencia se fuera atenuando y la población se acostumbrara a mirarlo pasar con indiferencia.

La situación financiera que había dejado el gobierno provisional no era próspera ni mucho menos. En medio de las angustias de la crisis y trabado por su problema político, había sido limitado a vivir de expedientes. No otra cosa había sido el impuesto a la renta y la concertación de un empréstito de 53 millones de dólares, que fue insumido en su casi totalidad por servicios de la deuda externa. Para suplir el déficit del erario, Justo se vio obligado a levantar el llamado Empréstito Patriótico de 500 millones de pesos, que fue cubierto en poco más de la mitad, sobre todo por los consorcios de exportación. Se introdujeron rigurosas economías y se pagó la deuda externa a costa "del hambre y la sed",

según la mejor tradición del régimen, aunque se atrasaran los sueldos de los ordenanzas y los maestros de escuela.

Con todo, era un gobierno, lo que parecía mucho después de la ineficacia y las vacilaciones de sus antecesores. Se impuso orden en la administración de los distintos departamentos de Estado, se regularizaron las finanzas, se iniciaron obras públicas de gran envergadura, se inauguró una política caminera (ya insinuada bajo Uriburu) con la fundación de Vialidad Nacional, se fomentaron las industrias agropecuarias. De Tomaso (el único elemento nuevo en el gobierno) empezó a destacarse como un gran ministro en su ramo; pero enfermó y murió a los pocos meses. Esta actividad "que daba una impresión de progreso" y el orden policial imperante satisfacían a la opinión burguesa. Pero la orientación general significaba la vuelta a los peores tiempos del roquismo. Plenamente identificado con los intereses de la oligarquía ganadera y el comercio de exportación, el gobierno del general Justo mantuvo el enfeudamiento del país al capitalismo extranjero, más aún lo reforzó, y reaccionando contra la tendencia libertadora de Yrigoyen, se empeñó en imponer una legislación que implicaría el estatuto definitivo de ese enfeudamiento y la consagración de nuestra situación colonial.

* * *

La crisis del 29-30 había provocado en todos los países del mundo un estado de alarma que se tradujo en la adopción de medidas proteccionistas de las economías particulares. A este movimiento no había sido ajeno el Imperio británico. La Conferencia de Ottawa, celebrada a mediados de 1932, fue una expresión de esa tendencia generalizada, y en ella se votó una resolución en la que se manifestaba la voluntad de que Inglaterra realizara preferentemente sus compras en sus propios dominios, excluyendo a los países ajenos a su órbita política.

Esta perspectiva produjo pánico en nuestra clase ganadera, vendedora tradicional de Inglaterra, y en los hombres del gobierno. Se decidió mandar una embajada especial que, al par que devolviera la visita realizada años antes por el príncipe de Gales, llegase a la concertación de un convenio entre ambos países, que asegurase el mantenimiento de su comercio. Fue encargado de presidir la misión el vicepresidente doctor Julio A. Roca. Lo acompañaba con categoría de embajador (para defender los intereses argentinos!) el doctor don Guillermo Leguizamón, abogado, jefe de todos los ferrocarriles británicos establecidos en la Argentina y que había sido agraciado por la Corona inglesa con el título de *Sir*.

Se llegó a la negociación del tratado de Roca-Runciman. Pronto hubo de trascender que, bajo la apariencia de un mero convenio de negociación de carnes, se escondían otros compromisos mucho más graves para el país y cuyas consecuencias se verían pronto. Del espíritu que había presidido las negociaciones dio muestras el discurso que el jefe de la misión argentina, fiel a su sangre, pronunció en el banquete con que lo agasajaron en Londres. Afirmó con aire satisfecho que la Argentina "era como un gran dominio británico".

Esta afirmación —con la que aparentemente se pretendía disputar a los dominios legales el galardón de la fidelidad— no fue desautorizada por el gobierno del general Justo. Se le rindieron, por el contrario, grandes honores oficiales a su autor. Provocó, en cambio, la indignación de los patriotas. Rodolfo y Julio Irazusta —jóvenes escritores del elenco inicial de "La Nueva República"— publicaron a raíz del episodio su luminoso opúsculo sobre *La Argentina y el Imperialismo Británico*, que sería el comienzo de una acción esclarecedora de la conciencia nacional.

La reacción argentina se pronunciaba, en efecto, y ésta es la característica más señalada de los años que tratamos. El valiente polemista José Luis Torres ha calificado de "infame" a la década que incluye la presidencia de Justo. Lo sería, sin duda, si al lado de la corrupción política, y como consecuencia de ella, no se hubiese mostrado el brusco despertar del patriotismo.

Se manifestaba, en primer término, dentro de las filas juveniles de la U.C.R., que veían la salvación del país en la vuelta del partido a la orientación que le había impreso Hipólito Yrigoyen. Esta tendencia se organizaría pronto en el grupo FORJA (Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina), cuyo trabajo de adoctrinamiento político alcanzaría a un sector amplio de las nuevas generaciones. Un miembro de este grupo, el escritor Raúl Scalabrini Ortiz, tomó a su cargo la denuncia metódica, irrefutable e impresionante de la influencia que ejercía en nuestra política el imperialismo inglés, ejemplificada en la historia de los ferrocarriles. La publicación de esta historia, así como de su *Política Británica en el Río de la Plata* tuvo una influencia decisiva sobre la mente juvenil. Se manifestaba asimismo dicha reacción dentro del grupo más advertido del nacionalismo inicial aun en otros sectores políticos, incluso en las filas de los partidos del oficialismo.

El común denominador de estos grupos en el orden de la

acción consistió en su rechazo de los medios legales para alcanzar el poder y en su apelación a la revuelta armada. La conspiración militar prosiguió, en efecto, bajo la presidencia de Justo, con estallidos circunstanciales. El diciembre de 1932 se descubrió la que dirigía el teniente coronel Atilio Cattáneo. En enero del año siguiente, los tenientes coroneles Roberto Bosch y Gregorio Pomar trataron de sublevar un regimiento en Concordia. En diciembre del mismo año 1933, el teniente coronel Bosch tomaba Paso de los Libres y el mayor Domingo Aguirre, Santo Tomé, al mismo tiempo que se producían levantamientos armados en Santa Fe, Rosario, Cañada de Gómez, San Luis, San Jerónimo, Rafaela y varios pueblos de la provincia de Buenos Aires (Arturo Jauretche —soldado de Paso de los Libres— ha cantado esa "patriada"). Aunque dichos movimientos fueron vencidos, sirvieron para mantener la llama sagrada y demostrar que había argentinos que no querían aceptar de ningún modo el sometimiento a un régimen de entrega y de fraude.

La consecuencia más importante de la visita de Roca a Londres consistió en la llamada "Coordinación de Transportes".

Como la política de Vialidad, iniciada por Uriburu y continuada por Justo, se acompañaba de un desarrollo extraordinario del transporte automotor, que significaba una seria competencia para el monopolio británico de los rieles, éste ideó una maniobra para adquirir, con pretexto de racionalización de los servicios, el control absoluto sobre todo el transporte nacional. Su objetivo inmediato fueron los "colectivos" de la ciudad de Buenos Aires, en poder de pequeños empresarios particulares. El monopolio logró su expropiación legal y su manejo por medio de una corporación en la que retenía la mayor parte de las acciones.

La acción del ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo, se caracterizó por un serio esfuerzo para ordenar las finanzas nacionales y el régimen monetario. Por su inspiración se introdujo el Control de Cambios, que tuvo consecuencias beneficiosas para la economía en general. Se fundó también el Banco Central de la República, de acuerdo con los trabajos preliminares efectuados por un técnico inglés, Sir Otto Niemeyer. La organización de este banco, con características de banco emisor y regulador general de nuestra economía, se caracterizó por la preponderancia que mantenían en él las instituciones de crédito extranjeras, en detrimento del interés nacional. De aquí las críticas exaltadas con que se lo acogió desde el comienzo.

Aunque el control de los cambios, con su incidencia sobre las exportaciones, favoreció indirectamente la industrialización del país, no era éste por cierto un objetivo del régimen, sobre todo, cuando mediaban intereses de la potencia predominante. Si

algunas industrias prosperaron otras sucumbieron en agraz, merced a la política tarifaria con que el gobierno oligárquico del general Justo compensó las ventajas nacionales del control de divisas. Se dio el caso, por ejemplo, de que fuese más conveniente introducir motores "diesel" completos que sus piezas aisladas: lo que hacía imposible establecer aquí una industria de montajes, ya que el motor construido en el país resultaba más caro que el importado. Este no es más que un ejemplo de un fenómeno general, que reproduciría las condiciones denunciadas por Manuel Ugarte cuatro lustros atrás: prohibicionismo para lo propio y proteccionismo para lo ajeno.

Esta política, que mostraba la influencia preponderante en el gobierno de las fuerzas antinacionales que sofocaban nuestro desarrollo, habría de provocar una gran resistencia, que se manifestó principalmente en la acción parlamentaria del doctor Lisandro de la Torre. La interpelación sobre las carnes, que éste suscitó en el Senado, mostró a las claras el sometimiento de la acción gubernativa a los intereses concordantes de los grandes ganaderos y al trust frigorífico inglés y yanqui. Los debates se desarrollaron con gran violencia, sin que faltara el hecho de sangre. Un joven diputado santafesino adicto al interpelante —el doctor Bordabehere— fue muerto de un tiro, en pleno recinto del Senado, por un matón del régimen.

El radicalismo —que representaba la voluntad de resistencia de la mayoría del país— permanecía mientras tanto en la abstención.

Parece extraño que durante esos años, y frente a un gobierno cuya impopularidad crecía día tras día, no haya realizado una tentativa seria de reconquistar el poder, como lo pedían sus sectores jóvenes. Ello se explica por las características del elemento que había asumido la jefatura.

Alrededor de Alvear, y como reacción defensiva contra la persecución setembrina, se habían vuelto a congregarse todos los personajes del antipersonalismo inicial. Eran los eliminados por la dialéctica interna del movimiento; los que no habían comprendido la orientación revolucionaria de Yrigoyen; los liberales conformistas con el régimen y que cifraban su radicalismo en el principismo democrático y el limpio juego electoral. Más que de los hombres del justismo, desconfiaban de los "exaltados" de su propio partido, o sea de los radicales auténticos; por lo cual, en vez de ayudar las tentativas de rebelión armada se empeñaban en fre-

narlas por temor a sus consecuencias. Ello hubo de comprobarse en ocasión del movimiento de diciembre de 1933. El estado de conspiración militar era general. Numerosas guarniciones estaban comprometidas, si bien condicionaban su participación a la voz de orden del jefe del partido. Después de muchas vacilaciones, Alvear se negó a darla, por cuya razón aquéllas se abstuvieron y el movimiento quedó condenado al fracaso. Ello no fue óbice para que se acusara a los dirigentes radicales de complicidad moral; muchos fueron detenidos o confinados en las tierras australes.

Este tipo de episodios habría de ir ahondando el cisma interno del partido, originado en la convivencia de elementos tan heterogéneos. La situación se agravaría al acentuarse en su seno la tendencia de concurrir nuevamente a los comicios, propiciada por Alvear y resistida por el sector netamente "yrigoyenista". La gravedad de esta decisión consistía en sus implicaciones. El radicalismo había negado la legitimidad del gobierno surgido de la fuerza y el fraude; la vuelta al comicio significaba retractarse y reconocerlo. No obstante ello, el afán por las posiciones y otros argumentos —más o menos convincentes— prevalecieron sobre la objeción de principios, y Alvear logró imponer el levantamiento de la abstención, que se decidió el 2 de enero de 1935.

Se atribuyó esta premura a la gravitación, sobre la plana mayor del partido, de poderosos intereses extranjeros, que exigían un estado legal inobjetable para seguridad de sus inversiones. Las llamadas "leyes de entrega" —Banco Central, Coordinación de Transportes, etc.— se sancionaron a renglón seguido de esta legalización del régimen por la oposición revolucionaria.

La vuelta del radicalismo a la lucha electoral no tendría otra consecuencia importante que la de obligar al conglomerado gobernante a ajustar los resortes del fraude y a perfeccionar sus procedimientos. El radicalismo sólo ganó la provincia de Córdoba, donde asumió el gobierno un caudillo local, el doctor Amadeo Sabattini, médico de Villa María. Este realizó una administración honesta y eficaz que se distinguió por el apoyo prestado a las cooperativas eléctricas. Se ganaron también las elecciones de la Capital Federal y la mayoría en el Concejo Deliberante. En los demás distritos, gobernados por antipersonalistas y demócratas nacionales, los oficialismos se adjudicaron sistemáticamente el triunfo electoral mediante la persecución policial, el cierre del comicio a los opositores, los secuestros de libretas y la adulteración de los resultados.

El sistema alcanzó su mayor perfección técnica en la provincia de Buenos Aires, modelo de todas las demás en el ejercicio de la industria del voto fraudulento, mediante la presión y el soborno, que implicaba la colaboración estrecha del comisario local

con el caudillo que desempeñaba la intendencia municipal. Cada caudillo financiaba su poder mediante un sistema mixto de peculado en materia de concesiones y obras públicas y de tolerancia con el vicio lucrativo. El de una localidad próxima a la Capital alcanzó en esta materia una especie de grandeza: sus "gauchadas" proverbiales de las que se beneficiaban desde algunos caballeros del Círculo de Armas hasta los "gangsters" de la zona —sus principales agentes políticos— le crearon multitud de agradecidos, lo que había de darle, incluso, triunfos electorales legítimos; y el poder que adquirió por dichos favores lo hizo —no obstante su origen hampón— senador y candidato al gobierno de la provincia. Este personaje era el paradigma de los demás, que se miraban en su ejemplo; con lo cual el primer Estado argentino se convertiría en una especie de Chicago, librado a la arbitrariedad de concesionarios, proxenetas y tahures, que no perdonaban ningún medio para conservar sus situaciones.

Ello habría de verse muy bien en el movimiento que, a fines de 1935, se produjo contra el gobernador don Federico Martínez de Hoz, impuesto en ese cargo por el general Uriburu. Su resistencia a aceptar ciertos métodos y combinaciones, que sus partidarios consideraban indispensables, provocó el estallido de una verdadera revolución contra su persona, encabezada por el doctor Rodolfo Moreno, y el alzamiento de la Legislatura, integrada por los caudillos locales que le iniciaron juicio político. La provincia fue intervenida por el general Justo y el gobernador fue depuesto. Detrás de todo ello había motivos difíciles de explicar, pero que conmovían profundamente al partido Demócrata Nacional; lo cierto es que la única ocasión en que este partido estuvo a punto de dividirse (como puede verse en la prensa de la época) fue cuando se trató el otorgamiento de la lucrativa concesión de explotación del juego para los casinos de la provincia. El sucesor de Martínez de Hoz, doctor Manuel Fresco, no tendría problemas con sus correligionarios, no obstante decirse "nacionalista", y sería el inventor del "voto cantado", la última variedad del "fraude patriótico".

Todas estas cosas, que trascendían al comentario público, mostraban al gobierno envuelto en una turbia atmósfera de peculados, que acentuaba contra él la resistencia general. Varias publicaciones independientes —como la revista "Señales"— denunciaban valientemente los escándalos. El pueblo seguía siendo, en su mayoría, radical. Pero desgraciadamente los representantes del radicalismo no habían permanecido ajenos a la corrupción. Se señalaba la actuación decisiva de diputados y concejales de este partido en la prolongación dolosa de la concesión a la empresa de electricidad CADE. Lo cual —si bien denunciado en primer tér-

mino por hombres pertenecientes al radicalismo— debilitaba la posición opositora, pues la privaba de su prestigio moral. A este debilitamiento debe atribuirse la pasividad con que el país, hasta 1938, soportó la prolongación del fraude.

De la política externa del general Justo poco puede decirse, salvo lo que se refiere al afianzamiento de la situación colonial a que nos había reducido la influencia de la oligarquía —visible en el pacto Roca-Runciman— y las habituales cortesías internacionales. No debe olvidarse el consabido (y significativo) viaje al Brasil, según la tradición de Mitre y Roca. Mientras renunciáramos a ejercer influencia política en el Continente, en efecto, no había motivos para que esa amistad no fuese eterna y sin tropiezos. La más interesante de las convenciones que se firmaron con la presencia en Río de Janeiro del presidente argentino (aparte de los habituales compromisos antibélicos) consistió en la que se refería a la expurgación de los textos de historia y geografía conducente a obtener que las futuras generaciones no se enterasen de los motivos de fricción y de las guerras que ambos pueblos tuvieron en el pasado.

Por lo demás, el pacifismo doctrinario más ortodoxo, e igualmente la más ortodoxa indiferencia por el destino del resto de América. No se logró impedir, por ello, el estallido de la sangrienta guerra entre Bolivia y Paraguay. La mediación de A.B.C.P. iniciada por nuestro canciller fracasaría. Obtendría, en cambio, un éxito académico la conferencia del Pacto Antibélico, del mismo autor —primor jurídico que la mayor parte de los países firmaron, conscientes de su inocuidad, y que le valdría a aquél el premio Nobel de la Paz—. Debe recordarse la influencia del factor familiar, tantas veces aludido en estas páginas. El canciller era un nieto de Andrés Bello, cuya actuación el lector conoce, y continuaba la línea política de su ilustre abuelo.

La presidencia de Justo terminaba en medio de una relativa prosperidad material y una gran depresión espiritual. El único partido nacional de oposición —el radicalismo, encabezado por Alvear— se hallaba debilitado por la división interna, desvirtuado en su orientación general (si bien fermentaban en su seno fuerzas jóvenes y creadoras que luchaban por imponerse), entregado a un electoralismo corruptor para conquistar minorías, ya que el fraude le imposibilitaría el triunfo, e incapacitado para la acción revolucionaria. Aunque constituía la mayoría teórica del país, no podía alcanzar el poder mientras permaneciese firme la máquina

del fraude, que el oficialismo había organizado y que mantenía con el pretexto del orden: para salvar al país, según sus doctrinarios, de la "demagogia izquierdista", proclive al comunismo, que se encarnaba en el partido histórico.

Porque tales eran los equívocos en que se debatía nuestra política de esos años. Como reacción contra los tópicos conservadores y pseudo fascistas del setembrismo y sus epígonos, el comando del radicalismo se había deslizado hacia la izquierda, arrastrado por los elementos que habían ingresado a sus filas por razones de oportunismo electoralista, a raíz de la jefatura de Alvear. No era ajena a esa desviación la influencia del "frente popular" entonces en auge; y es notorio que Alvear tendía a convertir el partido en un radical-socialismo a la francesa conforme al modelo que admiraba, reemplazando los viejos objetivos nacionales de Yrigoyen por una dosis de anticlericalismo masónico, acompañado por un moderno reformismo social, que lo hiciera digno de encabezar un "cartel de izquierda". Con ello justificaba al oficialismo dándole ocasión de instituirse, ante la opinión moderada y bienpensante, en representante del "orden" (Dios, patria y hogar), contra las tendencias disgregadoras, aunque éste fuese un orden de factoría. No iba más allá la influencia fascista, visible asimismo en la intensificación del rigor policial. Por utilizarse a favor de aquel "orden" se calificó de "patriótico" al fraude electoral. Resultaba así tildado indirectamente de antipatriótico el partido en cuyo seno subsistía, a pesar de todo, la mayor suma de vivencias nacionales, mientras que asumían la defensa farisaica de la nación los mismos que la entregaban al extranjero. La celebración del Congreso Eucarístico Internacional de Buenos Aires, en 1934, mostró la existencia en el país de una enorme mayoría católica, por lo cual el oficialismo justista, huérfano de opinión, adoptó también desde entonces una acentuada definición clerical.

Lo peor es que de este equívoco sufría también el sector del nacionalismo que no se había libertado del lastre "uriburista" y que se definía sobre todo, como antirradical. No obstante su rechazo teórico del régimen total y su estado de conspiración permanente, que lo hizo creer en la posibilidad de acción de varios generales o coroneles sucesivos (más o menos retirados o disponibles), actuó de hecho como un aliado del oficialismo, y sus diversas "legiones" y "ligas" sólo se erizaban ante el peligro de una restauración del "régimen depuesto", o por conflictos internos del oficialismo, como en la defensa de Martínez de Hoz. El mismo Lugones cayó en esa ilusión, aunque al cabo hubo de retirarse, desengañado y lleno de amargura. La verdad es que el movimiento estaba condenado al fracaso porque llevaba consigo el lastre de un fracaso; por su vinculación demasiado notoria con hombres del régimen (Sánchez Sorondo, Fresco) que la halaga-

ban, y por su falta de bandera, ya que un nuevo 6 de setiembre no ilusionaba a nadie.

El estallido en 1936 de la guerra civil española —con las posiciones que frente a ella se adoptaron, influidas por motivos locales— contribuyó a aumentar todavía la confusión reinante.

No cejó, sin embargo, el debate político en esos años, ni la preocupación por los problemas de la patria en grupos de hombres ajenos al régimen y cada vez más numerosos y esclarecidos. La nueva generación empezó a buscar la causa de los males y la posibilidad de los remedios en el estudio intensivo de la historia. Surgió un elenco de pensadores, economistas, escritores, políticos. Aunque las posibilidades de redención del país parecían lejanas todavía, los mejores de esos hombres sólo la esperaban de una revolución integral.

* * *

En 1938 debían efectuarse las elecciones de renovación presidencial. Con la perpetuación del fraude como institución, era evidente que el general Justo podía decidir sobre el nombre de su sucesor en el mando. Si bien el radicalismo tenía su candidato indicado en la persona del doctor Alvear, no ocurría lo propio con el oficialismo, en cuyo seno luchaban varias candidaturas, entre las que se destacaba la del doctor Melo, a quien el gobernador de Buenos Aires había prometido su apoyo.

Un día se despejó la incógnita. El doctor Roberto M. Ortiz, ex ministro de Alvear en su primera presidencia, fue agasajado en la Cámara de Comercio Británica. En el discurso en que se le ofrecía el homenaje, el presidente de dicha institución manifestó el agrado con que el comercio inglés vería la designación del huésped ocasional para la presidencia de la República. El doctor Ortiz, emocionado, contestó aceptando ese honor.

Inmediatamente, los dóciles partidos políticos del oficialismo tomaron al vuelo la indicación e hicieron suyo al candidato del comercio inglés. Lo proclamaron, pues, los antipersonalistas y los demócratas nacionales, acompañado por el doctor Ramón Castillo para la vicepresidencia.

Las elecciones se realizaron con un fraude escandaloso en todo el país, introduciéndose la novedad del cambio del contenido de las urnas en las oficinas del Correo. Alvear fue derrotado.

El 20 de febrero asumió Ortiz el mando. El día antes había puesto fin a su vida Leopoldo Lugones. En momentos en que el electo recibía las insignias, un grupo de amigos acompañaba a su última morada en la Recoleta los restos del más grande argentino de su tiempo.

ANEXOS CRONOLÓGICOS¹

¹ Con la muerte de Leopoldo Lugones finaliza el plan original y la redacción final de la obra de mi padre, quien en noviembre de 1955 sufre un accidente automovilístico casi fatal que lo priva, durante años, de su capacidad de trabajo. No así de la satisfacción de contemplar la creciente difusión e influencia de este libro. A requerimiento de sus editores de entonces, escribió dos reseñas de actualización que aquí se transcriben textualmente como: 1) *La disidencia en el poder. Ortiz y Castillo* y 2) *Las primeras presidencias de Perón*. Los puntos restantes constituyen una somera cronología de hechos políticos del pasado inmediato, reunidos por mí (Juan Manuel Palacio, 1980).

1. LA DISIDENCIA EN EL PODER - ORTIZ Y CASTILLO

El doctor Roberto M. Ortiz se hizo cargo del gobierno el 20 de febrero de 1938. La suma de votos que sacó en el escrutinio le daba una fuerte mayoría sobre su rival accidental, que era no obstante el jefe del partido mayoritario; la presunción de fraude era, pues, evidente, si bien difícil de probar. Había obtenido 1.097.430 sufragios. Alvear-Mosca solamente 814.852. La certeza de que mediaría fraude atenuó el entusiasmo ambiente e hizo que la concurrencia al comicio fuera escasa y que hubiera un respetable número de abstenciones.

Buenos Aires aumentaba de manera insospechada. Se abrían las diagonales en el centro, se ensanchaban las avenidas, crecían las casas, decuplicando sus pisos, multiplicábanse los autos y se sentían las calles despobladas de su elemento habitual y llenas de gentes de otros idiomas y de otras naciones. El porteño se consideraba cada vez más extraño a su ciudad y hacía el aprendizaje de la gran urbe. Porque Buenos Aires ya lo era. En pocos años, durante la vida de una generación, la ciudad antigua había terminado su ciclo y se construía rápidamente la ciudad nueva, con sus edificios y sus comodidades para los casi tres millones de habitantes que ya estaban allí.

Teníamos un obelisco, en reemplazo de la vieja pirámide, que había pasado a segundo plano. Teníamos, además de la Avenida de Mayo, dos avenidas diagonales a las calles de la metrópoli. Todo esto y el mero transcurso del tiempo, hacía que los viejos pobladores se reconociesen en la nostalgia y en la amenaza de las canas indiscretas ¿Cuántos coches de alquiler quedaban en las estaciones, de los de antes? ¿Cuántas victorias que fueron el juguete de la juventud? Los que a los veinte años habían subido a ellas las recordaban con un suspiro dentro de la añoranza melancólica que agrupaba a los chaqués de colores, a los cuellos palomita y a los mangos de bastón.

La política también cambiaba. Ya no se encontraban en sus filas los hombres notables de antes, sino otros, de distintas modalidades.

Las viejas figuras habían desaparecido. En su lugar ocupaban los puestos de batalla segundones con título. Castro, Argañaraz, Arrieta y Suárez Lago, conservadores (o "demócratas nacionales" para honrar la jerga postsetembrina) y Tamborini y Laurencena, radicales, constituían el elenco más eminente. En el socialismo se mantuvo firme aún la valiosa figura del doctor Alfredo L. Palacios. El doctor Lisandro de la Torre se había pegado un tiro dejando una carta que parecía la descripción de tiempos tan inclementes, y su desaparición provocaba un verdadero duelo nacional. Con él se iba una época. Hay que leer los comentarios periodísticos de la tragedia para comprender cómo la prensa diaria daba la nota del paso de un pasado cierto y categórico hacia un incierto futuro.

El doctor Ortiz se daba perfecta cuenta de los tiempos que le tocaban vivir. Ducho en las intrigas de la política, había comprendido que su salvación se encontraba en seguir una línea opuesta a la del general Justo, aunque sin confesarlo paladinamente. Tenía para ello a sus ministros —del Interior, el doctor Diógenes Taboada; de Relaciones Exteriores, el doctor José María Cantilo; de Hacienda, el doctor Pedro Groppo; de Justicia e Instrucción Pública, el doctor Coll; de Hacienda y Agricultura, los doctores Padilla y Alvarado— que pertenecían al círculo de los profesionales de la época, dóciles a las órdenes presidenciales.

Hábil en el trato, avezado en las artes de la especulación y el silencio, no adelantó nada durante su época de propaganda sobre lo que haría una vez elegido, los que votaban ni lo sospecharon; empezando por el más entusiasta de ellos. Tampoco en los primeros tiempos de la presidencia dijo nada que hiciese adivinar el futuro, salvo una que otra reflexión sobre el voto secreto, que era, por lo demás, el tema del régimen. Pero, ¿se mantendría esa opinión? Las cosas siguieron así con una mayoría de votos favorable a la actitud principista del doctor Ortiz, hasta que en 1940, después de las elecciones provinciales en Buenos Aires, se develó la incógnita. Apareció un decreto por el cual se deponía al gobernador y se declaraba intervenida la provincia delincuente.

Después de una sensación inmediata de estupor se produjo en seguida la nueva disposición de las fuerzas. Ortiz había dado fe de su disposición de radical, por encima de todas las variaciones ocurridas en los últimos tiempos, y al actuar en esa forma seguía de cerca la línea de su partido. Inmediatamente, los radicales de Alvear lo rodearon declarando que el presidente daba un gran ejemplo de valor cívico y entereza moral, ofreciéndole lisa y llanamente su apoyo. Los conservadores, por su parte, ¿qué iban a hacer sino oponérsele? Lo tenían al vicepresidente, doctor Ramón S. Castillo, como jefe de fila. La provincia intervenida

—Buenos Aires, cuyo gobernador era el doctor Manuel Fresco, uno de los votantes (y el más entusiasta) del doctor Ortiz— constituía uno de los puntales del régimen. Tocarla significaba cambiar el sistema de fraude y voto cantado por otro en que la voluntad pública tuviese la supremacía.

Es de advertir que la única disidencia del doctor Ortiz con quienes lo habían elegido, era la cuestión de la obtención leal del sufragio. El país sufría con la continua falsificación de la voluntad real de su pueblo en las elecciones y de la cura de ese mal provendría el debilitamiento de un estado de tensión colectiva. En los otros capítulos de la administración no había disidencia. Sobre la parte monetaria, por ejemplo, todos compartían la opinión del liberalismo, que señalaba la máxima libertad en todos los asuntos y el mínimo de coerción ejecutiva.

Pero el doctor Ortiz estaba muy enfermo. A los pocos meses de ese hecho, debió pedir licencia y delegar el mando en el doctor Castillo, su rival, que sin el menor esfuerzo de su parte accedía a la primera magistratura. Con la consecuencia inevitable y esperada: la restitución del fraude.

No es el caso de relatar las mociones de los conservadores en el Senado para enterarse del estado verdadero del doctor Ortiz: la proyectada reglamentación del artículo 45 de la Constitución; las defensas de Palacios, Tamborini y Laurencena, así como de Cooke y otros en las Cámaras. Ni del asunto del Palomar en la Cámara de Diputados, con la culpabilidad de varios diputados de diversos sectores. Había una gran depresión del espíritu público por lo cual todas las variedades del delito andaban sueltas y al alcance de las manos. Estábamos en pleno centro de la "década infame".

El principal acontecimiento que ocurrió en el mundo en los años 1939 y siguientes fue el estallido de la segunda guerra europea. Ortiz, viejo abogado del Ferrocarril Oeste, de la banca Tornquist y de la Unión Telefónica, era notorio por quien simpatizaría. Mayer, Robirosa y Leng se cuidaban mucho de sus agentes; y no fracasaría un movimiento por falta de ímpetu suficiente. Inmediatamente se produjo el surgimiento de una entidad, Acción Argentina, que significaba la unión de todos los intelectuales amigos del imperialismo democrático. Al mismo tiempo surgía un periódico, "Argentina Libre", que perseguía idénticos fines. La enfermedad del doctor Ortiz puso fin a los sueños intervencionistas y Castillo planteó enérgicamente el mantenimiento de la neutralidad.

Castillo siguió al frente del gobierno del doctor Ortiz, no sin producirse violentas rencillas con el titular. Pero el presidente estaba herido de muerte. Apenas acababa de terminar uno de los debates parlamentarios, con exposición de un médico oculista sobre la enfermedad, Ortiz se sintió mal y murió al poco tiempo. El doctor Castillo continuaría el mandato, ya sin interferencias.

* * *

El doctor Castillo no se destacaba sobre el resto de los políticos de la época. Jubilado en la Universidad, en la clase de comercial, primer curso, había encontrado su descanso en la vida pública. Aunque en su conversación se confesase nacionalista y elogiase a quienes profesaban esas ideas, como particular y sobre todo como abogado, era un hombre del régimen. Es decir, que consideraba justa y aplicable cualquier medida favorable o no a la nacionalidad, siempre que fuese dictada por una ley. Si esto no existía, el proceder así con desmedro de los textos legales contrarios, le parecía resueltamente inconcebible.

Con un nacionalista de ideología tan cómoda, pudo seguir el funcionamiento del sistema sin mayores perturbaciones en medio de una oposición creciente. Castillo mantuvo a raya a los agentes publicitarios del interés extranjero, con estado de sitio y todo, y un proyecto de ley sobre marina mercante nacional. Disolvió también el Concejo Deliberante, que se había convertido en un centro de rapacería política. Estos dos actos bastan para hacer memorable su mandato, sin contar las innumerables providencias de carácter administrativo que muestran la honradez de un presidente que vivió y murió sin elevarse sobre el nivel de sus compatriotas más pobres.

Pero el período debía terminar y no se habían realizado las proclamaciones del nombre del sucesor a la primera magistratura, que debía ser hechura del presidente. Ya vimos cómo el doctor Castillo no podía obrar en esta materia más que como un mero ejecutor de la legalidad: ésta le señalaba al doctor Robustiano Patrón Costas como reemplazante. Patrón Costas, político de Salta, magnate de la industria azucarera, era uno de los hombres más comprometidos con la política continuista y su presidencia nos auguraba la facilidad para entrar en la guerra del brazo de Estados Unidos. Esto debió despertar la atención de las fuerzas armadas que el día 3 de junio hicieron visitar a Castillo por su ministro de guerra, recibiendo la respuesta consabida.

El 4 por la mañana la Convención del Partido Demócrata se reuniría para votar definitivamente el nombre del magnate sal-

teño y la forma de su elección. No habría tiempo. Antes de la hora indicada, fuerzas de Campo de Mayo a las órdenes del general Rawson establecían los itinerarios en las calles del centro e inauguraban una nueva época bajo su hegemonía. Había estallado la insurrección militar.

enero de 1944 se rompieron las relaciones con Alemania y el Japón. En febrero, un movimiento interno provocó la renuncia del general Ramírez, quien fue reemplazado por el ministro de la Guerra, general Edelmiro J. Farrell.

2. LAS PRIMERAS PRESIDENCIAS DE PERÓN

Era evidente que el país necesitaba —y ansiaba— una revolución fundamental en los aspectos social, político y económico y en el sentido en que la había insinuado Yrigoyen. La revolución de setiembre había establecido un régimen que, en sustancia, no era otra cosa que la restauración por la fuerza de lo que la ciudadanía había repudiado: un salto hacia atrás. Había establecido una oligarquía política que se sostenía por el rigor policial y el fraude electoral. Este régimen no había podido renovarse internamente, y en las postrimerías de la presidencia del doctor Castillo preparaba una nueva candidatura impopular en la persona de Robustiano Patrón Costas, que iba a imponerse por un nuevo fraude.

Los problemas nacionales, en lugar de resolverse, se habían agudizado, principalmente el que planteaba la injerencia política de los consorcios internacionales que regían los servicios públicos. Cada vez más, el país se convertía en una colonia del extranjero. Todas las tentativas de recuperación nacional, por medio de la industria, eran combatidas: parecíamos condenados a vegetar perpetuamente. Se perseguía, bajo acusación de comunismo, a los sindicatos obreros que reclamaban salarios más justos. Y todo ello ocurría en momentos internacionales difíciles, cuando la segunda guerra europea suscitaba problemas que era necesario resolver y anunciaba un porvenir oscuro que era indispensable aclarar.

Como los partidos políticos de la oposición, anarquizados, parecían incapaces de hacer frente a la situación, un importante sector del ejército asumió la responsabilidad del cambio. El 4 de junio de 1943 las tropas de Campo de Mayo, se movilizaron sobre Buenos Aires al mando de Rawson y provocaron la caída del gobierno. Se estableció una junta militar bajo la presidencia de dicho general, quien renunció al día siguiente, siendo reemplazado por el general Pedro P. Ramírez. Inmediatamente se intervinieron las catorce provincias y se disolvió el Congreso. Sobrevino un período agitado, al que no era ajena la repercusión de los acontecimientos internacionales, ya que estaba ocurriendo la liquidación de la guerra mundial. En el seno del gobierno actuaban diversas tendencias que pugnaban por prevalecer. El 25 de

* * *

Desde los primeros momentos se sintió en la acción del gobierno revolucionario la influencia de una poderosa personalidad: la del coronel Juan D. Perón, que inició sus actividades administrativas como subsecretario del Ministerio de Guerra y a quien se le atribuía la paternidad de la proclama del 4 de junio. En noviembre de 1943 se lo designó titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión, creada por su iniciativa, y en marzo del año siguiente, cuando Farrell fue elevado a la primera magistratura, lo sucedió en la cartera de Guerra. Casi inmediatamente se lo eligió vicepresidente de la República para caso de acefalía, en cuyo carácter reemplazó a Farrell durante la visita oficial que éste realizó al Paraguay, en agosto de 1945. En su triple actividad de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Perón logró imprimir al gobierno revolucionario la orientación que creía adecuada para el logro de sus objetivos, que consistían en trascender el plano meramente político y encarar resueltamente los problemas sociales, candentes y perpetuamente postergados o ignorados.

Su acción en este terreno, la calurosa exposición de sus ideas en discursos y conferencias, al par que el contacto directo con los dirigentes políticos y sindicales, que hallaban puerta abierta en su despacho, le dieron una rápida e inesperada popularidad, convirtiéndolo en el hombre representativo del movimiento y en el candidato indicado para encabezar el futuro gobierno legal. A la adhesión de nuestros gremios obreros, había logrado sumar la de un sector importante del radicalismo tradicional, del nacionalismo y de la opinión independiente. Ello no podía dejar de alarmar a los intereses amenazados, que se coaligaron para la defensa.

En los primeros días de octubre de 1945 un motín militar urdido por una minoría de jefes de Campo de Mayo impuso su alejamiento de las funciones de gobierno y su arresto en la isla de Martín García.

* * *

169

Pero los sectores populares que veían en el coronel Perón al abanderado de sus aspiraciones, no habrían de permitir el fácil triunfo de esa intentona, que no disimuló por lo demás, dado el origen y tendencia de quienes la encabezaban, su cariz reaccionario. Inmediatamente se movilizaron los sindicatos obreros, los grupos políticos afines y la oficialidad del ejército animada de espíritu renovador. El 17 de octubre, desde las primeras horas de la tarde, empezaron a afluir a la Plaza de Mayo, de todos los puntos de la ciudad, grupos numerosos de obreros y ciudadanos de diversa procedencia que al mediar la tarde se habían convertido en una multitud clamorosa que exigía la liberación y la presencia del líder. Las órdenes impartidas a la policía de disolver por la fuerza los grupos e impedir más manifestaciones no habían sido obedecidas por esa tropa, ganada a la causa popular. El grupo reaccionario tuvo que dimitir. El coronel Perón debió ser llamado para dirigir la palabra al pueblo. Ese acto consagró popularmente su candidatura.

* * *

Tres partidos proclamaron la candidatura del coronel Perón a la presidencia de la República: una fracción numerosa del radicalismo, bajo el rótulo de Unión Cívica Radical, Junta Renovadora; un Partido Laborista, reclutado principalmente en los sindicatos, a la manera del laborismo inglés y un Partido independiente, que congregaba elementos de la más variada procedencia. Para acompañarlo en la fórmula se eligió al doctor J. Hortensio Quijano, de origen radical, quien en el desempeño de la cartera del Interior había sido uno de los más activos agentes del pensamiento revolucionario.

Sus adversarios, congregados en un conglomerado que se llamó Unión Democrática, le opusieron las candidaturas del ex ministro de Alvear, doctor José P. Tamborini y del doctor Enrique Mosca.

En las elecciones celebradas el 24 de febrero de 1946, bajo la garantía de las fuerzas armadas de la Nación, la fórmula Perón-Quijano obtuvo 2.500.000 votos y 304 electores, contra 1.200.000 votos y 72 electores de sus adversarios.

El 4 de junio de 1946 asumió la presidencia el coronel Perón. Una ley del Congreso lo ascendió poco después a general de brigada.

Desde sus primeras manifestaciones públicas, el general Perón expresó la finalidad de su acción que consistía en hacer de la Argentina una nación "socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". Al conjunto de su doctrina que ten-

día particularmente a realizar el bienestar de las clases obreras mediante la práctica de la justicia social, se lo ha llamado justicialismo. El Congreso de la Nación, por ley, declaró al justicialismo doctrina nacional.

* * *

El acto más trascendente del gobierno del general Perón, en el orden institucional, fue la reforma de la Constitución que nos regía y cuyo carácter liberal la hacía inadecuada para los tiempos nuevos.

De acuerdo con los preceptos vigentes, el Congreso decidió, el 28 de agosto de 1948 la necesidad de reformar la Constitución. Acto seguido se llamó a elección de convencionales. El 5 de diciembre celebraron su primera reunión en el recinto del Congreso Nacional, designado para las deliberaciones, con la presencia de una minoría radical que a poco invocó un pretexto para retirarse del recinto, sin que ello perjudicara el quórum de la asamblea. El 11 de marzo de 1949 se sancionó la reforma, que entró en vigencia el 16.

Entre las principales innovaciones contenidas en los 107 artículos de la Constitución reformada se encuentran la inclusión, en el capítulo de derechos y garantías, de los derechos del trabajador (proclamados por Perón el 4 de junio de 1947); de los derechos de la familia; de los derechos de la ancianidad; y los de la educación y la cultura. Se proclamó el principio de que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social, así como la función social de la propiedad privada. Con lo cual se consagraba la intervención del Estado en las actividades económicas, como también en el dominio exclusivo de los bienes inherentes a la defensa: minas, yacimientos petrolíferos, de carbón y gas y fuentes de energía en general, y en la administración de los servicios públicos.

Todas las provincias modificaron sus Constituciones locales para concordarlas con la Constitución reformada.

* * *

El general Perón ha sido el iniciador en el país de la política moderna de planeamiento. El primer plan, desarrollado durante su primera presidencia (1946-1952), era un conjunto de 27 leyes orgánicas con reformas de carácter político, económico, militar, etc. Los propósitos perseguidos con dicho plan fueron la organización del gobierno, la independencia económica, la justicia so-

cial y la ejecución de obras públicas postergadas, en beneficio de la población trabajadora.

Según el general Perón, la justicia social tiene dos aspectos: la previsión y la ayuda. En el primero actúa la Secretaría de Trabajo y Previsión, que vigila la aplicación de las leyes sociales; en el segundo, la Fundación Eva Perón, creada por iniciativa de la difunta esposa del Presidente, a quien una ley del Congreso designó Jefa Espiritual de la Nación.

Cuando el gobierno del general Perón llegaba a su fin, el Partido Peronista lo designó para un nuevo período. Un movimiento de opinión interna de dicho partido propiciaba para el segundo término a la señora Eva Perón. Como ésta renunciara, se designó nuevamente al doctor Quirano. El fallecimiento del vicepresidente, ocurrido al poco tiempo, hizo que se lo reemplazara por el vicepresidente del Senado, contralmirante Alberto Teissaire. En las elecciones para el período 1952-1958, la fórmula Perón-Teissaire triunfó por gran mayoría sobre la fórmula opositora, integrada por los doctores Ricardo Balbín y Arturo Frondizi.

El general Perón señaló como objetivo de su segundo gobierno la realización de un segundo Plan Quinquenal que constaba de treinta y un capítulos, dividido en cinco partes, a saber: 1) Acción Social; 2) Acción Económica; 3) Comercio y Finanzas; 4) Servicios y Trabajos Públicos, y 5) Planes Militares y Complementarios. En dicho plan se preveía una acción sistematizada para poner en práctica los principios proclamados por el justicialismo. Diremos que su nota fundamental consistía en que el instrumento para el logro de sus objetivos era la previa "organización del pueblo" en los órdenes social, político y económico.

Resulta difícil expresar en pocas líneas los resultados de casi diez años de gobierno singularmente laborioso. Sólo cabe una enumeración de lo más importante.

1. En primer término, las nacionalizaciones. Se han nacionalizado las empresas de ferrocarriles, los teléfonos, las compañías de gas en manos de consorcios extranjeros, con lo cual se dio el primer gran paso hacia la independencia económica de la Nación. También el Banco Central, controlador de nuestra econo-

mía, de cuyo funcionamiento se eliminó la intervención de la banca extranjera.

2. En segundo término, las leyes de carácter social. Se aumentaron los salarios y sueldos, se estableció el aguinaldo anual obligatorio y las vacaciones pagas, así como las indemnizaciones por despido injustificado. Se instauró un régimen completo y racional de jubilaciones, seguro y retiros obreros. Un nuevo ministerio, el de Trabajo y Previsión, reguló las relaciones entre el capital y el trabajo.

3. En tercer término, la organización del comercio exterior. El Consejo Económico Nacional y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (I.A.P.I.) fueron los instrumentos de intervención estatal en la comercialización de los productos del trabajo argentino, con el objeto de sustraerlos a las maniobras especulativas y obtener mejores rendimientos. El Banco Central tuvo a su cargo todo lo referente a cambios con moneda extranjera y el manejo de las divisas disponibles.

CENTRO DE ESTUDIANTES

170

3. LA REVOLUCIÓN DE 1955/58

1955

Mayo. El Poder Ejecutivo envía al Congreso el proyecto de provincialización de todos los territorios nacionales. El Senado lo aprueba el 2 de junio y Diputados el 10.

Junio. La opinión católica y la oposición realizan una manifestación callejera multitudinaria el día 11, con motivo de celebrarse la festividad de Corpus Christi. Frente al Palacio Legislativo se apaga una lámpara votiva en homenaje a Eva Perón y aparece una bandera argentina quemada. El día 16, aviones de la Marina de Guerra bombardean Plaza de Mayo y otros puntos céntricos de Buenos Aires, con subido saldo de muertos y heridos sobre cuyo número no se suministra información oficial. Esa noche y durante la madrugada del 17, una turba incendia la Curia metropolitana y varios templos históricos de la ciudad. El Presidente reemplaza a su ministro del Interior Angel Borlenghi por Oscar Albrieu y formula un llamado a la conciliación nacional, levantando el estado de sitio implantado a raíz de los sucesos del día 16.

Julio. El 22, el almirante Teissaire, vicepresidente de la República, renuncia a su titularidad al frente del Partido Peronista y es reemplazado por Alejandro Leloir. El 27, en un mensaje radiofónico, el jefe de la Unión Cívica Radical —Arturo Frondizi— sostiene que “las fuerzas armadas no deben amparar a los regímenes que suprimen las libertades o atacan contra la soberanía del país”.

Agosto. Ante una multitud que cubre la Plaza de Mayo, el general Perón dice —en la noche del 31— que “hemos ofrecido la paz y no la han querido. Ahora hemos de ofrecerles la lucha”.

Setiembre. En la madrugada del 16, se pronuncian guarniciones de Córdoba, Río Santiago y Puerto Belgrano, al mando del general Eduardo Lonardi. Se designa Jefe de las Fuerzas de Represión al general Franklin Lucero. Ante el avance de la Flota de Mar sobre la Capital, el presidente Perón ordena al general Lucero iniciar tratativas de paz. El 19, Perón declara que el Ejército está en condiciones de continuar su obra y renuncia a su cargo delegando el poder en una Junta Militar

compuesta por los generales Emilio Forcher, Carlos Wirth y Angel Manni. El 21, esta Junta reconoce la designación de Eduardo A. Lonardi como Presidente Provisional de la República. El viernes 23 asume el general Lonardi en Buenos Aires proclamando, como lema de su gestión futura, la fórmula “ni vencedores ni vencidos”. Perón se exilia en el Paraguay.

Noviembre. El día 13 es derrocado el general Lonardi y asume la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu, con la anuencia del vicepresidente —almirante Isaac F. Rojas— y de la Junta Consultiva Nacional, organismo constituido por todos los partidos políticos con exclusión del justicialismo. El 16 se interviene a la C.G.T. y el 30 se dispone la disolución del Partido Peronista y la devolución del diario “La Prensa” a sus anteriores propietarios.

1956

Mayo. El día 1° se declara vigente la Constitución de 1853, con sus reformas de 1860-66 y 1898.

Junio. En la noche del 9 se sublevan algunas unidades del Ejército a las órdenes del general Juan José Valle. Ante la ausencia del presidente Aramburu, que se encontraba en Rosario de Santa Fe, dirigen la represión el almirante Rojas y el general Arturo Ossorio Arana, ministro de Guerra. Los insurrectos, con el general Valle a la cabeza, son condenados a muerte y fusilados.

Julio. Durante la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas —realizada el día 6— el Presidente anuncia el llamado a elecciones generales para el último trimestre de 1957 y la preparación de una ley electoral “que reemplace los instrumentos del fraude creado por el régimen depuesto”.

Noviembre. El día 24 son destituidos el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor, el Jefe de la Primera División Motorizada y el Comandante del arma de Caballería.

1957

Abril. Por decreto fechado el 12, se convoca a elecciones para la formación de una Convención Constituyente.

Julio. El 90 por ciento del electorado acude a las urnas, el día 28, con los siguientes resultados: 2.115.861 votos en blanco; 2.106.524 votos para la Unión Cívica Radical del Pueblo; 1.847.603 votos para la UCRI; 582.589 votos para el nuclea-

miento conservador; 420.606 votos para la Democracia Cristiana; 263.805 votos para la Democracia Progresista y 228.821 votos comunistas. Perón había ordenado el voto en blanco.

Agosto. El 29 se reúne la Convención Constituyente, con 205 miembros. En su sesión de apertura se retiran los 77 convencionales de la UCRI, impugnando la legalidad de la convocatoria y declarando la caducidad de sus mandatos. La deserción de convencionales se extiende a las demás fuerzas políticas, al punto de que la Convención efectúa su última sesión —el 14 de noviembre de este mismo año— con poco más de 60 miembros.

Diciembre. En su mensaje de fin de año, tras la fijación de elecciones generales para el año siguiente con proscripción del peronismo, el presidente Aramburu augura que 1958 asistirá "al triunfo del pueblo, la democracia y la libertad".

4. GOBIERNO DE FRONDIZI

1958

Febrero. El acto eleccionario del día 23 arroja los siguientes resultados: Fórmula UCRI (Frondizi-Gómez), 4.090.840 votos; fórmula U.C.R. del Pueblo (Balbín-del Castillo), 2.640.454; fórmula democristiana (Ayarragaray-Sueldo), 289.245; fórmula socialista (Palacios-Sánchez Viamonte), 262.369; fórmula conservadora popular (Lima-Maldonado), 172.721; fórmula demócrata progresista (Molinas-Thedy), 127.465. Perón había apoyado —a último momento— la fórmula Frondizi-Gómez, pese a lo cual se registra un elevado número de votos en blanco: 836.658.

Mayo. Asume, el día 1°, el nuevo Presidente de la República, Dr. Arturo Frondizi.

Julio. Se anuncia la "batalla del petróleo" y se firman convenios entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales y las empresas Astra, Petrofina, Panamerican Oil, Lane Wells, Loeb Rhoadres y Sea Drilling.

Setiembre/Octubre. Se debate en el Congreso y en las calles el artículo 28 del decreto 403/12/55, en virtud del cual las universidades privadas pueden otorgar títulos profesionales. "Lai-cos" y "libres" —partidarios y oponentes a la derogación del artículo 28— se enfrentan en disturbios que causan 50 heridos y 110 detenidos solamente en la Capital Federal. La "enmienda Domingorena" determina la vigencia del discutido artículo 28. El 10 de octubre las organizaciones obreras resuelven un paro general de repudio a la política económico-social del gobierno.

Noviembre. El día 11 se implanta el estado de sitio. Tras denunciar una conjura contra el país, el vicepresidente Gómez renuncia a su cargo. El 20 es elegido José María Guido, como vicepresidente primero del Senado.

1959

Enero. El peronismo retira abiertamente su apoyo al gobierno y las organizaciones obreras acuerdan un paro general de 48

horas para los días 17 y 18, lo que determina el reemplazo del ministro de Trabajo. El presidente Frondizi viaja a los EE.UU. y Chile, entrevistándose con el general Dwight Eisenhower y el Dr. Jorge Alessandri.

Junio. Se produce una crisis política militar en torno a los contenidos del "pacto" entre Perón y el gobierno que recibió su apoyo electoral. El ministro Vítolo desmiente declaraciones de Perón en Santo Domingo sobre la existencia e incumplimiento del "pacto" y el presidente Frondizi afirma, el 14, que su firma fue falsificada. El 17 renuncia el subsecretario de Guerra, coronel Manuel Reimundes y el 18 el ministro, general Héctor Solanas Pacheco. Se generalizan planteos de mandos en el Ejército y la Armada. Son designados nuevos ministros el general Elbio Anaya (Guerra) y el contralmirante Gastón Clement (Marina). Alvaro Alsogaray asume como ministro de Economía e Interino de Trabajo y Seguridad Social. Comienza en Tucumán una huelga del gremio azucarero que durará hasta agosto.

Setiembre. Crisis militar. Ante su deposición por el ministro de Guerra, el general Carlos Severo Toranzo Montero —Comandante en Jefe del Ejército— se declara en rebeldía, el día 2. El general Elbio Anaya ordena su represión pero el presidente Frondizi lo desautoriza mediante el envío de un agente mediador: el general Rodolfo Larcher. Renuncia el general Anaya, se nombra ministro, en su reemplazo, a Larcher y éste repone a Toranzo Montero como Comandante en Jefe de la Fuerza. Los días 23 y 24 paran 90 sindicatos y 2 millones de obreros.

1960

Febrero. Visita la Argentina el Presidente de los EE.UU., general Dwight Eisenhower. Se anuncia oficialmente que las fuerzas de seguridad han efectuado más de 1.600 allanamientos en busca de armas y material subversivo.

Marzo. Se implanta por decreto el "Plan Conintes" (Comoción Interna del Estado) bajo el comando del general Toranzo Montero. Las elecciones para renovación de Diputados arrojan los siguientes resultados: 1) votos en blanco —peronismo—, 2.075.323; 2) U.C.R. del Pueblo, 2.052.619; 3) UCRI —partido gobernante—, 1.777.312.

Mayo. Tras superar una crisis político-militar en Córdoba, derivada de la aplicación del Plan Conintes en desmedro de la autoridad del gobernador Arturo Zanichelli (cuya renuncia es re-

chazada), el Presidente dirige su mensaje anual al país el día 1°. Anuncia entonces que la producción petrolera nacional ascenderá este año a 11,5 millones de metros cúbicos, mientras que en 1958 apenas alcanzaba a 5,5 millones. El día 11 un comando israelí secuestra en las cercanías de Buenos Aires a Adolfo Eichman, quien es trasladado a Israel para su enjuiciamiento. La Argentina presenta, sin ser satisfecha, reclamaciones diplomáticas ante las Naciones Unidas y el Estado de Israel.

Junio. El día 12, en vísperas del viaje que el Presidente efectuará a distintos países de Europa, es sofocado un levantamiento militar en la ciudad de San Luis al mando del general Fortunato Giovannoni quien acusa de "trotsquista-comunista" al gobierno del Dr. Frondizi. A su regreso de Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Inglaterra y España, el Presidente recibe el detalle —por parte de la Jefatura del Plan Conintes— de una amplia conjura peronista y comunista que actuaría al mando del general retirado Miguel A. Iñíguez.

Octubre. El Comando en Jefe del Ejército eleva al Presidente un memorándum de cargos y observaciones sobre política nacional que el ministro de Guerra, general Larcher, se niega a rubricar. El "planteo" denuncia la política económica y, especialmente, la social en cuanto se propicia "la demagogia en favor de gremios y dirigentes peronistas, a quienes se han entregado varios gremios con más de un millón de afiliados". La mediación del general Aramburu conjura la crisis con los relevos del ministro de Guerra y del Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Noviembre. Una huelga general paraliza el país y Alvaro Alsogaray, aunque reteniendo el ministerio de Economía, renuncia a la cartera de Trabajo el día 24. Tras un asalto a la guardia del Regimiento General Las Heras en Rosario, el día 29, se prohíbe por decreto, en todo el país, la actuación del Partido Justicialista.

1961

Marzo. Es rechazada por las partes una oferta de mediación del presidente Frondizi en el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. El día 22 es relevado el Comandante en Jefe del Ejército.

Abril. Se inicia la intensa actividad diplomática de Frondizi durante este año con la entrevista en Uruguayana con el presidente del Brasil, Janio Quadros, los días 20, 21 y 22. Renuncia el 25 el ministro Alsogaray.

Agosto. Frondizi recibe en Buenos Aires, el día 17, al comandante Ernesto "Che" Guevara. Renuncia el canciller Adolfo Mugica y es reemplazado en el cargo por el Dr. Miguel Angel Cárcano.

Setiembre. Viaje presidencial a Chile, Brasil, Venezuela y Estados Unidos.

Octubre/Diciembre. Se inicia una larga huelga ferroviaria, que es apoyada por la C.G.T. con un paro general de tres días: del 7 al 9 de noviembre. Desde el 26 de este mes hasta Navidad, Frondizi visita Canadá, Grecia, India, Tailandia, Japón y nuevamente los Estados Unidos donde se reúne con John F. Kennedy, por segunda vez en el año, en Florida.

1962

Marzo. El 18 se realizan elecciones para gobernadores, legisladores y autoridades municipales. Ante el triunfo peronista en Buenos Aires, principal distrito del país, y otros menores, los secretarios de las tres fuerzas armadas exigen y obtienen del Presidente la intervención federal en cinco provincias. Diez días después, los Comandantes en Jefe solicitan la renuncia a Frondizi quien, tras negarse al requerimiento, es conducido detenido a la isla de Martín García en la madrugada del 29.

5. GOBIERNO DE GUIDO

1962

Marzo. En la tarde del día 29, el Vicepresidente primero del Senado, Dr. José María Guido, se presenta ante la Corte Suprema de Justicia y declara que, en virtud de la ley de acefalía, asume la Presidencia de la República. Al mediodía del 30 se formaliza el hecho y la Suprema Corte lo homologa al día siguiente.

Abril. El día 6 es designado ministro de Economía el Dr. Federico Pinedo, quien dispone para el 10 el retiro del Banco Central del mercado cambiario: la cotización del dólar sube de \$ 82 a \$ 150. Pinedo renuncia el 21 y es reemplazado por Alvaro Alsogaray. Se inician las crisis militares, con desplazamientos de tropas y amagos de enfrentamientos, que se prolongarán hasta fines de setiembre. El 25, el gobierno anuncia comicios para la elección de presidente de la Nación para octubre de 1963.

Mayo. El 19 un decreto ordena el receso del Congreso Nacional.

Agosto. El día 8, desde San Salvador de Jujuy, el general Federico Toranzo Montero se proclama Comandante en Jefe del Ejército. De una ardua negociación surge el nombramiento, como nuevo Secretario de Guerra, del General Juan Carlos Lorio.

Setiembre. Desde el 13 se afirma que mandos del Ejército han elevado sugerencias al Secretario de la fuerza sobre la necesidad de cambiar su orientación profesional y política. Ante relevos dispuestos por el secretario Lorio, el día 18 se conoce que el Jefe de la guarnición de Campo de Mayo, general Juan Carlos Organía, no los acata. El presidente Guido formula un llamamiento a los rebeldes para que se subordinen a la autoridad institucional. Ante su fracaso, ofrece su renuncia. Entre el 20 y el 23 se suceden enfrentamientos armados entre "azules" —adheridos a la Jefatura de Campo de Mayo— y "colorados", leales a la Secretaría de Guerra. Se impone en el terreno la jefatura "azul" que, en el "comunicado 150", aboga por el pronto retorno al sistema de la legalidad constitucional.

y a la prescindencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno. El Presidente designa Comandante en Jefe del Ejército a Juan Carlos Onganía y Secretario de Guerra al general Benjamín Rattembach.

Noviembre. El 19 se anuncia que se realizarán elecciones el 16 de junio de 1963 "con exclusión de las organizaciones totalitarias o aquellas que reciban órdenes del exterior".

Diciembre. El día 4 renuncia Alvaro Alsogaray a la cartera de Economía, nombrándose en su reemplazo al Dr. José A. Martínez de Hoz. Crisis en la Fuerza Aérea los días 11 y 12: el brigadier Cayo Alsina es reemplazado por Carlos Armanini.

1963

Marzo. Por considerarse desautorizado en su interpretación de la ley electoral, presenta su renuncia el Ministro del Interior, Dr. Rodolfo Martínez.

Abril. Se inicia el día 2 una rebelión militar a las órdenes del general Benjamín Menéndez. Los sublevados, con el apoyo de algunos sectores de la Marina de Guerra, ocupan La Plata, Río Santiago, Punta Indio, Mar del Plata y Puerto Belgrano. El Comando en Jefe del Ejército y la Flota de Mar, al mando del contralmirante Eladio Vázquez, sofocan totalmente el movimiento en la mañana del 4. Asume el 9, como ministro del Interior, el general Enrique Rauch, quien dispone la postergación de las elecciones generales para el 7 de julio y la transmisión del mando al nuevo gobierno para el 12 de octubre.

Mayo. Crisis de gabinete el día 12. Rauch es reemplazado por el general Osiris Villegas. El día 24 Perón propone desde Madrid como fórmula del "Frente Nacional y Popular" al Dr. Vicente Solano Lima y al Dr. Carlos Sylvestre Begnis como presidente y vice, respectivamente.

Julio. El día 3, ante disidencias internas en el Frente y las interferencias del gobierno a la oficialización de sus candidaturas, Perón decide la abstención del justicialismo en los comicios. Estos, el día 7, arrojan los siguientes resultados: U.C.R. del Pueblo, 2.394.196 votos; U.C.R. Intransigente, 1.560.653; Unión del Pueblo Argentino (nucleada en torno al ex presidente provisional Pedro E. Aramburu), 1.307.830; en blanco, 1.438.054.

6. GOBIERNO DE ILLIA

Octubre. El día 12 asume la Presidencia de la Nación el Dr. Arturo Umberto Illia.

Noviembre. Por decreto del día 15 son anuladas todas las concesiones petroleras acordadas durante el gobierno de Frondizi.

1964

Mayo/Junio. Casi 11.000 establecimientos industriales son ocupados por sus operarios en cumplimiento de un "Plan de Lucha" organizado por la Confederación General del Trabajo.

Octubre. Arriba el 3 al país, en visita oficial, el Presidente de la República Francesa general Charles De Gaulle. El 17, durante una manifestación partidaria, se difunde un mensaje grabado de Perón anunciando su regreso a la Argentina para antes de fin de año.

Diciembre. El día 2, Perón inicia su viaje a Buenos Aires, desde Madrid, rodeado de una numerosa comitiva. El gobierno brasileño decide retener el avión en que viaja Perón e impedir su traslado a la capital argentina. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Illia, Dr. Miguel A. Zavala Ortiz declara que "la actitud del gobierno del país hermano (Brasil) no puede ser más amistosa, solidaria y digna de nuestro reconocimiento".

1965

Marzo. En las elecciones del 14 para la renovación parcial de las Cámaras los distintos rótulos peronistas obtuvieron un total de 3.400.000 votos contra 2.600.000 del Radicalismo del Pueblo.

Mayo. Ante la crisis dominicana el Presidente recibe la visita, en plan de consulta, del enviado del Presidente de los EE.UU., Sr. Averell Harriman. Declara Illia que "la no intervención, la autodeterminación como expresión representativa de la libre voluntad de los pueblos excluye beligerancias inconsistentes".

Julio. *En la ciudad de Saigón, el canciller Zavala Ortiz vaticina el pronto éxito de EE.UU y de Vietnam del Sur en el conflicto del sudeste asiático.*

Octubre. *El día 1° el gobierno se compromete a indemnizar a las compañías petroleras cuyos contratos anulara en noviembre de 1963.*

Diciembre. *Renuncia el Comandante en Jefe del Ejército y es designado en su reemplazo el general Pascual Pistarini.*

1966

Junio. *El día 27 el presidente Illia denuncia "el estado de rebelión en que se ha colocado el Comandante en Jefe del Ejército, respondiendo a intereses que no son los de la Nación". A las 6 de la mañana del día siguiente, Illia es derrocado por decisión de la Junta de Comandantes.*

7. LA REVOLUCIÓN DE 1966/73

Junio. *Las tres armas designan a Juan Carlos Onganía titular del Poder Ejecutivo Nacional, quien jura a las 11 horas del día 29. Durante el acto se lee un "Estatuto de la Revolución Argentina" por el cual se anuncia que el nuevo Presidente "ejercerá todas las facultades legislativas que la Constitución otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras".*

Julio. *En la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas, el día 6, el Presidente afirma que "ha culminado un ciclo de historia argentina". El 29 se suprime la autonomía de 8 universidades nacionales, las que son desalojadas con violencia hacia profesores y alumnos por efectivos policiales. Más de 1.000 profesores renuncian a sus cátedras.*

1967

Enero. *El día 4 asume el nuevo ministro de Economía Dr. Adalbert Krieger Vasena. La preparación de un "Plan de Lucha" por parte de la C.G.T. determina que el Gobierno decida suspender todo diálogo con los dirigentes gremiales y anuncie la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales, el día 15.*

Marzo. *El día 13 el ministro de Economía anuncia "la última devaluación del peso", que se cotiza a \$ 350 por dólar.*

Abril. *El presidente Onganía afirma, el día 7, que los objetivos de la "Revolución Argentina" serán alcanzados en 1977.*

1968

Enero. *Se inicia un plan de reestructuración de la empresa Ferrocarriles Argentinos con el levantamiento de 2.133 kilómetros de vías.*

Marzo. *El día 4 se dan a conocer los decretos 802 y 809 por el cual se acuerdan contratos de explotación petrolera en 8 zonas que comprenden 17.250 km² en distintos puntos del*

173

país. El 29, tras cuatro meses de interrupción, se reanudan los embarques de carne al Reino Unido.

Agosto. El día 28 son relevados los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas que depusieron al Dr. Illia, nombrándose en su reemplazo al general Alejandro A. Lanusse en Ejército, al brigadier Jorge Martínez Zuviria en Aeronáutica y al vicealmirante José Gnani en la Armada.

Setiembre. El día 19 son detenidos en Tucumán, localidad de Taco Ralo, 19 integrantes de un foco de guerrilla rural subversiva.

1969

Enero. Se inician las obras de la central hidroeléctrica El Chocón-Cerros Colorados.

Mayo. El día 22 se declara zona de emergencia militar a la ciudad de Rosario ante disturbios promovidos por estudiantes en protesta por una represión policial producida días antes en Corrientes, durante la cual muere un estudiante. El 29 estallan graves desórdenes en la ciudad de Córdoba, en vísperas del paro general decretado por la C.G.T. para el 30, en todo el país. Grandes manifestaciones callejeras desbordan la acción policial en Córdoba, con grave saldo de muertos, heridos, incendios y pillaje. Tropas militares ocupan el barrio Clínicas de esa ciudad.

Junio. Renuncia el gabinete de Onganía. En un mensaje al país, el Presidente afirma que "el orden será mantenido a cualquier precio y las fuerzas armadas están más unidas que nunca". El 17 se realiza un paro obrero de 37 horas en Córdoba. El 30 es asesinado el dirigente metalúrgico Augusto T. Vandor.

Octubre. Desde Washington, el Comandante en Jefe del Ejército general Lanusse manifiesta que la fuerza desea que sea restablecido "cuanto antes" el régimen constitucional. La C.G.T. cordobesa dispone un paro de 38 horas para los días 29 y 30.

Noviembre. El 4, se inaugura el puerto de Propulsora Siderúrgica y el 10 se anuncia la ley 18.188 por la cual, a partir del 1° de enero del año siguiente, la denominación del peso "nuevo" equivaldrá a 100 nacionales. El 20 estallan explosivos en 11 empresas extranjeras con sede en Buenos Aires y Córdoba.

Diciembre. Se inaugura, el día 13, el túnel subfluvial "Hernandarias" que une, bajo el Paraná, las capitales provinciales de Santa Fe y Entre Ríos.

1970

Febrero. Disturbios en Córdoba, el día 23, entre la policía y estudiantes. El 27, en el Comando de Institutos Militares, el general Lanusse declara que: "El Ejército y su Comandante en Jefe conocen y sienten como propios los problemas del pueblo y son conscientes de la grave situación por que atraviesan grandes sectores ciudadanos ante desequilibrios e injusticias siempre reparables".

Marzo. El día 10, dirigentes sindicales, encabezados por José Alonso, entrevistan al Presidente. Al cabo de la reunión, los sindicalistas anuncian para los días 29 y 30 de mayo la realización de un Congreso Normalizador de la Central obrera. El día 11, es designado Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea el brigadier mayor Carlos A. Rey. Una ola de asaltos, robos y secuestros sacude al país.

Abril. La C.G.T., escindida entre las conducciones "Azopardo" y "Paseo Colón" (nombre de las calles de sus respectivas sedes), se une tácticamente para la realización de un paro general el día 23. Un día antes, estudiantes cordobeses ocupan cuatro locales universitarios: 1.500 detenidos, 80 heridos.

Mayo. El 29 es secuestrado en su domicilio el ex Presidente provisional de la República, teniente general Pedro E. Aramburu. Disturbios en Córdoba el mismo día, en conmemoración del aniversario del "Cordobazo". En la noche del 31, un "Comando Juan José Valle" de la "Organización Montoneros" anuncia la "condena" del general Aramburu a ser pasado por las armas.

Junio. El día 2 el gobierno implanta la pena de muerte para diversos delitos de orden público, entre ellos "el secuestro de personas en caso de que la víctima resultare muerta o gravemente herida". A las 11 de la mañana del día 8, el Comandante en Jefe del Ejército hace conocer por radio un comunicado por el cual afirma que "la responsabilidad asumida por el Ejército en la Revolución Argentina es incompatible con la firma de un nuevo cheque en blanco al Excmo. Sr. Presidente de la Nación para resolver por sí aspectos trascendentales para la marcha del proceso revolucionario". A las 14:55, la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas anuncia que reasume el poder político de la República. A las 23:30, en la sede del Ministerio de Defensa, el general Onganía entrega su renuncia a la Junta, que asume a las 24. El día 11, "Montoneros" comunica que "Pedro Eugenio Aramburu fue ejecutado el lunes 1° de junio a las 7 horas". El día 13 es designado Presidente de la Nación el general Roberto Marcelo Levingston, quien asumirá el 18.

Julio. El 1°, un grupo subversivo ocupa la localidad de La Calera, Córdoba, tomando la Municipalidad, la comisaría, una planta telefónica y la sucursal del Banco de Córdoba. El 9 es asaltada la casa central del Banco de Córdoba. El 15, tras 32 días de huelga, se reinician las tareas en la planta automotriz de Santa Isabel, Córdoba, que había sido ocupada con toma de rehenes de personal jerárquico. El 16, la policía encuentra en Timote, Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires, el cadáver del teniente general Pedro E. Aramburu. El 30, grupos armados vistiendo uniformes militares copan la localidad de Garín, Buenos Aires, en un operativo similar al del mismo mes en La Calera, Córdoba. Se lo atribuye FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias).

Agosto. El 27 es asesinado a balazos, en la calle, el dirigente sindical José Alonso.

Setiembre. El 25, en las proximidades de Campana, es asaltado y desvalijado el expreso ferroviario "El Rosarino".

Octubre. Durante la primera semana estallan artefactos explosivos de alto poder en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, San Luis, Córdoba y Mendoza. Paros de la C.G.T. los días 9 y 17.

Noviembre. El ministro de Economía, Dr. Aldo Ferrer, anuncia la reunión de convenciones colectivas de trabajo para abril de 1971. Paro general los días 12 y 13. Reunión de los partidos políticos el día 11: acuden el justicialismo, el radicalismo, los demócratas progresistas, los socialistas argentinos, los conservadores populares y los radicales bloquistas y anuncian que ha llegado "la Hora del Pueblo". El 16, la Sala Penal de la Cámara Federal falla condenas relacionadas con el caso Aramburu. Asaltos a destacamentos policiales en Escobar, Santa Fe y Córdoba entre los días 16 y 24.

1971

Febrero. Los días 8 y 9, asaltos a un destacamento policial en Rosario y al Registro Civil de La Plata. Ola de atracos a bancos en todo el país.

Marzo. Huelgas y ocupaciones en Córdoba: más de 100 establecimientos privados y 30 reparticiones públicas. El día 15 se reproduce un "cordobazo" en la ciudad mediterránea, en rechazo del gobierno del Dr. José C. Uriburu. Algunas estimaciones calculan que los daños materiales superan a los del 29 de mayo de 1969. Uriburu es reemplazado por el contralmirante Gnozden. El 19 es relevado por el Presidente el Jefe del

Estado Mayor Conjunto, brigadier Ezequiel Martínez, bajo el cargo de "acto grave de indisciplina". Ese mismo día el general Levingston declara que "la profundización de la Revolución llevará tres o cuatro años". El día 23 la Junta de Comandantes destituye al general Levingston. El 25 asume la Presidencia de la República el Jefe de la Junta de Comandantes, teniente general Alejandro Agustín Lanusse. El ex ministro de Onganía, Rubens San Sebastián, asume la cartera de Trabajo y la de Interior es confiada a un ex ministro del Dr. Illia, Arturo Mor Roig.

Abril. El día 1° son rehabilitados todos los partidos políticos, luego de la suspensión impuesta por el presidente Onganía en 1966. El día 15 el presidente Lanusse se entrevista con José Ignacio Rucci, secretario general de la C.G.T.

Mayo. El día 23 es secuestrado el cónsul británico en Rosario de Santa Fe, Stanley Sylvester, por la organización terrorista ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). Satisfechas las exigencias de los secuestradores —repartos de víveres y ropa, reincorporación de obreros cesantes y otras— el Sr. Sylvester es liberado el día 30.

Junio. El 1° se inicia una huelga docente de 72 horas. El 2 es copada, por un comando terrorista, la localidad de Jerónimo Norte, Santa Fe. El 3, el gobierno denuncia la existencia de un plan subversivo internacional, integrado por organizaciones clandestinas actuantes en la Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El día 11, en Córdoba, un comando civil asalta la cárcel del Buen Pastor y libera los internos. El 14, bajo el slogan "prepárese el pueblo a votar", se exhorta a la actualización domiciliaria de los electores.

Julio. Mensaje al país el día 1° del ministro Mor Roig: "Están dadas las reglas del juego limpio. Nadie está impedido de actuar en este proceso". Reunión del Presidente con su colega de Chile, Dr. Salvador Allende, el día 23, en Salta.

Agosto. El 12, captura de la localidad de Gonnet, cercana a La Plata, por un grupo terrorista. El 18, intento de secuestro del general Julio Alsogaray.

Setiembre. El día 3, por intermedio del embajador argentino en España, brigadier Jorge Rojas Silveyra, el gobierno hace entrega a Perón del cadáver de Eva Perón, en la ciudad de Madrid. El 17, el presidente Lanusse anuncia un plan electoral: convocatoria para octubre de 1972, comicios para marzo de 1973 y entrega del mando para el 25 de mayo de ese mismo año.

174

Octubre. El 8 se produce una sublevación militar en las guarniciones de Azul y Olavarría, provincia de Buenos Aires, la cual es sofocada en pocas horas. Los partidos políticos agrupados en "La Hora del Pueblo" enjuician el levantamiento como "un intento regresivo que se opone al proceso de recuperación republicana".

1972

Enero. Reunión, el 7, entre la Central obrera y el presidente Lanusse. El 15, el ministro Mor Roig afirma que la candidatura de Perón "es un callejón sin salida". El 30, elementos subversivos realizan un atraco de grandes proporciones en el Banco Nacional de Desarrollo.

Febrero. El día 16, desde Madrid, Perón propicia la integración de un frente compuesto por las agrupaciones Encuentro Nacional de los Argentinos y Hora del Pueblo, sin fines electorales inmediatos. El 21 es secuestrado el Sr. Oberdan Sallustro, director general de Fiat Argentina.

Abril. Desde el 4, agitación y disturbios en Mendoza. Muertos, heridos, incendios, pillaje, represión policial, huelga de repudio y toque de queda. Se declaran zonas de emergencia militar las provincias de Mendoza y San Juan, bajo las órdenes del general Alcides López Aufranc. El 10, en Rosario de Santa Fe, es asesinado a balazos el Comandante del II Cuerpo de Ejército, general Juan Carlos Sánchez. Tras veinte días de reclusión, durante un violento enfrentamiento entre terroristas y policías, aparece el cadáver baleado del Sr. Sallustro. Las organizaciones gremiales y políticas condenan la ola de violencia. El 15, en reunión de generales, el presidente Lanusse se autoproscribe como candidato a cargos electivos. Por iniciativa del gobierno argentino, Perón deja de ser exiliado político ante el gobierno español.

Mayo. El 25, Perón es proclamado candidato a Presidente por la Convención Nacional del Partido Justicialista. Entre el 28 y el 29 se producen desórdenes y desmanes estudiantiles en las principales ciudades del país.

Julio. El 3, el gobierno da a publicidad las entrevistas entre el enviado oficioso del general Lanusse —Subsecretario técnico de la Presidencia, coronel Cornicelli— y Perón. El 29, Lanusse veta la posible candidatura de Perón al emplazarlo a regresar antes del 25 de agosto.

Agosto. El 22, en la base Almirante Zar de la Armada, sita en Trelew, mueren 16 prisioneros que, según una primera ver-

sión oficial, fueron baleados durante un intento de fuga. A pocas horas del suceso, una ley especial refrendada por el Presidente prohíbe dar nuevas explicaciones de los sucesos hasta que el día 25 se suministra otro informe oficial a cargo del contralmirante Hermes Quijada.

Noviembre. El día 17, luego de diecisiete años de exilio, retorna a Buenos Aires Juan Domingo Perón. El 18, una nutrida multitud desfila frente a la residencia de Perón en la calle Gaspar Campos, ciudad de Vicente López. El 19, Perón recibe en su casa a los principales dirigentes de los partidos políticos, encabezados por el jefe del Comité Nacional de la U.C.R., Dr. Ricardo Balbín. El 20, en el restaurante "Mino" de Vicente López, Perón preside una reunión de representantes de veinte partidos políticos, sindicalistas y empresarios. Se acuerda constituir una Mesa de Trabajo integrada por justicialistas, radicales, partidos provinciales, C.G.T., C.G.E. y 62 Organizaciones en un Frente Cívico de Liberación Nacional (FRECILINA). El 29, el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Alcides López Aufranc informa que se ha notificado a las guarniciones del país que no se revocará la cláusula del 25 de agosto, con lo cual se confirma el veto de las Fuerzas Armadas a la candidatura de Perón.

Diciembre. El 14, Perón anuncia que declina su candidatura presidencial para las elecciones del 11 de marzo, antes de abordar el avión que lo llevará a Europa con una escala en Asunción del Paraguay. Desde esa ciudad, el día 15, designa a los doctores Héctor J. Cámpora y Vicente Solano Lima como candidatos del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). El 27, en un supermercado de Lomas de Zamora, es asesinado a balazos el contralmirante Emilio Berisso, hecho que se atribuye FAR. El Poder Ejecutivo Nacional da a conocer la ley 20.043, que deroga el decreto 18.953/69 por el que se incluía la pena de muerte en el Código Penal.

1973

Enero. El 24, la Junta de Comandantes signa una resolución de cinco puntos sobre participación militar en el futuro gobierno y de condena a la violencia. Es refrendada por los generales de división en actividad, excepto Ibérico Saint Jean.

Febrero. El 5, el Ministerio de Justicia es instruido por la Junta de Comandantes para solicitar la disolución del FREJULI, en vista de que éste ha enarbolado el lema electoral "Cámpora al gobierno-Perón al poder". Al día siguiente, la Junta de Co-

mandantes prohíbe el regreso de Perón a la Argentina hasta que asuma el nuevo gobierno surgido de las urnas. Un comando clandestino se apodera del Batallón de Comunicaciones 141, el día 18, apoderándose de gran cantidad de armas livianas y semipesadas, entre éstas dos ametralladoras antiáreas. El 23, viaja a España el Presidente Lanusse, en visita oficial.

Marzo. El 11 se realizan elecciones generales en el país por primera vez desde el 7 de julio de 1963. Se presentan nueve fórmulas a presidente y vice: triunfa el binomio Cámpora-Lima (FREJULI), con 5.907.464 votos (49,59%), siguiéndolo en ese orden Balbín-Gamond (U.C.R.) con 2.537.605 votos (21,3%); Manrique-Martínez Raymonda (Alianza Popular Federalista) con 1.775.867 (14,9%); Alende-Sueldo (Alianza Popular Revolucionaria) con 885.201 (7,43%); Martínez-Bravo (Alianza Republicana Federal) con 347.215 (2,91%); Chamizo-Ondarts (Nueva Fuerza) con 234.188 (1,96%); Ghioldi-Balestra (Partido Socialista Democrático) con 109.068 (0,91%); Coral-Ciapponi (Partido Socialista de los Trabajadores) con 73.796 (0,62%) y Ramos-Silvetti (Frente de Izquierda Popular) con 48.571 votos (0,41%). El Dr. Balbín, segundo en la liza electoral, declara que carece de sentido una nueva elección presidencial por no haber alcanzado el FREJULI el 50% neto en la primera vuelta. El gobierno acepta la sugerencia radical y se irá a elecciones de segunda vuelta sólo en la Capital Federal para legisladores y en algunas provincias para gobernadores y legisladores. El 25, el presidente electo viaja a Roma, donde se reúne con Perón. Luego ambos viajan a Madrid, donde se entrevistan con el generalísimo Francisco Franco.

Abril. Un comando secuestra en su domicilio al contralmirante Francisco A. Aleman, ex subsecretario de Marina Mercante, al que dejará en libertad el 7 de junio siguiente. El 4 es asesinado en Córdoba el coronel Héctor A. Iribarren, jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército. El Comando en Jefe del Ejército ratifica su decisión de entregar el poder el 25 de mayo, y el ministro del Interior, Arturo Mor Roig, notifica a Cámpora su elección como presidente constitucional. El 15 se realiza la segunda vuelta electoral en 15 distritos electorales. La U.C.R. gana en Capital Federal, el "neoperonismo" en Neuquén y el FREJULI en el resto del país. Entre el 21 y el 25 de abril se copan la localidad de Ingeniero Maschwitz y las estaciones ferroviarias de Don Bosco, Wilde y Villa Domínico de la línea General Roca (autoatribución: FAR). El 26 reciben los respectivos diplomas, como mandatarios, los doctores Cámpora y Lima. El 30, en una calle

céntrica, es asesinado el contralmirante Hermes Quijada, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto quien tuvo a su cargo la explicación oficial de lo ocurrido en Trelew el 22 de agosto del año anterior.

Mayo. El 2, un comando de ultraderecha incendia el Teatro Argentino de Buenos Aires en donde debía estrenarse la obra "Jesucristo Super Star". El 21 es baleado el Sr. Luis Giovaneli, ejecutivo de Ford Argentina, quien fallecerá el 25 de junio. El 22, frente a su domicilio en La Plata, es asesinado Dirck Henry Kloosterman, dirigente sindical de SMATA. La Junta de Comandantes realiza su última reunión como tal, dispone el levantamiento del estado de sitio y la liberación de 47 presos políticos. El 23, el Presidente da la bienvenida al presidente de Chile, Salvador Allende, invitado para la ceremonia de asunción de Cámpora. Comandos clandestinos copan la estación ferroviaria de Gerli y la de Ingeniero Santiago Brian. El 24, en su discurso de despedida, Lanusse agradece a "los hombres y mujeres de mi patria", en nombre "de un gobierno que no eligieron pero les ofreció la posibilidad de elegir".

175

8. GOBIERNO DE CÁMPORA

Mayo. El 25 asume la Presidencia de la República Héctor J. Cámpora, recibiendo las insignias del mando por mano de los tres Comandantes en Jefe. A partir de las 23, por obra de un indulto firmado por las nuevas autoridades, son liberados 371 internos de distintos penales del país. El 29 se reanudan oficialmente las relaciones diplomáticas con Cuba. El 30 es designado rector de la Universidad de Buenos Aires el profesor Rodolfo Puiggrós.

Junio. El 1° se anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas con Corea del Norte. El 2 se resuelve la disolución del Departamento de Investigaciones Políticas Antidemocráticas (DIPA) y la destrucción de sus archivos. El 4, el ministro del Interior, Esteban J. Righi lee un discurso ante jefes y oficiales de la Policía Federal exhortándolos a no reprimir, en lo sucesivo, "al pueblo". El 6 se suscribe un "acuerdo social" entre la C.G.T. y la C.G.E. El 13 se restituyen grado, jerarquía y honores militares a Juan Perón. El 14 inicia su visita oficial a España el presidente Cámpora, que deberá retornar junto con Perón y su esposa en un avión especial el día 20. El 18, el Poder Ejecutivo envía al Congreso 20 proyectos de leyes preparados por el nuevo ministro de Economía, José B. Gelbard. El 20, una enorme multitud aguarda, en Ezeiza, el arribo de la comitiva presidencial y de Juan Perón. En las inmediaciones de Puente El Trébol se desata una batalla entre manifestantes de extrema izquierda y extrema derecha con un alto saldo de muertos y heridos. El avión presidencial aterriza en la base aérea militar de Morón y en horas de la noche, desde la residencia presidencial de Olivos, Perón dirige un breve mensaje al país por la cadena oficial de radio y televisión. El 21 Perón lee nuevamente ante las cámaras un mensaje programático postulando una revolución en paz y en orden y condenando la violencia. El 24 se entrevistan en el Congreso, a solas, Perón y el Dr. Ricardo Balbín. El 28, los canales 11 y 13 de TV son sancionados por propalar una conferencia de prensa del jefe terrorista (ERP) Roberto Mario Santucho condenando al nuevo gobierno, a Perón y al ministro de Bienestar Social, José López Rega.

Julio. El 3, motines en los penales de La Pampa, Salta y La Plata. El 11, Perón se entrevista con los tres Comandantes de las Fuerzas Armadas. A la 1:20 de la madrugada del día 13, el presidente Cámpora anuncia a los periodistas que en el transcurso de esa jornada él y el vicepresidente Lima presentarán sus renuncias ante el Congreso Nacional.

9. GOBIERNO PROVISIONAL DE LASTIRI

Julio. En ausencia del Presidente provisional del Senado, Alejandro Díaz Biolet —de quien se informa que ha debido viajar urgentemente al exterior—, asume la presidencia provisional el presidente de la Cámara de Diputados, Sr. Raúl Lastiri. El 14, las organizaciones "Montoneros" y "FAR" publican violentas condenas, mediante avisos pagos en los diarios, contra "el golpe de Estado" que culminó con las renunciadas de los doctores Cámpora y Lima. El 16, en reemplazo de los Dres. Puig y Righi son designados Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, respectivamente Benito Llambí y Alberto Vignes. El 20 se anuncia la convocatoria a elecciones para presidente y vicepresidente de la Nación para el 23 de setiembre, con entrega del mando a las nuevas autoridades el 12 de octubre.

Agosto. El 1°, la Cámara de Diputados sanciona la ley de nacionalización de los depósitos y otra de regionalización de los bancos de la Nación y Desarrollo. El 4, el Congreso Nacional del Partido Justicialista proclama la fórmula "Perón-Perón", que consiste de Perón y de su esposa, Isabel. Desórdenes, enfrentamientos y asesinatos en Mar del Plata y Córdoba. El 11, se proclaman las fórmulas de la U.C.R. (Balbín-De la Rúa) y de la Alianza Popular Federalista (Mamrique-Martínez Raymonda). En una violenta acción que dura 4 horas, la policía reocupa la Cárcel Modelo de La Plata, en poder de los reclusos. El 31, multitudinario acto de apoyo a Perón quien, acompañado de su esposa, asiste durante siete horas y media al desfile de sus adeptos desde un balcón de la C.G.T.

Setiembre. El 13, el gobierno declara luto nacional por tres días, con motivo del derrocamiento y muerte del Presidente de Chile, Salvador Allende. El 19, el gobierno reconoce oficialmente a la Junta Militar gobernante en Chile. El 23 triunfa el FREJULI con 7.359.139 votos (61,85% del electorado) sobre un total de 14.334.253 inscriptos; lo sigue la U.C.R. con el 24,42% y la A.P.F. con el 12,19%. Votaron 11.897.381 ciudadanos. El 25, un grupo comando asesina a José Rucci, secretario general de la C.G.T., la que declara un paro general hasta las 24 horas del día siguiente.

10. LA ÚLTIMA PRESIDENCIA DE PERÓN

Octubre. El 12, Juan Domingo Perón asume por tercera vez la presidencia.

Noviembre. El 19, viaje de Perón al Uruguay, donde entrevista al presidente Bordaberry.

Diciembre. Visita Buenos Aires el presidente del Paraguay, general Alfredo Stroessner, con quien se firma el acuerdo sobre las obras de Yaciretá. El 20, Perón dice que apoyará una reforma de la Constitución Nacional por el sistema de representación proporcional. El 21 se anuncia la puesta en marcha y se da a conocer el contenido de un Plan Trienal de gobierno.

1974

Enero. El 5 se desmoronan 7 torres del tendido eléctrico que une El Chocón a Ezeiza: se implantan restricciones al consumo eléctrico. El 15 visita Buenos Aires el presidente de Panamá, general Omar Torrijos. El 19, comandos extremistas del ERP atacan el cuartel del Regimiento de Caballería Blindada de Azul. Durante la acción es degollado un soldado de guardia y muere el coronel Gay, jefe del regimiento. Presenta su renuncia el gobernador de Buenos Aires, Sr. Oscar Bidegain, quien es reemplazado por el vicegobernador Calabro. El 22, reunión de Perón con el bloque juvenil de diputados justicialistas, que se opone a una reforma del Código Penal para adecuarlo a la lucha antiterrorista: "al que no le guste, que se vaya", dice Perón. El proyecto se aprueba el 25; renuncian los diputados de la juventud peronista.

Febrero. El 28, un conflicto entre el Poder Ejecutivo Provincial, la policía y los principales gremios desencadenan una crisis política en Córdoba.

Marzo. El Congreso dicta la intervención federal al Poder Ejecutivo de Córdoba, designándose interventor a Leandro Brunello. El 23, es asesinado en la calle el ex dirigente sindical Rogelio Coria.

Abril. El 3 se decreta un aumento del 76,66% para jubilados y pensionados. El 17 se inaugura el segundo alto horno de la

Planta General Savio, en San Nicolás. El 28 es muerto a balazos el Dr. Jorge Quiroga, ex juez federal en lo penal especial.

Mayo. El presidente inaugura el 99 período legislativo mediante un mensaje al país. "La Argentina necesita un Proyecto Nacional —afirmó en esa ocasión— perteneciente al país en su totalidad. Otros países, que han elaborado un estilo nacional, tuvieron uno de dos elementos en su ayuda: o siglos para pensarse a sí mismos o el catalizador de la agresión externa. Nosotros no tenemos ni una ni otra cosa. Por ello, la incitación para redactar nuestro propio modelo tiene que venir, simplemente, de nuestra toma de conciencia". En horas de la tarde, ante la multitud reunida en Plaza de Mayo, Perón denuncia la infiltración ultraizquierdista en sus filas. Los autodenominados "Montoneros" se retiran de la Plaza. El 4, se firma un convenio económico con España. El 5, el equipo económico realiza una gira por la Unión Soviética y otros países de Europa oriental. El 11, tras la celebración de una misa vespertina, es ultimado a balazos el sacerdote Carlos Mugica. El 12, Balbín se impone en los comicios internos del radicalismo.

Junio. Perón viaja al Paraguay, donde suscribe con su colega Stroessner varios convenios económicos, regresando el 7. Al día siguiente, se realiza una entrevista entre Perón y Balbín. El 12, a las 11:30, Perón dirige un mensaje al país desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno: "Cuando acepté gobernar lo hice pensando en que podía ser útil al país, aunque ello implicaba un gran sacrificio personal. Pero si llego a percibir el menor indicio que haga inútil ese sacrificio, no titubearé un instante en dejar este lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades". A continuación, las organizaciones obreras decretan una movilización sobre Plaza de Mayo, que se colma al promediar las 5 de la tarde. Perón habla por última vez a la multitud. El 24, la CEPAL informa que la Argentina ha superado en el último año sus exportaciones en un 57%, la producción agropecuaria creció un 10%, el ingreso bruto en un 6,3% y el consumo interno en un 5,3%. El 29, Perón delega el poder en la Vicepresidenta.

Julio. El 1°, a las 13:15 horas, muere Perón en la Residencia presidencial de Olivos. Asume el mando la Vicepresidenta en ejercicio, Isabel Perón.

11. GOBIERNO DE ISABEL PERÓN

Julio. En duelo por la muerte de Perón, la C.G.T. y la C.G.E. disponen un cese de tareas hasta las 24 horas del día del sepelio, efectuado el 4. El 15, es asesinado en San Justo el ex-ministro del Interior Dr. Arturo Mor Roig. El 18, visita Buenos Aires el presidente de México, Luis Echeverría.

Agosto. El 11, un comando terrorista copa la fábrica de explosivos de Villa María, en Córdoba. El 12 es atacado el regimiento 17 de Infantería en Catamarca, con un saldo de 23 muertos. El 14 la Presidente reorganiza parcialmente el gabinete: Alberto Rocamora y Oscar Ivanissevich son designados, respectivamente, en Interior y Educación.

Setiembre. El 17 es intervenida la Universidad de Buenos Aires, con la designación del Dr. Alberto Ottalagano. El 20 es promulgada la nueva Ley de Contrato de Trabajo. Atentados terroristas en Córdoba: es designado interventor en la provincia el brigadier mayor Raúl O. Lacabanne.

Octubre. El 21, en reemplazo de José B. Gelbard, es designado ministro de Economía el Dr. Alfredo Gómez Morales.

Noviembre. El 2 es asesinado en el Tigre el jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar y su esposa. El 7 se implanta el estado de sitio en todo el país. El 16 regresan al país los restos de Eva Perón.

1975

Febrero. El 10 se inician operaciones militares en Tucumán para cercar focos de subversión rural.

Abril. El 13, se realizan comicios parciales en Misiones, arrojando los siguientes resultados: FREJULI, 74.326 votos, U.C.R. 62.767, y la alianza entre los Partidos Auténtico y Tercera Posición, 15.247.

Junio. El 4, el Dr. Gómez Morales es reemplazado por Celestino Rodrigo en la cartera de Economía. Estalla el llamado Rodrigazo: aumento de la cotización del dólar de \$ 15 a \$ 30 y de los combustibles entre el 115 y el 40%; los transportes aumentan sus tarifas hasta el 150%. La C.G.T. organiza un paro de protesta para el 27.

Julio. La Central obrera dispone un paro de repudio a la política económica para los días 7 y 8. Esa tarde es electo presidente provisional del Senado el Dr. Italo Luder. El 11 es convertido en ley un nuevo proyecto para caso de acefalía y es aceptada la renuncia del ministro López Rega a sus "cargos oficiales". En la noche del viernes 18 y la madrugada del 19, efectivos del Regimiento escolta Granaderos a Caballo desarmaron, sin resistencia, la custodia personal de López Rega, quien, el día 20, abandona el país. Celestino Rodrigo es reemplazado el 22, como ministro de Economía, por el Dr. Pedro Bonanni.

Agosto. El 11, asume un nuevo gabinete con el coronel Vicente Damasco en Interior, Angel F. Robledo en Relaciones Exteriores, Pedro Arrighi en Educación, E. Corvalán Nanclores en Justicia, Carlos F. Ruckauf en Trabajo y Carlos Emery en Bienestar Social. Se ofrece la cartera de Economía al Dr. Antonio Cafiero, quien se encuentra en Europa como embajador ante la Comunidad Europea y el reino de Bélgica. Crisis militar el 14: renuncia el Comandante en Jefe del Ejército, general C. Numa Laplane y es reemplazado por el general Jorge R. Videla. Ese mismo día asume el ministro Cafiero en Economía, quien el 25 expone al país un programa de emergencia basado en el mantenimiento de la ocupación, la reactivación de obras públicas, la vigilancia de costos y precios sobre 500 empresas líderes, la apertura de nuevos mercados, la cooperación financiera externa y la socialización de la inversión.

Setiembre. El 13, la Presidente inicia una licencia —que durará 33 días— por razones de salud, delegando el mando en el presidente provisional del Senado, Italo Luder. Luder reorganiza parcialmente el gabinete: Damasco es reemplazado por Robledo. Recrudece la acción subversiva en Formosa, Córdoba y Buenos Aires.

Diciembre. El 18, se sublevan efectivos de la Fuerza Aérea de Morón y aviones de combate efectúan vuelos rasantes sobre la Casa de Gobierno. En la noche del día 23, más de 500 extremistas intentan aislar la Capital Federal, ocupando puestos sobre el Riachuelo. Luego atacan el Batallón de Arsenales 601, con asiento en Monte Chingolo. Efectivos de las tres fuerzas armadas participan en la represión, que arroja un saldo superior al centenar de muertos.

1976

Febrero. El 4 presenta su renuncia el ministro de Economía, siendo reemplazado por Emilio Mondelli. El 16 se cumple en todo el país un paro empresario.

Marzo. A las 0:45 del día 24 es detenida Isabel Perón por orden de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se inicia el "Proceso de Reorganización Nacional".

CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERECHO

177

12. GOBIERNO DE VIDELA

Marzo. El 24 se constituye la Junta Militar. Se disuelve el Parlamento, son removidos los miembros de la Suprema Corte de Justicia y los procuradores generales de la Nación y del Tesoro. Se prohíben las actividades políticas y gremiales y se nombra un gabinete provisorio integrado exclusivamente por jefes en actividad. El 25 se suspende el derecho de huelga y se elimina el foro sindical. El teniente general Jorge Rafael Videla asume el 29 la Presidencia de la Nación y anuncia la integración de su gabinete con el general Jorge Albano Harguindeguy en Interior, el brigadier José María Klíx en Defensa, el contralmirante César A. Guzzetti en Relaciones Exteriores, el profesor Ricardo P. Bruera en Cultura y Educación, el Dr. José A. Martínez de Hoz en Economía, el contralmirante Julio Juan Bardi en Bienestar Social y el general Horacio T. Liendo en Trabajo.

Abril. El ministro Martínez de Hoz da a conocer un programa económico destinado a reemplazar "una economía de especulación por otra de producción". Se aumentan los combustibles en un 30%, se anuncia un régimen cambiario tendiente a su liberación y se disponen la liberación de los precios y la indexación de deudas fiscales. Jura una nueva Corte Suprema de Justicia, presidida por el Dr. Horacio H. Heredia. Se difunde la muerte de 10 personas en operaciones antissubversivas de las fuerzas conjuntas. El 7, se designan gobernadores militares en Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mendoza. Entre los días 3 y 21 se producen 46 muertes violentas como resultado de atentados y enfrentamientos diversos. El 22, Videla afirma, desde Córdoba, que la lucha contra la subversión se llevará "hasta las últimas consecuencias". El 24 se prohíbe la publicación de noticias extraoficiales sobre secuestros y asesinatos políticos.

Mayo. El 6 se inicia proceso a la señora de Perón por irregularidades en el manejo de fondos de la Cruzada Justicialista. El 9 se dispone un aumento de salarios en el 15% y se decide pagar el medio aguinaldo en dos cuotas. El 30 es secuestrado el interventor militar en la Confederación General del Trabajo, coronel Juan Alberto Pita. El 21, la Universidad Nacional de Córdoba expulsa a 107 alumnos. Según los comunicados

del mes, 65 extremistas, 4 policías, 2 empresarios y 3 civiles ajenos a los hechos murieron en diversos procedimientos militares y policiales.

Junio. El 2, el ministro Harguindeguy denuncia la existencia de una conspiración contra el proceso militar iniciado en marzo. El 3 aparece asesinado el cadáver del general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia. Son disueltas, el 4, 48 agrupaciones políticas. El 17 es asesinado el general Cardozo, jefe de la Policía Federal y el 24 asume ese cargo el general Arturo Corbetta.

Julio. Se anuncia, el día 1º, que durante el mes de junio el costo de la vida aumentó sólo el 2,8%. El 2, estalla una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal, provocando la muerte de 18 personas y un saldo de 66 heridos. Se anuncia que en dos enfrentamientos murieron 17 extremistas. Son hallados 15 cadáveres en las calles de la Capital Federal. El 4, son asesinados 5 religiosos en el barrio de Belgrano. Un hombre es asesinado a balazos al pie del Obelisco. El 6, ante un movimiento de protesta del cuerpo policial, renuncia el general Corbetta a la Jefatura del cuerpo y es sucedido por el general Edmundo R. Ojeda. El 8 son aumentadas las tarifas de teléfonos y obras sanitarias y el 12 se desmienten rumores de aumentos de sueldos para agosto. El 14, en un enfrentamiento con fuerzas del Ejército, cae el jefe del ERP, Mario Roberto Santucho y también el capitán Juan C. Leonetti, que dirige el operativo. Al referirse a su gestión financiera en Europa el ministro de Economía anuncia, el 27, la marcha de un plan petrolero con una inversión de 250 millones de dólares en bienes y equipos, de los cuales el sector nacional aportará el 80%.

Agosto. El 8, el presidente Videla inicia una gira por el noreste del país: Chaco, Formosa y Misiones. Entre el 14 y el 17 se anuncia la muerte de 19 extremistas. El 19 es asesinado el general Omar Actis, presidente del Ente Autárquico Mundial 78 y al día siguiente en Fátima, provincia de Buenos Aires, aparecen 30 cadáveres. El ministro Harguindeguy declara, el 21, que la Iglesia no debe sentirse herida por la detención de sacerdotes por "causas justificadas".

Setiembre. Durante su visita a Catamarca, el presidente Videla declara que la subversión tiene una dimensión "política, económica, social y cultural". El 18, los presidentes Méndez y Videla inauguran el puente Puerto Unzué-Fray Bentos, que comunica a la Argentina con Uruguay. Durante el mes se han anunciado muertes de 45 subversivos, once policías y un jefe aeronáutico.

Octubre. El 5 se crea el Ministerio de Planeamiento y se efectúa un paro del gremio de Luz y Fuerza por el despido de 264 agentes de Segba. El 28, Videla se reúne con el presidente de Bolivia, Hugo Banzer. Se anuncia la muerte de 35 subversivos, un teniente y un soldado del Ejército durante el mes.

Noviembre. El 2, el general Ibérico Saint-Jean, gobernador de Buenos Aires, afirma que "la lucha es más cruel e inhumana que nunca". Videla viaja a San Juan y a Chile donde declara que la Argentina mantiene relaciones con los países socialistas siempre que éstos respeten "nuestra manera de pensar". El 15, el juez Rafael Sarmiento se dice optimista respecto a la captura de José López Rega. El 16, el general Viola afirma que la unidad es la meta primaria del Ejército. Ese mismo día se informa de que en el transcurso del mes se han muerto 101 terroristas. El 23, el ministro de planeamiento Ramón G. Díaz Bessone habla de la elaboración de un proyecto nacional que sea asumido "por la mayoría de los argentinos". Comienzan a regir los Consejos de Guerra desde el 29.

Diciembre. El 2, cae muerta Norma Arrostito.

1977

Enero. El 5 se anuncia que el índice de precios al consumidor experimentó en diciembre último un aumento del 14,3% y, en todo 1976, 347,5%. Un acto de sabotaje daña, el 8, la máquina N° 8 de la central de Puerto Nuevo. Es clausurado por dos días el diario "La Opinión" por la publicación de un artículo de Vicente Pellegrini S. J., titulado "Los derechos humanos en el presente contexto socio-político de la Argentina".

Febrero. Luz y Fuerza inicia un abandono de tareas el 3, que dura hasta el 10: menudean actos de sabotaje. Se dicta el 15 una nueva ley para Entidades Financieras, cuyas actividades serán reguladas por el Banco Central. Arriba a Buenos Aires el ministro de Estado británico Edward T. Rowlands, en tránsito a las Islas Malvinas. El 23, el canciller argentino y Rowlands declaran que deberán consultar a sus respectivos gobiernos los temas tratados durante tres días.

Marzo. El 7 se anuncia que las reservas externas brutas del Banco Central alcanzan a 2.258 millones de dólares. El 15, el gobierno argentino reafirma su decisión de no admitir injerencia alguna de los Estados Unidos en sus asuntos internos, señalando que el terrorismo es "el real y persistente violador de los derechos humanos". El 24, la Junta Militar preside el acto

conmemorativo del primer año del Proceso de Reorganización Nacional y el 31 habla Videla al país exhortando a "no reiterar los errores del pasado".

Abril. El 1° se aumentan la nafta y los transportes, en el orden del 88% y el 22% respectivamente. El presidente Videla dice a periodistas brasileños que el fin del Proceso es lograr "una democracia intrínsecamente fuerte, estable y moderna". Por su parte, el almirante Massera añade, el 5, que "como no somos demagogos, no estamos condicionados por el consenso". El 14, el general Ibérico Saint-Jean asegura que no pasarán muchos días para que se den a conocer detalles de una investigación "que va a conmover a la opinión pública". Un comunicado del Comando de la Zona I da estado público a la investigación de las actividades del banquero David Graiver con relación a la subversión y sus derivaciones financieras. El 15 son detenidos Jacobo Timerman y Enrique Jara, del diario "La Opinión", por vinculación con el Caso Graiver. Se reúnen en Asunción Videla y Stroessner el 20. El 29, el ministro del Interior admite la posibilidad de que se constituya un Consejo de Guerra Especial para el juzgamiento de los implicados en el caso Graiver.

Mayo. El 2 se difunde oficialmente el fallo de arbitraje sobre el Beagle: las islas Picton, Lennox y Nueva son adjudicadas a Chile. Son detenidos el día 4, por orden del juez federal, los ex comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, teniente general Alejandro A. Lanusse, almirante Pedro J. Gnani y brigadier Carlos A. Rey, respectivamente, para ser indagados respecto al caso Aluar. El 7 se atenta contra la vida del ministro de Relaciones Exteriores, contralmirante Guzzetti. El mismo día, la reunión plenaria episcopal denuncia "numerosas desapariciones y secuestros", torturas y detenciones "sin que el detenido pueda defenderse o saber, al menos, la causa de su detención". El contralmirante Guzzetti es reemplazado por el vicealmirante Oscar A. Montes en el ministerio de Relaciones Exteriores. No prospera el pedido del fiscal Massué, el 23, de suspender las audiencias en el Caso Aluar. La OIT censura severamente en Ginebra, el 29, al gobierno argentino por "detenciones de dirigentes obreros y violaciones a la libertad sindical".

Junio. El ministro de Economía declara en Nueva York que "no existe la más remota posibilidad" de que sea desplazado el general Videla del poder, el día 3. El 14, durante la VII Asamblea General de la OEA en Grenada, se cuestiona al gobierno argentino por la no vigencia del respeto a los derechos humanos. El 27, el Poder Ejecutivo interviene la empresa

1478

Aluar y el 28 el ex embajador Robert C. Hill insta al gobierno del presidente Carter a tener "paciencia y comprensión en el caso de la Argentina".

Julio. El 7 se conoce en Caracas una declaración del embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, por la cual éste afirma que el proceso de institucionalización en su patria "será más corto de lo que muchos creen". El ministro Harguindeguy afirma en Posadas, el día 15, que "el país deberá olvidarse por mucho tiempo de los partidos políticos". Por ley son disueltas todas las entidades empresarias del sector fabril a excepción de la Unión Industrial Argentina. El 20 se informa que, en el segundo trimestre del año, el producto bruto interno aumentó —en relación con el del año anterior— en un 4,6%. Ese mismo día es secuestrado en Buenos Aires Héctor Hidalgo Solá. Al inaugurar la 91ª Exposición de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Celedonio Pereda, expresa que "se ha confirmado nuestra firme esperanza en el éxito del Proceso de Reorganización Nacional".

Agosto. YPF anuncia, el 1º, que se ha descubierto una cuenca petrolífera de origen submarino en campos cercanos a Río Mayo, Chubut. El 13 llega a Buenos Aires el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos de los Estados Unidos, Sr. Terence Todman, quien entrevista a personalidades del gobierno, la política y los gremios. El 15, el ministerio de Economía informa que el balance de pagos tuvo, en el primer semestre, un superávit de 474,2 millones de dólares. El 30, el presidente Videla acepta reunirse en Washington para asistir a los acuerdos del Canal de Panamá. Martínez de Hoz asegura, ante la Junta Militar, que para 1978 se obtendrá un presupuesto sin déficit, se reabrirá el mercado de cambio a término, disminuirá el personal del Estado, el FMI volverá a usar la divisa argentina y se reanudará el proceso de recuperación salarial.

Setiembre. El 6 llega a Washington el presidente Videla para asistir, el día siguiente, a la firma de los acuerdos del Canal de Panamá. En conferencia de prensa, el 8, Videla afirma que "esta guerra que libramos ha producido suciedades" y que "es difícil el control total desde los estratos más altos. La Argentina no tiene vocación nazi; nació libre, con vocación de libertad y luchará por mantenerla". Ante la televisión norteamericana, el presidente Videla expone, el 14, una teoría de las desapariciones de personas. "Han desaparecido para pasar a la clandestinidad y sumarse a la subversión; han desaparecido porque la subversión los eliminó por considerarlos traidoras a su causa; han desaparecido porque en un enfren-

tamiento, donde ha habido incendios y explosiones, el cadáver fue mutilado hasta resultar irreconocible, y acepto que puede haber desaparecido por excesos cometidos en la represión. Esta es nuestra responsabilidad; las otras alternativas no las manejamos nosotros". Produce conmoción en La Plata, el 27, la noticia de que son muertos los secuestradores y asesinos del hijo del director de el diario "El Día", David Kraiserburd. El 29, el general Roberto Viola afirma en la Rural que han sido detenidos o abatidos unos 7.000 u 8.000 delincuentes subversivos, pero que "se estima que aún subsisten en Buenos Aires —capital y provincia— alrededor de unos 1.200 más".

Octubre. El 14, el Comando de Zona I informa que pasan a jurisdicción del Consejo de Guerra Especial Estable N° 2, "al imputárseles hechos de connotación subversiva", Isidoro M. Graiver, Lidia Papaleo, Juan Graiver, Eva Gitnach de Graiver y otros. El obispo de Neuquén, monseñor Jaime de Nevares, afirma que "la opinión de los obispos, en su declaración de mayo, no ha sido escuchada por el gobierno". Se afirma el 21 que en el tercer bimestre del año se registró un aumento del PBI del 7,9% respecto de igual período del año anterior. El 26 se inicia un paro ferroviario que, el 28, se extiende a las líneas subterráneas de la Capital.

Noviembre. El 1º, el ministro Harguindeguy dice en Salta que "en el país no existe el derecho de huelga y, en consecuencia, todos aquellos obreros y empleados que concreten medidas de fuerza serán severamente sancionados". El 20 llega al país el secretario de estado norteamericano Cyrus R. Vance, en una visita de dos días. Un terremoto en San Juan causa 70 muertos y 254 heridos el día 23. El epicentro se registra en Calingasta y arrasa la localidad de Caucete y el Valle de Tulum, donde cerca de 10.000 personas quedan sin hogar. El temblor inicial se registra a las 6,27 horas y por primera vez en su historia, la Capital Federal es sacudida con intensidad.

Diciembre. La Junta Militar analiza, el 1º el laudo arbitral del Beagle y el 4 visita Chile el contralmirante Julio Torti, Jefe del Estado Mayor Conjunto, en misión reservada.

1978

Enero. "No se puede negar que existe desasosiego y desconcierto en el pueblo", manifiesta el día 2 Ricardo Balbín en una carta dirigida a los presidentes de los comités de distrito de la Unión Cívica Radical. La Asociación de Fábricas de Automo-

tores señala que 1977 ha sido uno de los años de menor promedio de ventas en los últimos años. El 12, el gobierno chileno informa al cuerpo diplomático acreditado en Santiago que pertenecen a su territorio "todas las islas, islotes y rocas" al sur del canal de Beagle y que actividades de las fuerzas armadas argentinas en la zona significarán "una penetración en regiones que se hallan bajo la soberanía de Chile". El 26, a través de un mensaje del canciller difundido por la cadena oficial, el gobierno argentino hace pública su decisión de declarar la nulidad del laudo arbitral sobre el Beagle.

Febrero. El 1° se posterga, en forma indefinida, la planeada entrevista Videla-Pinochet. El 3 se da a publicidad una nómina de 702 detenidos y se anuncia la confección de futuras listas. La Argentina protesta por la designación chilena de "alcaldes de mar" en la zona austral. El 8 se inicia una polémica entre el secretario de Hacienda, Juan Alemann y el general Antonio L. Merlo, presidente del Ente Autárquico Mundial 78, sobre la oportunidad de esa celebración. El 13, el ministerio del Interior provee otra lista —esta vez de 798 personas— que, con la anterior, eleva el número de detenidos publicado a 1.500. El 16 se producen atentados con bombas contra las viviendas del subsecretario de la presidencia Ricardo Yofre y del ministro de defensa, brigadier Klix. El 20 se reúnen, en la base aérea chilena El Tepual, en Puerto Montt, los presidentes Videla y Pinochet. Pese a un aparente acuerdo, el discurso de cierre de las conversaciones que pronuncia Pinochet aumenta la tensión entre ambos países.

Marzo. Se agrega una nueva lista de detenidos a las ya difundidas por el ministerio del Interior: suman, en total, 2.434. El 2, culmina una reunión argentino-brasileña sobre las represas hidroeléctricas de Itaipú y Corpus. El 14 se produce un grave motín en el penal de Villa Devoto: 68 muertos y 85 heridos. Durante todo el mes, las fuerzas analizan un plan político originado en Ejército.

Abril. El 7 el Poder Ejecutivo publica una nueva lista de detenidos los que así ascienden a 3.312. El 11 es muerto a balazos Miguel Tobías Padilla, subsecretario de Coordinación Económica. La Junta Militar aprueba el 13 el acta-acuerdo suscripto por la Comisión Mixta Argentino-Chilena. El 17 es trasladado a su domicilio Jacobo Timerman, donde permanece arrestado. Al finalizar la 37ª Asamblea Plenaria del Episcopado, el 29 se exhorta al gobierno, en un comunicado, "al cumplimiento de la justicia en todo el ámbito de las relaciones económico-laborales".

Mayo. El 1° es detenido, en Villa Mercedes, San Luis, el Dr. Ri-

cardo Balbín y dejado en libertad al día siguiente. Estalla una bomba, el 10, en el Centro Cultural General San Martín: 2 policías heridos. Anuncia Brasilia la suspensión de la reunión tripartita de los cancilleres de Brasil, Paraguay y Argentina que debía celebrarse en julio, porque la Argentina "modificó unilateralmente el fin de las negociaciones". El 31, la cancillería expresa "sorpresa y perplejidad" por la decisión brasileña.

Junio. Se inicia en el estadio River Plate el XI Campeonato Mundial de Fútbol de la Copa de la FIFA. El 5, el secretario de Información Pública, contralmirante Rubén O. Franco anuncia la derogación de los decretos 587 y 1273, que limitan la actividad en el país de las agencias noticiosas extranjeras. El 10, el estado nacional adquiere en 83 millones de dólares la Compañía Italo-Argentina de Electricidad. Se anuncia el 15 que el primer trimestre del año la balanza comercial arrojó un saldo favorable de 410 millones de dólares. El 23 arriba al país el presidente de Bolivia, general Hugo Banzer. El 25 la Argentina se clasifica Campeón mundial de fútbol y el hecho es seguido de multitudinarias demostraciones de alegría.

Julio. El 7, el Comandante de la Fuerza Aérea, brigadier Agosti, declara que en materia de soberanía "no aceptamos que ciertas zonas sean negociables". Ese mismo día se anuncia la designación de Roberto Eduardo Viola como Comandante en Jefe del Ejército. El 14, con heridos de consideración, se atenta contra la casa del Capitán General de Puertos, capitán de navío Alfredo Haggelstrom. Desde la 0 hora del 5 hasta fines de mes se prolonga un conflicto de estibadores en el puerto de la Capital; el 16 estalla una bomba en ELMA. El Eximbank anuncia el 18 que, dada la situación de los derechos humanos en la Argentina, no autorizará un crédito de financiación para la compra de las turbinas de la represa Yaciretá-Apipé. El 21 se produce en Bolivia el alzamiento del general Juan Peredea Asbún, que es designado Presidente de ese país por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. El 27, la Junta Militar aprueba un "nuevo esquema de poder" y la constitución del "Comité Militar", integrado por los tres Comandantes en Jefe y el Presidente de la Nación. El 28 se anuncia que creció un 5,2% el producto bruto interno. El 31 asume sus funciones de Comandante en Jefe del Ejército e integrante de la Junta Militar el teniente general Roberto Eduardo Viola.

Agosto. Comienza el mes con un atentado terrorista contra la vivienda del Jefe del Estado Mayor de la Armada, contralmi-

179

rante Armando Lambruschini: su hija Paula, de 15 años, muere en el acto. El 16 se retira de Chile la misión negociadora que integraba la Comisión Mixta Argentino-Chilena N° 2 sobre límites australes. El 19, el peronismo, el desarrollismo, el socialismo unificado y el conservadurismo popular dan a publicidad un documento reclamando "el fin de medidas cuya subsistencia crea agravios innecesarios y ponen en tela de juicio la imagen internacional de la República". El 21, el ministro Harguindeguy dice en Misiones que el "Proceso de Reorganización se ha realizado apenas en un 10% de sus cometidos. El 28 es asesinado a balazos, en pleno centro de Buenos Aires, el ex legislador Horacio Agulla, director de la revista "Confirmado". Al día siguiente, Carlos S. Menem, ex gobernador de La Rioja y otros siete ex funcionarios del gobierno peronista son beneficiados por un "sistema de libertad vigilada".

Setiembre. El presidente Videla viaja a Italia para asistir a la entronización de Su Santidad Juan Pablo I. Regresa el 6, tras una negativa repercusión en la prensa europea: "si la Argentina es agredida tomando como blanco a Videla —declaró— él viene y da la cara por la Argentina". El Vicario Castrense y Arzobispo de Paraná, Adolfo Tortolo afirma el 9 en Puerto Belgrano que "no teme decir a los soldados que llega la hora de dar una prueba de amor a la patria muriendo por ella". El 11, un apagón de gran magnitud afecta a la Capital Federal, como consecuencia de una falla de la Central de Puerto Nuevo. El 27, el presidente Videla inaugura en San Pedro (Bs.As.) la planta de Papel Prensa S.A. El 30, duelo nacional por el fallecimiento de S. S. Juan Pablo I.

Octubre. El 1° entre en vigencia la sección 620 B de la Ley de Ayuda Externa norteamericana que prohíbe la concesión de créditos militares a la Argentina ("Humphrey-Kennedy"). El ex canciller chileno Julio Philppe declara el 7 que "Chile no declararía la guerra porque "ya está en posesión de todas las tierras y mares territoriales que son suyos". Según un estudio de la OIT publicado el 12, la Argentina tiene el record mundial de inflación (188,7%), seguido por Israel (152,7%) y Chile (140,4%). El 18, el embajador chileno en Argentina, Sergio O. Jarpa Reyes califica de anticuado al principio bioceánico y afirma que "Chile necesita salir al Atlántico para comerciar con Africa". El 19, el Jefe de la Marina chilena, almirante José T. Mernio, efectúa una visita oficial a las islas Picton, Lennox y Nueva. El 23, se realiza un ejercicio de oscurecimiento parcial en Buenos Aires. El 27, renuncia el canciller, vicealmirante Oscar A. Montes. El 30 renuncian los

restantes ministros a excepción de los titulares de Trabajo, Interior y Economía.

Noviembre. El 1°, la flota chilena amarra en Puerto Montt, a 1.000 kilómetros del Estrecho de Magallanes. El 3 juran los nuevos ministros: en Bienestar Social, el contralmirante Jorge A. Fraga; en Cultura y Educación, el Dr. Juan Llerena Amadeo; en Defensa, el contralmirante David H. de la Riva; en Justicia, el Dr. Alberto Rodríguez Varela; en Relaciones Exteriores y Culto, el brigadier Carlos W. Pastor. El 10, el gobierno argentino protesta ante los de Brasil y Paraguay "por la modificación del número de turbinas de la represa de Itaipú". El 20, el gobierno de Santiago anuncia que las negociaciones con la Argentina "han quedado plenamente agotadas" y sugiere la designación de un país mediador. El 26 visitan la Argentina los reyes de España, quienes permanecen en el país hasta el 30.

Diciembre. Crece la tensión y los rumores de guerra con Chile propagados durante todo el año. El 4 se inaugura en Punta del Este una conferencia de los países miembros del sistema de la Cuenca del Plata. Sufre un atentado en sus oficinas céntricas el almirante Massera, quien resulta ileso (día 12). El 14, Chile acepta la propuesta argentina de designar a la Santa Sede —en la figura del nuevo Pontífice Juan Pablo II— como mediadora en el conflicto austral de límites.

1979

Enero. La Argentina y Chile solicitan conjuntamente a Juan Pablo II su mediación, mediante la suscripción de un documento, en Montevideo, por los cancilleres Pastor y Cubillos. El 9, el cardenal Antonio Samoré deja Buenos Aires tras cumplir su primera misión de acercamiento entre las partes. El 11 fue hallada sin vida Elena Dago Holmberg en el Delta. La señorita Holmberg, que se desempeñaba como secretaria de embajada en la Cancillería, había sido secuestrada el 20 de diciembre. El 12 es designado Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea el brigadier Omar D. R. Graffigna.

Febrero. Crisis de gobierno en Córdoba: renuncia el general Carlos B. Chasseing y es designado en su reemplazo el general Adolfo Sigwald, quien asumirá el 9. Por espacio de unas horas son detenidos en Carlos Paz el Dr. Ricardo Balbín, el ex senador Eduardo Angeloz y el ex presidente Arturo U. Illia, el 17. El 23, el Papa Juan Pablo II hace entrega al gobierno por

intermedio de la representación argentina, en la Santa Sede, de la aceptación formal de su papel de mediador.

Marzo. Economía informa que durante 1978 el producto bruto interno registró una caída del 4,1% con respecto al año anterior. El 8 llega a Buenos Aires, en visita de dos días, el presidente del Chase Manhattan Bank, Sr. David Rockefeller, quien se refiere con optimismo al futuro argentino. El canciller argentino llega a Brasilia para la asunción del presidente João B. de Figueiredo y dice que "las conversaciones sobre Corpus e Itaipú deben reanudarse". El 20, la Corte Suprema requiere al Comando en Jefe del Ejército la devolución de un detenido a disposición de un juez "en el plazo de cinco días". El 31, el gobierno designa al ministro de la Corte Pedro José Frías como cabeza de una misión destinada a interiorizar al Papa sobre la posición argentina en el Beagle.

Abril. El 3, un pavoroso incendio destruye en Buenos Aires una sucursal del Banco de Intercambio Regional y la estructura del teatro Avenida. Ricardo Balbín dice, el 5, que "la subversión está muerta y ha llegado la hora de hablar claro para ver si vamos o no en camino hacia la democracia". El 13 es asesinado a balazos el periodista de televisión Rubén Valdez, ex asesor del Jefe de Policía general Edmundo R. Ojeda. Es detenida, el 23, la casi totalidad de los dirigentes que integran la "Comisión de los 25", que habían dispuesto la concreción de una jornada de protesta obrera nacional. El 25, 21 dirigentes de "los 25" son puestos a disposición del Poder Ejecutivo y trasladados a la cárcel de Caseros.

Mayo. El 3, los gremialistas que estaban a disposición del PEN pasan a manos del Poder Judicial. Al concluir la 39ª Asamblea Ordinaria del Episcopado Latinoamericano, sus integrantes entrevistan al Presidente de la Nación para expresarle su preocupación por los desaparecidos, los detenidos políticos y la afligente situación socio-económica. A partir del 14 se producen periódicos cortes de corriente eléctrica en Capital y Gran Buenos Aires, situación que se agrava desde el 16, al salir de servicio la central nuclear Atucha. El 22, se inicia un paro sorpresa de servicios ferroviarios por 24 horas.

Junio. El 5, el vicepresidente del Banco Central, Christian Zimmerman, proclama que "la inflación ha muerto". El 11, en El Chamental, el brigadier Graffigna aseguró que "como ciudadano, como militar, como miembro de la Junta y como Comandante en Jefe, les puedo decir que los argentinos no estamos, ni remotamente, en condiciones de ir hacia una salida política". El 17, el general Videla afirma a periodistas peruanos que el proceso "se encuentra en una etapa netamente

política, que tiene que ser enriquecida por la propuesta de los civiles". Hace conocer el general Harguindeguy, el 29, que "hay en total 1.723 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Ni uno más". Añadió que el arresto de Jacobo Timerman sólo podrá reverlo la Junta Militar.

Julio. El 2 es sobreseída en la causa que investiga el manejo de los fondos de la Cruzada Justicialista la señora Isabel Martínez de Perón. El 8 son liberados los seis dirigentes que seguían detenidos del grupo "25", los que son recibidos, ocho días después, por el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Raúl Primatestá. El 28, dirigentes peronistas, desarmollistas, intransigentes y democristianos dan a conocer un documento en el que califican a la política económica de "antinacional y antipopular, que no sólo hace descender los salarios más allá de la subsistencia, sino que prepara una grave desocupación al amenazar las fuentes de trabajo".

Agosto. Se anuncia el 2 que el producto bruto interno creció el 11,1% en el curso del presente año. El 8, el ministerio del Interior hace saber que hay 1.616 detenidos políticos a disposición del Poder Ejecutivo; además dio la lista de quienes en julio dejaron de estar en esa situación. El 12, los gobiernos del grupo subregional andino —Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú— declaran en Quito que "el régimen democrático es el único instrumento adecuado para garantizar la libertad, los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades de los pueblos". El 13, en San Luis, el ministro Harguindeguy, afirma que "hasta 1987 sólo habrá presidentes militares". El 30 se firman cartas reversales entre Paraguay y Argentina ratificando la determinación de impulsar la represa de Yaciretá.

Setiembre. El ministro Martínez de Hoz dice, el 4, que la normalización de los gremios se hará en 1981, después que deje la presidencia Videla. El 7, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita al canciller Pastor, la Junta Militar y el presidente Videla. El 11, el justicialismo entrega a los miembros de la Comisión un documento donde se expresa que "no podemos aceptar que la lucha contra una minoría terrorista se haya transformado en una excusa para implantar el terrorismo de estado". El 12, el gobierno responde oficialmente al justicialismo tildando a esa declaración de "producto de mentes ofuscadas e irresponsables, sólo concebibles en dirigentes faltos en absoluto de criterio, sensibilidad, seriedad y ética política". El 18, el Comandante del III Cuerpo de Ejército, general Benjamín Menéndez, manifiesta que "he quedado dolorido al tener que hablar de temas argentinos con

extranjeros". El 25, la Corte Suprema de Justicia hace lugar al habeas corpus de Timerman. La Junta Militar decide ponerlo en libertad, expulsarlo y privarlo de la ciudadanía. Una poderosa carga explosiva estalla, el 27, en la casa de Guillermo W. Klein, secretario de Coordinación Económica. El 29, tras una confusa sublevación, con desplazamiento de tropas hacia Jesús María por órdenes del Comandante del III Cuerpo de Ejército, son relevados de sus cargos en esa unidad de batalla los generales Benjamín Menéndez y Jorge Maradona.

Octubre. El 1º asume el general José A. Vaquero la Comandancia del Cuerpo III en Córdoba. Al partir para Corrientes, donde cumplirá un arresto de 90 días, Menéndez afirmó que los gobiernos militares son "atípicos, inconstitucionales y circunstanciales y que deben ejercer el poder al estilo militar para encontrar las grandes soluciones". El 4, Videla viaja a Japón y afirma a un periodista brasileño que Héctor J. Cámpora —a la sazón gravemente enfermo en su asilo de la embajada mexicana en Buenos Aires— "es un delincuente político".

Noviembre. El 6, el ministro Martínez de Hoz revela que el programa de inversión pública para la década del 80 equivaldrá a un monto cercano a los 100.000 millones de dólares. El 7 resulta ileso en un atentado terrorista el Secretario de Hacienda, Juan Alemann. En pleno centro de Buenos Aires son asesinados el ex presidente de la Cía. Italo Argentina de Electricidad, Francisco Soldatti y su custodia: mueren tres atacantes. El 21, tras comprobarse su estado de salud, se otorga un salvoconducto al ex presidente Cámpora para abandonar el país rumbo a México. El 24, el ministro de Bienestar Social dice que "las obras sociales que cuentan con bienes propios los perderán". El 30, todos los partidos políticos concuerdan en calificar a la reciente ley sindical como "un instrumento punitivo y no una herramienta destinada a la protección y representación de las legítimas aspiraciones de los trabajadores".

Diciembre. El 4, el director del matutino editado en inglés "Buenos Aires Herald" anuncia que abandonará la Argentina con su esposa e hijos debido a las crecientes amenazas recibidas.

1980

Enero. El 10, el gobierno argentino se rehúsa a participar en el embargo de la exportación de cereales a la Unión Soviética con motivo de la invasión de aquel país a Afganistán pero, al mismo tiempo considera a la actitud de Moscú "una seria amenaza para la paz universal". El 21 se concede a Jorge

Luis Borges el premio "Miguel de Cervantes", de literatura castellana, instituido por el Ministerio Español de Cultura. El 25 se reúne con Videla el general Andrey J. Goodpaster, enviado especial del gobierno de los EE.UU. El 30, el embajador norteamericano Raúl Castro afirma que, tras la misión Goodpaster, han mejorado las relaciones bilaterales.

Febrero. Después de 4 días de conversaciones, una misión rusa concretó con las autoridades argentinas la compra de 3,5 millones de toneladas de cereales, carne vacuna y ovina, el 1º. El gobierno nacional comunica al de los EE.UU., el día 7, su desagrado por la referencia que hace de la Argentina el informe sobre derechos humanos. Horas después, el gobierno de Carter rechaza la protesta. El 27, ante periodistas españoles, el ministro Martínez de Hoz expresó su regocijo por haber logrado todas las transformaciones que se había propuesto durante su gestión económica.

Marzo. El 11, el ministro del Interior aclaró, al inaugurarse la Reunión de Gobernadores, que "el Proceso no tiene plazos". Economía anuncia, el 12, que el producto bruto interno registró en 1979 un aumento del 8,5%, el más alto registrado en la última década. En el Colegio Militar, el teniente general Galtieri, Comandante en Jefe del Ejército subraya que "se ha iniciado el diálogo político, esto no quiere decir que mañana haya elecciones. Las urnas están bien guardadas y van a seguir bien guardadas". Desde Lima, el 29, Raúl Alfonsín contesta a Galtieri: "que les vayan pasando el plumero (a las urnas) porque las llenaremos de votos".

Abril. El 1º, se reglamenta la discutida ley 22.105 de Asociaciones Gremiales. El 10, arriba una misión de la Cámara de Representantes norteamericana, encabezada por John Wydler; tiene por objetivo superar discrepancias sobre transferencia de tecnología nuclear. Una declaración del Partido Justicialista señala que "la liquidación del Banco de Intercambio Regional significa el peor escándalo financiero del siglo". El 17 es liberado Lorenzo Miguel. Se difunden, a partir del 18, las conclusiones —muy desfavorables al gobierno— de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con un anexo que detalla 1.025 casos de hechos terroristas perpetrados entre 1969 y 1979. A partir del 25, la provincia de Buenos Aires sufre una de las mayores inundaciones de su historia.

Mayo. A partir del 1º, se inician en la Capital Federal las emisiones de televisión en color. Al no integrarse una delegación tripartita internacional, el gobierno decide no participar de la asamblea anual de la OIT, el 7. Al día siguiente, el gobierno resuelve "recomendar la no concurrencia a los Juegos Olímpicos".

picos de Moscú". Al celebrarse el día de la Armada, el 17, el almirante Lambruschini afirma que el Proceso necesita más tiempo para atacar los males de fondo. El 20, la superficie anegada en la provincia de Buenos Aires alcanza los 5 millones de hectáreas. El 23 se habilita el túnel con Chile que une las localidades de Las Cuevas con Caracoles. El 31, el general Videla emprende un viaje a China.

Junio. "Ninguna gran potencia, no importa su poderío, es capaz de garantizar la paz y el orden mundial", declara Videla en Pekín el día 5. El 11, la ciudad de Buenos Aires celebra el 400 aniversario de su fundación. El 24 se dicta prisión preventiva a doce directivos del Banco Oddone y al día siguiente sucede lo mismo con el grupo Grecco.

Julio. El 10 se produce un paro sorpresivo de trenes. El 16, Videla decide no participar en los actos de transmisión del mando al presidente peruano Belaúnde Terry, por razones de seguridad. Las Fuerzas Armadas Bolivianas toman el poder en Bolivia por considerar "fraudulentas" las elecciones que dieron el triunfo a Hernán Siles Suazo. Ante el reconocimiento del gobierno militar boliviano por las autoridades argentinas, el secretario de Estado adjunto norteamericano, William Bowdler, suspende el 29, su previsto viaje a Buenos Aires.

Agosto. El 20, Videla y Figueiredo firman en Brasilia cinco acuerdos de orden económico, uno de ellos de cooperación nuclear. El 22, la Junta Militar aprueba las pautas para la acción de gobierno 1981-84, directivas que serán entregadas "al oficial superior retirado de las Fuerzas Armadas que ocupe la Presidencia de la Nación" como sucesor de Videla. El 29, el Banco Central dispone la liquidación de los bancos Oddone y Los Andes.

Setiembre. El 2, la Junta Militar inicia el análisis de la sucesión presidencial. Se otorga un aumento general de salarios, el 8, del orden del 25%. Al día siguiente, la Argentina denuncia una violación de sus aguas territoriales por parte de Chile en la boca del estrecho de Magallanes. "Cuando las palabras no bastan, hay otras medidas a adoptar" dice Galtieri en Mendoza, el 11, al referirse al incidente magallánico. Economía anuncia, el 16, que el producto bruto interno disminuyó un 2,9% en el segundo semestre. El 17, se agota el primer plazo fijado por la Junta para la designación del sucesor de Videla. Ante la inquietud de centros financieros y políticos, la Junta Militar decide postergar por 10 días, el 30 la designación del nuevo presidente.

Octubre. El 3, la Junta Militar anuncia la designación del teniente general (RE) Roberto Eduardo Viola para ocupar el cargo

de Presidente de la Nación para el período 1981-84. El 5 comienza a regir, sin previo aviso, el Impuesto al Valor Agregado que, según Hacienda, "se implementa para evitar aumentos de precios". El 13 es nominado para el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, argentino, jefe del movimiento de paz cristiana en el país, lo cual provoca reacciones confusas —ninguna favorable— en el ámbito gubernamental. El 20 llega a Buenos Aires el nuevo embajador norteamericano, Sr. Harry Shlaudeman. El 22 se efectúa en todo el país el Censo Nacional de Población y Vivienda. El 31 se da a conocer que la población argentina asciende a 27.862.771 habitantes, lo que representa un aumento de 4,5 millones en 10 años.

Noviembre. Se anuncia que el costo de vida acumulado desde principio de año llega al 72,6%, el día 7. El 14, Juan Pablo II recibe por primera vez, separadamente, a las delegaciones argentina y chilena acreditadas ante la Santa Sede por el conflicto de Beagle. El 20, habla al país el "presidente designado", general Viola, quien aseguró continuidad en la filosofía económica del proceso y una mayor participación civil durante su gobierno. El 30, se reúnen Bittel y Balbín, por el justicialismo y el radicalismo respectivamente en la ciudad de Posadas "como el comienzo de la unión de la civilidad sin componendas".

Diciembre. El 5 se derrumban diez pisos del ala derecha del edificio Cóndor, sede del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. El 6, con asistencia del presidente Videla quedan inauguradas oficialmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. El intendente Cacciattore señaló que las obras son "una respuesta concreta que el tiempo sabrá ubicar en niveles adecuados".

1981

Enero. El 2, Sadi Conrado, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas presenta la renuncia a un cargo que ocupaba desde 1962, año en que fue creado el organismo. El 7, la industria, el comercio y el agro de las provincias de Mendoza y San Juan cumplen una "jornada de tristeza nacional", en protesta por la declinación de la economía regional cuyana. El 22, Saúl Ubaldini —secretario general de la CGT— dice que la nueva política salarial es "una provocación a la paz social". El 30 se dispone la privatización total de la Flota Fluvial del Estado.

Febrero. El 2 es devaluado el peso un 10% y se establece una nueva escala de ajustes cambiarios que tendrá vigencia hasta

finis de agosto próximo. En medio del conmovedor impacto que producen las novedades cambiarias, se intervienen el 3 los bancos Hispano Corfin y del Norte y Delta Argentino. Se sabe, el 9, que en la primera semana del mes han egresado divisas por valor de 400 millones de dólares. Habla Martínez de Hoz el 11 y al día siguiente se registra una caída de las reservas por 280 millones de dólares en 24 horas. El 13, declaraciones de Galtieri advierten que "Chile sabrá hasta dónde tira la cuerda". El 19, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, vicealmirante Carlos Castro Madero señala que la Argentina tiene "materia prima suficiente" para fabricar una bomba atómica.

Marzo. En busca de "un canal de comunicación más fluido" viaja a Washington, el 14, el "presidente designado". El 21 llega al país el nuevo nuncio apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi. La caída de reservas del Banco Central en los últimos cuatro días alcanzó la suma de aproximadamente 800 millones de dólares, tras otro discurso en cadena del ministro Martínez de Hoz.

13. GOBIERNO DE VIOLA

Marzo. El 30, en su primer mensaje al país, el presidente Viola afirma que "mi gestión de gobierno será caracterizada por la prudencia y la firmeza. Habré de gobernar para todos, sin caer en sectarismos, ni en injustas preferencias o exclusiones".

Abril. El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Sr. Lorenzo Sigaut anuncia una "devaluación compensada" del peso del 30%. El 9 es designado asesor presidencial el ex ministro de Videla general Albano Harguindeguy. El presidente de YPF, general Carlos Suárez Mason, anticipa que la empresa tendrá, para fin de año, un déficit de 6.000 millones de dólares.

Mayo. El 2 se sabe que los quebrantos comerciales y civiles registrados en abril ascendieron a 498.401 millones de pesos, frente a 32.842 millones del mismo mes del año anterior. El 14, el presidente Viola afirma que "entre la Junta Militar y el presidente no existen diferencias en modo alguno". Del 8 al 15 de mayo —se sabe el día 18— las reservas internacionales bajaron un 10,8%. El 22, una alta fuente presidencial afirma que "la Junta Militar respalda en absoluto al gobierno". El 23 se difunden en Italia nóminas de integrantes de la logia "Propaganda Due", en las que abundan personajes de la política y los negocios argentinos.

Junio. El 1º, el ministro Sigaut se dirige al país para anunciar otra devaluación del 30%, con ajuste del 6% en junio y seguro cambiario que no estará acompañada de medidas compensatorias. Renuncian las autoridades del Banco Central. En Río Hondo, el 6, Viola admite que pueda sucederle otro gobierno militar en 1984. Balbín considera que las declaraciones de Viola "constituyen una agresión a la civilidad", el día 10. El 19, el ministro Sigaut afirma que "quienes apuesten al dólar, perderán". El 26, el teniente general Galtieri afirma "no apoyamos al Gobierno. Somos el Gobierno". El 29, "The Wall Street Journal" califica de "caótica" la situación argentina. A fin de mes, el dólar sufrió devaluaciones por el 131% en lo que va del año.

Julio. El 6 es excarcelada la ex presidente María Estela Martínez de Perón, quien abandona el día 9 el país con destino a España, luego de cumplir 5 años y 3 meses de arresto a disposición

de la justicia. El 14 se forma una multipartidaria convocada por la UCR e integrada por el justicialismo, el desarrollismo, los intransigentes y los demócratas cristianos. El 22 se cumple un paro de la CGT, tras el cual son detenidos Saúl Ubaldini y otros 22 dirigentes sindicales.

Agosto. El 6 se informa que la deuda externa argentina aumentó un 4,8% en el primer semestre del año y que esas obligaciones ascienden a 28.000 millones de dólares. El asesor presidencial general Harguindeguy declara en Tandil que "si el peronismo y el radicalismo asumen el poder volverá a repetirse lo que en 1955". El brigadier Graffigna afirma en Mendoza que "la Argentina es uno de los pocos países donde se come todos los días". El 21 presenta su renuncia el ministro de Industria, Eduardo V. Oxenford, quien es reemplazado por el ingeniero Livio G. Kühl.

Setiembre. Inquietan a la opinión pública sucesivas reuniones del presidente con integrantes de la Junta Militar. El 2 se conoce que el ex director de la CIA, general Vernon Walters, embajador itinerante del presidente Reagan, ha visitado el país y entrevistado a las autoridades. El 9 fallece en La Plata el caudillo radical Ricardo Balbín. El 11, asume la Comandancia en Jefe de la Armada el almirante Jorge Isaac Anaya. Antes de iniciar una cacería de ciervos en Canadá —en compañía del ex ministro Martínez de Hoz—, el general Harguindeguy expresó que "en 1984 no habrá elecciones presidenciales; el presidente será designado por la Junta y se mantendrá el actual esquema de poder".

Octubre. El 1º, el presidente Viola vuelve a manifestar que la Junta Militar no interfiere en la acción del gobierno. El premio María Moors Cabot, el más antiguo de los existentes en el periodismo, le es otorgado a Jacobo Timerman el 25, en los EE.UU. La divisa norteamericana que, al 2 de junio se cotizaba en 4.350 pesos por unidad llega el 29 de octubre a 9.300 pesos.

Noviembre. El 2, el teniente general Galtieri afirma en Washington que "la Argentina y los Estados Unidos marcharán unidos en la guerra ideológica que se está librando en el mundo". El 5 el dólar supera la barrera de los 10.000 pesos por unidad. El 9, el presidente es internado en el Hospital Militar Central. El 21, el presidente delega interinamente sus funciones en el ministro del Interior, general Liendo. El 30 entran en vigor diversas medidas cambiarias y financieras que determinan alzas en la Bolsa y una brusca caída de las tasas de interés.

Diciembre. El 2 se le practica al general Viola una cinecoronariografía para determinar su estado de salud. El 6, la situación

de Viola es evaluada en una reunión de la Junta Militar. El 8, asume la titularidad del Cuerpo I de Ejército el general Cristino Nicolaidis. Entre el 12 y el 22 de diciembre se tramita la remoción de Viola, que se niega a renunciar. Ante la renuncia de Liendo, ejerce el interinato el contralmirante Lacoste. La Junta Militar designa a Leopoldo Fortunato Galtieri Presidente de la Nación.

14. GOBIERNO DE GALTIERI

1982

Enero. El 2, el presidente Galtieri solicita la renuncia de los militares, en retiro o actividad, que ejerzan cargos en empresas del Estado. Se reúnen con el presidente los senadores norteamericanos Howard Baker, Paul Laxalt y Ernest Hollings, quienes destacan "el excelente nivel en que se encuentran las relaciones bilaterales". Por declaraciones en las que daba por "agotado" el actual proceso, se sanciona el 8 al general Onganía con un arresto de 30 días. El 14 asume la gobernación de Buenos Aires el señor Jorge Aguado. El 20, la Multipartidaria da a conocer un documento con el título "La paz tiene precio, es la Constitución Nacional". El 30 arriba al país una delegación de 30 miembros de la Asociación sobre Orientación de la Defensa de los Estados Unidos.

Febrero. El 2, Galtieri se reúne con 36 empresarios norteamericanos, encabezados por Charles Lien quien se manifiesta "muy impresionado por la habilidad local mostrada en el desarrollo del TAM (tanque argentino mediano)". El 7, el informe anual del Departamento de Estado norteamericano afirma que "la situación de los derechos humanos en la Argentina ha mejorado". El 12, en Victorica, provincia de La Pampa, el presidente Galtieri ofrece un asado para 13.500 comensales. Ante el secuestro y posterior asesinato de Ana María Martínez, el 20 declara Adolfo Pérez Esquivel que "el aparato represivo del régimen se encuentra intacto". "Las fuerzas armadas carecen de respeto por el pueblo argentino porque no lo conocen —dice en Córdoba Arturo U. Illia— y no se puede gobernar lo que no se conoce (20). Un incidente naval con Chile, el 22, termina con un intercambio de disparos en el área de la isla Doceit. El 27, por primera vez desde 1977, Los Estados Unidos acuerdan fondos dentro de su programa militar de ayuda a la Argentina.

Marzo. El 1° se da a conocer un comunicado sobre las reuniones efectuadas entre la Argentina y Gran Bretaña en Nueva York los días 26 y 27 de febrero. De no obtener resultados inmediatos "la Argentina mantiene el derecho de elegir el proce-

dimiento que mejor convenga a sus intereses". El 2, la Junta Militar considera la ayuda argentina a El Salvador y decide el envío de observadores. El 9, la policía reprime una concentración de empleados estatales en Plaza de Mayo. Economía hace saber el 15 que el PBI cayó, durante 1981, un 6,1%. El 22, la Cancillería desestima una protesta inglesa por el desembarco en las islas Georgias, el día 19, de tripulantes del buque argentino "Bahía Buen Suceso". Los navegantes habían izado en Puerto Leith, isla de San Pedro, una bandera argentina. A raíz del episodio, un grupo de "kelpers" atacó las instalaciones de la empresa aérea LADE en Puerto Stanley (luego Puerto Argentino). A partir de estos sucesos se agrava la tensión entre Buenos Aires y Londres. El 30, la policía reprime violentamente en todo el país a los manifestantes de la movilización convocada por la CGT. El 31 zarpan de Puerto Belgrano varias naves de la Marina de Guerra sin precisar su destino.

Abril. El 2 se lleva a cabo un operativo de recuperación de las islas Malvinas, mediante la toma de la capital de las islas, sin bajas enemigas. Galtieri saluda, desde los balcones de Plaza de Mayo, a una multitud que celebra el hecho. Se dispone la libertad de los detenidos por los sucesos del día 30 y la Multipartidaria expresa su total apoyo y solidaridad con la toma de las Malvinas. El 3, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por 10 a 1 y 4 abstenciones una resolución británica que exige el retiro inmediato de las fuerzas argentinas de las Malvinas. El 5, el presidente Reagan exhorta a Gran Bretaña y a la Argentina a que solucionen su disputa sin derramamiento de sangre. El canciller Nicanor Costa Méndez se reúne en Washintong con su colega Alexander Haig y, al día siguiente, Reagan instruye al Secretario de Estado a viajar a Buenos Aires para mediar en el conflicto austral. El 7 asume la gobernación de las islas el general Mario Benjamín Menéndez, con jurisdicción sobre ese archipiélago y las islas Georgias y Sandwich del Sur. La ceremonia congrega personalidades políticas y de todos los sectores de la vida nacional. El 14, la primer ministro Margaret Thatcher logra un voto de confianza del Parlamento y afirma que no dudará en emplear la fuerza para recuperar las islas. El 16, la flota británica zarpa de la isla Ascensión con destino a las islas ocupadas. El 17, el secretario Haig llega a Buenos Aires tras su viaje a Londres y a Washington, para entrevistarse —durante doce horas— con las autoridades argentinas. El 19 Haig deja el país declarando que "el tiempo se está acabando". Simultáneamente, la ministro Margaret Thatcher declara que las propuestas mediadoras de

Haig "no satisfacen al Parlamento británico". El 25, fuerzas británicas se apoderan de las islas Georgias. El 29, el senado norteamericano aprueba por 79 contra 1 una resolución que exige el retiro de las tropas argentinas de las Malvinas. El 30, Estados Unidos desconoce la resolución del TIAR, organismo del que forma parte, por la que se reconoce la soberanía argentina en el archipiélago.

Mayo. El 1º, Gran Bretaña inicia acciones bélicas en gran escala contra las islas Malvinas, mediante reiterados bombardeos sobre Puerto Argentino. Fuera de la "zona de exclusión" (321 kilómetros a la redonda de las Malvinas), es hundido el crucero "General Belgrano", de 13.500 toneladas y una dotación de 1.042 hombres. El 4 aviones navales argentinos atacan y hunden el destructor británico "Sheffield". El 9, el pesquero de altura argentino "Narwall" es hundido por aviones británicos al sudeste de las Malvinas. El 12, durante un combate aeronaval, se producen daños de consideración en dos fragatas británicas y el derribo de un helicóptero. Caen dos aviones argentinos. El Estado Mayor Conjunto informa que fueron rescatados 790 tripulantes del crucero "General Belgrano", entre ellos 20 muertos. El 16, es hundido el buque "Isla de los Estados" y atacados los transportes "Río Carcarañá" y "Buen Suceso". El 20, el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, da por concluida su gestión de paz porque "ninguna de sus ideas eran aceptadas por las partes". El 21, en la Bahía de San Carlos —isla Soledad— desembarcan los primeros comandos británicos. El 22, Londres admite el hundimiento de la fragata "Ardent". Días después se reconocerán los hundimientos de la fragata "Antelope", el destructor "Coventry" y el transporte "Atlantic Conveyor". El 31, las avanzadas británicas se encuentran desplegadas en el área de Monte Kent, estancia House, a 25 kilómetros al oeste-noroeste de Puerto Argentino.

Junio. El 4, Gran Bretaña y Estados Unidos vetan conjuntamente un proyecto de resolución que disponía el cese del fuego en las Malvinas. El 11 llega al país S. S. Juan Pablo II, mientras en las Malvinas se desmoronan las defensas argentinas. Cientos de miles de fieles aclaman al Papa en Palermo, Buenos Aires y a las 16 horas del 12, el pontífice se embarca hacia Roma. El 14, el general Menéndez rinde sus tropas ante el general inglés Jeremy Moore. El 15, se celebra en Londres la derrota argentina y la ministro Thatcher informa de la captura de 15.000 prisioneros argentinos. Disturbios y represión policial en Buenos Aires, donde el pueblo exige la renuncia de Galtieri. El 17, Galtieri renuncia y pide su retiro del servicio.

Asume la presidencia, interinamente, el ministro Alfredo Saint-Jean. La Junta Militar no se pone de acuerdo en la designación de un nuevo presidente y el Ejército, en la figura de su Comandante en Jefe, Cristino Nicolaides, designa Presidente de la Nación al general de división (RE) Reynaldo Bignone.

15. GOBIERNO DE BIGNONE

- Julio. El presidente Bignone asume su cargo y anuncia al país que su misión es "clara y concreta: institucionalizar el país a más tardar en marzo de 1984". El 5, el ministro de Economía, Dagnino Pastore, califica como "de verdadera emergencia nacional" la situación de la economía argentina. Domingo Cavallo, ex subsecretario técnico del Ministerio del Interior, es presidente del Banco Central: el 13 se anuncia y pone en marcha una amplia reforma financiera. El 14, los últimos 593 prisioneros argentinos que quedaban en poder de los británicos, regresan a Puerto Madryn, encabezados por el general Menéndez. El 17 se dispone un aumento general de tarifas. En el primer acto peronista después del levantamiento de la veda política hablan en Rosario Bittel y Menem, el día 24.
- Agosto. El 2, el brigadier Lami Dozo propugna la creación de un movimiento político que continúe el Proceso tras las próximas elecciones. Domingo Cavallo confirma, el 5, que la deuda externa argentina suma 39.000 millones de dólares. El 17, asume la Comandancia de la Fuerza Aérea el brigadier Augusto J. Hugues; El 26, el presidente Bignone anuncia la promulgación de una ley orgánica de los partidos políticos. Economía anuncia, el 30, que la balanza comercial del país arrojó un superávit de 1.964 millones de dólares en el primer semestre del año.
- Setiembre. Se informa el 7 que el salario real sufrió una caída del 34,3% en el primer semestre del año. El 10, los tres Comandantes en Jefe deciden restablecer el esquema de poder vigente desde marzo de 1976. La Argentina y Gran Bretaña dejan sin efecto, el 14, los bloques de fondos. Visita el país, desde el 16, la Madre Teresa de Calcutta, ganadora del premio Nobel de la Paz 1979. El 20, el contralmirante Horacio Zariategui, jefe del área naval austral, cuestiona la conducción de Anaya y de su sucesor designado. Se reconstituye, el 21, la Junta Militar. El 25 se imparten instrucciones a los medios de difusión para que se abstengan de difundir noticias referidas a la desaparición de personas.
- Octubre. El 5 se realiza en Plaza de Mayo, sin incidentes una "Marcha por la Vida", encabezada por Pérez Esquivel y monseñor Nevares, obispo de Neuquén. El 8 aparece el cadáver

- de Marcelo Carlos Dupont, hermano de un ex diplomático enemistado con el ex comandante Massera. Se anuncia en Ejército, el 9, que el número de retiros en la fuerza superan los 250, con los grados de mayor a coronel. El 14 se comenta en la prensa que el llenado de la presa brasileño-paraguaya de Itaipú está produciendo daños en la zona argentina de Puerto Iguazú. El 22, se produce la denuncia del hallazgo de 400 tumbas anónimas en la localidad de San Miguel. El 26 se firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional: se gestiona un stand-by de 2.000 millones y su duración es de 15 meses. "La circular 1050 arruinó la economía del país", declara el 27 el ministro de Economía.
- Noviembre. El Poder Ejecutivo clausura, el 2, las revistas "Línea" y "Quorum". Anuncia Jorge Wehbe, el 10, que el FMI aprobó el memorando para el otorgamiento del crédito stand-by. Fallece en Buenos Aires, el 12, el escritor Eduardo Mallea. El 16, la Multipartidaria rechaza la convocatoria a la concertación formulada por el gobierno "por considerarla extraña a la Constitución Nacional y condicionante del próximo gobierno elegido por el pueblo". Preocupa, a partir del 23, la situación existente en vastas zonas de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones por las inundaciones registradas.
- Diciembre. El presidente Bignone anuncia que las elecciones nacionales se realizarán "muy probablemente" en el último trimestre del año entrante, el 1°. Las CGT Brasil y Azopardo convocan ese mismo día a un paro nacional para el día 6. El 6, 6.000.000 de trabajadores adhieren a la mayor jornada de protesta de que se tenga memoria durante el proceso militar.

1983

- Enero. El 1°, 250 bancos comerciales de varios países firman en Nueva York los contratos de un préstamo-puente por 1.100 millones de dólares para la Argentina. El 7, el PEN sanciona la ley del peso argentino, equivalente a 10.000 pesos ley 18.188. El 20 se realizan las exequias del ex presidente Arturo U. Illia, fallecido el 18 a los 82 años de edad. "Otra burla más destacada contra el pueblo por el Proceso", de este modo calificó la CGT Brasil el aumento salarial del 11% decretado por el gobierno.
- Febrero. La Multipartidaria exige la entrega del poder para el 12 de octubre, el día 2. El 4, el general Nicolaides expresa su desagrado al presidente Bignone por "el tono" del documento de la multipartidaria. El 7, la Junta Militar califica de "téc-

nicamente imposible" el reclamo de la Multipartidariedad. El 10, la Junta Militar advierte a la dirigencia política, el 10, "los ataques inconducentes y los ataques infundados" a las fuerzas armadas. El 17, Bignone recibe a la mesa directiva del radicalismo, encabezada por Carlos Contín. La conducción del peronismo es recibida el 22 y, en su transcurso, Bignone prometió su apoyo para excluir a la señora de Perón de las Actas Institucionales, junto con otros dirigentes partidarios. El 28, el presidente anuncia que las elecciones generales se harán el próximo 30 de octubre.

Marzo. El almirante Franco, durante un homenaje a Brown celebrado el 3, afirmó que la Armada "jamás volverá a recurrir por la fuerza a un gobierno surgido de la voluntad popular". Grandes inundaciones afectan a las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones. La Argentina anuncia, el 7, que no participará del operativo "Unitas" con otras fuerzas navales americanas. Con una numerosa comitiva viaja a Nueva Delhi el presidente para asistir a la reunión cumbre de los Países no Alineados. La censura impide la difusión de tramos filmados en que el presidente Bignone aplaude tramos de los discursos de Fidel Castro y Arafat. Pese a haber sido declarado ilegal, se cumple en todo el país, el 28, el paro general declarado por las centrales obreras.

Abril. El 4, Lorenzo Miguel niega la existencia de un "pacto radical-militar". El 11, el Comandante en Jefe del Ejército se declara con 60 días de arresto al ex presidente Galtieri por sus declaraciones al diario "Clarín" sobre aspectos de la guerra austral. El 14, la Junta Militar excluye del Acta de Responsabilidad Institucional (dictada el 18 de junio de 1976) a María Estela de Perón, Lorenzo Miguel, Jorge Taiana, Saúl Menem y 21 figuras más del justicialismo. El 25, Raúl Alfonsín denuncia la existencia de un pacto entre sindicalistas y los generales Nicolaidis, Suárez Mason y Trimarco. Todos los medios transmiten un "documento final", el 28, sobre la lucha antisubversiva declarada, en su totalidad, "acto de servicio".

Mayo. "Alfonsín es un mentiroso", declara Lorenzo Miguel el 1.º. Alfonsín replica que los gremialistas signantes del pacto son el propio Miguel, Rogelio Papagno, Diego Ibáñez y Herminio Iglesias. En una alusión al "documento final", Juan Pablo II afirma en Roma que los familiares de los desaparecidos en la Argentina "han visto destrozada su pequeña esperanza". El 17, la policía bonaerense informa que fueron abatidos "en un enfrentamiento" Osvaldo Cambiasso y Eduardo D. Pereira Rossi. Más de 30.000 personas desfilan el 20 en

Buenos Aires en rechazo del documento oficial sobre la lucha antisubversiva.

Junio. El 3, el PEN deroga la ley 21.400, que prohibía el derecho de huelga. Bignone asiste, en Belgrano, a la Asamblea de la UNCTAD. El 17, es detenido el ex comandante de la Armada, almirante Massera en relación con el "caso Branca". El 28, el ex presidente Videla manifiesta al juez su "impotencia" para esclarecer la desaparición del ex embajador Hidalgo Solá. El Episcopado Argentino condenó al "espíritu golpista" y reafirmó la validez del principio de que "el pueblo es soberano".

Julio. Casi deriva en un enfrentamiento la actitud del gobernador Merlo, en Tucumán, quien desenfundó su arma ante 400 policías en huelga (3). El 5, el presidente Bignone acepta la renuncia del gobernador de Tucumán. Se impone el 10, en las internas del radicalismo, la candidatura de Raúl Alfonsín, que se consagrará el 30 con Víctor Martínez como compañero de fórmula. El 31, monseñor Nevares da a publicidad sus sospechas sobre la muerte accidental —según la información militar— del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

Agosto. El 2, dos pesqueros argentinos son interceptados y expulsados en el estrecho de San Carlos, por una fragata británica. El general Nicolaidis ordena al personal del Ejército no responder a citaciones judiciales sin conocimiento del arma (8). El 19, se realiza en la Capital una multitudinaria marcha contra la llamada "ley de autoamnistía" que prepara el gobierno. El 22 se proclama, en el Teatro Cómico, la fórmula presidencial del justicialismo: Italo Argentino Luder-Deolindo F. Bittel. Conmueve a la opinión, el 24, el secuestro y la reaparición de Guillermo P. Kelly.

Setiembre. El 7, el arzobispo de La Plata, Antonio Plaza pronostica el triunfo peronista, añadiendo que "el señor Herminio Iglesias es una persona muy agradable y personalmente estoy encantado con él". El 11, el candidato Luder afirmó que el peronismo obtendrá el 55% de los votos del padrón electoral. "No hay cárcel que pueda cambiar mi forma de pensar" declara el 18 el almirante Zariategui, tras cumplir un año de prisión en Magdalena. El 23, el gobierno sanciona y promulga la ley N° 22.294, que extingue las acciones penales "de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982". El 24, el escritor Ernesto Sábato dice que la ley 22.294 es "una monstruosidad jurídica". El 27, dos jueces de instrucción decretan la nulidad de la ley de amnistía y se niegan a aplicarla en dos casos de secuestro.

Octubre. El 2, el juez federal de Santa Cruz, Federico Pinto Kra-

mer, rechaza la apelación del Poder Ejecutivo en torno del fallo que decretó no innovar en el caso de la deuda externa argentina y, al día siguiente, es detenido el presidente del Banco Central —Julio González del Solar— a su regreso de EE.UU. Se desarrollan en todo el país, sin incidentes, las campañas preelectorales. Los candidatos Luder y Alfonsín reúnen, cada uno, cerca de un millón de manifestantes en los actos de clausura. El 30 se realizan las elecciones generales, que arrojan 7.431.679 sufragios para la fórmula Alfonsín-Martínez de la UCR y 5.719.881 votos para Luder-Bittel, del justicialismo.

Noviembre. El 4 se conoce la integración del futuro gabinete radical: Relaciones Exteriores, Dante Caputo; Economía, Bernardo Grinspun; Defensa, Raúl Borrás; Interior, Antonio Troccoli; Salud Pública, Aldo Neri; Obras Públicas, Roque Carranza; Educación y Cultura, Carlos Alconada Aramburú; Trabajo, Antonio Mucci. El 18, el vicealmirante Carlos Castro Madero —presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica— informó que la Argentina se incorporó al círculo de ocho países en el mundo que son capaces de producir uranio enriquecido. El 19, el gobierno norteamericano evalúa el anuncio ya que "el dominio del enriquecimiento del uranio permite la obtención de plutonio, indispensable para la construcción de armas nucleares".

Diciembre. Se autodisuelve, el 5, la Junta Militar. El 10, Raúl Ricardo Alfonsín recibe las insignias del mando como trigésimotercer presidente constitucional de la Argentina.

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
y SOCIALES

Registro Bienes del Estado

Nº Inventario: 15078

75278

ÍNDICE

Prólogo a la primera edición 9

LIBRO I

UNA PROVINCIA DEL IMPERIO ESPAÑOL (1515 - 1750)

I. DESCUBRIMIENTO DE LA TIERRA AUSTRAL.....	17
El Imperio español - España y Portugal - Solís - Magallanes - Consolidación de Carlos V - Caboto - Fundación y destrucción de Sancti Spiritu.	
JON PEDRO DE MENDOZA	25
Los Césares - Cortés - Fundación del C. de Indias - Antecedentes de Mendoza - Pizarro - Fundación de Buenos Aires - Sitio y penurias - Ayolas.	
ASUNCION DEL PARAGUAY	30
Candelaria - Muerte de Ayolas - Irala - Salazar - Destrucción de Buenos Aires - Fundación de Asunción - Alvar Núñez Cabeza de Vaca - Viajes de Irala - Conflicto con las poblaciones y deposición del Adelantado - Nufrio de Chaves - Contactos con el Perú.	
EL TUCUMAN	38
Almagro - Rojas: la "gran entrada" - Núñez del Prado - Aguirre: fundación de Santiago del Estero, Londres, Córdoba del Calchaquí, Cañete y Nieva - Guerra Calchaquí - Conflictos de jurisdicciones - Santa Cruz de la Sierra - Garay - Los "mancebos de la tierra" - Fundación de Santa Fe - Cabrera y la fundación de Córdoba - Garay gobernador.	
BUENOS AIRES	46
fundación - Expedición de Garay a los "Césares" - Su muerte - Vera y Aragón y los ganados - Corrientes - El Tucumán: Garay y Lerma - Salta - Juana Ramírez de Velasco y su profecía - La conquista espiritual - "Tierras pobres".	
HERNANDARIAS DE SAAVEDRA	54
Caracteres de la colonización - Tucumán y el litoral - Los mestizos - La cultura - Comienzos de Buenos Aires - El fuerte - Pi-	

	ratas y contrabandistas - Hernandarias: su obra - División de la provincia paraguaya.	
VII.	ENCOMIENDAS Y MISIONES	62
	Tucumán a fines del siglo XVI - El río de la Plata - Ganados y vaquerías: nace el "gaucho" - Régimen de indios - Alfaro y sus "Ordenanzas" - Caracteres y consecuencias de esa legislación - Predicación espiritual - Las misiones jesuíticas.	
VIII.	CONTRABANDO	69
	Decadencia marítima de España - Las flotas - Buenos Aires, puerto vedado - Causas de la prohibición - Fatalidad del contrabando - Consecuencias exteriores e internas.	
IX.	SUBLEVACIONES Y GUERRAS DE INDIOS	76
	Primera guerra calchaquí: Albornoz - Mamelucos y "bandeirantes" - Las milicias guaraníes - Segunda guerra calchaquí - Mercado y Villacorta y el impostor Bohórquez - Guerra de los mocovíes - Buenos Aires y los indios del Sur - Progresos industriales y culturales - Universidad de Córdoba - Tejeda y Guzmán.	
X.	LA COLONIA DEL SACRAMENTO Y LA FRONTERA ORIENTAL	83
	Situación de Europa - Felipe IV - Las dos fronteras - Expansión portuguesa - Federación de la Colonia del Sacramento - Toma y devolución - Aumento del contrabando.	
XI.	LA FRONTERA ORIENTAL (SEGUNDA PARTE): MONTEVIDEO	88
	Carlos II "El Hechizado" - Europa en el siglo XVII - Decadencia política de España - Guerra de Sucesión - Felipe V y la Colonia - Tratado de Utrecht - Tratado de "asiento" - Zabala - Fundación de Montevideo - Invasiones de indios.	
XII.	LA FRONTERA ORIENTAL (TERCERA PARTE): COMUNEROS Y GUERRA GUARANÍTICA	95
	Indios y portugueses - Conflictos internos - José de Antequera en el Paraguay - Mompox - Zavala - "Pacto de familia" y guerra con Portugal - Andonaegui y la guerra guaranítica - Campaña victoriosa de Cevallos.	

LIBRO II

LA CRISIS DEL IMPERIO
(1750 - 1810)

I.	EL DESPOTISMO ILUSTRADO Y LA EXPULSION DE LOS JESUITAS	105
	Austrias y Borbones - Renovación intelectual - "Filósofos y economistas" - Paz de París - Carlos III y el progreso material - Regalismo y masonería - Pombal y Aranda - Expulsión de los jesuitas y expansión portuguesa.	

II.	LAS MALVINAS - EL VIRREINATO - DON PEDRO DE CEVALLOS	113
	Expediciones australes - Franceses e ingleses en Las Malvinas - Bucarelli - Vértiz y sus campañas infructuosas - Cevallos, primer Virrey - Reconquista y destrucción de la Colonia - Caída de Pombal - Tratado de San Ildefonso - Retiro de Cevallos.	
III.	LA EPOCA DEL VIRREINATO: VERTIZ	119
	El mito Vértiz - Situación económica - Problema del indio - Reglamento del comercio libre - Ordenanza de Intendentes - Progresos de Buenos Aires - El interior - Modalidades sociales y culturales.	
IV.	DE LORETO A SOBREMONTÉ	128
	Influencias extranjeras - Organización del comercio - Loreto - Arredondo y el Consulado - Belgrano - La literatura enciclopédica - Repercusión de la Revolución Francesa - Godoy: guerra con Inglaterra y Portugal - "El Telégrafo Mercantil" - Napoleón.	
V.	LOS INGLESES EN BUENOS AIRES	134
	Comienzo del periodismo - La política inglesa - Miranda - Sobremonte - Toma de Buenos Aires.	
VI.	EXPULSION DE LOS INGLESES: LINIERS Y ALZAGA	136
	Beresford en el gobierno - La resistencia - Pueyrredón - Liniers - La reconquista - Cabildo abierto del 14 de agosto - Preparativos militares - Toma de Montevideo - Propaganda inglesa - Ataque a Buenos Aires y derrota inglesa - Alzaga.	
VII.	LINIERS Y LA CRISIS POLITICA	140
	Invasión de España por los franceses - Insurrección popular del 2 de mayo - Liniers Virrey - Ideas de independencia - Sassenay - Elfo - Oposición a Liniers.	
VIII.	LA QUIEBRA DEL PODER ESPAÑOL - CISNEROS	141
	Resistencia española: Bailén - Intrigas de la princesa Carlota - Actitud de Liniers - División de los partidos - Alzaga - Asonada del 1° de enero de 1809 - El comercio inglés - Cisneros - Chuquisaca y La Paz - Libertad.	

LIBRO III

SEGREGACION Y GUERRAS EXTERNAS
E INTERNAS POR LA INDEPENDENCIA
Y LA LIBERTAD
(1810 - 1835)

I.	LA REVOLUCION DE MAYO - MARIANO MORENO	141
	Noticias de España - Cabildo abierto del 22 de mayo: caducidad del virrey - Escamoteo de la voluntad popular - 25 de mayo - Institución de la Junta - Resistencia en Córdoba - Moreno: "La Gaceta" - Tensiones internas - Llegada de los diputados del interior - La Junta grande - Renuncia y muerte de Moreno.	

II.	DE LA JUNTA GRANDE A LA REVOLUCION DE OCTUBRE - SAN MARTIN	170
	Espíritu de la Junta Grande - Reglamento del 10 de febrero de 1811 - Belgrano en el Paraguay - Ello: bloqueo de Buenos Aires - Oposición al gobierno - Golpe de estado del 5 y 6 de abril - Huaqui - El Triunvirato o "Gobierno Ejecutivo" - Disolución de la Junta - Llegada de San Martín y Alvear - Avance portugués - Artigas - La conspiración de Alzaga - Victoria de Tucumán - Revolución del 8 de octubre.	
III.	LA ASAMBLEA DEL AÑO 13	181
	Situación de Europa - La logia "Lautaro" - San Lorenzo - Obra de la Asamblea - Artigas y sus "instrucciones" - Formación de la escuadra - El Directorio: Posadas - Lucha en la Banda Oriental - Triunfos navales y toma de Montevideo.	
IV.	ARTIGAS Y LA CRISIS DE 1815	191
	Cambios en Europa: restablecimiento de Fernando VII - Situación en la Banda Oriental - Descrédito del Directorio - Misiones de Rivadavia y Belgrano a Europa - Sublevación del ejército del Norte - Dictadura de Alvear - Sublevación de Fontezuelas.	
V.	EL CONGRESO DE TUCUMAN Y LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA - SAN MARTIN EN CHILE	198
	Anarquía política - Juicios por "facción" - La "Junta de Observación" y el Congreso - Artigas - La lucha en el Litoral - Proyectos monárquicos - Nombramiento de Pueyrredón - Declaración de la Independencia - Invasión portuguesa a la Banda Oriental - El régimen y sus opositores.	
VI.	¿MONARQUIA O REPUBLICA?	209
	Rivadavia en Europa - Triunfos en Chile - Maipú - Cuestiones orientales - Traslado del Congreso a Buenos Aires - Acción diplomática - García en Río de Janeiro - Armisticio de San Lorenzo - La candidatura de Luca - Motín de Arequito.	
VII.	LA DISOLUCION NACIONAL DEL AÑO 20.	217
	Causas de la anarquía - Actitud de San Martín - Reacción autonómica - Situación de Europa - Política inglesa - Características del estado político interno - Influencia de la invasión portuguesa.	
VIII.	LUCHA POR EL PODER EN BUENOS AIRES.	225
	López y Ramírez: Cepeda - Pánico en Buenos Aires - Balcarce y Alvear - Soler - Carrera - Elecciones del 20 de abril - Caída de Sarraute - Dorrego y López - Acción de San Nicolás - Gamonal - Rodríguez y Rosas.	
IX.	EL FRACASO DEL SUPREMO ENTRERRIANO	234
	Motín de Pagola y pacificación porteña - Tratado de Benegas - Ramírez y Artigas - República de Entre Ríos - Plan de Ramírez - Su ruptura con López y Buenos Aires - Río Seco - Muerte de Ramírez y Carrera - El Norte: Güemes.	
X.	EL REFORMADOR RIVADAVIA	243
	Situación del mundo - Bolívar y San Martín - San Martín en el	

	Perú - El liberalismo es España - Punchauca - Rivadavia ministro: Sus ideas - Fracaso del Congreso de Córdoba - Rivadavia contra San Martín - El mito y la realidad - Revolución de los Apostólicos - Actividad diplomática.	
XI.	LAS HERAS Y EL CONGRESO DE 1825 - LA BANDA ORIENTAL	254
	El Congreso: su composición - Ley Fundamental - La Banda Oriental - Ayacucho - El partido de la guerra. Dorrego - Tratado con Gran Bretaña - Lavalleja y los 33 orientales - Congreso de la Florida - Declaración de la guerra.	
XII.	LA GUERRA CON EL BRASIL Y EL MANOTON UNITARIO	260
	Bolívar en el norte - Creación de Bolivia - Congreso de Panamá - Invasión de Misiones - Brown - Ley de Presidencia - Rivadavia - Plan unitario: Lamadrid en Tucumán - Juan Facundo Quiroga - La constitución de 1825 - Rebelión del interior - Campaña del Brasil: Ituzaingó - Juncal - Tratativas de paz: García - Renuncia de Rivadavia - Dorrego gobernador.	
XIII.	DORREGO Y LAVALLE	271
	Restablecimiento de la paz interior - Dorrego - Federales y unitarios - La Banda Oriental: Rivera y Lavalleja - Campaña marítima de Brown - Oposición a Dorrego - Presión inglesa por la paz - Tratado del 27 de agosto de 1828 e independencia oriental - Revolución del 1º de diciembre - Lavalle gobernador - Fusilamiento de Dorrego.	
XIV.	LA LUCHA POR LA LIBERTAD.	285
	Reacción en el interior - Convención de Santa Fe: declaración de guerra - Sublevación de la campaña - Puente de Márquez - El general Paz en Córdoba - Rosas y el sitio de Buenos Aires - Conflicto con Francia - Lavalle pacta con Rosas - Convenios de Cañuelas y Barracas - Elección de Viamonte y restauración de la legislatura provincial.	
XV.	LA LUCHA POR LA LIBERTAD (SEGUNDA PARTE).	294
	Las "facultades extraordinarias" - Elección de Rosas - Guerra en el interior - Primeros actos de Rosas - Liga del interior - El general Paz y las provincias - Revolución de Entre Ríos - Pacto Federal - Captura de Paz y fin de la guerra.	
XVI.	LA CONSOLIDACION DEL PODER - ROSAS.	302
	Obra de gobierno y conspiración unitaria - Ferré y la resistencia litoral - Propaganda por el Congreso - Semblanza del general Rosas - Lucha por el predominio nacional - Quiroga y López - La mística federal - Lección de Balcarce.	
XVII.	LA CONQUISTA DEL DESIERTO Y LA REVOLUCION DE LOS RESTAURADORES	310
	El problema del indio - Rosas, hombre de la frontera: su política - El plan de la guerra - La Campaña del Desierto - La política gubernativa - Reacción de los "lomos negros" - Rebelión de los "restauradores" - Doña Encarnación - Elección de Viamonte - Usurpación de las Malvinas.	

- XVIII. BARRANCA YACO 318
 Inquietud política - La "Sociedad Popular Restauradora" - Plan europeo contra la independencia americana - Llegada y expulsión de Rivadavia - Honores a Rosas por la expedición al desierto - Renuncia de Viamonte y elección de Rosas - Renuncias reiteradas de éste - Maza - Disidencias en el norte - Misión Quiroga - La "Carta de Figueroa" - Barranca Yaco y sus consecuencias - Elección de Rosas.

LIBRO IV

LA CONFEDERACION - LUCHAS POR LA UNIDAD,
 LA INDEPENDENCIA Y EL PODER
 (1835 - 1851)

- I. LA SUMA DEL PODER PUBLICO Y LA RELIGION FEDERAL 327
 Situación en Europa - Ideas políticas de Rosas - La mística del régimen: su significado - Reorganización política, social y económica - Rosas y las provincias - Conspiración interna y externa - Juicio y ejecución de los Reynafé - Ley de Aduana de 1835.
- II. LA BANDA ORIENTAL, BOLIVIA Y LOS EMIGRADOS ... 336
 Refuerzo de la unidad interna - Rosas, jefe nacional - La Banda Oriental: Rivera y Oribe - Lavalle y los emigrados unitarios - Blancos y colorados - El "cholo" Santa Cruz y la Confederación Peruano-boliviana - La conspiración siniestra - Guerra con Bolivia - Conflicto con Francia y revolución unitaria en la Banda Oriental.
- III. LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA - LA ASOCIACION DE MAYO 343
 Aspiraciones francesas sobre el Plata - Reclamación de Roger - Respuesta de Arana - Bloqueo francés - Conspiración unitaria - Su carácter europeísta - El romanticismo - El "Salón Literario" - Alberdi - Emigración romántica y alianza con el agresor: sus causas - Defensa y toma de Martín García - Asesinato de Heredia e insurrección del norte.
- IV. LA LUCHA POR LA INDEPENDENCIA (SEGUNDA PARTE) 352
 Intriga francesa en el litoral - Berón de Astrada: Pago Largo - Fusilamiento de Cullen - Lavalle en Martín García - Conspiración en Buenos Aires: los Maza - Acciones de guerra - Lavalle en Entre Ríos - Fracaso de la "Revolución del Sud" - Lavalle en Corrientes - Luchas por las subvenciones - "La política honrada" - Rivera - Lavalle y Ferré - El general Paz en Corrientes - Lavalle desembarca en San Pedro.
- V. EL AÑO 40 Y LA DERROTA DE LA COALICION. 359
 Cariz de la expedición "libertadora" - Retirada de Lavalle a Santa Fe - Afianzamiento del espíritu patriótico - Misión Mac-kau - Tratado de paz - Indignación unitaria - Insurrección del

norte - Oribe en Santa Fe - "Quebracho Herrado" - Retirada de Lavalle y Lamadrid - Sanogasta - Famaillá - Muerte de Lavalle y fin de la coalición.

- VI. GUERRA EN EL LITORAL 367
 La Banda Oriental y Corrientes - Progreso de Buenos Aires - Echagüe y Paz - Caaguazú - Paz y Ferré: huida de Paz - Ambiciones de Rivera - El mito del "tirano feroz" y el gusto romántico - Campaña de Oribe - Los unitarios piden la intervención extranjera - Nota conjunta anglo-francesa y respuesta de Arana - Derrota de Rivera en Arroyo Grande - Liberación del litoral.
- VII. SITIO DE MONTEVIDEO Y MEDIACION EXTRANJERA .. 373
 Pánico en Montevideo y nombramiento de Paz - Oribe en el Cerrito: sitio de la ciudad - La población de ésta, según Mitre - Bloqueo de Montevideo por la Confederación - El comodoro Purvis - Protesta argentina y respuesta inglesa - Urquiza en la Banda Oriental - Derrota riverista - intrigas unitarias con europeos y brasileños - Misiones de Varela y Abrantes.
- VIII. LA INTERVENCION FRANCO-INGLESA 380
 Coalición internacional contra la Argentina - Nueva campaña de Paz: alianza con el Paraguay - Sir Robert Peel: la intervención armada - Guizot - Acción de las escuadras - Misión Ouseley - Deffaudis - Carácter de la intervención - Rechazo de las pretensiones extranjeras - Se inicia la guerra.
- IX. LA VUELTA DE OBLIGADO 388
 Guerra en el litoral - Captura de la escuadra - Bloqueo de nuestros puertos - Protesta argentina - Fracaso de la mediación Martigny - Combate de Obligado - La opinión internacional - Reacción argentina - Urquiza en Corrientes; Laguna Limpia - Derrota de Madariaga, fuga de Paz y tratado de Alcaraz - Intriga unitaria con Urquiza - Resistencia argentina a la agresión extranjera.
- X. LA MISION HOOD, EL LITORAL Y EL BRASIL. 396
 Causas de la Misión Hood - Prestigio argentino en el mundo - Bases de la negociación - Acuerdo en principio - Resistencia unitaria y fracaso de la misión - Nueva derrota de Rivera en la Banda Oriental - La política de Rosas - Actitud de Brasil - Ruptura del pacto de Alcaraz.
- XI. VENCES 405
 Misión Howden-Waleski - Su fracaso - Disidencias entre los enviados - Levantamiento del bloqueo inglés - Pánico unitario - Entusiasmo patriótico - Vences: la Confederación pacificada.
- XII. APOGEO DEL PRESTIGIO Y EL PODER. 412
 Prestigio de Rosas - Regreso de emigrados - Misión Gore-Gros - Actitud argentina - Cambios en Europa - Triunfos de Oribe en la Banda Oriental - Las revoluciones de 1848 - Su repercusión en el Plata.

186

- XIII. TRIUNFO DE ROSAS Y LA CAUSA AMERICANA 419
La opinión europea - Misión Southern-Lépreux - Tratado de paz - Triunfo de las tesis argentinas - Intrigas unitarias con Brasil - Ratificación de los tratados.
- XIV. EL BRASIL Y URQUIZA 427
Preparativos de la nueva coalición: su significado - Acercamiento con el Paraguay - Lamas en Río de Janeiro - Jacuhy - Muerte del Libertador San Martín; su testamento - Renuncia de Rosas - Opinión de Urquiza - Guerra con el Imperio - Intrigas unitario-brasileñas - Pronunciamiento de Urquiza - Tratado de alianza - Reacción argentina - El 9 de julio de 1851.
- XV. CASEROS 437
Desgaste de Rosas y su gobierno - La influencia extranjera - La conspiración interna - Urquiza en la Banda Oriental - Capitulación de Oribe - Los brasileños en la Banda Oriental - Tratado del 21 de noviembre - Avance de Urquiza - Pacheco - Batalla de Caseros - Renuncia y expatriación del Restaurador.

LIBRO V

DERROTA NACIONAL Y GOBIERNO
DE LOS EMIGRADOS
(1851 - 1874)

- I. LAS CONSECUENCIAS DE LA DERROTA 449
Carácter del partido federal - La vuelta de los emigrados - Pérdidas territoriales y morales - Los sofismas de los vencedores - Represalias sangrientas - Vicente López gobernador - Rozamientos entre federales y unitarios - El interior - Acuerdo de San Nicolás - Oposición en Buenos Aires - Golpe de Estado - Resistencia "blanca" en el Uruguay, desbaratada por Urquiza.
- II. SECESION Y CONSTITUCION 460
Revolución unitaria del 11 de setiembre - Reunión del Congreso Constituyente - El mito y la realidad - Reacción federal en Buenos Aires: el sitio de Lagos - División del partido federal - Gestiones de paz - Urquiza en San José de Flores - La Constitución y las "Bases" de Alberdi - Traición de Coe, dispersión de las fuerzas sitiadoras y huida de Urquiza - El liberalismo triunfante en Buenos Aires - Urquiza presidente.
- III. BRASIL COBRA SU VICTORIA - FILOSOFIA DE LA ENTREGA 469
Los pactos de entrega - La Banda Oriental - El Banco Mauá - Reacción porteña - Lagos, Flores y Costa: represalias sangrientas - Los indios y Mitre, según Alvaro Barros - Mitre - La propaganda liberal - "La Reforma Pacífica" - "Chupandinos y pandilleros" - Secesionismo en Buenos Aires - Los gobiernos de Paraná y el "Estado" porteño - Derechos diferenciales - Asesinato de Benavidez.

- IV. DE CEPEDA A PAVON 480
Popularidad de la guerra contra Buenos Aires - La masonería - Se inicia la guerra: Martín García y Cepeda - Mediación de López y "pacto de Unión" - Desaliento federal - Mitre gobernador - Urquiza y Washington - Homenaje y festejos - Derqui y Mitre - Asesinato de Virasoro - Nueva ruptura - Pavón - Opinión de Vicente G. Quesada.
- V. "TODO DE UN COLOR" 491
Significado del triunfo liberal - Reacción federal contra Urquiza - Renuncia de Derqui - Cañada de Gómez - Resistencia en el interior - Expedición punitiva de Paunero - Sarmiento - El Chacho - Navarro y Gutiérrez - Los Taboada - Gestiones conciliatorias de Mitre - El encargo del Ejecutivo nacional - Elección canónica por "unanimitad" - Mitre presidente - La cuestión capital - Ley de compromiso y nacimiento del "autonomismo" porteño - Federales y unitarios, en el interior - Oposición y usura - "La montonera".
- MITRE - EL PRECIO DEL PROGRESO 501
El momento mundial - Expectativa nacional - Cariz reaccionario del "mitrismo" - Revolución de Flores en la Banda Oriental - Intervención brasileña y neutralidad teórica de Mitre - El Paraguay - López - Urquiza y los "blancos" - Decadencia económica argentina - Guerra en el interior - Muerte del "Chacho".
- VI. LA GUERRA INICUA 509
La tragedia de Paysandú - Reacción argentina y pasividad de Urquiza - Ocupación de Montevideo y regocijo mitrista - Iniciación de la guerra - Política de Mitre - Declaración de guerra a la Argentina - Tratado de la Triple Alianza - Oposición a la guerra en Buenos Aires - Entrevista de Itatí Corá - Curupaití - Actitud de Alberdi - Insurrección del interior - Varela - Elección de Sarmiento.
- SARMIENTO O LA MEDIATIZACION ESPIRITUAL 517
Sarmiento y Alsina - El frenesí "civilizador" - Sarmiento y los "yanquis" - El autonomismo - La oposición - Fin de la guerra paraguaya y muerte de López - "La victoria no da derechos" - Invasiones de indios - Revolución en Entre Ríos y muerte de Urquiza - López Jordán - Ideas de Sarmiento - Negociaciones de paz en el Paraguay - La política del Brasil - Tejedor - Misioneros: Quintana y Mitre.
- IX. CONFIGURACION DE LA REPUBLICA LIBERAL 528
Los principios triunfantes - Desprecio del nativo y apología del extranjero - El comercio libre - La opinión de Washington - El romanticismo político - El federalismo traicionado - Literatura y política - El autonomismo de raíz federal - La mentalidad entreguista - Cooperación con los Estados Unidos.

LIBRO VI

LA REPUBLICA LIBERAL Y MERCANTIL
(1874 -1910)

- I. AVELLANEDA - LA CRISIS ECONOMICA Y LA CAMPAÑA DEL DESIERTO. 541
Candidaturas - Causas del triunfo de Avellaneda - Revolución mitrista y su fracaso - Alsina - Bernardo de Irigoyen y la paz con el Paraguay - Crisis económica - "El hambre y la sed" - Florecimiento industrial - López Jordán - Conflicto con Chile - Del Valle, Alem y el partido republicano - La "conciliación" - Tejedor en el gobierno de Buenos Aires - Muerte de Alsina y ruptura del acuerdo - Roca - La expedición al desierto y sus consecuencias políticas.
- II. "LA MUERTE DE BUENOS AIRES" 550
La sucesión de Avellaneda: candidaturas - Tentativas de unificar el autonomismo - Sarmiento - La "liga de gobernadores" - El "porteñismo" contra Avellaneda - Sarmiento ministro - Triunfo electoral de Roca - Avellaneda en Belgrano - Sitio de Buenos Aires - Combates - Renuncia de Tejedor - Federalización del municipio de Buenos Aires - Oposición de Alem.
- III. ROCA Y LA CONSOLIDACION DEL REGIMEN 559
Reacción económica y financiera - Roca: su personalidad - Situación mundial - El autonomismo - El capital extranjero - positivismo y entrega - Anticlericalismo - Obras públicas - La oposición - Del Valle - Estrada - Goyena - La inmigración - Elecciones.
- IV. EL "JUARIZMO" Y LA REVOLUCION DEL 90 567
El unicato - El P.A.N. - Fiebre de negocios - Crisis económica - Del Valle - La "Unión Cívica de la Juventud" - El "Frontón" - Mitre - Alem - Revolución de julio - Pellegrini - Lavalle y Roca - Fracaso del movimiento y renuncia de Juárez Celman.
- V. PELLEGRINI Y ALEM 576
Posibilidades de Pellegrini - Su entrega al "roquismo" - La "élite" porteña - Consecuencias de la crisis - Entrega al capital inglés - Alem, del Valle, convención de Rosario - Candidatura de Mitre - El "acuerdo" con Roca - Actitud de Alem - División de la U.C. y creación del radicalismo - Renuncia de Mitre - Gira de Alem por el interior - Candidaturas.
- VI. LAS REVOLUCIONES DEL 93 - SAENZ PEÑA Y DEL VALLE - URIBURU 584
Fraude electoral - Personalidad de Sáenz Peña - Amenazas revolucionarias y crisis ministeriales - Ministerio de del Valle: su popularidad - Revoluciones en San Luis, Santa Fe y Buenos Aires - Yrigoyen - Reacción del "régimen" Pellegrini y Roca - Ministerio Quintana e intervenciones militares - Causas reales de la renuncia de Sáenz Peña - La situación internacional - Muerte de Alem y del Valle - Elección de Roca - Partido "Nacional".

- VII. LA SEGUNDA DE ROCA. 593
El 900 - Renacimiento de la prosperidad - El capitalismo - Consolidación intelectual del "régimen" - La Universidad y la escuela media - Paz y administración - Dificultades con Chile - Los "pactos de mayo" - Pacifismo y corrupción - El radicalismo: manifiesto de 1901 - La conspiración permanente.
- VIII. LA REVOLUCION DE 1905 - QUINTANA Y FIGUEROA ALCORTA - LA AGITACION SOCIAL. 603
Quintana y Roca - La revolución radical: un fracaso - Comienzo del movimiento obrero - Ugarte - La Unión Electoral - Coalición opositora - Figueroa Alcorta - Pellegrini - Cierre del Congreso - La situación internacional: Zeballos - Unión Nacional - Triunfo de Sáenz Peña.
- IX. LAS ILUSIONES DEL CENTENARIO 613
Optimismo progresista - La nueva literatura - Olvido del pasado - Los mitos vigentes - Extranjerismo - La inmigración - Bajos salarios y miseria - La oligarquía - Ferrocarriles - El programa de Caseros.
- LIBRO VII
- LA CRISIS DEL REGIMEN
(1910 - 1938)
- ROQUE SAENZ PEÑA Y LA LEY ELECTORAL 623
Antecedentes de Sáenz Peña - Sus promesas - Sáenz Peña e Irigoyen - La ley electoral: Indalecio Gómez - Elecciones de Santa Fe y triunfo radical - Triunfo radical en la Capital - Fraudes en otros distritos - Muerte de Sáenz Peña - Victorino de la Plaza - Su actitud ante la ley - Guerra europea - Conflictos con Alemania e Inglaterra - Triunfo radical en las elecciones presidenciales.
- II. YRIGOYEN Y EL RESURGIMIENTO NACIONAL - FUERZA Y DEBILIDAD DEL RADICALISMO - LA GUERRA EUROPEA 630
Asunción del mando - El error inicial - Personalidad de Yrigoyen - El Radicalismo: su transformación - Heterogeneidad de su composición - La actitud internacional - La neutralidad - Política social - Agitación social y política - Influencias extranjeras - Reforma universitaria - Antiimperialismo - La oposición - Liga de las Naciones.
- III. YRIGOYEN Y ALVEAR - EL "PLEBISCITO" DE 1928 642
Carácter de la revolución radical - Consecuencias de la guerra - Elección de Alvear - Su ministerio - Ruptura de la unidad partidaria: el antipersonalismo - El régimen redivivo - El "plebiscito" de 1928 - Expectativa de desencanto - Intervenciones electorales - Oposición violenta - Comienzo de la depresión económica.

- IV. LA REVOLUCION DE SETIEMBRE Y EL DRAMA DEL GENERAL URIBURU 652
- La oposición antirradical - Reacción nacionalista - Lugones - Urriburu: la conspiración militar - Justo y los partidos opositores - Política petrolera - Gira de Mr. Hoover - El 6 de setiembre de 1930 - Defraudación de sus propósitos por la camarilla conservadora - La Suprema Corte - Inquietud política y conspiraciones - Elección del 5 de abril y su anulación - Veto a las candidaturas radicales y triunfo de Justo.
- V. JUSTO O LA RESTAURACION DEL REGIMEN 665
- Asunción del mando - Personalidad del presidente: su impopularidad - Ordenación administrativa - Roca (hijo) y la embajada a Inglaterra: el pacto Roca-Runciman - Reacción patriótica - Conspiraciones y motines - Pinedo y el Banco Central - El radicalismo bajo Alvear: triunfo del "concurrencismo" - Legalización de la entrega - El fraude "patriótico" - Política exterior e interior - Elección de Ortiz - Asunción del mando y muerte de Lugones.

ANEXOS CRONOLOGICOS

1. LA DISIDENCIA EN EL PODER - ORTIZ Y CASTILLO 679
- Roberto M. Ortiz - Los nuevos tiempos - Suicidio de L. de la Torre: sepelio de un hombre y una época - Intervención a la provincia - Legalismo de Ortiz - La "década infame" - Guerra europea y muerte de Ortiz: Castillo - Neutralismo, disolución del Concejo Deliberante y Flota Mercante del Estado - El 4 de Junio de 1943.
2. LAS PRIMERAS PRESIDENCIAS DE PERON 684
3. LA REVOLUCION DE 1955/58 690
4. GOBIERNO DE FRONDIZI 693
5. GOBIERNO DE GUIDO 697
6. GOBIERNO DE ILLIA 699
7. LA REVOLUCION DE 1966/73 701
8. GOBIERNO DE CAMPORA 710
9. GOBIERNO PROVISIONAL DE LASTIRI 712
10. LA ULTIMA PRESIDENCIA DE PERON 713
11. GOBIERNO DE ISABEL PERON 715
12. GOBIERNO DE VIDELA 718
13. GOBIERNO DE VIOLA 735
14. GOBIERNO DE GALTIERI 738
15. GOBIERNO DE BIGNONE 742

ENCUADERNADO

Fecha... 19-02-07

Costos \$... 22.-